

# Evaluación del Impacto de Género en la normativa comunitaria, estatal y autonómica andaluza

---



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

En colaboración con UFR de Droit et Science Politique. Université Paris Ouest  
Nanterre La Défense.



Autora: Beatriz María Collantes Sánchez.  
Directora: Profa. Dra. Amelia Sanchis Vidal.  
Facultad de Derecho. Universidad de Córdoba

TÍTULO: Evaluación del impacto de género en la normativa comunitaria, estatal y autonómica andaluza

AUTOR: Beatriz Collantes Sánchez

---

© Edita: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba. 2012  
Campus de Rabanales Ctra. Nacional IV, Km. 396 A  
14071 Córdoba

[www.uco.es/publicaciones](http://www.uco.es/publicaciones)  
[publicaciones@uco.es](mailto:publicaciones@uco.es)

---







## **TÍTULO DE LA TESIS:**

**El impacto de género en la normativa comunitaria, estatal y andaluza.**

## **DOCTORANDO/A:**

**D<sup>a</sup> Beatriz Collantes Sánchez.**

## **INFORME RAZONADO DE LA DIRECTORA DE LA TESIS**

(se hará mención a la evolución y desarrollo de la tesis, así como a trabajos y publicaciones derivados de la misma).

La tesis presentada por D<sup>a</sup> Beatriz Collantes Sánchez, **El impacto de género en la normativa comunitaria, estatal y andaluza**, aborda un tema con una relevancia teórica, que se ha visto reflejado en la normativa de ámbito internacional y nacional, y también práctica, al aportar herramientas específicas de las que antes se carecía. Desde la promulgación de la Constitución española, se puso de manifiesto que era prioritario articular mecanismos jurídicos para alcanzar la igualdad legal y real entre mujeres y varones. Después de treinta años de estar vigente el texto constitucional y una Ley Orgánica para la Igualdad entre mujeres y hombres, las estadísticas siguen mostrando que hay discriminaciones negativas entre ambos y que los mecanismos arbitrados, hasta ahora, no son suficientes. Por ello se ha hecho necesario implementar una serie de medidas correctoras para el análisis y el diagnóstico, entre las que destaca el informe de impacto de género que debe acompañar a los proyectos de ley o reglamentos, y ahora también a los planes de especial relevancia. Dicho informe, que ha ido cambiando a lo largo del tiempo debido a las sucesivas regulaciones, tiene como misión evaluar, ex -ante, un proyecto normativo o plan, desde la perspectiva de género, e informar, estimativamente, cómo afectará a las mujeres y los varones. Andalucía, pionera en la elaboración de estos informes, tiene la peculiaridad de elaborarlos por una doble vía: desde la Consejería correspondiente y desde el Instituto Andaluz de la Mujer; también está formulando interesantes propuestas desde los Presupuestos económicos, al incluir la transversal y los informes de género. En el ámbito estatal, encontraremos los informes de género para los proyectos normativos aunque únicamente elaborados desde el Ministerio correspondiente. En el ámbito internacional se han formulado propuestas por parte de la UE respecto a los informes de impacto de género y resoluciones del Parlamento europeo sobre legislar mejor. Ambas cuestiones son relevantes por dos razones: por alcanzar la igualdad real entre las personas; y, en segundo lugar, por no perder en técnica jurídica durante el proceso. Para analizar los procedimientos administrativos seguidos en la ejecución de las citadas técnicas jurídicas se emplea la comparación entre el caso francés y, dentro de España, el caso andaluz, por ser uno de los más completos.

La tesis que informo, muy favorablemente, responde al análisis jurídico de los informes de estimativa de impacto de género en el ámbito nacional y andaluz. Para ello, la doctoranda ha empleado la normativa de la UE, la legislación francesa, la estatal y la andaluza. Esta tesis responde de manera completa y extensa a la evolución histórica de los informes de impacto de género, posteriormente denominados memorias de

análisis de impacto de género. Maneja de manera solvente el material bibliográfico y la webgrafía, y realiza un exhaustivo uso de la normativa, la jurisprudencia y los documentos, lo que da como resultado un valioso análisis y diagnóstico jurídico de las cuestiones más relevantes de la LOI respecto a los informes de impacto de género y su problemática actual.

La doctoranda ha realizado su trabajo doctoral siguiendo los parámetros de INDICIOS DE CALIDAD marcados por la actual legislación doctoral contenida en el RD 99/2011, y la específica de la UCO; y lo ha hecho compatibilizándolo con la Propuesta por la Comisión de Másteres y Doctorado de 14 de diciembre de 2011 y aprobada por Consejo de Gobierno de 21 de diciembre de 2011. También cumple los requisitos contenidos en la citada normativa en lo referente al DOCTORADO INTERNACIONAL. La producción científica de la doctoranda ha sido destacable, y el trabajo en equipo ha hecho posible alcanzar un nivel muy satisfactorio entre la teoría y la práctica. Cabe reseñar la calidad de las publicaciones y la cantidad de las mismas. Afrontar el estudio de los informes de género, que requería de la multidisciplinariedad, del manejo de otro idioma, y de recabar una cantidad ingente de información, requería esfuerzos y sacrificios para llevar a buen puerto la investigación. Considero que ha desafiado el estudio jurídico con solvencia, y que tendrá un impacto relevante en la configuración de las futuras memorias de impacto.

Como directora del trabajo de investigación, valoro positivamente el interés que la doctoranda ha prestado, durante el desarrollo de la investigación, a las observaciones, sugerencias y rectificaciones que le he ido haciendo a lo largo del proceso. Incluso, en los momentos de disparidad de opiniones, las cuestiones fueron debatidas y no siempre el consenso fue pacífico. Pero esa es la forma de avanzar en la ciencia, el disenso. El resultado de este esfuerzo, de este trabajo en equipo, realizado desde la honradez intelectual, es, en mi opinión, un buen trabajo, que cumple con una epistemología y una metodología enmarcada dentro del feminismo jurídico; que ofrece un profundo análisis de los informes de impacto de género y de la normativa en el Derecho autonómico y estatal y en el Derecho comparado; y que ofrece unas conclusiones además de propuestas de mejora para reducir la brecha de género. Por todo ello, considero que la Memoria doctoral instada para la lectura y defensa por D<sup>a</sup> Beatriz Collantes Sánchez reúne los requisitos y cualidades necesarias, alcanzando un grado de madurez óptimo, para ser presentada ante la comunidad científica.

#### **INDICIOS QUE SE ALEGAN:**

**Primer Premio de Investigación Científica en Políticas de Igualdad.** "III Certamen de Premios de Investigación Científica de Políticas de Igualdad 2008" Excelentísima Diputación Provincial de Jaén, 6 de Marzo 2008.

#### **PUBLICACIONES:**

##### **Libros:**

Collantes Sánchez, Beatriz. Sanchis Vidal, Amelia **"La evaluación del impacto de género en la normativa estatal y andaluza"** Ed. Instituto de Estudios Giennenses. Diputación de Jaén. 2009 Jaén. I.S.B.N: 978-84-96047-92-1.

##### **Capítulos libros:**

Collantes Sánchez, Beatriz. Sanchis Vidal, Amelia **"La Evaluación del Impacto de Género en la normativa estatal y autonómica andaluza"** Unidad para la Igualdad de la Universidad de Sevilla. Depósito Legal SE-6255-09. ISBN 978-84-692-5715-9 (Edición digital). Año 2009

Collantes Sánchez, Beatriz. Sanchis Vidal, Amelia **"Los Informes de Evaluación del Impacto de Género en la normativa estatal y autonómica andaluza"** Identidades Femeninas en un Mundo Plural. M<sup>a</sup> Elena Jaime de Pablos (Ed.). Colección AUDEM. ISBN 978-84-96980-81-5 (Edición Digital)

Collantes Sánchez, Beatriz. **"La perspectiva de género en los presupuestos públicos de la Comunidad Autónoma Andaluza."** Unidad para la Igualdad de la

Universidad de Sevilla. Depósito Legal: SE 8953-2011. ISBN 978-84-936484-3-5. (Edición digital). Año 2011.

Collantes Sánchez, Beatriz. Sanchis Vidal, Amelia **"Análisis de la elaboración de los informes de evaluación del impacto de género en la normativa estatal y autonómica andaluza 2003-2008"**. Experiencias Jurídicas e Identidades Femeninas. Editorial Dykinson. ISBN 978-84-9982-257-0. Año 2011.

Collantes Sánchez, Beatriz. Sanchis Vidal, Amelia **"Los Informes de Evaluación del Impacto de Género en la normativa estatal y autonómica andaluza"** Epistemología feminista: mujeres e identidad. M<sup>a</sup> Elena Jaime de Pablos (Ed.). Arcibel editores. ISBN: 978-84-15335-17-7 (Edición Digital). Sevilla Año 2011.

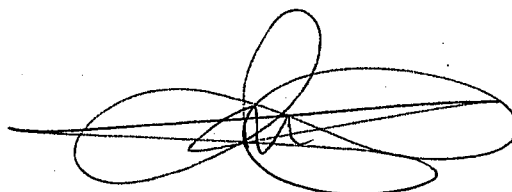
**Artículo en revista:**

Álvarez, Priya. Collantes Sánchez, Beatriz. **"Complementariedad y coexistencia del enfoque de género y el enfoque a resultados en el presupuesto público. Estudio de casos: Francia y Austria"** Presupuesto y Gasto Público 64/2011: 27-58. Secretaría General de Presupuestos y Gastos, Instituto de Estudios Fiscales. ISSN 0210-5977. Año 2011.

Por todo ello, se autoriza la presentación de la tesis doctoral.

Córdoba, \_11\_ de \_junio\_\_\_\_\_ de \_2012\_\_\_\_\_

Firma del la directora



Fdo.: \_\_Prof. Dra. Amelia Sanchis Vidal \_\_\_\_\_

# Evaluación del Impacto de Género en la normativa comunitaria, estatal y autonómica andaluza

---



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

En colaboración con UFR de Droit et Science Politique. Université Paris Ouest  
Nanterre La Défense.



**Autora:** Beatriz María Collantes Sánchez.  
**Directora:** Profa. Dra. Amelia Sanchis Vidal.  
**Facultad de Derecho. Universidad de Córdoba**

# Glosario de siglas

---

BM: Banco Mundial.

BOCG: Boletín Oficial del Congreso.

BOE: Boletín Oficial del Estado.

BOJA: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

BOPA: Boletín Oficial del Parlamento Andaluz.

CCAA: Comunidad Autónoma.

CE: Constitución Española de 1978.

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

CIAP: Comité Interministerial de Auditoría de Programas.

DGCS: Dirección General de la Cohesión Social.

DOE: Documentos de Orientaciones Estratégicas.

DPT: Documentos de Política Transversal.

DRAE: Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.

DS: Diario Sesiones.

DSPA: Diario de Sesiones del Parlamento Andaluz.

FJ: Fundamento Jurídico.

HALDE: Alta Autoridad para la Lucha contra la Discriminación y por la Igualdad.

IAM: Instituto Andaluz de la Mujer.

IEIG: Informe de Evaluación de Impacto de Género.

IM: Instituto de la Mujer.

IOIEIG: Informe de Observaciones del Informe de Evaluación de Impacto de Género.

IPG: Índice de Potenciación de Género.

JORF: Boletín Oficial del Estado Francés.

LFI: Ley de Finanzas.

LGTBI: Colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales.

LOI: Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

LOLF: Ley Orgánica Francesa relativa a las Leyes de Finanzas.

LPL: Ley de Procedimiento Laboral.

MAI: Memoria del Análisis de Impacto Normativo.

OCDE: Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.

ONGD: Organización no Gubernamental para el Desarrollo.

PAP: Proyectos Anuales de Rendimiento.

PEG: Presupuestos con enfoque de Género.

PIOM: Plan para la Igualdad de oportunidades de las Mujeres y Hombres.

PL: Proyecto de Ley.

PLF: Proyecto de Ley de Finanzas.

PNB: Producto Nacional Bruto.

PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

RAP: Informe Anual de Rendimiento.

RD: Real Decreto.

RDC: Reglamento del Congreso.

RGDC: Revista General de Derecho Constitucional.

RGPP: Revisión General de Políticas Públicas.

RPA: Reglamento del Parlamento de Andalucía.

RS: Reglamento del Senado.

SCN: Sistema de Contabilidad Nacional.

SDFE: Servicio de Derechos de las Mujeres y de Igualdad.

STC: Sentencia del Tribunal Constitucional.

TEDH: Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

TJCE: Tribunal de Justicia Europeo.

UNWOMEN: Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres.



# I. Introducción

---

"Sueña lo que te atrevas a soñar, ve donde quieras ir...sé lo que quieras ser... ¡vive!"

Juan Salvador Gaviota

Los postulados científicos universalmente aceptados en la actualidad, han pasado a lo largo de la historia por ser en algunas ocasiones considerados como herejías, locuras, elucubraciones de mentes enfermas o, en el mejor de los casos, ideas descabelladas.

Desde hace unos años, ha comenzado a emplearse el género como método de investigación jurídica para poner de relieve cómo la aplicación de unas normas universales puede provocar efectos diferentes entre las personas.

En este sentido Benhabib (1990: 127) reprocha a los autores del contractualismo clásico su apoyo a las pretensiones universalistas en una sustitución implícita del sujeto abstracto por un sujeto específico, con la consecuencia de excluir a las mujeres del punto de vista moral al privatizar su experiencia.

*Las teorías morales universalistas occidentales desde Hobbes hasta Rawls son sustitucionalistas en el sentido de que el universalismo que defienden es definido subrepticamente al identificar las experiencias de un grupo específico de sujetos como el caso paradigmático de los humanos como tales. Estos sujetos son adultos blancos y varones, propietarios o al menos profesionales. Quiero sustituir el universalismo sustitucionalista por el universalismo interactivo.*

*El universalismo interactivo reconoce la pluralidad de modos de ser humano, y diferencia entre los humanos sin inhabilitar la validez moral y política de todas estas pluralidades y diferencias.*

La posibilidad del uso de la categoría género en la metodología de investigación científica, es decir «la reconstitución crítica y colectiva del significado de la experiencia social de la mujer, tal y como la viven las mujeres» (MacKinnon, 1989: 155), y más concretamente metodología de la investigación jurídica, como ya emplease Facio (1992: 11),

*Utilizo los mismos métodos que utiliza cualquier jurista, analizo los principios que fundamentan la norma, examino la evolución histórica y los antecedentes, [...] Lo que sí hago diferente a los analistas androcéntricos, es que le doy importancia a lo que las mujeres tienen que decir sobre el hecho en cuestión, hago un análisis crítico de cómo los juristas androcéntricos han conceptualizado el fenómeno jurídico y le doy importancia a hechos que la inmensa mayoría no ha considerado relevantes.*

Se debe en gran parte a toda la reivindicación de los diversos movimientos feministas, que adquirieron una fuerza sin precedente durante toda la segunda mitad del siglo pasado, y que consiguieron crear una categoría, el género, que acababa con el reduccionismo de la categoría dual sexo (macho/hembra).

Sin embargo y pese a todo el trabajo realizado, sobre todo durante las décadas de los años ochenta y noventa, por las militantes feministas, que no hemos de olvidar que gran parte formaban parte de la academia desde Millet (1969: 68) que expuso la idea de que “*El patriarcado es una forma de dominación sexual, y el sexo, es una categoría social impregnada de política*”, pasando por Butler que explora el sentido de género como elección del «llegar a ser» y la posibilidad de realizar «elecciones de género» a partir de los presupuestos de Beauvoir (1949), (para Butler (1990: 3-4), el «sujeto del feminismo», entendido como las mujeres englobadas en la categoría de género, ha dejado de tener fuerza emancipadora y ha pasado a transformarse en un concepto opresor y excluyente que ignora la diversidad entre mujeres con distintas realidades culturales o sociales); hasta más recientemente Dorlin (2011: 109-129) que abre nuevas esferas de discusión en los espacios feministas reflexionando si la “praxis queer” debe entenderse como una subversión o subyugación de las normas.

Pues bien pese a todo este esfuerzo; hoy observamos con desazón como todo este trabajo se ve seriamente amenazado cuando descubrimos que el patriarcado ha sido capaz de encasillar a la categoría género en el orden nuevamente de categoría binaria (masculino/femenino).

Este fenómeno reduccionista de la amplitud inicial con la que fue concebida la categoría género, ha provocado que se llegue a invisibilizar y silenciar, aun más, a aquellos sectores de la sociedad que ya eran invisibles; de esta manera, se ha negado una existencia jurídica a otras realidades sociales no binarias (personas del colectivo TRANS, por ejemplo) y además se ha perpetuado la eterna situación de dominación sobre las mujeres.

Resulta paradójico observar como el ser humano que ha sido capaz de crear sociedades tan complejas como en las que vivimos y normas para regirlas, no haya sido capaz de crear un espacio justo e igualitario dentro de ellas para todas las personas que la conforman.

Estas sociedades han obviado y por tanto excluido y discriminado, a todo un sector de su propia población, y lo ha hecho por un lado, legitimando como único y verdadero al sistema patriarcal heterosexista, donde el modelo a seguir es el varón blanco joven heterosexual y rico; y por otro lado lo ha hecho limitando el poder creativo del ser humano a una lógica binaria y excluyente, donde se han equiparado, e imaginamos que no por casualidad, conceptos y categorías tales como sexo y género (Butler, 1990: 67-89).

Ante esta situación es imposible no preguntarse cómo en pleno siglo XXI y pese a la cantidad ingente de normas existentes, no somos capaces de asegurar sociedad justa equitativa e igualitaria para todas las personas. No podemos dejar de preguntarnos cómo tras siglos de dominación heteromasculina, la igualdad real y de oportunidades de mujeres y hombres sigue siendo una asignatura pendiente en todas las sociedades. Vemos como no ha bastado con la proclamación formal del Principio Universal de Igualdad recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

Quizás se partió de una premisa errónea, al dar por sentado que todas las personas partíamos desde el mismo punto de salida y en las mismas condiciones. Evidentemente no era, ni es, así. Y es que aún queda mucho por hacer y debe hacerse de manera urgente y en tiempos paralelos.

Entre muchos de los retos que tenemos por delante consideramos como prioritarios la necesidad por un lado de crear sistemas jurídicos que permitan la apertura a nuevas sujetos jurídicos no binarios, nuevas categorías jurídicas no basadas en el sexo biológico, para así dar cabida a todas aquellas personas que están invisibilizadas por encontrarse en los márgenes de lo dictado en esta sociedad patriarcal binaria.

Y por otro lado, consideramos urgente abolir la histórica situación de inferioridad que las mujeres venimos sufriendo en todas las esferas de la vida y que tiene como consecuencia entre otras cosas la imposibilidad de situarnos en el mismo punto de partida legal en el que se encuentran los hombres:

*...Si hablamos de riqueza, la mujer es más pobre. Si hablamos de violencia, la mujer es más víctima. Si hablamos de oportunidades, la mujer ha dispuesto históricamente de menos posibilidades de formarse y desarrollarse personalmente. Si hablamos de empleo, la mujer es más desempleada. Si hablamos de participación social, la mujer está menos representada. Si hablamos de economía sumergida, sin derechos, la mujer suele ser la más explotada. Si hablamos de conciliación de la vida familiar y de la vida laboral, la mujer es la que dedica más esfuerzo al cuidado doméstico.*

*[...] Desigualdades que no tienen argumento más allá de lo cultural, la tradición, etc...., es decir del rol secundario que a través del tiempo de ha otorgado a las mujeres.<sup>1</sup>*

Para conseguir superar esa inferioridad histórica a la que hemos estado abocadas las mujeres, abandonar los roles a los que mujeres y hombre hemos estado sometidos, y conseguir una sociedad igualitaria en derechos y obligaciones para todas la personas, es necesario que los poderes públicos remuevan los obstáculos que lo impiden.

#### **a. Hipótesis de trabajo y objetivo de la investigación**

Así bien, el punto de partida que define el inicio de esta investigación es el hecho, más que demostrado y contrastado, que pese a la gran cantidad de legislación que se elabora tanto en el ámbito europeo, en el estatal y autonómico andaluz, la desigualdad real y de oportunidades entre las personas componentes de la sociedad lejos de tender a desaparecer, se mantiene o, incluso, en muchas ámbitos de la vida pública y privada, crece cada día; siendo esta situación de desigualdad real y de oportunidades especialmente clara si se compara la situación de partida y el acceso a las distintas oportunidades entre mujeres y hombres.

Por otra parte, no podemos pasar por alto que, desde un punto de vista legislativo, la aplicación de determinadas normas aparentemente neutras, provoca distintos resultados en mujeres y en hombres, perpetuando unas veces, y haciendo crecer, en otras, las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en nuestra sociedad.

Con el fin de analizar las medidas que en la actualidad se estén poniendo en práctica para la eliminación de las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, hemos considerado oportuno llevar a cabo el análisis de la inserción del enfoque de género en los

---

<sup>1</sup> COMISIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO EN LOS PRESUPUESTOS: *Informe de Evaluación de Impacto de Género del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2006*, Junta de Andalucía, Consejería de Economía y Hacienda, Sevilla, p. 7.

presupuestos públicos orientados a resultados, ya que el presupuesto público el elemento más adecuado para aplicar la transversalidad de género, y ello está favoreciendo al cambio cultural necesario para que la dimensión de género se integre en todas las fases y a todos los niveles de la labor de la administración.

Dadas las similitudes encontradas en la introducción de la dimensión de género en la elaboración de los presupuestos tanto de la comunidad autónoma andaluza como en la elaboración los presupuestos del estado francés (sobre todo a partir del año 2000 en el que el gobierno francés establecía en su artículo núm. 132 de la Ley de Presupuesto para el año 2000 que: “El Gobierno presentará cada año en el anexo a la Ley de presupuestos, una relación de los fondos que contribuyan a las acciones para promover los derechos de la mujer”.) Este estudio para la incorporación de la dimensión de género tendrá un carácter comparado de ambas estrategias (la francesa y la autonómica andaluza). Ante esta realidad, nos planteamos tres objetivos generales claramente definidos:

- I. Análisis cuantitativo y cualitativo en dos ámbitos, el estatal y autonómico andaluz, de las herramientas que se han creado para prevenir que textos legislativos que en su origen se configuran como disposiciones normativas neutras, resulten sexistas una vez elaboradas, atentando de esta manera con el principio constitucional de igualdad.

Así, en el ámbito estatal se analizarán los Informes de Evaluación de Impacto de Género y las Memorias de Análisis de Impacto Normativo elaboradas en España durante la VIII y IX legislatura, a la luz de lo establecido en la Ley 30/2003 de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración de impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, y del Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo que la desarrolla.

Y en el ámbito autonómico andaluz se analizarán los Informes de Evaluación de Impacto de Género y sus correlativos Informes de Observaciones de los Informes Evaluación de Impacto de Género, elaborados a tenor de lo dispuesto en la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, y el Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se regula el Informe de evaluación de Impacto de Género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno, que la ha venido desarrollando.

- II. Estimación cuantitativa y cualitativa en dos ámbitos, el estatal y autonómico andaluz, de las medidas correctoras que habiéndose señalado a través de los Informes de Evaluación de Impacto de Género y las Memorias de Análisis de Impacto Normativo en los proyectos elaborados por el Gobierno han sido contempladas finalmente, pese a no tener carácter vinculante en la redacción final de los textos legislativos, que son posteriormente publicados en los distintos Boletines Oficiales.
- III. Estudio de la inserción del enfoque de género en los presupuestos públicos orientados resultados. Estudio de casos: Estado francés y la comunidad autónoma andaluza.

#### b. Estructura de la tesis

Con el objetivo de ordenar todas las cuestiones precedentes, hemos distribuido el presente trabajo de investigación en seis capítulos divididos a su vez en tantos epígrafes y subepígrafes como han sido necesarios para la sistemática del trabajo.

Precedido de una introducción donde hemos querido reflejar las líneas directrices que hemos desarrollado a lo largo de todo el trabajo, iniciamos el primer capítulo abordando la necesidad de cambiar y ampliar las categorías jurídicas de los actuales sujetos de derecho, para evitar la desprotección jurídica de aquellas personas que no responden al modelo establecido por la sociedad patriarcal heteronormativa en la que vivimos. En esa misma línea hemos querido recuperar la categoría género para evitar situaciones jurídicas discriminatorias y hemos puesta en escena la igualdad de géneros en la normativa comunitaria y estatal francesa.

El segundo capítulo lo hemos consagrado al estudio del derecho de igualdad en el orden jurídico estatal español y autonómico andaluz, centrándonos muy especialmente para ello en la Ley Orgánica para la Igualdad 3/2007 de 22 de marzo como primera ley que desarrolla el principio de igualdad y la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

A través de los capítulos tercero y cuarto hemos pretendido alcanzar concretamente los objetivos que nos habíamos marcado a la hora de elaborar el presente trabajo de investigación. Así en el capítulo tercero, referido al ámbito estatal, tras el análisis de los Informes de Evaluación de Impacto de Género y las Memorias de Análisis de Impacto Normativo elaboradas en España durante la VIII y IX legislatura, hemos intentado conocer cuantas leyes

habían contemplado y corregido aquellos enunciados que hubiesen resultados sexistas aunque dicha consecuencia nunca hubiese sido ni deseada no hubiese estado prevista.

Esta misma dinámica de análisis ha sido la utilizada para el capítulo cuarto, de ámbito autonómico andaluz, cuando se han analizado cuantas leyes habían corregido y por tanto habían contemplando las medidas establecidas en los Informes de Evaluación de Impacto de Género y sus correlativos Informes de Observaciones de los Informes Evaluación de Impacto de Género, elaborados por el Gobierno.

El quinto capítulo, que es sobre el que recae el peso de la Mención Europea del título de Doctora<sup>2</sup>, a la que se aspira con el presente trabajo de investigación, se ha configurado en dos partes concatenadas, en la primera, se ha analizado la inserción del enfoque de género en los presupuestos públicos orientados a resultados, como metodología a seguir para una aplicación transversal del principio de Mainstreaming en la administración pública, y como ejemplo de ello, en la segunda parte hemos llevado a cabo un estudio comparado de dos entes territoriales que aunque de diferente categoría administrativa (Comunidad autónoma andaluza y Estado francés) poseen gran cantidad de similitudes en la manera de llevar a cabo la introducción de la dimensión de género en la elaboración de sus presupuestos.

---

<sup>2</sup> La Mención europea en el título de doctor se recoge en las Normas Regulatoras de los Estudios de Doctorado adaptadas al EEES. Propuestas por la Comisión de Másteres y Doctorado de 24.04.2009 (Aprobadas por Consejo de Gobierno de 30.04.09 y modificada por Consejo de Gobierno de 24.07.09), de la Universidad de Córdoba. Y más concretamente se localiza en su TÍTULO IX, art. 43, que establece que: *1. Se podrá incluir en el anverso del título de doctor o doctora la mención de doctor o doctora europeos siempre que concurren las siguientes circunstancias:*

*a) Que durante el periodo de formación necesario para la obtención del título de doctor o doctora, el doctorando o doctoranda haya realizado una estancia mínima de tres meses fuera de España en una institución de enseñanza superior o centro de investigación de un Estado miembro de la Unión Europea, cursando estudios o realizando trabajos de investigación. La estancia ha de ser reconocida por la persona que dirija la tesis, y debe ser acreditada con el certificado correspondiente expedido por la persona responsable del grupo de investigación del organismo o los organismos donde se haya realizado.*

*b) Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y sea presentado en una de las lenguas oficiales de la Unión Europea distinta a cualquiera de las lenguas oficiales en España.*

*c) Que la tesis cuente con el informe previo, acreditado oficialmente, de un mínimo de dos personas expertas pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de investigación de un Estado miembro de la Unión Europea distinto de España.*

*d) Que al menos una persona experta, perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de investigación de un Estado miembro de la Unión Europea distinto de España, con el título de doctor o doctora, y diferente de las que hayan emitido el informe previo previsto en el apartado anterior y de la persona que haya emitido el certificado de reconocimiento de la estancia (apartado a), tiene que formar parte del tribunal de evaluación de la tesis.*

*2. La defensa de la tesis ha de ser efectuada en la Universidad de Córdoba.*

*3. La solicitud de la mención europea del título de doctor o doctora deberá formularse simultáneamente a la presentación de la tesis doctoral para su admisión a trámite.*

*4. La concesión de la mención "Doctor o Doctora Europea" dará derecho a la expedición de una certificación y/o diploma acreditativo de tal condición.*

La aspiración a la obtención de la Mención Europea justifica el por qué la introducción y las conclusiones del presente trabajo de investigación se hallan en lengua castellana y también en francés.

El último capítulo lo hemos dedicado a compilar todas las conclusiones a las que hemos llegado tras haber concluido con los objetivos que nos habíamos propuesto cuando diseñamos la presente investigación.

Acompañando a estos seis capítulos presentamos un interesante Anexo donde hemos recogido todos los Informes de Evaluación de Impacto de Género y las Memorias de Análisis de Impacto Normativo elaboradas durante la VIII y IX legislatura, en el ámbito estatal y todos los Informes de Evaluación de Impacto de Género y sus correlativos Informes de Observaciones de los Informes Evaluación de Impacto de Género, del ámbito autonómico andaluz que hemos obtenido a lo largo de nuestra investigación.

Con este Anexo pretendemos visibilizar y sobre todo apoyar todas y cada una de las afirmaciones y conclusiones que seguidamente pasaremos a exponer. El hecho de acompañarlas en formato papel y no en formato digital, responde al hecho de que estos informes no están digitalizados en los servicios de archivo del Congreso de los Diputados, y por tanto ni se pueden encontrar en internet ni se pueden visualizar ni siquiera desde la propia intranet del Congreso de los Diputados. La única manera de poder analizar su contenido es buscándolos en los madrileños sótanos del Congreso de los Diputados.

Esta afirmación conlleva a señalar que, en pleno s. XXI, la manera de conseguir los citados informes y memorias, ha sido la utilizada por los documentalistas en el pasado: examinando uno por uno, de manera manual, todos los dossiers de los proyectos legislativos aprobados durante ambas legislatura, y tras localizar en éstos el informe o la memoria correspondiente, si existía, hemos procedido, previa autorización, a fotocopiarlos para poder realizar los análisis cuantitativos y cualitativos que presentamos.

No obstante, debemos señalar que el sistema de archivo del Parlamento Andaluz sí que tiene los informes digitalizados; el problema en el ámbito autonómico es que estos informes se digitalizan cuando el dossier legislativo esta completo, de manera que para este servicio resulta humanamente imposible llevar un registro digital al día de los dossiers legislativos, pues estos van de una comisión a otra y solo llegan al archivo una vez el proyecto de ley queda aprobado, tramitación que puede llegar incluso a durar varios años.



### c. Metodología

El trabajo que pasaremos a exponer se ha elaborado siguiendo una metodología de investigación clásica en las ciencias jurídicas basada en primer lugar en el estudio de la bibliografía, doctrina, jurisprudencia, textos, estadísticas y toda la literatura jurídica tanto en inglés, francés como en español, para el manejo conceptual y argumental del sujeto de nuestra investigación<sup>3</sup>.

Llevaremos a cabo un estudio de la evolución histórica y análisis de los textos vigentes (cuantitativo y cualitativo), de los conceptos jurídicos determinados e indeterminados, usando para ello un análisis de la jurisprudencia, que también nos revelará las distancias entre lo legislado y lo aplicado.

Veremos como los análisis de los textos legales, normas y jurisprudencia, son básicos para estudiar los conceptos y la eficacia de la regulación sobre el tema objeto de nuestra investigación. Se entenderá por tal, el grado de consecución obtenido en la regulación sobre estimativa de impacto de género.

En segundo lugar hemos optado por un método lógico-deductivo que nos ha posibilitado ordenar los datos empíricos extraídos sobre todo en los capítulos tercero cuarto y quinto y nos ha permitido finalmente sistematizarlos e interpretarlos con la visión de conjunto que se requiere de este tipo de investigaciones.

Una de las singularidades de esta investigación es que el análisis que en ella se hace, se lleva a cabo, desde el pluralismo jurídico (ONU, UE, Francia), superador del monopolio estatal, la estimativa de impacto de género a través de los informes de impacto de género.

Desde un punto de vista socio-jurídico somos conscientes de que como juristas, tenemos la obligación de participar en la consolidación de una sociedad cada vez más justa y más equitativa en lo referente a la igualdad real y de oportunidades, para todas las personas.

Así bien y ante esta situación, consideramos que para este trabajo, que se haya inscrito en la Sociología jurídica (donde Derecho y Sociedad están íntimamente relacionados), se requería hacer uso de una metodología socio-jurídica que nos permitiese para llevar a cabo un

---

<sup>3</sup> Para el uso de esta metodología ha sido indispensable el análisis de una parte de la obra de ATIENZA, en concreto ATIENZA, M, El derecho como argumentación. ISEGORÍA 21. 1999. Web: [http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CGkQFjAD&url=http%3A%2F%2Fisegoria.revistas.csic.es%2Findex.php%2Fisegoria%2Farticle%2Fdownload%2F76%2F76&ei=CMS4T\\_q7J4Gt0QW1yZXSbw&usq=AFQjCNFGkACznSJMenqNJohqro4igaXo2Q&sig2=3rpp7oX-LIKYMZj0utTf\\_Q](http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CGkQFjAD&url=http%3A%2F%2Fisegoria.revistas.csic.es%2Findex.php%2Fisegoria%2Farticle%2Fdownload%2F76%2F76&ei=CMS4T_q7J4Gt0QW1yZXSbw&usq=AFQjCNFGkACznSJMenqNJohqro4igaXo2Q&sig2=3rpp7oX-LIKYMZj0utTf_Q) (Consultada en última ocasión en marzo 2012).

análisis de los problemas y las soluciones que desde una sociedad dada, en un momento determinado se pudiesen aportar a través del ámbito jurídico.

Sin duda, se trata de una apuesta por acercar la Academia a la Sociedad para que los conocimientos se apliquen y se retroalimenten<sup>4</sup>. Se parte de las normas jurídicas y se analiza si ha conseguido el impacto social esperado, en nuestro caso, disminuir la brecha de género.

El uso de una metodología socio-jurídica nos conduce hacia esta metodología específica dentro del ámbito jurídico. Hemos trabajado teniendo en cuenta las aportaciones realizadas desde la epistemología feminista a partir de principios de la década de los ochenta, empezando por las elaboradas por Harding (1993: 18) que señala que *“es falso creer que la metodología científica necesita de la eliminación de todos los valores sociales en los procesos científicos”* hasta llegar a las aportaciones hechas desde el feminismo radical<sup>5</sup> donde Haraway (2007: 130) como una de sus exponentes establece que *“ Los saberes adquiridos necesitan que el objeto del conocimiento sea visto como un actor, como un sujeto y no como una simple pantalla, un terreno o una fuente de investigación ”*.<sup>6</sup>

Así, vemos que desde un punto de vista epistemológico en los años ochenta las feministas liberales<sup>7</sup> asumen la herencia teórica de sus predecesoras ilustradas y se centran en el paso imprescindible de acabar con todas las barreras legales, que entonces eran numerosas. Así, si debemos señalar los dos grandes temas que sirvieron de eje tanto para la movilización como para la reflexión teórica de estos años. Uno de ellos estuvo representado por el lema

---

<sup>4</sup> En este sentido la obra de NORBERTO BOBBIO es muy ilustrativa ya que para él, a diferencia de KELSEN, el derecho no representa más que un discurso, un conjunto de actos de comunicación lingüísticas preceptivas, es decir un conjunto de enunciados que tienen como objetivo influir en la conducta de otro. Por tanto, la ciencia jurídica no se presenta como una ciencia "normativa", sino más bien como un análisis lingüístico del discurso del legislador.

La ciencia del derecho así es apreciado por BOBBIO como el "discurso de un discurso ", un metalenguaje descriptivo. Pero, en la medida de que este discurso cumple una función social, la teoría del derecho constituye también un instrumento de análisis del poder y en base a ello el derecho puede entenderse como una medida organizadora del uso de la fuerza. De esta manera la metodología analítica arroja una nueva luz a la problemática que enfrentan a la metodología y a la Teoría del Derecho. BOBBIO, N, *Essais de théorie du droit (Recueil de textes)*, LGDJ / Montchrestien. France 2000.

<sup>5</sup> A partir de los años se acentúa el hecho de que ya no se puede hablar de un solo feminismo sino que hay tantas clases de feminismo como visiones sobre la situación de las mujeres se tengan, destacándose muy especialmente tres perspectivas muy distintas: el feminismo liberal, el feminismo radical y el feminismo socialista.

Estas denominaciones fueron adoptadas por los propios colectivos feministas para enfatizar la variedad de reivindicaciones y objetivos a conseguir, así como las distintas procedencias políticas y teóricas de sus protagonistas.

Ello dio origen a la necesidad de distinguirse internamente para reflejar la multiplicidad de enfoques. Cada uno de estos feminismos representa una elaboración definida de unos conceptos y una metodología diferenciados. Incluso coincidiendo en la conveniencia de utilizar los mismos instrumentos de análisis, como es el caso del concepto de patriarcado, estos distintos enfoques desarrollaron un tipo de reflexión propia y dotaron a los conceptos de un campo de aplicación específico.

<sup>6</sup> La traducción es nuestra.

<sup>7</sup> Definiremos el feminismo liberal de un modo simplificador como aquel tipo de feminismo que piensa que los problemas de subordinación de las mujeres se solucionan suprimiendo restricciones legales que impiden la entrada de éstas en el espacio público.

tantas veces invocado de *“lo personal es político”* (Millet, 1969) con el que se quería llamar la atención sobre los conflictos y problemas que las mujeres afrontan en el ámbito privado. El otro tema presente fue el análisis de las causas de la opresión, en el que el concepto de patriarcado desempeñaría un papel fundamental. Junto a estos dos temas centrales también se comenzó a cuestionarse el androcentrismo, la neutralidad y el conocimiento objetivo en la ciencia. También cobra una especial relevancia la ética.

Así, emplearemos la citada metodología para el análisis cualitativo de los Informes de Evaluación de Impacto de Género y de las Memorias de Análisis de Impacto Normativo; y colateralmente esto nos llevara a un análisis cuantitativo. Esta visión, obtenida a lo largo de la investigación, nos llevó la necesidad de buscar una herramienta más afín como la metodología jurídico-feminista.

De otro lado, si partimos de la base que a través del lenguaje construimos nuestros pensamientos, será desde el análisis de los citados informes y memorias, y del lenguaje empleado en los mismos, que podremos vislumbrar cuáles son sus referentes simbólicos y normativos. En consonancia con lo anterior, es relevante, como en toda investigación feminista, exponer que no es una investigación neutra en tanto que somos sujetos.

A lo largo de la presente investigación hemos considerado oportuno utilizar como metodología de referencia, el Sistema Harvard (autor, fecha de edición, página), por su carácter claro, dinámico y directo, en el que se pueden encontrar rápidamente las referencias en la bibliografía; todo ello sin olvidar que actualmente es el sistema de referencia más demandado por las mejores y de mayor relieve revistas científicas.

Así mismo, hemos elaborado un glosario de siglas, discriminadas en función de su aparición en el texto, cuyo criterio de selección ha sido el hecho de que la palabra sea citada en más de tres ocasiones. Este glosario pretende facilitar la lectura del presente trabajo de investigación.

Finalmente en lo que a sistemas de llamadas a notas se refiere, hemos optado por el Sistema francés, en el que la llamada se sitúa inmediatamente antes de los signos de puntuación delimitadores principales (coma, punto y coma, dos puntos...), por considerarlo el más apropiado para la investigación en ciencias jurídicas y sociales.

Modestamente, se pretende que sea una investigación honrada desde el esfuerzo en explicar desde dónde se hace la investigación, qué se pretende con la misma y cómo va a alcanzarse, situándonos en el postfeminismo.

Desde la óptica espacio temporal esta investigación comienza la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba, como punto y seguido a la habíamos efectuamos para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados. Así bien en el ámbito temporal, señalaremos por un lado que el comienzo de esta investigación se fecha a mediados del año 2007 y por otro lado dejamos constancia de que las conclusiones y por tanto el final de este trabajo ha terminado de ser redactados en marzo de 2012.

Debido a los ámbitos competenciales dentro de los que debíamos trabajar una vez trazada la hoja de ruta, se ha ido complementando con la búsqueda e investigación en otros organismos de la Comunidad Autónoma Andaluza, en primer lugar acudiendo al Parlamento Andaluz, concretamente a su biblioteca y a su servicio de documentación y archivo; y en segundo lugar acudiendo a las instalaciones del Instituto Andaluz de la Mujer en Sevilla.

En cuanto a los aspectos éticos y políticos, encontramos una serie de trabas que obstaculizaron el desarrollo de la investigación. Fue difícil, y en algún caso imposible, conseguir los Informes de Observaciones de los Informes Evaluación de Impacto de Género, elaborados por el Instituto Andaluz de la Mujer a tenor de lo dispuesto en la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, y en el Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se regula el Informe de evaluación de Impacto de Género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno. No sabemos cuál es la razón puesto que, se supone, son públicos. De tal modo que aquellos Informes de Observaciones de los Informes Evaluación de Impacto de Género que hemos podido obtener son los que se nos han facilitado el servicio de documentación y archivo del Parlamento Andaluz.

El Congreso de los Diputados en Madrid y en concreto su servicio de documentación y archivo se ha convertido en fuente primaria de obtención de los datos que nos eran necesarios para este trabajo en el ámbito estatal. En este caso el desplazamiento personal ha sido inevitable ya que la documentación que requeríamos solo es accesible desde la propia intranet del Congreso, razón por la cual hubo que solicitar un permiso para acceder al archivo del Congreso en calidad de investigadora.

La obtención de una de las “Ayudas para la realización de estancias en 2010 para la obtención de la mención europea en el título de doctora” convocadas por la Universidad de Córdoba, nos permitió trasladarnos a París para terminar la presente investigación en la Facultad de Derecho la Universidad de Nanterre, Paris X Ouest-la Defense, bajo la supervisión de las Profesoras Titulares de Derecho Público en dicha facultad Véronique Champeil-Desplats y Stéphanie Hennette Vauchez.

En la Facultad de Derecho la Universidad de Nanterre, Paris X Ouest-la Defense y por el personal del Centro de Investigación sobre los Derechos Fundamentales (CREDOF), y por su directora la Profesora Champeil-Desplats; se llevo a cabo toda la parte referida al estudio comparativo de la inserción del enfoque de género en los presupuestos públicos orientados a resultados. Estudio de casos: Estado francés y la comunidad autónoma andaluza.

Tras haber fijado mi residencia en París, y habiéndoseme posibilitado la magnífica oportunidad de formar parte del cuerpo docente de la Facultad de Derecho la Universidad de Nanterre, Paris X Ouest-la Defense durante los cursos académicos 2010-2011 y 2011-2012, evidentemente parte de la realización de esta investigación se ha visto compartida con intensos momentos de labor docente, que lejos de haber obstaculizado su avance, creo ha enriquecido su contenido y sin duda mis conocimientos personales y vitales.

#### d. Marco legislativo inicial de la investigación

Desde un punto de vista temporal, el marco legislativo donde ha de encuadrarse el presente trabajo de investigación encuentra sus raíces a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, cuando los diferentes organismos internacionales empezaron a hacerse eco de la situación concreta de desigualdad de oportunidades que viven las mujeres, por el mero hecho de ser mujeres, es decir el elemento oponible y sometido al modelo instaurado dentro de la lógica binaria imperante, el varón (Simón, 2008: 11-35).

Sin embargo, y pese a todos los esfuerzos que se han llevado a cabo desde los organismos internacionales<sup>8</sup>, no será hasta septiembre de 1995, en la IV Conferencia Mundial

---

<sup>8</sup> A destacar: la Conferencia Mundial del año Internacional de la Mujer de 1975, México. Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW) de 1979. Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer; Igualdad, Desarrollo y Paz de 1980, Copenhague. Conferencia Mundial para el examen y evaluación de los logros de las Naciones Unidas para la Mujer; Igualdad, Desarrollo y Paz de 1985, Nairobi. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención De Belém Do Pará” 1994. Web: <http://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/Mujer2011.htm> (Consultada en última ocasión en marzo 2012).

sobre la Mujer de Naciones Unidas, realizada en Beijing, cuando la igualdad toma el peso suficiente para abordar esta materia con la seriedad que se merece.

La Conferencia de Beijing aprobó la Declaración de Beijing y una Plataforma de Acción<sup>9</sup>. En ella los Gobiernos se comprometieron a impulsar, antes del término del S. XX, las estrategias acordadas en Nairobi en 1985 y a movilizar recursos para la realización de lo recogido las Resoluciones finales de esta Conferencia, la Declaración y la Plataforma de Acción.

La Plataforma de Acción de Beijing es el documento más completo producido por una conferencia de Naciones Unidas en relación a los Derechos de las Mujeres, ya que incorpora lo estipulado en Conferencias y Tratados anteriores, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos<sup>10</sup>, la Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujeres y la Declaración de Viena<sup>11</sup>. También reafirma las definiciones de la Conferencia del Cairo 1994<sup>12</sup>.

En este documento se acordaron una serie de puntos para eliminar la discriminación contra las mujeres y erradicar la pobreza. Se reconoció también, que los derechos humanos de las mujeres incluyen su derecho a tener control sobre su sexualidad y su reproducción; por ello habría que revisar las leyes que prevén castigos para las mujeres que han recurrido al aborto. Reforzar la legislación que protege los derechos de las mujeres, es imprescindible para conseguir la igualdad real:

*Los compromisos contraídos por los gobiernos en Beijing reflejan la comprensión de que la igualdad de la mujer debe ser un componente central de cualquier intento de resolver los problemas sociales, económicos y políticos del mundo. [...] En consecuencia, si en el pasado las mujeres lucharon para que la igualdad entre los géneros formara parte del temario de la comunidad*

---

<sup>9</sup> ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS. *Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, de 4 a 15 de septiembre de 1995*. A/CONF.177/20 17 de octubre de 1995. Web: [http://www.unesco.org/water/news/pdf/beijing\\_declaration\\_es.pdf](http://www.unesco.org/water/news/pdf/beijing_declaration_es.pdf) (Consultada en última ocasión en marzo 2012).

<sup>10</sup> NACIONES UNIDAS, *Declaración Universal de los Derechos Humanos*, de 10 de diciembre de 1948, Resolución 217 A (III), Web: <http://www.un.org/es/documents/udhr/> (Consultada en última ocasión en marzo 2012).

<sup>11</sup> NACIONES UNIDAS. *Declaración y el Programa de Acción de Viena aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos* el 25 de junio de 1993. A/CONF.157/23. Web <http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/%28Symbol%29/A.CONF.157.23.Sp> (Consultada en última ocasión en marzo 2012).

<sup>12</sup> NACIONES UNIDAS. *Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo*, del 5 a 13 de septiembre de 1994 El Cairo (Egipto). Web: [http://www.un.org/popin/icpd/newslett/94\\_19/icpd9419.sp/1lead.stx.html](http://www.un.org/popin/icpd/newslett/94_19/icpd9419.sp/1lead.stx.html). (Consultada en última ocasión en marzo 2012).

*internacional, la igualdad entre los géneros es hoy uno de los principales factores que conforman ese temario.*<sup>13</sup>

Quizás uno de los aspectos más relevantes de las conclusiones de la Conferencia Mundial de Beijing, fue que en ella se reconoce por primera vez el Principio de Transversalidad (*Mainstreaming*)<sup>14</sup>, que fue reiterado cinco años después en el tercer periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas; lo que popularmente se ha dado en llamar “Beijing + 5”<sup>15</sup>.

En este contexto, y de forma paralela, en el ámbito de la Unión Europea se pone en marcha una nueva etapa en el proceso de construcción europea que ya desde 1957 se venía fraguando con la firma del Tratado de Roma. En esta nueva etapa toma un especial impulso el proceso de consolidación europea en materia de igualdad de oportunidades mujeres y hombres, con la entrada en vigor el día 1 de mayo de 1999 del Tratado de Ámsterdam, que viene a recoger y desarrollar entre otros aspectos el Principio de Transversalidad:

*Se trata de un Principio firme y creciente, en el seno de la Unión Europea. En efecto, ha sido reconocido por el art. 3 del Tratado de Ámsterdam, que ha incluido, como una de las prioridades a tener en cuenta en el diseño de Políticas Europeas, la promoción de la igualdad de mujeres y*

---

<sup>13</sup> ANNAN, K. Secretario General de las Naciones Unidas. Período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, *Igualdad entre los géneros, desarrollo y paz en el siglo XXI*, Nueva York, 5 a 9 de junio de 2000. Web: <http://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/mujer2021.htm> (Consultada en última ocasión en marzo 2012).

<sup>14</sup> ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO: *Herramientas para la igualdad*. La idea de integrar las cuestiones de género en la totalidad de los programas sociales quedó claramente establecida como estrategia global para promover la igualdad entre los géneros, en la Plataforma de Acción adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en Pekín en 1995. Dicha Plataforma resaltó la necesidad de garantizar que la igualdad entre los géneros es un objetivo primario en todas las áreas del desarrollo social.

En julio de 1997 el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) definió el concepto de la transversalización de la perspectiva de género en los siguientes términos: “*Transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la integración es conseguir la igualdad de los géneros.*”

Esta estrategia de transversalización incluye actividades específicas en el ámbito de la igualdad y acción positiva, ya sean los hombres o las mujeres, que se encuentren en posición de desventaja. Las intervenciones específicas para la igualdad pueden orientarse a las mujeres exclusivamente, a las mujeres y a los hombres al mismo tiempo o únicamente a los hombres, con el fin de que puedan participar en la labor de desarrollo y se beneficien de ella por igual. Se trata de medidas provisionales necesarias, concebidas para luchar contra las consecuencias directas e indirectas de la discriminación en el pasado. Web: <http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/gender/newsite2002/about/defin.htm> (Consultada en última ocasión en marzo 2012).

<sup>15</sup> ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS, *Informe del Comité Especial Plenario del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la (Beijing + 5)*, Documentos Oficiales 2000. Vigésimo tercer período extraordinario de sesiones. Suplemento No. 3 (A/S-23/10/Rev.1). Nueva York, de 5 a 9 de junio de 2000. Web: <http://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/as2310rev1.pdf> (Consultada en última ocasión en marzo 2012).

*hombres en todas las políticas y la eliminación de las discriminaciones. Se incluye como objetivo de la Unión, la promoción de la igualdad entre hombre y mujer y se condiciona el conjunto de las Políticas Comunitarias al objetivo de la consecución de esa igualdad (Rey Martínez, 2004: 500-523).*

Además del Tratado de Ámsterdam, cabe destacar la firma del Pacto Europeo por la Igualdad de Género 2006<sup>16</sup> cuyo objetivo fue fomentar la participación de la mujer en el mercado de trabajo, favoreciendo para ello medidas con las que mejorar el equilibrio entre la vida privada y la vida profesional de hombres y mujeres, y promover la igualdad de género.

Con la creación del Tratado de Lisboa se refuerza el principio de igualdad entre el hombre y la mujer, incluyéndolo en los valores y objetivos de la Unión (artículo 2 y artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea), y se establece el principio de integración de la dimensión de género en todas las políticas de la UE como acabamos de ver a través artículo 8 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea<sup>17</sup>.

Además de manera complementaria a este objetivo, y teniendo en cuenta que el Derecho europeo es la esencia de la especificidad de la Unión Europea, y que por tanto, debe asegurarse que las disposiciones legislativas y reglamentarias europeas estén bien canalizadas, que se apliquen de manera apropiada al nivel correspondiente y que sean proporcionales a todas las necesidades sociales; desde el año 2002, la Comisión Europea ha puesto en marcha,

---

<sup>16</sup> En marzo de 2006, la Comisión Europea adoptó un Plan de Trabajo para la Igualdad entre las Mujeres y los Hombres que cubría el periodo 2006-2010. Este plan de trabajo esbozaba seis áreas prioritarias de actuación comunitaria sobre la igualdad entre los sexos para este periodo: la misma independencia económica para las mujeres y los hombres, la conciliación de la vida privada y la actividad profesional, la misma representación en la toma de decisiones, la erradicación de todas las formas de violencia de género, la eliminación de los estereotipos sexistas y la promoción de la igualdad en la política exterior y de desarrollo. Web

[http://europa.eu/legislation\\_summaries/employment\\_and\\_social\\_policy/equality\\_between\\_men\\_and\\_women/c10404\\_es.htm](http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10404_es.htm)  
Sobre la base del Plan de Trabajo 2006-2010, así como del Pacto Europeo por la Igualdad de Género, la Comisión presentó en septiembre de 2010 sus nuevas prioridades en materia de igualdad entre mujeres y hombres, concretadas en la Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015. Web:

[http://europa.eu/legislation\\_summaries/employment\\_and\\_social\\_policy/equality\\_between\\_men\\_and\\_women/em0037\\_es.htm](http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/em0037_es.htm)

En mayo de 2011 el Consejo de la UE, consciente de la necesidad de reafirmar y apoyar la estrecha relación entre la Estrategia de la Comisión Europea para la igualdad entre mujeres y hombres (2010-2015) y la estrategia «Europa 2020: para el empleo y un crecimiento inteligente, sostenible e integrador»,

([http://europa.eu/legislation\\_summaries/employment\\_and\\_social\\_policy/eu2020/em0028\\_es.htm](http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/eu2020/em0028_es.htm)) reafirmó su compromiso de cumplir las ambiciones de la UE en materia de igualdad de género y adoptó el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020). <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:155:0010:0013:ES:PDF> (Consultadas en última ocasión en marzo 2012).

<sup>17</sup> Las acciones más recientes de la Unión Europea en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres han sido las siguientes en el ámbito financiero la creación de los Programas: El Programa Progress (2007-2013) y el Programa Daphne III (2007-2013), sucesor de los programas Daphne (2000-2003) y Daphne II (2004-2006).



como veremos a lo largo de este trabajo, un programa de gran envergadura para simplificar y, en general, mejorar el marco regulador: “Legislar Mejor”<sup>18</sup>.

Para la ejecución de dicho programa se ha hecho necesario tomar medidas en las distintas fases del ciclo político: examinar iniciativas nuevas, propuestas en fase de negociación y legislación ya publicada, es decir; ha sido necesario introducir un sistema para evaluar el impacto y mejorar el diseño de las propuestas importantes de la Comisión Europea.

No obstante, no es la primera vez que la Unión Europea plantea la necesidad introducir un sistema para evaluar el impacto, de hecho en la línea de la situación de discriminación que se haya la mujer a la que antes hacíamos referencia, la Unión Europea, a través de la Decisión del Consejo sobre la estrategia a seguir en materia de igualdad entre hombres y mujeres (2001-2005)<sup>19</sup>, articula la evaluación del impacto en función del sexo en distintos ámbitos de intervención de la estrategia marco comunitaria (vida económica, social, vida civil, roles, etc.), como una de las acciones a emprender para el logro de los objetivos mencionados en el referido programa.

Insiste como veremos, en un enfoque dual en el que la Transversalidad, en cuanto la integración de la dimensión de género en todas las políticas que afectan a las mujeres, venga acompañada de acciones positivas a favor de la igualdad.

Este compromiso de la Unión Europea de integrar la perspectiva de género en el conjunto de Políticas Comunitarias nace de la siguiente constatación: decisiones políticas que, en principio, parecen no sexistas pueden tener un diferente impacto en las mujeres y en los hombres, a pesar de que dicha consecuencia ni estuviera prevista ni se deseara.

La Comisión Europea aprobó una Comunicación sobre la transversalidad (*mainstreaming*) como un primer paso hacia la realización de este compromiso, mediante la elaboración de una “Guía para la Evaluación del Impacto en Función del Género”, guía que analizaremos en profundidad en el presente trabajo.

---

<sup>18</sup> UNIÓN EUROPEA, *Programa Legislar Mejor*. Web: [http://ec.europa.eu/governance/better\\_regulation/brochure\\_en.htm](http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/brochure_en.htm) (Consultada en última ocasión en marzo 2012).

<sup>19</sup> UNIÓN EUROPEA, *Decisión del Consejo, por la que se establece un programa de acción comunitaria sobre la estrategia a seguir en materia de igualdad entre hombres y mujeres (2001-2005)*, de 20 de diciembre de 2000. Web: <http://portal.aragob.es/pls/portal30/docs/FOLDER/IAM/TEMAS/POLITIGUAL/IGUALDAD.PDF> (Consultada en última ocasión en marzo 2012).

Recientemente la Comisión ha aprobado La Carta de la Mujer<sup>20</sup> a través de La pretende promover de forma más eficaz la igualdad entre mujeres y hombres en Europa y en el mundo. Las desigualdades por motivo de género afectan directamente a la cohesión económica y social, así como al crecimiento sostenible, la competitividad y el desarrollo demográfico.

De igual manera España, como Estado Miembro de la Unión, viene desde hace años participando en el objetivo de lograr la igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades, elaborando para tal fin, políticas de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres.

Uno de los objetivos específicos de estas políticas es la aplicación de la Transversalidad de género. Así, con la elaboración del IV Plan para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2003-2006), ya se establecía como uno de sus dos principios fundamentales el que denomina de *Mainstreaming* y cuyo propósito se definía como: “Promover la defensa y garantía del principio de igualdad entre hombres y mujeres en todas las actividades y políticas a todos los niveles y evaluando sus posibles efectos”<sup>21</sup>.

Durante el desarrollo del IV Plan, cabe destacar la promulgación de la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración de impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno<sup>22</sup>. La finalidad de esta ley no es otra que aplicar el Principio de Transversalidad, de manera que puedan analizarse, a través de los Informes de Evaluación de Impacto de Género, las eventuales consecuencias que tendrá la aplicación de la disposición normativa que se trate para mujeres y hombres antes de su aplicación. Para ello se requiere, identificar previamente las diferencias existentes en la situación de hombres y mujeres, utilizando datos estadísticos desagregados por sexos, e Indicadores de Género para valorar, a continuación, los efectos que tendrá la norma a aplicar sobre unos y otras. Con la promulgación de esta ley se consigue la transposición de las

---

<sup>20</sup> UNIÓN EUROPEA, *Carta de la Mujer*, Comunicación de la Comisión de 5 de marzo de 2010 titulada «Un compromiso reforzado en favor de la igualdad entre mujeres y hombres - Una Carta de la Mujer: Declaración de la Comisión Europea con motivo del Día Internacional de la Mujer 2010 en conmemoración del 15º aniversario de la adopción de la Declaración y la Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer celebrada en Pekín, y del 30º aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer» [COM(2010) 78 final - no publicada en el Diario Oficial]. Web: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0078:FIN:ES:PDF> (Consultada en última ocasión en marzo 2012).

<sup>21</sup> IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Gobierno de España. 2003-2006.

<sup>22</sup> BOE núm. 246, de 14 de octubre de 2003.

directrices comunitarias en materia de Igualdad, dando así cumplimiento a uno de los objetivos de la Plataforma de Acción de Beijing.

Lo dispuesto en esta Ley 30/2003 de 13 de octubre, se ha visto reforzado, en primer lugar, con la creación de una normativa que la regula y desarrolla el Decreto Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo<sup>23</sup>

Y en segundo lugar, la estimativa y evaluación del impacto de género cobra una real importancia en el ámbito estatal a raíz de la publicación de la tan esperada Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres<sup>24</sup>, que se ha constituido como el marco de desarrollo del principio de igualdad.

En ella a parte de las modificaciones legislativas que tienen como objetivo avanzar en la igualdad real y en el ejercicio pleno de los derechos de mujeres y hombres, y para alcanzar tales objetivos propone la implementación de medidas transversales que incidan en todos los órdenes de la vida política, jurídica y social, a fin de erradicar las discriminaciones contra las mujeres; también se recoge la obligatoriedad de la elaboración de los Informes de Evaluación de Impacto de Género.

En el ámbito andaluz, y de forma casi simultánea a la publicación de la Ley 30/2003 de 13 de octubre, se promulgó la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por que se aprueban medidas fiscales medidas fiscales y administrativas<sup>25</sup>. Se trataba de una Ley pionera, ya que por primera vez establece medidas concretas en materia de género, respondiendo así a los objetivos generales de avanzar en la consecución de la igualdad real y efectiva de las mujeres y los hombres, eliminar cualquier forma de discriminación y fomentar la participación de las mismas en la vida política, económica, cultural y social dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco de lo dispuesto en Constitución y del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Mediante esta Ley, como ya pasara en el ámbito estatal, se establece la obligación de elaborar un Informe de Evaluación de Impacto de Género (IEIG), que valore previamente en qué grado afectarán las disposición normativas que elabore el Consejo de Gobierno, a la situación real de mujeres y hombres en su posterior aplicación.

---

<sup>23</sup> BOE núm. 173, de 18 de julio de 2009.

<sup>24</sup> BOE núm. 71, de 23 de marzo de 2007.

<sup>25</sup> BOJA núm. 251, de 31 de diciembre de 2003.

Esta Ley se venido desarrollando hasta el pasado mes de febrero de 2012, a través del Decreto 93/2004, de 9 de marzo, ya derogado<sup>26</sup>, que regulaba el informe de evaluación de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno<sup>27</sup>.

Entre otros aspectos, este Decreto derogado, establecía la participación del Instituto Andaluz de la Mujer en el proceso de elaboración de los Informes de Evaluación de Impacto de Género, a través de un mecanismo de retroalimentación entre el Centro Directivo Competente que elabora el Informe y el Instituto Andaluz de la Mujer que los revisa, los enriquece y señala las observaciones pertinentes en un Informe de Observaciones que acompaña al primero.

Al igual que pasara con la publicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en el ámbito estatal; la obligación de elaboración de los Informes de Evaluación de Impacto de Género se ha visto reforzada en Andalucía con la promulgación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía.<sup>28</sup>

Con esta Ley, Andalucía participa en los objetivos de alcanzar una sociedad igualitaria, justa, solidaria y democrática en la que las mujeres y hombres tengan, realmente, los mismos derechos y oportunidades.

Sintetizado así pues, el marco legislativo en el que se desarrollará nuestra investigación, ha llegado pues el momento de adentrarse en el estudio y análisis de la eficacia y eficiencia de los Informes de Evaluación de Impacto de Género y las Memorias de Análisis de Impacto Normativo, como herramientas concebidas para erradicar la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres, en el ámbito estatal y autonómico andaluz.

Es decir, ha llegado el momento de analizar cómo y en qué medida los Informes de Evaluación de Impacto de Género y las Memorias de Análisis de Impacto Normativo están evitando que en la elaboración de la normativa se establezcan disposiciones que, en principio,

---

<sup>26</sup> El 17 de febrero de 2012, ya en periodo de conclusiones del presente trabajo de investigación se publicaba el Decreto 17/2012, de 7 de febrero, por el que se regula la elaboración del Informe de Evaluación del Impacto de Género, en cuya Disposición derogatoria única. Derogación normativa, se establecía lo siguiente:

*“Queda expresamente derogado el Decreto 93/2004, de 9 de marzo, por el que se regula el informe de evaluación del impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno, así como aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo previsto en el presente Decreto.”* (El subrayado es nuestro). BOJA núm. 36, de 22 de febrero de 2012.

<sup>27</sup> BOJA núm. 50, de 12 de marzo de 2004.

<sup>28</sup> BOJA núm. 247, de 18 de diciembre de 2007.

parecen no sexistas, pero que pueden tener un impacto diferenciado y discriminatorio en las mujeres y en los hombres, a pesar de que dicha consecuencia ni estuviera prevista ni se deseara.

# Capítulo 1: Mujeres y hombres como sujetos de Derecho en Ordenamiento Jurídico

---

## 1.1 La lógica binaria del derecho

A día de hoy, el sujeto de derecho es la persona física o moral titular de derechos y obligaciones. Se observa que la persona moral aparece como una entidad asexuada, el individuo -persona física- es actualmente en nuestro Estado de derecho positivo, necesariamente hombre o mujer (Sanchis Vidal, 1999)<sup>29</sup>.

Ha hecho falta esperar hasta el año 2010, para que una autoridad pública admita la existencia de un género neutro<sup>30</sup>, categoría por tanto omnipresente en el inconsciente colectivo occidental y explícito en el plano gramatical.

Así, el estado de la persona está constituido por el conjunto de reglas que definen su personalidad jurídica y que lo individualiza con respecto a su familia y a la sociedad en su conjunto. El estado de una persona comprende principalmente su nombre, sus apellidos<sup>31</sup>, su lugar y fecha de nacimiento, su filiación, su nacionalidad, su capacidad civil, su domicilio, su situación con respecto al matrimonio y su sexo.

*El sexo designa normalmente tres cosas: el sexo biológico tal y como es asignado en el nacimiento -sexo macho o hembra-, el papel o el comportamiento sexual que se supone le corresponde, el género, que provisionalmente definiremos como los atributos de lo femenino y de lo masculino que la socialización y la educación diferenciada de las personas produce y reproduce. Y finalmente la sexualidad, es decir el hecho de tener una sexualidad, de “hacer” o “tener” sexo (Dorlin, 2011: 5)<sup>32</sup>.*

---

<sup>29</sup> En el caso de España fue en 1993 cuando se aprobó la reforma del art. 170 del Reglamento del Registro Civil, se pasaba así de ser hembras a mujeres.

<sup>30</sup> Gobierno de New South Wales. Australia. <http://www.telegraph.co.uk/news/newstoppers/howaboutthat/7446850/Briton-is-recognised-as-worlds-first-officially-genderless-person.html>. (Consultado por última vez en febrero 2012).

<sup>31</sup> En el Estado español aún se mantienen los apellidos paternos y maternos, a diferencia de lo que pasa en otros Estados de la Unión Europea en los que únicamente se mantiene el apellido paterno, un claro ejemplo de la sociedad patriarcal en la que vivimos.

<sup>32</sup> La traducción al español es nuestra.

Conocemos que desde su nacimiento, niños y niñas son inscritos en una u otra categoría sexual. Esta asignación universal, que en principio es irreversible, determinará a través de la selección masculino/femenino una socialización diferenciada que, basada en una pretendida realidad biológica, aparecerá además como natural e inevitable.

Eribon (2005), en su análisis crítico del discurso y la práctica del psicoanálisis, señala como ciertos tipos de literatura ligera y de divulgación psicoanalítica, vienen a reforzar la idea según la cual, la diferencia entre sexos no solamente constituye un hecho, sino que además, vehiculiza valores tales como la diversidad y la complementariedad, reservando a unas el papel reproductivo y a otros el productivo y todo ello dentro de un orden conyugal.

El análisis de las tres dimensiones, de las tres acepciones entremezcladas: sexo, género y sexualidad, es objeto de estudio en multitud de ámbitos desde el ámbito académico hasta el ámbito del feminismo militante. Es ingente la producción literaria relativa a este sujeto que debemos a las teóricas feministas<sup>33</sup>.

Así, no resulta extraño comprobar cómo gran parte de las teorías feministas trabajan a la vez en las distinciones históricas que se han establecido entre el sexo, el género, la sexualidad y su relación:

*¿Se trata de relación causal que el sexo biológico determine el género y la sexualidad? ¿O bien se trata de una relación de simultaneidad no vinculante entre el sexo biológico de una parte y la identidad sexual (de género y la sexualidad) de otra? ¿O es quizás una relación de normalización? ¿Es la heterosexualidad reproductora, como organización social dominante de la sexualidad, la norma legal, social y además médica, a la luz de la cual deben ser examinadas en incluso cuestionadas las categorías de sexo y género? (Dorlin, 2011: 9).*

Y es que debemos señalar que las teorías feministas no se centran únicamente en la delimitación teórica y práctica de lo que debería ser “natural”, “cultural” y “social”, entre el sexo el género y las sexualidades; sino que se centran principalmente en el estudio de los principios, postulados e implicaciones ideológicas, políticas y epistemológicas que pueden

---

<sup>33</sup> Debemos poner de manifiesto las magníficas aportaciones hechas por algunas de las autoras y algunas de sus obras de mayor calado en este ámbito de investigación que a continuación enumeramos: JUDITH BUTLER (*Deshacer el género*. Paidós Ibérica, Barcelona, 2006. *El género en disputa*. Paidós Ibérica, Barcelona, 2007. *Cuerpos que importan*. Paidós Entornos, Buenos Aires, 2002). TERESA DE LAURETIS (*Teoría queer y culturas populares de Foucault a Cronenberg*. La dispute. Legende du monde. Paris 2007). JUDITH HALBERSTAM (*Masculinidad femenina*, Egales. Barcelona. 2008) y BEATRIZ PRECIADOS (*Texto yonkie*, Espasa Calpe. Madrid. 2008).

entrañar esta delimitación y las excluyentes asignaciones genéricas (masculinas/femeninas) que de ellas se desprenden.

En este sentido y profundizando en las posibles implicaciones que pueden derivarse de esta asignación a un rol u otro, desde un punto de vista jurídico, Borrillo (2011: 264) analiza cómo dependiendo de la interpretación de la realidad social que se haga, ésta tendrá traducción jurídica concreta.

*En el orden binario de los sexos, los individuos son necesariamente distribuidos en dos grupos: machos y hembras. Los comportamientos esperados por cada “nomenclatura sexual” determinan las relaciones sociales del sexo, es decir la referencia, el prototipo de la masculinidad y de la feminidad, construido por cada sociedad y a partir de la cual se miden el conjunto de los comportamientos humanos.*

A través de la lectura de su análisis, llegamos a la conclusión de que el binarismo intenta representar las realidades no-binarias mediante formas binarias o duales, sin distinguir tampoco entre unas y otras. Estas formas (1,0 y A, B) están caracterizadas sin embargo, por ser excluyentes de otros elementos, por lo que el binarismo no consigue dar cuenta de otras realidades que se engloban en un limbo jurídico.

*El sistema sexual no es binario, en primer lugar, porque Macho no es no-Hembra, ni viceversa. Ontogénicamente, se puede decir que Macho es Hembra + Andrógenos (simplificando). Como el flujo individual de andrógenos en hembras y machos es diferencial, se puede hablar legítimamente de diversos grados de masculinización en cada individuo, hembra o macho.*

*Ni siquiera Macho y Hembra son duales, es decir, dos aspectos de una sola realidad, lo mismo que el polo positivo y el negativo (llamados así porque se ha querido llamarlos así, no porque cada uno suponga ausencia del otro) son partes inseparables y siempre presentes a la vez en el campo electromagnético.*

*Biológicamente, Macho y Hembra son dos funciones relacionadas con la aportación de ADN para formar nuevos seres, que además incluyen muchas variaciones de unas especies a otras, como la inversión del sexo en algunas de ellas y en determinadas ocasiones (Pérez, 2009).<sup>34</sup>*

---

<sup>34</sup> Web <http://conjuntosdifusos.blogspot.com/2009/09/estatuto-epistemologico-del-binarismo-y.html> (Consultado por última ocasión en febrero 2012).



Este binarismo ha afectado hasta ahora a los conceptos de intersexualidad (viéndola como inter, no como extra), transexualidad (o paso de A a B, sin pensar en AB ni en C ni en D) e incluso al feminismo (los objetivos de liberación de la opresión de género y en particular, de las imposiciones de género, no requieren una polarización dualista varón/mujer; también hay opresiones e imposiciones de género varón heterosexual/varón homosexual).

Tomando como ejemplo la transexualidad,<sup>35</sup> vemos como ésta pone en evidencia la complejidad del sexo y de sus diversos componentes: sexo genotípico, sexo fenotípico, sexo endocrino, sexo psicológico, sexo cultural y sexo social.

Durante muchísimo tiempo la justicia española y francesa (territorios administrativos objeto de nuestra investigación) han hecho oídos sordos a las peticiones del colectivo TRANS y aunque la operación de cambio de sexo, reasignación de sexo, se ha tolerado, la modificación del estado civil ha sido rechazada históricamente sobre la base del principio de orden público.

En España la cuestión ha cambiado sustancialmente desde 2007 permitiendo a las personas TRANS cambiar de nombre y sexo en el Registro Civil sin someterse a cirugía. El objeto de esta ley es facilitar el cambio de la inscripción relativa al sexo de la persona en el Registro Civil armonizándola con su género y con el nombre propio que elija<sup>36</sup>. Queda pendiente la despatologización del proceso, pero esto excede de los objetivos de la presente investigación.

El rechazo a poner en concordancia el sexo recogido en el documento nacional de identidad, con el nuevo sexo, ha sido considerado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como contrario al respeto del derecho a la vida privada<sup>37</sup>.

---

<sup>35</sup> Conocida en la comunidad científica como «síndrome de disforia de género» puede definirse como el sentimiento, convencimiento, pensamiento de pertenencia al sexo opuesto al que se asignó en el nacimiento.

<sup>36</sup> España. Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas *Boletín Oficial del Estado*, núm. 65 de 16 de marzo 2007, concretamente su art. 6 se refiere a inscripción en el Registro y a la concreta modificación del art. 93.2 de la Ley del Registro Civil, de 8 de junio de 1957.

Debe destacarse la pluralidad de terminología utilizada en la citada Ley 3/2007, que intentar explicar la transexualidad como una patología, así en ella se emplean términos como IDENTIDAD DE GÉNERO en la exposición de motivos, en el art. 4 DISFORIA DE GÉNERO y GÉNERO FISIOLÓGICO.

Aunque en Francia la transexualidad ya no sea considerada como una perturbación psiquiátrica, esto no evita que sólo puede solicitar un cambio de estado civil la persona que haya sufrido una operación de reasignación de sexo o bien que al menos haya estado sometida a tratamientos médicos irreversibles. La circular de 14 de mayo de 2010 hace que no sea necesario sufrir una operación de reasignación de sexo para poder solicitar el cambio de sexo en el Registro Civil, pero el tratamiento médico irreversible es *condition sine qua non*.

<sup>37</sup> Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 13343/87, de 25 marzo de 1992. B. contra Francia. En esta sentencia el TEDH ha encontrado que las obligaciones bajo el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales son tanto negativas como positivas y ha decretado el deber de los Estados de proteger

Vemos como la transexualidad nos sirve de ejemplo para comprobar una vez más, cómo la distinción entre macho/hembra está fundada en el postulado de la dualidad biológica de los sexos (sistema binario) y de su “inevitable” complementariedad; pero además, este sistema binario, tan excluyente, va más allá, pues como señalábamos anteriormente, las imposiciones dualistas han llevado también a una polarización dualista del género: varón/mujer, excluyendo de este modo, de nuevo, a otros conceptos no basados en un binarismo sexual, y provocando de nuevo lagunas jurídicas difícilmente resolubles, pues la realidad social va por delante de la realidad jurídica y de momento el corpus legislativo no ha encontrado la o las figuras jurídicas que den cabida a estas realidades sociales.

Como posible solución a esta disfuncionalidad jurídica, encontramos la siguiente propuesta enunciada por Borrillo (2011: 274):

*Fundamentada en una idea culturalista, la tradición feminista no esencialista que va desde Simone de Beauvoir a Judith Butler, propone una crítica radical del sistema sexo-género. La multiplicidad de géneros propuesta por J. Butler, a través de la noción performativa, podría traducirse jurídicamente por el silencio de la “privacy”: cada individuo adopta el género que desee. Así en revancha, un sujeto de derecho sin género (más que plurigenérico) se convertiría en el principio rector de la nueva gramática sexual. Bastaría para ello con finalizar con la práctica de la inscripción del sexo de los individuos en el certificado de nacimiento. Esto permitiría solucionar a la vez el problema de los intersexuales y transexuales y terminar de una vez con los problemas de matrimonio y adopción por parte de las parejas del mismo sexo (...). Un orden jurídico democrático no puede continuar funcionando basándose en la división binaria de los géneros y en el imperativo heterosexual.*

Tenemos que desterrar la idea de que el derecho únicamente evidencia la realidad, lo natural. Lo que en realidad evidencia el derecho es la existencia de un sistema patriarcal y heterosexista (socialmente aceptado) que divide a los sujetos de derecho en “mujeres y hombres” institucionalizando las diferencias entre unas y otros.

*Necesitamos el poder de las teorías críticas sobre el modo en el que significado y cuerpo son fabricados, no para negarlos, sino para poder vivir en significados y cuerpos que tengan una posibilidad en el futuro (Haraway, 2007: 113)<sup>38</sup>.*

---

a las personas transexuales en varios aspectos de su vida en sociedad, tales como el reconocimiento legal del cambio de sexo y la correspondiente modificación del registro civil de nacimiento.

<sup>38</sup> La traducción es nuestra.

## 1.2 La dimensión genérica: “mujeres y hombres”, en el derecho

Dicho lo anterior, debemos señalar que este trabajo no tiene como objetivo el análisis de las relaciones entre sexo, género y sexualidad, ni pretende estudiar de qué manera el derecho puede inducir a que las relaciones se establezcan o no, de determinada manera.

Así pues; y a la espera de que se produzcan cambios normativos que permitan una apertura en las categorías jurídicas; este trabajo conceptualizará al sujeto de derecho como la persona física o moral titular de derechos y obligaciones, teniendo en cuenta que en la actualidad, la persona física es en nuestro Estado de derecho positivo, o mujer u hombre. Esta división binaria jurídica se ha convertido en un criterio válido y pertinente para conferir derechos y obligaciones y regular determinadas situaciones.

No obstante y como dejaremos constancia durante toda nuestra investigación, el hecho de que haya sido el derecho (patriarcal y heteronormativo) el que haya establecido como sujetos de derecho a mujeres y hombres, no ha significado en ningún caso que las consecuencias jurídicas sean las mismas para las unas que para los otros.

### 1.2.1 Breve historia del origen de la (des) igualdad política de las mujeres

No es ningún secreto que en el reparto de prerrogativas (que no de obligaciones) entre mujeres y hombres, estas se llevaron la peor parte. Hablar de igualdad de mujeres y hombres es un fenómeno político reciente, como señala Borrillo (2009: 89) “*el cambio de status de las mujeres ha constituido uno de los eventos más importantes del siglo XX, poniendo fin a la hegemonía de la sociedad patriarcal.*”. Si Bobbio calificó el periodo de la Ilustración<sup>39</sup> como “el tiempo de los derechos”, las mujeres quedaron excluidas de este proyecto ilustrado. Aunque las mujeres participaron activamente en la Revolución francesa de 1789, su *status* no mejoró sustancialmente. Las reivindicaciones de algunas mujeres de la talla de Theroigne de Mericourt o de Olympe de Gouges (autora de la “*Declaración de los derechos de la mujer y de la Ciudadana*”) no fueron tenidas en cuenta en dichos Acuerdos. De hecho, Rousseau,

---

<sup>39</sup> El origen teórico de la teoría feminista lo encontramos en la Ilustración; momento histórico en el que se vindica la individualidad, la autonomía de los sujetos y los derechos. La adscripción genealógica del feminismo al siglo de las luces no quiere decir que hasta ese momento no se plantearan discursos en favor de la igualdad; recordemos que ya en la antigua Roma las mujeres estaban desprovistas de ciudadanía, y eran excluidas de la vida política, y en el ámbito de lo privado, como señala BORRILLO, su subordinación se articulaba en torno a la institución del matrimonio.

A lo largo de toda la Edad Media la condición jurídica de las mujeres fue extremadamente precaria, se había instalado en Occidente una nueva misógina que mantuvo esta precariedad hasta bien entrado el siglo XX. En este sentido es muy interesante la obra AMORÓS, C; y DE MIGUEL ÁLVAREZ, A, *Teoría feminista: de la Ilustración a la globalización*. Minerva Ediciones, Madrid, 2007, *passim*.

desarrollará un concepto de naturaleza que excluye a las mujeres como sujetos del pacto político y por tanto de la ciudadanía<sup>40</sup>.

*Rousseau a diferencia de Hobbes o de Locke, establece un estado de naturaleza con un cierto desarrollo histórico: en sus comienzos no hay agrupaciones humanas, sino aislamiento individual. En esta primera etapa Rousseau no constata ninguna diferencia entre la naturaleza masculina y la naturaleza femenina. Es en un segundo momento de ese estado de naturaleza, en el que los individuos empiezan a organizarse socialmente, cuando surge la familia y la diferenciación (Cobo, 1995: 113).*

Se legitimaba de esta manera una desigualdad “natural” entre hombres y mujeres en función de la división sexual del trabajo. Quedaba pues, la naturaleza de las mujeres, definida por sus funciones sexuales y reproductoras, convirtiéndolas en seres dependientes de los hombres. Así, lo expresaba el propio Rousseau (1775) en su discurso:

*Cada familia vino a ser una pequeña sociedad [...] Y fue entonces cuando se estableció la primera diferencia en la manera de vivir los sexos, que hasta ese momento solo habían tenido una [...] Las mujeres se hicieron más sedentarias y se acostumbraron a guardar la choza y los hijos mientras que el hombre iba en busca de subsistencia común.*

Según este texto, se establece como natural la familia patriarcal, en la que las mujeres quedan confinadas en el ámbito privado, mientras que se reserva para los hombres el ámbito público, sabiendo que ambos ámbitos tienen un carácter infranqueable.

Pateman (2010: 21-43) en su obra *El contrato sexual*, explica como esta desigualdad “natural” se convierte en desigualdad política; y es que según ella, el origen del espacio público se encuentra en el contrato social que establece un pacto entre iguales, de carácter democrático; mientras que el espacio privado presenta su origen en el contrato sexual de subordinación.

El contrato social es por tanto aquel que se realiza entre iguales- los varones-, mientras que las mujeres al no ostentar el atributo de la igualdad, son heterodesignadas como idénticas y como señala Amorós (1997: 100-159), quedarán excluidas como sujetos del contrato pero no así como objetos de transacción de este.

---

<sup>40</sup> Esta teoría fue especialmente contestada por MARY WOLLSTONECRAFT en 1792 en su “*Vindicación de los Derechos de la Mujer*”.

### 1.2.2 Los movimientos feministas y post feministas, en el siglo XXI ante la desigualdad política de las mujeres

Veíamos en el apartado anterior como durante la Ilustración los anhelos por alcanzar la igualdad de derechos para las ciudadanas recibieron pronto carpetazo con la naturalización de los sexos, que según “insignes ilustrados”, impedía pensar en un sujeto mujer con plena libertad y autonomía como el sujeto hombre.

*La idea de igualdad estaba disponible con su enorme potencia. El feminismo se la apropió. Entonces sabemos que a la vindicación de igualdad se respondió con la naturalización del sexo. Que las mujeres fueran sexo dominado era designio de la naturaleza, orden inalterable, condición prepolítica, para cumplir la cual también era útil que se le impidiera el acceso a la educación y se les prohibiera el ejercicio de toda profesión. Así se comportaron los primeros democratismos, así lo entendieron los fundadores de la filosofía política moderna. Pero la idea de igualdad es pertinaz, incluso cabezota. Ahí seguía disponible y quienes la usaban cada vez tenían mayores dificultades para ponerle fronteras (Valcárcel, 2000: 116).*

Deconstruir esta naturalización y esencialismo ha supuesto prácticamente el trabajo de casi dos siglos de feminismo. La revisión feminista del corpus filosófico que se viene realizando de manera intensa principalmente desde los años 70 se ha centrado mayoritariamente en tres tipos de tareas:

- Revisión de la producción filosófica de los hombres a lo largo de la historia de la filosofía, con los hallazgos consecuentes de posturas contradictorias.
- Estudio de la historia con el interés de buscar los textos y las experiencias de las mujeres, normalmente invisibilizadas y ocultadas por la historia oficial.
- Construcción y reconstrucción de discursos filosóficos feministas que forman principalmente lo que se llama actualmente “teoría feminista”, compuesta por una amplísima variedad de discursos y filosofías. A su vez, en este área podemos encontrar, que junto a las investigaciones sobre la sexualidad iniciadas por Foucault, aparecen por lo menos dos grandes tipos de contribuciones sobre la cuestión del sexo y la filosofía:

- Trabajos relativos a las mujeres, como los llevados a cabo por Luce Irigaray, Michele Le Doeuff o Sara Kofman por citar a algunas.
- Trabajos relativos a las diferencias entre los sexos, destacadas son las aportaciones en este campo de Genieve Fraisse o Françoise Collin.

Así, estos tipos de trabajos en muchos casos se han centrado bien, en el lugar que ocupan las mujeres, o bien se han tratado de trabajos que se interesaban por la filosofía de las mujeres; en un sentido más amplio, por la filosofía relativa a “la igualdad de sexos” desde una perspectiva histórica de la filosofía.

En este sentido Reverter Bañón (2003: 33-50) señala que la teoría feminista supone la revisión más contundente de lo que se llama el “canon filosófico”, el cual pese a las enormes diferencias en los discursos mantiene un cierto punto de homogeneidad cifrado en el concepto de sujeto que está a la base de las filosofías oficiales, es decir el sujeto varón.

El proyecto feminista como tal, es un proyecto que forma parte de la historia de la modernidad, (insistimos que el nacimiento del feminismo como proyecto en ningún caso sitúa el origen del feminismo en la modernidad).

Así, teniendo en cuenta que el objeto de esta investigación no es hacer un repaso a la historia del movimiento feminista, en este apartado señalaremos únicamente cuáles son las principales características de los movimientos feministas en el momento actual, justo ahora cuando el espectro de una crisis económica y de valores recorre el mundo entero.

Nos interesa conocer cómo el feminismo ha diversificado su agenda y sus perspectivas en esta época en que gran parte de los pilares fundamentales de la modernidad están cuestionados; al mismo tiempo que también nos interesa conocer cuál es la postura de los movimientos feministas con respecto al planteamiento inicial del capítulo.

Así pues, nos interesa profundizar en el pensamiento feminista frente a las categorías jurídicas binarias mujer/hombre, que como señalábamos anteriormente son tan excluyentes.

Si hacemos un rápido repaso de la historia encontraremos que si bien en la década de los 80 florecían los discursos del feminismo de la diferencia, en la década de los 90 estos movimientos se van a cuestionar directamente el concepto de género y el sistema sexo/género organizado sobre él.

*Un sistema de género/sexo es un conjunto de dispositivos mediante los cuales una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana y con los cuales se satisfacen estas necesidades sexuales transformadas (Gayle Rubin, 1975: 159).<sup>41</sup>*

La década de los 90 vendrá marcado por la aparición del libro de carácter constructivista “El género en disputa” de Judith Butler quien afirma en él, que también el sexo es construido. Se daba así el pistoletazo de salida para que en la filosofía constructivista de esa década, se incorporara cada vez de manera más clara y contundente, la identidad como “artefacto” básicamente construido en todas sus dimensiones y coordenadas. Se borran las fronteras que el sistema sexo/género mantiene en cierta manera entre el sexo biológico y el género social.

Presenciamos así la tan necesaria apertura a la revisión al sistema sexo/género al entender que el género, como producto de la cultura no lleva necesariamente a la liberación; es más, empieza a razonarse que el género puede ser en realidad uno de los mecanismos por los que seguir regulando el comportamiento de hombres y mujeres. En definitiva las pautas “aceptables” para mujeres y para hombres se siguen produciendo “social y culturalmente” en base a un sexo, que se dice biológico, pero que se moldea realmente en conjunción con el género.

Las posturas post-feministas actuales instan a la “desestabilización” del tándem sexo/género y el binarismo biológico y social alineado con él. Tanto los sexos como los géneros no sólo son múltiples, sino que además son variables; sólo un entramado patriarcal que crea un género sobre una supuesta naturaleza biológica sexual dicotómica está convirtiendo en esencial y “natural” la distinción entre dos sexos.

---

<sup>41</sup> La versión digital en francés puede encontrarse en web: <http://cedref.revues.org/171> (Consultado en última ocasión febrero 2012).

En esta obra se puede apreciar el feminismo foucaultiano de RUBIN como concepciones antiesencialistas feministas de la diferencia. Así En 1975 RUBIN, incidió en que la cuestión constructivista que el género abre tiene un alcance que llega a la misma sexualidad. Así, según sus propuestas, que reinterpretan las tesis antropológicas de LÉVI-STRAUSS sobre la exogamia de las mujeres, no sólo el género es construido, sino también la sexualidad, y precisamente a través del género. De igual manera RUBIN, en el capítulo “Reflexionando sobre el sexo: nota para una teoría radical de la sexualidad”, lanza una propuesta que se adelanta a las corrientes posfeministas y toma ejemplos legales para ilustrar las jerarquías sexuales en el ámbito jurídico más allá del binarismo. Este artículo se encuentra en VANCE, C, S, *Placer y Peligro*. Revolución, Madrid, 1989.

### 1.3 La necesidad actual de la noción “género” como medida para evitar situaciones jurídicas discriminatorias. Las acciones positivas

La designación expresa del género en el ámbito jurídico en el que desarrollamos nuestra investigación, (y pese a que como ya venimos expresando, consideramos que el problema se centra en el concepto reduccionista, binario, que se tiene de la categoría género, y que lo traduce a una categoría excluyente) se convierte en una herramienta absolutamente necesaria para poner de manifiesto situaciones en las que las mujeres son discriminadas.

Y es que la actual preocupación por la reintroducción del concepto género en el ámbito jurídico se hace patente cuando se constata que la realidad jurídica no es suficiente para asegurar una igualdad real. Aunque como señala Lochak (2011: 55):

*En el momento que se decide que hay que adoptar medidas de carácter preferencial a favor de las mujeres, medidas que tengan como objetivo la reducción de las desigualdades de las que ellas son víctimas, la ley no puede ser ciega al género<sup>42</sup>.*

Por esta misma razón, encontramos que incluso la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, al intentar precisar los conceptos de igualdad de oportunidades e igualdad de trato, encuentra serias dificultades para articular de manera satisfactoria estos dos principios potencialmente contradictorios: la igualdad de trato o igualdad jurídica supone que la ley debe ser ciega al género, mientras que la igualdad de oportunidades desemboca ineludiblemente y a la vez, en la toma en consideración del género y en la ruptura con la igualdad en derecho<sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup> La traducción es nuestra.

<sup>43</sup> Son ejemplo de ello las Sentencias del Tribunal de Justicia Europeo: Defrenne II de 8 de abril de 1976 (asunto 43/75), donde el Tribunal reconoció el efecto directo del principio de la igualdad de retribución para hombres y mujeres y declaró que el principio es aplicable no solo a la actuación de las autoridades públicas, sino también a todos los convenios de carácter colectivo para regular el trabajo por cuenta ajena.

Caso Bilka-Kaufhaus GmbH, de 13 de mayo de 1986 (asunto 170/84): En este asunto el Tribunal consideró que una medida que excluya a los trabajadores a tiempo parcial de un régimen de pensiones profesional constituye una «discriminación indirecta» y es, por tanto, contraria al artículo 119 del Tratado CEE si afecta a un número mucho más elevado de mujeres que de hombres, a menos que pueda demostrarse que la exclusión se basa en factores objetivamente justificados y ajenos a toda discriminación por razón de sexo.

En el caso Barber contra Guardian Royal Exchange Assurance Group, de 17 de mayo de 1990 (asunto 262/88): el Tribunal decidió que todas las formas de pensiones profesionales constituyen una retribución a los efectos del artículo 119 del Tratado CEE, por lo que les es aplicable el principio de la igualdad de trato. El Tribunal declaró que los trabajadores de sexo masculino deben disfrutar sus derechos en materia de pensiones de jubilación o de supervivencia a la misma edad que sus colegas de sexo femenino.



Con el fin de encontrar una respuesta satisfactoria a este dilema, el Tribunal de Justicia Europeo argumenta que las disposiciones que autorizan medidas preferentes a favor de las mujeres deben ser interpretadas estrictamente como derogadoras del principio de igualdad de trato.

Para que sean consideradas como lícitas, las medidas de acción positiva no deben garantizar una prioridad absoluta e incondicional a las mujeres en el momento de su elaboración y puesta en funcionamiento, y el objetivo de igualdad de oportunidades no debe convertirse en un objetivo de igualdad sustancial o de igualdad de resultados, por tanto la fijación de una cuota sería la última opción<sup>44</sup>.

Ha de señalarse que el derecho comunitario no impone su adopción, pero permite que los Estados miembros las adopten para prevenir o compensar las desventajas que afecten a personas en este caso desfavorecidas por motivo de su sexo.

No obstante el Tribunal de Justicia Europeo solo acepta que la norma no sea ciega al género únicamente en los casos en los que simultáneamente ella tampoco es ciega a otras categorizaciones.

---

<sup>44</sup> En este sentido la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo ha considerado también que era contraria a las exigencias del derecho comunitario, una *disposición de la Ley de Alemana de Bremen; que proporcionaba a las mujeres con idéntica cualificación, una preferencia automática* en el acceso a los empleos públicos donde ellas estaban subrepresentadas. Vid. Caso Kalanke TJCE 17 de octubre 1995: “Pues bien, una normativa nacional que garantiza la preferencia absoluta e incondicional de las mujeres en un nombramiento o promoción va más allá de una medida de fomento de la igualdad de trato y sobrepasa los límites de la excepción establecida en el apartado 4 del artículo 2 de la Directiva (LCEur 1976/44).” [TJCE 1995/172, apdo. 22]. Esta sentencia desde nuestro punto de vista estuvo poco argumentada en cuanto a la infracción hacia el principio de igualdad y no discriminación.

A partir del caso Kalanke la jurisprudencia europea en materia de igualdad entre hombres y mujeres permite que se rompa la igualdad de trato para alcanzar la igualdad real. Comienzan a otorgarse ventajas tasadas con la intención de conseguir una representación más equilibrada entre hombres y mujeres en la promoción profesional: “a igualdad de curriculum profesional se preferirá al sexo menos representado”.

También en este sentido es bastante ilustrativo el caso Hellmut Marschall contra Westfalen: Sentencia de 11 noviembre 1997 TJCE/1997/236 competir en el mercado de trabajo y desarrollar una carrera profesional en pie de igualdad con los hombres [TJCE/1997/236: “27.- Así, dicha disposición autoriza medidas nacionales en el ámbito del acceso al empleo, incluida la promoción que, favoreciendo especialmente a las mujeres, estén destinadas a mejorar su capacidad de Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Pleno)”].

En el caso Marschall, sucederá lo mismo respecto de la Administración: “en aquellos sectores de la actividad de la Administración que, en el nivel del correspondiente puesto de promoción de una carrera, tengan un menor número de mujeres que de hombres, se concederá preferencia en la promoción a las mujeres, en caso de igual capacitación (aptitud, competencia y prestaciones profesionales) de candidatos de uno y otro sexo, salvo que concurran en la persona de un candidato masculino motivos particulares que inclinen la balanza a su favor”. Se puede afirmar que ambas sentencias transformaron el sistema de cuotas, “matizando” entre el rígido y el flexible.

Y más recientemente el apartado 34 de la Sentencia de 30 de septiembre de 2010 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda), sobre acceso al empleo y a las condiciones de trabajo de madres y de padres. (Sentencia del TJUE 30-09-2010, Asunto C-104/09 ( TJCE 2010, 280) , Roca Álvarez/Sesa Star ETT, S.A.) se ha establecido que: “Sin embargo, la normativa española objeto de litigio no constituye una desigualdad de trato admisible con arreglo al artículo 2, apartado 3, de la Directiva 76/207, ya que, si se analiza en detalle, no se trata de una disposición de protección de la mujer en lo que se refiere al embarazo y a la maternidad en el sentido de dicha Directiva”.

*En cualquier caso, detrás del hecho de que sea tomada en cuenta la diferencia entre hombre y mujeres se perfila el riesgo de una regresión hacia lo “natural” y lo “biológico”. Es por ello que la promoción de la igualdad real que supone una ruptura con la indiferenciación de la norma, hace surgir inevitablemente el “dilema de la diferencia” (Lochak, 2011: 56).*

#### 1.4 La igualdad de los géneros en el derecho comunitario

Numerosas son las normas tanto europeas como nacionales que velan y garantizan la igualdad de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida. En este apartado haremos un breve recorrido por las normas que aseguran el derecho a la igualdad de las mujeres en el ámbito europeo, para posteriormente descender al ámbito estatal francés, como paradigma de Estado miembro de la Unión Europea, en cuyo seno se fraguó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano; así, cerraremos el ciclo en el siguiente capítulo donde analizaremos el Principio de Igualdad de mujeres y varones en el Orden Jurídico estatal español y autonómico andaluz.

La igualdad de los sexos aparece como uno de los principios fundamentales del derecho comunitario. Los instrumentos jurídicos de la Unión Europea en materia de igualdad entre unas y otros pueden presentar una doble naturaleza, por un lado aseguran, o por lo menos lo intentan, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros y por otro lado intentan eliminar cualquier forma de discriminación que se base en el sexo.

Así esta doble naturaleza la podemos observar en el artículo núm. 2 del Tratado de la Unión Europea que establece que:

*La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres<sup>45</sup>.*

---

<sup>45</sup> TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA. Diario Oficial de la Unión Europea, núm. C 83/11 de 30 de marzo 2010. Web: <http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:083:SOM:ES:HTML> (Consultada en última ocasión en febrero 2012). En la publicación propuesta se recogen las versiones consolidadas del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como sus Protocolos y Anexos, resultado de las modificaciones introducidas por el Tratado de Lisboa firmado el 13 de diciembre de 2007 en Lisboa y que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009. Contiene asimismo las Declaraciones anejas al Acta Final de la Conferencia intergubernamental que ha adoptado el Tratado de Lisboa.

La Ley Orgánica 1/2008, de 30 de julio, autorizó la ratificación por España del Tratado de Lisboa, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en la capital portuguesa el 13 de diciembre de 2007. En su art. 23 incluye la igualdad entre mujeres y hombres<sup>46</sup>.

Como uno de los mejores ejemplos para observar la naturaleza garante de la igualdad el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en su artículo 14, establece la prohibición expresa de discriminación:

*El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación*<sup>47</sup>.

Y como ejemplo de lucha contra cualquier forma de discriminación, nos encontramos con la sentencia de 22 de febrero de 1994 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que establecía que:

*Únicamente consideraciones de gran calado pueden justificar una diferencia de trato basándose exclusivamente en el sexo.*<sup>48</sup>

También a través del artículo 141 del Tratado de Roma se sentaron las bases para la elaboración de todo un corpus legislativo que legitimara las medidas encaminadas al alcance de una igualdad de oportunidades.

---

<sup>46</sup> Ley Orgánica 1/2008, de 30 de julio, autorizó la ratificación por España del Tratado de Lisboa, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. BOE núm. 184, de 31 julio 2008.

<sup>47</sup> CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES, 1950. (fue ratificado por España, con fecha 26 de septiembre de 1979, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 10 de octubre de 1979). Web: [http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1101E77A-C8E1-493F-809D-800CBD20E595/0/ESP\\_CONV.pdf](http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1101E77A-C8E1-493F-809D-800CBD20E595/0/ESP_CONV.pdf) (Consultado en última ocasión febrero 2012).

<sup>48</sup> Sentencia del TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS *Burghartz contra Suiza*, de 22 de febrero de 1994, serie a nº 280-B. Web: <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId=87268689&skin=hudoc-fr&action=request> (consultado en última ocasión febrero 2012).

### 1.4.1 Las Directivas comunitarias para la igualdad

Si existe realmente un instrumento efectivo y eficaz para aplicar las políticas comunitarias, y en el caso que nos atañe, llegar a la consecución de la igualdad de oportunidades de unas y otros, esa es sin duda la Directiva comunitaria. Se trata de una herramienta que se emplea principalmente en el marco de las operaciones de armonización de las legislaciones nacionales.

Debido a su trascendencia creemos que es necesario exponer, *grosso modo*, sus características y enumerar aquellas Directivas comunitarias que han contribuido y están contribuyendo al logro de una igualdad de oportunidades.

La Directiva se caracteriza por la flexibilidad de su utilización, ya que establece una obligación de resultado pero deja libertad a los Estados con respecto a los medios para alcanzarlos. Se trata pues de un acto legislativo en que intervienen dos actores: el primero de ellos es la Comunidad Europea, en concreto el Consejo, que definirá una serie de objetivos a conseguir para la ejecución de una política pública comunitaria, el segundo actor es el Estado miembro (los Estados) que será el encargado de realizar los objetivos en cuestión a través de la transposición de la citada Directiva en su derecho interno.

De esta manera, según lo establecido en el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, vemos como la Directiva es un acto jurídico obligatorio, los obligados directos son los Gobiernos que han de dictar una norma interna dirigida a alcanzar los objetivos que persiga la Directiva. Al igual que el Reglamento y la Decisión, la Directiva es vinculante para los Estados miembros destinatarios y lo es en todos sus elementos; en consecuencia, no puede aplicarse de forma incompleta, selectiva o parcial.

La Directiva posee un alcance general, no establece los medios para alcanzar los resultados sino que establece la obligación de resultado, pero dejando libres a los Estados para elegir los medios de alcanzar dichos resultados, pero se exige que el acto de transposición<sup>49</sup> tenga una eficacia normativa real, vinculante e imperativa, a fin de que las obligaciones impuestas por Directiva o los derechos que a través de ella se confieren no queden sin efecto. Si la normativa de un Estado determinado ya satisface la exigencia de la Directiva, ese Estado no precisa dictar una nueva disposición de cumplimiento.

---

<sup>49</sup>Acto adoptado por los Estados miembros, consistente en la aprobación de medidas nacionales destinadas a ajustarse a los resultados fijados por la Directiva, dichas medidas deberán ser comunicadas por las autoridades nacionales a la Comisión.

El plazo para adaptar el derecho interno a la Directiva varía considerablemente en cada caso, de hecho puede llegar a oscilar entre los seis meses y los dos años, según lo establecido por las diferentes instituciones y en función de la complejidad de la transposición de la misma; en cualquier caso, la Directiva entra en vigor una vez notificada a los Estados miembros o publicada en el Diario Oficial, aunque como acabamos de señalar, esto no implique un efecto directo e inmediato en las legislaciones nacionales.

Transcurrido el plazo previsto para la transposición la Comisión puede pedir al Tribunal de Justicia Europeo que condene a los Estados (el incumplimiento de la sentencia dictada con este motivo puede derivar en una nueva condena que puede concluir en la imposición de multas).

De igual manera el Tribunal de Justicia también concede a los particulares la posibilidad de obtener una indemnización derivada de la incorrecta transposición o de una transposición con retraso de una Directiva; el Tribunal de Justicia Europeo considera que la Directiva tiene un efecto directo (es decir, las personas particulares pueden alegarla ante el TJCE).

La Directiva posee un efecto directo vertical al expirar el plazo de transposición: esto significa que las personas particulares pueden alegar el texto contra los Estados ante los tribunales. En cambio, no tiene un efecto directo horizontal (las personas particulares no pueden alegar el texto contra otras particulares ante los tribunales).

La legislación principal en el ámbito de la igualdad las constituyen las siguientes Directivas:<sup>50</sup>

- Directiva 75/117/CEE relativa a la igualdad de retribución entre los trabajadores y las trabajadoras.
- Directiva 76/207/CEE relativa a la igualdad de trato en lo que se refiere al empleo, a la formación profesional y a las condiciones de trabajo (modificada en 2002).
  - Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y

---

<sup>50</sup> Nota: Para la selección de las Directivas que hemos señalado en el presente trabajo de investigación, nos hemos basado en la selección previa efectuada por BORRILLO en su libro “Le droit des sexualités” y por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, en su documento “La legislación en materia de igualdad de género en la unión europea” Web: <http://europa.eu> (Consultado en última ocasión febrero 2012).

mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo.

- Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social.
- Directiva 86/378/CEE relativa a la igualdad de trato en los regímenes profesionales de seguridad social (modificada en 1996).
- Directiva 86/613/CEE relativa a la igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma, así como sobre la protección de la maternidad.
- Directiva 92/85/CEE relativa a la promoción de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o esté en período de lactancia.
- Directiva 96/97/CE del Consejo de 20 de diciembre de 1996 por la que se modifica la Directiva 86/378/CEE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes profesionales de seguridad social.
- Directiva 96/34/CE relativa al acuerdo marco sobre permiso parental.<sup>51</sup>
- Directiva 97/80/CE relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo.<sup>52</sup>
- Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.
- Directiva 2004/113/CE relativa a la igualdad en cuanto al acceso a bienes y servicios y a su suministro.
- Directiva 2006/54/CE relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición).

---

<sup>51</sup> Existe una modificación : DIRECTIVA 97/75/CE DEL CONSEJO de 15 de diciembre de 1997 por la que se modifica y amplía al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte la Directiva 96/34/CE relativa al Acuerdo marco sobre el permiso parental celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES.

<sup>52</sup> Existe una modificación: Directiva 98/52/CE DEL CONSEJO de 13 de julio de 1998 relativa a la ampliación de la Directiva 97/80/CE relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo, al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

- Directiva 2010/18/UE del consejo de 8 de marzo de 2010 por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental, celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES, y se deroga la Directiva 96/34/CE.

El último paso a destacar que ha dado la Unión Europea en pos de esa igualdad tan deseada, a través de estas herramientas, ha sido la elaboración de la Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, y por la que se deroga la Directiva 86/613/CEE del Consejo<sup>53</sup>.

Esta Directiva establece nuevas disposiciones relativas a la lucha contra las discriminaciones, la creación de empresas, la protección social y la maternidad. El principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres se aplica así, al sector autónomo.

El respeto de este principio debe permitir, en especial, aumentar el número de mujeres que ejercen este tipo de actividad. Un principio que también debe aportar un mayor reconocimiento del trabajo realizado por los o las cónyuges que colaboran con las personas con profesión autónoma.

El plazo de transposición en los Estados miembros de la citada Directiva termina el próximo 5 de Agosto del presente año 2012.

Además de las citadas Directivas, la Comisión Europea en los últimos 20 años ha puesto en marcha otros dispositivos, instrumentos y herramientas con el fin de lograr una igualdad real y de oportunidades de mujeres y hombres.

Así como ejemplo, podemos observar como la Comisión Europea creó una hoja de ruta llamada: “*Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2010*”<sup>54</sup> que definía seis dominios prioritarios a trabajar entre los años 2006-2010 y que tenían en común la consecución de igualdad real y de oportunidades de unas y otros. Esta hoja de ruta se vio completada en 2008 con “*Comunicación de la Comisión al Parlamento*

---

<sup>53</sup> DIRECTIVA 2010/41/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 7 de julio de 2010 sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, y por la que se deroga la Directiva 86/613/CEE del Consejo. Web: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010L0041:es:NOT> (Consultada en última ocasión en febrero 2012).

<sup>54</sup> COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2010. Web: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0092:FIN:ES:PDF> (Consultada en última ocasión en febrero 2012).

*Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 2 de julio de 2008 – No discriminación e igualdad de oportunidades: un compromiso renovado”.*<sup>55</sup>

Esta comunicación proporcionaba un enfoque global con el que la Comisión renueva su compromiso de avanzar en materia de no discriminación e igualdad de oportunidades en la Unión Europea (UE). El documento tenía como objetivo reforzar el marco jurídico de las acciones antidiscriminación y los instrumentos políticos para promover la igualdad de oportunidades.

Otro de los instrumentos que se han puesto en marcha ha sido la creación “Instituto Europeo de la Igualdad de Género”<sup>56</sup>, cuyo objetivo general es el de contribuir a la promoción de la igualdad de género y reforzarla, y sus objetivos específicos incluyen la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas comunitarias y en las políticas nacionales resultantes, y la lucha contra la discriminación por motivos de sexo.

Por otro lado este Instituto tiene como función intentar dar respuesta y asesorar a la ciudadanía en todas aquellas cuestiones relacionadas con la igualdad de género en la UE, para ello presta asistencia técnica a las instituciones comunitarias, en particular a la Comisión, y a las autoridades de los Estados miembros, tal y como se recoge en el Reglamento Europeo para su creación<sup>57</sup>.

#### **1.4.2 La igualdad de las mujeres en el derecho francés**

Dado que nuestro trabajo tiene un apartado relativo a las similitudes en la elaboración de los presupuestos estatales de Francia y España, creemos que es necesario, tras haber analizado el contexto jurídico comunitario relativo a la igualdad real y de oportunidades de mujeres y hombres; hacer lo propio con el Estado francés, ya que todo el capítulo siguiente como señalábamos anteriormente versará sobre el Principio de Igualdad en el Estado español.

---

<sup>55</sup> COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES, DE 2 DE JULIO DE 2008 – NO DISCRIMINACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: UN COMPROMISO RENOVADO. Web: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0420:FIN:ES:PDF> (Consultada en última ocasión en febrero 2012).

<sup>56</sup> INSTITUTO EUROPEO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Web: [http://europa.eu/agencies/regulatory\\_agencies\\_bodies/policy\\_agencies/eige/index\\_es.htm](http://europa.eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/eige/index_es.htm) (Consultada en última ocasión en febrero 2012).

<sup>57</sup> REGLAMENTO (CE) No 1922/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de diciembre de 2006 por el que se crea un Instituto Europeo de la Igualdad de Género. Web: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:403:0009:0017:ES:PDF> (Consultada en última ocasión en febrero 2012).



Así, retrotrayéndonos hasta el siglo XVIII en Francia, constatamos como la Revolución Francesa no solo marcó la ruptura con el Antiguo Régimen, sino que a través de la elaboración de la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” Francia se convertía en la cuna de los derechos del hombre, que no de la mujer como veremos más seguidamente.

Aquí también las mujeres se quedaron atrás, y aunque participaron muy activamente en la Revolución Francesa, esto no supuso una mejora en su situación jurídica, de hecho, los derechos universales, como el derecho al voto, fueron reconocidos a los hombres y no a las mujeres.

Esta situación se mantendría así durante mucho tiempo, y pese a que en el terreno político la Revolución Francesa supondría una brecha intelectual propicia a la igualdad, en el plano jurídico, los avances para las mujeres fueron muy tardíos.

Así, la Constitución de 1848 que proclamaba “*que la soberanía reside en la universalidad de los ciudadanos franceses*” instaurando así el sufragio universal (masculino), proclamaba que “*son electores sin condición de censo todos los franceses mayores de 21 años que gocen de sus derechos civiles y políticos*” sin decir explícitamente que estos electores no podían ser electoras.

Esta discriminación se ve mucho más claramente en el ámbito del derecho privado, sin ir más lejos el Código Civil francés de 1804, código extremadamente conservador que institucionalizó la organización patriarcal basada en la superioridad masculina, señalaba en su artículo 1124 que “*las personas privadas de derechos jurídicos son los menores, las mujeres casadas, los criminales y los retrasados mentales*”, también es en este sentido podemos señalar el artículo 213 que establecía que: “*El marido debe proteger a su mujer y ella le debe obediencia a él*”. Así bien, como señala Lochak (2011: 56):

*El camino hacia la igualdad en el seno de la pareja se tradujo en una reformulación en sentido inverso, La supresión progresiva de prerrogativas y privilegios de los hombres ha seguido un camino paralelo a la supresión de referencias específicas al marido o a la mujer:*

- *Eliminación de la incapacidad jurídica de la mujer (1938)*
- *Eliminación del derecho del marido a elegir el lugar de residencia familiar. (1975)*

- *Desaparición de la noción “jefe de la comunidad” e igualdad de esposos en la administración de bienes comunes (1985)*<sup>58</sup>

Este fenómeno de evolución lenta y tardía hacia una base simétrica de igualdad de derechos se puede observar en la tabla siguiente que muestra la evolución del citado artículo 213 del Código Civil Francés:

Año de la reforma	1803	1938	1942	A día de hoy
Artículo 213	Le mari doit protection femme, la femme obéissance à son mari.	Le mari, chef de la famille, a le choix de la résidence du ménage ; la femme est obligée d'habiter avec son mari, celui-ci est tenu de la recevoir. Un droit de recours au tribunal, statuant en chambre du conseil, le mari dûment appelé et le ministère public entendu, est ouvert à la femme contre une fixation abusive de la résidence du ménage par le mari. La qualité de chef de famille Cesse d'exister au profit du mari : 1° dans les cas d'absence, d'interdiction, d'impossibilité pour le mari de manifester sa volonté, et de séparation de corps ; 2° lorsqu'il est condamné, même par contumace, à une <u>peine criminelle</u> , pendant la durée de sa peine.	Le mari est le chef de la famille. <sup>43</sup> Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. La femme remplace le mari dans sa fonction de chef s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause.	Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir.

CAPILLON, J. IUFM de Melun. H4 H19. Code civil. Devoirs entre époux. Novembre 2002

Este fenómeno de lenta evolución no es exclusivo del derecho civil, en el ámbito del derecho penal también ocurría lo mismo; así el adulterio<sup>59</sup> por ejemplo, se reprimía de una forma más severa en la mujer, la cual corría riesgo de entrar en prisión por adultera, frente a la posible multa que el hombre adultero podría recibir como castigo.

Como indica Borrillo, no es hasta la mitad del siglo XIX, con la irrupción de las ideas socialistas que la las mujeres comienzan a organizarse para reivindicar el derecho a la educación, a la igualdad salarial, al divorcio y sobre todo al derecho al voto; no se debe obviar la invisibilización del hecho de que durante las dos guerras mundiales, las mujeres participaron activamente en la vida económica<sup>60</sup> de las naciones europeas para paliar la ausencia de los hombres que habían partido al frente (Borrillo, 2009: 88-96).

<sup>58</sup> La traducción es nuestra.

<sup>59</sup> En Francia el adulterio estuvo penado hasta la entrada en vigor de la Ley 11 de julio 1975.

<sup>60</sup> Este fenómeno en España también se vivió durante la guerra civil española, la ausencia de hombres hizo que las mujeres se hicieran cargo de los campos, las fábricas, en definitiva de la vida económica, y aunque la dictadura de Francisco Franco provocó la vuelta de estas mujeres al ámbito invisible de lo privado, es de justicia señalar que durante los años más duros que ha conocido el Estado español fueron las mujeres las que sostuvieron la economía del país.

En Francia, hasta la entrada en vigor de la Ley de 18 de febrero de 1938, la mujer no era capaz jurídicamente, y se encontraban bajo la tutela jurídica de su marido y no será hasta el 21 de abril de 1944 que las mujeres obtengan el derecho a ser electas y el derecho al voto<sup>61</sup>.

La igualdad salarial de mujeres y hombres vino de la mano de la ley de 22 de diciembre de 1972. Tres años más tarde en 1975 las mujeres conseguían el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo<sup>62</sup> y el derecho al divorcio de mutuo acuerdo. Ese mismo año por fin se suprimía el derecho exclusivo del marido a elegir el lugar de residencia familiar.

La igualdad de las mujeres está asegurada hoy en día en Francia no solamente por el cuerpo jurídico sino también por el cuerpo administrativo. De esta manera desde 1978 existe un Ministerio encargado de la condición femenina y un observatorio de la paridad, creado en 1995 que vigila que no se produzcan desigualdades entre unas y otros; todo ello sin olvidar que el Código Penal francés en su artículo 225 prohíbe cualquier tipo de discriminación basada en el sexo.

*Durante más de cuarenta años, la Constitución de 1958 no dijo nada sobre la cuestión de la igualdad entre los sexos. La única referencia de valor constitucional figuraba en el párrafo 3 del Preámbulo de la IV República —«la ley garantiza a la mujer, en todos los ámbitos, derechos iguales a los de los hombres»— al cual el Preámbulo de 1958 se remite. Considerando que al sacrosanto principio de indivisibilidad de la República (artículo 1) correspondía la del pueblo, el Consejo constitucional rechazará en dos ocasiones la posibilidad de una cuota femenina en las distintas elecciones. Para sortear este obstáculo se aprobó la reforma del 8 de julio de 1999 que indicaba que «la ley favorece el igual acceso de mujeres y hombres a los mandatos electorales y a los cargos electivos». El 23 de julio de 2008, el constituyente decidió extender este objetivo «a las responsabilidades profesionales y sociales» y pasar la exigencia de paridad así definida del artículo 3 al párrafo 2 del artículo 1 de la Constitución (Pinon, 2010: 17-74)<sup>63</sup>.*

---

<sup>61</sup> Con respecto a “ la historia del derecho al voto de las mujeres en Francia” recomendamos la lectura de las siguientes webs: <http://www.france.fr/es/conocer/instituciones-y-valores/vida-democratica/historia-del-derecho-al-voto-de-la-mujer>; [http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/citoyennete\\_politique\\_chronologie.asp](http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/citoyennete_politique_chronologie.asp); <http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/participation/voter/droit-vote/etapes-conquete-du-droit-vote.html> (Consultada en última ocasión en febrero 2012).

<sup>62</sup> La adopción por el Parlamento del proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria de embarazo (IVE), que despenaliza el aborto y que entró en vigor el 17 de enero de 1975, ha sido también conocida como la « Ley Veil/ Loi Veil » ya que su adopción en el parlamento se debió en gran medida a la jurista francesa SIMONE VEIL. La defensa de la adopción de esta ley valió ataques y amenazas por parte de la extremo-derecha y de la derecha tradicional.

<sup>63</sup> Para el análisis detallado del articulado de la Constitución Francesa, véase: CARCASSONE, G, *La Constitution*, Editions du Seuil. Paris 2011, *paasim*.

Este elenco jurídico francés que asegura la igualdad, creemos que debe completarse con la mención a algunas disposiciones jurídicas francesas, las más relevantes, referentes al dispositivo jurídico antidiscriminatorio<sup>64</sup> galo.

Sin duda en el ámbito del derecho interno el texto legal más relevante frente a la discriminación es la “*Ley 1006-2001 de 16 de noviembre sobre la lucha contra las discriminaciones*”<sup>65</sup>, que procede a modificar el Código laboral francés y el Código penal francés, completando la lista de motivos de discriminación y el alcance de las discriminaciones prohibidas.

Otras leyes que complementan el dispositivo antidiscriminatorio y que no podemos dejar de mencionar son la “*Ley 73-2002 de 17 de enero de 2002 de modernización social*”<sup>66</sup>, que incluye disposiciones específicas en materia de discriminación en relación al alojamiento y en relación al acoso moral. En esa misma línea la “*Ley 2004-204 relativa a la adaptación de la justicia con respecto a la evolución criminal*”<sup>67</sup> incluye un capítulo específicamente consagrado a la lucha contra las discriminaciones y reafirma el carácter delictivo de las infracciones de carácter sexual.

Una importancia particular merecen las leyes siguientes, la “*Ley de 30 de diciembre de 2004 que crea la Alta Autoridad de lucha contra las discriminaciones (HALDE- «Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Égalité»)*”<sup>68</sup> y la “*Ley 396-2006 de 31 de marzo de 2006 por la igualdad de oportunidades*”<sup>69</sup> que, sin revolucionar el dispositivo

---

<sup>64</sup> Siendo el objeto este capítulo la igualdad de los géneros, solo señalaremos las disposiciones jurídicas antidiscriminatorias relativas a la discriminación por sexo.

<sup>65</sup> «Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations». Web : [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2A25666D048164D4157A378195FF9D00.tpdjo08v\\_1?cidTexte=LEGITEXT000005631676&dateTexte=20120227](http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2A25666D048164D4157A378195FF9D00.tpdjo08v_1?cidTexte=LEGITEXT000005631676&dateTexte=20120227) (Consultada en última ocasión en marzo 2012).

<sup>66</sup> «Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale». Web : [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2A25666D048164D4157A378195FF9D00.tpdjo08v\\_1?cidTexte=LEGITEXT000005632119&dateTexte=20120227](http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2A25666D048164D4157A378195FF9D00.tpdjo08v_1?cidTexte=LEGITEXT000005632119&dateTexte=20120227) (Consultada en última ocasión en marzo 2012).

<sup>67</sup> «Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité». Web : <http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000000249995> (Consultada en última ocasión en marzo 2012).

<sup>68</sup> «Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité». Web : <http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000000423967> (Consultada en última ocasión en marzo 2012).

La ALTA AUTORIDAD DE LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIONES Y POR LA IGUALDAD, HALDE, se configura como una autoridad administrativa independiente competente para conocer todo tipo de discriminaciones directas e indirectas y la citada Ley 396-2006 que refuerza sus poderes, además de introducir el «testing» como medio de prueba legal en vía penal, inscribir el principio del CV anónimo en el Código Laboral e introducir en el texto el objetivo de “la diversidad”. Web: <http://halde.defenseurdesdroits.fr/Missions-et-pouvoirs,11013.html> (Consultada en última ocasión en marzo 2012).

<sup>69</sup> «Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances. » Web : <http://admi.net/jo/20060402/SOCX0500298L.html> (Consultada en última ocasión en marzo 2012).

jurídico institucional de lucha contra las discriminaciones, muestra una voluntad más política que jurídica de reformular el discurso antidiscriminatorio, incorporando la noción de “igualdad de oportunidades”.

### 1.5 Estimativa y evaluación del impacto en la normativa comunitaria

Una vez introducida la igualdad de géneros en la Unión Europea y en Francia, primer pilar de nuestra investigación, es el momento de comenzar a analizar la estimativa y evaluación del impacto en la normativa comunitaria, segundo gran pilar de este trabajo.

Con esto pretendemos sentar las bases para aunar ambos conceptos el de “igualdad de géneros” y el de “estimativa y evaluación del impacto” en los capítulos venideros, de tal forma que seguidamente podamos dedicarnos, de manera exhaustiva, al estudio de la estimativa y la evaluación del impacto por razón de género en la normativa comunitaria estatal y autonómica andaluza.

Así bien comenzaremos señalando como en el año 2002, la Comisión Europea, se propuso introducir la evaluación del impacto como una herramienta encaminada a mejorar la calidad y la coherencia del proceso de desarrollo de políticas, capaz por un lado de contribuir a instaurar un entorno legislativo eficaz y productivo, y por otro lado capaz de llevar a cabo una aplicación más coherente de la Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible:

*La evaluación del impacto identifica los posibles efectos positivos y negativos de las políticas propuestas, permitiendo hacer juicios razonados sobre las mismas y señalar los compromisos necesarios para lograr los objetivos perseguidos. También permite completar la aplicación del Protocolo sobre los principios de subsidiariedad y proporcionalidad anexo al Tratado de Amsterdam.<sup>70</sup>*

El análisis de impacto reemplaza así, a las antiguas evaluaciones sectoriales y analiza las consecuencias potenciales de las nuevas propuestas políticas o reglamentarias en los

---

<sup>70</sup> COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. *Comunicación de la comisión sobre la evaluación del impacto*. COM (2002) 276 final. Bruselas, 5.6.2002.

Dicha Comunicación expone la manera en que la Comisión —gradualmente a partir de 2003— debía aplicar el proceso de evaluación del impacto en relación con todas las iniciativas importantes. En su l anexo se enumeraban los principales componentes del método de evaluación del impacto. Web: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0276:FIN:ES:PDF> (Consultada en última ocasión en marzo 2012).

ámbitos económico, social y medioambiental. Consiste pues en realizar una evaluación equilibrada de todas las propuestas políticas o reglamentarias y de sus posibles consecuencias.

Como herramienta jurídica, esta reposa en el principio de proporcionalidad, (en virtud del cual la precisión y la extensión de un análisis de impacto y por lo tanto los recursos concedidos a ésta, son proporcionales al carácter esperado de la propuesta y a sus consecuencias probables).

De manera general, todas las iniciativas políticas y las propuestas políticas y/o reglamentarias que figuran en “El programa legislativo y de trabajo anual”<sup>71</sup> de la Comisión deben ser objeto de un análisis de impacto.

A su vez se elaboran “las hojas de ruta”<sup>72</sup>, que son publicadas en el momento de la adopción del programa que se trate, y que están diseñadas para dar una primera indicación de los principales ámbitos en los que se debe efectuar un análisis y evaluación del impacto.

Aunque las hojas de ruta son de uso interno de la Comisión, esta institución ha decidido tener en cuenta a los agentes sociales para el diseño de sus políticas, ya que la experiencia ha demostrado (sobre todos en ámbitos tales como la cooperación internacional para el desarrollo) que la implicación de las partes interesadas en la formulación de proyectos, programas... es esencial para garantizar una buena calidad del producto final.

Así, entre los meses de junio y julio de 2008 la Comisión organizó una “consulta pública” relativa a la pertinencia de las líneas directrices elegidas por la Comisión Europea en lo referente al análisis del impacto:

*Consultation relative au projet de lignes directrices de la Commission concernant l'Analyse d'Impact:*

- 1. explicitent-elles correctement la logique des stades successifs à suivre dans le processus d'évaluation d'impact (définition de la problématique, objectifs, options politiques, évaluation des impacts, comparaison des options, suivi et évaluation) ?*
- 2. préservent-elles le bon équilibre entre les impacts économiques, sociaux et environnementaux, indispensable à une approche intégrée et équilibrée de l'évaluation d'impact ?*

---

<sup>71</sup> COMISIÓN EUROPEA, *El programa legislativo y de trabajo anual*. Web: [http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index\\_fr.htm](http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_fr.htm) (Consultado en última ocasión en marzo 2012).

El último que se ha publicado es COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES. COM (2011) 777 final. *Programa de Trabajo de la Comisión para 2012: Materializar la renovación de Europa*. Bruselas, 15.11.2011. Web: [http://ec.europa.eu/atwork/programmes/docs/cwp2012\\_es.pdf](http://ec.europa.eu/atwork/programmes/docs/cwp2012_es.pdf) (Consultado en última ocasión en marzo 2012).

<sup>72</sup> COMISIÓN EUROPEA, *Hojas de ruta*. Web [http://ec.europa.eu/governance/impact/ia\\_carried\\_out/ia\\_carried\\_out\\_en.htm](http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/ia_carried_out_en.htm) (Solo disponibles en Inglés y hasta el año 2009. Consultada en última ocasión en marzo 2012).

3. *couvrent-elles suffisamment les aspects spécifiques de ces impacts ?*
4. *couvrent-elles une gamme suffisante de méthodes d'analyse et ces dernières sont-elles traitées de façon suffisamment détaillée ?*
5. *indiquent-elles clairement comment les contributions des experts et des parties prenantes doivent être collectées durant la phase préparatoire, compte tenu des standards minimaux de consultation ?*<sup>73</sup>

Previa a esta consulta<sup>74</sup> y posteriormente confirmado por los resultados obtenido a través de ella<sup>75</sup>, la Comisión Europea ya venía observando a través de los análisis y evaluaciones del impacto de la legislación que había realizado, la urgente necesidad de llevar a cabo una mejor tarea legislativa, es decir la necesidad legislar mejor, y para ello puso en marcha un programa de gran envergadura para simplificar y, en general, mejorar el marco regulador: “Legislar mejor”<sup>76</sup>.

Este programa contemplaba distintas acciones, entre las que destacamos la referida al objeto de nuestra investigación, la evaluación del impacto, así la medida a la que nos referimos venía definida en dicho programa como la necesidad de “Introducir un sistema para evaluar el impacto y mejorar el diseño de las propuestas importantes de la Comisión”.

De esta manera, la Comisión imponía la realización de una evaluación de impacto de las propuestas políticas importantes y, desde la creación su creación en 2006 el Comité de

---

<sup>73</sup> COMISIÓN EUROPEA, *Consultation relative au projet de lignes directrices de la Commission concernant l'Analyse d'Impact*. Web: [http://ec.europa.eu/governance/impact/consultation/ia\\_consultation\\_fr.htm](http://ec.europa.eu/governance/impact/consultation/ia_consultation_fr.htm). (Consultado en última ocasión en marzo 2012).

<sup>74</sup> PARLAMENTO EUROPEO Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior (PE/VI/ACTA/03-15. ACTA) Proposición añadir al proyecto de orden del día la designación de un ponente para la opinión sobre el Acuerdo interinstitucional "Legislar mejor" Web: <http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/juri/20031001/503579ES.pdf>. (Consultado en última ocasión en marzo 2012).

<sup>75</sup> Los principales elementos de mejora se refieren a: la subsidiariedad, la proporcionalidad, así como el valor añadido aportado por la Unión Europea en la iniciativa propuesta; la evaluación del riesgo; los impactos sociales; los impactos sobre los consumidores; los impactos sobre las pequeñas empresas; los impactos en los ámbitos nacionales y regionales; los impactos sobre el comercio y las inversiones internacionales, así como sobre los países en desarrollo; los impactos sobre la carga administrativa y la simplificación de la legislación Web: [http://ec.europa.eu/governance/impact/consultation/ia\\_consultation\\_fr.htm](http://ec.europa.eu/governance/impact/consultation/ia_consultation_fr.htm). (El subrayado y la traducción es nuestro. Consultado en última ocasión en marzo 2012).

<sup>76</sup> COMISIÓN EUROPEA, *Legislar mejor*. Web: [http://ec.europa.eu/governance/better\\_regulation/index\\_es.htm](http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_es.htm)

El plan puede consultarse en [http://ec.europa.eu/governance/better\\_regulation/brochure\\_en.htm](http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/brochure_en.htm) (Consultada en última ocasión en marzo 2012).

A finales del 2005, además del acuerdo interinstitucional "Mejor legislar" de 2003, las tres instituciones europeas - Parlamento europeo, Consejo y Comisión - acordaron establecer un "enfoque común del análisis de impacto legislativo. Este consiste en un conjunto de reglas, a través de las cuales las instituciones llevarán a cabo un análisis del impacto que se puede producir durante todo el proceso legislativo. Hemos de señalar que esta propuesta conjunta de la Comisión generalmente sirve de base a los análisis que eventualmente realizan otras instituciones europeas cuando aportan las enmiendas a las propuestas de la Comisión.

Evaluación de Impacto<sup>77</sup>, ha emitido más de 400 dictámenes que pueden ser consultados por el público 17.2003, ya ha llevado a cabo más de 150 evaluaciones de este tipo.<sup>78</sup>

Se observa así pues como se ha operado un cambio importante en el modo de forjar las políticas en la Comisión Europea. Se trata de un planteamiento basado en el conocimiento y que está encaminado a asegurar que la proposición de determinadas iniciativas y el modo de hacerlo se apoyan en pruebas sólidas y en un análisis de los posibles impactos que su entrada en vigor pudiese conllevar.

El programa «legislar mejor» en la actualidad ya ha dado lugar a cambios importantes en la manera en que la Comisión elabora sus políticas y propone normativas:

*Las consultas con las partes interesadas y los análisis de impacto son ahora elementos esenciales del proceso normativo que han aumentado la transparencia y la responsabilidad y han favorecido la elaboración de políticas a partir de elementos concretos. Este sistema se considera como una buena práctica de la UE y está en la base del proceso de toma de decisiones en las instituciones de la UE. La Comisión ha simplificado una gran parte de la legislación existente y ha realizado progresos importantes con el fin de reducir las cargas administrativas.*<sup>79</sup>

El pasado año 2010, la Comisión consideró que había llegado el momento de pasar a una marcha superior. Era cierta la necesidad de legislar mejor, pero además resultaba preciso pasar a una normativa inteligente que se integrara aún más en la cultura de trabajo de la Comisión.

Para ello el Presidente de la Comisión se comprometió directamente en favor de la normativa inteligente, y la se presentó la Comunicación “Normativa inteligente en la Unión

---

<sup>77</sup> COMITÉ DE EVALUACIÓN DE IMPACTO. Con vistas a reforzar el control de la calidad del análisis de impacto, la Comisión creó en noviembre de 2006 una nueva función interna de control de la calidad. El comité de evaluación de impacto un órgano independiente, bajo la autoridad directa del presidente de la Comisión. Los miembros del comité son funcionarios de alto nivel de los servicios más próximos de la Comisión de los tres pilares (economía, social y entorno) el enfoque integrado en materia de análisis de impacto. El comité tiene como misión examinar los proyectos de análisis de impacto de los diferentes servicios de la Comisión. Da su opinión sobre la calidad y propone trabajos eventuales y complementarios. El control de la calidad constituye la tarea inicial del comité. Web: [http://ec.europa.eu/governance/impact/iab/iab\\_en.htm](http://ec.europa.eu/governance/impact/iab/iab_en.htm) (Consultada en última ocasión en marzo 2012).

<sup>78</sup> Disponible en: [http://ec.europa.eu/governance/impact/ia\\_carried\\_out/cia\\_2010\\_en.htm](http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/cia_2010_en.htm) (Consultada en última ocasión en marzo 2012).

<sup>79</sup> RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO, de 9 de septiembre de 2010, sobre «Legislar mejor» (P7\_TA (2010)0311). Ver también: Informe especial n° 3/2010 del Tribunal de Cuentas Europeo - «Impact Assessments in the EU institutions: do they support decision making?» (Las evaluaciones de impacto en las instituciones de la UE: su contribución al proceso decisorio).



Europea”<sup>80</sup>, que tenía por objetivo definir lo que pasar a una normativa inteligente significaría en la práctica.

En noviembre del pasado año 2011 la Comisión Europea elaboró el Programa de Trabajo de la Comisión para 2012<sup>81</sup>, a través de él y dada la actual situación de crisis que envuelve a Europa, la Comisión intenta responder a nuevas necesidades urgentes que se manifiestan como resultado de la crisis, al mismo tiempo que continua con los trabajos sobre aspectos estructurales que se había marcado en años anteriores, con el deseo de configurar una Europa próspera y sostenible para el futuro:

*Para realizar las reformas contempladas en el presente Programa, la legislación de la UE debe funcionar adecuadamente en cada etapa; desde la concepción hasta la aplicación y desde la evaluación hasta la actualización, la acción de la UE debe probarse a lo largo del ciclo, a fin de cumplir las normas más estrictas de calidad, eficacia y eficiencia. Deberemos asegurarnos de que los requerimientos normativos sean lo más livianos posibles. El derecho de iniciativa de la Comisión y su responsabilidad como guardiana del Tratado le asignan un papel especial en el mantenimiento de estas normas exigentes.*

Así se observa que la Comisión no ha dejado de lado lo establecido en 2010 en lo relativo a la normativa inteligente y se constata además como el papel de la Comisión a la hora de proponer normas ha evolucionado sustancialmente en los últimos años con la consolidación de la evaluación de impacto como parte normalizada de su trabajo.

De igual manera, la Comisión prevé que en el presente año 2012 se producirá otro paso importante al ampliarse el plazo mínimo de consulta pública de 8 a 12 semanas, lo que contribuirá a garantizar que las propuestas de la Comisión tengan bien en cuenta los puntos de vista de las partes interesadas y que todos dispongan de la posibilidad de expresar su opinión sobre las principales políticas.

Así bien, y a modo de conclusión de este primer capítulo y retomando las ideas principales que en él hemos querido ir plasmando, observamos que efectivamente desde mediados del siglo pasado, la creación de legislación cuyo objetivos son por un lado, la

---

<sup>80</sup> COMISIÓN EUROPEA Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. *Normativa inteligente en la Unión Europea*. COM (2010) 543 final. Bruselas 8.10.2010. Web: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0543:FIN:ES:PDF> (Consultada en última ocasión en marzo 2012).

<sup>81</sup> COMISIÓN EUROPEA, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, *Programa de Trabajo de la Comisión para 2012: Materializar la renovación de Europa*. COM (2011) 777 final. Bruselas, 15.11.2011. Web: [http://ec.europa.eu/atwork/programmes/docs/cwp2012\\_es.pdf](http://ec.europa.eu/atwork/programmes/docs/cwp2012_es.pdf) (Consultada en última ocasión en marzo 2012).

eliminación de aquellos factores que provocan situaciones discriminatorias entre las personas y por otro la puesta en marcha de herramientas para asegurar una sociedad justa y equitativa, ha sido una labor creativa inmensa.

Y pese a ello, el objetivo de alcanzar una sociedad donde todas las personas gocen de los mismos derechos y oportunidades, todavía queda lejano; sobre todo porque la invisibilidad, y por tanto la desprotección jurídica, a la que se ve abocada una parte de la sociedad es una invisibilidad estructural, es decir la construcción patriarcal, heteronormativa y binaria de nuestras sociedades ha hecho que se queden excluidas de ellas, por un lado todas aquellas personas que no se adhieren a las categorías masculina/femenina, y por otro lado ha conseguido que incluso entre aquellas personas catalogadas en las categorías binarias masculino/femenino, exista una situación de dominio y opresión, asignándole a la categoría masculina el poder y el dominio y exiliando por tanto a la sumisión y opresión a su binario: lo femenino.

Así si tenemos en cuenta que uno de los objetivos recientes de la UE es llevar a cabo una mejora en la elaboración de su normativa, como juristas proponemos la apertura a nuevas categorías jurídicas para los sujetos de derecho, de tal suerte que esto proporcionaría una cobertura legal a todas las personas que conforman la sociedad y en consecuencia la mejora en la eficacia y en la eficiencia de la legislación europea estaría asegurada.

Para ello proponemos adherirnos a las posturas post-feministas actuales que instan a la “desestabilización” del tándem sexo/género y el binarismo biológico y social alineado con él, como respuesta al hecho más que constatado de la necesidad de configurar nuevos modelos de sociedades con cabidas para todas las personas.

No obstante, mientras que llega este momento, y teniendo en cuenta que actualmente en nuestro Estado de derecho positivo, nuestros sujetos de derecho son la mujer y el hombre, la mejora en cualitativa en la creación legislativa debe venir marcada por el análisis, la evaluación, la corrección y posterior estimación de la legislación vigente, a través de un sistema de evaluación de impacto normativo en función del género a fin de determinar en qué situación con respecto al goce de derechos y acceso a las oportunidades se hayan unas y otros y corregir las posibles brechas de género que se detecten.

## Capítulo 2: El derecho de igualdad en el Orden Jurídico estatal español y autonómico andaluz

---

### 2.1 Breve trazado de la situación de las mujeres en España desde la Segunda Republica hasta la promulgación de la Constitución de 1978

El siglo XX fue un siglo de cambios y revoluciones, abrió la puerta a grandes transformaciones y sin duda cambió de manera profunda las relaciones entre hombres y mujeres.

En el caso de España, la conquista de espacios por parte de la mujer ha sido particularmente difícil y problemática. A las dificultades propias de los cambios radicales, se unen en nuestro caso dos fenómenos que marcaron sustancialmente el destino de las mujeres de nuestro país. Por una parte la Guerra Civil que supuso una ruptura y un retroceso evidente, todo lo conseguido durante la Segunda República se perdió en la guerra.

Por otra parte, la dictadura franquista suprimió cualquier atisbo de avance en el terreno de los derechos de las mujeres. La mujer volvió al ámbito doméstico para ejercer de madre y esposa.

La caída de la monarquía el 14 de abril de 1931 y la llegada de la Segunda República inauguró un proceso de modernización de la sociedad con la universalización de la cultura y de la vida política, que dejaron de ser patrimonio de una minoría.

Al mismo tiempo, se produjeron una serie de cambios que supusieron la transformación de la situación social de la mujer. Los años sometidas a un constante encierro doméstico dieron paso a un periodo de visibilidad que las hizo más presentes que nunca, las mujeres se incorporaban a una sociedad llena de cambios y transformaciones, pero desgraciadamente esta situación de avances y de normalización de la que comenzaban a disfrutar las mujeres durante el periodo republicano, no llegó a consolidarse.

Dentro los cambios y transformaciones que se efectuaron durante la Segunda Republica, cabe destacar en el ámbito laboral, cómo el gobierno de la Segunda Republica, declaró vigente la “Ley 13/3/1900, sobre trabajo de menores y el descanso por lactancia y pos

parto de la mujer trabajadora”. Esta ley que fue defendida desde instancias obreras y feministas con el fin de compensar las mayores dificultades a las que las mujeres se enfrentaban en el trabajo debido en parte a las sucesivas maternidades y realización de una doble o triple jornada, la laboral, las relativas al ámbito doméstico, junto a ello las mujeres recibían salarios más bajos que sus compañeros varones y no contaban con organizaciones sindicales fuertes para defender sus intereses. Como puntos importantes y a destacar esta ley fijaba un plazo de descanso posparto y reconocía el derecho a interrumpir la jornada laboral, una hora al día a la trabajadora con hijos lactantes.

Como señala Espuny Tomás (2006), la Ley de 13 de marzo de 1900, marca el comienzo de una legislación protectora de la mujer. La fisiología y la moralidad están presentes en la composición de las Juntas Provinciales de Reformas Sociales y en las Juntas Locales de Reformas Sociales<sup>82</sup>.

En esa misma dirección, el 26 de mayo de 1931 se establecía con carácter obligatorio y por Decreto, el seguro de maternidad y se garantizaba la asistencia sanitaria a las trabajadoras asalariadas.

Vemos como la Constitución de 1931 recogía la preocupación de los poderes públicos por la protección del trabajo de las mujeres. Sin ir más lejos en su artículo 46 se establecía *“...que el trabajo era una obligación social, protegido por la ley que regularía especialmente el trabajo de las mujeres y la protección a la maternidad además del seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez, o la muerte...”*<sup>83</sup>

Pese a que la Constitución española de 1931 quedará en la memoria histórica como el documento principal y más significativo de la República donde se reflejaba la igualdad de derechos que el nuevo régimen concedió a las mujeres, no podemos por ello olvidar que las condiciones laborales en la gran mayoría de los sectores siguieron siendo muy precarios para las mujeres, y aun mas para las mujeres del ámbito rural.

La conquista del voto femenino en España, también llegó, se conquistó, durante la Segunda Republica, esta conquista se debió en gran medida al trabajo que llevo a cabo Clara Campoamor quien defendió sin apoyo de sus compañeros de partido, es decir en solitario y rompiendo la disciplina de partido, el sufragio femenino y su inclusión en la Constitución de 1931.

---

<sup>82</sup> Consultado en última ocasión en marzo 2012).

<sup>83</sup> Constitución Española de 1931. Este documento puede consultarse la siguiente web del Congreso de los Diputados: [http://www.congreso.es/docu/constituciones/1931/1931\\_cd.pdf](http://www.congreso.es/docu/constituciones/1931/1931_cd.pdf) (Consultada en última ocasión en marzo de 2012).

*Señores diputados: lejos yo de censurar ni de atacar las manifestaciones de mi colega, señorita Kent, comprendo, por el contrario, la tortura de su espíritu al haberse visto hoy en trance de negar la capacidad inicial de la mujer. Creo que por su pensamiento ha debido de pasar, en alguna forma, la amarga frase de Anatole France cuando nos habla de aquellos socialistas que, forzados por la necesidad, iban al Parlamento a legislar contra los suyos (...) Yo no creo, no puedo creer que la mujer sea un peligro para la República, porque yo he visto a la mujer reaccionar frente a la Dictadura y con la República. ... No cometáis un error histórico que tendréis bastante tiempo para llorar al dejar al margen de la República a la mujer...que está anhelante, aplicándose a sí misma la frase de Humboldt, de que la única manera de madurarse en el ejercicio de la libertad y de hacerla accesible a todos es caminar dentro de ella...*<sup>84</sup>

Pese a que fue Campoamor la propulsora del derecho al voto de las mujeres durante la Segunda Republica, como feministas no compartimos ciertas hipótesis sociales (y sin dudas patriarcales) que se empeñan en mostrar la postura de Victoria Kent como contraria al voto de las mujeres.

Consideramos que la postura de Kent fue más “cauta” que la de su colega Campoamor, al solicitar la ampliación en el tiempo para la concesión del voto para las mujeres. Consideramos que en ningún caso fue contraria a su este, tal y como se puede deducir de la lectura de sus intervenciones las Cortes en octubre de 1931:

*(...) Es por lo que me levanto esta tarde para pedir a la Cámara que despierte la conciencia Segunda Republicana, que avive la fe liberal y democrática y que aplace el voto de la mujer; no, señores diputados, no es cuestión de capacidad, es cuestión de oportunidad para la República.... Hoy, señores diputados es peligroso conceder el voto a la mujer...*

*El voto hoy en la mujer es absurdo, porque en la inmensa mayoría de los pueblos el elemento femenino, en su mayor parte está en manos de los curas, que dirigen la opinión femenina, se introducen en los hogares e imperan en todas las partes. La mujer española, especialmente la campesina, no está capacitada para hacer uso del derecho del sufragio de una manera libre y sin consejos de nadie.*

*No somos enemigos de la concesión del voto a la mujer, estimamos que debe concedérsele ese derecho de ciudadanía, pero a su tiempo, pasados, cinco años, diez, veinte, los que sean necesarios para la total información de la sociedad española, cuando nuestras mujeres se hallen redimidas de la vida de la esclavitud a la que hoy están sometidas, cuando libres de prejuicios, de*

---

<sup>84</sup> Discurso de Clara Campoamor en las Cortes el 1 de octubre de 1931. DURÁN Y LALAGUNA, P. *El voto femenino en España*, Asamblea de Madrid, Servicio de Publicaciones. Madrid 2007, p, 33.

*supersticiones, dejen de ser sumisas penitentes, temerosas de Dios y de sus representantes en la tierra, y vean independizada su conciencia.*<sup>85</sup>

El resultado final de la votación del artículo 36 de la Constitución de 1931 fue de 161 votos a favor de otorgar el derecho de voto a las mujeres y 121 en contra. Debemos destacar que 188 diputados se ausentaron de la Cámara en el momento de la votación. Las mujeres pudieron votar por primera vez en España 1933.

La obtención del derecho al voto abrió una época de gran participación de las mujeres en la vida política, hecho que sería bruscamente interrumpido con la victoria del franquismo.<sup>86</sup>

La consecución del voto no era el único tema que preocupaba a los movimientos organizados de mujeres, otra gran fuente de preocupaciones era el divorcio. España era, junto con Italia los dos únicos países que en 1931 no habían aprobado una ley sobre el divorcio<sup>87</sup>.

La polémica se agudizó durante los años 1931 y 1932. Los argumentos en contra provenían de los partidos confesionales que consideraban el divorcio un atentado contra la fe, las buenas costumbres y cuyas consecuencias eran nefastas para los hijos y la familia, pilares básicos de la sociedad.

Tras intensos debates parlamentarios, la Ley del divorcio fue aprobada y promulgada el 2 de marzo de 1932. Esta ley fue una consecuencia directa de la Constitución Española de 1931, que en su artículo 43 por primera vez establecía que el matrimonio podía disolverse: *"La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges, con alegación en este caso de justa causa"*.

---

<sup>85</sup> Discurso de Victoria Kent en las Cortes el 1 de octubre de 1931. Diario de Sesiones del Congreso de 1 de octubre de 1931. Este discurso puede encontrarse en la Web de Mujeres en Red: <http://www.nodo50.org/mujeresred/spip.php?article768> (Consultado en última ocasión en marzo 2012).

<sup>86</sup> La victoria de las derechas en 1933 supuso para los republicanos que habían sido contrarios al voto femenino la confirmación de que éste había sido mayoritariamente derechista. No obstante Campoamor por el contrario hacía otro análisis en su obra "Mi pecado mortal: el voto femenino y yo": *"la derrota de los Segunda Republicanos era debida a la desunión de los partidos de izquierda, al fracaso de la política Segunda Republicana en materia económica y de orden público y a la no inclusión de las mujeres en los cuadros de organización y propaganda de los partidos Segunda Republicanos, a excepción del socialista."* Con respecto a esta idea ver en CAMPOAMOR, C, *Mi pecado mortal: el voto femenino y yo*. Librería Beltrán. Madrid 1936, pp. 247-167.

<sup>87</sup> Con la proclamación de la Segunda República, acorde con el principio de aconfesionalidad del Estado que establecía la Constitución de 9 de diciembre de 1931, se volvió a implantar el matrimonio civil obligatorio, siendo una Orden de 10 de febrero de 1932 la que dispuso (en la línea de la Orden de 1906) que no se exigiera a los que solicitasen la celebración del matrimonio civil, declaración alguna respecto a sus creencias religiosas o religión que profesaren. DAZA MARTINEZ, J, *La ley de divorcio de 1932: Presupuestos ideológicos y significación política*. Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social. N. 1. Alicante 1992, pp. 169-170.

Badenes-Gasset Ramos en su estudio sobre “Las mujeres en la España contemporánea. Modelos de género, sociabilidad y ciudadanía” señala cómo aumento durante la República las asociaciones de carácter política de mujeres, así ejemplo de ello fue la fundación de la “Unión Segunda Republicana Femenina”, creada por Clara Campoamor en octubre de 1931 para impulsar la campaña de concesión del voto a las mujeres y que, en 1936, intentó transformarse en partido político integrante del Frente Popular; la “Asociación Femenina de Educación Cívica”, de María Lejárraga<sup>88</sup>.

La guerra y el fascismo movilizaban a las mujeres, nacieron así por ejemplo la “Organización Mujeres contra la Guerra y el Fascismo” que se constituyó en 1933 y que celebró su primer congreso en Madrid en 1934. Allí quedaron constituidas las bases de la organización antifascista formada por mujeres de todas las tendencias políticas y donde Dolores Ibárruri ostentaba la presidencia del Comité Nacional.

Paralelamente en 1934, en Cataluña, nació la “Unió de Dones de Catalunya” un órgano unitario de lucha contra el fascismo conformado por parte de mujeres de muy diversas tendencias políticas. Por último y en respuesta a las mismas inquietudes no podemos dejar de que nombrar a la “Organización Anarquista de Mujeres Libres”, fundada en abril de 1936.

También las mujeres que conformaban el sector católico y conservador llevaron a cabo acciones organizativas y propagandistas importantes. Así, ejemplo de ello son la “Acción Femenina Nacional”, y la “Sociedad Aspiraciones” creada en 1932 por mujeres católicas<sup>89</sup> y conservadoras de clase media, que manifestaban su intenso antirrepublicanismo y su absoluto rechazo al antilaicismo enarbolado por las mujeres republicanas.

Los años 1933 y 1934 marcaron un giro en la toma de conciencia política de las mujeres españolas tanto de un signo político como del otro. Tras el triunfo de la coalición de derechas en las elecciones de 1933 se radicalizaron las posiciones políticas y las asociaciones obreras se lanzaron en una dinámica insurreccional. En este contexto surgieron por un lado, el “Comité Nacional de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo”, muy vinculado al “Partido Comunista Español”, y por el otro, la “Sección Femenina de Falange”.

---

<sup>88</sup> Para la elaboración de este apartado nos hemos servido de los datos aportados en el trabajo de investigación de BADENES-GASSET RAMOS, I, *Las mujeres en la España contemporánea, modelos de género, sociabilidad y ciudadanía*. Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere. Universitat Jaume I. Castellón 2012. En este sentido también consideramos relevante la lectura de la obra de NASH, M, *Mujer y Trabajo en España*, Anthopos, Barcelona 1986.

<sup>89</sup> La organización “Acción Católica de la Mujer” consideraba como ofensa propia los ataques republicanos a los privilegios de la Iglesia, las reformas que afectaban a la familia, o a la educación.

La Guerra Civil vendría a desestabilizar el orden social que se había instituido bajo la Segunda República y nuevamente los logros que las mujeres habían conseguido y estaban empezado a disfrutar en la sociedad republicana fueron amputados. La Guerra Civil supuso una terrible e innegable vuelta atrás en las luchas ganadas por las mujeres. Pero las mujeres no se resignarían a esta nueva situación y así, desde las instituciones o desde la clandestinidad a la que se vieron obligadas, no dejaron nunca de luchar en defensa de sus derechos conseguidos y los que habían quedado por conseguir.

La dictadura va a construir un nuevo modelo único de mujer española y católica. Una mujer que debía hacer de la religión y de la familia el centro de su existencia, aunque no podemos obviar que muchas de ellas salieron de su hogar a trabajar fuera de estos durante los años de postguerra y de la dictadura, para cubrir la mano de obra del país que había sido mermada por las bajas de la guerra.

La incorporación de las mujeres al mundo del trabajo permitió el nacimiento de las asociaciones proletarias de mujeres, que sirvieron a la vez de plataforma reivindicativas de los derechos de la mujer y de los primeros Movimientos Feministas organizados como tales en España.

No será hasta mediados de los años 70 en Barcelona y Madrid cuando empiecen a oírse cada vez más fuerte y de una manera menos clandestina las voces de los colectivos feministas que clamaban por la despenalización de los anticonceptivos y la apertura de centros de planificación familiar regulados por la Seguridad Social. Los avances de apertura de la sociedad comenzaban ya a ser imparables.

Fueron muchas las leyes aprobadas en los últimos años del franquismo que hacían palpable el cambio en las estructuras sociales. El proceso de apertura estaba puesto en marcha. Las mujeres retomaban de nuevo las riendas de su propia vida y volvían la vista de nuevo hacia a los principios de igualdad conseguidos durante la Segunda República y amputados durante la dictadura.

Se iniciaba una transición pacífica y voluntaria hacia un Estado democrático, menos opresivo y más abierto para todas las mujeres que lucharon en la clandestinidad de una sociedad cerrada y excluyente.



## 2.2 El derecho de igualdad en el Estado social y democrático de derecho

Como bien señala Balaguer Callejón (2010: 68), el planteamiento del derecho a la igualdad está condicionado por el modelo de Estado que se tome como referencia. El hecho de que la Constitución Española de 1978 reconozca a la igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico junto a otros como justicia, libertad y pluralismo político, califica al Estado español como Estado social.

Así, en un Estado social y democrático de derecho como es el actual Estado español, los derechos fundamentales, y concretamente el derecho de igualdad, en el caso que nos atañe, se desarrollan en función de las metas que ese Estado persigue, en función de las realidades sociales que le conciernen y evidentemente en función de los agentes y grupos sociales que lo componen.

*El concepto de igualdad valido para el constitucionalismo de base liberal, no es funcional en un derecho constitucional establecido en Estado social democrático y de derecho en el que la igualdad ya no se conceptúa como una exigencia de abolición de los privilegios, sino como un derecho fundamental a la interdicción, de la discriminación* (Balaguer Callejón, 2010: 68).

El derecho de igualdad en un Estado social democrático y de derecho<sup>90</sup> consiste en el derecho a ser tratado o tratada de manera desigual, para conseguir ser materialmente igual. Vemos así su tinte finalista porque pretende de manera activa eliminar la desigualdad.

### 2.2.1 La igualdad en la Constitución Española de 1978

La idea de igualdad puede encontrarse en varios preceptos de la Constitución Española (en adelante CE), aunque el valor conceptual de la idea de igualdad, es decir desde una perspectiva general y no en aplicación a situación concreta, se recoge en tres artículos (el artículo 1.1 como valor superior o principio fundamental; el artículo 9.2 como principio político constitucional o principio general del derecho y el artículo 14 como principio

---

<sup>90</sup> Se observa como esta concepción de igualdad es diferente a la del modelo liberal de Estado, en el que la igualdad es exclusivamente una exigencia formal de las leyes fruto de las conquistas revolucionarias del siglo XVIII y XIX.

jurídico y derecho fundamental que encabeza al resto de derechos fundamentales y libertades públicas que se recogen en la CE).

Tales referencias específicas sobre la idea de igualdad tienen un carácter general en tanto que implican que todo el ordenamiento jurídico está afectado de dicha noción. Es de resaltar que ningún otro derecho fundamental, principio o valor tiene dedicado tres artículos específicos y algunos más aplicables a situaciones concretas en nuestra Constitución.

Como afirma claramente Rey Martínez (1995: 54-59), de la relación del art. 14 en relación con el art. 9.2 CE, nace el imperativo para los poderes públicos de favorecer la igualdad real o de oportunidades, como veremos a continuación.

Así a la igualdad como valor recogida en el artículo 1.1 CE, le sigue en el texto constitucional, la igualdad como principio, que se distingue del valor tanto por su diferente intensidad normativa como por su diferente grado de determinación.

#### **2.2.1.1 La igualdad como valor superior del Ordenamiento Jurídico**

El hecho de que la CE incluya la igualdad entre los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, tal y como se señala en el artículo 1.1 CE, hacen de ella uno de los objetivos básicos que nuestro sistema político y jurídico debe aspirar a alcanzar.

La igualdad en su condición de valor superior constitucional se presenta como un criterio para enjuiciar las acciones, ordenar la convivencia y establecer sus fines, que claramente superan la esfera de la estricta positividad.

*De la consideración de los valores como modos de preferencias conscientes y generalizables se infiere que la igualdad supone una de las preferencias conscientes básicas, expresada en el proceso constituyente como prioritaria, orientadora y fundamentadora de nuestra vida colectiva.*

*(...) La igualdad supone por tanto, en su condición de valor superior constitucional el contexto axiológico fundamentador o básico para la interpretación de todo el ordenamiento jurídico; el postulado-guía para orientar la hermenéutica teleológica y evolutiva de la Constitución, y el criterio para medir la legitimidad de las diversas manifestaciones del sistema de legalidad (Pérez Luño, 2007:85).*

En este sentido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es clara al indicar que nuestro sistema constitucional en su conjunto se halla orientado en función del valor de la

igualdad<sup>91</sup>, y que esta constituye uno de los valores fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico

*La igualdad se configura como un valor superior que... se proyecta con eficacia transcendente de modo que toda situación de desigualdad persistente a la entrada en vigor de la norma constitucional deviene incompatible con el orden de valores que la Constitución, como norma suprema proclama.*<sup>92</sup>

### **2.2.1.2 La igualdad como principio de derecho**

Una vez estudiada la igualdad en su dimensión de valor superior de ordenamiento jurídico ahora la trabajaremos en su dimensión de principio de derecho. Para la selección de las Sentencias de Tribunal Constitucional que vamos usar en este apartado nos hemos basado en la selección previa efectuada por Carmona Cuenca (1994) en su artículo “El principio de igualdad material en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”.

Hemos de comenzar este epígrafe señalando que no es inusual encontrar en la literatura jurídica una amplia bibliografía sobre que cuales son las diferencias entre los valores del ordenamiento jurídico y los principios del derecho. Sin ir más lejos en este sentido Rubio Llorente, señala que:

*El principio de igualdad, como tal, es una construcción doctrinal, una idea que subyace a toda la estructura constitucional y, a través de ella a todo el ordenamiento jurídico pero que, como es propio de los principios, no se plasma en un solo enunciado positivo, sino en un numeroso conjunto de ellos cuya existencia es la única base posible y la única justificación admisible de esa construcción. Frente a esta afirmación podría argüirse, quizás que nuestra Constitución, tan abundante en proclamaciones de principios, sitúa ya la igualdad en su artículo primero, como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico español, pero aceptando la equivalencia de las nociones de valor y principio, de esa proclamación perfectamente explicable y aceptable políticamente, no cabe extraer consecuencias que no tiene, es decir no cabe extraer consecuencia jurídica alguna, lo que como es obvio, impide tomarla como punto de partida para una construcción jurídica.*<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> STC 63/1983, de 20 de julio, FJ 2.

<sup>92</sup> STC 8/1983, de 18 de febrero, FJ 3.

<sup>93</sup> RUBIO LLORENTE, F. *La igualdad en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional*. Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 31. Madrid 1991, pp. 9 y ss.

Dicho lo anterior, hemos de tener en cuenta que los principios de derecho suelen entrañar un grado mayor de concreción y especificación que los valores, respecto a las situaciones en las que pueden ser aplicados y a las consecuencias jurídicas de su aplicación.

*Los principios ya posean un significado hermenéutica, ya actúen como fuentes del derecho o como determinaciones de valor, reciben su peculiar orientación de sentido de aquellos valores que especifican o concretan. Los valores funciona, en suma, como metanormas respecto a los principio y como normas de tercer grado respecto a las reglas o disposiciones específicas (Pérez Luño, 2003: 291-292).*

La igualdad en su dimensión de principio puede encontrarse en nuestra Constitución en sus dos vertientes fundamentales: a) como “igualdad formal” en su artículo 14 CE, que establece que: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”; y b) como “igualdad material” que atribuye a los poderes públicos la tarea de “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de los ciudadanos en la vida política, económica cultural social” (art 9.2 CE).

Carmona Cuenca (1994: 9) señala que la interpretación clásica —que late también en la mayor parte de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el tema— entiende que en el artículo 9.2 CE contiene un mandato de igualdad material o real, mientras que la igualdad formal o ante la ley quedaría consagrada en el artículo 14 (“Los españoles son iguales ante la ley...”).

Muestra de ello es la STC 34/1981 de 10 de noviembre, (FJ 3b), uno de los primeros pronunciamientos del Tribunal Constitucional en la que se establece que el artículo 9.2 CE formula un correctivo del principio de igualdad formal de acuerdo con las exigencias de un Estado social de Derecho, que consiste básicamente en la consecución de la materialidad de los valores constitucionales:

*El principio de igualdad jurídica consagrado en el art. 14 CE hace referencia inicialmente a la universalidad de la ley, pero no prohíbe que el legislador contemple la necesidad o conveniencia de diferenciar situaciones distintas y de darles un tratamiento diverso, que puede incluso venir exigido, en un Estado social y democrático de Derecho, para la efectividad de los*

*valores que la Constitución consagra con el carácter de superiores del Ordenamiento, como son la justicia y la igualdad (art. 1 CE), a cuyo efecto atribuye además a los poderes públicos el que promuevan las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva (art. 9.2 CE).*

También el Tribunal Constitucional en una sentencia posterior de 1984, STC 83/1984, de 24 de julio, (FJ 3), aporta el significado general y el alcance de esta igualdad material:

*No implica sin embargo este precepto (el art. 14 CE), en modo alguno, la necesidad de que todos los españoles se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, pues esta igualdad real, cuya procura encomienda la Constitución (art. 9.2 CE) a todos los poderes públicos y que es una Finalidad propia del Estado social y democrático de Derecho, no impide que, en la práctica, el ejercicio de determinadas actividades requiera la posesión de determinados medios.*

Se puede observar pues que no se trata de conseguir una identidad absoluta en la posición social de todos los ciudadanos y ciudadanas. Aunque esto ello no impide que el alto Tribunal afirme en otras ocasiones que el principio de igualdad material contenido en el artículo 9.2 constituye a los poderes públicos en la obligación de hacerlo realidad. Así lo hace en la sentencia 27/1981, de 20 de julio, (FJ 10):

*El acto del Legislativo se revela arbitrario (...) cuando engendra desigualdad. Y no ya desigualdad referida a la discriminación —que ésta concierne al art. 14—, sino a las exigencias que el 9.2 conlleva, a fin de promover la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra, finalidad que, en ocasiones, exige una política legislativa que no puede reducirse a la pura igualdad ante la ley.*

En el mismo sentido, la STC 6/1981, de 16 de marzo, (FJ 9), afirma que el artículo 9.2 impone actuaciones positivas a los poderes públicos

*La libertad de los medios de comunicación (...) entraña seguramente la necesidad de que los poderes públicos, además de no estorbarla, adopten las medidas que estimen necesarias para remover los obstáculos que el libre juego de las fuerzas sociales pudieran oponerle. La cláusula del Estado social (art. 1.1 CE) y, en conexión con ella, el mandato genérico contenido en el art. 9.2 CE imponen, sin duda, actuaciones positivas de este género.*

El Tribunal Constitucional en la mayoría de las ocasiones ha interpretado dicho el artículo 9.2 CE como un correctivo del principio de igualdad formal del artículo 14 CE, señalando la necesidad de que el legislador no trate a todos los individuos<sup>94</sup> de la misma manera, sino que sea capaz de tratar de forma diferente aquellas situaciones que son distintas en la vida real. Así, ha afirmado en varias sentencias que «lo proclamado en el artículo 9.2 puede exigir un mínimo de desigualdad formal para progresar hacia la consecución de la igualdad sustancial, como se recoge en las sentencias 114/1983, de 6 de diciembre; 98/1985, de 29 de julio, y 19/1988, de 16 de febrero.

La STC 3/1983, de 25 de enero, (FJ 3), cuyo extracto reproducimos más abajo, justifica un tratamiento legal distinto en aquellos supuestos en que existe o se supone una desigualdad en las condiciones materiales de los destinatarios de la norma.

*Estas ideas encuentran expresa consagración en el art. 9.2 de la CE cuando impone a los poderes públicos la obligación de «promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas », pues con esta disposición se está superando el más limitado ámbito de actuación de una igualdad meramente formal y propugnando un significado del principio de igualdad acorde con la definición del art. 1 que constituye a España como un Estado democrático y social de Derecho, por lo que en definitiva se ajusta a la Constitución la finalidad tuitiva o compensadora del Derecho laboral en garantía de la promoción de una igualdad real, que en el ámbito de las relaciones laborales exige un mínimo de desigualdad formal en beneficio del trabajador.*

Sin embargo, frente a la idea de un artículo 9.2 CE corrector de la pura igualdad formal<sup>95</sup>; existe otra línea en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el principio de igualdad que justifica los supuestos de tratamiento legal diferenciado y favorable a ciertos sectores sociales tradicionalmente discriminados o en situación de inferioridad social basándose únicamente en el artículo 14 del Texto Fundamental.

Esta línea respalda un concepto más amplio del principio de igualdad formal del artículo 14 CE a él se pueden reconducir aquellos supuestos que antes eran resueltos en base

---

<sup>94</sup> El uso del mal llamado masculino “genérico” (invisibilizador de las mujeres desde nuestro punto de vista) es una constante en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

<sup>95</sup> “Puede imponer este precepto, como consideración de principio, la adopción de normas especiales que tiendan a corregir los efectos dispares que, en orden al disfrute de bienes garantizados por la Constitución, se sigan de la aplicación de disposiciones generales en una sociedad cuyas desigualdades radicales han sido negativamente valoradas por la propia Norma Fundamental.” STC 19/1988, de 16 de febrero, FJ 10.

al artículo 9.2. CE. Son claros ejemplos de este línea jurisprudencial las sentencias: STC 65/1983, de 21 de julio y STC 19/1989, de 31 de enero:

*Este principio (el de igualdad) vincula a todos los poderes públicos incluido el legislativo (...), pero no prohíbe que el legislador contemple la necesidad o conveniencia de diferenciar situaciones distintas y darles un tratamiento diverso, siempre que no vulnere otros preceptos constitucionales y que no vaya contra la esencia del principio de igualdad (...). La disparidad normativa establecida por el art. 170 de la LPL (...) no es contraria a la Constitución por cuanto se asienta sobre una desigualdad originaria entre trabajadores y empresarios que tiene su fundamento no sólo en la distinta condición económica entre ambos, sino en su respectiva posición en la propia y especial relación jurídica que los vincula.<sup>96</sup>*

Y seis años después lo argumenta aun más claramente en su STC 19/1989, de 31 de enero, (FJ 4):

*La virtualidad del art. 14 de la Constitución no se agota en la cláusula general de igualdad que inicia su contenido, sino que también persigue la interdicción de determinadas diferencias, históricamente muy arraigadas, que, tanto por la acción de los poderes públicos como por la práctica social, han situado a amplios sectores de la población en posiciones no sólo desventajosas, sino abiertamente contrarias a la dignidad de la persona que reconoce el art. 10 de la Constitución (...) De ahí que, en principio, no puedan considerarse lesivas del principio de igualdad, aun cuando establezcan un trato más favorable, las medidas que tengan por objeto compensar la situación de desventaja de determinados grupos sociales y, en concreto, remediar la tradicional situación de inferioridad de la mujer en el ámbito social y en el mercado de trabajo, matización que, por otra parte, viene siendo habitual en las normas internacionales más recientes sobre igualdad y no discriminación.*

Más recientes pero en la misma línea son la STC 12/2008, de 29 de enero, en la que ante una supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la ley, afirma que las acciones positivas no pueden considerarse discriminatorias (art. 14.2 CE), postura que es ratificada en la STC13/2009, de 19 de enero de 2009 (FJ 11):

*Corrobora la conformidad con la Constitución de la normativa establecida por el legislador autonómico la consideración de que éste no ha condicionado la composición de las candidaturas con arreglo a "criterios diferenciadores determinantes de una dialéctica mayoría/minoría, como sucedería si se exigiera la presencia de un número o porcentaje de personas de determinada raza o de un cierto arco de edad, sino que el criterio atendido es*

---

<sup>96</sup> STC 65/1983, de 21 de julio, FJ 3.

*aquél que en todo caso, de manera universal, divide a la sociedad en dos grupos cuantitativamente equilibrados. Y en virtud del art. 9.2 CE se persigue que ese equilibrio material se traslade desde la sociedad a los órganos políticos de representación ciudadana; lo que resulta, de nuevo, coherente con el principio democrático. Se pretende, en suma, que la igualdad efectivamente existente en cuanto a la división de la sociedad con arreglo al sexo no se desvirtúe en los órganos de representación política con la presencia abrumadoramente mayoritaria de uno de ellos. Una representación política que se articule desde el presupuesto de la divisoria necesaria de la sociedad en dos sexos es perfectamente constitucional, pues se entiende que ese equilibrio es determinante para la definición del contenido de las normas y actos que hayan de emanar de aquellos órganos. No de su contenido ideológico o político, sino del precontenido o substrato sobre el que ha de elevarse cualquier decisión política: la igualdad radical del hombre y la mujer. Exigir a quien quiera ejercer una función representativa y de imperio sobre sus conciudadanos que concurra a las elecciones en un colectivo de composición equilibrada en razón del sexo es garantizar que, sea cual sea su programa político, compartirá con todos los representantes una representación integradora de ambos sexos que es irrenunciable para el gobierno de una sociedad que así, necesariamente, está compuesta" (STC 12/2008, FJ 7).<sup>97</sup>*

Debemos advertir que nuestra jurisprudencia constitucional no concibe estas dos líneas del principio de igualdad como compartimentos estancos, sino que tiende a conjugar y a orientar la interpretación del artículo 14 CE en función del artículo 9.2 CE, así como del valor superior de la igualdad que se recoge del 1.1 CE.

*Esta pauta jurisprudencial, que parte de la hermenéutica sistemática y finalista de la Constitución entraña un enfoque correcto de las relaciones entre valores y principio constituciones al contribuir a mantener el carácter fundamentador, orientador y crítico de aquéllos, y la tarea concretizadora de éstos (Pérez Luño, 2007: 88).*

### **2.2.1.3 La igualdad como derecho fundamental**

El principio de igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación es una vieja aspiración del ser humano que fue recogida con entusiasmo por el movimiento constitucional del siglo XVIII y que marcó el fin del Antiguo Régimen. Se convirtió en una de las principales reivindicaciones de los revolucionarios y revolucionarias liberales, especialmente de los

---

<sup>97</sup> En el sentido de las anteriores y con carácter reciente STC 40/2011, de 31 de marzo de 2011, relativa a los Derechos a la igualdad en la ley, validez del precepto autonómico relativo a las candidaturas electorales equilibradas por sexos (SSTC 12/2008 y 13/2009).



franceses y francesas, hasta el punto de que su proclamación forma parte de la divisa del Estado surgido de la Revolución Francesa ("Libertad, igualdad, fraternidad").

España, como recoge Gálvez Muñoz, se inserta desde muy pronto en este movimiento jurídico-político, y permaneció en él de forma discontinua; pudiéndose comprobar cómo el principio de igualdad ante la ley no se plasmó de forma expresa en sus Constituciones hasta bien entrado el siglo XX.

Lo hizo con la Constitución republicana de 1931, que en su artículo 2 proclamaba la igualdad ante la ley de todos los españoles, mientras que el artículo 25 recogía la prohibición de discriminación por determinadas circunstancias (naturaleza, filiación, sexo, clase social, riqueza, ideas políticas y creencias religiosas)<sup>98</sup>.

En las Constituciones anteriores solo se observan concreciones aisladas de esta genérica aspiración. Así, casi todas las Constituciones españolas del siglo XIX recogen la declaración de que todos los españoles pueden acceder a los empleos y cargos públicos según su mérito y capacidad (artículo 5 de la Constitución de 1837, artículo 5 de la Constitución de 1845, artículo 27 de la Constitución de 1869 y artículo 15 de la Constitución de 1876; también lo hace, en el siglo XX, el artículo 40 de la Constitución republicana).

El artículo 14 de la Constitución de 1978, sin otro antecedente en el constitucionalismo español que el ofrecen los artículos 2 y 25 de la Constitución de 1931, es, sin embargo, un precepto muy frecuente en el ámbito del Derecho Constitucional Comparado, tanto histórico como actual. Los referentes más claros son la Constitución francesa de 1958 (artículo 2.1º), la Constitución italiana de 1947 (artículo 3) y la Constitución alemana de 1949 (artículo 3).

A diferencia de la Constitución alemana, nuestro texto constitucional no utiliza apartados diferentes para distinguir la proclamación del principio formal de la igualdad ante la ley y sus especificaciones que, bajo la prohibición expresa de determinados tipos de discriminación, consagra las situaciones jurídicas subjetivas, todo ello dentro del marco normativo del artículo 14 CE: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”

---

<sup>98</sup> GÁLVEZ MUÑOZ, L. *Sinopsis del artículo 14 Constitución Española*, publicada en la página Web del Congreso: <http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=14&tipo=2> (consultada en última ocasión febrero 2012).

No obstante y aunque nuestro texto constitucional no utiliza apartados diferentes para distinguir la proclamación del principio formal de la igualdad ante la ley, como acabamos de señalar, sí que en nuestro texto constitucional se reconocen derechos fundamentales de igualdad en otros sectores del articulado de la Constitución como por ejemplo la igualdad de los hijos con independencia de su filiación (39.2 CE); el acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos público (31.1 CE); la igualdad de derechos y obligaciones de los españoles en cualquier parte del territorio del Estado (139.1 CE)...

Es llamativa la cantidad de jurisprudencia constitucional basada en el artículo 14 CE que se ha elaborado.<sup>99</sup> Para la selección de las Sentencias de Tribunal Constitucional que vamos usar en este apartado nos hemos basado en la selección previa efectuada por Gálvez Muñoz en su sinopsis del artículo 14CE, publicada en la página Web del Congreso.<sup>100</sup>

Nos encontramos sin duda ante uno de los preceptos más invocados en los recursos de amparo presentados por la ciudadanía ante el Tribunal Constitucional, el segundo, solo por detrás del artículo 24 CE relativo a la tutela judicial efectiva. En este sentido Gálvez Muñoz señala que:

*El Tribunal Constitucional ha definido el principio de igualdad como la prohibición de toda diferencia de trato que carezca de una justificación objetiva y razonable; ha afirmado el carácter vinculante de este principio tanto para el legislador (igualdad en la ley), como para los órganos aplicadores del Derecho (igualdad en la aplicación de la ley) y los particulares (igualdad horizontal); ha matizado la vinculación de los particulares al principio de igualdad al señalar que su libertad de actuación sólo está limitada constitucionalmente de forma directa por la prohibición de discriminar por las*

---

<sup>99</sup> También se puede analizar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional desde tomando como variable su proyección sobre aspectos concretos de las relaciones jurídicas, es decir, sobre campos materiales específicos, así a título ejemplificativo podemos señalar: en materia tributaria habría que citar las Sentencias 45/1989, de 20 de febrero, 47/2001, de 15 de febrero, 212/2001, de 29 de octubre, 255/2004 de 23 de diciembre, 189/2005 de 7 de julio, 295/2006 de 11 de octubre, 45/2007 de 1 marzo y 71/2008 de 26 de febrero; en materia de parejas de hecho la 184/1990, de 15 de noviembre, la 29/1991, de 14 de febrero (también las 30, 31, 35 y 38/1991, de idéntica fecha), 77/1991, de 7 de abril, 222/1992, de 11 de diciembre, 125/2003, de 17 de julio, 204/2003 de 16 de junio, 174/2004 de 11 de mayo, 203/2005 de 10 de mayo, 187/2006 de 6 de junio, 202/2009 de 22 de octubre y 77/2010 de 19 de octubre; en lo relativo al acceso a los cargos y funciones públicas la 75/1983, de 3 de agosto, la 148/1986, de 25 de noviembre, la 27/1991, de 14 de febrero, la 215/1991, de 14 de diciembre, la 269/1994, de 3 de octubre, y la 34/1995, de 6 de febrero, 89 y 90/2005 de 18 de abril, 361/2006 de 18 de diciembre, 129/2007 de 4 de junio, 118/2008 de 13 de octubre, 130/2009 de 1 de junio y 16/2010 de 3 de febrero; en relación con la actuación procesal de las partes la 114/1987, de 23 de septiembre, 66/1989, de 17 de abril, 186/1990, de 15 de noviembre, 124/1991, de 3 de junio, 16/1994, de 20 de enero, 125/1995, de 24 de julio, 106 y 107 de 2007 ambas de 10 de mayo y 225/2007 de 22 de octubre; o en el ámbito nobiliario la Sentencia 126/1997, de 3 julio, y el Auto 142/2000, de 12 de junio; en relación con la igualdad en la aplicación de la ley por los miembros del Poder Judicial es conveniente consultar las Sentencias 8/1981, de 30 de marzo; 49/1982, de 14 de julio; 30/1987, de 11 de marzo; 66/1987, de 21 de mayo; 144/1988, de 12 de julio; 141/1994, de 9 de mayo; 112/1996, de 24 de junio; 2/1997, de 13 de enero; 29/1998, de 11 de febrero; y 150/2001, de 2 de julio 129/2004 de 19 julio, o la Sentencia núm. 31/2008 de 25 febrero.

<sup>100</sup> GÁLVEZ MUÑOZ, L, *Sinopsis del artículo 14 Constitución Española*, publicada en la página Web del Congreso: <http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=14&tipo=2> (consultada en última ocasión febrero 2012).

*causas expresamente mencionadas en el artículo 14, por considerarse de orden público, mientras que en lo demás ha de estarse a lo que establezcan las leyes y los jueces, que en todo caso deberán ponderar este trascendente principio con el de autonomía de la voluntad, implícito en la Constitución.*<sup>101</sup>

La doctrina que ha establecido el Alto Tribunal resulta fundamental para conocer cuáles son los criterios o elementos que nos pueden permitir distinguir entre una diferencia de trato justificado y un trato discriminatorio y, por tanto, constitucionalmente contrario a nuestro texto constitucional y como ya señalásemos en cualquier caso inadmisibile.

De igual manera a través de la doctrina constitucional se ha otorgado a las condiciones personales explícitamente enunciadas en el artículo 14 CE tales como nacimiento, raza, sexo, religión y opinión el tratamiento de "categorías susceptible de discriminación", de tal manera que todo trato desigual basado en alguna de esas circunstancias deberá ser sometido a una revisión especialmente rigurosa para el análisis de su constitucionalidad.<sup>102</sup>

En relación a lo anterior Pérez Luño, establece en sus conclusiones al análisis de “la igualdad como derecho fundamental”, que la condición de derecho fundamental de la igualdad formal sancionada en el artículo 14 se comprueba por su concisa inclusión en el texto constitucional<sup>103</sup>; así como por su garantía reforzada para la tutela de las libertades y derechos que se recoge en el art. 53.2 CE (Pérez Luño, 2007: 96).

---

<sup>101</sup> GÁLVEZ MUÑOZ, L, *Sinopsis del artículo 14 Constitución Española*, publicada en la página Web del Congreso: <http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=14&tipo=2> (consultada en última ocasión febrero 2012).

<sup>102</sup> Esta doctrina general se encuentra recogida en diversas resoluciones de los años 80 del pasado siglo, fundamentalmente, las Sentencias 8/1981, de 30 de marzo; 10/1981, de 6 de abril; 22/1981, de 2 de julio; 23/1981, de 10 de julio; 49/1982, de 14 de julio; 81/1982, de 21 de diciembre; 34/1984, de 9 de marzo; 166/1986, de 19 de diciembre; 114/1987, de 6 de julio; 116/1987, de 7 de julio; 123/1987, de 15 de julio; 128/1987, de 16 de julio; y 209/1988, de 10 de noviembre. También tienen interés, por los resúmenes y las citas que ofrecen, muchas Sentencias posteriores, entre las que destacan la 68/1991, de 8 de abril; 28/1992, de 9 de marzo; 3/1993, de 14 de enero; 147/1995, de 16 de octubre; 46/1999, de 22 de marzo; 39/2002, de 14 de febrero; 87/2009 de 20 abril. También resulta relevante para la comprensión del derecho de igualdad como principio fundamental, el análisis que hace el Tribunal Constitucional en su sentencia 41/2006, de 13 de febrero, que en su fundamento 3 declara: “puede citarse a modo de ejemplo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al analizar el alcance del art. 14 del CEDH ha destacado que la orientación sexual es una noción que se contempla, sin duda, en dicho artículo, señalando que la lista que encierra el precepto tiene un carácter indicativo y no limitativo”.

<sup>103</sup> Capítulo segundo (Derechos y Libertades) del Título Primero (De los derechos y deberes fundamentales) de la Constitución Española.

### **2.2.1.3.1 La consolidación de las mujeres como sujetos constitucionales**

Analizado el derecho a la igualdad en sus diferentes dimensiones constitucionales, como valor, como principio y como derecho fundamental, podemos ver como la Constitución se impone al resto de nuestro ordenamiento jurídico con la capacidad de expulsar al resto de las normas que no sean conforme con el texto constitucional y consagra la igualdad como un derecho fundamental de aplicación inmediata por todos las personas operadoras jurídicas, y directamente invocable en un proceso judicial de amparo ante el Alto Tribunal.

Pese a todo y aunque pudiera parecer paradigmático, el texto constitucional carece de cualquier tipo de perspectiva de género, Ventura Franch (1999: 47) señala que consecuencia de ello es que se haya situado el derecho de las mujeres a la igualdad en el artículo 14 CE, junto con el resto de interdicción de las desigualdades sociales.

En este sentido podemos pensar que la ubicación dentro del artículo 14 CE conlleva ya en si un condicionamiento importante porque la desigualdad de género, cuyos orígenes y configuración no son comunes al resto de la desigualdades sociales, es considerada como dentro de una genérica interdicción de desigualdad cuyas consecuencias sobre todo a la hora de delimitar conceptos tales como la igualdad material y formal no siempre es bien resuelta por parte de las personas operadoras jurídicas.

Así, ante situaciones del cotidiano como la violencia de género (Gil Ruiz, 2007), la discriminación salarial, la discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres en los puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica, o los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar muestran como la igualdad plena (efectiva) entre mujeres y hombres, es una tarea pendiente y que seguirá pendiente mientras que no consigamos transformar la situación patriarcal en la que estamos inmersas todas las personas.

No debemos olvidar que el derecho está concebido, desde su origen, con un perfil del justiciable, que responde a un varón, heterosexual, de raza blanca y con cierta capacidad económica, y que como indica Balaguer Callejón (2005: 86), en torno a este perfil se construyen las normas jurídicas, y este esquema se puede considerar de aplicación general en todos los órdenes jurisdiccionales.

*La consecuencia más importante de toda esta situación es que la mujer aún no está consolidada como sujeto constitucional con plenitud de derechos. Lo está formalmente y le alcanzan todos los derechos que el ordenamiento contiene pero solo como por extensión de los del hombre. Sin embargo, estos derechos no están creados para ella, lo que produce inevitablemente una distorsión en la aplicación de las normas. Por ello, para avanzar en el camino de la igualdad es importante en primer lugar considerar que tanto el hombre como la mujer son sujetos constitucionales.*

*En lo que respecta a la regulación de los contenidos propiamente normativos, la mujer no ha tenido la condición de sujeto de derecho en alguno de los derechos más importantes del Estado moderno. Algunos de los derechos fundamentales se le han denegado directamente, como el del sufragio, o los derivados de la capacidad de contratar, de la propiedad, o del ejercicio de actividades profesionales. Esta es una restricción del universo jurídico a la mujer que se ignora como sujeto jurídico (Balaguer Callejón, 2007: 38-48).*

Pese a que comulgamos con las ideas expuestas por Ventura French y Balaguer Callejón, no podemos por ello, como ya señalásemos en el capítulo anterior, obviar la necesidad social, de carácter urgente, de abrir la categoría de sujeto jurídico, pues el hecho de que en la actualidad solo sean sujetos de derechos mujeres y hombres, así heterodesignadas, nos perpetua a continuar en una sociedad binaria y excluyente al sistema de la que debemos huir si de verdad queremos dar cavidad a todas las personas, debemos evitar que el actual sistema sexo-genero sea el elemento determinante a la hora de elaborar las categorías jurídicas.

*Las demandas de equidad han dado últimamente un giro imprevisto y nos exigen una nueva formulación de la igualdad que podría sintetizarse así: hay que volver a valorar las diferencias para avanzar en la lógica de la igualdad (...) En el mundo contemporáneo se ha producido un gran desplazamiento que es preciso tomar en cuenta para configurar realidades tan valiosas como el mundo común, lo público o la laicidad con el fin de integrar en ellas las diferencias y no simplemente neutralizarlas; no se trata de erradicarlas sino de reconocerlas bajo un régimen de igualdad. Nuestro mayor desafío consiste en integrar al individuo no ya por la privatización de sus pertenencias sino por el reconocimiento público de su identidad diferenciada, tanto desde el punto de vista del género, como desde su dimensión cultural o su identificación con una determinada comunidad política (Salazar Benítez, 2010).<sup>104</sup>*

---

<sup>104</sup> En prólogo de Daniel Innerarity.

### 2.3 La Ley Orgánica para la Igualdad 3/2007 de 22 de marzo como primera ley que desarrolla el principio de igualdad

La “Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres”<sup>105</sup>, en adelante Ley de igualdad<sup>106</sup>, constituye el marco de desarrollo del principio de igualdad en todas sus dimensiones, que acabamos de analizar. En esta ley se incorporan modificaciones legislativas que tienen como objetivo avanzar en la igualdad real y en el ejercicio pleno de los derechos de mujeres y hombres, y para alcanzar tales objetivos propone la implementación de medidas transversales que incidan en todos los órdenes de la vida política, jurídica y social, a fin de erradicar las discriminaciones contra las mujeres.

A través de lo dispuesto en su disposición final cuarta se transponen a nuestro derecho estatal dos Directivas comunitarias: la Directiva 2002/73/CE, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales y a las condiciones de trabajo<sup>107</sup>; y la Directiva 2004/113/CE, sobre aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y suministro, que reflejan la preocupación de las instituciones de la Unión Europea por la situación de las mujeres, y el impulso que desde las mismas se está dando para corregirla<sup>108</sup>; y aunque con carácter anterior esta ley también incorpora la Directiva 97/80/CE del Consejo, relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo.<sup>109</sup>

Señalaremos que la transposición de las citadas Directivas en la Ley de igualdad, se puede constatar por la inclusión conceptos básicos que van a permitir uniformar la interpretación de una serie de términos<sup>110</sup>, que resultan indispensables para su correcta aplicación.

---

<sup>105</sup> Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. BOE núm. 71, de 23 de marzo de 2007.

<sup>106</sup> No es inusual encontrar en la literatura jurídica la nomenclatura LOI para hacer referencia a Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

<sup>107</sup> Directiva 2002/73/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, de reforma de la Directiva 76/207/CEE.

<sup>108</sup> Directiva 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004 sobre aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro.

<sup>109</sup> Directiva 97/80/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997 relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo.

<sup>110</sup> Estos conceptos se recogen principalmente en el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: “1. Se considera discriminación directa por razón de sexo, la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación

Este texto legal, la LOI, tiene vocación generalista, plantea la aplicación de la igualdad efectiva de mujeres y hombres en la plenitud de las relaciones políticas, laborales, económicas, culturales y sociales, así como en las personales y familiares, incidiendo para ello en todo el Ordenamiento jurídico.

Además esta vocación generalista puede detectarse en la medida en que incide sobre todo el ordenamiento jurídico, imponiendo el principio de igualdad efectiva a las diferentes ramas del Derecho en aquellos aspectos en los que está involucrado el género. Y así contiene normas que se refieren a materias muy diversas, como la laboral, civil, mercantil, administrativa o procesal, y además en sus Disposiciones Adicionales se modifican un importante número de leyes<sup>111</sup> para adaptarla a la nueva filosofía de la Ley de Igualdad, para que recorra de manera transversal todo nuestro Ordenamiento Jurídico.

*Podemos decir que tiene un efecto expansivo sobre todo el Ordenamiento jurídico, al que parece que se le ha dado un corte trasversal para que la igualdad efectiva llegue a todos sus rincones. Y es que la disposición que analizamos pretende abordar el problema en toda su complejidad con la intención de darle una solución global, incidiendo para ello en todos los ámbitos en los que las relaciones de género estén presentes, con el fin de alcanzar el objetivo que se pretende, con independencia de la parcela concreta del Derecho a la que pertenezca* (Valpuesta Fernández, 2007: 11).

La Ley de Igualdad responde a la exigencia constitucional de un Estado democrático y social de derecho, esto supone que la igualdad solo será efectiva si todas las ciudadanas y

---

comparable. 2. Se considera discriminación indirecta, por razón de sexo, la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados. 3. En todo caso, se considera discriminación toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo.” (El subrayado es nuestro).

<sup>111</sup> Esta Ley modifica muchos de los ámbitos de nuestro ordenamiento jurídico, sin ir más lejos modifica los siguientes textos jurídicos: la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio del Régimen Electoral General, Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, Ley 29/1998, de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, Ley 56/2003, de 16 de diciembre de Empleo, Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública (hoy las reformas se encuentran incorporadas en el Estatuto Básico del Empleado Público (ley 7/2007 de 12 de abril), Ley 17/1999, de 18 de mayo de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, Ley 55/2003, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de salud, Ley de Sociedades Anónimas, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios (cambios que se han introducido en la Ley 44/2006, de 29 de diciembre de mejora de la protección de consumidores y usuarios), y Ley 5/1984, de 26 de marzo Reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado, (cambios introducidos en la actualmente vigente ley 12/2009 de 30 de octubre Reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria) entre otras.

ciudadanos pueden acceder en condiciones de igualdad a todas las esferas de decisión y disfrutar de una manera real y efectiva de todos los derechos recogidos en nuestra Constitución.

*La Ley de Igualdad parte del reconocimiento implícito de una realidad: que en la sociedad española las mujeres no ejercitan sus derechos en las mismas condiciones que los hombres. Se asume pues por el legislador la situación de discriminación que en todos los ámbitos de relación se encuentran aquellas, y esto es importante por cuanto este reconocimiento será el que legitime el conjunto de medidas que en la misma se contienen, innecesarias si la situación no fuera la descrita anteriormente (Valpuesta Fernández, 2007: 11).*

Del análisis de la Ley de igualdad podemos dilucidar que la exigencia de igualdad efectiva de las mujeres y de los hombres se concreta en el principio de igualdad de trato y de oportunidades que se debe dispensar a ambos géneros.

#### 2.4 La regulación legal del principio de igualdad en la distribución territorial de competencias estatales y autonómicas andaluzas

El modelo de distribución territorial del Estado Español tiene carácter jerárquico, es decir, las competencias que están atribuidas al Estado, están reguladas en sus líneas rectoras por el mismo Estado, lo mismo ocurre con las competencias atribuidas a las Comunidades autónomas y a las administraciones locales<sup>112</sup>.

La distribución de competencias en el Estado español viene recogida en nuestro texto constitucional, concretamente en los artículos 148 CE relativo a las competencias asumibles por las CCAA, 149 CE relativo a las competencias exclusivas del Estado y el artículo 150 CE que a su vez está dividido en tres apartados donde los dos primeros prevén las posibilidades de atribución de competencias a las Comunidades Autónomas al margen de sus Estatutos de Autonomía (ya sea por medio de leyes marco, ya sea por medio de leyes orgánicas de transferencia o delegación), y el tercero permite al Estado incidir en el ejercicio por las Comunidades Autónomas de sus competencias propias a través de leyes de armonización.

---

<sup>112</sup> La descentralización de las Administraciones españolas en tres ámbitos: el estatal, el autonómico, y el local (Ayuntamientos y Diputaciones) ha hecho necesaria la distribución de las competencias en muchas materias.



De entre todas las competencias exclusivas que están atribuidas al Estado, nos centraremos en la referente al derecho de igualdad; así nuestra Constitución recoge en su artículo 149.1.1 CE que:

*El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:  
(...) La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.*

De este articulado se desprende que la regulación en materias de igualdad en lo concerniente al desarrollo del artículo 14 CE, como principio de igualdad de trato reconocido en nuestra constitución, ha sido competencia exclusiva del Estado hasta la promulgación de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía<sup>113</sup>, que en su artículo 73, relativo a las políticas de género, asigna la competencia exclusiva en materias de políticas de género a la Comunidad Autónoma Andaluza.

*Artículo 73. Políticas de género.*

*1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de políticas de género que, respetando lo establecido por el Estado en el ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 149.1.1.ª de la Constitución, incluye, en todo caso:*

*a) La promoción de la igualdad de hombres y mujeres en todos los ámbitos sociales, laborales, económicos o representativos. Se atribuye expresamente a la Comunidad Autónoma la facultad de dictar normativas propias o de desarrollo en esta materia.*

*b) La planificación y ejecución de normas y planes en materia de políticas para la mujer, así como el establecimiento de acciones positivas para erradicar la discriminación por razón de sexo.*

*c) La promoción del asociacionismo de mujeres.*

De igual manera la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su artículo 14.1, declara como principio general la vinculación de los poderes públicos con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres, una exigencia que concreta mediante la integración del principio de igualdad de

---

<sup>113</sup> Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, BOJA núm. 56, de 20 de marzo 2007.

trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística, con la finalidad de eliminar la segregación laboral y las diferencias retributivas.

Estas disposiciones se completan con diferentes criterios de actuación, como el de colaboración y cooperación entre las administraciones públicas, es decir, la Administración General del Estado, de las CCAA y de las Entidades Locales (arts. 14.3 y 21).

En consecuencia, aunque los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía están vinculados a lo establecido en los tratados y en las normas constitucionales y estatutarias, las políticas de género son de su exclusiva competencia y por tanto la Comunidad Autónoma tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para promover la igualdad de derechos de las mujeres y de los hombres.

Para ello, deben ejercitar estas competencias evidentemente, desde una perspectiva de género, formulando y desarrollando una política global de protección de los derechos de las mujeres. La igualdad formal debe llenarse de contenido a través de una actuación decidida de todos los poderes públicos y de una progresiva concienciación social e individual.

En esta línea la Comunidad Autónoma asume, como se señala en la exposición de motivos del Estatuto de Autonomía para Andalucía, un fuerte compromiso en esa dirección, como se constata en los siguientes artículos del Estatuto de Autonomía andaluz:

- *Art. 10.2: “La Comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la mujer andaluces, promoviendo la democracia paritaria y la plena incorporación de aquélla en la vida social, superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica, política o social”*
- *Art. 15 “Se garantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos”.*
- *Finalmente de su Art. 38 “La prohibición de discriminación del artículo 14 y los derechos reconocidos en el Capítulo II vinculan a todos los poderes públicos andaluces y, dependiendo de la naturaleza de cada derecho, a los particulares, debiendo de ser interpretados en el sentido más favorable a su plena efectividad”.*

Así en relación a la legitimidad constitucional de una declaración de derechos y principios rectores incluida en los Estatutos de Autonomía Agudo Zamora (2011) señala a este respecto que:

*El Tribunal entiende que estos derechos estatutarios no son derechos subjetivos sino mandatos al legislador, para diferenciarlos de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, y, por lo tanto, los derechos estatutarios sólo vinculan al legislador autonómico. Esto supone, según el Tribunal Constitucional, que sólo serán exigibles ante los órganos judiciales cuando el legislador autonómico los haya desarrollado mediante ley. Igualmente, los derechos estatutarios son derechos materialmente vinculados al ámbito competencial propio de la comunidad autónoma; es decir, son las competencias reconocidas en el Estatuto las que delimitan el ámbito en que los derechos estatutarios pueden operar.*

*El desarrollo de los derechos ha de hacerse por ley, no siendo posible hacerse por el legislador orgánico estatuyente, dado que en realidad, no es que pueda hacerse más por ley autonómica; es que se hace cosa distinta, como corresponde en el juego de normas ordenadas con arreglo al criterio de competencia, y esto por razones que tienen que ver con la condición del Estatuto como norma institucional básica, por un lado, y con su vigencia territorial limitada, por otro.<sup>114</sup>*

#### **2.4.1 El principio de igualdad en la legislación autonómica andaluza. El Estatuto de Autonomía de Andalucía**

Andalucía accedió a ser Comunidad Autónoma por vía del artículo 151 CE, a través de la Ley Orgánica 6/1982, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Andalucía,<sup>115</sup>(en adelante Estatuto de Autonomía de 1982), este Estatuto fue reformado en 2007 por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que proporcionó a Andalucía un nuevo Estatuto mucho más acorde con los cambios sociales y políticos que se habían producido en nuestra Comunidad Autónoma en los últimos 25 años.

En relación al tema que nos ocupa, el principio de igualdad en la legislación autonómica andaluza, debemos comenzar indicando que tanto el anterior Estatuto, como el actual, (como en definitiva todo nuestro Ordenamiento jurídico) han estado inspirados en su elaboración por el principio de igualdad.

Así el artículo 12.2 de Estatuto de Autonomía de 1982 establecía que: “La Comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la mujer andaluces, promoviendo la plena incorporación de ésta en la vida social y superando cualquier

---

114 En esta misma línea la véase MUÑOZ MACHADO, S; REBOLLO PUIG, M, (dir.), *Comentarios al Estatuto de Autonomía para Andalucía*, Madrid: Thomson-Civitas, Cizur Menor. 2008.

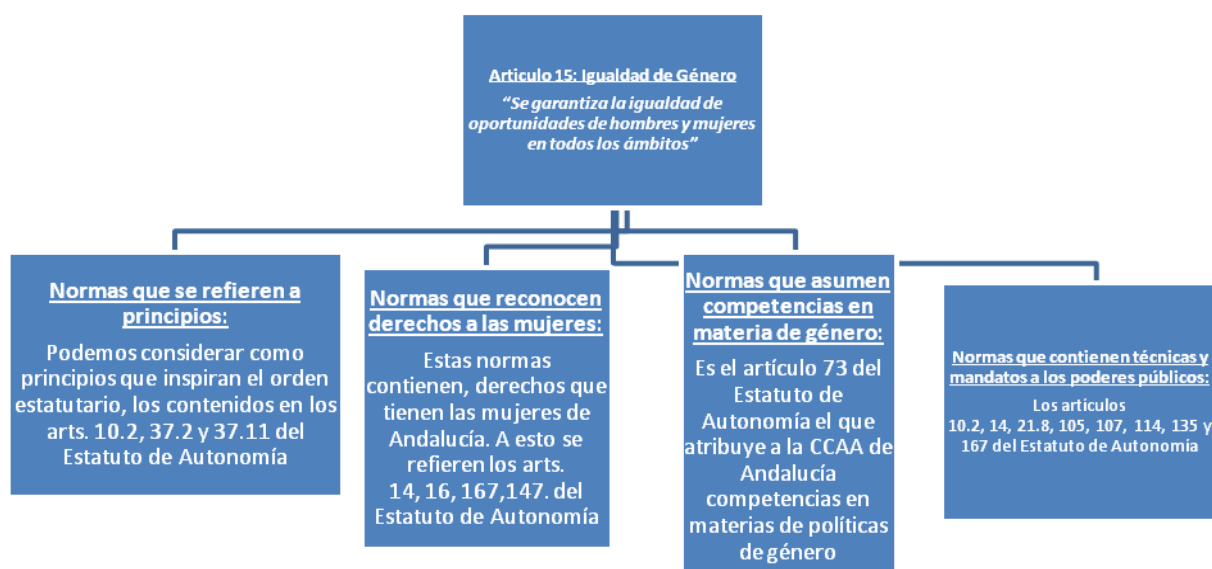
<sup>115</sup> Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Andalucía. B.O.E. nº. 9 de 11 de enero de 1982 y B.O.J.A. nº. 2 de 01 de febrero de 1982. Este Estatuto de Autonomía estuvo vigente hasta el 20 de marzo de 2007.

discriminación laboral, cultural, económica o política.” Y el vigente Estatuto recoge en su artículo 15 la garantía de igualdad de oportunidades en todos los ámbitos.

Y es que como acabamos de señalar los tiempos han cambiado. El reto actual que con el que se enfrenta el Estado y el Gobierno autonómico andaluz, no consiste solo en plantear explícitamente la igualdad entre hombres y mujeres, sino que radica en la necesidad de garantizar políticas efectivas que remuevan los obstáculos para la plena igualdad en todos los ámbitos de la vida, más allá del ámbito político, social y económico de todas las personas.

Con ese fin se plantea como una de las aportaciones jurídico-políticas del Estatuto de Autonomía para Andalucía, la introducción de un decálogo de derechos sociales, que expresa el entramado de relaciones jurídicas y de poder entre la CCAA andaluza y sus ciudadanía, vinculando a los poderes públicos de forma directa en el momento de ejercer sus facultades normativas y de actuación, a la par que cumple con el compromiso de la Junta de Andalucía, como poder público con los valores superiores del ordenamiento jurídico y con el mandato transformador del Estado Social (Art. 9.2 CE).

Este decálogo de derechos sociales viene encabezado y no de manera casual por el artículo 15 del nuevo Estatuto, el artículo referido a la igualdad de género, en el que: “Se garantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos”.



Y es que no hemos de perder de vista, que para conseguir esta igualdad de oportunidades proclamada en el texto estatutario, se tiene que garantizar institucional y legalmente, que el criterio de la igualdad de trato esté integrado en el diseño, aplicación y evaluación del conjunto de la legislación, así como, de forma transversal, en todos los campos de la política y de la sociedad.

Solo así se garantiza el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, y se asegura la protección contra la violencia de género. En esta línea Balaguer Callejón (2008: 5) señala que el Estatuto de Autonomía de Andalucía, tiene la virtud de recoger todos y cada uno de los planteamientos que el movimiento feminista había venido demandando desde la década de los ochenta.

Podemos concluir este apartado diciendo que aunque aún queda mucho camino por andar el actual Estatuto de Autonomía Andalúz consigue integrar el criterio de la igualdad de género, en el conjunto de la legislación de forma transversal en todos los campos de la política y de la sociedad<sup>116</sup>, quizás otra cuestión sea la puesta en marcha de toda esta legislación, de nuevo debemos confrontar la igualdad formal con la igualdad real y de oportunidades para poder así evaluar la eficacia y eficiencia de estos dispositivos que tienen como objetivo llegar a concordar ambas cara de la misma moneda, la igualdad formal y la igualdad real y de oportunidades.

#### **2.4.1.1 Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía**

El proceso de descentralización, que a partir del texto constitucional conduce al Estado autonómico, conlleva que sean diversos los poderes públicos que tienen que proyectar y desarrollar políticas de promoción de la igualdad de oportunidades.

La Comunidad Autónoma de Andalucía asume en el Estatuto de Autonomía para Andalucía un fuerte compromiso en esa dirección, y como consecuencia de ello y de

---

<sup>116</sup> En este sentido o hay más que observar como el texto estatutario señala que la igualdad de género estará presente en los principios rectores de las políticas públicas (arts. 37.1, 2; 37.1, 3; 37.1, 4; 37.1, 5; 37.1, 7; 37.1, 11; y 37.2 del Estatuto de Andalucía).

conformidad con los artículos 10.2, 15 y 38 del citado Estatuto se aprueba la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.<sup>117</sup>

Esta Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía tiene como objetivo principal garantizar la vinculación de los poderes públicos en todos los ámbitos, en el cumplimiento de la transversalidad como instrumento imprescindible para el ejercicio de las competencias autonómicas en clave de género

Con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, se pretende alcanzar, mediante diversos instrumentos y desarrollos eficaces, una sociedad igualitaria, justa, solidaria y democrática en todas las personas tengan, realmente, los mismos derechos y oportunidades; marcándose como objetivo principal garantizar la vinculación de los poderes públicos en todos los ámbitos, en el cumplimiento de la transversalidad como instrumento imprescindible para el ejercicio de las competencias autonómicas en clave de género.

Como se señala en la propia Exposición de motivos de la Ley, en Andalucía, la integración de la perspectiva de género ha supuesto avances muy importantes, siendo claros ejemplos la obligatoriedad del informe de evaluación de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos aprobados por el Consejo de Gobierno y el enfoque de género en los presupuestos de la Comunidad Autónoma, según han establecido los artículos 139 y 140 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

Como veremos en los siguientes capítulos el análisis de la elaboración de estos Informes y su aplicación en los textos legales definitivos tanto en Andalucía como en el ámbito estatal conforman el objetivo de la presente investigación.

Podemos afirmar que la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, ha venido a establecer los fundamentos jurídicos para avanzar hacia la efectiva igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida social, económica, cultural y política. A fin de conseguir los objetivos descritos esta Ley se ha estructurado de la siguiente manera:

---

<sup>117</sup> Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía BOJA núm. 247, de 18 de diciembre de 2007. Esta Ley deroga los artículos 30.3a) y 140 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, y modifica el 30 de la Ley 10/1988, de 29 de diciembre.

*La presente Ley se estructura en un Título Preliminar, cuatro Títulos, una disposición adicional, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. El Título Preliminar establece los conceptos esenciales en materia de igualdad de género y los principios generales que han de presidir la actuación de los poderes públicos en relación con la igualdad de género.*

*El Título I recoge, en su Capítulo I, las acciones para garantizar la integración de la perspectiva de género en las políticas públicas: el informe de evaluación de impacto de género, los presupuestos públicos con enfoque de género, el Plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres, el lenguaje no sexista e imagen pública y las estadísticas e investigaciones con perspectiva de género.*

*El Título II establece las medidas para promover la igualdad de género en las políticas públicas de los distintos ámbitos de actuación. El Título III se ocupa de la organización institucional y coordinación, como estrategia adecuada y necesaria para impulsar, desarrollar y evaluar las acciones y políticas públicas para promover la igualdad de género en Andalucía.*

*Y por último, el Título IV se refiere al establecimiento de garantías para la igualdad de género.<sup>118</sup>*

Como se señala en su propia exposición de motivos, esta Ley requiere para aplicación de un Plan Estratégico que concrete los objetivos, ámbitos y medidas de actuación en los que los poderes públicos han de centrar sus acciones así como la coordinación entre los distintos niveles de las Administraciones Públicas (estatal, autonómica y local) y los distintos estamentos sociales.

#### **2.4.1.1.1 “I Plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres en Andalucía 2010-2013”**

Con el objetivo de determinar las medidas para la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de la discriminación por razón de sexo, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, en su artículo 7, establece que se aprobará el Plan Estratégico para la Igualdad de mujeres y hombres.

La elaboración del “I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013”<sup>119</sup> se analizó y debatió en el seno de la Comisión Interdepartamental

---

<sup>118</sup> Resumen propio de la estructura de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía a partir de lo recogido en su Exposición de Motivos. Cabe destacar que es el artículo sexto, como veremos más adelante donde se regula la evaluación de impacto de género. (El subrayado es nuestro).

<sup>119</sup> I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013, aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de enero de 2010.

para la Igualdad de Mujeres y Hombres<sup>120</sup>, y allí se acordó atribuir su elaboración al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)<sup>121</sup>.

Así, el “I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013”<sup>122</sup>, se constituye como instrumento fundamental, para garantizar la integración de la perspectiva de género en las políticas públicas llevadas a cabo por la Administración de la Junta de Andalucía.

El Plan propone una vigencia cuatrianual, que comenzará a contar a partir del año siguiente de la entrada en vigor de Ley para la promoción de la Igualdad de Género en Andalucía.

Para hacer efectivas estas directrices, y teniendo en cuenta la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, se han establecido ocho Líneas de Actuación con 36 objetivos desde los que se van a trabajar las tres directrices señaladas en él: Transversalidad de género; Conciliación y corresponsabilidad; y Empoderamiento de las mujeres, directrices que desarrollamos un poco más adelante.

Estructuralmente el PLAN consta de cuatro partes: (I) Contenido, (II) Implementación y desarrollo, (III) Presupuesto y (IV) Anexos que se estructuran con el desarrollo de 8 epígrafes.

Así, el Plan Estratégico se presenta como una herramienta que aborda los compromisos políticos que le animan así como la metodología que se va a aplicar dirigida a la consecución de un logro de interés global: la igualdad de género, identificando para ello las áreas de intervención, los objetivos a conseguir en cada una de ellas, las acciones a desarrollar para su consecución, los plazos en los que se debe cumplimentar el compromiso de acción, la identificación de las estructuras implicadas y la metodología de gestión a aplicar.

---

<sup>120</sup> Esta Comisión se crea en virtud del art 3.cd, el Decreto artículo 437/2008, de 2 de septiembre, por el que se crea la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

<sup>121</sup> El Instituto Andaluz de la Mujer tiene como finalidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.2 de la Ley 10/1988, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1989, que constituye su Ley fundacional, promover las condiciones para que sea real y efectiva la igualdad de la mujer y el hombre andaluces, fomentando la participación y presencia de esta en la vida social, superando cualquier discriminación laboral, cultural económica o política, en cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 14 de la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Además, la disposición adicional única de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, añade, entre las funciones del Instituto Andaluz de la Mujer, la coordinación de las políticas de igualdad. Web: <http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php> (Consultada en última ocasión en marzo 2012).

<sup>122</sup> I Plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres en Andalucía 2010 -2013 Web : [http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/html/sites/presidencia/contenidos/la\\_consejeria/Unidad\\_Igualdad\\_Genero/Documentacion/PLAN ESTRATEGICO PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRRES EN ANDALUCIA 2010-2013\\_x2x.pdf](http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/html/sites/presidencia/contenidos/la_consejeria/Unidad_Igualdad_Genero/Documentacion/PLAN ESTRATEGICO PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRRES EN ANDALUCIA 2010-2013_x2x.pdf) (Consultada en última ocasión en marzo 2012).



El significado de este Plan Estratégico es poner en marcha la estrategia de Mainstreaming o Enfoque integrado de Género en la Junta de Andalucía, siendo su misión la de servir de instrumento para la dinamización de la igualdad y el cambio social entre la ciudadanía. En ese sentido, y como se señala en la introducción del mismo Plan, son tres las directrices estratégicas definidas en él:

- Transversalidad de género, como estrategia de mejora de las políticas públicas implicando la participación de todas las Consejerías en la aplicación del principio de igualdad en todos los ámbitos de la gestión política, técnica y social.
- Conciliación y Corresponsabilidad, orientando la acción hacia la plena participación de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad en condiciones de igualdad.
- Empoderamiento de las mujeres, como estrategia de profundización en el desarrollo democrático incorporando las perspectivas, necesidades e intereses de las mujeres, facilitando el ejercicio activo de sus derechos y su acceso a la toma de decisiones.

En el primer año de la puesta en marcha de dicho Plan se han producido avances significativos en materia de igualdad, que han posibilitado la modernización de Andalucía y están contribuyendo al bienestar de mujeres y hombres. Dichos avances se han plasmado en el “Informe de seguimiento 2010. I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía”<sup>123</sup>.

No queremos terminar este apartado sin insistir en la idea de que solo a través de una evaluación completa, es decir *ex ante*, durante y *ex post*, podremos realmente conocer cuáles han sido los resultados obtenidos por dicho Plan. Es decir solo a través de la evaluación podremos corregir y prevenir los resultados no deseados en caso de que los hubiera. Por tanto, será necesario esperar a que los resultados de la evaluación del Plan vean la luz para saber si esos avances significativos finalmente lo son tal y como se recoge en el citado Informe de Seguimiento 2010.

Habiendo analizado así el derecho a la igualdad de géneros en la normativa estatal y autonómica andaluza, concluiremos este capítulo afirmando por un lado que sin duda cada

---

<sup>123</sup> Informe de seguimiento 2010. I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía Web: <http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/remository/func-startdown/1679/> (Consultada en última ocasión en marzo 2012).

También puede consultarse en relación a la anterior la publicación realizada titulada “Aproximación a la realidad de mujeres y hombres en Andalucía 2010, en la que se muestra la situación de la mujer en los diferentes ámbitos.” Web: <http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/remository/func-startdown/1767/> (Consultada en última ocasión en marzo 2012).

vez nos acercamos con paso más ligero, pero no por ello menos firme, a conseguir el pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, no obstante aun queda camino por hacer. Es necesario que esa igualdad formal ante la ley sea una igualdad para todas las personas que conforman la sociedad y no solamente una parte de la misma, la que esta categorizada o catalogada.

Consideramos, basándonos en el estudio realizado y que presentamos, que nuestro ordenamiento jurídico es lo suficientemente sólido como para soportar la apertura a las nuevas realidades sociales, a nuevas categorías jurídicas; creemos que de la misma manera que se han elaborado las distintas leyes para la igualdad de mujeres y hombres, de ámbito estatal y autonómico, también es posible, de hecho es indispensable, volver a retomar proyectos de leyes que no llegaron a aprobarse en la pasada legislatura como el relativo al “Proyecto de Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación”<sup>124</sup> para que el derecho a la igualdad formal ante la ley, primer paso hacia la igualdad real y de oportunidades, sea un derecho para todas las personas.

De esta manera aunque, como acabamos de señalar, se están dando pasos de gigantes en pos de una sociedad más justa y equitativa, estos pasos a todas luces están resultando insuficientes. Se hace necesario, elaborar una acción normativa dirigida a combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa o indirecta, con remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla.

Esta acción normativa debe venir acompañada de un análisis de la legislación ya existente en nuestro ordenamiento jurídico para ver en que se está errando. Para la elaboración de dicho análisis deben utilizarse cuantas herramientas esté a nuestro alcance.

Como veremos en los próximos capítulos, la elaboración de Informes de Evaluación de Impacto de Género de la normativa, se presenta como una de las herramientas ideales para asegurar el asentamiento de las bases para la creación de una sociedad equitativa, donde el derecho a la igualdad real y de oportunidades sea una realidad para toda la población y no solo a la porción de población heterodesignada por el sistema social patriarcal.

---

<sup>124</sup> Proyecto de Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación. Web: [http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/Indice%20de%20Iniciativas?\\_piref73\\_1335503\\_73\\_1335500\\_1335500.next\\_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IWI9&PIECE=IWA9&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLUS.fmt&DOCS=14-14&QUERY=%28I%29.ACIN1.+%26+%28%22PROYECTO-DE-LEY%22%29.SINI.+%26+%28%22CADUCADO%22%29.CIER.](http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/Indice%20de%20Iniciativas?_piref73_1335503_73_1335500_1335500.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IWI9&PIECE=IWA9&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLUS.fmt&DOCS=14-14&QUERY=%28I%29.ACIN1.+%26+%28%22PROYECTO-DE-LEY%22%29.SINI.+%26+%28%22CADUCADO%22%29.CIER.) (Consultada en última ocasión en marzo 2012).

# Capítulo 3: La dimensión de género en la elaboración de la normativa estatal.

## Estimativa y evaluación del impacto de género en la normativa estatal

---

### 3.1 Estimativa y evaluación del impacto de género en la normativa estatal

Si en el primer capítulo de este trabajo de esta investigación analizábamos la igualdad de géneros en la Unión Europea y en Francia, la estimativa y la evaluación del impacto en la normativa comunitaria; y en el capítulo segundo profundizábamos en el derecho a la igualdad de géneros en el Estado Español y en la CCAA andaluza, creemos haber establecido las bases necesarias para poder dedicarnos en el presente capítulo y de manera exhaustiva, al estudio de la estimativa y la evaluación del impacto por razón de género en la normativa estatal. Este mismo estudio se llevará a cabo en el capítulo siguiente pero evidentemente el objeto de estudio no será el mismo y en dicho capítulo versará sobre la normativa autonómica andaluza.

Quisiéramos comenzar este capítulo dejando claro que el Estado Español en lo relativo a la evaluación del impacto de género, ha sido siempre un Estado pionero con respecto a sus vecinos europeos. Así, la primera vez que se reguló en España el impacto de género fue en 1993 a través de unas subvenciones convocadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, convocatoria que se repitió en las mismas condiciones en los años 1995 y en 1996<sup>125</sup>.

La constatación de que se trata de un Estado pionero con respecto al resto de estados miembros de la UE la encontramos cuando observamos que las primeras referencias que se hicieron al respecto de la evaluación del impacto de género en el marco europeo datan de septiembre de 1997, (dos años después de que ya se estuviera regulando en España, como acabamos de señalar) a raíz de una cuestión planteada a la Comisión Europea cuya respuesta

---

<sup>125</sup> Orden de 29 de marzo de 1993 por la que se regula las bases generales para la concesión de subvenciones a Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo e Instituciones sin fines de lucro que realicen actividades en el campo de la cooperación internacional para la ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo. BOE. núm. 88, de 13 de Abril de 1993. A fecha de conclusiones, la última regulación sobre impacto de género ha sido la referida a la Ley 1/2011, de 1 de marzo, de evaluación del impacto de género en Castilla y León, (BOE. núm. 76, de 30 de Marzo de 2011) que además presenta la particularidad de ser la única norma con rango de ley que regula de manera expresa la evaluación del impacto de género.

dio pie a que por primera vez apareciera el término “evaluación de impacto de género”<sup>126</sup> en el Parlamento Europeo.

*¿Qué medidas ha adoptado o piensa adoptar la Comisión para fomentar los objetivos acordados en la Conferencia sobre la Mujer celebrada en Pekín en 1995 y que están contenidos en la Plataforma de Acción sobre la mujer y el medio ambiente y la mujer y la salud?*<sup>127</sup>

*(...) A nivel del procedimiento, desde 1994 todos los programas para Asia y América Latina y para los países terceros mediterráneos por encima de 2 millones de ecus deben incorporar una evaluación de impacto de género en su diseño y ejecución. Más recientemente, el impacto de género se ha incluido entre los requisitos para proyectos más pequeños en líneas presupuestarias como la de los bosques tropicales (B7-6201).*<sup>128</sup>

De hecho no será hasta el año 2000 y no de manera específica sino de manera subsidiaria, es decir, como complemento a los objetivos previstos en el programa de acción comunitaria sobre la estrategia comunitaria en materia de igualdad entre mujeres y hombres (2001-2005)<sup>129</sup>, que la Unión Europea articulara la evaluación del impacto en función del sexo en distintos ámbitos de intervención de la estrategia marco comunitaria (vida económica, social, vida civil, roles, etc.), como una de las acciones a emprender para el logro de los objetivos mencionados en el referido programa.

A través de este programa, la Comisión Europea pretendía establecer un enfoque dual en el que la Transversalidad, en cuanto la integración de la dimensión de género en todas las políticas que afectan a las mujeres, viniese acompañada de acciones positivas a favor de la igualdad.

---

<sup>126</sup> CIUDAD DE MUJERES.COM: Vocabulario violeta. Evaluación del impacto en función del género: Examen de las propuestas políticas, para analizar si afectarán a las mujeres de forma diferente que a los hombres, al objeto de adaptarlas para neutralizar los efectos discriminatorios y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. Web: <http://www.ciudaddemujeres.com/vocabulario/A-H.htm#EVALUACION%20DEL%20IMPACTO%20EN%20FUNCION%20DEL%20G%20C3%89NERO> (Consultado en última ocasión febrero 2012).

<sup>127</sup> PREGUNTA ESCRITA n. 2827/97 de Anita POLLACK a la Comisión. Medidas adoptadas tras la celebración de la Conferencia sobre la Mujer en Pekín en 1995. Diario Oficial n° C 117 de 16/04/1998 p. 0072. Web <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:91997E2827:ES:HTML> (Consultado en última ocasión febrero 2012).

<sup>128</sup> RESPUESTA A LA PREGUNTA ESCRITA n. 2827/97 de Anita POLLACK a la Comisión. Medidas adoptadas tras la celebración de la Conferencia sobre la Mujer en Pekín en 1995. Diario Oficial n° C 117 de 16/04/1998 p. 0072. Web <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:91997E2827:ES:HTML> (Consultado en última ocasión febrero 2012, el subrayado es nuestro).

<sup>129</sup> DECISIÓN DEL CONSEJO, *Programa de acción comunitaria sobre la estrategia comunitaria en materia de igualdad entre mujeres y hombres (2001-2005)*, de 20 de diciembre de 2000. Diario Oficial n° L 017 de 19/01/2001. Web: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001D0051:ES:HTML> (Consultada en última ocasión en agosto 2011).

Este compromiso de integrar la perspectiva de género en el conjunto de Políticas Comunitarias de la Unión Europea, nace de la constatación de que decisiones políticas que en principio parecen no sexistas, pueden tener un diferente impacto en las mujeres y en los hombres, a pesar de que dicha consecuencia ni estuviera prevista ni se deseara.

El Estado Español, como Estado Miembro de la Unión, viene participando desde hace tiempo como veíamos al inicio de este trabajo, en el objetivo de lograr la igualdad de mujeres y hombres a través de la eliminación de las desigualdades, elaborando para tal fin, políticas de igualdad de oportunidades para unas y otros.

Uno de los objetivos específicos de estas políticas es la aplicación del Principio de Transversalidad de Género. Así, con la elaboración del IV Plan Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2003-2006), se establece como uno de sus dos principios fundamentales el que se denomina de Mainstreaming y cuyo propósito se define como:

*Promover la defensa y garantía del principio de igualdad entre hombres y mujeres en todas las actividades y políticas a todos los niveles y evaluando sus posibles efectos<sup>130</sup>.*

Durante el desarrollo de este IV Plan, cabe destacar la promulgación de la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración de impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno<sup>131</sup>.

La finalidad última de esta de esta ley es aplicar el Principio de Transversalidad, de manera que a través de la elaboración de los Informes de Evaluación de Impacto de Género, puedan detectarse y prevenirse enunciados sexistas no previstos ni deseados a la hora de elaborar las normas, cuya aplicación, en consecuencia, por las personas operadoras jurídicas puede dar lugar a situaciones discriminatorias.

A través de la Ley 30/2003 de 13 de octubre, se consigue llevar a cabo la transposición de las directrices comunitarias en materia de igualdad, dando así cumplimiento a uno de los objetivos de la Plataforma de Acción de Beijing, y haciendo del Estado español un punto de referencia europeo en políticas públicas de igualdad.

---

<sup>130</sup> IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Gobierno de España. 2003-2006. Web: [http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/IV\\_Plan\\_Igualdad\\_Hombre\\_Mujeres\\_2003-2006.pdf](http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/IV_Plan_Igualdad_Hombre_Mujeres_2003-2006.pdf) (Consultado en última ocasión en diciembre 2011).

<sup>131</sup> Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración de impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno. BOE núm. 246, de 14 de octubre de 2003.

*Los informes de impacto de género deben ser considerados una de las herramientas básicas para integrar el principio de igualdad en el ámbito de la Administración puesto que analizan el nivel de compromiso de los poderes públicos con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres. Concretamente, estos informes representan una técnica de evaluación prospectiva de las normas, es decir, un estudio y análisis ex ante del proyecto normativo que se promueve para verificar si, en el momento de planificar las medidas que contiene la disposición, se ha tenido en cuenta el impacto que tendrán en los hombres y las mujeres, advierten a quienes lo adoptarán de cuáles pueden ser las consecuencias deseadas y las no deseadas y proponen, en su caso, la modificación. Se logra, en definitiva, una mejora en la calidad de la producción normativa (Pauner Chulvi, 2009: 185-222).*

Consideramos que la elaboración de los Informes de Evaluación Impacto de Género representa una gran mejora legislativa dado que estos informes están destinados a facilitar el trabajo de los poderes públicos en términos de igualdad. Estos informes permitirán también aportar un mayor nivel de información sobre la realidad social al tratar de evitar las consecuencias negativas o no deseadas que pudieran desprenderse de un texto sexista.

Así, esta técnica de evaluación prospectiva de las normas mejorará notablemente la calidad de nuestra producción normativa. Es decir, una buena elaboración de los Informes de Evaluación Impacto de Género, supone una mejora en la eficacia y eficiencia en la labor de creación legislativa, que no deja de ser el objetivo prioritarios establecidos por la Unión Europea en su programa: “Legislar Mejor” que ya analizamos en el capítulo primero de este trabajo.

### **3.1.1 El soporte constitucional de la evaluación del impacto de género de la normativa estatal**

La elaboración de los Informes de Evaluación del Impacto de Género como herramientas concebidas para erradicar las brechas de género y para lograr una igualdad real y de oportunidades, encuentra su *ratio* en nuestro articulado constitucional, ya que, como señalábamos en capítulos anteriores, la igualdad es tal y como se señala en su artículo primero; un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico.

Este valor superior constitucional se completa con la prohibición de discriminación por razón de sexo (art. 14 CE), con la protección de la dignidad de la persona (art.10.1 CE) y que impone a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva (art. 9.2 CE).

*De este elenco de preceptos constitucionales, el artículo 9.2 CE se erige en el soporte fundamental de las medidas antidiscriminatorias porque implica promover las condiciones para que la igualdad formal se transforme en igualdad material. Al profundizar en este mandato, puede derivarse que en el Estado de Derecho se exige un juicio de racionalidad de las leyes que compromete la dirección de la norma hacia el principio de igualdad de trato y oportunidades. Es en este contexto donde debemos inscribir la evaluación del impacto de género como herramienta al servicio de la consecución de esa igualdad real porque pondera la efectividad y la eficiencia de las normas. (Pauner Chulvi, 2009: 187).*

### 3.2 La Ley 30/2003 de 13 de octubre, como herramienta de los Poderes Públicos, para la erradicación de disposiciones normativas sexistas

La citada Ley 30/2003 de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, es con muy ligeras variaciones, de contenido similar a la Ley 4/2001, de 9 de abril, de modificación del apdo. 2 del art. 63 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre de procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña.<sup>132</sup>

Esta Ley 30/2003, de 13 de octubre, contiene dos artículos que modifican a los artículos 22.2 y 24.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno; pero su gran novedad está en la obligación que establece de elaborar un Informe de Evaluación de Impacto de Género, que deberá acompañar a cada proyecto de Ley y cada Reglamento que elabore el gobierno.

*Una vez que se aprueba esta ley y se hace exigible ese informe de impacto, en ningún lugar se puede llevar a cabo esa valoración, ni consta en la propia ley de qué organismo e instituciones se va a recabar el criterio o baremo para considerar que estamos ante una ley que transgrede la igualdad de género. [...] La aprobación de una ley con la previsión de informe sobre el impacto de género sin sujeción a criterio alguno, deja prácticamente fuera de toda posibilidad, que, hasta que no se produzca en efecto una nueva legislación sobre criterios y baremos, se pueda hablar de la efectividad la norma (Balaguer Callejón, 2003: 25).*

---

<sup>132</sup> Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña. BOE núm. 11, de 12 de enero de 1990. (Además, fue en efecto una iniciativa política de Convergencia i Unió, asumida por el gobierno de la Nación, y de ahí la práctica reiteración del contenido de la exposición de motivos y del contenido de la ley).

La tramitación parlamentaria Ley 30/2003, de 13 de octubre, no fue fácil, al contrario, se trató de una tramitación complicada desde el primer momento, como ya señalamos en investigaciones anteriores (Collantes Sánchez y Sanchis Vidal, 2009) <sup>133</sup>.

La complicación en la tramitación parlamentaria se centró principalmente en la ausencia de mención expresa en el Proyecto de Ley, de quién o qué organismo debía ser el encargado de la elaboración de los citados Informes. Así, durante la tramitación parlamentaria lo único que si quedó aclarado en los debates parlamentarios fue la negativa expresa por parte de algunos grupos parlamentarios de que fuese el Instituto de la Mujer quien asumiera de forma expresa dicha función <sup>134</sup>.

Sería un enorme error que como juristas, banalizásemos el conflicto que hubo durante toda la tramitación parlamentaria respecto a la autoría de dichos Informes, pues más allá de lo que institucionalmente puede representar para una persona u organismo el aparecer como el o la encargada de la elaboración de los citados informes, lo que nos inquieta es conocer qué formación específica tiene o ha adquirido esa persona en temas relacionados con la igualdad de género en los ámbitos sociológicos jurídicos y económico; pues la ausencia de esa formación puede convertir la elaboración de estos informes en un mero trámite más a cumplimentar en el dossier legislativo que corresponda.

De igual manera el desconocimiento de la autoría de dichos informes debe llevarnos a reflexionar sobre si, administrativamente estamos ante una descentralización funcional, creando un organismo *ad hoc* para elaborar los informes, o una desconcentración, o un simple mandato a un servicio dentro del organigrama <sup>135</sup>.

La reglamentación de la citada Ley 30/2003 de 13 de octubre, no vio la luz hasta seis años después de la mano del Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo <sup>136</sup>, que más adelante estudiaremos y veremos cómo y en qué condiciones lo referente a las autorías de los citados informes y memorias queda reflejado en dicha normativa.

---

<sup>133</sup> Web <http://www.dipujaen.es/catalogo-publicaciones/index.html?uid=7a8ba6f8-8b72-11e0-bdb7-79fb06ed8546> (Consultado por última vez en diciembre 2011).

<sup>134</sup> Diario de Sesiones. Comisión Constitucional, de 18-JUN-2003. Ratificación de la Ponencia. Aprobación con competencia legislativa plena, pp. 24.746 y ss.

<sup>135</sup> En este sentido es muy revelador lo establecido en el artículo 2.3 del Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo, que analizamos más adelante. “El Ministerio o centro directivo competente para la realización de la memoria actualizará el contenido de la misma con las novedades significativas que se produzcan a lo largo del procedimiento de tramitación”.

<sup>136</sup> Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo. BOE núm. 173, de 18 de julio de 2009.



Y sin embargo, como acabamos de señalar, pese a que no hubo hasta el año 2009 un desarrollo legislativo de la Ley 30/2003 de 13 de octubre, tenemos constancia de que efectivamente sí que se realizaron algunos de los Informes de Evaluación de Impacto de Género que debían acompañar a las disposiciones normativas que había ido elaborando el Gobierno. Otra cuestión bien diferente ha sido cómo y de qué manera se ha aplicado la Ley 30/2003 de 13 de octubre durante ese periodo de tiempo en el que no tuvo desarrollo normativo.

Como veremos más adelante, la falta de normativa que desarrollara la Ley 30/2003, de 13 de octubre, provocó a parte de la ya comentada falta claridad respecto a quiénes eran las personas y los órganos encargados de elaborar los citados informes; también provocó una falta de homogeneidad en los Informes que se elaboraron durante esos años. Este punto como resulta evidente, ha dificultado el camino hacia la consecución de una igualdad real y de oportunidades de mujeres y hombres.

Ha de señalarse que esta falta de reglamentación de la que venimos hablando, se salvó mediante el uso principalmente de dos “Guías”; por un lado la más utilizada por el mayor número de Ministerios la “Guía para la Evaluación del Impacto de Género en Función del Género”, de la Comisión Europea<sup>137</sup>, creada como primer paso para llevar a cabo su compromiso de integrar de manera transversal el enfoque de género en las políticas públicas de la Unión Europea, (Guía que estudiaremos más detenidamente cuando analicemos la Comunidad autónoma andaluza, por ser la Guía que se utiliza en este ente territorial) y por otro lado, también se utilizó aunque en menor medida y por menos Ministerios la “Guía de aplicación práctica, para la elaboración de Informes de Impacto de Género de las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, de acuerdo a la Ley 30/2003” (Delgado Godoy, García Comas y Soleto Ávila, 2005).<sup>138</sup>

Así señalaremos que para la elaboración de los Informes de Evaluación de Impacto de Género llevados a cabo durante la VIII legislatura, por los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y algunos de los elaborados por el Ministerio de Economía y Hacienda, se siguieron las directrices de la “Guía de aplicación práctica, para la elaboración de Informes de Impacto de Género de las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, de acuerdo a la Ley 30/2003”, surgida en septiembre del año 2005, y elaborada por Fundación Mujeres.

---

<sup>137</sup> COMISIÓN EUROPEA, *Guía para la Evaluación del Impacto de Género en Función del Género*. <http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4376&langId=en> (Consultado en última ocasión en diciembre 2011).

<sup>138</sup> Web: [http://www.mujeresenred.net/news/article.php3?id\\_article=467](http://www.mujeresenred.net/news/article.php3?id_article=467) (Consultada en última ocasión en diciembre 2011).

Pese a que esta Guía sólo únicamente se estuvo tomando como referente para la elaboración de los Informes de Evaluación de Impacto de Género que se elaboraron en el seno de los Ministerios ya mencionados, consideramos que esta Guía es mucho más completa que la Guía Europea, utilizada por el resto de Ministerios que elaboraron Informes durante la VII Legislatura.

La Guía elaborada por la Comisión Europea, a la que hacemos referencia es muy breve e incompleta; cuenta con un total de ocho páginas con ejemplos incluidos. Quizás esto se deba a que se trata de una Guía pensada para proyectarse en el seno de la Comisión Europea con el objeto por un lado de evitar consecuencias negativas no intencionales que favoreciesen situaciones discriminatorias y por otro para mejorar la calidad y la eficacia de las políticas comunitarias.

A nuestro parecer resulta una Guía a todas luces insuficiente que en su caso debería haber sido tomada como punto de inicio, y no como referencia, para la elaboración de unas Guías mucho más completas y acordes con la complejidad que encierra la Estimativa de Impacto de Género en el contexto normativo estatal.

Como síntesis de lo expuesto en relación al uso que de ambas Guías, presentamos la siguiente tabla:

<b>Guía de la Comisión Europea</b>	<b>Guía elaborada por Fundación Mujeres</b>
Sólo la aplican algunos Ministerios para la elaboración de los IEIG	Sólo la aplican algunos Ministerios para la elaboración de los IEIG
Siempre la aplica el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la elaboración de los IEIG	Siempre la aplican todas las Consejerías de la Junta de Andalucía para la elaboración de los IEIG
	Siempre la aplica el IAM para la elaboración de los IOIEIG

Tabla comparativa del uso de: “Guía de aplicación práctica, para la elaboración de Informes de Impacto de Género de las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, de acuerdo a la Ley 30/2003”, elaborada por Fundación Mujeres; y: “Guía para la Evaluación del Impacto de Género en Función del Género”, de la Comisión Europea. (Elaboración propia).

### **3.2.1 La elaboración de los Informes de Evaluación de Impacto de Género, a través de la “Guía de aplicación práctica para la elaboración de Informe de Impacto de Género de las disposiciones normativas que elabore el Gobierno de acuerdo con la Ley 30/2003, de 13 de octubre.”**

El espíritu de esta “Guía de aplicación práctica para la elaboración de Informe de Impacto de Género de las disposiciones normativas que elabore el Gobierno de acuerdo con la Ley 30/2003”, era el de facilitar la aplicación de la Ley 30/2003 de 13 de octubre, y contribuir con ello a la eliminación de los obstáculos que de una manera u otra estuviesen dificultando la consecución de una igualdad real y de oportunidades entre mujeres y hombres, hasta la creación de una normativa expresa que desarrollara lo dispuesto Ley 30/2003 de 13 de octubre.

En esta Guía se trata de explicar cómo la elaboración de Informes de Evaluación de Impacto de Género, sirve para neutralizar enunciados en la normativa que aun no habiendo sido previstos ni deseados, pudiesen resultar sexistas.

Esta Guía, como señalan sus propias autoras, realiza una propuesta metodológica, dirigida a las personas implicadas en la elaboración de los Informes de Impacto de Género con el fin de orientar y facilitar su trabajo, ya que la elaboración de estos Informes suponía en el año 2005 una novedad en el procedimiento legislativo, que requería de un planteamiento técnico para su desarrollo, tanto en la forma como en los contenidos. Esta Guía tiene una estructura de fácil comprensión que la divide en tres capítulos y anexos.

El capítulo primero, recibe el nombre de: “Impacto de Género y Políticas Públicas”; en él se recogen los aspectos relacionados con los fundamentos de la incorporación de la Evaluación de Impacto de Género en la elaboración de las normas.

Los contenidos y estructura de los Informes de Impacto de Género están desarrollados dentro del segundo capítulo de esta Guía. Tal y como en ella se señala, la elaboración de estos Informes supone toda una novedad en el proceso de elaboración de las propuestas normativas; no hemos de olvidar que en este proceso participan diferentes agentes de diferentes ámbitos competenciales y la inexistencia de una normativa estatal que regule cómo han de elaborarse, se traduce en la falta de pautas concretas metodológicas para su elaboración. En el tercer

capítulo, se recogen claves y recomendaciones sobre aspectos operativos de la elaboración de los informes y para la superación de obstáculos.

Con respecto a la distribución temporal de las fases relativas a la elaboración de los informes que la Guía establece, creemos que esta no es ni suficientemente clara ni explícita, ya que si bien las fases de la elaboración de los informes quedan expresadas con claridad en el tiempo, no se expresa con la misma nitidez la relación de éstas con el cronograma del proceso de elaboración de la norma.

Este aspecto resulta aún más relevante cuando observamos como la propia Guía esboza una tabla de correspondencia temporal entre ambos procedimientos de elaboración, tanto de los mencionados Informes como del Proyecto Normativo, y no la desarrolla; únicamente y casi a modo de conclusiones, establece que:

*El proceso de elaboración de los Informes de Impacto de Género debe desarrollarse complementaria y paralelamente al proceso de elaboración de la propuesta normativa, de tal forma que los esfuerzos realizados en la elaboración del primero enriquezcan el contenido de la futura norma. De igual manera que la elaboración de las propuestas normativas, el Informe no se elabora de una sola vez. Es recomendable que los diferentes pasos del Informe se elaboren a medida que avanza la elaboración de la futura norma (Delgado Godoy, García Comas y Soleto Ávila, 2005: 56).*

## EJEMPLO DE ITINERARIO DE ELABORACIÓN DE INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO CON EL CASO DE PROYECTOS DE LEY ELABORADOS POR EL GOBIERNO

		PROCESO NORMATIVO CON RANGO DE LEY						
ELABORACIÓN DE LAS PARTES DE UN INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO		Ideación del Proyecto normativo	Redacción de la norma	Visto bueno del Ministro/a Proponente	Consultas: Sociedad Civil, Comunidades Autónomas, Interlocución social	Reunión de Subsecretarios/as	Consejo de Ministros/as	Congreso / Senado
	1ª Parte Situación de partida de mujeres y hombres	Elaboración del diagnóstico	Elaboración de previsión de resultados		Introducción de elementos de diagnóstico	Si hay cambios, revisión del diagnóstico	Si hay cambios, revisión del diagnóstico	
	2ª Parte Previsión de resultados		Valoración del impacto		Revisión de resultados con la información recogida	Si hay cambios, revisión de resultados	Si hay cambios, revisión de resultados	
	3ª Parte Valoración del impacto de género				Revisión del impacto con la nueva información	En su caso, nueva valoración de impacto	En su caso, nueva valoración de impacto	
	4ª Parte Recomendaciones y propuestas de mejora	Observaciones de la elaboración del diagnóstico	Observaciones de la previsión de resultados y valoración de impacto. Propuestas de mejora del texto		Observaciones de la previsión de resultados y valoración de impacto. Propuestas de mejora del texto	Observaciones procedentes del debate generado en la reunión de Subsecretarios/as	Observaciones procedentes del debate generado en el Consejo de Ministros/as	

**Fuente:** Guía de aplicación práctica, para la elaboración de Informes de Impacto de Género de las Disposiciones Normativas que elabore el Gobierno, de acuerdo a la Ley 30/2003.

(\*) Creemos que es posible que exista un error en la segunda columna de la tabla, ya que señala la “elaboración de previsión de los resultados” en correspondencia con la “1ª parte: situación de partida de mujeres y hombres”, cuando en el desarrollo de la Guía señala que corresponde a la “2ª parte: previsión de resultados”.

(\*\*)(\*) De igual manera, consideramos que existe otro error en la segunda columna de la tabla, ya que señala la “valoración del impacto” en correspondencia con la “2ª parte: previsión de resultados”, cuando en el desarrollo de la Guía señala que corresponde a la “3ª parte: valoración del género”.

Consideramos que hubiese sido muy positivo para la comprensión global del proceso de elaboración de los Informes de Impacto de Género, que en esta Guía se hubiese interrelacionado con más profundidad las diferentes fases de elaboración de los informes, con

las fases propias del *iter* legislativo que siguen Proyectos de Ley que aspiran a convertirse en normas.

Pese a las carencias detectadas en esta Guía, no podemos dejar de insistir en la idea de que la correcta elaboración de estos Informes puede contribuir a mejorar los sistemas de seguimiento y evaluación de la aplicación de las normas.

Quizás la mayor crítica y la de mayor peso que se le deba hacer al proceso de elaboración de los citados Informes, es que si bien estos inician su proceso de análisis con una con una evaluación *ex—ante*, que proporciona una previsión de resultados y propone, desde el inicio, el uso de datos estadísticos desagregados por sexos e indicadores desde una perspectiva de género; una vez llevado a cabo este análisis no detalla nada de la posterior evaluación.

Consideramos, que es necesario que junto a la evaluación *ex—ante*, se lleve a cabo un buen seguimiento y una posterior evaluación que ponga de manifiesto la eficacia y la eficiencia reales de los propios Informes, y que analice las disposiciones normativas no sólo en su formulación sino, y sobre todo, en su aplicación.

Por asombroso que parezca, la legislación en España no es evaluada científicamente, y como es bien sabido, todo lo que no se evalúa se devalúa. Por tanto, es necesario un sistema de autoevaluación, un sistema de *feed—back*, que retroalimente al propio proceso de elaboración y aplicación de la norma y de normativas futuras, sin perjuicio de evaluaciones externas.

### 3.3 La Evaluación del Impacto de Género en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

La obligación que establecía la Ley 30/2003 de 13 de octubre, de acompañar de un Informe de Impacto de Género a todos los Proyectos de Ley y a los reglamentos que aprobara el ejecutivo, se ve ratificada y ampliada en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Esta Ley Orgánica, que como ya señalábamos anteriormente busca la ordenación general de las políticas públicas bajo la óptica del principio de igualdad y la perspectiva de género, para dicho fin utilizará una serie de instrumentos tales como la elaboración de un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, la creación de una Comisión Interministerial de

Igualdad con responsabilidades de coordinación, y como no podía ser de otra forma, los obligación de realizar Informes de Evaluación de Impacto de Género.

Estos instrumentos están recogidos en su Título Segundo, Capítulo Primero, relativo a las pautas generales de actuación de los poderes públicos en relación con la igualdad: En él se definen el Principio de Transversalidad y los instrumentos que acabamos de señalar. En concreto los Informes de Impacto de Género se regulan en el artículo 19 de la citada Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo:

*Art. 19. Informes de impacto de género. Los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros deberán incorporar un informe sobre su impacto por razón de género.*

Este artículo amplía la obligatoriedad de incorporar un Informe sobre impacto por razón de género (establecida en la Ley 30/2003 de 13 de octubre), a los planes de especial relevancia económica y social. Consideramos que esta extensión de la obligación de elaborar Informes de Impacto de Género que acompañen a los planes de especial relevancia económica y social responde al complejo contexto socioeconómico que afronta el Estado español en estos últimos años, en el que muchas de las medidas paliativas elaboradas por el gobierno socialista, sobre todo durante la VIII legislatura, han venido enmarcadas en formas de “planes” que debían ser aprobados por el Gobierno.<sup>139</sup>

No obstante, como ya se señalaba en el Dictamen del Consejo de Estado al Proyecto de Real Decreto por el que se regula la elaboración del informe periódico relativo a la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres,<sup>140</sup> el concepto de planes de especial relevancia es tan subjetivo que resulta casi inabordable.

---

<sup>139</sup> El ejemplo más claro fue la creación del El Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo o, en su forma abreviada, Plan E fue un conjunto de más de un centenar de medidas de política económica planteadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en enero de 2009 y desarrolladas a lo largo de la IX legislatura. Su objetivo fue el de impulsar la actividad económica del país, movilizand o grandes cantidades de dinero público, para hacer frente a la crisis económica originada tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y financiera global en 2007. El Plan E constaba de cuatro ejes de actuación principales: medidas de apoyo a empresas y familias; de fomento del empleo; medidas financieras y presupuestarias; y, por último, medidas de modernización de la economía. La primera parte del plan E inyectó 50.000 millones de euros, 1 y la segunda 5.000 más.<sup>2</sup> Fondos que fueron repartidos entre las diferentes administraciones, siendo los ayuntamientos de cada municipio los organismos que decidían en qué obras públicas se invertiría este dinero. Web: La pagina web del *PLAN E* en la actualidad no se encuentra disponible, la información presentada ha sido obtenida de [http://es.wikipedia.org/wiki/Plan\\_E](http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_E), consultado en última ocasión en diciembre 2011).

<sup>140</sup> Dictamen del Consejo de Estado 803/ 2006, de 22 de junio, Proyecto de Real Decreto por el que se regula la elaboración del informe periódico relativo a la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres.

Así, retomando el citado artículo 19 de la LOI, se observa que este, en realidad, regula dos figuras distintas: los informes de impacto de género que han de incorporarse a los proyectos de disposiciones generales y a los planes de especial relevancia económica y social (concepto este suficientemente impreciso para generar dudas en su aplicación).

Quizás por esto último, llama poderosamente la atención que el concepto “planes de especial relevancia” no venga definido en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, pues uno de los puntos más aplaudidos que se han recogido en ese texto legal ha sido la compilación de conceptos básicos en materia de igualdad de género.

*Siguiendo el criterio impuesto por las Directivas que se incorporan a esta Ley, se incluyen unos conceptos básicos con el objetivo de uniformar la interpretación de una serie de nociones, que resultan de gran interés para su aplicación (Valpuesta Fernández, 2007: 9).*

Al igual que nos pasara en el análisis de los Informes de Evaluación de Impacto de Género realizados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma Andaluza, (en el siguiente capítulo), los Informes de Impacto de Género del ámbito estatal que han sido analizados, tal y como se señalaba en el apartado relativo a la metodología de la presente investigación, son todos aquellos que tiene en su haber el Servicio de Archivo del Congreso de los Diputados y dado que la elaboración de los citados planes no siguen el mismo *iter* legislativo que los proyectos de ley, estos no son compilados por Servicio de Archivo del Congreso de los Diputados, haciendo de esto una verdadero problema a la hora de poder acceder a los mismo para su estudio y análisis.

En el intento de compilar los informes que acompañan a los planes de especial relevancia nos dirigimos al Instituto de la Mujer, cuya participación en la elaboración de los citados informes fue rechazada en el debate parlamentario para la aprobación del Proyecto de

---

Como señala PAUNER “En este dictamen se recomendó la agrupación del informe de impacto de género con el informe periódico sobre la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres – que evalúa el grado de aplicación, desarrollo y cumplimiento de las leyes sobre igualdad y violencia de género – y el Plan estratégico de igualdad de oportunidades lo que podía facilitar la apreciación de las relaciones existentes entre estas tres figuras: el Plan Estratégico como instrumento para enunciar las medidas del Gobierno (artículo 17 LOI); el informe de impacto de género como instrumento para adecuar los proyectos normativos y planes socio-económicos (artículo 19 LOI); y, finalmente, el informe periódico como instrumento de rendición de cuentas de los logros alcanzados con los dos anteriores (artículo 18 LOI). Web:[http://www.boe.es/boe/consultas/bases\\_datos\\_ce/search.php?coleccion=ce&frases=no&operador\[0\]=and&campo\[0\]=asun&dato\[0\]=&operador\[1\]=and&campo\[1\]=dict&dato\[1\]=&operador\[2\]=and&campo\[2\]=dict&dato\[2\]=803%2F2006&operador\[3\]=and&campo\[3\]=nexp&dato\[3\]=&operador\[4\]=and&campo\[4\]=proc&dato\[4\]=&operador\[5\]=and&campo\[5\]=fapr&dato\[5\]\[0\]=&dato\[5\]\[1\]=&operador\[6\]=and&campo\[6\]=fepu&dato\[6\]\[0\]=&dato\[6\]\[1\]=&page\\_hits=40&sort\\_field\[0\]=nexp&sort\\_order\[0\]=desc&OK=Buscar](http://www.boe.es/boe/consultas/bases_datos_ce/search.php?coleccion=ce&frases=no&operador[0]=and&campo[0]=asun&dato[0]=&operador[1]=and&campo[1]=dict&dato[1]=&operador[2]=and&campo[2]=dict&dato[2]=803%2F2006&operador[3]=and&campo[3]=nexp&dato[3]=&operador[4]=and&campo[4]=proc&dato[4]=&operador[5]=and&campo[5]=fapr&dato[5][0]=&dato[5][1]=&operador[6]=and&campo[6]=fepu&dato[6][0]=&dato[6][1]=&page_hits=40&sort_field[0]=nexp&sort_order[0]=desc&OK=Buscar) (Consultado en última ocasión en diciembre 2011).



Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración de impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, para saber si este organismo tenía acceso a dichos informes.

En cualquier caso y a diferencia de lo ocurrido con el Instituto Andaluz de la Mujer como se verá más adelante, la Directora General de Instituto de la Mujer<sup>141</sup> tuvo a bien responder a nuestra solicitud por escrito, explicándonos que este organismo no posee dicha documentación<sup>142</sup> y animándonos a solicitarlos a la Presidencia del Gobierno, como así hemos hecho.

Así bien, teniendo en cuenta lo anterior, en este punto hemos querido exponer en sucinto resume, de las dificultades encontradas y no superadas para poder recopilar los Informes de Impacto de Género que deben acompañar a los siempre indeterminados “planes de especial relevancia” que apruebe el Gobierno, según lo dispuesto en el citado artículo 19 de la LOI.

Además de lo expuesto en lo relativo a la elaboración de Informes de Impacto de Género, la Ley Orgánica 3/2007 incorpora por un lado como novedades en su Capítulo III relativo a las “Medidas de Igualdad en el empleo para la Administración General del Estado y para los organismos públicos vinculados o dependientes de ella”, la obligación de acompañar con Informe de Impacto de Género las convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público.<sup>143</sup>

*La aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público deberá acompañarse de un informe de impacto de género, salvo en casos de urgencia y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo.*<sup>144</sup>

---

<sup>141</sup> La solicitud se cursó mediante correo electrónico el 01 de Julio de 2011, obtuvimos la respuesta de Dña. LAURA SEARA SOBRADO, Directora en esa fecha del Instituto de la Mujer, veinte días después, el 20 de julio de 2011. Dos días más tarde y a propuesta de la Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de Julio de 2011, se nombró Secretaria de Estado de Igualdad a doña Laura Seara Sobrado. Aprovechando la invitación que nos hizo como Directora del Instituto de la Mujer, a que solicitásemos los citados informes a la Presidencia del Gobierno, estos se le han vuelto a solicitar pero esta vez a través de la Secretaria de Estado de Igualdad, titularidad que ostenta.

<sup>142</sup> El documento de solicitud y la respuesta del mismo pueden encontrarse en los anexos de esta investigación.

<sup>143</sup> Al ser nuestro objeto de investigación los Informes de Evaluación de Impacto de Género que acompañen a los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros, estas novedades introducida por la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres debemos señalarlas en aras a la rigurosidad investigadora, pero no serán analizados.

<sup>144</sup> Artículo 55 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Y por otro lado introduce varias modificaciones a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial:<sup>145</sup>

- Se añade un nuevo párrafo, intercalado entre el primero y el segundo, al apartado 3 del artículo 110, con la siguiente redacción: *«En todo caso, se elaborará un informe previo de impacto de género»*.
- Cuatro. Se añade un artículo 136 bis que integrará la nueva Sección 7.<sup>a</sup> del Capítulo IV, Título II, Libro II, rubricada como «De la Comisión de Igualdad», con la siguiente redacción: *Corresponderá a la Comisión de Igualdad asesorar al Pleno sobre las medidas necesarias o convenientes para integrar activamente el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial y, en particular, le corresponderá elaborar los informes previos sobre impacto de género de los reglamentos y mejorar los parámetros de igualdad en la Carrera Judicial.*<sup>146</sup>

### **3.3.1 Las Unidades de Igualdad de los Ministerios como asesoras departamentales en la elaboración del informe sobre impacto por razón de género.**

Para alcanzar sus objetivos la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, crea todo un aparato institucional, una serie de organismos específicamente destinados a la consecución de la igualdad de oportunidades de unas y otros, estos son: la Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres para la coordinación de las políticas y medidas adoptadas entre los diferentes departamentos ministeriales; las Unidades de Igualdad que deberán existir en todos los Ministerios y el Consejo de Participación de la Mujer como órgano consultivo; la Comisión de Igualdad en el seno del Consejo General del Poder Judicial y por último la Comisión de Igualdad en el seno del Consejo Fiscal.

---

<sup>145</sup> Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. BOE núm. 157, de 2 de julio de 1985.

<sup>146</sup> Resulta sumamente interesante leer por lo bien realizados que están tanto el “Informe de impacto de género al Proyecto de Reglamento de la carrera judicial” elaborado por la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial con fecha de 18 de abril de 2011 web: [http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Igualdad\\_de\\_Genero/Estadisticas\\_e\\_informes/Informe\\_de\\_impacto\\_de\\_genero\\_a\\_l\\_Proyecto\\_de\\_Reglamento\\_de\\_la\\_carrera\\_judicial](http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Igualdad_de_Genero/Estadisticas_e_informes/Informe_de_impacto_de_genero_a_l_Proyecto_de_Reglamento_de_la_carrera_judicial) (Consultada en última ocasión en marzo 2012). Como el “Informe de impacto de género al proyecto de Reglamento 1/2010, del Consejo General del Poder Judicial, por el que se regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales” elaborado por la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial con fecha junio de 2009 web: <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Buscadores> (Consultada en última ocasión en marzo 2012).

Reguladas en su Título VIII relativa a las disposiciones organizativas, centramos nuestra atención en la creación de las “Unidades de Igualdad en cada Ministerio”<sup>147</sup>. Este conjunto de Unidades de Igualdad cuenta con toda una estructura de apoyo ofrecida a través de la Secretaría de Estado de Igualdad como responsable de la aplicación transversal del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en la actuación de los poderes públicos.

Las Unidades de Igualdad han sido creadas para desarrollar y aplicar todo lo relacionado con el Principio de Igualdad de mujeres y hombres en el conjunto de la Administración General del Estado, entre sus funciones es de destacar la de asesorar a los órganos competentes del Departamento en la elaboración del Informe sobre impacto por razón de género.

*Las Unidades de Igualdad. En todos los Ministerios se encomendará a uno de sus órganos directivos el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de las materias de su competencia y, en particular, las siguientes:*

*a) Recabar la información estadística elaborada por los órganos del Ministerio y asesorar a los mismos en relación con su elaboración.*

*b) Elaborar estudios con la finalidad de promover la igualdad entre mujeres y hombres en las áreas de actividad del Departamento.*

*c) Asesorar a los órganos competentes del Departamento en la elaboración del informe sobre impacto por razón de género.*

*d) Fomentar el conocimiento por el personal del Departamento del alcance y significado del principio de igualdad mediante la formulación de propuestas de acciones formativas.*

*e) Velar por el cumplimiento de esta Ley y por la aplicación efectiva del principio de igualdad.*<sup>148</sup>

Pese a la creación en su artículo 77 de la Unidades de Igualdad, la Ley Orgánica 3/2007 sigue sin especificarse qué órgano es el competente para la elaboración del Informe de Evaluación de Impacto de Género, cual es la naturaleza jurídica de estas Unidades, ni la formación en temas de igualdad social jurídico política y económico de quienes van a elaborar los informes.

---

<sup>147</sup> Unidades de Igualdad. Web: [http://www.migualdad.es/ss/Satellite?cid=1193047402695&pagename=MinisterioIgualdad%2FPage%2FMIGU\\_contenidoFinal](http://www.migualdad.es/ss/Satellite?cid=1193047402695&pagename=MinisterioIgualdad%2FPage%2FMIGU_contenidoFinal) (Consultada en última ocasión en marzo 2012).

<sup>148</sup> Artículo 77 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Es más, creemos que al no especificar este extremo introduce algo de confusión con respecto a las funciones establecidas para las Unidades de Igualdad, sobre todo cuando se señalan que estas son “asesoras de los órganos competentes de cada Ministerio en la elaboración del informe sobre impacto por razón de género”, sin establecer cuáles son los órganos competentes de cada Ministerio.

Vemos que para evitar esta confusión se hace necesario resolver y rápidamente, la cuestión que venimos señalando referente a la designación dentro de las Unidades de Igualdad de cual es órgano es el competente para la elaboración del Informe de Evaluación de Impacto de Género.

Solo designando a ese organismo podrá definirse cuál será la formación en temas de igualdad social jurídico política y económico que han de tener las personas que van a elaborar los IEIG, y sobre todo si esta formación se llevará a cabo desde las propias Unidades de Igualdad, que acabamos de analizar; es decir si estaremos frente a una integración orgánica de los servicios<sup>149</sup> y la formación del personal respecto a los informes de impacto de género o si por el contrario será necesario una externalización de dichos servicios<sup>150</sup>.

No obstante y pese a la existencia de ambas opciones desconcentración y descentralización no podemos obviar que ya la Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, apuesta más por un sistema integración orgánica que por la segunda opción.

En cualquier caso esta cuestión no es nueva, ya lo tratamos en profundidad en las investigaciones iniciales (Collantes Sánchez y Sanchis Vidal, 2009: 38) que dieron lugar al presente trabajo de investigación. En ellas señalábamos, al analizar el procedimiento legislativo de aprobación del Proyecto de Ley 30/2003 de 13 de octubre, que ya en las distintas sesiones plenarias de este procedimiento legislativo, se había puesto de relieve la ausencia de mención alguna sobre quién o qué organismos serían los encargados de la redacción de los Informes y mucho menos la cualificación de los mismos.

---

<sup>149</sup> En este caso se seguiría el principio de desconcentración. La integración orgánica de los servicios implicaría que esta formación en género podría impartirse desde las propias Secretarías Generales Técnicas, como órgano colegiado interministerial adscrito al Ministerio de Igualdad, o una Comisión (Unidad) ad hoc creada al efecto.

<sup>150</sup> En este caso seguirá el principio de descentralización. La autonomía orgánica implicaría que fuesen las Unidades de Igualdad de las instituciones que correspondan, o bien otro órgano creado al efecto, pero en todo caso fuera del Ministerio, las que impartieran la formación en género. Esta última posibilidad entrañaría la creación de una normativa clara relativa al sistema de adjudicación para la impartición de dicha formación, con el objetivo de evitar que se creen monopolios institucionales en torno a la impartición de cursos de género.

No se estableció nada salvo la negativa expresa por parte de algunos grupos parlamentarios de que fuese el Instituto de la Mujer quien asumiera de forma expresa dicha función, como ya señalamos anteriormente. Recordemos que la citada Ley establece que el procedimiento de elaboración de los Proyectos de Ley, se iniciará en el Ministerio o Ministerios competentes mediante la elaboración del correspondiente Anteproyecto, y que éstos irán acompañados por la memoria, los estudios o informes sobre la necesidad y oportunidad del mismo, y un Informe sobre el Impacto por Razón de Género de las medidas que se establecen en los mismos. Comprobábamos así que no se determinaba nada al respecto de la autoría de estos Informes de Impacto de Género.

*Hoy hemos debatido y aprobado una Ley que modifica tres textos legales a la vez, y esto es posible porque cuando discutimos textos legales acabamos hablando del fondo del asunto. Si de verdad creemos que tiene que haber informes en los que se evalúe la igualdad de género, hay que hacerlo a fondo y no dejar nada cojo. Por ello hay que otorgar la competencia a alguien, que no puede ser otro que el Instituto de la Mujer.*

*Bastaría con que en la enmienda que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado se incluyera que la modificación que se propone con esa disposición adicional pasaría a ser, asimismo, la modificación de un apartado del artículo dos de la Ley del Instituto de la Mujer, como una competencia propia de ese instituto para actuar en las cuestiones que en esta proposición de Ley se están modificando. Si no lo hacemos así, quedará sin regular si alguien puede elaborar o no el informe. Esta enmienda no significa que no lo pueda hacer el Ministerio correspondiente, sino que tiene que haber un órgano que con participación de las mujeres y con una política transversal establezca los criterios generales. [...] Si no se mantienen los criterios generales en un órgano como el Instituto de la Mujer, mucho nos tememos que cualquier tipo de informe pasará por ser sectorial y que no se tendrá en cuenta para nada la política transversal que se persigue con esta proposición de Ley.[...] Y adelantándome a lo que se nos pueda argumentar en una posible segunda intervención, les diré que no nos vale aquello de que no es el momento de modificar la Ley que regula el Instituto de la Mujer, o que esta modificación se podría hacer en cualquier otro momento. No entiendo por qué, teniendo la oportunidad de hacerlo, tenemos que dejar cojas las pretensiones que persigue esta proposición de Ley que todos apoyamos.<sup>151</sup>*

Pese a que este debate tuvo lugar en el año 2003, la cuestión de fondo, hoy en día, es de máxima actualidad. En una situación de crisis económica como la que nos acontece, una de

---

<sup>151</sup> En el Pleno del Senado, en su sesión de 2 de octubre de 2003, el Grupo Parlamentario Socialista defendió su voto particular del que hemos considerado reproducir un extracto para comprender por qué durante todo el procedimiento legislativo de esta Proposición de Ley se ha insistido tanto en esta cuestión. DS. Pleno, 0151, de 02-OCT-2003. (El subrayado es nuestro).

las propuestas que se articulan con más fuerza para la reducción del déficit público, es la supresión de “duplicidades” en la Administración pública; es decir, con el fin de reducir gasto público se quieren eliminar aquellos organismos de la administración que elaboren tareas que ya están asignadas y que se vienen desarrollando por otros organismos de la misma administración.

Pensamos que tarde o temprano este tema también se abordara en relación a posibilidad o no de suprimir las Unidades de Igualdad, y que probablemente se vuelva al debate de 2003 pero en esta ocasión en sentido contrario, es decir pensamos y en cierta medida prevemos que si el Estado sigue en esta inercia de recortes públicos, las Unidades de Igualdad pueden desaparecer y sus funciones se atribuyan a un único organismo externo y común para toda la administración, que pudiera ser el Instituto de la Mujer.

En cualquier caso hemos de advertir que la única manera de que esta opción de supresión de las Unidades de Igualdad en pos a una sobrecarga de trabajo de un único organismo, no repercuta negativamente en la sociedad, será dotando de todos los recursos necesarios, humanos económicos, tecnológicos..., a dicho organismo, pues de no ser así, el rendimiento del mismo será inversamente proporcional a la cantidad de trabajo que asuma.

### 3.4 El Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo, desarrollo legislativo de la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno

El desarrollo reglamentario de los artículos 22 y 24 de la Ley de Gobierno se estableció a través del Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la Memoria de análisis de impacto normativa.<sup>152</sup>

Como se señala en su propia exposición de motivos, el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, tiene por objeto precisar el contenido de las memorias, estudios e informes sobre la necesidad y oportunidad de las normas proyectadas, así como de la memoria económica y del informe sobre el impacto por razón de género, que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamento, a los que hacen referencia los artículos 22 y 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, que fueron modificados por la Ley 30/2003, de

---

<sup>152</sup> Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo. BOE núm. 173 de 18 de julio de 2009.

13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno. Recordaremos que este objetivo ya se recogía en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

No podemos dejar de señalar cómo una y otra vez, en lo relativo a la evaluación del impacto de género de las normas, los plazos nunca acaban por cumplirse, ya la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, en su Disposición Transitoria Décima relativa al “Despliegue del impacto de género” establecía que:

*El Gobierno, en el presente año 2007, desarrollará reglamentariamente la Ley de Impacto de Género con la precisión de los indicadores que deben tenerse en cuenta para la elaboración de dicho informe.*

Sin embargo, no fue hasta casi tres años después que la ansiada reglamentación fuese promulgada a través del Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio.

*Si bien se trata de una norma escueta, la aprobación del Real Decreto 1083/2009 responde al objetivo de mejorar la calidad de la regulación, facilitar su logro a través de un cuidado proceso de toma de decisiones de política normativa y sistematizar y desarrollar la información sobre la justificación y los impactos previstos, mediante un sistema de indicadores utilizado por los organismos internacionales (Pauner Chulvi, 2007: 190).*

La gran novedad que introduce este Real Decreto, es el propósito de sistematizar y simplificar los informes y memorias, que deben acompañar a los anteproyectos y proyectos normativos del Gobierno, ya que establece que todos ellos se incluirán en un único documento que llevará por rúbrica «Memoria del análisis de impacto normativo», para ello, el Consejo de Ministros aprobará una Guía Metodológica que elaborarán los Ministerios de la Presidencia, de Economía y Hacienda, de Política Territorial y de Igualdad.

Esta nueva sistematización es también de aplicación a los nunca definidos proyectos de planes de especial relevancia y a las convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público, así se lo establece este RD en su Disposición Adicional Tercera

*Las previsiones de este real decreto relativas al informe sobre el impacto por razón de género serán también aplicables a los proyectos de planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística sometidos a la aprobación del Consejo de Ministros y a las convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público, en los términos establecidos en los*

*artículos 19 y 55 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.*

Como señalábamos anteriormente, este Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, es verdaderamente escueto ya que solo cuenta con tres artículos relativos: al objeto, a la estructura y contenido de la memoria del análisis de impacto normativo y a la memoria abreviada. Y termina con tres disposiciones adicionales, una derogatoria y dos disposiciones finales.

Pese a que ha sido un Real Decreto muy esperado, recordemos que la Ley que regula el impacto de género en las normas es del año 2003, y que seis años después aparece su reglamentación a través del citado RD 1083/2009 y observamos que este tampoco ha venido a determinar explícitamente el órgano que debe elaborar los citados informes.

Sin embargo Pauner (2009: 190) señala que este aspecto se puede deducir del propio articulado del RD 1083/2009, de 3 de julio.

*Por su parte, el RD 1083/2009 tampoco ha venido a determinar explícitamente el órgano sobre el que recae esta competencia pero se deduce del tenor de su artículo primero. En este precepto, excluye la aplicación de su contenido al resto de informes preceptivos que deben elaborar las Secretarías Generales Técnicas y que se reclamen a lo largo del procedimiento de elaboración de las normas. Se concluye, por tanto, que son las Secretarías Generales Técnicas las competentes en la elaboración de la memoria de impacto normativo que debe acompañar al anteproyecto de ley o enumera, entre las funciones que corresponden a este órgano colegiado interministerial adscrito al Ministerio de Igualdad, reglamento y que deberá contener los siguientes apartados: oportunidad de la propuesta, contenido y análisis jurídico, adecuación de la norma al sistema de distribución de competencias, impacto económico y presupuestario e impacto por razón de género (artículo 2.1 RD 1083/2009).<sup>153</sup>*

Finalmente, el Gobierno se compromete a la aprobación, antes del 31 de diciembre de 2009, de una Guía Metodológica que elaborarán los Ministerios de Presidencia, de Economía y Hacienda, de Política Territorial y de Igualdad para el apoyo de los distintos Departamentos ministeriales en la elaboración de la Memoria (Disposición Adicional Primera). Llama la atención que la entrada en vigor del Real Decreto se pospone al día siguiente a la aprobación

---

<sup>153</sup> Así según lo expuesto la redacción de las evaluaciones de impacto de género está atribuida, en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Gobierno, a las Secretarías Generales Técnicas de los Departamentos ministeriales (artículo 22.2). En esta tarea cuentan con el apoyo de algún órgano: sus actuaciones son supervisadas y coordinadas por la Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres creada por Real Decreto 41/2009, de 23 de enero.



por el Consejo de Ministros de esta Guía Metodológica y, en todo caso, al 1 de enero de 2010 (Disposición Final Tercera).

### 3.5 La Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 1083/2009 de 3 de julio, el Consejo de Ministros aprobó, con fecha de 11 de diciembre de 2009, la Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.<sup>154</sup>

La publicación de esta Guía fue precedida de un comunicado de prensa. En este comunicado, que se puede encontrar en la página Web del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, se señalaba que la citada Guía había sido elaborada conjuntamente por los Ministerios de la Presidencia, de Economía y Hacienda, de Política Territorial y de Igualdad.

Sin embargo, analizada al completo la Guía, observamos que al igual que pasara con los Informes de Evaluación de Impacto de Género, no encontramos en la Guía referencia alguna a quien la ha elaborado, a su autoría y por ende a su formación en temas relativos a la igualdad real y de oportunidades; y salvo el logo del Ministerio de Presidencia y la referencia a la edición de la misma realizada por la Secretaría General Técnica y al Centro de Publicaciones, no contiene, como señalamos, mención alguna a qué persona u organismo han sido los encargados de su elaboración.

En nuestro interés por conocer a quién o a qué organismo se debe la creación de esta Guía, observamos que la ubicación de este documento en la web del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, en el apartado de “Iniciativas de mejora y reducción de cargas”<sup>155</sup>, podía proporcionarnos a través del organigrama allí recogido los datos necesarios para conocer la autoría de la citada Guía.

---

<sup>154</sup> Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. Documento en el que se recoge y unifica la información que acompaña a un proyecto normativo, justificando su oportunidad y necesidad y realizando una estimación del impacto en diferentes ámbitos de la realidad que tendrá su aprobación. Representa por tanto un avance en relación con la concepción tradicional de la información que acompaña a un proyecto, hasta entonces contenida en las memorias justificativa y económica y en el informe de impacto de género. [http://www.mpt.gob.es/areas/funcion\\_publica/iniciativas/impacto\\_normativo/parrafo/0/text\\_es\\_files/file0/guia-metodologica-ain\\_1264084813.pdf](http://www.mpt.gob.es/areas/funcion_publica/iniciativas/impacto_normativo/parrafo/0/text_es_files/file0/guia-metodologica-ain_1264084813.pdf) (Consultado en última ocasión en diciembre de 2011).

<sup>155</sup> Iniciativas de mejora y reducción de cargas” del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. Web [http://www.mpt.gob.es/areas/funcion\\_publica/iniciativas/impacto\\_normativo.html](http://www.mpt.gob.es/areas/funcion_publica/iniciativas/impacto_normativo.html). (Consultado en última ocasión en septiembre de 2011).

De la lectura del citado organigrama llamó nuestra atención el apartado referido a la Secretaría de Estado para la Función Pública, donde encontramos que, entre otras funciones, también se establece que corresponde a la Dirección General de Organización Administrativa y Procedimientos:

*El diseño, impulso y seguimiento de la ejecución de la política de mejora normativa, que comprende el análisis de impacto normativo; la actualización y desarrollo de la Guía Metodológica para la elaboración de la memoria del análisis de impacto normativo; la reducción de cargas administrativas así como la simplificación y mejora de los procedimientos administrativos, mediante la coordinación interdepartamental y la cooperación interadministrativa en aquellas materias sobre las que inciden competencias de diferentes administraciones. Sobre las materias anteriormente mencionadas también corresponde a esta Dirección General las relaciones internacionales, sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Secretaría General Técnica del Departamento y de las que correspondan al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.*<sup>156</sup>

Esta anotación web deja claro que corresponde a la Dirección General de Organización Administrativa y Procedimientos la actualización y desarrollo de la Guía Metodológica para la elaboración de la memoria del análisis de impacto normativo, pero no establece quién o qué organismo ha sido el encargado de su elaboración.

La cuestión de la autoría de esta Guía no es una cuestión baladí, pues más allá de lo que institucionalmente puede representar para una persona u organismo el aparecer como él o la encargada de la elaboración la citada Guía, lo que nos inquieta es no poder conocer qué formación específica tiene o ha adquirido esa persona u organismo en temas relacionados con la igualdad de género en los ámbitos sociológico jurídico y económico; ya que la ausencia de esa formación puede convertir al análisis del impacto normativo en un mero trámite más a cumplimentar en el dossier legislativo.

De hecho, la Guía misma advierte del riesgo que existe de que la elaboración de de las Memorias de Impacto Normativo se convierta en un mero trámite. Este temor lo recoge al definir en su introducción qué es el *Análisis de Impacto Normativo*:

*El Análisis de Impacto Normativo es una herramienta para la mejora de la regulación, mediante la cual se sistematiza y ordena la información*

---

<sup>156</sup> Dirección General de Organización Administrativa y Procedimientos. Subdirección General de Mejora y Simplificación de la Regulación Procedimental. Web: [http://www.mpt.gob.es/Ministerio/organigrama/Secretaria\\_estado\\_Funcion\\_Publica/dgoap.html](http://www.mpt.gob.es/Ministerio/organigrama/Secretaria_estado_Funcion_Publica/dgoap.html). (el subrayado es nuestro. Consultado en última ocasión en diciembre 2011).

*relevante para valorar el impacto de una iniciativa normativa con el fin de ayudar en el proceso de su aprobación.*

*El Análisis de Impacto Normativo es un proceso continuo. No es, por tanto, un trámite que deba cumplirse una vez se haya terminado de redactar una nueva propuesta normativa, ni tampoco es un trámite que se agote con la elaboración de la Memoria.*

*Con el Análisis de Impacto Normativo, por tanto, se estructura la información necesaria para la valoración y toma de decisiones, y se ofrecen argumentos a favor de una propuesta normativa como opción más adecuada para afrontar una situación<sup>157</sup>.*

Así pues, aunque desconocemos a quién se debe atribuir la autoría de la Guía, observamos como en ella se establece, aunque de manera muy confusa, qué órgano o centro directivo tiene que elaborar la memoria del análisis normativo y en qué momento:

*La Memoria se elabora por el órgano o centro directivo impulsor y responsable de la propuesta normativa. Cuando se trate de una propuesta conjunta, la elaboración y actualización de la Memoria será responsabilidad del órgano o centro directivo de quien parta la iniciativa, si bien en ella participarán todas las unidades proponentes.*

*En ningún caso la elaboración de la Memoria podrá remitirse a otros órganos o centros distintos de los responsables de la propuesta, lo que no es óbice para que en caso de que resulte necesario, puedan realizarse las consultas pertinentes para la realización de determinados análisis.*

*La Memoria se realizará de manera simultánea a la elaboración del proyecto normativo, desde su inicio hasta su finalización. La Memoria no se exigirá con ocasión de la elaboración del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. El artículo 37.2 de la Ley 47/2003, de 26 de diciembre, General Presupuestaria señala la documentación complementaria que acompañará al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional segunda del Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio.<sup>158</sup>*

*Pese a lo establecido, lamentamos insistir en la desinformación existente relativa a la formación específica tiene, el órgano o centro directivo impulsor y responsable de la propuesta normativa en temas relacionados con la igualdad de género en los ámbitos sociológico, jurídico y económico; sobre todo cuando en la propia Guía se señala la posibilidad de que ¿ente?, una propuesta normativa no se deriven impactos apreciables en los ámbitos que*

---

<sup>157</sup> Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, p.4.  
[http://www.mpt.gob.es/areas/funcion\\_publica/iniciativas/impacto\\_normativo/parrafo/0/text\\_es\\_files/file0/guia-metodologica-ain\\_1264084813.pdf](http://www.mpt.gob.es/areas/funcion_publica/iniciativas/impacto_normativo/parrafo/0/text_es_files/file0/guia-metodologica-ain_1264084813.pdf) (Consultado en última ocasión en diciembre de 2011). (El subrayado es nuestro).

<sup>158</sup> Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, p. 6.  
[http://www.mpt.gob.es/areas/funcion\\_publica/iniciativas/impacto\\_normativo/parrafo/0/text\\_es\\_files/file0/guia-metodologica-ain\\_1264084813.pdf](http://www.mpt.gob.es/areas/funcion_publica/iniciativas/impacto_normativo/parrafo/0/text_es_files/file0/guia-metodologica-ain_1264084813.pdf) (Consultado en última ocasión en diciembre de 2011).

*ella señala. ¿No habría pues que cuestionarse la formación del equipo encargado de la elaboración de la memoria cuando ante un proyecto normativo puede estimarse que de él no se deriva ningún impacto?*

*Cuando se estime que de una propuesta normativa no se derivan impactos apreciables en los ámbitos señalados, podrá realizarse una Memoria abreviada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la Memoria del análisis de impacto normativo y en el capítulo V de esta Guía.<sup>159</sup>*

Para completar el vacío relativo a la preparación en cuestiones de género que tienen las personas encargadas de la elaboración de estas memorias, proponemos aplicar de manera análoga la metodología participativa que se viene utilizando, cada vez en mayor medida, en la elaboración de planes de igualdad en las empresas.<sup>160</sup>

Esta metodología participativa de formación en género, se basa en la impartición de cursos de formación en género utilizando y demandando para ello una participación activa, en todas las fases del proyecto de elaboración del plan de igualdad, de todas las personas que conforman la empresa; de manera que con esta metodología se pretende que la citada formación en género se aplique de manera transversal a todo el personal de la empresa, desde el equipo de dirección a la última persona que conforme el organigrama empresarial, es decir una manera de llevar a cabo un trabajo de forma unida e imbricada.<sup>161</sup>

Así, si esto mismo se trasvasara al ámbito de elaboración de las Memorias de Análisis de Impacto, se acabarían por crear equipos multidisciplinares con una formación y modelo de trabajo homogéneo, cuyo trabajo se traduciría en una mejor y más eficaz manera de llevar a cabo el análisis del impacto sobre la implementación de determinada normativa en función del género, pudiéndose corregir si fuese necesario, aquellas cuestiones que pudiesen aumentar la brecha de desigualdad.

Llegados a este punto es importante no dejar de señalar que la Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo no es una norma

---

<sup>159</sup> Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, p.6.  
[http://www.mpt.gob.es/areas/funcion\\_publica/iniciativas/impacto\\_normativo/parrafo/0/text\\_es\\_files/file0/guia-metodologica-ain\\_1264084813.pdf](http://www.mpt.gob.es/areas/funcion_publica/iniciativas/impacto_normativo/parrafo/0/text_es_files/file0/guia-metodologica-ain_1264084813.pdf) (Consultado en última ocasión en diciembre de 2011).

<sup>160</sup> La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece en su CAPÍTULO III, lo concerniente a los planes de igualdad de las empresas y otras medidas de promoción de la igualdad, y más concretamente en artículo 45 relativo a la elaboración y aplicación de los planes de igualdad.

<sup>161</sup> En este sentido el *Manual para implementación de Planes de Igualdad en las Empresas de Economía Social*, elaborado por la Junta de Andalucía, establece que para elaborar un Plan de igualdad es necesario contar con todas las personas que conforman la empresa desde los órganos de gestión hasta las personas que trabajan en ella. Web: <http://www.mujieryeconomiasocial.com/document/investpub/09.pdf> (Consultado en última ocasión en marzo de 2012).

aunque fuese aprobada en Consejo de Ministros, se trata pues de un documento sin carácter dispositivo.

La Guía está estructurada en cinco partes y siete anexos, la primera parte es la introducción; la segunda es la oportunidad de la propuesta, una tercera parte referida al contenido, análisis jurídico y descripción de la tramitación; una cuarta parte que trata del análisis de los impactos que será en la que nos centremos y una última parte referida a la memoria abreviada.

### **Esquema de elaboración de la memoria del análisis de impacto normativo.**



De su estructura podemos deducir que esta Guía tiene como objetivo ayudar al organismo competente en la elaboración de la memoria. Dado que a través de esta memoria se debe analizar el impacto normativo de los anteproyectos de ley, de los proyectos de reglamento y de los planes de especial relevancia, se ha previsto que tuviese un contenido con la amplitud necesaria para reflejar todas esas posibilidades, de forma que pueda acomodarse al caso concreto de cada proyecto normativo:

*Por un lado, la Memoria del análisis de impacto normativo, permite contar con un proceso sistemático y estructurado para conocer cuáles son los elementos que deben analizarse en la adopción de una nueva propuesta normativa.*

*Por otro lado, sirve para ofrecer esa información a los agentes afectados por la norma, y a todos aquellos que participan en su proceso de elaboración.*

*Finalmente, coadyuva a la realización de las evaluaciones de los resultados e impactos de los programas y políticas públicas. En efecto, si bien no se trata de su objetivo inmediato, lo cierto es que los análisis de impacto que se realicen con carácter previo a la aprobación de una norma pueden ser una ayuda importante para las evaluaciones que puedan realizarse con posterioridad sobre tales impactos y resultados.*

*El análisis de impacto normativo nunca sustituye a la decisión política. Se limita a aportar información relevante para que los órganos competentes tomen las decisiones que estimen oportunas.*<sup>162</sup>

De esta manera se ha pretendido garantizar que a la hora de elaborar y aprobar un proyecto normativo o un plan de especial relevancia<sup>163</sup> se cuente con la información necesaria para estimar el impacto que la norma supondrá para sus destinatarios y agentes.

### **3.5.1 Análisis del Impacto por Razón de Género en la Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo**

Podemos definir la Guía como un instrumento metodológico para la elaboración de la memoria económica y del informe sobre el impacto por razón de género, que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamento, según lo dispuesto en la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, y más tarde en Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

---

<sup>162</sup> Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, p.5. [http://www.mpt.gob.es/areas/funcion\\_publica/iniciativas/impacto\\_normativo/parrafo/0/text\\_es\\_files/file0/guia-metodologica-ain\\_1264084813.pdf](http://www.mpt.gob.es/areas/funcion_publica/iniciativas/impacto_normativo/parrafo/0/text_es_files/file0/guia-metodologica-ain_1264084813.pdf) (Consultado en última ocasión en diciembre de 2011). (El subrayado es nuestro).

<sup>163</sup> Aunque la aprobación de la citada Guía (11 de diciembre de 2009) es bastante posterior a la promulgación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que ampliaba la obligación de acompañar de Informes de Impacto de Género a los planes de especial relevancia, hemos constatado que la Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo siempre hace referencia, incluso en su nombre, a proyectos normativos, no recogiendo en ningún momento alusión alguna a los planes de especial relevancia. Por ese motivo, y con el fin de ser lo más rigurosos posible, no lo hemos incluido en el estudio de la citada Guía.

De manera que todo proyecto normativo irá acompañado de una Memoria de Análisis Normativo que hemos dividido en dos partes; una primera parte común a todos los proyectos normativos donde se reflejará lo siguiente:

- La oportunidad de la propuesta normativa.
- El contenido de la propuesta normativa.
- El análisis jurídico de la propuesta normativa.
- La descripción de la tramitación de propuesta normativa o de plan de especial relevancia.

Una segunda parte donde se recogerían los análisis de los impactos que conllevaría la aplicación del citado proyecto normativo, así en esta parte se analizaría:

- La adecuación del proyecto normativo.
- El impacto económico y presupuestario.
- El impacto por razón de género.
- Otros impactos.

Dado que el objeto de la presente investigación es la estimativa y evaluación de género de los proyectos normativos y los planes de especial relevancia, en este apartado y con el fin de no dispersar nuestro trabajo analizaremos únicamente la parte de la Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo relativa al impacto por razón de género.

Debemos comenzar este apartado señalando cómo la Guía establece una delimitación material para la realización de un análisis de impacto por razón de género:

*En todos aquellos casos en los que la norma propuesta pueda tener efectos, directos o indirectos, sobre personas físicas, se realizará una previsión sobre los resultados de la aplicación de la misma y se analizarán sus efectos para los hombres y mujeres que sean sus potenciales destinatarios<sup>164</sup>.*

Consideramos que la delimitación del ámbito material que hace la Guía es bastante confusa y si que si esta se aplicase literalmente podríamos afirmar que es contraria a derecho.

---

<sup>164</sup> Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, p. 40.  
[http://www.mpt.gob.es/areas/funcion\\_publica/iniciativas/impacto\\_normativo/parrafo/0/text\\_es\\_files/file0/guia-metodologica-ain\\_1264084813.pdf](http://www.mpt.gob.es/areas/funcion_publica/iniciativas/impacto_normativo/parrafo/0/text_es_files/file0/guia-metodologica-ain_1264084813.pdf) (Consultado en última ocasión en diciembre de 2011). (El subrayado es nuestro).

No podemos olvidar que la Guía es un mero documento, que no tiene carácter dispositivo y que por tanto, en virtud del carácter formal y jerárquico de nuestro ordenamiento jurídico, un documento sin carácter normativo, como es la Guía no puede delimitar el ámbito material de la aplicación de las leyes 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno; la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, y de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

En el sentido de que estas leyes, citadas arriba, establecen la obligatoriedad de acompañar de Informe de Impacto de Género a todos los anteproyectos de ley, a los proyectos de reglamento, y planes de especial relevancia sometidos a la aprobación del Consejo de Ministros. En ningún momento someten este acompañamiento a una *conditio sine qua non* tal y como se señala en la Guía que “la norma propuesta pueda tener efectos, directos o indirectos, sobre personas físicas”.

En lo referente al aspecto formal, la parte de la Guía dedicada al Impacto por Razón de Género, se compone de cuatro páginas (una de ellas dedicadas a ejemplos) frente a las casi diez que esta Guía dedica al impacto económico y presupuestario, (sin contar que más de la mitad del grueso de la Guía son anexos para llevar a cabo el informe del citado impacto económico y presupuestario).

Se puede observar que la parte de la Guía dedicada al Impacto por Razón de Género, incluye los siguientes apartados:

- Identificación de los objetivos en materia de igualdad de oportunidad que son de aplicación.
- Análisis de impacto de género.
  - Descripción de la situación de partida.
  - Previsión de resultados.
    - Resultados directos de la aplicación de la norma, expresados en términos cuantitativos y desagregados por sexo.
    - Incidencia sobre los roles y estereotipos de género.
    - Contribución al desarrollo de los objetivos de igualdad de oportunidades identificados.
  - Valoración del impacto de género.
    - Negativo.



- Nulo.
- Positivo.

Si tenemos en cuenta todo lo que hemos expuesto a lo largo de este capítulo, podemos afirmar que esta Guía se encuentra a caballo entre la guía elaborada por la Comisión Europea utilizada para la elaboración de los informes de impacto de género por algunos Ministerios y por la Junta de Andalucía, y la guía elaborada en 2005 por Fundación Mujeres, utilizada en su mayoría por los Ministerios de mayor “contenido social” como el extinto Ministerio para la Igualdad<sup>165</sup>.

Pese a que ambas guías, la de la Comisión Europea y la de Fundación Mujeres, podían haber sido completadas y mejoradas, tal y como señalábamos anteriormente, quedaba claro que la guía de Fundación Mujeres estaba mucho mejor elaborada, más completa que la de la Comisión Europea.

Por tanto, consideramos que se ha perdido una gran oportunidad al no haber aprovechado la publicación del RD 1083/2009 de 3 de julio, para corregir los defectos de la guía de Fundación Mujeres.

Es de lamentar que este Real Decreto haya servido para crear una nueva Guía, a todas luces insuficiente, y que deja en el tintero cuestiones básicas que la guía de Fundación Mujeres explotaba y que ahora se pasan por alto; además no podemos obviar el hecho de que comparativamente dentro de la propia Guía, el impacto de género, se trata de una manera muy superficial, sobre todo si lo analizamos y comparamos en relación a lo dispuesto en la misma Guía para el análisis del impacto presupuestario y económico.

### 3.6 Compilación de los Informes de Evaluación de Impacto de Género

Recabada la normativa marco relativa a la creación y elaboración de los Informes de Evaluación de Impacto de Género, en este y los siguientes apartados, analizaremos los IEIG que se han elaborado en el ámbito estatal español durante la VIII y IX legislatura, en virtud

---

<sup>165</sup> El Ministerio de Igualdad de España se creó en 2008 durante la IX Legislatura bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) para impulsar las políticas sociales recogidas en la Ley para la Igualdad y en la Ley Integral contra la Violencia sobre la Mujer, así como los programas sociales del Instituto de la Mujer y del Instituto de la Juventud. El Ministerio recogía las competencias de Igualdad que en la VIII Legislatura de España tenía el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el cual pasó a llamarse Ministerio de Trabajo e Inmigración. El 20 de octubre de 2010, en una remodelación del Gobierno, el Ministerio fue suprimido y su estructura se integró en el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad de España conformando la nueva Secretaría de Estado de Igualdad.

de lo dispuesto en la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, y la normativa posterior, como el Real Decreto 1083/2009 de 3 de julio, por el que se regula la memoria de impacto normativo, que ha venido a completarla y desarrollarla, según hemos visto en los apartados anteriores.

Esto ha supuesto, como hemos visto y como veremos a lo largo de este epígrafe, que para la elaboración de los IEIG se ha carecido de regulación específica para su elaboración, provocando así una elaboración heterogénea de los informes según se elaboraban a la luz de la guía de la Comisión Europea o a la luz de la guía elaborada por Fundación Mujeres, ninguna de estas guías tienen carácter vinculante.

Los Informes de Evaluación de Impacto de Género que analizaremos en este y capítulo son todos aquellos que se encuentran en el Archivo del Congreso de los Diputados.<sup>166</sup> Estos informes tienen carácter público y pueden ser consultados siguiendo las instrucciones<sup>167</sup> que se dan desde el Servicio de Archivo del Congreso de los Diputados.

Debemos señalar que el trabajo de compilación de los IEIG, es un trabajo minucioso que ha de hacerse de manera manual, no informatizada, ni por digitalizada, ya que los dosieres legislativos no están informatizados, de tal manera que no es posible rastrearlos de manera telemática e imprimirlos posteriormente.

El Servicio de Archivo del Congreso de los Diputados, dispone de una INTRANET donde quedan anotados los contenidos de cada uno de los dosieres relativos a los Proyectos de Ley que se van elaborando, pero se trata únicamente de una anotación, que no de un acceso directo; esta anotación nos permite saber cual es contenido (antecedentes) de determinado Proyecto de Ley (Dictamen de Consejo de Estado, Informe del Consejo General del Poder Judicial, Informe de Impacto de Género...)<sup>168</sup>, pero la búsqueda del dossier y de la documentación concreta deseada, los IEIG en nuestro caso, ha de hacerse en persona y dossier

---

<sup>166</sup> Servicio de Archivo del Congreso de los Diputados. Reúne el conjunto de documentos producidos o recibidos por la cámara con el fin de conservarlos y ordenarlos científicamente para su posible utilización en los trabajos parlamentarios, en la gestión administrativa y en la investigación. Web: <http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/ArchCon> (Consultado en última ocasión diciembre 2011).

<sup>167</sup> A parte del personal del Congreso de los Diputados podrán acceder al Servicio de Archivo Personas en posesión de la tarjeta de investigador del Congreso de los Diputados. Norma sobre acceso y valoración de los fondos documentales y bibliográficos del congreso de los diputados, aprobada por la mesa del congreso de los diputados el día 19 de julio de 2010. BOCG. D, 435, 30-JUL-2010. Web: [http://www.congreso.es/public\\_oficiales/L9/CONG/BOCG/D/D\\_435.PDF#page=2](http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/D/D_435.PDF#page=2) (Consultado en última ocasión diciembre 2011).

<sup>168</sup> Estas anotaciones o antecedentes no son *numerus clausus* sino que varían en función de la normativa que se pretende adoptar.

por dossier de cada uno de los Proyectos de Ley en cuyos antecedentes aparezca como elaborado el Informe de Evaluación de Impacto de Género.

En lo referente al ámbito temporal hemos establecido una horquilla que abarcará a los IEIG que hayan acompañado a los Proyectos de Ley elaborados bajo la VIII (2004- 2008)<sup>169</sup> y la XI (2008- 2011) legislatura del Gobierno Español.

Como fecha de final para terminar de compilar Proyectos de Ley hemos elegido el 28 de Junio de 2011, fecha en la que tuvo lugar el último debate sobre el estado de la nación<sup>170</sup> de la IX legislatura, el último informe que en esta fecha se encontraba en el Servicio de Archivo del Parlamento tiene como fecha de entrada el 19 de noviembre de 2010. Se ve aquí claramente el descompás temporal existente entre el inicio de la tramitación legislativa de un Proyecto Ley y el momento en el que el dossier que lo recoge llega al Servicio de Archivo; en este caso en concreto hay una variación de ocho meses.

Señalaremos como anecdótico que cuando elegimos la fecha final para terminar la compilación, aún no se sabía que el gobierno español adelantaría las elecciones, no agotándose de esta manera los cuatro años previstos que debía durar la IX legislatura. La X legislatura<sup>171</sup> del Gobierno Español comienza el día 13 de diciembre de 2011.

Así pues trabajaremos sobre todos aquellos Proyectos de Ley que han sido aprobados desde la entrada en vigor de la VIII legislatura hasta el 28 de Junio de 2011.

Para llevar a cabo el análisis de todos estos Proyectos de Ley y sus correlativos IEIG, en primer lugar nos centraremos en el conjunto de Proyectos de Ley que se han presentado durante la VIII legislatura y cuyos IEIG se han elaborado, por tanto, de manera heterogénea ante la ausencia de una normativa reguladora y vinculante.

En segundo lugar analizaremos los el conjunto de Proyectos de Ley que se han presentado durante la IX legislatura hasta la fecha que acabamos de señalar y cuyos IEIG se

---

<sup>169</sup> El Consejo de Ministros de la VIII Legislatura cesó el 9 de marzo de 2008 por la celebración de elecciones generales, y continuó en funciones hasta el 14 de abril de 2008, día en que tomó posesión el Consejo de Ministros de la IX Legislatura.

<sup>170</sup> Editorial del diario estatal el País, sobre el último debate del Estado de la nación en junio de 2011: “Debate de despedida” Web: [http://www.elpais.com/articulo/opinion/Debate/despedita/elpepiopi/20110629elpepiopi\\_1/Tes](http://www.elpais.com/articulo/opinion/Debate/despedita/elpepiopi/20110629elpepiopi_1/Tes)(Consultado en última ocasión diciembre 2011).

<sup>171</sup> Nota de prensa del Congreso de los diputados 13/12/2011: “El Congreso de los Diputados surgido de las elecciones generales del 20 de noviembre se reunió hoy, día 13 de diciembre, a las 10:00 horas, para celebrar su sesión constitutiva, tal y como determina el Real Decreto 1329/2011, por el que se acuerda la disolución de las Cámaras elegidas el 9 de marzo de 2008 y se convocan nuevos comicios.” Web: [http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?\\_piref73\\_7706063\\_73\\_1337373\\_1337373\\_.next\\_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa?idNotaSalaPrensa=5344&mostrarvolver=N](http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373_.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa?idNotaSalaPrensa=5344&mostrarvolver=N) (consultado por última ocasión en diciembre 2011).

han elaborado a la luz de lo dispuesto en el RD 1083/2009, de 3 de julio, pasando a convertirse en Memorias de Análisis de Impacto Normativo.

### **3.6.1 Análisis cuantitativo y relacional de los Proyectos de Ley elaborados durante la VIII y IX legislatura.**

Gracias a los datos proporcionados por el Servicio de Archivo del Congreso de los Diputados, datos obtenidos de su INTRANET, tenemos conocimiento de que durante la VIII legislatura se presentaron ante el Congreso de los Diputados un total de 152 Proyectos de Ley.

La distribución temporal, en años fiscales, de la presentación de estos 152 Proyectos de Ley fue la siguiente: En el año 2004 se presentaron 17 Proyectos de Ley<sup>172</sup>, en el año 2005 se presentaron 55 Proyectos de Ley, se presentaron 49 Proyectos de Ley en el año 2006 y en el año 2007 se presentaron 31 Proyectos de Ley. Esta distribución puede verse claramente en el siguiente gráfico.

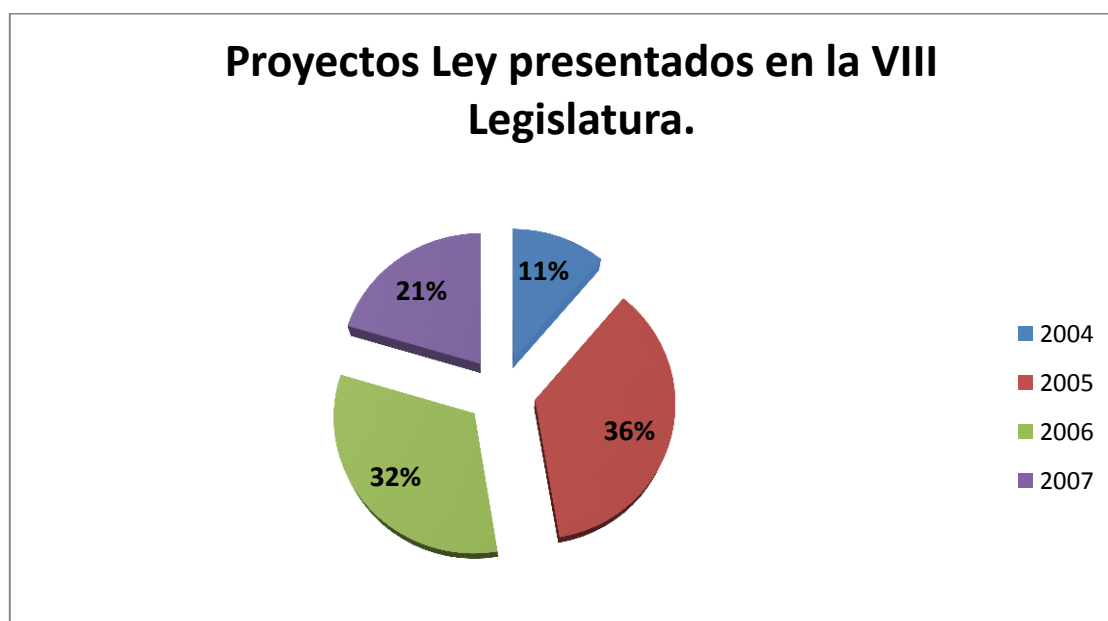


Gráfico de elaboración propia.

---

<sup>172</sup> Debemos recordar que las legislaturas no se corresponden exactamente con los años fiscales, por ello es necesario señalar que durante todo el año natural 2004 se presentaron 24 Proyectos de Ley, pero que solo computaremos los 17 Proyectos de Ley que se presentaron desde que se inició la VIII legislatura el 2 de abril de 2004.

Los primeros datos que obtenemos al analizar cuantitativamente los Informes de Evaluación de Impacto de Género, elaborados según lo dispuesto en la Ley 30/2003 de 13 de octubre, durante la VIII legislatura son los siguientes: De los 152 Proyectos de Ley (PL en adelante) presentados en la VIII legislatura, según los datos obtenidos de la INTRANET del Servicio de Archivo del Congreso de los Diputados, 110 de esos Proyectos de Ley vienen acompañados por un Informe de Evaluación de Impacto de Género, de los cuales se nos han proporcionado un total de 85 IEIG.

Debemos señalar que los datos que aparecen en la INTRANET del Servicio de Archivo del Congreso de los Diputados, no es completamente fiable, ya que investigando *in situ* recopilamos un total de 6 IEIG cuya existencia no estaba recogida en los dosieres de los PL a los que acompañaban. Así pues poseemos 6 IEIG que no están recogidos como “antecedentes” del Proyecto de Ley al que acompañan, tal y como se puede observar en los gráficos siguientes.

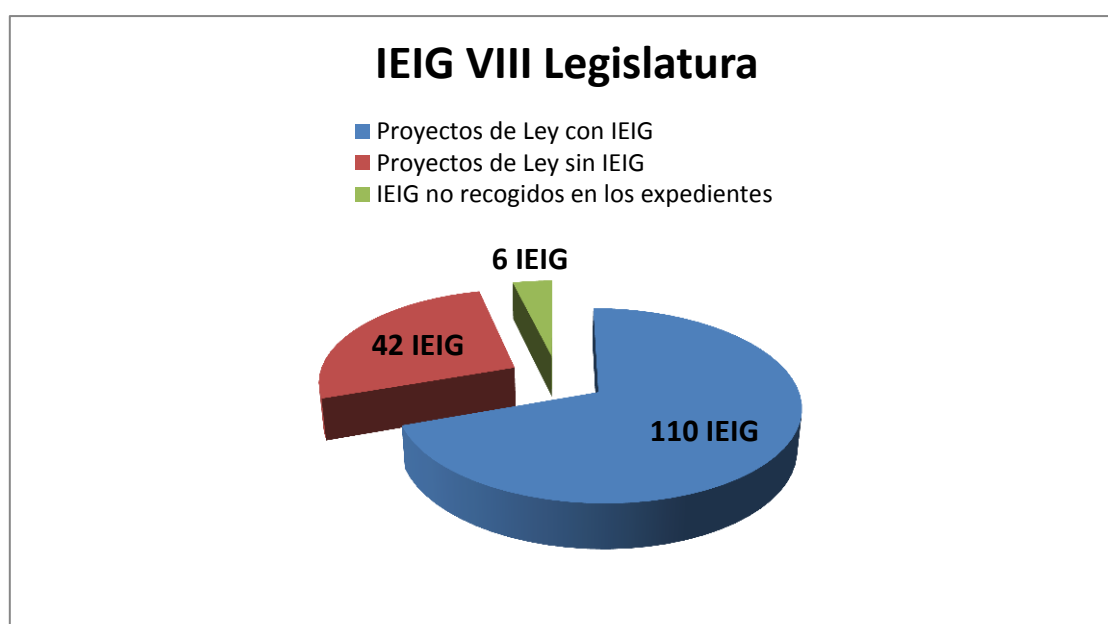


Gráfico de elaboración propia.

### Muestreo de los IEIG de la VIII Legislatura

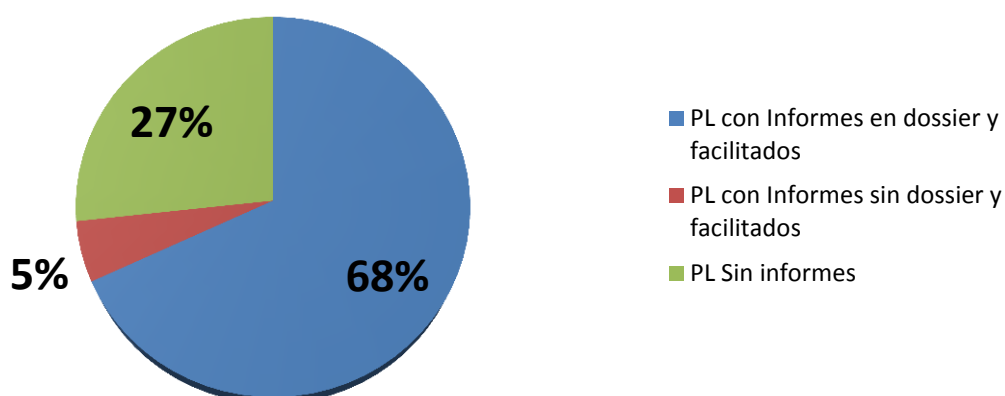


Gráfico de elaboración propia.

Con respecto a los datos cuantitativos obtenidos, siempre a través la INTRANET del Servicio de Archivo del Congreso de los Diputados, tenemos conocimiento de que durante la IX legislatura se presentaron 145 Proyectos de Ley.

La distribución temporal, en años fiscales, de la presentación de los 145 Proyectos Ley fue la siguiente: En el año 2008 se presentaron 19 Proyectos de Ley, en el año 2009 se presentaron 37 Proyectos de Ley, se presentaron 21 Proyectos de Ley en el año 2010 y hasta el fin de la legislatura del año 2011 se presentaron 68 Proyectos de Ley. Esta distribución puede verse claramente en el siguiente gráfico.

### Proyectos Ley presentados en la IX Legislatura.

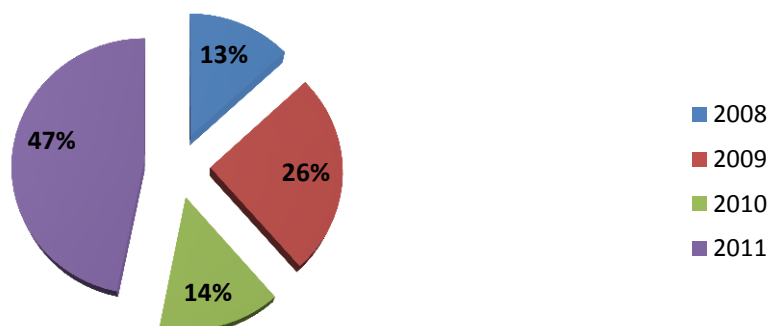


Gráfico de elaboración propia.

A través del presente gráfico, podemos observar que durante la actividad parlamentaria estatal, la tendencia en ambas legislaturas ha sido muy parecida salvo en el último año de ambas legislaturas, en el que se observa una gran divergencia de una legislatura a otra; dando lugar a lo que se conoce como gráfico tijera, característico de las situaciones de crisis, como la que viene sufriendo España especialmente a partir de la IX legislatura. Destacaremos que esta situación de similitud entre ambas legislaturas contrasta mucho con lo ocurrido en la Comunidad Autónoma Andaluza como veremos en el capítulo siguiente.

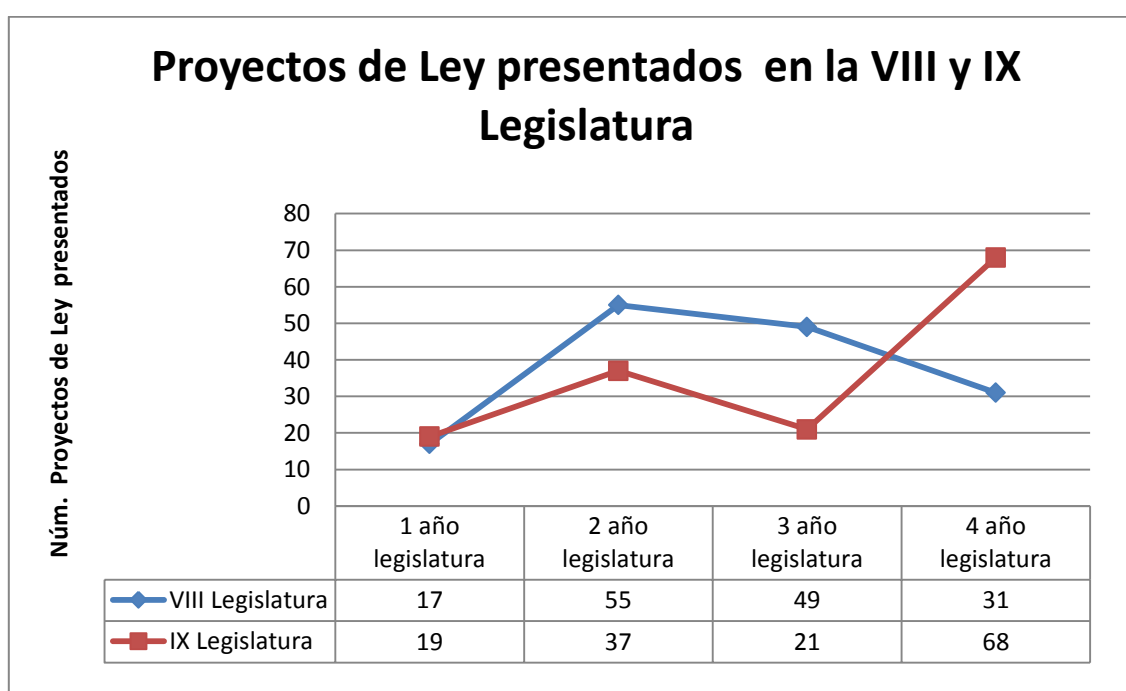


Gráfico de elaboración propia.

Al igual que hiciésemos para el estudio de los Proyectos de Ley presentados durante la VIII legislatura; y a la luz de los datos que hemos obtenido al hacer un primer análisis cuantitativo de los Informes de Evaluación de Impacto de Género, elaborados IX legislatura, según lo dispuesto en la Ley 30/2003 de 13 de octubre y en el RD 1083/2009, de 3 de julio, exponemos los siguientes resultados:

De los 145 Proyectos de Ley aprobados en la XI legislatura, según los datos obtenidos de la INTRANET del Servicio de Archivo del Congreso de los Diputados, 62 de ellos aún no tienen nomenclatura en el dossier, es decir están en elaboración y no son examinables.

Así pues sobre una base de 145 Proyectos de Ley vienen acompañados por un Informe o Memoria de Evaluación de Impacto de Género un total de 83 PL, concretamente 57

Proyectos de Ley han ido acompañados de Informe de Impacto de Género y 26 Proyectos de Ley han ido acompañados de Memoria del Análisis de Impacto Normativo en las que se analiza el impacto por razón de género, como puede observarse en el siguiente gráfico.

Recordaremos que es a el RD 1083/2009, de 3 de julio, a través del cual el análisis del impacto de género en la normativa pasa de llevarse a cabo mediante un documento único, el Informe de Evaluación de Impacto de Género, a analizarse en un documento complejo, la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, un documento en el que se recoge y unifica la información que acompaña a un proyecto normativo, justificando su oportunidad y necesidad y realizando una estimación del impacto en diferentes ámbitos de la realidad que tendrá su aprobación.

Para nuestra investigación, de un total de 83 Informes y/o Memorias de Evaluación de Impacto de Género que acompañan a los Proyectos de Ley y que se encuentran en el Servicio de Archivo del Congreso de los Diputados, hemos podido acceder a 72 de ellos.

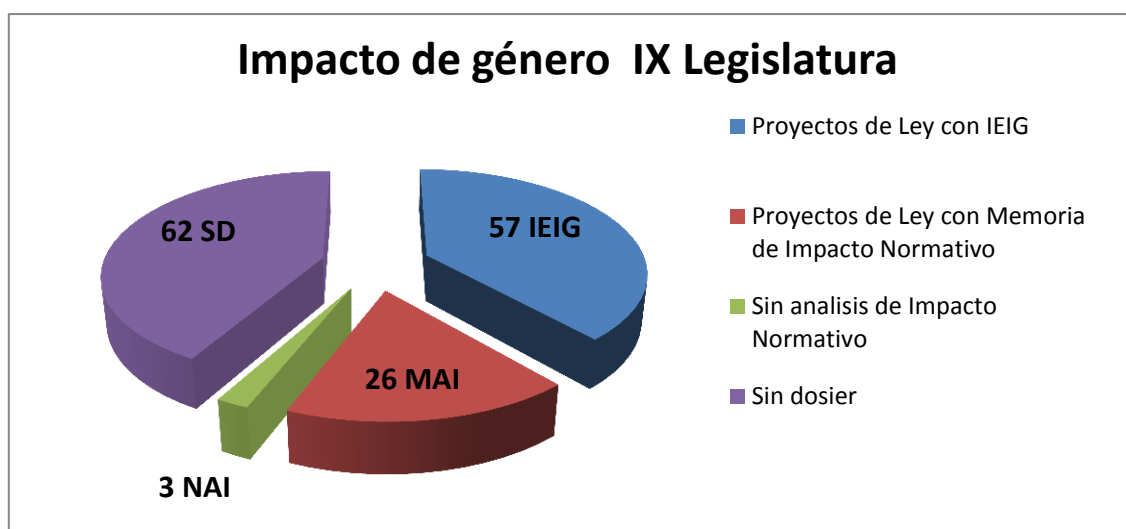


Gráfico de elaboración propia.

Dado que los Informes de Evaluación de Impacto de Género, y las Memoria del análisis de impacto normativo en las que se analiza el impacto por razón de género, se elaboran en los distintos Ministerios, y previo al análisis cuantitativo de las citadas herramientas, hemos creído relevante poner de manifiesto la composición del Gobierno de España durante la VIII y IX legislatura.

Además hemos querido dedicar unas líneas para poner de manifiesto que en el reparto de Ministerios de la VIII legislatura, se cumplió la promesa electoral de establecer el principio



de paridad entre hombres y mujeres (no así en otros puestos de responsabilidad). Convirtiéndose así, este gobierno, en el primer gobierno paritario de la historia de España.

No obstante, esta composición paritaria no duró mucho el Gobierno que se conformó para la IX legislatura perdió la paridad al situar a siete mujeres frente a nueve hombres, incluido Rodríguez Zapatero, en un total de 15 Ministerios.

Todo ello sin perder de vista que en esta misma IX legislatura también desaparece, alegándose por parte del mismo gobierno razones económicas, ahorro en situación de crisis, el Ministerio de Igualdad, creado en la anterior legislatura, en marzo de 2008 y que sin duda había puesto a España a la cabeza de las políticas de igualdad en Europa.

Es de lamentar que los recortes siempre comiencen por los ámbitos más desfavorecidos, así la desaparición de Ministerio de Igualdad visualiza como la prioridad política de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria, pasa a ser subsidiaria cuando la economía y los mercados se imponen.

Prueba de ellos puede constatarse en la siguiente tabla, donde vemos como en la IX legislatura muchas titulares de Ministerios se han visto remplazadas y en ocasiones además desplazadas por sus compañeros varones.

<b>MINISTERIO VIII LEGISLATURA</b>	<b>TITULAR</b>	<b>MINISTERIO XI LEGISLATURA</b>	<b>TITULAR</b>
<b>Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación</b>	(2004 - 2008): Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé	<b>Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación</b>	(2008-2010): Miguel Ángel Moratinos (2010-2011): Trinidad Jiménez
<b>Ministro de Justicia</b>	(2004 - 2007): Juan Fernando López Aguilar	<b>Ministro de Justicia</b>	(2008-2009): Mariano Fernández Bermejo (2009-2011): Francisco Caamaño
<b>Ministro de Defensa</b>	(2004 - 2006): José Bono Martínez (2006 - 2008): José Antonio Alonso Suárez	<b>Ministro de Defensa</b>	(2008-2011): Carme Chacón
<b>Ministro de</b>	(2004 - 2008): Pedro	<b>Ministro de</b>	(2008-2009): Pedro

<b>Economía y Hacienda</b>	Solbes Mira	<b>Economía y Hacienda</b>	Solbes Mira (2009-En el cargo): Elena Salgado
<b>Ministro del Interior</b>	(2004 - 2006): José Antonio Alonso Suárez (2006 - 2008): Alfredo Pérez Rubalcaba	<b>Ministro del Interior</b>	(2008-2011): Alfredo Pérez Rubalcaba (2011): Antonio Camacho Vizcaíno
<b>Ministra de Fomento</b>	(2004 - 2008): Magdalena Álvarez Arza	<b>Ministra de Fomento</b>	(2008-2009): Magdalena Álvarez (2009-2011): José Blanco
<b>Ministra de Educación</b>	(2004 - 2006): María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos (2006 - 2008): Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo	<b>Ministra de Educación, Política Social y Deporte. Ministro de Educación</b>	(2008-2009): Mercedes Cabrera (2009-2011): Ángel Gabilondo
<b>Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales</b>	(2004 - 2008): Jesús Caldera Sánchez-Capitán	<b>Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales</b>	(2008-2010): Celestino Corbacho (2010-2011): Valeriano Gómez
<b>Ministro de Industria, Turismo y Comercio</b>	(2004 - 2006): José Montilla Aguilera (2006 - 2008): Joan Clos i Matheu	<b>Ministro de Industria, Turismo y Comercio</b>	(2008-2011): Miguel Sebastián
<b>Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación</b>	(2004 - 2008): Elena Espinosa Mangana	<b>Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de España</b>	(2008-2010): Elena Espinosa (2010-2011): Rosa Aguilar
<b>Ministra de la Presidencia</b>	(2004 - 2008): María Teresa Fernández de la Vega Sanz	<b>Ministra de la Presidencia</b>	(2008-2010): María Teresa Fernández de la Vega (2010-2011): Ramón

			Jáuregui
<b>Ministro/a de Administraciones Públicas</b>	(2004 - 2007): Jordi Sevilla Segura (2007 - 2008): Elena Salgado Méndez	<b>Ministra de Administraciones Públicas</b> <b>Ministro de Política Territorial</b>	(2008-2009): Elena Salgado (2009-2011): Manuel Chaves
<b>Ministra/o de Cultura</b>	(2004 - 2007): Carmen Calvo Poyato (2007 - 2008): César Antonio Molina Sánchez	<b>Ministra/o de Cultura</b>	(2008-2009): César Antonio Molina (2009-2011): Ángeles González-Sinde
<b>Ministra/o de Sanidad y Política Social e Igualdad</b>	(2004 - 2007): Elena Salgado Méndez (2007 - 2008): Bernat Soria Escoms	<b>Ministro de Sanidad y Consumo</b> <b>Ministra de Sanidad y Política Social</b>	(2008-2009): Bernat Soria (2009-2010): Trinidad Jiménez (2010-2011): Leire Pajín
		<b>Ministra de Igualdad. Se suprime y las competencias pasan al Ministerio de Sanidad y Política Social.</b>	(2008-2010): Bibiana Aído
<b>Ministra de Medio Ambiente</b>  <b>En 2008 se anexiona al Ministerio de Agricultura.</b>	(2004 - 2008): Cristina Narbona Ruiz		
<b>Ministra de Vivienda</b>	(2004 - 2007): María Antonia Trujillo Rincón (2007 - 2008): Carme	<b>Ministra de Vivienda.</b> <b>Se suprime y las competencias pasan</b>	(2008-2010): Beatriz Corredor

	Chacón Piqueras	<b>al Ministerio de Fomento.</b>	
		<b>Ministra de Ciencia e Innovación</b>	(2008-2011): Cristina Garmendia
<b>COMPOSICION DEL GOBIERNO</b>			
<b>Cargo VIII Legislatura</b>	Titular	<b>Cargo XI Legislatura</b>	Titular
<b>Presidente del Gobierno.</b>	José Luis Rodríguez Zapatero	<b>Presidente del Gobierno.</b>	José Luis Rodríguez Zapatero
<b>Vicepresidente Primero y Portavoz del Gobierno.</b>	(2004 - 2008): María Teresa Fernández de la Vega	<b>Vicepresidente/a Primero del Gobierno. Vicepresidente/a para Asuntos Económicos.</b>	(2008-2010): María Teresa Fernández de la Vega (2010-2011): Alfredo Pérez Rubalcaba (2011):Elena Salgado
<b>Vicepresidente Segundo</b>	(2004 - 2008): Pedro Solbes Mira	<b>Vicepresidente/a Segundo del Gobierno. Vicepresidente/a para Política Territorial.</b>	(2008-2009): Pedro Solbes (2009-2011 ): Elena Salgado (2011): Manuel Chaves
		<b>Vicepresidente/a Tercero del Gobierno. Desaparece el cargo.</b>	(2009-2011): Manuel Chaves
		<b>Portavoz del Gobierno</b>	(2008-2010): María Teresa Fernández de la Vega. (2010-2011): Alfredo Pérez Rubalcaba (2011): José Blanco

Tabla de elaboración propia, datos obtenidos del Ministerio de Presidencia.

### **3.6.2 Análisis cuantitativo de los Informes de Evaluación de Impacto de Género, y de las Memoria del Análisis de Impacto Normativo en las que se analiza el impacto por razón de género, elaborados según lo dispuesto en la Ley 30/2003 de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno durante la VIII y IX legislatura**

Vistos en el apartado anterior los Proyectos de Ley aprobados durante la VIII y IX legislatura, a continuación centraremos nuestra atención en el análisis cuantitativo de los Informes de Evaluación de Impacto de Género, y de las Memoria del Análisis de Impacto Normativo en las que se analiza el impacto por razón de género, elaborados según lo dispuesto en la Ley 30/2003 de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno durante la VIII y IX legislatura.

Teniendo en cuenta que el Decreto que regula la creación de la Memoria del Análisis de Impacto normativo, no se aprueba hasta la IX legislatura, en primer lugar analizaremos los IEIG que se elaboraron durante la VIII legislatura.

Así, vemos que durante la VIII legislatura 85 fueron el número de IEIG que acompañaron a los 152 Proyectos de Ley que se presentaron durante esa legislatura. El 75% de estos IEIG no tienen una extensión superior a un folio, y por ello nos ha resultado muy difícil determinar exactamente cuántos se han elaborado siguiendo las pautas establecidas bien por la “Guía para la Evaluación del Impacto de Género en Función del Género”, de la Comisión Europea, bien por la “Guía de aplicación práctica, para la elaboración de Informes de Impacto de Género de las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, de acuerdo a la Ley 30/2003”.

El 99% de ellos viene sin firmar<sup>173</sup>, y sin ningún tipo de nomenclatura que pueda indicarnos quién o qué organismo dentro del Ministerio ha sido encargado de su elaboración, eso sin tener en cuenta que un 27% de estos Informes ni siquiera recoge en qué Ministerio se

---

<sup>173</sup> En el único caso en el que se ha recogido un Informe con firma esta pertenecía a un hombre, nos referimos al IEIG relativo al “Proyecto de Ley por la que se crea el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, cuyo informe ha sido elaborado en el Ministerio de Educación y Ciencia”.

ha elaborado, por el contrario la gran mayoría de los IEIG, incluso aquellos en los que se desconoce el Ministerio emisor, sí vienen sellados por la Secretaría del Consejo de Gobierno.

<b><u>VIII LEGISLATURA</u></b>	<b>Núm. de IEIG (Total de 85)</b>
<b>NÚM. PÁGINAS</b>	
----- 1	64
-----	6
----- 3	3
----- 4	1
----- >4	11
<b>FIRMADOS</b>	1
Firmados por mujeres	0
Firmados por hombres	1
<b>SELLADOS POR SU CONSEJERÍA</b>	
Estructurados según Guía Europea	
No estructurados por Guía	
<b>CONSEJERÍA QUE EMITE EL IEIG</b>	
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales	8
Ministerio del Interior	3
Ministerio de Educación y Ciencia	3
Ministerio de Justicia	12
Ministerio de Industria Turismo y Comercio	4
Ministerio de Defensa	7
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación	1
Ministerio de la Presidencia	2
Ministerio de Sanidad y Consumo	6
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación	3
Ministerio de Economía y Hacienda	7
Ministerio de Cultura	2
Ministerio de Administraciones Públicas	1
Ministerio de Fomento	1
Ministerio de Medio Ambiente	2
NS	23

Tabla de elaboración propia

El análisis cuantitativo de los instrumentos para valorar el impacto de género en la elaboración de las normas, es más complejo en la IX legislatura que en la VIII legislatura; ya que es en esta legislatura cuando se publica el RD 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo. Con la creación de este RD, la Ley 30/2003, de 13 de octubre, por fin encuentra su desarrollo normativo y se establece así una metodología para el análisis del impacto normativo y más concretamente el análisis del impacto de género en la normativa, sustituyéndose como ya señalásemos los IEIG por las MAI.

A efectos prácticos, esto ha supuesto que de los 138 Proyectos de Ley que analizaremos<sup>174</sup> y que se presentaron durante esta legislatura, 52 fueron acompañados por Informes de Evaluación de Impacto de Género y 21 PL fueron acompañados de Memorias que analizaban el impacto normativo.

Además de este enorme cambio, debemos recordar que también durante esta legislatura, como señaláramos anteriormente, hubo modificaciones, supresiones y creación de carteras Ministeriales, lo que dificulta muchísimo el poder establecer una comparativa entre una legislatura y otra.

Como ya apuntamos en su momento, los IEIG y las Memorias de Análisis de Impacto (en adelante MAI) se elaboran al inicio del *iter* legislativo del Proyecto Ley al que deben acompañar; por tanto éstas, de realizarse, pueden y deben encontrarse en el dossier legislativo (Archivo del Congreso de los Diputados) correspondiente a la tramitación de dicho Proyecto de Ley.

Matizamos esto, porque cuando hemos llevado a cabo el análisis de los IEIG y de las MAI, otro de los inconvenientes con los que nos hemos encontrado es que gran número de los documentos relativos a los informes y memorias ( 13/52 IEIG y 16/21 MAI) carecen de cualquier tipo de referencia relativa al Ministerio, órgano, o persona que lo elabora (véase en la siguiente tabla el indicador relativo a NS, que hace referencia al documento de análisis del impacto de género que carece de ningún tipo de coordenada más que el susodicho análisis del impacto de género del Proyecto de Ley que acompaña).

Teniendo en cuenta que el objeto de nuestro estudio es el documento (IEIG o MAI) que analiza el posible impacto en función del género de la normativa en elaboración y no el dossier legislativo donde éste se encuadra, podemos afirmar que si se desconoce el dossier legislativo al que pertenece el documento de análisis, es imposible señalar unas coordenadas mínimas relativas al Ministerio o al personal que ha debido elaborarlo. Es decir, es imposible deducir dichas coordenadas del documento sea aislado ya se trate de un informe o una memoria.

Así en 29 de los 73 documentos relativos al impacto de género elaborados durante la IX legislatura, carecen de estos datos indispensables relativos a su elaboración.

---

<sup>174</sup> La divergencia entre el número de IEIG y MAI en el análisis cuantitativo (un total de 145) y el número de IEIG y MAI en este análisis cualitativo (un total de 138) se debe a la disponibilidad real de los documentos a estudio, con lo que nos consta la existencia de siete de documentos de manera virtual pero no de manera fáctica.

A continuación y a partir de la siguiente tabla señalaremos de una manera más detallada el resto de los datos cuantitativos más relevantes que hemos encontrado al analizar los Informes de Impacto de Género y las Memorias que analizaban el impacto normativo, elaboradas para que acompañaran a los Proyectos de Ley en la IX legislatura.

<b><u>IX LEGISLATURA</u></b>	<b>Núm. de IEIG (Total de 52)</b>	<b>Núm. de Memorias (Total de 21)</b>
<b>NÚM. PÁGINAS REFERIDAS AL IMPACTO DE GÉNERO</b>		
----- 1	37	20
-----	10	0
----- 3	3	1
----- 4	0	0
----- >4	2	0
<b>FIRMADOS</b>	0	0
Firmados por mujeres	0	0
Firmados por hombres	0	0
<b>SELLADOS POR SU CONSEJERÍA</b>		
Estructurados según Guía Europea	0	0
No estructurados por Guía	0	0
Siguen las pautas de Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria de Impacto Normativo	0	21
<b>CONSEJERÍA QUE EMITE EL IEIG/ Memoria</b>		
Ministerio de Trabajo e Inmigración	4	1
Ministerio del Interior	1	0
Ministerio de Educación y Ciencia	0	0
Ministerio de Justicia	11	1
Ministerio de Industria Turismo y Comercio	3	0
Ministerio de Defensa	0	0
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación	2	0
Ministerio de la Presidencia	1	0
Ministerio de Sanidad y Política Social	3	0
Ministerio de Economía y Hacienda	6	0
Ministerio de Cultura	1	0
Ministerio de Administraciones Públicas	0	0
Ministerio de Fomento	3	2
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino	3	1
Ministerio de Vivienda	1	0
NS	13	16

**Tabla de elaboración propia**

Podemos observar como en esta IX legislatura aumenta un 3% el porcentaje de Informes de Evaluación de Impacto de Género y Memorias de impacto normativo cuya extensión no supera la de un folio; alcanzándose de esta manera un 78% de documentos de análisis del impacto en función del género que no superan el folio en su extensión.



Con respecto a los Informes de Evaluación de Impacto de Género esto supone, como pasara en el análisis de la VIII legislatura, la imposibilidad de determinar exactamente cuántos de estos Informes se han elaborado siguiendo las pautas establecidas bien por la “Guía para la Evaluación del Impacto de Género en Función del Género”, de la Comisión Europea, bien por la “Guía de aplicación práctica, para la elaboración de Informes de Impacto de Género de las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, de acuerdo a la Ley 30/2003”.

En lo referente a las Memorias de Impacto normativo el caso es el contrario, el 100% de las MAI analizadas siguen desde el punto de vista estructural el esquema de memoria abreviada propuesto por la “Guía metodológica para la elaboración de la memoria del análisis del impacto normativo” elaborada en virtud de lo dispuesto en el RD 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo.

No obstante no todas las MAI analizadas vienen precedidas del obligatorio “resumen ejecutivo” previo a la memoria en sí. De hecho solo 3 de las 21 MAI, es decir un 14% de las Memorias de análisis de impacto vienen precedidas de este resumen ejecutivo.

Consideramos este dato muy relevante, ya que es en este “resumen ejecutivo”, descrito en la “Guía metodológica para la elaboración de la memoria del análisis del impacto normativo”, donde se pueden encontrar los datos mínimos relativos a la autoría y estructura de la MAI que se presenta. Así vemos como este resumen ejecutivo de la MAI debe recoger los siguientes datos:

- Ministerio/Órgano proponente
- Fecha
- Título de la norma
- Tipo de Memoria
  - Normal
  - Abreviada
- Oportunidad de la propuesta
  - Situación que se regula
  - Objetivos que se persiguen
  - Principales alternativas consideradas
- Contenido y análisis jurídico
  - Tipo de norma

- Estructura de la norma
- Informes recabados
- Trámite de audiencia
- Análisis de Impactos
  - Adecuación al orden de competencias
  - Impacto económico y presupuestario
  - Impacto de género
    - Negativo
    - Nulo
    - Positivo
  - Otros Impactos considerados
  - Otras consideraciones

Además, la omisión de este resumen ejecutivo supone que en la mayoría de los casos no se indique expresamente qué “tipo de impacto de género (negativo, nulo o positivo) conlleva la norma.

A la ausencia de este resumen ejecutivo hay que añadir que, como pasara con los IEIG, ninguna de las MAI viene firmada, y en ellas no aparece ningún tipo de nomenclatura que pueda indicarnos qué Ministerio la ha elaborado, ni quien o que organismo dentro del mismo ha sido encargado de su elaboración.

Terminamos este punto señalando algunas particularidades del ámbito temporal en la elaboración de los IEIG y las MAI. Si tenemos en cuenta que el Consejo de Ministros aprobó la Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria del análisis de impacto normativo, con fecha de 11 de diciembre de 2009; cabe pensar que todos los Proyectos de Ley que se elaboraron después de esa fecha, ya deben ir acompañados de Memoria de análisis normativo en lugar de ir acompañadas, con respecto al análisis de impacto de género, por el Informe de Evaluación de Impacto de Género en sus dos vertientes: el elaborado según la Guía de Fundación Mujeres o los elaborados según la Guía de la Comisión Europea.

Dado que los tiempos para la aprobación de una Ley y para la publicación de la misma, vienen influidos también por factores tales como la oportunidad política su aprobar y/o publicación, se da la paradoja de la existencia de leyes que han sido publicadas con posterioridad al 11 de diciembre de 2009 y que han ido acompañadas de IEIG y no de MAI

incluso cuando la Ley que la ha precedido en su publicación ha venido acompañada de Memoria de impacto normativo.

### **3.6.3 Análisis cualitativo de los Informes de Evaluación de Impacto de Género, y de las Memoria del Análisis de Impacto Normativo en las que se analiza el impacto por razón de género, elaborados según lo dispuesto en la Ley 30/2003 de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno durante la VIII y IX legislatura.**

Analizados los IEIG y las MAI de la VIII y IX legislatura, y ante la ausencia de rúbrica o cualquier otro tipo de referencia nominal que nos indique a quién se debe la autoría de los mismos, observamos que intentar responder a la eterna cuestión de la autoría de los IEIG y las MAI resulta imposible mediante el análisis de los mismos.

El desconocimiento de la autoría de estas herramientas para la eliminación de la brecha de género tiene mucho más alcance que la mera afirmación en sí misma, ya que se desconoce si la persona o equipo encargado de su elaboración tiene los conocimientos mínimos requeridos para evaluar el posible impacto en función del género que podría tener la normativa en elaboración.

Así, de la lectura de los IEIG y las MAI cuya extensión no supera la de un folio, podemos comprobar que han sido elaborados sin apoyarse en análisis previo alguno y que por tanto carecen de ningún tipo de razonamiento versado en la materia (de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres), que permita dilucidar qué tipo de impacto en función del género podría conllevar determinada redacción de la normativa a la que deben acompañar.

Podemos ver este extremo claramente, a través de algunos ejemplos que rescatamos de los IEIG elaborados durante la VIII y IX legislatura. A continuación señalamos de modo ilustrativo algunas las conclusiones recogidas en estos IEIG<sup>175</sup>:

---

<sup>175</sup> Todos los Informes de Evaluación de Impacto de Género y las Memorias a las que hacemos referencia pueden ser consultados y consultados en los anexos de la presente investigación. La leyenda utilizada es la siguiente el numero romano hará referencia a la legislatura en la que se presentó y las tres últimas cifras harán referencia al ordinal que le fue asignado

- ...*Debe señalarse que las medidas que se incluyen en este Anteproyecto no conllevan impacto alguno por razón de género. (Ministerio de Justicia. Informe de Impacto de Género al Proyecto de Ley General de la navegación marítima. VIII -121/000111)*
- ....*Le significo que en el citado Real Decreto Ley no se introduce discriminación alguna por razón de sexo, por lo que la mayor o menor incidencia del número de personas de distintos sexos que pueden beneficiarse de las medidas extraordinarias contenidas en dicha norma legal vendrán determinadas únicamente por los criterios objetivos que permitan obtener la condición de beneficiario de estas (Ministerio no señalado, IEIG al Real Decreto Ley 6/2004, de 17 de diciembre por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los incendios e inundaciones acaecidos en las Comunidades Autónomas de Aragón, Cataluña, Andalucía, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana. VIII - 121/000010). (El subrayado es nuestro).*
- ...*El contenido de dicho proyecto normativo, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente, no promueve consecuencias negativas que favorezcan situaciones de discriminación entre mujeres y hombres. (Ministerio de Justicia. Informe sobre Impacto de Género al Proyecto de reforma de Ley del registro civil en materia de incapacitados, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del código civil, de la Ley de enjuiciamiento civil y la normativa tributaria con esta finalidad. VIII -121/000113). (El subrayado es nuestro).*
- ...*Se señala que las medidas que se incluyen en este anteproyecto de ley no conllevan impacto alguno por razón de género. (Ministerio de Cultura. Impacto por razón de género del Proyecto de Ley relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original. IX - 121/000006). (El subrayado es nuestro).*

Llama la atención en todos estos casos, como la conclusión es la de considerar “inexistente el impacto de género en el proyecto de ley al que acompañan” cuando en la mayoría de los casos presentados (y en el resto también) el propio nombre del Proyecto de Ley ya incurre en un lenguaje sexista (véase el subrayado en los ejemplos), y obviamente hace mas de 20 años que se obliga a la corrección de un uso sexista del lenguaje en la administración.

---

por fecha de entrada, así la nomenclatura VIII -121/000111, hará referencia al informe numeró 111 de la octava legislatura; y así puede ser encontrado en el anexo que acompaña a esta investigación).

Esta corrección debe ser la primera que se debe contemplar cuando se elabora un documento pues desde que existen políticas públicas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, se ha enfatizado la importancia de adoptar usos no sexistas del lenguaje.

Y esto se viene haciendo desde que España incorporará la Recomendación Europea, de 21 de febrero, sobre la eliminación del sexismo en el lenguaje<sup>176</sup>, en el primer Plan para la Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, aprobado por el Consejo de Ministros en septiembre de 1987, con una vigencia de dos años (1988-1990)<sup>177</sup>:

*Se incluirá, por ello, en el proceso de renovación del lenguaje administrativo que se está realizando, el control y eliminación, en su caso, de este tipo de discriminaciones en las circulares, impresos y formularios utilizados por la Administración.*

A esta primera norma le seguirán otras, como la Orden, de 22 de marzo de 1995, del Ministerio de Educación y Ciencia, para adecuar la denominación de los títulos oficiales.

Así bien, podemos afirmar que o bien no se ha entendido, o no se están aplicando correctamente las medidas previstas para la elaboración de los Informes de Evaluación de Impacto de Género, pues como señalábamos en su momento, estos están configurados como herramientas para eliminar las posibles brechas de género tales como consecuencias sexistas que puedan ocasionarse, de una manera casual y no voluntaria, en la redacción de la normativa.

---

<sup>176</sup> El Consejo Europeo, en 1990, aprobaría la Recomendación, de 21 de febrero, sobre la eliminación del sexismo en el lenguaje, desde la que se reconoce, en primer lugar, la existencia de obstáculos a la igualdad real entre hombres y mujeres para, a continuación, enunciar que el lenguaje es un instrumento esencial en la formación de la identidad social de los individuos. El Consejo de Europa consciente de que el sexismo del lenguaje era un obstáculo para el desarrollo de la igualdad, al ocultar y negar a la mitad de la humanidad, propone tres medidas básicas:

- Que los estados miembros incorporen iniciativas para promover un lenguaje no sexista, que tenga en cuenta la presencia y situación de las mujeres en la sociedad.
- Promover, en textos jurídicos, educativos y de la administración pública, el uso de terminología armónica con el principio de igualdad entre los sexos.
- Fomentar la utilización de un lenguaje libre de sexismo en los medios de comunicación.

Entre los textos promulgados por las instituciones internacionales, fueron pioneras las resoluciones publicadas en los años ochenta: Resolución 14.1 aprobada por la Conferencia General de la UNESCO, en su 24ª reunión, apartado 1 del párrafo 2 (1987) y Resolución 109 aprobada por la Conferencia General de la UNESCO, en su 25ª reunión, párrafo 3 (1989).

<sup>177</sup> Primer Plan para la Igualdad de oportunidades de las Mujeres 1988-1990. El I PIOM se presentó al Consejo de Ministros en septiembre de 1987 y suponía una estrategia política para mejorar la situación social de las mujeres a través de 120 medidas agrupadas en seis áreas: Igualdad en el ordenamiento jurídico; Familia y protección social; Educación y cultura; Empleo y relaciones laborales; Salud; Cooperación internacional y asociacionismo. Web: [http://www.inmujer.gob.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1264005600019&language=ga\\_ES&pagename=InstitutoMujer%2FPage%2FIMUJ\\_Generico](http://www.inmujer.gob.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1264005600019&language=ga_ES&pagename=InstitutoMujer%2FPage%2FIMUJ_Generico) (Consultado en última ocasión en marzo 2012).

Por tanto, afirmar que un Proyecto de Ley no tiene impacto de género, cuando ya su título es sexista, supone que estas herramientas no se conocen suficientemente, o no se están usando con suficiente corrección. Quizá el organismo elaborador del informe no haya ofrecido al personal la formación en género requerida para este menester. Un ejemplo de esto lo vemos en el “Informe sobre el impacto por razón de género del anteproyecto de ley por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito”, que pasamos a reproducir íntegramente ya que solo ocupa 8 líneas en su totalidad.

*En cumplimiento de lo previsto en el artículo 24.1.b) de la Ley 50/1997 de, 27 de noviembre del gobierno, en la redacción dada por el artículo segundo de la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre las medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabora el Gobierno, debe señalarse que en ninguno de los preceptos de este proyecto ley, ni en el fondo ni en la forma, se establecen medidas o reconocen derechos u obligaciones que puedan suponer discriminación alguna por razón de sexo.*

*Por ello, se considera que este proyecto carece de impacto por razón de género<sup>178</sup>.*

En este mismo sentido y utilizando uno de los ejemplos propuestos confirmamos la detección de una asombrosa falta de formación en género de las personas responsables de la elaboración de los IEIG; esto desconocimiento provoca que se confundan términos como “pertinencia de género: que trata de delimitar únicamente si la medida que se va a adoptar afectará a grupos objetivos o a determinados colectivos, es decir si tendrá implicaciones o no, para estos grupos, y por tanto ésta no mide el Impacto de Género que conlleva su aplicación” y el concepto “Valoración del Impacto de Género.”

Esta confusión da lugar a redacciones como la correspondiente al IEIG del RD Ley 6/2004 de 17 de septiembre, relativo a la adopción de medidas urgentes para reparar los daños causados por los incendios e inundaciones acaecidos en las Comunidades Autónomas de Aragón, Cataluña, Andalucía, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana que dice:

---

<sup>178</sup> Puede consultarse en el anexo bajo la siguiente rúbrica IX -121/000007. (El subrayado es nuestro).

*...en el citado Proyecto de Real Decreto de-Ley no se introduce discriminación alguna por razón de sexo, por lo que la mayor o menor incidencia en el número de personas de distintos sexos que puedan beneficiarse de las medidas extraordinarias contenidas en dicha norma legal vendrá determinada únicamente por los criterios objetivos que permiten obtener la condición de **beneficiario** del mismo.*<sup>179</sup>

Lamentablemente los Informes de Evaluación del Impacto de Género, se convierten así, en un mero formulario más a rellenar para poder continuar con el *iter* legislativo de la normativa a aprobar.

También debemos señalar la falta de homogeneidad en la estructura de los IEIG; debido en parte a la ausencia durante seis años de disposiciones reglamentarias que desarrollaran una metodología única de elaboración de los IEIG.

Así, previa a la existencia de dicha guía, la estructura de los IEIG variaba según el Ministerio que los elaboraba por un lado y por otro lado variaba la estructura propia de los IEIG, que aun siendo elaborados por un mismo Ministerio, podían no tener ningún elemento en común. De esta manera los IEIG no tenían estructura común ni entre los IEIG de un mismo Ministerio ni entre los elaborados en los diferentes Ministerios.

Pondremos como ejemplos contrapuestos dos IEIG que pese a estar elaborados por el mismo Ministerio de Economía y Hacienda, presentan dos estructuras completamente diferentes. Por un lado tenemos el IEIG del “Proyecto de Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de Modificación Parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y Sobre el Patrimonio”<sup>180</sup>, que se presenta con una estructura que sigue todas y cada una de las pautas que marca la “Guía de aplicación práctica, para la elaboración de Informes de Impacto de Género de las Disposiciones Normativas que elabore el Gobierno, de acuerdo a la Ley 30/2003.”

Y por otro lado tenemos el IEIG del “Proyecto de Ley por la que se modifica el régimen fiscal de las reorganizaciones empresariales y del sistema portuario, y se aprueban medidas tributarias para la financiación sanitaria y para el sector del transporte por carretera”<sup>181</sup> que tiene una longitud de 15 líneas sin sentido, imposibles de clasificar dentro de estructura alguna.

---

<sup>179</sup> Puede consultarse en el anexo bajo la siguiente rúbrica VIII -121/000010.

<sup>180</sup> Puede consultarse en el anexo bajo la siguiente rúbrica VIII - 121/000080.

<sup>181</sup> Puede consultarse en el anexo bajo la siguiente rúbrica VIII -121/000063.

Esta carencia de homogeneidad a la hora de elaborar los informes ha sido corregida al solucionada por un lado con la publicación del por un lado del RD 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo pues a través del mismo ya se establecía, como ya hemos señalado, el nuevo modelo de análisis a través de las Memorias de Análisis de Impacto Normativa y por otro lado gracias a la publicación de la ya analizada “Guía metodológica para la elaboración de la memoria del análisis del impacto normativo”, que establecía modelos homogéneos a cumplimentar para llevar a cabo el análisis del impacto normativo, este análisis contempla (aunque en último lugar) el análisis del impacto de género, que ya vimos anteriormente.

Esta homologación de metodología según la propia guía, debe representar un avance en relación con la concepción tradicional de la información que acompaña al proyecto. No obstante, no podemos evitar plantearnos qué análisis y/o evaluación se ha llevado a cabo para determinar que los IEIG no eran las mejores herramientas y que Memoria de Análisis de Impacto Normativo cubriría las enormes carencias de estos informes; y no es que no estemos de acuerdo con este hecho, es simplemente que una de las mayores carencias que hemos encontrado en el análisis del impacto de género de la normativa es la ausencia por un lado de su carácter vinculante y por otro la ausencia de un sistema de evaluación de los citados informes que pudiese de manifiesto su utilidad eficacia y eficiencia.

En este sentido consideramos que si la aplicación de lo que se recogiera en los IEIG fuera examinado, evaluado, y tuviese un carácter vinculante no estaríamos ante IEIG tan deficientes, pues se obligaría al organismo encargado de elaborarlo, a llevar a cabo una evaluación del impacto de género seria y rigurosa, bajo riesgo de sanción por omisión o negligencia en su hacer, y de esta manera creemos que el impacto en las normas en función del género dejaría de ser un trámite mas a cumplir.

Por otro lado analizadas las 21 Memorias de Análisis de Impacto Normativo en su apartado referido al impacto de género, elaboradas durante la IX legislatura, observamos en primer lugar, que en todas ellas, el análisis del impacto de género es irrisorio en comparación al análisis del impacto económico y presupuestario, tanto en el aspecto cuantitativo número de páginas, como en el aspecto cualitativo donde se ve claramente como no hemos dejado de señalar la falta de formación en género frente a la aparente formación en el ámbito económico a la luz de como están elaboradas esas parte de las Memorias de Análisis.

Ha de ponerse de manifiesto que en 18 de las 21 MAI relativas al impacto de género (carentes de resumen ejecutivo) se solventa el impacto análisis del impacto de género de la



siguiente manera: “esta norma no tiene impacto por razón de género”. Aquellas que vienen precedidas de resumen ejecutivo establecen que: “la norma tiene un impacto de género nulo”.

Llama la atención leer y comparar las 15 Memorias de Análisis de Impacto normativo de los proyectos de leyes relativos al “Régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma”, se elabora una memoria por cada comunidad autónoma<sup>182</sup>, pues son idénticas en puntos y comas donde lo único que varía es el nombre de la autonomía en el título y evidentemente dichas normas.

Es decir, todas la Memorias autonómicas están compuestas de tres páginas, divididas en cuatro apartados. El apartado final que lleva el mismo título para todas: “Impactos presupuestarios y por razón de género” recoge de manera homologa a las 15 Memorias sin distinguir comunidad autónoma, el siguiente apartado que transcribimos de manera integral.

*4.- Impactos presupuestarios y por razón de género: Como se desprende de los antecedentes anteriores, esta norma no tiene impacto presupuestario, ni por razón de género.*

En esta misma línea, no queríamos terminar este epígrafe sin señalar, al hilo de estos ejemplos, como en momentos tan duros como los que atraviesa el sur de Europa, momentos en el que el desempleo azota a España como nunca, tampoco el Ministerio de Trabajo e Inmigración ha tenido en cuenta que las mujeres son las que están sufriendo de manera más severa la imposibilidad de encontrar trabajo, así en el resumen ejecutivo de la Memoria de Análisis Normativo que acompañó al de Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo (procedente del Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio), presentado en 2011, se establecía que dicho “*Proyecto de Ley tiene un impacto de género positivo*” para posteriormente analizarla de la siguiente, contradictoria y asombrosa manera:

*Impacto por razón de género. La futura Ley carece de toda relevancia desde la perspectiva del género, de tal forma que podría hablarse a este respecto de “impacto nulo” por cuanto se considera que no existen desigualdades de partida en relación con la igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres, ni se prevé modificación alguna de esta situación.*<sup>183</sup>

---

<sup>182</sup> Pueden consultarse en el anexo bajo la siguiente rúbrica IX - 121/000063 a IX - 121/000077.

<sup>183</sup> Puede consultarse en el anexo bajo la siguiente rúbrica IX - 121/000081.

Ante dicha afirmación solo expondremos un dato: al finalizar diciembre de 2011 estaban afiliadas a la Seguridad Social una media de 7.946.248 mujeres, mientras que los hombres sumaban 9.638.734 afiliados<sup>184</sup>.

En virtud de todo lo anterior, consideramos que lamentablemente la transición a las Memorias de análisis del impacto normativo, en lo referente al análisis del impacto de género ha sido un fracaso; pues los análisis del impacto en función del género en las Memorias de Análisis Normativo son aún peor calidad que los que se llevaban a cabo a través de los Informes de Evaluación de Impacto de Género tanto cualitativa como, sobre todo, cuantitativamente. De igual manera y tal y como ocurría en la elaboración de los IEIG, estos análisis de impacto en función del género que recogen las citadas Memorias han sido elaborados sin apoyarse en análisis previo alguno.

Consideramos que sus muchas de las afirmaciones que se recogen en estas Memorias carecen de justificación tal y como acabamos de ver en el ejemplo de la Memoria de Análisis Normativo que acompañó al de Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo (procedente del Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio). Así la afirmación en ella recogida: “impacto nulo por cuanto se considera que no existen desigualdades de partida en relación con la igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres, ni se prevé modificación alguna de esta situación”, no viene respaldada por ningún dato ni estudio que la avale, mientras que con la simple consulta a los organismos de la seguridad social se comprueba lo incorrecto de esta afirmación.

Creemos en definitiva que a la luz de los análisis efectuados, tanto cualitativos como cuantitativos, no solamente no se subsana a través de las MAI los errores de los que adolecían los IEIG sino que por el contrario se acentúan, traducándose esto último en la invalidez de ambos instrumentos (informes y memorias) tal y como se están elaborando hoy por hoy, como herramientas para eliminar las brechas de género entre mujeres y hombres.

---

<sup>184</sup> Informe de la Seguridad Social. “Afiliados Ocupados a la Seguridad Social. Noviembre 2011” Ministerio de Trabajo en Inmigración. Web: [http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/groups/public/documents/rev\\_anexo/rev\\_029024.pdf](http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/groups/public/documents/rev_anexo/rev_029024.pdf) (Consultado en última ocasión en enero 2012).

### 3.7 La aplicación de lo dispuesto en los Informes de Evaluación del Impacto de Género y en las Memorias de Análisis de Impacto en los textos legales definitivos: La disfuncionalidad en la elaboración de los IEIG y en las MAI.

Cuando se elaboró el esquema a seguir de la presente investigación, se estableció que en este epígrafe se analizaría como segundo objetivo específico si las medidas correctoras que debían haberse recogido en los Informes de Evaluación de Impacto de Género y en las Memorias de Análisis de Impacto Normativo, que acompañaron a los Proyectos de Ley elaborados durante la VIII y IX legislatura, habían sido aplicadas en los textos legales definitivos.

De esta manera se pretendía estimar cuantitativa y cualitativamente la eficacia de estos instrumentos como herramientas para la eliminación de la brecha de género existente entre mujeres y hombres.

Lamentablemente llevar a cabo este análisis resulta imposible debido en primer lugar, a la falta de carácter vinculante que tienen estos Informes y Memorias, es decir existe la obligación de elaborarlos pero no la de aplicar su contenido. No obstante, y en segundo lugar, el citado análisis resulta impracticable debido a la baja calidad de los citados Informes y Memorias.

Podemos afirmar, pues, que si los Informes y Memorias se hubieran realizado de una manera más diligente, la ausencia de carácter vinculante de unos y otras no hubiese sido obstáculo para ver en qué medida estas herramientas habían mejorado la narrativa normativa de manera que gracias a ellas se hubiesen eliminados contenidos aparentemente neutros pero que en su aplicación hubiesen podido resultar sexista.

Para afirmar este extremo no hay más que observar la positiva (aunque costosa) evolución de la sociedad con respecto a la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres que poco a poco va permeabilizando la sociedad española. Y aunque somos conscientes de que queda aún mucho por hacer, no podemos obviar que también esta evolución social está teniendo una repercusión, de momento casi imperceptible pero aun así se está produciendo, en los textos jurídicos.

Así utilizando uno de los ejemplos anteriores podemos señalar como a través del Informe de Evaluación de Impacto de Género que acompañó al “Proyecto de reforma de Ley del registro civil en materia de incapacitados, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección

patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del código civil, de la Ley de enjuiciamiento civil y la normativa tributaria con esta finalidad”<sup>185</sup>, se corrigió en el texto legal definitivo parte del enunciado sexista<sup>186</sup> que daba título al Proyecto de Ley como se recoge en el siguiente cuadro:

ENUNCIADO DEL PROYECTO DE LEY	ENUNCIADO DE LA LEY (TEXTO DEFINITIVO BOE NÚMERO 73 DE 26/3/2009)
Proyecto de reforma de Ley del registro civil en materia de <u>incapacitados</u> , cargos tutelares y <i>administradores</i> de patrimonios protegidos y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del código civil, de la Ley de enjuiciamiento civil y la normativa tributaria con esta finalidad	Ley 1/2009, de 25 de marzo, de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de <u>incapacitaciones</u> , cargos tutelares y <i>administradores</i> de patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de la normativa tributaria con esta finalidad.

Cuadro de elaboración propia.

No obstante, y volviendo al análisis cualitativo de estas herramientas, el hecho de que el 75% de los IEIG elaborados en la VIII legislatura no tenga una extensión superior a la de un folio y que concluyan normalmente alegando la carencia de impacto de la norma, hace imposible el análisis previsto, ya que lamentablemente no hay nada que analizar.

Situación aún más deplorable es la que encontramos en el estudio del Impacto de Género en las Memorias de Análisis Normativo, pues como veíamos en 18 de las 21 MAI relativas al impacto de género, este se solventa de la siguiente manera: “esta norma no tiene impacto por razón de género”.

Y en aquellos casos en que las MAI vienen precedidas de resumen ejecutivo, en ellos se establece que: “la norma tiene un impacto de género nulo”. Quizás lo que puede ser realmente nulo posiblemente pueda ser la preocupación por la formación del personal que tiene que elaborar estos informes. Se cae precisamente en la trivialización del análisis del impacto de género, haciendo de la normativa un trámite puntual a cumplir para poder seguir con el *iter legislativo* de la norma a aprobar.

<sup>185</sup> Puede consultarse en el anexo bajo la siguiente rúbrica VIII -121/000113.

<sup>186</sup> Debía haberse corregido también la expresa referencia a los Administradores cambiando dicho termino por el de “persona administradora”. (El subrayado es nuestro).

Ya la propia “Guía metodológica para la elaboración de la memoria del análisis de impacto normativo” alertaba de dicho riesgo:

*El Análisis de Impacto Normativo es un proceso continuo. No es, por tanto, un trámite que deba cumplirse una vez se haya terminado de redactar una nueva propuesta normativa, ni tampoco es un trámite que se agote con la elaboración de la Memoria*<sup>187</sup>.

Consideramos que se ha desaprovechado la oportunidad que brindaba el paso de los Informes de Evaluación de Impacto de Género a las Memorias de Análisis de Impacto Normativo de mejorar de una manera eficaz y eficiente la labor legislativa.

La evaluación ex post de los IEIG-MAI y el haberlos podido dotar de un carácter vinculante nos hubiese permitido corregir viejos errores provocados quizás por la falta de formación en género dentro de los organismos encargados de la elaboración de estas herramientas, además seguramente de haberse podido poner de manifiesto la falta de instrumentos homogeneizadores en este sentido.

De esta manera al análisis del impacto de género, que no debemos olvidar que tiene como objetivo velar por la igualdad de las personas, siendo ésta un valor constitucional, se le habría asignado ya un lugar propio dentro de la técnica normativa<sup>188</sup>; asegurándonos de esta manera unos textos legales no discriminatorios entre unas y otros y que en consecuencia contribuyesen al objetivo de la creación de una sociedad más justa e igualitaria.

---

<sup>187</sup> Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, p. 4. [http://www.mpt.gob.es/areas/funcion\\_publica/iniciativas/impacto\\_normativo/parrafo/0/text\\_es\\_files/file0/guia-metodologica-ain\\_1264084813.pdf](http://www.mpt.gob.es/areas/funcion_publica/iniciativas/impacto_normativo/parrafo/0/text_es_files/file0/guia-metodologica-ain_1264084813.pdf) (Consultado en última ocasión en diciembre de 2011).

<sup>188</sup> Hacemos referencia a la Resolución de 28 de julio de 2005, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005, por el que se aprueban las Directrices de técnica normativa. BOE núm. 180, de 29 julio 2005.

## Capítulo 4. La dimensión de género en la elaboración de la normativa autonómica andaluza. Estimativa y evaluación del impacto de género en la normativa autonómica andaluza

---

4.1 La Ley 18/2003 de 29 de diciembre, por las que se aprueban medidas fiscales y administrativas, como primera Ley andaluza que contempla materias específicas de género: Estudio de su art. 139.1 relativo a la Evaluación de Impacto de Género.

Poco después de la publicación en el BOE el 14 de octubre del 2003, de la anteriormente citada “Ley 30/2003 de 13 octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno”, de ámbito estatal, se publicaba en el BOJA la “Ley 18/2003 de 29 de diciembre, por las que se aprueban medidas fiscales y administrativas”<sup>189</sup>.

Esta ley, conocida también como “Ley de Acompañamiento” por haberse tramitado conjuntamente a la “Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2004”, establece en su título III, capítulo VIII, por primera vez y de manera específica para Andalucía, medidas en materia de Género que responden a los objetivos generales de avanzar en la consecución de la igualdad real y de oportunidades entre mujeres y hombres, en el marco de lo dispuesto en los artículos 9.2 y 14 de la Constitución Española y artículo 15 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Las medidas, dos exactamente, se regulaban en los artículos 139 y 140. Se trataba de dos medidas de extraordinaria trascendencia para el avance en la igualdad, de mujeres y hombres. La primera de ellas hacía referencia a la obligatoriedad de elaborar un informe preceptivo de evaluación del impacto de género, en todos los Proyectos de Ley y Reglamentos que aprobara el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía permitiendo

---

<sup>189</sup> Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas. BOJA núm. 251, de 31 de diciembre de 2003. Web: <http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2003/251/d/6.html>. (Consultado en última ocasión en diciembre 2011).

de esta manera que la Comunidad Autónoma Andaluza se adhiriese al reducido grupo de Comunidades Autónomas, que en ese época contaban con normativa específica sobre Informes de Evaluación de Impacto de Género<sup>190</sup>.

De otra parte, en estas medidas también se recogía que los Órganos Consultivos y de Asesoramiento de la Administración de la Junta de Andalucía debían contemplar en su creación, modificación o renovación, una composición con participación paritaria de mujeres y hombres.

Con estas medidas, tituladas por la propia ley “en materia de género”, se pretende, según dice la exposición de motivos de la Ley:

*Avanzar en la consecución de la igualdad real y efectiva entre las mujeres y los hombres, eliminar cualquier forma de discriminación y fomentar la participación de las mismas en la vida política, económica, cultural y social, dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco de lo dispuesto en los artículos 9 y 14 de la Constitución Española y del 12 del Estatuto de Autonomía para Andalucía* (Balaguer Callejón, 2004: 15).

Pese a lo relevante de las medidas que esta Ley introducía no debe dejar de señalarse, como así lo hacíamos al inicio de este capítulo, que el “Proyecto de Ley por el que se aprueban medidas fiscales y administrativas”, se tramitó conjuntamente al “Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2004”. Esta tramitación conjunta provocó que la elaboración del “Proyecto de Ley por el que se aprueban medidas fiscales y administrativas”, pasara prácticamente de puntillas, ya que todos los debates parlamentarios estuvieron centrados en el Proyecto de Ley del Presupuesto al que acompañaba, llegando incluso a referirse a este Proyecto de Ley como: “Ley de Acompañamiento del Presupuesto”.

Esto puede explicar, quizás, cómo habiendo sido tan intensa, la tramitación parlamentaria de la “Ley 30/2003 de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno”, la tramitación de la “Ley 18/2003 de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas,” —que por primera vez introducía medidas en materia de Género para

---

<sup>190</sup> Las Comunidades Autónomas que a fecha de publicación de la Ley 18/2003 poseían normativa autonómica sobre informes de impacto de género eran: Cataluña Ley 4/2001, de 9 de abril, de modificación del apartado 2 del artículo 63 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña. Extremadura Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y Administración de Extremadura.

Andalucía tales como la elaboración de Informes de Evaluación de Impacto de Género para los Proyectos de Ley y Reglamentos que aprobara el Consejo de Gobierno Andaluz—, pasara inadvertida<sup>191</sup>.

Teniendo en cuenta la relevancia que tuvo la promulgación de la Ley 18/2003 de 29 de diciembre, por incorporar por primera vez medidas en materia de género tales como los Informes de Evaluación de Impacto de Género y la composición paritaria de los Órganos Consultivos y de Asesoramiento de la Administración de la Junta de Andalucía, nos llama poderosamente la atención que durante su tramitación parlamentaria sólo se hiciese referencia a estos aspectos dentro de la Sesión Plenaria, en la intervención de la Consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez Arza, al comentar únicamente los aspecto más relevantes de la denominada “Ley de Acompañamiento”:

*En relación a las iniciativas en materia de Género, se incluyen dos medidas. La primera consiste en la exigencia, como requisito previo a la aprobación de Proyectos de Ley o Reglamentos por parte del Consejo de Gobierno, de un Informe de Evaluación de Impacto de Género que estudie y evalúe las consecuencias de los mismos para la igualdad real y de oportunidades entre mujeres y hombres. Y la segunda se refiere a la composición de los Órganos Consultivos y de Asesoramiento de la Junta de Andalucía, que deberán contemplar en su creación, modificación o renovación una participación paritaria de hombres y mujeres. A estos efectos, se considera participación paritaria cuando cualquiera de ambos géneros esté representado al menos en el 40%.<sup>192</sup>*

No hubo en toda esta Sesión Plenaria ni una sola referencia más acerca de las medidas en materia de “género” que aportaba el citado Proyecto de Ley. Desconocemos si esto se debió a que todos los Grupos Parlamentarios estaban encantados con lo propuesto o simplemente si el debate sobre las enmiendas a la totalidad del Proyecto del Presupuesto para la Comunidad Autónoma Andaluza para el año 2004 acaparó toda la atención como se deduce de la lectura de lo dicho en la citada sesión.

---

<sup>191</sup> Merece la pena resaltar como el Grupo Parlamentario Izquierda Unida los Verdes, en la justificación de la enmienda a la totalidad que presentaban, ponía de relieve la importancia de este Proyecto de Ley y lo lamentable que resulta no haberle dado un trato relevante e individualizado como Proyecto independiente al Proyecto de Ley para el Presupuesto para el año 2004: “La Comunidad Autónoma de Andalucía hubiera necesitado una Ley de fiscalidad con carácter integral teniendo en cuenta las necesidades sociales, así como la orientación de nuestra política económica. Esta Ley, de enorme importancia para nuestra Comunidad, hubiera necesitado un debate reposado, con aportación de los colectivos sociales y económicos de nuestra Comunidad. Lejos de ello, la incipiente fiscalidad andaluza se está abordando a retazos, sin una orientación y objetivos claros, y sin que haya sido posible debatirla de forma separada al propio debate presupuestario.” DSP núm. 133, de 13 de noviembre de 2003. Rechazo enmienda(s) a la totalidad. Proyecto de Ley.

<sup>192</sup> BOPA núm. 589, de 18 de noviembre de 2003. Publicación del rechazo de las enmienda(s) a la totalidad, pp. 34.214 y ss.



Así transcurridas las cosas, el 23 de diciembre de 2003 se llevó a cabo el debate y posterior votación en el Pleno para la aprobación del “Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2004” y del “Proyecto de Ley por el que se aprueban las medidas fiscales y administrativas”. Pese a que ambas votaciones tuvieron lugar en la misma sesión plenaria, las votaciones fueron separadas<sup>193</sup>.

Pese a que la Ley 18/2003 de 29 de diciembre, establecía dos medidas excepcionales en materia de género para la Comunidad Autónoma Andaluza como ya hemos señalado, este capítulo versará únicamente sobre una de las dos medidas la recogida en el artículo 139, al ser la otra la recogida en el artículo 140, ajena al objetivo de nuestra investigación. Así pues, en concreto en el artículo 139 de la citada Ley, artículo que establece que:

*CAPITULO VIII. Medidas en materia de Género. Informe de evaluación de impacto de género. 1. Todos los Proyectos de Ley y Reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno deberán tener en cuenta de forma efectiva el objetivo de la Igualdad por Razón del Género y del respeto a los derechos de los niños según la Convención de los Derechos del Niño. A tal fin, en la tramitación de las citadas disposiciones, deberán emitirse un Informe de Evaluación del Impacto por Razón de Género del contenido de las mismas. 2. A los efectos de garantizar que el Presupuesto de la Comunidad Autónoma sea elemento activo de lo establecido en el punto 1, se constituirá una Comisión dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda con participación del Instituto Andaluz de la Mujer, que emitirá el Informe de Evaluación sobre el citado proyecto. Dicha Comisión impulsará y fomentará la preparación de Anteproyectos con Perspectiva de Género en las diversas Consejerías y la realización de auditorías de Género en las Consejerías, Empresas y Organismos de la Junta de Andalucía. 3. En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, el Consejo de Gobierno aprobará las normas de desarrollo que regularán dicho Informe.*

A través de la redacción de este artículo, es fácil distinguir los dos aspectos diferenciales del mismo; por un lado se puede observar lo establecido en el epígrafe primero: la obligatoriedad de la emisión de un Informe de Evaluación del Impacto por Razón de Género de todas las Leyes y Reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno. Por otra parte también se observa la creación de una Comisión dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda con participación del Instituto Andaluz de la Mujer, que emitirá el Informe de

---

<sup>193</sup> De las enmiendas y votos particulares que se presentaron para el Debate y posterior votación del “Proyecto de Ley por el que se aprueban las medidas fiscales y administrativas” en el Pleno, ninguna modificó las medidas en materia de género dispuestas en el texto emitido en el Dictamen. DSPA núm. 141, de 23 de diciembre de 2003. Pleno del Parlamento, págs. 9.075 y ss.

Evaluación del Impacto por Razón de Género que acompañarán a los Presupuestos Anuales de la Comunidad.

Utilizando la redacción del articulado al que hacíamos mención, estudiaremos por separado cada uno de los epígrafes, los correspondientes al artículo 139.1 y 139.3 de la Ley 18/2003 de 29 de diciembre<sup>194</sup>.

#### **4.1.1 Desarrollo de las medidas de género del artículo 139.1 de la Ley 18/2003 a través del Decreto 93/2004 que regula el Informe de Evaluación de Impacto de Género en los Proyectos de Ley y Reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno**

Con fecha de 12 de marzo, se publica en el BOJA el Decreto 93/2004, por el que se regula el Informe de Evaluación de Impacto de Género en los Proyectos de Ley y Reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno.<sup>195</sup> Se daba cumplimiento así, a lo dispuesto en el artículo 139.3 de la Ley 18/2003, que establecía la obligatoriedad por parte del Consejo de Gobierno de aprobar las normas de desarrollo que regularan los Informes de Evaluación de Impacto de Género, en un plazo máximo de seis meses<sup>196</sup>.

Este Decreto estaba compuesto de una breve justificación, cinco artículos relativos a su objeto (artículo primero), al ámbito de actuación (artículo segundo), al órgano competente para la emisión del Informe de Evaluación de Impacto de Género (artículo tercero), al contenido del Informe (artículo cuarto), y a la remisión al Instituto Andaluz de la Mujer (artículo quinto), una Disposición final primera de desarrollo y ejecución y una Disposición final segunda relativa a la entrada en vigor del Decreto.

---

<sup>194</sup> El artículo 139.2 es objeto de estudio en el capítulo siguiente.

<sup>195</sup> Decreto 93/2004, por el que se regula el Informe de Evaluación de Impacto de Género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno. BOJA núm. 50, 12 de marzo de 2004. El 17 de febrero de 2012, ya en periodo de conclusiones del presente trabajo de investigación se publicaba el *Decreto 17/2012, de 7 de febrero, por el que se regula la elaboración del Informe de Evaluación del Impacto de Género*, en cuya Disposición derogatoria única. Derogación normativa, se establecía lo siguiente: *«Queda expresamente derogado el Decreto 93/2004, de 9 de marzo, por el que se regula el informe de evaluación del impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno, así como aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo previsto en el presente Decreto.»* (El subrayado es nuestro). BOJA núm. 36, de 22 de febrero de 2012.

<sup>196</sup> El 9 de mayo de 2005 se publicaba en el BOJA el Decreto 103/2005, de 19 de abril, por el que se regula el Informe de evaluación del Enfoque de derechos de la Infancia en los Proyectos de Ley y Reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno. Completando así previsto en el artículo 139.3 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre.

Es importante señalar que el objeto de este Decreto era regular el Informe de Evaluación de Impacto de Género previsto en el artículo 139.1 de la Ley 18/2003, teniendo como finalidad que los Proyectos de Ley y los Reglamentos cuya aprobación corresponda al Consejo de Gobierno, tengan en cuenta de forma efectiva la Igualdad real y de oportunidades por Razón de Género.

Tanto en la Exposición de Motivos de la Ley 18/2003, como en la propia justificación del citado Decreto, se pone de relieve la necesidad de que todas las medidas legislativas y reglamentarias que se aprueben tengan en consideración la repercusión en los hombres y las mujeres, haciendo efectivo de esta manera el compromiso comunitario.

#### **4.1.2 Los Informes de Evaluación de Impacto de Género elaborados en la Comunidad Autónoma Andaluza. Cómo se elaboran y cuáles son sus contenidos. Guía Europea para la Evaluación del Impacto en Función del Género**

Los Informes de Evaluación de Impacto de Género se presentan, como señalábamos anteriormente, en primer lugar como la herramienta para introducir medidas que ayuden a conseguir la igualdad de mujeres y hombres en la aplicación de las normas, y en segundo lugar como indicadores que permiten medir cómo y de qué manera la aplicación de estas afectarán a mujeres y hombres.

El objetivo de este punto es analizar cómo se elaboraron de los Informes en la Comunidad Autónoma Andaluza a la luz de lo establecido en Decreto 93/2004. Este Decreto en sus artículos tercero y cuarto establecía como primera pauta para la elaboración de los Informes lo siguiente:

*Artículo 3. Órgano competente para la emisión del Informe de Evaluación del Impacto de Género.*

*1. La emisión del Informe de Evaluación del Impacto de Género corresponderá al centro directivo competente para la iniciación del procedimiento de elaboración de la disposición de que se trate.*

*2. El Informe de Evaluación del Impacto de Género se acompañará al acuerdo de iniciación del procedimiento de elaboración de la disposición.*

*Artículo 4. Contenido del informe.*

*El Informe de Evaluación del Impacto de Género deberá describir, al menos, las diferencias existentes entre las mujeres y hombres en el ámbito de*

*actuación de las medidas que se pretenden regular en la disposición de que se trate, incluyendo los datos, desagregados por sexos, recogidos en estadísticas oficiales, así como el análisis del impacto potencial que la aprobación de dichas medidas producirá entre las mujeres y hombres a quienes van dirigidas.*

Así bien, de este articulado se deduce que cuando las Direcciones Generales de las Consejerías, como órganos competente para elaborar los Informes, inicien el procedimiento de elaboración de la disposición de que se trate, deberán acompañar ese borrador del citado Informe de Impacto de Evaluación de Género.

El contenido de este Informe deberá estar en concordancia con lo dispuesto en el art. 4 del Decreto de 93/2004, arriba citado; no obstante, con idea de unificar el modelo de Informes que se deben presentar, las Direcciones Generales de las Consejerías se están utilizando la “Guía para la Evaluación del Impacto de Género en Función del Género”<sup>197</sup>, de la Comisión Europea.

Esta Guía nace en el seno de la Comisión Europea, durante el “IV Programa de Acción Comunitaria para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (1996-2000)”<sup>198</sup> ante la constatación del riesgo que suponía que determinadas las decisiones políticas, que, en principio, pudieran no parecer sexistas, pudiesen tener un impacto diferente y diferenciador entre las mujeres y en los hombres, a pesar de que dicha consecuencia ni estuviera prevista ni se deseara. Así bien con el objetivo de prevenir este efecto no deseado se elabora la citada Guía,

Lo primero que observamos en ella es lo reducida y breve que es, así consideramos que podría haberse utilizado como línea rectora para la elaboración de otras guías o manuales que hubiesen sido más completos tanto cualitativa como cuantitativamente.

Según esta Guía, sólo si la dimensión de género es pertinente se evaluara el Impacto Potencial de la propuesta, normativa en este caso, en mujeres y hombres. La pertinencia de género se viene analizando utilizando datos desagregados por sexos y respondiendo positivamente a cualquiera de estas dos cuestiones: si la disposición normativa a estudiar va dirigida a uno o más grupos objetivos, es decir si afectara a la vida diaria de una o de varias partes de la población; o bien si existen en este ámbito diferencias entre las mujeres y los

---

<sup>197</sup> Comisión Europea. *Guía para la Evaluación del Impacto de Género en Función del Género*. <http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4376&langId=en> (Consultado en última ocasión en diciembre 2011).

<sup>198</sup> Comisión Europea. *IV Programa de Acción Comunitaria para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (1996-2000)* Web: <http://www.celem.org/programas/igualdad.html> (Consultado en última ocasión en marzo 2012).

hombres (por lo que se refiere a los derechos, los recursos, la participación, las normas y los valores vinculados a la pertenencia a un sexo).

Establecida la pertinencia de género se analiza la “Evaluación del Impacto de Género”, cuya definición viene dada por la Guía:

*Evaluar el impacto en función del género significa comparar y apreciar, en función de criterios pertinentes con respecto al género, la situación y la tendencia actual con la evolución que cabría esperar como resultado de la introducción de la política propuesta<sup>199</sup>.*

Para esta evaluación se propone tomar en consideración en un primer momento las diferencias existentes entre mujeres y hombres en relación con el ámbito de aplicación de la norma para, posteriormente, analizar si la propuesta normativa contribuye al objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad.

Aunque de una manera poco clara, esta Guía al analizar las diferencias existentes entre mujeres y hombres en relación con el ámbito de aplicación de la norma, establece la necesidad de llevar a cabo una evaluación previa de la situación de partida y un diagnóstico de la situación. Para ello utilizará datos desagregados por sexos y los siguientes indicadores (aunque en ningún momento se refiera a ellos como indicadores):

- la participación: desglose por sexo del grupo o grupos objetivo; representación de mujeres y de hombres en los puestos de toma de decisiones.
- los recursos: distribución de recursos cruciales como tiempo, espacio, información y dinero, poder político y económico, educación y formación, trabajo y carrera profesional, nuevas tecnologías, servicios de asistencia sanitaria, vivienda, medios de transporte, ocio.
- las normas y los valores que influyen sobre los roles tradicionales establecidos o la división del trabajo en función del sexo, las actitudes y comportamientos de las mujeres y hombres, respectivamente, así como las desigualdades en el valor que se concede a los hombres y a las mujeres o a las características masculinas y femeninas.
- los derechos para hacer frente a la discriminación directa o indirecta, los derechos humanos (incluida la libertad frente a toda violencia de naturaleza sexual o de

---

<sup>199</sup> Comisión Europea. *Guía para la Evaluación del Impacto de Género en Función del Género*. <http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4376&langId=en> (Consultado en última ocasión en diciembre 2011).

connotaciones sexistas que afecta a la dignidad) y el acceso a la justicia en un entorno jurídico, político o socioeconómico.

El objetivo último de esta Guía del año 2000, no era otro que el de colaborar en el cumplimiento de lo proclamado en los artículos 2º y 3º del Tratado de Ámsterdam, es decir, pretendía contribuir al desarrollo de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, eliminando para ello los obstáculos que pudieran ser fruto de la aplicación de una disposición normativa.

Así pues recogida la información de la situación de partida, esta Guía propone analizar cómo puede la aplicación de esta norma contribuir a eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad en cuanto a las tasas de participación, la distribución de los recursos, las prestaciones, tareas y responsabilidades en la vida pública y privada, la consideración y la atención que se prestan al hombre y a la mujer, a las características masculinas y femeninas, en cuanto al comportamiento y las prioridades que se han detectado en la situación de partida. En este punto termina la Guía.

Como ya indicábamos, el contenido de la misma resulta muy apropiado pero insuficiente, ya que sólo lleva a cabo parte del análisis *ex-ante* que debiera realizarse en la elaboración de cualquier Informe de Impacto de Género. Dentro de este análisis *ex-ante* no contempla:

- La previsión de resultados (tomando en consideración el análisis de la situación previa):
  - Previsión de resultados cuantitativos (Resultados directos de la aplicación de la norma)
  - Previsión de impacto en relaciones de género (Incidencia sobre los roles y estereotipos de género)

Tampoco establece los grados de Impacto de Género resultante del análisis anteriormente realizado. Así distinguiríamos entre un Impacto de Género de la Disposición normativa a aplicar:

- Positivo:
  - Elimina desigualdades
  - Contribuye a los objetivos de las políticas de igualdad
- Negativo:

- No elimina desigualdades
- No contribuye a los objetivos de las políticas de igualdad

Terminaría la evaluación *ex-ante* de estos Informes, con las “Propuestas de mejora y recomendaciones” que tampoco se han reflejado en la Guía:

- Propuesta de Mejora (Cambios en el texto normativo):
  - Introducción de nuevas medidas que mejoren el impacto de género.
  - Modificación de medidas existentes para mejorar el impacto de género.
  - Cambios en la redacción, que eviten un uso sexista del lenguaje.
- Recomendaciones:
  - Sugerencias de aplicación
  - Sugerencias sobre medidas complementarias, en la actuación pública, que apoyen el impacto positivo
  - Propuestas dirigidas a otros departamentos y otras normas, para mejorar el impacto de género.
  - Sugerencias y precauciones, respecto al seguimiento y evaluación del impacto de género de la norma

Faltaría por tanto analizar los mecanismos de seguimiento que se hubiesen dispuesto. De igual manera trabajaríamos para llevar a cabo la siempre necesaria evaluación *ex – post*. En este sentido la citada Guía de la Comisión Europea, no recoge nada relativo al seguimiento ni a la posterior evaluación de la aplicación de la norma que se trate.

Así pues, desde nuestro punto de vista, este sería el momento dentro del *iter* legislativo de reflejar las propuestas de mejora y recomendaciones surgidas como consecuencia de la elaboración de los Informes de Impacto de Género, y sus posteriores evaluaciones.

#### **4.1.2.1 La participación del Instituto de la Mujer Andaluz en la elaboración de los Informes de Evaluación de Impacto de Género hasta 2010**

La participación del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en la elaboración de los Informes Evaluación de Impacto de Género realizados en la Comunidad Autónoma Andaluza viene de la mano del Decreto 93/2004 y se presenta como una novedad con respecto a lo dispuesto en

la “Ley 30/2003 sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno” en la que no se cuenta de forma expresa con la participación de Instituto de la Mujer (IM) en la elaboración de dichos Informes.

La participación del IAM se traduce en numerosas ventajas sobre todo de carácter cualitativo, que hacen de estos Informes una verdadera herramienta para la consecución de la igualdad real y de oportunidades de mujeres y hombres.

Así, como veremos más adelante, muchos de los Proyectos de Ley que desde el año 2007 están siendo aprobados por el Consejo de Gobierno Andalúz, según lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley 18/2003, a los que hemos tenido acceso, van acompañados por dos Informes. Por un lado, uno presentado por la Consejería correspondiente, denominados Informes de Evaluación de Impacto de Género (IEIG); y otro, presentado por el IAM en el que se recogen todas las observaciones que el personal técnico haya realizado a la vista del Anteproyecto de la normativa que se trate y del citado Informe de la Consejería, es decir un Informe de Observaciones, en adelante IOIEIG.

Desde un punto de vista cualitativo, el hecho de que éste último informe presentado por el IAM, esté realizado por personal técnico, con formación específica en género, ofrece mayor garantía relativa a la eficacia potencial de estos.

De esta manera se está estableciendo un doble filtro que evitará que, disposiciones normativas aparentemente neutras, pudiesen establecer medidas sexistas no previstas. Evidentemente y tal y como pasaba en el ámbito estatal, la eficacia de este tipo de herramientas, y más concretamente la eficacia del sistema de doble filtro característico de Andalucía, solo podría medirse en el caso en el que los textos legales definitivos recogieran las observaciones hechas en estos dos informes; pero lo establecido en ellos tampoco tiene carácter vinculante en la Comunidad Autónoma Andaluza.

Dicho lo cual, analizaremos en este punto cómo es y en qué consiste la participación de este Instituto de la Mujer Andalúz en la elaboración de los citados informes.

El trabajo del IAM comienza una vez se ha terminado de elaborar el Informe de Evaluación de Impacto de Género por la Consejería correspondiente junto al Anteproyecto de la disposición de que se trate. Así este Informe junto al Anteproyecto es remitida al IAM,



quien en el plazo de diez días realizará las observaciones que estime oportunas, según lo dispuesto en el art. 5 del Decreto 93/2004<sup>200</sup>.

Nada más recibir el IAM la citada documentación, lo envía a LIKaDI, S.L.,<sup>201</sup> una consultora que verificará que el Informe de Impacto de Género realizado la Consejería se ha realizado correctamente, es decir conforme a lo dispuesto en la Guía de la Comisión Europea, que como ya indicábamos anteriormente es la utilizada para elaborar la gran mayoría de estos Informes, de hecho en la página de dicha consultora se puede leer:

*Información sobre el Impacto de Género de la Legislación. [Durante los dos últimos años hemos realizado tanto informes concretos del impacto de género de cierta normativa como elaborado protocolos y manuales para la valoración de dicho impacto]*<sup>202</sup>.

Esta verificación debe hacerse en un plazo no superior a cinco días, ya que transcurridos los mismo, la consultora debe devolver la documentación junto con las posibles correcciones que se hayan efectuado al Instituto Andaluza de la Mujer.

El IAM, una vez recibida toda la documentación de la consultora verificará que (señalamos únicamente los aspectos más relevantes):

- El Informe se haya formulado siguiendo la Guía de la Comisión Europea.
- En el análisis de realidad o diagnóstico necesario que se haya efectuado, se hayan tomados los datos estadísticos que se desprenden del Instituto Andaluz de Estadística.
- No se haya utilizado un lenguaje sexista, para ello se sigue el Acuerdo de 16 de Marzo de 2005, de la Comisión General de Viceconsejeros, por el que se da publicidad a la

---

<sup>200</sup> Remisión del Informe al Instituto Andaluz de la Mujer. 1. Una vez emitido el Informe de Evaluación del Impacto de Género se remitirá, junto al proyecto de disposición de que se trate, al Instituto Andaluz de la Mujer, quien, en el plazo de diez días, podrá realizar las observaciones que estime oportunas. 2. El trámite de remisión del Informe al Instituto Andaluz de la Mujer se realizará, en todo caso, previamente a que se someta el Proyecto de la disposición a la Comisión General de Viceconsejeros.

<sup>201</sup> LIKaDI S.L. Consultora que presta servicios, especializados en la concepción, aplicación y evaluación de proyectos ligados a acciones que favorecen la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres. Entre sus servicios se destaca Información sobre el Impacto de Género de la Legislación. Datos de la empresa obtenidos de su página Web: [www.likadi.com](http://www.likadi.com) (última visita realizada en enero 2012).

<sup>202</sup> LIKaDI S.L. Consultora que presta servicios web: [http://www.likadi.com/4663/5707.html?\\*session\\*id\\*key\\*=session\\*id\\*val\\*](http://www.likadi.com/4663/5707.html?*session*id*key*=session*id*val*) (última visita realizada en enero 2012).

Instrucción<sup>203</sup> para evitar un uso sexista del Lenguaje en las Disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía.<sup>204</sup>

- En el caso en el que la disposición a estudiar establezca la creación de órgano, su composición sea paritaria.
- Los registros de datos estén desagregados por sexos.
- La actuación en cuestión afecte por igual a mujeres y hombres.

El cometido del Instituto Andaluz de la Mujer termina con la elaboración de un Informe de Observaciones, que se remitirá al centro directivo competente para la iniciación del procedimiento de elaboración de la disposición que se trate.

Este Informe de Observaciones recogerá los puntos anteriormente señalados y las posibles propuestas de corrección. Lamentablemente, como ya señalásemos, **este informe no tiene carácter vinculante**, con lo que todo el sistema puesto en marcha para su elaboración, y los costes del mismo como puedan ser el pago a la consultora externa que realiza los IOIG, la formación del personal del IAM, y el tiempo empleado por su personal... se traduce en un sistema a todas luces ineficaz, pues el trabajo elaborado no es vinculante.

Todo ello sin tener en cuenta que esta disfunción si no se repara, otorgando a estos informes un carácter vinculante, podrá evaluarse como un sistema que provoca pérdidas económicas a la administración dando para ello la excusa perfecta para su supresión en la actual situación de crisis que vive nuestro Estado.

#### 4.2 Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía

La Ley 6/1983, de 21 de julio, ha constituido durante casi un cuarto de siglo la norma fundamental reguladora del Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía y uno de los pilares básicos del ordenamiento jurídico autonómico<sup>205</sup>.

---

<sup>203</sup> Instrucción de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de Viceconsejeros para evitar un uso sexista del lenguaje en las disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía.

<sup>204</sup> De conformidad con lo dispuesto en la Recomendación nº 90 de Consejo de Europa, adoptado por el Consejo de Ministros de 21 de febrero de 1990, para la eliminación del sexismo de la lengua; en consonancia con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley del Gobierno y Administración de la Junta de Andalucía de 21 de julio de 1983.

<sup>205</sup> Ley 6/1983, de 21 de julio del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma Andaluza. BOJA núm. 60, de 29 de julio. Vigente hasta el 31 de enero de 2008, fecha de entrada en vigor de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. BOE. núm. 276, de 17 de noviembre de 2007.

Sin embargo, desde 1983 hasta ya entrado el siglo XXI, la sociedad andaluza ha vivido profundos y trascendentales transformaciones que han exigido la adecuación del ordenamiento jurídico a los nuevos tiempos y realidades, así estos fueron los motivos que impulsaron la reforma propuesta por la 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía<sup>206</sup>.

Las reformas que se hicieron necesarias para adecuar las normas autonómicas a los tiempos y a las realidades sociales dieron lugar a la elaboración de una normativa de regulación para el Gobierno y para la Administración de la Junta de Andalucía separada.

Así la regulación de la Administración de la Junta de Andalucía se lleva a cabo a través de Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, mientras que la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se encarga de regulación de la Presidencia y del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

En la exposición de motivos de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, que regula la Administración de la Junta de Andalucía se recoge cómo uno de los principios que inspiran la creación de esta ley es el principio de igualdad de oportunidades y trato de mujeres y hombres<sup>207</sup>, no obstante, pese a la constante mención a dicho principio, este solo se recoge como tal, en el apartado segundo del artículo 19.2.b:

*Cada una de las instituciones, organizaciones y entidades que designen o propongan representantes deberá tener en cuenta la composición de género que permita la representación equilibrada.*

Por su lado la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aparte de inspirarse igualmente en el principio de igualdad de oportunidades y trato de mujeres y hombres, establece, en esta ocasión, medida más específicas para la consecución de una situación de igualdad de unas y otros.

---

<sup>206</sup> Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA núm. 215 de 7 de noviembre.

<sup>207</sup> Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. Artículo 3. Principios generales de organización y funcionamiento de la Administración de la Junta de Andalucía: *La Administración de la Junta de Andalucía sirve con objetividad al interés general a través de sus órganos y entidades instrumentales, con sujeción a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y al resto del ordenamiento jurídico. Se organiza y actúa de acuerdo con los principios de: ...p) Igualdad de oportunidades y de trato de hombres y mujeres.*

*En los Capítulos I y II del Título II, referido al Consejo de Gobierno, destaca la inclusión, por vez primera en nuestro ordenamiento jurídico, de la exigencia de que la designación de integrantes del Consejo de Gobierno atienda al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres. No se trata, en efecto, de una mera declaración retórica, sino de una opción acorde con las exigencias del artículo 9.2 de la Constitución, dirigida a la consecución real y efectiva en nuestra Comunidad Autónoma de la igualdad entre hombres y mujeres.*<sup>208</sup>

Queremos centrar nuestra atención en el artículo 43 del Título VI, de la citada ley, que aborda la regulación del ejercicio de la iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria<sup>209</sup> señalando la obligatoriedad de acompañar los proyectos de ley de una memoria sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establezcan:

*Artículo 43. De la iniciativa legislativa.*

*1. El Consejo de Gobierno ejercerá la iniciativa legislativa prevista en el Estatuto de Autonomía mediante la aprobación y posterior remisión de los proyectos de ley al Parlamento de Andalucía.*

*2. El procedimiento de elaboración de los proyectos de ley se iniciará en la Consejería competente mediante la elaboración del correspondiente anteproyecto, que irá acompañado por una memoria justificativa, los estudios e informes sobre la necesidad y oportunidad del mismo, la memoria sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establezcan, así como por una memoria económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar y su forma de financiación.*

*3. La Consejería proponente elevará el anteproyecto de ley al Consejo de Gobierno, a fin de que éste lo conozca y, en su caso, decida sobre ulteriores trámites, sin perjuicio de los legalmente preceptivos.*

---

<sup>208</sup> Exposición de motivos de Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

<sup>209</sup> Como señalábamos y justificábamos al inicio de esta investigación, el objeto del presente estudio en el ámbito autonómico andaluz, se centra en los Proyectos de Ley que apruebe el Consejo de Gobierno Andaluz, dejando para estudios posteriores el análisis de los Reglamentos aprobados por el Consejo de Gobierno Andaluz. Por este motivo, en este punto nos centraremos únicamente en lo dispuesto en el artículo 43, de Ley 6/2006, de 24 de octubre, referido a la iniciativa legislativa y no abordaremos lo dispuesto en el artículo 45, de la misma ley, referido al procedimiento de elaboración de los reglamentos.

#### 4.3 La estimativa y evaluación del impacto de género en la normativa andaluza a partir del nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía. Los avances que introduce la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía

Como veíamos al comienzo de esta investigación, el principio de igualdad ha ido evolucionando hacia exigencias de igualdad de oportunidades reales en todos los ámbitos de la vida, haciendo necesaria la implementación en todos esos ámbitos de un enfoque más integral y general de la igualdad de género.

La consecución de la igualdad de oportunidades siempre ha constituido uno de los objetivos básicos para el gobierno andaluz. En Andalucía, las metodologías creadas y ejecutadas para la integración de la perspectiva de género en los ámbitos de la vida, han hecho, como ya veremos, de esta Comunidad un referente cuando se trata de materias relacionadas con la igualdad.

Una de las mejores actuaciones, que a nuestro parecer, ha llevado a cabo el gobierno autonómico a la hora de elaborar su reglamentación rectora, el nuevo Estatuto de Autonomía, ha sido la de no dejar en olvido las herramientas creadas en legislaturas anteriores impulsándolas y dotándolas de los medios necesarios para su funcionamiento.

Claros ejemplos de ello es la obligatoriedad de elaboración del informe de evaluación de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos aprobados por el Consejo de Gobierno<sup>210</sup> y el enfoque de género en los presupuestos de la Comunidad Autónoma. Medidas que han venido a reforzar, al tratarse del texto estatutario, lo dispuesto por la “Ley 18/2003 de 29 de diciembre, por las que se aprueban medidas fiscales y administrativas”.

En esta línea observamos cómo los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía están vinculados a lo establecido en los tratados y en las normas constitucionales y estatutarias<sup>211</sup>, teniendo la obligación de adoptar las medidas necesarias para promover la igualdad de derechos de las mujeres y de los hombres.

---

<sup>210</sup> El artículo 114 del Estatuto de Autonomía, relativo al “Impacto de Género” establece que: “En el procedimiento de elaboración de las leyes y disposiciones reglamentarias de la Comunidad Autónoma se tendrá en cuenta el impacto por razón de género del contenido de las mismas.”

<sup>211</sup> Durante la pasada legislatura se presentaron los siguientes 18 textos con rango de ley en desarrollo del nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía. Leyes aprobadas por el Parlamento de Andalucía en desarrollo del nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía (Ley orgánica 2/2007, de 19 de marzo) durante la VII legislatura:

– LEY 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía.

Gran parte de estas medidas para la promoción de la igualdad se han recogido en la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, que tiene como objetivo la consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, que estudiábamos en capítulos anteriores.

#### **4.3.1 La evaluación de impacto de género en la Ley la promoción de la igualdad de género en Andalucía**

La Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, recoge en su Título I, Capítulo I, las acciones para garantizar la integración de la perspectiva de género en las políticas públicas, siendo la evaluación de impacto de género el objeto de nuestra investigación, nos hemos centrado en el artículo sexto de dicha ley:

##### *Artículo 6. Evaluación de impacto de género.*

*1. Los poderes públicos de Andalucía incorporarán la evaluación del impacto de género en el desarrollo de sus competencias, para garantizar la integración del principio de igualdad entre hombres y mujeres.*

*2. Todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Consejo de Gobierno incorporarán, de forma efectiva, el objetivo de la igualdad por razón de género. A tal fin, en el proceso de*

- 
- LEY 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía.
  - LEY 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
  - LEY 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía.
  - LEY 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
  - LEY 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía.
  - LEY 11/2007, de 26 de noviembre, reguladora del consejo genético, de protección de los derechos de las personas que se sometan a análisis genéticos y de los bancos de ADN humano en Andalucía.
  - LEY 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
  - LEY 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.
  - LEY 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
  - LEY 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento.
  - LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
  - LEY 18/2007, de 17 de diciembre, de la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA).
  - LEY 19/2007, de 17 de diciembre, de designación de Senadores y Senadoras en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
  - LEY 20/2007, de 17 de diciembre, por la que se crea el Consejo Andaluz de Concertación Local.
  - LEY 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía.

Compromisos 2008- 2011. [http://www.juntadeandalucia.es/compromisos20082012/archivos\\_repos/0/547.pdf](http://www.juntadeandalucia.es/compromisos20082012/archivos_repos/0/547.pdf) (consultado por última vez en enero 2012).

*tramitación de esas decisiones, deberá emitirse, por parte de quien reglamentariamente corresponda, un informe de evaluación del impacto de género del contenido de las mismas.*

*3. Dicho informe de evaluación de impacto de género irá acompañado de indicadores pertinentes en género, mecanismos y medidas dirigidas a paliar y neutralizar los posibles impactos negativos que se detecten sobre las mujeres y los hombres, así como a reducir o eliminar las diferencias encontradas, promoviendo de esta forma la igualdad entre los sexos.*

Como se indicaba anteriormente, la estrategia utilizada por el Gobierno autonómico andaluz, de recuperar y de volver a impulsar las medidas recogidas en leyes anteriores tiene su paradigma en este artículo sexto.

A través de él se refuerzan las pioneras medidas en materia de género que se habían elaborado cuatro años atrás, en la “Ley 18/2003 de 29 de diciembre, por las que se aprueban medidas fiscales y administrativas”.

La Evaluación del Impacto de Género en la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, adquiere una mayor relevancia que en leyes anteriores. En primer lugar observamos como ya en su exposición de motivos se hace una referencia expresa a ella, en segundo lugar podemos ver cómo, dentro del propio texto legislativo, esta medida ya no se recoge de una manera casi clandestina, en un capítulo dedicado a las “Medidas en materia de Género” con un carácter demasiado global, sino que en la citada Ley, la obligación de elaborar un informe de evaluación de impacto de género se recoge en una parte privilegiada de la misma, en su Título primero dedicado expresamente a “La promoción de la igualdad de género en Andalucía”.

Además, no podemos pasar por alto la diferente envergadura que comporta una y otra ley. Mientras que la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, fue una ley de acompañamiento a la Ley de Presupuestos anual, cuya tramitación en lo referente a las medidas en materia de género pasó inadvertida, la promulgación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, supuso toda un hito dentro de la reivindicación por alcanzar la igualdad de mujeres y hombres en la Comunidad Autónoma, situando en las agendas y legitimando de esa manera, y por fin, todos los esfuerzos que desde hace tanto tiempo se vienen realizando para la eliminación de la brecha de género.

La lectura de comparativa de ambas leyes, en lo relativo al impacto de género, también pone de manifiesto otros aspectos. En la Ley 12/2007, de 26 de noviembre desaparece la mención a “tener en cuenta de forma efectiva el objetivo de la Igualdad por Razón del Género

y del respeto a los derechos de los niños,<sup>212</sup> que si aparece en la Ley 18/2003 de 29 de diciembre.

<b>Ley 18/2003 de 29 de diciembre, por las que se aprueban medidas fiscales y administrativas</b>	<b>Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.</b>
CAPITULO VIII. Medidas en materia de Género. Informe de evaluación de impacto de género. (Art. 139)	CAPÍTULO I. Para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. Evaluación de impacto de género. (Art. 6)
Todos los Proyectos de Ley y Reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno deberán tener en cuenta de forma efectiva el objetivo de la Igualdad por Razón del Género y del respeto a los derechos de los niños según la Convención de los Derechos del Niño. A tal fin, en la tramitación de las citadas disposiciones, deberán emitirse un Informe de Evaluación del Impacto por Razón de Género del contenido de las mismas.	Todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y <u>planes</u> que apruebe el Consejo de Gobierno incorporarán, de forma efectiva, el objetivo de la igualdad por razón de género. A tal fin, en el proceso de tramitación de esas decisiones, deberá emitirse, por parte de <u>quien reglamentariamente corresponda</u> , un informe de evaluación del impacto de género del contenido de las mismas.

“Tabla comparativa de la Ley 18/2003 de 29 de diciembre, por las que se aprueban medidas fiscales y administrativas y la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, en relación a los informes de impacto de género.” Cuadro de elaboración propia.

#### **4.3.1.1 Los Informes de Impacto de Género que deben acompañar a los planes aprobados por el Consejo de Gobierno.**

La Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, introduce como gran novedad la obligación de acompañar de informes de evaluación de impacto de género no solamente a todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias como ya señalara la Ley 18/2003 de 29 de diciembre, sino que también extiende esta obligación a los “planes” que apruebe el Consejo de Gobierno.

Este punto ha supuesto para la presente investigación un verdadero escollo, pues si bien al comienzo de la misma habíamos delimitado nuestro análisis a los informes que acompañaran a los proyectos de ley que aprobara el Consejo de Gobierno y descartábamos,

<sup>212</sup> Aun estando en presencia de un articulado que tenía por objetivo regular medidas en materia de género, su propia redacción en este punto es sexista, al seguir utilizando el mal llamado masculino genérico al referirse a niñas y niños con el invisibilizador “niños” (masculino plural).



por tanto, el análisis de los informes que debía acompañar a las disposiciones reglamentarias, la promulgación de la Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía nos obligaba, por lo menos, a conocer, cómo y de qué manera se estaban llevando a cabo los informes de impacto de género que debían acompañar a planes aprobados por el Consejo de Gobierno.

La extensión de la obligación de elaborar informes de impacto de género que acompañen a los planes que apruebe el Consejo de Gobierno responde como ya señalábamos en el capítulo anterior al complejo contexto socioeconómico que afronta el Estado Español y la Comunidad Autónoma Andaluza estos últimos años. Ante una recesión económica brutal como la que estamos atravesando, muchas de las medidas paliativas que se han optado por parte del Gobierno Andaluz han venido enmarcadas en formas de “planes” que debían ser aprobados por el Consejo de Gobierno.

Como se verá seguidamente, los Informes de Impacto de Género del ámbito autonómico andaluz, que han sido analizados, como se señalaba en el apartado relativo a la metodología de la presente investigación, son todos aquellos que tiene en su haber el Servicio de Archivo del Parlamento Andaluz y dado que la elaboración de los citados planes no siguen el mismo *iter* legislativo que los proyectos de ley, y por tanto estos no son compilados por Servicio de Archivo del Parlamento Andaluz, haciendo de esto una verdadero problema a la hora de poder acceder a los mismo para su estudio y análisis.

Intentamos salvar esta dificultad acudiendo al Instituto Andaluz de la Mujer, bajo la siguiente hipótesis:

*Si los todos los Proyectos de Ley y Reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno deben ir acompañados por un Informe de Evaluación del Impacto por Razón de Género, además del Informe de Observaciones a este emitidos por el IAM, según lo dispuesto por el artículo quinto del Decreto 93/2004, es probable que los Informes de Impacto de Género que acompañen a los planes aprobados por el Consejo de Gobierno, también vayan acompañados del Informe de Observaciones que debiera elaborar el IAM.*

A través de comunicación telefónica y posterior visita personal al Instituto Andaluz de la Mujer hemos obtenido confirmación de nuestra hipótesis: “Los planes aprobados por el Consejo de Gobierno van acompañados del Informe de Observaciones, que debiera elaborar el IAM”. No obstante este organismo no nos ha facilitado dichos informes alegando en un

primer momento que estos no tienen carácter público,<sup>213</sup> para posteriormente alegar la no disponibilidad de los mismos o el desconocimiento de este extremo.<sup>214</sup>

Así pues, ante la imposibilidad real de obtener los citados informes y en aras del mantenimiento del rigor de la presente investigación, esta se centrará únicamente en el estudio y análisis de los Informes de Impacto de Género del ámbito autonómico andaluz, que acompañan a los proyectos de ley y que tienen en su haber el Servicio de Archivo del Parlamento Andaluz.

#### **4.3.1.2 Las Unidades de Género en la Administración Andaluza y la participación del Instituto Andaluz de la Mujer**

Otras de las novedades que aportó la Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía en relación a la Evaluación del Impacto de Género, fue la creación de las “Unidades de Igualdad de Género”<sup>215</sup>, concebidas como una estructura de apoyo estable, para consolidar el proceso de implantación de la integración de la perspectiva de la igualdad de género en Andalucía. Estas están reguladas en su Título III, relativo a la organización institucional y coordinación entre las distintas administraciones públicas para la igualdad de género.

---

<sup>213</sup> Este aspecto es muy llamativo sobre todo si tenemos en cuenta lo dispuesto en la disposición adicional segunda del Decreto 275/2010, de 27 de abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad de Género en la Administración de la Junta de Andalucía, que establece que: “Igualdad de género en las páginas web de la Administración de la Junta de Andalucía. Para favorecer la incorporación de la dimensión de género en el ámbito de actuación de la Administración de la Junta de Andalucía, en las páginas web de todas las Consejerías y, en su caso, de las agencias administrativas y agencias de régimen especial, se implantarán secciones específicamente dedicadas a facilitar la documentación, información y recursos de apoyo existentes, generados por la respectiva Unidad de Igualdad de Género. (Este Decreto será analizado más adelante; el subrayado es nuestro).

<sup>214</sup> Se han solicitado durante el año 2010 y a lo largo de los meses de junio y julio de 2011, los Informes de Impacto de género que acompañan a los planes aprobados por el Consejo de Gobierno a todas las estancias telemáticas que aparecen en la página web Instituto Andaluz de la Mujer: [consulta.iam@juntadeandalucia.es](mailto:consulta.iam@juntadeandalucia.es), [biblioteca.iam@juntadeandalucia.es](mailto:biblioteca.iam@juntadeandalucia.es), [n.iam@juntadeandalucia.es](mailto:n.iam@juntadeandalucia.es), [publicaciones.iam@juntadeandalucia.es](mailto:publicaciones.iam@juntadeandalucia.es), [cmujer.sevilla.iam@juntadeandalucia.es](mailto:cmujer.sevilla.iam@juntadeandalucia.es), [iam@juntadeandalucia.es](mailto:iam@juntadeandalucia.es), [calidad.iam@juntadeandalucia.es](mailto:calidad.iam@juntadeandalucia.es), [unidad.igualdad.cpre@juntadeandalucia.es](mailto:unidad.igualdad.cpre@juntadeandalucia.es), [uig.iam@juntadeandalucia.es](mailto:uig.iam@juntadeandalucia.es) y [directora.iam@juntadeandalucia.es](mailto:directora.iam@juntadeandalucia.es). En los anexos de la presente investigación pueden consultarse las solicitudes y respuestas que hemos obtenido, cuando así ha sido por parte del Instituto Andaluz de la Mujer.

<sup>215</sup> Aunque las Unidades de Género en la Administración Andaluza se crean en virtud de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía en relación a la Evaluación del Impacto de Género, estas tienen su origen en la Unidad de Igualdad de Género, que fue creada en el año 2001 como una experiencia piloto donde poder ensayar diversas fórmulas, métodos y estrategias que confluyeran en un fin único: dotar de conocimientos y herramientas concretas a los centros gestores de la Administración Andaluza para incorporar la dimensión de género en el desarrollo de las políticas públicas. <http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/institutodelamujer/ugen/node/35>. (consultado en última ocasión en diciembre de 2011).

*Artículo 60. Unidades de Igualdad de Género.*

*1. Se crean Unidades de Igualdad de Género en todas las Consejerías de la Junta de Andalucía, con el fin de impulsar, coordinar e implementar la perspectiva de género en la planificación, gestión y evaluación en sus respectivas políticas.*

*2. Cada Consejería encomendará a uno de sus órganos directivos las funciones de la Unidad de Igualdad de Género en los términos que se establezcan reglamentariamente.*

*3. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará el asesoramiento y la formación de su personal en materia de igualdad de género para implementar eficazmente las políticas públicas con perspectiva de género.*

Estas Unidades de Género<sup>216</sup> poseen una gran relevancia como instrumento para favorecer y abrir nuevas vías para la integración efectiva del objetivo de la igualdad de mujeres y hombres en el diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación de la práctica administrativa de la Administración de la Junta de Andalucía, tienen entre sus funciones, como vemos seguidamente, la de asesorar a los órganos competentes de la Consejería en la elaboración del informe de evaluación del impacto por razón de género, previsto en el artículo 6 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre. Las funciones específicas de estas Unidades de Igualdad de Género son:

1. Asesorar a los órganos competentes de la Consejería en la elaboración del informe de evaluación del impacto por razón de género, previsto en el artículo 6 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre.
2. Llevar a cabo el seguimiento, evaluación del desarrollo y cumplimiento del Plan Estratégico para la Igualdad de mujeres y hombres establecido por el artículo 7 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las funciones que, a tales efectos, correspondan a otros órganos.
3. Recibir las estadísticas oficiales de su Consejería y de sus entidades instrumentales, y realizar el análisis, seguimiento y control de los datos desde la dimensión de género.
4. Impulsar la formación y sensibilización del personal de la Consejería o entidades instrumentales en relación al alcance y significado del principio de igualdad de oportunidades, mediante la formulación de propuestas de acciones formativas.

---

<sup>216</sup> Las Unidades de Género en la Administración Andaluza pueden consultarse en la web: <http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/institutodelamujer/ugen/node/4> (consultado en última ocasión en diciembre de 2011).

5. Asesorar, en la elaboración de los planes de igualdad regulados en el artículo 32 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, que se proyecten en su respectivo ámbito de actuación por la Administración de la Junta de Andalucía, así como colaborar en la evaluación de dichos planes y favorecer la elaboración de medidas correctoras.
6. Impulsar y apoyar el desarrollo de medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las mujeres y hombres que se adopten desde la Consejería competente en materia de función pública.
7. Realizar la asistencia técnica al personal y órganos de la Consejería y de sus entidades instrumentales en relación a la aplicación de las políticas de igualdad, y especialmente en el seguimiento de la publicidad institucional.
8. Colaborar con el Instituto Andaluz de la Mujer al objeto de garantizar la adecuada cooperación en la coordinación de las actuaciones en materia de igualdad de mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional única, de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre.
9. En general, velar por la aplicación efectiva del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres<sup>217</sup>.

El desarrollo del citado artículo 60 de la Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía y la regulación de las Unidades de género que a través de ella se crean, se recoge en el Decreto 275/2010, de 27 de abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad de Género en la Administración de la Junta de Andalucía.

Este Decreto está compuesto de una justificación, cinco artículos relativos a su objeto (artículo primero), al ámbito de actuación y finalidad (artículo segundo), a la designación de Unidades de Género (artículo tercero), a las funciones de las mismas (artículo cuarto), y a la formación del personal adscrito a estas Unidades (artículo quinto). También cuenta con tres Disposiciones adicionales, la primera relativa a la Unidad de Género del Instituto Andaluz de la Mujer, la segunda referida a la Igualdad de género en las páginas web de la Administración de la Junta de Andalucía y la tercera referida a la implantación efectiva de las Unidades de Género; y termina con dos Disposiciones finales relativas al desarrollo y ejecución y a la entrada en vigor de dicho Decreto.

---

<sup>217</sup>Artículo 4 del Decreto 275/2010, de 27 de abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad de Género en la Administración de la Junta de Andalucía.

Por su estructura y contenido es imposible no prestar atención a las semejanzas entre existentes, tanto en el fondo como en la forma, entre el Decreto 275/2010, de 27 de abril, que se regula las Unidades de Igualdad de Género en la Administración de la Junta de Andalucía y el Decreto 93/2004, por el que se regulaba el Informe de Evaluación de Impacto de Género en los Proyectos de Ley y Reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno.

Pues aunque ambos dos en su origen tienen como finalidad regular cosas distintas, por un lado uno regula las Unidades de Igualdad de Género y por otro lado el otro regula la elaboración del Informe de Impacto de Género, no podemos perder de vista como acabamos de señalar que una de las funciones de las Unidades de Género es la de asesorar a los órganos competentes de la Consejería en la elaboración del informe de evaluación del impacto por razón de género.

Así bien, siguiendo con la idea del espíritu continuista que consideramos que impera en el Gobierno de la Junta de Andalucía, en lo relativo a la promoción de la igualdad de género, encontramos que el Decreto 275/2010 que regula las Unidades de Género ha tomado como referencia lo establecido en el anterior Decreto 93/2004, yendo más allá en su regulación y cubriendo los aspectos que habían quedado menos regulados en el citado Decreto 93/2004.

Desde nuestro punto de vista, el Decreto 275/2010 que regula las Unidades de Género, incide en tres puntos clave que quedaban un poco en el aire en el anterior Decreto. En primer lugar establece, sin lugar a dudas, que serán las Consejerías, más concretamente las personas titulares de estas, las que designaran el órgano directivo que asumirá las funciones de las Unidades de Igualdad de Género, asimismo, las personas titulares de las Consejerías podrán crear Unidades de Igualdad de Género en sus agencias administrativas y agencias de régimen especial.

En segundo lugar, el presente Decreto es meridiano a la hora de establecer que el personal técnico de las citadas Unidades debe tener formación en materia de género y de igualdad de oportunidades, y que esta formación específica será impartida través del Instituto Andaluz de Administración Pública y del Instituto Andaluz de la Mujer.

El aspecto más interesante de este Decreto viene de la mano de su Disposición adicional primera, referente a la creación de una Unidad de igualdad de género del Instituto Andaluz de la Mujer<sup>218</sup>:

*1. Se crea la Unidad de igualdad de género del Instituto Andaluz de la Mujer con el fin de apoyar a la Administración de la Junta de Andalucía para implementar y consolidar el proceso de implantación de la transversalidad de género en Andalucía.*

*2. Además de las funciones previstas en el artículo 4, desarrollará las siguientes:*

*a) Coordinar las Unidades de Igualdad de Género existentes en la Administración de la Junta de Andalucía.*

*b) Asesorar a las Unidades de Igualdad de Género en el desarrollo de las funciones que tienen asignadas, y realizar actividades de intercambio y transferencia de experiencias de integración del enfoque de género<sup>219</sup>.*

Nos llama la atención a la vez que nos congratula esta atribución de funciones específicas al Instituto Andaluz de la Mujer por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, pues se deslinda así de la línea poco comprensible para nosotras, que en estos últimos tiempos viene marcando el Gobierno del Estado Español en la que dentro de las medidas para luchar contra la crisis económica que nos acontece ha suprimido el Ministerio de Igualdad, invisibilizando y retrocediendo de esta manera en la lucha por lograr una sociedad más justa e igualitaria para todas las personas.

#### 4.4 Compilación de los Informes de Evaluación de Impacto de Género

Una vez analizada la normativa marco en la que se contempla las normas para la creación y elaboración de los IEIG, analizaremos pues aquellos informes que se han elaborado en la Comunidad Autónoma Andaluza, en virtud de lo dispuesto en los artículos 139 y 140 de la Ley 18/2003, la durante la VII y VIII legislatura.

Anotaremos de nuevo, como fundamentales para esta investigación, dos características en la elaboración de los citados informes, por un lado la existencia de una

---

<sup>218</sup> La Unidad de Igualdad de Género del IAM. Web: <http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/institutodelamujer/ugen/node/3>. (consultado en última ocasión en diciembre de 2011).

<sup>219</sup> Disposición adicional primera Decreto 275/2010, de 27 de abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad de Género en la Administración de la Junta de Andalucía.

disposición normativa<sup>220</sup>, el “Decreto 93/2004, de 9 de marzo por el que se regula el Informe de Evaluación de Impacto de Género en los Proyectos de Ley y Reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno”, que desarrolla las medidas concretas relativas al género, contenidas en los artículos 139 y 149 de la “Ley 18/2003 de 29 de diciembre, por las que se aprueban medidas fiscales y administrativas”.

Y por otro lado, señalaremos como característica fundamental en la elaboración de los informes la participación del Instituto Andaluz de la Mujer como filtro de estos IEIG, al remitírsele desde el centro directivo competente (Consejería), el IEIG que se haya elaborado junto al proyecto de disposición normativa que se trate, para que el IAM elabore un Informe de Observaciones al IEIG, según lo dispuesto en el ya citado Decreto 93/2004.

Se establece así, un sistema de doble filtro para evitar que la redacción final del texto legislativo resulte sexista y pueda por ello eventualmente provocar efectos sexistas, que lejos de reducir la brecha de desigualdad entre unos y otras, las aumente.

#### **4.4.1 Análisis cuantitativo de los Informes de Evaluación de Impacto de Género, elaborados según lo dispuesto en la Ley 18/2003 de 29 de diciembre, por las que se aprueban medidas fiscales y administrativas, durante la VII y VIII legislatura.**

Como ya señalábamos en el apartado de metodología, los Informes de Evaluación de Impacto de Género que procederemos a analizar en éste y los siguientes apartados, son todos aquellos que tiene en su haber el Servicio de Archivo del Parlamento<sup>221</sup>.

---

<sup>220</sup> El hecho de que este Decreto 93/2004, de 9 de marzo por el que se regula el Informe de Evaluación de Impacto de Género en los Proyectos de Ley y Reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno, haya sido derogado en fecha de conclusiones de nuestro trabajo de investigación, por el Decreto 17/2012, de 7 de febrero, por el que se regula la elaboración del Informe de Evaluación del Impacto de Género, no influye en ningún caso en el análisis que en el llevamos a cabo pues los Proyectos de Ley analizados y sus correspondientes informes se elaboraron bajo la vigencia del Decreto 93/2004, de 9 de marzo.

<sup>221</sup> El 21 de junio de 1982 se constituye el Parlamento de Andalucía. En el Estatuto de Gobierno y Régimen Interior del Parlamento de Andalucía de diciembre de 1984 y en el texto refundido publicado el 17 de enero de 1989 aparece dentro de la organización administrativa el Servicio de Documentación, Biblioteca y Archivo, cuyas funciones se enumeran en el artículo 26. Sin embargo, la Biblioteca y el Servicio de Documentación y Archivo son desde 1992 dos unidades administrativas independientes. Con fecha de 13 de agosto de 1999, la Mesa de la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía aprobó las Normas de funcionamiento de los Servicios de Biblioteca y de Documentación y Archivo (BOPA, núm. 355), que regulan con carácter oficial los distintos aspectos de la relación de ambos Servicios con los usuarios. En la actualidad este servicio está bajo la dirección del Jefe del Servicio D. Sebastián de la Obra Sierra. Web: <http://www.parlamentodeandalucia.es/opencms/export/portal-web->

Desde el Servicio de Archivo del Parlamento Andaluz, que tiene como uno de sus objetivos el facilitar el acceso y difusión del fondo documental del Parlamento de Andalucía<sup>222</sup>, se nos informó que, aunque la obligación de elaborar los citados IEIG se contempla en la Ley 18/2003 de 29 de diciembre; será únicamente a partir del mes de febrero del año 2007, cuando se comience a dar entrada en este Servicio de Archivo a los IEIG que acompañan a los Proyectos de Ley y Reglamentos que deben ser aprobados por el Consejo de Gobierno.

Hemos de aclarar en este punto, que lo dicho anteriormente no significa que los Proyectos de Ley y Reglamentos emitidos anteriormente a febrero del 2007, no hayan ido acompañados de IEIG. Lo que en cualquier caso significa, es que el registro de este Archivo no tiene constancia de ello, pudiendo haberse adjuntado estos Informes en un momento posterior de la tramitación legislativa ordinaria, de manera que ya fuese imposible dejar constancia en el citado registro.

De hecho, hemos encontrado datos que afirman que efectivamente desde el año 2004 el IAM viene elaborando los Informes de Observación a los Informes de Evaluación de Impacto de Género que se han ido elaborando; Informes que evidentemente no han seguido el *iter* habitual en su tramitación que hubiese permitido su entrada en el registro del Servicio de Archivo del Parlamento Andaluz:

*Desde la entrada en vigor en el mes de abril de 2004 del Decreto 93/2004, el Instituto Andaluz de la Mujer, organismo de igualdad competente en emitir las observaciones al Informe que emiten los órganos proponentes de la norma, ha analizado el Impacto de género en un total de 112 proyectos normativos: 46 en el 2004, y 66 en lo que llevamos de 2005.*<sup>223</sup>

Otro dato que confirma este extremo lo encontramos en el siguiente fragmento del Dictamen del Consejo Consultivo, en contestación a la cuestión elevada referente al Anteproyecto de Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.:

---

[parlamento/composicionyfuncionamiento/serviciosadministrativos/documentacionyarchivos.htm](http://www.parlamentodeandalucia.es/opencms/export/portal-web-parlamento/composicionyfuncionamiento/serviciosadministrativos/documentacionyarchivos.htm) (consultada en última ocasión en noviembre de 2011).

<sup>222</sup> Artículo primero de las normas de funcionamiento de los Servicios de Biblioteca y de Documentación y Archivo del Parlamento de Andalucía. Web <http://www.parlamentodeandalucia.es/opencms/export/portal-web-parlamento/composicionyfuncionamiento/serviciosadministrativos/documentacionyarchivos/normasdefuncionamiento1.htm> (consultada en última ocasión en noviembre de 2011).

<sup>223</sup> AAVV, *El Impacto de Género: una medida pionera para alcanzar la igualdad*, Meridiam, núm. 37, Tercer Trimestre, 2005, p.25.



*Por otra parte, teniendo en cuenta la fecha de inicio del procedimiento, le es de aplicación la modificación introducida en el citado artículo de la Ley 50/1997 por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, que obliga a incorporar al acuerdo de inicio de tramitación del Anteproyecto de Ley un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establecen en el mismo, por todo lo cual, con fecha 27 de julio de 2005, se solicitó del Instituto Andaluz de la Mujer la emisión de informe sobre el impacto por razón de género, previsto en el Decreto 93/2004, de 9 de marzo, que ha sido emitido el día 13 de septiembre siguiente en sentido favorable al Anteproyecto, aunque sin menoscabo de determinadas observaciones al texto articulado que el Órgano informante ha considerado conveniente realizar.<sup>224</sup>*

Dejaba constancia así pues este Dictamen, de que efectivamente se habían elaborado ambos Informes, el Informe de Evaluación de Impacto de Género que debía realizar la Consejería competente y el Informe de Observaciones al anterior y al texto de la disposición normativa que realiza el IAM. No obstante y como señalábamos con anterioridad ninguno de los dos Informes ha pasado por el registro del Servicio de Archivo del Parlamento Andaluz, con lo que es imposible acceder a él.

En el intento de continuar con la delimitación del ámbito material cuantitativo de nuestra investigación, señalaremos también que lamentablemente nos ha sido imposible obtener todos y cada uno de los Informes Observación a los Informes de Impacto de Género que han sido elaborados por el Instituto de la Mujer, en virtud de lo dispuesto por el Decreto el Decreto 93/2004, de 9 de marzo, pues pese a que hemos solicitado los citados informes en reiteradas ocasiones tanto por teléfono como a través de correo electrónico, estos no se nos han facilitado tal y como ya señalamos anteriormente<sup>225</sup>. Así que solo podemos contar con aquellos IOIEIG que obran en poder del Servicio Archivo del Parlamento Andaluz, es decir que contamos con aquellos informes que aun habiendo sido elaborados por el IAM fueron introducidos en los expedientes legislativos que siguieron el *iter* legislativo de aprobación habitual.

En lo referente al ámbito temporal hemos establecido una horquilla que abarca la VII y VIII legislatura del Gobierno Autonómico Andaluz. Esto sin perder de vista como ya

---

<sup>224</sup> Consejo Consultivo de Andalucía. Dictamen núm. 049/2006 de 15 de febrero de 2006. Núm. Marginal I.4. Cuestión Anteproyecto de Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ponencia: María Luisa Balaguer Callejón.

<sup>225</sup> Telefónicamente y nunca por escrito desde el Instituto Andaluz de la Mujer se nos ha señalado que según la política interna de este Instituto Andaluz de la Mujer, los IOIEIG que desde allí se elaboran no tienen carácter público y por ello no han podido facilitárnoslos, (a diferencia de la consideración de documento público que se tiene desde el Archivo del Parlamento Andaluz).

señaláramos que no será hasta el año 2007 en el que se de registro de entrada por parte del Servicio de Archivo del Parlamento Andaluz, al primer IEIG.

Como fecha de final para dejar de compilar Proyectos de Ley, hemos elegido el 30 de Junio de 2011, fecha en la que tuvo lugar el último debate de estado de la Comunidad Autónoma Andaluza<sup>226</sup> de la VIII legislatura<sup>227</sup>; de tal manera que trabajaremos sobre todos aquellos Proyectos de Ley que han sido aprobados desde la entrada en vigor de la VII legislatura hasta el 30 de Junio de 2011, centrando nuestra atención en primer lugar en el conjunto de Proyectos de Ley que durante ese periodo hayan ido acompañados efectivamente de Informes de Evaluación de Impacto de Género y en segundo lugar centrándonos en aquellos Proyectos de Ley aprobados que hayan ido acompañados de un IEIG y del Informe de Observación al Informe de Evaluación de Impacto de Género elaborado por el IAM.

Si analizamos en primer lugar los Proyectos de Ley aprobados en la VII legislatura, observaremos que durante dicha legislatura hubo un total 49 Proyectos de Ley presentados por el Parlamento Andaluz, repartidos en el tiempo de la siguiente manera: En el año 2007 se presentaron 17 Proyectos de Ley, el mismo número que en el año 2006; en el año 2005 se presentaron 6 Proyectos de y en el año 2004. Véase<sup>228</sup>:

#### Año 2007

1. Ley 7-07/PL-000017, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008.
2. Ley 7-07/PL-000016, de designación de Senadores y Senadoras en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
3. Ley 7-07/PL-000015, del Consejo Andaluz de Concertación Local.
4. Ley 7-07/PL-000014, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento.
5. Ley 7-07/PL-000013, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía.
6. Ley 7-07/PL-000012, por la que se modifica la Ley 4/1994, de 12 de abril, de creación de la Universidad Internacional de Andalucía.

---

<sup>226</sup> DSPA núm. 124, de 30 de Junio de 2011. Pleno de la Cámara, *pp.* 2 y *ss.*

<sup>227</sup> Computo de años para la VII Legislatura (Marzo/2004 -- Marzo/2008) y para la VIII Legislatura (Marzo/2008—Marzo 2012).

<sup>228</sup> Toda la información que presentamos tiene su fuente en la sección de “Actividad Parlamentaria” de la página Web del Parlamento de Andalucía: <http://www.parlamentodeandalucia.es/opencms/export/portal-web-parlamento/actividadparlamentaria.htm>. Los Proyectos de Ley enunciados deben leerse de acuerdo con la siguientes nomenclaturas: “Ley” para hacer referencia al tipo de iniciativa (Proyecto de Ley), el primer numeral hará referencia a la legislatura bajo la cual el citado Proyecto de Ley es aprobado y el segundo numeral designará el año en el que se aprobó. La indicación PL-000000, se referirá a orden en el que estos Proyectos de Ley han sido aprobados.

7. Ley 7-07/PL-000011, de la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA).
8. Ley 7-07/PL-000010, por la que se crea la Agencia Tributaria de Andalucía y se aprueban medidas fiscales.
9. Ley 7-07/PL-000009, de Farmacia de Andalucía.
10. Ley 7-07/PL-000008, de Educación de Andalucía.
11. Ley 7-07/PL-000007, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.
12. Ley 7-07/PL-000006, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía
13. Ley 7-07/PL-000005, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
14. Ley 7-07/PL-000004, de protección del origen y la calidad de los vinos de Andalucía.
15. Ley 7-07/PL-000003, reguladora del consejo genético, de protección de los derechos de las personas que se sometan a análisis genéticos y de los bancos de ADN humano en Andalucía.
16. Ley 7-07/PL-000002, de la Administración de la Junta de Andalucía.
17. Ley 7-07/PL-000001, de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía.

#### Año 2006

1. Ley 7-06/PL-000017, sobre fiscalidad complementaria del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. Ley 7-06/PL-000016, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007.
3. Ley 7-06/PL-000015, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se aprueba el Plan Estadístico de Andalucía 2007-2010.
4. Ley 7-06/PL-000014, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
5. Ley 7-06/PL-000013, por la que se autoriza la concesión, con carácter extraordinario, de un anticipo reintegrable al municipio de Marbella.
6. Ley 7-06/PL-000012, por la que se crea como entidad de derecho público el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
7. Ley 7-06/PL-000011, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía
8. Ley 7-06/PL-000010, por la que se regula la investigación en reprogramación celular con finalidad exclusivamente terapéutica.

9. Ley 7-06/PL-000009, de reconocimiento de la Universidad Privada Fernando III
10. Ley 7-06/PL-000008, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía.
11. Ley 7-06/PL-000007, de servicios ferroviarios de Andalucía.
12. Ley 7-06/PL-000006, sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía.
13. Ley 7-06/PL-000005, de creación del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.
14. Ley 7-06/PL-000004, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
15. Ley 7-06/PL-000003, del estatuto de los andaluces en el mundo.
16. Ley 7-06/PL-000002, de creación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
17. Ley 7-06/PL-000001, de Asociaciones de Andalucía.

#### Año 2005

1. Ley 7-05/PL-000006, de creación de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir.
2. Ley 7-05/PL-000005, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2006.
3. Ley 7-05/PL-000004, por la que se autoriza la enajenación del bien inmueble conocido.
4. Ley 7-05/PL-000003, de Artesanía de Andalucía.
5. Ley 7-05/PL-000002, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.
6. Ley 7-05/PL-000001, de concesión de un crédito extraordinario para sufragar las subvenciones a adjudicar a las formaciones políticas por los gastos electorales causados por las elecciones al Parlamento de Andalucía celebradas el 14 de marzo de 2004.

#### Año 2004

1. Ley 7-04/PL-000010, de medidas tributarias, administrativas y financieras.
2. Ley 7-04/PL-000009, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2005.
3. Ley 7-04/PL-000007, del Comité Andaluz para la Sociedad del Conocimiento.

4. Ley 7-04/PL-000006, por la que se regula el régimen de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
5. Ley 7-04/PL-000005, de creación del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía.
6. Ley 7-04/PL-000004, de creación del Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Andalucía.
7. Ley 7-04/PL-000003, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía
8. Ley 7-04/PL-000002, de creación del Colegio Profesional de Educadores Sociales de Andalucía.
9. Ley 7-04/PL-000001, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía.

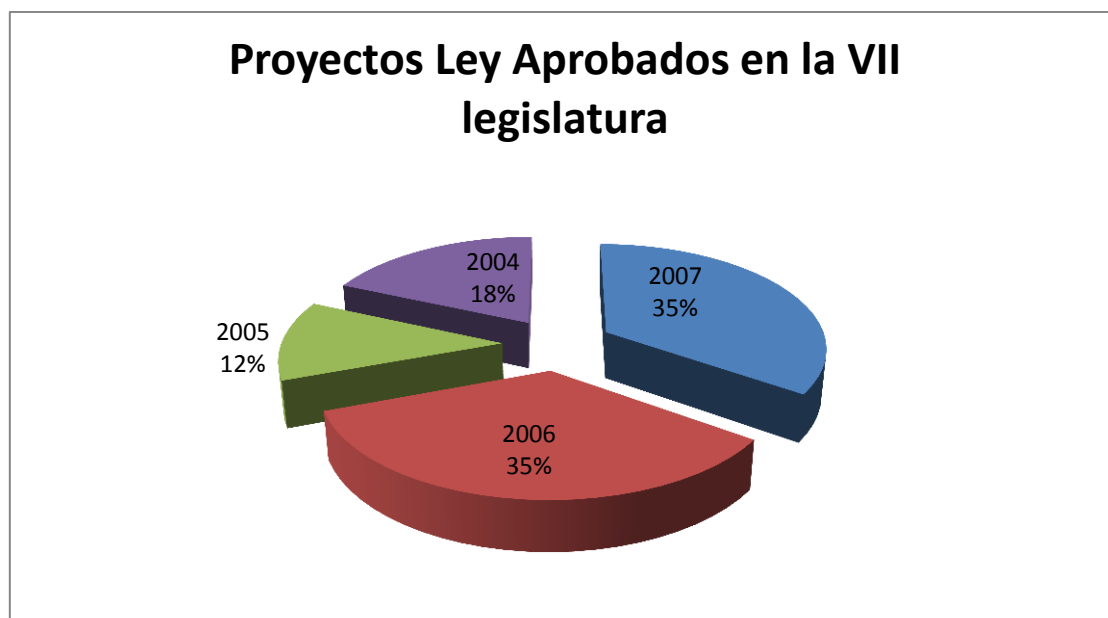


Gráfico de elaboración propia.

Los Proyectos de Ley que han sido presentados por el Parlamento Andaluz durante la VIII legislatura fueron un total de 21, repartidos en el tiempo de la siguiente manera: En el año 2008 se presentaron 5 Proyectos de Ley, en el año 2009 se presentaron 9 Proyectos de Ley y en el año 2010 se presentaron 7. No podemos dejar de señalar que durante el año 2011 aunque hubo Proyectos de Ley que se tramitaron no se aprobó ninguno:

#### Año 2010

1. Ley 8-10/PL-000007, de reordenación del sector público de Andalucía (procedente del Decreto-ley 6/2010, de 23 de noviembre)
2. Ley 8-10/PL-000006, del Olivar de Andalucía
3. Ley 8-10/PL-000005, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011.
4. Ley 8-10/PL-000004, de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad (procedente del Decreto-Ley 4/2010, de 6 de julio)
5. Ley 8-10/PL-000003, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía
6. Ley 8-10/PL-000002, de medidas tributarias de reactivación económica de la Comunidad Autónoma de Andalucía (procedente del Decreto-Ley 1/2010, de 9 de marzo)
7. Ley 8-10/PL-000001, por la que se modifican diversas Leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el Mercado Interior (procedente del Decreto-Ley 3/2009, de 22 de diciembre)

#### Año 2009

1. Ley 8-09/PL-000009, reguladora de la participación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
2. Ley 8-09/PL-000008, de Autonomía Local de Andalucía
3. Ley 8-09/PL-000007, para la Dehesa
4. Ley 8-09/PL-000006, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010
5. Ley 8-09/PL-000005, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Andalucía
6. Ley 8-09/PL-000004, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte
7. Ley 8-09/PL-000003, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía
8. Ley 8-09/PL-000002, de concesión de un crédito extraordinario para sufragar las subvenciones a adjudicar a las formaciones políticas por los gastos electorales causados por las Elecciones al Parlamento de Andalucía celebradas el día 9 de marzo de 2008

9. Ley 8-09/PL-000001, por la que se autoriza la transmisión de la titularidad del inmueble denominado Palacio de los Condes de Buenavista, sito en Málaga, c/ San Agustín, nº 8

Año 2008

1. Ley 8-08/PL-000005, por la que se aprueba el Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA) (procedente del Decreto Ley 2/2008, de 9 de diciembre)
2. Ley 8-08/PL-000004, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009
3. Ley 8-08/PL-000003, que regula el acceso de los municipios andaluces al régimen de organización de los municipios de gran población
4. Ley 8-08/PL-000002, reguladora de la mediación familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía
5. Ley 8-08/PL-000001, de medidas tributarias y financieras de impulso a la actividad económica de Andalucía (procedente del Decreto-Ley 1/2008, de 3 de junio)

**Proyectos Ley Aprobados en la VIII  
Legislatura**

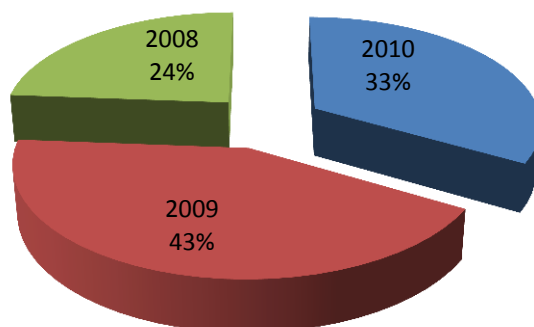


Gráfico de elaboración propia.

Los datos hablan por sí solos, sin duda la VII legislatura fue mucho más prolífica en lo relativo a la actividad parlamentaria para la aprobación de Proyectos Ley que lo que lo ha sido la VIII legislatura. De las varias lecturas sociopolíticas, jurídicas y económicas que se podrían hacer de este hecho, hemos querido resaltar un par de ellas.

No es casual que el grueso de los Proyectos de Ley aprobados se haya dado durante los años 2006 y 2007, ya que aunque en la Comunidad Autónoma Andaluza no se había producido un cambio signo político de Gobierno en las dos últimas décadas, (el Partido Socialista seguía estando en el poder), en Marzo de 2004 el Partido Socialista accedía al Gobierno Central, con un programa electoral de fuerte carácter social, en el que se establecía la intención de aprobar leyes como la Ley de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género y la Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. Leyes que fueron muy bien acogidas por gran parte de la sociedad, y que además como veremos más adelante, se promulgaron en el año 2007, meses previos a la reelección del actual Gobierno Socialista.

No es de recibo aplicar la casualidad a este hecho, sin duda la aprobación de las citadas leyes en ese momento ayudó a una reelección del Partido Socialista, quien tras la aprobación de las citadas leyes se aseguraba en cierta medida el voto andaluz.

Sin embargo la VIII legislatura como puede verse en la siguiente gráfica, ha sido más bien pobre a la hora de aprobar Proyectos de Ley, y es que debemos recordar que será en el año 2007 cuando desde el Gobierno central se haga el anuncio oficial por el cual se confirmaba que el Estado Español había entrado en un periodo serio de recesión, recesión que en muy pocos meses dejaría de ser recesión para ser denominada actual crisis económica estatal.

Paralelamente y seguramente como consecuencia de la situación económica que atraviesa el país y muy sensiblemente Andalucía, en las elecciones locales de 2011, el Partido Popular adelantó, por primera vez en la era democrática, al Partido Socialista en número de concejales en Andalucía<sup>229</sup>.

La falta de fondos para poner en marcha cualquier Ley y sin duda la difícil convivencia Parlamentaria que se está dando a raíz de los resultados electorales de 2011

---

<sup>229</sup> Resultado elecciones municipales 2011. Web: <http://resultados.elpais.com/elecciones/2011/municipales/01/index.html> (consultado en última ocasión en noviembre 2011).



pueda quizás explicar entre otras razones la diferencia en la actividad parlamentaria que ha existido entre estas dos legislaturas.

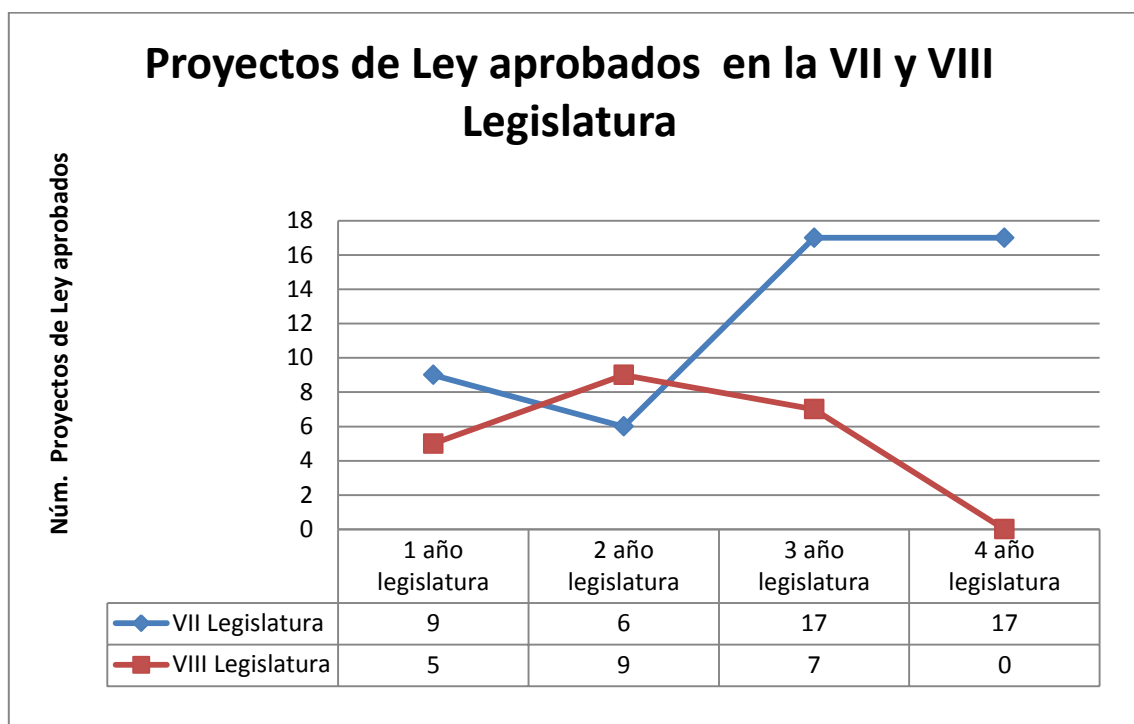


Gráfico de elaboración propia.

Vistos los Proyectos de Ley aprobados en la VII y VIII legislatura, ahora nos centraremos en el análisis cuantitativo de los Informes de Evaluación de Impacto de Género, que han sido elaborados por la distintas Consejerías y que hayan acompañado efectivamente a los Proyectos de Ley en las citadas legislaturas<sup>230</sup>, tal y como ya hiciéramos en el capítulo anterior cuando analizamos los Informes de Impacto de Género que se habían elaborado en el ámbito estatal. Los resultados de este y los siguientes análisis constituirán el verdadero objeto de nuestra investigación.

Al ser Andalucía la única autonomía que desde el año 2003 lleva a cabo un régimen de acompañamiento de doble informe<sup>231</sup> al Proyecto de Ley en su tramitación parlamentaria con el fin de evitar normas sexistas; no procederemos al análisis cuantitativo de los Informes de Observaciones a los Informes de Evaluación de Impacto de Género que realiza el IAM, pues

<sup>230</sup> No debemos dejar de recordar que nuestra muestra de investigación viene delimitada por la existencia y por ende la entrada en el registro del Servicio de Archivo del Parlamento de los dossiers legislativos que contienen los Informes de Impacto de Género, no pudiendo así ni afirmar ni negar taxativamente que se hayan elaborado los citados Informes si estos no han quedado registrados el Servicio de Archivo del Parlamento Andaluz.

<sup>231</sup> Debemos recordar que es el Decreto 93/2004 de 9 de marzo, el que establece un sistema de doble filtro, sistema a través del cual el IAM realiza un estudio cualitativo de cada uno de los IEIG que plasma en sus Informes de Observaciones, donde quedan corregidas todas las deficiencias que en este se encontraron.

carecemos de elementos comparativos en el ámbito estatal; no obstante y como veremos en el apartado relativo al análisis cualitativo, estos informes elaborados por el IAM serán la pieza clave que nos permita establecer si se ha tenido en cuenta el posible impacto de género en la normativa andaluza. Los resultados de este y los siguientes análisis constituirán el verdadero núcleo de nuestra investigación.

De los 49 Proyectos de Ley aprobados durante la VII legislatura, sólo 17 de ellos, es decir un 32%, según el Servicio de Archivo del Parlamento Andaluz, han ido efectivamente acompañados de Informe de Evaluación de Impacto de Género y según el caso concreto de Proyecto de Ley, también han ido acompañados de Informes de Observaciones al Informe de Impacto de Género. Además estos 17 Proyectos de Ley fueron aprobados casi en su totalidad durante el transcurso del año 2007. Tenemos que recordar que no será hasta ese año 2007 en el que se dé, por parte del Servicio de Archivo de Parlamento Andaluz, el primer registro de entrada a un Informe de Evaluación de Impacto de Género.

De estos 17 Proyectos de Ley, 11 fueron acompañados por el sistema de doble informe: el Informe de Evaluación de Impacto de Género que debe elaborarse en la Consejería pertinente y que analizamos seguidamente; y el Informe de Observación al anterior que elabora el Instituto de la Mujer, que analizaremos posteriormente.

	Núm. de IEIG (Total de 14)
<b>NÚM. PÁGINAS</b>	
----- 1	3
-----	3
----- 3	2
----- 4	3
----- >4	(*) 3
<b>FIRMADOS</b>	<b>14</b>
Firmados por mujeres	8
Firmados por hombres	5
<b>SELLADOS POR SU CONSEJERÍA</b>	10
Estructurados según Guía Europea	14
No estructurados por Guía	0
<b>CONSEJERÍA QUE EMITE EL IEIG</b>	
Consejería de Economía y Hacienda	(**) 4
Consejería de Salud	2
Consejería Obras Públicas y Transportes	1
Consejería de Gobernación	1
Consejería Presidencia	1
Consejería de Educación	1
Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social	1
Consejería de Agricultura y Pesca	1
Consejería de Justicia y Admón. Pública	1
Consejería de Cultura	1

Cuadro de elaboración propia. Los parámetros señalizados: (\*, \*\*) corresponde a los Informes de Evaluación de Impacto de Género relativos a los PL Presupuesto de la Comunidad Autónoma del año 2006, 2007 y 2008.

A través de esta tabla hemos querido mostrar más detalladamente los datos cuantitativos más relevantes que hemos encontrado al analizar los Informes de Impacto de Género que acompañaron a los Proyectos de Ley en la VII legislatura.

Así siguiendo con el computo anterior hemos de señalar que un total de 6 han sido los Proyectos de Ley que han presentado un único informe en la VII legislatura, destacando de entre estos 6 Proyectos de Ley que han presentado un único informe, los tres Proyectos de Ley relativos a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2006, 2007 y 2008 cuyo único informe es el elaborado por la Consejería de Economía y Hacienda.<sup>232</sup>

Por otro lado también merece especial atención el Proyecto de Ley “para la promoción de la igualdad de género en Andalucía”, que presenta un solo informe, el cual ha sido realizado por el propio IAM, con lo que no presenta IOIEIG.<sup>233</sup>

Durante la VIII legislatura los datos varían con respecto a la VII legislatura, de los 21 Proyectos de Ley que fueron aprobados por el Parlamento Andalúz durante la VIII legislatura, 6 de ellos proceden de Decretos-Ley con lo que la obligación de ir acompañados de IEIG establecida en el artículo 139 de la Ley 18/2003 de 29 de diciembre no les afecta; así que sólo hemos tenido en cuenta para el computo total de Proyectos de Ley aprobados y susceptibles de ir acompañados de IEIG y IOIEIG, un número total de 15 Proyectos, de Ley que fueron aprobados por el Parlamento Andalúz durante la VIII legislatura.

Así pues, de los citados 15 Proyectos de Ley, fueron acompañados de algún informe sea el IEIG o el IOIG un total de 13 Proyectos Ley, un 76% del total, un 25 % más que en la VII legislatura. Siendo la siguiente, su distribución en función del año en que fue aprobado y el tipo de informe que le acompañó:

---

<sup>232</sup> La presentación de un único informe será una constante en los Proyectos de Ley que regulan el Presupuesto de la comunidad autónoma cada año.

<sup>233</sup> Tenemos constancia de que los IEIG relativos a los “Proyecto de Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía. Elaborado por la Consejería de Cultura”, y al “Proyecto de Ley Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento”, existen, y que al igual que el resto de los IEIG desde el Servicio de Archivo del Parlamento han intentado facilitárnoslo, pero por problemas informáticos ajenos a ambas partes esto ha sido imposible. Por tanto, por rigor científico nos hemos visto en la obligación de omitirlo en nuestro trabajo de investigación.

	Total de PL computable	Acompañado únicamente de IEIG <sup>234</sup>	Acompañado únicamente de IOIEIG	Acompañado por ambos	No acompañado
<b>2010</b>	3	1	1	1	0
<b>2009</b>	9	2	1	4	2
<b>2008</b>	3	1	0	2	0

Tabla de elaboración propia.

Hemos utilizado la misma tabla que en la VII legislatura para mostrar más detalladamente los datos cuantitativos más relevantes que hemos encontrado al analizar los Informes de Impacto de Género que acompañaron a los Proyectos de Ley en la VIII legislatura<sup>235</sup>.

	Núm. de IEIG (Total de 11)
<b>NÚM. PÁGINAS</b>	
----- 1	2
-----	4
----- 3	1
----- 4	1
----- >4	(*) 3
<b>FIRMADOS</b>	<b>10</b>
Firmados por mujeres	6
Firmados por hombres	4
<b>SELLADOS POR SU CONSEJERÍA</b>	<b>10</b>
Estructurados según Guía Europea	12
No estructurados por Guía	0
<b>CONSEJERÍA QUE EMITE EL IEIG</b>	
Consejería de Economía y Hacienda	(**) 4
Consejería de Salud	1
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio	1
Consejería de Gobernación	2
Consejería de Medio Ambiente	1
Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social	1
Consejería de Agricultura y Pesca	1

Cuadro de elaboración propia. Los parámetros señalizados: (\*, \*\*) corresponde a los Informes de Evaluación de Impacto de Género relativos a los PL Presupuesto de la Comunidad Autónoma del año 2009, 2010 y 2011.

<sup>234</sup> Tanto para el año 2008, 2009 y 2010 hemos de tener en cuenta que los Proyectos de Ley anuales relativos a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma Andaluza (2009, 2010 y 2011) solo han ido acompañados por un solo informe el elaborado por la Consejería de Hacienda y nunca por el IOIEG elaborado por el IAM.

<sup>235</sup> El 22 de marzo de 2011, el presidente de la Comunidad Autónoma Andaluza, José Antonio Griñán remodeló el gobierno y eliminó dos Consejerías, pero este hecho no afectará al análisis de los Informes de Evaluación de Impacto de Género elaborados durante la VIII legislatura, ya que todos están fechados previamente a la remodelación y es pues con ese organigrama de trabajo (15 Consejerías) con el que trabajamos. Web: <http://www.publico.es/agencias/efe/302550/grinan-comienza-la-remodelacion-del-gobierno-andaluz> y <http://www.juntadeandalucia.es/organismos.html> (consultadas en última ocasión en noviembre 2011).

A la luz de los datos que podemos extraer de ambas tablas, y siempre teniendo en cuenta que estos datos son los proporcionados<sup>236</sup> por el Servicio de Archivo del Parlamento Andaluz, observamos en primer lugar, que durante la VII y VIII legislatura, 12 de la 15 de las Consejerías<sup>237</sup> (el 80%), han elaborado por lo menos un Informe de Evaluación de Impacto de Género según los establecido en el artículo 139 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre.

Las Consejerías de Gobernación, de Economía y Hacienda, de Salud, de Agricultura y Pesca y la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, han presentado Informes durante las dos legislaturas (VII y VIII), siendo además estas Consejerías, a excepción de la Consejería de Agricultura y Pesca, las que mayor número en total de Informes han presentado durante las dos legislaturas. El 85% de estos Informes además vienen firmados por mujeres con cargos relevantes, en su mayoría Directoras Generales.

Así pues, aunque en otras en muchas esferas de la vida pública sigue existiendo “ese techo de cristal” que nos impide a las mujeres acceder a cargos de relevancia política; podemos observar a través de los datos obtenidos, como poco a poco y sobre todo en Andalucía, las mujeres vamos cada vez más conquistando espacios públicos de decisión, debilitando cada vez más el patriarcado existente, que encuentra en el “techo de cristal” un muro de contención frente a las embestidas democrática-feministas.

*Se denomina así a una superficie superior invisible en la carrera laboral de las mujeres, difícil de traspasar, que les impide seguir avanzando. Su carácter de invisibilidad está dado por el hecho de que no existen leyes ni dispositivos sociales establecidos ni códigos visibles que impongan a las mujeres semejante limitación, sino que está construido sobre la base de otros rasgos que, por su invisibilidad, son difíciles de detectar (Burín, 2006).*

Del análisis de los IEIG elaborados por las distintas Consejería, constatamos que con respecto a su estructura todos responden a algunas o varias de las pautas establecidas en la “Guía para la Evaluación del Impacto de Género en Función del Género”, de la Comisión

---

<sup>236</sup> No podemos dejar de tener en cuenta, que en ningún momento afirmamos que solo se hayan elaborado los IEIG que se encuentran en el Servicio de Archivo del Parlamento Andaluz. Nuestra muestra está basada en el material habido en dicho servicio y es sobre este, sobre el que analizamos y extraemos nuestras conclusiones, sin que podamos así pues, aventurarnos a afirmar o a negar la existencia de otra documentación que no sea la habida en el citado servicio.

<sup>237</sup> Utilizamos el número de 15 Consejerías, es decir las existentes antes de la remodelación de marzo de 2011, siendo estas las siguientes: Consejería de la Presidencia, Consejería de Gobernación, Consejería de Economía y Hacienda, Consejería de Educación, Consejería de Justicia y Administración Pública, Consejería de Innovación, Ciencia y Empres, Consejería de Obras Públicas y Transportes, Consejería de Empleo, Consejería de Salud, Consejería de Agricultura y Pesca, Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Consejería de Cultura y la Consejería de Medio Ambiente.

Europea, que ya en su momento analizamos exhaustivamente y que ahora nos limitaremos a apuntar:

1. Pertinencia con respecto al género.
2. Evaluación del Impacto en función del género.
  - a. Diferencias existente entre hombres y mujeres en el ámbito de aplicación de la disposición normativa de que se trate:
    - i. Participación.
    - ii. Recursos.
    - iii. Normas y Valores.
    - iv. Derechos.
  - b. ¿Cómo pueden las políticas europeas contribuir a eliminar las desigualdades de mujeres y hombre y promover su igualdad?

Así el hecho de que todos los IEIG elaborados en la Comunidad Andaluza hayan seguido estructuralmente estas pautas arroja a la luz varias cuestiones que consideramos muy relevantes, tales como que se pueda afirmar que todas las Consejerías del Parlamento Andaluz a la hora de elaborar sus IEIG están utilizando la “Guía para la Evaluación del Impacto de Género en Función del Género”, de la Comisión Europea.

Esta pauta de elaboración provoca que la estructura de los IEIG sea doblemente homogénea. Observamos en primer lugar que los IEIG elaborados por una misma Consejería mantienen una estructura homogénea, y en segundo lugar esta homogeneidad estructural se encuentra también entre los IEIG elaborados por otras Consejerías. En resumen, los IEIG elaborados por una misma Consejería son homogéneos entre sí, a la par que lo son con respecto a los elaborados por otras Consejerías.

Es necesario señalar en este punto que habiendo analizados los Informes de Observación de los Informes de Evaluación de Impacto de Género IOIEIG elaborados por el IAM, estos informes de observación también se estructuran en función a las pautas marcadas por la “Guía para la Evaluación del Impacto de Género en Función del Género”, de la Comisión y evidentemente todos los IOIEIG presentan la misma estructura.

El hecho de que los IOIEIG, coincidan estructuralmente con los IEIG nos va a permitir que se faciliten el análisis cualitativo de estos sobre todo a la hora de anotar cuantas de las recomendaciones recogidas en uno u otro informe han sido tenidas en cuenta a la vez que nos

puede permitir a comparar resultados entre diferentes ámbitos administrativos (autonómico y estatal).

Concluiremos este análisis cuantitativo señalando que el promedio de páginas que contienen los informes elaborados durante la VII legislatura varía entre una página y cuatro, sin que podamos establecer una pauta concreta relativa a este aspecto. Sin embargo, observamos una constante en un gran número de informes elaborados durante la VIII legislatura, pudiendo señalar así que el promedio de páginas que contienen los informes es de dos, y responden en su mayoría a una estructura organizada en torno a una división en tres partes: introducción, contenido y conclusión.

No obstante, y como veremos más adelante en el análisis cualitativo, estos Informes responden más a una exposición de buenas intenciones que se quieren lograr a través del Proyecto Ley que acompañan, más que responder a un análisis previo de la norma con el objetivo de detección de posibles medidas sexista que aunque no previstas se hayan integrado en el texto.

#### 4.5 La aplicación de lo dispuesto en los Informes de Evaluación del Impacto de Género en los textos legales definitivos. Análisis de su efectividad como instrumento para la eliminación de la brecha de género.

Una vez concluidos los análisis cuantitativos de los Informes de Evaluación de Impacto de Género, es hora ya de comprobar la verdadera eficacia de estos, en el sentido de poder conocer si los textos legales definitivos<sup>238</sup>, han tenido en cuenta las apreciaciones que se hayan podido realizar en los Informes de Evaluación de Impacto de Género.

Todo ello sin perder de vista, que si bien la obligación de elaborar los citados informes viene dictaminada por todo un compendio de leyes de carácter tanto autonómico, como estatal (que a lo largo de este trabajo de investigación hemos venido analizando); no existió, en todo el panorama legislativo andaluz durante la VII Y VIII legislatura, la obligación, ni normativa vinculante que exigiese que se tuvieran en cuenta las posibles apreciaciones que se hubieran podido recoger ni en los Informes de Evaluación de Impacto de Género elaborados por las Consejerías, ni tampoco las apreciaciones sobre estos, que

---

<sup>238</sup> Para nuestra investigación conceptualizaremos: “textos legales definitivos” como aquellas leyes aprobadas, promulgadas y publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

hubiesen podido hacer el Instituto de la Mujer Andalúz en sus Informes de Observación a los Informes de Evaluación de Impacto de Género elaborados por las citadas Consejerías.

Dado que Andalucía cuenta con un sistema de doble filtro, es decir que lleva a cabo un régimen de acompañamiento de doble informe al Proyecto de Ley en su tramitación parlamentaria, observaremos si los textos legales definitivos, han tenido en cuenta lo dispuesto en cualquiera de los dos informes; ya que estos son complementarios y persiguen un mismo fin: evitar la redacción de normativas que pudieran resultar sexista en su redacción aunque esto no estuviese previsto ni fuera deseado.

Llevaremos a cabo esta comprobación realizando en primer lugar un análisis cualitativo de los citados informes, para más adelante comprobar si eventualmente las medidas que en ellos se hayan podido recoger han sido tomadas en cuenta en la redacción definitiva, en la publicada en el Boletín Oficial, o bien han sido omitidas.

#### **4.5.1 Análisis cualitativo de los Informes de Evaluación del Impacto de Género. La información adicional que aporta a estos el Instituto de la Mujer Andalúz.**

Analizados los 11 IEGI elaborados por las distintas Consejerías<sup>239</sup> durante la VII legislatura, lo primero que constatamos es que aunque formalmente los informes entre sí mantienen una estructura parecida, el fondo o contenido de ellos y entre ellos, no guardan apenas similitudes.

Así, mientras que 4 de los IEIG elaborados, en concreto los relativos “Proyectos de Ley por el que se crea la Agencia Tributaria de Andalucía” el “Proyecto de Ley de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía”, el “Proyecto de Ley de protección del origen y la calidad de los vinos de Andalucía” y el “Proyecto de Ley de puertos de Andalucía” establecen que aunque consideran que aunque pertinentes al género<sup>240</sup>, estos Proyectos de Ley, carecen

---

<sup>239</sup> No analizamos los IEIG que se han elaborado para el acompañamiento de los Proyectos de Ley anuales para la aprobación del Presupuesto Público de la Junta de Andalucía.

<sup>240</sup> La Guía para la evaluación del impacto en función del género, de la Unión Europea establece que para la comprobación de la pertinencia con respecto al género en un proceso de integración de la perspectiva de género en el conjunto de las políticas, el primer paso consiste en ver si la dimensión de género es pertinente para la política en cuestión. Para ello es necesario disponer de datos desagregados por sexo, estudiarlos y plantearse las cuestiones apropiadas: a) ¿La propuesta va dirigida a uno o a más grupos objetivo? ¿Afectará a la vida diaria de una o de varias partes de la población?; b) ¿Existen en este ámbito diferencias entre las mujeres y los hombres (por lo que se refiere a los derechos, los recursos, la participación, las normas y los valores vinculados a la pertenencia a un sexo)? Si la respuesta a cualquiera de estas dos cuestiones es positiva, la dimensión de género es pertinente. Entonces hay que evaluar el impacto potencial de la propuesta en los hombres y en las mujeres.



de impacto de género; mientras que los 7 IEIG restantes, es decir el 64% de los informes, también pertinentes al género, sí que reconocen que el Proyecto de Ley al que acompañan si tiene impacto sobre la población en función del género de esta.

Los IEIG que se elaboran en durante la VII legislatura son informes razonados, que como ya señalásemos anteriormente responde en su mayoría a alguna de las pautas que establece la “Guía para la Evaluación del Impacto en Función del Género, de la Unión Europea”.

Ha de resaltarse que en todos y cada uno de los informes se recoge el compromiso de aplicar las medidas necesarias para evitar las desigualdades entre mujeres y hombres, de hecho puede observarse como en el mayor número de informes se explicita el haber hecho especial hincapié para evitar un lenguaje sexista, a la vez que establecen en el mismo informe una relación de normativas relativas a la igualdad de género que supuestamente las Consejerías están obligadas a contemplar.

Vemos también como durante la VIII legislatura se han analizado los 8 IEIG que han sido elaborados por las distintas Consejerías. Al igual que pasaba en la legislatura anterior constatamos que aunque formalmente los informes entre si mantienen una estructura parecida, el fondo o contenido de ellos y entre ellos no guardan apenas similitudes.

Sin embargo, ahí terminan todos los puntos en común que pudieran tener los IEIG elaborados durante cada una de las dos legislaturas. Así, mientras que en la VII legislatura solo el 36% de los informes elaborados establecían que aunque pertinentes al género, estos Proyectos de Ley, carecían de impacto en función del género.

En la VIII legislatura la pirámide se invierte y el 62% de los informes elaborados establecen que aunque pertinentes al género, no provocaran impacto alguno en función del género, sobre la población beneficiaria directa o indirectamente.

Desgraciadamente los IEIG que se elaboran en durante la VIII legislatura ya no son informes tan razonados como los fueron en la legislatura anterior, aunque siguen respondiendo a alguna de las pautas que establece la “Guía para la Evaluación del Impacto en Función del Género, de la Unión Europea”.

Durante la VIII legislatura, los informes siguen recogiendo el compromiso de aplicar las medidas necesarias para evitar las desigualdades entre mujeres y hombres, y aunque en los informes se explicita de nuevo el haber hecho especial hincapié para evitar un lenguaje sexista

en la normativa, observamos como la propia redacción de los informes es más descuidada e incluso en alguna ocasión sexista:

*En la mencionada Ley se contempla la compleja realidad que presenta hoy la dinámica familiar, (uniones de hecho, familias monoparentales, familias que provienen de rupturas previas con hijos por una o ambas partes, hermanos con un solo progenitor, hijos adoptados o acogidos...), y conlleva por tanto ampliar la atención que se presta a los menores, sea cual sea la realidad familiar de la que provienen.*<sup>241</sup>

Así, a través de la lectura crítica de los citados informes, puede observarse cómo aún no todos los conceptos y herramientas necesarias para evaluar el impacto en función del género de una norma no se están utilizando o se están utilizando erróneamente, y esto resulta evidente cuando observamos que más de la mitad de los informes analizados en la VIII legislatura, establecen que el Proyecto de Ley al que acompañan, no provocará ningún tipo de impacto en función del género de la población destinataria, sin que para ello se haya llevado a cabo una comparación y apreciación en función de criterios pertinentes con respecto al género; sin que se haya tenido en cuenta la situación y la tendencia actual de unas y otros con la evolución que cabría esperar como resultado de la introducción de la política propuesta.

En definitiva, estos informes señalan que la política propuesta no provocará ningún tipo de impacto en función del género de la población destinataria, sin que para ello se haya llevado a cabo una evaluación del impacto en función del género, objetivo que se debía perseguir en la elaboración de estos informes.

A la luz de lo anterior, nos preguntamos si el hecho de que los IEIG que se elaboraron en la VII legislatura estén mejor realizados que los que se llevaron a cabo durante la VIII legislatura, (cuando la lógica de la experiencia nos indica que el camino debería haber sido el inverso), no responderá a una mala sistematización en la elaboración de los Informes de Evaluación de Impacto de Género, de manera que la elaboración dichos informes se haya convertido en algo automático, formato “cortar y pegar” perdiendo así toda razón de ser. Carece de sentido afirmar que tal normativa no tendrá impacto alguno en función del género de la población beneficiaria si previamente no se ha realizado la evaluación previa del impacto en función del género.

---

<sup>241</sup> Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Dirección General de Infancia y Familia. “Informe de Evaluación del Enfoque de los Derechos de la Infancia del Proyecto de Ley de Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma Andaluza”. Sevilla. marzo 2007. (El documento puede consultarse en los anexos, el subrayado es nuestro).

No obstante y pese a los malos augurios que arrojaban los análisis de los IEIG de la VIII legislatura, no podemos perder de vista que Andalucía cuenta con la ventaja del sistema de doble informe impuesto por el entonces en vigor, Decreto 93/2004 de 9 de marzo, que como veíamos establece un sistema de doble filtro a través del cual el IAM realiza un estudio cualitativo de cada uno de los IEIG que plasma en sus Informes de Observaciones, donde quedan corregidas todas las deficiencias que en este se encontraron.

Seguidamente señalaremos las principales características de los Informes de Observaciones que emite el IAM, para posteriormente y apoyándonos en estos Informes poder comprobar en qué medida las observaciones que se han recogido en estos informes se han incorporado en los textos legales definitivos.

El Servicio de Archivo del Parlamento Andaluz nos ha facilitado un total de 12 IOEIG elaborados en la VII legislatura. Teniendo en cuenta que para el análisis de esta legislatura solo contábamos con 10 IEIG, se hace necesario explicar estas cifras.

Los 2 IEIG relativos al “Proyecto de Ley de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género” y al “Proyecto de Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía” no fueron elaborados por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social sino que fueron elaborados directamente por el IAM, de ahí que no presente doble informe. Tampoco presentan doble informe los Proyectos de Ley relativos a los Presupuestos anuales de la comunidad autónoma, solo presentan el informe de la Consejería de Economía y Hacienda.

De igual manera tenemos en nuestro haber los IOEIG relativos al “Proyecto de Ley Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento” y al “Proyecto de Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía” pero como ya indicamos en su momento no hemos podido acceder a los IEIG que generan estos informes de observaciones, no obstante nos permite en el ámbito cuantitativo afirmar su existencia.

Con respecto a los IOEIG elaborados en la VIII legislatura señalaremos que tampoco presentan doble informe los Proyectos de Ley relativos a los Presupuestos anuales de la comunidad autónoma, solo presentan el informe de la Consejería de Economía y Hacienda, tal y como pasara en la legislatura anterior.

También contamos con los IOEIG relativos al “Proyecto de Ley del Olivar de Andalucía” y al “Proyecto de Ley para la Dehesa” pero como tampoco hemos podido acceder a los IEIG que los generan, no obstante nos permite como pasaba en la anterior legislatura

este hecho nos permite afirmar la existencia de estos IEIG, dato a tener en cuenta sobre todo en el ámbito del análisis cuantitativo.

Hemos lamentado mucho no haber encontrado el IOIEIG elaborado por el IAM, relativo al “Proyecto de Ley de Derechos y Garantías de la dignidad de la persona en el proceso de muerte”, ya que el IEIG que poseemos y que está elaborado por la Consejería de Salud es como mínimo altamente deficiente, apenas 30 líneas en la que la única alusión (sexista) que hace a la igualdad de género es la siguiente:

*El derecho de los ciudadanos, al que se hace referencia a lo largo del texto, se hace como no puede ser de otra forma, sin distinción de edad, sexo, raza o condiciones económicas o sociales. Es más, sanciona como infracción muy grave “aquellas actuaciones que supongan discriminación de las personas en proceso de muerte, por razones ideológicas, morales, de raza, género, religión o circunstancias económicas, personales, sociales o de cualquier otra naturaleza, o por la condición en virtud de la cual éstas acceden a los servicios de las instituciones o centros sanitarios” (art 32 del Anteproyecto)<sup>242</sup>.*

Como ya señalamos, vemos como la calidad del IEIG elaborado en la VIII legislatura deja mucho que desear y en concreto este informe es un claro ejemplo de cómo el IAM lo hubiese podido corregir y complementar gracias al sistema de doble informe.

Todos los Informes de Observación al Informe de Evaluación de Impacto de Género, elaborados por el Instituto Andaluz de la Mujer mantienen la misma estructura<sup>243</sup>, a través de la cual estudia evalúa el posible impacto de género que puede con llevar la normativa objeto del análisis. Así vemos como para se lleva a cabo esta evaluación:

- Se analiza la pertinencia al género del Proyecto de Ley que se trate<sup>244</sup>.

---

<sup>242</sup> Consejería de Salud. Dirección General de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento. “Informe de Evaluación de Impacto de Género. Anteproyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la persona en el proceso de la muerte”. Sevilla, julio 2008. (El documento puede consultarse en los anexos, el subrayado es nuestro).

<sup>243</sup> Siempre siguiendo la Guía para la evaluación del impacto en función del género, de la Unión Europea.

<sup>244</sup> Como ejemplo vemos como mientras que el “Proyectos de Ley de la Administración de la Junta de Andalucía” el “Proyecto de Ley de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía” el “Proyecto de Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía” y el “Proyecto de Ley de protección del origen y la calidad de los vinos de Andalucía” establecen que la dimensión de género en estos proyectos no es pertinente, el IAM consideraba la pertinencia de género de los mismos: “No compartimos la conclusión a la que llega se llega en el informe presentado [...] ya que tal y como está redactado puede tener un Impacto negativo en la igualdad, al estar regulando el control de un recurso económico (tal como se dice claramente en la exposición de motivos “soporte fundamental para la economía”) ante el que mujeres y hombres tienen posiciones desiguales, la no introducción de medidas compensatorias implicará una perpetuación o un agravamiento de esas desigualdades”.

- Se recogen y corrigen los datos desagregados por sexos<sup>245</sup>, a fin de describir las diferencias existentes entre hombres y mujeres en el ámbito de actuación que pretenda regular la disposición.
- Se comprueba (y en su caso se corrige) si el Proyecto de Ley tiene en cuenta de forma efectiva el objetivo de igualdad por razón de género, en virtud de lo dispuesto en el art. 139, de la Ley 18/2003 de 29 de diciembre y de los arts. 5 y 6 de la Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
  - Utilizaremos principalmente lo dispuesto en este punto (ya que es en él donde se corrige efectivamente el Proyecto de Ley, es decir donde se proponen las mejoras) para comprobar en el epígrafe siguiente si efectivamente las medidas que en este informe se recogen han sido o no tenidas en cuenta a la hora de la redacción final de los textos legislativos definitivos.
- Se comprueba (y en su caso se señala) si el Proyecto de Ley ha tenido en cuenta de forma efectiva la composición paritaria de los órganos consultivos de asesoramiento de la Administración de la Junta de Andalucía, en virtud de lo dispuesto en el art. 140 de la Ley 18/2003 de 29 de diciembre; y del art. 11 de la Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
- Se comprueba (y en su caso se señala) si el Proyecto de Ley ha evitado de forma efectiva por un lado, el lenguaje sexista en los textos y documentos administrativos, según lo dispuesto en los art. 4.10 y 9 de la Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, y de la Instrucción de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de Viceconsejeros, para evitar un uso sexista del lenguaje en las disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía. Por otro lado y eventualmente se comprueba (y también en este caso se señala) si el Proyecto de Ley ha evitado de forma efectiva el empleo de imágenes sexistas en las acciones de información y divulgación institucional, en virtud de lo dispuesto en los arts. 4.10 y 57 de la Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
- Finalmente se establecen las conclusiones, las recomendaciones y eventuales felicitaciones, además de recogerse en un anexo conjunto todo el compendio legislativo que se ha utilizado en dicho informe.

---

<sup>245</sup> En virtud de lo dispuesto en el art.6 de la Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

De esta manera podemos afirmar que IAM realiza a través de sus IOIEG propuestas que contribuyen a la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. Éstas van más allá de la mera señalización y denotan que se trata de propuestas razonadas y analizadas, ajustadas al texto normativo al que debieran ir aplicadas. Se desprende de los IOIEIG la cualificación del personal encargado de su elaboración, su formación en género y su compromiso profesional en la eliminación de las brechas de desigualdad existentes entre mujeres y hombres.

No podemos dejar de señalar de igual manera el buen trabajo llevado a cabo por determinadas Consejerías durante la VII legislatura en la elaboración de alguno de sus IEIG. El IAM de igual manera en sus IOEIEIG no desperdicia la oportunidad de dejar por escrito las felicitaciones que reciben la Consejería de Salud, por su IEIG sobre el “Anteproyecto de Ley reguladora de los análisis genéticos y bancos de ADN”, la Consejería de Educación sobre el “Anteproyecto de Ley de educación en Andalucía” y la Consejería de Presidencia en relación al Proyecto de Ley de designación de senadores y senadoras en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía”<sup>246</sup>.

#### 4.6 Análisis y comprobación de la incorporación o no, de las medidas que establecen los IEIG e IOIEIG en los textos legales definitivos: La disfuncionalidad metodológica en la elaboración de los IEIG

Cuando comenzamos el diseño de la presente investigación, pensamos que en este apartado finalmente podríamos responder a la cuestión de cuantas y cuáles de las medidas que se habían señalado en los distintos Informes de Evaluación de Impacto de Género y sobre todo, en sus correlativos Informes de Observación a los citados Informes de Evaluación de Impacto de Género, habían sido finalmente recogidas en los textos legales definitivos, en las leyes publicadas en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

No obstante y a medida que hemos ido avanzando en nuestra investigación, hemos podido comprobar que los planes previsto para el presente apartado se han visto modificados ya que en él, lejos de mostrar, como se preveía al inicio, las medidas de los IEIG e IOIEIG que habían sido finalmente recogidas en los textos legales definitivos, lo que nuestros análisis van a poner de manifiesto es lo disfuncional que resulta elaborar de manera aislada un Informe de Evaluación del Impacto de Proyecto de Ley determinado, si esta elaboración no tiene un seguimiento especializado, es decir, una continuidad del sistema de elaboración de

---

<sup>246</sup> Todos estos informes se encuentran disponibles en los anexos al presente trabajo de investigación.

IEIG e IOIEIG en los diferentes momentos del *iter* legislativo seguido en esta ocasión por el Parlamento Andaluz.

Como ya señaláramos, para el análisis y comprobación de la incorporación o no, de las medidas que establecen los IEIG e IOIEIG en los textos legales definitivos, hemos utilizado los Informes de Observación que realiza el IAM a los Informes de Evaluación de Impacto de Género elaborados por las distintas Consejerías.

El objetivo en este punto era ante un Proyecto de Ley determinado confrontar por un lado el IOIEIG elaborado por el IAM y por otro lado la Ley a la que había dado lugar dicho Proyecto de Ley, con la finalidad de poder comprobar si efectivamente se había tenido en cuenta en la normativa lo dictaminado por un órgano especializado en materia de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, como lo es el Instituto Andaluz de la Mujer. Véase la siguiente tabla para la que hemos tomado como ejemplo una de las recomendaciones hechas por el Instituto de la Mujer al texto del Anteproyecto de Ley de Farmacia de Andalucía y la propia Ley ya publicada.

Informe de Observación al Informes de Evaluación del Impacto de Género al Anteproyecto de “Ley de Farmacia de Andalucía” elaborado por el Instituto Andaluz de la Mujer <sup>247</sup> .	Normativa publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía <sup>248</sup> .
<b>Artículo1.- Objetivos y ámbitos de aplicación.</b> <b>Punto nº 1. Se sugiere añadir a este punto:</b>  <i>“..., así como en el que se ofrece la normativa existente en materia de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres”</i>	<b>Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.</b>  “En el marco de la ordenación y atención farmacéuticas, la presente Ley tiene por objeto la regulación de los servicios y establecimientos farmacéuticos, así como los derechos y obligaciones que se derivan de la atención farmacéutica en el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.”

Cuadro de elaboración propia.

<sup>247</sup> Este Informe se encuentran disponible en los anexos al presente trabajo de investigación.

<sup>248</sup> Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía. BOJA núm. 254, de 28 de diciembre 2007.

Tomando el ejemplo expuesto, y sin querer hacer una lectura más amplia de los mismo para no desviar nuestra atención; podría afirmarse que la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía, no ha recogido la recomendación hecha por el IAM para su artículo primero; sin embargo esta afirmación pese a la comparación y resultado evidente, no debe terminar ahí.

A medida que hemos ido avanzando en el análisis comparativo entre el IOIEIG y la normativa vigente, hemos venido observando que tal y como está diseñado el sistema de elaboración actual de los Informes de Evaluación de Impacto de Género y sus correlativos IOIEIG es imposible afirmar o negar de manera rigurosa, fehaciente y categórica que se han tomado, o no, en cuenta las medidas establecidas por el IAM.

La imposibilidad de negar o afirmar este extremo viene determinada por el momento legislativo en el que se elaboran ambos informes; y es que tal y como señalan las leyes que rigen la elaboración de los citados informes, en ellas señalan que los informes tienen carácter de documentación anexa que ha de acompañar al Proyecto de Ley que corresponda, de esta manera se elabora en un momento concreto del *iter* legislativo, pero dicho trabajo no tiene continuación posterior. De tal suerte que la acción de elaborar un Informe de Evaluación de Impacto de Género por una Consejería determinada para un Proyecto de Ley y su correlativo IOIEIG, es una acción finita que termina en el momento mismo de su elaboración. Así una vez realizados, estos no sufren modificaciones algunas a lo largo del *iter* legislativo que sigue el Proyecto de Ley al que acompañan.

Así, hemos podido observar que si el Proyecto de Ley al que acompañan sufre modificaciones en virtud de las enmiendas que los diferentes grupos políticos parlamentarios le presenten, no ocurre lo mismo con los citados informes que no son ni revisados ni actualizados con respecto al nuevo texto normativo que se va a ir configurando a través del ejercicio democrático que es el *iter* legislativo que sigue cada Proyecto de Ley, hasta que se transforma en texto legal definitivo, es decir en Ley.

Este fenómeno de “estancamiento” de los IEIG y sus correlativos IOIEIG plantea numerosas consecuencias negativas y evidentes problemas, siendo el principal de entre ellos el anacronismo que presentan los Informes de Evaluación de Impacto de Género y sus correlativos IOIEIG con respecto al Proyecto de Ley que acompañan.

De esta manera y siguiendo con el ejemplo anterior de la Ley de Farmacia de Andalucía, podemos ver como varias de las propuestas que hace el IAM al articulado del



Anteproyecto de Ley quedan en “nada” al desaparecer en la Ley el texto donde debían ir insertas:

<b>Articulado</b>	<b>Anteproyecto de “Ley de Farmacia de Andalucía” y anotación del IOIEG al IEIG del elaborado por el Instituto Andaluz de la Mujer</b>	<b>Normativa publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía.</b>
<b><u>Artículo núm. 3</u></b>	<b><u>Competencias:</u></b> Se sugiere completar el párrafo de la siguiente forma: <i>... y garantizando el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres</i>	<b><u>Ámbitos de atención farmacéutica.</u></b>  No existe en toda la Ley texto correlativo
<b><u>Artículo núm. 4</u></b>	<b><u>De los ámbitos de atención farmacéutica.</u></b> Se sugiere completar el último párrafo de la siguiente forma: <i>...adaptada a las necesidades de las mujeres y hombres que los utilizan</i>	<b><u>Límites de la dispensación.</u></b>  No existe en toda la Ley texto correlativo

Cuadro de elaboración propia.

Es cierto, que en la mayoría de los casos, los textos legales definitivos resultantes de las diversas modificaciones que sufren a partir de las enmiendas presentadas por los diferentes grupos políticos parlamentarios, no son completamente opuestos a los textos iniciales presentados; pero la evaluación del impacto de género que puede tener una normativa determinada no es un análisis que pueda hacerse por aproximación, sería muy poco riguroso afirmar que dado que la Ley se parece bastante al Proyecto de Ley del que proviene, esta puede producir o no, un efecto diferente en mujeres y hombres porque ya se analizó el Proyecto Ley.

Sobre todo si tenemos en cuenta que los informes realizados por el IAM, que son informes llevados a cabos por personas expertas en este ámbito, son informes que analizan el

contenido concreto del Proyecto de Ley, como se puede observar en estos informes y en los ejemplos expuestos las correcciones y/o modificaciones que este organismo propone tienen un carácter conciso y concreto, corrigiendo las posibles medidas sexistas que pudiesen existir en el Proyecto Ley, y esta corrección, codificación se hace frase por frase, con lo que la eliminación de un determinado artículo o párrafo en virtud de una enmienda, invalida el análisis de impacto de género que se ha hecho.

El anacronismo de los IEIG y sus correlativos IOIG con respecto a la evolución que sufren los Proyectos de Ley hasta que llegan a convertirse en Ley, pone de manifiesto la disfuncionalidad del sistema existente para la elaboración de los IEIG y sus correlativos IOIG. Esta disfuncionalidad hace que lamentablemente los Informes de Evaluación de Impacto de Género no cumplan con el objetivo de ser la herramienta prevista para evitar que normativas, que, en principio, parecen no sexistas, puedan tener un impacto diferente en las mujeres y en los hombres, a pesar de que dicha consecuencia ni estuviera prevista ni se deseara.

#### 4.7 Propuestas para evitar disfuncionalidades metodológicas en la elaboración de los IEIG. Metodología de análisis cualitativo de la incorporación o no, de las medidas que establecen los IEIG e IOIEIG en los textos legales definitivos.

No debemos dejar de recordar que el presente trabajo de investigación tiene sus cimientos en el trabajo de investigación que se realizó para la obtención de la suficiencia investigadora en el año 2007.

Así, puede observarse como ya en 2007, insistíamos en la necesidad de encontrar una metodología que nos permitiera comprobar cuantas y cuáles de las observaciones propuestas, de las correcciones y/o de cualquier tipo de aportación que se hayan hecho a las distintas disposiciones normativas mediante los IEIG.

*Para terminar, no queríamos cerrar este capítulo dedicado al análisis de los Informes de Evolución de Impacto de Género elaborados tanto en los Ministerios como en las Consejerías según lo dispuesto en las leyes (Ley 30/2003 y Ley 18/2003) sin llamar la atención sobre la necesidad urgente del establecimiento de medidas legales que permitan comprobar cuantas y cuáles de las observaciones propuestas, de las correcciones y/o de cualquier tipo de aportación que se hayan hecho a los distintas disposiciones normativas*

*mediante los IEIG elaborados en Ministerios y Consejerías han sido plasmadas en el texto legal definitivo tras su aprobación* (Collantes Sánchez y Sanchis Vidal, 2009: 136).

No obstante y como hemos podido comprobar en el apartado anterior; previo al diseño de una metodología que nos permita comprobar si se han incorporado o no en los textos legales definitivos las medidas recogidas en los IEIG y sus correlativos IOIEIG, lo primero que habría que hacer es establecer un sistema por el cual las medidas recogidas no resulten anacrónicas y disfuncionales al ser posible la modificación o desaparición del texto que las afecta.

Así, a la luz de los datos expuestos, se hace absolutamente necesario que junto a la evaluación *ex-ante*, (o análisis de la situación de partida), que debe llevar a cabo el órgano responsable de la elaboración del IEIG, también y de manera paralela al *iter* legislativo que sigue el proyecto normativo, se lleve a cabo un seguimiento continuo de este y una doble evaluación posterior.

De manera que, una vez que se hayan aprobado todas las enmiendas y posibles reformas del texto del Anteproyecto de Ley a aprobar, nuevamente se someta al texto definitivo pero no publicado, a un análisis del impacto en función del género para la corrección de las novedades introducidas por las modificaciones hechas durante el trámite legislativo.

De ahí la importancia del seguimiento pues si este se lleva a cabo de una manera diligente, a la hora de la última revisión del texto del Anteproyecto de Ley a aprobar, el trabajo estará casi terminado.

De igual manera y una vez terminada la revisión a la que acabamos de hacer alusión, una vez que el texto haya sido aprobado, publicado y lleve en vigor dos años, proponemos una evaluación total que ponga de manifiesto la eficacia y la eficiencia reales de los propios Informes, y que analice las disposiciones normativas no sólo en su formulación sino, y sobre todo, en su aplicación.

Y es que en España poco se ha trabajado, hasta ahora, en la evaluación de la legislación sobre los parámetros de técnica legislativa y su eficacia resolviendo los problemas para los que se había promulgado. Desde la UE recomiendan que todos los Estados miembros establezcan “estrategias para legislar mejor y, en particular, sistemas nacionales de evaluación de impacto que permitiesen determinar las consecuencias económicas, sociales y

medioambientales de una norma” según el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo.

Además de esto debemos señalar que por asombroso que parezca, la legislación en España no es evaluada científicamente de manera *ex post*, y si recordamos aquella consigna de que todo lo que no se evalúa se devalúa; observamos que se hace urgente y necesario un sistema de autoevaluación, un sistema de *feed-back*, que retroalimente al propio proceso de elaboración y aplicación de la norma y de normativas futuras, sin perjuicio de evaluaciones externas.

Como señalábamos al principio de este epígrafe, necesitamos saber si la elaboración de estos Informes ha cumplido con su cometido, saber cómo ha influido la implementación de la disposición normativa que acompaña en la vida de mujeres y hombres, necesitamos un análisis y seguimiento posterior que nos ayude a corregir los errores que hayamos podido cometer.

Si después de haber elaborado un Informe de Evaluación de Impacto de Género, se le priva del carácter vinculante, o si no se recoge en la disposición normativa que se trate las medidas recogidas en el Informe, si no analizamos cómo y de qué manera lo aportado por el Informe a la disposición normativa que se trate ha contribuido a eliminar o no las barreras que dificultan la igualdad de hecho de unas y otros, solo tendremos el trabajo a medio hacer.

# Capítulo 5. Un presupuesto público con enfoque de género: El enfoque de género en los presupuestos públicos orientados a resultados. Estudio de casos: Estado francés y la comunidad autónoma andaluza

---

## 5.1 La introducción de la perspectiva de género en los presupuestos públicos

Desde siempre, las sociedades se han ido construyendo sobre los roles que debían desempeñar y desempeñaban en ellas mujeres y varones. La asignación de los roles sociales a unas y otros ha venido provocando entre otras cosas una división sexual del trabajo, cuya valoración social estructurada de forma jerárquica, generalmente perjudica a las mujeres, ya que se invisibilizan en el peor de los casos y se minusvaloran, en el más habitual de ellos, muchas de las tareas asignadas socialmente a las mujeres.

Estos roles de género atraviesan todas las actividades humanas incluidas las relativas a la definición de las políticas públicas, de esta manera y como si de un sistema de retroalimentación se tratara, las políticas públicas reflejan, a la vez que potencian, un determinado modelo de sociedad, definido a su vez por los roles que cada uno de los sexos desempeña.

Debemos partir de la base de que es a través de los presupuestos públicos desde donde cada sociedad determina cual será la asignación y la ejecución de los recursos de los que dispone. Analizando el presupuesto público se puede conocer cuáles son las prioridades que cada gobierno asigna a las diferentes opciones, y aunque idealmente estas asignaciones deberían coincidir con las necesidades de la población que dirigen y gestionan, esto no siempre es así.

Conseguir la coincidencia entre prioridades políticas y necesidades sociales constituye el reto más importante para las autoridades públicas, ya que son ellas las que se encuentran en

posición de influir en las distintas etapas del proceso presupuestario y por tanto deben procurar que la asignación de los recursos públicos se haga de manera justa y eficiente.

Para ello es indispensable reconocer y que reconozcamos, que en un mundo tan globalizado como en el que vivimos, como población, no constituimos un grupo homogéneo, ninguna población en el mundo constituye un grupo homogéneo de personas, debiendo tenerse en consideración por lo tanto, las diferencias existentes en términos de género, etnia, edad, orientación sexual, religión, etc. La pertenencia a cada una de estas categorías determina un nivel diferenciado de acceso a recursos y, en muchos casos, a los derechos.

Si tomamos como referencia la categoría género, que resulta una categoría que cruza transversalmente a las enumeradas, observamos como las oportunidades de varones y mujeres para acceder a los derechos, a los recursos productivos y para satisfacer sus necesidades básicas, no son, ni han sido las mismas a lo largo de la historia. Las mujeres y los varones en el mundo no tienen los mismos privilegios, ni gozan de los mismos derechos y obligaciones.

Para alcanzar la equidad y mejorar la eficiencia de las políticas públicas, el proceso presupuestario debe tomar en cuenta en cada una de sus etapas estas diferencias<sup>249</sup> entre mujeres y varones.

Si entendemos que el presupuesto público es la máxima expresión de la política económica del gobierno, y que la política económica tiene dos objetivos: crecimiento y distribución (redistribución), vemos tal y como señala Pazos (2008), que de ambos objetivos las mujeres hasta hace bien poco hemos estado excluidas:

*En cuanto al crecimiento económico, las mujeres no se han considerado 'activas' (o lo que es lo mismo, sujetos). Según la visión (y organización) arcaica de la economía, los hombres eran los que se consideraban (a sí mismos) sujetos productivos. Las mujeres, y con ellas toda la esfera reproductiva, doméstica, de cuidados y sumergida, estaban al margen de toda consideración excepto, a veces, como lastre. A la hora de la redistribución, tradicionalmente, las mujeres no han sido sujetos de derechos sociales (ej.: en los sistemas de impuestos y prestaciones con base familiar), y han estado marginadas en el acceso a los recursos públicos. (...) Así que, al igual que los derechos políticos se construyeron en principio ignorando a las mujeres, los derechos económicos también se configuraron pensando solamente en la mitad de la población e ignorando toda la esfera que se suponía 'femenina' y al*

---

<sup>249</sup> Consideramos que si cada una de las categorías anteriormente descritas suponen un diferente acceso a los recursos, un diseño presupuestario ideal justo y equitativo debería tenerlas a todas en cuenta. Por lo inabarcable del tema nos ceñiremos únicamente en este capítulo, a la categoría género como diferenciadora del acceso a los recursos de varones y mujeres.

*margen. Las mujeres y 'sus labores' han constituido todo un paquete que representaba 'lo privado', mientras que los hombres y el trabajo 'productivo' estaban en lo público."*

Dado que los presupuestos públicos están constituidos por una serie de agregados financieros se les ha considerado como un instrumento neutro al género,<sup>250</sup> ya que no hace mención expresa ni a mujeres ni a varones, es más, la mayor parte del gasto público no está orientado de forma específica ni a unas ni a otros. Sin embargo, esto no significa que el impacto de género en el gasto sea neutral, ni tampoco que lo sean los métodos de recaudación. Se tiene la creencia de que no genera diferencias aparentes. Sin embargo, son muchas las autoras y autores que defienden que esta "neutralidad" mejor podría calificarse como "ceguera" al género, ya que normalmente en el presupuesto se ignoran los roles, responsabilidades y necesidades que se les asignan socialmente a mujeres y varones por razón de género, así como los efectos que las políticas tienen sobre unos y otras, tal como señala Elson (2002: 29):

*Los presupuestos públicos generalmente infravaloran la contribución de las mujeres a la macroeconomía, ya que descuentan la economía no remunerada, en la que las mujeres realizan la mayor parte del trabajo de cuidados y mantenimiento de la fuerza de trabajo, y obvian el efecto que la distribución del trabajo, los recursos y activos tienen en la producción total, el nivel de ahorros, de inversión, etc. en función de las relaciones de género.*

Por todo ello, el presupuesto público es el elemento más adecuado para aplicar la transversalidad de género, debido a que se trata del elemento central de todas las políticas públicas, lo que favorece la incardinación de los objetivos de igualdad en las acciones del proceso presupuestario.

Es el elemento común a todas las unidades organizativas de la administración, lo que favorece el cambio cultural necesario para que la dimensión de género se integre en todas las fases y a todos los niveles de la labor de la administración y además tiene una importante capacidad de negociación y arbitraje en la discusión presupuestaria.

---

<sup>250</sup> Debemos insistir en la necesidad de terminar con el binarismo sexo/género, para iniciar la apertura de la categoría de sujetos jurídicos a las nuevas realidades sociales. La referencia "instrumento neutro al género" usada en el texto, hace alusión a la catalogación del género como binario, masculino y femenino, por tanto la neutralidad a la que se refiere no abarca más realidades sociales que las designadas por el sexo.

La integración de la perspectiva de género en el proceso de planificación, gestión y evaluación de las políticas públicas, es fundamental, y sólo así podremos medir de qué manera las actuaciones puestas en marcha por las instituciones influyen en las oportunidades y necesidades de varones y mujeres.

La integración de la perspectiva de género, una estrategia que se impulsó especialmente a partir de la Conferencia de las Mujeres de Naciones Unidas, celebrada en Pekín en 1995, es a partir de ese momento cuando se ha instado a los gobiernos a desarrollar una estrategia dual para avanzar de manera más eficiente en igualdad de género a través de las actuaciones públicas. Estrategia que consiste, en primer lugar, en el mantenimiento y fortalecimiento de las políticas específicas dirigidas a las mujeres; y en segundo lugar, en la aplicación de la transversalidad de género en todas las actuaciones.

La integración de la perspectiva de género en los presupuestos públicos no consiste en la asignación de recursos a programas específicamente dirigidos a las mujeres, los cuales frecuentemente suponen una mínima fracción en los presupuestos públicos. La incorporación del enfoque de género en las políticas públicas apunta a "hacer que las preocupaciones y las experiencias de las mujeres y los varones sean un elemento central de la elaboración, puesta en práctica, supervisión y evaluación de políticas y programas, con el fin de que ambos grupos se beneficien y se impida que la desigualdad se reproduzca."<sup>251</sup>

En resumen los presupuestos públicos con enfoque de género:

- No son presupuestos separados para las mujeres o para los hombres.
- Parten de la idea de que el presupuesto no es "neutro" con respecto al género, sino a que afecta de manera diferenciada a unas y otros.
- Promueven el compromiso activo y la participación de los grupos de mujeres.
- Hacen seguimiento y evalúan el gasto y el ingreso público desde un enfoque de género.
- Promueven el uso más efectivo de los recursos para lograr tanto la igualdad de género como el desarrollo humano.
- Enfatizan la re-elaboración de prioridades en lugar del incremento del gasto público en general.

---

<sup>251</sup> *Guía Conceptual 2004 para elaborar presupuestos institucionales con perspectiva de género.* Instituto Nacional de las Mujeres, México 2003, p.10.



- Destacan la re-orientación de los programas dentro de sectores, en lugar de cambios de las cantidades asignadas a sectores específicos.
- Suponen el análisis del impacto del presupuesto en mujeres y hombres y la reformulación de las políticas presupuestarias y redistribución de los recursos para conseguir los objetivos de igualdad de género.
- No constituyen un aumento de presupuesto.
- Exigen la puesta en marcha de un cambio cultural en las administraciones a través de acciones de formación y sensibilización, orientado a integrar la dimensión de género en las rutinas y procedimientos.

## 5.2 El enfoque a resultados en el presupuesto público como marco ideal para la introducción de la dimensión de género en los presupuestos públicos

Si hacemos un breve recorrido por las experiencias internacionales en el ámbito de la aplicación de la perspectiva de género a los presupuestos públicos, descubrimos, tal y como recogen De Villota, Jubeto y Ferrari (2009: 173), que la primera iniciativa de “Presupuestos con enfoque de Género”, entonces denominada “Presupuestos de Mujeres”, comenzó a fraguarse en la primera mitad de la década de los ochenta en Australia. En esta iniciativa pionera, el Gobierno Federal, impulsado por las feministas que lo integraban, puso en marcha un proceso de análisis de las propuestas presupuestarias de cada departamento gubernamental a nivel interno.

Este proceso también se llevaría a cabo en Reino Unido a partir de 1989 con la constitución del *Women's Budget Group* (grupo independiente del Gobierno que como su nombre indica está implicado en el desarrollo de los presupuestos de las mujeres). Conscientes desde el principio de la ligazón existente entre la economía reproductiva y de cuidados y las políticas públicas, se intenta analizar los efectos de éstas sobre la división sexual del trabajo, del tiempo y de los recursos y activos entre mujeres y varones, teniendo como marco la percepción integral de la actividad económica que reivindica la economía feminista.

En el caso de Canadá el organismo dinamizador de la introducción de la perspectiva de género en el presupuesto fue la sociedad civil y organizaciones<sup>252</sup> impulsoras de una

---

<sup>252</sup> Estas organizaciones defienden la viabilidad de una política pública favorable a la mayoría social, que preste especial atención a la población más vulnerable, y que haga hincapié en las necesidades no cubiertas de las mujeres. Para divulgar la

política económica alternativa al modelo neoliberal seguido por el gobierno federal en la década de los años 90.

Relevantes por su impacto y repercusión social, destaca también la experiencia sudafricana, cuyos inicios se sitúan en 1994 en un principio desde la sociedad civil y posteriormente desde el gobierno<sup>253</sup>.

En África también es destacable el esfuerzo realizado por los organismos mencionados, así como por ONG locales en el trabajo inicial de capacitación del personal en esta materia que ha sido desarrollada principalmente en el ámbito estatal.<sup>254</sup>

Otros organismos internacionales entre los que destacan UNWOMEN<sup>255</sup>, PNUD<sup>256</sup> y algunas organizaciones de cooperación al desarrollo están impulsando estas experiencias en diversas regiones del mundo, ofreciendo principalmente soporte formativo y asistencia técnica.

Así, en El Salvador, México y algunos países andinos<sup>257</sup> como Chile, Perú, y Bolivia, entre otros Estados, se están impulsando estos procesos, que ya están dando algunos resultados y prometen, si tienen continuidad en el tiempo, avanzar en el conocimiento de las causas de las discriminaciones que sufren las mujeres y en el impulso de una utilización más idónea de los recursos públicos para paliarlas.

---

existencia de alternativas posibles a las prioridades gubernamentales estas organizaciones han elaborado a partir de 1993 una propuesta presupuestaria anual alternativa cuyo objeto es impulsar una política macroeconómica saneada sin el coste social que tiene la actual. A destacar entre estas organizaciones: Centro Canadiense de Alternativas Políticas y CHO!CE. Una Coalición por la Justicia Social (*Canadian Center for Policy Alternatives and CHO!CES. A Coalition for Social Justice*). Web: [http://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/Nova\\_Scotia\\_Pubs/ns\\_altbudget2002.pdf](http://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/Nova_Scotia_Pubs/ns_altbudget2002.pdf) (Consultado en última ocasión en enero 2012).

<sup>253</sup> Como se señala en el documento preparado para la Octava Conferencia Regional Sobre la Mujer de América Latina y el Caribe – Beijing + 5 Lima, 8-10 de Febrero del 2000 elaborado por UNIFEM: “Iniciativas de Presupuestos para América Latina y el Caribe con Enfoque de Género: Una Herramienta Para Mejorar la Fiscalización y Lograr la Implementación Efectiva de Políticas” En 1997, el Secretariado de la Commonwealth, apoyó a los gobiernos de Sri Lanka, Barbados, St. Kitts and Nevis, Sudáfrica y Fiji en una iniciativa piloto de presupuestos de género. Web: <http://www.unifemweb.org.mx/documents/cendoc/presupuestos/PSG04.pdf> (Consultado en última ocasión en enero 2012).

<sup>254</sup> Es destacable el Programa de Red de Género en Tanzania (*Tanzania Gender Networking Program*) Una ONG que trata de lograr el empoderamiento y la igualdad de las mujeres en todas las facetas de sociedad. En 1997 lanzaron la iniciativa de presupuesto de género (GBI) con otras 20 ONG. Web: [www.tanzaniagateway.org](http://www.tanzaniagateway.org) (Consultado en última ocasión en enero 2012).

<sup>255</sup> UNWOMEN (ONU MUJERES) Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. Antigua UNIFEM, esta fue disuelta e incorporada junto a INSTRAW, DAG y OSAGUI a UNWOMEN en su creación el 01 de enero de 2011. Web: <http://www.unwomen.org/es/> (consultada en última ocasión en enero 2012).

<sup>256</sup> PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo). Web: <http://www.undp.org/spanish/> (consultada en última ocasión en enero 2012).

<sup>257</sup> Además, algunas experiencias latinoamericanas están promoviendo un enfoque socialmente más participativo especialmente en el ámbito local, y la región andina ha coordinado sus esfuerzos y experiencias para crear sinergias y explorar formas propias. Estas experiencias pueden consultarse en: Informe de México. “XXXIX. Reunión de la mesa directiva de la conferencia regional sobre la mujer de América latina y el Caribe”. Mayo 11 y 12 2006. México: Web <http://www.eclac.org/mujer/noticias/noticias/1/24331/M%C3%A9xico.pdf> (consultado en última ocasión en mayo 2011).

En la Unión Europea, la experiencia empezó en los países nórdico y en la actualidad se está llevando a cabo en muchos de los estados miembros, como es el caso del Estado español, donde la iniciativa de PEG fue desarrollada, en primer lugar, por Emakunde, el Instituto de la Mujer del Gobierno Vasco, por medio de una experiencia piloto llevada a cabo en seis departamentos del gobierno, con objeto de comenzar a sensibilizar a la administración sobre la importancia de este enfoque<sup>258</sup>.

Los presupuestos con perspectiva de género constituyen así, una poderosa herramienta para analizar el impacto diferenciado que tienen los presupuestos de los gobiernos sobre mujeres y hombres y para introducir las medidas necesarias para responder a las necesidades de ambos.

No obstante, no podemos dejar de señalar, que la introducción práctica de la dimisión de género en los presupuestos hasta la fecha diverge en la manera de implantarse en los diferentes países donde han sido puestos en marcha.

En ocasiones, estas iniciativas han fracasado en sus estrategias de sostenibilidad sin conseguir ir más allá de las etapas de sensibilización y formación o de la puesta en práctica de algunos proyectos piloto<sup>259</sup>. Cuando se ha conseguido un importante avance inicial, el proceso de institucionalización ha chocado después con la necesidad de asistencia técnica permanente e impulso constante a las actividades en marcha.

Así, si comenzábamos el presente apartado haciendo hincapié en la necesidad de poner de manifiesto la no heterogeneidad de las poblaciones, de igual manera y dada la idiosincrasia propia de cada Estado, debemos tener presente que las pautas concretas a seguir para incorporar el enfoque de género en el presupuesto de cada Estado deben ser diseñadas de manera concreta y específica teniendo en cuenta las características cambiantes y circunstanciales del país en el que se apliquen.

No obstante, especialistas en el análisis de los presupuestos con enfoque de género como De Villota y Jubeto (2008: 6) han puesto de manifiesto que en todos los casos el principio general consiste siempre en unir dos cuerpos de conocimiento que se han mantenido

---

<sup>258</sup> Análisis del Género en los Presupuestos Públicos. Departamento de Sanidad. Emakunde 2003.

<sup>259</sup> Entre otras, como señala JUBETO, la experiencia de presupuestos con enfoque de género del país vasco 2000-2002. JUBETO Y. *Los presupuestos con enfoque de género: una apuesta feminista a favor de la equidad en las políticas públicas*. Cuadernos de Trabajo de Hegoa, núm. 43, España, 2008. Web: "[http://www.bantaba.ehu.es/obs/files/view/Lan\\_koaderno43\\_castellano.pdf?revision\\_id=71184&package\\_id=71165](http://www.bantaba.ehu.es/obs/files/view/Lan_koaderno43_castellano.pdf?revision_id=71184&package_id=71165)" (Consultado en última ocasión en junio 2011).

normalmente separados: el conocimiento de las desigualdades de género y el conocimiento de las finanzas públicas.

No es el objetivo de este capítulo hacer un análisis exhaustivo de las metodologías que se ha utilizado a lo largo de estas décadas en los distintos países para la incorporación del enfoque de género en el presupuesto, así que hemos tomado como referencia el estudio “Estrategias para la integración de la perspectiva de género en el presupuesto público” (Jubeto, 2008:7) donde se señala que aunque existen una multiplicidad de metodologías, se han utilizado tres marcos básicos de análisis presupuestario, a partir de los cuales se han introducido algunas variaciones, nos referimos a los utilizados en el caso australiano, sudafricano y a las herramientas utilizadas por Elson.

Así, en primer lugar, se situaría el marco utilizado en la experiencia australiana, presentado por la economista feminista australiana Sharp, que parte de la clasificación del gasto de cada departamento en tres categorías.

En segundo lugar, destaca el enfoque de cinco pasos utilizado en Sudáfrica, presentado por Budlender<sup>260</sup>. Ambos enfoques pueden formar un marco analítico común, tanto para evaluar presupuestos ejecutados como para realizar estudios presupuestarios de impacto *ex ante*.

En tercer lugar, existen una serie de herramientas complementarias propuestas por Elson que en algunos de sus apartados están estrechamente vinculadas con las anteriores. Veamos una tabla con los principales instrumentos utilizados para el analiza de PEG:

Caso australiano	Caso sudafricano	Herramientas complementarias
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gastos específicamente enfocados a las mujeres.</li> <li>2. Iniciativas a favor de la igualdad de oportunidades dentro del sector público.</li> <li>3. El resto del gasto público.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Análisis de la situación de mujeres, hombres, niños y niñas.</li> <li>2. La sensibilidad de género en las políticas.</li> <li>3. Análisis de las asignaciones de gasto.</li> <li>4. Control de los servicios públicos financiados con el gasto.</li> <li>5. Evaluación de resultados.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La estrategia macroeconómica agregada.</li> <li>2. La composición de los gastos e ingresos.</li> <li>3. La eficiencia en la prestación de servicios.</li> </ol>

Tabla de elaboración propia

<sup>260</sup> Budlender, D. *Manual de capacitación sobre presupuestos sensibles al género*. Edición digital. Web: <http://www.presupuestoygenero.net/Herramientas/H036BudlenderSU.pdf> (Consultado en última ocasión en junio 2011).

No podemos dejar de citar las metodologías utilizadas en Suecia, ya que estas han influido claramente en algunas de las experiencias europeas, más concretamente en la que es objeto de la presente investigación, la experiencia en la Comunidad Autónoma Andaluza, nos referimos a la metodología JämKas y la metodología de las 3R: “Representación, Recurso y Realidad”<sup>261</sup>.

Esta metodología es la base sobre la que se asienta la metodología de introducción de la dimensión de género en el presupuesto público orientado a resultados, que se utiliza por la Comunidad Autónoma Andaluza cuyo caso analizaremos más adelante.

Si el principio de transversalidad de género busca insertar la igualdad de género en el funcionamiento general de todas las actividades de la administración, para ello se hace necesario diseñar formulas de integración del enfoque de género en la reforma presupuestaria, vista la capacidad de esta para fomentar un cambio cultural que abarque todas las fases y todos los niveles de la labor de la administración.

Así, en la búsqueda de estas formulas para la integración del enfoque de género en la elaboración presupuestaria es donde encontramos la metodología de elaboración de presupuesto orientados a resultados, metodología que se presenta como el conjunto de mecanismos visibles de medición que aseguran que la igualdad de género es parte efectiva de las políticas generales.

La orientación a resultados en el presupuesto<sup>262</sup>, trata de vincular los resultados con las asignaciones presupuestarias, y su premisa básica descansa en la formulación de una cadena lógica de resultados que materializan el uso los recursos en objetivos operativos prefijados y, finalmente, en impactos en la sociedad.

Este enfoque enlaza la formulación estratégica de la política en la planificación y las asignaciones de gasto a actividades o servicios específicos para poder valorar, con posterioridad, los resultados obtenidos y, por consiguiente, la eficacia de dicha estrategia.

---

<sup>261</sup> Cada una de las R significa: Realidad, Representación, Recursos. El método 3R se compone de tres partes diferenciadas, en las que cada una de las “R” consiste en una fase del análisis. Las dos primeras proveen la base estadística para poder analizar la realidad correspondiente al área susceptible de análisis. DE VILLOTA, P; JUBETO Y; FERRARI I. *Estrategias para la integración de la perspectiva de género...op. cit.*, pp. 39-42.

<sup>262</sup> La orientación a resultados en el presupuesto ha constituido una de las reformas del sector público más importante de los últimos años destinada a transformar los sistemas de presupuestos públicos desde el control de los recursos al enfoque a los resultados con el fin de mejorar la eficiencia operativa y fomentar la rendición de cuentas. Su uso está ampliamente difundido entre los países pertenecientes a la OCDE y los esfuerzos de reforma no han cesado de aumentar en los últimos años, como se recoge en el informe de OECD: Performance Budgeting in OECD Countries, OECD Publishing, Paris. 2007 Web: <http://www.oecd.org/dataoecd/22/7/41823650.pdf#page=9> (Consultada en última ocasión en enero 2012).

De esta manera y dado que los presupuestos orientados a resultados se basan en la medición de resultados focalizados en la distribución de recursos con el fin de lograr un impacto determinado en la sociedad, se observa como de una parte estos proporcionan el marco lógico idóneo, sostenible e integrador para la introducción de la dimensión de género en los presupuestos públicos, y a la vez el enfoque de género contribuye así, a mejorar la orientación a los resultados en el presupuesto.

Los presupuestos orientados a resultados constituye hoy el estándar en la política presupuestaria y el enfoque a resultados ha experimentado un considerable desarrollo en las últimas décadas como señalan Posseth y Van Nispen (2009).

Los presupuestos orientados a resultados ofrecen a los presupuestos que han integrados la dimensión de género, un marco institucional en el que insertarse de forma transversal, sostenible y troncal en la implementación de las políticas públicas.

Sin embargo, cabe señalar que los presupuestos orientados a resultados atraviesan momentos críticos tras el rápido desarrollo producido en los últimos años (Zapico Goñi, 2008: 199-230).

La puesta en práctica del presupuesto orientado a resultados depende inicialmente de la capacidad de medición y de los sistemas de información sobre resultados relevantes disponibles para la gestión, así como de la posterior incorporación y utilización de la información sobre resultados en el proceso presupuestario. En la última encuesta realizada por la OCDE sobre la utilización de la información de resultados en los países de su ámbito, se constata que algunos de los desafíos a los que enfrentan los gobiernos a ese respecto, se refieren a las dificultades a la hora de identificar los resultados de un programa, a las dificultades en el diseño de los indicadores para actividades específicas y, finalmente, a la falta de apoyo político a este tipo de trabajo (Ruiz Álvarez y Caamaño Alegre, 2008: 17-57).

### **5.2.1 Estudio de casos: Estado francés y la Comunidad autónoma andaluza**

Consideramos que lo expuesto hasta ahora concerniente a la introducción de la dimensión de género en los presupuestos públicos utilizando para ello una metodología de elaboración presupuestaria enfocada a la obtención de resultados, puede concretarse en la descripción de dos experiencias-casos de elaboración de presupuestos público.

Las experiencias de elaboración presupuestarias elegidas son las que se han llevado a cabo en el Estado francés y en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Aunque la lógica analítica indica que este estudio debiera haberse llevado a cabo entre dos entidades territoriales de la misma envergadura y significado (Estado francés y Estado español, o Comunidad Autónoma del Estado español y alguna Región administrativa del Estado francés) hemos elegido comparar la experiencia autonómica andaluza con la estatal francesa porque aunque desde el año 2000, el Gobierno español se ha implicado en el análisis de las políticas públicas desde la perspectiva de género por medio del impacto de género, a partir del año 2002, el caso referencial del Estado español es la experiencia desarrollada por la Comunidad Autónoma de Andalucía, impulsada por el Instituto Andaluz de la Mujer.

La estrategia implantada en Andalucía para la elaboración de los Informes de Evaluación de Impacto de Género que acompañan al Presupuesto Autonómico Andaluz, a través del proyecto G+ y de los Documentos de Orientaciones Estratégicas, han hecho de esta Autonomía un referente en lo relativo a los presupuestos con enfoque de género orientados a resultados, tanto el ámbito nacional como internacional.<sup>263</sup>

Así pues, teniendo en cuenta las semejanzas encontradas en la introducción de la dimensión de género en la elaboración de los presupuestos tanto de la Comunidad Autónoma andaluza como en la elaboración los presupuestos del Estado francés<sup>264</sup>, hemos considerado que si bien ambas entidades-casos pertenecen a ámbitos territoriales diferentes, ambas participan de una metodología común en la incorporación de la dimensión de género en los presupuestos orientados a resultados, de ahí la fórmula comparativa.

En primer lugar abordaremos el caso de Francia para más tarde analizar el caso de Andalucía. La elección del Estado galo, viene justificada por tratarse de un estado miembro de la Unión europea que introdujo de forma simultánea la orientación a resultados y la transversalidad de género en el presupuesto del año 2000 en el marco de la reforma financiera del Estado.

---

<sup>263</sup> Ejemplo de cómo la estrategia andaluza está adquiriendo tintes internacionales podemos encontrarla en *Integración del enfoque de género en el presupuesto de la comunidad autónoma andaluza. Experiencias Prácticas e Iniciativas de Cohesión social*. Esta investigación expone como la experiencia práctica llevada a cabo en Andalucía ha incidido positivamente en la cohesión social: “El propósito es ofrecer a responsables políticos y administrativos de los países de América Latina una serie de ejemplos prácticos acerca de la manera en que es posible diseñar y ejecutar iniciativas públicas con repercusiones positivas sobre la cohesión social”. Web: <http://epic.programaeurosocial.eu/files/23-ficha-completa.pdf> (Consultada en última ocasión en enero 2012).

<sup>264</sup> Estas semejanzas se ven claramente sobre todo a partir del año 2000 en el que el gobierno francés establecía en su artículo núm. 132 de la Ley de Presupuesto para el año 2000 que: “El Gobierno presentará cada año en el anexo a la Ley de presupuestos, una relación de los fondos que contribuyan a las acciones para promover los derechos de la mujer”. Loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. JORF n°177, du 2 août 2001.

La trayectoria seguida en la plasmación de las políticas de igualdad en el presupuesto del Estado francés en sus más de 10 años de historia permite valorar el uso estratégico del presupuesto como herramienta conducente a mejorar y reforzar la transversalidad de las políticas de igualdad en todas las áreas de gobierno.

### **5.2.2 La introducción de la perspectiva de género en los presupuestos públicos franceses**

Durante sus 45 años de existencia<sup>265</sup>, la ley orgánica financiera francesa ha conocido más de treinta propuestas de reforma, de las cuales solo dos llegaron a buen puerto y solo atañían a asuntos de menor relevancia. Reformar esta ley resultaba difícil: la falta de interés del gobierno y la necesidad de un amplio consenso político, resultaban escollos difíciles de salvar.

El deseo de introducir una cultura de cambio, de obtener una transparencia en rendición de cuentas de la gestión pública, el deseo de aumentar los poderes del Parlamento durante el proceso de elaboración presupuestaria y el déficit presupuestario que se agravó durante la década de los años noventa, permitió finalmente a dos hombres impulsar esta reforma: Migaud (diputado socialista, un experto en el presupuesto), y Lambert (especialista en presupuestos senador centrista), con el firme apoyo de Fabius (Presidente de la Asamblea Nacional al inicio del proyecto, que fue Ministro de Finanzas en su conclusión).

Así, en verano del año 2001, el Parlamento francés adoptó Ley Orgánica relativa a las Leyes de Finanzas<sup>266</sup> (en adelante LOLF) una ley orgánica que supuso una transformación radical de la gestión pública. Promulgada el 1 de agosto de 2001, su plena aplicación requirió de cuatro años de intenso trabajo para preparar el terreno a su entrada en vigor el 1 de enero de 2006. Su aplicación se realizó escalonadamente en 150 servicios en 2004 y más de 500 en 2005, generalizándose en 2006. La Ley de Presupuesto del año 2006 fue la primera en adoptar y aplicar el nuevo marco presupuestario.

Esta Ley Orgánica, casi podría asimilarse a una “constitución financiera”, ya que reemplaza a su precedente de 1959 y tiene como objetivo modernizar la gestión del Estado.

La LOLF reforma el presupuesto estatal mediante leyes presupuestarias más claras y transparentes que mejoran la eficacia del gasto y de la acción pública, por ejemplo formulando objetivos de eficacia socioeconómica que enuncian el beneficio esperado de la

---

<sup>265</sup> Hasta el año 2001 las leyes financieras francesas estaban sometidas a la *Ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances*.

<sup>266</sup> Loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. JORF n°177, du 2 août 2001.



acción del Estado para la colectividad. Además esta reforma introduce una “cultura de la gestión” basada en resultados y otorga más poderes al Parlamento tanto en los procedimientos de aprobación como en los de seguimiento y control.<sup>267</sup>

Esta Ley orgánica establece una nueva forma de estructurar el presupuesto del Estado dividiéndolo en tres niveles: Primer nivel “*las misiones*”, que corresponden a las principales políticas del gobierno; segundo nivel “*los programas o asignaciones*”, que definen el marco de implementación de las políticas públicas y constan de objetivos específicos, indicadores de rendimiento y resultados esperados; y tercer nivel “*las acciones*”, que definen el uso y el propósito de dichas asignaciones.

Así 2008, los presupuestos del Estado se desglosaron en una cincuentena de misiones que se despliegan en más de 160 programas, y estos, a su vez, en más de 600 acciones (Duhamel, 2008). Cada programa consta, por término medio, de unos 4 objetivos y 2 indicadores por objetivo. A cada programa se le asocia una estrategia, objetivos e indicadores de desempeño cuantificables que, de acuerdo con lo establecido en el artículo núm. 51.5. de LOLF, cada Ministerio ha de presentar al Parlamento bajo la denominación de Proyectos Anuales de Rendimiento (PAP) anexados al Proyecto de Ley del Presupuesto (PLF). Para cada indicador se fija un valor anual y una meta a medio plazo (de 1 a 4 años).

Paralelamente, el artículo 54 LOLF establece la obligación de rendir cuentas ante el Parlamento de los resultados obtenidos, esto debe hacerse mediante el Informe Anual de Rendimiento (RAP), informe que permite al legislativo comparar, “por una parte, la previsión y la ejecución presupuestarias, y por otra, la relación entre compromisos y objetivos y resultados constatados”<sup>268</sup>. Además de estos documentos presupuestarios, existen otros de

---

<sup>267</sup> Como señalara ALVAREZ CASTIÑERIAS, en relación a la mejoría de la gestión, la LOLF permite una mayor libertad de gestión de los responsables mediante la fungibilidad de los presupuestos por títulos, con excepción de los gastos de personal que no pueden ser incrementados por otros títulos (pero que pueden ellos mismos venir a aumentar otros gastos: es el principio de “fungibilidad asimétrica”). Respecto de la transparencia, la reorganización del presupuesto del Estado por políticas públicas permite al Parlamento votar cada misión/programa desde el primer euro (haciendo así desaparecer la noción de servicios votados, del orden de 95 % del gasto, anteriormente adoptados en bloque por el Parlamento). ALVAREZ CASTIÑERIAS, P, COLLANTES SANCHEZ B, “Complementariedad y coexistencia del enfoque de género y el enfoque a resultados en el presupuesto público. Estudio de casos: Francia y Austria” Instituto de Estudios Fiscales .Secretaría General de Presupuestos y Gastos. 2011, pp. 27-58.

<sup>268</sup> Ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'État: *Guide sur la Démarche de la Performance: Stratégie, Objectifs, Indicateurs*. Le Forum de la Performance. Paris 2008. Web [http://www.minefi.gouv.fr/lolf/downloads/120\\_guide\\_performance.pdf](http://www.minefi.gouv.fr/lolf/downloads/120_guide_performance.pdf) (consultado por última vez en enero 2012).

carácter temático que conforman los anexos informativos (“*Jaune budgétaire*”<sup>269</sup> o anexos amarillos) y los Documentos de Política Transversal (DPT o anexos naranjas).

El punto de partida para la introducción de la dimensión de género en la elaboración de los presupuestos franceses se encuentra en el artículo núm. 132 de la Ley de Presupuesto para el año 2000 que establece que: “*El Gobierno presentará cada año en el anexo a la Ley de presupuestos, una relación de los fondos que contribuyan a las acciones para promover los derechos de la mujer*”. El llamado presupuesto francés con enfoque de género ha venido plasmándose hasta 2009 en el “*Jaunebudgétaire*” o “*Anexo T*” bajo la rúbrica de “*Estado de los créditos que contribuyen a las acciones a favor de los derechos de las mujeres*”.

A partir de 2008 se empiezan a introducir cambios que han ido transformando las estructura del “Anexo T”, de tal manera que a partir de 2010, en virtud del artículo núm. 183 de la Ley del Presupuesto de 2009, se crea un nuevo anexo presupuestario “*sobre igualdad de mujeres y hombres*” con mayor peso específico y que pertenece a la categoría de Documento de Política Transversal<sup>270</sup>.

Así el presupuesto público del estado francés para el año 2010, fue el primer presupuesto que ya fue acompañado de un Documento de Política Transversal específico: “*Sobre la política de igualdad entre las mujeres y hombres*”<sup>271</sup> que sustituyó al citado Anexo T.

#### **5.2.2.1 La estrategia específica seguida por el Estado francés para la introducción de la dimensión de género en el marco de un presupuesto orientado a resultados.**

Toda la información relativa a las políticas de igualdad del presupuesto anual francés puede encontrarse dentro de la documentación presupuestaria en dos secciones diferenciadas el programa número 137 específico de igualdad (en adelante programa 137); y la política de

---

<sup>269</sup> Jaune Budgétaire “État des crédits qui concourent aux actions en faveur des droits des femmes”, annexé au Projet de Loi de Finances 2006. Le Forum de la Performance. Paris 2008. Web: <http://www4.minefi.gouv.fr/budget/plf2006/jaunes/pdf/811.pdf> (consultado por última vez en junio 2011).

<sup>270</sup> LOI n° 2008-1425, du 27 décembre 2008, de finances pour 2009.

<sup>271</sup> Document de Politique Transversale. Politique de l'Égalité entre les Femmes et les Hommes, annexé au Projet de Loi de Finances. Le Forum de la Performance. Paris 2010 Web: [http://www.performance-publique.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/ressources/PLF2011/DPT/DPT2011\\_politique\\_lutte\\_drogue\\_toxicomanies.pdf](http://www.performance-publique.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/ressources/PLF2011/DPT/DPT2011_politique_lutte_drogue_toxicomanies.pdf) (consultado por última vez en enero 2012).

carácter transversal en el anexo T (de 2001 a 2009) y en el DPT sobre la Política de igualdad entre las mujeres y los hombres desde 2010 hasta la actualidad.

#### 5.2.2.1.1 El programa número nº 137 específico de igualdad, en el presupuesto

Cuatro acciones se despliegan bajo el programa nº 137, además de una quinta acción que reúne los gastos de personal y materiales necesarios para la ejecución de las otras cuatro.

La orientación a resultados del programa nº 137 se manifiesta en la definición de objetivos e indicadores que hemos reflejado en la siguiente tabla, elaborada a partir del Proyecto Anual de Rendimiento anexo al Proyecto de Presupuesto 2011.

**Tabla 1. Objetivos e Indicadores del programa de gasto nº 137 del presupuesto francés de 2011.**

<b>Objetivo 1.</b> Contribuir al desarrollo de la igualdad profesional para la orientación, la diversificación en el empleo y la negociación colectiva		
<b>Indicador</b>	<b>Perspectiva</b>	<b>Objetivos 2011</b>
1.1. Proporción de niñas a nivel nacional entre estudiantes finales de ciencia y tecnología en escuelas secundarias (Indicador asociado: número de nominaciones de niñas para el Premio de vocación ciencia y la tecnología)	ciudadana	46,1% (serie S) y 10,3% (serie STI) y 2.500 candidaturas
1.2. Proporción de dispositivos para la igualdad de mujeres y hombres puestos en marcha en el mundo empresarial	usuaria	7,5% convenios sectoriales, 6,2% acuerdos de empresa, 90% de contratos igualdad y diversidad en los sectores de construcción, transporte y restauración
<b>Objetivo 2.</b> Mejorar la calidad del servicio de asistencia telefónica nacional para ayuda a personas víctimas de violencia y la eficiencia de los Centros de Información sobre los derechos de las mujeres y de sus familias (CIDFF)		
<b>Indicador</b>	<b>Perspectiva</b>	<b>Objetivos 2011</b>
2.1. Tasa de respuesta de líneas telefónicas de ayuda directa	usuaria	55% llamadas respondidas y derivadas
2.2. Porcentaje de centros donde el coste por persona atendida es superior al 60% del coste medio de los centros	contribuyente	En fase de adaptación a la información financiera disponible

Fuente: Proyecto Anual de Rendimiento anexo al Proyecto de Presupuesto 2011 y elaboración propia

Sin embargo, del análisis de los indicadores se deduce que dan cuenta de una visión muy parcial de la acción pública en materia de derechos de las mujeres sin abarcar la mayor parte de sus actuaciones.

### **5.2.2.1.2 La política de carácter transversal, en el presupuesto**

Hasta el año 2010 la transversalidad del principio de igualdad en las políticas públicas, se documentaba en forma de anexo informativo al presupuesto (el Anexo T). Este Anexo T estaba compuesto (desde el año 2001 hasta el año 2009) de tres partes diferenciadas: en primer lugar, el capítulo introductorio que describía la situación de las prioridades de la política de igualdad y el progreso conseguido con las medidas adoptadas en torno a seis ejes temáticos: la paridad, la igualdad profesional, el acceso de las mujeres a los derechos, la articulación de los tiempos de vida, la solidaridad europea e internacional (participación en foros internacionales) y las herramientas para la igualdad, centrándose éstas principalmente en las actividades de comunicación. En segundo lugar, los capítulos segundo y tercero que analizaban sucesivamente el esfuerzo financiero del Estado y de las regiones a través de la presentación del estado global de los créditos y las políticas sectoriales que contribuían a las acciones a favor de los derechos de las mujeres y a las acciones de sensibilización y capacitación en la materia. El Anexo T finalizaba, en tercer lugar, con un listado de los informes recientes más relevantes sobre la materia.

Como ya señalamos anteriormente, a partir del año 2009, en lugar del anexo T se comienza a presentar un nuevo documento que sustituye al citado anexo, se trata del “Documento de Política Transversal sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de mujeres y hombres”. Este documento se elabora bajo la responsabilidad de la Dirección General de Cohesión Social<sup>272</sup>.

Podemos observar que no se trata de únicamente de un cambio de forma sino que va más allá, en estos documentos se pueden apreciar un verdadero cambio de fondo. Mientras que en el anexo T se tomaba como punto de partida las contribuciones voluntarias de otros departamentos, los DPT se elaboran a partir de la información que obligatoriamente deben aportar los diferentes Ministerios e organismos operativos del Estado. De esta manera, los

---

<sup>272</sup> LA DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE: es la dirección de la administración central de los Ministerios sociales, se encarga de la concepción, el pilotaje, y la evaluación de las políticas públicas de solidaridad, de desarrollo y de la promoción de la igualdad que favorece la cohesión social. Ella vela por la coherencia nacional y territorial de estas políticas. Web <http://www.solidarite.gouv.fr/le-ministere,149/presentation-et-organigramme,294/conjointement-avec-le-ministre-de,741/la-direction-generale-de-la,12601.html> (Consultada en última ocasión en enero 2012).

objetivos e indicadores que se recogen en los DPT suponen un compromiso<sup>273</sup> para cada una de las instituciones públicas que los presentan.

Los DPT contienen los siguientes elementos<sup>274</sup> siguientes:

- Presentación de la política transversal, la lista de los programas que contribuyen a ella, e información sobre la puesta en marcha de esa política transversal en cada programa a través de diferentes dispositivos.
- Presentación estratégica, que expone la estrategia global para la mejora de los resultados de la política transversal, seguida de la presentación para cada eje estratégico de los objetivos e indicadores seleccionados y de sus valores asociados.
- Presentación de los principales gastos fiscales que contribuyen a dicha política transversal.
- Anexos: un resumen de los objetivos de la política transversal, mediante una tabla de correspondencias entre los objetivos de la política transversal y los de cada programa que la componen, y una presentación detallada del esfuerzo financiero dedicado por el Estado a la política transversal para el año siguiente (Proyecto de Ley de Finanzas-PLF), el año en curso (Ley de Finanzas-LFI) y el año anterior (ejecución). En ocasiones el gasto atribuible a la política transversal es el total, mientras que en otras es sólo una parte de cuyo cálculo han de ofrecerse las justificaciones oportunas.
- Otros anexos complementarios si fueran necesarios.

Podemos concluir este apartado señalando a la luz de lo expuesto, que la evolución del anexo T a los Documentos de Política Transversal, representa, en suma, un esfuerzo muy eficaz para la institucionalización de la transversalidad de las políticas de género.

---

<sup>273</sup> El seguimiento de la elaboración y ejecución de lo previsto en estos DTP se lleva a cabo por el “Comité Interministerial” presidido por la Jefatura del Gobierno.

<sup>274</sup> Conforme al artículo 128 de la Ley 1720/2005 rectificativa de finanzas para 2005.

### 5.2.2.1.3 El Documento de Política Transversal de Igualdad entre Mujeres y Hombres, presentado en 2011

El DPT que se ha presentado en el año 2011, tiene por título “*Documento de Política Transversal. Política de igualdad entre les mujeres y hombres, anexo al Proyecto de Ley de Finanzas 2010*”<sup>275</sup> y consta de dos secciones principales y dos anexos. La primera sección presenta la política transversal relativa a tres campos de intervención en materia de igualdad: la vida profesional, la vida social y la vida personal. Además añade una cuarta dimensión transversal que presta atención a la precariedad, la pobreza y la exclusión.

La segunda sección se ocupa de la presentación estratégica de la política de igualdad en torno a tres ejes: igualdad profesional, lucha contra la violencia y pobreza y exclusión social, y dos objetivos transversales, completados por otros nueve objetivos que contribuyen a la política transversal.

Del análisis del DPT de 2011 se puede observar que veinte programas, además del nº 137 (y el nº 124 que incluye en 2011 los gastos de personal para la ejecución de las acciones del programa nº 137), contribuyen a la política transversal de igualdad. De ellos, seis incluyen objetivos de igualdad y/o asignan partidas de gasto a favor de la misma. Adicionalmente, otros doce programas contribuyen a la promoción de la igualdad en su campo de actuaciones sin asignaciones presupuestarias asociadas, a saber, Vida del Alumnado, Investigación Agrícola y Educación Superior, Mejora de la Calidad del Empleo y Relaciones Laborales, Acceso a la Ley y a la justicia, Prisión, Justicia Legal, Protección Judicial de la Juventud, Fuerza de Gendarmería General, Policía Nacional, Juventud y Vida Comunitaria, Política Urbana y Prevención de la Exclusión e Inserción de Personas Vulnerables.<sup>276</sup>

Además de la creación de los DPT para la política transversal de igualdad, el seguimiento de la política del gobierno francés a favor de la igualdad entre mujeres y hombres ha registrado cambios importantes tanto en sus aspectos organizativos como en su ámbito de aplicación. Paralelamente al desarrollo de la LOLF, en 2007 se puso en marcha en Francia la

---

<sup>275</sup> Document de Politique Transversale. Politique de l'Égalité entre les Femmes et les Hommes, annexé au Projet de Loi de Finances 2010. Le Forum de la Performance. Paris 2011. Web: [http://www.performance-publique.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/ressources/PLF2011/DPT/DPT2011\\_politique\\_egalite\\_hommes\\_femmes.pdf](http://www.performance-publique.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/ressources/PLF2011/DPT/DPT2011_politique_egalite_hommes_femmes.pdf) (Consultado por última vez en enero 2012).

<sup>276</sup> A modo ilustrativo, el programas nº 163, Juventud y Vida Asociativa, contribuye a través del Consejo de Juventud porque sus estatutos imponen el principio de paridad en la elección de representantes y suplentes.

llamada “*Revisión General de Políticas Públicas*”<sup>277</sup> (en adelante RGPP), marco estructural de la reforma del Estado para el cambio por un lado de la organización administrativa francesa y por otro del contenido de la acción pública con el fin de ofrecer un mejor servicio público, mejores condiciones de trabajo y carrera a quienes lo prestan y la disminución del gasto público.

Fruto de la Revisión General de Políticas Públicas se crea en 2008 la “*Dirección General de la Cohesión Social*”<sup>278</sup> (en adelante DGCS) como refundición de varios organismos y bajo cuyo liderazgo se insertan las políticas de igualdad entre mujeres y hombres con carácter transversal. Posteriormente, en aplicación de lo establecido en el Decreto n° 2010-95 del 25 de enero de 2010, el “*Servicio de Derechos de las Mujeres y de Igualdad*”<sup>279</sup> (en adelante SDFE), responsable de la política de igualdad ha pasado a integrar la DGCS con nuevas funciones que incluyen la reactivación del Comité Interministerial de los Derechos de las Mujeres.

Hasta 2010 la débil influencia del SDFE sobre la política transversal de igualdad se explica por el carácter voluntario de las adhesiones de otros departamentos a la política de igualdad, por lo que en palabras del Tribunal de Cuentas, “no sorprende que haya habido dificultades para elaborar cada año el anexo amarillo presupuestario sobre las políticas de igualdad”.<sup>280</sup>

La política de igualdad de género francesa recibió un duro varapalo del Tribunal de Cuentas en el citado informe de febrero de 2008 en el que se ponen de manifiesto las persistentes lagunas de la política de igualdad y del SDFE, responsable de la misma. En primer lugar identificaba al programa n° 137 como el más relevante de la política transversal de igualdad y el único que cuenta con fondos operativos y personal, aunque también se advertía que su reducido volumen presupuestario limitaba y sigue limitando sus posibilidades

---

<sup>277</sup> Revisión General de Políticas Públicas. Para más información Web: <http://www.rgpp.modernisation.gouv.fr/index.php?id=10>. (consultado por última vez en enero 2012).

<sup>278</sup> Dirección General de la Cohesión Social. Para más información Web: <http://www.centres-sociaux.fr/partenaires/dgcs/> (consultado por última vez en enero 2012).

<sup>279</sup> Servicio de Derechos de las Mujeres y de Igualdad, compuesto de una administración central y de una red descentralizada que abarca todo el territorio francés incluidas las islas. Puede consultarse el anuario de actuaciones del servicio relativas a la igualdad de mujeres y hombres durante 2011 en el siguiente enlace : <http://www.solidarite.gouv.fr/espaces,770/femmes-egalite,772/zoom-sur,829/nos-sites,2001/espaces,770/femmes-egalite,772/institutionnel,802/la-politique-et-les-acteurs-de-1,865/espaces,770/femmes-egalite,772/informations-pratiques,832/annuaire-des-equipes-regionales-et,1154/annuaire-du-15-decembre-2011,13602.html>

Para más información. Web <http://www.solidarite.gouv.fr/> (consultado por última vez en enero 2012).

<sup>280</sup> COUR DES COMPTES. «Les interventions en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes: le service des droits des femmes et de l'égalité (SDFE)». Cour des Comptes. Paris febrero 2008, p 485.

reales de fungibilidad. El grueso de las críticas del Tribunal se dirigían a cuestionar la eficacia del sostenimiento a las asociaciones que el programa n° 137 financia habida cuenta de la gran dispersión de fondos entre un sinnúmero de pequeñas entidades.

Concluiremos el estudio del caso del Estado francés haciendo hincapié en como la puesta en marcha de la LOLF estuvo acompañada de un importante despliegue pedagógico, acciones formativas, kits temáticos, materiales de apoyo, soportes de comunicación y herramientas informáticas. Más de 800 personas se ocuparon de sensibilizar a más de 30.000 personas y 300 personas expertas fueron adiestradas en los nuevos conceptos para impartir la formación en cada Ministerio (Duhamel, 2008: 73). Sin embargo, ninguno de esos instrumentos se centra en consideraciones de género o del PG y el propio principio de igualdad está ausente en los contenidos de los mismos.

La implantación de la dimensión de género en el presupuesto público orientado a resultados en Francia ha recibido el mismo tratamiento para su desarrollo y aplicación que otras políticas transversales. El contenido de los anexos presupuestarios viene determinado por las circulares presupuestarias en las que los organismos y departamentos responsables reciben las instrucciones correspondientes. Aunque existen algunas estructuras de apoyo para la elaboración de un presupuesto orientado a resultados como es el “Comité Interministerial de Auditoría de Programas” (en adelante CIAP) creado por el gobierno para auditar la calidad de los programas presupuestarios del Estado en relación a los principios de la LOLF, el programa de igualdad de mujeres y hombres no ha sido nunca auditado y entre los principios de funcionamiento del CIAP no consta una especial atención a cuestiones de género.

Por su parte, el Tribunal de Cuentas se encarga de controlar la correcta ejecución y la eficacia del gasto público y certifica las cuentas del Estado. El informe publicado en el año 2008 sobre la gestión y resultados de las políticas de igualdad en Francia en base a la información presupuestaria de 2003 a 2005, recomendaba un mayor enfoque a resultados de la misma y una mejor planificación estratégica.

En 2011 el Tribunal de Cuentas ha asumido por ley responsabilidades de organismo evaluador de las políticas públicas asistiendo, con su labor técnica, al Parlamento en la tarea de control del ejecutivo y del gasto público.

Finalmente, el Parlamento, a través tanto del congreso como del senado ejerce un rol impulsor y de control del cumplimiento de la LOLF mediante el debate presupuestario en comisiones especializadas y la facultad de presentación de enmiendas. En aplicación del



principio de “Justificación desde el Primer Euro” se vota cada una de las misiones en que convergen los programas de gasto, en contraste con lo que ocurría con anterioridad a la LOLF cuando sólo se votaban los programas nuevos, que constituían menos del 6% del gasto. A pesar del mayor poder que la LOLF concede al Parlamento, la inercia de las comisiones parlamentarias, sin embargo, restringe la rendición de cuentas a las responsabilidades departamentales y políticas ministeriales, haciendo difícil el debate sobre las políticas de igualdad en su componente más transversal y centrándolo prioritariamente en la cuantía y características del programa nº 137.

Vemos así como la elaboración de un presupuesto público orientado a resultados, en el Estado francés, se ha revelado como el instrumento idóneo para la integración del género en las políticas públicas, ya que su carácter horizontal asegura la transversalidad de este enfoque en todas las actuaciones y permite orientarlas hacia la igualdad.

Además, esta estrategia permite poner el presupuesto al servicio directo de las necesidades de las personas, prestando especial atención a las diferencias entre varones y mujeres; contribuye a mejorar la calidad de la gestión pública del presupuesto y de los servicios asociados, permite identificar situaciones de desigualdad, potencia la rendición de cuentas y la toma de conciencia de la responsabilidad pública en las instituciones.

### **5.2.3 La introducción de la perspectiva de género en los presupuestos públicos de la Comunidad Autónoma Andaluza**

Tras haber analizado como el Estado francés introduce la perspectiva de género en el presupuesto público y siguiendo en con la idea de comparar ambos entes territoriales, el estatal francés y el autonómico andaluz, a continuación nos centraremos en el análisis de la introducción de la perspectiva de género en los presupuestos públicos de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Observaremos como a través de un enfoque gradual y constante, la Administración andaluza ha desarrollado una estrategia propia que responde a las particularidades de sus instrumentos presupuestarios y a las necesidades de la propia organización.

La Comunidad Autónoma de Andalucía viene desarrollando desde el año 2003, según lo dispuesto en el artículo 139.2 de la citada Ley 18/2003, una estrategia de Presupuestos con perspectiva de género, iniciativa que se ha convertido en una experiencia de referencia tanto en el nivel nacional como internacional.

*A los efectos de garantizar que el Presupuesto de la Comunidad Autónoma sea elemento activo de lo establecido en el punto 1, se constituirá una Comisión dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda con participación del Instituto Andaluz de la Mujer, que emitirá el informe de evaluación sobre el citado proyecto. Dicha Comisión impulsará y fomentará la preparación de anteproyectos con perspectiva de género en las diversas Consejerías y la realización de auditorías de género en las Consejerías, empresas y organismos de la Junta de Andalucía.*<sup>281</sup>

Con la promulgación de la Ley 18/2003 la Comunidad Autónoma Andaluza empezó toda una andadura para la consecución de la igualdad real y de oportunidades de mujeres y varones; cabe resaltar, cómo en menos de una década los logros alcanzados sobre todo en los aspectos metodológicos han convertido a Andalucía en un buen modelo de presupuesto con perspectiva de género.

El proceso de integración de dicho modelo en los presupuestos públicos de la Comunidad Autónoma andaluza es un proceso vivo en el que la inversión en investigación y desarrollo empezó a dar sus frutos casi de inmediato. Prueba de ello es que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 139.3 de la Ley 18/2003, con fecha de 12 de marzo, se promulga el Decreto 93/2004, por el que se regula el Informe de Evaluación de Impacto de Género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno.<sup>282</sup>

Es importante señalar que el objeto de este Decreto es regular el Informe de Evaluación de Impacto de Género previsto en el artículo 139.1 de la Ley 18/2003, teniendo como finalidad que los Proyectos de Ley y los Reglamentos cuya aprobación corresponda al Consejo de Gobierno, tengan en cuenta de forma efectiva la Igualdad real y de oportunidades por razón de género. De manera que este no es aplicable a la elaboración del Informe de Evaluación del Impacto de Género de los presupuestos públicos de Andalucía, tema central del presente capítulo.

Es necesario matizar en este punto que el Informe de Evaluación del Presupuesto de Género que acompaña a los Presupuesto Públicos de la Comunidad Andaluza, no debe confundirse con el Informe de Evaluación del Impacto de la Normativa en función del

---

<sup>281</sup> Art 139.2 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas (el subrayado es nuestro).

<sup>282</sup> Que establece la obligatoriedad por parte del Consejo de Gobierno de aprobar las normas de desarrollo que regularan los Informes de Evaluación de Impacto de Género, en un plazo máximo de seis meses.

Género, que es el que hemos estado analizando a lo largo de todo este trabajo de investigación hasta este momento.

Pues aunque el objetivo de ambos informes es conseguir la igualdad y la no discriminación de la ciudadanía, erradicando las desigualdades históricas que han tenido las mujeres, pero el camino y las herramientas empleadas son diferentes.

Así en este capítulo nos centraremos en el estudio del Informe de Evaluación del Presupuesto de Género que acompaña a los Presupuestos Públicos de la Comunidad Andaluza. En este informe deberá incluirse un análisis donde se determinará si la institución presupuestaria, objeto de estudio, integra el enfoque de género en todas las políticas, planes y programas, o bien no considera los derechos y necesidades de la ciudadanía en función del género.

Veremos pues como nueve meses después de la publicación del Decreto 93/2004, se publicó la Ley 3/2004, de 28 diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras<sup>283</sup>, en su capítulo IV, referido a medidas en materia de género, se modifica la regulación del Informe de Evaluación del Impacto de Género que debe garantizar que el Presupuesto de la Comunidad Autónoma, de manera este sea un elemento activo del objetivo de la igualdad por razón del género.

Esta ley, en su artículo 37, reforma el artículo 139.2 de la Ley 18/2003 y establece que dicho informe debe emitirse sobre el Anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma<sup>284</sup>, a fin de que, al aprobarse el Proyecto de Ley por el Consejo de Gobierno, vengan ya incorporadas las correcciones derivadas del propio informe.

*A los efectos de garantizar que el Presupuesto de la Comunidad Autónoma sea elemento activo de lo establecido en el apartado anterior, se constituirá una Comisión dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda con participación de Instituto Andaluz de la Mujer, que emitirá el informe de evaluación sobre el Anteproyecto. Dicha Comisión impulsará y fomentará la preparación de anteproyectos con perspectiva de género en las diversas Consejerías y la realización de auditorías de género en las Consejerías, empresas y organismos de la Junta de Andalucía.*

---

<sup>283</sup> Ley 3/2004, de 28 diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras. (BOJA núm. 255, de 31 de diciembre 2004).

<sup>284</sup> El artículo 37 se refiere al Informe de evaluación del impacto de género y modifica el apartado 2 del artículo 139 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas.

Pero sin duda, si hacemos repaso a las diferentes modificaciones que ha sufrido la legislación que rige la aplicación de la perspectiva de género en los presupuestos públicos para la Andalucía, el punto de inflexión ha venido de la mano de la promulgación de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Ya en su exposición de motivos señala que:

*... Es una innovación sin precedentes en el entorno nacional e internacional en este tipo de normas y viene a reforzar todavía más si cabe, el innegable compromiso con la igualdad de género como eje de nuestro desarrollo (...) Sin embargo, el Presupuesto de 2009 no solo no abandona, sino que aborda decididamente los grandes retos a medio plazo que tiene planteados la economía andaluza y que se encaminan a conseguir un modelo equilibrado y sostenible de crecimiento en un contexto de igualdad de oportunidades, en especial, en materia de género.<sup>285</sup>*

Así, la Disposición Final Segunda de la citada ley, modifica la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía que queda redactada como sigue:

*Se modifica la regla quinta del artículo 34, quedando redactada como sigue: QUINTA. Como documentación anexa al anteproyecto de Ley del Presupuesto se cursará al Consejo de Gobierno:*

- a) La cuenta consolidada del Presupuesto.*
- b) La Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente el anteproyecto comparado con el Presupuesto vigente.*
- c) La liquidación del Presupuesto del año anterior y un avance de la del ejercicio corriente.*
- d) Un informe económico y financiero.*
- e) La clasificación por programas del Presupuesto.*
- f) Informe de Impacto de Género.*
- g) Anexo de Inversiones.*
- h) Anexo de Persona<sup>286</sup>.*

---

<sup>285</sup> Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. BOJA núm. 259, 31 de diciembre de 2008.

<sup>286</sup> El subrayado es nuestro.

La Ley 3/2008, asigna al Informe de Impacto de Género, rango de documentación anexa al anteproyecto de Ley del Presupuesto que debe remitirse al Consejo de Gobierno para su aprobación. Esto supone que desde su entrada en vigor, el pasado 1 de enero de 2009, no podrá presentarse un Presupuesto Público para Andalucía que no vaya acompañado de su correlativo Informe de Impacto de Género. La igualdad de mujeres y varones, con medidas como esta, deja de ser una cuestión incómoda y evitable, para convertirse en un elemento indispensable en la formulación del presupuesto y en la redacción de las políticas públicas.

#### **5.2.3.1 La Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía**

Con el fin de garantizar que el Presupuesto de la Comunidad Autónoma Andaluza tenga en cuenta de forma efectiva el objetivo de la igualdad por razón de género, el artículo 139. 2 de la Ley 18/2003 establece la constitución de una Comisión dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda con la participación del IAM que emitirá el Informe de Evaluación de Impacto de Género de los Presupuestos.

La Comisión de Impacto de Género de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía<sup>287</sup>, regulada en el art. 139.2 de la Ley 18/2003, (en su redacción dada por la Ley 3/2004, de 28 de diciembre), se define como un órgano dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, y su objetivo principal la emisión del Informe de Evaluación sobre el Anteproyecto de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma.

La Comisión, al objeto de lograr altas cotas de participación y consenso, fue modificada en su configuración subjetiva<sup>288</sup>, en un principio estaba compuesta por la Viceconsejera de Economía y Hacienda, y la conforman representantes de Asesoría Técnica de la Viceconsejera, Jefe de servicio de Estudios y Publicaciones, la Dirección General de Presupuestos, la Dirección General de Fondos Europeos, la Dirección General de Planificación, (todas ellas de la Consejería de Economía y Hacienda), las Consejerías para la

---

<sup>287</sup> La Comisión de Evaluación de Impacto de Género en los Presupuestos se constituye por Resolución de 24 de septiembre de 2004, de la Consejería de Economía y Hacienda.

<sup>288</sup> Se establece que los miembros de la Comisión deberán ser personal funcionario de la Junta de Andalucía, al menos responsables de Jefaturas de Servicio, lo que la dota de un perfil eminentemente técnico.

Igualdad y Bienestar Social, Presidencia, Gobernación, Justicia y Administración Pública y Transporte, Empleo, Turismo, Comercio y Deporte, Agricultura y Pesca, Salud, Educación, Cultura, Medio Ambiente, el Instituto de Estadística de Andalucía y el Instituto Andaluz de la Mujer.

Posteriormente se extendió al conjunto de la Administración General de Junta de Andalucía, de esta forma la Comisión está integrada actualmente por dos miembros de cada una de las Consejerías, dos miembros del Instituto Andaluz de la Mujer<sup>289</sup> y dos miembros del Instituto de Estadística de Andalucía, siempre garantizando la representación paritaria de cada uno de los órganos mencionados.

Por su parte, la Consejería de Economía y Hacienda, ostenta la presidencia y vicepresidencia y tiene una amplia presencia en la Comisión a través de la Dirección General de Presupuestos, la Dirección General de Planificación, la Dirección General de Fondos Europeos y la Viceconsejería.

También los objetivos que la Comisión se ha ido proponiendo cada año fiscal han ido evolucionando a medida que aumentaba la participación de las distintas Consejerías y la complejidad metodológica.

Dar cumplimiento a los objetivos marcados cada año, es impregnar de género el Presupuesto Público, y esto requiere la clara convicción de la necesidad de que se dé una igualdad real de oportunidades de mujeres y varones, porque solo así se producirá un desarrollo social, económico armónico y sostenible.

Una clara evidencia de que no estamos ante una cuestión baladí en que la incorporación de la perspectiva de género en el presupuesto y la creación de la Comisión también queda recogida en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

Esta Ley cuya aprobación marcó un antes y un después en el camino hacia la consecución de la igualdad de unos y otras recoge en su Título I, Capítulo I, una serie de acciones para garantizar la integración de la perspectiva de género en las políticas públicas, tales como el informe de evaluación de impacto de género, el Plan estratégico para la igualdad

---

<sup>289</sup> Queda constancia en los informes acompañaron al Presupuesto de 2006 y 2007, que es el Instituto Andaluz de la Mujer - con el apoyo de la Dirección General de Fondos Europeos y a través de la Unidad de Igualdad de Género organizada al efecto- quien imparte cursos y desarrolla múltiples actividades para todas las Consejerías a tal fin. No obstante, en ninguna parte de esos informes ha quedado reflejado el resultado de estos talleres ni el nivel de capacitación que proporcionan a las personas que se forman. Si bien, no es menos cierto que el hecho de que sea el IAM la entidad formadora es siempre una garantía cualitativa. No debe entenderse que, con ello, han adquirido al completo la conciencia de género que requiere la elaboración de presupuestos desde una perspectiva de género.

de mujeres y hombres, el lenguaje no sexista e imagen pública y las estadísticas e investigaciones con perspectiva de género y como no podía ser de otra manera, dedica el artículo octavo a los presupuestos públicos con enfoque de género y a algunas de las funciones que tendrá la Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos:

*Artículo 8. Enfoque de género en el presupuesto. 1. El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía será un elemento activo en la consecución de forma efectiva del objetivo de la igualdad entre mujeres y hombres; a tal fin, la Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, con participación del Instituto Andaluz de la Mujer, emitirá el informe de evaluación de impacto de género sobre el anteproyecto de Ley del Presupuesto.*

*2. La Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos impulsará y fomentará la preparación de anteproyectos con perspectiva de género en las diversas Consejerías y la realización de auditorías de género en las Consejerías, empresas y organismos de la Junta de Andalucía.*

*3. Dicho informe de evaluación de impacto de género irá acompañado de indicadores pertinentes en género, mecanismos y medidas dirigidas a paliar y neutralizar los posibles impactos negativos que se detecten sobre las mujeres y los hombres, así como a reducir o eliminar las diferencias encontradas, promoviendo de esta forma la igualdad entre los sexo.*

No obstante, la regulación detallada de la composición, funciones y funcionamiento de la Comisión se encuentra en el Decreto 20/2010, de 2 de febrero, por el que se regula la Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.<sup>290</sup>

En él se establece que la Comisión, adscrita a la Consejería competente en materia de Hacienda, es el órgano colegiado asesor específico, de participación administrativa, que tiene como finalidad impulsar que el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía sea un elemento activo en la consecución de forma efectiva del objetivo de la igualdad entre mujeres y varones; y para ello ya tiene atribuidas las siguientes funciones:<sup>291</sup>

- Emitir el informe de evaluación del impacto de Género del proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

---

<sup>290</sup> Decreto 20/2010, de 2 de febrero, por el que se regula la Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA núm.38 de 24 de febrero de 2010.

<sup>291</sup> Las tres primeras ya venían recogidas en el artículo 139.2 de la Ley, 18/2003, las siguientes que las complementan l son las recogidas por el Decreto 20/2010, de 2 de febrero.

- Impulsar y fomentar la preparación de anteproyectos de Presupuestos con perspectiva de género en las diversas Consejerías.
- Realización de auditorías de género en las Consejerías, empresas y organismos de la Junta de Andalucía.
- Promover el objetivo de igualdad de género en las políticas públicas de ingresos y gastos de la Junta de Andalucía, impulsando y fomentando la elaboración, con perspectiva de género, de anteproyectos de los estados de ingresos y de gastos en las diversas Consejerías y, cuando proceda, de recursos y dotaciones de las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía.
- Impulsar la aplicación de la perspectiva del enfoque de género en el plan de auditorías de cada ejercicio
- Informar con carácter facultativo sobre cualquier asunto o materia de su competencia en los ámbitos económico y presupuestario.
- Cualquier otra función que se le atribuya por las disposiciones de aplicación, y que favorezca la consecución del objetivo de igualdad por razón del género en los ámbitos económico y presupuestario.

### **5.2.3.2 Evolución de las metodologías utilizadas en Andalucía para la introducción de la dimensión de género en el presupuesto público. Los presupuestos orientados a resultados**

#### **5.2.3.2.1 La metodología sueca de las 3R utilizada para la elaboración de los Informes de Evaluación de Impacto de Género al proyecto G+**

La metodología de las 3R fue diseñado, por ASTRÖM en cooperación con la Asociación Sueca de Autoridades Locales (ASAL), con el objetivo específico de revisar y analizar áreas y sectores concretos de la política municipal desde la perspectiva de la equidad de género. A través de este método se pretende hacer visibles las normas y valores con enfoque de género que ya existentes en la política municipal.

Sirve de ayuda en la compilación sistemática de hechos e información sobre las circunstancias en las que se desenvuelven las mujeres y los varones en una situación concreta,



y lo hace a través de una batería de preguntas, cuyas respuestas conducen a conocer quién recibe qué, en qué términos y a poner en evidencia potenciales (o reales) situaciones de desigualdad.

De esta manera el método deja en manos de las personas responsables de la toma de decisiones el establecimiento de las medidas que consideren oportunas para impulsar la igualdad de género.

El método de las 3R utilizado para la Evaluación del Impacto de Género viene a representar la estructura lógica de la planificación: analizar, experimentar, proponer y evaluar, es decir, analizar de nuevo, proponer y evaluar los resultados. Reflexionar, aplicar Recursos y evaluar Resultados. Esto, que define tanto al proceso lógico científico como a la dinámica presupuestaria, adquiere diversas connotaciones cuando sobre lo que estamos reflexionando, actuando y buscando resultados, es lo relativo a la igualdad de varones y mujeres en el poder y en la economía

Este método se convierte en un marco analítico general que intenta concretar y sistematizar el trabajo a realizar en los estudios de la política pública con enfoque de género, y aunque se trate de un método criticado por resultar, en ocasiones, inadecuado para configurar un proceso de transversalidad de género más allá de la identificación de las situaciones de desigualdad, este escollo es salvado en su aplicación en la CA andaluza<sup>292</sup> a través de las evaluaciones anuales que se hacen en la elaboración de los Informes de Evaluación del Impacto de Género del Presupuesto de la CA andaluza<sup>293</sup>.

De esta manera se observa cómo la estructura de los primeros Informes que se articulaban en torno al modelo de las 3R (realidad, representación y recursos-resultados), ha ido evolucionando a través de la evaluación de los mismos y de las correcciones que se le han ido aplicado, incorporándose así nuevas medidas que completan y mejoran esta metodología.

El modelo de evaluación de impacto de género de los presupuestos andaluces va a diferir sustancialmente de otras propuestas metodológicas derivadas de experiencias

---

<sup>292</sup> El modelo de evaluación de impacto de género de los presupuestos andaluces se inserta en el núcleo del ciclo presupuestario, donde se realizan las orientaciones generales de política económica, la asignación del gasto, la definición de ingresos y donde finalmente, se realiza el seguimiento del conjunto de las políticas presupuestarias.

<sup>293</sup> Desde que se elaborara el Presupuesto Público de la Comunidad Autónoma Andaluza del año 2005 ha ido acompañado de un Informe de Evaluación de Impacto de Género tal y como se dispone en artículo 139.2 del texto legal Ley 18/2003, arriba citado. Estos informes publicados desde el pasado año 2006 pueden consultarse, en la web de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas: [http://www.juntadeandalucia.es/economia/hacienda/planif\\_presup/genero/informe.htm](http://www.juntadeandalucia.es/economia/hacienda/planif_presup/genero/informe.htm) (consultado por última vez en junio 2011).

internacionales, en la medida que la responsabilidad de impulso y elaboración del informe no reside en órganos sectoriales que tradicionalmente han desarrollado políticas de igualdad, cuya influencia en el proceso de elaboración presupuestaria y su incidencia en el conjunto de la organización está generalmente atenuada, sino en el departamento que ostenta la máxima responsabilidad en la negociación, asignación y seguimiento del conjunto de las políticas presupuestarias. Esta definición garantiza el tratamiento transversal de la política de igualdad de oportunidades entre varones y mujeres en todas las actuaciones susceptibles de ser financiadas con el presupuesto público.

#### “METODOLOGÍA SUECA DE LAS 3Rs”

DEFINICIÓN	
<b>REPRESENTACIÓN</b>	Pretende conocer cuántas mujeres y varones se encuentran en los diferentes niveles y categorías profesionales, así como las características de los puestos de trabajo. Consiste en conocer la composición orgánica de la estructura organizativa del área o sector a analizar, de forma desagregada por sexo/género.
<b>RECURSOS</b>	Se concentra en la distribución de los principales recursos municipales entre varones y mujeres, teniendo en cuenta que los recursos no hacen referencia en exclusiva al dinero, sino que abarcan también el tiempo, el espacio y la información. Se pregunta también cómo se encuentran localizadas y adaptadas las intervenciones y las prioridades existentes a las necesidades de las mujeres y de los hombres.
<b>REALIDAD</b>	Esta parte del análisis es más cualitativa, y en ella se analizan los datos recogidos en los apartados anteriores, centrándose en los aspectos relativos a la realidad. La preocupación consiste en conocer hasta qué punto las normas y los valores culturales ayudan a mantener la desigualdad entre las mujeres y varones, y la calidad de las medidas a implementar para alterar esa situación de partida.

Cuadro de elaboración propia a partir de los datos obtenidos del estudio: “Estrategias para la integración de la perspectiva de género en los presupuestos públicos”.

Teniendo en cuenta cada una de las tres variables de análisis que se utilizan en esta metodología (representación, recursos y realidad), anotamos los cambios más importantes de cada una de estas variables aparecidos en los Informes de Evaluación del Impacto de Género de los años 2006 y 2007 que han acompañado a los presupuestos públicos de la CA andaluza hasta la introducción en el año 2008 del proyecto G+, que complementa a la metodología sueca de las 3Rs.

Así observamos como en el Informe de Evaluación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma Andaluza del año 2006,<sup>294</sup> como nota característica se señalaron las pautas para

<sup>294</sup> Informe de evaluación de impacto de género del presupuesto de la comunidad autónoma de Andalucía para 2006, Consejería de Economía y Hacienda. Junta de Andalucía. Sevilla, Ed. Servicio de Estudios y Publicaciones, 2006. p. 189.

que cada Consejería incorporase esta perspectiva de programación y análisis en sus respectivos ámbitos, mediante la desagregación por sexo de los indicadores de los programas presupuestarios, además de experimentar por primera vez el modelo de Evaluación de Género que se había decidido en la Comisión.

En el Informe de Evaluación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma Andaluza del año 2007, la novedad más relevante fue la incorporación de la dimensión temporal (3T) a los análisis de las variables realidad recursos y representación.<sup>295</sup> Basada en una configuración tridimensional de la evaluación (pasado, presente y futuro), esta introducción nos ha permitido observar los cambios producidos en el ámbito económico y social con mayor amplitud temporal que la del presupuesto, focalizar la perspectiva sobre los elementos fundamentales del desarrollo económico y promover la reflexión sobre la incidencia de la corriente principal de las políticas públicas y presupuestarias en la lucha contra la desigualdad entre varones y mujeres.

**“COMPARACIÓN DE LAS TRES VARIABLES EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN DEL AÑO 2006-2007” (Cuadro de elaboración propia)<sup>296</sup>**

AÑO	REPRESENTACIÓN	RECURSOS	REALIDAD
2006	Se entiende por representación, en este informe, la participación de hombres y mujeres en los diferentes ámbitos de organización social y en los puestos de la administración de la Junta de Andalucía (Capítulo I de Personal) según los datos proporcionados por la Dirección General de la Función Pública de la Consejería de Justicia y Administración Pública y la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda	Se consideran en este apartado los programas presupuestarios analizados desde la perspectiva de género y comprometidos con la eliminación de desigualdades por esta razón. Esta relación de programas ha sido proporcionada por los miembros de la Comisión en función del trabajo desarrollado entre las Consejerías a las que representan y la Dirección General de Presupuestos.	Se entiende por realidad, en este informe, el escenario de desigualdades entre hombres y mujeres en Andalucía. Desigualdades en la representación y participación social, en el empleo, sueldo y pensiones, y en la educación –incluyendo universidades e investigación

<sup>295</sup> Informe de evaluación de impacto de género del presupuesto de la comunidad autónoma de Andalucía para 2007, Consejería de Economía y Hacienda. Junta de Andalucía. Sevilla, Ed. Servicio de Estudios y Publicaciones, 2007, p. 426.

<sup>296</sup> Cuadro elaborado a partir del “Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre la Igualdad entre mujeres y hombres 2006 (COM (2006)71 final) relativas al cumplimiento de la Agenda Social para 2005-2010, complemento y apoyo de la Estrategia de Lisboa Renovada por el crecimiento y el empleo, y a la Hoja de Ruta de la Igualdad entre Varones y Mujeres.”. Web: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0071:FIN:ES:HTML> (consultado por última vez en enero 2012).

2007	El objetivo de esta parte es que cada programa de gasto presupuestario refleje las acciones y los resultados, en términos de número de hombres y mujeres que se van a ver beneficiados con las actuaciones emprendidas con esas partidas. En este apartado corresponde además a la Consejería de Economía y Hacienda por un lado, analizar algunos de los ingresos presupuestarios y su relación con el género, y por otro incorporar la perspectiva de género como parte de la actividad auditora que le compete.	El objetivo de esta parte es analizar la distribución del poder y la representación de hombres y mujeres en las instituciones de la Junta de Andalucía, tanto entre los Altos Cargos, como entre el personal laboral y funcionario, de las Consejerías y de sus Organismos Autónomos dependientes. La presencia equilibrada de sexos en los órganos de decisión se considera fundamental para normalizar la igualdad en la sociedad.	El objetivo de esta parte es presentar una foto de la situación de igualdad o desigualdad de hombres y mujeres en Andalucía sobre los parámetros que utiliza Naciones Unidas (PNUD) en sus Informes de Desarrollo Humano, es decir, la Presencia o Representación de mujeres y hombres en los órganos de decisión y poder, el mercado laboral y la educación.
------	---	--	---

*La experiencia acumulada en los ejercicios de 2006 y 2007 ha aportado abundante información sobre los beneficiarios últimos de las actuaciones de los programas presupuestarios y ha incentivado la reflexión en torno a las desigualdades de género en cada una de las secciones presupuestarias. No obstante, también desveló la debilidad de relevancia, pertinencia y coherencia de los análisis efectuados, así como la necesidad de mejorar tanto la aptitud como la actitud de todos los agentes implicados.<sup>297</sup>*

A partir de 2007, la Consejería de Hacienda y Administración Pública ve la necesidad de que la iniciativa vaya más allá de la elaboración de un informe en un momento concreto del año, y para ello como complemento a la metodología de las 3Rs, pone en marcha el “Proyecto G+,”<sup>298</sup>, una estrategia global para una aplicación más efectiva del presupuesto con perspectiva de género en la Administración andaluza.

#### 5.2.3.2.2 El proyecto G+

La publicación del Informe de Evaluación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma Andaluza del año 2008, (el tercero que se publicaba conjuntamente al presupuesto público de la Comunidad Autónoma) pone fin a los informes presentados en la VII legislatura.

<sup>297</sup> MARTÍNEZ AGUAYO, C, *Presupuestos sensibles al género: la experiencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía en Economía e igualdad de género: retos de la Hacienda Pública en el siglo XXI*. Instituto de Estudios Fiscales, Web: <http://www.ief.es/investigacion/Temas/Genero.htm> (consultado por última vez en enero 2012).

<sup>298</sup> “Proyecto G+: Una metodología para avanzar en igualdad de género desde los presupuestos públicos.” Consejería de Economía y Hacienda. Junta de Andalucía. Sevilla. Ed. Servicio de Estudios y Publicaciones; 2009. p. 50. Web: [http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/planif\\_presup/genero/gplus.htm](http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/planif_presup/genero/gplus.htm) (consultado por última vez en enero 2012).

Este Informe, que marcará las pautas a seguir para la elaboración de los venideros, tuvo como principal objetivo visualizar el esfuerzo que inicialmente se había desarrollado en el seno de todos los programas presupuestarios, identificados de manera consensuada según su capacidad de impacto y potencial transformador de la desigualdad de género, sobre los que se había aplicado una nueva metodología de análisis: “el método G+”.

Esta nueva metodología propuesta, profundizaba en la identificación de los motores de la igualdad de género y ha permitido como veremos más adelante un mejor seguimiento de los avances en cada uno de ellos. El carácter transversal de esta metodología permite valorar, con perspectiva, la evolución de las políticas de igualdad incorporadas al conjunto de las políticas presupuestarias. Como se señala en el propio informe:

*Con este proyecto se ha pretendido dar un salto cualitativo de singular importancia en el avance hacia un modelo sostenible de presupuestos con enfoque de género. Esta iniciativa tiene como objetivos básicos: incrementar la permeabilidad de nuestra estructura organizativa a este tipo de análisis (más profundidad), promover la sensibilización, información y formación en materia de presupuesto y género (más participación) y adoptar una metodología que nos permita modular los esfuerzos, incidiendo diferencialmente en aquellos programas presupuestarios que tienen mayor relevancia en términos de avanzar en la convergencia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.<sup>299</sup>*

El Proyecto G+ presenta un objetivo general que es identificar y clasificar los programas presupuestarios según una escala diseñada a ese propósito llamada “Escala G+” en función de su capacidad para incidir sobre los obstáculos que impiden la igualdad efectiva entre mujeres y varones, es decir persigue impulsar un cambio en la cultura de la Administración para que ésta sea capaz de analizar el impacto de los análisis, actuaciones, incentivos y, en suma, las políticas públicas desarrolladas, en la reducción de las desigualdades entre varones y mujeres constatadas por los indicadores socio-económicos. Este objetivo general se estructura en torno a cinco objetivos específicos dentro de los cuales hemos resaltado algunas de las actividades a ejecutar que nos han parecido más relevantes.

---

<sup>299</sup>Informe de evaluación de impacto de género del presupuesto de la comunidad autónoma de Andalucía para 2008, Consejería de Economía y Hacienda. Junta de Andalucía, Sevilla, Ed. Servicio de Estudios y Publicaciones; 2007. p. 438.

### “OBJETIVOS DEL PROYECTO G+”

OBJETIVO	CONTENIDO
Objetivo 1:	Adoptar un sistema de gestión de cambio cultural en la administración que ponga en valor el análisis de género como herramienta destinada a garantizar los derechos e intereses de hombres y mujeres.
Objetivo 2:	<p>Definir unos instrumentos de análisis que permitan la identificación de obstáculos a la igualdad de género en el ámbito de la realidad sobre la que el programa actúa.</p> <p>Para el cumplimiento de este objetivo la Comisión propuso las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La convocatoria de un grupo de trabajo (think-tank) de personas expertas en diferentes ámbitos del saber –científico, técnico o profesional–, que aporten orientaciones sobre obstáculos a la igualdad y palancas de convergencia.</li> <li>• La cumplimentación de un formulario de autopoicionamiento a partir del cual se identifiquen los programas motores de igualdad (G+) y de una encuesta sobre las percepciones que tienen las Direcciones Generales sobre el papel que juega el resto de programas presupuestarios en el proyecto.</li> <li>• La elaboración de documentos de trabajo que orienten el análisis de la realidad sobre la que el programa presupuestario despliega sus efectos y el impacto de las actuaciones programadas.</li> <li>• Constitución de ponencias dentro de la Comisión para el estudio de temas específicos o concreción de especificaciones para encargo de estudios externos.</li> </ul>
Objetivo 3:	Desarrollar estrategias sencillas y de fácil aplicación para determinar el impacto de género de los programas presupuestarios y su evolución temporal.
Objetivo 4:	Identificar, mediante una metodología participativa, los programas presupuestarios que pueden llegar a ser motores de convergencia en igualdad de género.
Objetivo 5:	Diseñar una metodología eficiente que facilite la incorporación de la perspectiva de género en la gestión ordinaria de los centros directivos, en el marco del proceso de elaboración del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuadro de elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Informe de evaluación de impacto de género del presupuesto de la comunidad autónoma de Andalucía para 2008.

Unos de los problemas con los que se encontró la Comisión fue identificar que programa de gastos presupuestarios podrían llegar a ser motor de convergencia en la igualdad de género (motores de igualdad), además no se podía obviar que debido a la complejidad y amplitud de la Administración andaluza<sup>300</sup> lo más aconsejable era establecer una estrategia de intervención que hiciera operativa la integración transversal de la perspectiva de género,

<sup>300</sup> Teniendo en cuenta los datos del último semestre del año 2009 se observa que el presupuesto de la Administración andaluza era el de mayor tamaño del conjunto de Comunidades Autónomas del Estado, estando gestionado en ese momento por quince Consejerías a partir de un total de cuarenta secciones presupuestarias y que se distribuían en ciento cuarenta y cuatro programas presupuestarios. Datos obtenidos de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos. DG de Coordinación Financiera con las CCAA y la UE. Web <http://serviciosweb.meh.es/apps/CCAApresupuestos/> (Consultada por última vez en enero 2012).

mediante la identificación de aquellos programas presupuestarios que tuvieran mayor capacidad para incidir sobre los obstáculos que impiden la igualdad efectiva entre mujeres y varones, descartando aquellos otros puramente instrumentales; dentro de cualquier presupuesto y en el de la Junta de Andalucía se ve muy claramente, algunos programas de gasto tienen carácter instrumental de apoyo a los centros gestores o en otros casos sus competencias son de mera ejecución y resulta muy complicado entenderlos como motores de igualdad de género.

*Adoptar un nivel de exigencia similar para todos los programas en el análisis y contribución a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres genera desconcierto y desvía el enfoque de los que son verdaderamente importantes, los que se han dado en llamar motores de igualdad. Según esto, lo aconsejable es establecer una clasificación que nos permita discriminar sobre qué programas recae la responsabilidad de lograr avances significativos en términos de igualdad. La clasificación adopta como conceptos básicos la sensibilidad y la relevancia al género. El primero de ellos trata de capturar en qué medida el programa presupuestario afecta directa o indirectamente a personas; mientras que el segundo, demostrada la sensibilidad al género, recoge la importancia relativa que tiene el programa en función de cuatro criterios básicos:*

- *Poder transformador: captura el nivel de competencias de cada programa presupuestario. Un programa muy relevante según este criterio es aquél que tiene plenas competencias para actuar.*
- *Capacidad de impacto: captura el volumen de población sobre la que actúa el programa presupuestario. A mayor volumen de población, por tanto, mayor relevancia.*
- *Relevancia funcional: recoge las opiniones de consenso de expertos sobre el papel de determinadas políticas públicas para reducir la desigualdad de género.*
- *Gestión de Personal: aquellos programas cuyas actuaciones afectan a la gestión de personal de los centros de trabajo de la Junta de Andalucía.<sup>301</sup>*

La solución para la identificación de programas como motores de igualdad vino a través del desarrollo de una metodología de asignación según una matriz de correspondencia capaz de hacer visibles aquellos programas que tenían una especial incidencia para alcanzar la igualdad de género. De esta manera teniendo en cuenta una serie determinada de elementos de análisis, se le asignó a cada programa una categoría en la matriz de correspondencia que se

---

<sup>301</sup>Informe de evaluación de impacto de género del presupuesto de la comunidad autónoma de Andalucía para 2008... op. cit., p. 33.

presenta a continuación, y según su posición en la escala G+<sup>302</sup> (g0, g1, G y G+) estos programas presupuestarios estarán obligados a presentar avances en relación a determinados ítems diseñados por la Comisión.

“ESCALA G+”

RELEVANCIA	SENSIBILIDAD AL GÉNERO	
	SÍ	NO
<b>BAJA</b>	g1: Programas con incidencia sobre personas fundamentalmente de carácter interno o instrumental.	g0 Programas sin incidencia directa sobre personas e incidencia indirecta baja o nula.
<b>MEDIA</b>	G Programas de bajo impacto, reducida capacidad transformadora o relevancia funcional escasa.	
<b>ALTA</b>	G+ Programa de gran interés por su capacidad transformadora, impacto relevancia funcional reconocida.	

Matriz de correspondencia.

Hay que tener presente que la clasificación de los programas presupuestarios de la Escala G+ no es definitiva, está sujeta a revisiones anuales por parte de la Comisión de Evaluación de Impacto de Género del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En estas revisiones y evaluaciones se contemplan la posibilidad de cambios en la estructura orgánica, funcional y competencial de los programas presupuestarios, debidos a la creación de nuevas Consejerías y Agencias Administrativas, la reorganización interna de éstas, la creación y supresión de programas presupuestarios o reconsideraciones sobre la aplicación de los criterios de la Clasificación G+.

El desarrollo del Programa G+ contempla la una estrategia de implantación en tres etapas: A) Clasificación de los programa o etapa de identificación y clasificación de los programas según la Escala G+. Esta etapa tiene un carácter eminentemente participativo, todos los centros directivos de la Junta de Andalucía deben realizar aportaciones sobre su posición y expectativas, así como sobre el resto de centros directivos participantes. B) Avances en la evaluabilidad de los programas respecto de la perspectiva de género o etapa de

<sup>302</sup> Tal y como se indica en el Informe de evaluación de impacto de género del presupuesto de la comunidad autónoma de Andalucía para 2008, para realizar la clasificación G+ de los programas presupuestarios, se ha desarrollado una metodología de asignación, capaz de visibilizar aquellos programas donde las políticas públicas de la Junta de Andalucía tienen especial incidencia para la consecución de la igualdad de género.



elaboración y cumplimiento de los Documentos de Orientaciones Estratégicas (DOE G+) que veremos más adelante. En esta etapa una vez cerrada la clasificación G+ cada programa está obligado a presentar a la Comisión un Plan de Trabajo en el que se concreten las exigencias que le son propias según su posición en la escala G+. C) Desarrollo e implantación de una metodología de seguimiento y control de los logros conseguidos o etapa de seguimiento y evaluación de los resultados, porque lo que no se evalúa se devalúa y esta evaluación es la que va a marcar las pautas para la elaboración de los siguientes presupuestos públicos de la CA andaluza.

En resumen, observamos como la estrategia de desarrollo de Presupuestos con Enfoque de Género seguida en la Comunidad Autónoma andaluza, incorpora a la metodología sueca de las 3Rs, la metodología G+ y esto nos ha proporcionado la posibilidad de clasificar la totalidad de los programas presupuestarios en función de su contribución a la igualdad de oportunidades de varones y mujeres, esta contribución se estima en función de su sensibilidad y relevancia al género, sobre cuatro criterios básicos: el poder transformador, la capacidad de impacto en términos de la población sobre la que ejerce influencia el programa, la relevancia funcional y, por último, la responsabilidad sobre la gestión del personal, en este caso el de la Junta de Andalucía.

De esta manera todos los programas de gasto se dividirán en aquellos que no afectan, ni directa ni indirectamente a personas (g0) , aquellos de carácter puramente instrumental o con bajos ratios respecto de los criterios establecidos (g1), aquellos que se consideran programas que, sin tener la capacidad transformadora de los G+ ocupan un lugar relevante y están llamados a contribuir de forma proactiva a la implantación de la estrategia general (G), y a los que se consideran motores de igualdad (G+).

La clasificación de los programas hace posible el seguimiento de los créditos de forma interanual, permitiendo valorar el esfuerzo financiero que lleva a cabo la Comunidad Autónoma en esta materia.

#### **EVOLUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SEGÚN LA CLASIFICACIÓN G+**

<b>ESCALA G+</b>	<b>Núm. programas 2007</b>	<b>Núm. programas 2008</b>	<b>Núm. programas 2009</b>	<b>Núm. programas 2010</b>	<b>Núm. programas 2011</b>
<b>g0</b>	18	19	18	12	10
<b>g1</b>	53	53	53	46	47
<b>G</b>	36	37	44	44	38
<b>G+</b>	37	37	41	39	39
<b>Total</b>	<b>144</b>	<b>146</b>	<b>156</b>	<b>141</b>	<b>134</b>

Cuadro de elaboración propia a partir de los datos reflejados en los distintos Informes de Evaluación del Impacto de Género 2007-2011.

### 5.2.3.2.3 El Documento de Orientaciones Estratégicas (DOE)

En octubre de 2008 se presentó, en pleno contexto de crisis económica internacional, el Informe de Evaluación de Impacto de Género del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2009. Se trató del cuarto Informe publicado, contenía grandes novedades por un lado debido a la publicación durante el año 2007 de las dos leyes de igualdad de género, la estatal y la andaluza, que supusieron entre otras cosas un gran avance para la evaluación del impacto de género de las políticas públicas; y por otro debido a la modificación legislativa de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, anteriormente analizada, mediante la que se incorporaba la obligatoriedad del Informe de Impacto de Género en la documentación presupuestaria a presentar<sup>303</sup>.

El Informe de 2009 está estructurado, como los tres anteriores, en tres capítulos principales que responden a la metodología sueca de análisis de impacto de género 3R-3T, es decir Realidad, Representación y Recursos (3R) en un marco temporal de Pasado, Presente y Futuro (3T). Pero a diferencia de los anteriores Informes, en este se profundizó en la evaluación de la situación actual desde la perspectiva de género involucrando para ello a todas las Consejerías.

Si tenemos en cuenta la escala anteriormente descrita prevista para la implantación del proyecto G+, recordaremos que en el año 2007 todos los programas presupuestarios fueron clasificados según su sensibilidad y relevancia de género. Posteriormente durante el primer semestre del año 2008, todos los centros directivos, a excepción de los responsables de la gestión de programas catalogados como g0, según el cronograma previsto, desarrollaron los compromisos dispuestos en el Proyecto G+.

Estos compromisos se recogieron en un documento-guía de planificación: el Documento de Orientaciones Estratégicas (DOE G+).<sup>304</sup> Tal y como se define en el propio Informe de Evaluación del Presupuesto de 2009, el DOE G+ es una herramienta que ayuda a concretar las actuaciones que, en esta materia, pone en marcha cada Consejería, tanto desde la vertiente de adaptación interna de procedimientos como en la formación de los objetivos estratégicos de largo alcance.

---

<sup>303</sup> *Informe de evaluación de impacto de género del presupuesto de la comunidad autónoma de Andalucía para 2009*. Consejería de Economía y Hacienda. Junta de Andalucía, Sevilla, Ed. Servicio de Estudios y Publicaciones, 2008, p. 428.

<sup>304</sup> *Documento de Orientaciones Estratégicas*, puede consultarse en Web: [http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/planif\\_presup/genero/DOE/doe.htm](http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/planif_presup/genero/DOE/doe.htm). (Consultada en última ocasión en enero 2012).

A través de él se pretende hacer tomar conciencia a la Administración de las necesidades que tienen los centros en materia de género, tanto en lo que respecta a la formación de su personal como a los recursos de los que se dispone. Se pretende hacer reflexionar en profundidad sobre la inclusión de la dimensión género en el trabajo ordinario de cada programa presupuestario, sistematizando y codificando la información relevante a género.

Los compromisos de cada Consejería se recogen en el DOE y se planifican a corto plazo, para un periodo temporal de un año, en el marco de objetivos estratégicos más alejados en el tiempo. De esta manera, en cada compromiso se desarrollan actuaciones concretas a poner en marcha y el alcance de las mismas.

Retomando el cronograma para implementación del proyecto G+, una vez elaborados los DOE, en la tercera fase prevista, se darán a conocer a la Comisión de Evaluación de Impacto de Género del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía que deberá evaluarlos teniendo en cuenta, elementos de evaluación tales como: la normativa en materia de igualdad, en especial, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción para la Igualdad de Género en Andalucía, las funciones que prevé el Decreto de estructura orgánica de las Consejerías, la documentación procedente de los programas operativos de Fondos Europeos, la Estrategia para la Competitividad de Andalucía 2007-2013 y la planificación de carácter sectorial.

El Informe de Evaluación de Impacto de Género del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2010 presenta el desarrollo del proceso de valoración de los DOE enviados por las distintas Consejerías<sup>305</sup>. Con los resultados obtenidos, se ha elaborado un documento de recomendaciones generales, que se ha hecho llegar a los distintos Centros Directivos.

Se había previsto que para finales de año de 2010, la estrategia DOE se completaría con la elaboración de un modelo de informe de progresos, que se hará llegar a las Consejerías con el objetivo de que la Comisión de Impacto de Género del Presupuesto pueda realizar una valoración intermedia del cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada centro gestor.

---

<sup>305</sup> *Informe de evaluación de impacto de género del presupuesto de la comunidad autónoma de Andalucía para 2010*, Consejería de Economía y Hacienda. Junta de Andalucía, Sevilla, Ed. Servicio de Estudios y Publicaciones, 2009, p. 414.

#### 5.2.3.2.4 El Fondo G+

Revisados los cuatro Informes de Evaluación de Impacto de Género de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía anteriores, analizaremos la principal aportación para la aplicación de la metodología G+ que aparece en el Informe de Evaluación de Impacto de Género del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 2010. Se trata del Fondo G+, un conjunto de incentivos que vienen a apoyar al Proyecto G+, y que cobran una especial importancia en una coyuntura de crisis económica como la actual. Estos incentivos están destinados a apoyar los esfuerzos que se están realizando en la Administración andaluza para integrar la igualdad de género a través de los presupuestos.

Así en un contexto de crisis económica mundial, la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, ha considerado vital reforzar el compromiso con la igualdad y para ello ha impulsado la creación de un fondo anual, el Fondo G+, para la financiación de proyectos que promuevan la inserción de la perspectiva de género en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma.

La repartición de estos incentivos para proyectos que promuevan la inserción de la perspectiva de género en el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en adelante Fondo G+ se ha llevado a cabo durante el año 2010 a través de la: Orden de 27 de enero de 2010, por la que se regula la concesión de incentivos a proyectos que promuevan la inserción de la perspectiva de género en el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Fondo G+) y se establece la concesión para el año 2010.<sup>306</sup>

El objeto del Fondo G+, es contribuir a la financiación de proyectos<sup>307</sup> liderados por los centros directivos responsables de los programas presupuestarios de la Junta de Andalucía que, en última instancia, permitan fomentar la igualdad de género mediante su compromiso con el Proyecto G+, cuyo programa de trabajo comprende la estrategia de inserción de la dimensión de género en el presupuesto de la Junta de Andalucía.

Los proyectos susceptibles de ser incentivados deberán estar dirigidos, tal y como se señala en la citada Orden de 27 de enero, a lograr alguno de los siguientes objetivos:

---

<sup>306</sup> BOJA núm. 25, de 8 de febrero de 2010.

<sup>307</sup> Los proyectos propuestos por los centros directivos deben conectarse con los compromisos recogidos en el Proyecto G+ para los diversos programas presupuestarios de la Junta de Andalucía.

*a) Potenciar aquellas iniciativas orientadas a la investigación con enfoque de género de la realidad de la ciudadanía andaluza con el fin de detectar las desigualdades que aún persisten en la esfera social, económica, política, que sustenta la diagnosis de necesidades presupuestarias.*

*b) Fomentar el diseño de actuaciones presupuestarias con enfoque de género cuyo objeto será abordar aquellas situaciones en las que se hayan detectado brechas en la igualdad entre hombres y mujeres.*

*c) Favorecer el fortalecimiento de las capacidades y el conocimiento en materia de género y su relación con el proceso presupuestario por parte del personal implicado en dicho proceso, consiguiendo así un cambio cultural en la Administración andaluza que genere protocolos novedosos y rutinas de Informe de evaluación de impacto de género del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para análisis, fomento el liderazgo y mejore la gestión de recursos.*

#### **5.2.3.2.5 Buenas prácticas: Orden de 20 de Mayo de 2010 por la que se dictan las normas para la elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía**

Con la publicación de la Orden de 20 de Mayo de 2010 por la que se dictan las normas para la elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía,<sup>308</sup> se alcanza una de las metas propuestas en la aplicación de la metodología G+, ya que con la finalidad de evaluar la oportunidad y las necesidades de gasto de los programas presupuestarios se incorpora, en la citada Orden, un modelo único<sup>309</sup> de recogida de información para la elaboración del Informe de Impacto de Género relativo a las actuaciones financiadas con cargo al presupuesto 2011<sup>310</sup>.

De esta manera se les proporciona a todas las Consejería o centro gestor, una herramienta analítica homogénea para que a través de ella puedan recabar la información necesaria para la elaboración del Informe de Impacto de Género del Presupuesto 2011.

La información recabada deberá ser enviada por los centros gestores a la Dirección General de Presupuestos antes del próximo 13 de octubre del presente año 2010.

La creación de esta herramienta se va traducir en mejoras cuantitativas y sobre todo cualitativas ya que va a permitir el análisis comparado de los resultados obtenidos por cada centro gestor, y en base a ello podrán corregirse las brechas de género que se observen.

---

<sup>308</sup> BOJA núm. 104 de 31 de mayo de 2010.

<sup>309</sup> Anexo X “Modelo de Informe de Impacto de Género del presupuesto de la Junta de Andalucía para 2011”. Orden de 20 de Mayo de 2010 por la que se dictan las normas para la elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía.

<sup>310</sup> Artículo 6.1.1 e) de la Orden de 20 de Mayo de 2010 por la que se dictan las normas para la elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía.

#### **5.2.3.2.5.1 Estructura y contenido del Anexo X “Modelo de Informe de Impacto de Género del presupuesto de la Junta de Andalucía para 2011”**

El “Anexo X Modelo de Informe de Impacto de Género del presupuesto de la Junta de Andalucía para 2011” consta de dos partes principales; la primera referida a la estructura del informe de impacto de género por Consejerías y una segunda parte que recoge las observaciones.

La primera parte está dividida a su vez, en tres apartados: introducción, recursos y personal. Esta estructura que sin duda tiene su origen en la metodología de análisis sueca de las 3Rs, ya estudiada, pretende recoger en primer lugar las desigualdades detectadas los centros directivos en el ámbito de las competencias que tienen asumidas (análisis de la realidad), conocido este extremo, se solicita del centro gestor que detalle cuáles son los objetivos, líneas de trabajo y actuaciones de los programas presupuestarios orientados a corregir desigualdades entre sexos para que finalmente se exponga, si es el caso, las medidas que ha adoptado el centro directivo en materia de promoción profesional, formación y prácticas de conciliación (como reorganización o flexibilización de los horarios, por ejemplo) para corregir los desequilibrios de género.

El anexo recoge cuatro consideraciones, que ponen de manifiesto el alto nivel en formación en materia de igualdad que se presuponen deben tener los centros gestores, muestra de ello quizás es lo expresado en la tercera consideración:

*Es fundamental distinguir entre la información que debe contener el informe y la que se recoge en otros documentos trabajados en el marco del Proyecto G+. El Informe debe evidenciar qué recursos/resultados se van a aplicar/obtener en materia de igualdad con los créditos con los que va a contar cada Consejería/Agencia Administrativa en 2011, sin entrar en aspectos de carácter interno que tiene que ver con la aplicación de la estrategia de presupuestos con perspectiva de género (Proyecto G+) en cada centro directivo.<sup>311</sup>*

A finales de diciembre de 2010 se publicó la Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía<sup>312</sup> para el año 2011, y posteriormente,

---

<sup>311</sup> Anexo X Modelo de Informe de Impacto de Género del presupuesto de la Junta de Andalucía para 2011.

<sup>312</sup> LEY 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011, BOJA núm. 255, 31 de diciembre 2010.

en mayo de 2011 ya se publicaba la Orden de 23 de mayo de 2011, por la que se dictan normas para la elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2012.<sup>313</sup> Esta orden recogía en su artículo sexto, relativo a la elaboración y tramitación del anteproyecto, las normas para elaborar el Informe de Evaluación de Impacto de Género:

*e) Informe de Evaluación de Impacto de género:*

*Para la confección del informe de evaluación de impacto de género, los centros gestores, a través de los vocales de la Comisión de Impacto de Género, remitirán a la Dirección General de Presupuestos, antes del día 13 de octubre de 2011, la información relativa al análisis con perspectiva de género de las actuaciones financiadas con cargo al presupuesto 2012, según las instrucciones contenidas en el Anexo X.*

Haciendo un análisis comparativo podemos afirmar que el citado Anexo X es estructuralmente el mismo que recogía la Orden de 20 de Mayo de 2010, por la que se dictan las normas para la elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía, no obstante y en cuestión de fondo observamos que lamentablemente en la Orden de 2011, desaparece el artículo relativo a las observaciones que en la Orden de 2010 si que se hacían, y a las que anteriormente hacíamos alusión.

A nuestro juicio esto es un terrible error, pues en cierta manera se está legitimando (por omisión) el que no se evidencie qué recursos/resultados se van a aplicar/obtener en materia de igualdad con los créditos con los que va a contar cada Consejería/Agencia Administrativa en 2012, como ya pasara con el Informe de Evaluación de Impacto de Género del presupuesto de la comunidad autónoma de Andalucía para 2011, en el que únicamente se señalaron los objetivos a conseguir de algunos proyectos financiados por el Fondo G+ con una breve descripción de sus objetivos, resultados esperados y potencial de aplicación a largo plazo.

Así pues, y pese a ser el segundo año consecutivo que la normativa impone un modelo de Informe de Evaluación de Impacto de Género, observamos como los citados informes siguen teniendo la misma estructura que los de los años precedentes, solo que aumentan los indicadores que cada año se usan; pero estructuralmente no se han visto modificados por la creación de este Anexo X.

---

<sup>313</sup> BOJA núm. 103, 27 de mayo 2011.

De hecho el Informe de evaluación de impacto de género del presupuesto de la comunidad autónoma de Andalucía para 2011, con respecto a su estructura señala que:

*La estructura del Informe de Evaluación de Impacto de Género del Presupuesto 2011 sigue el formato de ediciones previas. Por tanto, en primer lugar se presentan las novedades y avances acaecidos en 2010 con respecto a la estrategia de presupuestación con perspectiva de género que la Junta de Andalucía inició en 2003 mediante la Ley 18/2003 de acompañamiento a los Presupuestos para 2004.*<sup>314</sup>

Teniendo en cuenta que para el próximo marzo de 2012 están previstas las elecciones autonómicas, será interesante analizar si los venideros Informe de evaluación de impacto de género del presupuesto de la comunidad autónoma de Andalucía, se estructuran finalmente conforme a lo establecido en el Anexo X, o bien si es este modelo de anexo el que termina desapareciendo.

No deseamos cerrar este capítulo sin hacer un breve repaso a las nociones que consideramos más relevantes. Debemos partir de la base de que es a través de los presupuestos públicos desde donde cada sociedad determina cual será la asignación y la ejecución de los recursos de los que dispone. Analizando el presupuesto público se puede conocer cuáles son las prioridades que cada gobierno asigna a las diferentes opciones.

Así el presupuesto se configura como otra de las herramientas a través de las cuales los gobiernos deben alcanzar sus objetivos económicos y de desarrollo, y para ello debe planificar los gastos que va a realizar y los ingresos que le permitirán llevar a cabo su propuesta.

Todo presupuesto sensible al género debe incluir una transversal de género, cuyo objetivo es la igualdad y no discriminación entre las personas que componen la ciudadanía. La integración de la transversal de género se realizará desde diversas perspectivas, en todas las políticas, planes, programas y acciones. La perspectiva de género será una visión más abierta y el enfoque de género, lo emplearemos para analizar cuestiones más concretas y centradas en problemas específicos.

---

<sup>314</sup>Informe de evaluación de impacto de género del presupuesto de la comunidad autónoma de Andalucía para 2011, Consejería de Economía y Hacienda. Junta de Andalucía, Sevilla, Ed. Servicio de Estudios y Publicaciones, 2010, p. 454. (El subrayado es nuestro).



La integración de la transversal de género puede llevarse a cabo a través de la elaboración de los Informes de Evaluación del Impacto en función del Género que debe acompañar y analizar anualmente a los presupuesto públicos de la CA andaluza.

Estos informes no deben ser confundidos con el Informe de Evaluación del Impacto de Género de la normativa, pues si bien su objetivo es el mismo, conseguir la igualdad y la no discriminación de la ciudadanía, erradicando las desigualdades históricas que han tenido las mujeres, el camino y las herramientas empleadas son diferentes.

Así, en el Informe de Evaluación del Impacto en función del Género que analiza el presupuesto público con perspectiva de género se incluirá un análisis donde se determinará si la institución presupuestaria, objeto de estudio, integra el enfoque de género en todas las políticas, planes y programas, o bien no considera los derechos y necesidades de la ciudadanía en función del género.

Señalaremos como la Junta de Andalucía ya desde el año inició en 2003 su estrategia de integración del enfoque de género a través del presupuesto público, siendo las primeras medidas adoptadas para llevar a cabo esta estrategia de tipo normativo.

Así, la Ley 18/2003 de Medidas Fiscales y Administrativas, dispone la creación de dos instrumentos fundamentales para dicha estrategia. Por una parte la obligación legal de acompañar los Presupuestos de un Informe de Evaluación de Impacto de Género y, por otra la constitución de una Comisión, dependiente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, para su realización y aprobación.

Desde el año 2003 hasta nuestros días la Junta de Andalucía no ha dejado de elaborar normativas que han ido mejorando y perfeccionando estas herramientas, convirtiendo a Andalucía en el referente nacional e internacional en lo relativo a la elaboración de presupuestos públicos con enfoque de género.

# Capítulo 6. Conclusiones

---

## 6.1 Conclusiones jurídicas

El punto de partida que definía esta investigación era el hecho, más que demostrado y contrastado, que pese a la gran cantidad de legislación existente, la desigualdad real y de oportunidades entre las personas lejos de tender a desaparecer, se mantiene o, incluso, en muchos ámbitos de la vida crece cada día. Esta situación de desigualdad real y de oportunidades, se observa claramente cuando se compara la situación de partida y el acceso a las distintas oportunidades entre mujeres y hombres.

Además desde un punto de vista legislativo, se observa cómo en ocasiones la aplicación de determinadas normas, aparentemente neutras, puede provocar distintos resultados en mujeres y en hombres, perpetuando unas veces, y haciendo crecer, en otras, las brechas de desigualdad entre unas y otros en nuestra sociedad.

Como juristas y tomando como referencia la legislación relativa a la estimativa y evaluación del impacto de género en la normativa en el ámbito internacional, en el europeo, pero sobre centrándonos por un lado en el estudio de la legislación estatal, principalmente a través de lo establecido en artículo 14 CE, en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en la Ley 30/2003 de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración de impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, y del Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo que la desarrolla.

Y por el otro lado, trabajando de manera paralela en el estudio de legislación autonómica andaluza en particular sobre el Estatuto de Autonomía, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, y la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, que ha sido desarrollada hasta febrero del presente año 2012, por el recientemente derogado Decreto 93/2004, de 9 de marzo, por el que se regula el informe de evaluación de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno.

Decidimos llevar a cabo un análisis cuantitativo y cualitativo, en el ámbito estatal y autonómico andaluz, de los Informes de Evaluación de Impacto de Género y de las Memorias de Análisis de Impacto Normativo, como las herramientas diseñadas a través de toda la normativa señalada para la detección, eliminación y prevención de disposiciones normativas

que en el momento de su redacción se configuran como neutras, y que pudiesen resultar sexistas una vez publicadas en los Boletines Oficiales, atentando de esta manera contra el principio constitucional de igualdad y no discriminación, lo que aumenta la brecha de género existente entre unas y otros.

De esta manera, y como resultado de los años invertidos en la presente investigación pretendemos, en este apartado establecer una serie de conclusiones que nos lleven a poder responder a la hipótesis inicial sobre la cual versa el presente trabajo de investigación:

*¿Están los Informes de Evaluación de Impacto de Género y las Memorias de Análisis de Impacto Normativo, como herramientas para la estimativa y evaluación del impacto de género en la normativa estatal y autonómica andaluza, contribuyendo desde un punto de vista legislativo, a la eliminación de la brecha de género que separa a mujeres y hombres?*

1. La aplicación de las medidas recogidas a través de los IEIG y de la MAI no tiene carácter vinculante, no existe obligación jurídica de contemplar en los textos legales definitivos, las medidas ya sean tipo corrector o supresor. No hay a día de hoy ninguna disposición normativa que obligue al legislativo a tomar en consideración las medidas que los informes y memorias recogen

Así pues la obligación de elaborar Informes de Evaluación de Impacto de Género y Memorias de Análisis de Impacto Normativo recogida termina justo ahí, en la obligación de su elaboración, no se exige la observación de lo en ellas recogido.

Observamos por tanto que si después de haber elaborado un Informe de Evaluación de Impacto de Género o una Memoria de Análisis Normativo, se le priva del carácter vinculante, o si no se recoge en la disposición normativa que se trate las medidas que ellas están recogidas, el uso de estas herramientas no contribuye en forma alguna a la eliminación de las brechas de desigualdad.

2. La segunda conclusión a la que llegamos y que sienta sus bases en la anterior, es que únicamente podremos conocer en qué medida la elaboración de estos informes y memorias ha influido en la eliminación de la brecha de desigualdad, si durante todo el proceso de su elaboración se llevan a cabo dos análisis: en primer lugar un análisis *ex ante* o de diagnostico, para conocer la situación de partida de unas y otros; y en segundo lugar deberá efectuarse dos años después de su elaboración un análisis *ex* -

*post* de aplicación de las mismas, con el objetivo de evaluar cómo la aplicación de la norma corregida ha influenciado en la vida de unas y de otros si este ha sido el caso.

Aunque sin carácter vinculante, consideramos que el hecho de poder llevar a cabo un análisis de seguimiento del proceso de elaboración de los Planes de especial relevancia, los Reglamentos, o Proyectos de Ley susceptibles de ir acompañados por estos informes o memorias, proporcionaría la posibilidad de hacer correcciones a corto plazo, en puntos que son fácilmente detectables y subsanables dentro de este proceso de elaboración, Así a modo de ejemplo, se podría señalar que el hecho de llevar a cabo un análisis de seguimiento durante la redacción de las disposición legislativa que se esté elaborando, podría permitirnos la revisión y posible corrección en caso de que se haya hecho un uso sexistas del lenguaje.

3. Tras la promulgación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la publicación del Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo, regula, seis años después de su promulgación, la Ley 30/2003 de 13 de octubre. Este Real Decreto viene a establecer, en el ámbito estatal, la transición del Informe de Impacto de Género a la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, un documento cuantitativamente más amplio, que homogeniza la manera de realizar los análisis de los distintos impactos que puede provocar en la sociedad la normativa que se trate, ya que junto al impacto económico y presupuestario también se establece en estas memorias que debe recoger el análisis del impacto de la normativa en función del género; tal y como se señala en la Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, diseñada a tal fin.

Hemos observado que la transición de los IEIG a MAI en lo referente al análisis del impacto de la normativa en función de género, ha repercutido negativamente en la elaboración de estas herramientas, pues los análisis del impacto en función del Género que se recogen en las Memorias de Análisis Normativo son de peor calidad que los que se llevaban a cabo a través de los Informes de Evaluación de Impacto de Género tanto cualitativa como, sobre todo, cuantitativamente. Así podemos afirmar que los errores de los que adolecían los IEIG no se han subsanado a través de las MAI únicamente se ha homogeneizado la metodología de elaboración, ha habido una reparación de forma pero no de fondo.

4. Resulta sorprendente que la autoría de estas herramientas, IEIG y MAI, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico andaluz, y pese que se viene elaborando desde el año 2003, aún no está definida legislativamente; incluso se desconoce a quien se debe atribuir la autoría de Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.

Consecuencia de esta omisión legislativa, de esta ausencia de mención expresa a la persona u organismo que debe elaborar estas herramientas, es que desde un punto de vista cualitativo no se puede establecer qué formación específica tiene o ha adquirido esa persona u organismo en temas relacionados con la igualdad de género en los ámbitos sociológico jurídico y económico. No debemos dejar de señalar que la falta de regulación sobre la formación en temas relacionados con la igualdad de género por parte de las personas que elaboran estas herramientas puede convertir al análisis del impacto normativo en un mero trámite más a cumplimentar en el dossier legislativo, alejándolo del objetivo último de eliminar las brechas de desigualdad entre unas y otros sobre el que están constituidas estas herramientas.

5. Las medidas que se recogen a través de la elaboración de los IEIG en el ámbito autonómico andaluz, al igual que pasara en el ámbito estatal, tampoco tienen carácter vinculante, y en el caso de la comunidad autónoma andaluza, esta ausencia de carácter vinculante es especialmente lamentable porque el hecho de que la elaboración de estos informes este sometido a un sistema de doble filtro, gracias a la participación del Instituto de la Mujer en la realización de los Informes de Observaciones a los Informes de Impacto de Género, proporciona observaciones que de ser de obligatorio cumplimiento sí que efectivamente servirían para eliminar los posibles enunciados y consecuencias sexistas en la normativa.

El principal problema con el que se enfrentan los IEIG y los IOIEIG es su anacronismo con respecto al *iter legislativo* seguido por el Proyecto de Ley. Y es la acción de elaborar un Informe de Evaluación de Impacto de Género por una Consejería determinada para un Proyecto de Ley y su correlativo IOIEIG, es una acción finita que termina en el momento mismo de su elaboración. Así una vez realizados, estos no sufren modificaciones algunas a lo largo del *iter legislativo* que sigue el Proyecto de Ley al que acompañan. De tal manera que si el Proyecto de Ley al que acompañan sufre modificaciones en virtud de las enmiendas que los diferentes grupos políticos parlamentarios le presenten, no ocurre lo mismo

con los citados informes que no son ni revisados ni actualizados con respecto al nuevo texto normativo que se va a ir configurando a través del ejercicio democrático que es el *iter legislativo* que sigue cada Proyecto de Ley, hasta que se transforma en texto normativo definitivo, es decir en Ley, Reglamento o Plan de especial relevancia, según sea el caso que se trate.

6. Además de los Informes de Evaluación de Impacto de Género y de las Memorias de Análisis de Impacto Normativo, otra de las herramientas que están usando los gobiernos para intentar alcanzar su objetivo de reducción de la brecha de desigualdad entre las personas que componen la ciudadanía; es la elaboración de presupuestos públicos orientados a resultados con enfoque de género como metodología a seguir para una aplicación transversal del principio de Mainstreaming en la administración pública.

Esta metodología en el Estado francés, se ha revelado como el instrumento idóneo para la integración del género en las políticas públicas, ya que su carácter horizontal asegura la transversalidad de este enfoque en todas las actuaciones y permite orientarlas hacia la igualdad.

En el caso de la Comunidad Autónoma Andaluza la integración de la transversal de género se lleva a cabo a través de la elaboración de los Informes de Evaluación del Impacto en función del Género que debe acompañar y analizar anualmente al presupuesto público de la CA andaluza. Estos informes no deben ser confundidos con el Informe de Evaluación del Impacto de Género de la normativa, pues si bien su objetivo es el mismo, conseguir la igualdad y la no discriminación de la ciudadanía, erradicando las desigualdades históricas que han tenido las mujeres, el camino y las herramientas empleadas son diferentes.

De manera transversal a todas las conclusiones expuestas y para acabar este apartado de conclusiones jurídicas, no queremos dejar de señalar que, como juristas, consideramos necesario llevar a cabo una apertura de las categorías jurídicas existentes para proporcionar una cobertura legal a todas las personas que conforman la sociedad. Es necesario crear nuevos conceptos de sujetos de derecho, que visibilicen la realidad social existente, por ello nos adherimos, desde un punto de vista jurídico, a las posturas post-feministas actuales que instan a la “desestabilización” del tándem sexo/género desde el binarismo biológico y social alineado con él.

Esta investigación, nos ha hecho reflexionar sobre la importancia de la visibilización de las personas. Su inclusión como sujetos jurídicos y la necesidad de encontrar un concepto que no esté basado en el binarismo, quizá sea la nueva línea de investigación que emprendamos. La sociedad espera respuestas y nuevos modelos más incluyentes desde el ámbito jurídico que contemple la riqueza y variedad del ser humano.

## 6.2 Propuesta de mejora para la metodología de elaboración de los Informes de Evaluación de Impacto de Género y las Memorias de Análisis de Impacto Normativo

A la luz de las estas conclusiones, y de todo el trabajo de investigación que nos ha llevado a ellas, hemos considerado oportuno señalar una serie de ítems, los cuales, aplicados a la metodología de elaboración de los Informes de Evaluación de Impacto de Género y las Memorias de Análisis de Impacto Normativo, podrían ayudar a suprimir algunas de las carencias que a través de nuestro trabajo hemos detectado y puesto de manifiesto.

De igual manera, estimamos que la introducción de estas propuestas podría mejorar el sistema de obtención de sus resultados en términos de eficacia y eficiencia contribuyendo así en eliminación de la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres.

Consideramos que esta propuesta podría convertirse en una nueva investigación que requeriría de un análisis pormenorizado fruto del estudio. Aquí nos limitaremos, tan solo, a señalar, lo que puede ser nuestra próxima investigación.

La propuesta de esta mejora metodológica que presentamos debe encontrar su premisa inicial, siguiendo la lógica aristotélica, en la necesidad de otorgar un carácter vinculante, no solamente al hecho de elaborar los informes y las memorias, sino también al hecho de tomar en consideración todas aquellas medidas, correctoras o supresoras, que se recojan a través de dichas herramientas.

Una vez establecido el carácter vinculante, consideramos que dado que la elaboración de los Informes de Evaluación de Impacto de Género y las Memorias de Análisis de Impacto Normativo es una práctica legal de obligado cumplimiento tanto en el ámbito estatal como en la mayoría de las comunidades autónomas española, sería conveniente establecer una única metodología de elaboración para todos los informes y memorias que se elaboren en el Estado español. Con esto se pretende homogeneizar todo el sistema de análisis del impacto de género.

Esta homogenización nos daría la oportunidad de establecer sistemas de evaluación *ex post* comunes, es decir, nos permitiría crear indicadores de análisis del impacto de género, que a medio plazo pudiesen aportarnos una información válida que no permitiese la comparación de los resultados obtenidos entre las diferentes comunidades autónomas y el Estado.

Hemos de señalar que no es el objetivo de este trabajo de investigación, ni de este apartado de propuestas de mejora, la deconstrucción de todo el sistema de análisis del impacto de género estatal y autonómico existente. Al contrario, consideramos que a través de algunas correcciones a las herramientas ya existentes, tales como la “Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo” podrían hacer de nuestro sistema de análisis del impacto de género de la normativa, un referente mundial.

En este sentido consideramos que la “Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo” podría ser corregida y completada con lo que se recoge en la “Guía de aplicación práctica, para la elaboración de informes de impacto de género de las disposiciones normativas que elabore el gobierno, de acuerdo a la Ley 30/2003” elaborada por Fundación Mujeres, sobre todo en lo referente al análisis de la situación de partida que tan bien recoge esta guía.

De otro lado, no podemos perder de vista las técnicas empleadas por la Comunidad Autónoma Andaluza. Son un referente europeo en lo relativo al análisis del impacto de género; sobre todo, a la luz de los buenos resultados que se obtienen con un sistema de análisis de doble filtro en virtud de la potestad auto-organizativa inherente a la autonomía reconocida en el Estatuto de Andalucía. Consideramos que dentro de la idea de la homogenización del sistema de análisis de impacto de género, la mejora cualitativa de los resultados, podría venir de la mano del establecimiento obligatorio de dicho sistema de doble filtro para todos aquellos informes y memorias que deban elaborarse según la normativa vigente

En este sentido, y particularmente en lo relativo a la siempre espinosa cuestión de la autoría de los informes y memorias, contemplamos como posibles opciones (incluso de manera complementaria) la desconcentración y la descentralización de los servicios que deben elaborar estos informes.

No obstante, como ya señalásemos en el trabajo de investigación no podemos pasar por alto que la Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria del Análisis de Impacto



Normativo, que pretendemos seguir usando como referente para la elaboración de las memorias y de los informes, apuesta más por un sistema integración orgánica que por la segunda opción.

Así, la integración orgánica de los servicios implicaría que la elaboración de los informes y memorias podría elaborarse desde las propias Unidades de Igualdad de las Consejerías o de los Ministerios según el ámbito en el que se elaboren, las cuales hemos analizado en el presente trabajo de investigación.

Del mismo modo y teniendo en cuenta que desde nuestro punto de vista, es necesario instaurar en todos los ámbitos territoriales el sistema de doble filtro o de doble informe; pensamos que la autoría de los Informes de Observación de los Informes de Evaluación de Impacto de Género y de las Memorias de Análisis debería asignarse a un órgano inferior en virtud del principio desconcentración tal y como se en el art. 12.2 de recoge de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

De esta manera consideramos que el Instituto de la Mujer en el ámbito estatal y sus homónimos autonómicos son los propicios para la elaboración de los Informes de Observaciones a los informes y memorias emitidas por el Ministerio o la Consejería según corresponda.

Como juristas debemos tener en cuenta que estas propuestas de establecimiento de doble informe, podrían producir un problema de jerarquización en las soluciones o en los planteamientos que contengan dichos informes.

Consideramos que ante las posibles divergencias que pudiesen existir entre los informes y las memorias elaboradas por la Unidades de Igualdad y los informes de observaciones a estos, debe prevalecer lo que se establezca en el informe de observaciones elaborado por el IM o IAM, dado que se trata de un informe que corrige y evalúa al primero, y que se lleva a cabo por un organismo externo a la Consejería o Ministerio que se trate, asegurando de este modo la imparcialidad propia que requiere este tipo de evaluación.

En relación a la formación específica y cualificada en cuestiones de género que deberá tener el personal de las Ministerios y Consejerías encargadas de la elaboración de estos informes y memorias, proponemos, que sea la universidad o la formación profesional, según el nivel y la cualificación quien la impartiese; dado que la formación reglada recoge ya asignaturas transversales como medio ambiente o gerontología.

El sistema pedagógico en la impartición de estas asignaturas transversales permitiría llevar a cabo un sistema de docencia basado en una metodología participativa. Este tipo de metodología es la que en la actualidad el Instituto de la Mujer está aplicando según lo dispuesto en la LOI en la formación para la elaboración de planes de igualdad en las empresas del personal de las empresas de más de 250 personas empleadas.

El objetivo de esto, no es otro, que el de acabar creando equipos multidisciplinares con una formación y modelo de trabajo homogéneo, cuyo trabajo se traduciría en una mejor y más eficaz manera de llevar a cabo el análisis del impacto sobre la implementación de determinada normativa en función del género, pudiéndose corregir si fuese necesario, aquellas cuestiones que pudiesen aumentar la brecha de desigualdad.

Así bien, si todo lo anterior se pudiese poner en práctica, podríamos concluir que se habrán sentado las bases para la construcción de una metodología sólida, homogénea y compacta, que pueda realizar análisis fiables ex ante y ex post del impacto de género en la normativa. En definitiva, permitirá responder a la cuestión con la que iniciábamos nuestro trabajo de investigación:

*¿Están los Informes de Evaluación de Impacto de Género y las Memorias de Análisis de Impacto Normativo, como herramientas para la estimativa y evaluación del impacto de género en la normativa estatal y autonómica andaluza, contribuyendo desde un punto de vista legislativo, a la eliminación de la brecha de género que separa a mujeres y hombres?*

## 7. Bibliografía y otros recursos

---

### 7.1 Libros

- Amorós, C. (1997). *Tiempo de feminismo*. Madrid: Cátedra, feminismos.
- Badenes-Gasset Ramos, I. (2012). *Las mujeres en la España contemporánea, modelos de género, sociabilidad y ciudadanía*. Castellón: Institut Universitari d'Etudis Feministes i de Gènere. Universitat Jaume I.
- Balaguer Callejón, M. L. (2010). *Igualdad y Constitución Española*. Madrid: Tecnos.
- Balaguer Callejón, M. L. (2007). *El Estatuto de Autonomía de Andalucía: La transversalidad de género y el Estatuto de Autonomía para Andalucía*. Sevilla: Centro de Estudios Andaluces. Consejería de Presidencia. Junta de Andalucía.
- Balaguer Callejón, M. L. (2008) *El Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007*. Sevilla: Centro de Estudios Andaluces. Consejería de Presidencia. Junta de Andalucía
- Balaguer Callejón, M. L. (2005). *Mujer y Constitución. La construcción jurídica del género*. Madrid: Cátedra.
- Benhabib, S. (1995). *Feminist Contentions: A Philosophical Exchange*. New York: Routledge.
- Beauvoir, S. de (1949). *El segundo sexo*. Madrid: Cátedra, Feminismos.
- Bobbio, N. (2000). *Essais de théorie du droit (Recueil de textes)*, Francia: LGDJ / Montchrestien.
- Borrillo, D. (2009). *Le droit des sexualités*. París: Presses Universitaires de France.
- Budlender, D. *Manual de capacitación sobre presupuestos sensibles al género*. Edición digital. <http://www.presupuestoygenero.net/Herramientas/H036BudlenderSU.pdf>
- Butler, J. (2002). *Cuerpos que importan*. Buenos Aires: Paidós Entornos.
- Butler, J. (2006). *Deshacer el género*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Butler, J. (2007). *El género en disputa*. Barcelona: Paidós Ibérica.

- Butler, J. (1990) *Gender Trouble. Feminism and the subversión of identity*. Nueva York: Routledge.
- Campoamor, C. (1936). *Mi pecado mortal: el voto femenino y yo*. Madrid: Librería Beltrán.
- Cobo, R. (1995). *Fundamentos del patriarcado moderno. Jean Jacques Rousseau*. Madrid: Cátedra, Feminismos.
- Collantes Sánchez, B., Sanchis Vidal, A. (2009). *La evaluación del impacto de género en la normativa estatal y andaluza*. Jaén: Diputación Provincial. Instituto de Estudios Giennenses.
- Delgado Godoy, F., García Comas, C. y Soletto Ávila. M. (2005). *Guía de aplicación práctica, para la elaboración de Informes de Impacto de Género de las Disposiciones Normativas que elabore el Gobierno, de acuerdo a la Ley 30/2003*. Madrid: Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- De Lauretis, T. (2007). *Théorie queer y cultures populaires de Foucault a Cronenberg*. París: La dispute. Légende du monde.
- De Villota, P., Jubeto Y., Ferrari I. (2009). *Estrategias para la integración de la perspectiva de género en los presupuestos públicos*. España: Instituto de la Mujer.
- Dorlin, E. (2011). *Sexe, genre et sexualités: Introduction à la théorie féministe*. Paris: Presses Universitaires de France.
- Duhamel, P. (2008). *La Reforma Presupuestaria Francesa. Presentación en el Seminario sobre la Reforma Presupuestaria. Conferencia internacional sobre elaboración del presupuesto con orientación a resultados*. Buenos Aires.
- Durán y Lalaguna, P. (2007). *El voto femenino en España*. Madrid: Asamblea de, Servicio de Publicaciones.
- Elson, D. (2002). *Integrating Gender into Government Budgets within a Context of Economic Reform, en Debbie Budlender, Gender Budgets Make More Cents*. Londres: Commonwealth Secretariat.
- Eribon, D. (2005). *Echapper à la psychanalyse. Notes sur l'amour et l'amitié*. París: Léo Scheer.
- Facio, A. (1992). *Cuando el género suena cambios trae. Metodología para el análisis de género del fenómeno legal*. San José: Ilanud.

- Gil Ruiz, J. M. (2007). *Los diferentes rostros de la violencia de género*. Madrid: Dykinson.
- Halberstam, J. (2008). *Masculinidad femenina*. Barcelona: Egales.
- Haraway, D. (2007). *Manifeste cyborg et autres essais*. París: L. Allard.
- Harding S. (1993) *The “racial” Economy of Science*. Bloomington: Indiana University Press.
- Lochak, D. (2010). *Le droit et les paradoxes de l’universalité*. París: Presses Universitaires de France.
- Millet, K. (1969). *Sexual Politics*. Londres: Virago.
- Muñoz Machado, S., Rebollo Puig, M., (Dir.). (2008). *Comentarios al Estatuto de Autonomía para Andalucía*. Madrid: Thomson-Civitas, Cizur Menor.
- Nash, M. (1986). *Mujer y Trabajo en España*. Barcelona: Anthopos.
- Pateman, C. (2010). *Le contrat sexuel*. París: La découverte-Institut Émile du châtelet.
- Pazos Morán, M. (2008). *Presupuestación Pública*. Bilbao: Edición electrónica.
- Pérez Luño, A. E. (2003). *Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución*. Madrid: Tecnos.
- Pérez Luño, A. E. (2007). *Dimensiones de la igualdad*. Cuaderno Bartolomé de la Casas. Madrid: Dykinson.
- Preciados, B. (2008). *Texto yonkie*. Madrid: Espasa Calpe.
- Rey Martínez, F. (1995). *El derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo*. Madrid: McGraw Hill.
- Rousseau, J. J. (1775). *Discurso sobre el origen y los fundamentos de las desigualdades entre los hombres*. <http://www.casadellibro.com/busqueda-libros?busqueda=Discurso+sobre+el+origen+y+los+fundamentos+de+las+desigualdades+entre+los+hombres.&nivel=5&maxresultados=-1>
- Salazar Benítez, O. (2010) *Cartografías de la igualdad ciudadanía e Identidades en las democracias contemporáneas*. Madrid: Tirant Lo Blanch. Madrid 2010.
- Sanchis Vidal, A. (1999) *El uso sexista del lenguaje*. Córdoba: Universidad de. Servicio de Publicaciones.
- Simón Rodríguez, M. E. (2008) *Hijas de la igualdad, herederas de injusticias*. Madrid: Narcea

- Espuny Tomás, M. J. (2006) *Los antecedentes históricos al permiso de lactancia*. IUSLabor.  
Web: <http://www.upf.edu/iuslabor/022006/Historia.MJEspuny.pdf>
- Valcárcel, A. (2000). *Las filosofías políticas en presencia del feminismo*. Madrid: Feminismo y Filosofía.
- Valpuesta Fernández, R. (2007). *Comentarios a la Ley para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres*. Sevilla: Centro de Estudios Andaluces.
- Vance C. S. (1989). *Placer y Peligro*. Madrid: Revolución.
- Ventura Franch, A. (1999). *Las Mujeres y la Constitución Española de 1978*. Madrid: Instituto de la Mujer.
- Wollstonecraft, M. (1792). *Vindicación de los Derechos de la Mujer*.

## 7.2 Artículos en revistas

- AAVV. (2005). El Impacto de Género: una medida pionera para alcanzar la igualdad. *Meridiam*, vol. 37.
- Agudo Zamora, M. (2011). Teoría y Realidad Constitucional. *UNED*, vol. 27.
- Álvarez Castinerias, P., Collantes Sánchez B. (2011). Complementariedad y coexistencia del enfoque de género y el enfoque a resultados en el presupuesto público. Estudio de casos: Francia y Austria. *Instituto de Estudios Fiscales .Secretaría General de Presupuestos y Gastos*.
- Balaguer Callejón, M. L. (2004). Comentario a la Ley Andaluza 18/2003, de medidas fiscales y al Decreto 93/2004 de la Junta de Andalucía, de impacto de género. Avance a la paridad. Artículo 14. Una perspectiva de género. *Boletín de Información y Análisis Jurídico*, vol. 15.
- Balaguer Callejón, M. L. (2003). Ley 30/2003, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones que elabore el gobierno. Artículo 14. Una perspectiva de género. *Boletín de Información y Análisis Jurídico*, vol. 14.
- Borrillo, D. (2011). Le sexe et le droit : de la logique binaire des genres et la matrice hétérosexuelle de la loi. *Jurisprudence Revue Critique. Université de Savoie*.

- Burín, M. (2006). Cuando la diferencia es desigualdad: el techo de cristal (glass ceiling) para el género femenino en las instituciones psicoanalíticas. *États généraux de la psychanalyse. Revista electrónica*.
- Carmona Cuenca, E. (1994). El principio de igualdad material en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. *Revista de Estudios Políticos (Nueva época)*, vol. 84. Abril-junio.
- Daza Martínez, J. (1992). La ley de divorcio de 1932: Presupuestos ideológicos y significación política. *Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social*, vol. 1.
- Jubeto, Y. (2008). Los presupuestos con enfoque de género: una apuesta feminista a favor de la equidad en las políticas públicas. *Cuadernos de Trabajo de Hegoa*, vol. 43.
- Lochak, D. (2011). Dualité de sexe et dualité de genre dans les normes juridiques. *Jurisprudence Revue Critique. Université de Savoie*.
- Mackinnon, C. (2000) Points encaissés postmodernisme. *Harvard University Press*
- Martínez Aguayo, C. Presupuestos sensibles al género: la experiencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía en Economía e igualdad de género: retos de la Hacienda Pública en el siglo XXI. *Instituto de Estudios Fiscales*.
- Pauner Chulvi, C. (2009). Función legislativa y perspectiva de género: Análisis de los informes de impacto por razón de género. *Revista de las Cortes Generales*, vol. 77.
- Pinon, S. (2010). El sistema constitucional de Francia. *ReDCE*. vol. 14.
- Posseth, J., Van Nispen, F. (2009). Performance informed budgeting in Europe: The ends justify the means, don't they? *EUI-RSCAS Working Papers*.
- Reverter Bañon, S. (2003). La perspectiva de género en la filosofía, *Revista "Feminismo/s", Universtat d'Alacant*.
- Rey Martínez, F. (2004). Comentario a los informes del Consejo de Estado sobre el impacto por razón de género. *Teoría y realidad constitucional*. vol. 14.
- Rubin, G. (1975). The traffic in women: Notes on the 'political economy' of sex. *Toward an Anthropology of Women, New York and London, Monthly Review Press*.
- Rubio Llorente, F. (1999). La igualdad en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. *Revista Española de Derecho Constitucional*, vol. 31.

Ruiz Álvarez, J. L., Caamaño Alegre, J. (2008) Tendencias en la gestión presupuestaria a nivel internacional. *Presupuesto y Gasto Público. Instituto de Estudios Fiscales. Secretaría General de Presupuestos y Gastos.*

Zapico Goñi, E. (2008). La experiencia del presupuesto por resultados en países de la OCDE. *Presupuesto y Gasto Público Instituto de Estudios Fiscales, Secretaría General de Presupuestos y Gastos.*

### 7.3 Normativa y documentación más relevante en cuestiones de género

#### 7.3.1 Internacional

DECLARACIÓN Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948;

PACTO INTERNACIONAL de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966;

CONFERENCIA Mundial del año Internacional de la Mujer de 1975, México.

CONVENCIÓN para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW) de 1979.

CONFERENCIA MUNDIAL del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer; Igualdad, Desarrollo y Paz de 1980, Copenhague.

CONFERENCIA MUNDIAL para el examen y evaluación de los logros de las Naciones Unidas para la Mujer; Igualdad, Desarrollo y Paz de 1985, Nairobi.

CONVENCIÓN Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención De Belém Do Pará” 1994.

DECLARACIÓN Y PLATAFORMA de Acción de Beijing, de 4 a 15 de septiembre de 1995.

DECLARACIÓN Y EL PROGRAMA de Acción de Viena aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993.

INFORME del Comité Especial Plenario del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la (Beijing + 5).

DECLARACIÓN sobre orientación sexual e identidad de género, el 18 de diciembre de 2008.



### **7.3.2 Comunitaria**

TRATADO de Roma, Constitutivo de la Comunidad Europea, de 25 de marzo de 1957.

TRATADO de Ámsterdam, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados Constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, de 2 de octubre de 1997.

TRATADO DE LA UNION EUROPEA. Diario Oficial de la Unión Europea, núm. C 83/11 de 30 de marzo 2010.

CONVENIO EUROPEO para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Públicas de 4 de octubre de 1950

DECLARACIÓN común del Parlamento Europeo, del Consejo, de los representantes de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo y de la Comisión contra el racismo y la xenofobia de 11 de junio de 1986.

CARTA de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

COMUNICACIÓN de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Hacia una estrategia marco comunitaria sobre la igualdad entre hombres y mujeres 2001-2005 (COM (2000) 335 FINAL, de 7 de junio de 2000).

DECISIÓN del Consejo, de 20 de diciembre de 2000, por la que se establece un programa de acción comunitaria sobre la estrategia comunitaria en materia de igualdad entre mujeres y hombres (2001-2005).

INFORME de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la igualdad entre hombres y mujeres–2001.

INFORME de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la igualdad entre hombres y mujeres–2002.

INFORME de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la igualdad entre hombres y mujeres–2004.

DIRECTIVA 75/117/CEE relativa a la igualdad de retribución entre los trabajadores y las trabajadoras.

DIRECTIVA 76/207/CEE relativa a la igualdad de trato en lo que se refiere al empleo, a la formación profesional y a las condiciones de trabajo (modificada en 2002).

DIRECTIVA 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social.

DIRECTIVA 86/378/CEE relativa a la igualdad de trato en los regímenes profesionales de seguridad social (modificada en 1996).

DIRECTIVA 86/613/CEE relativa a la igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma, así como sobre la protección de la maternidad.

DIRECTIVA 92/85/CEE relativa a la promoción de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o esté en período de lactancia.

DIRECTIVA 96/34/CE relativa al acuerdo marco sobre permiso parental.

DIRECTIVA 97/80/CE relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo.

DIRECTIVA 2004/113/CE por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro.

DIRECTIVA 2006/54/CE relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición).

DIRECTIVA 2010/18/UE del consejo de 8 de marzo de 2010 por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental, celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES, y se deroga la Directiva 96/34/CE

DIRECTIVA 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, y por la que se deroga la Directiva 86/613/CEE del Consejo.

INFORME de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la igualdad entre hombres y mujeres–2005.

INFORME de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la igualdad entre hombres y mujeres–2006.

COMUNICACIÓN de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2010.

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 17 de mayo de 2006, por la que se establece el Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todos (2007) — Hacia una sociedad justa, nº 771/2006/CE.

REGLAMENTO (CE) No 1922/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 2006 por el que se crea un Instituto Europeo de la Igualdad de Género.

REGLAMENTO (CE) No 1922/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de diciembre de 2006 por el que se crea un Instituto Europeo de la Igualdad de Género.

INFORME de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la igualdad entre hombres y mujeres—2007.

DECISIÓN 2008/590/CE de la Comisión, de 16 de junio de 2008, relativa a la creación de un comité consultivo para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

### **7.3.3 Estatal Francesa**

CONSTITUTION FRANCAISE, du 04 octobre 1958

LOI n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations.

LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.

LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

LOI n°2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.

LOI n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.

LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances pour 2005.

DOCUMENTO de Política Transversal. Proyecto de Ley de Finanzas 2010. Política de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

### **7.3.4 Estatal Española**

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, de 27 de diciembre de 1978.

LEY ORGÁNICA 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

LEY ORGÁNICA 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

LEY 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código civil en materia de derecho a contraer matrimonio.

LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

LEY ORGÁNICA 1/2008, de 30 de julio, autorizó la ratificación por España del Tratado de Lisboa, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

LEY 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

LEY 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.

LEY 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.

LEY 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas.

LEY 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida.

REAL DECRETO 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo.

ORDEN PRE/525/2005, de 7 de marzo, por la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se adoptan medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres.

ORDEN APU/526/2005, de 7 de marzo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se aprueba el Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado.

ORDEN EHA/1320/2010, de 18 de mayo, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2011.

RESOLUCIÓN-CIRCULAR de 29 de julio de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre matrimonios civiles entre personas del mismo sexo.

### **7.3.5 Autonómica**

LEY ORGÁNICA 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

LEY GENERAL 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

LEY 10/1988, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1989 (por la que se crea el Instituto Andaluz de la Mujer.

LEY 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas.

LEY 16/2005, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma Andaluza para el año 2006.

LEY 8/2002, de 17 de diciembre, del Plan Estadístico de Andalucía 2003-2006.

LEY 5/2005, de 8 de abril, por la que se modifica la LEY 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía.

LEY 6/2005, de 8 de abril, relativa a la actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas.

LEY 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

LEY 4/2007, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley 4/1989 de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se aprueba el Plan Estadístico de Andalucía 2007-2010.

LEY 11/2006, de 27 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma Andaluza para el año 2007.

LEY 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

LEY 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Disposición Final Segunda, cuatro que modifica la regla 5 del artículo 34 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía

DECRETO 1/1989, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del Instituto Andaluz de la Mujer.

DECRETO 120/1997, de 22 de abril, por el que se modifica el Reglamento del Instituto Andaluz de la Mujer, aprobado por Decreto 1/1989, de 10 de enero.

DECRETO 216/1999, de 26 de octubre, por el que se regula el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía.

DECRETO 93/2004, de 9 de marzo. Regula el informe de evaluación de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno

DECRETO 452/2004, de 6 de julio, de modificación de los Decretos 1/1989, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del Instituto Andaluz de la Mujer, y 118/1997, de 22 de abril, por el que se aprueban el régimen de organización y funcionamiento del Instituto Andaluz de la Juventud.

DECRETO 515/2004, de 26 de octubre, de modificación del Decreto 1/1989, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del Instituto Andaluz de la Mujer.

DECRETO 20/2010, de 2 de febrero, por el que se regula la Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

DECRETO 133/2010, de 13 de abril, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

DECRETO 17/2012, de 7 de febrero, por el que se regula la elaboración del Informe de Evaluación del Impacto de Género.

DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

ORDEN de 24 de noviembre de 1992, conjunta de la Consejería de Gobernación y de la Consejería de Asuntos Sociales, sobre la eliminación del lenguaje sexista, en los textos y documentos administrativos.

ORDEN de 19 de febrero de 1993, de la Consejerías de la Presidencia y Asuntos Sociales, relativa a normas para el cumplimiento del principio de no discriminación de por razón de sexo en la información y divulgación de la Junta de Andalucía.

ORDEN de 31 de mayo de 1996, de la Consejería de la Presidencia, por la que se crea la figura Entidad Colaboradora en Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

ORDEN de 24 de junio de 2003, por la que se crea la materia optativa Cambios sociales y nuevas relaciones de género en la Educación Secundaria Obligatoria.

ORDEN de 25 de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se dictan normas para la elaboración del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2006.

ORDEN de 20 de mayo de 2010, por la que se dictan normas para la elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2011.

ORDEN de 27 de enero de 2010, por la que se regula la concesión de incentivos a proyectos que promuevan la inserción de la perspectiva de género en el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Fondo G+) y se establece la convocatoria para el año 2010.

RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2005, de la Presidencia, por la que se da publicidad al Reglamento del Parlamento de Andalucía.

INSTRUCCIÓN de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de Viceconsejeros, para evitar un uso sexista del lenguaje en las disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía.

ACUERDO de 19 de enero de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013.

## 7.4 Jurisprudencia más relevante en materia de género utilizada en el trabajo de investigación

### 7.4.1 Jurisprudencia Internacional

#### Sentencia del TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

Caso *Burghartz contra Suiza*, de 22 de febrero de 1994, (serie a nº 280-B.)

#### Sentencias del TRIBUNAL DE JUSTICIA EUROPEO:

Caso *Defrenne II*, de 8 de abril de 1976 (asunto 43/75).

Caso *Bilka-Kaufhaus GmbH*, de 13 de mayo de 1986 (asunto 170/84)

Caso *Barber contra Guardian Royal Exchange Assurance Group*, de 17 de mayo de 1990 (asunto 262/88).

Caso *Kalanke*, de 17 octubre 1995 (asunto 1995/172).

*Caso Hellmut Marschall contra Westfalen*, de 11 noviembre 1997 (asunto 236/1997)

*Caso Roca Álvarez contra Sesa Star ETT, S.A.*, de 30 de septiembre de 2010 (asunto C-104/09).

#### **7.4.2 Jurisprudencia Tribunal Constitucional Español**

Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 63/1983, de 20 de julio.

Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 8/1983, de 18 de febrero.

Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 34/1981 de 10 de noviembre.

Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 83/1984, de 24 de julio.

Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 27/1981, de 20 de julio.

Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 6/1981, de 16 de marzo.

Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 114/1983, de 6 de diciembre.

Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 98/1985, de 29 de julio.

Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 19/1988, de 16 de febrero.

Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 3/1983, de 25 de enero

Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 65/1983, de 21 de julio.

Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 19/1989, de 31 de enero.

Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 41/2006, de 13 de febrero.

Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 12/2008, de 29 de enero.

Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 13/2009, de 19 de enero de 2009.

Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 40/2011, de 31 de marzo de 2011.



## 7.5 Relación de las páginas web más relevantes en materia de género utilizadas en el trabajo de investigación. Webgrafía:

### 7.5.1 Europeas

Unión Europea site web oficial: [http://europa.eu/index\\_es.htm](http://europa.eu/index_es.htm) (Última consulta: mayo 2012).

- Documentos de cada institución, agencia u organismo de la UE:  
[http://europa.eu/documentation/official-docs/index\\_es.htm](http://europa.eu/documentation/official-docs/index_es.htm)  
(Última consulta: mayo 2012).
- Legislación y tratados de la UE:  
[http://europa.eu/documentation/legislation/index\\_es.htm](http://europa.eu/documentation/legislation/index_es.htm)  
(Última consulta: mayo 2012).
- Glosario de términos relacionados con el género de la UE:  
[http://europa.eu/legislation\\_summaries/glossary/index\\_a\\_es.htm](http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/index_a_es.htm)  
(Última consulta: mayo 2012).
- Evaluación del impacto en la normativa:  
[http://ec.europa.eu/governance/better\\_regulation/impact\\_en.htm](http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/impact_en.htm)  
(Última consulta: mayo 2012).
- Guía para la Evaluación del Impacto de Género en Función del Género:  
<http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4376&langId=en>  
(Última consulta: mayo 2012).
- Instituto Europeo de la Igualdad de Género:  
[http://europa.eu/agencies/regulatory\\_agencies\\_bodies/policy\\_agencies/eige/index\\_es.htm](http://europa.eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/eige/index_es.htm) (Última consulta: mayo 2012).
- Assemblée nationale: <http://www.assemblee-nationale.fr/> (Última consulta: mayo 2012).
- Legisfrance. Servicio público de difusión de la legislación francesa:  
<http://www.legifrance.gouv.fr/> (Última consulta: mayo 2012).

### 7.5.2 Estatales

Congreso de los Diputados:

<http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad> (Última consulta: mayo 2012).

Boletín Oficial del Estado: <http://www.boe.es/> (Última consulta: mayo 2012).

Instituto de la Mujer:

<http://www.inmujer.gob.es/ss/Satellite?pagename=InstitutoMujer%2FPage%2FIMUJHome> (Última consulta: mayo 2012).

Pérez, K. (2009). *Estatuto epistemológico del binarismo y no binarismo sexual. Grupo de debate sobre lo no binario*. Conjuntos difusos.

Unidades de Igualdad:

[http://www.migualdad.es/ss/Satellite?cid=1193047402695&pagename=MinisterioIgualdad%2FPage%2FMIGU\\_contenidoFinal](http://www.migualdad.es/ss/Satellite?cid=1193047402695&pagename=MinisterioIgualdad%2FPage%2FMIGU_contenidoFinal) (Última consulta: mayo 2012).

Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo:

[http://www.mpt.gob.es/areas/funcion\\_publica/iniciativas/impacto\\_normativo/parrafo/0/text\\_es\\_files/file0/guia-metodologica-ain\\_1264084813.pdf](http://www.mpt.gob.es/areas/funcion_publica/iniciativas/impacto_normativo/parrafo/0/text_es_files/file0/guia-metodologica-ain_1264084813.pdf) (Última consulta: mayo 2012).

### 7.5.3 Autonómica Andaluza

Parlamento Andaluz: <http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/inicio.do> (Última consulta: mayo 2012).

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas:

[http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/planif\\_presup/genero/informe.htm](http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/planif_presup/genero/informe.htm) (Última consulta: mayo 2012).

Presupuestos de un Informe de Evaluación de Impacto de Género y Comisión Impacto de Género:

[http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/planif\\_presup/genero/gplus.htm](http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/planif_presup/genero/gplus.htm)

Normativa reguladora y las Fichas resumen de los resultados de los proyectos financiados por el Fondo G+:

[http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/planif\\_presup/genero/fondo\\_g.htm](http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/planif_presup/genero/fondo_g.htm)

Documento de Orientaciones Estratégicas, puede consultarse en Web:

[http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/planif\\_presup/genero/DOE/doe.htm](http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/planif_presup/genero/DOE/doe.htm)

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: <http://www.juntadeandalucia.es/eboja>

Instituto Andaluz de la Mujer: <http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php>

Unidades de Igualdad en la Junta de Andalucía:

<http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/institutodelamujer/ugen/node/4>

#### **7.5.4 Otras**

Grupo de debate sobre no binarismo. Conjuntos difusos:

<http://conjuntosdifusos.blogspot.com/2009/09/estatuto-epistemologico-del-binarismo-y.html> (Última consulta: mayo 2012).

Red de ciudadanas de Europa:

[http://www.redciudadanas.org/newsletters/2012/24\\_02\\_2012.htm](http://www.redciudadanas.org/newsletters/2012/24_02_2012.htm) (Última consulta: mayo 2012).

Social Europe Newsletter:

<http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201112/20111213ATT33994/20111213ATT33994EN.pdf> (Última consulta: mayo 2012).

Facebook Committee on Women's Rights and Gender Equality of the European Parliament:

<http://www.facebook.com/pages/Committee-on-Womens-Rights-and-Gender-Equality-of-the-European-Parliament/155117734542772> (Última consulta: mayo 2012).

Universidad de Córdoba: <http://www.uco.es/> (Última consulta: mayo 2012).

Université Paris Ouest, Nanterre-La Défense (Paris X): <http://www.u-paris10.fr/> (Última consulta: mayo 2012).

## 8. Anexos: Índices de los anexos que se acompañan en formato digital

---

### 8.1 Solicitudes escritas de documentación

#### a) Carta al Congreso Beatriz Collantes Sánchez

Beatriz Collantes Sánchez  
Doctoranda de la Facultad de Derecho  
Departamento de Derecho Constitucional  
Universidad de Córdoba.

Rosario Martínez-Cañavate Burgos  
Jefa del Archivo Congreso de los Diputados  
Congreso de los Diputados  
C/Floridablanca s/n  
28071 - MADRID

Paris 21 de julio de 2011.

A/ A Doña Rosario Martínez-Cañavate Burgos

Me llamo Beatriz Collantes Sánchez, soy doctoranda en la Universidad de Córdoba, y con el objeto de realizar mi tesis doctoral, que lleva por título: "Estimativa y evaluación del impacto de género en la normativa europea estatal y autonómica andaluza." Vengo desde el pasado año 2007, recopilando los Informes sobre el Impacto por Razón de Género que deben acompañar a los proyectos normativos según lo dispuesto en la "*Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno*" extremo que más tarde fue ratificado por la "*Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres*".

Esta recopilación siempre ha sido posible gracias a su gran colaboración, ya que a lo largo de estos años me he ido desplazando desde mi ciudad natal, Córdoba, a Madrid al Archivo del Congreso de los Diputados, desde donde ustedes, siempre con gran amabilidad, me han proporcionado el material que he buscado, incluso en el año 2007, ustedes tuvieron a bien enviarme por correo postal ciertos informes que no estaban disponibles el día que estuve allí trabajando.

Mi trabajo de investigación, mi tesis doctoral, ya está tocando a su fin, pero para poder terminarla me es absolutamente necesario, que si tienen a bien, me facilitasen algunos informes que no estaban disponibles en el momento que realice mi última visita.

Es por ese motivo y porque actualmente resido fuera de España (lo que me hace imposible desplazarme a Madrid), que les ruego, que por favor me envíen los siguientes Informes sobre el Impacto por Razón de Género.

Me he permitido adjuntarles dos listados (los cuales tiene su origen en los datos que me facilitaron ustedes de su intranet) el primer listado corresponde a los informes que me faltan de la VIII legislatura, he señalado en rojo los que me resultan absolutamente indispensables; el segundo listado corresponde a los informes que me faltan de la IX legislatura, (solo aquellos que según sus datos tienen asignada ya una signatura).

Dado que la Facultad de Derecho a la que pertenezco cierra en el mes de agosto, les rogaría que me enviaran los citados informes a la siguiente dirección postal, mi dirección personal en España, evidentemente yo correré con los cargos de las copias y el envío.

Les quedo muy agradecida por toda la ayuda que siempre me han prestado.

Atentamente,

Beatriz Collantes Sánchez

Beatriz Collantes Sánchez  
C/Poeta Luis Cernuda 6  
14012 Córdoba  
España  
[beatrizcollantes@gmail.com](mailto:beatrizcollantes@gmail.com)  
675.55.69.09

**b) Tarjeta de Investigadora Congreso Diputados**

Congreso de los Diputados  
Biblioteca y Archivo

LEGISLATURA IX  
Nº 295/10  
Fecha exp. 14/06/2010

**TARJETA DE INVESTIGADOR**

D/Dª Beatriz Maria COLLANTES  
SANCHEZ  
D.N.I. 44.366.320

El interesado El Jefe del Archivo



## c) Solicitud de documentación IM 2011

Imprimir mensaje - Windows Live Hotmail

<http://sn135w.sn135.mail.live.com/mail/PrintMessages.aspx?cpids=...>

### Solicitud de documentación: Informes de Impacto de género que acompañan a los planes de especial relevancia

De: **Beatriz Collantes Sanchez** (bcollantes78@hotmail.com)  
Enviado: viernes, 01 de julio de 2011 12:10:42  
Para: [juridicor@inmujer.es](mailto:juridicor@inmujer.es)

Buenos días:

Soy una investigadora de la facultad de derecho de la Universidad de Córdoba (Beatriz Collantes Sánchez con DNI 44366320X) que está redactando su tesis doctoral europea en "Evaluación del impacto de género en las normas".

Para llevar a cabo mi tesis doctoral intento recopilar los informes de impacto de género que acompañan a los proyectos de ley y disposiciones reglamentarias, en virtud de lo dispuesto en el artículo núm. 1 de la "LEY 30 2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno", ya que pese a que estos informes tienen carácter público no consigo acceder a ellos.

De igual manera y en virtud del art núm. 19 de la "LEY Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres" que establece que los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros deberán incorporar un informe sobre su impacto por razón de género. Intento acceder con el mismo resultado a los informes que acompañan a los planes que han sido aprobados por el Consejo de Gobierno, en virtud de ese mismo artículo.

Por ese motivo acudo a ustedes, para solicitarles que si por favor fuesen tan amables me pudiese facilitar los citados informes de evaluación de impacto de género, en virtud del citado artículo.

Muchísimas Gracias por su colaboración, quedo a su entera disposición para cualquier indicación que precisen.

Beatriz Collantes Sánchez



MINISTERIO  
DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL,  
E IGUALDAD

SECRETARÍA DE ESTADO DE  
IGUALDAD

INSTITUTO DE LA MUJER

DIRECCIÓN GENERAL

N/REF: 416-2011 RGM  
FECHA: 13-07-2011

**Dña. Beatriz Collantes Sánchez**

[bcollantes78@hotmail.com](mailto:bcollantes78@hotmail.com)

Estimada Sra. Collantes,

En el Instituto de la Mujer, Organismo autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad, se ha recibido su correo electrónico de fecha 4 de julio, en el que solicita cooperación para recompilar los informes de impacto de género que acompañan a los proyectos de ley y disposiciones reglamentarias de conformidad con lo establecido en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con relación a los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros.

El Instituto de la Mujer es un Organismo autónomo cuya finalidad primordial es la promoción y el fomento de las condiciones que posibiliten la igualdad social de ambos sexos y la participación de la mujer en la vida política, cultural, económica y social.

En cuanto a su solicitud informarle que los citados informes se realizan por el departamento proponente de la normativa o del plan correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis del impacto normativo, que a su vez, contiene el impacto de género.

Este Instituto de la Mujer no cuenta con dichos informes y entendemos que puede dirigir su solicitud a Presidencia del Gobierno.

A la espera de que la información le sea de utilidad, reciba un cordial saludo.

LA DIRECTORA GENERAL



Laura Seara Sobrado

CORREO ELECTRÓNICO

dgralmujer@inmujer.es

C/ CONDESA DE VENADITO, 34  
28027 MADRID  
TEL: 91 363 78 90  
FAX: 91 363 79 95



## d) Solicitud Secretaria Estado de Igualdad

De: bcollantes78@hotmail.com [mailto:bcollantes78@hotmail.com]

Enviado el: sábado, 23 de julio de 2011 13:01

Para: Atención a la Ciudadanía de la S. E. de Igualdad

Asunto: Asunto del email



Nombre: Beatriz María

Apellidos: Collantes  
Sánchez

Correo

electrónico: [bcollantes78@hotmail.com](mailto:bcollantes78@hotmail.com)

Tema(\*): Igualdad

### Mensaje:

Buenos días: Soy una investigadora de la facultad de derecho de la Universidad de Córdoba (Beatriz Collantes Sánchez con DNI 44366320X) que está redactando su tesis doctoral europea en "Evaluación del impacto de género en las normas". Para llevar a cabo mi tesis doctoral intento recopilar los informes de impacto de género que acompañan a los proyectos de ley y disposiciones reglamentarias, en virtud de lo dispuesto en el artículo núm. 1 de la "LEY 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno", ya que pese a que estos informes tienen carácter público no consigo acceder a ellos. De igual manera y en virtud del art núm. 19 de la "LEY Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres" que establece que los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros deberán incorporar un informe sobre su impacto por razón de género. Intento acceder con el mismo resultado a los informes que

Imprimir mensaje - Windows Live Hotmail

<http://sn135w.sn135.mail.live.com/mail/PrintMessages.aspx?cpids=...>

acompañan a los planes que han sido aprobados por el Consejo de Gobierno, en virtud de ese mismo artículo. Por ese motivo acudo a ustedes, para solicitarles que si por favor fuesen tan amables me pudiesen facilitar los citados informes de evaluación de impacto de género, en virtud del citado artículo. Muchísimas Gracias por su colaboración, quedo a su entera disposición para cualquier indicación que precisen. Beatriz Collantes Sánchez

Hola. Buenos días.

Con mucho gusto contestamos su correo y sobre las cuestiones que plantea, además de adjuntarle diversos documentos de interés, le informamos que en lo que concierne a los informes de impacto de género, la Ley 30/2003 de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración de impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el gobierno, introduce una modificación en los artículos 22 y 24 de la ley de Gobierno. Esta reforma establece que los proyectos de ley y las disposiciones reglamentarias irán acompañadas de un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que contienen. La reforma concreta que esta responsabilidad ha de quedar plasmada en un documento que denomina Informe de Impacto de Género.

En particular y en lo que se refiere al Informe de Impacto de Género (en adelante IIG) de los Presupuestos Generales del Estado, su primera elaboración se llevó a cabo en la Comunidad Autónoma de Andalucía y desde el año 2006 se anexa a los presupuestos de esa Comunidad siendo hoy día este Informe desde la perspectiva de género un referente y un ejemplo a seguir en muchos países.

La aprobación de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, reforzó la obligatoriedad de la medida en todo el ámbito del Estado y para todas las disposiciones legales y reglamentarias.

Así, el artículo 19 de la LOIEMH, prevé lo siguiente:

*“Los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros deberán incorporar un informe sobre su impacto por razón de género”*

A su vez, y respecto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado que cada año el Gobierno somete a la aprobación de las Cortes, desde el año 2009 el Ministerio de Economía y Hacienda, en la Orden por la que se dictan normas para la elaboración de los Presupuestos, establece el procedimiento para la elaboración del IIG que acompaña a dichos Presupuestos.

El IIG que este año acompaña a los PGE del 2011 es el tercero consecutivo y supone un gran avance desde que se comenzó su elaboración en el año 2008. En él colaboran todos los Departamentos Ministeriales mediante el análisis que hacen de sus programas presupuestarios de gasto desde la perspectiva del género. Este informe se puede consultar en la Web del Ministerio de Economía y Hacienda. [www.sgpg.pap.meh.es](http://www.sgpg.pap.meh.es)

Posteriormente, el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo,

integró en un único informe los tres preceptivos que la ley 30/2003 contemplaba y entre los que se encuentra el de Impacto de Género.

Con saludos muy cordiales.

*Concha Gavarrón.*

*Jefa de Área de Atención a la Ciudadanía.*

*Secretaría de Estado de Igualdad.*

*Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.*

---

**De:** Beatriz Collantes Sanchez [mailto:bcollantes78@hotmail.com]

**Enviado el:** miércoles, 27 de julio de 2011 17:06

**Para:** Atención a la Ciudadanía de la S. E. de Igualdad

**Asunto:** RE: RV: Asunto del email Estoy realizando una tesis doctoral acerca de los informes de evaluación de impacto de género.

*Estimada Sra. Gavarrón*

Muchísimas gracias por su respuesta, pero quizás no me he expresado con suficiente claridad,

1 de 5

15/08/2011 0:17

espero sepa disculparme, en cualquier caso gracias por toda esa valiosísima información que usted me ha proporcionado. No obstante y debido al carácter doctoral de los estudios que curso, esa información es la que manejamos como la base de nuestras investigaciones, por lo que en la actualidad necesaria, si usted tiene a bien, es que desde la Secretaría de Estado para la Igualdad se nos proporcionara:

Los informes de impacto de género que acompañan a los proyectos de ley y disposiciones reglamentarias, en virtud de lo dispuesto en el artículo núm. 1 de la "LEY 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno" y

Los informes que acompañan a los planes que han sido aprobados por el Consejo de Gobierno, en virtud art núm. 19 de la "LEY Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres".

Ya que pese a que estos informes tienen carácter público no consigo acceder a ellos. Por ese motivo acudo a ustedes, para solicitarles que si por favor fuesen tan amables me pudiesen facilitar los citados informes de evaluación de impacto de género.

Nuevamente le agradezco toda su colaboración de antemano y quedo a su disposición para cualquier indicación que necesiten. Atentamente

Beatriz Collantes Sánchez



**RV: Asunto del email Estoy realizando una tesis doctoral acerca de los informes de evaluación de impacto de género.**

De: **Atención a la Ciudadanía de la S. E. de Igualdad**  
(cciuadana@igualdad.mspsi.es)

Enviado: miércoles, 10 de agosto de 2011 9:32:51

Para: bcollantes78@hotmail.com

Estimada Sra. Collantes.

Hemos recibido su nuevo escrito en el que solicita una más precisa información sobre los informes de impacto de género que han de acompañar a los proyectos normativos y determinados planes.

Sobre este asunto y a fin de tratarlo de manera amplia y personal le sugerimos nos facilite un teléfono de localización, o bien se ponga en contacto con este servicio en el número 91 5243246 y le devolveríamos la llamada para evitarle gastos.

Con saludos muy cordiales, quedamos a su disposición.

*Concha Gavarrón*

*Jefa de Área de Atención a la Ciudadanía.*

*Secretaría de Estado de Igualdad.*

*Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.*

## 8.2 Informes de Evaluación de Impacto de Género Estatales

### a) Cuadros sinóptico IEIG VIII Legislatura

Cuadro sinóptico de la VIII legislatura.

<i>Año</i>	<i>Proyecto normativo presentado en la IX Legislatura</i>	<i>Acompañado de IEIG Congreso según la Intranet del Congreso de los Diputados.</i>	<i>Se encontró en el Archivo (Por tanto puede consultarse en el anexo).</i>
<b>2004</b>			
121/000001	Proyecto de Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.	NO	NO
121/000002	Proyecto de Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género.	NO	X
121/000003	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional (procedente del Real Decreto-Ley 2/2004, de 18 de junio).	NO	NO
121/000004	Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.	NO	NO
121/000005	Proyecto de Ley sobre saneamiento y liquidación de las entidades de crédito.	NO	NO
121/000006	Proyecto de Ley de supervisión de los conglomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del sector financiero.	NO	NO
121/000007	Proyecto de Ley de horarios comerciales.	NO	NO
121/000008	Proyecto de Ley por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (procedente del Real Decreto-Ley 5/2004, de 27 de agosto).	NO	NO
121/000009	Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.	NO	NO
121/000010	Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los incendios e inundaciones acaecidos en las Comunidades Autónomas de Aragón, Cataluña, Andalucía, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana (procedente del Real Decreto-Ley 6/2004, de 17 de septiembre).	X	X
121/000011	Proyecto de Ley de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público.	NO	NO
121/000012	Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.	NO	NO
121/000013	Proyecto de Ley por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y se modifica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.	X	X
121/000014	Proyecto de Ley por la que se crea el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.	X	X
121/000015	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, para regular las	NO	NO

### Cuadro sinóptico de la VIII legislatura.

	especialidades de los litigios transfronterizos civiles y mercantiles en la Unión Europea.		
121/000016	Proyecto de Ley por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio.	NO	NO
121/000017	Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.	NO	NO
121/000018	Proyecto de Ley por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.	NO	NO
121/000019	Proyecto de Ley sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España.	X	X
121/000020	Proyecto de Ley por la que se reconoce una prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil, y que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional.	NO	NO
121/000021	Proyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo.	NO	X
121/000022	Proyecto de Ley sobre las cláusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación.	NO	X
121/000023	Proyecto de Ley por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas comunitarias en materia de fiscalidad de productos energéticos y electricidad y del régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes y se regula el régimen fiscal de las aportaciones transfronterizas a fondos de pensiones en el ámbito de la Unión Europea.	NO	NO
121/000024	Proyecto de Ley por la que se deroga la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias.	NO	NO
<b>Año</b>	<b>Proyecto normativo</b>		
<b>2005</b>			
121/000025	Proyecto de Ley de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado.	X	X
121/000026	Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de riesgo provocados por explosivos.	X	X
121/000027	Proyecto de Ley de reformas para el impulso a la productividad.	NO	NO
121/000028	Proyecto de Ley de reformas en materia tributaria para el impulso a la	NO	NO



### Cuadro sinóptico de la VIII legislatura.

	productividad.		
121/000029	Proyecto de Ley reguladora de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras.	NO	NO
121/000030	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos.	NO	NO
121/000031	Proyecto de Ley Orgánica de la Defensa Nacional.	X	X
121/000032	Proyecto de Ley de adaptación de la legislación española al régimen de actividades transfronterizas regulado en la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y supervisión de los fondos de pensiones de empleo.	NO	X
121/000033	Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004.	NO	X
121/000034	Proyecto de Ley de publicidad y comunicación institucional.	X	X
121/000035	Proyecto de Ley de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la	NO	NO
121/000036	Proyecto de Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.	X	X
121/000037	Proyecto de Ley de tropa y marinería.	X	X
121/000038	Proyecto de Ley sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.	NO	NO
121/000039	Proyecto de Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida.	X	X
121/000040	Proyecto de Ley por la que se regula el estatuto del miembro nacional de Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión Europea.	X	X
121/000041	Proyecto de Ley de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos.	X	X
121/000042	Proyecto de Ley de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos.	X	X
121/000043	Proyecto de Ley Orgánica de Educación.	X	NO
121/000044	Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.	NO	NO
121/000045	Proyecto de Ley de mediación de seguros y reaseguros privados.	NO	NO
121/000046	Proyecto de Ley de reforma de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria.	NO	NO
121/000047	Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.	NO	NO
121/000048	Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades	NO	X



### Cuadro sinóptico de la VIII legislatura.

	Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.		
121/000049	Proyecto de Ley de adaptación del régimen de las entidades navieras en función del tonelaje a las nuevas directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al transporte marítimo y de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias.	NO	NO
121/000050	Proyecto de Ley por la que se regula el régimen especial del Municipio de Barcelona.	X	X
121/000051	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.	NO	NO
121/000052	Proyecto de Ley de la radio y la televisión de titularidad estatal.	X	X
121/000053	Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006.	NO	NO
121/000054	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas.	NO	NO
121/000055	Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Adhesión a la Unión Europea de la República de Bulgaria y de la República de Rumanía. Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Adhesión a la Unión Europea de la República de Bulgaria y de la República de Rumanía.	X	X
121/000056	Proyecto de Ley por la que se crea el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas.	X	X
121/000057	Proyecto de Ley por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios.	NO	NO
121/000058	Proyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de	X	X
121/000059	Proyecto de Ley sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas.	X	NO
121/000060	Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.	X	NO
121/000061	Proyecto de Ley para la eficacia en la Unión Europea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas en procedimientos penales.	NO	NO
121/000062	Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley para la eficacia en la Unión Europea de las resoluciones	NO	NO

### Cuadro sinóptico de la VIII legislatura.

	de embargo y de aseguramiento de pruebas en procedimientos penales, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.		
121/000063	Proyecto de Ley por la que se modifica el régimen fiscal de las reorganizaciones empresariales y del sistema portuario, y se aprueban medidas tributarias para la financiación sanitaria y para el sector del transporte por carretera.	X	X
121/000064	Proyecto de Ley por la que se deroga el régimen de enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas establecido por la Ley 5/1995, de 23 de marzo y sus disposiciones de desarrollo y ejecución.	X	X
121/000065	Proyecto de Ley Orgánica de modificación de las Leyes Orgánicas 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar y 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.	X	X
121/000066	Proyecto de Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.	X	X
121/000067	Proyecto de Ley de modificación de la Ley 5/1996, de 10 de enero, de creación de entidades de derecho público.	X	X
121/000068	Proyecto de Ley por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).	X	NO
121/000069	Proyecto de Ley Orgánica por la que se adapta la legislación procesal a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se reforma el recurso de casación y se generaliza la doble instancia penal.	X	NO
121/000070	Proyecto de Ley sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.	X	X
121/000071	Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de justicia de proximidad y Consejos de Justicia.	X	NO
<b>Año</b>	<b>Proyecto normativo</b>		
<b>2006</b>			
121/000072	Proyecto de Ley de capitalidad y de régimen especial de Madrid.	NO	NO
121/000073	Proyecto de Ley por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.	X	X
121/000074	Proyecto de Ley por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.	X	X

### Cuadro sinóptico de la VIII legislatura.

121/000075	Proyecto de Ley del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior.	X	X
121/000076	Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.	X	X
121/000077	Proyecto de Ley de sociedades profesionales.	X	NO
121/000078	Proyecto de Ley de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general.	X	NO
121/000079	Proyecto de Ley de cesión del Castillo de Montjuïc.	X	X
121/000080	Proyecto de Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.	X	X
121/000081	Proyecto de Ley de medidas para la prevención del fraude fiscal.	X	X
121/000082	Proyecto de Ley Orgánica de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte.	X	X
121/000083	Proyecto de Ley de mejora de la protección de los consumidores y usuarios.	X	X
121/000084	Proyecto de Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.	X	X
121/000085	Proyecto de Ley de transparencia de las relaciones financieras entre las Administraciones Públicas y las empresas públicas, y de transparencia financiera de determinadas empresas.	X	NO
121/000086	Proyecto de Ley de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea.	X	NO
121/000087	Proyecto de Ley de la Red de Parques Nacionales.	X	NO
121/000088	Proyecto de Ley de declaración del Parque Nacional de Monfragüe.	X	NO
121/000089	Proyecto de Ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas.	X	X
121/000090	Proyecto de Ley de creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales.	X	NO
121/000091	Proyecto de Ley para la mejora del crecimiento y del empleo (procedente del Real Decreto-Ley 5/2006, de 9 de junio).	X	NO
121/000092	Proyecto de Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.	X	X
121/000093	Proyecto de Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.	X	NO
121/000094	Proyecto de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.	X	NO
121/000095	Proyecto de Ley de Contratos del Sector	X	X



### Cuadro sinóptico de la VIII legislatura.

	Público.		
121/000096	Proyecto de Ley de Suelo.	X	NO
121/000097	Proyecto de Ley sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores.	X	NO
121/000098	Proyecto de Ley sobre concurrencia y prelación de créditos en caso de ejecuciones singulares.	X	X
121/000099	Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.	X	X
121/000100	Proyecto de Ley de Defensa de la Competencia.	X	NO
121/000101	Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.	X	X
121/000102	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural.	X	X
121/000103	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.	X	X
121/000104	Proyecto de Ley de investigación biomédica.	X	NO
121/000105	Proyecto de Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.	X	X
121/000106	Proyecto de Ley sobre regularización y actualización de inscripciones de embarcaciones pesqueras en el Registro de Buques y Empresas Navieras y en el Censo de la Flota Pesquera Operativa.	X	X
121/000107	Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.	NO	NO
121/000108	Proyecto de Ley de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, para la modificación del régimen de las ofertas públicas de adquisición y de la transparencia de los emisores.	X	NO
121/000109	Proyecto de Ley de jurisdicción voluntaria para facilitar y agilizar la tutela y garantía de los derechos de la persona y en materia civil y mercantil.	X	NO
121/000110	Proyecto de Ley por la que se procede a la integración de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por Cuenta Propia o	X	X

### Cuadro sinóptico de la VIII legislatura.

	<b>Autónomos.</b>		
121/000111	Proyecto de Ley general de navegación marítima.	X	X
121/000112	Proyecto de Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas.	X	X
121/000113	Proyecto de Ley de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad.	X	X
121/000114	Proyecto de Ley de la carrera militar.	X	X
121/000115	Proyecto de Ley del Estatuto del trabajo autónomo.	X	NO
121/000116	Proyecto de Ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.	X	X
121/000117	Proyecto de Ley Orgánica reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN.	X	X
121/000118	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 50/1981, de 31 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.	X	X
121/000119	Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.	X	X
121/000120	Proyecto de Ley de creación de la Comisión Nacional del Sector Postal.	X	X
121/000121	Proyecto de Ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso.	X	X
<b>Año</b>	<b>Proyecto normativo</b>		
<b>2007</b>			
121/000122	Proyecto de Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera.	X	X
121/000123	Proyecto de Ley de normas básicas sobre explotación, transporte, experimentación y sacrificio para el cuidado de los animales.	X	X
121/000124	Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en materia de información y consulta de los trabajadores y en materia de protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario.	X	X
121/000125	Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, y el texto refundido de la Ley de ordenación y	X	X

### Cuadro sinóptico de la VIII legislatura.

	supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.		
121/000126	Proyecto de Ley de medidas en materia de Seguridad Social.	X	X
121/000127	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria.	X	X
121/000128	Proyecto de Ley de conservación de datos relativos a las Comunicaciones Electrónicas y a las Redes Públicas de Comunicaciones	X	X
121/000129	Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, en materia de supervisión del reaseguro.	X	X
121/000130	Proyecto de Ley de responsabilidad medioambiental	X	X
121/000131	Proyecto de Ley Orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.	X	X
121/000132	Proyecto de Ley Orgánica del régimen disciplinario de la Guardia Civil.	X	X
121/000133	Proyecto de Ley de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio.	X	X
121/000134	Proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.	X	X
121/000135	Proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural.	X	NO
121/000136	Proyecto de Ley sobre reutilización de la información del sector público.	X	X
121/000137	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros y otras normas del sistema financiero.	X	NO
121/000138	Proyecto de Ley del Cine.	X	X
121/000139	Proyecto de Ley reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.	X	X
121/000140	Proyecto de Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad	X	X
121/000141	Proyecto de Ley de modificación de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil.	X	X
121/000142	Proyecto de Ley Orgánica para la persecución extraterritorial del tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas.	X	NO
121/000143	Proyecto de Ley de adopción	X	X



### Cuadro sinóptico de la VIII legislatura.

	internacional.		
121/000144	Proyecto de Ley para la regulación del régimen de las empresas de inserción.	X	X
121/000145	Proyecto de Ley por la que se establece la deducción por nacimiento o adopción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la prestación económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento o adopción.	X	NO
121/000146	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.	X	X
121/000147	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.	X	NO
121/000148	Proyecto de Ley por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2007-2011.	X	NO
121/000149	Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.	NO	NO
121/000150	Proyecto de Ley orgánica, complementaria de la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural.	NO	NO
121/000151	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.	X	NO
121/000152	Proyecto de Ley por la que se detrae de la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica el mayor ingreso derivado de la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (procedente del Real Decreto-Ley 11/2007, de 7 de diciembre).	X	NO

- Acompañado de IEIG Congreso según la Intranet del Congreso de los Diputados.
  - X: Si viene acompañado Informe de Evaluación de Impacto de Género
  - No: No viene acompañado Informe de Evaluación de Impacto de Género
- Se encontró en el Archivo (Por tanto puede consultarse en el anexo).
  - X: Si se encontró
  - No: No se encontró

## b) Cuadros sinóptico IEIG IX Legislatura

Cuadro sinóptico de la IX legislatura.

<b>Año</b>	<b>Proyecto normativo presentados en la IX Legislatura</b>	<b>Acompañado de IEIG/MAI según Intranet y con signatura. Congreso de los Diputados</b>	<b>Se encontró en el Archivo (Por tanto puede consultarse en el anexo).</b>
<b>2008</b>			
121/000001	Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Lisboa, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en la capital portuguesa el 13 de diciembre de 2007.	X	X
121/000002	Proyecto de Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias.	X	X
121/000003	Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias.	X	X
121/000004	Proyecto de Ley sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.	X	X
121/000005	Proyecto de Ley de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad.	X	X
121/000006	Proyecto de Ley relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original.	X	X
121/000007	Proyecto de Ley por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito.	X	X
121/000008	Proyecto de Ley por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria.	X	X
121/000009	Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009.	X	NO
121/000010	Proyecto de Ley de control de precursores de drogas.	X	NO
121/000011	Proyecto de Ley del contrato de transporte terrestre de mercancías.	X	X
121/000012	Proyecto de Ley por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y	X	X



### Cuadro sinóptico de la IX legislatura.

	Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo en materia sancionadora		
121/000013	Proyecto de Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.	X	X
121/000014	Proyecto de Ley General de Navegación Marítima	X	NO
121/000015	Proyecto de Ley por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario.	X	NO
121/000016	Proyecto de Ley de Medidas de fomento del alquiler de viviendas y la eficiencia energética de los edificios.	X	X
121/000017	Proyecto de Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial.	X	X
121/000018	Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito y el texto refundido de la Ley de Ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, para la reforma del régimen de participaciones significativas en empresas de servicios de inversión, en entidades de crédito y en entidades aseguradoras.	X	X
121/000019	Proyecto de Ley por la que se modifica el Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, para suprimir las funciones del Consorcio de Compensación de Seguros en relación con los seguros obligatorios de viajeros y del cazador y reducir el recargo destinado a financiar las funciones de liquidación de entidades aseguradoras, y el texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.	X	X
<b>2009</b>			
121/000020	Proyecto de Ley de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias.	X	X
121/000021	Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones (procedente del Real Decreto-Ley 1/2009, de 23 de febrero).	X	X
121/000022	Proyecto de Ley de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas (procedente del Real Decreto-Ley 2/2009, de 6 de marzo).	X	NO
121/000023	Proyecto de Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.	X	X
121/000024	Proyecto de Ley de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen	X	X

### Cuadro sinóptico de la IX legislatura.

	económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general.		
121/000025	Proyecto de Ley de servicios de pago.	X	X
121/000026	Proyecto de Ley por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios.	X	X
121/000027	Proyecto de Ley de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española	X	X
121/000028	Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.	NO	NO
121/000029	Proyecto de Ley por la que se establece el régimen sancionador previsto en los Reglamentos (CE) relativos al registro, a la evaluación, a la autorización y a la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) y sobre la clasificación, el etiquetado y el envasado de sustancias y mezclas (CLP), que lo modifica.	X	X
121/000030	Proyecto de Ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.	X	X
121/000031	Proyecto de Ley de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios (procedente del Proyecto de Ley de medidas de fomento del alquiler de viviendas y la eficiencia energética de los edificios (121/16) y la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en orden a una mayor agilidad de los desahucios por falta de pago, y de ayuda a situaciones de alta vulnerabilidad social (122/10)).	NO	NO
121/000032	Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.	X	X
121/000033	Proyecto de Ley de modificación del texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.	X	X
121/000034	Proyecto de Ley de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista.	X	X
121/000035	Proyecto de Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso.	X	X
121/000036	Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones	X	X

### Cuadro sinóptico de la IX legislatura.

	judiciales de decomiso por la comisión de infracciones penales.		
121/000037	Proyecto de Ley por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.	X	X
121/000038	Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas.	X	X
121/000039	Proyecto de Ley por la que se regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción (procedente del Real Decreto-Ley 10/2009, de 13 de agosto).	X	X
121/000040	Proyecto de Ley por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias comunidades autónomas (procedente del Real Decreto-Ley 12/2009, de 13 de agosto).	X	X
121/000041	Proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.	X	X
121/000042	Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010.	X	NO
121/000043	Proyecto de Ley por la que se transponen determinadas directivas en el ámbito de la imposición indirecta y se modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes para adaptarla a la normativa comunitaria.	X	X
121/000044	Proyecto de Ley Orgánica del régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.	X	X
121/000045	Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual.	X	X
121/000046	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, la Ley 24/1988, de 28 de julio, de Mercado de Valores y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, para su adaptación a la normativa comunitaria.	X	X
121/000047	Proyecto de Ley de captación de financiación en los mercados por los concesionarios de obras públicas.	X	X
121/000048	Proyecto de Ley sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea.	X	X
121/000049	Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica	X	X



### Cuadro sinóptico de la IX legislatura.

	6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.		
121/000050	Proyecto de Ley de Reforma del Sistema de Apoyo Financiero a la Internacionalización de la empresa española.	X	X
121/000051	Proyecto de Ley del Fondo para la Promoción del Desarrollo.	X	X
121/000052	Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.	X	X
121/000053	Proyecto de Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.	X	X
121/000054	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea.	X	X
121/000055	Proyecto de Ley por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.	X	X
121/000056	Proyecto de Ley sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España.	X	X
<b>2010</b>			
121/000057	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para perfeccionar y ampliar el régimen general de comercio de derechos de emisión e incluir la aviación en el mismo.	X	X
121/000058 MEMORIA	Proyecto de Ley por la que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, se establecen las obligaciones de los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo (procedente del Real Decreto- Ley 1/2010, de 5 de febrero).	M	M
121/000059	Proyecto de Ley de protección del medio marino.	M	M
121/000060	Proyecto de Ley de Economía Sostenible.	M	NO
121/000061	Proyecto de Ley Orgánica Complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional; 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.	M	NO
121/000062	Proyecto de Ley por la que se establece el Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil y se modifica la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.	M	M
121/000063	Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.	M	M
121/000064	Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.	M	M
121/000065	Proyecto de Ley del régimen de cesión de	M	M

### Cuadro sinóptico de la IX legislatura.

	tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.		
121/000066	Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.	M	M
121/000067	Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.	M	M
121/000068	Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.	M	M
121/000069	Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.	M	M
121/000070	Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.	M	M
121/000071	Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.	M	M
121/000072	Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.	M	M
121/000073	Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.	M	M
121/000074	Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad de Madrid y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.	M	M
121/000075	Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.	M	M
121/000076	Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.	M	M
121/000077	Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunitat Valenciana y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.	M	M
121/000078 INFORME	Proyecto de Ley de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.	X	X
<b>2011</b>			
121/000079	Proyecto de Ley de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, 31/2007, de	X	X

### Cuadro sinóptico de la IX legislatura.

	30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras.		
121/000080	Proyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.	NS	NO
121/000081	Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo (procedente del Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio).	M	M
121/000082	Proyecto de Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.	NS	NO
121/000083	Proyecto de Ley por la que se regula la Sociedad Cooperativa Europea con domicilio en España.	NS	NO
121/000084	Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando.	NS	NO
121/000085	Proyecto de Ley de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado.	NS	NO
121/000086	Proyecto de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía.	M	M
121/000087	Proyecto de Ley Orgánica complementaria a la Ley para la reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado para la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.	NS	NO
121/000088	Proyecto de Ley de Economía Social	NS	NO
121/000089	Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y mejoramiento del Régimen Foral de Navarra.	NO	NO
121/000090	Proyecto de Ley del Registro Civil.	NS	NO
121/000091	Proyecto de Ley Orgánica, complementaria de la Ley del Registro Civil, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.	NS	NO
121/000091	Proyecto de Ley Orgánica, complementaria de la Ley del Registro Civil, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.	NS	NO
121/000092	Proyecto de Ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos	NS	NO
121/000093	Proyecto de Ley del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal.	M	M
121/000094	Proyecto de Ley de tasas consulares.	NS	NO
121/000095	Proyecto de Ley de pesca sostenible.	NS	NO
121/000096	Proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición.	NS	NO



### Cuadro sinóptico de la IX legislatura.

121/000097	Proyecto de Ley por la que se prorroga el programa temporal por desempleo e inserción, regulado en la Ley 14/2009, de 11 de noviembre (procedente del Real Decreto-Ley 12/2010, de 20 de agosto).	NS	NO
121/000098	Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.	NO	NO
121/000099	Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las Comunidades Europeas.	NS	NO
121/000100	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores y el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública.	NS	NO
121/000101	Proyecto de Ley por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas.	NS	NO
121/000102	Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Protocolo por el que se modifica el Protocolo sobre las disposiciones transitorias, anejo al Tratado de la Unión Europea, al Tratado de funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, firmado en Bruselas el 23 de junio de 2010.	M	M
121/000103	Proyecto de Ley de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.	NS	NO
121/000104	Proyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo.	NS	NO
121/000105	Proyecto de Ley de dinero electrónico.	NS	NO
121/000106	Proyecto de Ley por la que se modifican determinadas normas financieras para la aplicación del Reglamento (CE) número 1060/2009, de 16 de septiembre, sobre agencias de calificación crediticia.	NS	NO
121/000107	Proyecto de Ley Orgánica de derechos y deberes de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.	NS	NO
121/000108	Proyecto de Ley de regulación del juego.	NS	NO
121/000109	Proyecto de Ley de regulación del juego.	NS	NO
121/000110	Proyecto de Ley reguladora de la jurisdicción social.	NS	NO
121/000111	Proyecto de Ley de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas.	NS	NO

### Cuadro sinóptico de la IX legislatura.

121/000112	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria.	NS	NO
121/000113	Proyecto de Ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.	NS	NO
121/000114	Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados.	NS	NO
121/000115	Proyecto de Ley General de Salud Pública.	NS	NO
121/000116	Proyecto de Ley de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo (procedente del Real Decreto-Ley 3/2011, de 18 de febrero).	NS	NO
121/000117	Proyecto de Ley de medidas de agilización procesal y de reforma del artículo 35 de la Ley 53/2002, de 20 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.	NS	NO
121/000118	Proyecto de Ley de depósito legal.	NS	NO
121/000119	Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.	NS	NO
121/000120	Proyecto de Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.	NS	NO
121/000121	Proyecto de Ley de contratos del Sector Público en los ámbitos de la Defensa y de la Seguridad.	NS	NO
121/000122	Proyecto de Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles.	NS	NO
121/000123	Proyecto de Ley por la que se procede a la integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General de la Seguridad Social.	NS	NO
121/000124	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.	NS	NO
121/000125	Proyecto de Ley reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.	NS	NO
121/000126	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.	NS	NO
121/000127	Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia (procedente del Real Decreto-Ley 6/2011, de 13 de mayo).	NS	NO
121/000128	Proyecto de Ley sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias.	NS	NO
121/000129	Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas	NS	NO
121/000130	Proyecto de Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación.	NS	NO
121/000131	Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención al cliente destinados a los consumidores y usuarios.	NS	NO
121/000132	Proyecto de Ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la	NS	NO



### Cuadro sinóptico de la IX legislatura.

	vida.		
121/000133	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.	NS	NO
121/000134	Proyecto de Ley de servicios funerarios.	NS	NO
121/000135	Proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva (procedente del Real Decreto-Ley 7/2011, de 10 de junio).	NS	NO
121/000136	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.	NS	NO
121/000137	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.	NS	NO
121/000138	Proyecto de Ley de Contratos de Distribución.	NS	NO
121/000139	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2009/73/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE.	NS	NO
121/000140	Proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.	NS	NO
121/000141	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2009/72/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE.	NS	NO
121/000142	Proyecto de Ley de supervisión de los seguros privados.	NS	NO
121/000143	Proyecto de Ley Orgánica para la aplicación a la Guardia Civil del artículo 13.1 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.	NS	NO
121/000144	Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para la creación de los Tribunales de Instancia.	NS	NO
121/000145	Proyecto de Ley de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo (procedente del Real Decreto-Ley 10/2011, de 26 de agosto).	NS	NO
121/000146	Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje en el Deporte.	NS	NO

### Cuadro sinóptico de la IX legislatura.

121/000147	Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.	NS	NO
------------	--	----	----

- Acompañado de IEIG/MAI según Intranet y con signature. Congreso de los Diputados X: Si viene acompañado Informe de Evaluación de Impacto de Género:
  - X: Posee Informe
  - M: Posee Memoria
  - NS: Sin signature, imposible de consultar en el Archivo por el momento
  - NO: Según la Intranet del Congreso debería de ir acompañado o de IEIG o MAI, además este extremo debería poder ser consultado pero una vez realizada la búsqueda el documento no se encuentra
- Se encontró en el Archivo (Por tanto puede consultarse en el anexo):
  - X: Si se encontró
  - No: No se encontró

## 8.3 Informes de Evaluación de Impacto de Género Andaluces

### a) Cuadro sinóptico VII y VIII legislatura Andaluza

Cuadro sinóptico de la VII y VIII Legislatura Andaluza

<b>Año</b>	<b>Proyecto normativo presentados en la VII Legislatura</b>	<b>Acompañado de IEIG.</b>	<b>Acompañado de IOEIG Elaborado por IAM.</b>	<b>Facilitado por S. Archivo (Por tanto puede consultarse en el anexo).</b>
<b>2004</b>				
Ley 7-04/PL-000001	PL de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía.	NO	NO	NO
Ley 7-04/PL-000002	PL de creación del Colegio Profesional de Educadores Sociales de Andalucía.	NO	NO	NO
Ley 7-04/PL-000003	PL de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía	NO	NO	NO
Ley 7-04/PL-000004	PL de creación del Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Andalucía.	NO	NO	NO
Ley 7-04/PL-000005	PL de creación del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía.	NO	NO	NO
Ley 7-04/PL-000006	PL por la que se regula el régimen de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.	NO	NO	NO
Ley 7-04/PL-000007	PL del Comité Andaluz para la Sociedad del Conocimiento.	NO	NO	NO
Ley 7-04/PL-000008	PL de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2005.	NO	NO	NO
Ley 7-04/PL-000009	PL de medidas tributarias, administrativas y financieras.	NO	NO	NO
<b>2005</b>				
Ley 7-05/PL-000001	PL de concesión de un crédito extraordinario para sufragar las subvenciones a adjudicar a las formaciones políticas por los gastos electorales causados por las elecciones al Parlamento de Andalucía celebradas el 14 de marzo de 2004.	NO	NO	NO
Ley 7-05/PL-000002	PL de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.	NO	NO	NO
Ley 7-05/PL-000003	PL de Artesanía de Andalucía.	NO	NO	NO
Ley 7-05/PL-000004	PL por la que se autoriza la enajenación del bien inmueble conocido.	NO	NO	NO
Ley 7-05/PL-000005	PL del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2006.	X	X	X
Ley 7-05/PL-000006	PL de creación de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir.	NO	NO	NO
<b>2006</b>				
Ley 7-06/PL-000001	PL de Asociaciones de Andalucía.	NO	NO	NO
Ley 7-06/PL-000002	PL de creación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.	NO	NO	NO
Ley 7-06/PL-000003	PL del estatuto de los andaluces en el mundo.	NO	NO	NO
Ley 7-06/PL-000004	PL del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.	NO	NO	NO
Ley 7-06/PL-	PL de creación del Instituto Andaluz de	NO	NO	NO



## Cuadro sinóptico de la VII y VIII Legislatura Andaluza

000005	Prevención de Riesgos Laborales.			
Ley 7-06/PL-000006	PL sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía.	NO	NO	NO
Ley 7-06/PL-000007	PL de servicios ferroviarios de Andalucía.	NO	NO	NO
Ley 7-06/PL-000008	PL de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía.	NO	NO	NO
Ley 7-06/PL-000009	PL de reconocimiento de la Universidad Privada Fernando III	NO	NO	NO
Ley 7-06/PL-000010	PL por la que se regula la investigación en reprogramación celular con finalidad exclusivamente terapéutica.	NO	NO	NO
Ley 7-06/PL-000011	PL de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía	NO	NO	NO
Ley 7-06/PL-000012	PL por la que se crea como entidad de derecho público el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.	NO	NO	NO
Ley 7-06/PL-000013	PL por la que se autoriza la concesión, con carácter extraordinario, de un anticipo reintegrable al municipio de Marbella.	NO	NO	NO
Ley 7-06/PL-000014	PL de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.	NO	NO	NO
Ley 7-06/PL-000015	PL por la que se modifica la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se aprueba el Plan Estadístico de Andalucía 2007-2010.	NO	NO	NO
Ley 7-06/PL-000016	PL del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007.	X	X	X
Ley 7-06/PL-000017	PL sobre fiscalidad complementaria del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.	NO	NO	NO
<b>2007</b>				
Ley 7-07/PL-000001	PL de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía.	X	X	X
Ley 7-07/PL-000002	PL de la Administración de la Junta de Andalucía.	X	X	X
Ley 7-07/PL-000003	PL reguladora del consejo genético, de protección de los derechos de las personas que se sometan a análisis genéticos y de los bancos de ADN humano en Andalucía.	X	X	X
Ley 7-07/PL-000004	PL de protección del origen y la calidad de los vinos de Andalucía.	X	X	X
Ley 7-07/PL-000005	PL del Patrimonio Histórico de Andalucía.	NO	X	X
Ley 7-07/PL-000006	PL para la promoción de la igualdad de género en Andalucía	X	X	X
Ley 7-07/PL-000007	PL de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.	X	X	X
Ley 7-07/PL-000008	PL de Educación de Andalucía.	X	X	X
Ley 7-07/PL-000009	PL de Farmacia de Andalucía.	X	X	X
Ley 7-07/PL-000010	PL por la que se crea la Agencia Tributaria de Andalucía y se aprueban medidas fiscales.	X	X	X
Ley 7-07/PL-000011	PL de la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada por la Agencia	NO	NO	NO

## Cuadro sinóptico de la VII y VIII Legislatura Andaluza

	Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA).			
Ley 7-07/PL-000012	PL por la que se modifica la Ley 4/1994, de 12 de abril, de creación de la Universidad Internacional de Andalucía.	NO	NO	NO
Ley 7-07/PL-000013	PL de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía.	X	X	X
Ley 7-07/PL-000014	PL Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento.	NO	X	X
Ley 7-07/PL-000015	PL del Consejo Andaluz de Concertación Local.	X	X	X
Ley 7-07/PL-000016	PL de designación de Senadores y Senadoras en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía.	X	X	X
Ley 7-07/PL-000017	PL del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008.	X	X	X
<b>2008</b>				
Ley 8-08/PL-000001	PL de medidas tributarias y financieras de impulso a la actividad económica de Andalucía (procedente del Decreto-Ley 1/2008, de 3 de junio)	NO	NO	NO
Ley 8-08/PL-000002	PL reguladora de la mediación familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía	X	X	X
Ley 8-08/PL-000003	PL que regula el acceso de los municipios andaluces al régimen de organización de los municipios de gran población	X	X	X
Ley 8-08/PL-000004	PL del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009	X	X	X
Ley 8-08/PL-000005	PL por la que se aprueba el Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA) (procedente del Decreto Ley 2/2008, de 9 de diciembre)	NO	NO	NO
<b>2009</b>				
Ley 8-09/PL-000001	PL por la que se autoriza la transmisión de la titularidad del inmueble denominado Palacio de los Condes de Buenavista, sito en Málaga, c/ San Agustín, nº 8	NO	NO	NO
Ley 8-09/PL-000002	PL de concesión de un crédito extraordinario para sufragar las subvenciones a adjudicar a las formaciones políticas por los gastos electorales causados por las Elecciones al Parlamento de Andalucía celebradas el día 9 de marzo de 2008	NO	NO	NO
Ley 8-09/PL-000003	PL Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía	X	X	X

### Cuadro sinóptico de la VII y VIII Legislatura Andaluza

Ley 8-09/PL-000004	PL de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte	X	NO	X
Ley 8-09/PL-000005	PL de Aguas de la Comunidad Autónoma de Andalucía	X	X	X
Ley 8-09/PL-000006	PL del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010	X	X	X
Ley 8-09/PL-000007	PL para la Dehesa	NO	X	X
Ley 8-09/PL-000008	PL de Autonomía Local de Andalucía	X	X	X
Ley 8-09/PL-000009	PL reguladora de la participación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía	X	X	X
<b>2010</b>				
Ley 8-10/PL-000001	PL por la que se modifican diversas Leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el Mercado Interior (procedente del Decreto-Ley 3/2009, de 22 de diciembre)	NO	NO	NO
Ley 8-10/PL-000002	PL de medidas tributarias de reactivación económica de la Comunidad Autónoma de Andalucía (procedente del Decreto-Ley 1/2010, de 9 de marzo)	NO	NO	NO
Ley 8-10/PL-000003	PL de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía	X	X	X
Ley 8-10/PL-000004	PL de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad (procedente del Decreto-Ley 4/2010, de 6 de julio)	NO	NO	NO
Ley 8-10/PL-000005	PL del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011	X	X	X
Ley 8-10/PL-000006	PL del Olivar de Andalucía	NO	X	X
Ley 8-10/PL-000007	PL de reordenación del sector público de Andalucía (procedente del Decreto-ley 6/2010, de 23 de noviembre)	NO	NO	NO



## b) Cuadro sinóptico VII legislatura Andaluza

Cuadro sinóptico VII Legislatura Andaluza.

<b>Año</b>	<b>Proyecto normativo presentado en la VII Legislatura</b>	<b>Acompañado de IEIG.</b>	<b>Acompañado de IOEIG Elaborado por IAM.</b>	<b>Facilitado por S. Archivo (Por tanto puede consultarse en el anexo).</b>
<b>2004</b>				
Ley 7-04/PL-000001	PL de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía.	NO	NO	NO
Ley 7-04/PL-000002	PL de creación del Colegio Profesional de Educadores Sociales de Andalucía.	NO	NO	NO
Ley 7-04/PL-000003	PL de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía	NO	NO	NO
Ley 7-04/PL-000004	PL de creación del Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Andalucía.	NO	NO	NO
Ley 7-04/PL-000005	PL de creación del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía.	NO	NO	NO
Ley 7-04/PL-000006	PL por la que se regula el régimen de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.	NO	NO	NO
Ley 7-04/PL-000007	PL del Comité Andaluz para la Sociedad del Conocimiento.	NO	NO	NO
Ley 7-04/PL-000008	PL de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2005.	NO	NO	NO
Ley 7-04/PL-000009	PL de medidas tributarias, administrativas y financieras.	NO	NO	NO
<b>2005</b>				
Ley 7-05/PL-000001	PL de concesión de un crédito extraordinario para sufragar las subvenciones a adjudicar a las formaciones políticas por los gastos electorales causados por las elecciones al Parlamento de Andalucía celebradas el 14 de marzo de 2004.	NO	NO	NO
Ley 7-05/PL-000002	PL de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.	NO	NO	NO
Ley 7-05/PL-000003	PL de Artesanía de Andalucía.	NO	NO	NO
Ley 7-05/PL-000004	PL por la que se autoriza la enajenación del bien inmueble conocido.	NO	NO	NO
Ley 7-05/PL-000005	PL del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2006.	X	X	X
Ley 7-05/PL-000006	PL de creación de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir.	NO	NO	NO
<b>2006</b>				
Ley 7-06/PL-000001	PL de Asociaciones de Andalucía.	NO	NO	NO
Ley 7-06/PL-000002	PL de creación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.	NO	NO	NO
Ley 7-06/PL-000003	PL del estatuto de los andaluces en el mundo.	NO	NO	NO
Ley 7-06/PL-000004	PL del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.	NO	NO	NO
Ley 7-06/PL-	PL de creación del Instituto Andaluz de	NO	NO	NO

## Cuadro sinóptico VII Legislatura Andaluza.

000005	Prevención de Riesgos Laborales.			
Ley 7-06/PL-000006	PL sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía.	NO	NO	NO
Ley 7-06/PL-000007	PL de servicios ferroviarios de Andalucía.	NO	NO	NO
Ley 7-06/PL-000008	PL de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía.	NO	NO	NO
Ley 7-06/PL-000009	PL de reconocimiento de la Universidad Privada Fernando III	NO	NO	NO
Ley 7-06/PL-000010	PL por la que se regula la investigación en reprogramación celular con finalidad exclusivamente terapéutica.	NO	NO	NO
Ley 7-06/PL-000011	PL de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía	NO	NO	NO
Ley 7-06/PL-000012	PL por la que se crea como entidad de derecho público el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.	NO	NO	NO
Ley 7-06/PL-000013	PL por la que se autoriza la concesión, con carácter extraordinario, de un anticipo reintegrable al municipio de Marbella.	NO	NO	NO
Ley 7-06/PL-000014	PL de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.	NO	NO	NO
Ley 7-06/PL-000015	PL por la que se modifica la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se aprueba el Plan Estadístico de Andalucía 2007-2010.	NO	NO	NO
Ley 7-06/PL-000016	PL del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007.	X	X	X
Ley 7-06/PL-000017	PL sobre fiscalidad complementaria del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.	NO	NO	NO
<b>2007</b>				
Ley 7-07/PL-000001	PL de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía.	X	X	X
Ley 7-07/PL-000002	PL de la Administración de la Junta de Andalucía.	X	X	X
Ley 7-07/PL-000003	PL reguladora del consejo genético, de protección de los derechos de las personas que se sometan a análisis genéticos y de los bancos de ADN humano en Andalucía.	X	X	X
Ley 7-07/PL-000004	PL de protección del origen y la calidad de los vinos de Andalucía.	X	X	X
Ley 7-07/PL-000005	PL del Patrimonio Histórico de Andalucía.	NO	X	X
Ley 7-07/PL-000006	PL para la promoción de la igualdad de género en Andalucía	X	X	X
Ley 7-07/PL-000007	PL de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.	X	X	X
Ley 7-07/PL-000008	PL de Educación de Andalucía.	X	X	X
Ley 7-07/PL-000009	PL de Farmacia de Andalucía.	X	X	X
Ley 7-07/PL-000010	PL por la que se crea la Agencia Tributaria de Andalucía y se aprueban medidas fiscales.	X	X	X
Ley 7-07/PL-000011	PL de la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada por la Agencia	NO	NO	NO



### Cuadro sinóptico VII Legislatura Andaluza.

	Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA).			
Ley 7-07/PL-000012	PL por la que se modifica la Ley 4/1994, de 12 de abril, de creación de la Universidad Internacional de Andalucía.	NO	NO	NO
Ley 7-07/PL-000013	PL de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía.	X	X	X
Ley 7-07/PL-000014	PL Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento.	NO	X	X
Ley 7-07/PL-000015	PL del Consejo Andaluz de Concertación Local.	X	X	X
Ley 7-07/PL-000016	PL de designación de Senadores y Senadoras en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía.	X	X	X
Ley 7-07/PL-000017	PL del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008.	X	X	X

### c) Cuadro sinóptico VIII legislatura Andaluza

Cuadro sinóptico VIII Legislatura Andaluza.

<i>Año.</i>	<i>Proyecto normativo presentados en la VIII Legislatura.</i>	<i>Acompañado de IEIG.</i>	<i>Acompañado de IOEIG Elaborado por IAM.</i>	<i>Facilitado por S. Archivo (Por tanto puede consultarse en el anexo).</i>
<b>2008</b>				
Ley 8-08/PL-000001	PL de medidas tributarias y financieras de impulso a la actividad económica de Andalucía (procedente del Decreto-Ley 1/2008, de 3 de junio)	NO	NO	NO
Ley 8-08/PL-000002	PL reguladora de la mediación familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía	X	X	X
Ley 8-08/PL-000003	PL que regula el acceso de los municipios andaluces al régimen de organización de los municipios de gran población	X	X	X
Ley 8-08/PL-000004	PL del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009	X	X	X
Ley 8-08/PL-000005	PL por la que se aprueba el Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA) (procedente del Decreto Ley 2/2008, de 9 de diciembre)	NO	NO	NO
<b>2009</b>				
Ley 8-09/PL-000001	PL por la que se autoriza la transmisión de la titularidad del inmueble denominado Palacio de los Condes de Buenavista, sito en Málaga, c/ San Agustín, nº 8	NO	NO	NO
Ley 8-09/PL-000002	PL de concesión de un crédito extraordinario para sufragar las subvenciones a adjudicar a las formaciones políticas por los gastos electorales causados por las Elecciones al Parlamento de Andalucía celebradas el día 9 de marzo de 2008	NO	NO	NO
Ley 8-09/PL-000003	PL Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía	X	X	X
Ley 8-09/PL-000004	PL de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte	X	NO	X
Ley 8-09/PL-000005	PL de Aguas de la Comunidad Autónoma de Andalucía	X	X	X

### Cuadro sinóptico VIII Legislatura Andaluza.

Ley 8-09/PL-000006	PL del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010	X	X	X
Ley 8-09/PL-000007	PL para la Dehesa	NO	X	X
Ley 8-09/PL-000008	PL de Autonomía Local de Andalucía	X	X	X
Ley 8-09/PL-000009	PL reguladora de la participación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía	X	X	X
<b>2010</b>				
Ley 8-10/PL-000001	PL por la que se modifican diversas Leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el Mercado Interior (procedente del Decreto-Ley 3/2009, de 22 de diciembre)	NO	NO	NO
Ley 8-10/PL-000002	PL de medidas tributarias de reactivación económica de la Comunidad Autónoma de Andalucía (procedente del Decreto-Ley 1/2010, de 9 de marzo)	NO	NO	NO
Ley 8-10/PL-000003	PL de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía	X	X	X
Ley 8-10/PL-000004	PL de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad (procedente del Decreto-Ley 4/2010, de 6 de julio)	NO	NO	NO
Ley 8-10/PL-000005	PL del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011	X	X	X
Ley 8-10/PL-000006	PL del Olivar de Andalucía	NO	X	X
Ley 8-10/PL-000007	PL de reordenación del sector público de Andalucía (procedente del Decreto-Ley 6/2010, de 23 de noviembre)	NO	NO	NO

## 9. Versión Francesa

---

### 9.1 Introduction en français

*Rêve de ce que tu t'enhardies de rêver, va où tu veux aller, sois ce que tu veux  
être... ¡vivre !*

Juan Salvador Gaviota.

Les postulats scientifiques qu'on accepte maintenant de manière universelle ont été considérés tout au long de l'histoire comme des hérésies, des bêtises, des élucubrations d'esprits malades ou, dans le meilleur des cas, comme des idées insensées.

Depuis quelques années, on a commencé à utiliser le genre comme méthode de recherche juridique pour mettre en avant comment l'application des normes universelles peut provoquer différents effets selon les personnes.

Dans ce sens, Benhabib (1990:127) reproche aux auteurs du contractualisme classique leur support aux prétentions universalistes ayant pour conséquence d'exclure les femmes d'un point de vue moral en privatisant leur expérience.

*Les théories morales universalistes occidentales dès Hobbes jusqu'à Rawls sont des théories remplaçantes, dans le sens où l'universalisme qu'elles défendent est défini subrepticement au sens d'identifier les expériences d'un groupe spécifique de sujets comme le cas paradigmatique des ci-êtres-humains. Ces sujets sont des adultes blancs et hommes, propriétaires ou au moins ayant une profession. Je voudrais remplacer l'universalisme remplaçant par l'universalisme interactif.*

*L'universalisme interactif reconnaît la pluralité des modes d'être humains et fait la différence entre les humains sans déclarer inaptes les valeurs morale et politique de toutes ces pluralités et différences.*

La possibilité de l'utilisation de la catégorie genre dans la méthodologie de recherche scientifique, c'est-à-dire, « la reconstruction critique et collective de la signification de l'expérience sociale de la femme, telle qu'elles la vivent » (Mackinnon, 1989:155) et plus concrètement, de la méthodologie juridique, comme Facio (1992:11) l'a déjà employée.

*J'utilise les mêmes méthodes que tout autre juriste, j'analyse les principes dont la norme est fondée, j'examine l'évolution historique et ses antécédents [...] Ce que je fais différemment des autres analystes androcentriques, c'est l'importance que j'accorde aux femmes dans ces analyses. Je fais une analyse critique sur comment les juristes androcentriques ont conceptualisé le phénomène juridique.*

Divers mouvements féministes ont acquis une force sans précédents pendant toute la moitié du dernier siècle, et sont arrivés à créer une catégorie : le genre, qui en finit avec la réduction de la catégorie duale du sexe (mâle/femelle).

Néanmoins, malgré tout le travail fait par les militantes féministes, surtout durant les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, on ne doit pas oublier que la plupart d'entre elles faisaient partie de l'Académie: Millet (1969 :68), qui a exposé l'idée « *le patriarcat est une façon de domination sexuelle, et le sexe est une catégorie sociale imprégnée de politique* », ainsi que Butler qui explore le sens du genre comme l'élection du « arriver à être » et la possibilité de se réaliser : « élections du genre » à partir des présupposés de Beauvoir (1949), (pour Butler (1990:3-4) , le « sujet du féminisme » compris comme les femmes incluses dans la catégorie du genre, a fini par avoir de la force émancipatrice puis il s'est transformé dans un concept oppresseur et exclusif qu'ignore la diversité entre femmes avec différentes réalités culturelles et sociales); plus récemment, Dorlin (2011 :109-229) ouvre des nouvelles sphères de discussion dans les espaces féministes, et réfléchit si la « praxis queer » doit être comprise comme une subversion ou subjugation des normes.

Alors, malgré tout ce travail, on voit aujourd'hui avec regret comment tout ça est menacé quand on découvre que le patriarcat a été capable de classer la catégorie du genre à nouveau catégorie binaire (masculin/féminin).

Ce phénomène a réduit la place faite à la catégorie genre, et a fait qu'on arrive à rendre invisible et mettre sous silence encore plus ces secteurs de la société qui étaient déjà invisibles; on a donc nié une existence juridique (personnes du collectif TRANS, par exemple) où encore, on a perpétué l'éternelle situation de domination sur les femmes.

Ça semble paradoxal d'observer comment l'être humain, qui a été capable de créer des sociétés si complexes comme celles dans lesquelles on vit et des normes pour les régir, n'a pas été capable de créer un espace juste et égalitaire pour toutes les personnes qui y vivent.

Ces sociétés ont oublié, exclu et discriminé un secteur de la population même. D'une part en rendant légitime le système patriarcal hétérosexiste comme unique et vrai : où le

modèle à suivre c'est l'homme blanc, jeune, hétérosexuel et riche et, d'autre part en orientant le pouvoir créatif de l'être humain vers une logique binaire et exclusive, où on a mis au même niveau, sûrement pas par hasard, des concepts et des catégories comme sexe et genre (Butler, 1990)

Il est impossible de ne pas se questionner sur le fait d'être, au XXIème siècle et malgré l'énorme quantité de normes qui existent déjà, pas capables d'assurer une société juste, équitable et égalitaire pour tout le monde. On ne peut pas s'empêcher de penser pourquoi, après des siècles de domination hétéro masculine, la vraie égalité et opportunités des femmes et des hommes est toujours un sujet à revoir dans toutes les sociétés. La proclamation formelle du Principe Universel d'Égalité dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme en 1948 n'a pas été suffisante.

On est peut être parti d'une prémisse erronée quand on a considéré que tout le monde partait du même point de départ et dans les mêmes conditions. Évidemment, ce n'était et ce n'est pas comme ça. Il y a toujours beaucoup de choses à faire et qui doivent être faites en urgence et en parallèle.

On voit avec priorité la nécessité de créer, d'un côté des systèmes juridiques qui permettent l'ouverture à des nouveaux sujets juridiques non binaires, des nouvelles catégories juridiques non basées sur le sexe biologique, pour donner de l'espace à toutes ces personnes qui ont été rendues invisibles et se trouvent marginalisées dans cette société patriarcale binaire ; et d'un autre côté, on voit l'urgence de l'abolition de la situation historique d'infériorité dont les femmes ont souffert dans tous les domaines de la vie. Avec pour conséquence qu'elles ne sont pas au point de départ l'égal les hommes.

*...Si on parle de richesse, la femme est la plus pauvre. Si on parle de violence, la femme est la victime. Si on parle d'opportunités, la femme a moins de possibilités d'apprendre et de se développer de manière personnelle tout au long de l'histoire. Si on parle d'emploi, la femme est plus souvent au chômage. Si on parle de participation sociale, la femme est moins représentée. Si on parle d'économie submergée, sans droits, la femme est couramment la plus exploitée. Si on parle de conciliation de la vie familiale et du travail, la femme est celle qui consacre le plus grand effort aux tâches domestiques.*

*[...] Des inégalités qui n'ont de logique que culturelle, et de tradition, etc... c'est dire, le rôle secondaire qu'on a donné aux femmes de tout temps. (1)*

Pour arriver à surpasser cette infériorité dont les femmes ont été victimes, pour abandonner les rôles dont les femmes et les hommes ont été soumis et pour arriver à avoir une

société égalitaire en droits et en obligations pour tout le monde, il est nécessaire que les pouvoirs publics se débarrassent des obstacles qui le lui interdisent.

### **1. Hypothèse de travail et objectif de la recherche :**

Le point de départ de cette recherche est, même si cela a déjà été montré et éprouvé à plusieurs reprises, ceci malgré la grande quantité de lois élaborées aussi bien dans le cadre de l'UE que de l'état espagnol ou bien même de la région andalouse, que les inégalités réelles et les opportunités entre les personnes qui composent la société, loin de disparaître, se maintiennent ou même, augmentent chaque jour dans beaucoup de situations de la vie publique et privée. Cette situation d'inégalité réelle et d'opportunité est nettement plus évidente si on compare la situation de départ et l'accès aux différentes opportunités entre les femmes et les hommes.

D'un autre côté, on ne peut pas ignorer que, du point de vue de la législation, l'application de certaines normes visiblement neutres, aboutit à des résultats différents entre les femmes et les hommes, en grossissant quelques fois l'écart d'inégalité entre les femmes et les hommes dans notre société.

Nous avons procédé à l'analyse de l'insertion de l'approche du genre dans les budgets publics orientés aux résultats, afin d'analyser les mesures qui sont mises en pratique dans l'actualité. Le budget public est le meilleur élément pour appliquer la transversalité de genre, car il peut favoriser le changement culturel nécessaire pour que la dimension du genre soit intégrée dans toutes les phases et dans tous les niveaux du travail de l'administration.

Il y a énormément de similitudes dans l'introduction de la dimension du genre dans l'élaboration des budgets, pas seulement de la région Andalous, mais aussi dans l'élaboration des budgets de l'état français (surtout à partir de l'année 2000 où le gouvernement français a établi dans son article num. 132 de la Loi sur le Budget pour l'année 2000 que « Le Gouvernement présentera chaque année l'annexe de la loi sur les budgets, une relation des fonds contribuant aux actions pour appliquer les droits des femmes »)

Cette étude sur l'incorporation de la dimension du genre aura pour but de comparer deux stratégies (la française et l'andalouse). Dans ce but nous nous posons trois objectifs généraux bien définis :

1. Analyse quantitative et qualitative dans deux plans (national et Andalou) des outils que l'on a créé pour la présentation de textes législatifs originaux qui à l'origine



contiennent des dispositions normatives neutres, mais qui, lorsqu'ils sont appliqués se trouvent sexistes. De cette manière, ils portent atteinte au principe constitutionnel d'égalité.

Du point de vue national, les Rapports d'Évaluation de l'Impact du Genre et les Mémoires d'Analyse de l'Impact Normatif élaborés en Espagne durant les VIIIème et IXème législations seront analysés selon ce qui est établi par la Loi 30/2003 du 13 Octobre, sur des mesures pour l'incorporation de l'évaluation de l'impact du genre dans les dispositions législatives qu'adopte le Gouvernement et du Décret Royal 1083/2009 du 3 Juillet par lesquelles est régulé le mémoire d'analyse d'impact législative que lui-même développe.

Du point de vue de la région Andalous, seront analysés les Rapports d'Évaluation d'Impact du Genre et les correspondants Rapports d'Observation des Rapports d'Évaluation d'Impact du Genre, élaborés à partir de ce qui est établi par la loi 18/2003 du 29 Décembre pour laquelle on adopte des mesures fiscales et administratives, et le Décret 99/2004 du 3 Mars par lequel le Rapport d'Évaluation d'Impact du Genre est régulé par les projets de loi et les réglementations que le Conseil du Gouvernement développe et adopte.

2. Estimation quantitative et qualitative des mesures correctrices sur le plan national et régional Andalou qui, ayant été signalées dans les Rapports d'Évaluation d'Impact du Genre et les Mémoires d'Observation des Rapports d'Évaluation d'Impact du Genre dans les projets élaborés par le Gouvernement, ont été finalement acceptées, malgré le fait qu'elles n'ont pas de caractère inaliénable dans la rédaction finale des textes législatifs, et qui sont publiées plus tard dans les Bulletins Officiels.
3. Étude sur l'insertion de l'approche du genre dans les budgets publiés orientés sur les résultats. Études de cas : l'État français et la région Andalous.



## **2. Structure de la thèse :**

Ayant pour objectif d'aborder toutes les questions précédentes, nous avons axé ce travail de recherche sur cinq chapitres divisés chacun en sections et sous-sections.

Précédé de l'introduction dans laquelle on a voulu montrer les lignes directrices que l'on a développées pendant toute la recherche, on commence le premier chapitre par mettre en avant la nécessité du changement et élargir les catégories juridiques des actuels sujets de droit, avec la volonté d'éviter la vulnérabilité juridique de ces personnes qui ne répondent pas au modèle établi par la société patriarcale hétéro normative dans laquelle on vit. De cette même façon, on a voulu retrouver la catégorie genre dans la législation communautaire et nationale française.

Le deuxième chapitre est consacré à la recherche du droit d'égalité dans l'ordre juridique national Espagnol et régional Andalou. On s'est focalisé pour ce sujet sur la Loi Organique 3/2007 du 22 Mars comme première loi qui développe le principe d'égalité, et la Loi 12/2007 du 26 Novembre, pour la promotion de l'égalité du genre en Andalousie.

Autour des chapitres trois et quatre, on arrive aux objectifs de cette recherche. Ainsi, dans le troisième chapitre, où l'on parle de l'espace national, après avoir analysé les Rapports d'Évaluation d'Impact du Genre et les Mémoires d'Analyse d'Impact Législatif élaborés en Espagne durant la VIIIème et la IXème législation, on a essayé de savoir parmi toutes ces lois lesquelles avaient vérifié et corrigé toutes les phrases qui auraient pu être sexistes.

De la même manière dans le chapitre quatre, nous avons analysé dans l'espace régional Andalou toutes ces lois qui ont corrigé et ont donc vérifié les mesures établies dans les Rapports d'Évaluation d'Impact du Genre et ses correspondants Rapports d'Observation des Rapports d'Évaluation d'Impact du Genre élaborés par le Gouvernement.

Le chapitre cinq, où l'on explique l'importance du titre de Docteur (2), est configuré en deux parties: la première partie, où l'on a analysé l'introduction de l'approche du genre dans les budgets publics orientés sur les résultats, comme méthodologie à suivre pour une application transversale du principe de Mainstreaming dans l'administration publique. Pour cela, dans la deuxième partie on a fait une recherche comparative entre deux espaces territoriaux de différente catégorie administrative (Région Andalouse et l'État Français), qui ont beaucoup de similitudes dans la façon d'introduire la dimension du genre dans l'élaboration de leurs budgets.

Le dernier chapitre est consacré à la compilation de toutes les conclusions auxquelles on est arrivé après avoir réussi nos objectifs.

Jointe à ces six chapitres, on présente une annexe où l'on a pris tous les Rapports d'Évaluation d'Impact du Genre et les Mémoires d'Analyse d'Impact Législatifs élaborés en Espagne durant la VIIIème et la IXème législation dans le territoire national et tous les Rapports d'Évaluation d'Impact du Genre et ses correspondants Rapports d'Observations des Rapports d'Évaluation d'Impact de Genre dans le territoire régional Andalou qu'on a obtenu tout au long de cette recherche.

Avec cette annexe on veut mettre en évidence, et surtout, étayer toutes les affirmations et les conclusions qu'on expliquera par la suite. La raison pour laquelle on a complété cette recherche par des informations au format papier, et non numérique, est l'absence de rapports numérisés dans les services d'affaires au Congrès des Députés. On ne peut donc pas les visualiser sur internet ni même sur l'intranet du Congrès des Députés. La seule façon d'analyser leur contenu est de descendre aux sous-sols du Congrès à Madrid pour les chercher.

Ceci nous amène à dire que même au XXI siècle, pour cette recherche nous avons procédé de la même façon que les chercheurs du passé : nous avons cherché les documents un par un, manuellement, tous les projets législatifs adoptés pendant les deux législations et, après avoir trouvé pour chacun le rapport ou le mémoire correspondants, s'il y en avait un, l'avoir photocopié, avec l'autorisation nécessaire, pour pouvoir réaliser les analyses quantitatives et qualitatives présentées.

Néanmoins, on doit signaler que le système de dossiers du Parlement Andalou possède ces rapports numérisés. Le seul problème sur le territoire régional est que ces rapports ne sont numérisés qu'au moment où le dossier législatif est complété. Il est donc très difficile d'avoir un registre numérique à jour des dossiers législatifs, lorsqu'ils vont de Commission en Commission et qu'ils n'arrivent aux archives que lorsque le projet de loi est accepté, ce qui peut durer quelques années.

### **3. Méthodologie.**

La recherche que l'on va exposer a été élaborée en suivant une méthodologie classique des sciences juridiques, basée dans un premier temps, sur l'étude de la bibliographie, la doctrine, la jurisprudence, les textes, les statistiques et toute la littérature juridique en anglais, en français et en espagnol, pour la gestion conceptuelle et argumentée du sujet de notre recherche.(3)

On fera une étude de l'évolution historique et une analyse des textes en vigueur (quantitative et qualitative) des concepts juridiques déterminés et indéterminés, utilisant pour cela, une analyse de la jurisprudence qui sera en charge de dire où sont les écarts entre ce qu'il y a dans la législation et ce qui est appliqué.

On verra comment les analyses des textes légaux, de la législation et de la jurisprudence, sont la base sur laquelle on doit étudier les concepts et l'efficacité de la régulation de l'objet de notre recherche. Cela sera le gage de réussite obtenu dans la régulation de l'estimation de l'impact du genre.

Ensuite, on a adopté une méthode logico-déductive, pour avoir la possibilité de mettre en place les renseignements empiriques obtenus essentiellement dans les chapitres trois, quatre et cinq, de les systématiser et de les interpréter comme un ensemble.

Une des singularités de cette recherche est que son analyse a été faite à partir du pluralisme juridique (ONU, UE, France), surmontant le monopole national, pour étudier l'estimation de l'impact du genre vers les rapports d'évaluation d'impact du genre.

Du point de vue socio-juridique, nous nous rendons compte qu'en tant que juristes, nous avons l'obligation de participer à la consolidation d'une société plus juste, plus équitable, jour après jour, tant en ce qui concerne les opportunités qu'une égalité vraie.

Ainsi, pour cette recherche inscrite en Sociologie juridique (où Droit et Société se trouvent très proches), nous avons utilisé, une méthodologie socio-juridique pour nous permettre de réaliser à partir d'une société concrète à un moment donné, une analyse des problèmes et des solutions puis de les rapporter au domaine juridique.

Il s'agit d'un pari pour rapprocher l'Académie de la Société, de façon à ce que les connaissances soient appliquées et retransmises (4). On part des normes juridiques puis analyse si on a obtenu l'impact social désiré, dans notre cas, diminuer l'écart entre les genres.

On a travaillé en prenant en compte les apports réalisés par l'épistémologie féministe à partir des principes des années quatre-vingt, en commençant par ceux de Harding (1993 : 18) qui signale que : « *c'est faux de croire que la méthodologie scientifique a besoin de l'élimination de toutes les valeurs sociales dans les processus scientifiques* », jusqu'aux apports faits par le féminisme radicale (5). Dont Haraway (2007 :130) qui dans un de ses exposés, établit que « *Les savoirs qui sont acquis ont besoin que l'objet de la connaissance soit vu comme un acteur, comme un sujet et pas comme un simple écran, un terrain ou une source de recherche.* » (6)

On voit ainsi que du point de vue épistémologique, dans les années quatre-vingt, les féministes libérales(7) prennent l'héritage théorique de la part de leurs illustres prédécesseurs et souhaitent en finir avec tous les obstacles légaux, qui à l'époque étaient nombreux. Pourtant, on doit signaler les deux grandes affaires qui ont été centrale non seulement pour la mobilisation, mais aussi pour la réflexion théorique de ces années-là. L'une des deux a été représentée par la consigne : « *ce qui est personnel, est politique* » (Millet, 1969), avec laquelle on a attiré l'attention sur les conflits et les problèmes que les femmes doivent affronter dans le domaine privé. L'autre affaire est celle de l'analyse des causes d'oppression, où le concept de patriarcat jouerait le rôle fondamental. On a aussi remis en question l'androcentrisme, la neutralité et la connaissance objective de la science. L'éthique a aussi sa part d'importance.

On va employer cette méthodologie pour l'analyse qualitative des Rapports d'Évaluation d'Impact du Genre et aussi pour l'analyse des Mémoires d'Observations des Rapports d'Évaluation d'Impact du Genre, puis nous finirons par une analyse quantitative. Ceci nous amènera à chercher un outil plus proche comme la méthodologie juridico-féministe.

D'autre part, à partir du langage on construit nos pensées, et c'est à partir de l'analyse des dits rapports et mémoires et du langage utilisé ici-même que l'on peut visualiser quels sont les référents symboliques et législatifs. Il est aussi important de dire que, comme dans toute recherche féministe, cette recherche n'est pas une recherche neutre, car nous en sommes des acteurs.

Nous allons essayer d'expliquer comment débute cette recherche, ce que nous essayons de démontrer et comment nous en arrivons au post-féminisme.

Cette recherche débute à l'école de Droit de l'Université de Córdoba, en continuation de celle élaborée pour obtenir le Diplôme des Études Avancées. Elle a commencé à la moitié de l'année 2007 et se termine en mars 2012.

Nous sommes parties du domaine de compétences à partir duquel nous avons dû travailler, puis nous avons décidé de le compléter avec une recherche vers d'autres organismes de la Région Andalouse. Nous sommes allées dans un premier temps à la bibliothèque et vers les services de documentation et d'affaires du Parlement Andalou, puis dans un second temps, vers les équipements de l'Institut Andalou des Femmes à Séville.

En ce qui concerne les aspects éthiques et politiques, nous avons rencontré plusieurs obstacles pour le développement de la recherche. Il a été quelques fois difficile voire impossible dans certains cas, d'arriver à obtenir les Rapports d'Observations des Rapports d'Évaluations d'Impact du Genre élaborés par l'Institut Andalou des Femmes, selon la Loi 18/2003 du 29 Décembre pour laquelle sont adoptées des mesures fiscales et administratives et selon le Décret 99/2004 de 3 Mars qui régle les Rapports d'Évaluations d'Impact du Genre dans les projets de loi et de réglementations qui sont adoptés par le Conseil du Gouvernement. On ne s'explique pas la raison de cette situation, alors que ces rapports sont censés être publics.

Les Rapports d'Observation des Rapports d'Évaluations d'Impact du Genre que l'on a pu obtenir sont ceux que nous ont fournis le service de documents et des affaires du Parlement Andalou.

Le Congrès des Députés à Madrid et concrètement son service de documentation et d'affaires s'est trouvée être la plus importante manne d'informations dont nous avons besoin dans le cadre national. Pour cela nous avons dû nous déplacer, car la documentation dont nous avons besoin était uniquement accessible sur l'intranet du Congrès. Il a fallu aussi solliciter un permis pour pouvoir y accéder en qualité de chercheur.

L'obtention d'une des « bourses pour la réalisation de séjours en 2010 pour l'obtention de la Mention européenne sur le titre de docteur » auprès de l'Université de Córdoba, nous a permis d'aller à Paris avec l'intention de finir cette recherche à l'École de Droit de l'Université de Nanterre Paris X Ouest-la Défense sous la supervision des professeurs titulaires du Droit Publicque Véronique Champeil-Desplats et Stéphanie Hennette Vauchez.

Dans cette école et grâce à l'incalculable aide du Professeur Borrillo, du personnel du Centre de Recherches sur les Droits Fondamentaux (CREDOF) et de leur Directrice

professeure Véronique Champeil-Desplats nous avons conclu toute la phase de l'étude comparative sur l'introduction de l'approche du genre dans les budgets publics orientés sur les résultats. Avec comme études de cas : l'Etat français et la région Andalous.

Après avoir élu domicile à Paris et ayant eu la possibilité de faire partie du corps enseignant de l'École de Droit de l'Université de Nanterre Paris X Ouest-la Défense lors des années scolaires 2010-2011 et 2011-2012, j'ai partagé mon temps à la réalisation de la présente recherche et à l'enseignement qui, même s'il m'a demandé beaucoup de temps et d'énergie, a été bénéfique pour mon travail, et pour mon expérience personnelle.

#### **4. Cadre législative initial de la recherche.**

Le cadre législatif de cette recherche prend ses racines dans la seconde moitié du XXème siècle, où les différents organismes internationaux ont commencé à prendre connaissance de la situation concrète d'inégalité des opportunités dont les femmes pâtissent, du simple fait d'être des femmes, c'est-à-dire, l'élément opposé à l'homme et soumis au modèle instauré dans une logique binaire dominante. (Simon, 2008 :11-35)

Malheureusement, et malgré tous les efforts consentis par des organismes internationaux (8), ce ne sera qu'en Septembre 1995 pendant la IVème Conférence Mondiale des Femmes pour les Nations Unies à Beijing, que l'égalité prendra une part importante et sera aborder avec le respect qu'elle mérite.

La Conférence de Beijing a adopté la Déclaration de Beijing et un Plan d'Actions (9). Les Gouvernements prennent la responsabilité de développer avant la fin du XXème siècle, les stratégies décidées à Nairobi 1985 et de mobiliser des ressources pour la réalisation de ce qui est établi dans les Résolutions finales de cette Conférence, la Déclaration et le Plan d'Action.

Le Plan d'Actions de Beijing est le document le plus complet qu'une conférence des Nations Unies a pu faire relativement aux Droits des Femmes car il intègre ce qui est stipulé lors des Conférences et des Traités précédents au même titre que la Déclaration Universelle des Droits des Hommes (10), la Déclaration pour l'élimination de toute forme de discrimination contre les femmes et la Déclaration de Vienne. (11) Ce qui réaffirme en même temps les définitions de la Conférence du Cairo (12).

Dans ce document, quelques décisions ont été prise pour l'élimination de la discrimination contre les femmes et pour éradiquer la pauvreté. On a également reconnu que les droits des femmes incluent leur droit d'avoir le contrôle de leur sexualité et de leur reproduction. Il faut donc revoir ces lois qui prévoient des punitions pour les femmes ayant recours à l'avortement, et aussi renforcer la législation qui protège les droits des femmes pour instaurer la vraie égalité :

*« Les compromis pris par les gouvernements à Beijing sont le reflet de ce que l'égalité des femmes doit être une composante essentielle de toute tentative de résolution des problèmes sociaux, économiques et politiques à travers le monde entier. [...] Par conséquent, si par le passé, les femmes ont lutté pour que l'égalité entre les genres fasse partie du programme de la communauté internationale, l'égalité entre les genres est aujourd'hui un des principaux facteurs du programme. » (13)*

L'un des aspects les plus importants des conclusions de la Conférence Mondiale à Beijing fut peut être la reconnaissance du Principe de Transversalité (Mainstreaming) (14) pour la première fois, réitéré cinq ans après dans la troisième période extraordinaire des sessions d'Assemblée Générale des Nations Unies, plus connue sous le nom de « Beijing +5 » (15).

Dans ce cadre, et parallèlement, au sein de l'Union Européen commence une nouvelle étape dans le processus de construction européen commencé en 1957 avec la signature du Traité de Rome. Dès lors, le processus de consolidation européen en matière d'égalité et d'opportunités entre les femmes et les hommes prend une bonne impulsion, avec l'entrée en vigueur le 1 Mai 1999 du Traité d'Amsterdam qui développe entre autres le Principe de Transversalité :

*« Il s'agit d'un Principe définitif et croissant au sein de l'Union Européenne. Il a été effectivement reconnu par l'article 3 du Traité d'Amsterdam, qui inclut la promotion de l'égalité des femmes et des hommes dans toutes les politiques et l'élimination des discriminations comme une des priorités à prendre en compte dans la conception des Politiques Européennes. La promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes sera introduite comme objectif de l'Union et on conditionne le groupe des Politiques Communautaires sur l'objectif de la réussite de cette égalité (Rey Martinez, 2004 : 500-523) ».*

En plus du Traité d'Amsterdam, il faut tenir compte du Pacte Européen pour l'égalité du Genre de 2006 (16) dont objectif a été d'encourager la participation des femmes sur le

marché de travail, en facilitant des mesures pour améliorer l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des hommes et des femmes et promouvoir l'égalité de genre.

Avec la création du Traité de Lisbonne le principe d'égalité entre l'homme et la femme a été renforcé, en l'incluant dans les valeurs et les objectifs de l'Union (article 2 et article 3, épigraphe 3 du Traité de l'Union Européen), et on établit le principe d'intégration de la dimension du genre dans toutes les politiques de l'UE, comme on vient de le voir dans l'article 8 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne. (17)

En plus, complémentirement à cet objectif et en se rendant compte que le Droit Européen est l'essence même de la spécificité de l'union Européenne, et qu'il faut être sûr que les dispositions législatives et réglementaires sont bien canalisées et proprement appliquées au niveau correspondant à toutes les nécessités sociales après l'année 2002, la Commission Européen a mis en pratique, comme on le verra plus tard, un très large programme pour simplifier et améliorer le cadre régulateur : « Légiférer Mieux ». (18)

Pour l'exécution de ce programme il a fallu prendre des mesures dans les différentes phases du cycle politique : l'examen de nouvelles initiatives, des propos en phase de négociation et une législation déjà publiée, c'est-à-dire qu'il a fallu mettre en place un système pour évaluer l'impact et améliorer la conception des propos importants de la Commission Européenne.

Néanmoins, ce n'est pas la première fois que l'Union Européenne pense à la nécessité de l'introduction d'un système pour évaluer l'impact vers des situations de discrimination dans laquelle se trouvent les femmes. L'Union Européenne, à travers la décision Du Conseil sur la stratégie à suivre en matière d'égalité entre les hommes et les femmes (2001-2005) (19), articule l'évaluation de l'impact en fonction du sexe dans différents cadres d'intervention de la stratégie macro-communautaire (vie économique, vie sociale, vie civile, rôles, etc.), comme une des actions à faire pour arriver aux objectifs formulés par le programme.

Ça s'inscrit dans une approche où la Transversalité vient accompagnée d'actions positives en faveur de l'égalité.

Ce compromis de l'Union Européenne d'intégrer la perspective du genre dans le groupe de Politiques Communautaires est né de la constatation suivante: des décisions politiques qui initialement ne semblent pas sexistes, peuvent avoir un impact différent sur les femmes et les hommes, impact qui n'était ni prévu ni désiré.



La Commission Européenne a adopté une Communication sur la Transversalité (Mainstreaming), premier pas vers la réalisation de ce compromis, à travers l'élaboration d'une « Guide pour l'Évaluation de l'Impact en Fonction du Genre ». Nous l'analyserons par la suite.

La Commission a adopté récemment la Carte de la Femme (20), à partir de laquelle elle tente de promouvoir plus efficacement l'égalité entre les femmes et les hommes en Europe et dans le monde entier. Les inégalités affectent directement la cohésion économique et sociale, ainsi que la croissance, la compétitivité et le développement démographique.

De la même manière, l'Espagne en tant qu'Etat membre de l'Union, participe depuis longtemps à l'objectif d'arriver à une égalité entre les femmes et les hommes et à l'élimination des inégalités en créant pour cela, des politiques d'égalité d'opportunités entre les femmes et les hommes.

Un des objectifs spécifiques de ces politiques est l'application de la Transversalité du genre. Avec l'élaboration du IVème Plan pour l'Égalité entre les Femmes et les Hommes (2003-2006) est établi le Mainstreaming comme un de ces deux principes fondamentaux qui est définie comme : « Promouvoir la défense et la garantie du principe d'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les activités et les politiques à tous les niveaux et évaluer ses possibles effets. » (21)

Durant le développement du IVème Plan, il faut souligner l'adoption de la Loi 30/2003 du 13 Octobre sur les mesures pour incorporer l'évaluation d'impact du genre dans les dispositions législatives que le Gouvernement adopte (22). La finalité de cette loi consiste à appliquer le Principe de Transversalité. On peut analyser, avant son application, à travers des Rapports d'Évaluation d'Impact du Genre, les éventuelles conséquences que l'application de la disposition législatives pour les femmes et les hommes pourrait avoir. Il faut pour cela identifier les différences qui existent dans la situation des hommes et des femmes, en utilisant des chiffres statistiques par sexes et des Indicateurs de Genre afin d'évaluer les effets que ferait la norme appliquée sur les uns et les autres. Avec l'adoption de cette loi, on arrive à la transposition des directives communautaires en matière d'égalité en obtenant un des objectifs du Plan d'Actions de Beijing.

Ce qui se réfère à cette Loi 30/2003 du 13 Octobre, a été renforcé d'un côté par la création d'une législation qui régule et qui développe le Décret Royal 1083/2009 du 3 Juillet, où l'on régule le mémoire de l'analyse d'Impact Normatif. (23)

Et d'un autre côté, par le jugement et l'évaluation de l'impact du genre qui prend une vraie importance dans le cadre national à partir de la publication de cette Loi Organique tant désirée 3/2007 du 22 Mars, pour l'égalité effective entre les femmes et les hommes (24).

En plus des modifications législatives qui ont pour objectif d'avancer vers la vraie égalité et le plein exercice des droits des femmes et des hommes, on propose la mise en place des mesures transversales qui ont une incidence sur tous les ordres de la vie politique, juridique et sociale, afin d'éradiquer les discriminations contre les femmes. Ainsi que le caractère obligatoire de l'élaboration des Rapports d'Évaluation sur l'Impact du Genre.

Dans le cadre Andalou, et presque simultanément à la publication de la Loi 30/2003 du 13 Octobre, on a adopté la Loi 18/2003 du 29 Décembre, pour laquelle on adopte des mesures fiscales et administratives (25). Il s'agissait d'une loi pionnière car c'était la première fois que des mesures concrètes en matière de genre étaient établies. Cela a permis d'avancer vers les objectifs généraux de la réussite de l'égalité des femmes et des hommes, d'effacer toutes formes de discrimination et d'encourager leur participation dans la vie politique, économique, culturelle et sociale dans la Région Andalousie, dans le cadre de ce qui est stipulé par la Constitution et le Statut pour l'Andalousie.

Comme cela est déjà fait dans le cadre régional, par cette loi on établit l'obligation d'élaborer un Rapport d'Évaluation d'Impact du Genre, qui évalue comment les dispositions normatives vont affecter la situation réelle des femmes et des hommes.

Cette Loi a été développée jusqu'au mois de Février dernier jusqu'au Décret 93/2004 du 9 Mars, déjà dérogé (26), qui régulaient le rapport d'évaluation d'impact du genre dans les projets de loi et les réglementations qu'adopte le Conseil de Gouvernement. (27)

Ce Décret abolie établissait, entre autre, la participation de l'Institut Andalou des Femmes dans le processus d'élaboration des Rapports d'Évaluation d'Impact du Genre, vers un mécanisme de rétro-alimentation entre le Centre Directif Compétent qui élabore le Rapport et l'Institut Andalou des Femmes qui le révise, enrichie et signale les observations dans un Rapport d'Observations qui est rattaché à ce rapport.

De la même façon que la publication de la Loi Organique 3/2007 du 22 Mars pour l'égalité effective entre les femmes et les hommes dans le cadre national, l'obligation d'élaborer les Rapports d'Évaluation d'Impact du Genre a été renforcée en Andalousie avec l'adoption de la Loi 12/2007 du 26 Novembre pour la Promotion de l'égalité du Genre en Andalousie. (28)

Avec cette Loi, l'Andalousie participe aux projets pour arriver à une société égalitaire, juste, solidaire et démocratique où les femmes et les hommes ont les mêmes droits et opportunités.

En résumé, dans le cadre législatif de notre recherche, l'étude et l'analyse de l'efficacité et de l'efficience des Rapports d'Évaluation d'Impact du Genre comme des Mémoires d'Analyses d'Impact législatives, sont des outils créés pour réduire l'inégalité entre les femmes et les hommes dans le cadre national et Andalou.

Les Rapports d'Évaluation d'Impact du Genre et les Mémoires d'Analyses d'Impact législatives évitent déjà que dans l'élaboration de la législation soient établies des dispositions qui en principe ne semblent pas sexistes, mais qui malgré tout peuvent avoir un impact différent et discriminatoire entre les femmes et les hommes bien que cette conséquence n'ait été ni désirée ni prévue. Mais il convient à présent d'analyser comment et par quels moyens.<sup>i</sup>

## 9.2 Conclusions en français

### Conclusions Juridiques.

Le point de départ pour cette recherche a été le fait que, déjà montré et éprouvé à plusieurs reprises, et malgré la grande quantité de lois élaborées aussi bien dans le cadre de l'UE, de l'état espagnol ou encore de la région andalouse, les inégalités réelles et les opportunités entre les personnes qui composent la société, loin de disparaître, se maintiennent, ou même, dans beaucoup de situations de la vie publique et privée, augmentent chaque jour. Cette situation d'inégalité réelle et d'opportunité est encore plus évidente si on compare la situation de départ et l'accès aux différentes opportunités entre les femmes et les hommes.

De plus, d'un point de vue législatif, on observe que parfois, l'application de certaines normes apparemment neutres, peut provoquer des résultats différents chez les femmes et chez les hommes, conservant parfois, et augmentant d'autres fois les brèches d'inégalité entre les hommes et les femmes de notre société.

D'un côté, en tant que juristes et prenant comme référence la législation relative au jugement et à l'évaluation de l'impact du genre dans la législation internationale, européenne, nous nous focalisons principalement sur l'étude de la législation de l'état espagnol, notamment à travers de ce que dit l'article 14 CE, de la Loi Organique 3/2007, du 22 mars, pour l'égalité effective des femmes et des hommes, de la Loi 30/2003 du 13 octobre, sur les

mesures pour inclure l'évaluation de l'impact du genre dans les dispositions législatives que le gouvernement réalise, et dans le Décret Royal 1083/2009, du 3 juillet, par lequel est régularisée la mémoire de l'analyse de l'impact législatif qui la développe.

D'un autre côté, nous travaillons parallèlement sur l'étude de la législation de la région andalouse, plus précisément, sur le Statut d'Autonomie, Loi 12/2007 du 26 novembre, pour la promotion de la parité en Andalousie, et Loi 18/2003 du 29 décembre, par laquelle sont approuvées les mesures fiscales et administratives, développée jusqu'à février de cette année 2012, par le Décret récemment aboli 93/2004 du 9 mars, par lequel est régularisé le rapport d'évaluation de l'impact du genre dans les projets de loi et règlements qu'approuve le Conseil du Gouvernement.

Nous faisons une analyse quantitative et qualitative, dans le cadre de l'état espagnol et régional andalou, des Rapports d'Évaluation de l'Impact du Genre (IEIG) et des Mémoires d'Analyse de l'Impact Législatif (MAI), comme étant les outils conçus à travers toute la législation indiquée pour la détection, l'élimination et la prévention des dispositions législatives qui au moment de leur rédaction ont été configurées comme étant neutres, et qui peuvent devenir sexistes une fois publiés dans les Bulletins Officiels, portant ainsi atteinte aux principes constitutionnels de parité et non discriminatoires, ce qui augmente l'écart qui existe entre les femmes et les hommes.

De cette façon, et comme résultat des années dédiées à cette recherche, nous essayons, dans cette section d'établir une série de conclusions qui nous permettent de pouvoir répondre à l'hypothèse initiale sur laquelle porte ce travail de recherche :

*Les Rapports d'Évaluation de l'Impact du Genre et les Mémoires d'Analyse de l'Impact Législatif, comme outils pour le jugement et l'évaluation de l'impact du genre dans la législation de l'Etat espagnol et régional andalou contribuent-ils, d'un point de vue législatif, à l'élimination de l'écart du genre qui sépare les femmes des hommes?*

1. L'application des mesures incluses dans les IEIG et les MAI n'a pas de caractère contraignant, il n'existe pas d'obligation juridique pour inclure dans les textes légaux définitifs ces mesures, qu'elles soient correctives ou éliminatoires. Il n'existe à ce jour aucune disposition législative qui oblige au législatif de prendre en considération les mesures que les rapports et les mémoires incluent.

L'obligation d'élaborer des Rapports d'Évaluation de l'Impact du Genre et des Mémoires d'Analyse de l'Impact Législatif se termine donc là dans l'obligation de son élaboration, l'application de ces observations n'est pas exigée.

Par conséquent, nous observons que si après avoir élaboré un Rapport d'Évaluation de l'Impact du Genre ou un Mémoire d'Analyse Législative, ceci est privé du caractère obligatoire, ou s'il n'est pas inclus dans la disposition législative qui incluent ces mesures, l'utilisation de ces outils ne contribue en aucune façon à l'élimination des disparités.

2. La deuxième conclusion, basée sur la précédente, est que nous pourrions uniquement savoir dans quelle mesure l'élaboration de ces rapports et mémoires a servi à l'élimination de l'inégalité, si pendant tout le processus d'élaboration se réalisent deux analyses : premièrement une analyse *ex ante* ou de diagnostic, pour connaître la situation de départ des femmes et des hommes ; et puis, deux ans plus tard après son élaboration une analyse *ex post* d'application, avec l'objectif d'évaluer comment l'application de la norme corrigée a influencé le cas échéant la vie des femmes et des hommes.

Nous considérons que le fait de pouvoir faire une analyse de suivi du processus d'élaboration des Plans plus importants, des Règlements, ou des Projets de Loi susceptibles d'être accompagnés de ces rapports ou mémoires, donnerait la possibilité de faire des corrections à court terme, sur certains points qui sont facilement détectables et réparables dans ce processus d'élaboration. À titre d'exemple, réaliser une analyse de suivi dans la rédaction des dispositions législatives incluses, pourrait nous permettre la révision et la correction possible dans le cas où une utilisation sexiste du langage a été faite.

3. Après la promulgation de la Loi Organique 3/2007 du 22 mars pour la parité entre les femmes et les hommes, la publication du Décret Royal 1083/2009 du 3 juillet, par lequel est régularisée la mémoire de l'analyse de l'impact législatif, régularise six ans après sa promulgation, la Loi 30/2003 du 13 octobre. Ce Décret Royal établit, dans le cadre de l'état espagnol, la transition du Rapport de l'Impact du Genre à la Mémoire d'Analyse de l'Impact Législatif. Ce document quantitativement plus grand, homogénéise la façon de réaliser les analyses des différents impacts qui peuvent être provoqués dans la société par la législation traitée. En plus de l'impact économique et budgétaire, il est établi également dans ces mémoires qu'elles doivent inclure l'analyse de l'impact de la législation selon le genre, comme indiqué dans le Guide Méthodologique pour l'élaboration du Mémoire de l'Analyse de l'Impact Législatif.

Nous avons observé que la transition des IEIG à MAI par rapport à l'analyse de l'impact de la législation selon le genre a influencée négativement l'élaboration de ces outils, car les analyses de l'impact selon le Genre incluses dans les Mémoires d'Analyse Législative sont d'une qualité inférieure à celles réalisées dans les Rapports d'Évaluation de l'Impact du Genre, qualitativement mais surtout quantitativement. Nous pouvons donc affirmer que les erreurs contenues dans les IEIG ne se sont pas améliorées dans les MAI, seule la méthodologie de l'élaboration s'est homogénéisée. Il y a eu une amélioration de la forme mais pas du fond.

4. Malgré le fait qu'ils soient élaborés depuis l'année 2003, il est surprenant qu'il ne soit pas défini législativement ni dans le cadre de l'Etat espagnol ni dans celui de la région andalouse, quelle personne doit faire ces outils : IEIG ou MAI. De même la personne qui a élaboré le Guide Méthodologique pour l'élaboration du Mémoire de l'Analyse de l'Impact Législatif reste inconnue.

La conséquence de cette omission législative, de cette absence de mention de la personne ou de l'organisme qui doit élaborer ces outils, est que d'un point de vue qualitative il n'est pas possible d'établir quelle qualification spécifique doit avoir cette personne ou cet organisme pour étudier les sujets en rapport avec la parité dans les cadres sociologiques, juridiques et économiques. Nous ne devons pas oublier que la formation des personnes qui élaborent ces outils peut faire que l'analyse de l'impact législatif soit une simple démarche de plus à remplir dans le dossier législatif, et non plus un objectif pour éliminer les écarts de disparité entre les femmes et les hommes pour lesquels sont constitués ces outils.

5. Les mesures incluses dans l'élaboration des IEIG dans le milieu régional andalou, de la même façon que dans le milieu de l'Etat, n'ont pas un caractère obligatoire. Dans le cas de la communauté andalouse, cette absence de caractère obligatoire est spécialement regrettable. Le fait que l'élaboration de ces rapports soit soumise à un système de double filtre, grâce à la participation de l'Institut de la Femme dans la réalisation des Rapports d'Observations aux Rapports de l'Impact du Genre (IOIEIG), apporte des observations qui si elles étaient obligatoires serviraient effectivement à supprimer les possibles énoncés et conséquences sexistes dans la législation.

Le problème principal auquel sont confrontés les IEIG et les IOIEIG est son anachronisme par rapport à l'*iter legislativo* suivi par le Projet de Loi. Le fait d'élaborer un Rapport d'Évaluation de l'Impact du Genre par un Ministère, pour un Projet de Loi et son IOIEIG correspondant, est une action qui finit en même temps son élaboration. Une fois

réalisé, il ne souffre d'aucune modification tout au long de l'*iter legislativo* qui suit le Projet de Loi qu'il accompagne. De cette façon, si le Projet de Loi qu'il accompagne souffre de modifications en vertu des amendements que les différents groupes politiques parlementaires présentent, il n'en est pas de même avec ses rapports. Ceux-ci ne sont ni révisés ni mis à jour par rapport au nouveau texte législatif qui sera mis en place à travers l'exercice démocratique qu'est l'*iter legislativo* qui suit chaque Projet de Loi, jusqu'à ce qu'il devienne un texte législatif définitif.

6. En plus des Rapports d'Évaluation de l'Impact du Genre et des Mémoires d'Analyse d'Impact Législatif, un autre outil est utilisé par les gouvernements pour essayer d'atteindre son objectif de réduction de l'écart d'inégalité entre les personnes qui forment la citoyenneté. Cet outil est l'élaboration des budgets publics orientés sur les résultats avec une approche du genre comme méthodologie à suivre pour une application transversale du principe de Mainstreaming dans l'administration publique.

Cette méthodologie, dans l'État français, s'est révélée comme un outil convenable pour l'intégration du genre dans les politiques publiques, car son caractère horizontal assure la transversalité de cette approche dans toutes les activités et permet de les orienter vers la parité.

Dans le cas de la Communauté Autonome Andalouse, l'intégration de la transversalité du genre se fait à travers l'élaboration des Rapports d'Évaluation de l'Impact en fonction du Genre qui doit accompagner et analyser de façon annuelle le budget public de la Région Andalouse. Ces rapports ne doivent pas se confondre avec le Rapport d'Évaluation de l'Impact du Genre de la législation, car même si son objectif est le même (atteindre la parité et la non-discrimination de la citoyenneté en éliminant les inégalités historiques qu'ont eu les femmes) le parcours et les outils utilisés sont différents.

De façon transversale à toutes les conclusions exposées et pour finir cette section des conclusions juridiques, nous ne pouvons pas oublier de signaler que, en tant que juristes, nous considérons nécessaire de faire une ouverture des catégories juridiques existantes pour fournir une couverture légale à toutes les personnes qui forment la société. Il est nécessaire de créer de nouveaux concepts de sujets de droit, qui incluent la réalité sociale existante. C'est pour cela que nous nous joignons, d'un point de vue juridique, aux positions post-féministes actuelles qui demandent la « déstabilisation » du duo sexe/genre qui se rapporte au binarisme biologique et social.

Cette recherche nous a donné l'opportunité de réfléchir sur l'importance de rendre visible les personnes. Leur insertion comme êtres juridiques et le besoin de trouver un concept qui ne soit pas basé sur le binarisme, sera peut être la nouvelle ligne de recherche que nous entamerons. La société attend des réponses et de nouveaux modèles plus intégrateurs à partir du domaine juridique qui envisage la richesse et la variété de l'être humain.



(1) COMMISSION DE L'IMPACT DU GENRE DANS LES BUDGETS : Rapport d'évaluation de l'impact du genre du budget de la Région andalouse pour 2006, Junta de Andalucía, Consejería de Economía y Hacienda, Seville, p.7.

(2) La Mention Européenne sur le titre de Docteur est établie par les Normes Régulatrices des Études du Doctorat adaptées à l'EEES. Proposées par la Commission des Masters et du Doctorat du 24/07/09 (Adoptées par le Conseil du Gouvernement du 30/04/09 et modifiées par le Conseil du Gouvernement du 24/07/09), de l'Université de Cordoba. Plus concrètement, incluse dans le TITRE IX, art. 43 qui établit que : 1. On pourra inclure sur le dos du titre de docteur la mention de docteur ou docteure européen si se présentent les circonstances suivantes:

a) que pendant le temps de formation nécessaire pour obtenir le titre de docteur, le doctorant ou doctorante aie fait au moins trois mois de séjour en dehors de l'Espagne dans un centre d'enseignement supérieur ou dans un centre de recherche d'un État membre de l'Union Européen, faisant des études ou des recherches. Le séjour doit être validé par la personne qui dirige la thèse et il doit avoir le certificat correspondant délivré par la personne responsable du groupe de recherche de l'organisme ou organismes où la recherche ait été réalisée.

b) qu'une partie de la thèse du doctorat, au moins le résumé et les conclusions, soient rédigés et présentés dans une autre des langues officielles de l'Union Européen qui ne soit pas l'espagnol.

c) que la thèse possède le rapport préalable, certifié officiellement, par au moins deux experts qui appartiennent à un centre d'enseignement supérieur ou à un centre de recherche dans un État membre de l'Union Européen qui ne soit pas l'Espagne.

d) qu'au moins une personne experte qui appartienne à un centre d'enseignement supérieur ou à un centre de recherche dans un État membre de l'Union Européen différent à l'Espagne avec le titre de docteur doit faire partie du tribunal d'évaluation de la thèse. Cette personne ne peut pas être la même que celle qui a certifié le rapport préalable prévu dans l'épigraphe précédent ni la même qui a validé le séjour (épigraphe a).

2. La défense de la thèse doit avoir lieu à l'Université de Córdoba (Espagne).

3. La demande de la mention européenne du titre de docteur devra être faite au moment de la présentation de la thèse de doctorat pour son admission.

4. La mention « Docteur Européen » permettra l'obtention d'un certificat et/ou d'un diplôme qui accrédite cette condition. L'introduction et les conclusions en français et en espagnol de cette recherche se justifient par mon souhait d'obtenir, donc, la Mention Européenne.

(3) Pour pouvoir utiliser cette méthodologie a été indispensable l'analyse d'une partie de l'œuvre d'ATIENZA, en particulier ATIENZA, M, « El derecho como argumentación ». ISEGORIA 21.1999. Web:[http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CGkQFjAD&url=http%3A%2F%2Fisegoria.revistas.csic.es%2Findex.php%2Fisegoria%2Farticle%2Fdownload%2F76%2F76&ei=CMS4T\\_q7J4Gt0QW1yZXSbw&usg=AFQjCNFGkACznSJMenqNJohqro4igaXo2Q&sig2=3rpp7oX-LIKYMZj0utTf\\_Q](http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CGkQFjAD&url=http%3A%2F%2Fisegoria.revistas.csic.es%2Findex.php%2Fisegoria%2Farticle%2Fdownload%2F76%2F76&ei=CMS4T_q7J4Gt0QW1yZXSbw&usg=AFQjCNFGkACznSJMenqNJohqro4igaXo2Q&sig2=3rpp7oX-LIKYMZj0utTf_Q) (Consultée la dernière fois en Mars 2012).

(4) Dans ce sens, l'œuvre de NORBERTO BOBBIO est très illustrative, car pour lui, à la différence de KELSEN, le droit représente, plus qu'un discours, un ensemble d'actions de communication linguistique obligatoire, c'est-à-dire, un groupe d'énoncés qui a comme objectif influencer la conduite de l'autre. C'est pour cela que la science juridique n'est pas présentée comme une science « législative », mais comme une analyse linguistique du discours du législateur.

La science du droit est perçue par NORBERTO BOBBIO comme le « discours d'un discours », un métalangage descriptif. Mais, quand ce discours a une fonction sociale, la théorie du droit constitue un outil d'analyse du pouvoir et ainsi, le droit peut être compris comme mesure organisatrice de l'usage de la force. Ainsi, la méthodologie analytique éclaire le problème qui oppose la méthodologie et la Théorie du Droit. BOBBIO N., Essais de théorie du droit (Recueil de textes), LGDJ / Montchrestien. France 2000.

(5) Avec le temps, il convient de ne plus parler d'un seul type de féminisme, mais d'autant de types de féminismes que de vues sur la situation des femmes. On remarque principalement trois perspectives très différentes : le féminisme libéral, le féminisme radical et le féminisme socialiste. Ces dénominations ont été adoptées par les collectifs féministes eux même pour faire remarquer la variété des revendications et des objectifs à atteindre, ainsi que de leurs différentes origines politiques et théoriques.

Chacun de ces féminismes présente une méthodologie différente. Ces différentes approches ont développé un type de réflexion propre et ont donné aux concepts un cadre d'application spécifique, même s'ils utilisent les mêmes outils d'analyse, comme c'est le cas pour le concept de patriarcat.

(6) On l'a traduit nous mêmes.

(7) On définira le féminisme libéral de façon simple : c'est un type de féminisme qui dit que les problèmes de subordination des femmes seront finis lorsqu'on supprimera les restrictions légales qui empêchent leur entrée dans l'espace publique.

(8) Il faut indiquer: la Conférence Mondiale de l'année internationale des Femmes en 1975 au Mexique. La convention pour la suppression de toute discrimination contre les femmes (CEDAW) en 1979. La conférence Mondiale du Décennie des Nations Unies pour la Femme ; Égalité, Développement et Paix en 1980, Copenhague. La conférence Mondiale pour l'évaluation des réussites des Nations Unies pour la Femme; Égalité, Développement et Paix en 1985, Nairobi. La convention Interaméricaine pour prévenir, sanctionner et supprimer la violence contre les Femmes « Convention De Belém Do Pará » 1994. Web : <http://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/Mujer2011.htm> (Consultée la dernière fois en Mars 2012).

(9) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES. Déclaration et Plate-forme d'Action à Beijing, 4-15 Septembre 1995. A/CONF.177/20 17 Octobre 1995. Web: [http://www.unesco.org/water/news/pdf/beijing\\_declaration\\_es.pdf](http://www.unesco.org/water/news/pdf/beijing_declaration_es.pdf) (Consultée la dernière fois en Mars 2012).

(10) NATIONS UNIES, Déclaration Universelle des Droits des Hommes, de 10 décembre de 1948, Résolution 217 A (III), Web: <http://www.un.org/es/documents/udhr/> (Consultée la dernière fois en Mars 2012).

(11) NATIONS UNIES. La Déclaration et le Programme d' Action de Vienne approuvés par la Conférence Mondiale des Droits de l'Homme le 25 de juin 1993. A/CONF.157/23. Web <http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/%28Symbol%29/A.CONF.157.23.Sp> (Consultée la dernière fois en Mars 2012).

(12) NATIONS UNIES. Conférence Internationale sur la Population et le Développement, du 5 au 13 septembre 1994 El Cairo (Egpte). Web: [http://www.un.org/popin/icpd/newslett/94\\_19/icpd9419.sp/1lead.stx.html](http://www.un.org/popin/icpd/newslett/94_19/icpd9419.sp/1lead.stx.html). (Consultée la dernière fois en Mars 2012).

(13) ANNAN, K, Secrétaire Général des Nations Unies. Période extraordinaire des sessions de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Parité, développement et paix dans le XXIème siècle, New York, 5 à 9 juin 2000.

Web: <http://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/mujer2021.htm> (Consultée la dernière fois en Mars 2012).

(14) O.I.T : Outils pour l'égalité. L'idée d'introduire les questions du genre sur tous les programmes sociaux était établie comme une stratégie globale pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, dans la Plate-forme d'Action adoptée dans la IVème Conférence Mondiale des Nations Unies sur les Femmes, à Beijing, 1995. Cette Plate-forme a souligné la nécessité de garantir que l'égalité entre les genres est un objectif prioritaire dans tous les domaines du développement social.

Cette stratégie transversale inclut des activités spécifiques pour l'égalité et l'action positive, quelque soit le genre qui est désavantagé. Les interventions spécifiques pour l'égalité peuvent être dirigées vers les femmes uniquement, vers les femmes et les hommes, ou seulement vers les hommes, pour qu'ils puissent participer à leur développement et à leur profit. Ce sont des mesures prévisionnelles nécessaires pour lutter contre les conséquences directes et indirectes de la discrimination du passé.

Web <http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/gender/newsite2002/about/defin.htm>. (Consultée la dernière fois en Mars 2012).

(15) Assemblée Générale des Nations Unies. Rapport de la Commission Spéciale Plénière du XXIII période extraordinaire des sessions du Beijing+5. Documents officiels 2000. XXIII période extraordinaire des sessions. Supl. no. 3 (A/S-23/10/Rev.1). New York, du 5 au 9 de juin 2000. Web: <http://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/as2310rev1.pdf> (Consultée la dernière fois en Mars 2012).

(16) En Mars 2006, la Commission Européenne a adopté un Plan de Travail pour la parité pour le période 2006-2010. Ce plan présentait six axes prioritaires d'action communautaire sur l'égalité entre les sexes pour cette période : la même indépendance économique pour les femmes et les hommes, la conciliation de la vie privée et la vie professionnelle, la même représentation dans la prise des décisions, la suppression de toute forme

de violence de genre, l'élimination des stéréotypes sexistes et la promotion de la parité dans la politique extérieure et de développement.

Web:[http://europa.eu/legislation\\_summaries/employment\\_and\\_social\\_policy/equality\\_between\\_men\\_and\\_women/c10404\\_es.htm](http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10404_es.htm)

En ce qui concerne le Plan de Travail 2006-2010, ainsi que le Pacte Européen pour la parité, la Commission a présenté en septembre 2010 ses nouvelles priorités en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, indiquées dans la stratégie pour la parité 2010-2015.

Web:[http://europa.eu/legislation\\_summaries/employment\\_and\\_social\\_policy/equality\\_between\\_men\\_and\\_women/em0037\\_es.htm](http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/em0037_es.htm)

En Mai 2011 le Conseil de l'UE, conscient de la nécessité de réaffirmer et d'appuyer l'étroite relation entre la Stratégie de la Commission Européenne pour la parité (2010-2015) et celle de « Europa 2000, pour l'emploi et la croissance intelligente, équitable et intégrateur » ([http://europa.eu/legislation\\_summaries/employment\\_and\\_social\\_policy/eu2020/em0028\\_es.htm](http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/eu2020/em0028_es.htm)) a réaffirmé son compromis d'accomplir les objectifs de l'UE en matière de parité et a adopté le Pacte Européen pour la Parité (2011-2020) <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:155:0010:0013:ES:PDF> (Consultée la dernière fois en Mars 2012).

(17) Dans le cadre financier de la création des programmes, les actions les plus récentes de l'Union Européenne dans le cadre de la parité sont les suivantes : Programme Progress (2007-2013) et le Programme Daphne III (2007-2013) successeur du Daphne II et Daphne.

(18) UNION EUROPÉENNE, Programme Légiférer Mieux.

Web : [http://ec.europa.eu/governance/better\\_regulation/brochure\\_en.htm](http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/brochure_en.htm) (Consultée la dernière fois en Mars 2012).

(19) UNION EUROPÉENNE, Décision du Conseil, par laquelle on établit un programme d'action communautaire sur la stratégie à suivre en matière de parité (2001-2005), du 20 Décembre 2000.

Web:<http://portal.aragob.es/pls/portal30/docs/FOLDER/IAM/TEMAS/POLITIGUAL/IGUALDAD.PDF> (Consultée la dernière fois en Mars 2012).

(20) UNION EUROPÉENNE. Lettre de la Femme, Communication de la Commission du 5 Mars, 2010 intitulée « Un compromiso reforzado en favor de la igualdad entre mujeres y hombres - Una Carta de la Mujer: Declaración de la Comisión Europea con motivo del Día Internacional de la Mujer 2010 en conmemoración del 15º aniversario de la adopción de la Declaración y la Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer celebrada en Pekín, y del 30º aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer » [COM(2010) 78 final - non publiée dans le Journal Officiel].

Web:<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0078:FIN:ES:PDF> (Consultée la dernière fois en Mars 2012).

(21) IV Plan d'Égalité d'Opportunités entre Femmes et Hommes. Gobierno de España- 2003-2006.

(22) BOE núm. 246, du 14 Octobre 2003.

(23) BOE núm. 173, du 18 juillet 2009.

(24) BOE núm. 71, du 23 Mars 2007.

(25) BOJA núm. 251, du 31 Décembre 2003.

(26) Le 17 Février 2012, a été approuvé le Décret 17/2012 du 7 Février, par lequel est régie l'élaboration du Rapport d'Évaluation d'Impact du Genre où est établie la seule disposition dérogatoire:

« Le Décret 93/2004 du 9 Mars est complètement abrogé, par lequel est régi le Rapport d'Évaluation d'Impact du Genre dans les projets de loi et règlements approuvés par le Conseil du Gouvernement, ainsi que les dispositions du même niveau ou inférieur qui s'opposent à ce qui est prévu dans ce Décret. » BOJA num. 36 du 22 Février 2012.

(27) BOJA num. 50, du 12 Mars 2004.

(28) BOJA num. 247, du 18 Décembre 2007.



EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA, ESTATAL Y  
AUTONÓMICA ANDALUZA

Glosario de Siglas.....	1
I. Introducción.....	4
a. Hipótesis de trabajo y objetivo de la investigación.....	7
b. Estructura de la tesis.....	9
c. Metodología.....	12
d. Marco legislativo inicial de la investigación.....	16

**Capítulo 1: Mujeres y hombres como sujetos de Derecho en Ordenamiento  
Jurídico.**

1.1 La lógica binaria del derecho.....	25
1.2 La dimensión genérica: “mujeres y hombres”, en el derecho.....	30
1.2.1 Breve historia del origen de la (des) igualdad política de las mujeres.....	30
1.2.2 Los movimientos feministas y post feministas, en el siglo XXI ante la desigualdad política de las mujeres.....	32
1.3 La necesidad actual de la noción “género” como medida para evitar situaciones jurídicas discriminatorias. Las acciones positivas.....	35
1.4 La igualdad de los géneros en el derecho comunitario.....	37
1.4.1 Las Directivas comunitarias para la igualdad.....	39
1.4.2 La igualdad de las mujeres en el derecho francés.....	43
1.5 Estimativa y evaluación del impacto en la normativa comunitaria.....	48

**Capítulo 2: El derecho de igualdad en el Orden Jurídico estatal español y  
autonómico andaluz.**

2.1 Breve trazado de la situación de las mujeres en España desde la Segunda Republica hasta la promulgación de la Constitución de 1978.....	54
2.2 El derecho de igualdad en el Estado social y democrático de derecho.....	60
2.2.1 La igualdad en la Constitución Española de 1978.....	60
2.2.1.1 La igualdad como valor superior del Ordenamiento Jurídico.....	61
2.2.1.2 La igualdad como principio de derecho.....	62

2.2.1.3 La igualdad como derecho fundamental.....	67
2.2.1.3.1 La consolidación de las mujeres como sujetos constitucionales.....	71
2.3 La Ley Orgánica para la Igualdad 3/2007 de 22 de marzo como primera ley que desarrolla el principio de igualdad.....	73
2.4 La regulación legal del principio de igualdad en la distribución territorial de competencias estatales y autonómicas andaluzas.....	75
2.4.1 El principio de igualdad en la legislación autonómica andaluza. El Estatuto de Autonomía de Andalucía.....	78
2.4.1.1 Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.....	80
2.4.1.1.1 “I Plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres en Andalucía 2010-2013”.....	82

### **Capítulo 3: La dimensión de género en la elaboración de la normativa estatal.**

#### **Estimativa y evaluación del impacto de género en la normativa estatal.**

3.1 Estimativa y evaluación del impacto de género en la normativa estatal.....	86
3.1.1 El soporte constitucional de la evaluación del impacto de género de la normativa estatal.....	89
3.2 La Ley 30/2003 de 13 de octubre, como herramienta de los Poderes Públicos, para la erradicación de disposiciones normativas sexistas.....	90
3.2.1 La elaboración de los Informes de Evaluación de Impacto de Género, a través de la “Guía de aplicación práctica para la elaboración de Informe de Impacto de Género de las disposiciones normativas que elabore el Gobierno de acuerdo con la Ley 30/2003 de 13 de octubre”.....	94
3.3 La Evaluación del Impacto de Género en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.....	97
3.3.1 Las Unidades de Igualdad de los Ministerios como asesoras departamentales en la elaboración del informe sobre impacto por razón de género....	101
3.4 El Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo, desarrollo legislativo de la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.....	105

3.5 La Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria del Análisis del Impacto Normativo.....	108
3.5.1 Análisis del Impacto por Razón de Género en la Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria del Análisis del Impacto Normativo.....	113
3.6 Compilación de los Informes de Evaluación de Impacto de Género.....	116
3.6.1 Análisis cuantitativo y relacional de los Proyectos de Ley elaborados durante la VIII y IX legislatura.....	119
3.6.2 Análisis cuantitativo de los Informes de Evaluación de Impacto de Género, y de las Memoria del Análisis de Impacto Normativo en las que se analiza el impacto por razón de género, elaborados según lo dispuesto en la Ley 30/2003 de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno durante la VIII y IX legislatura.....	128
3.6.3 Análisis cualitativo de los Informes de Evaluación de Impacto de Género, y de las Memoria del Análisis de Impacto Normativo en las que se analiza el impacto por razón de género, elaborados según lo dispuesto en la Ley 30/2003 de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno durante la VIII y IX legislatura.....	134
3.7 La aplicación de lo dispuesto en los Informes de Evaluación del Impacto de Género y en las Memorias de Análisis de Impacto en los textos legales definitivos: La disfuncionalidad en la elaboración de los IEIG y en las MAI.....	142

#### **Capítulo 4. La dimensión de género en la elaboración de la normativa autonómica andaluza. Estimativa y evaluación del impacto de género en la normativa autonómica andaluza.**

4.1 La Ley 18/2003 de 29 de diciembre, por las que se aprueban medidas fiscales y administrativas, como primera Ley andaluza que contempla materias específicas de género: Estudio de su art. 139.1 relativo a la Evaluación de Impacto de Género.....	145
4.1.1 Desarrollo de las medidas de género del artículo 139.1 de la Ley 18/2003 a través del Decreto 93/2004 que regula el Informe de evaluación de Impacto de Género en los Proyectos de Ley y Reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno.....	149
4.1.2 Los Informes de Evaluación de Impacto de Género elaborados en la Comunidad Autónoma Andaluza. Cómo se elaboran y cuáles son sus contenidos. Guía Europea para la Evaluación del Impacto en Función del Género.....	150

4.1.2.1 La participación del Instituto de la Mujer Andaluz en la elaboración de los Informes de Evaluación de Impacto de Género hasta 2010.....	<b>154</b>
4.2 Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.....	<b>157</b>
4.3 La estimativa y evaluación del impacto de género en la normativa andaluza a partir del nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía. Los avances que introduce la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.....	<b>160</b>
4.3.1 La evaluación de impacto de género en la Ley la promoción de la igualdad de género en Andalucía.....	<b>161</b>
4.3.1.1 Los Informes de Impacto de Género que deben acompañar a los planes aprobados por el Consejo de Gobierno.....	<b>163</b>
4.3.1.2 Las Unidades de Género en la Administración Andaluza y la participación del Instituto Andaluz de la Mujer.....	<b>165</b>
4.4 Compilación de los Informes de Evaluación de Impacto de Género.....	<b>169</b>
4.4.1 Análisis cuantitativo de los Informes de Evaluación de Impacto de Género, elaborados según los dispuestos en la Ley 18/2003 de 29 de diciembre, por las que se aprueban medidas fiscales y administrativas, durante la VII y VIII legislatura.....	<b>170</b>
4.5 La aplicación de lo dispuesto en los Informes de Evaluación del Impacto de Género en los textos legales definitivos. Análisis de su efectividad como instrumento para la eliminación de la brecha de género.....	<b>186</b>
4.5.1 Análisis cualitativo de los Informes de Evaluación del Impacto de Género. La información adicional que aporta a estos el Instituto de la Mujer Andaluz.....	<b>187</b>
4.6 Análisis y comprobación de la incorporación o no, de las medidas que establecen los IEIG e IOIEIG en los textos legales definitivos: La disfuncionalidad metodológica en la elaboración de los IEIG.....	<b>193</b>
4.7 Propuestas para evitar disfuncionalidades metodológicas en la elaboración de los IEIG. Metodología de análisis cualitativo de la incorporación o no, de las medidas que establecen los IEIG e IOIEIG en los textos legales definitivos.....	<b>197</b>



## **Capítulo 5. Un presupuesto público con enfoque de género: El enfoque de género en los presupuestos públicos orientados a resultados. Estudio de casos: Estado francés y la comunidad autónoma andaluza.**

5.1 La introducción de la perspectiva de género en los presupuestos públicos.....	<b>200</b>
5.2 El enfoque a resultados en el presupuesto público como marco ideal para la introducción de la dimensión de género en los presupuestos públicos.....	<b>204</b>
5.2.1 Estudio de casos: Estado francés y la Comunidad autónoma andaluza...	<b>209</b>
5.2.2 La introducción de la perspectiva de género en los presupuestos públicos franceses.....	<b>211</b>
5.2.2.1 La estrategia específica seguida por el Estado francés para la introducción de la dimensión de género en el marco de un presupuesto orientado a resultados.....	<b>213</b>
5.2.2.1.1 El programa número nº 137 específico de igualdad, en el presupuesto.....	<b>214</b>
5.2.2.1.2 La política de carácter transversal, en el presupuesto.....	<b>215</b>
5.2.2.1.3 El Documento de Política Transversal de Igualdad entre Mujeres y Hombres, presentado en 2011.....	<b>217</b>
5.2.3 La introducción de la perspectiva de género en los presupuestos públicos de la Comunidad Autónoma Andaluza.....	<b>220</b>
5.2.3.1 La Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.....	<b>224</b>
5.2.3.2 Evolución de las metodologías utilizadas en Andalucía para la introducción de la dimensión de género en el presupuesto público. Los presupuestos orientados a resultados.....	<b>227</b>
5.2.3.2.1 La metodología sueca de las 3R utilizada para la elaboración de los Informes de Evaluación de Impacto de Género al proyecto G+.....	<b>227</b>
5.2.3.2.2 El proyecto G+.....	<b>231</b>
5.2.3.2.3 El Documento de Orientaciones Estratégicas (DOE).....	<b>237</b>
5.2.3.2.4 El Fondo G+.....	<b>239</b>
5.2.3.2.5 Buenas prácticas: Orden de 20 de Mayo de 2010 por la que se dictan las normas para la elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía.....	<b>240</b>
5.2.3.2.5.1 Estructura y contenido del Anexo X “Modelo de Informe de Impacto de Género del presupuesto de la Junta de Andalucía para 2011”.....	<b>241</b>

## **Capítulo 6. Conclusiones:**

6.1 Conclusiones jurídicas.....	245
6.2 Propuesta para la mejora metodológica de la elaboración de los Informes de Evaluación de Impacto de Género y las Memorias de Análisis de Impacto Normativo.....	250

## **Capítulo 7. Bibliografía y otros recursos.**

7.1 Libros.....	254
7.2 Artículos en revistas.....	257
7.3 Normativa y documentación más relevante en cuestiones de género.....	259
7.3.1 Internacional.....	259
7.3.2 Comunitaria.....	260
7.3.3 Estatal Francesa.....	262
7.3.4 Estatal Española.....	262
7.3.5 Autonómica.....	264
7.4 Jurisprudencia más relevante en materia de género utilizada en el trabajo de investigación. ....	266
7.4.1 Jurisprudencia Internacional.....	266
7.4.2 Jurisprudencia Tribunal Constitucional Español.....	267
7.5 Relación de las páginas web más relevantes en materia de género utilizadas en el trabajo de investigación. Webgrafía:.....	268
7.5.1 Europeas.....	268
7.5.2 Estatales.....	269
7.5.3 Autonómica Andaluza.....	269
7.5.4 Otras. ....	270

## **Capítulo 8 Anexo. Índices de los anexos que se acompañan en formato digital.**

8.1 Solicitudes escritas de documentación.....	271
8.2 Informes de Evaluación de Impacto de Género Estatales.....	281
8.3 Informes de Evaluación de Impacto de Género Andaluces.....	302

## **Capítulo 9. Versión Francesa**

9.1 Introduction en français.....	<b>311</b>
9.2 Conclusions en français. ....	<b>326</b>

---

**INFORMES DE EVALUACION DE IMPACTO DE  
GENERO ELABORADOS EN EL AMBITO ESTATAL  
DURANTE LA VIII LEGISLATURA.**

## Cuadro sinóptico de la VIII legislatura.

<b>Año</b>	<b>Proyecto normativo presentados en la IX Legislatura</b>	<b>Acompañado de IEIG Congreso según la Intranet del Congreso de los Diputados.</b>	<b>Se encontró en el Archivo (Por tanto puede consultarse en el anexo).</b>
<b>2004</b>			
121/000001	Proyecto de Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.	NO	NO
121/000002	Proyecto de Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género.	NO	X
121/000003	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional (procedente del Real Decreto-Ley 2/2004, de 18 de junio).	NO	NO
121/000004	Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.	NO	NO
121/000005	Proyecto de Ley sobre saneamiento y liquidación de las entidades de crédito.	NO	NO
121/000006	Proyecto de Ley de supervisión de los conglomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del sector financiero.	NO	NO
121/000007	Proyecto de Ley de horarios comerciales.	NO	NO
121/000008	Proyecto de Ley por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (procedente del Real Decreto-Ley 5/2004, de 27 de agosto).	NO	NO
121/000009	Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.	NO	NO
121/000010	Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los incendios e inundaciones acaecidos en las Comunidades Autónomas de Aragón, Cataluña, Andalucía, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana (procedente del Real Decreto-Ley 6/2004, de 17 de septiembre).	X	X
121/000011	Proyecto de Ley de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público.	NO	NO
121/000012	Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.	NO	NO
121/000013	Proyecto de Ley por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y se modifica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.	X	X
121/000014	Proyecto de Ley por la que se crea el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.	X	X
121/000015	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, para regular las	NO	NO

## Cuadro sinóptico de la VIII legislatura.

	especialidades de los litigios transfronterizos civiles y mercantiles en la Unión Europea.		
121/000016	Proyecto de Ley por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio.	NO	NO
121/000017	Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.	NO	NO
121/000018	Proyecto de Ley por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.	NO	NO
121/000019	Proyecto de Ley sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España.	X	X
121/000020	Proyecto de Ley por la que se reconoce una prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil, y que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional.	NO	NO
121/000021	Proyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo.	NO	X
121/000022	Proyecto de Ley sobre las cláusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación.	NO	X
121/000023	Proyecto de Ley por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas comunitarias en materia de fiscalidad de productos energéticos y electricidad y del régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes y se regula el régimen fiscal de las aportaciones transfronterizas a fondos de pensiones en el ámbito de la Unión Europea.	NO	NO
121/000024	Proyecto de Ley por la que se deroga la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias.	NO	NO
<b>Año</b>	<b>Proyecto normativo</b>		
<b>2005</b>			
121/000025	Proyecto de Ley de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado.	X	X
121/000026	Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de riesgo provocados por explosivos.	X	X
121/000027	Proyecto de Ley de reformas para el impulso a la productividad.	NO	NO
121/000028	Proyecto de Ley de reformas en materia tributaria para el impulso a la	NO	NO

## Cuadro sinóptico de la VIII legislatura.

	productividad.		
121/000029	Proyecto de Ley reguladora de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras.	NO	NO
121/000030	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos.	NO	NO
121/000031	Proyecto de Ley Orgánica de la Defensa Nacional.	X	X
121/000032	Proyecto de Ley de adaptación de la legislación española al régimen de actividades transfronterizas regulado en la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y supervisión de los fondos de pensiones de empleo.	NO	X
121/000033	Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004.	NO	X
121/000034	Proyecto de Ley de publicidad y comunicación institucional.	X	X
121/000035	Proyecto de Ley de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la	NO	NO
121/000036	Proyecto de Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.	X	X
121/000037	Proyecto de Ley de tropa y marinería.	X	X
121/000038	Proyecto de Ley sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.	NO	NO
121/000039	Proyecto de Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida.	X	X
121/000040	Proyecto de Ley por la que se regula el estatuto del miembro nacional de Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión Europea.	X	X
121/000041	Proyecto de Ley de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos.	X	X
121/000042	Proyecto de Ley de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos.	X	X
121/000043	Proyecto de Ley Orgánica de Educación.	X	NO
121/000044	Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.	NO	NO
121/000045	Proyecto de Ley de mediación de seguros y reaseguros privados.	NO	NO
121/000046	Proyecto de Ley de reforma de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria.	NO	NO
121/000047	Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.	NO	NO
121/000048	Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades	NO	X

## Cuadro sinóptico de la VIII legislatura.

	Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.		
121/000049	Proyecto de Ley de adaptación del régimen de las entidades navieras en función del tonelaje a las nuevas directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al transporte marítimo y de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias.	NO	NO
121/000050	Proyecto de Ley por la que se regula el régimen especial del Municipio de Barcelona.	X	X
121/000051	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.	NO	NO
121/000052	Proyecto de Ley de la radio y la televisión de titularidad estatal.	X	X
121/000053	Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006.	NO	NO
121/000054	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas.	NO	NO
121/000055	Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Adhesión a la Unión Europea de la República de Bulgaria y de la República de Rumanía. Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Adhesión a la Unión Europea de la República de Bulgaria y de la República de Rumanía.	X	X
121/000056	Proyecto de Ley por la que se crea el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas.	X	X
121/000057	Proyecto de Ley por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios.	NO	NO
121/000058	Proyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de	X	X
121/000059	Proyecto de Ley sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas.	X	NO
121/000060	Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.	X	NO
121/000061	Proyecto de Ley para la eficacia en la Unión Europea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas en procedimientos penales.	NO	NO
121/000062	Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley para la eficacia en la Unión Europea de las resoluciones	NO	NO



## Cuadro sinóptico de la VIII legislatura.

	de embargo y de aseguramiento de pruebas en procedimientos penales, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.		
121/000063	Proyecto de Ley por la que se modifica el régimen fiscal de las reorganizaciones empresariales y del sistema portuario, y se aprueban medidas tributarias para la financiación sanitaria y para el sector del transporte por carretera.	X	X
121/000064	Proyecto de Ley por la que se deroga el régimen de enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas establecido por la Ley 5/1995, de 23 de marzo y sus disposiciones de desarrollo y ejecución.	X	X
121/000065	Proyecto de Ley Orgánica de modificación de las Leyes Orgánicas 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar y 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.	X	X
121/000066	Proyecto de Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.	X	X
121/000067	Proyecto de Ley de modificación de la Ley 5/1996, de 10 de enero, de creación de entidades de derecho público.	X	X
121/000068	Proyecto de Ley por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).	X	NO
121/000069	Proyecto de Ley Orgánica por la que se adapta la legislación procesal a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se reforma el recurso de casación y se generaliza la doble instancia penal.	X	NO
121/000070	Proyecto de Ley sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.	X	X
121/000071	Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de justicia de proximidad y Consejos de Justicia.	X	NO
<b>Año</b>	<b>Proyecto normativo</b>		
<b>2006</b>			
121/000072	Proyecto de Ley de capitalidad y de régimen especial de Madrid.	NO	NO
121/000073	Proyecto de Ley por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.	X	X
121/000074	Proyecto de Ley por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.	X	X

## Cuadro sinóptico de la VIII legislatura.

121/000075	Proyecto de Ley del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior.	X	X
121/000076	Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.	X	X
121/000077	Proyecto de Ley de sociedades profesionales.	X	NO
121/000078	Proyecto de Ley de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general.	X	NO
121/000079	Proyecto de Ley de cesión del Castillo de Montjuïc.	X	X
121/000080	Proyecto de Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.	X	X
121/000081	Proyecto de Ley de medidas para la prevención del fraude fiscal.	X	X
121/000082	Proyecto de Ley Orgánica de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte.	X	X
121/000083	Proyecto de Ley de mejora de la protección de los consumidores y usuarios.	X	X
121/000084	Proyecto de Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.	X	X
121/000085	Proyecto de Ley de transparencia de las relaciones financieras entre las Administraciones Públicas y las empresas públicas, y de transparencia financiera de determinadas empresas.	X	NO
121/000086	Proyecto de Ley de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea.	X	NO
121/000087	Proyecto de Ley de la Red de Parques Nacionales.	X	NO
121/000088	Proyecto de Ley de declaración del Parque Nacional de Monfragüe.	X	NO
121/000089	Proyecto de Ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas.	X	X
121/000090	Proyecto de Ley de creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales.	X	NO
121/000091	Proyecto de Ley para la mejora del crecimiento y del empleo (procedente del Real Decreto-Ley 5/2006, de 9 de junio).	X	NO
121/000092	Proyecto de Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.	X	X
121/000093	Proyecto de Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.	X	NO
121/000094	Proyecto de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.	X	NO
121/000095	Proyecto de Ley de Contratos del Sector	X	X

## Cuadro sinóptico de la VIII legislatura.

	Público.		
121/000096	Proyecto de Ley de Suelo.	X	NO
121/000097	Proyecto de Ley sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores.	X	NO
121/000098	Proyecto de Ley sobre concurrencia y prelación de créditos en caso de ejecuciones singulares.	X	X
121/000099	Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.	X	X
121/000100	Proyecto de Ley de Defensa de la Competencia.	X	NO
121/000101	Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.	X	X
121/000102	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural.	X	X
121/000103	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.	X	X
121/000104	Proyecto de Ley de investigación biomédica.	X	NO
121/000105	Proyecto de Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.	X	X
121/000106	Proyecto de Ley sobre regularización y actualización de inscripciones de embarcaciones pesqueras en el Registro de Buques y Empresas Navieras y en el Censo de la Flota Pesquera Operativa.	X	X
121/000107	Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.	NO	NO
121/000108	Proyecto de Ley de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, para la modificación del régimen de las ofertas públicas de adquisición y de la transparencia de los emisores.	X	NO
121/000109	Proyecto de Ley de jurisdicción voluntaria para facilitar y agilizar la tutela y garantía de los derechos de la persona y en materia civil y mercantil.	X	NO
121/000110	Proyecto de Ley por la que se procede a la integración de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por Cuenta Propia o	X	X

## Cuadro sinóptico de la VIII legislatura.

	Autónomos.		
121/000111	Proyecto de Ley general de navegación marítima.	X	X
121/000112	Proyecto de Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas.	X	X
121/000113	Proyecto de Ley de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad.	X	X
121/000114	Proyecto de Ley de la carrera militar.	X	X
121/000115	Proyecto de Ley del Estatuto del trabajo autónomo.	X	NO
121/000116	Proyecto de Ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.	X	X
121/000117	Proyecto de Ley Orgánica reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN.	X	X
121/000118	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 50/1981, de 31 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.	X	X
121/000119	Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.	X	X
121/000120	Proyecto de Ley de creación de la Comisión Nacional del Sector Postal.	X	X
121/000121	Proyecto de Ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso.	X	X
<b>Año</b>	<b>Proyecto normativo</b>		
<b>2007</b>			
121/000122	Proyecto de Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera.	X	X
121/000123	Proyecto de Ley de normas básicas sobre explotación, transporte, experimentación y sacrificio para el cuidado de los animales.	X	X
121/000124	Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en materia de información y consulta de los trabajadores y en materia de protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario.	X	X
121/000125	Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, y el texto refundido de la Ley de ordenación y	X	X

## Cuadro sinóptico de la VIII legislatura.

	supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.		
121/000126	Proyecto de Ley de medidas en materia de Seguridad Social.	X	X
121/000127	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria.	X	X
121/000128	Proyecto de Ley de conservación de datos relativos a las Comunicaciones Electrónicas y a las Redes Públicas de Comunicaciones	X	X
121/000129	Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, en materia de supervisión del reaseguro.	X	X
121/000130	Proyecto de Ley de responsabilidad medioambiental	X	X
121/000131	Proyecto de Ley Orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.	X	X
121/000132	Proyecto de Ley Orgánica del régimen disciplinario de la Guardia Civil.	X	X
121/000133	Proyecto de Ley de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio.	X	X
121/000134	Proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.	X	X
121/000135	Proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural.	X	NO
121/000136	Proyecto de Ley sobre reutilización de la información del sector público.	X	X
121/000137	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros y otras normas del sistema financiero.	X	NO
121/000138	Proyecto de Ley del Cine.	X	X
121/000139	Proyecto de Ley reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.	X	X
121/000140	Proyecto de Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad	X	X
121/000141	Proyecto de Ley de modificación de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil.	X	X
121/000142	Proyecto de Ley Orgánica para la persecución extraterritorial del tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas.	X	NO
121/000143	Proyecto de Ley de adopción	X	X

## Cuadro sinóptico de la VIII legislatura.

	internacional.		
121/000144	Proyecto de Ley para la regulación del régimen de las empresas de inserción.	X	X
121/000145	Proyecto de Ley por la que se establece la deducción por nacimiento o adopción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la prestación económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento o adopción.	X	NO
121/000146	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.	X	X
121/000147	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.	X	NO
121/000148	Proyecto de Ley por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2007-2011.	X	NO
121/000149	Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.	NO	NO
121/000150	Proyecto de Ley orgánica, complementaria de la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural.	NO	NO
121/000151	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.	X	NO
121/000152	Proyecto de Ley por la que se detrae de la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica el mayor ingreso derivado de la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (procedente del Real Decreto-Ley 11/2007, de 7 de diciembre).	X	NO

- Acompañado de IEIG Congreso según la Intranet del Congreso de los Diputados.
  - X: Si viene acompañado Informe de Evaluación de Impacto de Género
  - No: No viene acompañado Informe de Evaluación de Impacto de Género
- Se encontró en el Archivo (Por tanto puede consultarse en el anexo).
  - X: Si se encontró
  - No: No se encontró

## **INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO**

Emitido por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Según la última encuesta sobre malos tratos, realizada por el Instituto de la Mujer, en el año 2002, el 4% de las mujeres españolas mayores de 18 años declaraban haber sido víctimas de malos tratos, durante el último año, por alguna de las personas que convivían con ellas en su hogar, o por su novio, aunque no conviviera. Mientras que más del 11% eran consideradas "técnicamente" como maltratadas.

Por otra parte, el Centro de Estudios Reina Sofía para el estudio de la violencia recordaba que, en el año 2003, 70 mujeres murieron a manos de sus parejas o ex-parejas, lo cual supone, con diferencia, la primera causa de muertes de mujeres por delitos violentos.

Sin embargo, los malos tratos en el ámbito familiar y/o de pareja son sólo una manifestación más de la violencia de género. El propio proyecto de Ley define la "violencia de género" como "todo tipo de acto de violencia, basado en la pertenencia de la persona agredida al sexo femenino, tanto si se producen en la vida pública como en la privada... Su objetivo último es el sometimiento de la mujer". Por tanto, además de los malos tratos, se deberían incluir, bajo este concepto, otro tipo de manifestaciones, como pueden ser las agresiones sexuales, el acoso sexual o el tráfico de mujeres.

Esta visión "globalizadora" de la violencia de género llevó a la necesidad de elaborar una Ley "Integral" que, además, tuviera en cuenta todos los aspectos que pudieran incidir en este fenómeno: los educativos, sanitarios, asistenciales, jurídicos, etc.

Por otra parte, es importante destacar el carácter "preventivo", más que "paliativo", de esta Ley, lo cual responde al convencimiento de que solamente atacando el problema desde sus orígenes es posible combatirlo con éxito.

La Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, en su artículo primero, modifica el apartado 2 del artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, estableciendo que "El procedimiento de elaboración de proyectos de ley ...se iniciará, en el ministerio o ministerios competentes, mediante la elaboración del correspondiente anteproyecto, que irá acompañado por...un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establecen en el mismo."

Con carácter general, evaluar el impacto en función del género significa comparar y apreciar, en función de criterios pertinentes con respecto al género, la situación y la tendencia actual con la evolución que cabría esperar, como resultado de la introducción de la política propuesta.

La evaluación del impacto de género supone la utilización de técnicas de valoración prospectiva de las normas, es decir, un estudio y análisis "ex ante" del

proyecto normativo que se promueve, con el objetivo de verificar si, en el momento de planificar las medias contenidas en la disposición, se ha tenido en cuenta el impacto que producirán en los hombres y en las mujeres, advirtiéndoles que si las adoptaran de cuáles pueden ser las consecuencias deseadas y no deseadas y proponiendo, en su caso, su modificación.

La norma a valorar ha de tener unos objetivos claros, concretos y medibles, ya que, en caso contrario, no se podrá determinar con precisión el impacto.

Igualmente, debe poderse indicar la progresión temporal del impacto: a corto, medio y largo plazo y, si es posible, cuantificando, anualmente, los resultados que se pueden prever.

La Ley Integral contra la violencia de género es, sin embargo, una iniciativa legislativa que plantea algunos problemas metodológicos particulares, a la hora de evaluar el impacto de género. Fundamentalmente, derivados del hecho de que, por definición, la "violencia de género" es un tipo de violencia que se basa en la pertenencia de la persona agredida al sexo femenino. Según esto, no sería posible desglosar por sexo los datos ya que éstos estarían referidos, de forma exclusiva, al sexo femenino.

Por otra parte, el artículo 2 de la citada Ley establece que su objeto es "prevenir la violencia de género, mediante la regulación de los mecanismos necesarios que permitan luchar con eficacia contra la misma, así como establecer un catálogo de derechos de las víctimas que garanticen su asistencia, protección y reparación".

Desde luego, este objetivo es claro, pero no puede decirse que sea excesivamente concreto y, aún menos, medible.

La "prevención de la violencia de género" es un objetivo un tanto vago y poco operativo que nos remite, en cualquier caso, a indicadores de incidencia. En relación con él, sólo podremos evaluar la progresión temporal del impacto a través de indicadores que reflejen la posible disminución (o incremento) real del fenómeno, para, así, inferir que se cumple el objetivo de "prevención".

La evaluación de impacto, por otra parte, ha de guardar una estrecha relación con la situación de las fuentes estadísticas en el momento en que ésta se lleva a cabo, ya que, la necesidad de hacerla "ex ante" del proyecto normativo impide remitirse a la elaboración de nuevas herramientas estadísticas, dado que este es un proceso lento que, inevitablemente, supone una demora de, al menos, uno o dos años, antes de poder contar con los primeros datos estadísticos disponibles.

En esta situación, es complicado proponer un conjunto de indicadores que sirvan al propósito de esta evaluación de impacto. En realidad, los únicos disponibles actualmente serían aquellos relacionados con la Macroencuesta sobre violencia doméstica y con el número de mujeres muertas por violencia de género.

En relación con la primera, hay que dejar constancia de su carácter parcial, por cuanto se centra, únicamente, en un aspecto concreto de la



12 1002

"violencia de género", cual es la "violencia doméstica". No obstante, nos parece fundamental contar con dos indicadores como serían:

- Porcentaje de mujeres que se declaran víctimas de violencia doméstica
- Porcentaje de mujeres calificadas "técnicamente" como maltratadas.

En lo que respecta al número de mujeres muertas, habría que arbitrar un conjunto de indicadores que tomaran en cuenta una combinación de los datos provenientes de los medios de comunicación (que actuarían como sistema de alerta) y los facilitados por el Ministerio del Interior, ya que, como se ha demostrado en diversas ocasiones, la utilización exclusiva de una u otra fuente, presenta serias limitaciones.

En relación con el número de mujeres muertas se propone el indicador:

- Número de mujeres muertas por violencia de género

Este indicador, en realidad, debería aparecer desglosado en los siguientes tres:

- Número de mujeres muertas a manos de su pareja o ex-pareja
- Número de mujeres muertas en el ámbito familiar
- Número de mujeres muertas fuera del ámbito familiar.

El número de mujeres muertas debería ser completado con el número de mujeres víctimas de delitos de homicidio doloso o asesinato, independientemente del resultado de la acción, ya que entendemos que es una medida más estable que la primera. Sin embargo, los medios de comunicación no ofrecen referencia exhaustiva de estos hechos, por lo que deberíamos acudir, de forma exclusiva, a los datos del Ministerio del Interior, lo cual plantea algunas limitaciones, entre las cuales no es la menor la de referirse, tan sólo, a los casos en los que el agresor es la pareja o ex-pareja. A pesar de ello, recogeríamos en nuestra propuesta el indicador:

- Número de mujeres víctimas de delitos de homicidio doloso o asesinato a manos de su pareja o ex-pareja.

En cualquier caso, nos parece necesario reflexionar sobre el hecho de que el número de mujeres muertas (e incluso el de delitos de homicidio o asesinato) puede ser un indicador que se mueva en sentido contrario al de la evolución del fenómeno. Hay estudios que sugieren que estas conductas de extrema violencia se producen, en un elevado porcentaje, en situaciones que el agresor vive como de extrema tensión, relacionadas, en su mayor parte, con procesos de separación o ruptura de la convivencia. El aumento de tales situaciones, derivadas de la creciente autonomía de la mujer para tomar decisiones en este sentido, sería, por tanto, una variable que correlacionaría con el número de mujeres muertas, por lo que un aumento o disminución de éstas no podría interpretarse, exclusivamente, como consecuencia de evolución de la extensión del propio fenómeno de la violencia de género.

En lo referente a los datos sobre denuncias por malos tratos y violencia sexual, hay que señalar que, a pesar de la dificultad manifiesta para interpretar la evolución de los mismos, ambos indicadores deberían ser incluidos, igualmente, aún con reservas, como indicadores de impacto. Esta dificultad se deriva de la imposibilidad, si atendemos sólo a esta fuente, de conocer si un posible aumento de las denuncias se debe a un incremento real en la incidencia del fenómeno, a una mayor concienciación, por parte de las mujeres, para denunciar estos hechos o a una combinación de ambos. No obstante, la interpretación conjunta de estos datos y los provenientes de la macroencuesta pueden ofrecer mayor luz sobre esta materia. Así pues, se proponen, igualmente, como indicadores:

- Número de denuncias por malos tratos a manos de pareja o ex-pareja
- Número de denuncias por violencia sexual

En realidad, todas las dificultades reseñadas y la escasa operatividad de los objetivos marcados por este proyecto normativo no son sino una consecuencia lógica de las propias características de la materia sobre la que se pretende incidir.

La violencia de género es un campo en el que, prácticamente, "todo está por hacer", empezando por la propia definición que, como se ha demostrado en la literatura, ha adoptado diversas acepciones. Por otra parte, las conductas incluidas bajo esta denominación pertenecen a la esfera de los "comportamientos ocultos", aquellos que rara vez tienen traducción en las estadísticas oficiales y que, además, son difícilmente reconocibles por las propias víctimas.

Por ello, en este caso, la evaluación de impacto no puede sino adoptar un perfil genérico, proponiéndose un mayor énfasis en la evaluación de implementación y en la evaluación de otro tipo de resultados de la citada Ley.

La Ley propone una serie de medidas, más o menos concretas, en el campo de la educación, la publicidad, el ámbito judicial y fiscal, la Seguridad del Estado, el apoyo a las víctimas (información, centros de ayuda, asistencia jurídica, protección social, etc.) o la administración pública. El grado de implementación de estas medidas deberá ser objeto de evaluación, en distintos momentos, del mismo modo que deberán evaluarse los resultados inmediatos derivados de la aplicación de tales medidas.

Por otro lado, debemos destacar que una parte importante del articulado de la Ley se refiere al desarrollo de indicadores específicos sobre violencia de género y de organismos administrativos encargados de su puesta en marcha y evaluación. Así, el artículo 13 establece la creación de una Delegación del Gobierno contra la violencia de Género que tendrá entre sus funciones la de "analizar las magnitudes y características del fenómeno de la violencia de género, así como la elaboración de estudios e investigaciones que sirvan para el análisis y diagnóstico de las nuevas manifestaciones de la violencia de género", mientras que el artículo 14 dice que corresponde al Observatorio nacional de la violencia de género, también de nueva creación, el ejercicio de las siguientes

funciones: "...h) establecer un marco común de indicadores para todas las CCAA en las áreas que se determinen reglamentariamente. En virtud e esta facultad:

- Fomentar la inclusión de indicadores sobre violencia en las estadísticas que, de forma periódica, realizan los Institutos estadísticos y los Centros de Investigación Sociológica y animar la realización de estudios e investigaciones sobre la incidencia de esta problemática en la población general.
- Desarrollar métodos para mejorar la comparabilidad, objetividad y fiabilidad de la información, armonizando y consensuando definiciones y conceptos acerca de los indicadores.
- Reunir, registrar y analizar las informaciones y datos
- Realizar investigaciones y encuestas científicas"

La ley, por tanto, no hace sino recalcar la importancia de los indicadores y la necesidad de elaborar un sistema unificado sobre violencia de género, en cuya elaboración habrían de participar, a nuestro entender, representantes de las CCAA, ámbito judicial (CGPJ), Ministerio del Interior y asociaciones de mujeres especializadas en este tema.

La existencia de este sistema de indicadores que, como decimos, deberá ser estudiado en profundidad y ampliamente consensuado, permitirá conocer, con mayor detalle, cuál es la situación actual de este fenómeno, profundizando en aquellas manifestaciones de la violencia de género que, hasta este momento, permanecen menos conocidas, a la vez que servirá para estudiar la evolución del mismo y poder, por tanto, evaluar cuál es la incidencia de las medidas contenidas en esta Ley o de otras que pudieran adoptarse en el futuro.

REAL DECRETO LEY 6/2004 DE 17 DE SEPTIEMBRE

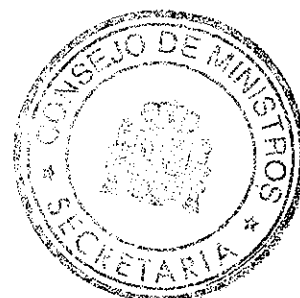
## INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 a) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, le significo que en el citado proyecto de Real Decreto-ley no se introduce discriminación alguna por razón de sexo, por lo que la mayor o menor incidencia en el número de personas de distintos sexos que pueden beneficiarse de las medidas extraordinarias contenidas en dicha norma legal vendrá determinada únicamente por los criterios objetivos que permiten obtener la condición de beneficiario de éstas.

LEGISLATURA

VIII

11 2 1 0 1 0





**INFORME SOBRE EL IMPACTO DE GENERO DEL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA EL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/1990, DE 2 DE MARZO, PARA REGULAR LOS PERMISOS Y LICENCIAS DE CONDUCCIÓN POR PUNTOS.**

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 22 de la Ley 50/1997, del Gobierno, redactado por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, se participa que el contenido del Anteproyecto de ley por el que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, para regular los permisos y licencias de conducción por puntos, no afecta a la igualdad entre hombres y mujeres ya que se limita a implantar un sistema consistente en la disminución o pérdida de un crédito de puntos inicialmente asignado a los titulares de permisos o licencias de conducción, como consecuencia de la comisión de infracciones graves o muy graves, previendo asimismo un cauce para la modificación de estos comportamientos infractores consistente en la realización de unos cursos de sensibilización o reeducación, cuya superación permitirá además la recuperación parcial o total del capital de puntos que cada conductor tuviera inicialmente.

Por todo ello el Anteproyecto no implica ningún impacto por razón de género.

Septiembre 2004

LEGISLATURA  
VIII



121013

121017

Congreso de los Diputados

COMISION DE

Legislatura

VIII

Número

Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, de Poder Judicial (núm. expte. 121/000017)

~~Tramitado por el procedimiento de lectura única~~  
Tramitado por el procedimiento de urgencia

Letrado

Competencia legislativa del Pleno  
de la Comisión

PLENO

Avocada por el Pleno el

Fecha de publicación en el Boletín Oficial de las Cortes 1 de diciembre de 2004

Fecha término del plazo de presentación de enmiendas 2 de diciembre de 2004

ENMIENDAS

NºS

- G.P. Socialista Esquerra Republ. (ERC)

- UÑASCO (EAD-PNU) y GIV-TV-FCU

- G.P. Catalán (CiU)

- G.P. Popular

- G.P. Popular

1

2-4

5

6-14

ENMIENDAS TOTALIDAD 1 (NºS del G.P.)

Fecha comunicación al Presidente

Pleno en que se debaten Resultado Fecha comu

Ponentes Sres.:

Fecha del informe de la Ponencia:

BOCG

Fecha de la aprobación por la Comisión (C. L. P.)

BOCG

Fecha del dictamen de la Comisión

BOCG

Inscripción en el Orden del Día del Pleno

Fecha de la aprobación por el Pleno 9 de diciembre de 2004 BOCG

Ley Orgánica 2/2004, de 28 de diciembre B.O.E. n.º 313 del día 29 de d



**PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY  
ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL**

**Informe sobre el impacto por razón de género**

El presente informe se eleva en cumplimiento de lo previsto por el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada al mismo por la Ley 30/2003 de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.

El Proyecto de Ley que nos ocupa tiene por objeto el reforzamiento de los principios de mérito y capacidad en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia, si establecer medida discriminatoria alguna (positiva o negativa) en atención al sexo de los posibles afectados.

Por ello, el presente proyecto no promueve consecuencias negativas que favorezcan situaciones de discriminación entre mujeres y hombres. Es más, el fortalecimiento de los criterios objetivos de selección producirá, probablemente, el efectos contrario.

Madrid, a 14 de octubre de 2004

LEGISLATURA

VIII

121017





**PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA  
6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL.**

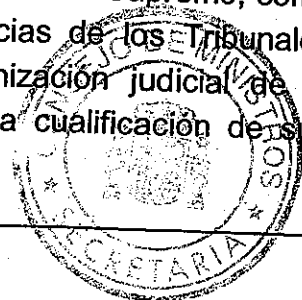
**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

La presente Ley pretende dar respuesta a la preocupación expuesta por la práctica totalidad de los Grupos parlamentarios, en la proposición no de Ley aprobada el 21 de septiembre pasado por el Congreso de los Diputados, en la que se insta al Gobierno, entre otras cuestiones, a la adopción de las medidas precisas que refuercen la independencia del Poder Judicial.

A tal fin, y sin perjuicio de otras reformas posteriores de mayor calado que puedan realizarse, se aborda la regulación de tres aspectos puntuales que coinciden en la necesidad de una reforma legal urgente. De un lado, se modifica el sistema de mayorías para la adopción de determinados acuerdos por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, y, de otro, se fortalece la figura de Magistrado suplente del Tribunal Supremo, y del Jefe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial.

La garantía tradicional de la independencia de los jueces y magistrados integrantes del poder judicial (artículo 117.1 CE), se proyecta en la actuación del Poder Judicial -según el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, suscrito el 28 de mayo de 2001- como un "poder independiente, unitario e integrado, con una estructura vertebrada, regida por una coherencia institucional que le permita desarrollar mas eficazmente sus funciones constitucionales". Esta clásica exigencia de la independencia es predicable frente a todos -otros poderes del Estado, los demás órganos judiciales o el encargado de velar por la misma: el Consejo General del Poder Judicial-, y constituye, junto a la mejora de la calidad de la justicia, uno de los pilares sobre los que se inspira esta reforma.

Acorde con lo anterior, la presente reforma pretende potenciar al Tribunal Supremo, como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, y a las Presidencias de los Tribunales Superiores como los órganos judiciales en los que culmina la organización judicial de la Comunidad Autónoma, velando por el prestigio de las instituciones y la cualificación de sus miembros.







En este sentido se pretende fortalecer el mérito y la capacidad como las razones esenciales del nombramiento y acceso al Tribunal Supremo y a las Presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia, evitando la aplicación de un sistema de mayorías que no contribuye a crear una justicia de calidad, pues perjudica su imagen, puede enturbiar la independencia y comprometer el diseño constitucional sobre la posición del Tribunal Supremo.

Precisamente esta posición del Tribunal Supremo se vería dignificada si al nombramiento de sus Magistrados se aplicara la fórmula del consenso, como medio idóneo para la adopción de acuerdos por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano integrado en virtud del principio de pluralidad. A tal fin, el incremento de la mayoría necesaria del Pleno para realizar la propuesta de nombramiento de Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo, por un lado, y Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, por otro, equiparándose a la que resulta exigible para nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional, pretende fomentar la adopción de acuerdos por una amplia mayoría superior incluso a la legalmente exigida, estimulando así una tendencia hacia la unanimidad. En este sentido, el incremento de la mayoría a tres quintos -computada sobre la totalidad de los 21 miembros que componen el Pleno al margen de coyunturales o definitivas ausencias o ceses- evitará la tentación, ahora y en el futuro, de decidir tan importantes nombramientos conforme al criterio de una mayoría estable concreta pero institucionalmente insuficiente, sustituyendo esta práctica por el diálogo y el consenso permanente.

Por otro lado, los Magistrados del Tribunal Supremo no perderán dicha condición cuando desempeñen, en su caso, la Jefatura del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial. Además, cuando el puesto sea desempeñado por un Magistrado tendrá, mientras desempeñe el cargo de Jefe del Servicio de Inspección, la consideración de Magistrado del Tribunal Supremo. De este modo las labores de inspección se verían fortalecidas bajo la dirección y autoridad de un Magistrado del Alto Tribunal, o de un Magistrado que ostentará temporalmente la expresada consideración.

Por último, los Magistrados del Tribunal Supremo jubilados, que así lo manifiesten, seguirán ejerciendo funciones jurisdiccionales como magistrados eméritos, aprovechándose, de esta manera, su dilatada experiencia en el ejercicio de funciones jurisdiccionales.

#### **Artículo Único.** Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Se modifica la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial, en los siguientes términos:

**Uno.** El artículo 127 quedará redactado del modo siguiente:

"Será de la competencia del Pleno del Consejo General del Poder Judicial:





1. La propuesta de nombramiento por mayoría de tres quintos de sus miembros de:

a) El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y el Vicepresidente de este último.

b) Los miembros del Tribunal Constitucional cuya designación le corresponde.

c) Los Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo, así como los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas.

d) El Magistrado de la Sala Segunda de lo Penal o Tercera de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, competente para conocer de la autorización de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18.2 y 3 de la Constitución, así como la del Magistrado de dichas Salas del Tribunal Supremo que lo sustituya en caso de vacancia, ausencia o imposibilidad

Para el computo de la mayoría cualificada exigida en este apartado se tomará siempre como base la totalidad de los veintiún miembros integrantes del Consejo General del Poder Judicial, conforme a lo previsto en el artículo 111 de esta Ley.

2. La propuesta de nombramiento de los demás cargos de designación discrecional.

3. Evacuar la audiencia prevista en el artículo 124.4 de la Constitución sobre nombramiento del Fiscal General del Estado.

4. Resolver los recursos de alzada interpuestos contra los acuerdos de la Comisión Permanente, de la Comisión Disciplinaria y de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y de los órganos de gobierno de los Tribunales y Juzgados.

5. Resolver los expedientes de rehabilitación instruidos por la Comisión Disciplinaria.

6. Evacuar los informes previstos en la Ley y ejercer la potestad reglamentaria atribuida por la Ley al Consejo General del Poder Judicial.

7. Acordar, en los casos legalmente establecidos, la separación y jubilación de los Jueces y Magistrados en los supuestos no previstos en el artículo 131.3.

8. Elegir y nombrar los Vocales componentes de las Comisiones y Delegaciones.

9. Aprobar la memoria anual que con motivo de la apertura del año judicial leerá su Presidente sobre el estado de la Administración de Justicia.

10. Elaborar el Presupuesto del Consejo General del Poder Judicial que se integrará





en los Generales del Estado, en una sección independiente.

11. Dirigir la ejecución del presupuesto del Consejo y controlar su cumplimiento.

12. Cualesquiera otras funciones que correspondan al Consejo General del Poder Judicial y no se hallen expresamente atribuidas a otros órganos del mismo."

**Dos.** Se añade un número 5 al artículo 200, con el siguiente contenido:

"5. Los Magistrados del Tribunal Supremo, una vez jubilados, serán designados Magistrados eméritos en el Tribunal Supremo cuando así lo soliciten, siempre que reúnan los requisitos legalmente establecidos y de acuerdo con las necesidades de refuerzo en la Sala correspondiente."

EL CONSEJO DE MINISTROS, en su

reunión del día 29 NOV 2004

acordó remitir a las Cortes

Generales el presente pro-

yecto de ley.

LA MINISTRA SECRETARIA,

**Tres.** El apartado 3 del artículo 335 tendrá la siguiente redacción:

"3. La plaza de Jefe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial se proveerá por un Magistrado del Tribunal Supremo con una antigüedad en la categoría de dos años o por un Magistrado con diez años de servicios en la categoría. En este último caso, mientras desempeñe el cargo, tendrá la consideración de Magistrado del Tribunal Supremo."

**Cuatro.** Se añaden sendos apartados 4 y 5 al artículo 348 bis, con la siguiente redacción:

"4. Fiscal General del Estado.

5. Jefe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial."

**Cinco.** Se añade una nueva letra e) al artículo 352, con la siguiente redacción:

"e) Jefe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial."

**Disposición final única.** *Entrada en vigor*

Esta Ley Orgánica entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

ELÉVESE AL CONSEJO DE MINISTROS

Madrid, a 29 de noviembre de 2004

EL MINISTRO DE JUSTICIA

Juan Fernando López Aguilar





MINISTERIO  
DE JUSTICIA

121 / 19 8º

47514

SUBSECRETARÍA

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

**IMPACTO POR RAZÓN DEL GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, EN MATERIA DE DELITOS DE RIESGO PROVOCADOS POR EXPLOSIVOS.**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la normativas del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, debe señalarse que las medidas que se incluyen en este Anteproyecto no conllevan impacto alguno por razón de género.

2 de marzo de 2005

LEGISLATURA  
VIII

121019



CORREO ELECTRÓNICO:

SAN BERNARDO, 62  
28015 MADRID  
TEL: 91 390 22 32  
FAX: 91 390 44 71



**INFORME SOBRE EL IMPACTO DE GÉNERO DE LA LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA EL IMPULSO DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE, DE LIBERALIZACIÓN DE LA TELEVISIÓN POR CABLE Y DE FOMENTO DEL PLURALISMO.**

En cumplimiento del artículo 24.1 b) de la Ley 50/1997, de noviembre, del Gobierno, en su redacción dada por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, se informa que la presente Ley no contiene ninguna medida que suponga un tratamiento desigual entre hombres y mujeres.

LEGISLATURA

VIII

121021



**PROYECTO DE LEY DE REGULACIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERESES DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO Y DE LOS ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO.**

**Informe sobre impacto por razón de género**

El presente informe se eleva en cumplimiento de lo previsto por el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada al mismo por la Ley 30/2003 de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.

El Anteproyecto de Ley que nos ocupa tiene por objeto regular los requisitos previos para el nombramiento de los titulares de determinados órganos y de los altos cargos en determinados organismos reguladores y de supervisión, así como las medidas básicas para evitar situaciones de conflictos de intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.

No existe en el texto medida alguna que pueda suponer una discriminación o diferenciación alguna por razón de género y por ello, se concluye que no promueve consecuencias negativas que favorezcan situaciones de discriminación entre mujeres y hombres.

Madrid, a 24 de enero de 2005

LEGISLATURA

VIII

121025





MINISTERIO  
DE JUSTICIA

121 / 26

SUBSECRETARÍA

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

**IMPACTO POR RAZÓN DEL GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY SOBRE LA  
SOCIEDAD ANÓNIMA EUROPEA DOMICILIADA EN ESPAÑA.**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la normativas del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, debe señalarse que las medidas que se incluyen en este Anteproyecto no conllevan impacto alguno por razón de género.

LEGISLATURA

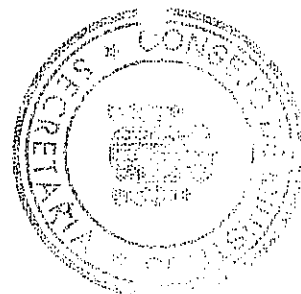
VIII

121026



**IMPACTO DE GÉNERO DEL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSA NACIONAL**

La Ley de la Defensa Nacional se ha elaborado de forma que no resulte discriminatoria ni favorezca situaciones de discriminación por razón de sexo.



LEGISLATURA

VIII

121031



## INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZON DE GENERO

### DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA AL RÉGIMEN DE ACTIVIDADES TRANSFRONTERIZAS REGULADO EN LA DIRECTIVA 2003/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 3 DE JUNIO, RELATIVA A LAS ACTIVIDADES Y LA SUPERVISIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES DE EMPLEO.

El presente informe se emite en cumplimiento de lo previsto en el apartado 2 del artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en su redacción dada por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.

## INFORME

### I.- FINALIDAD Y CONTENIDO DEL PRESENTE ANTEPROYECTO DE LEY.

El presente Anteproyecto de Ley pretende completar la adaptación de nuestra legislación interna a las disposiciones de la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio, relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el día 23 de septiembre de 2003.

El plazo de transposición de dicha Directiva al derecho interno se extiende hasta el 23 de septiembre de 2005, si bien, los Estados miembros pueden diferir la aplicación de ciertos aspectos puntuales hasta el 23 de septiembre de 2010.

A tal fin, mediante el presente Anteproyecto de Ley se introducen determinadas disposiciones en el Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, que regularán, especialmente, el régimen de actividades transfronterizas de los fondos de pensiones de empleo, actividades que, actualmente, carecen de regulación en nuestra legislación interna

La Directiva 2003/41/CE es aplicable a los fondos de pensiones de empleo, considerando como tales a las instituciones que operan mediante sistemas de capitalización, cuya actividad consista en proporcionar prestaciones de jubilación en el contexto de la actividad laboral, complementarias de los sistemas de Seguridad Social, siendo jurídicamente independientes de las empresas promotoras, y que no estén reguladas por las Directivas de seguros, de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios, de empresas de servicios de inversión o de entidades de crédito.

Esta Directiva 2003/41/CE pretende garantizar la seguridad y la gestión eficaz de los regímenes de pensiones de los trabajadores mediante la

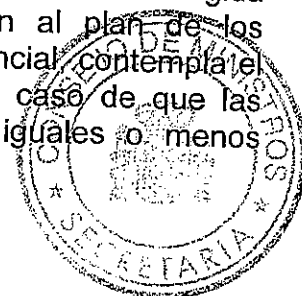
imposición de unas normas prudenciales y de supervisión, y en igual medida, establecer un régimen de actividades transfronterizas de los fondos de pensiones de empleo, que potenciarán el ahorro destinado a la previsión ocupacional, contribuyendo así al progreso económico y social en la Unión Europea.

En la legislación interna, los fondos de pensiones de empleo se rigen por el Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, y otras normas complementarias. Esta normativa regula los aspectos contractuales, financieros y organizativos del sistema de planes y fondos de pensiones, así como las normas prudenciales de actividad e inversiones y de supervisión administrativa, ofreciendo un alto nivel de adaptación a la Directiva en estas materias. En cambio, nuestra legislación no regula actualmente las actividades transfronterizas de los fondos de pensiones.

En lo que se refiere a las actividades transfronterizas, la Directiva 2003/41/CE obliga a los Estados miembros a permitir que los fondos de pensiones de empleo domiciliados en su territorio integren planes de pensiones promovidos por empresas situadas en otros Estados miembros, y que las empresas establecidas en su territorio puedan promover planes integrados en fondos de pensiones de otros Estados miembros.

Según la Directiva, la actividad transfronteriza de los fondos de pensiones de empleo ha de ejercerse respetando plenamente las disposiciones del Derecho social y laboral vigente en el Estado de acogida en la medida que afecte a las pensiones de jubilación, incluyendo las disposiciones en materia de afiliación obligatoria y las resultantes de la negociación colectiva (en sus considerandos cita como ejemplo las relativas a la determinación y pago de las pensiones de jubilación y las condiciones para movilizar los derechos consolidados). Por ello, el artículo 20 de la Directiva establece un procedimiento preceptivo de comunicaciones entre el fondo de pensiones y las autoridades competentes de los Estados miembros de origen (del fondo) y de acogida (de la empresa promotora, cuya legislación social y laboral en materia de pensiones es aplicable), previo a la integración efectiva del plan en el fondo, así como la continuidad de la colaboración entre dichas autoridades en la supervisión del cumplimiento de la legislación social y laboral aplicable.

De este modo, el fondo de pensiones desarrolla su actividad sujeto a su legislación nacional, si bien, algunos aspectos pueden estar sometidos a la legislación del Estado miembro de acogida (disposiciones del Derecho social y laboral aplicables al plan de pensiones, y régimen de obligaciones de información a los partícipes y beneficiarios), pudiendo dicho Estado de acogida exigir, incluso, en materia de inversiones, la aplicación al plan de los coeficientes de inversión del activo que, con carácter prudencial, contempla el apartado 7 del artículo 18 de la Directiva 2003/41/CE, en caso de que las normas sobre inversiones del Estado de origen fueran iguales o menos rigurosas que las del Estado de acogida.



El presente Anteproyecto de Ley viene a transponer a la legislación interna las disposiciones de la Directiva 2003/41/CE relativas a la actividad transfronteriza, a cuyo fin, propone añadir un nuevo capítulo X y unas modificaciones puntuales en el Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 1/2002, de 29 de noviembre. El nuevo Capítulo consta de tres secciones: la primera de disposiciones generales, la segunda sobre la actividad de los fondos de pensiones de empleo españoles en otros Estados miembros (desarrollo de planes de empresas establecidas en otros EEMM) y la sección tercera sobre la actividad en España de los fondos de pensiones de empleo de otros Estados miembros (desarrollo de planes de empresas establecidas en España), señalando las condiciones de actividad y de supervisión de los fondos de pensiones de empleo en el ámbito transnacional.

Cabe destacar especialmente la actividad en España de los fondos de otros Estados miembros. El presente Anteproyecto de Ley habilita la integración en fondos de otros Estados miembros de los planes de pensiones de empleo sujetos a la normativa española. En orden al cumplimiento de la disposición adicional primera del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus normas complementarias, relativas a la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con el personal, los planes de pensiones de empleo que se promuevan a tal efecto podrán adscribirse a fondos de pensiones de empleo autorizados en cualesquiera Estados miembros; la sección tercera del nuevo capítulo X regula las condiciones de integración de estos planes en fondos de otros Estados miembros, el funcionamiento de los planes y la supervisión, en especial, en lo relativo al cumplimiento de la legislación española aplicable al plan como legislación social y laboral.

## II.- NO DIFERENCIACIÓN POR RAZÓN DE GÉNERO EN EL ANTEPROYECTO DE LEY

Las disposiciones de este Anteproyecto de Ley, en cuanto puedan afectar directa o indirectamente a las personas físicas, no presentan tratamientos diferenciados o especialidades en función del género.

La Ley de Planes y Fondos de Pensiones, ya en origen, estableció el principio de no discriminación en los planes de pensiones, que garantiza el acceso a los planes de pensiones de empleo de todos los trabajadores de la empresa promotora con al menos dos años de antigüedad (o inferior según lo acordado).

Hay que tener en cuenta que los planes de empleo instrumentan compromisos por pensiones de las empresas con su personal, asumidos en Convenio colectivo o en virtud de otros acuerdos adoptados en el ámbito laboral. El contenido de tales compromisos deriva de las condiciones libremente acuerden las partes en la negociación, en especial en cuanto a requisitos de acceso al régimen de previsión de la empresa y para el mantenimiento o adquisición del derecho a las pensiones (edad, antigüedad,



permanencia en la empresa o sector....). El Ordenamiento Laboral español impone la no discriminación por razón de género en las relaciones laborales, que sería aplicable a las condiciones que se acuerden en el ámbito laboral para tener derecho a las pensiones complementarias susceptibles de instrumentarse en un plan de pensiones de empleo.

En cualquier caso, según nuestra legislación, son principios básicos de los planes de pensiones la irrevocabilidad de las aportaciones empresariales y la atribución al trabajador de los derechos económicos generados por las mismas (derechos consolidados individuales, que se mantienen en caso de cese de la relación laboral por causa distinta de las contingencias cubiertas). Por tanto, en caso de cese de la relación laboral, el trabajador y la trabajadora conservan sus derechos consolidados en el plan de pensiones de empleo, movilizables a otros planes, en su caso, y sin perjuicio del cobro de las prestaciones al acaecimiento de las contingencias, o de la posibilidad de cobro de la prestación correspondiente a jubilación en caso de verse afectados por expediente de regulación de empleo, o de hacer efectivos los derechos en los supuestos excepcionales de desempleo de larga duración o enfermedad grave, todo ello según lo previsto en la normativa vigente.

Por otra parte, los planes de empleo que instrumentan compromisos cuyas prestaciones vengan determinadas en referencia a las pensiones de la Seguridad Social, tampoco implican una especial incidencia por razón de género en tanto que el Sistema público español aplique a trabajadores y trabajadoras las mismas normas y condiciones de pensiones contributivas de jubilación, incapacidad permanente y fallecimiento.

El presente Anteproyecto destaca especialmente la observancia de los principios básicos y condiciones establecidos en la normativa interna, en el caso de los planes de pensiones de empleo promovidos por empresas establecidas en España a favor de los trabajadores cuya relación laboral se sujete a la normativa española, que pretendan integrarse en fondos de pensiones de otros Estados Miembros.

Como conclusión, cabe señalar que este Anteproyecto de Ley no contiene disposiciones discriminatorias en función del sexo, y que su aplicación no supondría ningún impacto por razón de género.





1121036

## **INFORME SOBRE IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LA VENTA, EL SUMINISTRO, EL CONSUMO Y LA PUBLICIDAD DE LOS PRODUCTOS DEL TABACO**

El artículo 24.1 b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en su redacción dada por el artículo 22.2 de la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, obliga a incorporar una memoria de tales características a los proyectos normativos que se sometan a la aprobación del Gobierno.

Por tal razón, es preciso hacer constar que la descripción de los aspectos diferenciales del tabaquismo en hombres y mujeres permite identificar que existen diferencias en el patrón de consumo y en las consecuencias sobre la salud, en la motivación en el inicio, en el mantenimiento del tabaquismo, en las distintas respuestas a los tratamientos, así como, por lo general, una mayor dificultad para el abandono y un más alto índice de recaídas entre las mujeres.

Para el conjunto de la población, las tasas de consumo de tabaco son mayores en hombres que en mujeres, aunque en los grupos de menor edad la prevalencia del tabaquismo es similar para ambos sexos, llegando incluso entre los más jóvenes a presentar prevalencias mayores las adolescentes que sus compañeros.

En la última década, la prevalencia del consumo entre las mujeres ha aumentado en un 2,8%, en tanto que entre los hombres ha disminuido un 6,6%.

Al analizar el porcentaje de grandes fumadores, igualmente se aprecia entre las mujeres un incremento del 1,7%, descendiendo entre los hombres en un 2,9%. Esto puede deberse a los cambios sociales acontecidos que pueden favorecer actitudes más permisivas hacia el hecho de que las mujeres fumen, las creencias de algunas mujeres de que fumar las hace iguales a los hombres y la publicidad del tabaco, que las configura como nueva población objetivo.

Distintos estudios confirman que los daños que el tabaco causa en el organismo femenino son mayores, al ser más vulnerable a los efectos degenerativos de las sustancias tóxicas del tabaco. La mortalidad por cáncer de pulmón ha aumentado un 20% en las mujeres en los últimos diez años frente a un 5% en los hombres y, del mismo modo, el riesgo relativo a desarrollar enfermedades cardiovasculares es mayor en las mujeres.

La interacción del tabaquismo con la especial fisiología de las mujeres y con los procesos reproductivos añade unos riesgos específicos para el sexo femenino.





121036

Efectivamente, hace varias décadas que se conoce que la nicotina y el monóxido de carbono durante el embarazo son responsables de una mayor propensión al aborto espontáneo y a la mortalidad perinatal, así como de una reducción del peso en el recién nacido. También la exposición de la mujer gestante como fumadora pasiva al humo del tabaco presente en el ambiente, provoca nocividad sobre el feto

Por otro lado, es de destacar que la disminución del tabaquismo se produce inicialmente y de manera más intensa entre aquellas personas con más ingresos económicos y mayor nivel de instrucción, sobre todo entre los varones. Las mujeres mantienen un perfil de mayor consumo para los niveles de estudios y de ingresos más altos, y solo después de un cierto periodo siguen los mismos patrones de reducción que los varones.

Los motivos que explican estas diferencias se deben a factores ligados al género y ello es ampliamente utilizado por la industria tabaquera, que orienta su publicidad específicamente dirigida a las mujeres (y mujeres jóvenes), utilizando, precisamente, todos los códigos simbólicos ligados a estos patrones de género.

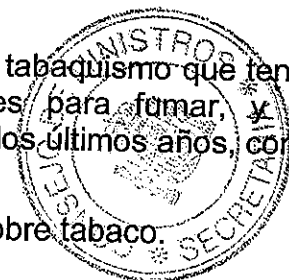
Las actitudes, creencias y motivaciones sobre comenzar a fumar o no hacerlo, la cantidad de cigarrillos o las decisiones de dejarlo, tienen patrones diferentes en las mujeres y en los hombres de todos los grupos de edad, lo que es importante investigar y tener en cuenta a la hora de plantear los programas preventivos y de apoyo.

La perspectiva de género analiza las expectativas sobre el comportamiento y las características de mujeres y hombres. Ello no significa adoptar la posición o centrar el interés en las mujeres. Se refiere a las relaciones desiguales entre las mujeres y los hombres y el impacto que esta desigualdad ejerce sobre la vida de las personas. Implica la eliminación de desigualdades remediadas en las oportunidades de disfrutar de salud y no enfermar, discapacitarse o morir prematuramente por causas prevenibles.

Para el abordaje correcto del problema es necesario analizar estas diferencias, de modo que pueda esclarecerse, en la mayor medida posible, cuándo se deben a factores meramente biológicos (anatómicos, hormonales, etc.), cuándo se deben a factores socioculturales ligados a los respectivos papeles vinculados al género, y cuándo estas diferencias se deben a otros factores asociados, que pueden actuar como "factores de confusión" (edad, nivel de estudios, nivel de ingresos, lugar de residencia, situación laboral, tipo ocupación, etc.). El género está asociado a las condiciones socioeconómicas, ingresos, ocupación, nivel de estudios, pero añade una especificidad que atraviesa transversalmente las diferentes variables socioeconómicas.

Por tanto, para el control eficaz del tabaquismo debe contemplarse, además del instrumento legislativo propuesto, distintas medidas y actuaciones desde la perspectiva de género, entre las que se destacan:

1. Plantear estrategias de promoción de la salud y de prevención del tabaquismo que tengan en cuenta las diferentes motivaciones de mujeres y hombres para fumar, y que contrarresten las acciones que la industria tabaquera ha tenido en los últimos años, con un especial interés en las mujeres y las jóvenes.
2. Integrar la perspectiva de género en los programas de formación sobre tabaco.
3. Promover y realizar investigaciones sobre:



121036

56733



- Motivaciones para el inicio del consumo.
  - Influencia sobre los distintos patrones de consumo.
  - Mecanismos que intervienen en la producción de recaídas.
  - Estrategias para mejorar la eficacia de las intervenciones en fumadoras embarazadas.
  - Estrategias para mejorar la eficacia de las intervenciones en fumadoras climatéricas.
  - Análisis de posibles diferencias en la aparición de patologías atribuibles al tabaco.
  - Análisis de posibles diferencias en la accesibilidad a la prestación de servicios de ayuda para dejar de fumar.
  - Análisis de posibles diferencias en la respuesta a los tratamientos del tabaquismo.
  - Estudiar la situación específica de hombres y/o mujeres respecto al tabaquismo.
  - Incluir una reflexión en las investigaciones sobre los puntos fuertes y las debilidades del propio estudio en relación con la perspectiva de género, aportando propuestas acerca de las necesidades futuras de inclusión de herramientas y procedimientos metodológicos que permitan establecer conclusiones que tomen en consideración la perspectiva de género.
4. Incluir los datos desagregados por sexo y los datos relacionados con el género en los registros y sistemas de información, en los programas de actuación frente al tabaquismo y en las actividades de prevención y control. Para facilitar la inclusión de la perspectiva de género, en los registros y sistemas de información se propone tomar en cuenta, al menos, aspectos tales como horas de trabajo productivo, cargas familiares y horas de dedicación al cuidado de terceros.
  5. Priorizar la incorporación del consejo mínimo y otras intervenciones de prevención y tratamiento del tabaquismo en las especialidades de obstetricia, ginecología y pediatría.
  6. Promover la integración de los medios de comunicación en el control del tabaquismo.
  7. Sensibilizar a las Administraciones públicas y al personal sanitario y docente acerca de la necesidad de identificar e intervenir sobre las desigualdades entre hombres y mujeres en las actividades de prevención y control del tabaquismo.

Contemplar la perspectiva de género en el abordaje del tabaquismo es potenciar la equidad de género en salud, eliminar disparidades innecesarias, evitables e injustas entre mujeres y hombres. No es tanto una distribución igual de recursos, como una distribución diferencial de acuerdo con las necesidades particulares de cada sexo. No significa, pues, tasas iguales de mortalidad o morbilidad para ambos sexos, sino asegurar que las mujeres y los hombres tengan una misma oportunidad para gozar de buena salud.





121037

## INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE TROPA Y MARINERÍA

La Ley de Tropa y Marinería incorpora, partiendo del diseño establecido en la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, un conjunto de nuevas medidas que pretenden cambiar aspectos básicos del actual modelo de profesionalización de tropa y marinería a fin de asegurar el reclutamiento y permanencia en las Fuerzas Armadas de los soldados y marineros que nuestros Ejércitos necesitan.

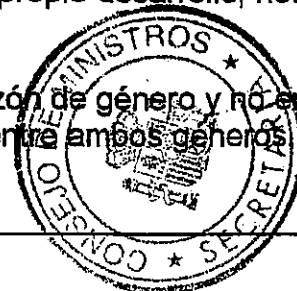
El centro de gravedad y por ello la finalidad principal de esta Ley es consolidar la plena profesionalización de la tropa y marinería, proporcionándoles estabilidad y apoyos de diversa naturaleza que tengan en cuenta sus necesidades reales. Los cambios que se proponen pretenden que el soldado y marinero profesional pueda desarrollar un proyecto profesional a través de un vínculo más duradero con las Fuerzas Armadas y ofrecen:

- Mayor flexibilidad, tanto al poder elegir entre diferentes enseñanzas impartidas en unos razonables y necesarios cambios de especialidad como al propiciar una trayectoria militar con grandes posibilidades alcanzables con los tres diferentes tipos de relación de servicios (compromiso inicial, de larga duración y permanentes).
- Notable estabilidad profesional y, en consecuencia, personal con la posibilidad de suscribir compromisos hasta los 42 años de edad o hasta la edad de retiro.
- Más y mejores salidas laborales en su posible reincorporación al mundo civil.

Las anteriores proposiciones facilitan, a la par que mayores y más amplias oportunidades, una mejor estrategia para diseñar su propio futuro personal a los soldados y marineros.

La elaboración del Proyecto de Ley se ha realizado considerando el fondo contenido en el Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros, tal como se ordena en la Orden APU/526/2005, de 7 de marzo. Las características del Modelo que se describe brindan a la mujer, para su propio desarrollo, notables garantías en plena conjunción, en su caso, con la conciliación familiar.

Por cuanto antecede, este Proyecto de Ley no presenta impacto por razón de género y no existen criterios que indiquen una disminución en las condiciones de igualdad entre ambos géneros.





M21040

60473

MINISTERIO  
DE JUSTICIALEGISLATURA  
VIII

**IMPACTO POR RAZÓN DEL GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE  
REGULA EL ESTATUTO DEL MIEMBRO NACIONAL DE EUROJUST Y LAS  
RELACIONES CON ESTE ÓRGANO DE LA UNIÓN EUROPEA.**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la normativas del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, debe señalarse que las medidas que se incluyen en este Anteproyecto no conllevan impacto alguno por razón de género.





MINISTERIO DE  
AGRICULTURA, PESCA Y  
ALIMENTACIÓN

LEGISLATURA  
VIII

**IMPACTO DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY DE SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO Y DE  
RECURSOS FITOGENÉTICOS.**

Este Anteproyecto de Ley no contiene ninguna disposición susceptible de alterar las condiciones jurídicas, sociales y económicas de relación entre hombres y mujeres, por lo que carece de impacto en función del género. Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24.1 b) *in fine* de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, tal como ha sido redactado por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.

Madrid, 5 de mayo de 2005



LEGISLATURA  
VIII

1127042

**ANTEPROYECTO DE LEY DE AGENCIAS ESTATALES PARA LA MEJORA  
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS****Informe sobre impacto por razón de género**

El presente informe se eleva en cumplimiento de lo previsto por el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada al mismo por la Ley 30/2003 de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.

El Anteproyecto de Ley que nos ocupa tiene por objeto establecer el marco jurídico regulador de las Agencias Estatales en tanto que fórmula organizativa caracterizada por un mayor nivel de autonomía y flexibilidad en la gestión, sin perjuicio de garantizar los mecanismos adecuados de control de eficacia y promoción de una cultura gerencial de responsabilidad por objetivos.

No existe en el texto medida alguna que pueda suponer una discriminación o diferenciación alguna por razón de género y por ello, se concluye que no promueve consecuencias negativas que favorezcan situaciones de discriminación entre mujeres y hombres.

Madrid, a 16 de junio de 2005





121/47 8<sup>a</sup>

MINISTERIO DE  
ECONOMÍA Y  
HACIENDA

79030

LEGISLATURA  
VIII

121 1047

INFORME SOBRE EL IMPACTO EN RAZÓN DEL  
GÉNERO

DEL

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA  
DE LA LEY ORGÁNICA 5/2001, DE 13 DE  
DICIEMBRE, COMPLEMENTARIA A LA LEY  
GENERAL DE ESTABILIDAD  
PRESUPUESTARIA





LEGISLATURA

VIII

1121047

A los efectos de lo dispuesto en el apartado 2, del artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se informa que las medidas contenidas en el Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, no producen impacto alguno por razón del género.





**INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL  
ANTEPROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO  
DE LA LEY DE SOCIEDADES ANÓNIMAS, APROBADO POR EL REAL  
DECRETO LEGISLATIVO 1564/1989, DE 22 DE DICIEMBRE.**

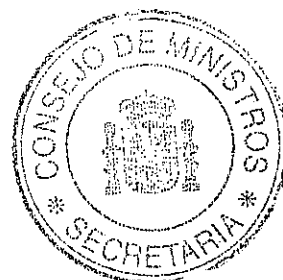
---

En relación con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, el Gobierno, según la redacción introducida por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, para la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno (BOE de 14 de octubre), es preciso señalar que, dada la naturaleza del proyecto, el mismo no es susceptible de producir un desigual impacto en mujeres y en hombres, ni aun de forma mediata, por lo que no favorece situaciones de discriminación por razón del sexo.

LEGISLATURA

VIII

121 ñ 48



**INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL  
ANTEPROYECTO DE LEY POR EL QUE REGULA EL RÉGIMEN ESPECIAL  
DEL MUNICIPIO DE BARCELONA**

El Protocolo de actuación sobre la presentación de documentos durante la tramitación de los Anteproyectos de Ley, elaborado por el Ministerio de la Presidencia, establece en su apartado 6 que: "En línea con lo dispuesto en el artículo 24.1 b) de la Ley 50/1997, del Gobierno, en relación con los reglamentos, el Ministerio proponente realizará igualmente un informe sobre el impacto por razón de género del anteproyecto de ley".

El presente Anteproyecto de Ley se limita a regular una serie de especialidades aplicables al régimen municipal por el que va a regirse el Ayuntamiento de Barcelona, fundamentalmente en materia competencial y financiera. Por tanto, los efectos positivos derivados, en su caso, del mismo, serán igualmente aplicables tanto a las mujeres como a los hombres. Únicamente se contienen determinadas medidas en el Capítulo V del Título I favorecedoras de la calidad de vida de las personas con algún tipo de discapacidad, pero lógicamente dichas previsiones se aplican al colectivo, independientemente del género.

LEGISLATURA

VIII

121050





MINISTERIO  
DE LA PRESIDENCIA

LEGISLATURA  
VIII

79035

12 105 2

## PROYECTO DE LEY DE LA RADIO Y LA TELEVISIÓN DE TITULARIDAD ESTATAL

### Informe por razón de impacto de género

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, se señala que las medidas que se incluyen en este anteproyecto de ley no contienen disposiciones que atenten contra el principio de igualdad por razón de sexo, al tiempo que se da continuidad en él, de forma positiva, a la promoción de un mandato de servicio público audiovisual que coadyuve en la ejecución de las políticas de igualdad.





## LEGISLATURA

## VIII

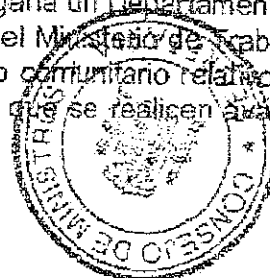
En cuanto a los posibles flujos migratorios a la UE-15 de trabajadores de los Estados adherentes, en general los estudios realizados consideran que, en su conjunto, el efecto será positivo para los mercados laborales de los Quince. El impacto será de cierto calibre al comienzo de la adhesión (del orden de 335.000 residentes del Este al año, reduciéndose a 150.000 a finales de la presente década, y tan sólo un 1% de la ciudadanía de la UE en 2020). Además, la entrada de inmigrantes facilita ligeros incrementos de la renta per cápita de los países receptores y contribuirá a la financiación del sistema de pensiones, a corto plazo.

Como conclusión se puede afirmar que esta ampliación tendrá un claro impacto para la economía nacional. Hay notables ventajas derivadas de la propia ampliación del mercado, pero también otros retos innegables. Lo mismo ocurrió, con mayor intensidad, en 1986, cuando España se incorporó a las Comunidades Europeas. Y, sin embargo, el extraordinario proceso de adaptación ha permitido un notable crecimiento de la economía y de la riqueza nacional, incrementándose nuestra cuota de mercado y presencia inversora en el resto de la UE.

#### 4.- EL IMPACTO POR RAZON DE GENERO DE LA ADHESION A LA UNION EUROPEA DE BULGARIA Y RUMANIA.

La adhesión de Bulgaria y Rumanía tendrá un impacto en la cuestión del género, en la medida en que ambos países candidatos deberán garantizar la aplicación efectiva del acervo comunitario. Todas aquellas disposiciones del acervo con implicaciones para el género deberán, en consecuencia, tener la misma vigencia en Bulgaria y Rumanía que en el resto de los Estados miembros. El capítulo 13, relativo a los asuntos sociales y al empleo, incluye entre sus contenidos la igualdad de trato entre el hombre y la mujer en el mercado de trabajo. Se pueden citar directivas tan importantes como las relativas a la igualdad de retribuciones, igualdad de trato en materia de empleo y la relativa a la carga de la prueba. El acervo comunitario también plantea exigencias para los permisos parentales y las trabajadoras embarazadas.

En el caso de Bulgaria, en los años previos a la conclusión de las negociaciones de adhesión se han producido avances significativos mediante la adopción de una legislación general sobre la igualdad de oportunidades, gracias a la entrada en vigor de una normativa exhaustiva antidiscriminación, en enero de 2004. A principios de 2004, fue constituida una Comisión consultiva sobre la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer, cuyo cometido consiste en elaborar, coordinar y aplicar una política nacional en esta materia. A comienzos de 2004, también se creó en Bulgaria un Departamento de igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer, dentro del Ministerio de Trabajo y de Política Social. Bulgaria ha traspuesto la mayoría del acervo comunitario relativo a la igualdad de oportunidades en el trabajo, aunque es necesario que se realicen avances adicionales en materia de pensiones y seguridad social.



En cuanto a Rumania, el Gobierno ha adoptado, en marzo de 2004, una decisión por la que se establecen las estructuras responsables de la igualdad de oportunidades en el seno de la administración. Desde septiembre de 2003, dos comités responsables de la igualdad de oportunidades han sido creados en el Senado rumano para promover la integración de la igualdad entre los hombres y las mujeres en las leyes, las políticas y los programas. También se va a constituir una Agencia Nacional de la Igualdad de Oportunidades. Las autoridades rumanas están trabajando para prevenir y combatir la violencia de género. Recientemente, la reforma de la Constitución ha garantizado la igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres para el ejercicio de la Función Pública. Un Decreto gubernamental de agosto de 2004 ha modificado y completado la Ley sobre la igualdad de oportunidades, abordando la cuestión de la discriminación directa e indirecta y el acoso sexual en el trabajo. Rumania también ha aprobado una legislación para la transposición del acervo en el ámbito de la protección de la maternidad en el puesto de trabajo.

Como Bulgaria, Rumania deberá realizar un esfuerzo importante de fortalecimiento institucional que permita una aplicación efectiva del acervo comunitario.

Por último, conviene señalar que con la entrada en vigor del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, la protección de la no discriminación por razón de género saldrá claramente reforzada en todos los Estados miembros. La Constitución Europea afirma tanto en su preámbulo como en su artículo 2 y sus objetivos que toda la Unión se asienta sobre unos valores entre los que figura la protección de los derechos fundamentales. En la primera parte de la Constitución se incluye igualmente el título II, dedicado a los derechos fundamentales y a la ciudadanía europea. La Constitución establece no sólo la obligatoriedad jurídica de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, sino su constitucionalización al más alto nivel, en su parte segunda. Esta constitucionalización presenta el efecto de que todos los poderes públicos de la Unión así como los de los Estados miembros cuando apliquen el derecho comunitario habrán de respetar los derechos garantizados en la carta y si no es así, el ciudadano podrá acudir a los Tribunales para obtener su garantía.

##### 5.- FIRMA Y ENTRADA EN VIGOR DEL TRATADO DE ADHESION DE BULGARIA Y RUMANIA.

El Tratado de Adhesión de Bulgaria y Rumania se firmará en Luxemburgo el 25 de abril de 2005. El 4 de abril de 2005 se recibió en el Ministerio español de Asuntos Exteriores la versión final en español del Tratado de Adhesión.

Como se indica en el artículo 4 del Tratado de Adhesión, el Tratado será ratificado por las Altas Partes Contratantes de conformidad con sus respectivas normas constitucionales. Los instrumentos de ratificación serán depositados ante el Gobierno de la República Italiana a más tardar el 31 de diciembre de 2006. El Tratado entrará en





56

INFORME SOBRE IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY POR LA  
QUE SE CREA EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS

El proyecto de ley por la que se crea el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas no contiene previsiones que establezcan cualquier tipo de preferencia, ventaja, prelación o diferencia en razón del sexo.

Carece, por tanto, de impacto por razón de género, lo que se hace constar a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada por el artículo primero de la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas par incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.

LEGISLATURA  
VIII

12 1056



**INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO EN RELACION  
AL ANTEPROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICAN  
DETERMINADOS PRECEPTOS DEL TEXTO REFUNDIDO DEL ESTATUTO  
LEGAL DEL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS,  
APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 7/2004, DE 29 DE  
OCTUBRE.**

---

El presente informe se eleva en cumplimiento de lo previsto por el artículo 22.2. de la Ley 50/1997, del Gobierno, en la redacción dada al mismo por la Ley 30/2003, de 13 de octubre sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.

Dado el contenido del proyecto normativo no existe aspecto alguno que pueda implicar consideraciones de diferenciación por razón de género, en ninguno de los ámbitos que se regulan.

Octubre 2005.

**LEGISLATURA**

**VIII**

**121058**



12/63 8

99869

## IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO

**PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL RÉGIMEN FISCAL DE LAS REORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y DEL SISTEMA PORTUARIO, Y SE APRUEBAN MEDIDAS TRIBUTARIAS PARA LA FINANCIACIÓN SANITARIA Y PARA EL SECTOR DEL TRANSPORTE POR CARRETERA.**

### **1. FUNDAMENTO LEGAL**

La elaboración de este informe responde a su exigencia como requisito para la tramitación de los proyectos de ley, según lo establecido al respecto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Este informe complementa a la Memoria Económica y a la Memoria Justificativa, en la que se explican con todo detalle las novedades que se introducen en la Ley citada más arriba y las razones que se justifican.

### **2. CONTENIDO**

Este Proyecto de Ley no contiene ninguna medida o disposición que afecte o tenga incidencia alguna por razón de género.

LEGISLATURA  
VIII

12 1063



**PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE DEROGA EL RÉGIMEN DE ENAJENACIÓN DE PARTICIPACIONES PÚBLICAS EN DETERMINADAS EMPRESAS ESTABLECIDO POR LA LEY 5/1995, DE 23 DE MARZO Y SUS DISPOSICIONES DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN.**

**INFORME SOBRE EL IMPACTO DE GÉNERO**

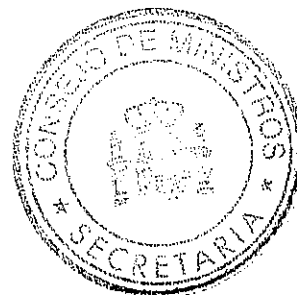
El presente informe se eleva en cumplimiento de lo previsto por el artículo 22.2. de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada al mismo por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.

Dado el contenido del proyecto normativo no existe aspecto alguno que pueda implicar consideraciones de diferenciación por razón de género, en ninguno de los ámbitos que se regulan.

**LEGISLATURA**

**VIII**

**121064**





MINISTERIO  
DE DEFENSA.

121065

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LAS LEYES ORGÁNICAS 13/1985, DE 9 DE DICIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL MILITAR, Y 8/1998, DE 2 DE DICIEMBRE, DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS.

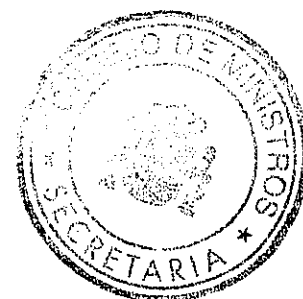
**INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO**

Se considera que el presente Anteproyecto de Ley Orgánica no tiene impacto por razón de género.

LEGISLATURA

VIII

121065





MINISTERIO  
DE SANIDAD  
Y CONSUMO

12 10 6 6

101180

201/50

INFORME SOBRE IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY DE  
GARANTÍAS Y USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

El proyecto de Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios no contiene previsiones que establezcan cualquier tipo de preferencia, ventaja, prelación o diferencia en razón del sexo.

Carece, por tanto, de impacto por razón de género, lo que se hace constar a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada por el artículo primero de la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.



ANTEPROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 5/1996, DE 10  
DE ENERO, DE CREACIÓN DE DETERMINADAS ENTIDADES DE  
DERECHO PÚBLICO

Informe sobre el impacto por razón de género.

En relación con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, el Gobierno, según la redacción introducida por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, para la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno (BOE de 14 de octubre), es preciso señalar que el anteproyecto no es susceptible de producir un desigual impacto en mujeres y en hombres, ni aun de forma mediata, por lo que no favorece situaciones de discriminación por razón del sexo.



**PROYECTO DE LEY SOBRE EL ACCESO A LAS PROFESIONES DE ABOGADO Y  
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES****Informe por razón de impacto de género**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, se señala que las medidas que se incluyen en este anteproyecto de ley no conllevan impacto alguno por razón de género.





MINISTERIO  
DE TRABAJO  
Y ASUNTOS SOCIALES

12 10 73

LEGISLATURA  
VIII

104674

SECRETARÍA DE ESTADO DE  
SERVICIOS SOCIALES,  
FAMILIAS Y DISCAPACIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE  
COORDINACIÓN DE  
POLÍTICAS SECTORIALES  
SOBRE LA DISCAPACIDAD

# INFORME SOBRE IMPACTO DE GÉNERO EN EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE RECONOCE Y REGULA LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA Y SE REGULAN LOS MEDIOS DE APOYO A LA COMUNICACIÓN ORAL DE LAS PERSONAS SORDAS, CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y SORDOCIEGAS

## 1.- FUNDAMENTO LEGAL

La elaboración de este informe responde a la exigencia como requisito para la tramitación de los proyectos de ley, según lo establecido al respecto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

## 2. CONTENIDO

Este anteproyecto de Ley no contiene ninguna medida o disposición que afecte o tenga incidencia alguna por razón de género.

Madrid, 28 de diciembre de 2005





MLP

**INFORME SOBRE IMPACTO DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY POR  
LA QUE SE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES  
EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO  
DISCRIMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD.**

**1.- FUNDAMENTO LEGAL**

La elaboración de este informe responde a la exigencia como requisito para la tramitación de los proyectos de ley, según lo establecido al respecto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Este informe complementa a la Memoria Económica y a la Memoria Justificativa, en la que se explican con todo detalle los informes sobre la necesidad y oportunidad de la ley y las razones que se justifican.

**2. CONTENIDO**

Este anteproyecto de Ley no contiene ninguna medida o disposición que afecte o tenga incidencia alguna por razón de género.

Madrid, 28 de diciembre de 2005

LEGISLATURA  
VIII

1121074



12 1075

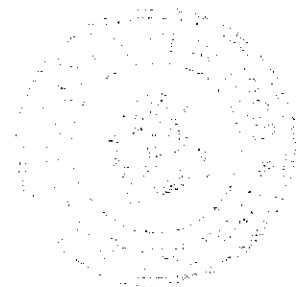
17/15

**PROYECTO DE LEY DE ESTATUTO DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES  
EN EL EXTERIOR****INFORME SOBRE EL IMPACTO DE GÉNERO**

El Anteproyecto de Ley de Estatuto de los Españoles en el Exterior tiene como objetivo y finalidad el establecer el marco jurídico y las condiciones básicas para garantizar a los ciudadanos españoles residentes en el exterior el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales, en términos de igualdad con los españoles residentes en el territorio nacional.

En este marco, se declara la especial atención a aquellos colectivos de españoles en el exterior que carezcan de recursos suficientes y que tengan especiales dificultades de integración social o laboral, indicándose expresamente a las mujeres, a estos efectos. Igualmente en el ámbito de la protección social se contempla provisiones de mejora para la mujer.

En su consecuencia, la norma proyectada, salvo en la precisión anteriormente comentada acorde, por otra parte, con otras provisiones normativas en diferentes ámbitos de tutela especial de determinados colectivos, carece de impacto por razón de género.





MINISTERIO  
DE JUSTICIA

LEGISLATURA  
VIII

121076

121076

**12 1 0 7 6**

**PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 5/2000,  
DE 12 DE ENERO, REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES.**

Informe por razón de impacto de género

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, se señala que las medidas que se incluyen en este anteproyecto de ley orgánica no conllevan impacto alguno por razón de género.



MINISTERIO  
DE DEFENSA.  
MINISTERIO DE ECONOMIA  
Y HACIENDA.

112078

121/75 8º

**INFORME SOBRE EL IMPACTO DE GÉNERO DEL  
PROYECTO DE LEY DE CESIÓN DEL CASTILLO DE MONTJUÏC**

El Anteproyecto de Ley de cesión del Castillo de Montjuïc se ha elaborado de forma que no resulte discriminatoria ni favorezca situaciones de discriminación por razón de sexo.

Madrid, 24 de febrero de 2006

LEGISLATURA  
VIII

1121079



8<sup>o</sup> 12/82

116925



MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN  
Y CIENCIA

## INFORME SOBRE IMPACTO DE GÉNERO DEL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD Y DE LUCHA CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, debe señalarse que las medidas que se incluyen en este Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje en el Deporte, no conllevan impacto alguno por razón de género.

Madrid, 22 de febrero de 2006

LEGISLATURA  
VIII

21082





FORME SOBRE IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY DE  
MEJORA DE LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la normativas del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, se informa que las medidas que se incluyen en este proyecto de ley no conllevan impacto alguno por razón de género.

LEGISLATURA

VIII

1721083



123852

LEGISLATURA

VIII

---

12 1085

**PROYECTO DE LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y  
ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA**

**INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO**



12 1085

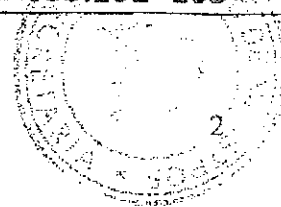
123852

**Análisis de las personas en situación de dependencia**

La Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999 ofrece una información sobre la estructura por edad y sexo de la población con discapacidad y sobre la población total. La encuesta estima un número mayor de mujeres que de varones con discapacidad (el 58,3 % de la población con discapacidad son mujeres). Sin embargo, este predominio cuantitativo de las mujeres no se da en todos los grupos de edad. Ha identificado un mayor número de varones que de mujeres en las edades jóvenes, mientras que en edades más elevadas se invierte esta tendencia. El punto de inflexión se da alrededor de los 45 años.

**Cuadro 1. PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y ESTIMACIÓN DE PREVALENCIA DE LAS SITUACIONES DE DISCAPACIDAD EN TANTOS POR MIL POR EDAD Y SEXO. ESPAÑA, 1999.**

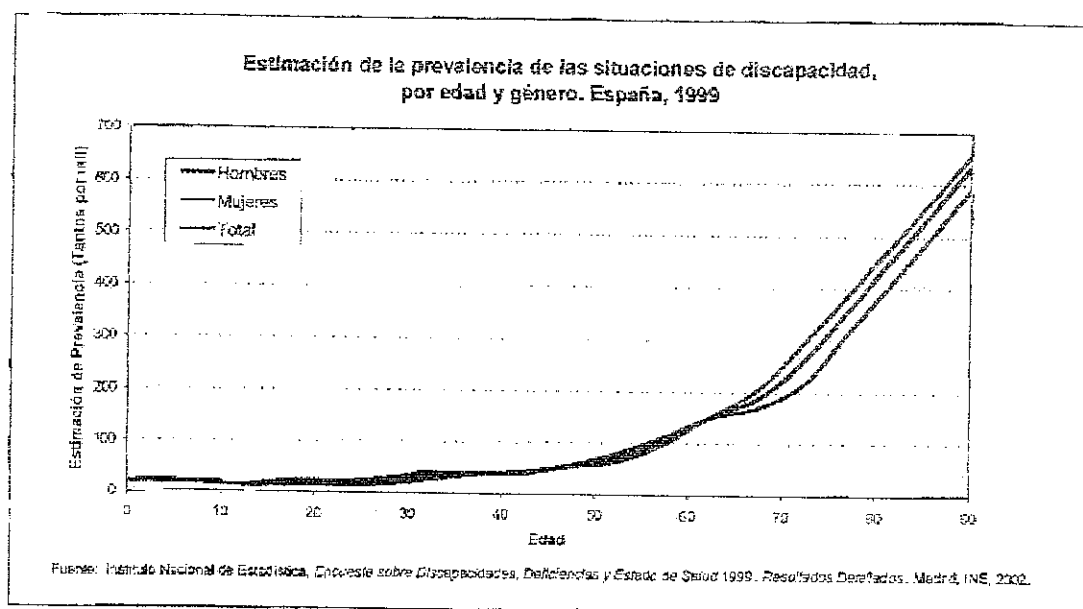
	<b>Total</b>		<b>Varones</b>		<b>Mujeres</b>	
	Número	Prevalencia (tantos por mil)	Número	Prevalencia (tantos por mil)	Número	Prevalencia (tantos por mil)
Menos de 6 años	49.576	22	24.723	22	24.853	23
6 a 9 años	29.783	19	15.363	19	14.420	19
10 a 15 años	38.501	15	20.697	15	17.804	14
16 a 19 años	44.290	20	28.058	24	16.232	15
20 a 24 años	59.048	19	36.385	22	22.663	15
25 a 29 años	78.275	24	48.578	29	29.697	18
30 a 34 años	107.631	33	64.514	40	43.117	27
35 a 39 años	115.171	38	60.029	40	55.142	37
40 a 44 años	115.080	42	61.162	45	53.918	40
45 a 49 años	135.075	55	66.311	55	68.764	56
50 a 54 años	170.834	73	74.872	65	95.962	81
55 a 59 años	210.962	106	96.639	100	114.323	113
60 a 64 años	301.342	154	141.830	152	159.512	155
65 a 69 años	386.338	190	161.083	171	225.255	207
70 a 74 años	457.269	264	168.643	220	288.626	299
75 a 79 años	476.926	369	172.670	325	304.256	399
80 a 84 años	370.701	475	120.382	429	250.319	501
85 y más años	381.418	636	111.031	592	270.388	657
<b>TOTAL</b>	<b>3.528.221</b>	<b>90</b>	<b>1.472.970</b>	<b>77</b>	<b>2.055.251</b>	<b>103</b>



LEGISLATURA

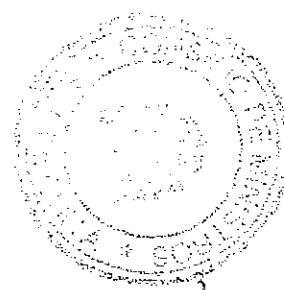
VIII

12 1085



A partir de los 45 años aproximadamente, el número de mujeres con discapacidad para las actividades de la vida diaria comienza a superar al de varones, con diferencias crecientes conforme avanza la edad.

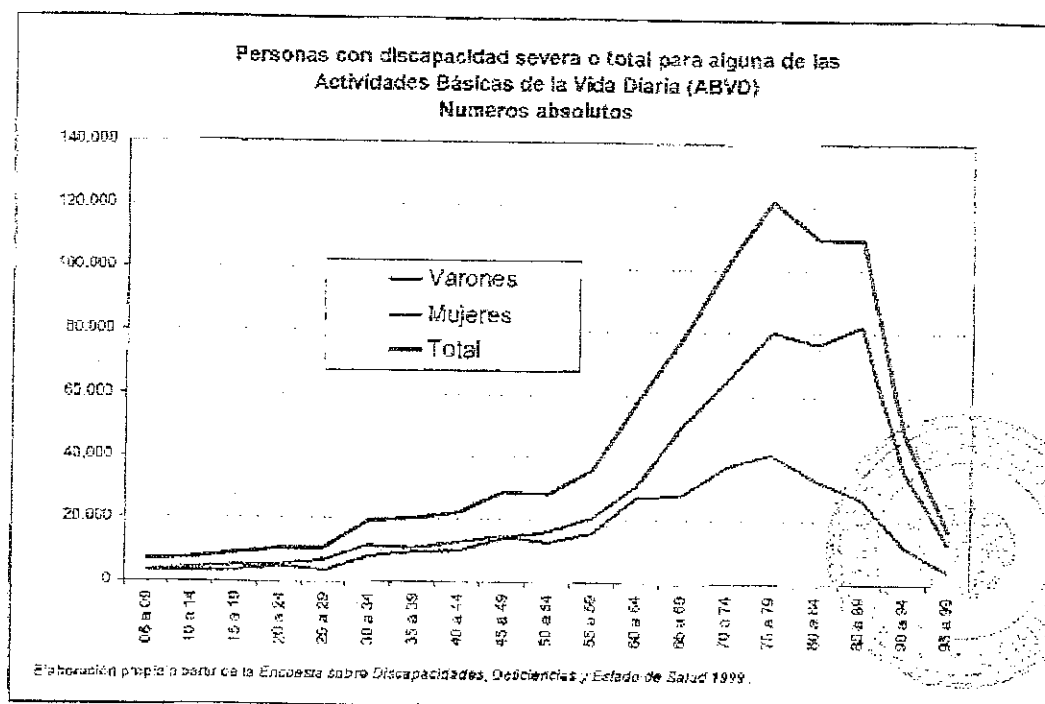
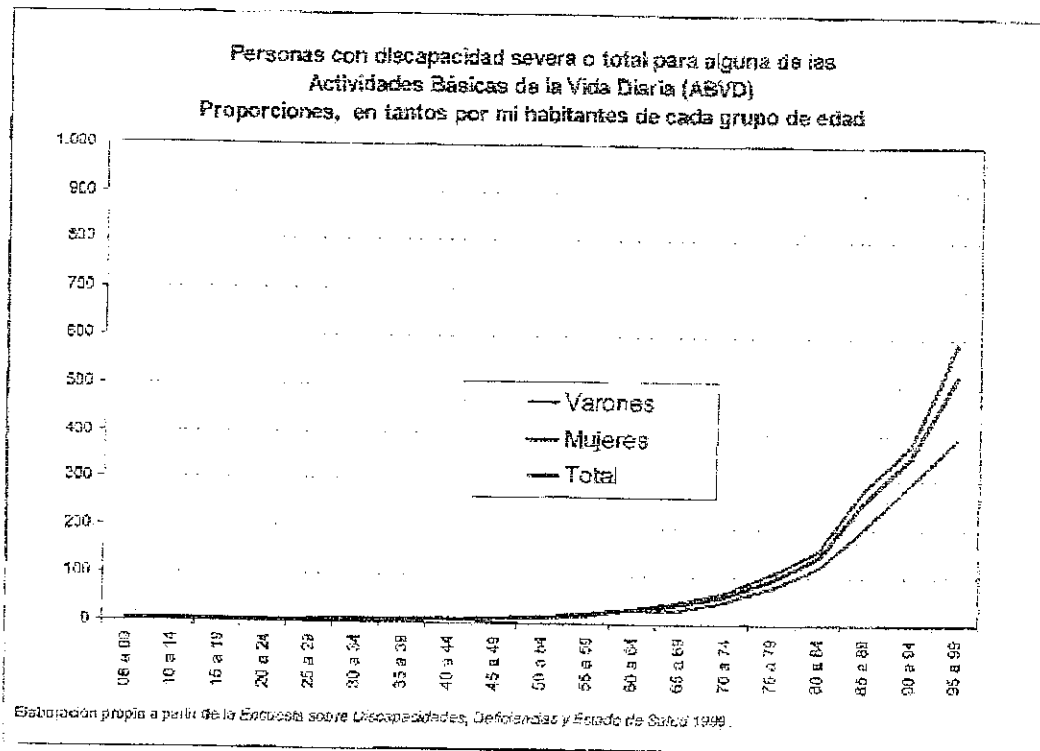
A continuación se presentan las estimaciones desagregadas por grupos quinquenales de edad, sexo, y nivel de severidad, de los siguientes grupos de población:



**Cuadro 2. PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA (ABVD\*) POR SEXO, EDAD Y GRADO DE SEVERIDAD. (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.**

	<b>Todos los grados de severidad</b>			<b>Discapacidad Severa y Total</b>		
	<i>Varones</i>	<i>Mujeres</i>	<i>Total</i>	<i>Varones</i>	<i>Mujeres</i>	<i>Total</i>
<b>Números absolutos</b>						
06 a 09	4.891	4.743	<b>9.634</b>	3.341	3.441	<b>6.782</b>
10 a 14	6.080	4.673	<b>10.753</b>	4.027	3.066	<b>7.093</b>
15 a 19	8.969	4.968	<b>13.937</b>	5.038	3.456	<b>8.494</b>
20 a 24	9.600	7.509	<b>17.109</b>	5.349	4.847	<b>10.196</b>
25 a 29	13.569	9.441	<b>23.010</b>	6.970	3.420	<b>10.389</b>
30 a 34	19.219	13.831	<b>33.050</b>	11.351	8.077	<b>19.428</b>
35 a 39	18.491	20.288	<b>38.779</b>	10.446	9.555	<b>20.001</b>
40 a 44	22.029	19.050	<b>41.079</b>	12.408	9.646	<b>22.054</b>
45 a 49	24.904	28.662	<b>53.566</b>	14.468	14.143	<b>28.611</b>
50 a 54	25.397	38.649	<b>64.046</b>	12.265	15.667	<b>27.932</b>
55 a 59	34.746	49.420	<b>84.167</b>	15.372	20.445	<b>35.817</b>
60 a 64	52.797	63.578	<b>116.376</b>	27.012	31.094	<b>58.107</b>
65 a 69	56.014	98.448	<b>154.462</b>	27.870	50.518	<b>78.387</b>
70 a 74	63.309	126.474	<b>189.783</b>	37.351	64.999	<b>102.350</b>
75 a 79	66.278	144.189	<b>210.467</b>	41.393	80.317	<b>121.711</b>
80 a 84	53.680	130.229	<b>183.909</b>	33.331	76.557	<b>109.887</b>
85 a 89	38.447	117.294	<b>155.741</b>	27.203	82.257	<b>109.460</b>
90 a 94	16.829	47.906	<b>64.734</b>	11.903	36.377	<b>48.280</b>
95 a 99	5.870	15.243	<b>21.113</b>	4.163	12.726	<b>16.889</b>
<b>TOTAL</b>	<b>541.119</b>	<b>944.595</b>	<b>1.485.714</b>	<b>311.260</b>	<b>530.606</b>	<b>841.866</b>
<b>Proporción por 1.000 habitantes</b>						
06 a 09	6	6	<b>6</b>	4	5	<b>4</b>
10 a 14	6	4	<b>5</b>	4	3	<b>3</b>
15 a 19	6	4	<b>5</b>	4	3	<b>3</b>
20 a 24	6	5	<b>5</b>	3	3	<b>3</b>
25 a 29	8	6	<b>7</b>	4	2	<b>3</b>
30 a 34	12	9	<b>10</b>	7	5	<b>6</b>
35 a 39	12	13	<b>13</b>	7	6	<b>7</b>
40 a 44	16	14	<b>15</b>	9	7	<b>8</b>
45 a 49	21	23	<b>22</b>	12	12	<b>12</b>
50 a 54	22	33	<b>28</b>	11	13	<b>12</b>
55 a 59	36	49	<b>42</b>	16	20	<b>18</b>
60 a 64	57	62	<b>59</b>	29	30	<b>30</b>
65 a 69	59	91	<b>76</b>	30	46	<b>39</b>
70 a 74	82	131	<b>110</b>	49	67	<b>59</b>
75 a 79	125	189	<b>163</b>	78	105	<b>94</b>
80 a 84	191	261	<b>236</b>	119	153	<b>141</b>
85 a 89	281	400	<b>362</b>	199	281	<b>255</b>
90 a 94	419	493	<b>472</b>	296	375	<b>352</b>
95 a 99	548	706	<b>654</b>	389	590	<b>523</b>
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>17</b>	<b>28</b>	<b>23</b>

- (\*) Las actividades consideradas son las siguientes: cambiar las posiciones del cuerpo; levantarse y acostarse; desplazarse dentro del hogar, asearse, controlar las necesidades; vestirse, desvestirse y arreglarse, y comer y beber. Se incluyen todas las personas con discapacidad para al menos una de estas actividades en los grados de severidad considerados.



**Análisis de la situación de las personas cuidadoras**

Tradicionalmente han sido las familias las que han sumido el cuidado de las personas en situación de dependencia, o siendo más exactos, casi en exclusiva, en las mujeres del núcleo familiar. Según datos extraídos del Libro Blanco "Atención a las personas en situación de dependencia en España", de la encuesta elaborada para el IMSERSO, el 83% del total de personas cuidadoras son mujeres, y de ellas, no reciben ayuda de nadie para la realización de este trabajo el 61,5%. Este desigual reparto de tareas de cuidados dentro del seno familiar, se ha agudizado aún más con el paso del tiempo, pues en 2004 ha subido un punto el porcentaje de mujeres (84%) que son cuidadoras principales.

Sin restarle un ápice de énfasis a esta reticente resistencia para modificar la división sexual del trabajo en lo que atañe a los cuidados a las personas, sí hay que matizar el dato, con la información de que ahora son más (el 66%) las que son apoyadas por otros miembros de su familia en la realización de los cuidados. Además, comienza a ser muy relevante la "delegación" de cuidados en trabajos retribuidos que hacen las familias con mayores ingresos, ya que en un 14% de hogares en que existe una persona que precisa cuidados permanentes, la persona cuidadora principal es un empleado/a de hogar.

En cuanto a la edad, también se ha confirmado para España lo que sucede en otros lugares, es decir, que el grupo de edad del potencial cuidador/a se sitúa entre los 45 y los 69 años. Mientras en la encuesta de 1994, la edad media del cuidador/a principal era de 52 años, en 2004, la edad media sube hasta los 53 años. El estado civil que predomina entre las personas cuidadoras es el de casado (más de las tres cuartas partes de esta población). A continuación se reflejan dichas estimaciones:

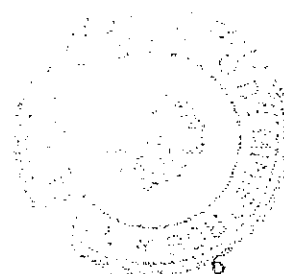


Tabla : Sexo y edad de las personas cuidadoras

	Cuidadores/as (A)*	Población 2004 (B)**	Diferencia (A-B)
<b>SEXO</b>			
Hombre	16,4	49,1	-32,7
Mujer	83,6	50,9	32,7
<b>EDAD</b>			
Menos de 20	1,2	4,9	-3,7
De 20 a 29	3,6	18,3	-14,7
De 30 a 39	11,9	20	-8,1
De 40 a 49	23,8	16,9	6,9
De 50 a 59	28,7	13,9	14,8
De 60 a 69	15,9	11,8	4,1
Más de 69	14,9	14,2	0,7
Edad Media	52,9	46,2	6,7
<b>ESTADO CIVIL</b>			
Soltero/a	14,8	30,1	-15,3
Casado/a	76,2	58,3	17,9
Viudo/a	5,1	8,1	-3
Separado/a	2,1	2,2	-0,1
Divorciado/a	1,5	1,3	0,2
No consta	0,3		
<b>NIVEL DE ESTUDIOS</b>			
Sin estudios + Analfabetos	17,1	15,9	1,2
Primarios	43	23,3	19,7
Segundo Grado	32,6	46,8	-14,2
Tercer Grado	7,0	14,0	-7
No sabe	0,3		
<b>SITUACIÓN LABORAL</b>			
Ocupado/a	26,0	48,7	-22,7
No Ocupado/a	73,1	51,3	21,8
Jubilado/a o pensionista	20,2	21,1	-0,9
Parado/a habiendo trabajado	7,0	6,4	0,6
Parado/a buscando 1er empleo	0,3	1,5	-1,2
<b>Tareas del hogar</b>			
Estudiante	1,4	6,2	-4,8
No contesta	0,9		



(\*) Fuente: IMSERSO/Gfk-Emer (2004): Encuesta de Apoyo Informal a los mayores en España. (Esta es la fuente de información para todos los gráficos y cuadros, salvo indicación expresa)

(\*\*) INE (2004): Censo de Población y Viviendas 2001.

Otros datos que se juzgan de gran interés son los que se refieren al nivel de estudios y a su situación laboral:

- ❖ El 65,6% del conjunto de la población cuidadora principal mostraba en 1994 un nivel de enseñanza muy bajo (sin estudios o primarios), y aunque ese porcentaje es algo menor en 2004 (el 60%), continúa siendo predominante el bajo nivel de estudios.
- ❖ En 1994, el 75% del total de personas cuidadoras no tenían actividad laboral retribuida (amas de casa el 50%, pensionistas de jubilación el 15% y en situación de desempleo el 9,7%).

En 2004, baja ligeramente al 73% quienes no tienen actividad laboral retribuida y, como puede observarse, se produce un decremento de la amas de casa y un incremento de las personas jubiladas con respecto a 1994.

- ❖ Del 22% de la muestra que desarrollaba un trabajo remunerado en 1994, compatibilizando esta actividad con los cuidados, se ha producido un discreto incremento pasado al 26% en 2004.

Véase en la tabla siguiente la desagregación por sexos que se realiza, según la relación de las personas cuidadoras con la actividad.

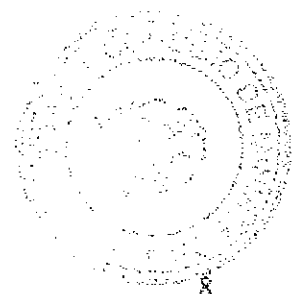


Tabla: Relación con la actividad de las personas cuidadoras por sexo.

	Hombres	Mujeres
Ocupado/a	31,9	24,9
Jubilado/a pensionista	53,7	13,7
Parado/a habiendo trabajado	8,9	5,6
Parado/a buscando 1er empleo	0,0	0,4
Tareas del hogar	3,6	52,1
Estudiante	0,8	1,5
Ns/Nc	1,1	0,8

Por lo que se refiere a las modalidades de convivencia, la persona atendida y quien le cuida viven predominantemente juntas de manera permanente, habiéndose experimentado incluso un ascenso en este tipo de convivencia (58,8% en 1994 y 60,7% en 2004). Del 36% de personas mayores que viven con hijos o hijas, esta proporción registra un diferencial importante por razón de género (23% varones, 41% mujeres). Lo contrario cabe decir con respecto a los que viven en pareja (sólo el 16% de las mujeres, frente al 55% de los varones).

Es de destacar, sobre todo por la importancia que tiene a efectos de detección de necesidades y de intervención con estas familias, que existe una proporción cualitativamente importante de personas mayores que reciben ayuda informal que viven solas (el 15%).

La ayuda que requieren las personas mayores se la prestan sobre todo sus hijas, seguidas del cónyuge. Además, la mayor parte de las personas cuidadoras (80%) no recibe de forma regular una recompensa y/o ayuda económica por parte de la persona mayor a la que prestan ayuda. Entre el grupo de las que sí la reciben, esta ayuda es suficiente para cubrir lo que gastan en los cuidados para casi la mitad de este segmento, pero también en algunos casos (30%) la contraprestación económica no basta para cubrirlos.

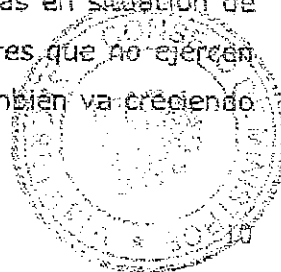
Estos efectos negativos que el hecho de cuidar comporta, pueden agruparse en tres tipos de consecuencias:

- **Laborales:** no puede plantearse trabajar el 26% de la muestra; ha tenido que abandonar el trabajo el 11,5%, mientras que se ha visto obligado a reducir su jornada el 12,4%.
- **Sobre su propia salud:** se encuentran a menudo cansadas en un 51,2% de los casos; el 32,1% se sienten deprimidas; y el 28,7% piensa que las tareas que realizan está deteriorando su salud.
- **Sobre la vida afectiva y relacional:** el 64,1% declara que se ha visto obligado a reducir su tiempo de ocio, y dice no poder ir de vacaciones el 48,4% de la muestra.

### Conclusiones

Asistimos a un incremento cuantitativo de las situaciones de dependencia, motivado por el envejecimiento de la población y el crecimiento de la morbilidad, y a una situación social de partida de mujeres y hombres, que no es la misma, respecto a la promoción de la autonomía personal y la atención a las situaciones de dependencia

En España continúa asumiéndose que en todo lo que se refiere a cuidados a personas de cualquier edad, sigue funcionando el esquema tradicional de asociarlos a los valores femeninos y, por tanto, adjudicarlos tan pronto como en una familia se produce la necesidad, a la mujer más cercana. De este modo, la gran carga de los cuidados en la vejez y personas en situación de dependencia en general, se realiza a expensas de las mujeres que no ejercen una profesión ni tienen un trabajo fuera del hogar, pero también va creciendo





PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LA RECTIFICACIÓN REGISTRAL DE LA MENCIÓN  
RELATIVA AL SEXO

INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO

El presente informe se eleva en cumplimiento de lo previsto por el artículo 22.2 de la Ley 30/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada al mismo por la Ley 30/2003 de 3 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.

El Anteproyecto de Ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo tiene por objeto regular y fijar los requisitos que deben exigirse a las personas para acceder al cambio registral de sexo.

En este sentido, el presente Anteproyecto normativo es coherente con el conjunto de normas comunitarias incorporadas en nuestro ordenamiento jurídico dirigidas a eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad (art. 3.2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea). Es más, en el presente Anteproyecto, el legislador pretende responder a las situaciones en las que la inicial asignación de sexo pueda ser rectificada al objeto de garantizar el libre desarrollo de la personalidad y de la dignidad de la persona cuya identidad de género no se corresponde con aquella inicial asignación.

En consecuencia con lo anterior, y dado el contenido de la norma de que nos ocupa, es evidente que se trata de un Anteproyecto que, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente, no promueve consecuencias negativas que favorezcan situaciones de discriminación entre mujeres y hombres sino que mejora la vigencia del principio de igualdad sin discriminación por razón de sexo.

Madrid, 24 de mayo de 2006

el número de cuidadoras que compatibilizan la doble función de acudir al trabajo y cuidar de un familiar en situación de dependencia.

La quiebra del principio fundamental de igualdad que sustenta las sociedades democráticas, es palpable a este respecto.

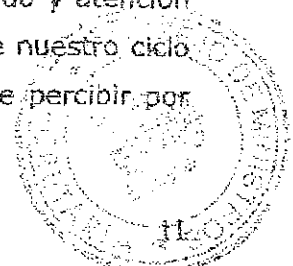
Esta situación, coincide en el tiempo con un enorme cambio social en el modelo de familia, y la incorporación progresiva de la mujer al mercado de trabajo, lo que está produciendo una transformación radical del rol social de las mujeres, rompiendo los moldes del patriarcado que determina su incorporación plena en la vida social, económica, cultural y política.

Esta transformación social determina la insostenibilidad del sistema, por razones estrictamente demográficas: cada vez existen menos mujeres en edad de cuidar y más personas que precisan cuidados de larga duración.

### **Valoración del impacto de género**

Para comenzar a modificar estos desequilibrios y la falta de igualdad entre mujeres y hombres de cara al futuro, el Proyecto de ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia que se presenta:

- Reconoce explícitamente que las mujeres han venido realizando y todavía realizan a sus expensas un trabajo que constituye una función social de gran magnitud que debería ser más valorada y apoyada: la de proveer cuidados.
- Establece apoyos que se concretan en un conjunto de prestaciones y servicios destinados a colaborar con las familias en el cuidado y atención que todas las personas necesitamos en algunos periodos de nuestro ciclo vital. De este modo, considera excepcional la posibilidad de percibir por

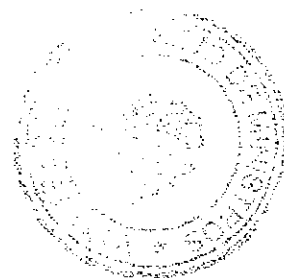


1121089

parte de las personas beneficiarias una prestación económica destinada a quienes realicen los cuidados familiares, sustentando la idea de que sean los servicios públicos o privados concertados los que presten la asistencia necesaria a las personas en situación de dependencia y no recaiga esta sobre las mujeres de la propia familia.

- Introduce medidas favorables para las mujeres, como es incorporar los periodos de atención y el cuidado de los familiares en situación de dependencia como elementos a considerar en las carreras de cotización, en aras de una protección social sin discriminación entre ambos sexos, factor inequívoco de igualdad real.
- Favorece que muchas de las mujeres que no han podido incorporarse al mercado laboral, tengan más posibilidades de tener un trabajo remunerado. Como la larga experiencia de los países del norte de Europa demuestra, la expansión del Estado de Bienestar mediante la generalización de los servicios sociales propicia un buen número de empleos, pero de manera especial para las mujeres, sobre todo para aquellas que por falta de cualificación profesional y experiencia laboral se encuentran en el grupo de personas de difícil empleabilidad.

Por tanto el impacto de género de las medidas que se proponen, en relación con la eliminación de desigualdades entre mujeres y hombres se califica en sentido positivo.



---

12 1090

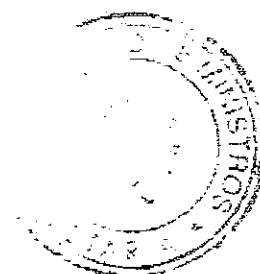
## INFORME SOBRE IMPACTO DE GÉNERO

1.- Fundamentación legal

La elaboración de este informe responde a su exigencia como requisito para la tramitación de los proyectos de Ley, según lo establecido al respecto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, modificado por la Ley 30/2003, de 13 de octubre.

2.- Contenido

El Anteproyecto de Ley de creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales no contiene ninguna medida o disposición que afecte o tenga incidencia alguna por razón de género.



## PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES.

### INFORME SOBRE EL IMPACTO DE GÉNERO

La Ley 30/2003, de 13 de octubre, establece la obligatoriedad de incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno. En este tipo de valoración, se trata de analizar, previamente a su puesta en marcha, si la normativa evaluada puede producir unos efectos diferenciados, en hombres y mujeres, con el objetivo de identificar, prevenir y evitar la producción de desigualdades de género o el incremento de las mismas. Se trata, por tanto, de una evaluación *ex ante*, sobre los "posibles" efectos, más que de los efectos reales, que sólo podrían medirse cuando la norma en cuestión lleve funcionando un tiempo.

Para valorar el posible impacto de género, es preciso identificar el punto de partida de mujeres y hombres, lo que permitiría analizar si la aplicación de la ley o normativa en cuestión produce un beneficio equivalente o, por el contrario, produce situaciones de desigualdad y/o discriminación, o agrava o disminuye las existentes.

Una vez que se haya hecho una descripción de la situación de las mujeres y hombres, en el momento actual, con perspectiva de género, se comentarán los resultados esperados, en relación con esta situación definida, después de la aplicación de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Como no podía ser de otra forma, esta, que será la Ley de Igualdad por antonomasia, no se centra en un solo campo específico, sino que, como se señala en su artículo 1, se refiere a cualquier ámbito de la vida, especialmente al político, al civil, al económico, al social y al cultural. En las líneas que siguen a continuación, se ha intentado hacer mención de los datos más relevantes en los ámbitos a que hace referencia la Ley de



forma que, con ellos, se evidencia la desigual o discriminatoria situación general de las mujeres, en relación con la de los hombres. Pretender aportar información de todos los ámbitos de una Ley, de carácter claramente transversal y, por lo tanto, referida a una infinidad de áreas de actuación, hubiera sido una tarea impropia, cuyo producto, en cuanto a su volumen, hubiera resultado inapropiado para el fin perseguido.

Finalmente, después de describir el punto de partida, y de hacer una predicción de los resultados a obtener con la aplicación de la Ley, se hace una valoración del impacto de género de la propuesta legislativa.

#### 1. SITUACIÓN DE PARTIDA.

En este apartado, se proporciona la siguiente información:

- o Información estadística de la situación de mujeres y hombres, referida a distintos ámbitos de aplicación.
- o Información sobre estereotipos y roles de género, actitudes igualitarias y opinión pública sobre expectativas, en relación al papel de las mujeres en el futuro.
- o Información sobre las políticas de igualdad de oportunidades.

##### 1.1. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, REFERIDA A DISTINTOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN.

Sin duda, la situación de las mujeres en España ha evolucionado mucho en los últimos años. Aspectos tales como el acceso a la salud o la participación en el sistema educativo, podemos considerar que,

121002 globalmente, ofrecen resultados paritarios.

Otros, como la participación laboral o política de las mujeres, han experimentado enormes avances, pero aún distan de ofrecer este panorama igualitario.

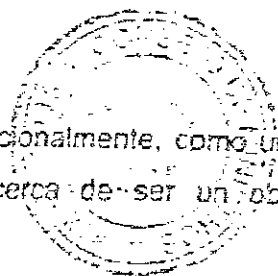
Sin embargo, unos y otros, cuando se analizan con mayor detalle, permiten detectar que, a pesar de los avances, incluso de la aparente paridad, siguen persistiendo importantes diferencias que es necesario corregir.

Y es que, la mera cuantificación de las diferencias entre mujeres y hombres, en sectores como el trabajo, la educación o la participación política, al margen de que ofrezca una panorámica de esa realidad socio-laboral, no debe hacer olvidar que, instalados en las estructuras más profundas de nuestras sociedades, existen una serie de elementos que, bajo la forma de actitudes, valores y estereotipos, se siguen perpetuando y que, en definitiva, son los responsables del mantenimiento de buena parte de las estructuras de desigualdad que nuestra sociedad viene arrojando.

A continuación, se reseñan algunas de las principales áreas en las cuales se siguen detectando carencias importantes, dedicando, también, un apartado cuyo centro será el análisis de aquellos elementos más relacionados con las estructuras sociales.

#### A. ÁMBITO EDUCATIVO.

El ámbito educativo es considerado, tradicionalmente, como uno de aquellos en los que la igualdad está cerca de ser un objetivo

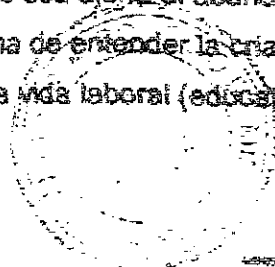


conseguido. El dato de que, en el curso académico 2002-2003, más de un 53% del alumnado matriculado fuera femenino, así parece indicarlo.

Sin embargo, un examen pormenorizado indica que, incluso a este nivel de matriculación sigue existiendo una clara segregación horizontal. Así, el porcentaje de mujeres en arquitectura e ingeniería técnica apenas supera el 25% y, en las carreras de arquitectura e ingeniería superior, este porcentaje es del 30,07%.

Por el contrario, en las diplomaturas, casi el 70% de las nuevas matriculaciones corresponden a mujeres. El antiguo déficit, en el acceso a la universidad, se ha sustituido por una matriculación diferencial, donde hay carreras que, como *Pedagogía* o *Traducción e Interpretación*, acumulan más de un 80% de alumnado femenino, mientras que, en algunas de las ingenierías, las mujeres apenas alcanzan un 15%.

Los estudios de doctorado ofrecen un ejemplo sintomático. En el curso 2002-2003, más del 51% del alumnado matriculado, en este tipo de cursos, era femenino. Sin embargo, en ese mismo año, el porcentaje de tesis aprobadas por mujeres descendía hasta un 45,4%. Este descenso se produce, además, en contra de la tendencia general de todos los niveles educativos precedentes, en los cuales, las mujeres, sistemáticamente, logran mejor rendimiento académico. Como se apuntaba en la introducción a este documento, probablemente, la explicación a este hecho no sea ajena al abandono de estudios motivado por una diferencial forma de entender la crianza de los hijos e hijas y la compatibilización de la vida laboral (educativa, en este caso) y familiar.



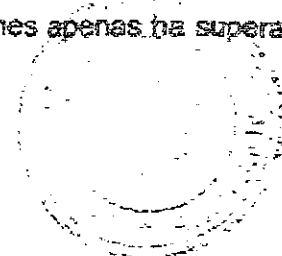
En el análisis de los datos de profesorado, se observa cómo se conjuga la segregación vertical con la horizontal. Si se comprueban los datos del curso 2002-2003, relativos al profesorado de los centros propios de las Universidades públicas, vemos que sólo el 34,2% de este colectivo está integrado por mujeres. Además, este porcentaje va disminuyendo a medida que se asciende en la escala de influencia y responsabilidad. Así, las catedráticas de universidad sólo representan un 12,9% del total de este colectivo.

Sobre el conjunto del profesorado, en cambio, se comprueba que el porcentaje de mujeres es mayoritario (59,79%). Un porcentaje que es abrumador en el nivel de Infantil/Primaria (78,05%), mientras que, en el conjunto de la universidad, es el 35,23%.

Sobre el total del personal investigador de I+D+I, las mujeres representan el 36,68%, un porcentaje que disminuye hasta el 26,7%, cuando se habla de la investigación desarrollada en empresas privadas, mientras que supera el 40% a nivel del Administración Pública o de la Universidad.

## B. ÁMBITO LABORAL.

La incorporación de la mujer al mercado de trabajo, durante los últimos años, ha continuado incrementándose. Así, de 1998 a 2005, la tasa de actividad femenina se ha incrementado en casi 7 puntos porcentuales, mientras que la de los varones apenas ha superado los 3 puntos.



No obstante, en el tercer trimestre de 2005, la tasa de actividad femenina era aún más significativo; lo cual se corresponde, además, con el descenso del desempleo. De 1998 a 2005, la tasa de ocupación femenina ha aumentado en casi 12 puntos, mientras que la masculina lo ha hecho en 7 puntos. A pesar de ello, la tasa de ocupación femenina sigue siendo, actualmente, del 41,1% (23,4 puntos inferior a la masculina).

La presencia femenina en las Fuerzas Armadas ha sido merecedora de una especial consideración dentro de la Ley. Al respecto, es preciso señalar que, en la actualidad, los efectivos de mujeres en las Fuerzas Armadas suponen un 9,10% del total de efectivos. En el escalafón de mandos, la presencia de las mujeres sólo alcanza un 1,47% y, en el de Tropa y Marinería, el 16,81%.

El gran escollo sigue siendo, a pesar de todo, el desempleo femenino, que, en 2005, se sitúa en 11,2% (4,7 puntos superior al masculino) y eso a pesar de que, desde 1998, se ha reducido nada menos que en 15 puntos porcentuales.

El desempleo femenino guarda íntima relación con la precariedad del empleo. Tradicionalmente, se viene demostrando que, en épocas de crisis, el primer empleo que se destruye es femenino.

Los datos de *Movimiento Laboral Registrado* demuestran que, en 2004, se siguen celebrando menos contratos con mujeres que con hombres (45,37%, en el caso de los indefinidos, y 44,34%, en el de los temporales). Especialmente llamativo es el hecho de que, cuando analizamos el tipo de jornada, las mujeres sólo constituyen un 38,28% de los contratos a tiempo completo, mientras que suponen el 65,3%

de los celebrados a tiempo parcial.

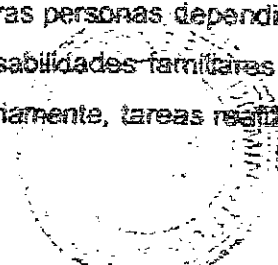
Otro déficit importante se sigue apreciando en el ámbito de la discriminación salarial. Los datos de la última Encuesta de Estructura Salarial (2004) reflejan que las mujeres perciben, globalmente, de media, un 28,9% menos que los varones. No hay que confundir este dato de diferencia salarial media con el de discriminación salarial, pero sí es un indicador importante, a la hora de establecer que, a fecha de hoy, las mujeres siguen percibiendo salarios inferiores a los de los varones.

El acoso sexual en el ámbito laboral es un problema de alto alcance, dado que el 21,8% de las trabajadoras en activo lo ha sufrido, en algún momento de su vida laboral y un 14,9% lo está sufriendo en la actualidad. Estos datos implican que se puede estimar que 1.570.000 mujeres trabajadoras, aproximadamente, han sufrido acoso sexual a lo largo de su trayectoria laboral y que, en la actualidad, en torno a 1.075.000 mujeres trabajadoras están sufriendo alguna situación de acoso sexual y, alrededor de 160.000, sufren acoso muy grave.

### C. CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL

La conciliación de la esfera laboral y familiar se constituye en uno de los principales *caballos de batalla* para lograr que la mujer alcance un adecuado nivel de empoderamiento.

El cuidado de hijas e hijos, así como de otras personas dependientes (mayores, con discapacidad...), las responsabilidades familiares y las tareas domésticas siguen siendo, mayoritariamente, tareas realizadas por las mujeres.



Así lo atestigua el exiguo 1,34% de permisos de maternidad/paternidad que fueron disfrutados por hombres, de los 239.958 que tuvieron lugar en el año 2003.

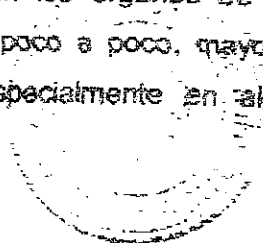
Igualmente, según datos de la EPA, relativos a 2004, el 93,7% de los abandonos del mercado de trabajo por razones familiares correspondieron a mujeres.

La Encuesta de Usos del Tiempo del Instituto de la Mujer, de 2001, reflejaba cómo los varones dedicaban 3 horas y 10 minutos diarios a *trabajo doméstico*, mientras que las mujeres dedicaban más del doble (7 horas y 22 minutos).

En el mismo sentido, la Encuesta de Empleo del Tiempo del INE refleja que, en 2003, un 92,7% de las mujeres dedican algún tiempo diario a *Hogar y Familia*, con una duración media de 4 horas y 50 minutos. Por el contrario, sólo un 70% de los varones reconoce dedicar algún tiempo a estas actividades, con una media de 2 horas y 6 minutos.

#### D. ACCESO A PUESTOS DE DIRECCIÓN.

Como ocurre en otros ámbitos, la participación de la mujer en la esfera política se ha incrementado notablemente en los últimos años. La presencia marginal de las mujeres en los órganos de poder ejecutivo, legislativo y judicial va siendo, poco a poco, mayor. Sin embargo, aún dista de ser paritaria, especialmente en algunos ámbitos.



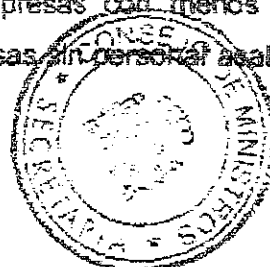
En la actual legislatura, las mujeres suponen un 36% del conjunto de diputados/as, mientras que, en el Senado, el porcentaje es algo inferior (el 25,1%).

Sin embargo, estos porcentajes se ven claramente disminuidos cuando se acude a otras esferas del poder ejecutivo. Así, entre las representaciones españolas en organismos internacionales, tan sólo se da un 9,68%. Un porcentaje que es, aún, inferior en las embajadas (6%).

En el ámbito judicial, se puede observar, una vez más, la segregación vertical existente. La judicatura es una profesión claramente feminizada, ya que el 64,13% de los/las jueces son mujeres. Pero este porcentaje baja a un 41,6%, si se habla de la magistratura, y a un ridículo 5,06%, cuando se trata de las magistradas del Tribunal Supremo.

Si se habla de empoderamiento, está claro que una de las esferas desde la cual se dominan mayores cotas de poder se da en el ámbito económico-laboral.

La dirección de empresas sigue siendo un ámbito muy deficitario para las mujeres. Según datos de la EPA (3º trimestre de 2005), sólo un 18,74% de las personas que ejercen la dirección de empresas con 10 o más trabajadores/as son mujeres. Este porcentaje se eleva hasta un insuficiente 26,54%, en el caso de empresas con menos de 10 trabajadores/as. Solamente en las empresas sin personal asalariado, las mujeres son mayoría (un 50,52%).





En este campo económico-laboral, la participación de las mujeres es, en muchos casos, meramente testimonial.

Así, la presencia de las mujeres en los Consejos de Administración de las empresas que cotizan dentro del IBEX-35 sólo es del 2,35%.

Un porcentaje similar, el 2,38%, se da en las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación.

En cuanto a los/las Consejeros/as del Banco de España, sólo un 14,29% son mujeres.

Entre las direcciones generales del Ministerio de Economía y Hacienda, las mujeres representan el 26,09%.

En otros órganos, como el Consejo Económico y Social, las mujeres son el 14,75%, mientras que, en el Tribunal de Cuentas, su presencia se reduce al 6,67%.

## 1.2. INFORMACIÓN SOBRE ESTEREOTIPOS Y ROLES DE GÉNERO, ACTITUDES IGUALITARIAS Y OPINIÓN PÚBLICA SOBRE EXPECTATIVAS, EN RELACIÓN AL PAPEL DE LAS MUJERES EN EL FUTURO.

Los datos aportados en las líneas anteriores sobre la situación de las mujeres en diversos campos, tienen como causa la existencia de factores que subyacen a las estructuras sociales, por lo que cualquier política de igualdad que se ponga en marcha ha de ir dirigida a su transformación. Mientras que no se cambien los estereotipos tradicionales, basados en la

asignación de tiempos y espacios diferenciados a mujeres y hombres, no se cambiará la asignación de roles sexuales y, en consecuencia, no se conseguirán las modificaciones estructurales perseguidas por esta Ley. El cambio de mentalidades y actitudes constituyen la mayor garantía de que los objetivos pretendidos se pueden conseguir y que la situación deseada persistirá en el tiempo.

A continuación, se da cuenta de la situación sobre la estereotipia sexual existente, haciendo distinción entre la de rasgos y roles sobre las actitudes igualitarias y sobre la opinión pública, en relación a las expectativas futuras y la evolución del papel de las mujeres, en el futuro.

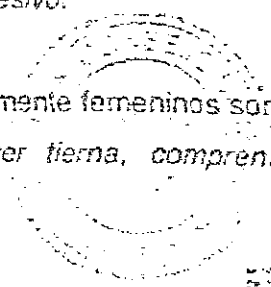
#### A. ESTEREOTIPOS SEXUALES.

Se proporcionan resultados sobre los estereotipos de rasgos y sobre estereotipos de roles.

- a. **Estereotipos de rasgos.** El Instituto de la Mujer mide, periódicamente, los estereotipos de rasgo, utilizando el *Inventario de roles sexuales* de Ben, que trata de determinar si determinados rasgos son atribuidos, preferentemente, a uno u otro sexo.

Actualmente, dentro de la población española, existen rasgos que se atribuyen, de manera dominante, a los hombres: *actuar como líder, ser amante del peligro, egoísta, individualista, duro, atlético, con personalidad fuerte, y agresivo.*

Por el contrario, los rasgos más típicamente femeninos son *ser sumisa, amante de los niños/as, ser tierna, comprensiva,*



sensible a las necesidades de otras personas, llorar con facilidad, ser cariñosa o afectuosa.

- b. **Estereotipo de roles.** Para su medición, se utilizó una escala de varios ítems, contruidos con frases, respecto de las cuales las personas debían posicionarse según su grado de acuerdo o desacuerdo, de forma que la escala de puntuación va de 1 a 5. Ello permitió obtener dos factores que representan distintas dimensiones de la estereotipia de género y que ofrecen diferencias entre géneros. El primero se etiquetó como *estereotipia de rol familiar* y el segundo como *estereotipia de rol laboral*. Según la estereotipia de rol familiar, hombres y mujeres deben desempeñar tareas diferentes dentro del hogar y, según la estereotipia de rol laboral, la mujer estaría limitada para desempeñar ciertas profesiones.

La situación actual, respecto a la estereotipia de roles, en la población española, es la siguiente:

- La estereotipia de rol familiar (3,03) es claramente superior que la estereotipia de rol laboral (1,84).
- En el colectivo de varones, se aprecian, en general, unos rasgos estereotípicos más desarrollados.
- Se dan mayores diferencias, entre mujeres y varones, respecto a la estereotipia de rol laboral que respecto a la del rol familiar.

#### B. ACTITUDES IGUALITARIAS.

Se trata de averiguar la predisposición a que las mujeres cambien



el rol tradicional de madre de familia y ama de casa. Para su medición, se utiliza, igualmente, una escala con varios ítems. Cada uno es una frase, respecto de la cual se pide a las personas encuestadas que manifiesten su grado de acuerdo o desacuerdo.

Como conclusión, se ha observado que las actitudes más desfavorables hacia el trabajo extradoméstico de la mujer se dan en los hombres, especialmente en los de mayor edad.

Igualmente, se ha observado que, desde 1993, se ha producido un ligero aumento de la puntuación media, lo cual implica actitudes más igualitarias, si bien no se puede hablar de un cambio sustancial en las actitudes. El cambio experimentado, sin embargo, se ha producido en mayor medida, alcanzando diferencias significativas, en el grupo de los hombres.

En un reciente estudio, realizado por el Instituto de la Mujer, sobre conciliación de la vida laboral y familiar, un 84,5% de las personas encuestadas mostraban su desacuerdo con el hecho de que *la mujer deba ser la principal responsable de las tareas domésticas y el cuidado de hijos/as y personas dependientes*. Inversamente, un 82,3% mostraba, igualmente, su desacuerdo con que *el hombre deba ser el principal proveedor de ingresos de la familia*.

Ahora bien, esta aceptación mayoritaria de la igualdad podría estar reflejando, más bien, una cierta adhesión formal a lo *políticamente correcto*, ya que, simultáneamente, un 32,4% de las personas encuestadas mostraban su acuerdo con el hecho de que *aunque la mujer trabaje, debería hacerlo menos horas que el hombre para poder ocuparse de las responsabilidades familiares*.

Los cambios reales se van produciendo, es cierto, pero muy lentamente y, en todo caso, más despacio que los cambios manifestados, existiendo una cierta disociación entre *lo que se dice que se piensa y lo que se piensa realmente*.

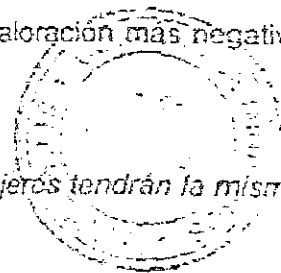
En este sentido, hay que recordar los datos que nos aportan los estudios realizados sobre el uso del tiempo, que vienen a coincidir en que las mujeres dedican más del doble del tiempo que los hombres a tareas domésticas, si bien, en los últimos años, las diferencias entre ambos sexos se han ido acortando progresivamente.

### C. OPINIÓN PÚBLICA SOBRE EXPECTATIVAS, EN RELACIÓN AL PAPEL DE LAS MUJERES EN EL FUTURO.

Por último, dentro del análisis de los aspectos que subyacen a las estructuras sociales, se ha creído conveniente analizar la opinión pública sobre las expectativas futuras y la evolución del papel de la mujer en España, en esos últimos años. Para ello, se ha acudido a los Barómetros del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) que, desde mediados de los 90, viene incluyendo diversas preguntas al respecto.

Es curioso comprobar cómo, partiendo de esta fuente, la opinión pública, en la actualidad, tiende a hacer una valoración más negativa que hace 5 ó 10 años.

Así, por ejemplo, ante la pregunta de si *las mujeres tendrán la misma*



presencia que los hombres en todos los ámbitos de la sociedad, un 58,1% de las personas encuestadas manifestaban su acuerdo, en 1999, mientras que, en 2004, este porcentaje se ha reducido al 51%.

Asimismo, en 2005, respecto de 1995, es mayor el porcentaje de personas que creen que la situación de las mujeres en España es peor que la de los hombre en aspectos como:

- Los salarios.
- Las perspectivas de promoción profesional.
- La estabilidad en el puesto de trabajo.
- El acceso a los puestos de responsabilidad en las empresas.

Finalmente, ante la pregunta de si, en comparación con hace 10 años, cree Vd. que las desigualdades en la vida familiar y doméstica entre mujeres y hombres son hoy mayores, menores o iguales, los resultados muestran que, tanto en 1997 como en 2004, el porcentaje mayoritario opinaba que las desigualdades eran menores, pero, a pesar de ello, este porcentaje era mayor (un 77%), en 1997, que en 2004 (un 74,7%). Inversamente, como es lógico, en estos años, ha aumentado el porcentaje de personas que piensan que las desigualdades son mayores.

Desde luego, estos datos no dejan de sorprender por cuanto, en algunos casos, estas opiniones van en contra de la evidencia manifestada en diversos estudios e investigaciones.

Es posible que estos datos estén reflejando el hecho de que la población, en general, vaya asimilando la existencia de discriminaciones que, años atrás, pasaban desapercibidas.

En este sentido, la toma de conciencia de una situación desigualitaria deberíamos considerarla como algo positivo, por cuanto supone el punto de partida básico inicial para que esa situación pueda ser modificada.

### 1.3. INFORMACIÓN SOBRE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Podemos definir el término *Políticas de Igualdad* como un conjunto de medidas políticas diseñadas e implementadas con el objetivo de corregir los desequilibrios existentes y, explicables en función del género, para conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres.

La igualdad es uno de los valores superiores sobre los que se basa todo "Estado social y democrático de Derecho", tal como propugna la Constitución española en su primer artículo.

En los años 80 y 90, se crearon, en nuestro país los mecanismos que posibilitaron los cambios en la situación de las mujeres. Gracias a la iniciativa institucional, se sentaron las bases de una larga trayectoria en el diseño de políticas de igualdad, que ha llegado hasta nuestros días.

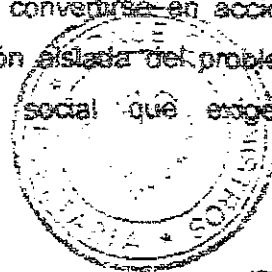
El principal instrumento y la forma de articular las políticas de igualdad, desde la Administración Pública, han sido los *Planes de Igualdad*. Los Planes de Igualdad recogen un conjunto de medidas adoptadas y aprobadas por el Gobierno de la Nación y que deben llevar a cabo los diferentes departamentos, en un período de tiempo establecido.

Desde la elaboración del *I Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres (1988-1990)*, elaborado por el Instituto de la Mujer, hasta la actualidad, las políticas de igualdad han ido evolucionando y ampliando sus objetivos para adaptarse a los cambios que la sociedad española ha ido experimentando. A este primer Plan, le siguieron el II, el III y el IV, en los periodos 1993-95, 1997-2000 y 2003-2006, respectivamente.

El compromiso con la igualdad, por parte de las instituciones europeas, ha estado presente desde la firma del Tratado de Roma (1957), hasta convertirse en uno de los pilares más importantes de la política social comunitaria. Hasta el Tratado de Amsterdam (1997), la política comunitaria, en materia de igualdad, se centró en impulsar acciones que acabaran con la desigualdad jurídica de las mujeres y eliminaran las discriminaciones directas.

Las políticas europeas de igualdad han sido un referente en todos los países de la Unión. La Unión Europea elaboró cuatro Programas de Acción para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que tuvieron una influencia muy directa en los Planes de Igualdad españoles, tanto a nivel estatal como autonómico.

Los cambios en el enfoque y planteamiento de las políticas de igualdad en los últimos años han venido ligados a una necesidad de cambiar el discurso y de dotar a estas políticas de nuevos instrumentos metodológicos. Las políticas de igualdad han pasado, gradualmente, de ser un medio para eliminar la discriminación que sufrían las mujeres, por su desventaja, considerada "natural", respecto a los hombres, a convertirse en acciones integradoras que van más allá de la consideración aislada del problema, para pasar a estimarlo como un problema social que exige la corresponsabilidad de hombres y mujeres.

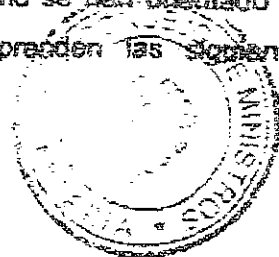




Si bien, hasta mediados de los 90, los Planes y Programas de Igualdad de Oportunidades, en España, se basaron en la aplicación de medidas específicas de **Acción Positiva**, destinadas a corregir y remover los obstáculos que, producto de prácticas o sistemas sociales arraigadas en el patriarcado, impedían la igualdad real, a partir de la Conferencia de Beijing (1995), hay un cambio en el enfoque de estas políticas, al entrar en juego una nueva estrategia: el *Mainstreaming*, también conocido en castellano por el término *Transversalidad de género*, que supone respetar el principio de igualdad en todas las políticas, programas o medidas, en cualquier ámbito, a todos los niveles y en todas sus fases, para evaluar los efectos que pueden tener para ambos sexos, teniendo en cuenta sus posiciones diferentes en la sociedad. Se trata, de incorporar la *perspectiva de género* en todas las políticas, de forma transversal.

Si, en los primeros Planes de Igualdad de Oportunidades, estatales y autonómicos, se impulsaron políticas de coordinación horizontal para desarrollar acciones que, desde distintos organismos de la Administración, favorecieran la igualdad, los últimos han incorporado una dimensión nueva: la *Transversalidad*, que ha pasado a ser una herramienta más, que complementa a las Acciones Positivas.

Recientemente, el Instituto de la Mujer ha realizado un estudio comparativo de los Planes de Igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres que, en estos años, se han aprobado, tanto a nivel estatal como autonómico, con especial incidencia en aquellos que se encuentran actualmente en vigor. De este estudio, que permite hacerse una idea de cómo se han orientado las Políticas de Igualdad en nuestro país, se desprenden las siguientes conclusiones:



1. Desde un punto de vista cronológico, los planes tienden a ser, crecientemente, más específicos y "realistas". Esta evolución tiene que ver, en cierta forma, con las necesidades de seguimiento y evaluación, ya que es muy difícil seguir y evaluar objetivos y acciones que estén formulados de forma vaga y general.
2. Se constata que todos siguen las directrices marcadas por el Cuarto Programa de Acción Comunitario para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (1996-2000) y la Estrategia Marco Comunitaria sobre Igualdad entre Hombres y Mujeres (2001-2005), cuyo objetivo fundamental es la introducción del principio de "mainstreaming" en todas las políticas y acciones realizadas en el ámbito comunitario.
3. Los principios básicos de la Transversalidad adquieren entidad en las mayoría de los Planes analizados. La integración de la perspectiva de género en las políticas públicas constituye un área fundamental en el IV Plan de Igualdad nacional, así como en los de otras Comunidades Autónomas.
4. Coinciden en hacer hincapié en la necesidad de un mayor compromiso e implicación por parte de los poderes públicos y en mejorar la coordinación entre las distintas administraciones.
5. Se señala la necesidad de cambios sociales estructurales y de un cambio de mentalidad, respecto a las cuestiones del género.
6. Se percibe en todos la importancia que cobra la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, hablándose del término "corresponsabilidad", en lo relativo a los cuidados familiares y las tareas domésticas.

7. Otro tema recurrente es la promoción de una participación más equilibrada de las mujeres en los ámbitos de poder y en los procesos de toma de decisiones.

Para la ejecución del *mainstreaming* de género, se han diseñado metodologías en las que se señalan los requisitos previos que deben existir para poder implantar la transversalidad, las técnicas y herramientas que facilitan su aplicación, así como la explicación de cuándo, donde y quienes son las personas responsables de aplicarlo. Por ello, se requiere asumir cambios de diversos tipos, incluidos los metodológicos, organizacionales, de cultura organizativa y de concepciones personales y de liderazgo político, para poder implementar el *mainstreaming* en la práctica.

Junto a una estrategia de transversalidad, es fundamental abordar el otro tipo de estrategia dirigida al *empoderamiento* de las mujeres, a través de las políticas específicas de igualdad. Realidades como la desigual participación de mujeres en puestos de decisión política, económica y social o la violencia doméstica de género siguen evidenciando la escasa capacidad de decisión y autonomía de las mujeres en distintos ámbitos.

Como conclusión de esta revisión de la situación de las Políticas de Igualdad en España, es importante señalar que, actualmente, la denominada "Estrategia dual" es la que marca las líneas de aplicación de las Políticas de Igualdad, y se caracteriza por:

- el mantenimiento de los Programas o Planes de Igualdad (acciones específicas).
- la integración de la perspectiva de género, de forma transversal, en todas las políticas públicas.

Hasta la fecha, se ha trabajado, fundamentalmente, en la consecución de los objetivos de los Planes de Igualdad, instrumento político que marcaba las

líneas de intervención de los gobiernos correspondientes, en el tema de la igualdad entre mujeres y hombres, cuya estructura se vertebraba en torno a objetivos y acciones positivas por áreas de actuación. Bastante menos se ha avanzado en la integración de la perspectiva de género, de forma transversal, en todas las políticas, a pesar de que este principio estaba recogido en los dos últimos planes aprobados.

## **2. PREVISIÓN DE RESULTADOS.**

### **2.1 RESULTADOS ESPERADOS CON LA APLICACIÓN DE LA LEY, POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN.**

#### **A. ÁMBITO EDUCATIVO.**

Uno de los objetivos básicos de esta Ley es el cambio de estereotipos. Promueve la educación en igualdad, lo que conlleva la transmisión de roles equivalentes para hombres y mujeres, la idea de que las mujeres son igual de capaces que los hombres, por lo que ningún campo ha de estar vedado a uno de los sexos. Este tipo de educación, al mismo tiempo, transmitirá una serie de valores que incidirán en que la elección de carreras no esté condicionada por el sexo de pertenencia. De esta forma, a medio o largo plazo, irá desapareciendo la segregación horizontal, por lo que es de esperar que, con el paso del tiempo, no ocurra lo que sucede en la actualidad, que, por ejemplo, el porcentaje de mujeres en arquitectura e ingeniería técnica apenas supera el 25% y, en las carreras de arquitectura e ingeniería superior, el 30%. Algo parecido, pero a la inversa, sucederá en carreras claramente feminizadas.

El cumplimiento del mandato dado, en la Ley, a los Poderes Públicos, para poner en marcha medidas relativas a la conciliación y corresponsabilidades familiares, contribuirán a que los estudios de doctorado sean terminados, por parte de las mujeres, en las mismas proporciones que se dan en la matriculación. Pues, muchas mujeres se ven obligadas a abandonar estos estudios para dedicarse a la crianza de los hijos e hijas, a atender a *necesidades familiares*.

Las mismas medidas de conciliación y corresponsabilidad, así como otras, referidas a la equilibrada representación de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración y la obligación de que, en los equipos que realicen estudios e investigaciones, haya una significativa participación femenina contribuirá a paliar dos de los déficits apuntados en el epígrafe anterior: escasa presencia de las mujeres entre el profesorado universitario (35,23%) y entre el personal investigador de I+D+I (36,68%).

## B. ÁMBITO LABORAL

El impulso de los planes de empleo con perspectiva de género, así como de los Planes Estratégicos de Igualdad de Oportunidades, que han de incluir medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo, algunos de los cuales podrían ser acciones positivas, y la colaboración de la Administración General del Estado con las Administraciones Autonómicas y Locales parecen, en principio, unos buenos instrumentos, entre otros, para superar los déficits existentes, en el ámbito laboral, respecto a las tasas de actividad y ocupación de las mujeres, en relación a los hombres, así como para reducir la tasa de paro femenino, que, como es sabido, es claramente superior a la

masculina (alrededor de 5 puntos).

Es de esperar que la escasa presencia de las mujeres en puestos de dirección de empresas, especialmente en aquellas que tienen más de 10 trabajadoras/es (18,74%), tienda a incrementarse de manera considerable con el paso del tiempo, una vez que sea promulgada la Ley y empiecen a ejecutarse las obligaciones referidas a la consecución de la paridad, como la promoción de la participación de las mujeres en los Consejos de Administración de las empresas, postulado al que dedica un artículo la propia Ley.

La Ley presenta una dedicación especial a dos temas mencionados en el análisis de partida: acoso sexual y discriminación laboral. Se estima que, con la aplicación de los artículos correspondientes, se reducirá la prevalencia de los casos de acoso sexual, que, según los datos disponibles, lo están sufriendo, en la actualidad, el 14,99% de las mujeres que están trabajando y lo han sufrido, en algún momento de su vida laboral, el 21,8% de las trabajadoras en activo. Así mismo, es de esperar que se reduzca la brecha salarial entre mujeres y hombres que, en la actualidad, está cercana al 30%. Las mujeres ganan, en términos generales, un 28,9% menos que los hombres.

A la disminución de la brecha salarial, también contribuirían las medidas implementadas que estén relacionadas con la transmisión de estereotipos y con el acceso a puestos de responsabilidad, ya que esta brecha está ocasionada, en parte, porque, por un lado, las mujeres trabajan, especialmente, en determinadas ocupaciones y sectores y, por otro, ocupan puestos de menor remuneración que los hombres, dada la dificultad que tienen para escalar posiciones en la cadena empresarial.

La educación, a través de la transmisión de nuevos valores, con la pretensión de hacer desaparecer los estereotipos tradicionales y otras medidas asociadas, tendentes a reducir las segregaciones horizontales y verticales, contribuirá, según lo esperado, a incrementar los efectivos de mujeres en las Fuerzas Armadas (actualmente el 9,10%) y, especialmente, en el escalafón de mandos, en el que las mujeres sólo representan un 1,47%.

#### C. CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR.

El establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres y de la corresponsabilidad en las labores domésticas, como el permiso de paternidad, así como otras referidas a la transmisión de estereotipos, a través de la educación y los medios de comunicación, contribuirá a que los hombres colaboren, en mayor medida que actualmente, al cuidado de hijos e hijas y de otras personas dependientes y a la realización de las tareas domésticas. Según los últimos datos, las mujeres dedican 7 horas y 22 minutos diarios a este tipo de tareas, más del doble que los hombres (3 horas y 10 minutos).

Así mismo, es de esperar que con la puesta en marcha de las medidas apuntadas en el párrafo anterior, el abandono del mundo del trabajo, *por razones familiares*, por parte de las mujeres, se reduzca de manera drástica, en relación a la última cifra disponible: el 93,7% de este tipo de abandono, en 2004, correspondió a las mujeres.

#### D. ACCESO A PUESTOS DE DIRECCIÓN

Es de esperar que las medidas referidas a la representación equilibrada de las mujeres en los órganos de decisión, contribuyan a corto plazo y de manera significativa, a incrementar la presencia de las mujeres en distintas esferas de los poderes ejecutivo y judicial. En el anteproyecto se hace referencia a órganos directivos cuya designación corresponda al Consejo de Ministros, a representaciones en órganos colegiados y organismos internacionales, RTVE, Sistema nacional de Salud

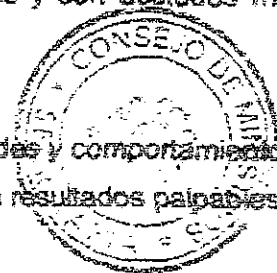
Asimismo, la promulgación y cumplimiento de esta Ley, tanto de su articulado como de ciertas disposiciones adicionales contribuirán a incrementar la presencia femenina en esferas de poder económico, en las que es muy escasa, como sucede en los Consejos de Administración de determinadas empresas

## **2.2 INCIDENCIA SOBRE ESTEREOTIPOS Y ROLES DE GÉNERO, ACTITUDES IGUALITARIAS Y OPINIÓN PÚBLICA, SOBRE EXPECTATIVAS, EN RELACIÓN AL PAPEL DE LAS MUJERES EN EL FUTURO**

La presente Ley de Igualdad dedica un título, de manera exclusiva, a la Educación y a los Medios de Comunicación, como agentes de socialización y, por tanto, como agentes transmisores de modelos de comportamiento.

La Ley propone una formación en valores de igualdad, lo que contribuirá a forjar unos/as jóvenes con menos rasgos estereotipados, con escalas de valores diferentes a los de generaciones anteriores y con actitudes más igualitarias.

Esta transformación, referida a mentalidades, actitudes y comportamientos, lleva un tiempo, de forma que no puede hablarse de resultados palpables a



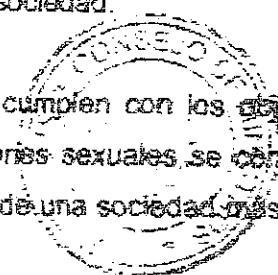


corto plazo, sino a medio y largo plazo. Cuando la Ley lleve unos años de ejecución, se esperan cambios en el sentido siguiente:

- Desaparición, en gran medida, de los estereotipos de rasgo, especialmente de aquellos que están vinculados con la personalidad, pero no tanto con las que se asocian a rasgos físicos.
- Los estereotipos de roles también sufrirán una disminución considerable, de forma que apenas existirá la estereotipia de rol laboral que actualmente es muy pequeña (1,84) y disminuirá, en grandes proporciones, la de rol familiar (3,03).  
En los dos casos señalados, los cambios serán muy significativos, en el plazo de 3 ó 4 años, una vez que se haya promulgado la Ley y se haya puesto en marcha su aplicación.
- Las actitudes igualitarias tenderán a un crecimiento progresivo con el paso del tiempo. Es de esperar, incluso, que desaparezca la disociación existente entre lo que se dice que se piensa y lo que se piensa realmente, debido a la deseabilidad social o a la necesidad de expresar lo políticamente correcto.

En cuanto a la opinión sobre expectativas, en relación al papel de las mujeres en el futuro, es difícil hacer previsiones, teniendo en cuenta que una mayor sensibilización sobre el tema puede conllevar una actitud más crítica y, por tanto, unas expectativas más pesimistas sobre la consecución de una igualdad real en todos los ámbitos de la sociedad.

En todo caso, si los agentes de socialización cumplen con los objetivos previstos y la desaparición de las discriminaciones sexuales se convierte en realidad, es de esperar que las expectativas de una sociedad más justa



e igualitaria se cumplan, de forma que los ciudadanos y ciudadanas de este país crean que, en el futuro, las mujeres estarán integradas perfectamente, en plan de igualdad respecto de los hombres, en la sociedad. En 2004, sólo un 51% de las personas entrevistadas pensaban así.

## 2.3 CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD

En este apartado, al hacer una evaluación *ex ante*, del impacto de género, de la norma en cuestión, deben identificarse los objetivos de las políticas de igualdad de oportunidades a los que se pretende dar cumplimiento, a través de los resultados previstos. Es evidente que, con la aplicación de una Ley Integral de Igualdad como la que se analiza, se pretende dar cumplimiento a todos los objetivos generales de las políticas de igualdad, puesto que esta Ley es el marco jurídico que ha de dar cobertura a todas las políticas estatales, en materia de igualdad, a los diferentes Planes Estratégicos que puedan confeccionarse a partir de su aprobación.

Un objetivo fundamental de esta Ley es que se produzca un cambio estructural para acabar con la discriminación que sufren las mujeres, a través de un proceso que debe producirse en toda la sociedad y que afecta al funcionamiento y la actividad de las empresas, de las familias, de la administración pública, de los sindicatos, de los partidos políticos, de las instituciones educativas, sanitarias o económicas, de las instituciones del Estado o de los ejércitos.

Se pretenden modificar una serie de estereotipos y roles de género, que, hasta ahora, han dificultado la consecución de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y cuya repercusión más inmediata, pero no la única, ha sido la segregación profesional del mercado de trabajo

y la imposibilidad de hacer efectivo, en grado máximo, el principio de igualdad de trato y de oportunidades.

Una de las medidas con resultado a corto plazo es la composición equilibrada de los Poderes del Estado, con el fin de alcanzar una auténtica democracia paritaria. Esta medida, que supone un cambio en la concepción de las relaciones de poder, contribuirá, de forma directa, al empoderamiento de las mujeres.

Un grupo de medidas van dirigidas a la socialización educativa en igualdad y a la integración de la dimensión de la igualdad en el ámbito de los medios de comunicación. Con ellas se quiere transformar la influencia del sistema educativo para generar nuevas escalas de valores y actitudes y transmitir una imagen sobre los roles de mujeres y hombres basada en la igualdad. Como consecuencia de las medidas adoptadas, se prevé que se eliminen las prácticas sociales discriminatorias.

El articulado que regula el derecho de la salud en igualdad se propone garantizar la aplicación del principio de igualdad en el ámbito de la salud, contribuyendo a mejorar el bienestar emocional, social y físico de las mujeres.

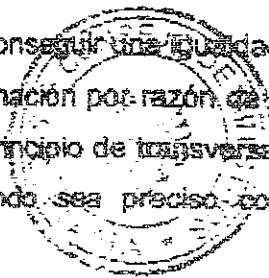
Con las medidas referidas al ámbito laboral, a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y a la corresponsabilidad en el seno de la familia se pretende eliminar todas las barreras que dificultan la entrada de las mujeres en el mercado laboral e impide el desarrollo, en igualdad de condiciones con los hombres, de su carrera profesional, lo que, sin duda, repercutirá en su independencia y felicidad personal.

### 3. VALORACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO.

Una ley que tiene por objeto *hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, mediante la eliminación de la discriminación contra las mujeres en cualquier ámbito de la vida*, sólo puede tener una valoración positiva de su impacto de género. Su finalidad consiste en disminuir diferencias entre uno y otro sexo y eliminar discriminaciones para conseguir una sociedad en la que sus ciudadanas y ciudadanos disfruten de las mismas oportunidades, independientemente de que sean mujeres u hombres. Cada uno de los artículos de esta Ley nace con la pretensión de conseguir la eliminación de las desigualdades de género y, por lo tanto, con la intención de que los resultados previstos con su aplicación contribuyan a la consecución de los objetivos de las políticas de igualdad de oportunidades, por lo que el impacto estimado no puede catalogarse, en ningún caso, como *neutro* o *negativo*.

A continuación, se relacionan, como bondades propias de la Ley, las medidas que pueden tener una incidencia mayor en la producción de un impacto de género positivo, entre todas las que se recogen en su articulado.

Esta Ley pretende poner los cauces necesarios para conseguir una igualdad real entre mujeres y hombres, para acabar con la discriminación por razón de sexo, mediante el reconocimiento, a todos los niveles, del principio de transversalidad y mediante el fomento de acciones positivas, cuando sea preciso, corregir



situaciones de partida de desigualdad de las mujeres, respecto de los hombres.

El principio de igualdad o de transversalidad inspira todo el entramado articular de la Ley, de forma que pretende integrar la dimensión de género en el conjunto del ordenamiento jurídico y modifica la forma de abordar la igualdad entre mujeres y hombres, integrando, de manera sistemática, la perspectiva de género en los diversos ámbitos: social, político, laboral y económico, así como en todo el proceso de la intervención política: diseño, puesta en marcha, desarrollo y evaluación.

Con el fin de hacer efectivo el principio de transversalidad, la Ley dispone la acción de dos importantes herramientas: el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, con cuya aprobación se pretendería definir medidas concretas de actuación para alcanzar los objetivos de igualdad entre mujeres y hombres, y las Unidades de Género, entre cuyas funciones están las de velar por el cumplimiento de esta Ley y por la aplicación efectiva del principio de igualdad de género.

La evaluación de las políticas de igualdad puestas en marcha, tanto generales como sectoriales, también contribuirá a hacer un seguimiento del cumplimiento de esta Ley y, por consiguiente, del principio de transversalidad que la inspira.

Así mismo, la colaboración entre las Administraciones Públicas también constituye un importante instrumento para integrar el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de las respectivas competencias, según reza uno de los artículos de la propia Ley.

Como se ha puesto de manifiesto a lo largo de este informe, para conseguir una sociedad realmente igualitaria, es preciso hacer hincapié en la transformación de mentalidades, valores, estereotipos y actitudes, que tienen una incidencia directa

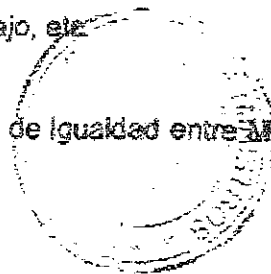
en las estructuras de la sociedad. Por eso, la Ley, en uno de sus artículos, regula la actuación en agentes de socialización tan importantes como la escuela y los medios de comunicación. Se pretende que el sistema educativo español eduque en y para la igualdad, generando actitudes igualitarias, a través de la formación en el respeto de los derechos y libertades, en el ejercicio de la tolerancia, de la libertad y de la igualdad. Asimismo, se responsabiliza a los medios de comunicación para que transmitan una imagen de las mujeres exenta de los estereotipos tradicionales que asocian roles, espacios y tiempos diferenciados a mujeres y hombres.

Otro de los rasgos de la Ley en cuestión estriba en el hecho de que trata uno de los temas que impide y obstaculiza el progreso hacia una mayor igualdad entre mujeres y hombres: la falta de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por parte de los hombres, y la corresponsabilidad dentro del propio marco familiar. El progreso de los hombres hacia una mayor conciliación de las tareas del ámbito público y del privado, así como la asunción de responsabilidades familiares es una condición indispensable para conseguir los objetivos de igualdad perseguidos.

La Ley introduce medidas para promover el reparto de obligaciones familiares entre mujeres y hombres. Entre ellas, destaca la implantación de un permiso de paternidad personal e intransferible, retribuido e independiente de la situación laboral de la madre.

En el ámbito laboral, la Ley también pretende dar soluciones a problemas de desigualdad tan importantes como la segregación horizontal y vertical, la brecha y/o discriminación salarial, el acoso sexual, la composición equilibrada de órganos de selección y valoración de puestos de trabajo, etc.

El tema de la paridad también es abordado por la Ley de Igualdad entre Mujeres



y Hombres, promulgando medidas para la promoción de la participación de las mujeres en los puestos de decisión, ya sean Consejos de Administración de las empresas, en órganos de la Administración o en el poder legislativo, obligando a confeccionar las listas electorales de manera paritaria.

La integración del principio de igualdad, en el ámbito sanitario, también ha merecido un trato especial en la Ley, insistiendo en la necesidad de introducir los temas de igualdad en la formación de los y las profesionales de la medicina, por ejemplo, y garantizando que las Administraciones Públicas Sanitarias prestarán un servicio igualitario, de manera que las diferencias físicas de mujeres y hombres o los estereotipos sociales asociados no produzcan diferencias en las prestaciones sanitarias.

Como conclusión, la valoración que cabe hacer del impacto de esta Ley es positiva, ya que toca aspectos esenciales para la supresión de las desigualdades y discriminaciones existentes, que perjudican a las mujeres: introducción del principio de igualdad, medidas de conciliación y corresponsabilidad, medidas de acceso a puestos de decisión y representación equilibrada, medidas sancionadoras del acoso sexual, etc.

Además, la propia Ley postula la evaluación de su ejecución, así como de las medidas o actuaciones concretas que pudieran ponerse en marcha para su cumplimiento.

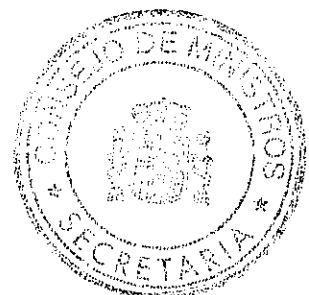
# INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZON DE GENERO, DEL PROYECTO DE LEY CONTRA LA VIOLENCIA, EL RACISMO, LA XENOFOBIA Y LA INTOLERANCIA EN EL DEPORTE

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de Organización, Competencia y Funcionamiento del Gobierno, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre Medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, se señala que las medidas que se incluyen en este Proyecto de Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, no conlleva tratamientos diferenciados que supongan ningún impacto por razón de género.

Madrid, 13 de marzo de 2006

LEGISLATURA  
VIII

121093





PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO  
PÚBLICO

12 1094  
LEGISLATURA  
VIII

Informe sobre impacto por razón de género

El artículo 14 de la Constitución reconoce el derecho a la igualdad de todos los españoles, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo. La concreción de este derecho en el ámbito de la función pública garantiza la inexistencia de discriminaciones por razón de género en el acceso al empleo público y en el desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos.

Por su parte, el artículo 9.2 de la Constitución establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, removiéndolos obstáculos que las impidan o dificulten y facilitando la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

En el anterior sentido la Sentencia del Tribunal Constitucional 19/1989, de 31 de enero, dispone que la prohibición de discriminación por razón del sexo no sólo entraña la interdicción de la desigualdad de trato injustificada, sino también la decisión constitucional de acabar con la histórica situación de inferioridad atribuida a la mujer en el ámbito del trabajo y de las condiciones de trabajo.

El Anteproyecto de Ley del Estatuto Básico del empleado público tiene un impacto positivo de género al favorecer la eliminación de dificultades para que la integración de la mujer sea real dentro de las Administraciones Públicas a través de la incorporación de medidas que favorecen la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el ámbito de la Administración General del Estado y la lucha contra la violencia de género.

Por todo ello debe concluirse que el Anteproyecto, favorece la supresión de situaciones de discriminación entre mujeres y hombres y tiene, además, un impacto positivo de género al favorecer la plena integración de la mujer en el empleo público.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

12/55 8  
LEGISLATURA  
VIII

142508

121095

## PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

### INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO (Art. 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre del Gobierno)

#### 1. ANTECEDENTES.

##### 1.1. Referencias legales

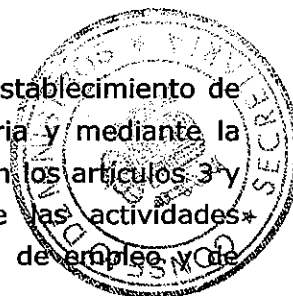
La norma que se analiza desde la perspectiva del impacto de género, debe inscribirse en unas coordenadas legales y en unas orientaciones explícitas definidas por el Consejo de Ministros por lo que el análisis de la regulación legal que se propone debe remitirse al ámbito delimitado por las normas comunitarias, que no puede ser desbordado por las iniciativas nacionales en el perímetro de la contratación pública donde operan las reglas y criterios impuestos por la Directiva 2004/18/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, que el anteproyecto pretende incorporar al derecho interno.

Por enunciar solamente los elementos de contenido normativo que resultan aplicables a los procesos de contratación pública en relación con el impacto de género, y omitiendo referencias a múltiples declaraciones y orientaciones de organismos y conferencias internacionales sobre la materia, es necesario retener para verificar la coherencia de la ley con las disposiciones que son objeto de trasposición, los siguientes elementos:

#### **Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.**

##### Artículo 2

"La Comunidad tendrá por misión promover, mediante el establecimiento de un mercado común y de una unión económica y monetaria y mediante la realización de políticas o acciones comunes contempladas en los artículos 3 y 4, un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, un alto nivel de empleo y de





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

121095

protección social, la igualdad entre el hombre y la mujer, un crecimiento sostenible y no inflacionista, un alto grado de competitividad y de convergencia de los resultados económicos, un alto nivel de protección y de mejora de la calidad del medio ambiente, la elevación del nivel y la calidad de vida, la cohesión económica y social y la solidaridad entre los Estados miembros”.

#### Artículo 3.2

“En todas las actividades contempladas en el presente artículo, la Comunidad se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad”.

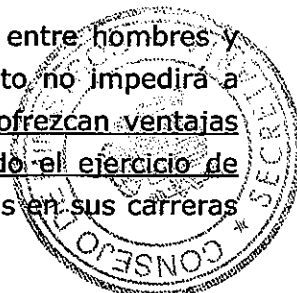
#### Artículo 137.1

“Para la consecución de los objetivos del artículo 136, la Comunidad apoyará y completará la acción de los Estados miembros en los siguientes ámbitos:

- la mejora, en concreto, del entorno de trabajo, para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores;
- las condiciones de trabajo;
- la información y consulta a los trabajadores;
- la integración de las personas excluidas del mercado laboral, sin perjuicio de las disposiciones del artículo 150;
- la igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo”.

#### Artículo 141.4

“Con objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre hombres y mujeres en la vida laboral, el principio de igualdad de trato no impedirá a ningún Estado miembro mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo menos representado el ejercicio de actividades profesionales o a evitar o compensar desventajas en sus carreras profesionales”.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

121095

**Directiva 2004/18/CE**Preámbulo de la Directiva. (Apartado 33)

"Las condiciones de ejecución de un contrato serán compatibles con la presente Directiva siempre y cuando no sean directa o indirectamente discriminatorias y se señalen en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones. En particular, pueden tener por objeto favorecer la formación profesional en el lugar de trabajo, el empleo de personas que tengan especiales dificultades de inserción, combatir el paro o proteger el medio ambiente. Como ejemplo se pueden citar, entre otras, las obligaciones – aplicables a la ejecución del contrato- de contratar a desempleados de larga duración o de organizar acciones de formación para los desempleados o los jóvenes, de respetar en lo sustancial las disposiciones de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el supuesto de que éstos no se hubieran aplicado en el Derecho nacional de contratar a un número de personas discapacitadas superior al que exige la legislación nacional".

Artículo 26 de la Directiva.

"Los poderes adjudicadores podrán exigir condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato siempre que éstas sean compatibles con el Derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones. Las condiciones en que se ejecute un contrato podrán referirse, en especial, a consideraciones de tipo social y medioambiental".

**1.2. Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005.**

La arquitectura legal descrita, con referencia al derecho comunitario, en el epígrafe anterior permitiría acoger en el anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público el planteamiento que el Gobierno plasmó en su Acuerdo de 4 de marzo de 2005, que en su apartado 1.1. establecía:

"Se acuerda incluir en los pliegos de cláusulas de contratación con la Administración Pública criterios que favorezcan la contratación de mujeres por parte de las empresas que concursen".





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

121095

El anteproyecto de Ley -en los términos y condiciones que se explicarán posteriormente- contiene una fórmula para dar cobertura legal y dotar de garantías para su ejercicio a este mandato del Gobierno.

## 2. METODOLOGÍA

### 2.1. Consideraciones generales.

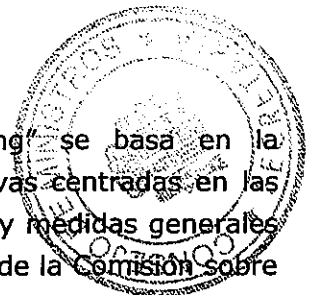
El análisis de disposiciones complejas como la que mediante este informe se evalúa, desde la perspectiva del impacto de género, plantea dificultades que no pueden soslayarse con la aplicación de la "guía para la evaluación del impacto en función del género", documento más elaborado, aunque claramente insatisfactorio, de los que se conocen para satisfacer esta finalidad, y que la Comisión Europea aplica para evaluar sus políticas propias.

En efecto, la Ley de Contratos del Sector Público, no se formula como una iniciativa definida y estructurada para establecer una nueva política de contratación sino que, sin perjuicio de las importantes novedades que incorpora, mantiene el hilo conductor y, en parte, las inercias, de los principios que vienen inspirando la contratación pública, desarrollando la aplicación de estos principios en fórmulas específicas orientadas a mejorar la eficiencia de los procedimientos y ampliar la concurrencia en los mercados en los que las entidades públicas realizan su actividad contractual.

Por lo tanto, la evaluación de una disposición de esta naturaleza que, además, se despliega sobre un amplio número de materias, no puede realizarse en los mismos términos que la de un proyecto de cooperación al desarrollo o de una disposición normativa que introduzca en el acervo legal una nueva política, definida de forma concreta.

### 2.2. Transversalidad.

El concepto de transversalidad o "mainstreaming" se basa en la percepción de que "no basta con aplicar medidas positivas centradas en las mujeres, sino más bien (...) recurrir a todas las políticas y medidas generales con el fin específico de lograr la igualdad". Comunicación de la Comisión sobre





integración de las mujeres y los hombres en el conjunto de las políticas y acciones comunitarias.

### **2.3. Igualdad.**

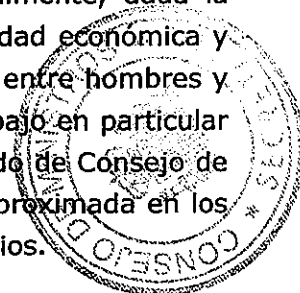
Debe asumirse, al igual que la Comisión Europea, que la igualdad formal (de iure) no es sino una primera etapa hacia la igualdad formal (de facto), por lo que ciertas medidas incentivadoras, acciones positivas, pueden ser necesarias para compensar discriminaciones pasadas y presentes.

### **2.4. Comprobación de la pertinencia con respecto al género.**

Las estadísticas de la contratación pública no disponen de información adecuada para confirmar de forma cuantitativa la pertinencia del análisis por razón de género. En concreto las dos cuestiones que plantea la "guía para la evaluación del impacto por razón de género" y cuya respuesta positiva daría lugar a analizar el impacto potencial son las siguientes:

- ¿La propuesta va dirigida a uno o más grupos objetivo? ¿Afectará a la vida diaria de una o de varias partes de la población?
- ¿Existen en este ámbito diferencias entre las mujeres y los hombres (por lo que se refiere a los derechos, los recursos, la participación, las normas y los valores vinculados a la pertenencia a un sexo)?

La respuesta a estas preguntas, aunque de forma aproximada y sin apoyo en precisiones estadísticas, debe ser positiva en todos los casos. La dimensión de la contratación pública cuyas transacciones representan aproximadamente un 13% del PIB nacional, implica que su regulación afecta -de forma directa o indirecta- a una porción significativa de la población. Igualmente, dada la amplitud con que se proyecta la contratación sobre la actividad económica y los mercados debe asumirse que, en general, las diferencias entre hombres y mujeres detectadas en los mercados y en el mercado de trabajo en particular que sucintamente están expuestas en el preámbulo al Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, se reproducen de forma aproximada en los mercados a los que el sector público demanda bienes y servicios.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

12 10 9 5

## 2.5. Alcance del presente informe.

A la vista de consideraciones precedentes se puede concluir.

- El informe de género es pertinente en este caso
  - Existen dificultades insoslayables a corto plazo, dada la ausencia de información estadística específica, para identificar con precisión los colectivos singulares, dentro de los grandes agregados de género, que pueden verse afectados por la norma.
  - Se puede verificar que la disposición cumple –de forma compatible con la legislación comunitaria– con los objetivos de transversalidad en la media que introduce medidas positivas orientadas a la igualdad en un ámbito de regulación de medidas generales.
  - Se puede analizar el impacto de otras medidas que favorecen la incorporación de la mujer a los procesos de contratación.

## 3. MEDIDA POSITIVA

El anteproyecto pretende proporcionar una cobertura legal a los planteamientos en materia de contratación pública plasmados en el citado Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005. Esta iniciativa, implica igualmente desde el punto de vista de la definición comunitaria de transversalidad, la incorporación en un ámbito legal ajeno al de regulación específica de la igualdad entre mujeres y hombres, de medidas de estímulo de dicha igualdad.

La fórmula, cuya evaluación jurídica debe efectuarse con relación a las referencias legales explicitadas en el apartado 1 de este informe, se articula en tres preceptos:





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

[121095]

*Artículo 102. Condiciones especiales de ejecución del contrato*

1. Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, siempre que no sean discriminatorias y se indiquen en el anuncio de licitación y en el pliego o en el contrato. Estas condiciones de ejecución podrán referirse, en especial, a consideraciones de tipo medioambiental o a consideraciones de tipo social, con el fin de promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, combatir el paro, favorecer la formación en el lugar de trabajo, u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo, definida en el artículo 125 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

2. Los pliegos o el contrato podrán establecer penalidades, conforme a lo prevenido en el artículo 196.1, para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución, o atribuirles el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos señalados en el artículo 206.h). Cuando su incumplimiento no se tipifique como causa de resolución del contrato, podrá ser considerado, en los términos que se establezcan en el pliego o en el documento contractual, como infracción grave a los efectos establecidos en el artículo 49.2.e).

*Artículo 196.1 Ejecución defectuosa y demora.*

Los pliegos o el documento contractual podrán prever penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme a los artículos 53.2 y 102.1. Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10 por 100 del presupuesto del contrato.

*Artículo 206 g). Causas de resolución*

El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales *esenciales* calificadas como tales en los pliegos o en el contrato.







MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

1121095

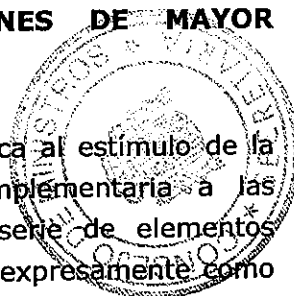
Cabe advertir que este planteamiento del anteproyecto que se entiende respetuoso con la Directiva 2004/18/CE, no se deduce del tenor literal del precepto que el artículo 102 traspone (artículo 26 de la Directiva) ni del elemento interpretativo, que resume sucintamente la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, contenido en el considerando 33 de la exposición de motivos de la misma Directiva. La mención expresa a un criterio social singular definido en los términos de habilitar a las entidades públicas a fijar condiciones de ejecución encaminadas a "eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer" en el mercado laboral, encuentra su apoyo y acomodo en las propias disposiciones del Tratado que se han reproducido en el apartado 1 de este informe.

En todo caso, el instrumento que el anteproyecto regula, permitirá estructurar políticas por los distintos organismos, o introducir con carácter general cláusulas-tipo en los pliegos de contratación, permitiendo una modulación flexible y adaptada a las diversas tipologías de contratos de medidas positivas de igualdad cuando se den los supuestos para ello.

Debe resaltarse, asimismo, la circunstancia que el incumplimiento de las condiciones de ejecución en los términos establecidos por los pliegos, conlleva sanciones que pueden llevar hasta la resolución del contrato, aunque las prestaciones definidas en el mismo sean cumplidas satisfactoriamente. Estas previsiones sitúan el impacto de esta medida positiva, en el ámbito más estricto del contenido obligacional del contrato, con lo que se configura una estructura legal donde el encaje de estas medidas trasciende de los pronunciamientos generales y los principios orientadores, para situarse en el núcleo de los procesos de contratación y ejecución de los contratos.

#### **4. OTRAS MEDIDAS INDUCTORAS DE SITUACIONES DE MAYOR EQUILIBRIO DE GÉNERO.**

Las novedades que plantea la Ley y su orientación básica al estímulo de la concurrencia y la transparencia, permiten, de forma complementaria a las reflexiones incluidas en el apartado anterior señalar una serie de elementos incluidos en el anteproyecto que aunque no están concebidos expresamente como medidas positivas orientadas a la consecución de la igualdad, contribuyen a





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

1121095

eliminar o matizar algunas rigideces de los actuales procesos de contratación, configurando un escenario más flexible y favorecedor de la igualdad.

### **1. Conciliación de la vida laboral y familiar.**

Uno de los ámbitos donde la igualdad "de iure" no se corresponde con la igualdad "de facto" como concepto sociológico, es el de las obligaciones familiares.

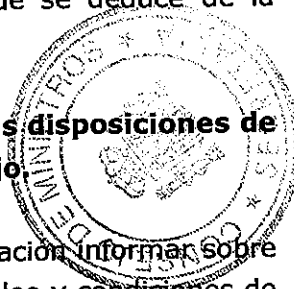
La aproximación a la igualdad pasa por establecer fórmulas de trabajo flexibles que permitan la conciliación entre la vida laboral y familiar. En este aspecto cabe destacar la decidida apuesta de la Ley para poner las bases para hacer efectiva la contratación electrónica y permitir un acceso inmediato a la información sobre los licitadores (ver artículo 309 y disposiciones adicionales decimoctava y decimonovena, entre otras), que permitiría un esquema de relaciones con la administración donde los horarios de coincidencia dejen de ser relevantes, posibilitando a los gestores que en las empresas se encarga de canalizar los procesos de contratación, organizar su tiempo de forma absolutamente flexible.

### **2. Prohibiciones de contratar.**

La Ley tipifica como prohibición de contratar (artículo 49) la existencia de sanción firme por infracción muy grave en materia social, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000. Este Real Decreto Legislativo en su artículo 8.12 tipifica como falta muy grave la discriminación por circunstancia de sexo, por lo que en ese aspecto el efecto expansivo de la sanción a través de la prohibición de contratar con las entidades del sector público, opera como un plus de protección sobre el que se deduce de la legislación laboral.

### **3. Información sobre las obligaciones relativas a las disposiciones de protección de empleo y las condiciones de trabajo.**

El artículo 103 de la Ley permite al órgano de contratación informar sobre las condiciones vigentes en materia de protección de empleo y condiciones de trabajo que deberán ser tenidas en cuenta por los licitadores a la hora de





121095

## MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

presentar sus ofertas. Esta disposición permite introducir de forma expresa en los procedimientos contractuales los aspectos singulares que la legislación laboral establezca en materia de igualdad.

**4. Principio de igualdad.**

El artículo 123 del anteproyecto consagra el tratamiento igualitario y no discriminatorio a todos los licitadores. Aunque se configura como un principio esencial de la contratación, su contenido y precisión permiten asumir que opera como un interdicto de las posibles discriminaciones por razón de género de los licitadores.

**5. Criterios de valoración de las ofertas.**

Se admite que en la valoración (Art. 134) pueda atenderse a criterios objetivos vinculados a la naturaleza del contrato que permitan considerar entre los elementos para adjudicar el contrato las características sociales de las prestaciones que se pretenden obtener cuando "respondan a necesidades ... propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a contratar". En determinado tipo de contratos, estas características pueden estar relacionadas con la protección de la igualdad de género.

Madrid, julio de 2006





MINISTERIO  
DE JUSTICIA

12 10 98

143370

LEGISLATURA

VIII

**PROYECTO DE LEY SOBRE CONCURRENCIA Y PRELACIÓN DE CRÉDITOS EN  
CASO DE EJECUCIONES SINGULARES**

**INFORME SOBRE IMPACTO DE GÉNERO**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, se señala que las medidas que se incluyen en este proyecto de ley no conllevan impacto alguno por razón de género.



**PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE RECONOCEN Y  
AMPLÍAN DERECHOS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS A  
FAVOR DE QUIENES PADECIERON PERSECUCIÓN Y  
VIOLENCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y LA  
DICTADURA.**

**INFORME SOBRE IMPACTO DE GÉNERO**

**INTRODUCCIÓN.**

La Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, modifica el apartado 2 del artículo 22 de la Ley 50/1997, del Gobierno, señalando que junto a la memoria, los estudios e informes sobre la necesidad del mismo, los anteproyectos de ley deberán ir acompañados de un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establecen. La misma Ley modifica el artículo 24.1.b de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, estableciendo la obligatoriedad de que los Reglamentos vayan también acompañados de este informe.

Las modificaciones citadas significan la asunción de una línea política que en la Unión Europea se consagra en el Tratado de Ámsterdam, dado que la eliminación de las desigualdades entre hombres y mujeres constituye una de las prioridades a tener en cuenta. La Cumbre europea que tuvo lugar en Niza supuso un avance más en la consecución de la igualdad.

Es evidente que decisiones políticas aparentemente inocuas, y sin connotaciones sexistas, pueden afectar de un modo distinto a hombres y mujeres, puesto que las políticas de igualdad que se están llevando a cabo en los últimos tiempos, no son en ocasiones todo lo eficaces que sería necesario para superar todas las situaciones de discriminación. De ahí que como se señala en la Exposición de Motivos de la Ley, la Comisión de la Unión Europea elaboró una Guía para la Evaluación del Impacto en Función del Género, que posibilitará la mejora de las políticas comunitarias, en pro de la auténtica igualdad entre hombres y mujeres.



En esta línea de actuación se inscribe la exigencia de elaborar el informe que ahora se aborda.

### CONSIDERACIONES PREVIAS.

El Anteproyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes sufrieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura tiene como principal objetivo el de reconocer o ampliar derechos a los hombres y mujeres que sufrieron persecución y violencia durante la guerra civil y la dictadura.

A tal fin la Ley reconoce y declara el carácter injusto de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal producidas por razones políticas o ideológicas durante la guerra civil, cualquiera que fuera el bando o la zona en la que se encontraran quienes la padecieron, haciendo extensiva esta declaración a las sufridas por las mismas causas durante la dictadura. Asimismo se reconoce también el derecho a obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal. Que podrán solicitar las personas afectadas y, en su defecto, su cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, sus ascendientes, sus descendientes y sus colaterales hasta el segundo grado.

El reconocimiento general previsto en el artículo 2 de la Ley y la Declaración de reparación y reconocimiento personal regulada en los artículos siguientes, sí puede valorarse desde una perspectiva de género, ya que, a pesar del tiempo transcurrido desde la terminación de la guerra civil un número importante de familiares de mutilados y fallecidos, en su mayoría mujeres, perciben pensiones especiales de guerra por lo que la norma les afecta, aunque solamente sea en lo que atañe al reconocimiento general, sin descartar, dada la importancia de la presencia de las mujeres en el movimiento asociativo que muchas hijas de fallecidos insten la Declaración de reparación y reconocimiento personal.

Aunque pudiera decirse que el Anteproyecto de Ley no tiene un enfoque especialmente orientado a su repercusión en materia de impacto de género, en cuanto que la ampliación de derechos que regula y las medidas que establece no distinguen entre hombres y



mujeres debe reseñarse que la reforma de la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, tendrá una incidencia mayor en las mujeres que en los hombres y que, por el contrario las modificaciones de la normativa de las indemnizaciones por tiempos de prisión, en lo que se refiere a la extensión del ámbito subjetivo de aplicación de la norma a los integrantes de los Batallones Disciplinarios de soldados trabajadores, afecta, como es obvio, solamente a los varones.

En cualquier caso, en la norma subyace un reconocimiento, que constituye una forma especial de homenaje, a todas las mujeres que vivieron y sufrieron por la guerra civil.

Durante muchos años una visión androcéntrica de la historia obvió el importante papel desempeñado por las mujeres durante la guerra civil y la posterior dictadura. Por eso hoy reviste la mayor importancia rescatar del olvido histórico su sufrimiento, su lucha por la supervivencia, su trabajo, su humillación, su miedo, su apuesta por una sociedad mejor en la que nunca más hubiera enfrentamientos por legar a sus hijos razones políticas o ideológicas, una sociedad paternalista y autoritaria.

#### **INCIDENCIA ESPECIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE PENSIONES COMO CONSECUENCIA DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y DE INDEMNIZACIONES POR PRIVACIÓN DE LIBERTAD.**

Se modifican las letras a) y c) del número 2 del artículo primero de la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, de reconocimiento de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social a favor de las viudas y demás familiares de los españoles fallecidos como consecuencia o con ocasión de la pasada guerra civil, suprimiéndose el límite temporal establecido actualmente que exige que el fallecimiento se produzca en el plazo de dos años, por lo que obliga en la actualidad a denegar pensiones a todos los fallecidos con posterioridad al 1 de abril de 1941.

Al suprimirse que las lesiones tengan origen en acción bélica, y sustituirlo por "originadas como consecuencia de la guerra", estas modificaciones permitirán la concesión de pensiones que en la actualidad se deniegan por las previsiones de la Ley.



El artículo 13 contiene una subida de determinadas pensiones de orfandad, y prevé que las mismas se revaloricen con arreglo a las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, y que sus titulares tengan derecho a percibir los complementos necesarios para alcanzar la cuantía mínima.

Teniendo en cuenta que el número total de pensiones a familiares de fallecidos como consecuencia de la guerra en la nómina de enero de 2006 es de 20.558, de las cuales 4.796 son de viudedad, 13.988 son de huérfanos no incapacitados (legislación vigente a 31-12-1984), 1.755 corresponden a huérfanos incapacitados, y 19 son abonadas a favor de padres, la incidencia de esta modificación para el colectivo de huérfanos/as no incapacitados sería muy importante y dado que los complementos para mínimos solamente se reconocen a titulares con muy bajas rentas o pensiones, el coste sería bajo. Esta circunstancia abona también la hipótesis de que las beneficiarias de esta medida serían preferentemente mujeres que hoy estarían alrededor de 65/67 años, y que, teniendo en cuenta las enormes dificultades que para vivir y estudiar tuvieron todos los hijos de republicanos en la dura posguerra española, agravados por el hecho de ser mujeres, no es aventurado suponer que, de tener pensiones o rentas, serían tan escasas, que podrán acogerse a los complementos económicos para alcanzar la cuantía mínima de pensión.

El artículo 14, "Modificación del ámbito de aplicación de las indemnizaciones a favor de quienes sufrieron prisión como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía", modifica la Ley 4/1990, de Presupuestos Generales del Estado para incluir en el ámbito de la Disposición Adicional Decimoctava de la misma a los que sufrieron privación de libertad en Batallones Disciplinarios, y a aquellos que a 31 de diciembre de 1990 tuvieron cumplida la edad de sesenta años.

Esta ampliación de los supuestos que dan derecho a la indemnización por tiempo de prisión, redundará en los causantes, hombres o mujeres, porque no es desdeñable el número de las que sufrieron prisión terminada la guerra, y en el cónyuge supérstite en caso de que los causantes hubiesen fallecido.





**OTRAS MEDIDAS CON IMPACTO DE GÉNERO.**

Mención especial debe hacerse al Reconocimiento a las Asociaciones de víctimas que se contiene en el artículo 11, y es importante destacar el hecho de que gran parte de los miembros de las Juntas Directivas de las Asociaciones son mujeres que, en muchos casos, ostentan la presidencia de las mismas.

27 de julio de 2006.





**INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO LEY ORGÁNICA  
POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/2001, DE 21 DE DICIEMBRE, DE  
UNIVERSIDADES**

El anteproyecto tiene entre sus objetivos que las Administraciones públicas, en coordinación con las universidades, establezcan programas específicos para que las víctimas de la violencia de género puedan recibir la ayuda personalizada y las adaptaciones necesarias en el régimen docente.

En cuanto a la regulación propiamente dicha, carece de incidencia directa en relación a la situación de ambos sexos en el sistema universitario.



LEGISLATURA  
VIII

121101



MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, TURISMO  
Y COMERCIO

14/102 8<sup>o</sup>

**INFORME SOBRE EL IMPACTO, POR RAZÓN DE GÉNERO, DEL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 34/1998, DE 7 DE OCTUBRE DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS CON EL FIN DE ADAPTARLA A LO DISPUESTO EN LA DIRECTIVA 2003/55/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL CONSEJO, DE 26 DE JUNIO DE 2003, SOBRE NORMAS COMUNES PARA EL MERCADO DEL GAS NATURAL.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, modificado por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, se informa que este proyecto de ley, que tiene por objeto realizar las modificaciones necesarias en la ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector de Hidrocarburos con el fin de realizar la transposición de la Directiva comunitaria 2003/55/CE que establece las normas comunes para el mercado interior de gas natural, no supone ni en el fondo ni en la forma, impacto de género alguno que pudiera favorecer situaciones de discriminación por razón de género.

Madrid, 20 de enero de 2006

LEGISLATURA

VIII

121102





MINISTERIO DE INDUSTRIA,  
TURISMO Y COMERCIO

143988

Informe de género Anteproyecto Ley transposición Directiva 2003.CE  
25.07.2006  
SGET/tb/pb

**INFORME DE GÉNERO DEL ANTEPROYECTO DE LEY POR LA QUE SE  
MODIFICA LA LEY 54/1997, DE 27 DE NOVIEMBRE, DEL SECTOR ELÉCTRICO  
PARA ADAPTARLA A LO DISPUESTO EN LA DIRECTIVA 2003/54/CE SOBRE  
NORMAS COMUNES PARA EL MERCADO INTERIOR DE LA ELECTRICIDAD.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1.b) de la Ley 50/1997, del Gobierno, modificado por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, este anteproyecto de Ley que tiene por objeto adaptar la normativa relativa al sector eléctrico a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, no supone, ni en el fondo ni en la forma, impacto de género alguno que pudiera favorecer situaciones de discriminación por razón de género.

LEGISLATURA

VIII

121103





12 1 10 5

**PROYECTO DE LEY SOBRE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN LOS SECTORES DEL AGUA, LA ENERGÍA, LOS TRANSPORTES Y LOS SERVICIOS POSTALES.**

**INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO**

(Art. 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre del Gobierno)

**1. ANTECEDENTES.**

**1.1 Referencias legales**

La norma que se analiza desde la perspectiva del impacto de género, debe inscribirse en unas coordenadas legales y en unas orientaciones explícitas definidas por el Consejo de Ministros por lo que el análisis de la regulación legal que se propone debe remitirse al ámbito delimitado por las normas comunitarias, que no puede ser desbordado por las iniciativas nacionales en el perímetro de la contratación pública donde operan las reglas y criterios impuestos por la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de contratación en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales y la Directiva 92/13/CE del Consejo, de 25 de febrero, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de las normas comunitarias en los procedimientos de adjudicación de contratos de las entidades que operan en dichos sectores.

Por enunciar solamente los elementos de contenido normativo que resultan aplicables a los procesos de contratación pública en relación con el impacto de género, y omitiendo referencias a múltiples declaraciones y orientaciones de organismos y conferencias internacionales sobre la materia, es necesario retener para verificar la coherencia de la ley con las disposiciones que son objeto de transposición, los siguientes elementos:

Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

**Artículo 2**

"La Comunidad tendrá por misión promover, mediante el establecimiento de un mercado común y de una unión económica y monetaria y mediante la realización de políticas o acciones comunes contempladas en los artículos 3 y 4, un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, un alto nivel de empleo y de protección social, la igualdad entre el hombre y la mujer, un crecimiento sostenible y no inflacionista, un alto grado de competitividad y de convergencia de los resultados económicos, un alto nivel de protección y de mejora de la calidad del medio ambiente, la elevación del nivel y la calidad de vida, la cohesión económica y social y la solidaridad entre los Estados miembros".

**Artículo 3.2**

"En todas las actividades contempladas en el presente artículo, la Comunidad se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad".

**Artículo 137.1**



121105



"Para la consecución de los objetivos del artículo 136, la Comunidad apoyará y completará la acción de los Estados miembros en los siguientes ámbitos:

- la mejora, en concreto, del entorno de trabajo, para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores;
- las condiciones de trabajo;
- la información y consulta a los trabajadores;
- la integración de las personas excluidas del mercado laboral, sin perjuicio de las disposiciones del artículo 150;
- la igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo".

#### Artículo 141.4

"Con objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre hombres y mujeres en la vida laboral, el principio de igualdad de trato no impedirá a ningún Estado miembro mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo menos representado el ejercicio de actividades profesionales o a evitar o compensar desventajas en sus carreras profesionales".

#### Directiva 2004/17/CE

##### Preámbulo de la Directiva. (Apartado 44)

"Las condiciones de ejecución de un contrato serán compatibles con la presente Directiva siempre y cuando no sean directa o indirectamente discriminatorias y se señalen en el anuncio utilizado como medio de licitación o en el pliego de condiciones. En concreto, pueden tener por objeto favorecer la formación profesional en el lugar de trabajo, el empleo de personas que tengan especiales dificultades de inserción, combatir el paro o proteger el medio ambiente. Como ejemplo se pueden citar, entre otras, las obligaciones -aplicables a la ejecución del contrato- de contratar a desempleados de larga duración o de organizar acciones de formación para los desempleados o los jóvenes, de respetar en lo sustancial las disposiciones de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el supuesto de que éstos no se hubieran aplicado en el Derecho nacional de contratar a un número de personas discapacitadas superior al que exige la legislación nacional".

#### Artículo 38 de la Directiva.

"Las entidades adjudicadoras podrán exigir condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato siempre que éstas sean compatibles con el Derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones. Las condiciones en que se ejecute un contrato podrán referirse, en especial, a consideraciones de tipo social y medioambiental".

#### 1.2 Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005.

La arquitectura legal descrita, con referencia al derecho comunitario, en el epígrafe anterior permitiría acoger en el anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público el planteamiento que el Gobierno plasmó en su Acuerdo de 4 de marzo de 2005, que en su apartado 1.1. establecía:

"Se acuerda incluir en los pliegos de cláusulas de contratación con la Administración Pública criterios que favorezcan la contratación de mujeres por parte de las empresas que concursan".

En anteproyecto de Ley -en los términos y condiciones que se explicarán posteriormente- contiene una fórmula para dar cobertura legal y dotar de garantías para su ejercicio a este mandato del Gobierno.



## 2. METODOLOGÍA

### 2.1. Consideraciones generales.

121105



El análisis de disposiciones complejas como la que mediante este informe se evalúa, desde la perspectiva del impacto de género, plantea dificultades que no pueden soslayarse con la aplicación de la "guía para la evaluación del impacto en función del género", documento más elaborado, aunque claramente insatisfactorio, de los que se conocen para satisfacer esta finalidad, y que la Comisión Europea aplica para evaluar sus políticas propias.

En efecto, la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2004/17/CE y la Directiva 92/13/CEE, no se formula como una iniciativa definida y estructurada para establecer una nueva política de contratación sino que, mantiene el hilo conductor y, en parte, las inercias, de los principios que vienen inspirando la contratación pública, desarrollando la aplicación de estos principios en fórmulas específicas orientadas a mejorar la eficiencia de los procedimientos y ampliar la concurrencia en los mercados en los que las entidades públicas realizan su actividad contractual.

Por lo tanto, la evaluación de una disposición de esta naturaleza que, además, se despliega sobre un amplio número de materias, no puede realizarse en los mismos términos que la de un proyecto de cooperación al desarrollo o de una disposición normativa que introduzca en el acervo legal una nueva política, definida de forma concreta.

## 2.2. Transversalidad.

El concepto de transversalidad se basa en la percepción de que "no basta con aplicar medidas positivas centradas en las mujeres, sino más bien (...) recurrir a todas las políticas y medidas generales con el fin específico de lograr la igualdad". Comunicación de la Comisión sobre integración de las mujeres y los hombres en el conjunto de las políticas y acciones comunitarias.

## 2.3. Igualdad.

Debe asumirse, al igual que la Comisión Europea, que la igualdad formal (de iure) no es sino una primera etapa hacia la igualdad formal (de facto), por lo que ciertas medidas incentivadoras, acciones positivas, pueden ser necesarias para compensar discriminaciones pasadas y presentes.

## 2.4. Comprobación de la pertinencia con respecto al género.

Las estadísticas de la contratación pública no disponen de información adecuada para confirmar de forma cuantitativa la pertinencia del análisis por razón de género. En concreto las dos cuestiones que plantea la "guía para la evaluación del impacto por razón de género" y cuya respuesta positiva daría lugar a analizar el impacto potencial son las siguientes:

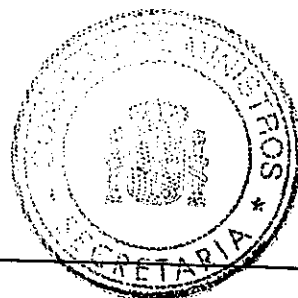
- ¿La propuesta va dirigida a uno o más grupos objetivo? ¿Afectará a la vida diaria de una o de varias partes de la población?
- ¿Existen en este ámbito diferencias entre las mujeres y los hombres (por lo que se refiere a los derechos, los recursos, la participación, las normas y los valores vinculados a la pertenencia a un sexo)?

La respuesta a estas preguntas, aunque de forma aproximada y sin apoyo en precisiones estadísticas, debe ser positiva en todos los casos. La dimensión de la contratación pública cuyas transacciones representan aproximadamente un 13% del PIB nacional, implica que su regulación afecta -de forma directa o indirecta- a una porción significativa de la población. Igualmente, dada la amplitud con que se proyecta la contratación sobre la actividad económica y los mercados debe asumirse que, en general, las diferencias entre hombres y mujeres detectadas en los mercados y en el mercado de trabajo en particular que sucintamente están expuestas en el preámbulo al Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, se reproducen de forma aproximada en los mercados a los que el sector público demanda bienes y servicios.

## 2.5. Alcance del presente informe.

A la vista de consideraciones precedentes se puede concluir.

- El informe de género es pertinente en este caso





- Existen dificultades insoslayables a corto plazo, dada la ausencia de información estadística específica, para identificar con precisión los colectivos singulares, dentro de los grandes agregados de género, que pueden verse afectados por la norma.
- Se puede verificar que la disposición cumple -de forma compatible con la legislación comunitaria- con los objetivos de transversalidad en la media que introduce medidas positivas orientadas a la igualdad en un ámbito de regulación de medidas generales.
- Se puede analizar el impacto de otras medidas que favorecen la incorporación de la mujer a los procesos de contratación.

### 3. MEDIDA POSITIVA

El anteproyecto pretende proporcionar una cobertura legal a los planteamientos en materia de contratación pública plasmados en el citado Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005. Esta iniciativa, implica igualmente desde el punto de vista de la definición comunitaria de transversalidad, la incorporación en un ámbito legal ajeno al de regulación específica de la igualdad entre mujeres y hombres, de medidas de estímulo de dicha igualdad.

La fórmula, cuya evaluación jurídica debe efectuarse con relación a las referencias legales explicitadas en el apartado 1 de este informe, se articula en el siguiente precepto:

"Artículo 88. Condiciones de ejecución del contrato.

1. Las entidades adjudicadoras podrán establecer condiciones especiales relativas a la ejecución del contrato siempre que sean compatibles con el Derecho comunitario y se indiquen en el anuncio utilizado como medio de convocatoria de licitación o en el pliego de condiciones.
2. Las condiciones que regulen la ejecución de un contrato podrán referirse, en particular, a consideraciones de tipo social y medioambiental. En concreto pueden tener por objeto favorecer la formación profesional en el lugar de trabajo, el empleo de personas que tengan especiales dificultades de inserción, combatir el paro, eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer o proteger el medio ambiente".

### 4. OTRAS MEDIDAS INDUCTORAS DE SITUACIONES DE MAYOR EQUILIBRIO DE GÉNERO.

Las novedades que plantea la Ley y su orientación básica al estímulo de la concurrencia y la transparencia, permiten, de forma complementaria a las reflexiones incluidas en el apartado anterior señalar una serie de elementos incluidos en el anteproyecto que aunque no están concebidos expresamente como medidas positivas orientadas a la consecución de la igualdad, contribuyen a eliminar o matizar algunas rigideces de los actuales procesos de contratación, configurando un escenario más flexible y favorecedor de la igualdad.

#### 4.1 Conciliación de la vida laboral y familiar.

Uno de los ámbitos donde la igualdad "de iure" no se corresponde con la igualdad "de facto" como concepto sociológico, es el de las obligaciones familiares.

La aproximación a la igualdad pasa por establecer fórmulas de trabajo flexibles que permitan la conciliación entre la vida laboral y familiar. En este aspecto cabe destacar la decidida apuesta de la Ley para poner las bases para hacer efectiva la contratación electrónica y permitir un acceso inmediato a la información sobre los licitadores que permitiría un esquema de relaciones con la administración donde los horarios de coincidencia dejen de ser relevantes, posibilitando a los gestores que en las empresas se encarga de canalizar los procesos de contratación, organizar su tiempo de forma absolutamente flexible.

#### 4.2 Información sobre las obligaciones relativas a las disposiciones de protección de empleo y las condiciones de trabajo.

El artículo 90 de la Ley permite al órgano de contratación informar sobre las condiciones vigentes en materia de protección de empleo y condiciones de trabajo que deberán ser tenidas en cuenta por los licitadores a la hora de presentar sus ofertas. Esta disposición permite introducir de forma expresa en los procedimientos contractuales los aspectos singulares que la legislación laboral establezca en materia de igualdad.







#### 4.3 Principio de igualdad.

El artículo 19 del anteproyecto consagra el tratamiento igualitario y no discriminatorio a todos los licitadores. Aunque se configura como un principio esencial de la contratación, su contenido y precisión permiten asumir que opera como un interdicto de las posibles discriminaciones por razón de género de los licitadores.

#### 4.4 Criterios de valoración de las ofertas.

Se admite que en la valoración pueda atenderse a criterios objetivos vinculados a la naturaleza del contrato que permitan considerar entre los elementos para adjudicar el contrato las características sociales de las prestaciones que se pretenden obtener. En determinado tipo de contratos, estas características pueden estar relacionadas con la protección de la igualdad de género.





LEGISLATURA

VIII

121106

**INFORME SOBRE IMPACTO DE GÉNERO DEL ANTEPROYECTO DE LEY  
SOBRE REGULARIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES DE  
EMBARCACIONES PESQUERAS EN EL REGISTRO DE BUQUES Y  
EMPRESAS NAVIERAS Y EN CENSO DE LA FLOTA PESQUERA OPERATIVA.**

Este anteproyecto de ley no contiene ninguna medida discriminatoria por razón de género, ni produce ningún impacto en la posición jurídica de hombres y mujeres en el ámbito de las materias reguladas por esta norma. De ello se informa en virtud del artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.





MINISTERIO  
DE TRABAJO  
Y ASUNTOS SOCIALES

121/110 8<sup>e</sup>

155914

SECRETARIA DE  
ESTADO DE LA  
SEGURIDAD SOCIAL

LEGISLATURA

VIII

121110

**INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE  
SE PROCEDE A LA INTEGRACIÓN DE LOS TRABAJADORES AGRARIOS  
POR CUENTA PROPIA DEL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO DE LA  
SEGURIDAD SOCIAL EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE LA SEGURIDAD  
SOCIAL DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS.**



*Junio 2006*

CORREO ELECTRÓNICO

[gabinete-sess@mtas.seg-social.es](mailto:gabinete-sess@mtas.seg-social.es)

C/ AGUSTIN DE BETHENCOURT, 4  
28071 MADRID  
TEL: 91 363 00 25  
FAX: 91 363 03 10

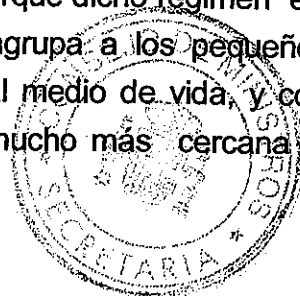
121110

LEGISLATURA  
VIII**1. SITUACIÓN DE PARTIDA.****a) Información estadística.**

El anteproyecto de Ley por la que se procede a la integración de los trabajadores agrarios por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS) en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA), va dirigido a adaptar a la actual realidad productiva del campo el concepto de la pequeña explotación agraria familiar, a efectos de la inclusión de sus componentes en el sistema de la Seguridad Social. Y también tiene como objeto incentivar sus potencialidades como institución básica sobre la que se apoya el modelo productivo agrario en nuestro país y que reviste un gran interés para el equilibrio social y territorial del medio rural.

Bajo esta perspectiva, y a la hora de verificar el impacto de género de la futura norma, puede realizarse una primera aproximación respecto de la situación de partida sobre la que se va a actuar tomando en consideración los datos generales que ofrece el Censo Agrario, según el cual, en España, el número de titulares de explotaciones con tierras supera el 1.700.000, de los que un 70,4 por 100 son hombres y un 29,6 por 100 mujeres. Dicho Censo, que refleja un claro proceso de envejecimiento demográfico en este ámbito, pone, igualmente, de manifiesto que 1.300.000 titularidades corresponden a explotaciones marginales o secundarias, frente a poco más de 400.000 de carácter viable o próximo a la viabilidad económica. Finalmente, también hay que destacar que, mientras los hombres son titulares de esta última clase de explotaciones en un 82 por 100 de los casos, las mujeres sólo lo son en un 18 por 100.

No obstante estos datos, la obtención de una visión clara sobre la realidad de la participación de mujeres y hombres en la explotación agraria familiar, exige realizar un análisis de la distribución por sexos de la afiliación a la sección de trabajadores por cuenta propia del REASS. Ello es así porque dicho régimen es, hoy en día, el mecanismo básico de cobertura que agrupa a los pequeños agricultores que se dedican a la actividad como principal medio de vida, y con fines de mercado, lo que permite conocer de manera mucho más cercana la





evolución de la realidad del colectivo cuyo impulso constituye el objetivo al que va dirigido el presente proyecto.

La mencionada sección, que agrupa a las personas que son titulares de pequeñas explotaciones y realizan actividades agrarias de forma personal y directa, así como los familiares cercanos que colaboran en la actividad, presenta la siguiente evolución en los últimos años:

<b>AFILIACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO</b> <b>Trabajadores por cuenta propia</b>					
FECHA	HOMBRES		MUJERES		TOTAL
	Número	%	Número	%	
12.98	234.287	66,10	120.166	33,90	354.453
12.99	225.769	66.19	115.340	33.81	341.109
12.00	215.143	66.04	110.657	33.96	325.800
12.01	203.112	65.76	105.741	34.24	308.853
12.02	194.887	65.59	102.234	34.41	297.121
12.03	189.014	65.25	100.654	34,75	289.668
12.04	181.119	64.90	97.939	35.10	279.058
12.05	172.533	64.83	93.614	35.17	266.147

Por otro lado, y verificada la distribución por edad del colectivo afiliado a diciembre de 2005, hay que destacar que son mayores de 40 años un 74,94 por 100 de los hombres y un 86,73 por 100 de las mujeres.

Estos datos ponen de manifiesto que en los últimos ocho, junto a una reducción constante en el número global de afiliados que afecta a ambos sexos, la





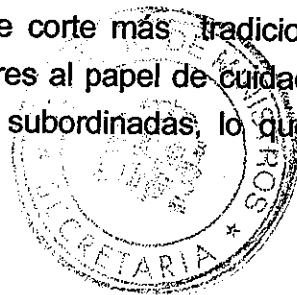
proporción entre hombres y mujeres incorporados a las explotaciones familiares agrarias ha experimentado una muy pequeña variación, con un incremento porcentual por lo que respecta a las mujeres de apenas 1,27 puntos. Esta variación, al producirse dentro de un contexto de caída generalizada del número de afiliaciones y de una muy escasa presencia de agricultoras jóvenes, carece de relevancia y, en buena medida, sólo parece poder explicarse por factores mecánicos o de tipo biológico (por ejemplo, que la desaparición de hombres titulares de edad avanzada haya hecho que sus esposas hayan decidido continuar con la actividad).

Frente a ello, en el conjunto de la Seguridad Social, la participación femenina ha pasado de un 36,47 por 100, en diciembre de 1998, a un 41,21 por 100, en diciembre de 2005, lo que supone un incremento de 4,74 puntos porcentuales, dentro, además, de un contexto general de permanente aumento de la afiliación, que ha permitido incorporar al sistema a 2.443.017 mujeres.

De todo esto se desprende que los avances producidos en la búsqueda de la igualdad de género en el mercado de trabajo no han tenido reflejo en el sector de la pequeña explotación agraria familiar, donde ha quedado perfilada una tendencia que, en ningún caso, evidencia una mejora de la situación de las mujeres del campo.

Dicha tendencia puede explicarse, en primer lugar, por la problemática genérica que afecta a la actividad agraria, donde se han producido importantes transformaciones socio-económicas que han creado dificultades para la viabilidad de muchas explotaciones, dificultades que, muy a menudo, han derivado en el abandono de la explotación y en la ausencia de renovación generacional como consecuencia del escaso atractivo que ofrece el desarrollo de la actividad en las actuales condiciones.

Pero, en segundo lugar, también hay que tener en cuenta las características propias del medio rural, que se apoya en valores de corte más tradicional y conservador que, frecuentemente, relegan a las mujeres al papel de cuidadoras del hogar y al desempeño de tareas secundarias y subordinadas, lo que, en





muchas ocasiones, supone que sólo dediquen una pequeña porción de su tiempo a la actividad agraria.

En sentido contrario, y por esas mismas circunstancias, el hombre está mucho más presente en la explotación agraria, disfrutando por ello de una mayor disponibilidad de recursos, tanto de presente (gestión de la renta derivada de la actividad) como de futuro (acceso a prestaciones sociales).

Se ha consolidado, de esta forma, un entorno de claro desequilibrio en la posición de ambos sexos, que, acentuado por la reducción de la actividad, propicia un alto grado de dependencia y de falta de recursos propios suficientes por lo que respecta a las mujeres, lo que afecta claramente a su autonomía y a sus posibilidades de promoción y desarrollo.

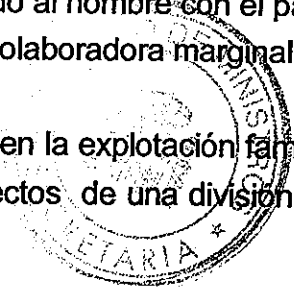
Y esta situación, al producirse en un entorno de crisis del sector, es susceptible llegar a perpetuarse, con las consecuencias negativas de toda índole que ello traería consigo, tanto para la modificación de la situación discriminatoria que vive la mujer en el campo, como para la garantía futura de una actividad agraria económica y socialmente sostenible, en cuyo logro la presencia femenina constituye un factor fundamental.

#### **b) Información cualitativa sobre roles y estereotipos de género.**

La situación discriminatoria que afecta en todos los ámbitos de la vida a las mujeres se acrecienta en el sector agrario, donde, por sus singulares características, perviven con mayor vigor los estereotipos clásicos que definen los roles masculinos y femeninos en cuanto al desempeño de actividades.

Unos estereotipos que van pasando de padres a hijos y que, generalmente, identifican los aspectos básicos del modo de vida en términos que dan preeminencia a lo masculino sobre lo femenino, asociando al hombre con el papel de proveedor básico y a la mujer con el de cuidadora y colaboradora marginal.

Bajo esa perspectiva, la mujer que realiza una actividad en la explotación familiar agraria suele experimentar de forma intensificada los efectos de una división del





12 1110

trabajo que diferencia y segrega el desarrollo de tareas en función del sexo. Ello significa que su aportación tiene un carácter subordinado y ajeno a la toma de decisiones, lo que incide en la menor visibilidad y reconocimiento del trabajo femenino.

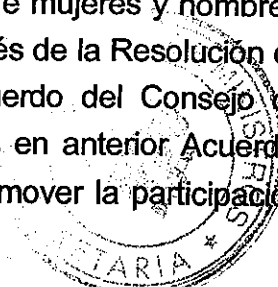
Dentro de este entorno, las actitudes igualitarias, mediante las que se muestra una predisposición a que las mujeres cambien su rol tradicional de madres y de amas de casa, se abren camino con enorme dificultad en el mundo rural, donde, muy a menudo, se considera extraño que una mujer se involucre en el desarrollo de la actividad sin la tutela de su marido, padre o hermano, y donde sólo suele contemplarse esa posibilidad de forma natural cuando se producen situaciones excepcionales, como es el caso del fallecimiento del titular de la explotación y la ausencia de familiares varones.

**c) Identificación de los objetivos de las políticas de igualdad de oportunidades.**

Los objetivos de participación sociolaboral de las políticas de igualdad indican que es necesario promover una presencia equilibrada y sin discriminaciones de las mujeres y de los hombres en todas las ramas de actividad y en todos los niveles de responsabilidad, haciendo hincapié en el sector agrario.

Así lo demuestra, en primer lugar, el IV Plan para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, que incluye directrices dirigidas a ofrecer oportunidades de empleo y autoempleo a las mujeres rurales y a promover su implicación en la actividad empresarial mediante programas específicos que eviten el despoblamiento del campo y contribuyan al desarrollo del sector.

En segundo lugar, también hay que destacar la Orden PRE/525/2005, de 7 de marzo, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros mediante el que se adoptan medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres. Esta iniciativa, que ha recibido un renovado impulso a través de la Resolución de 17 de marzo de 2006, por la que se transcribe el Acuerdo del Consejo de Ministros sobre implementación de las medidas recogidas en anterior Acuerdo, incluye referencia expresa a actuaciones destinadas a promover la participación







12 11 10

plena de la mujer en la economía y sociedad rurales, dentro de un entorno general de desarrollo rural y de la agricultura.

Sobre estos aspectos incide, en tercer lugar, la futura Ley Orgánica de igualdad entre mujeres y hombres, donde se establecen los criterios generales de actuación de los Poderes Públicos en la materia. Entre ellos, destaca el relacionado con la integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral y social, con el fin de evitar la segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas, así como potenciar el crecimiento del empresariado femenino y el valor del trabajo de las mujeres, prestándose particular atención, en materia de acción administrativa, al desarrollo de medidas de acción positiva en el ámbito de las explotaciones agrarias.

Finalmente, y por lo que respecta al área de la Seguridad Social, de la que dependen las políticas básicas en materia de bienestar, existen unos claros objetivos dirigidos a propiciar la igualdad y la garantía de los derechos sociales de las mujeres, así como a facilitar su incorporación a las diferentes ramas de la actividad, con particular incidencia en el sector agrario, dentro de un contexto global de modernización de los mecanismos de cobertura de dicho sector.

Destaca, a este respecto, el reciente Acuerdo sobre encuadramiento y cotización a la Seguridad Social de los trabajadores agrarios por cuenta propia, formalizado el 20 de octubre de 2005 por los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales y de Agricultura, Pesca y Alimentación con los representantes de las Organizaciones Agrarias, que marca las pautas a seguir en la materia e incide de forma especial en el impulso de la presencia de las mujeres en las explotaciones familiares, como mecanismo necesario para avanzar en la búsqueda de la igualdad entre sexos en dicho sector y para garantizar su pervivencia futura.

## 2. PREVISIÓN DE RESULTADOS.

### a) Resultados de la aplicación de la norma.





121110

La futura Ley, tiene como objeto el establecimiento de mecanismos que, desde el área de la Seguridad Social, coadyuven a la superación de las dificultades actualmente existentes para la viabilidad y desarrollo de las pequeñas explotaciones familiares agrarias, participando en la corrección de la tendencia al abandono de la actividad y a la desaparición del relevo generacional.

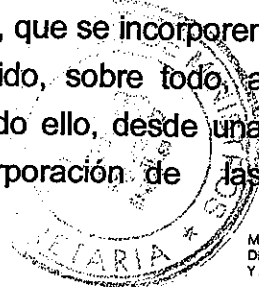
A estos efectos, se pretende incidir en la movilización de las potencialidades del capital humano y productivo existente en dicho ámbito, a través de una regulación modernizadora que, entre otros aspectos, presta atención a la incentivación de la presencia femenina en las explotaciones familiares, como instrumento de primera importancia para lograr el objetivo planteado y para progresar en la búsqueda de mayores niveles de igualdad, participación y autonomía de la mujer en el sector agrario.

Todo ello, desde una perspectiva que permita incrementar, tanto su participación en la economía agraria como sus niveles de protección social, así como un mayor equilibrio en relación con la posición que ocupan los hombres.

Dentro de este contexto, las iniciativas recogidas en la futura Ley resultan de aplicación tanto a las mujeres como a los hombres. Sin embargo, dada la situación de partida descrita en el punto 1, donde han quedado constatadas las grandes diferencias existentes, se considera que dichas iniciativas van a tener una incidencia mucho mayor en las mujeres y servirán para avanzar en la superación de las discriminaciones a que se encuentran sometidas. De hecho, han sido, en buena medida, diseñadas teniendo ese claro objetivo como referente.

Más específicamente:

- El establecimiento, con carácter permanente, de una reducción del 30 por 100 en la cotización a la Seguridad Social durante los tres primeros años para los cónyuges y descendientes de los titulares de la explotación, que se incorporen a la actividad con 40 o menos años de edad, va dirigido, sobre todo, a incrementar la presencia de las mujeres en el sector. Todo ello, desde una perspectiva que pone el énfasis en incentivar la incorporación de las



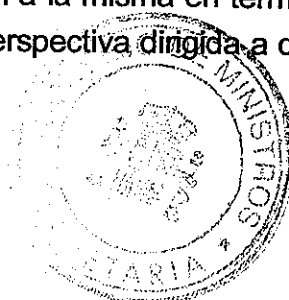


12 1110

agricultoras jóvenes, como garantía del mantenimiento a medio y largo plazo de las explotaciones agrarias y de la viabilidad del sector.

- La modernización del concepto de pequeña explotación familiar agraria a efectos de la incorporación de sus miembros a la Seguridad Social, que posibilitará la asunción y desarrollo de nuevas oportunidades productivas, tiene en cuenta la noción de cotitularidad como medio para una más ventajosa aplicación de sus beneficios. Ello supondrá un incentivo para que la incorporación de las mujeres a la explotación se realice desde una perspectiva que les permita asumir un papel cada vez mayor en la toma de decisiones y en la dirección de la actividad, resaltando su carácter de protagonista necesario en la creación de riqueza en el sector, con el consiguiente incremento de su participación en el reparto de la misma. Una creación de riqueza susceptible de generarse en mayor medida a través de la inclusión, dentro de la definición de actividad agraria, de actividades relacionadas con la conservación del espacio natural y protección del medio ambiente, al igual que las turísticas, cinegéticas y artesanales realizadas en la explotación, con lo que se crearán nuevas oportunidades de las podrán aprovecharse, en particular, las mujeres.
- La incorporación, a efectos de Seguridad Social, de los miembros de la pequeña explotación familiar agraria dentro del RETA, mediante un concreto sistema especial que tiene en cuenta su realidad específica y que les permitirá, con un menor esfuerzo de cotización, disfrutar de unos niveles de cobertura similares a los del resto de trabajadores incluidos en dicho régimen, va a beneficiar de manera particular a las mujeres y a garantizar la generación de derechos sociales propios que aseguren su nivel de rentas futuro y, con todo ello, mayores niveles de autonomía.

La norma, en una palabra, contempla las situaciones discriminatorias que afectan a la mujer en la actividad agraria y la necesidad de superarlas mediante el desarrollo de iniciativas que promuevan su incorporación a la misma en términos de mayor equilibrio entre sexos. Todo ello, desde una perspectiva dirigida a dotar de un nuevo impulso a la explotación familiar agraria.





12 1110

**b) Incidencia sobre los roles y estereotipos de género.**

Es de esperar que con las medidas descritas pueda colaborarse desde la Seguridad Social a la paulatina superación de los roles y estereotipos dominantes en el sector, a los que se ha hecho referencia en el apartado b) del punto 1.

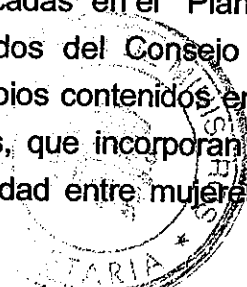
A estos efectos, se considera que la adquisición de un mayor grado de protagonismo femenino en la actividad agraria y en la toma de decisiones en la explotación familiar, será útil para avanzar en la eliminación de los conceptos tradicionales en cuanto a la división del trabajo por razón de sexo y al papel secundario y subordinado que se otorga, muy a menudo, en ese ámbito a la mujer.

Dicha transformación, dado lo arraigado de determinados valores y costumbres tradicionales en el mundo rural, parece que comenzaría a dejarse sentir con claridad a medio plazo, siendo necesario, para la consolidación de un cambio de tendencia, que las medidas señaladas vengan acompañadas de otras en relación al resto de problemas que afectan al campo español.

**c) Contribución a los objetivos de las políticas de igualdad de oportunidades.**

Con la entrada en vigor de las medidas incluidas en el proyecto normativo se estará dando cumplimiento, desde el área de la Seguridad Social, a los objetivos de las políticas de igualdad relacionados con el tema y contenidos en el apartado c) del punto 1.

Por un lado, se potenciará la eficacia de las directrices marcadas en el Plan de Igualdad de Oportunidades y en los recientes Acuerdos del Consejo de Ministros, y se avanzará en una línea acorde con los principios contenidos en la futura Ley Orgánica de igualdad entre mujeres y hombres, que incorporan un bagaje global de iniciativas destinado a favorecer la igualdad entre mujeres y





12 1 1 1 0

hombres en los diferentes ámbitos, así como una participación más equilibrada en todas las ramas de la actividad y en todos los niveles de responsabilidad, con particular atención al ámbito rural.

Y, por otro lado, la futura Ley es consecuencia directa del Acuerdo formalizado el 20 de octubre de 2005 por los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales y de Agricultura, Pesca y Alimentación con los representantes de las Organizaciones Agrarias. Consecuentemente, va a erigirse en el instrumento para la plasmación normativa del contenido del citado Acuerdo, con especial énfasis en el impulso de la presencia de las mujeres en las explotaciones agrarias familiares, como mecanismo para avanzar en la búsqueda de criterios de igualdad entre sexos en el sector y para garantizar su viabilidad y pervivencia futuras.

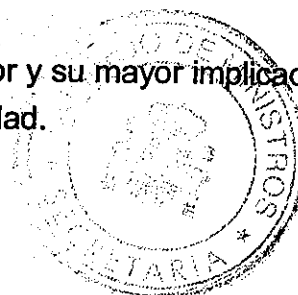
### 3. VALORACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO.

Teniendo en cuenta la situación de partida descrita en el punto 1 y la previsión de resultados contenida en el punto 2, se considera que la futura norma podrá actuar de forma positiva en relación a la eliminación de desigualdades entre mujeres y hombres en el ámbito agrario y al cumplimiento de las políticas de igualdad.

Ello es así porque incide en la modificación de los roles y estereotipos de género e interviene sobre las causas que dificultan un equilibrado acceso a la actividad agraria por parte de las mujeres, conteniendo medidas que, además, facilitarán un más efectivo impacto de género de otras disposiciones normativas en el medio rural.

En concreto, y teniendo en cuenta la posición de partida claramente deficiente que se da en relación con la participación de femenina en la actividad agraria, la futura Ley incluye medidas dirigidas:

- A incrementar la presencia de las mujeres en el sector y su mayor implicación en la toma de decisiones y en la dirección de la actividad.





12 1110

- A resaltar el carácter de las mujeres como protagonistas necesarias para la creación de riqueza en el sector, con el consiguiente incremento en su participación en el reparto de la misma.
- A mejorar la garantía de derechos sociales propios para las mujeres en el ámbito agrario, asegurando su nivel de rentas futuro y un mayor nivel de autonomía a medio y largo plazo.





MINISTERIO  
DE JUSTICIA

121/III 8<sup>c</sup>

155915

SUBSECRETARÍA

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

**PROYECTO DE LEY GENERAL DE LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA**

**INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la normativas del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, debe señalarse que las medidas que se incluyen en este Anteproyecto no conllevan impacto alguno por razón de género.

LEGISLATURA  
VIII

1121111





LEGISLATURA

VIII

12 1 1 1 1

**INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE LA  
LECTURA, DEL LIBRO Y DE LAS BIBLIOTECAS.**

El presente informe se emite a efectos de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 22 de la Ley 50/1997, tal como fue redactado por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.

El Tratado de Ámsterdam formaliza el compromiso de integración mencionando explícitamente que *"la Comunidad se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad"* entre las tareas y los objetivos de la Comunidad (artículos 2 y 3), teniendo en cuenta, igualmente, la Decisión del Consejo de 20 de diciembre de 2000, por la que se establece un programa de acción comunitaria sobre la estrategia a seguir en materia de igualdad entre hombres y mujeres (2001-2005).

La Comisión de la Unión Europea ante la constatación de que decisiones políticas que, en principio, parecen no sexistas, pueden tener un diferente impacto en las mujeres y en los hombres, buscando la realización del compromiso de la Unión Europea de integrar la perspectiva de género en el conjunto de las políticas comunitarias elaboró una «Guía para la Evaluación del Impacto en Función del Género» diseñada para proyectarse en el seno de la Comisión con objeto de evitar consecuencias negativas no intencionales que favorezcan situaciones de discriminación y para mejorar la calidad y la eficacia de las políticas comunitarias.







Por lo tanto, es preciso ver si la dimensión de género es pertinente, y una vez constado que de la propuesta no se desprenden diferencias entre las mujeres y los hombres en lo que se refiere a los derechos, los recursos, la participación, las normas y los valores vinculados a la pertenencia a un sexo, se considera que el citado proyecto normativo carece de impacto en función del género.

A este respecto, conviene tener presente que la realidad española actual en el ámbito de la lectura, el libro y las bibliotecas presenta un panorama que permite cierto optimismo, con una cifra de lectores en 2005 que confirma la tendencia alcista y supera por primera vez el 57% de la población (entre lectores frecuentes y ocasionales), según datos del Estudio: "*Hábitos de lectura y compra de libros 2005*", realizado por la Federación de Gremios de Editores de España, con el patrocinio del Ministerio de Cultura.

El análisis de esta población lectora nos revela que la mayor proporción de *lectores frecuentes* (los que leen al menos una vez a la semana) son jóvenes de 14 a 24 años, con estudios secundarios o universitarios, estudiantes, residentes en municipios de más de un millón de habitantes y de clase social alta-media alta. Por su parte, los *lectores ocasionales* (los que leen alguna vez al mes o al trimestre) son personas de hasta 44 años, con estudios secundarios, y estudiantes. Por último, los *no lectores* responden al perfil de personas de 55 y más años, con estudios primarios o menos, amas de casa y jubilados, residentes en municipios de menos de 50.000 habitantes y de clase social media baja – baja.

Por su parte, la diferenciación por sexo de los lectores arroja un resultado apenas separado por tres puntos, dado que el 58,8% de las mujeres se declara lectora, frente al 55,3% de los hombres. Igualmente, cerca del 16% tanto de las mujeres como de los hombres son lectores ocasionales. De la misma forma, las





horas semanales dedicadas a la lectura en España son 5,4 horas y es igual en ambos sexos.

En lo que se refiere a la compra de libros, cabe señalar que el 56,3% de la población de 14 y más años ha comprado al menos un libro en el último año, según los datos del citado estudio, en el que se establece también que la media de libros comprados en 2005 ha sido de 12.

Finalmente, el estudio de la asistencia a bibliotecas por parte de la población lectora revela que, aunque la asistencia se ha incrementado desde un 24,8% en 2003 a un 28,5% en 2005, la situación todavía permite avanzar en este campo. Asimismo conviene significar que los últimos datos revelan que el 84,1% de la población escolar de 6 a 12 años declara leer más de veinte minutos diarios libros no de texto.

Estos datos alumbran expectativas en torno a la lectura que por otra parte es indudablemente considerado como referente de valores cívicos en todos los órdenes.





MINISTERIO  
DE JUSTICIA

LEGISLATURA  
VIII

121/113

8<sup>a</sup>

156711

121113

PROYECTO DE LA LEY DE REFORMA DE LA LEY DEL REGISTRO CIVIL EN  
MATERIA DE INCAPACITADOS, CARGOS TUTELARES Y ADMINISTRADORES  
DE PATRIMONIO PROTEGIDO Y DE LA LEY 41/2003, DE 18 DE NOVIEMBRE,  
SOBRE PROTECCIÓN PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS CON  
DISCAPACIDAD Y DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL, DE LA LEY DE  
ENJUICIAMIENTO CIVIL Y DE LA NORMATIVA TRIBUTARIA CON ESTA  
FINALIDAD

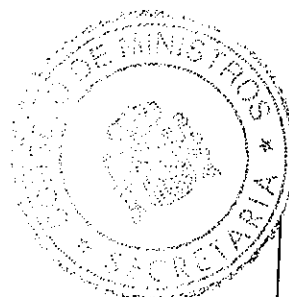
### INFORME SOBRE IMPACTO DE GÉNERO

El presente informe se eleva en cumplimiento de lo previsto por el artículo 24.1 b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

El presente anteproyecto de ley tiene por objeto adecuar la organización del Registro Civil para que éste pueda actuar como un mecanismo de publicidad fiable que permita supervisar la efectiva aplicación de la normativa relativa a la incapacitación judicial de personas que no puedan gobernarse por si mismas, así como facilitar la efectiva puesta en práctica de la figura del patrimonio protegido como mecanismo de protección patrimonial de las personas con discapacidad.

El contenido de dicho proyecto normativo, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente, no promueve consecuencias negativas que favorezcan situaciones de discriminación entre mujeres y hombres.

Madrid, 8 de noviembre de 2006



SAN BERNADO 45  
28015 MADRID



112 1114

## PROYECTO DE LEY DE LA CARRERA MILITAR

### INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO

#### 1. Identificación de la situación de partida.

Los Ejércitos españoles han estado integrados históricamente por hombres. De hecho, no es hasta prácticamente la última década del siglo pasado cuando las primeras mujeres acceden con condición militar a las Fuerzas Armadas.

Concretamente, en 1988 se regula la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas a través del Real Decreto-Ley 1/1988, de 22 de febrero, que permitía su "*acceso inmediato*" a 24 diferentes cuerpos y escalas y preveía una "*incorporación progresiva*" a las denominadas "armas combatientes" que se produciría a partir de la entrada en vigor de la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional.

Sin embargo aún se mantenía la limitación de su acceso a la categoría de tropa y marinería profesionales que se suprimió en 1992, con el Real Decreto 984/1992, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de tropa y marinería profesionales en las Fuerzas Armadas, pero con restricciones para ocupar determinados destinos. Concretamente, los de tipo táctico u operativo en Unidades de la Legión, Operaciones Especiales, Paracaidistas y Cazadores Paracaidistas. Tampoco podía formar parte de las Fuerzas de Desembarco, dotación de Submarinos y Buques cuyas condiciones estructurales no permitieran el alojamiento de la mujer en condiciones adecuadas.

Con la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, se produce la plena equiparación entre el hombre y la mujer en el ámbito castrense, suprimiéndose cualquier tipo de limitación.

Se aprecia que la incorporación de la mujer en las Fuerzas Armadas españolas ha sido objeto de una evolución normativa, gradual y progresiva.

No obstante, para la efectiva consecución de esta igualdad, se han efectuado y se están desarrollando en el Ministerio de Defensa diferentes iniciativas normativas y actuaciones dirigidas a favorecer la incorporación y permanencia de la mujer en las Fuerzas Armadas y evitar cualquier tipo de discriminación por razón de género.



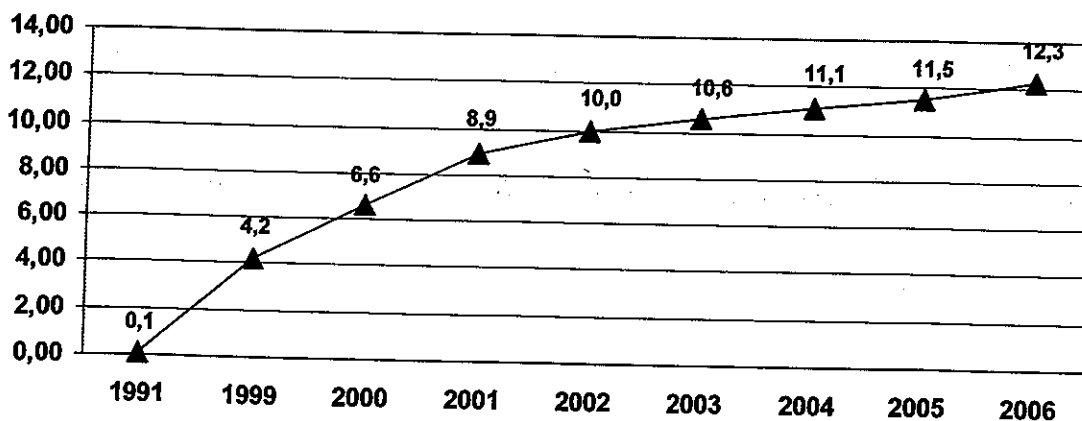


El Consejo de Ministros mediante Acuerdo de 4 de marzo de 2005, aprobó cinco medidas para favorecer la incorporación y la integración de la mujer en las Fuerzas Armadas, publicado mediante la Orden DEF/524/2005, de 7 de marzo. Estas medidas eran la creación de un Observatorio de la mujer en las Fuerzas Armadas, el programa para la creación de centros infantiles en Defensa, la adecuación de los alojamientos a la presencia de la mujer, el asegurar la presencia femenina en los órganos de evaluación y un análisis del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas y el acoso sexual. Asimismo, por Resolución de 17 de marzo de 2006 (B.O.E. nº 66 del día 18/03/06) de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, se publica Acuerdo de Consejo de Ministros de marzo 2006 en el que se establece la continuación e impulso de estas medidas. Conseguida la igualdad jurídica, se persigue la igualdad efectiva.

### Identificación del colectivo

Desde 1988, el número de mujeres que quieren acceder a las Fuerzas Armadas ha ido aumentando, al igual que las que consiguen superar las pruebas, pudiendo concluir que la presencia femenina en las Fuerzas Armadas españolas es una realidad consolidada.

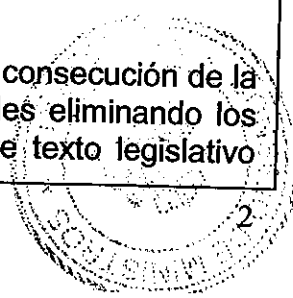
En el cuadro de evolución del porcentaje de mujeres en las Fuerzas Armadas se observa como el mayor incremento se produce a partir de la entrada en vigor de la Ley 17/1999, mencionada anteriormente, al permitir a las mujeres ocupar todos los destinos y, muy especialmente, con la plena profesionalización de la tropa y marinería.



A noviembre de 2006, el porcentaje de mujeres sobre el total de efectivos militares es de 12,3%, aunque su distribución entre las distintas categorías es bastante desigual, alcanzando el 18,2% del total de tropa y marinería. En cuanto al número de mujeres por Ejércitos y su correspondiente porcentaje, se distribuye de la siguiente forma: Ejército de Tierra 10.045, 12,5%; Armada 2.091, 10,5%; Ejército del Aire 2.641, 12,2%; y Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas 621, 17,4%.

## 2. Previsión de resultados

El proyecto de ley de la carrera militar, persigue, entre otros objetivos, la consecución de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, asegurar las mismas oportunidades eliminando los obstáculos necesarios para ello y haciendo posible que la aplicación de este texto legislativo





112 1114

produzca efectos equivalentes en hombres y mujeres.

El hecho de ser mujer no va a suponer una situación de partida más difícil para el acceso a la carrera militar, ni para su desarrollo y permanencia.

En el articulado del proyecto de ley de la carrera militar se contemplan una serie de preceptos dirigidos a la consecución de estos objetivos. Concretamente, se introducen referencias a la igualdad de trato y de oportunidades, se establecen acciones positivas básicamente relacionadas con las situaciones derivadas de la maternidad (embarazo, parto y posparto), se fomenta la conciliación de la vida profesional, personal y familiar y se protege a la militar víctima de violencia de género.

Los principios básicos y diversas regulaciones de detalle ya figuran en el proyecto de ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, pero con su inclusión en este proyecto quedan plenamente integrados en el régimen de personal de las Fuerzas Armadas.

#### **Regulación de carácter horizontal sobre igualdad y conciliación:**

- **La igualdad de trato y de oportunidades** queda configurada como un auténtico principio organizador y de actuación de las Fuerzas Armadas, al introducir ya en el título preliminar el siguiente precepto de carácter horizontal:

*Artículo 5.1: "La igualdad de trato y de oportunidades es un principio que en las Fuerzas Armadas se aplicará de conformidad con lo previsto en la ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y que estará especialmente presente en el desarrollo y aplicación de esta ley en lo relacionado con el acceso, la formación y la carrera militar".*

Con este artículo se asegura la necesidad de aplicar el criterio de género ante cualquier actuación, normativa o no, en las Fuerzas Armadas; obliga a tener en cuenta que los destinatarios de dicha medida o decisión serán hombres y mujeres y hace especial mención al desarrollo reglamentario respecto al acceso, la formación y la carrera militar.

Asimismo, se cumple con lo preceptuado en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005 por el que se aprueba el Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado. Concretamente, se inserta dentro de la medida 1, promoción de la igualdad de género en el acceso al empleo público (acceso) y de la medida 2, criterios para favorecer la promoción profesional de las empleadas públicas (formación y carrera militar).

- **La igualdad de género, la conciliación de la vida profesional, personal y familiar, así como la prevención de la violencia de género** aparecen también como principios básicos dentro del régimen jurídico del personal militar:

*Artículo 5.2: "Las normas y criterios relativos a la igualdad, la prevención de la violencia de género y la conciliación de la vida profesional, personal y familiar establecidos para el personal al servicio de la Administración General del Estado serán aplicables a los militares profesionales con las adaptaciones y desarrollos que sean necesarios. En las normas correspondientes se incluirán también las medidas que sean de aplicación específica en el ámbito de las Fuerzas Armadas."*





12 1114

Con este precepto queda patente el compromiso existente en la consecución de estos objetivos. Se adaptará a las Fuerzas Armadas toda la regulación existente para el personal al servicio de la Administración General del Estado, pero, además, se desarrollará una normativa propia o se realizarán las actuaciones específicas que sean necesarias al respecto.

**Regulación específica sobre determinados aspectos concretos del ingreso y carrera militar para proteger la maternidad, la presencia de la mujer o a la víctima de violencia de género:**

• **Artículo 41. "Capacidades profesionales".**

El apartado 3 de este artículo señala que *"todos los militares realizarán los servicios, guardias y comisiones que en su categoría y empleo puedan corresponderles en su unidad, centro u organismo, unidad superior de su cadena orgánica o, en su caso, de otra en su entorno geográfico, siempre que no exista ninguna limitación legal o reglamentaria"*.

Con esta remisión se está pensando, entre otros aspectos, en el desarrollo normativo de la exención de guardias y servicios por razones de guarda legal o lactancia, cómo ya existe actualmente.

• **Artículo 53. "Requisitos generales para el ingreso en los centros docentes militares de formación".**

El apartado 1 de este artículo recoge los principios constitucionales de acceso al empleo público, y, además, expresamente garantiza la aplicación de los *"principios rectores para el acceso al empleo público"*.

Por lo tanto, cumple con los Planes para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado, Orden APU/526/2005, de 7 de marzo.

Se señala en su apartado 6 que: *"En los procesos de selección no podrán existir más diferencias por razón de género que las derivadas de las distintas condiciones físicas que, en su caso, puedan considerarse en el cuadro de condiciones exigibles para el ingreso."*

*Reglamentariamente se determinará la forma en que las aspirantes realizarán las pruebas si están condicionadas por embarazo, parto o posparto, asegurando, en todo caso, su protección."*

Con esta regulación se pretende conseguir la igualdad efectiva entre hombres y mujeres respecto al acceso a los centros docentes militares de formación. La gestación, las situaciones de parto o posparto no van a impedir a una mujer acceder a dichos centros, si bien, se remite a desarrollo reglamentario la forma de proteger dichas situaciones en estos procesos selectivos. Actualmente, está previsto el aplazamiento de las pruebas físicas en el caso de embarazo y parto, estableciendo la posibilidad de posponerlas hasta en dos convocatorias.

• **Artículo 68. "Régimen de los alumnos de cursos de perfeccionamiento y de altos estudios de la defensa nacional"**





12 1114

Al igual que se ha contemplado la protección de las situaciones de maternidad en el acceso a los centros militares para la enseñanza de formación, en el segundo párrafo del artículo 68 se mantiene dicha protección en los cursos de perfeccionamiento y de altos estudios de la defensa nacional, que son muy determinantes para el acceso a funciones directivas y que afectan directamente a la proyección de carrera. Todo ello en línea con el Plan de Igualdad de Género de la Administración General del Estado, Orden APU/526/2005, de 7 de marzo, medida 2.3.

- **Artículo 82. "Órganos de evaluación".**

Este artículo asegura la presencia de la mujer militar en los órganos de evaluación, (realizan las evaluaciones para ascensos, selección de asistentes a cursos, insuficiencia de facultades profesionales o de condiciones psicofísicas), siempre que existan mujeres con el empleo militar y los requisitos para ello.

Concretamente, establece que *"... Reglamentariamente se determinará su composición, adecuándose en lo posible a la aplicación equilibrada del criterio de género, las incompatibilidades y las normas de funcionamiento."*

La inclusión de este artículo permite cumplir con lo establecido en los Acuerdos de Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005 y de 3 de marzo de 2006 en los que se establece específicamente la presencia de la mujer militar en dichos órganos de evaluación, así como con las medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres.

- **Artículo 85. "Condiciones para el ascenso".**

Este artículo prevé en su apartado 3: *"A la mujer se le dará especial protección en situaciones de embarazo, parto y posparto para cumplir las condiciones para el ascenso a cualquier empleo militar"*.

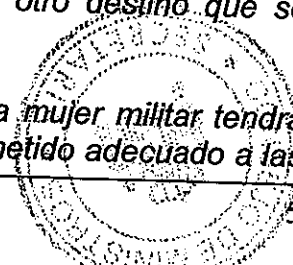
Se introduce nuevamente una cláusula de salvaguarda para que los tiempos de bajas médicas, excedencias, permisos, etc., no perjudiquen sus posibilidades de ascenso y proyección de carrera.

Asimismo, y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 5 de este proyecto, está garantizada la no discriminación por razón de género en la promoción profesional y ascensos.

- **Artículo 96. "Provisión de destinos".**

En el apartado 3 se regula el derecho preferente a cambio de destino para la mujer militar víctima de violencia de género, en aplicación de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de 2004, sobre violencia de género, con la siguiente redacción: *"La mujer militar víctima de violencia de género que se vea obligada a cesar en su destino para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrá derecho preferente, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, a ocupar otro destino que se encuentre vacante y cuya provisión sea necesaria"*.

Por su parte el apartado 6 señala: *"Durante el periodo de embarazo la mujer militar tendrá derecho a ocupar, por prescripción facultativa, un puesto orgánico o cometido adecuado a las"*







12 1114

*circunstancias de su estado que podrá ser distinto del que estuviera desempeñando. La aplicación de este supuesto no implica pérdida del destino."*

Con esta redacción se recoge la normativa comunitaria (Directiva 1992/85/CEE, de 19 de octubre del Consejo, relativa a medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia), que es coherente con la normativa nacional vigente.

- **Artículo 105. "Situación de excedencia".**

Se mantiene la situación de excedencia por cuidado de hijos o familiares, se introduce la situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar y la de excedencia por razón de violencia de género en línea con lo previsto en el proyecto de ley del estatuto básico del empleado público.

La nueva regulación de las diferentes modalidades de esta situación es positiva desde el punto de vista de la conciliación de la vida profesional, personal y familiar.

- Finalmente, en la regulación del régimen jurídico de los **reservistas**, también existe una previsión específica referida al género en el artículo 130.4 al señalar *"las causas de carácter personal, profesional, de género o de otra índole que permitan suspender su incorporación, se establecerán reglamentariamente"*.

### 3. **Valoración del impacto de género**

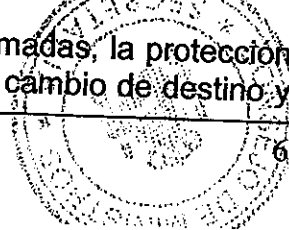
En definitiva, se puede concluir que este proyecto de ley de la carrera militar incorpora en su espíritu y articulado la perspectiva de género, esto es, el análisis del grado de aplicación de la igualdad.

Con esta norma se consigue un impacto positivo y transformador de género, al intervenir directamente sobre las causas que pueden dificultar una equilibrada participación de la mujer en las Fuerzas Armadas y contener medidas y perseguir resultados que favorecen y facilitan la igualdad de oportunidades de las mujeres y de los hombres en las Fuerzas Armadas.

Con el objetivo de alcanzar estos fines, se introducen en su articulado los principios de igualdad de género, se establecen acciones positivas relacionadas con las situaciones derivadas de la maternidad al protegerlas en diferentes momentos de la carrera militar (ingreso, ascenso, situaciones, enseñanza de formación y perfeccionamiento, destinos), se fomenta la conciliación de la vida profesional, personal y familiar de los miembros de las Fuerzas Armadas, y se asegura la representación de la mujer militar en los órganos de evaluación.

Este proyecto, además, cumple con lo preceptuado en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005 por el que se aprueba el Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado. Teniendo presente, especialmente sus medidas relacionadas con la promoción de la igualdad de género en el acceso al empleo público y con el establecimiento de criterios para favorecer la promoción profesional de las empleadas públicas.

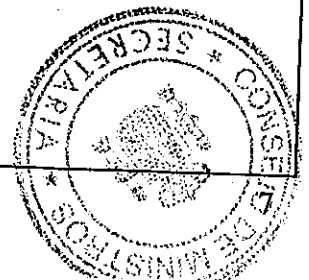
Asimismo, se recoge expresamente para el ámbito de las Fuerzas Armadas, la protección a la mujer militar víctima de violencia de género, regulando sus derechos de cambio de destino y





de excedencia por tal motivo, en aplicación de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de 2004, sobre violencia de género.

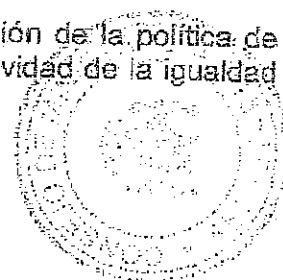
Finalmente es importante señalar que este proyecto de ley establece el marco y las bases suficientes para regular posteriormente diversas situaciones que suponen la completa adaptación de unas Fuerzas Armadas tradicionalmente masculinas a su realidad actual y que pueden afectar básicamente a la prevención de situaciones de discriminación o violencia de género y a la compatibilidad del desarrollo de esta profesión con la vida personal de mujeres y hombres (pareja de militares con hijos menores a cargo y desplazamientos forzosos simultáneos, disfrute de los permisos de lactancia y guarda legal, exención de guardias y servicios, etc.).



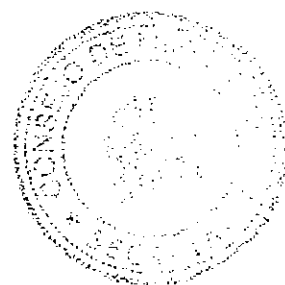
**MEMORIA DE IMPACTO DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY DEL  
ESTATUTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO**

El Estatuto del Trabajo Autónomo no establece medidas concretas e inmediatas relativas al impacto de género. No obstante, es continua la presencia de disposiciones tendentes a lograr una igualdad efectiva entre sexos. En particular se señalan las siguientes:

- a) El apartado 3 del artículo 4 recoge en su párrafo a) el derecho, en el ejercicio de la actividad profesional, a la igualdad ante la Ley y a no ser discriminado, directa o indirectamente, por cualquier circunstancia o condición personal o social, entre las que expresamente se menciona el sexo.
- b) El artículo 6 establece unos mecanismos de garantía para hacer efectiva la tutela del derecho a la no discriminación, distinguiendo el precepto los supuestos en que la discriminación nace de una conducta (apartado 3) o de una cláusula contractual (apartado 4). En ambos casos se trata de evitar los perjuicios sufridos por la conducta o cláusula discriminatoria, lo que incluye el derecho a percibir la indemnización correspondiente y, cuando proceda, a reponer la situación al estado anterior a la conducta discriminatoria.
- c) El apartado 4 del artículo 14 sienta el principio de que el horario de actividad del trabajador autónomo económicamente dependiente procurará adaptarse para poder conciliarse con su vida personal y familiar.
- d) El párrafo a) del apartado 1 del artículo 16 determina que la necesidad de atender responsabilidades familiares urgentes, sobrevenidas e imprevisibles se considera una interrupción justificada de la actividad y no servirá como causa justificada para fundamentar la extinción del contrato.
- e) El apartado 3 del artículo 25 prevé la posibilidad de que mediante Ley se puedan establecer bonificaciones o reducciones en las bases de cotización o en las cuotas a determinados colectivos de autónomos en atención a sus características personales. Se trata de una habilitación legal que puede utilizarse como instrumento para lograr la efectividad del derecho a la igualdad por razón de sexo mediante medidas de acción positiva (reducción en las cotizaciones para determinados colectivos de mujeres).
- f) El apartado 3 del artículo 27 establece que la elaboración de la política de fomento del trabajo autónomo tenderá al logro de la efectividad de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.



Es difícil valorar de manera inmediata qué impacto van a tener las disposiciones señaladas en el logro efectivo de la igualdad entre sexos. En todo caso dependerá del alcance y profundidad de la normativa de desarrollo y ejecución de la presente Ley. No obstante, conviene insistir en que si tales disposiciones son desarrolladas de una manera decidida e incisiva, el impacto puede ser elevado y podría traducirse en un aumento significativo del número de mujeres autoempleadas y, obviamente, de la tasa general de actividad femenina.





MINISTERIO  
DE ADMINISTRACIONES  
PÚBLICAS

121/116 80

164127

SECRETARÍA GENERAL PARA  
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL  
DE MODERNIZACIÓN  
ADMINISTRATIVA

LEGISLATURA  
VIII

112 1116

# PROYECTO DE LEY PARA EL ACCESO ELECTRÓNICO DE LOS CIUDADANOS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

## INFORME SOBRE IMPACTO DE GÉNERO

CORREO ELECTRONICO

secretaria.dgma@map.es  
ANTEPROYECTO LEY ADMÓN ELECTRÓNICA-impacto género NT



MARÍA DE MOLINA, 50  
28071 MADRID  
TEL.: 91 2 73 24 43  
FAX.: 91 2 73 24 06



112 111 6

# ANTEPROYECTO DE LEY PARA EL ACCESO ELECTRÓNICO DE LOS CIUDADANOS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

## INFORME SOBRE IMPACTO DE GÉNERO

### 1. RESUMEN

La presente Memoria se elabora de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, que establece que los anteproyectos de ley deberán ir acompañados de un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establecen en dichos anteproyectos.

La Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas tiene por objeto reconocer el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos y regula los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa. Como consecuencia del reconocimiento del derecho de los ciudadanos, las Administraciones pasan de "poder" ofrecer servicios electrónicos a "tener" que ofrecerlos. La existencia de nuevos canales electrónicos de relación entre la ciudadanía y las Administraciones podría dar lugar a la aparición de desigualdades en el acceso a los servicios públicos debido a la brecha digital de género existente en España en el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

No obstante, como se deduce de lo expuesto en este informe, la Ley no sólo no introduce desigualdades de género sino que permite su reducción por medio de distintos mecanismos, entre los que destacan:

- Los derivados de la reducción de la brecha digital, al garantizar el acceso a los servicios electrónicos desde las oficinas públicas y la formación del personal de las administraciones en el uso de las TIC.
- El incremento de la oferta de contenidos en Internet de interés para las mujeres.
- La mejora de las condiciones de vida de las mujeres con obligaciones familiares.
- Las medidas para hacer más compatibles la vida personal y laboral.

De esta manera, la aplicación de la Ley no sólo evita el crecimiento de la brecha digital de género, sino que sirve para reducir ésta y contribuir así a la plena igualdad entre hombres y mujeres en España.



Ministerio  
de Administraciones  
Públicas



112 1 1 1 6

## 2. INTRODUCCION

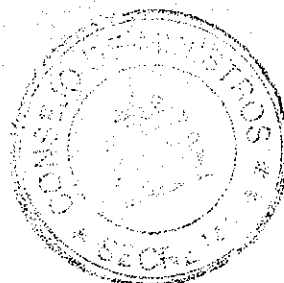
La Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas reconoce el derecho de toda la ciudadanía a relacionarse electrónicamente con las Administraciones (art. 6) y recoge como principios básicos, entre otros, el principio de igualdad y el de accesibilidad (art. 4 b y c). También garantiza la existencia de diferentes canales o medios para la prestación de los servicios electrónicos, así como el acceso a éstos a los ciudadanos **"con independencia de sus circunstancias personales, medios o conocimientos"**, debiendo cada Administración establecerlos en "la forma que estimen adecuada" (art. 8.1). Para la Administración General del Estado, además, especifica el sistema multicanal que ésta deberá establecer (art. 8.2) y que incluye tanto las oficinas de atención presencial, como los puntos de acceso electrónicos y los servicios de atención telefónica.

Por otra parte, la Ley establece claramente el derecho de los ciudadanos "a elegir en todo momento la manera de comunicarse con las Administraciones Públicas, sea o no por medios electrónicos" (art. 27.1) y sólo autoriza a las Administraciones Públicas a "establecer por causas objetivas o subjetivas justificadas la obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizando sólo medios electrónicos, cuando los interesados se correspondan con personas jurídicas o colectivos de personas físicas" que por distintas razones "tengan garantizados el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos" (art. 27.6).

De esta manera se garantiza la existencia de canales adecuados para la prestación de todos los servicios públicos. Además, la aplicación de la Ley tendrá también una fuerte impacto positivo sobre los grupos sociales con menores posibilidades o mayores dificultades de acceso a los servicios públicos por medios presenciales, bien sea por razones de tiempo, lejanía geográfica de las oficinas públicas o problemas físicos de movilidad, proporcionándoles medios de acceso para realizar sus trámites a cualquier hora del día y cualquier día del año, sin necesidad de desplazamientos.

A pesar de ello, la situación de partida, en la que existe una brecha digital de género en el acceso sociedad de la información que perjudica a las mujeres, podría sugerir que éstas se podrían beneficiar menos de las ventajas derivadas de la aplicación de la Ley que los hombres.

Sin embargo existen argumentos sólidos que permiten valorar positivamente el impacto de género que se deriva de la aplicación de esta Ley, especialmente cuando se tienen presentes algunas consideraciones adicionales que ya se están desarrollando o en vías de aprobación. De esta manera, la aplicación de la Ley no sólo evita el crecimiento de la brecha digital de género, sino que sirve para reducir ésta y contribuir así a la plena igualdad entre hombres y mujeres en España.





### 3. SITUACION DE PARTIDA

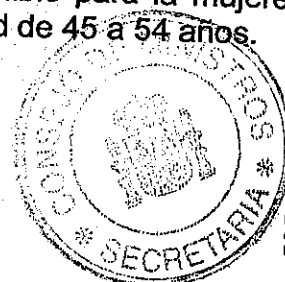
Los hombres y las mujeres de nuestro país, no tienen todavía las mismas posibilidades de acceso a los medios electrónicos, ni el mismo grado de conocimientos técnicos para el uso de Internet. La brecha digital de género, cuyas razones son muy variadas, es probablemente la mayor dificultad con la que puede encontrarse la Ley para que los derechos que reconoce sean igualmente efectivos entre hombres y mujeres. Se analiza aquí esta brecha digital, como principal factor que puede condicionar el éxito de esta Ley desde un punto de vista igualitario.

El uso de las tecnologías de la Información y de Internet por parte de las mujeres españolas es claramente menor que por parte de los hombres, en todos los grupos de edad así como el uso del teléfono móvil (salvo en la franja de edad de 15 a 24 años), según se desprende de los datos del Instituto Nacional de Estadística en la "encuesta sobre equipamiento y uso de las tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares" del 1º semestre de 2006, mostrado en el cuadro siguiente.

(en % sobre el total de cada grupo)

	Personas que han utilizado el ordenador en los últimos 3 meses	Personas que han utilizado Internet en los últimos 3 meses	Personas que han utilizado Internet al menos una vez por semana en los últimos 3 meses	Personas que han comprado a través de Internet en los últimos 3 meses	Personas que usan teléfono móvil
	Hombres	Hombres	Hombres	Hombres	Hombres
De 16 a 24 años	87,1	83,3	70,7	15,0	96,7
De 25 a 34 años	72,8	66,7	56,8	19,6	95,2
De 35 a 44 años	66,1	57,5	48,6	13,8	92,6
De 45 a 54 años	54,4	45,9	40,1	9,7	84,0
De 55 a 64 años	29,7	23,7	21,5	6,0	68,2
De 65 a 74 años	10,4	7,1	6,1	1,0	47,3
Total Personas	57,9	51,5	44,1	12,2	84,3

A la vista de los datos, no se puede cuantificar de manera global la brecha digital existente, pero se observa que en el uso de los ordenadores está es de 7,8 puntos, en el uso de Internet es del 7,3% y en la frecuencia de uso es de 9,3 puntos, siempre desfavorable para la mujeres. En todos los casos, la diferencia máxima se establece en la franja de edad de 45 a 54 años.







Sin embargo, en las compras por Internet, que es un buen indicador de la capacidad de interactuar con la web, la brecha es relativamente pequeña, así como en el uso del teléfono móvil.

Si analizamos estos datos a la luz de la formación académica de los usuarios obtenemos los siguientes datos:

(en % sobre el total de cada grupo)

	Personas que han utilizado el ordenador en los últimos 3 meses		Personas que han utilizado Internet en los últimos 3 meses		Personas que han utilizado Internet al menos una vez por semana en los últimos 3 meses		Personas que han comprado a través de Internet en los últimos 3 meses	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Analfabetos	2,4		0,0		0,0		0,0	
Educación primaria	20,1		15,6		11,2		1,2	
Educación secundaria 1ª etapa	50,3		41,6		31,6		5,2	
Educación secundaria 2ª etapa	78,9		70,7		61,1		17,5	
FP de grado superior	81,0		71,3		61,4		18,1	
Estudios superiores	98,1		91,0		86,4		30,3	
Total Personas	57,9		51,5		44,1		12,2	

Se observa que la brecha digital se mantiene independientemente del nivel de estudios de hombres y mujeres, tanto en el uso del ordenador como en el de Internet o en el uso de este medio para realizar compras.

La situación laboral de mujeres y hombres también tiene impacto en el acceso a la sociedad de la información como se deduce de la siguiente tabla:





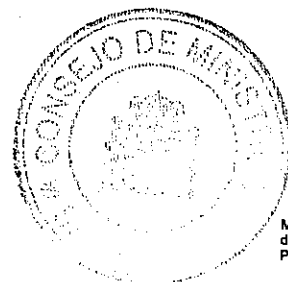
(en % sobre el total de cada grupo)

	Personas que han utilizado el ordenador en los últimos 3 meses		Personas que han utilizado Internet en los últimos 3 meses		Personas que han utilizado Internet al menos una vez por semana en los últimos 3 meses		Personas que han comprado a través de Internet en los últimos 3 meses	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Activos ocupados	65,2	59,2	57,9	52,2	49,3	43,9	14,2	10,9
Activos parados	44,1	48,2	38,8	42,5	30,1	34,2	8,0	11,7
Estudiantes	96,6	97,2	94,9	95,5	87,4	88,4	21,2	15,7
Labores del hogar	24,2	24,2	24,2	24,2	8,2	8,2	11,7	11,7
Pensionistas	13,6	13,6	9,4	9,4	7,7	7,7	1,5	1,5
Otra situación laboral	48,7	48,7	38,6	38,6	32,0	32,0	6,5	6,5
Trab. por cuenta ajena	66,6	66,6	59,6	59,6	50,9	50,9	14,0	14,0
Trab. por cuenta propia	60,0	60,0	51,4	51,4	43,5	43,5	14,8	14,8
Total Personas	57,9	57,9	51,5	51,5	44,1	44,1	12,2	12,2

Las cifras muestran que las mujeres dedicadas a labores del hogar, las pensionistas y las trabajadoras por cuenta propia (entre las que se cuentan las mujeres dedicadas al servicio doméstico) son las que utilizan menos los ordenadores que los hombres y las que acceden menos y con menos frecuencia a Internet. Las estudiantes usan más el ordenador que los estudiantes y acceden a Internet casi lo mismo que ellos, pero con menos frecuencia (brecha de 5.9 puntos). En el caso de las compras en línea, sin embargo, la brecha se produce en todos los grupos analizados, con una mayor intensidad entre estudiantes (los hombres compran más de dos veces lo que compran las mujeres) y en el de las personas dedicadas a las labores del hogar.

Según muestran distintos estudios, esta brecha digital de género se ve además reforzada por la existencia de más contenidos en la red dirigidos más directamente a los hombres.

Las razones usadas por algunos autores para explicar esta brecha son que las mujeres presentan tasas de actividad y empleo más bajas que los hombres, que sus ingresos son también más bajos y que ello dificulta la adquisición de equipos informáticos y la financiación del acceso a Internet, así como que la mayoría de las mujeres trabajan en entornos menos informatizados (educación, salud, servicios sociales) y tienen menos tiempo para formarse y usar las nuevas tecnologías como consecuencia de la doble jornada laboral-familiar a la que muchas se ven sometidas.



Ministerio de Administraciones Públicas



#### 4. VALORACION DEL IMPACTO DE GÉNERO DE LA LEY PARA EL ACCESO ELECTRÓNICO DE LOS CIUDADANOS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

En una situación como la descrita en el apartado anterior y que señala la existencia de una brecha digital de género, la Ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a las Administraciones Públicas puede influir positivamente en la igualdad de género en base a los siguientes mecanismos:

1. **Reducción de la brecha digital.** La garantía de acceso de toda la ciudadanía a los servicios de administración electrónica, poniendo a disposición de quienes lo requieran puntos de libre disposición en dependencias administrativas fomentará el uso a Internet entre las mujeres que carezcan de equipamiento propio o acceso al mismo. Asimismo el principio de accesibilidad a la información y a los servicios por medios electrónicos señala que éstos deben poder ser obtenidos de manera clara y comprensible. Se reduce así las dificultades de acceso a los servicios por parte de los colectivos de mujeres poco expertas en el uso de las nuevas tecnologías: la facilidad de uso resulta clave para atraer a nuevos usuarios de la administración electrónica e introducirles además en el uso de Internet, así como un gran paso en la reducción de la "tecnofobia" femenina. La Ley estipula igualmente que la Administración General del Estado promoverá la formación del personal a su servicio en la utilización de los medios electrónicos, lo que facilitará que las mujeres que trabajen en la Administración se beneficien de esta medida.
2. **Incremento de la oferta de contenidos de Internet de interés para mujeres.** Los servicios públicos son de uso necesario tanto por hombres como por mujeres. La puesta en línea de éstos añade interés en el uso de Internet por parte de las mujeres. Como se ha visto además, las mujeres que usan Internet son más propensas que los hombres a utilizar este medio con finalidades transaccionales.
3. **Mejora de las condiciones de vida de las mujeres con obligaciones familiares.** El tiempo libre es más escaso, en media, para las mujeres que para los hombres, debido a la doble jornada que una gran parte de las mujeres trabajadoras realizan. Por otro lado los hombres suelen disponer, con mayor frecuencia, de medios autónomos para su desplazamiento (vehículo propio) que las mujeres. El acudir a una oficina administrativa a realizar trámites resulta por ello más dificultoso y obliga, de media, a emplear más tiempo a las mujeres que a los hombres. Los servicios públicos en línea permitirán que las ciudadanas puedan realizar sus gestiones administrativas en menor tiempo y sin necesidad de desplazamientos con la consiguiente mejora de su calidad de vida.
4. **Compatibilizar la vida familiar y laboral.** La Ley se compromete a desarrollar una regulación sobre el teletrabajo en la Administración General del Estado lo que tiene una clara incidencia sobre todas las mujeres con cargas familiares, favoreciendo su calidad de vida y reduciendo el número de mujeres que piden la excedencia al no poder cumplir con los horarios de oficina. Esta medida es además ejemplarizante para el resto de los centros de trabajo y puede tener un impacto notable y positivo en el empleo femenino.



Ministerio  
de Administraciones  
Públicas



112 1116

Para aumentar el impacto positivo de la Ley, en la puesta en marcha de la misma, ésta se acompañará de las siguientes medidas:

- Las webs públicas y otros medios de acceso electrónicos deberán diseñarse de acuerdo a guías de estilo que eviten cualquier tipo de discriminación sexual implícita o explícita. Estas guías contendrán indicaciones sobre el uso del lenguaje y de las imágenes que no transmitan roles sexistas (jefes hombres, subalternos mujeres, etc...).
- Se utilizarán las webs públicas para transmitir una imagen igualitaria y normalizar ante la opinión pública la presencia paritaria de hombres y mujeres en todos los sectores de actividad social y profesional
- Los análisis de demanda, de uso y de satisfacción de los servicios públicos se harán siempre segmentando entre hombres y mujeres los datos recogidos y se analizarán los resultados de acuerdo a una perspectiva de género.
- Se promoverán servicios públicos de interés para el público femenino que puedan ser puestos en línea y que favorezcan el acceso de las mujeres al empleo, la creación de empresas, la educación, la salud, la cultura, la integración social y la forma de ejercer sus derechos ciudadanos, entre otros.
- Las campañas de difusión de los servicios públicos en línea se diseñarán para dirigirse con especial interés a los colectivos menos hábiles y menos propensos al uso de las nuevas tecnologías y, especialmente, a las mujeres más reacias al uso de Internet y de los medios electrónicos en general.
- Se armonizará la aplicación de esta Ley con lo que se disponga en la Ley de Igualdad, actualmente en fase de tramitación.



Ministerio  
de Administraciones  
Públicas

121/117/82

MINISTERIO DEL INTERIOR  
MINISTERIO DE JUSTICIA

164128

PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LA BASE DE DATOS POLICIAL SOBRE  
IDENTIFICADORES OBTENIDOS A PARTIR DEL ADN

INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, redactado por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, se participa que el contenido del presente Proyecto de Ley no afecta a la igualdad entre hombres y mujeres, aplicándose de igual manera a las personas de ambos sexos, por lo que carece de impacto por razón de género.

Madrid,

LEGISLATURA

VIII

121117





**INFORME SOBRE IMPACTO DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY POR EL  
QUE SE MODIFICA LA LEY 50/1981, DE 31 DE DICIEMBRE, REGULA DORA  
DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO FISCAL**

---

De conformidad con el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, introducido por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, los anteproyectos de Ley deberán ir acompañados de un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establecen en el mismo.

De acuerdo con la justificación normativa expuesta en la memoria justificativa, la norma proyectada no supone impacto alguno por razón de género ni se prevé que tenga consecuencias discriminatorias para los mujeres y para los hombres ni altere el principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.

LEGISLATURA

VIII

12 1 1 1 8





12 11 9

**PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE  
23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL**

**INFORME SOBRE IMPACTO DE GÉNERO**

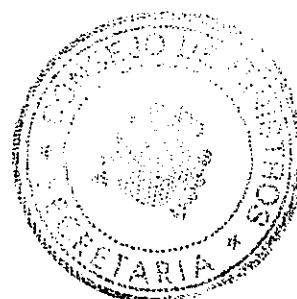
De conformidad con el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, introducido por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, los anteproyectos de Ley deberán ir acompañados de un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establecen en el mismo.

La norma proyectada no supone impacto alguno por razón de género ni se prevé que tenga consecuencias discriminatorias para las mujeres y para los hombres ni altere el principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.

LEGISLATURA

VIII

12 11 9





## INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SECTOR POSTAL

El anteproyecto de ley de creación de la Comisión Nacional del Sector Postal tiene como objetivo básico la creación de un organismo regulador del sector postal, así como el desarrollo de sus principales características y de los rasgos más importantes de su organización y funcionamiento.

De este modo, en tanto que norma organizativa, creadora de un organismo público, ésta no entra a regular aspectos relevantes en materia de igualdad de género.

En consecuencia, se determina su neutralidad en relación con el impacto por razón de género, al no producir efecto discriminatorio alguno ni dificultar el desarrollo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

LEGISLATURA

VIII

12 1 1 2 0





**PROYECTO DE LEY SOBRE EL CONTROL DEL COMERCIO EXTERIOR DE  
MATERIAL DE DEFENSA, DE OTRO MATERIAL Y DE PRODUCTOS Y  
TECNOLOGÍAS DE DOBLE USO.**

**MEMORIA DE IMPACTO POR RAZON DE GÉNERO**

No hay impacto por razón de género en las medidas establecidas en el citado anteproyecto de Ley, según lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.

LEGISLATURA  
VIII

112 1 1 2 1





MINISTERIO  
DE MEDIO AMBIENTE

171 / 122 82

171278

SUBSECRETARÍA

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

## INFORME SOBRE IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY DE CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se informa que el impacto, por razón de género, de las medidas que se establecen en el Anteproyecto de Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera es neutro, al no ser previsibles consecuencias negativas que favorezcan situaciones de discriminación por dicha razón.

LEGISLATIV

VIII

12 1 1 2 2



CORREO ELECTRÓNICO

buzon-sgt@mma.es

Plaza San Juan de la Cruz s/n  
28003  
TEL.: 91 597 60 13  
FAX.: 91 597 63 82



## INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO PROYECTO DE LEY DE NORMAS BÁSICAS SOBRE EXPLOTACIÓN, TRANSPORTE, EXPERIMENTACIÓN Y SACRIFICIO PARA EL CUIDADO DE LOS ANIMALES

El anteproyecto carece de impacto en función del género a efectos de lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

LEGISLATURA  
VIII

12-11-23

12-11-23



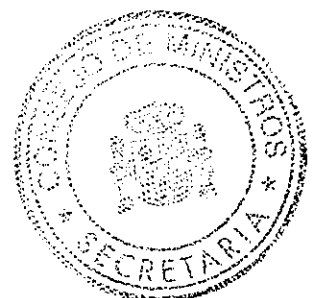
## **INFORME SOBRE IMPACTO DE GÉNERO**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, se señala que las medidas que se incluyen en este anteproyecto de ley no conllevan impacto alguno por razón de género.

**LEGISLATURA**

**VIII**

**12 1 1 2 4**



**INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2004, DE 29 DE OCTUBRE, Y EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE ORDENACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SEGUROS PRIVADOS, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 6/2004, DE 29 DE OCTUBRE.**

El presente informe se eleva en cumplimiento de lo previsto por el artículo 24.1. b) de la Ley 50/1997, del Gobierno, en la redacción dada al mismo por la Ley 30/2003, de 13 de octubre sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.

El anteproyecto de Ley tiene por objeto introducir las modificaciones necesarias en el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (en adelante TRLRCSCVM), aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, a fin de incorporar a derecho interno la Directiva 2005/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2005, por la que se modifican las Directivas 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE y 90/232/CEE del Consejo y la Directiva 2000/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativas al seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles (en adelante quinta directiva del seguro de automóviles).

Igualmente este anteproyecto obedece, en el marco de la incorporación de la normativa comunitaria, a la necesidad de introducir en el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, modificaciones puntuales para completar la incorporación de la quinta directiva del seguro de automóviles.

Al margen de la incorporación de la normativa comunitaria, el anteproyecto de Ley introduce determinadas modificaciones en el TRLRCSCVM para incorporar determinadas reformas, cuya necesidad se ha puesto de manifiesto en su aplicación práctica.

En consecuencia con lo anterior, se informa que las medidas contenidas en el anteproyecto de Ley no tienen impacto alguno por razón de género y, por tanto, no producen diferente trato entre mujeres y hombres.

LEGISLATURA

VIII

112 1125





121/126  
85  
175054  
112 112

## INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

### 1. FUNDAMENTO LEGAL

La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, prescribe, en su artículo 22.2, que en el procedimiento de elaboración de proyectos de ley debe efectuarse *"un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establecen en el mismo"*.

A dicha exigencia responde el presente informe, que, a su vez, complementa a la Memoria, en la que se especifican la finalidad y el contenido del proyecto de ley, mediante el cual se modifican determinadas normas de rango legal, de acuerdo con los compromisos que derivan del Acuerdo sobre Medidas en materia de Seguridad Social, suscrito el 13 de julio de 2006 por el Gobierno y los interlocutores sociales.

### 2. VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS

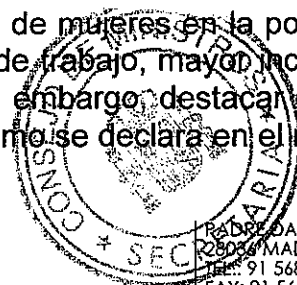
Se recogen en el proyecto diversas modificaciones en el contenido de la acción protectora del Sistema de la Seguridad Social, básicamente en relación con las prestaciones de incapacidad temporal, incapacidad permanente, jubilación y supervivencia.

Con carácter previo, debe afirmarse que, en las distintas materias reguladas, no se efectúa diferenciación alguna por razón de género.

No obstante, merecen una mención especial las reformas operadas en la protección por viudedad. Atendiendo al número de beneficiarios de esta prestación, diferenciados por sexos, se observa que en 1 de septiembre de 2006 percibían la pensión de viudedad 148.169 hombres frente a 2.054.100 mujeres. Se constata, a su vez, que desde el 1 de noviembre de 2005 al 1 de septiembre de 2006 accedieron a la pensión mencionada 1.919 hombres, mientras que, en el mismo período, pasaron a ser perceptoras de la prestación 22.611 mujeres.

Estos datos ponen de manifiesto que de la cobertura correspondiente a la viudedad se benefician más las mujeres que los hombres, y ello, no sólo por la mayor supervivencia de aquéllas, sino también por el menor porcentaje de mujeres trabajadoras que, en consecuencia, no pueden causar la prestación en favor de sus cónyuges.

Sin entrar en el análisis de las causas de la menor presencia de mujeres en la población activa (dedicación al hogar, tardía incorporación al mercado de trabajo, mayor incidencia del paro...), ni de la evolución de la tendencia, conviene, sin embargo, destacar que las modificaciones efectuadas en la pensión de viudedad, tal y como se declara en el referido



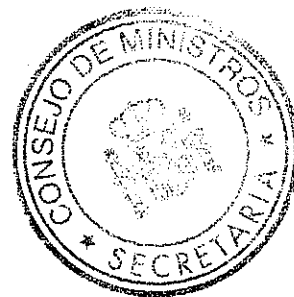


112-1126



Acuerdo, han tenido en cuenta *"la realidad social existente en nuestro país en la actualidad con la finalidad de mejorar la situación de las familias que dependen de las rentas del fallecido"*. Y, precisamente, la valoración de la dependencia económica tiene incidencia mayoritariamente en el colectivo de mujeres, con lo que se potencia un efecto positivo indirecto en cuanto a la protección del mismo.

A su vez, el establecimiento de mejoras en la pensión de viudedad, por las mismas razones, supone una discriminación positiva que beneficia al colectivo de mujeres, por ser cuantitativamente superior el número de destinatarias de dicha prestación. En este contexto se valora como indirectamente positiva para la mujer la previsión, contenida en el proyecto, de fijar cuantías mínimas para la pensión de viudedad en los casos en que el beneficiario esté afectado de una incapacidad para el trabajo.



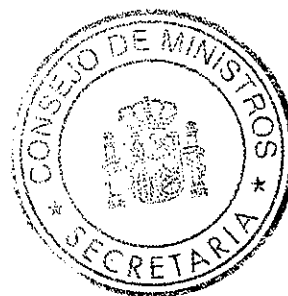


12 1 1 2 7

**INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 2/1981, DE 25 DE MARZO, DE REGULACIÓN DEL MERCADO HIPOTECARIO Y OTRAS NORMAS DEL SISTEMA HIPOTECARIO Y FINANCIERO, DE REGULACIÓN DE LAS HIPOTECAS INVERSAS Y EL SEGURO DE DEPENDENCIA Y POR LA QUE SE ESTABLECE DETERMINADA NORMA HIPOTECARIA.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de Organización, Competencia y Funcionamiento del Gobierno, los Anteproyectos de Ley deben ser acompañados de un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establezcan en el mismo.

Tras el estudio del posible impacto de género de las disposiciones contenidas en el presente Anteproyecto de Ley, se ha llegado a la conclusión de que del mismo no se deriva ninguna consecuencia discriminatoria.







MINISTERIO DE JUSTICIA

LEGISLATURA

VIII

121/128

8<sup>a</sup>

180457

121128

PROYECTO DE LEY DE CONSERVACIÓN DE DATOS RELATIVOS A LAS COMUNICACIONES  
ELECTRÓNICAS Y A LAS REDES PÚBLICAS DE COMUNICACIONES.

### INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, redactado por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, se participa que el contenido del presente Anteproyecto de Ley no afecta a la igualdad entre hombres y mujeres, aplicándose de igual manera a las personas de ambos sexos, por lo que carece de impacto por razón de género.



**INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO  
DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA  
LEY DE ORDENACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SEGUROS PRIVADOS, APROBADO  
POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 6/2004, DE 29 DE OCTUBRE, EN MATERIA DE  
SUPERVISIÓN DEL REASEGURO.**

El presente informe se eleva en cumplimiento de lo previsto por el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, del Gobierno, en la redacción dada al mismo por la Ley 30/2003, de 13 de octubre sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.

El anteproyecto de Ley tiene por objeto introducir las modificaciones necesarias en el texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, a fin de incorporar a derecho interno la Directiva 2005/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2005, sobre el reaseguro y por la que se modifican las directivas 73/239/CEE del Consejo y las directivas 98/78/CE y 2002/83/CE.

La directiva que se transpone pretende establecer un marco normativo prudencial para las actividades de reaseguro en la Comunidad, formando parte de la legislación comunitaria de seguros. La directiva sigue el enfoque de la legislación comunitaria adoptada en seguro directo, llevando a cabo la armonización necesaria para garantizar el reconocimiento mutuo de las autorizaciones y los sistemas de supervisión prudencial, posibilitando la concesión de una única autorización administrativa válida en toda la Comunidad y la aplicación del principio de supervisión por el Estado miembro de origen.

En consecuencia con lo anterior, se informa que las medidas contenidas en el anteproyecto de Ley no tienen impacto alguno por razón de género y, por tanto, no producen diferente trato entre mujeres y hombres.

Febrero de 2007

LEGISLATURA  
VIII

12 1 1 2 9





12/130 82

180432

12 1130

## INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se informa que el impacto, por razón de género, de las medidas que se establecen en el Anteproyecto de Ley de Responsabilidad Medioambiental es neutro, al no ser previsibles consecuencias negativas que favorezcan situaciones de discriminación por dicha razón.

LEGISLATURA  
VIII

12 1130



~~12 113 1~~**PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REGULADORA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA GUARDIA CIVIL.****INFORME DE IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO**

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se pone de manifiesto que el presente Proyecto normativo contiene previsiones que favorecen la equiparación de sexos, ya que su articulado es de aplicación a la totalidad de los miembros de la Guardia Civil, sin hacer discriminación o diferenciación alguna por razón de género en lo que se refiere al ejercicio de los derechos fundamentales y profesionales de los miembros de la Institución.

A mayor abundamiento, el Proyecto de Ley contiene previsiones expresas que establecen beneficios para el colectivo femenino. En concreto, la regulación del principio de igualdad prevé la prohibición de discriminación en el funcionamiento de la Guardia Civil, entre otras razones, por razón de sexo, por lo que el tratamiento y el ejercicio de los derechos y libertades en el seno de la Guardia Civil no establece diferenciación alguna entre los colectivos femenino y masculino. El principio de igualdad se aplica así en todos los ámbitos, desde el ingreso en el Cuerpo, al desarrollo normal de las funciones del personal de la Guardia Civil.

Del mismo modo, el articulado exige que las autoridades competentes promuevan las medidas necesarias para garantizar que en el ámbito de la Guardia Civil la igualdad entre hombres y mujeres sea real y efectiva, impidiendo cualquier situación de discriminación profesional, especialmente en el sistema de ascenso y en el acceso de la mujer a todos los niveles de mando y organización de la Institución. Estas previsiones se regulan en el contexto de la exigencia del principio de igualdad, pero imponen la obligación del establecimiento de medidas específicas que impidan cualquier tratamiento discriminatorio hacia el colectivo femenino en la Guardia Civil. De este modo, la igualdad por razón de género se articula en el presente Proyecto de Ley con un carácter bicéfalo. Se trata de un derecho fundamental y se trata, al mismo tiempo, de un deber para la Institución de la Guardia Civil.





La prohibición de discriminación por razón de sexo se repite en el deber para los miembros de la Guardia Civil de neutralidad e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

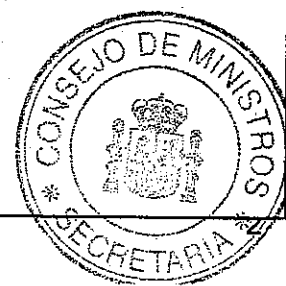
Así, el establecimiento de las obligaciones de igualdad de género afecta ya no sólo al tratamiento de las mujeres que forman parte del Cuerpo de la Guardia Civil, sino también a las relaciones del personal de la Guardia Civil con la población civil.

En conclusión, el contenido del Proyecto afecta positivamente a la mujer, pero sin que por ello se discrimine al hombre, estableciendo una equiparación de hombres y mujeres en el ejercicio de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil que el texto regula, así como convirtiendo el derecho a la igualdad en una obligación de igualdad entre hombres y mujeres para la Institución.

LEGISLATUR I

VIII

121131



121 / 132 89



MINISTERIO DE DEFENSA  
MINISTERIO DEL INTERIOR

12 173 2

## PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA GUARDIA CIVIL

### INFORME SOBRE IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO

El presente informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.

Todas las actuaciones que se contienen en este Proyecto se establecen con carácter general para todos los miembros de la Guardia Civil, sin distinción por razón de género. Por todo ello, este Proyecto de Ley Orgánica no contiene medida discriminatoria alguna por razón de género.

LEGISLATURA

VIII





INFORME SOBRE IMPACTO DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS EN LA CONTRATACIÓN DE BIENES CON OFERTA DE RESTITUCIÓN POSTERIOR DE TODO O PARTE DEL PRECIO Y, EN SU CASO, CON OFRECIMIENTO DE REVALORIZACIÓN.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 24.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada por el artículo segundo de la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, debe señalarse que en ninguno de los preceptos de este proyecto de ley, ni en el fondo ni en la forma, se establecen medidas o reconocen derechos u obligaciones que puedan suponer discriminación alguna por razón de sexo.

Por ello, se considera que este proyecto carece de impacto por razón de género.

Abril 2007

LEGISLATIVO

VIII





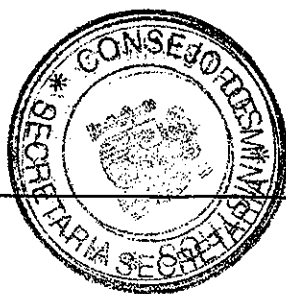
12 1 1 3 4

**INFORME SOBRE IMPACTO DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE IMPULSO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.**

En cumplimiento del artículo 24.1 b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en su redacción dada por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, se informa que el presente anteproyecto de Ley no contiene ninguna medida que suponga un tratamiento desigual entre hombres y mujeres.

LEGISLACIÓN

VIII





**INFORME SOBRE IMPACTO DE GENERO****PROYECTO DE LEY SOBRE REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL  
SECTOR PÚBLICO**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, se señala que las medidas que se incluyen en este proyecto de Ley no conllevan impacto alguno por razón de género.

**LEGISLATURA****VIII**



112 1 13 7

PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 13/1985, DE 25 DE MAYO, DE COEFICIENTES DE INVERSIÓN, RECURSOS PROPIOS Y OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

### INFORME SOBRE IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de Organización, Competencia y Funcionamiento del Gobierno, los Anteproyectos de Ley deben ser acompañados de un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establezcan en el mismo.

Tras el estudio del posible impacto de género de las disposiciones contenidas en el presente Anteproyecto de Ley, se ha llegado a la conclusión de que del mismo no se deriva ninguna consecuencia discriminatoria.

LEGISLATURA

VIII





12 1 13 8

**PROYECTO DE LEY DEL CINE**  
**INFORME SOBRE IMPACTO DE GÉNERO**

El presente informe se eleva en cumplimiento de lo previsto por el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.

En el Anteproyecto de Ley del Cine se establecen dos medidas que suponen un impacto positivo de género:

Por un lado, teniendo en cuenta que uno de los objetivos prioritarios del mismo es el respaldo a la creación, y con el objetivo directo de paliar el evidente déficit de mujeres cineastas que padece el cine español, en el artículo 19.1 g) se dispone que el ICAA establecerá medidas que fomenten la igualdad de género en el ámbito de la creación cinematográfica y audiovisual, y en el artículo 25. *Ayudas para la producción de largometrajes sobre proyecto*, se incluye, como criterio de valoración, que el proyecto aplique medidas de igualdad de género en las actividades creativas de dirección y guión.

Por otra parte, en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, la Disposición adicional segunda. *Órganos colegiados*, establece que, en su composición, se procurará la paridad entre hombres y mujeres.



12 1 13 9

INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY  
REGULADORA DEL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL..

---

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22. 2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se significa que la regulación contenida en el Anteproyecto de Ley de referencia no supone discriminación alguna por razón de género, ajustándose plenamente al principio de igualdad establecido en el artículo 14 de la Constitución.

Madrid, junio de 2007

LEGISLATURA  
VIII



**INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL  
PROYECTO DE LEY DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA  
BIODIVERSIDAD**

El artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, prevé la realización, durante la elaboración de los proyectos de ley, de un informe que analice el impacto por razón de género de las medidas previstas en ellos, a fin de asegurar la igualdad entre hombres y mujeres.

En este sentido, las medidas establecidas en el anteproyecto de ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad carecen de impacto por razón de género.

LEGISLATURA

VIII

12 11 40





121 / 141

12 1 1 4 1

Proyecto de Ley de modificación de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil.

LEGISLATURA

VIII

### INFORME SOBRE IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO

El Anteproyecto de Ley que se pretende aprobar, en esencia, tiene por finalidad modificar la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, para impulsar en el Cuerpo de la Guardia Civil, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como dotar de una protección especial al personal femenino que sea víctima de violencia de género.

Dicha modificación provoca una discriminación positiva por razón de género por los motivos que pasamos a detallar:

#### **1.- Excedencia voluntaria por razón de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral:**

La reforma que se propone supone incorporar en la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, una protección especial a las mujeres guardias civiles que sean víctimas de violencia de género, al facilitar la solicitud de excedencia por este motivo sin que se establezca ningún plazo de permanencia en la misma.

Además, y en concreto para constatar la discriminación positiva a favor de la mujer guardia civil que pase a esta situación por dicho supuesto, se detallan las previsiones contempladas en el texto legal, así:

- Tendrán derecho, durante los seis primeros meses, a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran.





12 1 1 4 1

- No obstante, cuando de las actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima lo exigiere, se podrá prorrogar por períodos de tres meses, con un máximo de dieciocho, el período en el que, se tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo.

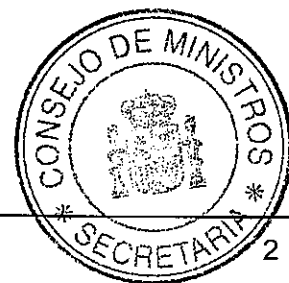
- Se tendrá derecho a percibir, durante los dos primeros meses, las retribuciones integrales.

- Les será computable los seis primeros meses a efectos de tiempo de servicio, trienios y derechos pasivos, pudiéndose prorrogar estos efectos por períodos de tres meses, con el máximo de dieciocho, cuando de las actuaciones de tutela judicial resultare que la efectividad del derecho de protección de la víctima lo exigiere.

- Se fija la previsión de que la inmovilización en el escalafón y las demás consecuencias reguladas en el apartado 7 del artículo 83 del Anteproyecto no se aplicara durante los tres primeros años de este supuesto.

Por ello, resulta de una claridad meridiana que se mejoran las condiciones de esta situación, tanto desde el punto de vista retributivo como de trayectoria profesional de la mujer guardia civil que sea víctima de violencia de género.

En conclusión, se dota de una protección especial a las mujeres guardias civiles que sean víctimas de violencia de género, en línea con lo ya establecido por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que introdujo, en su disposición adicional novena, diversas modificaciones en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, a fin de hacer efectiva una protección de las víctimas de violencia de género, en el ámbito de las Administraciones Públicas. Entre estas modificaciones, se introdujo un nuevo supuesto de excedencia por razón de violencia sobre la mujer funcionaria.



112 114 1



## **2.- Excedencia voluntaria para atender a familiar a cargo y para el de cuidado de hijos.**

Al ampliarse a tres años el período de excedencia para el cuidado de un familiar a cargo, y a dos años la reserva del puesto de trabajo para este supuesto y para el de cuidado de hijos, se favorece la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, resultando especialmente beneficioso para la mujer guardia civil, dado que sobre ella recae normalmente en mayor medida, el cuidado de los hijos y familiares.

De esta manera, se incorporan algunos de los principios generales del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por la Ley 7/2007, de 12 de abril, para extender a la Guardia Civil la aplicación de las medidas que operan para el resto de los funcionarios públicos, avanzando, de esta manera, en el camino de una igualdad efectiva entre las mujeres y los hombres de esta Institución, en la misma línea de lo ya establecido por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

En concreto, quienes pasen a la situación de excedencia voluntaria por este motivo, y para constatar la discriminación positiva a favor de la mujer guardia civil -teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, de que sobre ella recae normalmente, en mayor medida, el cuidado de los hijos y familiares-, se detallan las previsiones contempladas en el texto legal, de esta forma:

- Tendrán derecho, durante los dos primeros años, a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran.

- El tiempo permanecido en dicha situación será computable a efectos de trienios y de derechos pasivos.

- Por último, y además, se fija la previsión, de que la inmovilización en el escalafón y las demás consecuencias reguladas en el apartado 7 del artículo 83 del Anteproyecto no se aplicara en este supuesto.





121141



En consecuencia, con ello se favorece y se produce una discriminación positiva respecto a la mujer guardia civil, que se enmarca en la línea de las modificaciones -en esta materia- plasmadas en la normativa anteriormente reseñada en el Plan Integral para la conciliación de la vida personal y laboral en la Administración, mediante el Acuerdo alcanzado en la Mesa General de Negociación Administración -Sindicatos, por el que se establecen medidas retributivas y para la mejora de las condiciones de trabajo y la profesionalización de los empleados públicos, publicado por Orden del Ministro de Administraciones Públicas 3902/2005, de 15 de diciembre, en el que se recogen un conjunto de medidas destinadas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Debe concluirse por todo ello, que el Anteproyecto se suma a la reforma legislativa encaminada a favorecer la supresión de situaciones de discriminación entre mujeres y hombres -en nuestro concreto caso de las guardias civiles y los guardias civiles-, y tiene, además, un impacto positivo de género al favorecer la plena integración de la mujer guardia civil, dando cumplimiento fiel a lo preceptuado por los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, en el sentido remarcado por la Sentencia del Tribunal Constitucional 19/1989, de 31 de enero, que precisa tajantemente, que la prohibición de discriminación por razón del sexo no sólo entraña la interdicción de la desigualdad de trato injustificada, sino también la decisión constitucional de acabar con la histórica situación de inferioridad atribuida a la mujer en el ámbito del trabajo y de las condiciones de trabajo.





MINISTERIO  
DE JUSTICIA

121/143

12 1 1 4 3

SECRETARÍA DE ESTADO DE  
JUSTICIA

DIRECCIÓN GENERAL DE  
LOS REGISTROS Y DEL  
NOTARIADO.

LEGISLATURA

VIII

## INFORME SOBRE IMPACTO DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL

El presente informe se eleva en cumplimiento de lo previsto por el artículo 24.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada al mismo por la Ley 30/2003 de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.

El Anteproyecto de Ley de Adopción Internacional tiene por objeto regular la intervención de las Entidades Públicas competentes en la adopción internacional y establecer normas de Derecho Internacional Privado relativas a dicha materia.

En consecuencia con lo anterior, y dado el contenido de la norma que nos ocupa, es evidente que se trata de un proyecto normativo que, en el marco de integrar la perspectiva de género en todas las políticas y de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente, no promueve consecuencias negativas que favorezcan situaciones de discriminación entre mujeres y hombres.

Pero no sólo eso sino que la Ley incluso, respecto a tales situaciones de discriminación, supone un avance de gran importancia en relación con la adquisición de la nacionalidad.

En efecto, la Ley contiene la modificación de determinados artículos del Código civil, en virtud del mandato contenido en la disposición adicional segunda de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, yendo más allá de la misma al haber establecido en su disposición final primera la adición de un nuevo artículo 20 bis en el Código Civil que establece la posibilidad de optar por la nacionalidad española de origen para aquéllos que nacieron de española de origen antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978 que hubieren seguido la nacionalidad extranjera del padre, superando, por tanto, la discriminación preconstitucional que impedía a las españolas casadas con ciudadano extranjero transmitir la nacionalidad española a sus descendientes.

Madrid, 12 de junio de 2007



**INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL  
PROYECTO DE LEY PARA LA REGULACION DEL REGIMEN DE LAS  
EMPRESAS DE INSERCIÓN**

La ley para la regulación del régimen de las empresas de inserción establece las siguientes medidas concretas e inmediatas relativas al impacto de género:

Disposición Adicional segunda:

2. El Gobierno podrá modificar los colectivos que se consideran en situación de exclusión social de acuerdo con el artículo 2.1, previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, incluidas las del sector afectado y previa audiencia de la correspondiente Conferencia Sectorial.

Es difícil valorar de manera inmediata qué impacto va a tener la referida disposición en la inclusión de las **víctimas de violencia de género**. No obstante, conviene insistir en que dentro del marco legal para la inserción sociolaboral, esta medida podría propiciar y fomentar el empleo de personas en situación de exclusión, en concreto para las mujeres víctimas de la violencia de género, promoviendo un mercado de trabajo abierto con igualdad de oportunidades para todos, y en especial con una clara repercusión para la igualdad de género en el ámbito de la inclusión social. El impacto podría ser importante y traducirse en un aumento significativo del número de mujeres excluidas empleadas y, obviamente, en la tasa general de actividad femenina.

LEGISLATURA  
VIII



RE EL IMPACTO POR RAZON DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE  
LA LEY 24/1988, DE 28 DE JULIO, DEL MERCADO DE VALORES.

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,  
la organización, competencia y funcionamiento del Gobierno, en su redacción dada por el  
artículo primero de la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la  
valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno,  
los proyectos de leyes deben ser acompañados de un informe sobre el impacto por razón  
de género de las medidas que se establezcan en el proyecto.

Por ello cabe señalar, finalmente, que del presente proyecto de Ley no parece plausible  
que se derive ninguna consecuencia discriminatoria por razón del género.

LEGISLATURA

VIII



**INFORMES DE EVALUACION DE IMPACTO DE  
GENERO Y MEMORIAS DE ANALISIS DE IMPACTO  
DE LA NORMATIVA ELABORADAS EN EL AMBITO  
ESTATAL DURANTE LA IX LEGISLATURA.**

## Cuadro sinóptico de la IX legislatura.

<b>Año</b>	<b>Proyecto normativo presentados en la IX Legislatura</b>	<b>Acompañado de IEIG/MAI según Intranet y con signatura. Congreso de los Diputados</b>	<b>Se encontró en el Archivo (Por tanto puede consultarse en el anexo).</b>
<b>2008</b>			
121/000001	Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Lisboa, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en la capital portuguesa el 13 de diciembre de 2007.	X	X
121/000002	Proyecto de Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias.	X	X
121/000003	Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias.	X	X
121/000004	Proyecto de Ley sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.	X	X
121/000005	Proyecto de Ley de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad.	X	X
121/000006	Proyecto de Ley relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original.	X	X
121/000007	Proyecto de Ley por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito.	X	X
121/000008	Proyecto de Ley por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria.	X	X
121/000009	Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009.	X	NO
121/000010	Proyecto de Ley de control de precursores de drogas.	X	NO
121/000011	Proyecto de Ley del contrato de transporte terrestre de mercancías.	X	X
121/000012	Proyecto de Ley por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y	X	X

## Cuadro sinóptico de la IX legislatura.

	Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo en materia sancionadora		
121/000013	Proyecto de Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.	X	X
121/000014	Proyecto de Ley General de Navegación Marítima	X	NO
121/000015	Proyecto de Ley por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario.	X	NO
121/000016	Proyecto de Ley de Medidas de fomento del alquiler de viviendas y la eficiencia energética de los edificios.	X	X
121/000017	Proyecto de Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial.	X	X
121/000018	Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito y el texto refundido de la Ley de Ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, para la reforma del régimen de participaciones significativas en empresas de servicios de inversión, en entidades de crédito y en entidades aseguradoras.	X	X
121/000019	Proyecto de Ley por la que se modifica el Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, para suprimir las funciones del Consorcio de Compensación de Seguros en relación con los seguros obligatorios de viajeros y del cazador y reducir el recargo destinado a financiar las funciones de liquidación de entidades aseguradoras, y el texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.	X	X
<b>2009</b>			
121/000020	Proyecto de Ley de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias.	X	X
121/000021	Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones (procedente del Real Decreto-Ley 1/2009, de 23 de febrero).	X	X
121/000022	Proyecto de Ley de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas (procedente del Real Decreto-Ley 2/2009, de 6 de marzo).	X	NO
121/000023	Proyecto de Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.	X	X
121/000024	Proyecto de Ley de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen	X	X

## Cuadro sinóptico de la IX legislatura.

	económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general.		
121/000025	Proyecto de Ley de servicios de pago.	X	X
121/000026	Proyecto de Ley por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios.	X	X
121/000027	Proyecto de Ley de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española	X	X
121/000028	Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.	NO	NO
121/000029	Proyecto de Ley por la que se establece el régimen sancionador previsto en los Reglamentos (CE) relativos al registro, a la evaluación, a la autorización y a la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) y sobre la clasificación, el etiquetado y el envasado de sustancias y mezclas (CLP), que lo modifica.	X	X
121/000030	Proyecto de Ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.	X	X
121/000031	Proyecto de Ley de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios (procedente del Proyecto de Ley de medidas de fomento del alquiler de viviendas y la eficiencia energética de los edificios (121/16) y la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en orden a una mayor agilidad de los desahucios por falta de pago, y de ayuda a situaciones de alta vulnerabilidad social (122/10)).	NO	NO
121/000032	Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.	X	X
121/000033	Proyecto de Ley de modificación del texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.	X	X
121/000034	Proyecto de Ley de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista.	X	X
121/000035	Proyecto de Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso.	X	X
121/000036	Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones	X	X



## Cuadro sinóptico de la IX legislatura.

	judiciales de decomiso por la comisión de infracciones penales.		
121/000037	Proyecto de Ley por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.	X	X
121/000038	Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas.	X	X
121/000039	Proyecto de Ley por la que se regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción (procedente del Real Decreto-Ley 10/2009, de 13 de agosto).	X	X
121/000040	Proyecto de Ley por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias comunidades autónomas (procedente del Real Decreto-Ley 12/2009, de 13 de agosto).	X	X
121/000041	Proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.	X	X
121/000042	Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010.	X	NO
121/000043	Proyecto de Ley por la que se transponen determinadas directivas en el ámbito de la imposición indirecta y se modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes para adaptarla a la normativa comunitaria.	X	X
121/000044	Proyecto de Ley Orgánica del régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.	X	X
121/000045	Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual.	X	X
121/000046	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, la Ley 24/1988, de 28 de julio, de Mercado de Valores y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, para su adaptación a la normativa comunitaria.	X	X
121/000047	Proyecto de Ley de captación de financiación en los mercados por los concesionarios de obras públicas.	X	X
121/000048	Proyecto de Ley sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea.	X	X
121/000049	Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica	X	X

## Cuadro sinóptico de la IX legislatura.

	6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.		
121/000050	Proyecto de Ley de Reforma del Sistema de Apoyo Financiero a la Internacionalización de la empresa española.	X	X
121/000051	Proyecto de Ley del Fondo para la Promoción del Desarrollo.	X	X
121/000052	Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.	X	X
121/000053	Proyecto de Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.	X	X
121/000054	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea.	X	X
121/000055	Proyecto de Ley por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.	X	X
121/000056	Proyecto de Ley sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España.	X	X
<b>2010</b>			
121/000057	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para perfeccionar y ampliar el régimen general de comercio de derechos de emisión e incluir la aviación en el mismo.	X	X
121/000058 MEMORIA	Proyecto de Ley por la que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, se establecen las obligaciones de los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo (procedente del Real Decreto- Ley 1/2010, de 5 de febrero).	M	M
121/000059	Proyecto de Ley de protección del medio marino.	M	M
121/000060	Proyecto de Ley de Economía Sostenible.	M	NO
121/000061	Proyecto de Ley Orgánica Complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional; 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.	M	NO
121/000062	Proyecto de Ley por la que se establece el Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil y se modifica la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.	M	M
121/000063	Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.	M	M
121/000064	Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.	M	M
121/000065	Proyecto de Ley del régimen de cesión de	M	M

## Cuadro sinóptico de la IX legislatura.

	tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.		
121/000066	Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.	M	M
121/000067	Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.	M	M
121/000068	Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.	M	M
121/000069	Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.	M	M
121/000070	Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.	M	M
121/000071	Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.	M	M
121/000072	Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.	M	M
121/000073	Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.	M	M
121/000074	Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad de Madrid y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.	M	M
121/000075	Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.	M	M
121/000076	Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.	M	M
121/000077	Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunitat Valenciana y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.	M	M
121/000078 INFORME	Proyecto de Ley de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.	X	X
<b>2011</b>			
121/000079	Proyecto de Ley de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, 31/2007, de	X	X

## Cuadro sinóptico de la IX legislatura.

	30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras.		
121/000080	Proyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.	NS	NO
121/000081	Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo (procedente del Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio).	M	M
121/000082	Proyecto de Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.	NS	NO
121/000083	Proyecto de Ley por la que se regula la Sociedad Cooperativa Europea con domicilio en España.	NS	NO
121/000084	Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando.	NS	NO
121/000085	Proyecto de Ley de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado.	NS	NO
121/000086	Proyecto de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía.	M	M
121/000087	Proyecto de Ley Orgánica complementaria a la Ley para la reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado para la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.	NS	NO
121/000088	Proyecto de Ley de Economía Social	NS	NO
121/000089	Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y mejoramiento del Régimen Foral de Navarra.	NO	NO
121/000090	Proyecto de Ley del Registro Civil.	NS	NO
121/000091	Proyecto de Ley Orgánica, complementaria de la Ley del Registro Civil, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.	NS	NO
121/000091	Proyecto de Ley Orgánica, complementaria de la Ley del Registro Civil, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.	NS	NO
121/000092	Proyecto de Ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos	NS	NO
121/000093	Proyecto de Ley del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal.	M	M
121/000094	Proyecto de Ley de tasas consulares.	NS	NO
121/000095	Proyecto de Ley de pesca sostenible.	NS	NO
121/000096	Proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición.	NS	NO

## Cuadro sinóptico de la IX legislatura.

121/000097	Proyecto de Ley por la que se prorroga el programa temporal por desempleo e inserción, regulado en la Ley 14/2009, de 11 de noviembre (procedente del Real Decreto-Ley 12/2010, de 20 de agosto).	NS	NO
121/000098	Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.	NO	NO
121/000099	Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las Comunidades Europeas.	NS	NO
121/000100	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores y el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública.	NS	NO
121/000101	Proyecto de Ley por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas.	NS	NO
121/000102	Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Protocolo por el que se modifica el Protocolo sobre las disposiciones transitorias, anejo al Tratado de la Unión Europea, al Tratado de funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, firmado en Bruselas el 23 de junio de 2010.	M	M
121/000103	Proyecto de Ley de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.	NS	NO
121/000104	Proyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo.	NS	NO
121/000105	Proyecto de Ley de dinero electrónico.	NS	NO
121/000106	Proyecto de Ley por la que se modifican determinadas normas financieras para la aplicación del Reglamento (CE) número 1060/2009, de 16 de septiembre, sobre agencias de calificación crediticia.	NS	NO
121/000107	Proyecto de Ley Orgánica de derechos y deberes de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.	NS	NO
121/000108	Proyecto de Ley de regulación del juego.	NS	NO
121/000109	Proyecto de Ley de regulación del juego.	NS	NO
121/000110	Proyecto de Ley reguladora de la jurisdicción social.	NS	NO
121/000111	Proyecto de Ley de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas.	NS	NO

## Cuadro sinóptico de la IX legislatura.

121/000112	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria.	NS	NO
121/000113	Proyecto de Ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.	NS	NO
121/000114	Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados.	NS	NO
121/000115	Proyecto de Ley General de Salud Pública.	NS	NO
121/000116	Proyecto de Ley de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo (procedente del Real Decreto-Ley 3/2011, de 18 de febrero).	NS	NO
121/000117	Proyecto de Ley de medidas de agilización procesal y de reforma del artículo 35 de la Ley 53/2002, de 20 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.	NS	NO
121/000118	Proyecto de Ley de depósito legal.	NS	NO
121/000119	Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.	NS	NO
121/000120	Proyecto de Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.	NS	NO
121/000121	Proyecto de Ley de contratos del Sector Público en los ámbitos de la Defensa y de la Seguridad.	NS	NO
121/000122	Proyecto de Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles.	NS	NO
121/000123	Proyecto de Ley por la que se procede a la integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General de la Seguridad Social.	NS	NO
121/000124	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.	NS	NO
121/000125	Proyecto de Ley reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.	NS	NO
121/000126	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.	NS	NO
121/000127	Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia (procedente del Real Decreto-Ley 6/2011, de 13 de mayo).	NS	NO
121/000128	Proyecto de Ley sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias.	NS	NO
121/000129	Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas	NS	NO
121/000130	Proyecto de Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación.	NS	NO
121/000131	Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención al cliente destinados a los consumidores y usuarios.	NS	NO
121/000132	Proyecto de Ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la	NS	NO

## Cuadro sinóptico de la IX legislatura.

	vida.		
121/000133	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.	NS	NO
121/000134	Proyecto de Ley de servicios funerarios.	NS	NO
121/000135	Proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva (procedente del Real Decreto-Ley 7/2011, de 10 de junio).	NS	NO
121/000136	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.	NS	NO
121/000137	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.	NS	NO
121/000138	Proyecto de Ley de Contratos de Distribución.	NS	NO
121/000139	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2009/73/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE.	NS	NO
121/000140	Proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.	NS	NO
121/000141	Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2009/72/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE.	NS	NO
121/000142	Proyecto de Ley de supervisión de los seguros privados.	NS	NO
121/000143	Proyecto de Ley Orgánica para la aplicación a la Guardia Civil del artículo 13.1 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.	NS	NO
121/000144	Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para la creación de los Tribunales de Instancia.	NS	NO
121/000145	Proyecto de Ley de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo (procedente del Real Decreto-Ley 10/2011, de 26 de agosto).	NS	NO
121/000146	Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje en el Deporte.	NS	NO

## Cuadro sinóptico de la IX legislatura.

121/000147	Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.	NS	NO
------------	--	----	----

- Acompañado de IEIG/MAI según Intranet y con signatura. Congreso de los Diputados X: Si viene acompañado Informe de Evaluación de Impacto de Género:
  - X: Posee Informe
  - M: Posee Memoria
  - NS: Sin signatura, imposible de consultar en el Archivo por el momento
  - NO: Según la Intranet del Congreso debería de ir acompañado o de IEIG o MAI, además este extremo debería poder ser consultado pero una vez realizada la búsqueda el documento no se encuentra
- Se encontró en el Archivo (Por tanto puede consultarse en el anexo):
  - X: Si se encontró
  - No: No se encontró



002991

121001



MINISTERIO  
DE ASUNTOS  
EXTERIORES Y  
DE COOPERACIÓN

LEGISLATURA

IX

SECRETARÍA DE ESTADO  
PARA LA UNIÓN EUROPEA

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE AUTORIZA LA RATIFICACIÓN POR ESPAÑA DEL TRATADO DE LISBOA POR EL QUE SE MODIFICAN EL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA Y EL TRATADO CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD EUROPEA, FIRMADO EN LISBOA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2007.

INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO



De conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que determina que "los proyectos de disposiciones de carácter general (...) deberán incorporar un informe sobre su impacto por razón de género", se informa que el proyecto de Ley Orgánica referida no contiene disposiciones que puedan tener un impacto negativo en este sentido.

Antes al contrario, el Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea contiene distintos preceptos dirigidos a la lucha contra cualquier tipo de discriminación en materia de género. Así, el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE)<sup>1</sup>, relativo a los valores sobre los que se funda la Unión, se incluye expresamente la igualdad de mujeres y hombres. Del mismo modo, el artículo 3 del TUE establece entre los objetivos de la Unión el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres.

Por su parte, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) señala en su artículo 8 que "en todas sus acciones, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad", y en el artículo 10 que "en la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tratará de luchar contra toda discriminación por razón de sexo (...)". Por tanto, es expresa la voluntad de la Unión de garantizar la igualdad tanto en la planificación como en la ejecución de sus políticas y acciones.

Entre otros preceptos en el mismo sentido, cabe destacar el Título X del TFUE (política social), cuyo artículo 157.4 permite expresamente a los Estados miembros adoptar medidas en el ámbito laboral que primen el sexo más desfavorecido con el fin de alcanzar la igualdad en las condiciones laborales y promoción profesional.

<sup>1</sup> En el presente informe se utiliza la numeración de los artículos correspondiente a los textos consolidados una vez haya entrado en vigor el Tratado de Lisboa



MINISTERIO  
DE JUSTICIA

003637

121/2 IX

SUBSECRETARÍA

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

## INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY PARA LA EJECUCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA DE RESOLUCIONES QUE IMPONGAN SANCIONES PECUNIARIAS.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, debe señalarse que las medidas que se incluyen en este Anteproyecto de Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias, no conllevan impacto alguno por razón de género.

LEGISLATURA

121002

IX



121 / 3 1x

003638

MINISTERIO  
DE JUSTICIA

SUBSECRETARÍA

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

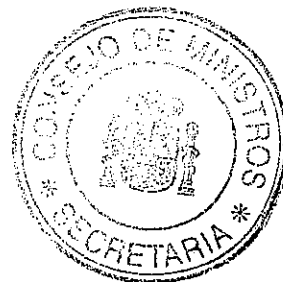
# INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, Y COMPLEMENTARIA A LA LEY PARA LA EJECUCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA DE RESOLUCIONES QUE IMPONGAN SANCIONES PECUNIARIAS

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, debe señalarse que las medidas que se incluyen en este Anteproyecto de Orgánica complementaria de la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias, no conllevan impacto alguno por razón de género.

LEGISLATURA

IX

121003





MINISTERIO  
DE JUSTICIA

121/4 IX

004397

SUBSECRETARÍA

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

## PROYECTO DE LEY SOBRE MODIFICACIONES ESTRUCTURALES DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES.

### INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, debe señalarse que las medidas que se incluyen en este Anteproyecto no conllevan impacto alguno por razón de género.

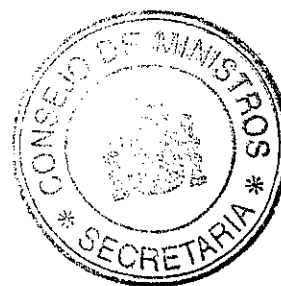
Madrid, 17 de abril de 2008

LEGISLATURA

IX

121004

121004



CORREO

SAN BERNARDO, 62  
28015 MADRID  
TEL: 91 390 22 32  
FAX: 91 390 44 71

121/5



MINISTERIO  
DE JUSTICIA

PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY DEL REGISTRO CIVIL EN MATERIA DE INCAPACITADOS, CARGOS TUTELARES Y ADMINISTRADORES DE PATRIMONIOS PROTEGIDOS Y DE LA LEY 41/2003, DE 18 DE NOVIEMBRE, SOBRE PROTECCIÓN PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL, DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL Y DE LA NORMATIVA TRIBUTARIA CON ESTA FINALIDAD

### INFORME SOBRE IMPACTO DE GÉNERO

El presente informe se eleva en cumplimiento de lo previsto por el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

El presente anteproyecto de ley tiene por objeto adecuar la organización del Registro Civil para que éste pueda actuar como un mecanismo de publicidad fiable que permita supervisar la efectiva aplicación de la normativa relativa a la incapacitación judicial de personas que no puedan gobernarse por si mismas, así como facilitar la efectiva puesta en práctica de la figura del patrimonio protegido como mecanismo de protección patrimonial de las personas con discapacidad.

El contenido de dicho proyecto normativo, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente, no promueve consecuencias negativas que favorezcan situaciones de discriminación entre mujeres y hombres.

Madrid, 12 de junio de 2008



1721005

LEGISLATURA

IX

SAN BERNADO 45  
28015 MADRID



MINISTERIO  
DE CULTURA

121 / 6

IX

020567

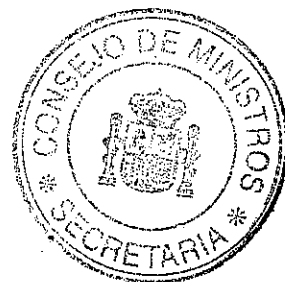
## **IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY RELATIVA AL DERECHO DE PARTICIPACIÓN EN BENEFICIO DEL AUTOR DE UNA OBRA DE ARTE ORIGINAL**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, se señala que las medidas que se incluyen en este anteproyecto de ley no conllevan impacto alguno por razón de género.

121006

LEGISLATURA

IX





120/7  
MINISTERIO DE SANIDAD  
Y CONSUMO

MINISTERIO DE ECONOMÍA  
Y HACIENDA

INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL ANTEPROYECTO DE LEY  
POR LA QUE SE REGULA LA CONTRATACIÓN CON LOS CONSUMIDORES DE  
PRÉSTAMOS O CRÉDITOS HIPOTECARIOS Y DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN  
PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMO O CRÉDITO.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 24.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada por el artículo segundo de la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, debe señalarse que en ninguno de los preceptos de este proyecto de ley, ni en el fondo ni en la forma, se establecen medidas o reconocen derechos u obligaciones que puedan suponer discriminación alguna por razón de sexo.

Por ello, se considera que este proyecto carece de impacto por razón de género.

Madrid, julio de 2008

LEGISLATURA

IX

121007





121008

**INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE SUPRIME EL GRAVAMEN DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO, SE GENERALIZA EL SISTEMA DE DEVOLUCIÓN MENSUAL EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, Y SE INTRODUCEN OTRAS MODIFICACIONES EN LA NORMATIVA TRIBUTARIA**

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, los proyectos de ley deben acompañarse de un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establezcan en ellos.

Este Proyecto de Ley contiene modificaciones en la normativa legal reguladora de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes, sobre el Patrimonio, sobre el Valor Añadido, del Impuesto General Indirecto Canario, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de los Impuestos Especiales, así como una modificación en la Ley General Tributaria. Además, se introducen sendas disposiciones en el ámbito del Impuesto sobre Actividades Económicas y del Impuesto sobre las Primas de Seguros.

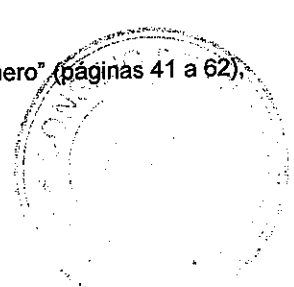
Las repercusiones que por razón de género pueden derivarse de modificaciones en algunos de los citados tributos han sido objeto de estudio, pudiendo destacarse, siguiendo a Janet G. Stotsky<sup>1</sup>, las siguientes consideraciones:

El Impuesto sobre Sociedades se aplica a las personas jurídicas y, en consecuencia, no suele contener un sesgo explícito de género. Tal como señala la referida autora "muy difícil sería encontrar una ley del impuesto sobre la renta de las sociedades que explícitamente impusiera una tributación diferente según la empresa estuviera constituida por mujeres o por hombres", si bien dado que "la introducción de cambios en los impuestos sobre la renta de sociedades puede inducir cambios en las inversiones en determinados sectores", de inclinarse esas preferencias hacia sectores "que emplean de manera predominante a uno de ambos géneros, pueden darse también en este caso sesgos implícitos de género".

Con respecto al Impuesto sobre el Patrimonio, y a la vista de su configuración como gravamen al patrimonio en sentido estático, tampoco cabe determinar explícitamente que el mismo incorpore sesgos en función del género. Esta conclusión parece adecuada, en especial, a tenor de la modificación que se introduce, que supone la eliminación del gravamen del referido tributo.

En la imposición indirecta, tal es el caso del IVA y de los Impuestos Especiales, no suele advertirse "un sesgo explícito en razón del género. El impuesto que debe pagarse es impersonal, dado que se origina en la compra o producción de un producto. Si bien sería posible introducir ese sesgo estableciendo un impuesto basado en la compra de un bien solo cuando lo compre una mujer (o un hombre), en la práctica no parece existir tal discriminación".

<sup>1</sup> "Sesgos de género en los sistemas tributarios", trabajo publicado en el libro "Política fiscal y género" (páginas 41 a 62), editado por el Instituto de Estudios Fiscales (2005).







En el caso del IVA existen algunas maneras en las que podría manifestarse un sesgo implícito, tal es el caso de la existencia de patrones diferenciales de consumo de determinados bienes, por ejemplo los artículos de primera necesidad, por parte de hombres y mujeres, aunque Stotsky señala que "el carácter exacto de estos sesgos implícitos es difícil de establecer".

También sería difícil de determinar la aludida falta de neutralidad en el supuesto de que el tratamiento preferencial en el IVA se refiriera a determinados consumidores o productores.

Al igual que sucede con el IVA, los Impuestos Especiales "por lo general no contienen un sesgo explícito en función del género. Los impuestos especiales suelen tener un sesgo implícito más evidente que los impuestos sobre el consumo de base amplia. Por ejemplo, los impuestos sobre consumos específicos comúnmente gravan el alcohol y el tabaco a tipos elevados, productos que, en un porcentaje desproporcionado, son consumidos por los hombres. Por lo tanto, como en el caso de los impuestos de base amplia sobre los productos, podría considerarse que los impuestos especiales tienen un sesgo implícito contrario a los hombres. No obstante, en el contexto del presupuesto del hogar, estos impuestos también provocarían un cambio en el consumo de otros bienes, lo cual podría tender a reducir el sesgo contrario a los hombres".

En consecuencia, cabe concluir que este Proyecto de Ley no contiene disposiciones que, al menos explícitamente, puedan favorecer situaciones de discriminación por razón de género.

Madrid, 23 de julio de 2008

LEGISLATURA

IX

121008





MINISTERIO  
DE JUSTICIA

121/11  
LEGISLATURA  
IX

SUBSECRETARÍA

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

121011

## INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY DEL CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCÍAS.

Es de señalar, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 2 de la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre valoración del impacto de género, que este Anteproyecto de Ley no contiene ningún aspecto del que puedan derivarse consecuencias negativas o de discriminación.

Del análisis de la modificación propuesta, desde la perspectiva del impacto de género se deduce que las disposiciones de este Anteproyecto de Ley, en cuanto puedan afectar directa o indirectamente a las personas físicas, no presentan tratamientos diferenciados o especialidades en función del género. Por tal razón, es preciso hacer constar que no hay aspectos diferenciales para el conjunto de la población, entre hombres y mujeres.

En consecuencia, se informa que la regulación contenida en este Anteproyecto de Ley no tiene impacto alguno por razón de género.

Madrid 17 de octubre de 2008.



CORREO

SAN BERNARDO, 62  
28015 MADRID  
TEL: 91 390 22 32  
FAX: 91 390 44 71



121012

121/12

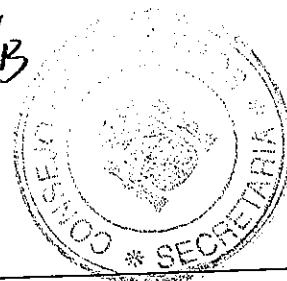
**INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/1990, DE 2 DE MARZO, EN MATERIA SANCIONADORA.**

De acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 22.2 de la Ley 50/1997, del Gobierno, añadido por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, se participa que el contenido del Proyecto de Ley no afecta a la igualdad entre hombres y mujeres, pues pretende, esencialmente, llevar a cabo una reforma integral del procedimiento sancionador en materia de tráfico, adecuado a sus peculiaridades y que transmita al infractor la sensación de una justicia administrativa del tráfico realmente inmediata, desterrando la sensación de impunidad derivada de procedimientos largos y formalistas, todo ello sin mermar las garantías del denunciado y teniendo presente la amplia jurisprudencia relativa al ejercicio del "ius puniendi" por parte de la Administración.

Además, se lleva a cabo también la reforma de otros preceptos, unos derivados de la modificación del procedimiento sancionador y otros como consecuencia de otras materias de la Ley necesitadas de nueva redacción, entre las que cabe apuntar la nueva ordenación del ahora llamado Consejo Superior de Seguridad Vial o la creación de un Registro Estatal de Víctimas y Accidentes de Tráfico.

Por lo expuesto, el Proyecto de Ley se aplica por igual a hombres y mujeres y no implica ningún impacto por razón de género.





INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY  
REGULADORA DEL DERECHO DE ASILO Y DE LA PROTECCIÓN SUBSIDIARIA

1. FUNDAMENTO LEGAL.

La elaboración de este informe responde a lo establecido en el apartado segundo del artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Así, éste establece que el procedimiento de elaboración de proyectos de ley se iniciará en el ministerio o ministerios competentes mediante la elaboración del correspondiente proyecto, que irá acompañado por la memoria, los estudios o informes sobre la necesidad y oportunidad del mismo, un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establecen en el mismo, así como por una memoria económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar.

2. CONTENIDO.

El objetivo del Proyecto es la transposición de la normativa europea adoptada en materia de asilo, en concreto: el Capítulo V de la Directiva 2003/86/CE, del Consejo de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar; la Directiva 2004/83/CE, de Consejo de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas sobre los requisitos y el estatuto al que pueden optar ciudadanos de países terceros y personas apátridas para ser refugiados o beneficiarios de otros tipos de protección internacional; y la Directiva 2005/85/CE, del Consejo de 1 de diciembre de 2005, sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado.



La normativa comunitaria, que parte de la total y plena aplicación de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el estatuto de los refugiados, constituye el denominador común de todos los sistemas de asilo de los Estados miembros de la Unión Europea.

Se trata pues de incorporar la legislación de la Unión Europea, que tiene como principios el de no discriminación entre mujeres y hombres, y el de la promoción de la igualdad (artículos 2 y 3.2 del TCE, entre otros).

El contenido del Proyecto, por la naturaleza de la materia regulada, se asienta en estos principios, si bien contempla ciertas medidas dirigidas a hacer efectiva la promoción de la igualdad entre las mujeres y hombres, que claramente generan un impacto en materia de género.

Estos preceptos son los siguientes:

1. Artículo 6. Actos de persecución

"...2. Los actos de persecución definidos en el apartado 1 podrán revestir, entre otras, las siguientes formas:

- a) los actos de violencia física o psíquica, incluidos los actos de violencia sexual;
- b) medidas legislativas, administrativas, policiales o judiciales que sean discriminatorias en sí mismas o se apliquen de manera discriminatoria;
- c) procesamientos o penas que sean desproporcionadas o discriminatorios;
- d) denegación de la tutela judicial de la que se deriven penas desproporcionadas o discriminatorias;
- f) los actos de naturaleza sexual que afecten a adultos o a niños."

La inclusión como actos de persecución de determinadas prácticas como las que se señalan tienen un impacto de género directo, en la medida en que tipifican como actos persecutorios

121013



específicos aquéllos que tienen su razón de ser en el género u orientación sexual del sujeto perseguido.

Desde esta perspectiva, cabe señalar que el Proyecto, al igual que la Directiva comunitaria 2004/83/CE, no sólo incluye actos de violencia, tanto física como psíquica, sino que introduce como acto de persecución, todas aquellas medidas provenientes de autoridades del Estado (Policía, Administración, Poder Judicial...) que puedan resultar discriminatorias, entre las que indudablemente se incluyen las relacionadas con el género, con lo que se protege de situaciones que en la práctica de determinados países de origen se dan y se consiente o silencia por el resto de la sociedad y por el sistema.

## 2. Artículo 7. Motivos de persecución

"1. Al valorar los motivos de persecución se tendrán en cuenta los siguientes elementos: [...]

d) Se considerará que un grupo constituye un grupo social determinado si, en particular:

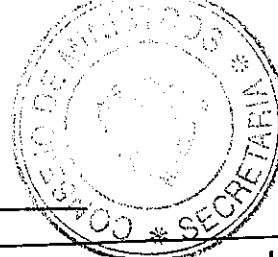
- las personas de dicho grupo comparten una característica innata o unos antecedentes comunes que no pueden cambiarse, o bien comparten una característica o creencia que resulta tan fundamental para su identidad o conciencia que no se les puede exigir que renuncien a ella, y

- dicho grupo posee una identidad diferenciada en el país de que se trate por ser percibido como diferente por la sociedad que lo rodea o por el agente o agentes perseguidores.

En función de las circunstancias imperantes en el país de origen, podrá incluirse en el concepto de grupo social determinado un grupo basado en una característica común de orientación sexual. No podrá entenderse la orientación sexual en un sentido que comporte actos considerados delictivos por el ordenamiento español.

Asimismo, podrán incluirse a las personas que huyan de sus países de origen debido a fundados temores a sufrir persecución por motivos de género en función de las circunstancias imperantes en el país de origen, sin que aquéllos o éstas por sí solas puedan dar lugar a la aplicación del presente artículo".

121013



Este último párrafo se enmarca en la legislación de género, por cuanto que son los motivos de género los que lo motivan, con la finalidad de otorgar protección frente a situaciones de este tipo cuando se reúnan los requisitos establecidos para el reconocimiento de la condición de refugiado.

### 3. Artículo 15. Presentación de la solicitud

“ 5. La Administración adoptará las medidas necesarias para que, cuando sea preciso, en la entrevista se preste un tratamiento diferenciado por razón del sexo de la persona solicitante...”.

El Proyecto se hace eco de la necesidad de atender con la profesionalidad necesaria a las personas solicitantes de asilo, y cuando son mujeres, cuya procedencia cultural les dificulta exponer cuál ha sido su situación y, por tanto, acceder a la protección, establece esta medida para poder conocer y decidir con justicia y eficacia.

### 4. Artículo 42. Régimen general de protección

“1. En el marco de la presente Ley, y en los términos que se desarrolle reglamentariamente, se tendrá en cuenta la situación específica de las personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional en situación de vulnerabilidad, tales como... mujeres embarazadas,...personas que hayan padecido... violaciones...”.

El Proyecto señala la necesidad de tener en cuenta la situación de vulnerabilidad de determinados colectivos de personas que pudieran estar necesitadas de un tratamiento diferenciado, sea éste de tipo personal o se traduzca en medidas concretas en la tramitación del procedimiento.

En ese sentido, el Proyecto exhorta a quienes lo van a aplicar en la práctica de manera directa, esto es, al personal de la Administración encargado de la tramitación de las solicitudes, a tener esa consideración al respecto, si bien como norma legal en cuyo texto debe primar la generalidad, no explicita exactamente en qué consisten otras medidas orientadas a ese fin, dejándose para un ulterior desarrollo reglamentario.



Finalmente, cabe subrayar que el impacto de género es claro, tanto en las medidas que debe adoptar, si resulta preciso, la Administración, como en el colectivo de personas a las que se denomina "vulnerables", pues dentro de ellas se sitúan mujeres embarazadas así como personas traficadas, práctica ésta cuyas principales víctimas son mujeres. Su inclusión en el Proyecto de ley como colectivo vulnerable alinea esta norma con otras actuaciones administrativas adoptadas y que ofrecen a estas mujeres una herramienta más para que procedan a denunciar a sus traficantes, en consonancia con lo dispuesto en la propia normativa de Extranjería. (artículos 59, de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 45.4, 45.5 y 46.5 de su Reglamento de aplicación).

### 3- CONCLUSIÓN.

A la vista de lo expuesto puede concluirse que la presente disposición legal produce un impacto positivo en materia de género, pues ha sido elaborada atendiendo a consideraciones de género, y es fruto tanto de la normativa a trasponer como de la voluntad de proteger aquellas situaciones en las que la perspectiva del género constituye un elemento constatable de una situación merecedora de protección internacional.







MINISTERIO  
DE LA PRESIDENCIA

121013

LEGISLATURA

IX

17894

En cumplimiento del Acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros, en su reunión del día 5 de diciembre de 2008, tengo el honor de remitir a V.E., en nombre del Gobierno, el Proyecto de Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, acompañado de la siguiente documentación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Constitución:

- Memoria justificativa.
- Memoria económica.
- Informe sobre el impacto por razón de género.
- Dictamen del Consejo de Estado.

Madrid, 5 de diciembre de 2008

LA VICEPRESIDENTA PRIMERA Y  
MINISTRA DE LA PRESIDENCIA,



María Teresa Fernández de la Vega Sanz

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.



MINISTERIO  
DE ECONOMIA  
Y HACIENDA

121015



121/15

SECRETARIA DE ESTADO  
DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS  
SECRETARIA GENERAL  
DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE TRIBUTOS

## INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULAN LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS DE INVERSIÓN EN EL MERCADO INMOBILIARIO

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, los proyectos de ley deben acompañarse de un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establezcan en ellos.

Este Anteproyecto de Ley establece las especialidades del régimen jurídico de las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario, que se dedicarán esencialmente al arrendamiento de bienes inmuebles urbanos, adquiridos o promovidos por las sociedades cotizadas con tal fin.

En la configuración de su régimen jurídico destaca la posibilidad de optación por la aplicación de un régimen fiscal favorable en el Impuesto sobre Sociedades, consistente en la aplicación de un tipo impositivo del 18 por ciento en dicho impuesto, de tal forma que esta tributación evita en la mayor parte de los supuestos una nueva tributación en sede del socio. En consecuencia, atendiendo a la naturaleza y lugar de residencia fiscal del socio, resultará de aplicación el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes o el Impuesto sobre Sociedades.

Las repercusiones que por razón de género pueden derivarse del establecimiento de las especialidades del régimen jurídico de las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario son difíciles de evaluar, si bien cabe realizar las siguientes consideraciones:

El Impuesto sobre Sociedades se aplica a las personas jurídicas y, en consecuencia, no suele contener un sesgo explícito de género. Tal como señala Janet G. Stotsky<sup>1</sup>, "muy difícil sería encontrar una ley del impuesto sobre la renta de las sociedades que explícitamente impusiera una tributación diferente según la empresa estuviera constituida por mujeres o por hombres". Sin embargo, dado que "la introducción de cambios en los impuestos sobre la renta de sociedades puede inducir cambios en las inversiones en determinados sectores", de inclinarse esas preferencias hacia sectores "que emplean de manera predominante a uno de ambos géneros, pueden darse también en este caso sesgos implícitos de género".

En este sentido, el hecho de que el objeto principal de las sociedades anónimas reguladas en el proyecto de ley sea, precisamente, la inversión en bienes inmuebles de naturaleza urbana, puede llevar a pensar que el presente proyecto legislativo tenga un mayor impacto en el género masculino que en el femenino. En efecto, según los datos del

<sup>1</sup> "Sesgos de género en los sistemas tributarios", trabajo publicado en el libro "Política fiscal y género" (páginas 41 a 62), editado por el Instituto de Estudios Fiscales (2005).



Instituto Nacional de Estadística, en los años 2005 a 2007, la población masculina ocupada en el sector de la construcción representó el 94,56% del total, frente al 5,44% de la población femenina. Sin embargo, el posible aumento del empleo en el sector inmobiliario como consecuencia del régimen fiscal favorable que se establece en este anteproyecto de ley podría acabar beneficiando indirectamente a las mujeres, a través del presupuesto del hogar.

También es cierto que el presente anteproyecto de ley puede tener un sesgo favorable hacia el género femenino. Así, el objetivo de la ley es dinamizar la actividad de alquiler de bienes inmuebles de naturaleza urbana, entre los que se encuentran las viviendas, mediante el otorgamiento de un régimen fiscal favorable a este tipo de sociedades anónimas. La consecuencia deseada es el aumento de la oferta de viviendas en alquiler y, por consiguiente, la reducción de los precios de las mismas. Ello puede repercutir en beneficio del género femenino pues, al percibir las mujeres salarios más bajos que los hombres, como prueban las estadísticas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, aquéllas serán las primeras beneficiadas en un aumento de la oferta de alquileres y su consiguiente reducción de precios, facilitando su emancipación familiar.

Por lo que se refiere a la tributación de los socios, cuando éstos sean a su vez sociedades, sirva lo ya dicho a propósito del Impuesto sobre Sociedades y su falta de impacto de género como norma general, y más en este caso puesto que se tratará de sociedades de inversión, no necesariamente encuadradas en un sector económico determinado, respecto las que difícilmente se puede presumirse cualquier sesgo en materia de género.

Cuando los socios sean personas físicas, los dividendos percibidos por su participación en el capital social de la entidad están exentos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La ausencia de gravamen, unido a la liquidez que proporcionará la inversión en este tipo de sociedades debido al porcentaje de beneficios que deben repartir de forma obligatoria como dividendo y al carácter cotizado de sus acciones, pueden constituir un importante incentivo para que los pequeños ahorradores inviertan en el mercado inmobiliario, haciendo uso de estas nuevas sociedades que gestionarán profesionalizada activos inmobiliarios.

Y este propósito de que la inversión inmobiliaria profesionalizada esté al alcance de todos los ciudadanos, puede favorecer muy especialmente a los que cuentan con menores recursos, por lo que las mujeres podrían beneficiarse en mayor medida, ya que, estadísticamente, como ya se dijo, perciben salarios inferiores a los hombres.

En consecuencia, cabe concluir que este Anteproyecto de Ley no contiene disposiciones que, al menos explícitamente, puedan favorecer situaciones de discriminación por razón de género.





MINISTERIO DE VIVIENDA

121/16 IX

SUBSECRETARIA

SECRETARIA GENERAL TECNICA

121016

**INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE FOMENTO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.**

Conforme a la modificación operada por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, respecto al procedimiento de elaboración de los proyectos de Ley, se informa que:

El impacto, por razón de género, de las medidas que se establecen en el Anteproyecto de Ley de medidas de fomento del alquiler de viviendas y la eficiencia energética es neutro, al no ser previsibles consecuencias negativas que favorezcan situaciones de discriminación por dicha razón.

Madrid, a 11 de diciembre de 2008



Pº DE LA CASTELLANA 112  
28071 - MADRID



MINISTERIO  
DE JUSTICIA

121/17

IX

5/12/2008

121017

**PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEGISLACIÓN PROCESAL PARA LA  
IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA OFICINA JUDICIAL**

**INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO**

De conformidad con el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, los anteproyectos de ley deberán ir acompañados de un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establecen en el mismo.

El referido anteproyecto tiene por objeto la adecuación de las leyes procesales a las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de Oficina judicial y Secretarios Judiciales, por lo que se estima que las medidas que se incluyen en este anteproyecto de ley orgánica no conllevan impacto alguno por razón de género.

Madrid, 5 de diciembre de 2008

LEGISLATURA

IX





121018

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY 24/1988, DE 28 DE JULIO, DEL MERCADO DE VALORES, LA LEY 26/1988, DE 29 DE JULIO, SOBRE DISCIPLINA E INTERVENCIÓN DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO Y EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE ORDENACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SEGUROS PRIVADOS, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 6/2004, DE 29 DE OCTUBRE, PARA LA REFORMA DEL RÉGIMEN DE PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS EN EMPRESAS DE SERVICIOS DE INVERSIÓN, EN ENTIDADES DE CRÉDITO Y EN ENTIDADES ASEGURADORAS.**

## 1. Introducción.

El Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito y el texto refundido de la ley de ordenación y supervisión de seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, para la reforma del régimen de participaciones significativas en empresas de servicios de inversión, en entidades de crédito y en entidades aseguradoras, transpone al ordenamiento español, en lo que respecta a la adquisición de participaciones en empresas de servicios de inversión y entidades de crédito, la Directiva 2007/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007 por la que se modifica la Directiva 92/49/CEE del Consejo y las Directivas 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE y 2006/48/CE en lo que atañe a las normas procedimentales y los criterios de evaluación aplicables en relación con la evaluación cautelar de las adquisiciones y de los incrementos de participaciones en el sector financiero. Con independencia de la incorporación a derecho interno de la Directiva 2007/44/CE, mediante la disposición final primera del anteproyecto de Ley se efectúa una modificación del artículo 28, vínculos estrechos y régimen de participaciones significativas, de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados.

En general, en este anteproyecto se regulan las situaciones en las que una persona física o jurídica ha decidido adquirir, incrementar o reducir una participación en una empresa de servicios de inversión o en una entidad de crédito.

El ECOFIN informal de Scheveningen, el 11 de septiembre de 2004, trató la cuestión de la consolidación transfronteriza de entidades de crédito en la Unión Europea. Tras constatar la baja frecuencia de dichas fusiones transfronterizas comparadas con las domésticas, instó a la Comisión a lanzar una revisión del proceso de aprobación por las autoridades supervisoras de la adquisición de participaciones significativas en entidades de crédito. El objetivo era eliminar las posibles barreras que este proceso pudiera suponer para la realización de fusiones transfronterizas de entidades de crédito comunitarias.

Puesto que el régimen de participaciones significativas en entidades de crédito es hoy idéntico al de entidades aseguradoras y empresas de servicios de inversión, se pretendió mantener dicha coherencia emprendiendo conjuntamente la modificación de este régimen en las directivas de Mercados de instrumentos financieros, acceso a la actividad de las entidades de crédito y las correspondientes de Seguros.





El espíritu de la Directiva 2007/44/CE, que se recoge hoy en este anteproyecto de ley, es llegar a una armonización del proceso que lo haga transparente y lo asiente claramente sobre principios exclusivamente prudenciales. La forma de llevarlo a cabo pivota en torno a los siguientes puntos:

- Enumerar y objetivar los criterios estrictamente prudenciales que debe analizar el supervisor financiero al evaluar una toma de participación significativa.
- Establecer plazos claros y transparentes para cada una de las fases del procedimiento de evaluación.
- Establecer un régimen de silencio administrativo positivo, de forma que tácticas dilatorias por parte del supervisor no supongan una denegación encubierta.
- Reforzar la colaboración entre el supervisor de la entidad adquirente y el de la entidad adquirida durante el procedimiento de evaluación prudencial, dejando al segundo la última palabra.

El presente anteproyecto de ley en modo alguno pretende suspender o sustituir los requisitos en materia de supervisión cautelar a los que las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, destinatarias de la adquisición propuesta, hayan estado sometidas desde el momento de su propia autorización inicial.

El anteproyecto gira, principalmente, en torno a la obligación de notificar al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, la decisión de adquirir participaciones en entidades de crédito o empresas de servicios de inversión españolas, siempre que esas participaciones sean significativas (es decir, que alcancen el 10% del capital o de los derechos de voto o participaciones que, sin llegar al porcentaje señalado, permitan ejercer una influencia notable), o bien cuando se rebasen los umbrales del 20, 30 ó 50 % de derechos de voto o de capital poseído o bien cuando, en virtud de la adquisición se pudiera llegar a controlar la empresa. El Banco de España, la CNMV o la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones evaluarán la adquisición propuesta en base a los criterios definidos en el anteproyecto de ley.

Por su parte, la dilución de la propiedad en las entidades españolas (bancos, especialmente) ha hecho necesario incluir un umbral adicional a efectos de comunicación de la adquisición de participaciones. En efecto, se establece la obligación de comunicar al Banco de España, a la CNMV o a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, adquisiciones que superan el umbral del 5%. Sin embargo, a no ser que dicha participación se considere significativa, esta comunicación no desencadena el procedimiento de evaluación por parte de las autoridades supervisoras. El establecimiento de este deber de notificación de las entidades se sustenta en lo previsto por el considerando 6 de la Directiva 2007/44/CE.

A fin de garantizar la claridad y la previsibilidad del procedimiento de evaluación se fija un plazo máximo de 60 días para llevar a cabo la evaluación cautelar. Durante el procedimiento de evaluación, el Banco de España y la CNMV sólo tienen la posibilidad de interrumpir el proceso en una sola ocasión y únicamente con el fin de pedir información adicional, tras lo cual deben concluir la evaluación dentro del plazo máximo de evaluación.





En el anteproyecto de ley también se ha puesto énfasis en la cooperación entre autoridades supervisoras. Es fundamental que las autoridades trabajen en estrecha cooperación cuando se trate de verificar la idoneidad de un adquirente propuesto que sea una entidad regulada autorizada en otro Estado miembro o en otro ámbito de actividad.

Finalmente, destacar que conforme al artículo 7 de la Directiva, los Estados miembros deberán poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo en ella establecido antes del 21 de marzo de 2009

## 2. Procedimiento de elaboración.

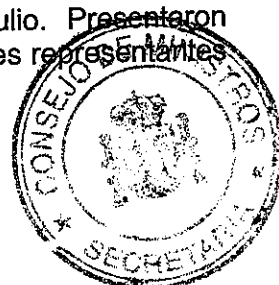
El presente anteproyecto de ley fue elaborado inicialmente como dos anteproyectos distintos. El primero era el anteproyecto de ley por la que se modificaba la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, a cargo de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. El otro, elaborado por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, modificaba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, en materia de procedimientos y criterios de evaluación cautelar de adquisiciones e incremento en entidades de seguros y la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados.

En el primer anteproyecto, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, convocó un grupo de trabajo compuesto por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la propia Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Este grupo se reunió con carácter previo a la audiencia pública.

El texto fue sometido a audiencia pública desde el 5 al 30 de junio de 2008. Con el fin de aumentar la transparencia en el procedimiento de elaboración de las normas, el texto fue publicado en la página web de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

En el trámite de audiencia pública se recibieron observaciones de: la Dirección General del Catastro, la Dirección General de Tributos, la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), el Servicio Ejecutivo de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), la Asociación Española de Banca (AEB), la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO), el Banco de España, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Bolsas y Mercados Españoles (BME), la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El segundo anteproyecto de ley, por la que se modificaba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, en materia de procedimientos y criterios de evaluación cautelar de adquisiciones e incremento en entidades de seguros y la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados, fue sometido a la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones en su sesión del pasado 9 de julio. Presentaron observaciones al proyecto tras su paso por el órgano consultivo los vocales representantes de entidades aseguradoras.







Ambos proyectos se sometieron separadamente a dictamen de Consejo de Estado, conforme dispone el artículo 21.2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.

Posteriormente, dada la evidente homogeneidad de su contenido material y a la luz del principio de economía normativa, se ha procedido a la fusión de ambos anteproyectos en un solo texto para su remisión a las Cortes Generales.

### 3. Estructura y contenido.

El anteproyecto de ley consta de tres artículos, una disposición derogatoria única y cinco disposiciones finales

#### Artículo primero. Modificación de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores

El primer artículo modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. Consta de tres apartados.

El apartado uno modifica el artículo 69 de la Ley 24/1988 para introducir los cambios necesarios para transponer la Directiva 2007/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Tal y como queda redactado, el artículo 69, apartado 1 define el concepto de participación significativa en una empresa de servicios de inversión española. Se considera participación significativa aquella que alcance el 10 por ciento o más de los derechos de voto o capital de una empresa de servicios de inversión o aquella que sin alcanzar dicho porcentaje, permita ejercer una influencia notable en la misma, teniendo en cuenta, entre otros, la posibilidad nombrar o destituir algún miembro de su consejo de administración.

El apartado 2 del artículo 69, no se modifica.

El apartado 3 del artículo 69 establece la obligación de comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la adquisición de una participación en una empresa de servicios de inversión que sea igual o superior al 5 por ciento. Este artículo supone la utilización de la opción nacional recogida en la Directiva 2007/44/CE de establecer un umbral por debajo del 10 por ciento para la comunicación de las participaciones, algo que se considera necesario dada la dilución de la propiedad en las entidades españolas. Sin embargo, la comunicación no desencadena el procedimiento de evaluación por parte de la CNMV, a no ser que el 5% supusiese el ejercicio de una influencia notable.

El apartado 4 del artículo 69 establece la obligación de notificar a la CNMV la decisión de adquirir participaciones en empresas de servicios de inversión españolas, siempre que esas participaciones sean significativas o bien cuando se rebasen los umbrales del 20, 30 ó 50 % de derechos de voto o de capital poseído, o bien cuando, en virtud de la adquisición, se pudiera llegar a controlar la empresa, conforme a los supuestos previstos en el Código de Comercio.





La notificación a la CNMV deberá indicar la cuantía de la participación prevista, e incluir toda la información que reglamentariamente se determine. Dicha información deberá ser pertinente para la evaluación y proporcional y adecuada a la naturaleza del adquirente potencial y de la adquisición propuesta.

El apartado 5 del artículo 69 detalla los criterios en los que se debe basar la CNMV para evaluar la idoneidad del adquirente potencial, con el fin de garantizar una gestión sana y prudente de la empresa de servicios de inversión en la que se propone la adquisición. Se trata de un listado exhaustivo de criterios para evaluar la idoneidad del adquirente propuesto y la solidez financiera de la adquisición propuesta.

El apartado 6 del artículo 69 establece el plazo máximo de 60 días hábiles para que la CNMV realice la evaluación de la adquisición propuesta. Este plazo comenzará su cómputo desde el día en que la CNMV realice el acuse de recibo de la oportuna notificación. A su vez, el acuse de recibo deberá efectuarse en el plazo máximo de 2 días desde la recepción de la notificación. También se incluye una referencia a la subsanación de defectos en la notificación, conforme al régimen previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, y a los efectos de silencio positivo que se derivaría ante una ausencia de resolución en el plazo estipulado.

Esta redacción, que supone una transposición prácticamente literal de la Directiva, ha sido la finalmente recogida en el anteproyecto de ley, fruto de las observaciones realizadas por algunos organismos durante la elaboración del texto y, especialmente, tras la consideración incluida en su informe por la Secretaría General Técnica del Ministerio proponente y la observación realizada en el dictamen del Consejo de Estado.

No obstante, el centro originador de la norma consideró desde un inicio que, conforme al procedimiento administrativo común establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el mencionado plazo de 60 días debiera comenzar su cómputo a partir de la fecha en que hubiese tenido entrada en el registro del supervisor competente para su tramitación (artículo 42.3.3.b), la notificación completa a que se refiere el artículo 69.4 del anteproyecto.

En este sentido, es cierto que nuestro procedimiento administrativo común no es, en absoluto, ajeno a la figura del acuse de recibo pero, a diferencia de las previsiones de la directiva, tal figura no se contempla a efectos del cómputo del plazo para resolver los procedimientos, sino como un derecho de los interesados. A tal objeto, el artículo 70.3 de la citada Ley 30/1992 establece que *"de las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados en las oficinas de la Administración, podrán éstos exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha de presentación, admitiéndose como tal una copia en la que figure la fecha de presentación anotada por la oficina"*. En este mismo sentido, cabe además citar los artículos 35.c), 38.5 y 46 de la misma Ley 30/1992.

A mayor abundamiento, el artículo 6 del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro, regula los denominados recibos acreditativos de la fecha de presentación de cualquier solicitud, escrito o comunicación, a los que se refiere el artículo 70.3 de la Ley 30/1992.





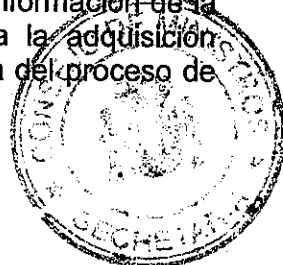
Por otro lado, el segundo párrafo del artículo 42.4 de la Ley 30/1992 prevé la obligatoriedad de que las Administraciones Públicas informen a los interesados del plazo máximo normativamente establecido para la resolución y notificación de los procedimientos, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo, incluyendo dicha mención en la comunicación que se les dirigirá al efecto dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación.

De todo ello este centro directivo proponente extraía dos conclusiones:

- a) Cómputo de plazo y recibo de presentación son figuras administrativas distintas, con finalidades que nada tienen que ver. Si bien ambas pueden coincidir en el mismo momento temporal, y ello siempre que la solicitud se presente ante el órgano competente para su tramitación, pueden también perfectamente tener lugar en momentos distintos, de manera que si el interesado presenta la solicitud en las oficinas de registro de cualquier órgano distinto al que se dirija, (o en las oficinas de correo), este acto administrativo sólo produce un efecto, esto es, se genera el derecho a la obtención del recibo de presentación, pero no se genera el efecto del comienzo del cómputo del plazo que solo va a producirse en la fecha de entrada de la solicitud ante el órgano competente para tramitar el procedimiento.
- b) Con el sistema de notificación contemplado en el procedimiento administrativo español se cumplían adecuadamente, a juicio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, las exigencias establecidas en la Directiva 2007/44/CE, sin que resultase imprescindible introducir ninguna excepción al mismo. Las directivas comunitarias son, como se sabe, normas que obligan en cuanto a los resultados a lograr y no deben imponer, necesariamente, una ruptura en el procedimiento administrativo español, salvo en aquellos supuestos en los que el fin perseguido no pueda alcanzarse sino mediante la correspondiente modificación del citado procedimiento. En este caso, la opción que en su momento propuso el centro directivo proponente profundizaba en la propia voluntad de la directiva de dotar a la evaluación de las participaciones de los principios de claridad y celeridad en favor de los administrados [*"(...) de conformidad con las buenas prácticas administrativas, las autoridades competentes deben llevar a cabo su evaluación sin dilación"* Considerando 5].

También se establece la posibilidad de que la CNMV solicite información adicional para evaluar convenientemente la adquisición propuesta, y esta solicitud de información podría suponer una única interrupción en el plazo de evaluación. Por otro lado, se contempla en este apartado el silencio positivo, de forma que tácticas dilatorias por parte del supervisor no supongan una denegación encubierta.

Además se establece en este apartado que la CNMV debe mencionar las posibles observaciones o reservas expresadas por la autoridad competente de la supervisión del adquirente potencial, consultada en los términos del apartado 7. Asimismo, a petición del adquirente potencial o de oficio, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá hacer públicos los motivos que justifican su decisión, siempre que la información revelada no afecte a terceros ajenos a la operación. Además se incluye un deber de información de la CNMV al adquirente potencial, en el caso de plantearse objeciones a la adquisición propuesta. Todos estos aspectos redundarán en una mayor transparencia del proceso de





evaluación de las participaciones significativas. Se establece, asimismo, en este apartado que la CNMV no podrá imponer condiciones previas en cuanto al nivel de participación que deba adquirirse, ni tendrá en cuenta las necesidades económicas del mercado al realizar la evaluación, pero sí podrá establecer un plazo máximo para la conclusión de la misma.

El apartado 7 del artículo 69 garantiza que, a la hora de evaluar participaciones en empresas de servicios de inversión, exista una estrecha colaboración entre la CNMV y las autoridades responsables de la supervisión de los adquirentes potenciales de otros Estados miembros y entre la CNMV y el Banco de España y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cuando el adquirente potencial sea una entidad supervisada por alguno de ellos. Se señala que la CNMV habrá de consultar y, recíprocamente, atender las consultas de otras autoridades responsables de la supervisión de los adquirentes propuestos.

El apartado 8 del artículo 69 determina las consecuencias de realizar una adquisición como la descrita en el apartado 4 sin haberla notificado previamente a la CNMV. Concretamente, se establece que no se podrán ejercer los derechos políticos correspondientes a las participaciones adquiridas irregularmente e, incluso, se podrían llegar a suspender las actividades, intervenir la empresa o sustituir a los administradores. Por otro lado, también se pueden imponer las sanciones previstas en la ley.

El apartado 9 del artículo 69 establece la obligación de comunicar a la CNMV la decisión de dejar de tener una participación significativa en una empresa de servicios de inversión española o reducir una participación de tal manera que el porcentaje de derechos de voto o de capital poseído sea inferior al 20, 30 ó 50 por ciento, o que se pueda perder el control de la empresa de servicios de inversión. También se establece que el incumplimiento de este deber podrá ser sancionado según lo previsto en el Título VIII de la ley.

El apartado 10 del artículo 69 señala que las empresas de servicios de inversión deben informar a la CNMV de las adquisiciones o cesiones de participaciones en su capital que traspasen alguno de los niveles señalados en el artículo 69.

El apartado 11 del artículo 69 establece las medidas que puede tomar el Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta de la CNMV, cuando existan razones fundadas y acreditadas respecto de que la influencia ejercida por las personas que posean una participación significativa en una empresa de servicios de inversión pueda resultar en detrimento de la gestión sana y prudente de la misma o dañar gravemente su situación financiera.

El apartado dos añade una nueva letra l) al apartado 4 del artículo 90, relativo al secreto profesional, de forma que se exceptúa de la obligación de secreto la información que la CNMV publique de acuerdo con lo establecido en el artículo 69.6 (publicidad de los motivos que justifican su decisión sobre un procedimiento de evaluación).

El apartado tres añade una nueva letra j ter) en el artículo 100, para establecer un nuevo tipo infractor en caso de no comunicar la adquisición de una participación como la descrita en el artículo 69.3 (deber de comunicación de participaciones del 5% del capital o de los derechos de voto).





121018

**Artículo segundo. Modificación de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.**

El artículo segundo modifica la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. Consta de ocho apartados.

El apartado uno introduce en el artículo 5 de la Ley 26/1988 un nuevo párrafo w) para establecer un nuevo tipo infractor en caso de no comunicar la adquisición de una participación como la descrita en el artículo 57.2.

El apartado dos supone una modificación del artículo 43, relativo a la autorización de la creación de entidades de crédito, para adaptarlo a la nueva definición de participación significativa, sin que suponga ningún cambio en el régimen actual de autorizaciones.

El apartado tres modifica el artículo 56 de la Ley 26/1988 y define, en su primer apartado, el concepto de participación significativa en una entidad de crédito española. Se considera participación significativa aquella que alcance el 10 por ciento o más de los derechos de voto o capital de una entidad de crédito o aquella que, sin alcanzar dicho porcentaje, permita ejercer una influencia notable en la empresa, teniendo en cuenta, entre otros, la posibilidad de nombrar o destituir algún miembro de su consejo de administración.

La redacción del segundo apartado no se modifica.

El apartado cuatro modifica el artículo 57 de la Ley 26/1988 y establece las obligaciones relativas a las participaciones en entidades de crédito.

El apartado 1 del artículo 57 establece la obligación de notificar al Banco de España la decisión de adquirir participaciones en entidades de crédito españolas, siempre que esas participaciones sean significativas o bien cuando se rebasen los umbrales del 20, 30 ó 50% de derechos de voto o de capital poseído, o bien cuando, en virtud de la adquisición, se pudiera llegar a controlar la empresa.

La notificación al Banco de España deberá indicar la cuantía de la participación prevista, e incluir toda la información que reglamentariamente se determine. Dicha información deberá ser pertinente para la evaluación y proporcional y adecuada a la naturaleza del adquirente potencial y de la adquisición propuesta. Por otra parte, cuando el Banco de España reciba dos o más notificaciones referidas a la misma empresa de servicios de inversión tratará a todos los adquirentes potenciales de forma no discriminatoria.

El apartado 2 del artículo 57 establece la obligación de comunicar al Banco de España la adquisición de una participación en una entidad de crédito que sea igual o superior al 5 por ciento. Este artículo supone la utilización de la opción nacional recogida en la Directiva 2007/44/CE de establecer un umbral por debajo del 10 por ciento para la comunicación de las participaciones, algo que se considera necesario dada la dilución de la propiedad en las entidades españolas. Sin embargo, la comunicación no desencadena el procedimiento de evaluación por parte del Banco de España, a no ser que el 5% supusiese influencia notable.

El apartado cinco modifica el artículo 58 de la Ley 26/1988 y establece el procedimiento de evaluación de las notificaciones por parte del Banco de España.





El apartado 1 del artículo 58 detalla los criterios en los que se debe basar el Banco de España para evaluar la idoneidad del adquirente potencial con el fin de garantizar una gestión sana y prudente de la entidad de crédito en la que se propone la adquisición. Se trata de un listado exhaustivo de criterios para evaluar la idoneidad del adquirente propuesto y la solidez financiera de la adquisición propuesta.

El apartado 2 del artículo 58 establece el plazo máximo de 60 días hábiles para que el Banco de España realice la evaluación de la adquisición propuesta. Como ya se explicó anteriormente, el mencionado plazo de 60 días comienza su cómputo a partir de la fecha en que se hubiese efectuado el acuse de recibo de la notificación a que se refiere el artículo 69.4 del anteproyecto. Por otro lado, se contempla en este apartado el silencio positivo, de forma que tácticas dilatorias por parte del supervisor no supongan una denegación encubierta.

El apartado 3 del artículo 58 establece la posibilidad que tiene el Banco de España para solicitar información adicional a la prevista en artículo 57.1, para evaluar convenientemente la adquisición propuesta. Esta solicitud de información sólo puede suponer una interrupción en el plazo de evaluación.

El apartado 4 del artículo 58 establece que el Banco de España sólo podrá oponerse a la adquisición propuesta cuando haya motivos razonables para ello, sobre la base de los criterios establecidos en el apartado 1 o si la información aportada por el adquirente potencial está incompleta. Además se habilita al Banco de España para establecer un plazo máximo para la conclusión de la adquisición propuesta y, cuando proceda, prolongarlo.

El apartado 5 del artículo 58 establece que el Banco de España no podrá imponer condiciones previas en cuanto a la cuantía de la participación que deba adquirirse, ni tendrá en cuenta las necesidades económicas del mercado al realizar la evaluación.

El apartado 6 del artículo 58 establece que las decisiones adoptadas por el Banco de España mencionarán las posibles observaciones o reservas expresadas por la autoridad competente responsable de la supervisión del adquirente potencial, consultada en los términos del artículo 58 bis.

El apartado 7 del artículo 58 otorga una gran transparencia al proceso y establece que a petición del adquirente o de oficio, el Banco de España podrá hacer públicos los motivos que justifican su decisión, siempre que la información revelada no afecte a terceros ajenos a la operación.

El apartado seis incluye un nuevo artículo 58 bis acerca de la colaboración entre autoridades supervisoras.

En el apartado 1 del artículo 58 bis se especifica que el Banco de España debe consultar a las autoridades responsables de la supervisión de los adquirentes potenciales de otros Estados miembros de la Unión Europea.





En el apartado 2 se especifica que el Banco de España debe consultar a la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones cuando el adquirente potencial sea una entidad supervisada por alguno de ellos.

Finalmente, en el apartado 3 se establece la obligación de atender a las consultas de las autoridades responsables de la supervisión de los adquirentes propuestos.

El apartado siete modifica el artículo 59 y establece los efectos del incumplimiento de la obligación de notificar. Concretamente se establece que no se podrán ejercer los derechos políticos correspondientes a las participaciones adquiridas irregularmente e, incluso, se podría llegar a intervenir la entidad o sustituir a los administradores. Por otro lado, también se pueden imponer las sanciones previstas en la ley.

El apartado ocho modifica el artículo 60 donde se establece la obligación de comunicar la reducción de participaciones. Se establece la obligación de comunicar al Banco de España la decisión de dejar de tener una participación significativa en una entidad de crédito española o reducir una participación de tal manera que el porcentaje de derechos de voto o de capital poseído sea inferior al 20, 30 ó 50 por ciento, o que se pueda perder el control de la entidad de crédito. También se establece que el incumplimiento de este deber podrá ser sancionado según lo previsto en el Título I de la ley.

**Artículo tercero. Modificación del Texto Refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.**

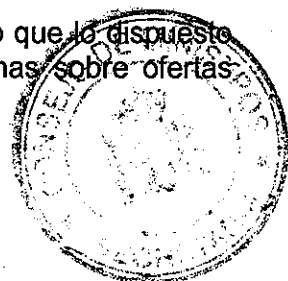
El tercer artículo modifica el Texto Refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre (TRLOSSP). Consta de ocho apartados.

El apartado uno modifica el artículo 5.2.e) del TRLOSSP a fin de aclarar que los requisitos de idoneidad de los socios serán objeto de valoración en el momento de creación de la entidad únicamente respecto de los que ostenten una participación significativa, tal y como esta se define en el artículo 22 de la ley, pues si bien la redacción vigente se remite al artículo 14, el cual se refiere a la idoneidad de los socios con participación significativa, puede dar lugar a algún problema interpretativo.

A través de los apartados dos a cinco se modifica la regulación vigente de las participaciones significativas contenida en el artículo 22 del TRLOSSP para adaptarla a lo dispuesto en la directiva. La norma proyectada estructura tal regulación mediante cinco artículos (22, 22 bis, 22.ter y 22. quáter).

El apartado dos da nueva redacción al artículo 22 del TRLOSSP. Define qué se entiende por participación significativa: aquella que alcance el 10 por ciento o más de los derechos de voto o capital de una entidad aseguradora o aquella que sin alcanzar dicho porcentaje, permita ejercer una influencia notable en la misma, teniendo en cuenta, entre otros, la posibilidad de nombrar o destituir algún miembro de su consejo de administración.

Incorpora lo dispuesto en el apartado 7 del vigente artículo 22, previendo que lo dispuesto en el precepto se entenderá sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre ofertas





públicas de adquisición e información sobre participaciones significativas contenidas en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

Por otra parte, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores reciba dos o más notificaciones referidas a la misma empresa de servicios de inversión tratará a todos los que se proponen adquirir o incrementar la participación de forma no discriminatoria.

El apartado tres crea un nuevo artículo 22 bis en el TRLOSSP, denominado, Obligaciones relativas a las participaciones en entidades de seguros.

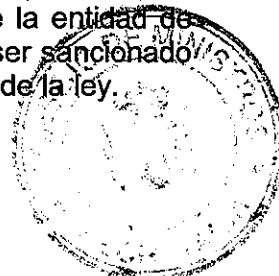
Su apartado 1 establece la obligación de comunicar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la adquisición de una participación en una entidad de seguros que sea igual o superior al 5 por ciento del capital o derechos de votos. Esta previsión supone la utilización de la opción nacional recogida en la Directiva 2007/44/CE de establecer un umbral por debajo del 10 por ciento para la comunicación de las participaciones, algo que se considera necesario dada la dilución de la propiedad en las entidades españolas. Sin embargo, la comunicación no desencadena el procedimiento de evaluación por parte de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, a no ser que el 5% supusiese el ejercicio de una influencia notable.

Su apartado 2, contempla la obligación de notificar las adquisiciones de participaciones significativas o incrementos de participaciones significativas cuando se rebasen los umbrales del 20, 30 ó 50 % de derechos de voto o de capital poseído, o bien cuando, en virtud de la adquisición, se pudiera llegar a controlar a la entidad aseguradora. Dicha información deberá ser pertinente para la evaluación y proporcional y adecuada a la naturaleza de quien se propone adquirir o incrementar la participación y de la adquisición propuesta. Finalmente, se remite al artículo 42 del Código de Comercio a fin de determinar la existencia de una relación de control.

Su apartado 3 regula los efectos que se producen cuando se efectúa una de las adquisiciones o incrementos regulados en el apartado 2 sin haber notificado previamente a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones o, habiéndole notificado, no hubiera transcurrido todavía el plazo previsto en el artículo 22 ter, o si mediara la oposición expresa de la Dirección General de Seguros y Fondos de pensiones. Concretamente se establece que no se podrán ejercer los derechos políticos correspondientes a las participaciones adquiridas irregularmente, de ser preciso podrán adoptarse las medidas de control especial previstas en el artículo 39 y además podrán imponerse las sanciones previstas en el TRLOSSP.

Su apartado 4 regula las medidas a adoptar cuando se acredite que los titulares de una participación significativa ejercen una influencia que vaya en detrimento de la gestión sana y prudente de una entidad aseguradora, que dañe gravemente su situación financiera; extremo recogido en el apartado 6 del vigente artículo 22.

Su apartado 5 establece la obligación de comunicar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la decisión de dejar de tener una participación significativa o reducir una participación de tal manera que el porcentaje de derechos de voto o de capital poseído sea inferior al 20, 30 ó 50 por ciento, o que se pueda perder el control de la entidad de seguros. También se establece que el incumplimiento de este deber podrá ser sancionado según lo previsto en la sección 5ª del capítulo III de este título II el Título VIII de la ley.







El apartado 6 se corresponde con lo dispuesto por el apartado 5 del vigente artículo 22.

El apartado cuatro crea un nuevo artículo 22 ter, con la denominación de evaluación de la adquisición de participaciones significativas.

Su apartado 1 recoge los criterios en los que, de acuerdo con la Directiva, debe sustentarse la evaluación la idoneidad de quien se propone adquirir o incrementar la participación, con el fin de garantizar una gestión sana y prudente de la entidad de seguros en la que se propone la adquisición. Se trata de un listado exhaustivo de criterios para evaluar la idoneidad del adquirente propuesto y la solidez financiera de la adquisición propuesta.

Su apartado 2 regula el procedimiento de evaluación, conforme lo establecido en la directiva. De manera que establece el plazo máximo de 60 días hábiles, a contar desde el acuse de recibo de la notificación, para proceder a la evaluación; al tiempo que prevé que el acuse de recibo se realizará por escrito en el plazo de dos días hábiles a contar desde la fecha de la recepción de la notificación, siempre que ésta se acompañe de toda la documentación a que hace referencia el apartado 2 del artículo 22 bis, y en él se indicará la fecha exacta en que expira el plazo de evaluación.

En caso de que la notificación no reúna toda la información necesaria, se requerirá al quien se propone adquirir o incrementar la participación para que subsane la falta en el plazo de diez días, en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

También se establece la posibilidad de que la DGSFP solicite información adicional para evaluar convenientemente la adquisición propuesta, y esta solicitud de información podría suponer una única interrupción en el plazo de evaluación. Por otro lado, se contempla el silencio positivo y las causas en las que puede fundarse la oposición de la DGSFP a la adquisición o incremento propuesto: que el adquirente no sea idóneo para garantizar una gestión sana y prudente de la entidad aseguradora, conforme a lo establecido en el apartado 1 del artículo, o en que la información aportada para la evaluación es incompleta. Así como que si dicha Dirección General expresa su conformidad a la adquisición o incremento de participación significativa, podrá fijar un plazo máximo distinto al comunicado para efectuar la adquisición, y prolongarlo cuando proceda.

Finalmente, se prevé que, a petición del adquirente potencial o de oficio, la DGSFP podrá hacer públicos los motivos que justifican su decisión, siempre que la información revelada no afecte a terceros ajenos a la operación. Estos aspectos redundarán en una mayor transparencia del proceso de evaluación de las participaciones significativas.

El apartado cinco crea un nuevo artículo 22 quáter, denominado colaboración entre autoridades supervisoras para la evaluación de la adquisición, regula en su apartado 1 las consultas entre autoridades del Espacio Económico Europeo y en su apartado 2 entre autoridades nacionales. Incorporando lo dispuesto en la Directiva en aras a la estrecha colaboración entre la Dirección General de seguros y Fondos de Pensiones y las autoridades responsables de la supervisión de los adquirentes de otros Estados miembros y entre la CNMV y el Banco de España y la Dirección General de Seguros y Fondos de





Pensiones, cuando el adquirente potencial sea una entidad supervisada por alguno de ellos.

A través de los apartados seis a ocho se modifican diversos preceptos del TRLOSSP a fin de acompasar las remisiones que su vigente redacción hace al artículo 22 por las resultantes, tras las modificaciones que el proyecto introduce en la regulación del régimen de participaciones significativas. Así:

El aparatado seis modifica el artículo 40.3.f) y g) del TRLOSSP, referente a las infracciones.

El apartado siete modifica el artículo 58 bis del TRLOSSP, que declara aplicables las normas de participaciones significativas a las entidades reaseguradoras a las que se refiere el precepto.

El apartado ocho, modifica el párrafo segundo del artículo 77.4, que dispone la aplicación de lo previsto en el apartado 4 al procedimiento de tramitación de comunicaciones de adquisición de participaciones significativas, a que se refiere el artículo 22. ter, en entidades aseguradoras españolas por entidades domiciliadas en Estados no integrados en el Espacio Económico Europeo.

#### **Disposición derogatoria única. Derogación normativa.**

Se derogan cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el anteproyecto.

#### **Disposición final primera. Modificación de la Ley 26/2006, de 17 de julio de Mediación de Seguros y Reaseguros privados.**

Contiene la modificación del artículo 28 de la Ley de mediación de seguros y reaseguros privados.

Mediante la modificación propuesta se sustituye el actual sistema de autorización previa previsto en el apartado 1 del vigente artículo 28 para vínculos estrechos y régimen de participaciones significativas por un sistema de no oposición, de manera que si la DGSFP no se opone a la operación planteada ésta podrá llevarse a cabo. En consecuencia con ello el nuevo apartado 2 que se incorpora al precepto regula el procedimiento, estableciendo un plazo de tres meses, a contar desde la presentación de la información, en el que la DGSFP puede oponerse a la adquisición de la participación significativa o su incremento. La oposición deberá fundarse en que quien pretenda adquirirla no sea idóneo para garantizar una gestión sana y prudente de la sociedad. Si la DGSFP no se pronunciara en dicho plazo, podrá procederse a la adquisición o incremento de participación. Si dicha DGSFP expresa su conformidad a la adquisición o incremento de participación significativa, podrá fijar un plazo máximo distinto al comunicado para efectuar la adquisición.

Se modifica también la redacción del vigente apartado 3 del precepto, que pasa a ser apartado 4 en el proyecto, actualizando las remisiones que se hacen a los preceptos del TRLOSSP reguladores de las participaciones significativas, por los resultantes tras las modificaciones que el anteproyecto de Ley lleva a cabo en dicho texto refundido.





**Disposición final segunda. Título competencial.**

Se señala que el anteproyecto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6ª, 11ª y 13ª de la Constitución.

**Disposición final tercera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.**

Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo, ejecución y cumplimiento de lo previsto en el anteproyecto.

**Disposición final cuarta. Incorporación de Derecho de la Unión Europea.**

Se establece que mediante el anteproyecto de ley se incorpora parcialmente al derecho español la Directiva 2007/44/CE del Parlamento y del Consejo de 5 de septiembre de 2007 por la que se modifica la Directiva 92/49/CEE del Consejo y las Directivas 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE y 2006/48/CE en lo que atañe a las normas procedimentales y los criterios de evaluación aplicables en relación con la evaluación cautelar de las adquisiciones y de los incrementos de participaciones en el sector financiero.

**Disposición final quinta. Entrada en vigor**

Se establece que la ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».



**MEMORIA ECONÓMICA DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY 24/1988, DE 28 DE JULIO, DEL MERCADO DE VALORES , LA LEY 26/1988, DE 29 DE JULIO, SOBRE DISCIPLINA E INTERVENCIÓN DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO Y EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE ORDENACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SEGUROS PRIVADOS, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 6/2004, DE 29 DE OCTUBRE, PARA LA REFORMA DEL RÉGIMEN DE PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS EN EMPRESAS DE SERVICIOS DE INVERSIÓN, EN ENTIDADES DE CRÉDITO Y EN ENTIDADES ASEGURADORAS**

### **MEMORIA ECONÓMICA**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de organización, competencia y funcionamiento del Gobierno, los anteproyectos de leyes deben ser acompañados de una memoria económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar.

Por ello, debe señalarse que no se estima que del presente anteproyecto de ley puedan derivarse efectos que impliquen un aumento del gasto público o una disminución de ingresos públicos.



**INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY 24/1988, DE 28 DE JULIO, DEL MERCADO DE VALORES, LA LEY 26/1988, DE 29 DE JULIO, SOBRE DISCIPLINA E INTERVENCIÓN DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO Y EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE ORDENACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SEGUROS PRIVADOS, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 6/2004, DE 29 DE OCTUBRE, PARA LA REFORMA DEL RÉGIMEN DE PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS EN EMPRESAS DE SERVICIOS DE INVERSIÓN, EN ENTIDADES DE CRÉDITO Y EN ENTIDADES ASEGURADORAS**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de Organización, Competencia y Funcionamiento del Gobierno, los Anteproyectos de Ley deben ser acompañados de un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establezcan en el mismo.

Tras el estudio del posible impacto de género de las disposiciones contenidas en el presente anteproyecto de ley, se ha llegado a la conclusión de que del mismo no se deriva ninguna consecuencia discriminatoria.

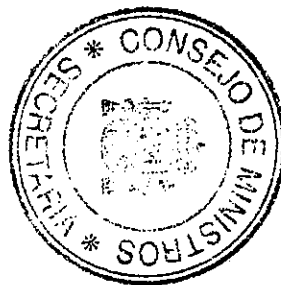


**INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL ESTATUTO LEGAL DEL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 7/2004, DE 29 DE OCTUBRE, PARA SUPRIMIR LAS FUNCIONES DEL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS EN RELACIÓN CON LOS SEGUROS OBLIGATORIOS DE VIAJEROS Y DEL CAZADOR Y REDUCIR EL RECARGO DESTINADO A FINANCIAR LAS FUNCIONES DE LIQUIDACIÓN DE ENTIDADES ASEGURADORAS, Y EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE ORDENACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SEGUROS PRIVADOS, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 6/2004, DE 29 DE OCTUBRE.**

---

El presente informe se eleva en cumplimiento de lo previsto por el artículo 24.1. b) de la Ley 50/1997, del Gobierno, en la redacción dada al mismo por la Ley 30/2003, de 13 de octubre sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.

Se informa que las medidas contenidas en el anteproyecto de Ley no tienen impacto alguno por razón de género y, por tanto, no producen diferente trato entre mujeres y hombres.



LEGISLATURA

IX



121/201X

**PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DE ÓRGANOS CONSULTIVOS DEL ESTADO EN EL  
ÁMBITO AGROALIMENTARIO Y DETERMINACIÓN DE LAS BASES DE  
REPRESENTACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS.**

**IFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, se señala que se ha tenido en consideración que en la configuración de los órganos colegiados que se crean por el proyecto de ley de referencia, se observará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, en lo que se refiere a los representantes de la Administración General del Estado, según ordena el artículo 54 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres.

121020

LEGISLATURA  
IX





MINISTERIO DE  
INDUSTRIA, TURISMO  
Y COMERCIO

121 / 021

IX

SUBSECRETARÍA

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA  
VICESECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

**REAL DECRETO-LEY 1/2009, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE  
TELECOMUNICACIONES**

**INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1.b) de la Ley 50/1997, del Gobierno, modificado por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, este real decreto-ley, no supone, ni en el fondo ni en la forma, impacto de género alguno que pudiera favorecer situaciones de discriminación por razón de género.

Madrid, 19 de febrero de 2009

LEGISLATURA  
IX

121 021



CORREO ELECTRÓNICO:  
[vicesecretariagt@mityc.es](mailto:vicesecretariagt@mityc.es)

PASEO DE LA  
CASTELLANA, 160. 28071-  
MADRID.  
TEL: 913 494 677  
FAX: 913 494 654



121/23

**PROYECTO DE LEY SOBRE EL  
LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y  
SU EJERCICIO**

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO DE  
LEY**

27 DE MARZO DE 2009



LEGISLATURA

IX

121023

121023

### C. VALORACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO

Se estima que la propuesta contribuye a mejorar la presencia de las mujeres en el mercado laboral y sus condiciones salariales y de trabajo.

Sin embargo, para potenciar estos efectos resultará indispensable el buen funcionamiento de otras medidas, ya incorporadas al ordenamiento jurídico español principalmente a través de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres, que inciden especialmente en el ámbito laboral, potenciando el derecho al trabajo en igualdad de condiciones. A título de ejemplo, cabe citar las medidas establecidas para la conciliación de la vida laboral y familiar, la potenciación de la igualdad de género a través de la negociación colectiva, o la mejora de la empleabilidad de las mujeres a través de actuaciones de formación.

LEGISLATURA

IX





121/24

**Informe sobre el Impacto por Razón de Género del Proyecto de ley de  
Modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen Económico y  
de Prestación de Servicios en los Puertos de Interés General.**

De conformidad con el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada por el artículo 1 de la Ley 30/2003, de 13 de octubre, exige que al correspondiente Anteproyecto se acompañe un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establecen en el mismo.

En cumplimiento de este último requisito, hay que significar que este Anteproyecto de Modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen Económico y de Prestación de Servicios de los Puertos de Interés General, no origina consecuencias negativas que favorezcan situaciones de discriminación.

121024

LEGISLATURA

IX





MINISTERIO  
DE ECONOMÍA  
Y HACIENDA

121/25

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE ECONOMÍA

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESOR  
Y POLÍTICA FINANCIERA

## **INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY DE SERVICIOS DE PAGO.**

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de organización, competencia y funcionamiento del Gobierno, en su redacción dada por el artículo primero de la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, los anteproyectos de leyes deben ser acompañados de un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establezcan en el proyecto.

Por ello cabe señalar, finalmente, que del presente anteproyecto de Ley no parece plausible que se derive ninguna consecuencia discriminatoria por razón del género.

121025  
LEGISLACIÓN  
IX





MINISTERIO DE SANIDAD  
Y POLÍTICA SOCIAL  
MINISTERIO DE JUSTICIA  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA  
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO  
Y COMERCIO

121/26

1210-6

121025



121025

INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL RÉGIMEN LEGAL DE LA COMPETENCIA DESLEAL Y DE LA PUBLICIDAD PARA LA MEJORA DE LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS.

De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 1.b) del artículo 24 de la Ley 50/1997, del Gobierno, añadido por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, se participa que el contenido del Real Decreto establece medidas específicas desde la perspectiva de género. En concreto el artículo 3 de la Ley General de Publicidad regula como publicidad ilícita aquella que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente a los que se refieren sus artículos 18 y 20, apartado 4, indicando expresamente que se entenderán incluidos en la previsión anterior los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulnere los fundamentos de nuestro ordenamiento coadyuvando a generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.

Por otra parte, el artículo 6 de la Ley General de Publicidad, que regula las acciones derivadas de la publicidad ilícita, dispone que frente a este tipo de publicidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 3, por utilizar de forma vejatoria la imagen de la mujer están legitimados, entre otros:

LEGISLATURA

IX

a) La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

b) El Instituto de la Mujer o su equivalente en el ámbito autonómico.

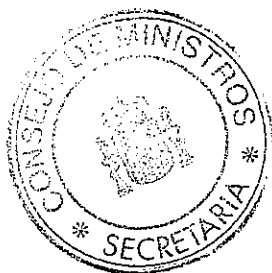


c) Las asociaciones legalmente constituidas que tengan como objetivo único la defensa de los intereses de la mujer y no incluyan como asociados a personas jurídicas con ánimo de lucro.

d) El Ministerio Fiscal.

Además, se modifica el artículo 49.1 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, con objeto de incorporar expresamente, como una infracción en materia de defensa de los consumidores y usuarios, las conductas discriminatorias en el acceso a los bienes y la prestación de los servicios, y en especial las previstas como tales en la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Madrid, mayo de 2009



121/27

**PROYECTO DE LEY DE FINANCIACIÓN DE LA CORPORACIÓN DE  
RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA**

**INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO**

Teniendo en cuenta la regulación contenida en el presente Proyecto de Ley y a la vista del objeto de las previsiones incluidas en el mismo, no existen desigualdades de partida en relación con la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, sin que se prevea modificación alguna de esta situación como consecuencia de la materia objeto de regulación por parte del presente Proyecto de Ley.

En consecuencia se estima que la norma proyectada tendrá un impacto nulo en materia de género.

28 de mayo de 2009

121027

LEGISLATURA

IX





INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECE EL RÉGIMEN SANCIONADOR PREVISTO EN EL REGLAMENTO (CE) N.º 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 18 DE DICIEMBRE DE 2006, RELATIVO AL REGISTRO, LA EVALUACIÓN, LA AUTORIZACIÓN Y LA RESTRICCIÓN DE LAS SUSTANCIAS Y PREPARADOS QUÍMICOS (REACH).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1 b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, modificada por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, este proyecto de ley, que tiene por objeto establecer el régimen sancionador previsto en el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos, no supone, ni en el fondo ni en la forma, impacto de género alguno que pudiera favorecer situaciones de discriminación por razón de género.

Madrid, junio de 2009



121029

LEGISLATURA

IX



**PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION DE DIVERSAS  
LEYES PARA SU ADAPTACION A LA LEY SOBRE EL  
LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y  
SU EJERCICIO**

**INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZON DE  
GENERO**

1 DE JUNIO DE 2009

**LEGISLATURA**

**IX**

**121030**



De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, los proyectos de Ley deben ser acompañados de un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establezcan en el mismo.

El Proyecto de Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio atiende a la universalidad del resultado, **beneficiando por igual a mujeres y hombres, pues las oportunidades de aprovechamiento de esta norma por ambos son equivalentes.**

Ahora bien, dadas las características estructurales del sector servicios cabe esperar que el presente proyecto de Ley tenga un **impacto positivo de género**, al intervenir en las causas que dificultan un acceso equilibrado a los recursos y al perseguir resultados que facilitarán un mejor impacto de otras disposiciones normativas en materia de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

El proyecto de Ley tiene por objetivo la mejora regulatoria en el contexto del sector servicios. Se trata del sector más imponente de la economía española, pues genera el 66,7% del PIB y el 66,2% del empleo. En este contexto, cabe destacar la importancia del **empleo femenino en el sector servicios**, ya que éste emplea a la mayor parte de la población ocupada femenina (85,25%). Adicionalmente, la representación de la mujer en el sector servicios supera a la del hombre, siendo de 53,33% y 46,66% respectivamente.

Por otro lado, aunque el porcentaje de **mujeres en puestos directivos** es reducido, también en las actividades de servicios, la diferencia con relación al porcentaje de directivos hombres es menor que en otras ramas de actividad.

Finalmente, los **salarios** del sector servicios son, en general, inferiores a los de otros sectores de actividad. Dado el elevado porcentaje de mujeres asalariadas en actividades de servicios, este hecho puede incidir, a nivel global, en desigualdades de renta entre mujeres y hombres.

Los siguientes cuadros son ilustrativos de la situación descrita.

#### PORCENTAJE DE MUJERES OCUPADAS SOBRE LA OCUPACIÓN TOTAL

TOTAL	
% Mujeres	53,33
	53,33
	53,34
	53,33
	65,89
	6,02
Artesanas y trabajadoras cualificadas de industrias manufactureras, construcción y minería	



(excepto operadoras)	
Trabajadoras calificadas en agricultura y pesca	21,83
Operadoras de instalaciones y maquinaria, montadoras	13,36
Trabajadoras no calificadas	56,21
Fuerzas armadas	10,47

FUENTE: Instituto de la Mujer a partir de datos de la Encuesta de Población Activa, INE

## PORCENTAJE DE DIRECTIVAS SOBRE EL TOTAL DE DIRECTIVAS Y DIRECTIVOS

	2007
<b>DIRECCIÓN DE LAS EMPRESAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>31,30</b>
Dirección de la Administración Pública y de empresas de 10 o más asalariadas/os	22,65
Poder ejecutivo y legislativo de la Admon. Pública, dirección de organizaciones	5,87
Dirección de empresas con 10 o más trabajadores	21,30
Gestión de empresas con menos de 10 trabajadores/os	27,19
De comercio	33,29
De hostelería	36,97
De otras empresas	21,75
Gestión de empresas sin asalariadas/os	47,35
De comercio	53,87
De hostelería	56,60
De otras empresas	33,08

FUENTE: Instituto de la Mujer a partir de datos de la Encuesta de Población Activa, INE

Pues bien, si retomamos las conclusiones del análisis del impacto económico expuestas anteriormente, podemos señalar los siguientes efectos esperados a nivel agregado:

- Aumente el empleo en las ramas de servicios (entre 150.000 y 200.000 nuevos empleos en dos años y medio, fundamentalmente en el sector servicios).
- Se incrementen la productividad y salarios reales de los trabajadores en el sector servicios (se prevé un incremento en el salario real del 1,33% respecto al nivel de partida, lo que beneficiará particularmente al sector servicios).
- Se facilite la creación de nuevas empresas en el sector terciario.

Y por lo tanto, en el contexto descrito anteriormente cabe esperar desde una perspectiva de género los siguientes resultados:

- El aumento del empleo en actividades de servicios favorecerá la



**incorporación de la mujer al mercado laboral**, contribuyendo a aproximar las tasas de ocupación de mujeres y hombres a nivel agregado.

- El aumento de productividad y salarios reales de los trabajadores de servicios se reflejará en un incremento de los salarios reales percibidos mayoritariamente por mujeres, contribuyendo, también a nivel agregado a **reducir la desigualdad de rentas salariales** entre mujeres y hombres.
- Por último, la eliminación de barreras a la creación de nuevas empresas facilitará la **incorporación de mujeres a la actividad empresarial y directiva** en los sectores de servicios.

La **conclusión**, desde la perspectiva de la contribución a los objetivos de las políticas de igualdad de oportunidades, es que el efecto principal de la **propuesta puede ser coadyuvar a la mejora de la presencia laboral de las mujeres en el conjunto de la economía**, a través de la expansión de las oportunidades de empleo y creación de empresas en actividades de servicios.

121030





**INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL.**

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, del Gobierno, en su redacción dada por el artículo 1 de la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, debe señalarse que el contenido que incorpora el presente Anteproyecto de Ley de Reforma la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, presenta un impacto positivo por razón de género.

En particular, respecto de las modificaciones operadas, entre otras, en beneficio de las víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos previstas en los artículos 2 bis, 2 ter, 19, 31 bis, 40 y 59.

Así, el artículo 2 bis, letras d) y g), encomienda al Gobierno que la política migratoria de carácter integral se base en una serie de principios, entre ellos, garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y la lucha contra la trata de seres humanos.

El artículo 2 ter, apartado 2, determina que las Administraciones Públicas incorporarán el objetivo de la integración de inmigrantes a todas las políticas y servicios públicos, promoviendo la participación económica, social, cultural y política en condiciones de igualdad de trato.

El artículo 19 establece, en materia de reagrupación familiar, que el cónyuge víctima de violencia de género pueda obtener autorización de residencia independiente desde el momento en que se dicta una orden de protección, sin necesidad de disponer de medios económicos suficientes para cubrir sus propias necesidades.

El artículo 31 bis determina que a la mujer extranjera que denuncie ser víctima de violencia de género, con independencia de su situación administrativa en España se le aplicarán las medidas de protección establecidas por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Si al denunciar esta situación de violencia de género pusiera de manifiesto que se halla en situación irregular, su expediente administrativo sancionador será suspendido hasta la resolución del procedimiento penal denunciado.

Asimismo, establece que a partir del momento en que se hubiera dictado una orden de protección a su favor o cuando cuente con Informe del Ministerio Fiscal en el que se constate la existencia de indicios de violencia de género, podrá solicitar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales que no se resolverá hasta que recaiga sentencia o concluya el procedimiento penal. La autoridad competente para otorgar esta autorización podrá conceder una autorización de trabajo provisional que

conllevará su habilitación para permanecer en España en régimen de estancia, esta autorización concluirá en el momento en que se conceda o deniegue definitivamente la autorización por circunstancias excepcionales.

Cuando el procedimiento penal concluya con la declaración de víctima de violencia de género, finalizará el expediente administrativo sancionador sin que quepa propuesta de sanción, y podrá concederse una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales a favor de la mujer extranjera. En este caso, para asegurar que la extranjera conoce la situación, se establece la necesidad de notificarle la terminación del expediente sancionador así como la posibilidad de solicitar una autorización de residencia por circunstancias excepcionales. Cuando del procedimiento penal concluido no pudiera deducirse la condición de víctima de violencia de género, continuará el expediente administrativo sancionador inicialmente suspendido.

El artículo 40 contempla, en la regulación de la autorización de trabajo, entre los supuestos específicos en los que no se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo, cuando el contrato de trabajo o la oferta de colocación vaya dirigido a personas que sean víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos.

El artículo 59 determina, en materia de colaboración contra redes organizadas, que la víctima, perjudicado o testigo de un acto de trata de seres humanos o de explotación de prostitución, pueda quedar exento de responsabilidad administrativa y no ser expulsado si denuncia a los autores y cooperadores de tal tráfico, cooperación y colaboración, proporcionando datos esenciales o testificando en el proceso correspondiente contra aquellos autores.

1121032

25 de junio 2009.



conllevará su habilitación para permanecer en España en régimen de estancia, esta autorización concluirá en el momento en que se conceda o deniegue definitivamente la autorización por circunstancias excepcionales.

Cuando el procedimiento penal concluya con la declaración de víctima de violencia de género, finalizará el expediente administrativo sancionador sin que quepa propuesta de sanción, y podrá concederse una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales a favor de la mujer extranjera. En este caso, para asegurar que la extranjera conoce la situación, se establece la necesidad de notificarle la terminación del expediente sancionador así como la posibilidad de solicitar una autorización de residencia por circunstancias excepcionales. Cuando del procedimiento penal concluido no pudiera deducirse la condición de víctima de violencia de género, continuará el expediente administrativo sancionador inicialmente suspendido.

El artículo 40 contempla, en la regulación de la autorización de trabajo, entre los supuestos específicos en los que no se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo, cuando el contrato de trabajo o la oferta de colocación vaya dirigido a personas que sean víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos.

El artículo 59 determina, en materia de colaboración contra redes organizadas, que la víctima, perjudicado o testigo de un acto de trata de seres humanos o de explotación de prostitución, pueda quedar exento de responsabilidad administrativa y no ser expulsado si denuncia a los autores y cooperadores de tal tráfico, cooperación y colaboración, proporcionando datos esenciales o testificando en el proceso correspondiente contra aquellos autores.

LEGISLATURA  
IX

25 de junio 2009.





**INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, DE 11 DE ENERO.**

El artículo 24.1 b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, prevé la realización de un informe que analice el impacto por razón de género de las disposiciones normativas elaboradas por aquél, a fin de asegurar la igualdad entre hombres y mujeres.

En este sentido, el anteproyecto de ley por el que se modifica el texto refundido de la ley de evaluación de impacto ambiental aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero carecen de impacto por razón de género.

Madrid, 1 de julio de 2009

121033

LEGISLATURA

IX







# PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 7/1996, DE 15 DE ENERO, DE ORDENACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA.

## INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO

### 1. INTRODUCCIÓN

La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en su artículo 22.2, según la redacción dada por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, establece la obligatoriedad de, en los procedimientos de elaboración de proyectos de ley, incorporar un informe sobre el impacto por razón del género de las medidas que se establezcan en el mismo, a fin de asegurar la igualdad entre hombres y mujeres.

### 2. IMPORTANCIA DE LA MUJER EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

La incorporación de las mujeres al mundo laboral constituye uno de los hechos más significativos de la economía española en los últimos años. Las tasas de actividad y empleo de las mujeres han experimentado un crecimiento notablemente superior al registrado en el caso de los varones, como reflejan las cifras más recientes, las mujeres representan en la actualidad el 37,93% de la población activa, habiendo cobrado, además, un gran protagonismo en el mundo empresarial: España es el tercer país de la Unión Europea con más empresarias (31.1%), por detrás de Italia (32.6%) y Bélgica (32.2%).

### 3. RELEVANCIA DE LA MUJER EN EL SECTOR DEL COMERCIO

El sector del comercio ocupa aproximadamente al 15% del total de ocupados en España. Uno de los rasgos más característicos del comercio es la feminización del empleo asalariado, así, del total de





ocupados en el sector del comercio, el 49% son mujeres, cifra que alcanza el 63% en el comercio minorista, en que la ocupación femenina es muy superior a los hombres.

Sin embargo, la presencia de las mujeres como empresarias en el sector del comercio está adquiriendo una importancia creciente, de hecho, del total de mujeres empresarias en España, la mayoría desarrolla su actividad en el sector servicios (el 78% del total) y dentro del mismo, destaca el número de empresarias dedicadas al comercio (el 31% del total).

#### 4. VALORACIÓN DEL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO

Esta Ley no conlleva impacto por razón de género pues no establece derechos ni crea obligaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres, lo que se hace constar a efectos de lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno según la redacción del mismo aprobada por Ley 30/2003, de 13 de octubre.





121035

## INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY PARA LA EJECUCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA DE RESOLUCIONES JUDICIALES DE DECOMISO.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, debe señalarse que las medidas que se incluyen en este Anteproyecto de Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso por la comisión de infracciones penales, no conllevan impacto alguno por razón de género.

LEGISLATURA

IX





121/36  
121036

**PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA  
6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, Y COMPLEMENTARIA A LA LEY  
PARA LA EJECUCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA DE RESOLUCIONES JUDICIALES  
DE DECOMISO POR LA COMISIÓN DE INFRACCIONES PENALES**

**INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, debe señalarse que las medidas que se incluyen en este Anteproyecto de Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, y complementaria a la ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso por la comisión de infracciones penales, no conllevan impacto alguno por razón de género.

2

LEGISLATURA

IX



**INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE REGULA EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE RÉGIMEN COMÚN Y CIUDADES CON ESTATUTO DE AUTONOMÍA Y SE MODIFICAN DETERMINADAS NORMAS TRIBUTARIAS.**

El Proyecto de Ley regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía desde 1 de enero de 2009. Esta Ley garantizará la autonomía y suficiencia financieras de las Comunidades Autónomas para la prestación de todos los servicios de su competencia. No obstante, si bien las Comunidades autónomas gozan de autonomía plena en las decisiones de gasto, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su artículo 15 impone a todas las Administraciones públicas la obligación de integrar, de forma activa, en la definición y presupuestación de sus políticas públicas en todos los ámbitos, el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.

Los recursos que el presente proyecto de ley aporta a las Comunidades Autónomas se destinan por éstas a financiar sus propios programas de gasto, atendiendo a las prioridades políticas de cada una de ellas. Por ello, todos los recursos, y en particular los recursos adicionales que aporta la Administración General del Estado para la mejora de las prestaciones del Estado de bienestar, tendrán un impacto favorable sobre la reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres en la medida en que así se disponga en las políticas públicas autonómicas.

En todas las Comunidades Autónomas existen políticas a favor de la igualdad de género. Sin embargo, dado que la mayor parte de las Comunidades autónomas no elaboran un informe de impacto de género de sus presupuestos, no es posible evaluar *ex ante* la contribución de los fondos adicionales del presente proyecto de ley a la reducción de la desigualdad entre hombres y mujeres.

LEGISLATURA

IX

121037



El presente proyecto de Ley Orgánica establece el marco que permitirá la aportación de recursos a las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía por el nuevo sistema, recursos que se destinarán por éstas a financiar sus propios programas de gasto, atendiendo a las prioridades políticas de cada una de ellas. Por ello, todos los recursos, y en particular los recursos adicionales que aporta el Estado para la mejora de las prestaciones del Estado de bienestar, tendrán un impacto favorable sobre la reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres en la medida en que así se disponga en las políticas públicas autonómicas.

En todas las Comunidades y Ciudades Autónomas existen políticas a favor de la igualdad de género. Sin embargo, dado que la mayor parte de ellas no elaboran un informe de impacto de género de sus presupuestos, no es posible evaluar *ex ante* la contribución de los fondos adicionales que el Estado aportará a la reducción de la desigualdad entre hombres y mujeres.

LEGISLATURA  
IX

121037



**INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/1980, DE 22 DE SEPTIEMBRE, DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS**

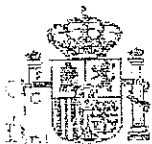
La implementación del Acuerdo 6/2009, de 15 de julio, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sobre reforma del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, exige la introducción de una serie de modificaciones normativas que van a operar en dos ordenes distintos:

- Por un lado, resulta necesario adaptar, mediante el presente proyecto de Ley Orgánica, algunos principios de la Ley Orgánica 8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas, en la medida en que dicha norma constituye el marco bajo el cual se han aplicado los distintos sistemas de financiación que se han venido sucediendo en el tiempo.
- Por otro, resulta necesario regular el propio sistema de financiación mediante una Ley que sustituya la actualmente vigente, Ley 21/2001, por la que se reguló el sistema de financiación anterior.

El presente proyecto de Ley Orgánica constituye el marco regulatorio bajo el cual se va a aplicar el nuevo sistema de financiación y, por tanto, carece de efectos directos, siendo necesario para la aplicación del sistema que esta regulación se complemente mediante la Ley ordinaria que la desarrolle y regule con detalle el sistema, por lo que no existe impacto por razón de género del proyecto de Ley Orgánica aisladamente considerada..

Por su parte, una consideración conjunta de ambas normas permite afirmar que garantizarán la autonomía y suficiencia financieras de las Comunidades Autónomas para la prestación de todos los servicios de su competencia. No obstante, si bien las Comunidades autónomas gozan de autonomía plena en las decisiones de gasto, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su artículo 15 impone a todas las Administraciones públicas la obligación de integrar, de forma activa, en la definición y presupuestación de sus políticas públicas en todos los ámbitos, el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.





MINISTERIO  
DE TRABAJO  
E INMIGRACION

121035

121039

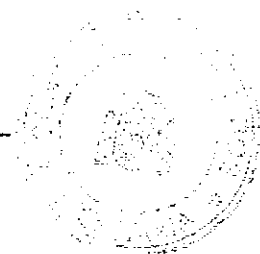
**INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL  
REAL DECRETO-LEY 10/2009, DE 13 DE AGOSTO, POR EL  
QUE SE REGULA EL PROGRAMA TEMPORAL DE PROTECCIÓN  
POR DESEMPLEO E INSERCIÓN**

En cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, modificada por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, se informa de que el impacto del proyecto es nulo por razón de género.

4 de agosto de 2009

LEGISLATURA

IX







MINISTERIO  
DE ASUNTOS  
EXTERIORES Y  
DE COOPERACION

SECRETARÍA DE ESTADO  
PARA LA UNIÓN EUROPEA

Además, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a la que el artículo 6 del TUE otorga igual valor jurídico que el de los Tratados, dedica su artículo 21 a la no discriminación, tampoco por razón de sexo, y, lo que es más, incluye un artículo, el 23, expresamente dedicado a la obligación de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos.

Es preciso citar también la Declaración aneja al Acta Final de la Conferencia Intergubernamental relativa al artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, adoptada a iniciativa de España por la totalidad de los Estados miembros, en la que se señala que "la Unión tratará en sus distintas políticas de combatir la violencia doméstica en todas sus formas", recalcando que "es preciso que los Estados miembros adopten todas las medidas necesarias para prevenir y castigar estos actos delictivos y para prestar apoyo y protección a las víctimas".

Madrid, a 28 de abril de 2008

LEGISLATURA

IX



121040

C  
D  
I  
P  
B  
1  
4  
2  
1  
1  
4  
0  
9  
1  
1  
:  
5  
8

**INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL REAL  
DECRETO-LEY 12/2008, DE 13 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBAN  
MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR  
LOS INCENDIOS FORESTALES Y OTRAS CATÁSTROFES NATURALES  
OCURRIDOS EN VARIAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS**

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, los proyectos de ley deben acompañarse de un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establezcan en ellos.

Los beneficios que se reconocen en el proyecto de Real Decreto-ley como consecuencia de daños producidos en elementos patrimoniales como consecuencia de los incendios acaecidos no distinguen a los beneficiarios por razón de sexo.

En consecuencia, cabe concluir que el impacto de este Proyecto de Real Decreto-Ley es nulo por razón de género.

LEGISLATURA

IX



AGENCIA  
ESPAÑOLA DE  
PROTECCIÓN  
DE DATOS



COMUNICACIÓN  
SALIDA  
13 JUN 2009  
13 JUN 2009

MINISTERIO DE JUSTICIA  
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA  
Dirección  
13 JUN 2009  
REGISTRO DE ENTRADA 498  
Ref. 473556-2600

Examinada su solicitud de informe, remitida a esta Agencia Española de Protección de Datos, referente al Anteproyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 18 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 23 de marzo, cumples informarle lo siguiente:

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

Según indica su artículo 1, el Anteproyecto sometido a informe tiene por objeto "garantizar en un entorno libre de coerción, discriminación y violencia, los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regular las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establecer las correspondientes obligaciones de los poderes públicos".

En este ámbito, debe indicarse que el presente informe se limitará a analizar los preceptos del Anteproyecto relacionados con la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999 y su normativa de desarrollo, incluidas en sus artículos 20 a 23, sin efectuar consideración o valoración adicional alguna en relación con las restantes disposiciones de aquél.

Al propio tiempo, será preciso tener en consideración lo ya señalado por esta Agencia en sus informes previos de 31 de marzo y 4 de septiembre de 2008, este último emitido en relación con el Proyecto de Real decreto por el que se establecen medidas para garantizar la intimidad, la confidencialidad y la equidad en la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo, algunas de cuyas provisiones son ahora incorporadas al Anteproyecto objeto del presente informe.

Dicho esto, los artículos a los que se referirá el presente informe se refieren a los principios generales de protección de la intimidad y confidencialidad, las reglas en el tratamiento de los datos personales, el acceso



*Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado.*

La redacción dada por el Código Penal al delito de aborto excluye la posibilidad de castigar como autor, al inductor de este delito.

Respecto a la inducción se considera que tienen trascendencia los datos estadísticos que reflejan que el 67,63% son mujeres solteras, dato que pone de manifiesto que los varones no se implican ni se sienten corresponsables del embarazo, sin que sea posible llevar a cabo conclusiones sobre su posible inducción al aborto.

Por último, cabe destacar que la posibilidad de agravación penológica referida a los terceros que practican abortos ilegales practicados fuera de centro o establecimiento público o privado acreditado tanto en el artículo 145.1 como en el 145 bis se ha excluido expresamente respecto de las mujeres.

Madrid, 23 de septiembre de 2009





- Incidencia de la norma en los varones y en las mujeres.
- Impacto previsible sobre la igualdad de trato.

#### 4.1. Diagnóstico sobre la situación de partida

Los datos estadísticos de influencia para el análisis son los que se detallan a continuación:

##### 4.1.1. DATOS RELACIONADOS CON EL TÍTULO I "DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA"

Diferentes estudios, como el editado por el Ministerio de Sanidad y Política Social en 2008, *Ganar Salud con la Juventud*, muestran una tendencia al inicio de las relaciones sexuales con penetración a edades cada vez más tempranas.

TABLA 12. EDAD MEDIA DE INICIO DE LAS RELACIONES SEXUALES SEGÚN DIFERENTES ESTUDIOS SOBRE SALUD Y JÓVENES

Estudio	Año	Edad	Hombres	Mujeres
ESHS	2003	16-29	16,2	16,2
INJUVE	2004	16-29	16,2	16,2
CJE	2003	16-29	16,2	16,2
MSSC	2002	11-17	11,2	11,2

Población: personas que han tenido relaciones sexuales alguna vez en la vida.

<sup>1</sup> ESHS: Encuesta de Salud y Hábitos Sexuales. España, 2003. Instituto Nacional de Estadística.

Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida, 2006.

<sup>2</sup> INJUVE: Juventud en España. Informe 2004. Instituto de la Juventud, 2005.

<sup>3</sup> CJE: Salud y Juventud. Consejo de la Juventud de España, 2003.

<sup>4</sup> MSSC: Estudio "Los adolescentes españoles y su salud: Un análisis en chicos y chicas de 11-17 años, 2002". Ministerio de Sanidad y Consumo. Universidad de Sevilla, 2003.

Fuente: Informe FIPSE. Jóvenes, relaciones sexuales y riesgo de infección por VIH en España 2003. 2006.

Como se observa en la Tabla 13, hay un inicio más precoz de las relaciones sexuales en los hombres que en las mujeres, aunque las diferencias por sexo son menores entre los/las más jóvenes.

TABLA 13. EDAD DE INICIO DE RELACIONES SEXUALES SEGÚN SEXO Y EDAD (MEDIA, MEDIANA Y PERCENTILES 10 Y 90)

Edad	Hombres			Mujeres		
	Media	Mediana	Percentil 10	Media	Mediana	Percentil 10
15-19	16,2	16,2	15,2	16,2	16,2	15,2
20-24	16,2	16,2	15,2	16,2	16,2	15,2
25-29	16,2	16,2	15,2	16,2	16,2	15,2

Población: personas de 18-29 años que han tenido relaciones sexuales alguna vez en la vida.

Fuente: Informe FIPSE. Jóvenes, relaciones sexuales y riesgo de infección por VIH en España 2003.





Además, según la Encuesta de Salud y Hábitos Sexuales (ESHS), en España, el 16,5% de las personas de 18-29 años ha tenido su primera relación sexual con menos de 16 años. Si analizamos este dato por grupos de edad, en ambos sexos se observa que en el grupo más joven (18-19 años) se da el porcentaje más elevado, sobre todo en las mujeres, que casi se duplica, pasando del 10,8% en las de 25-29 años al 18,9% en las menores de 20. De ahí que en los últimos años esté emergiendo un colectivo de IVE en menores de 16 años.

Tanto en el *Informe Juventud España -1998*, como en el del 2000, el porcentaje de activos sexuales menores de edad, resulta creciente pero escaso. En 2004 las cosas ya cambiaron de una manera muy importante y el porcentaje de menores de edad que ya habían tenido relaciones ascendió a casi un tercio. En el *Informe Juventud en España 2008* el incremento ha vuelto a ser importante, especialmente en el caso de las mujeres. Está claro que la mayor parte de la juventud española alcanza la mayoría de edad habiendo mantenido relaciones sexuales.

TABLA 3.B.

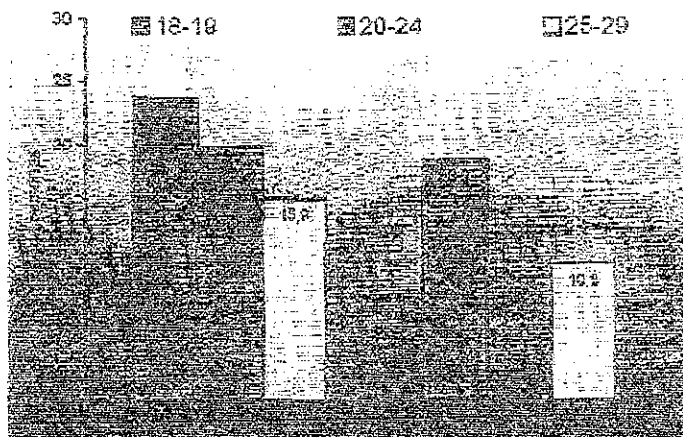
Evolución de la declaración de que han tenido relaciones sexuales completas por grupo de edad y sexo. (Porcentajes de cada casilla).

		18/19	20/24	25/29	TOTAL
UE-1998	Hombres	14	50	74	60
	Mujeres	50	32	64	38
UE-2000	Hombres	17	62	76	68
	Mujeres	13	48	72	53
UE-2004	Hombres	23,9	73,7	92,2	82,1
	Mujeres	23,4	73	89,2	79,1
UE-2008	Hombres	40,2	85,9	91,6	85,9
	Mujeres	48,2	74,1	94,4	81,5





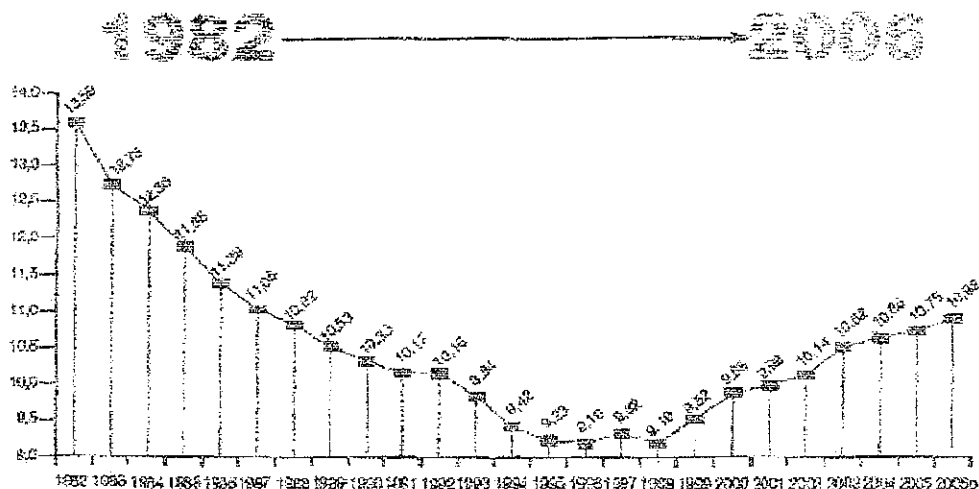
FIGURA 11. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE INICIAN LAS RELACIONES SEXUALES CON MENOS DE 16 AÑOS SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD



Fuente: ESHS: Encuesta de Salud y Hábitos Sexuales, España, 2003. Instituto Nacional de Estadística. Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida, 2006.

Si analizamos los datos relativos a la tasa de natalidad, se observa que se ha pasado de una tasa del 13,58, en 1982, al 10,92, en 2006. Los años 1996 y 1998 constituyeron los puntos más bajos, con una tasa de natalidad de apenas un 9,19 nacimientos por mil habitantes. La recuperación de los últimos años nos devuelve a tasas similares a las de 1987.

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE NATALIDAD (POR MIL)



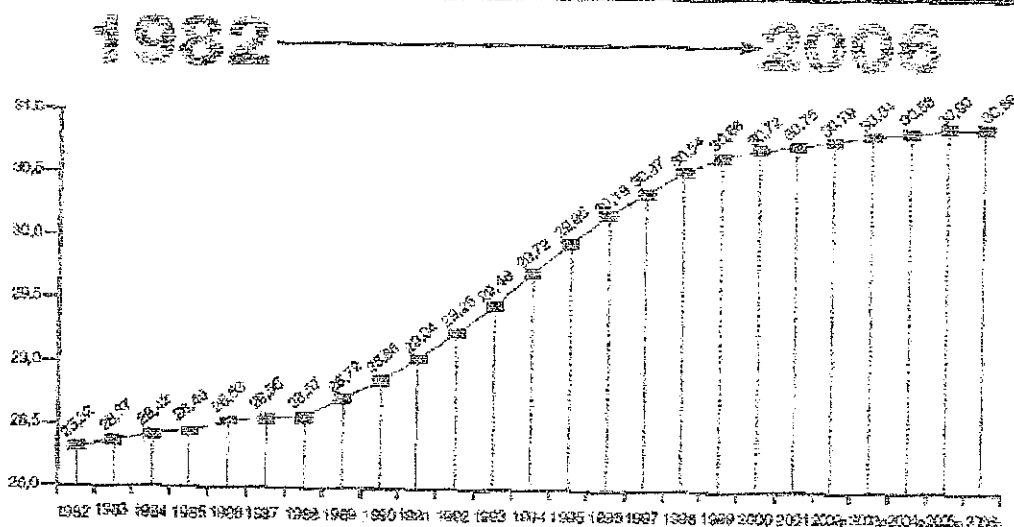
Fuente: Indicadores Demográficos Básicos, INE

Según muestra el gráfico siguiente, la edad media a la maternidad ha ido aumentando y si en 1983 era de 28,32 años, se observa que en 2005, se ha elevado a casi 31 años (30,9, exactamente), habiéndose superado la barrera de los 30 años en 1996.





## EVOLUCIÓN DE LA EDAD MEDIA A LA MATERNIDAD



Fuente: Indicadores Demográficos Básicos, INE

Además se observa que, desde 1996, el número de nacimientos entre mujeres menores de 15 años ha crecido un 41%, pasando de 99 nacimientos en 1996 a 167 nacimientos en 2006.

## NACIMIENTOS VIVIENTES POR SEXO Y EDAD DE LA MADRE

Edad de la madre	1982		1996		2006	
	SEXOS	NIÑAS	SEXOS	NIÑAS	SEXOS	NIÑAS
Menos de 15 años	363	45,90	99	47,47	707	49,10
De 15 a 19 años	34.219	47,96	11.075	46,52	13.551	46,20
De 20 a 24 años	145.488	47,98	42.068	48,37	45.953	46,56
De 25 a 29 años	172.296	47,75	122.428	48,46	116.558	48,26
De 30 a 34 años	162.547	47,69	139.195	48,54	163.293	48,27
De 35 a 39 años	69.952	48,13	46.854	48,75	100.170	48,79
De 40 a 44 años	12.587	48,35	8.610	47,96	17.183	46,25
De 45 a 49 años	1.228	47,44	260	51,07	1.042	46,25
De 50 y más años	111	51,25	7	71,43	52	44,23
TOTAL	515.795	47,91	362.828	48,51	482.857	48,40







RACIMIENTOS SEGÚN EDAD DE LA MADRE Y PORCENTAJE DE RACIMIENTOS DE MADRE NO CASADA

Edad de la madre	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Total	306.253	300.459	297.632	295.389	293.348	291.891	290.581	289.371	288.257	287.257	286.327	285.457	284.627	283.827	283.027
Menos de 15 años	37	50	102	473	121	185	146	153	197	185	146	153	197	185	146
De 15 años	250	286	400	423	466	490	422	472	400	422	472	400	422	472	400
De 16 años	637	656	1306	1.029	1.141	1.121	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151
De 17 años	1.044	1.021	1.471	2.079	2.024	2.139	2.203	2.365	2.434	2.573	2.673	2.773	2.873	2.973	3.073
De 18 años	3.162	3.298	3.222	3.478	3.522	3.631	3.631	3.750	3.812	3.912	4.012	4.112	4.212	4.312	4.412
De 19 años	1.336	1.330	1.640	1.781	1.775	1.897	1.903	2.149	2.417	2.671	2.925	3.179	3.433	3.687	3.941
De 20 a 24 años	38.273	38.260	40.495	41.237	42.027	42.890	43.753	44.616	45.479	46.342	47.205	48.068	48.931	49.794	50.657
De 25 a 29 años	110.493	109.948	112.482	110.542	111.537	112.532	113.527	114.522	115.517	116.512	117.507	118.502	119.497	120.492	121.487
De 30 a 34 años	142.318	140.485	138.441	137.335	136.229	135.123	134.017	132.911	131.805	130.699	129.593	128.487	127.381	126.275	125.169
De 35 a 39 años	58.064	57.554	57.044	56.534	56.024	55.514	55.004	54.494	53.984	53.474	52.964	52.454	51.944	51.434	50.924
De 40 a 44 años	17.211	17.042	16.873	16.704	16.535	16.366	16.197	16.028	15.859	15.690	15.521	15.352	15.183	15.014	14.845
De 45 a 49 años	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045
De 50 y más años	19	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

Total	
Menos de 15 años	
De 15 años	
De 16 años	
De 17 años	
De 18 años	
De 19 años	
De 20 a 24 años	
De 25 a 29 años	
De 30 a 34 años	
De 35 a 39 años	
De 40 a 44 años	
De 45 a 49 años	
De 50 y más años	

FUENTE: INE: Movimiento Natural de la Población

Según la Encuesta Nacional de Salud casi la mitad de las mujeres entre los 16 a 24 años afirman no haber acudido nunca a un ginecólogo. Si bien no se han podido obtener datos de las menores de 16 años, es previsible que este porcentaje aumente.

Encuesta Nacional de Salud. Año 2006.

Estilos de vida y prácticas preventivas. Cifras absolutas

Consultas de ginecología alguna vez según grupo de edad. Mujeres de 16 y más años

Unidades: miles de personas

	1.181,8	1.069,3
--	---------	---------

En cuanto a la utilización de anticonceptivos, El preservativo es el método de prevención más extendido entre la población juvenil, aunque, a mayor edad, mayor presencia se da de anticonceptivos orales





TABLA 5.15.

Método utilizado la última vez.  
(Porcentajes verticales)

	Total	Menor	18-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Preservativo masculino	55,8	67,0	58,3	47,5	34,8	22,2	18,2
Preservativo femenino	1,3	5,4	1,9	0,4	2,5	1,2	1,3
Píldora anticonceptiva	27,2	22,2	23,2	30,9	39,2	40,4	32,3
DIU hormonal	1,9	1,4	2,4	1,1	2,9	3,5	4,2
Diafragma	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
DIU	0,4	0,4	0,6	0,1	0,1	0,8	1,3
DIU no hormonal	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
Coito interrumpido	1,1	0,6	0,8	0,1	0,2	0,2	0,3
Otro	11,2	0,1	0,1	0,8	0,1	0,1	0,1
No responde	0,3	0,2	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3

La tabla 5.15 del *Informe Juventud en España 2008* nos indica cuál fue el método utilizado y destaca de forma notable el preservativo masculino, en dos de cada tres utilizaciones, a continuación aparece la píldora anticonceptiva y el resto de métodos apenas tienen presencia.

Por edad está claro que el preservativo es una práctica unánime en el caso de los menores de edad, cuyo uso va descendiendo con los años al ser progresivamente sustituido por otros métodos. En el grupo de edad 25/29 años las píldoras anticonceptivas y otros métodos hormonales ya representan el 27,2% de las opciones y tanto el DIU como el diafragma, que siguen siendo marginales, alcanzan su cota más alta.

Según la Encuesta sobre hábitos sexuales el 63,1% de las personas de 18-29 años usaron el preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales y su uso desciende a medida que aumenta la edad.

Según afirma el Informe del Ministerio de Sanidad y Política Social sobre *La interrupción voluntaria del embarazo y los métodos anticonceptivos en jóvenes*, de 2007, la "relación con la frecuencia de uso del preservativo masculino existen aspectos que deben ser mejorados. Sobre todo porque, por un lado, hay jóvenes que todavía no lo utilizan o no lo hacen de manera adecuada, y por otro, porque parece existir una cierta tendencia a la relajación en su uso, relacionada, probablemente, con la disminución en la percepción del riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas y en concreto del VIH/SIDA. Y por otro de manifiesto problemas en la implicación y corresponsabilidad de los chicos e incluso actitudes coactivas sobre las chicas para el no uso del preservativo."

#### DATOS DE INFECCIÓN POR VIH

Según el informe de la *Situación epidemiológica del VIH/SIDA en Mujeres*, del Ministerio de Sanidad y Política Social, de diciembre de 2008, es difícil evaluar





la situación global de infección por VIH en España al no existir un sistema estatal de notificación de nuevos diagnósticos de VIH. Sin embargo, en los últimos años, los sistemas existentes en 7 Comunidades Autónomas: Baleares, Canarias, Cataluña, Ceuta, Extremadura, La Rioja, Navarra y País Vasco y la ciudad autónoma de Ceuta (32% del total de población española) ofrecen algunos datos.

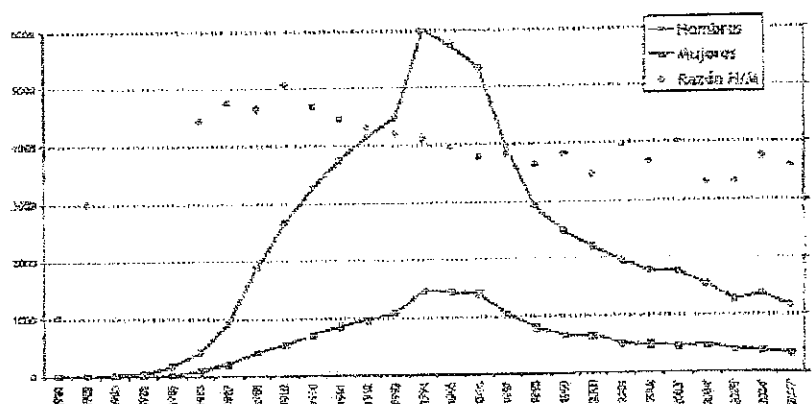
Tabla 1.1. Nuevos diagnósticos de infección por VIH

	2003		2004		2005		2006		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Hombre	923	75,03	909	74,20	947	75,23	896	75,976	3.575	75,613
Mujer	291	23,97	316	25,80	278	24,71	268	23,024	1.153	24,387
Total	1.214		1.225		1.225		1.164		4.728	
H/M	3,2		2,9		3,0		3,3		3,1	

El número de mujeres diagnosticado entre 2003 y 2006 en estas Comunidades autónomas fue 1.153, un 24,4% del total de casos. La media de edad, 34,7 años, es bastante menor que la de los hombres, 37,8. La gran mayoría de las mujeres se infectaron a través de relaciones sexuales no protegidas (80%) y menos del 13% por uso endovenoso de drogas.

La tendencia es descendente en todos los grupos de edad y tanto para hombres como para mujeres. El estudio señala de interés ver como las incidencias se aproxima, o incluso se igualan, para ambos sexos en los grupos más jóvenes, lo que sugiere que en un futuro no muy lejano, el sida afectará entre los heterosexuales en la misma proporción a unos y otros.

Figura 2.1.1. Evolución de la incidencia de SIDA en España por sexos, 1981-2007



#### DATOS SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)

En relación con los datos sobre infecciones de transmisión sexual, se hace constar que no ha sido posible encontrar otros datos que los que corresponden al informe del grupo de trabajo sobre ITS, publicado en febrero de 2009 por el Ministerio de Sanidad y Política Social y que sólo se refieren a sífilis y gonococia. El informe *Vigilancia epidemiológica de las infecciones*





transmisión sexual 1995 – 1997, publicado por el Instituto de Salud Carlos III, en febrero de 2009, se refiere a las mismas enfermedades y sus datos no están desagregados por sexo. Por tanto, no se han encontrado datos relativos al herpes genital o al virus del papiloma humano, candidiasis, etc.

Los datos de sífilis a lo largo de estos años muestran, a diferencia de la infección gonocócica, un ascenso en las tasas de incidencia desde 2,57 por 100.000 habitantes en 1995, hasta 4,38 por 100.000 en 2007. Este incremento se aprecia a partir de 2002, observándose además que desde el año 2004 las tasas de sífilis superan a las de infección gonocócica, situación que no había ocurrido hasta esa fecha.

Al analizar los datos en el periodo 1995-2007 se observa un marcado descenso en la incidencia de infección gonocócica, cuyas tasas decrecieron desde el 11,69 por 100.000 habitantes en 1995 al 3,84 en el 2007. Sin embargo, esta tendencia no es homogénea, ya que tras que descenso inicial observado entre 1995-2001 se advierte un incremento continuado en la incidencia a partir de 2004.

El patrón sociodemográfico muestra un predominio de los hombres, con una edad media de 34,9 años (DE:10,9) para los diagnósticos de sífilis y de 31,6 años (DE:8,8) para la gonococia. El 53% de los pacientes tienen estudios secundarios o superiores.

Tabla 3. Distribución de los diagnósticos de sífilis y gonococia según características sociodemográficas

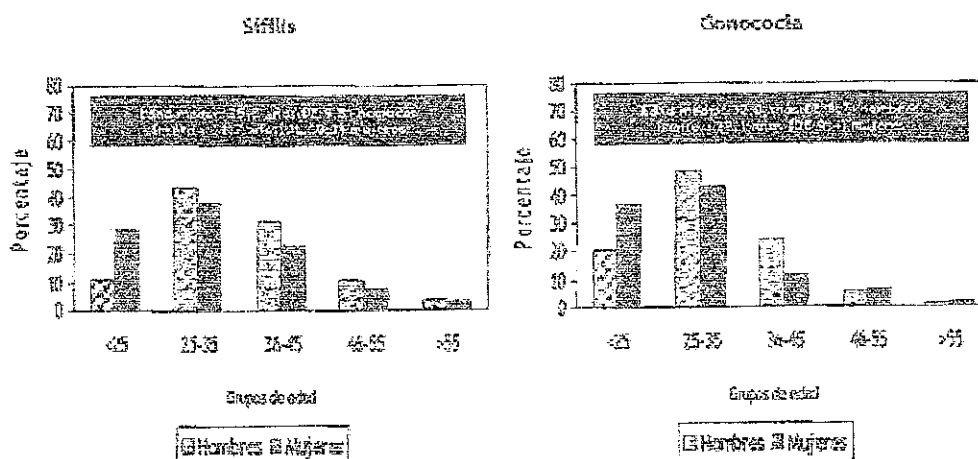
Variables	Sífilis		Gonococia	
	Nº	Porcentaje	Nº	Porcentaje
<b>Sexo</b>				
Hombre	711	84,4	925	86,0
Mujer	123	14,6	148	13,8
Travesti/Transexual	8	1,0	2	0,2
No consta información	-	-	1	0,1
<b>Edad</b>				
<=20 años	32	3,8	76	7,1
21-25 años	105	12,5	211	19,6
26-30 años	134	15,9	264	24,5
31-35 años	144	17,1	202	18,8
36-40 años	132	15,7	145	13,5
41-45 años	116	13,8	88	8,2
46-50 años	53	6,3	39	3,6
51-55 años	32	3,8	20	1,9
56-60 años	15	1,8	10	0,9
>60 años	15	1,8	6	0,6
No consta información	14	1,7	15	1,4
<b>Nivel de estudios</b>				
Sin estudios	17	2,0	14	1,3
Primarios	260	30,9	237	22,0
Secundarios	243	28,9	310	28,8
Superiores	200	23,8	267	24,8
Desconocido/No consta	122	14,5	245	23,0
<b>TOTAL</b>	<b>842</b>	<b>100</b>	<b>1.076</b>	<b>100</b>

Se encontraron diferencias en la edad entre hombres y mujeres: tanto en los nuevos diagnósticos de sífilis como en los de gonococia las mujeres fueron más jóvenes que los hombres.



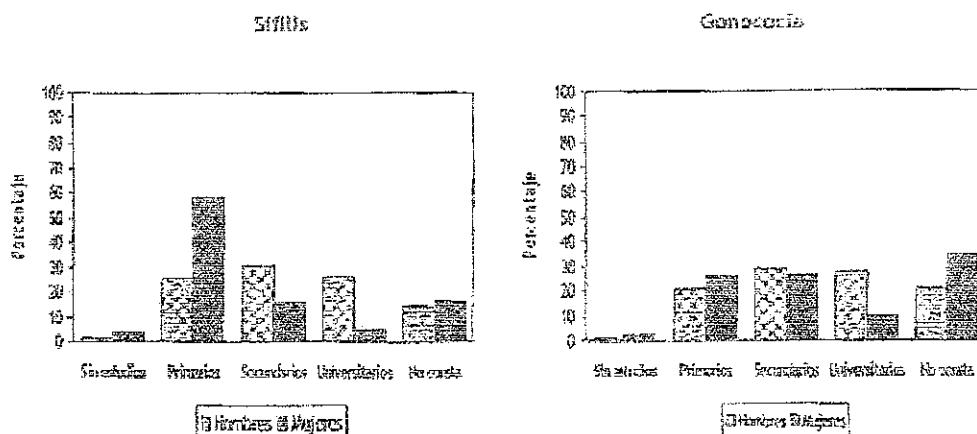


Figura 1. Distribución de los diagnósticos de sífilis y gonococia según edad y sexo



También se detectaron diferencias en el nivel de estudios según sexo. En los casos diagnosticados de sífilis el 58% de los hombres tenían estudios secundarios o superiores frente al 21,2% de las mujeres; entre los diagnósticos de gonococia, este porcentaje fue del 56,4% en los hombres frente al 35,8% de las mujeres.

Figura 2. Distribución de los diagnósticos de sífilis y gonococia según sexo y nivel de estudios



En el siguiente cuadro, el dato a destacar para el presente informe a pesar de no estar desagregado por sexos, es el número de casos infectados por relaciones heterosexuales y bisexuales no protegidas, que reflejan un déficit grave en la educación sexual.



121041



Tabla 10. Distribución de los diagnósticos de sífilis y gonococia según mecanismo de transmisión y práctica sexual #

Mecanismo de transmisión	Sífilis		Gonococia	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje
<b>Relaciones sexuales de alto riesgo</b>	243		399	
Anal	21	6,9	46	11,5
Oral	95	28,7	131	32,8
Anal+Oral	180	54,4	201	50,4
No consta información	33	10,0	21	5,3
<b>Subtotal</b>	311	100	399	100
<b>Relaciones sexuales de bajo riesgo</b>	242		442	
Vaginal	88	36,4	125	28,3
Anal	2	0,8	3	0,7
Oral	8	2,5	49	15,6
Vaginal+Anal	6	2,5	12	2,7
Vaginal+Oral	68	28,1	167	37,8
Anal+Oral	2	0,8	4	0,9
Vaginal+Anal+Oral	16	6,6	26	5,9
No consta información	54	22,3	36	8,1
<b>Subtotal</b>	242	100	442	100
<b>TOTAL</b>	542	100	841	100

# Sin información de un centro sobre el tipo de práctica sexual

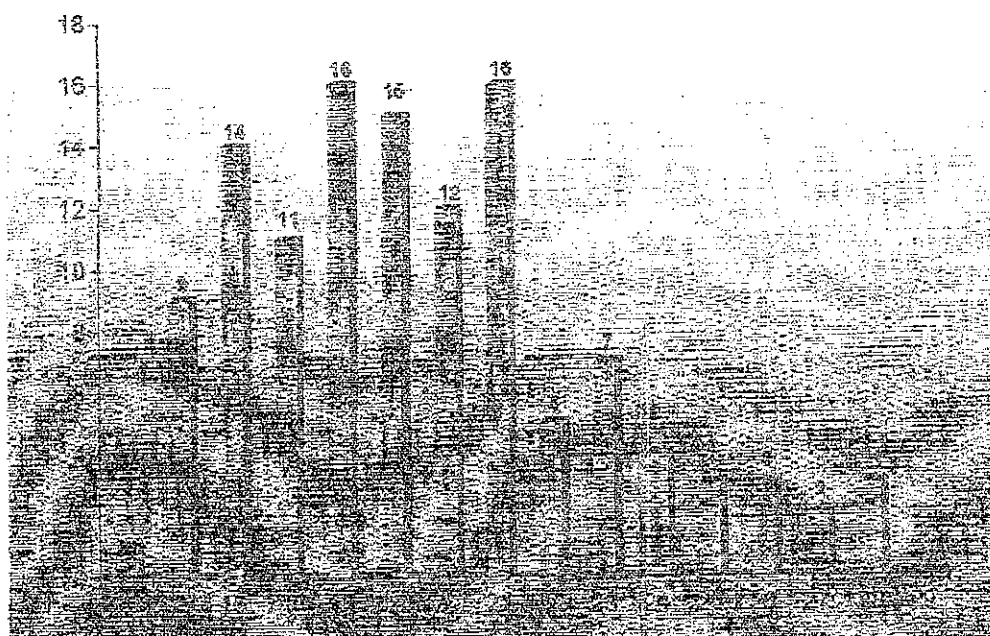
#### 4.1.2. DATOS RELATIVOS AL TÍTULO II: "DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO"

Si analizamos el problema de los embarazos no deseados en 2004 (Figura 12), nos encontramos con que, casi un 10% de las mujeres de entre 14 y 29 años que habían tenido relaciones sexuales completas se quedaron embarazadas sin desearlo. La media de edad en que esto ocurrió fue de 19,8 años. El 77% de ellas se quedaron embarazadas entre los 15 y los 21 años. Un 31,3% terminaría abortando.





FIGURA 12. EMBARAZOS NO DESEADOS POR EDAD



Fuente: Informe Juventud en España 2004. INJUVE.

Según el Informe *Juventud en España 2008*, en este año los embarazos no deseados se concentraban entre los 16 y los 21 años, mientras que en 2008 se concentran entre los 17 y los 22 años y además son muchos los que aparecen después de esta edad. Afirma el Informe que casi la mitad de los embarazos no deseados (el 49,5%) acaba en aborto, mientras que el 44,4% de las mujeres que han declarado haber tenido un embarazo no deseado indican que continuaron con el mismo. En todo caso en la cifra de abortos destacan los abortos espontáneos (16,9%). Conviene en todo caso resaltar que el porcentaje de abortos sobre embarazos no deseados parece seguir una curva ascendente, ya que en 1996 supuso un 33% de los embarazos no deseados, en el año 2000 fue del 31,3%, en el 2004 no se hizo esta pregunta y se estimó en un 36% y en el año 2008 ha alcanzado el 50%. Conviene aclarar que en los informes anteriores no se distinguía el tipo de aborto.







Abortos voluntarios, tasas por grupos de edad y periodo.  
Unidades: Número. Tasa por 1000 mujeres

Edad	1997	2007	1997	2007	1997	2007	1997	2007	1997	2007	1997	2007
15-19	5,62	6,30	6,62	7,14	7,65	8,45	8,77	9,94	9,90	10,82	11,48	
20-24	9,00	9,74	9,72	7,49	9,29	9,26	9,80	10,57	11,48	12,05	13,76	
25-29	6,13	6,13	10,26	11,88	12,66	14,37	15,31	16,31	16,85	18,57	20,65	
30-34	9,85	7,95	7,95	8,88	9,34	10,72	11,39	11,43	12,09	14,49	16,57	
35-39	5,87	5,99	6,37	6,60	7,46	8,10	8,25	9,57	9,97	10,12	11,07	
40-44	4,43	4,65	4,80	5,11	5,42	5,66	6,02	6,13	6,48	7,34	7,67	
45-49	2,27	2,35	2,34	2,35	2,47	2,72	2,89	2,88	2,97	3,08	3,25	

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo.

Según los datos del Ministerio de Sanidad y Política Social, la tasa de interrupción voluntaria del embarazo registrada en 2007 fue de 11,49% de mujeres, lo que supone un incremento de más del 100% en 10 años, si la comparamos con la habida en 1997.

Este incremento ha sido a expensas, fundamentalmente, de mujeres menores de 25 años, aunque, en estos años, las tasas de IVE se han incrementado en todos los grupos de edad, más del doble en la mayoría de los casos.

Según el informe *La interrupción voluntaria del embarazo y los métodos anticonceptivos en jóvenes*, del Ministerio de Sanidad y Política Social, realizado en 2007, el crecimiento de las IVE en las jóvenes menores de 24 años cabe asociarlo con un importante conjunto de transformaciones que han venido ocurriendo en España a lo largo de la última década:

- Cambios sociodemográficos con un fuerte crecimiento de la inmigración desde mediados de la década de 1980.
- Transformación en las condiciones de vida juvenil, con un fuerte crecimiento del trabajo asalariado en condiciones de temporalidad y un correlativo y significativo abandono de los estudios en importantes colectivos de lo que podríamos llamar clases medias y medias bajas.
- Afirmación progresiva de una sexualidad joven cada vez más temprana y generalizada. De una sexualidad que, parcialmente, incorpora las denominadas prácticas de riesgo en su propio desarrollo.
- Importante caída del esfuerzo institucional y educativo en el ámbito de la Educación para la Salud en el Sistema Educativo.

Tanto entre las jóvenes inmigrantes como entre las jóvenes españolas se observa un claro proceso de vulnerabilidad social y de fragilidad personal que se traduce en el desarrollo de un conjunto de prácticas de riesgo en relación con los embarazos no deseados y con las infecciones y enfermedades de transmisión sexual.

Según puede observarse en las estadísticas correspondientes publicadas por el Ministerio de Sanidad y Política Social, la mayoría de las IVE corresponden a jóvenes solteras asalariadas, en situación laboral precaria y con un cierto nivel escolar en su nivel de estudios.







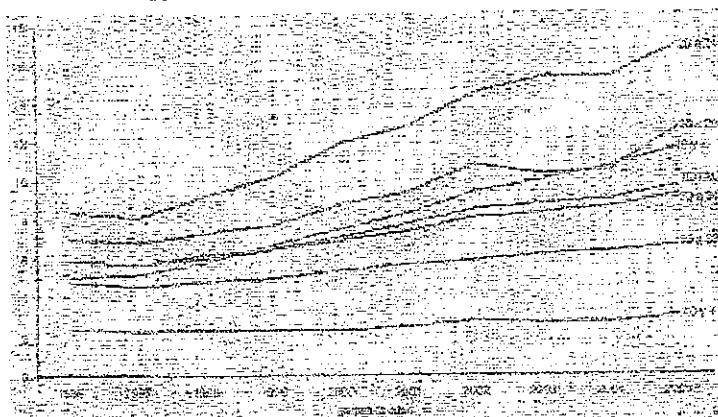
Abortos voluntarios realizados por semanas de gestación y periodo.

Unidades: Porcentaje

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1 <sup>er</sup> trimestre	34,01	34,00	34,56	35,33	34,29	32,68	33,52	34,13	32,09	32,23	32,34
2 <sup>do</sup> trimestre	26,85	26,63	26,93	26,58	26,65	26,94	26,83	26,50	26,74	26,71	26,51
3 <sup>er</sup> trimestre	3,86	4,04	4,50	4,47	5,25	5,38	5,57	5,28	5,34	5,14	5,20
4 <sup>to</sup> trimestre	2,89	2,80	3,20	3,30	3,68	3,53	3,93	3,60	4,05	3,97	3,88
Total	1,24	1,23	1,41	1,48	1,67	1,63	1,92	2,02	1,98	1,87	1,90

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo.

FIGURATA. TASAS DE IVE POR 1.000 MUJERES DE CADA GRUPO POR EDAD Y AÑO. PERÍODO 1990-2005.



Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Registro IVE 2004

TABLA 19. TASAS DE IVE POR 1.000 MUJERES DE CADA GRUPO POR EDAD Y AÑO. PERÍODO 2005.

	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	Total
1 <sup>er</sup> trimestre	34,01	34,00	34,56	35,33	34,29	32,68
2 <sup>do</sup> trimestre	26,85	26,63	26,93	26,58	26,65	26,94
3 <sup>er</sup> trimestre	3,86	4,04	4,50	4,47	5,25	5,38
4 <sup>to</sup> trimestre	2,89	2,80	3,20	3,30	3,68	3,53
Total	1,24	1,23	1,41	1,48	1,67	1,63

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Registro IVE.





En cuanto al motivo de la interrupción del embarazo es, en todo el período, la salud de la madre con un 96,93% en el 2007, siendo la diferencia poco importante ya que el 1997 supuso el 97,89 de los casos.

#### Interrupciones Voluntarias del Embarazo. Parte 3a (2007)

Abortos voluntarios realizados por motivo de la interrupción y período.

Unidades: Porcentaje

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Salud materna	97,79	97,33	97,22	97,16	97,15	96,91	96,88	96,70	96,60	96,08	96,93
Proyecto fetal	2,38	2,27	2,47	2,57	2,49	3,03	3,03	3,03	3,16	2,93	2,9*
Profesión	0,73	0,33	0,04	0,26	0,09	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
Varios motivos	0,22	0,25	0,19	0,14	0,22	0,13	0,26	0,22	0,15	0,18	0,15

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo.

En cuanto al estado civil, prevalecan las mujeres solteras

#### Abortos voluntarios realizados por estado civil y período.

Unidades: Porcentaje

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Varones	69,05	61,36	62,85	63,32	62,36	63,15	64,42	64,47	65,84	66,28	67,69
Mujeres	30,64	38,68	37,42	36,67	37,54	37,43	35,21	35,90	34,82	34,68	33,76
Estado civil	1,01	0,67	0,31	3,75	0,79	0,63	0,65	0,35	0,81	0,55	0,49
Profesión	2,14	2,13	2,13	2,15	2,04	2,29	2,57	2,52	2,46	2,97	3,10
Varios motivos	6,28	0,5*	6,38	6,14	6,24	5,97	5,60	5,66	5,52	5,00	4,92

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo.

## 4.2. Incidencia de la norma en los varones y en las mujeres

El Título preliminar, por ser clarificador y el Título I, como se aprecia por los datos estadísticos referidos la salud sexual y reproductiva, tendrá incidencia en varones y mujeres.

El título II y las disposiciones finales primera y segunda al tratar de la interrupción voluntaria del embarazo, si bien incide sobre ambos sexos, la incidencia sobre mujeres y hombres es radicalmente diferente, dado que los varones sobre los que incide la norma son exclusivamente los profesionales que intervienen en dicho acto médico.

## 4.3. Impacto previsible sobre la igualdad de mujeres y hombres

### 4.3.1. Título Preliminar. "PRINCIPIOS GENERALES"

Dedicado al objeto de la ley, a las definiciones, principios y ámbitos de actuación y a la garantía de la equidad, el impacto previsible que la norma va a tener en la igualdad de mujeres y hombres es positivo.



1121041



1121041

Las definiciones que establece el proyecto de ley recoge las recomendaciones y expresiones de Naciones Unidas, principalmente de la Organización Mundial de la Salud, que en 2001 ya afirmaba la necesidad de reconocer y respetar los derechos sexuales de las personas.

Las definiciones se refieren a la salud, la salud sexual y la salud reproductiva.

En la definición de salud sexual se hace mención a la violencia como uno de los elementos que alteran el estado de bienestar relacionado con la sexualidad.

El impacto de la definición en la igualdad será positivo.

En cuanto a la garantía de la equidad, se refiere a garantizar los derechos reconocidos en el proyecto en todo el territorio nacional, lo que tendrá un impacto positivo, evitando que las mujeres que decidan interrumpir su embarazo, lo puedan realizar en la Comunidad donde residen sin necesidad de desplazarse a otra. Se establece además por primera vez la obligación de la Alta Inspección del Estado de velar por la equidad en el acceso en las prestaciones y servicios reconocidos en la ley, lo que sin duda redundará en una garantía mayor del ejercicio de los derechos de las mujeres a su salud sexual y reproductiva.

#### 4.3.2. Título I: "DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA"

Dividido en cuatro capítulos, políticas públicas para la salud sexual y reproductiva, medidas en el ámbito sanitario, medidas en el ámbito educativo y Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, teniendo en cuenta los datos que se han ofrecido, el proyecto va a tener un impacto positivo en la igualdad.

#### • Capítulo I: "Políticas públicas" y Capítulo II "Medidas en el ámbito sanitario"

De acuerdo con los datos estadísticos es obvio que la información en salud sexual y salud reproductiva va a actuar sobre una vida sexual responsable, satisfactoria y segura que evitará los embarazos no deseados, disminuirá el número de interrupciones y de infecciones de transmisión sexual así como de VIH. Se recuerda que tanto en las ITS como en la infección por VIH, gran parte de los y las infectados no habían utilizado ninguna precaución.

La formación de los profesionales y de la población en general con enfoque de género es un mandato derivado del artículo 27 de la Ley de Igualdad.

Por tanto, el impacto previsible es positivo.

#### • Capítulo III: "Medidas en el ámbito educativo"

Es perfectamente aplicable lo dicho para los Capítulos I y II. Si bien la Ley de Educación incorpora como se ha visto en el marco normativo la educación



121041

LEGISLATURA  
IX



afectivo-sexual, ésta debe llevarse a cabo, en la práctica incidiendo, como bien dice el proyecto en la promoción de la igualdad.

Se recomienda incidir en la corresponsabilidad de los chicos que, como reflejan los datos sobre el uso de métodos anticonceptivos, todavía hoy, hacen responsables a las chicas de los embarazos.

Por tanto, el impacto previsible es positivo.

#### 4.3.3. Título II. "De la Interrupción Voluntaria del Embarazo"

Dada la diferente implicación de ambos sexos en el proceso reproductivo es imprescindible el diferente tratamiento legal para realidades tan distintas.

El Título II se divide en dos capítulos relativos a las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y de las garantías en el acceso a la prestación.

##### ♦ Capítulo I: "Condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo"

La interrupción voluntaria del embarazo se encuentra, actualmente, recogida en el artículo 417 bis) del antiguo Código Penal, declarado vigente por la disposición derogatoria única del Código Penal de 1995, que declaró la despenalización parcial del aborto en tres supuestos: peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada; que el embarazo sea consecuencia de una violación y que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas.

La propuesta de regulación que se realiza ahora, tiene en cuenta el avance del escenario social en estos más de veinticinco años, el avance en los derechos de las mujeres, y los derechos sexuales y reproductivos que han sido reconocidos por la comunidad internacional como derechos humanos en declaraciones, convenciones y pactos de las Naciones Unidas. Por eso se plantea una ley de salud sexual y reproductiva, e interrupción voluntaria del embarazo en la línea de las leyes más innovadoras de nuestro entorno, recogiendo además la demanda de las organizaciones de mujeres y teniendo en cuenta el derecho comparado.

La innovación más importante que establece el proyecto es el establecimiento de un plazo de 14 semanas durante las cuales no será necesario alegar ni riesgo para la salud psíquica o física de la embarazada, ni que el embarazo sea resultado de una violación.

A la vista de los datos estadísticos facilitados, el 96,93% de las IVEs practicadas durante 2007 se realizaron por riesgos de la salud de la madre y fueron efectuadas en un plazo menor a las 12 semanas.

Por todo ello el impacto de la norma será positivo para las mujeres





• Capítulo II Garantías en el acceso a la prestación

Al establecer la interrupción voluntaria del embarazo como una prestación sanitaria del Sistema Nacional de Salud y garantizar la equidad en el acceso, como ya propone el artículo 4 del anteproyecto, junto con la garantía de la protección de datos de carácter personal, este capítulo tendrá un impacto positivo.

4.3.4. DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

La Disposición Final Primera del anteproyecto de Ley reforma el artículo 145 del Código Penal y añade un nuevo artículo 145 bis.

El Artículo 145 vigente penaliza, tanto al profesional (apartado 1) como a la mujer embarazada que produjere su aborto o consintiere que otra persona se lo cause (apartado 2).

La propuesta del proyecto va dirigida a suavizar la pena impuesta a la mujer que pasaría de ser de prisión de seis meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses, a multa de seis a veinticuatro meses.

El impacto de esta medida será positivo sobre las mujeres dado la supresión de la pena de prisión para ellas.

El delito de aborto, tipificado en el 145.2 es un delito dirigido directamente y exclusivamente a penalizar a "las mujeres."

Desde hace años se viene llevando a cabo una revisión del lenguaje utilizado en los textos legales con el fin de evitar el sexismo en los mismos. Esta revisión ha consistido, principalmente, en "neutralizar el término".

Un ejemplo muy gráfico fue la reforma efectuada en el Código Penal entonces vigente, por la Ley Orgánica 3/1983, de 21 de junio, de actualización del Código Penal. Hasta ese momento, el delito de violación, era un delito específico de los varones, siendo las víctimas las mujeres.

El artículo 429 del Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, por el que se publica el texto refundido del Código Penal establecía: *Se comete violación yaciendo con una mujer.* Por lo tanto, el sujeto activo de la violación tenía que ser un varón y la ofendida, una mujer.

A partir de la reforma operada por la Ley Orgánica 3/1983, de 21 de junio, comete violación "el que tuviere acceso carnal con otra persona..." por lo tanto, desde ese momento, el sujeto activo y pasivo de la violación puede ser tanto el hombre como la mujer, dejando de ser el delito, un delito específico a cometer por los varones.

Bajo el título de las personas criminalmente responsables de los delitos y faltas el artículo 28 del Código Penal vigente establece que: *Son autores....los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo.*





**INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE TRANSPONEN DETERMINADAS DIRECTIVAS EN EL ÁMBITO DE LA IMPOSICIÓN INDIRECTA Y SE MODIFICA LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES PARA ADAPTARLA A LA NORMATIVA COMUNITARIA.**

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, los proyectos de ley deben acompañarse de un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establezcan en ellos.

Este Proyecto de Ley contiene modificaciones en la normativa legal reguladora de los Impuestos Especiales, sobre el Valor Añadido, sobre el Impuesto General Indirecto Canario y sobre la Renta de no Residentes.

Las repercusiones que por razón de género pueden derivarse de modificaciones en algunos de los citados tributos han sido objeto de estudio, pudiendo destacarse, siguiendo a Janet G. Stotsky<sup>1</sup>, las siguientes consideraciones:

En la imposición indirecta, tal es el caso del Impuesto sobre el Valor Añadido, del Impuesto General Indirecto Canario y de los Impuestos Especiales, no suele advertirse "un sesgo explícito en razón del género. El impuesto que debe pagarse es impersonal, dado que se origina en la compra o producción de un producto. Si bien sería posible introducir ese sesgo estableciendo un impuesto basado en la compra de un bien solo cuando lo compre una mujer (o un hombre), en la práctica no parece existir tal discriminación".

En el caso del Impuesto sobre el Valor Añadido existen algunas maneras en las que podría manifestarse un sesgo implícito, tal es el caso de la existencia de patrones diferenciales de consumo de determinados bienes, por ejemplo los artículos de primera necesidad, por parte de hombres y mujeres, aunque Stotsky señala que "el carácter exacto de estos sesgos implícitos es difícil de establecer".

También sería difícil de determinar la aludida falta de neutralidad en el supuesto de que el tratamiento preferencial en el Impuesto sobre el Valor Añadido se refiriera a determinados consumidores o productores.

Al igual que sucede con el Impuesto sobre el Valor Añadido, los Impuestos Especiales "por lo general no contienen un sesgo explícito en función del género. Los impuestos especiales suelen tener un sesgo implícito más evidente que los impuestos sobre el consumo de base amplia. Por ejemplo, los impuestos sobre consumos específicos comúnmente gravan el alcohol y el tabaco a tipos elevados, productos que, en un porcentaje desproporcionado, son consumidos por los hombres. Por lo tanto, como en el caso de los impuestos de base amplia sobre los productos, podría considerarse que los impuestos especiales tienen un sesgo implícito contrario a los hombres. No obstante, en el contexto del presupuesto del hogar, estos impuestos también

<sup>1</sup> "Sesgos de género en los sistemas tributarios", trabajo publicado en el libro "Política fiscal y género" (páginas 41 a 62), editado por el Instituto de Estudios Fiscales (2005).

121043

provocarían un cambio en el consumo de otros bienes, lo cual podría tender a reducir el sesgo contrario a los hombres”.

Respecto del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, si bien la naturaleza directa de este tributo podría originar una mayor repercusión a estos efectos, dado lo específico de las modificaciones que se incorporan al mismo no resulta impacto de género alguno.

En consecuencia, cabe concluir que el impacto de este Proyecto de Ley es nulo por razón de género.

Madrid, 24 de septiembre de 2009.





PROYECTO DE LEY  
ORGÁNICA DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

Mediante el presente Proyecto de Ley Orgánica se pretende dotar al Cuerpo Nacional de Policía de un nuevo régimen disciplinario plenamente adaptado a los tiempos actuales y concordante tanto con el régimen disciplinario de otras Fuerzas de Seguridad del Estado (Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil), como con el régimen disciplinario general de los funcionarios públicos establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Con carácter especial, y desde el punto de vista de la prevención de comportamientos y actitudes discriminatorios por razón de sexo entre los funcionarios y funcionarias del Cuerpo Nacional de Policía, en el Proyecto de Ley Orgánica, en concreto en el párrafo n) del artículo 7, se tipifican dos nuevas faltas disciplinarias que tendrán la consideración de falta muy grave:

- toda actuación que suponga discriminación por razón de sexo u orientación sexual
- y el acoso sexual o por razón de la orientación sexual.

Asimismo, como complemento de esas conductas explícitamente discriminatorias por razón de género, en el párrafo fi) del artículo 7 se ha tipificado como falta disciplinaria muy grave el acoso psicológico en el marco de una relación laboral, por tratarse de una conducta ilícita de la que podría derivarse implícitamente la voluntad discriminatoria del infractor.

La tipificación de estas nuevas faltas disciplinarias es plenamente coherente con el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de nuestra Constitución, con el respeto a nuestra Carta Magna que constituye un principio básico de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (párrafo a) del apartado 1 del artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo,

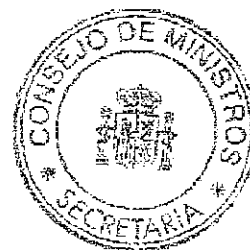




de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), y con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Por lo tanto, no cabe sino valorar positivamente el impacto que, por razón de género, implicaría la aprobación del presente Proyecto de Ley Orgánica.

Lo cual se participa de acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 22 de la Ley 50/1987, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada al mismo por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.





MINISTERIO  
DE LA PRESIDENCIA



SUSCRITO EN  
SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

## INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY GENERAL DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

El artículo 15 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, dispone que el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los poderes públicos.

En este sentido, este anteproyecto de Ley incluye como normativa básica para la comunicación audiovisual un capítulo sobre los derechos del público. Entre estos derechos se prevé en el artículo 3 que la comunicación audiovisual nunca podrá incitar al odio o a la discriminación por cualquier circunstancia personal o social y debe ser respetuosa con la dignidad humana y los valores constitucionales.

Por otro lado, la citada Ley 3/2007, impone a los medios de comunicación social de titularidad pública, en su artículo 36, la obligación de velar por la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, así como de promover el conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres. Según su artículo 39, los medios de comunicación social de titularidad privada se someten igualmente a la obligación de respetar la igualdad entre mujeres y hombres, evitando cualquier forma de discriminación, debiendo las administraciones públicas promover la adopción por ellos de acuerdos de autorregulación en este sentido, incluyendo las actividades de venta y publicidad que desarrollan.

En desarrollo de estas previsiones, el artículo 17 del anteproyecto dispone la prohibición de toda comunicación comercial que vulnere la dignidad humana o fomente la discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, nacionalidad, religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual.

Por otro lado, el servicio público de comunicación audiovisual, previsto en el artículo 39, es un servicio esencial para la comunidad que tiene como función principal difundir contenidos que fomenten los principios y valores constitucionales, contribuyendo a la formación de una opinión pública plural. Entre dichos valores ha de figurar necesariamente el respeto a la figura de la mujer y la educación de cara a la evitación de cualquier conducta que pueda conducir al menoscabo o maltrato por razón del género.

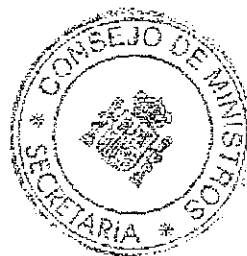
Desde una perspectiva institucional, en el artículo 44 se establecen los fines del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, como autoridad independiente



supervisora y reguladora del mercado audiovisual estatal, que tiene entre otros objetivos el de velar por la plena eficacia de los derechos u obligaciones establecidos en esta ley y a los que nos hemos referido anteriormente. Es por tanto tarea de dicho organismo el velar por que los contenidos que se emitan por los prestadores del servicio de comunicación audiovisual respeten dichos derechos, entre los que se encuentra prioritariamente, como se ha dicho, el de no discriminación por razón de sexo.

Además, y como garantía a dichas prevenciones, se establece el máximo nivel sancionador para aquellas conductas que puedan atentar contra la discriminación por razón de sexo, tipificándose en el artículo 55 como infracción muy grave la emisión de contenidos que de forma manifiesta fomenten el odio, el desprecio o la discriminación por motivo de sexo.

Por todas estas razones es evidente que la valoración del impacto por razón de género de esta norma ha de ser positiva, y que las medidas contempladas en ella han de producir efectos tanto directos como indirectos en materia de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres.



LEGISLATIVO

IX

121046

INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 19/1988, DE 12 DE JULIO DE AUDITORIA DE CUENTAS, LA LEY 24/1988, DE 28 DE JULIO, DE MERCADO DE VALORES Y EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES ANÓNIMAS APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1564/1989, DE 22 DE DICIEMBRE PARA SU ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA COMUNITARIA

20 de octubre de 2009



1927045

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, los anteproyectos de Ley deben ser acompañados de un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establezcan en el mismo.

El anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Auditoría de Cuentas y otros textos legales atiende a la universalidad del resultado, afectando por igual a mujeres y hombres, pues las obligaciones y derechos que se contienen esta norma para ambos son equivalentes.

A continuación se analiza la situación de participación de mujeres y hombres en el sector de la actividad de auditoría de cuentas y los resultados que cabe esperar de la aplicación del anteproyecto, así como su valoración.

#### A. SITUACIÓN ACTUAL EN LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA DE CUENTAS.

De acuerdo con la información obrante en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas un 13% de los auditores de cuentas ejercientes inscritos en el Registro Oficial de Auditores (ROAC, en adelante) son mujeres, elevándose el porcentaje de auditoras de cuentas socias de sociedades de auditoría al 15% del total de socios.

En el siguiente cuadro se proporciona información adicional respecto de la distribución por género de los auditores de cuentas inscritos en el ROAC.

NUMERO Y PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE HOMBRES Y MUJERES INSCRITOS EN EL REGISTRO OFICIAL DE AUDITORES DE CUENTAS					
SITUACION	TOTAL	% sobre total	HOMBRE	% sobre total	MUJER
Ejerciente	2.935	87	2.559	13	376
Socio ejerciente	1.770	85	1.509	15	261
Cuenta ajena	1.000	56	562	44	438
No ejerciente	13.720	75	10.351	25	3.369
	19.425	77	14.981	23	4.444

#### B. EFECTOS DEL ANTEPROYECTO.

Con este Anteproyecto no resultan afectadas las normas de acceso a la actividad, salvo en lo referido a quienes son auditores de cuentas de Estados miembros de la Unión Europea.



de terceros países, sin que en este punto se impongan especiales ni diferentes requisitos por razón de género.

Si resultan modificadas, por otra parte, las normas que regulan los requisitos de autorización de las sociedades de auditoría, para los cuales no se impone condición alguna específica o diferencia por razón de género.

El Anteproyecto no contiene barreras a la eliminación de desigualdades, ofreciendo el mismo grado de igualdad de oportunidades para el acceso a la actividad de auditoría. En este sentido, el Anteproyecto no presenta obstáculos que dificulten la incorporación de mujeres a las sociedades de auditoría y contribuye al desarrollo del objeto de igualdad de oportunidad en la promoción de las mujeres dentro de las sociedades de auditoría.

#### C. VALORACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO

En relación con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, el Gobierno, según la redacción introducida por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, para la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno (BOE de 14 de octubre), es preciso señalar que, dada la naturaleza del Anteproyecto, el mismo no es susceptible de producir un desigual impacto en relación a la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, ni aun de forma mediata; razón por la cual, ha de concluirse que el impacto del Anteproyecto es nulo por razón de género.





N 21047

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

PROYECTO DE LEY DE CAPTACIÓN DE FINANCIACIÓN EN LOS  
MERCADOS POR LOS CONCESIONARIOS DE OBRAS PÚBLICAS

## INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO

De conformidad con el apartado 2 del artículo 22 de la Ley 50/1997, del Gobierno, en la modificación realizada por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, procede informe sobre tales aspectos en relación con el anteproyecto de Ley de de captación de financiación en los mercados por los concesionarios de obras públicas.

Las disposiciones que contiene el presente anteproyecto carecen de impacto por razón de género dado su carácter puramente instrumental.

6-octubre-2009





MINISTERIO DEL INTERIOR

LEGISLATURA

IX

121048

PROYECTO DE LEY SOBRE LA SIMPLIFICACIÓN DEL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN E  
INTELIGENCIA ENTRE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LOS ESTADOS MIEMBROS  
DE LA UNIÓN EUROPEA.

INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO

Tras el estudio del posible impacto de género de las disposiciones contenidas en la presente Ley, se ha llegado a la conclusión de que del mismo no se deriva ningún tipo de discriminación por razón de sexo. Lo que se informa a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el apartado segundo del artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada al mismo por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.







MINISTERIO  
DE LA PRESIDENCIA

121049

121/45

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA REGISTRO GENERAL	
31 JUL. 2009	
ENTRADA	SALIDA
Núm. _____	Núm. 13549

LEGISLATURA  
IX

En cumplimiento del Acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros, en su reunión del día 31 de julio de 2009, tengo el honor de remitir a V.E., en nombre del Gobierno, el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso por la comisión de infracciones penales, acompañado de la siguiente documentación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Constitución:

- Memoria justificativa.
- Memoria económica.
- Informe sobre el impacto por razón de género.
- Dictamen del Consejo de Estado.
- Informe del Consejo General del Poder Judicial.
- Informe de la Fiscalía General del Estado.

Madrid, 31 de julio de 2009

LA VICEPRESIDENTA PRIMERA Y  
MINISTRA DE LA PRESIDENCIA,

121049

LEGISLATURA  
IX



María Teresa Fernández de la Vega Sanz

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.



LEGISLATURA  
IX

**PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, Y COMPLEMENTARIA A LA LEY PARA LA EJECUCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA DE RESOLUCIONES JUDICIALES DE DECOMISO POR LA COMISIÓN DE INFRACCIONES PENALES**

**MEMORIA JUSTIFICATIVA**

I. La Decisión Marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso tiene por objeto permitir una ejecución prácticamente automática en un Estado miembro de las resoluciones de decomiso impuestas con carácter firme por las autoridades competentes de otro Estado miembro como consecuencia de la comisión de infracciones penales.

El Anteproyecto para la incorporación de esta Decisión marco a nuestro ordenamiento jurídico, regula, entre otras cuestiones, la autoridad judicial española que va a reconocer y ejecutar tales resoluciones cuando provengan de una autoridad judicial o administrativa de otro Estado miembro.

Y en tal sentido, el capítulo I del Anteproyecto, dedicado a las disposiciones generales, recoge como autoridad judicial competente en España para ejecutar una resolución de decomiso los Jueces de lo Penal donde se encuentren los bienes que son objeto de esa resolución.

II. Esta previsión hace imprescindible la reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en orden a la enumeración de las atribuciones de estos órganos jurisdiccionales.





121549

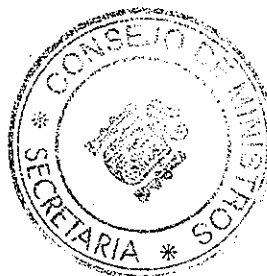
A tal fin, los arts. 276 y 277 de la LOPJ, relativos a la cooperación judicial internacional, no se consideran suficientes. Esos preceptos no son acordes con nuestro propósito, porque aluden a una cooperación de acuerdo con tratados y convenios internacionales, categorías de las que no participa el instrumento de la Decisión marco, o con la reciprocidad, criterio que no se aplica a los instrumentos europeos basados en el reconocimiento mutuo y la confianza recíproca entre los Estados.

Además, estos preceptos de la LOPJ, prevén un sistema de auxilio judicial y cooperación por conducto del Tribunal Supremo al Ministerio de Justicia, un sistema de intermediación que no se adapta en absoluto al sistema del reconocimiento mutuo entre autoridades judiciales que prevén las Decisiones marco, que optan por la cooperación judicial directa entre órganos jurisdiccionales.

III. Con el fin expuesto se modifica el artículo 89 bis de la LOPJ, precepto al que se añade un nuevo apartado 4, que para los Juzgados de lo Penal establece lo siguiente:

«4. Corresponde a los Juzgados de lo Penal el reconocimiento y ejecución de las resoluciones de decomiso transmitidas por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, cuando las mismas deban cumplirse en territorio español.»

V. Este Anteproyecto de Ley Orgánica acompañará en su tramitación al Anteproyecto de Ley citado, sometiéndose junto con él a los dictámenes del Consejo General del Poder Judicial, del Ministerio Fiscal y del Consejo de Estado, requiriendo para su aprobación definitiva por las Cortes Generales, como ordena el art. 81.2 de la Constitución, la aprobación por mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.





MINISTERIO  
DE JUSTICIA

LEGISLATURA  
IX

SUBSECRETARÍA

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

121049

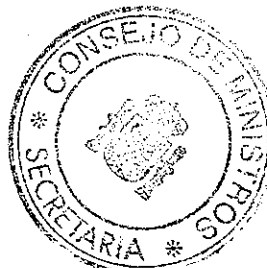
**PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, Y COMPLEMENTARIA A LA LEY PARA LA EJECUCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA DE RESOLUCIONES JUDICIALES DE DECOMISO POR LA COMISIÓN DE INFRACCIONES PENALES.**

### **MEMORIA ECONÓMICA**

La incorporación al Derecho español de la Decisión Marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso, tiene por objeto permitir una ejecución prácticamente automática en un Estado miembro de las resoluciones de decomiso firmes impuestas por las autoridades competentes de otro Estado miembro como consecuencia de la comisión de infracciones penales.

La ley que incorpora dicha Decisión marco atribuye competencia para la ejecución en España de las sanciones pecuniarias impuestas por las autoridades competentes de los demás Estados miembros a los Juzgados de lo Penal, al tiempo que reconoce la competencia genérica de éstos y también de los Juzgados de Instrucción.

La aprobación de esta Ley Orgánica complementaria no conlleva aumento del gasto público ni disminución de los ingresos públicos.



SAN BERNARDO, 62  
28015 MADRID  
TEL: 91 390 45 22  
FAX: 91 390 22 32



**INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY DE REFORMA DEL SISTEMA DE APOYO FINANCIERO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA ESPAÑOLA.**

Seguendo lo previsto en la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, cabe destacar que la aprobación de la Ley de Reforma del Sistema de Apoyo Financiero a la Internacionalización no tendrá impacto de género.

121050

LEGISLATURA

IX



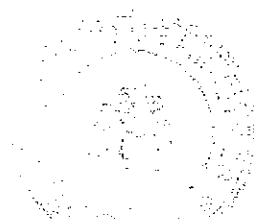
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES  
Y DE COOPERACIÓN

INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL  
PROYECTO DE LEY DEL FONDO PARA LA PROMOCIÓN DEL  
DESARROLLO.

En la Exposición de Motivos se definen los ejes de la reforma que acomete esta Ley, creando el Fondo para la Promoción del Desarrollo para "integrar plenamente el FONPRODE en nuestra cooperación, en los alineamientos de los correspondientes Planes Directores de la Cooperación Española y de los Planes Anuales de Cooperación Internacional, así como en el resto de documentos de nuestra cooperación, contribuyendo así, plenamente, al objetivo de coherencia de nuestra política de cooperación internacional para el desarrollo". Igualmente se establece la financiación de programas vinculados al cumplimiento de las prioridades sectoriales y horizontales de la cooperación española, con un enfoque transversal de respeto a la igualdad de género, a los derechos humanos, a la diversidad y el medio ambiente.

El Artículo 2. a) Podrán financiarse con cargo al FONPRODE proyectos de desarrollo social básico para la cobertura de las necesidades básicas de la población más desfavorecida de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, incluidos "...proyectos de género...". "Los sectores o líneas estratégicas específicas en las que se enmarquen las intervenciones se corresponderán, igualmente, con las prioridades especificadas en el Plan Director de la Cooperación Española, y en las estrategias sectoriales". El Plan Director de la Cooperación española desarrolla detalladamente, entre las estrategias sectoriales, la estrategia de género, por lo que queda perfectamente identificado el mecanismo de aplicación en materia de programas de género que han de ejecutarse en el marco de la financiación con cargo al FONPRODE.

Teniendo en cuenta que esta Ley define, entre sus prioridades, la financiación de programas de igualdad de género, que se establece en el articulado de la Ley, así como la estrategia sectorial de género que conlleva el Plan Director de la Cooperación Española, al amparo del cual se desarrollará su ejecución, se emite Informe de Impacto de Género Positivo.





121052

**PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE  
23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL**

**INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO**

De conformidad con el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, introducido por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, los Proyectos de Ley deberán ir acompañados de un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establecen en el mismo.

Al respecto es necesario poner de manifiesto que a través del Proyecto de reforma del Código penal, actualmente en trámite, se procede a reforzar la protección penal de mujeres y niños. Esta circunstancia se evidencia a través de numerosas medidas que se señalan a continuación.

Si bien es cierto que sujeto pasivo de delitos contra la libertad e indemnidad sexual puede serlo tanto el hombre como la mujer, resulta indudable que será la mujer la afectada en mayor medida por este tipo de conductas. Por tanto, el aumento de penas y la tipificación de nuevas conductas que atentan contra la libertad e indemnidad sexual, a las que se procede con esta reforma, inciden de forma directa en una mayor protección de la mujer a través del Código penal. Esta situación se repite con la tipificación expresa del delito de trata de seres humanos.

También es necesario destacar la especial protección penal dispensada a mujeres y niñas a partir de las modificaciones realizadas en los delitos que se cometan durante conflictos armados, ya que se castigará expresamente a quienes atenten contra la libertad sexual de una persona protegida cometiendo actos de violación, esclavitud sexual, prostitución inducida o forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra



forma de agresión sexual y, a aquellos que recluten o alisten a menores de 18 años o los utilicen para participar directamente en dichos conflictos.

Debe destacarse también que la incriminación de la conducta del cliente de la prostitución de los menores de edad redundará en una mayor protección de las jóvenes y las mujeres menores de edad, dado que es mucho mayor el porcentaje de población femenina, respecto de la masculina, que es víctima de las redes de explotación sexual.

En conclusión, la norma proyectada tiene un impacto positivo puesto que va a contribuir a una mayor protección de las mujeres y las niñas.

LEGISLATURA

IX

1721052





121/53

**PROYECTO DE LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITAL Y**  
**DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO**

**INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO**

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 24.1b de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada por el artículo segundo de la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, debe señalarse que en ninguno de los preceptos de este Proyecto de Ley, ni en el fondo ni en la forma, se establecen medidas o reconocen derechos u obligaciones que puedan suponer discriminación alguna por razón de sexo.

Por ello, se considera que este Proyecto de Ley carece de impacto por razón de género.

121053

LEGISLATURA

IX





MINISTERIO  
DE FOMENTO

LEGISLATURA

IX

1121054

## INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO

proyecto de ley por el que se modifica la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea

El presente Informe de Impacto por razón de género se emite para dar cumplimiento al mandato establecido en el artículo 24, apartado 1.b) de la Ley 50/1997, del Gobierno, en su redacción dada por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.

En este sentido la entrada en vigor del Anteproyecto de Ley de que se trata no produce ningún impacto por razón de género.





121/55

**INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL  
PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECE UN SISTEMA  
ESPECÍFICO DE PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD DEL  
TRABAJADOR AUTÓNOMO**

El Estatuto del Trabajo Autónomo aprobado por la Ley 20/2007, de 11 de julio no estableció medidas concretas e inmediatas relativas al impacto de género. No obstante, en dicha norma existe la presencia de disposiciones tendentes a lograr una igualdad efectiva entre sexos.

En concreto, en el desarrollo de la disposición adicional cuarta, cabe señalar las siguientes:

a) El artículo 5 recoge en su letra d) establece el cese temporal o definitivo de la actividad de la trabajadora autónoma por causa de violencia de género como una presunción *iuris te de iure* al acceso de ésta a la condición de situación legal de cese de actividad, que por lo tanto actúa en este supuesto de forma automática.

b) En coherencia con el apartado anterior, el artículo 6.1, letra d) recoge unos mecanismos de acreditación de la situación legal de cese de actividad de la trabajadora autónoma por causa de violencia de género, que anticipa el acceso a dicha situación, y por lo tanto a la protección por cese de actividad al momento de acreditar la declaración escrita de la trabajadora autónoma de haber cesado o interrumpido su actividad económica o profesional aportando la orden de protección o el informe del Ministerio fiscal que incluya los indicios sobre su condición de víctima de la violencia de género. Asimismo se hace referencia a la especificidad de acreditación para el caso de la trabajadora autónoma económicamente dependiente.

La intención de la norma es adaptar el texto normativo a la realidad social a la que ha de aplicarse, con adaptación a las necesidades que demanda, y que en los últimos tiempos se vienen amparando en la normativa de protección a las víctimas de la violencia de género.

El impacto de las disposiciones señaladas va a ser positivo en la tendencia al logro efectivo de la igualdad entre sexos, puesto que las mismas facilitan la posibilidad a la trabajadora autónoma de poder acceder a la protección por cese de actividad.

22 de diciembre de 2009

121055

LEGISLATURA

IX



121/56

## INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO DE LEY SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN ESPAÑA

Este anteproyecto de ley no contiene disposiciones en relación con el género, teniendo una naturaleza puramente organizativa, y por consiguiente carece de impacto alguno en este sentido.

Ahora bien, aunque no tiene impacto directo por razón de género, este anteproyecto puede colaborar a prevenir y evitar acciones, y sus consecuencias, que tengan impacto por razón de género, ya que promoverá y facilitará la disponibilidad y acceso a información georreferenciada necesaria para gestionar el tipo de situaciones y acciones que pueden incidir en la mejora de la protección y seguridad de quienes puedan necesitarlo (por ejemplo, por razón de género); también puede servir de base para la implantación de servicios que faciliten la gestión e información tanto preventiva como correctiva de asuntos de indudable interés social.

Lo que se informa a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.

121056

LEGISLATURA  
IX



PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 1/2005, DE 9 DE MARZO, POR LA QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DEL COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, PARA PERFECCIONAR Y AMPLIAR EL RÉGIMEN GENERAL DE COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN E INCLUIR LA AVIACIÓN EN EL MISMO.

## INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO



De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1 b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, modificado por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, este Anteproyecto de Ley no comporta, ni en el fondo ni en la forma, impacto de género alguno.

121057

LEGISLATURA

IX

**MEMORIA DE IMPACTO NORMATIVO: CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO****Contenido**

Para alcanzar los objetivos expuestos anteriormente, resulta necesaria y urgente la adopción de las medidas imprescindibles que posibiliten, por un lado, la apertura de la prestación de servicios de navegación aérea a nuevos proveedores certificados y, por otro, la modificación transitoria de ciertas condiciones laborales de los controladores de AENA para garantizar que dicha Entidad, en tanto continúe siendo el proveedor único de servicios, sea capaz de prestarlos de forma segura, eficaz, continuada y sostenible, en todo su ámbito de competencia

La Estructura del Proyecto de Real Decreto se adecúa a las dos líneas de actuación descritas estructurándose en

- Cuatro artículos
- Tres disposiciones adicionales
- Dos Disposiciones Transitorias
- Una Disposición Derogatoria
- Cuatro Disposiciones Finales.



El primer bloque de medidas se aborda con carácter general a través del articulado, previendo la apertura a nuevos proveedores certificados de servicios de navegación aérea, e introduciendo un conjunto de disposiciones reguladoras de aspectos esenciales de la prestación de estos servicios aplicables al sector en su conjunto

Así, en primer lugar, se declara la competencia del Ministerio de Fomento para la designación de los nuevos proveedores de servicios, siempre que se encuentren debidamente certificados por una Autoridad Nacional de Supervisión de un Estado Miembro de la Unión Europea. En el supuesto concreto de los servicios de tránsito aéreo de aeródromo, la designación se efectuará a solicitud del gestor aeroportuario, que la cursará con plena

## MEMORIA DE IMPACTO NORMATIVO: INFORME SOBRE IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO

El impacto por razón de género del proyecto de Real Decreto Ley 1/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, se establecen las obligaciones de los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo, es nulo, puesto que no existen desigualdades de partida en relación con la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, y no se prevé ninguna modificación de dicha situación.

Madrid, 4 de febrero de 2010

LEGISLATURA  
IX

121058

121058



121/59



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y  
MEDIO RURAL Y MARINO

SECRETARÍA GENERAL DEL MAR

MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO

ANTEPROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO

121059

LEGISLATURA  
IX



121059

Plaza San Juan de la Cruz s/n  
28071 Madrid







**MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y  
MEDIO RURAL Y MARINO**

LEGISLATURA

IX



121056

121056

**1. RESUMEN EJECUTIVO**

Ministerio/Órgano proponente	Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino	Fecha: 25/02/2010
Título de la norma	Ley de Protección del Medio Marino	
Tipo de memoria	Normal	
OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA		
Situación que se regula	Se transpone la Directiva 2008/56/CE, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina), y se incorporan medidas adicionales de protección del medio marino previamente no reguladas, para proporcionar un marco general para la planificación y protección del medio marino.	
Objetivos que se persiguen	Lograr el buen estado ambiental del medio marino	
Principales alternativas consideradas	1. Transposición a través de la modificación de normas existentes 2. Transposición a través de una ley completa para transponer exhaustivamente e incorporar cuestiones adicionales de protección del medio marino	
CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO		
Tipo de norma	Ley, transposición de Directiva europea	
Estructura de la norma	Título I. Disposiciones generales Título II. Estrategias marinas Título III. Red de Áreas Marinas Protegidas y conservación de especies y hábitats marinos Título IV. Vertidos en el mar Título V. Infracciones y sanciones Disposiciones adicionales y finales Anexos: I. Listas indicativas de características, presiones e impactos II. Descriptores cualitativos para determinar el buen estado ambiental III. Lista indicativa de las características que deben tenerse en cuenta para la fijación de objetivos ambientales IV. Programas de seguimiento V. Programas de medidas: tipos de medidas	
Informes recabados		

**LEGISLATURA**

41 2 1 0 5 9



<b>Trámite de audiencia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 31 de julio-10 de septiembre de 2009: Periodo de participación pública en la Web del MARM</li> <li>• 12 de noviembre de 2009: Presentación del Anteproyecto ante la Conferencia Sectorial del Medio Ambiente</li> <li>• Diciembre de 2009: remisión oficial del Anteproyecto a las CCAA para observaciones y comentarios</li> <li>• 10 de diciembre de 2009: Presentación del Anteproyecto ante el Consejo Asesor de Medio Ambiente</li> <li>• 14 de enero de 2010: Presentación del Anteproyecto al Grupo de Gestión del Litoral del CAMA</li> </ul>	
<b>ANÁLISIS DE IMPACTOS</b>		
<b>ADECUACIÓN AL ORDEN DE COMPETENCIAS</b>	La norma se dicta al amparo del artículo 149.1.23ª de la CE que establece la competencia del Estado sobre legislación básica sobre protección del medio ambiente	
<b>IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO</b>	<b>Efectos sobre la economía en general</b>	La aprobación de la presente ley no supone un impacto económico directo en las actividades económicas que tienen lugar en el medio marino, en tanto en cuanto se regula la elaboración y contenido de un instrumento de planificación que ha de asegurar la viabilidad económica de todas estas actividades. Cuando dichos instrumentos se adopten, en su caso, los programas de medidas contribuirán a la armonización de todos los usos que en el mar se desarrollan y al cumplimiento de los objetivos de calidad ambiental marcados por la Directiva marco sobre la estrategia marina. La posible adecuación del ejercicio de las actividades humanas en el mar que se contemple en los programas de medidas no implica un impacto económico sobre estas actividades, dado que en general la planificación permite que se desarrollen las actividades de un modo más racional y ordenado, salvaguardando a su vez la protección del medio marino, de manera que se queden garantizados tanto los usos presentes como los futuros.
	<b>En relación con la</b>	No tiene efectos significativos sobre la competencia



**MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y  
MEDIO RURAL Y MARINO**

121355



	<b>competencia</b>	
	<b>Desde el punto de vista de las cargas administrativas</b>	No afecta a las cargas administrativas
	<b>Desde el punto de vista de los presupuestos</b>	El impacto presupuestario puede ser asumido sin necesidad de modificaciones presupuestarias. No tiene costes de personal.
<b>IMPACTO DE GÉNERO</b>	Carece de impacto por razón de género	
<b>OTROS IMPACTOS CONSIDERADOS</b>		
<b>OTRAS CONSIDERACIONES</b>		

**LEGISLATURA**

**IX**



Una pérdida de calidad de los recursos marinos implicaría una pérdida del valor de su explotación y la puesta en riesgo de su capacidad para prestar bienes y servicios ambientales tan importantes como el suministro de recursos alimenticios o la regulación del clima. En definitiva esta ley supone el instrumento marco para asegurar un buen estado ambiental del medio marino, de modo que se garantice su buen funcionamiento y un uso sostenible de sus recursos naturales y económicos, que permita el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales que el mar viene prestando al hombre desde el origen de los tiempos.

#### **4. 4. IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO**

El anteproyecto de Ley de Protección del Medio Marino carece de impacto por razón de género.

LEGISLATURA  
IX

121/67

MEMORIA ABREVIADA DEL ANALISIS DE IMPACTO NORMATIVO DEL  
PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROGRAMA  
ESTATAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL PARA LA AVIACION CIVIL Y  
SE MODIFICA LA LEY 21/2003, DE 7 DE JULIO, DE SEGURIDAD AÉREA.

RESUMEN EJECUTIVO

Ministerio/Órgano proponente.	MINISTERIO DE FOMENTO	Fecha	18.03.2010
Título de la norma.	Anteproyecto de Ley por la que se establece el Programa Estatal de Seguridad Operacional y se modifica la Ley 21/2003, de 7 de julio, de seguridad aérea.		
Tipo de Memoria.	Normal <input type="checkbox"/> Abreviada <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA</b>			
Situación que se regula.	Sistema de gestión de seguridad operacional en materia de aviación civil, investigación técnica de accidentes e incidentes de aviación civil e inspección aeronáutica.		
Objetivos que se persiguen.	Reforzar aquéllos instrumentos que, desde enfoques preventivos, permiten seguir avanzando en la mejora de la seguridad, y fortalecer las capacidades de la autoridad nacional de supervisión, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, para mejorar la inspección y, también con ello, la prevención.		

121062

LEGISLATURA

IX



**Principales alternativas consideradas.**

Únicamente caben alternativas en materia de gestión de seguridad operacional, la autorregulación o corregulación, juzgándose insuficiente para la consecución de los objetivos previstos.

La supervisión de la Agencia y, por tanto, la necesidad de dotarla de instrumentos que la posibiliten no sólo es necesaria, sino que viene impuesta por la normativa comunitaria e internacional.

En el proyecto se opta por reforzar su capacidad directa de inspección, contemplando la creación de tres especialidades propias en determinadas escalas de funcionarios dependientes del Ministerio de Fomento y estableciendo como medio preferente de selección de personal el sistema de concurso oposición con el objetivo de que pueda tenerse en cuenta la experiencia profesional previa, y facilitar el recurso a las entidades colaboradoras al establecer que éstas puede también certificar y supervisar a los sujetos aeronáuticos, pero limitándolo a los ámbitos en que no resulta de aplicación la normativa comunitaria.

Conforme a la normativa comunitaria se limita, en una parte significativa del ámbito aeronáutico, la posibilidad de que las entidades colaboradoras –los organismos cualificados, en términos comunitarios-, puedan emitir certificados en el ejercicio de sus funciones.

**CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO**

**Tipo de norma.**

Ley modificativa.

LEGISLATURA

IX

1427152



## Estructura de la Norma

Se estructura en un único artículo que modifica, el título II de la Ley de Seguridad Aérea, estructurándolo en tres capítulos. En el primero se integran los nuevos artículos 10 bis y ter, en el capítulo II se integran los artículos 11 a 18, de los cuales se modifican los artículos 14, 16 y 17, manteniéndose inalterados el resto y en el capítulo III se integran los artículos 19, al que se da nueva redacción, y el nuevo artículo 19 bis.

Igualmente se modifica el artículo 25.2, al que se añade una nueva letra d) y se da nueva redacción a sus apartados 3 y 4; el artículo 26; el artículo 32, al que se adicionan dos nuevos apartados, el 14ª y 15ª, y el artículo 50.2.3ª.

Se completa la norma con una disposición adicional única y tres disposiciones finales.

En la disposición adicional primera, en la que se prevé la creación de tres especialidades específicas aeronáuticas en determinadas escalas de funcionarios dependientes del Ministerio de Fomento cuyas convocatorias realizaría la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Así mismo, se establece como medio preferente de selección de personal de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea el sistema de concurso oposición con el objetivo de que ésta se pueda dotar de personal inspector con cualificaciones adecuadas a las tareas de inspección que deben realizar, en particular en los ámbitos en los que se requiere una experiencia y formación específica no habitual.

La disposición adicional segunda, asegura el mantenimiento del régimen de competencias establecido por la normativa que regula los aeródromos utilizados conjuntamente por una base aérea y un aeropuerto y en las bases aéreas abiertas al tráfico civil, al preverse que el Programa de Seguridad Operacional se aplicará y ejecutará conforme a dicho régimen.

En las disposiciones finales, la primera adecua el régimen de tasas a las nuevas actividades que debe realizar la Agencia Estatal de Seguridad Aérea como consecuencia de las últimas modificaciones normativas introducidas y las dos restantes relativas al título competencial y a la entrada en vigor.

LEGISLATURA

IX

121062



<b>Informes recabados.</b>	<p>En la elaboración del proyecto ha participado la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.</p> <p>Igualmente ha informado al anteproyecto la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil y la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).</p> <p>Asimismo se ha recabado el Informe de los Ministerios de Presidencia, Justicia, Defensa, Trabajo e Inmigración y Economía y Hacienda.</p>	
<b>Tramite de audiencia.</b>	<p>Se ha dado audiencia al sector en sucesivas reuniones con la Secretaría de Estado de Transportes en las que se ha informado sobre el anteproyecto y se ha recabado su parecer sobre él.</p>	
<b>ANALISIS DE IMPACTOS</b>		
<b>ADECUACIÓN AL ORDEN DE COMPETENCIAS.</b>	<p>¿Cuál es el título competencial prevalente?</p> <p>Artículo 149. 1. 20ª de la Constitución, competencia exclusiva en materia de control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo.</p>	
<b>IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO.</b>	Efectos sobre la economía en general.	No significativos.
	En relación con la competencia	<p><input checked="" type="checkbox"/> la norma no tiene efectos significativos sobre la competencia.</p> <p><input type="checkbox"/> la norma tiene efectos positivos sobre la competencia.</p> <p><input type="checkbox"/> la norma tiene efectos negativos sobre la competencia.</p>

LEGISLATURA  
IX

121062





	Desde el punto de vista de las cargas administrativas	<input type="checkbox"/> supone una reducción de cargas administrativas.  Cuantificación estimada: _____  <input type="checkbox"/> incorpora nuevas cargas administrativas.  Cuantificación estimada: _____  <input checked="" type="checkbox"/> no afecta a las cargas administrativas.
	Desde el punto de vista de los presupuestos, la norma  <input type="checkbox"/> Afecta a los presupuestos de la AGE.  <input type="checkbox"/> Afecta a los presupuestos de otras Administraciones Territoriales	<input type="checkbox"/> implica un gasto:  Cuantificación estimada: _____  <input type="checkbox"/> implica un ingreso.  Cuantificación estimada: _____
<b>IMPACTO DE GÉNERO.</b>	La norma tiene un impacto de género	Negativo <input type="checkbox"/>  Nulo <input checked="" type="checkbox"/>  Positivo <input type="checkbox"/>
<b>OTROS IMPACTOS CONSIDERADOS.</b>		
<b>OTRAS CONSIDERACIONES.</b>		

LEGISLATURA  
IX

121062



formuladas no se oponen a esta regulación, si bien se apunta la conveniencia de avanzar más allá contemplando la posibilidad de constituir fondos de garantías que asuman los asuman, lo que puede ser objeto de tratamiento en una norma específica planteada con este objeto.

El impacto de las tasas es pequeño y asumible por las entidades o sujetos que pueden aspirar a la realización de las actividades gravadas, sin perjuicio de que, en todo caso, únicamente se trasladará a estos los costes derivados de la actividad de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

El efecto recaudador real de las nuevas tasas será mínimo, dado que se espera tramitar no más de unas pocas decenas de expedientes de cada tipo (menos de cinco, en el caso de entidades colaboradoras), y eso a lo largo de varios años.

#### **VI. Impacto por razón de género.**

Las medidas que se establecen en este proyecto tienen un impacto nulo por razones de género.

LEGISLATURA  
IX

121062



12/63

**MEMORIA ABREVIADA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO de la Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.**

121063

Justificación de la memoria abreviada. Base jurídica y rango normativo del proyecto

El proceso de negociación entre el Estado y las Comunidades Autónomas para la reforma del modelo de financiación, culminó con el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, en su reunión de 15 de julio de 2009, que adoptó, a propuesta del Gobierno de España, el Acuerdo 6/2009, de reforma del Sistema de Financiación de las CC.AA. de régimen común y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía, cuya puesta en práctica exigía llevar a cabo una serie de reformas legales.

La aprobación de este nuevo modelo precisaba inicialmente de la adecuación de determinados preceptos de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), así como la inclusión en dicha norma de determinados aspectos del sistema que requerían rango de ley orgánica. A tal efecto, tuvo lugar la aprobación de la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la LOFCA.

La plasmación normativa del modelo adoptado en el Acuerdo 6/2009 de 15 de julio se produjo con la promulgación de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, derogando la hasta ahora vigente Ley 21/2001, de 27 de diciembre, para aquellas Comunidades que hubieran aceptado el nuevo sistema de financiación.

Para hacer efectiva en cada Comunidad Autónoma la aplicación del nuevo sistema de financiación recogido en la Ley 22/2009 de 18 de diciembre, se exige como requisito *sine qua non* que la Comunidad Autónoma acepte el sistema en Comisión Mixta, tal y como se desprende de la disposición adicional cuarta, disposición transitoria segunda y tercera, y disposición derogatoria de dicha Ley.

La aceptación del sistema de financiación autonómica por la Comunidad Autónoma de Andalucía tuvo lugar en la sesión plenaria de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía celebrada a tal efecto el 21 de diciembre de 2009. Esta Comisión adoptó el Acuerdo de aceptación del nuevo Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, fijación del valor inicial del Fondo de Suficiencia Global, modificación del régimen de cesión y fijación del alcance y condiciones de la cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía; y como Anexo al mismo se incluyó el proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, cuyo texto, acordado con la Comunidad Autónoma, se informa en la presente memoria.



Este Acuerdo de aceptación del nuevo Sistema de Financiación y de modificación del régimen de cesión y fijación del alcance y condiciones de la cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma, implica la aceptación tanto de los aspectos financieros como de los aspectos tributarios derivados del nuevo modelo. Dentro de este Acuerdo además, se procedió a la fijación del valor inicial del Fondo de Suficiencia Global, dando cumplimiento al apartado tres del artículo decimotercero de la nueva redacción de la LOFCA.

La necesidad de la aprobación del proyecto de Ley como requisito previo a la aplicabilidad de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, viene establecida en el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y en el artículo 178 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Así, el artículo 10.2 de la LOFCA señala que la cesión de tributos a las Comunidades Autónomas se entenderá efectuada cuando haya tenido lugar en virtud de precepto expreso del Estatuto correspondiente, sin perjuicio de que el alcance y condiciones de la misma, así como en su caso las competencias normativas comprendidas en esta cesión (art. 10.3 LOFCA), se establezcan en una Ley específica. Por tanto, para que pueda ser efectiva la cesión de tributos prevista en la Ley 22/2009, y en consecuencia, para la plena efectividad del propio sistema de financiación, se hace necesario adecuar el contenido del artículo 178.1 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía al nuevo régimen de cesión de tributos. En el apartado 2 de este mismo precepto se faculta para que, por acuerdo del Gobierno del Estado con el de la Comunidad, pueda modificarse el contenido de esta disposición, que será tramitada como Proyecto de Ley por el primero. También en el apartado 3 se señala que el alcance y condiciones de dicha cesión se establecerán por Acuerdo de Comisión Mixta y que dicho Acuerdo deberá ser tramitado por el Gobierno como Proyecto de Ley.

#### Oportunidad de la norma

En definitiva, la tramitación y aprobación del proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, es necesaria y oportuna, para en cumplimiento del artículo 10.2 de la LOFCA y del artículo 178 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, hacer efectiva la aplicabilidad del nuevo sistema de financiación autonómica en la Comunidad Autónoma de Andalucía y determinar el alcance y condiciones de la cesión que se deriva del mismo.

Es por ello que el proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, no produce impactos de carácter económico ni impactos por razón de género. Esto significa, principalmente, que las consecuencias jurídicas y económicas, especialmente sobre la competencia, que se deriven para los agentes afectados, la incidencia desde el punto de vista presupuestario, de impacto de género, y en el orden constitucional de distribución de competencias, referidas a este anteproyecto son inexistentes, por cuanto se limita a cumplir con la formalidad necesaria para la aplicación de un sistema de financiación, ya en vigor, cuyos impactos normativos de todo orden se produjeron con la aprobación de la mencionada Ley 22/2009, de 18 de diciembre. Esto justifica el carácter abreviado de la Memoria de esta Ley.

LEGISLATURA



U-0114-2010-041-1000000-0-11-11-10

### Descripción del contenido y tramitación de la propuesta normativa

El proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, consta de dos artículos, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.

El artículo 1 modifica el contenido del apartado 1 del artículo 178 con el objeto de especificar que se ceden a esta Comunidad Autónoma el 50% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; el Impuesto sobre el Patrimonio; el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; los Tributos sobre el Juego; el 50 % del Impuesto sobre el Valor Añadido; el 58% del Impuesto sobre la Cerveza; el 58% del Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas; el 58% del Impuesto sobre Productos Intermedios; el 58% del Impuesto sobre Alcohol y Bebidas Derivadas; el 58% del Impuesto sobre Hidrocarburos; el 58% del Impuesto sobre las Labores del Tabaco; el Impuesto sobre la Electricidad; el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT) y el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH).

El artículo 2, en primer lugar, determina el alcance y condiciones de la cesión a esta Comunidad Autónoma, por remisión al régimen general establecido en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

En segundo lugar, este precepto establece la asunción, por parte de la Comunidad, de la competencia para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas en los términos establecidos en el segundo párrafo de la letra c) del artículo 59.1 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre.

Además, el precepto atribuye las competencias normativas en materia de tributos estatales cedidos, en el marco de lo dispuesto en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

Al igual que realizaba la antigua ley de cesión a la Comunidad, el presente texto incluye en el apartado 3 del artículo 2 determinadas competencias normativas y de inspección en materia de IVMDH e IEDMT.

La disposición transitoria primera regula el régimen transitorio de cesión efectiva del IVMDH y del IEDMT en relación con la gestión de estos impuestos. Con la inclusión de la disposición transitoria segunda, se regula también el régimen transitorio de la competencia para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas interpuestas contra los actos dictados por órganos autonómicos en relación con los tributos cedidos. Por último la disposición transitoria tercera clarifica el régimen aplicable a los tipos y escalas de gravamen para el año 2010.

LEGISLATURA

IX



Listado de normas derogadas

La entrada en vigor de la Ley, que tendrá lugar el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, si bien surtirá efectos desde el 1 de enero de 2009, implicará la derogación de la Ley 19/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, en tanto que esta es la Ley que fue dictada para hacer efectivo el sistema de financiación recogido en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía; Ley que queda derogada con la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, en los términos señalados en la misma.

Impactos presupuestario y por razón de género

Como se desprende de los antecedentes anteriores, esta norma no tiene impacto presupuestario, ni por razón de género.



LEGISLATURA

IX

**MEMORIA ABREVIADA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO de la Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.**

Justificación de la memoria abreviada. Base jurídica y rango normativo del proyecto

El proceso de negociación entre el Estado y las Comunidades Autónomas para la reforma del modelo de financiación, culminó con el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, en su reunión de 15 de julio de 2009, que adoptó, a propuesta del Gobierno de España, el Acuerdo 6/2009, de reforma del Sistema de Financiación de las CC.AA. de régimen común y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía, cuya puesta en práctica exigía llevar a cabo una serie de reformas legales.

La aprobación de este nuevo modelo precisaba inicialmente de la adecuación de determinados preceptos de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), así como la inclusión en dicha norma de determinados aspectos del sistema que requerían rango de ley orgánica. A tal efecto, tuvo lugar la aprobación de la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la LOFCA.

La plasmación normativa del modelo adoptado en el Acuerdo 6/2009 de 15 de julio se produjo con la promulgación de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, derogando la hasta ahora vigente Ley 21/2001, de 27 de diciembre, para aquellas Comunidades que hubieran aceptado el nuevo sistema de financiación.

Para hacer efectiva en cada Comunidad Autónoma la aplicación del nuevo sistema de financiación recogido en la Ley 22/2009 de 18 de diciembre, se exige como requisito *sine qua non* que la Comunidad Autónoma acepte el sistema en Comisión Mixta, tal y como se desprende de la disposición adicional cuarta, disposición transitoria segunda y tercera, y disposición derogatoria de dicha Ley.

La aceptación del sistema de financiación autonómica por la Comunidad Autónoma de Aragón tuvo lugar en la sesión plenaria de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos-Financieros Estado-Comunidad Autónoma de Aragón celebrada a tal efecto el 21 de diciembre de 2009. Esta Comisión adoptó el *Acuerdo de aceptación del nuevo Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, fijación del valor inicial del Fondo de Suficiencia Global, modificación del régimen de cesión y fijación del alcance y condiciones de la cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón*; y como Anexo al mismo se incluyó el proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, cuyo texto, acordado con la Comunidad Autónoma, se informa en la presente memoria.



Este Acuerdo de aceptación del nuevo Sistema de Financiación y de modificación del régimen de cesión y fijación del alcance y condiciones de la cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma, implica la aceptación tanto de los aspectos financieros como de los aspectos tributarios derivados del nuevo modelo. Dentro de este Acuerdo además, se procedió a la fijación del valor inicial del Fondo de Suficiencia Global, dando cumplimiento al apartado tres del artículo decimotercero de la nueva redacción de la LOFCA.

La necesidad de la aprobación del proyecto de Ley como requisito previo a la aplicabilidad de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, viene establecida en el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.

Así, el artículo 10.2 de la LOFCA señala que la cesión de tributos a las Comunidades Autónomas se entenderá efectuada cuando haya tenido lugar en virtud de precepto expreso del Estatuto correspondiente, sin perjuicio de que el alcance y condiciones de la misma, así como en su caso las competencias normativas comprendidas en esta cesión (art. 10.3 LOFCA), se establezcan en una Ley específica. Por tanto, para que pueda ser efectiva la cesión de tributos prevista en la Ley 22/2009, y en consecuencia, para la plena efectividad del propio sistema de financiación, se hace necesario adecuar el contenido del apartado 1 de la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón al nuevo régimen de cesión de tributos. En el apartado 2 de este mismo precepto se faculta para que, por acuerdo del Gobierno del Estado con el de la Comunidad, pueda modificarse el contenido de esta disposición, que será tramitada como Proyecto de Ley por el primero. También se señala en el apartado 3 que el alcance y condiciones de dicha cesión se establecerán por Acuerdo de Comisión Mixta y que dicho Acuerdo deberá ser tramitado por el Gobierno como Proyecto de Ley.

#### Oportunidad de la norma

En definitiva, la tramitación y aprobación del proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, es necesaria y oportuna, para en cumplimiento del artículo 10.2 de la LOFCA y de la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía de Aragón, hacer efectiva la aplicabilidad del nuevo sistema de financiación autonómica en la Comunidad Autónoma de Aragón y determinar el alcance y condiciones de la cesión que se deriva del mismo.

Es por ello que el proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, no produce impactos de carácter económico ni impactos por razón de género. Esto significa, principalmente, que las consecuencias jurídicas y económicas, especialmente sobre la competencia, que se deriven para los agentes afectados, la incidencia desde el punto de vista presupuestario, de impacto de género, y en el orden constitucional de distribución de competencias, referidas a este anteproyecto son inexistentes, por cuanto se limita a cumplir con la formalidad necesaria para la aplicación de





un sistema de financiación, ya en vigor, cuyos impactos normativos de todo orden se produjeron con la aprobación de la mencionada Ley 22/2009, de 18 de diciembre. Esto justifica el carácter abreviado de la Memoria de esta Ley.

#### Descripción del contenido y tramitación de la propuesta normativa

El proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, consta de dos artículos, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.

El artículo 1 modifica el contenido del apartado 1 de la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía de Aragón con el objeto de especificar que se ceden a esta Comunidad Autónoma el 50% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; el Impuesto sobre el Patrimonio; el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; los Tributos sobre el Juego; el 50 % del Impuesto sobre el Valor Añadido; el 58% del Impuesto sobre la Cerveza; el 58% del Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas; el 58% del Impuesto sobre Productos Intermedios; el 58% del Impuesto sobre Alcohol y Bebidas Derivadas; el 58% del Impuesto sobre Hidrocarburos; el 58% del Impuesto sobre las Labores del Tabaco; el Impuesto sobre la Electricidad; el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT) y el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH).

El artículo 2, en primer lugar, determina el alcance y condiciones de la cesión a esta Comunidad Autónoma, por remisión al régimen general establecido en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

En segundo lugar, este precepto establece la asunción, por parte de la Comunidad, de la competencia para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas en los términos establecidos en el segundo párrafo de la letra c) del artículo 59.1 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre.

Además, el precepto atribuye las competencias normativas en materia de tributos estatales cedidos, en el marco de lo dispuesto en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

Al igual que realizaba la antigua ley de cesión a la Comunidad, el presente texto incluye en el apartado 3 del artículo 2 determinadas competencias normativas y de inspección en materia de IVMDH e IEDMT.

La disposición transitoria primera regula el régimen transitorio de cesión efectiva del IVMDH y del IEDMT en relación con la gestión de estos impuestos. Con la inclusión de la disposición transitoria segunda, se regula también el régimen transitorio de la competencia para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas interpuestas contra los actos dictados por órganos autonómicos en relación con los tributos cedidos. Por último la disposición transitoria tercera clarifica el régimen aplicable a los tipos y escalas de gravamen para el año 2010.



Listado de normas derogadas

La entrada en vigor de la Ley, que tendrá lugar el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, si bien surtirá efectos desde el 1 de enero de 2009, implicará la derogación de la Ley 25/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, en tanto que ésta es la Ley que fue dictada para hacer efectivo el sistema de financiación recogido en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía; Ley que queda derogada con la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, en los términos señalados en la misma.

Impactos presupuestario y por razón de género

Como se desprende de los antecedentes anteriores, esta norma no tiene impacto presupuestario, ni por razón de género.

121064

121064



**MEMORIA ABREVIADA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO de la Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.**

Justificación de la memoria abreviada. Base jurídica y rango normativo del proyecto

El proceso de negociación entre el Estado y las Comunidades Autónomas para la reforma del modelo de financiación, culminó con el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, en su reunión de 15 de julio de 2009, que adoptó, a propuesta del Gobierno de España, el Acuerdo 6/2009, para la reforma del Sistema de Financiación de las CC.AA. de régimen común y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía, cuya puesta en práctica exigía llevar a cabo una serie de reformas legales.

La aprobación de este nuevo modelo precisaba inicialmente de la adecuación de determinados preceptos de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), así como la inclusión en dicha norma de determinados aspectos del sistema que requerían rango de ley orgánica. A tal efecto, tuvo lugar la aprobación de la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la LOFCA.

La plasmación normativa del modelo adoptado en el Acuerdo 6/2009 de 15 de julio se produjo con la promulgación de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, derogando la hasta ahora vigente Ley 21/2001, de 27 de diciembre, para aquellas Comunidades que hubieran aceptado el nuevo sistema de financiación.

Para hacer efectiva en cada Comunidad Autónoma la aplicación del nuevo sistema de financiación recogido en la Ley 22/2009 de 18 de diciembre, se exige como requisito *sine qua non* que la Comunidad Autónoma acepte el sistema en Comisión Mixta, tal y como se desprende de la disposición adicional cuarta, disposición transitoria segunda y tercera, y disposición derogatoria de dicha Ley.

La aceptación del sistema de financiación autonómica por la Comunidad Autónoma de Canarias tuvo lugar en la sesión plenaria de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado- Comunidad Autónoma de Canarias celebrada a tal efecto el 21 de diciembre de 2009. Esta Comisión adoptó el *Acuerdo de aceptación del nuevo Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, fijación del valor inicial del Fondo de Suficiencia Global, modificación del régimen de cesión y fijación del alcance y condiciones de la cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias, y aplicación de la Disposición Adicional segunda de la Ley por la que se regula el nuevo sistema de financiación*; y como Anexo al mismo se incluyó el proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, cuyo texto acordado con la Comunidad Autónoma, se informa en la presente memoria.



IX  
Este Acuerdo de aceptación del nuevo Sistema de Financiación y de modificación del régimen de cesión y fijación del alcance y condiciones de la cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma, implica la aceptación tanto de los aspectos financieros como de los aspectos tributarios derivados del nuevo modelo. Dentro de este Acuerdo además, se procedió a la fijación del valor inicial del Fondo de Suficiencia Global, dando cumplimiento al apartado tres del artículo decimotercero de la nueva redacción de la LOFCA.

La necesidad de la aprobación del proyecto de Ley como requisito previo a la aplicabilidad de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, viene establecida en el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias.

Así, el artículo 10.2 de la LOFCA señala que la cesión de tributos a las Comunidades Autónomas se entenderá efectuada cuando haya tenido lugar en virtud de precepto expreso del Estatuto correspondiente, sin perjuicio de que el alcance y condiciones de la misma, así como en su caso las competencias normativas comprendidas en esta cesión (art. 10.3 LOFCA), se establezcan en una Ley específica. Por tanto, para que pueda ser efectiva la cesión de tributos prevista en la Ley 22/2009, y en consecuencia, para la plena efectividad del propio sistema de financiación, se hace necesario adecuar el contenido del apartado 1 de la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias al nuevo régimen de cesión de tributos. En el apartado 2 de este mismo precepto se faculta para que, por acuerdo del Gobierno del Estado con el de la Comunidad, pueda modificarse el contenido de esta disposición, que será tramitada como Proyecto de Ley por el primero.

#### Oportunidad de la norma

En definitiva, la tramitación y aprobación del proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, es necesaria y oportuna, para en cumplimiento del artículo 10.2 de la LOFCA y de la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía de Canarias, hacer efectiva la aplicabilidad del nuevo sistema de financiación autonómica en la Comunidad Autónoma de Canarias y determinar el alcance y condiciones de la cesión que se deriva del mismo.

Es por ello que el proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, no produce impactos de carácter económico ni impactos por razón de género. Esto significa, principalmente, que las consecuencias jurídicas y económicas, especialmente sobre la competencia, que se deriven para los agentes afectados, la incidencia desde el punto de vista presupuestario, de impacto de género, y en el orden constitucional de distribución de competencias, referidas a este anteproyecto son inexistentes, por cuanto se limita a cumplir con la formalidad necesaria para la aplicación de un sistema de financiación, ya en vigor, cuyos impactos normativos de todo orden se produjeron con la aprobación de la mencionada Ley 22/2009, de 18 de diciembre. Esto justifica el carácter abreviado de la Memoria de esta Ley.



Descripción del contenido y tramitación de la propuesta normativa

El proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, consta de dos artículos, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.

El artículo 1 modifica el contenido del apartado 1 de la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía de Canarias con el objeto de especificar que se ceden a esta Comunidad Autónoma el 50% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; el Impuesto sobre el Patrimonio; el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; los Tributos sobre el Juego; el 58% del Impuesto sobre la Cerveza; el 58% del Impuesto sobre Productos Intermedios; el 58% del Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas y el Impuesto sobre la Electricidad.

El artículo 2, en primer lugar, determina el alcance y condiciones de la cesión a esta Comunidad Autónoma, por remisión al régimen general establecido en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

En segundo lugar, este precepto establece la asunción, por parte de la Comunidad, de la competencia para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas en los términos establecidos en el segundo párrafo de la letra c) del artículo 59.1 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

Además, el precepto atribuye las competencias normativas en materia de tributos estatales cedidos, en el marco de lo dispuesto en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

Con la inclusión de la disposición transitoria primera, se regula también el régimen transitorio de la competencia para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas interpuestas contra los actos dictados por órganos autonómicos en relación con los tributos cedidos. Por último la disposición transitoria segunda clarifica el régimen aplicable a los tipos y escalas de gravamen para el año 2010.

Listado de normas derogadas

La entrada en vigor de la Ley, que tendrá lugar el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, si bien surtirá efectos desde el 1 de enero de 2009, implicará la derogación de la Ley 27/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, en tanto que ésta es la Ley que fue dictada para hacer efectivo el sistema de financiación recogido en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de



Autonomía; Ley que queda derogada con la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, en los términos señalados en la misma.

Impactos presupuestario y por razón de género

Como se desprende de los antecedentes anteriores, esta norma no tiene impacto presupuestario, ni por razón de género.



1121066

**MEMORIA ABREVIADA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO de la Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.**

Justificación de la memoria abreviada. Base jurídica y rango normativo del proyecto

El proceso de negociación entre el Estado y las Comunidades Autónomas para la reforma del modelo de financiación, culminó con el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, en su reunión de 15 de julio de 2009, que adoptó, a propuesta del Gobierno de España, el Acuerdo 6/2009, de reforma del Sistema de Financiación de las CC.AA. de régimen común y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía, cuya puesta en práctica exigía llevar a cabo una serie de reformas legales.

La aprobación de este nuevo modelo precisaba inicialmente de la adecuación de determinados preceptos de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) así como la inclusión en dicha norma de determinados aspectos del sistema que requerían rango de ley orgánica. A tal efecto, tuvo lugar la aprobación de la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la LOFCA.

La plasmación normativa del modelo adoptado en el Acuerdo 6/2009 de 15 de julio se produjo con la promulgación de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, derogando la hasta ahora vigente Ley 21/2001, de 27 de diciembre, para aquellas Comunidades que hubieran aceptado el nuevo sistema de financiación.

Para hacer efectiva en cada Comunidad Autónoma la aplicación del nuevo sistema de financiación recogido en la Ley 22/2009 de 18 de diciembre, se exige como requisito *sine qua non* que la Comunidad Autónoma acepte el sistema en Comisión Mixta, tal y como se desprende de la disposición adicional cuarta, disposición transitoria segunda y tercera, y disposición derogatoria de dicha Ley.

La aceptación del sistema de financiación autonómica por la Comunidad Autónoma de Cantabria tuvo lugar en la sesión plenaria de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma de Cantabria celebrada a tal efecto el 22 de diciembre de 2009. Esta Comisión adoptó el *Acuerdo de aceptación del nuevo Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, fijación del valor inicial del Fondo de Suficiencia Global, modificación del régimen de cesión y fijación del alcance y condiciones de la cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria*; y como Anexo al mismo se incluyó el proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, cuyo texto, acordado con la Comunidad Autónoma, se informa en la presente memoria.



Este Acuerdo de aceptación del nuevo Sistema de Financiación y de modificación del régimen de cesión y fijación del alcance y condiciones de la cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma, implica la aceptación tanto de los aspectos financieros como de los aspectos tributarios derivados del nuevo modelo. Dentro de este Acuerdo además, se procedió a la fijación del valor inicial del Fondo de Suficiencia Global, dando cumplimiento al apartado tres del artículo decimotercero de la nueva redacción de la LOFCA.

La necesidad de la aprobación del proyecto de Ley como requisito previo a la aplicabilidad de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, viene establecida en el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria.

Así, el artículo 10.2 de la LOFCA señala que la cesión de tributos a las Comunidades Autónomas se entenderá efectuada cuando haya tenido lugar en virtud de precepto expreso del Estatuto correspondiente, sin perjuicio de que el alcance y condiciones de la misma, así como en su caso las competencias normativas comprendidas en esta cesión (art. 10.3 LOFCA), se establezcan en una Ley específica. Por tanto, para que pueda ser efectiva la cesión de tributos prevista en la Ley 22/2009, y en consecuencia, para la plena efectividad del propio sistema de financiación, se hace necesario adecuar el contenido del apartado 1 de la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria al nuevo régimen de cesión de tributos. En el apartado 2 de este mismo precepto, se faculta para que, por acuerdo del Gobierno del Estado con el de la Comunidad, pueda modificarse el contenido de esta disposición, que será tramitada como Proyecto de Ley por el primero. También se señala en el apartado 3 que el alcance y condiciones de dicha cesión se establecerán por Acuerdo de Comisión Mixta y que dicho Acuerdo deberá ser tramitado por el Gobierno como Proyecto de Ley.

#### Oportunidad de la norma

En definitiva, la tramitación y aprobación del proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, es necesaria y oportuna, para en cumplimiento del artículo 10.2 de la LOFCA y de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía para Cantabria, hacer efectiva la aplicabilidad del nuevo sistema de financiación autonómica en la Comunidad Autónoma de Cantabria y determinar el alcance y condiciones de la cesión que se deriva del mismo.

Es por ello que el proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, no produce impactos de carácter económico ni impactos por razón de género. Esto significa, principalmente, que las consecuencias jurídicas y económicas, especialmente sobre la competencia, que se deriven para los agentes afectados, la incidencia desde el punto de vista presupuestario, de impacto de género, y en el orden constitucional de distribución de competencias, referidas a este anteproyecto son inexistentes, por cuanto se limita a cumplir con la formalidad necesaria para la aplicación de





un sistema de financiación, ya en vigor, cuyos impactos normativos de todo orden se produjeron con la aprobación de la mencionada Ley 22/2009, de 18 de diciembre. Esto justifica el carácter abreviado de la Memoria de esta Ley.

#### Descripción del contenido y tramitación de la propuesta normativa

El proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, consta de dos artículos, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.

El artículo 1 modifica el contenido del apartado 1 de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía para Cantabria con el objeto de especificar que se ceden a esta Comunidad Autónoma el 50% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; el Impuesto sobre el Patrimonio; el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; los Tributos sobre el Juego; el 50 % del Impuesto sobre el Valor Añadido; el 58% del Impuesto sobre la Cerveza; el 58% del Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas; el 58% del Impuesto sobre Productos Intermedios; el 58% del Impuesto sobre Alcohol y Bebidas Derivadas; el 58% del Impuesto sobre Hidrocarburos; el 58% del Impuesto sobre las Labores del Tabaco; el Impuesto sobre la Electricidad; el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT) y el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH).

El artículo 2, en primer lugar, determina el alcance y condiciones de la cesión a esta Comunidad Autónoma, por remisión al régimen general establecido en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

En segundo lugar, este precepto establece la asunción, por parte de la Comunidad, de la competencia para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas en los términos establecidos en el segundo párrafo de la letra c) del artículo 59.1 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre.

Además, el precepto atribuye las competencias normativas en materia de tributos estatales cedidos, en el marco de lo dispuesto en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

Al igual que realizaba la antigua ley de cesión a la Comunidad, el presente texto incluye en el apartado 3 del artículo 2 determinadas competencias normativas y de inspección en materia de IVMDH e IEDMT.

La disposición transitoria primera regula el régimen transitorio de cesión efectiva del IVMDH y del IEDMT en relación con la gestión de estos impuestos. Con la inclusión de la disposición transitoria segunda, se regula también el régimen transitorio de la competencia para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas interpuestas contra los actos dictados por órganos autonómicos en relación con los tributos cedidos. Por último la disposición transitoria tercera clarifica el régimen aplicable a los tipos y escalas de gravamen para el año 2010.



1721066

Listado de normas derogadas

La entrada en vigor de la Ley, que tendrá lugar el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, si bien surtirá efectos desde el 1 de enero de 2009, implicará la derogación de la Ley 21/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, en tanto que ésta es la Ley que fue dictada para hacer efectivo el sistema de financiación recogido en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía; Ley que queda derogada con la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, en los términos señalados en la misma.

Impactos presupuestario y por razón de género

Como se desprende de los antecedentes anteriores, esta norma no tiene impacto presupuestario, ni por razón de género.



**MEMORIA ABREVIADA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO de la Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.**

Justificación de la memoria abreviada. Base jurídica y rango normativo del proyecto

El proceso de negociación entre el Estado y las Comunidades Autónomas para la reforma del modelo de financiación, culminó con el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, en su reunión de 15 de julio de 2009, que adoptó, a propuesta del Gobierno de España, el Acuerdo 6/2009, de reforma del Sistema de Financiación de las CC.AA. de régimen común y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía, cuya puesta en práctica exigía llevar a cabo una serie de reformas legales.

La aprobación de este nuevo modelo precisaba inicialmente de la adecuación de determinados preceptos de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) así como la inclusión en dicha norma de determinados aspectos del sistema que requerían rango de ley orgánica. A tal efecto, tuvo lugar la aprobación de la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la LOFCA.

La plasmación normativa del modelo adoptado en el Acuerdo 6/2009 de 15 de julio se produjo con la promulgación de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, derogando la hasta ahora vigente Ley 21/2001, de 27 de diciembre, para aquellas Comunidades que hubieran aceptado el nuevo sistema de financiación.

Para hacer efectiva en cada Comunidad Autónoma la aplicación del nuevo sistema de financiación recogido en la Ley 22/2009 de 18 de diciembre, se exige como requisito *sine qua non* que la Comunidad Autónoma acepte el sistema en Comisión Mixta, tal y como se desprende de la disposición adicional cuarta, disposición transitoria segunda y tercera, y disposición derogatoria de dicha Ley.

La aceptación del sistema de financiación autonómica por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha tuvo lugar en la sesión plenaria de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha celebrada a tal efecto el 21 de diciembre de 2009. Esta Comisión adoptó el *Acuerdo de aceptación del nuevo Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, fijación del valor inicial del Fondo de Suficiencia Global, modificación del régimen de cesión y fijación del alcance y condiciones de la cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha*; y como Anexo al mismo se incluyó el proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, cuyo texto, acordado con la Comunidad Autónoma, se informa en la presente memoria.



Este Acuerdo de aceptación del nuevo Sistema de Financiación y de modificación del régimen de cesión y fijación del alcance y condiciones de la cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma, implica la aceptación tanto de los aspectos financieros como de los aspectos tributarios derivados del nuevo modelo. Dentro de este Acuerdo además, se procedió a la fijación del valor inicial del Fondo de Suficiencia Global, dando cumplimiento al apartado tres del artículo decimotercero de la nueva redacción de la LOFCA.

La necesidad de la aprobación del proyecto de Ley como requisito previo a la aplicabilidad de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, viene establecida en el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

Así, el artículo 10.2 de la LOFCA señala que la cesión de tributos a las Comunidades Autónomas se entenderá efectuada cuando haya tenido lugar en virtud de precepto expreso del Estatuto correspondiente, sin perjuicio de que el alcance y condiciones de la misma, así como en su caso las competencias normativas comprendidas en esta cesión (art. 10.3 LOFCA), se establezcan en una Ley específica. Por tanto, para que pueda ser efectiva la cesión de tributos prevista en la Ley 22/2009, y en consecuencia, para la plena efectividad del propio sistema de financiación, se hace necesario adecuar el contenido del apartado uno de la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha al nuevo régimen de cesión de tributos. En el apartado dos de este mismo precepto se faculta para que, por acuerdo del Gobierno del Estado con el de la Comunidad, pueda modificarse el contenido de esta disposición, que será tramitada como Proyecto de Ley por el primero. También se señala en el apartado tres que el alcance y condiciones de dicha cesión se establecerán por Acuerdo de Comisión Mixta y que dicho Acuerdo deberá ser tramitado por el Gobierno como Proyecto de Ley.

#### Oportunidad de la norma

En definitiva, la tramitación y aprobación del proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, es necesaria y oportuna, para en cumplimiento del artículo 10.2 de la LOFCA y de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, hacer efectiva la aplicabilidad del nuevo sistema de financiación autonómica en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y determinar el alcance y condiciones de la cesión que se deriva del mismo.

Es por ello que el proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, no produce impactos de carácter económico ni impactos por razón de género. Esto significa, principalmente, que las consecuencias jurídicas y económicas, especialmente sobre la competencia, que se deriven para los agentes afectados, la incidencia desde el punto de vista presupuestario, de impacto de género, y en el orden constitucional de distribución de competencias, referidas a este anteproyecto son inexistentes por cuanto se limita a cumplir con la formalidad necesaria para la aplicación



un sistema de financiación, ya en vigor, cuyos impactos normativos de todo orden se produjeron con la aprobación de la mencionada Ley 22/2009, de 18 de diciembre. Esto justifica el carácter abreviado de la Memoria de esta Ley.

#### Descripción del contenido y tramitación de la propuesta normativa

El proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, consta de dos artículos, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.

El artículo 1 modifica el contenido del apartado 1 de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha con el objeto de especificar que se ceden a esta Comunidad Autónoma el 50% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; el Impuesto sobre el Patrimonio; el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; los Tributos sobre el Juego; el 50 % del Impuesto sobre el Valor Añadido; el 58% del Impuesto sobre la Cerveza; el 58% del Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas; el 58% del Impuesto sobre Productos Intermedios; el 58% del Impuesto sobre Alcohol y Bebidas Derivadas; el 58% del Impuesto sobre Hidrocarburos; el 58% del Impuesto sobre las Labores del Tabaco; el Impuesto sobre la Electricidad; el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT) y el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH).

El artículo 2, en primer lugar, determina el alcance y condiciones de la cesión a esta Comunidad Autónoma, por remisión al régimen general establecido en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

En segundo lugar, este precepto establece la asunción, por parte de la Comunidad, de la competencia para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas en los términos establecidos en el primer párrafo de la letra c) del artículo 59.1 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre.

Además, el precepto atribuye las competencias normativas en materia de tributos estatales cedidos, en el marco de lo dispuesto en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

Al igual que realizaba la antigua ley de cesión a la Comunidad, el presente texto incluye en el apartado 3 del artículo 2 determinadas competencias normativas y de inspección en materia de IVMDH e IEDMT.

La disposición transitoria primera regula el régimen transitorio de cesión efectiva del IVMDH y del IEDMT en relación con la gestión de estos impuestos. Con la inclusión de la disposición transitoria segunda, se regula también el régimen transitorio de la competencia para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas interpuestas contra los actos dictados por órganos autonómicos en relación con los tributos cedidos. Por último la disposición



transitoria tercera clarifica el régimen aplicable a los tipos y escalas de gravamen para el año 2010.

Listado de normas derogadas

La entrada en vigor de la Ley, que tendrá lugar el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, si bien surtirá efectos desde el 1 de enero de 2009, implicará la derogación de la Ley 26/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, en tanto que ésta es la Ley que fue dictada para hacer efectivo el sistema de financiación recogido en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía; Ley que queda derogada con la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, en los términos señalados en la misma.

Impactos presupuestario y por razón de género

Como se desprende de los antecedentes anteriores, esta norma no tiene impacto presupuestario, ni por razón de género.



**MEMORIA ABREVIADA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO de la Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.**

Justificación de la memoria abreviada. Base jurídica y rango normativo del proyecto

El proceso de negociación entre el Estado y las Comunidades Autónomas para la reforma del modelo de financiación, culminó con el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, en su reunión de 15 de julio de 2009, que adoptó, a propuesta del Gobierno de España, el Acuerdo 6/2009, de reforma del Sistema de Financiación de las CC.AA. de régimen común y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía, cuya puesta en práctica exigía llevar a cabo una serie de reformas legales.

La aprobación de este nuevo modelo precisaba inicialmente de la adecuación de determinados preceptos de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), así como la inclusión en dicha norma de determinados aspectos del sistema que requerían rango de ley orgánica. A tal efecto, tuvo lugar la aprobación de la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la LOFCA.

La plasmación normativa del modelo adoptado en el Acuerdo 6/2009 de 15 de julio se produjo con la promulgación de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, derogando la hasta ahora vigente Ley 21/2001, de 27 de diciembre, para aquellas Comunidades que hubieran aceptado el nuevo sistema de financiación.

Para hacer efectiva en cada Comunidad Autónoma la aplicación del nuevo sistema de financiación recogido en la Ley 22/2009 de 18 de diciembre, se exige como requisito *sine qua non* que la Comunidad Autónoma acepte el sistema en Comisión Mixta, tal y como se desprende de la disposición adicional cuarta, disposición transitoria segunda y tercera, y disposición derogatoria de dicha Ley.

La aceptación del sistema de financiación autonómica por la Comunidad Autónoma de Castilla y León tuvo lugar en la sesión plenaria de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma de Castilla y León celebrada a tal efecto el 21 de diciembre de 2009. Esta Comisión adoptó el *Acuerdo de aceptación del nuevo Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, fijación del valor inicial del Fondo de Suficiencia Global, modificación del régimen de cesión y fijación del alcance y condiciones de la cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León; y como Anexo al mismo se incluyó el proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, cuyo texto, acordado con la Comunidad Autónoma, se informa en la presente memoria.*



Este Acuerdo de aceptación del nuevo Sistema de Financiación y de modificación del régimen de cesión y fijación del alcance y condiciones de la cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma, implica la aceptación tanto de los aspectos financieros como de los aspectos tributarios derivados del nuevo modelo. Dentro de este Acuerdo además, se procedió a la fijación del valor inicial del Fondo de Suficiencia Global, dando cumplimiento al apartado tres del artículo decimotercero de la nueva redacción de la LOFCA.

La necesidad de la aprobación del proyecto de Ley como requisito previo a la aplicabilidad de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, viene establecida en el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y en la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

Así, el artículo 10.2 de la LOFCA señala que la cesión de tributos a las Comunidades Autónomas se entenderá efectuada cuando haya tenido lugar en virtud de precepto expreso del Estatuto correspondiente, sin perjuicio de que el alcance y condiciones de la misma, así como en su caso las competencias normativas comprendidas en esta cesión (art. 10.3 LOFCA), se establezcan en una Ley específica. Por tanto, para que pueda ser efectiva la cesión de tributos prevista en la Ley 22/2009, y en consecuencia, para la plena efectividad del propio sistema de financiación, se hace necesario adecuar el contenido del apartado 1 de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de Castilla y León al nuevo régimen de cesión de tributos. En el apartado 2 de este mismo precepto se faculta para que, por acuerdo del Gobierno del Estado con el de la Comunidad Autónoma, pueda modificarse el contenido de esta disposición, que será tramitada como Proyecto de Ley por el primero. También se señala en el apartado 3 que el alcance y condiciones de dicha cesión se establecerán por Acuerdo de Comisión Mixta.

#### Oportunidad de la norma

En definitiva, la tramitación y aprobación del proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, es necesaria y oportuna, para en cumplimiento del artículo 10.2 de la LOFCA y de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, hacer efectiva la aplicabilidad del nuevo sistema de financiación autonómica en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y determinar el alcance y condiciones de la cesión que se deriva del mismo.

Es por ello que el proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, no produce impactos de carácter económico ni impactos por razón de género. Esto significa, principalmente, que las consecuencias jurídicas y económicas, especialmente sobre la competencia, que se deriven para los agentes afectados, la incidencia desde el punto de vista presupuestario, de impacto de género, y en el orden constitucional de distribución de competencias, referidas a este anteproyecto son inexistentes, por cuanto se limita a cumplir con la formalidad necesaria para la aplicación de un sistema de financiación, ya en vigor, cuyos impactos normativos de todo orden se produjeron con la aprobación de la mencionada Ley 22/2009, de 18 de diciembre. Esto justifica el carácter abreviado de la Memoria de esta Ley.





Descripción del contenido y tramitación de la propuesta normativa

El proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, consta de dos artículos, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.

El artículo 1 modifica el contenido del apartado 1 de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de Castilla y León con el objeto de especificar que se ceden a esta Comunidad Autónoma el 50% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; el Impuesto sobre el Patrimonio; el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; los Tributos sobre el Juego; el 50 % del Impuesto sobre el Valor Añadido; el 58% del Impuesto sobre la Cerveza; el 58% del Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas; el 58% del Impuesto sobre Productos Intermedios; el 58% del Impuesto sobre Alcohol y Bebidas Derivadas; el 58% del Impuesto sobre Hidrocarburos; el 58% del Impuesto sobre las Labores del Tabaco; el Impuesto sobre la Electricidad; el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT) y el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH).

El artículo 2, en primer lugar, determina el alcance y condiciones de la cesión a esta Comunidad Autónoma, por remisión al régimen general establecido en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

En segundo lugar, este precepto establece la asunción, por parte de la Comunidad, de la competencia para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas en los términos establecidos en el segundo párrafo de la letra c) del artículo 59.1 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre.

Además, el precepto atribuye las competencias normativas en materia de tributos estatales cedidos, en el marco de lo dispuesto en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

Al igual que realizaba la antigua ley de cesión a la Comunidad, el presente texto incluye en el apartado 3 del artículo 2 determinadas competencias normativas y de inspección en materia de IVMDH e IEDMT.

La disposición transitoria primera regula el régimen transitorio de cesión efectiva del IVMDH y del IEDMT en relación con la gestión de estos impuestos. Con la inclusión de la disposición transitoria segunda, se regula también el régimen transitorio de la competencia para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas interpuestas contra los actos dictados por órganos autonómicos en relación con los tributos cedidos. Por último la disposición transitoria tercera clarifica el régimen aplicable a los tipos y escalas de gravamen para el año 2010.



Listado de normas derogadas

La entrada en vigor de la Ley, que tendrá lugar el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, si bien surtirá efectos desde el 1 de enero de 2009, implicará la derogación de la Ley 31/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, en tanto que ésta es la Ley que fue dictada para hacer efectivo el sistema de financiación recogido en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía; Ley que queda derogada con la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, en los términos señalados en la misma.

Impactos presupuestario y por razón de género

Como se desprende de los antecedentes anteriores, esta norma no tiene impacto presupuestario, ni por razón de género.

121068



**MEMORIA ABREVIADA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO de la Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.**

Justificación de la memoria abreviada. Base jurídica y rango normativo del proyecto

El proceso de negociación entre el Estado y las Comunidades Autónomas para la reforma del modelo de financiación, culminó con el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, en su reunión de 15 de julio de 2009, que adoptó, a propuesta del Gobierno de España, el Acuerdo 6/2009, de reforma del Sistema de Financiación de las CC.AA. de régimen común y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía, cuya puesta en práctica exigía llevar a cabo una serie de reformas legales.

La aprobación de este nuevo modelo precisaba inicialmente de la adecuación de determinados preceptos de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), así como la inclusión en dicha norma de determinados aspectos del sistema que requerían rango de ley orgánica. A tal efecto, tuvo lugar la aprobación de la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la LOFCA.

La plasmación normativa del modelo adoptado en el Acuerdo 6/2009 de 15 de julio se produjo con la promulgación de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, derogando la hasta ahora vigente Ley 21/2001, de 27 de diciembre, para aquellas Comunidades que hubieran aceptado el nuevo sistema de financiación.

Para hacer efectiva en cada Comunidad Autónoma la aplicación del nuevo sistema de financiación recogido en la Ley 22/2009 de 18 de diciembre, se exige como requisito *sine qua non* que la Comunidad Autónoma acepte el sistema en Comisión Mixta, tal y como se desprende de la disposición adicional cuarta, disposición transitoria segunda y tercera, y disposición derogatoria de dicha Ley.

La aceptación del sistema de financiación autonómica por la Comunidad Autónoma de Cataluña tuvo lugar en la sesión plenaria de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat celebrada a tal efecto el 22 de diciembre de 2009. Esta Comisión adoptó el *Acuerdo de aceptación del nuevo Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, fijación del valor inicial del Fondo de Suficiencia Global, modificación del régimen de cesión y fijación del alcance y condiciones de la cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña*; y como Anexo al mismo se incluyó el proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, cuyo texto, acordado con la Comunidad Autónoma, se informa en la presente memoria.



Este Acuerdo de aceptación del nuevo Sistema de Financiación y de modificación del régimen de cesión y fijación del alcance y condiciones de la cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma, implica la aceptación tanto de los aspectos financieros como de los aspectos tributarios derivados del nuevo modelo. Dentro de este Acuerdo además, se procedió a la fijación del valor inicial del Fondo de Suficiencia Global, dando cumplimiento al apartado tres del artículo decimotercero de la nueva redacción de la LOFCA.

La necesidad de la aprobación del proyecto de Ley como requisito previo a la aplicabilidad de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, viene establecida en el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y en la disposición adicional séptima del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Así, el artículo 10.2 de la LOFCA señala que la cesión de tributos a las Comunidades Autónomas se entenderá efectuada cuando haya tenido lugar en virtud de precepto expreso del Estatuto correspondiente, sin perjuicio de que el alcance y condiciones de la misma, así como en su caso las competencias normativas comprendidas en esta cesión (art. 10.3 LOFCA), se establezcan en una Ley específica. Por tanto, para que pueda ser efectiva la cesión de tributos prevista en la Ley 22/2009, y en consecuencia, para la plena efectividad del propio sistema de financiación, se hace necesario adecuar el contenido de la disposición adicional séptima del Estatuto de Autonomía de Cataluña al nuevo régimen de cesión de tributos. En este mismo precepto se faculta para que, por acuerdo del Gobierno del Estado con el de la Generalitat, pueda modificarse el contenido de esta disposición, que será tramitada como Proyecto de Ley por el primero. También se señala que el alcance y condiciones de dicha cesión se establecerán por Acuerdo de Comisión Mixta y que dicho Acuerdo deberá ser tramitado por el Gobierno como Proyecto de Ley.

#### Oportunidad de la norma

En definitiva, la tramitación y aprobación del proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, es necesaria y oportuna, para en cumplimiento del artículo 10.2 de la LOFCA y de la disposición adicional séptima del Estatuto de Autonomía de Cataluña, hacer efectiva la aplicabilidad del nuevo sistema de financiación autonómica en la Comunidad Autónoma de Cataluña y determinar el alcance y condiciones de la cesión que se deriva del mismo.

Es por ello que el proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, no produce impactos de carácter económico ni impactos por razón de género. Esto significa, principalmente, que las consecuencias jurídicas y económicas, especialmente sobre la competencia, que se deriven para los agentes afectados, la incidencia desde el punto de vista presupuestario, de impacto de género, y en el orden constitucional de distribución de competencias, referidas a este anteproyecto son inexistentes, por cuanto se limita a cumplir con la formalidad necesaria para la aplicación de un sistema de financiación, ya en vigor, cuyos impactos normativos de todo orden se produjeron con la aprobación de la mencionada Ley 22/2009, de 18 de diciembre. Esto justifica el carácter abreviado de la Memoria de esta Ley.



### Descripción del contenido y tramitación de la propuesta normativa

El proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, consta de dos artículos, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.

El artículo 1 modifica el contenido de la disposición adicional séptima del Estatuto de Autonomía de Cataluña con el objeto de especificar que se ceden a esta Comunidad Autónoma el 50% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; el Impuesto sobre el Patrimonio; el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; los Tributos sobre el Juego; el 50 % del Impuesto sobre el Valor Añadido; el 58% del Impuesto sobre la Cerveza; el 58% del Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas; el 58% del Impuesto sobre Productos Intermedios; el 58% del Impuesto sobre Alcohol y Bebidas Derivadas; el 58% del Impuesto sobre Hidrocarburos; el 58% del Impuesto sobre las Labores del Tabaco; el Impuesto sobre la Electricidad; el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT) y el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH).

El artículo 2, en primer lugar, determina el alcance y condiciones de la cesión a esta Comunidad Autónoma, por remisión al régimen general establecido en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

En segundo lugar, este precepto establece la asunción, por parte de la Comunidad, de la competencia para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas en los términos establecidos en el segundo párrafo de la letra c) del artículo 59.1 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre.

Además, el precepto atribuye las competencias normativas en materia de tributos estatales cedidos, en el marco de lo dispuesto en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

Al igual que realizaba la antigua ley de cesión a la Comunidad, el presente texto incluye en el apartado 3 del artículo 2 determinadas competencias normativas y de inspección en materia de IVMDH e IEDMT.

La disposición transitoria primera regula el régimen transitorio de cesión efectiva del IVMDH y del IEDMT en relación con la gestión de estos impuestos. Con la inclusión de la disposición transitoria segunda, se regula también el régimen transitorio de la competencia para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas interpuestas contra los actos dictados por órganos autonómicos en relación con los tributos cedidos. Por último la disposición transitoria tercera clarifica el régimen aplicable a los tipos y escalas de gravamen para el año 2010.



121069

Listado de normas derogadas

La entrada en vigor de la Ley, que tendrá lugar el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, si bien surtirá efectos desde el 1 de enero de 2009, implicará la derogación de la Ley 17/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Generalidad de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, en tanto que esta es la Ley que fue dictada para hacer efectivo el sistema de financiación recogido en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía; Ley que queda derogada con la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, en los términos señalados en la misma.

Impactos presupuestario y por razón de género

Como se desprende de los antecedentes anteriores, esta norma no tiene impacto presupuestario, ni por razón de género.



**MEMORIA ABREVIADA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO de la Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.**

Justificación de la memoria abreviada. Base jurídica y rango normativo del proyecto

El proceso de negociación entre el Estado y las Comunidades Autónomas para la reforma del modelo de financiación, culminó con el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, en su reunión de 15 de julio de 2009, que adoptó, a propuesta del Gobierno de España, el Acuerdo 6/2009, de reforma del Sistema de Financiación de las CC.AA. de régimen común y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía, cuya puesta en práctica exigía llevar a cabo una serie de reformas legales.

La aprobación de este nuevo modelo precisaba inicialmente de la adecuación de determinados preceptos de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), así como la inclusión en dicha norma de determinados aspectos del sistema que requerían rango de ley orgánica. A tal efecto, tuvo lugar la aprobación de la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la LOFCA.

La plasmación normativa del modelo adoptado en el Acuerdo 6/2009 de 15 de julio se produjo con la promulgación de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, derogando la hasta ahora vigente Ley 21/2001, de 27 de diciembre, para aquellas Comunidades que hubieran aceptado el nuevo sistema de financiación.

Para hacer efectiva en cada Comunidad Autónoma la aplicación del nuevo sistema de financiación recogido en la Ley 22/2009 de 18 de diciembre, se exige como requisito *sine qua non* que la Comunidad Autónoma acepte el sistema en Comisión Mixta, tal y como se desprende de la disposición adicional cuarta, disposición transitoria segunda y tercera, y disposición derogatoria de dicha Ley.

La aceptación del sistema de financiación autonómica por la Comunidad Autónoma de Extremadura tuvo lugar en la sesión plenaria de la Comisión Mixta de Transferencias celebrada a tal efecto el 21 de diciembre de 2009. Esta Comisión adoptó el *Acuerdo de aceptación del nuevo Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, fijación del valor inicial del Fondo de Suficiencia Global, modificación del régimen de cesión y fijación del alcance y condiciones de la cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura*; y como Anexo al mismo se incluyó el proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, cuyo texto, acordado con la Comunidad Autónoma, se informa en la presente memoria.



**IX**  
Este Acuerdo de aceptación del nuevo Sistema de Financiación y de modificación del régimen de cesión y fijación del alcance y condiciones de la cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma, implica la aceptación tanto de los aspectos financieros como de los aspectos tributarios derivados del nuevo modelo. Dentro de este Acuerdo además, se procedió a la fijación del valor inicial del Fondo de Suficiencia Global, dando cumplimiento al apartado tres del artículo decimotercero de la nueva redacción de la LOFCA.

La necesidad de la aprobación del proyecto de Ley como requisito previo a la aplicabilidad de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, viene establecida en el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de Extremadura.

Así, el artículo 10.2 de la LOFCA señala que la cesión de tributos a las Comunidades Autónomas se entenderá efectuada cuando haya tenido lugar en virtud de precepto expreso del Estatuto correspondiente, sin perjuicio de que el alcance y condiciones de la misma, así como en su caso las competencias normativas comprendidas en esta cesión (art. 10.3 LOFCA), se establezcan en una Ley específica. Por tanto, para que pueda ser efectiva la cesión de tributos prevista en la Ley 22/2009, y en consecuencia, para la plena efectividad del propio sistema de financiación, se hace necesario adecuar el contenido del apartado 1 de la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de Extremadura al nuevo régimen de cesión de tributos. En el apartado 2 de este mismo precepto se faculta para que, por acuerdo del Gobierno del Estado con el de la Comunidad, pueda modificarse el contenido de esta disposición, que será tramitada como Proyecto de Ley por el primero. También se señala en el apartado 3 que el alcance y condiciones de dicha cesión se establecerán por Acuerdo de Comisión Mixta y que dicho Acuerdo deberá ser tramitado por el Gobierno como Proyecto de Ley.

#### Oportunidad de la norma

En definitiva, la tramitación y aprobación del proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, es necesaria y oportuna, para en cumplimiento del artículo 10.2 de la LOFCA y de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de Extremadura, hacer efectiva la aplicabilidad del nuevo sistema de financiación autonómica en la Comunidad Autónoma de Extremadura y determinar el alcance y condiciones de la cesión que se deriva del mismo.

Es por ello que el proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, no produce impactos de carácter económico ni impactos por razón de género. Esto significa, principalmente, que las consecuencias jurídicas y económicas, especialmente sobre la competencia, que se deriven para los agentes afectados, la incidencia desde el punto de vista presupuestario, de impacto de género, y en el orden constitucional de distribución de competencias, referidas a este anteproyecto son inexistentes, por cuanto se limita a cumplir con la formalidad necesaria para la aplicación de un sistema de financiación, ya en vigor, cuyos impactos normativos de todo





orden se produjeron con la aprobación de la mencionada Ley 22/2009, de 18 de diciembre. Esto justifica el carácter abreviado de la Memoria de esta Ley.

#### Descripción del contenido y tramitación de la propuesta normativa

El proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, consta de dos artículos, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.

El artículo 1 modifica el contenido del apartado 1 de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de Extremadura con el objeto de especificar que se ceden a esta Comunidad Autónoma el 50% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; el Impuesto sobre el Patrimonio; el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; los Tributos sobre el Juego; el 50 % del Impuesto sobre el Valor Añadido; el 58% del Impuesto sobre la Cerveza; el 58% del Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas; el 58% del Impuesto sobre Productos Intermedios; el 58% del Impuesto sobre Alcohol y Bebidas Derivadas; el 58% del Impuesto sobre Hidrocarburos; el 58% del Impuesto sobre las Labores del Tabaco; el Impuesto sobre la Electricidad; el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT) y el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH).

El artículo 2, en primer lugar, determina el alcance y condiciones de la cesión a esta Comunidad Autónoma, por remisión al régimen general establecido en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

En segundo lugar, este precepto establece la asunción, por parte de la Comunidad, de la competencia para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas en los términos establecidos en el segundo párrafo de la letra c) del artículo 59.1 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre.

Además, el precepto atribuye las competencias normativas en materia de tributos estatales cedidos, en el marco de lo dispuesto en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

Al igual que realizaba la antigua ley de cesión a la Comunidad, el presente texto incluye en el apartado 3 del artículo 2 determinadas competencias normativas y de inspección en materia de IVMDH e IEDMT.

La disposición transitoria primera regula el régimen transitorio de cesión efectiva del IVMDH y del IEDMT en relación con la gestión de estos impuestos. Con la inclusión de la disposición transitoria segunda, se regula también el régimen transitorio de la competencia para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas interpuestas contra los actos dictados por órganos autonómicos en relación con los tributos cedidos. Por último la disposición transitoria tercera clarifica el régimen aplicable a los tipos y escalas de gravamen para el año 2010.



121070

Listado de normas derogadas

La entrada en vigor de la Ley, que tendrá lugar el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, si bien surtirá efectos desde el 1 de enero de 2009, implicará la derogación de la Ley 28/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, en tanto que ésta es la Ley que fue dictada para hacer efectivo el sistema de financiación recogido en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía; Ley que queda derogada con la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, en los términos señalados en la misma.

Impactos presupuestario y por razón de género

Como se desprende de los antecedentes anteriores, esta norma no tiene impacto presupuestario, ni por razón de género.



**MEMORIA ABREVIADA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO de la Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.**

Justificación de la memoria abreviada. Base jurídica y rango normativo del proyecto

El proceso de negociación entre el Estado y las Comunidades Autónomas para la reforma del modelo de financiación, culminó con el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, en su reunión de 15 de julio de 2009, que adoptó, a propuesta del Gobierno de España, el Acuerdo 6/2009, de reforma del Sistema de Financiación de las CC.AA. de régimen común y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía, cuya puesta en práctica exigía llevar a cabo una serie de reformas legales.

La aprobación de este nuevo modelo precisaba inicialmente de la adecuación de determinados preceptos de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), así como la inclusión en dicha norma de determinados aspectos del sistema que requerían rango de ley orgánica. A tal efecto, tuvo lugar la aprobación de la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la LOFCA.

La plasmación normativa del modelo adoptado en el Acuerdo 6/2009 de 15 de julio se produjo con la promulgación de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, derogando la hasta ahora vigente Ley 21/2001, de 27 de diciembre, para aquellas Comunidades que hubieran aceptado el nuevo sistema de financiación.

Para hacer efectiva en cada Comunidad Autónoma la aplicación del nuevo sistema de financiación recogido en la Ley 22/2009 de 18 de diciembre, se exige como requisito *sine qua non* que la Comunidad Autónoma acepte el sistema en Comisión Mixta, tal y como se desprende de la disposición adicional cuarta, disposición transitoria segunda y tercera, y disposición derogatoria de dicha Ley.

La aceptación del sistema de financiación autonómica por la Comunidad Autónoma de Galicia tuvo lugar en la sesión plenaria de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia celebrada a tal efecto el 21 de diciembre de 2009. Esta Comisión adoptó el *Acuerdo de aceptación del nuevo Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, fijación del valor inicial del Fondo de Suficiencia Global, modificación del régimen de cesión y fijación del alcance y condiciones de la cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia*; y como Anexo al mismo se incluyó el proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, cuyo texto, acordado con la Comunidad Autónoma, se informa en la presente memoria.



Este Acuerdo de aceptación del nuevo Sistema de Financiación y de modificación del régimen de cesión y fijación del alcance y condiciones de la cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma, implica la aceptación tanto de los aspectos financieros como de los aspectos tributarios derivados del nuevo modelo. Dentro de este Acuerdo además, se procedió a la fijación del valor inicial del Fondo de Suficiencia Global, dando cumplimiento al apartado tres del artículo decimotercero de la nueva redacción de la LOFCA.

La necesidad de la aprobación del proyecto de Ley como requisito previo a la aplicabilidad de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, viene establecida en el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia.

Así, el artículo 10.2 de la LOFCA señala que la cesión de tributos a las Comunidades Autónomas se entenderá efectuada cuando haya tenido lugar en virtud de precepto expreso del Estatuto correspondiente, sin perjuicio de que el alcance y condiciones de la misma, así como en su caso las competencias normativas comprendidas en esta cesión (art. 10.3 LOFCA), se establezcan en una Ley específica. Por tanto, para que pueda ser efectiva la cesión de tributos prevista en la Ley 22/2009, y en consecuencia, para la plena efectividad del propio sistema de financiación, se hace necesario adecuar el contenido del apartado uno de la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia al nuevo régimen de cesión de tributos. En el apartado dos de este mismo precepto se faculta para que, por acuerdo del Gobierno del Estado con el de la Comunidad Autónoma, pueda modificarse el contenido de esta disposición, que será tramitada como Proyecto de Ley por el primero. También en el apartado tres se señala que el alcance y condiciones de dicha cesión se establecerán por Acuerdo de Comisión Mixta y que dicho Acuerdo deberá ser tramitado por el Gobierno como Proyecto de Ley.

#### Oportunidad de la norma

En definitiva, la tramitación y aprobación del proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, es necesaria y oportuna, para en cumplimiento del artículo 10.2 de la LOFCA y de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de Galicia, hacer efectiva la aplicabilidad del nuevo sistema de financiación autonómica en la Comunidad Autónoma de Galicia y determinar el alcance y condiciones de la cesión que se deriva del mismo.

Es por ello que el proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, no produce impactos de carácter económico ni impactos por razón de género. Esto significa, principalmente, que las consecuencias jurídicas y económicas, especialmente sobre la competencia, que se deriven para los agentes afectados, la incidencia desde el punto de vista presupuestario, de impacto de género, y en el orden constitucional de distribución de competencias, referidas a este anteproyecto son inexistentes, por cuanto se limita a cumplir con la formalidad necesaria para la aplicación de un sistema de financiación, ya en vigor, cuyos impactos normativos de todo



orden se produjeron con la aprobación de la mencionada Ley 22/2009, de 18 de diciembre. Esto justifica el carácter abreviado de la Memoria de esta Ley.

#### Descripción del contenido y tramitación de la propuesta normativa

El proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, consta de dos artículos, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.

El artículo 1 modifica el contenido del apartado uno de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía para Galicia con el objeto de especificar que se ceden a esta Comunidad Autónoma el 50% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; el Impuesto sobre el Patrimonio; el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; los Tributos sobre el Juego; el 50 % del Impuesto sobre el Valor Añadido; el 58% del Impuesto sobre la Cerveza; el 58% del Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas; el 58% del Impuesto sobre Productos Intermedios; el 58% del Impuesto sobre Alcohol y Bebidas Derivadas; el 58% del Impuesto sobre Hidrocarburos; el 58% del Impuesto sobre las Labores del Tabaco; el Impuesto sobre la Electricidad; el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT) y el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH).

El artículo 2, en primer lugar, determina el alcance y condiciones de la cesión a esta Comunidad Autónoma, por remisión al régimen general establecido en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

En segundo lugar, este precepto establece la asunción, por parte de la Comunidad, de la competencia para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas en los términos establecidos en el segundo párrafo de la letra c) del artículo 59.1 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre.

Además, el precepto atribuye las competencias normativas en materia de tributos estatales cedidos, en el marco de lo dispuesto en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

Al igual que realizaba la antigua ley de cesión a la Comunidad, el presente texto incluye en el apartado 3 del artículo 2 determinadas competencias normativas y de inspección en materia de IVMDH e IEDMT.

La disposición transitoria primera regula el régimen transitorio de cesión efectiva del IVMDH y del IEDMT en relación con la gestión de estos impuestos. Con la inclusión de la disposición transitoria segunda, se regula también el régimen transitorio de la competencia para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas interpuestas contra los actos dictados por órganos autonómicos en relación con los tributos cedidos. Por último la disposición transitoria tercera clarifica el régimen aplicable a los tipos y escalas de gravamen para el año 2010.



Listado de normas derogadas

La entrada en vigor de la Ley, que tendrá lugar el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, si bien surtirá efectos desde el 1 de enero de 2009, implicará la derogación de la Ley 18/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, en tanto que esta es la Ley que fue dictada para hacer efectivo el sistema de financiación recogido en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía; Ley que queda derogada con la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, en los términos señalados en la misma.

Impactos presupuestario y por razón de género

Como se desprende de los antecedentes anteriores, esta norma no tiene impacto presupuestario, ni por razón de género.



**MEMORIA ABREVIADA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO de la Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Illes Balears y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.**

Justificación de la memoria abreviada. Base jurídica y rango normativo del proyecto

El proceso de negociación entre el Estado y las Comunidades Autónomas para la reforma del modelo de financiación, culminó con el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, en su reunión de 15 de julio de 2009, que adoptó, a propuesta del Gobierno de España, el Acuerdo 6/2009, de reforma del Sistema de Financiación de las CC.AA. de régimen común y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía, cuya puesta en práctica exigía llevar a cabo una serie de reformas legales.

La aprobación de este nuevo modelo precisaba inicialmente de la adecuación de determinados preceptos de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), así como la inclusión en dicha norma de determinados aspectos del sistema que requerían rango de ley orgánica. A tal efecto, tuvo lugar la aprobación de la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la LOFCA.

La plasmación normativa del modelo adoptado en el Acuerdo 6/2009 de 15 de julio se produjo con la promulgación de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, derogando la hasta ahora vigente Ley 21/2001, de 27 de diciembre, para aquellas Comunidades que hubieran aceptado el nuevo sistema de financiación.

Para hacer efectiva en cada Comunidad Autónoma la aplicación del nuevo sistema de financiación recogido en la Ley 22/2009 de 18 de diciembre, se exige como requisito *sine qua non* que la Comunidad Autónoma acepte el sistema en Comisión Mixta, tal y como se desprende de la disposición adicional cuarta, disposición transitoria segunda y tercera, y disposición derogatoria de dicha Ley.

La aceptación del sistema de financiación autonómica por la Comunidad Autónoma de Illes Balears tuvo lugar en la sesión plenaria de la Comisión Mixta de Economía y Hacienda Estado-Illes Balears celebrada a tal efecto el 22 de diciembre de 2009. Esta Comisión adoptó el *Acuerdo de aceptación del nuevo Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, fijación del valor inicial del Fondo de Suficiencia Global, modificación del régimen de cesión y fijación del alcance y condiciones de la cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Illes Balears*; y como Anexo al mismo se incluyó el proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Illes Balears y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, cuyo texto, acordado con la Comunidad Autónoma, se informa en la presente memoria.



Este Acuerdo de aceptación del nuevo Sistema de Financiación y de modificación del régimen de cesión y fijación del alcance y condiciones de la cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma, implica la aceptación tanto de los aspectos financieros como de los aspectos tributarios derivados del nuevo modelo. Dentro de este Acuerdo además, se procedió a la fijación del valor inicial del Fondo de Suficiencia Global, dando cumplimiento al apartado tres del artículo decimotercero de la nueva redacción de la LOFCA.

La necesidad de la aprobación del proyecto de Ley como requisito previo a la aplicabilidad de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, viene establecida en el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y en la disposición adicional cuarta del Estatuto de Autonomía regulado por la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.

Así, el artículo 10.2 de la LOFCA señala que la cesión de tributos a las Comunidades Autónomas se entenderá efectuada cuando haya tenido lugar en virtud de precepto expreso del Estatuto correspondiente, sin perjuicio de que el alcance y condiciones de la misma, así como en su caso las competencias normativas comprendidas en esta cesión (art. 10.3 LOFCA), se establezcan en una Ley específica. Por tanto, para que pueda ser efectiva la cesión de tributos prevista en la Ley 22/2009, y en consecuencia, para la plena efectividad del propio sistema de financiación, se hace necesario adecuar el contenido del apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Estatuto de Autonomía regulado por la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears al nuevo régimen de cesión de tributos. En el apartado 2 de este mismo precepto se faculta para que, por acuerdo del Gobierno del Estado con el de la Comunidad, pueda modificarse el contenido de esta disposición, que será tramitada como Proyecto de Ley por el primero. También en el apartado 3 se señala que el alcance y condiciones de dicha cesión se establecerán por Acuerdo de Comisión Mixta y que dicho Acuerdo deberá ser tramitado por el Gobierno como Proyecto de Ley.

#### Oportunidad de la norma

En definitiva, la tramitación y aprobación del proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, es necesaria y oportuna, para en cumplimiento del artículo 10.2 de la LOFCA y de la disposición adicional cuarta del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, hacer efectiva la aplicabilidad del nuevo sistema de financiación autonómica en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y determinar el alcance y condiciones de la cesión que se deriva del mismo.

Es por ello que el proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, no produce impactos de carácter económico ni impactos por razón de género. Esto significa, principalmente, que las consecuencias jurídicas y económicas, especialmente sobre la competencia, que se deriven para los agentes afectados, la incidencia desde el punto de vista presupuestario, de impacto de género, y en el orden constitucional de distribución de competencias, referidas a este anteproyecto son inexistentes, por cuanto se limita a cumplir con la formalidad necesaria para la aplicación de





121072

un sistema de financiación, ya en vigor, cuyos impactos normativos de todo orden se produjeron con la aprobación de la mencionada Ley 22/2009, de 18 de diciembre. Esto justifica el carácter abreviado de la Memoria de esta Ley.

### Descripción del contenido y tramitación de la propuesta normativa

El proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, consta de dos artículos, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.

El artículo 1 modifica el contenido del apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears con el objeto de especificar que se ceden a esta Comunidad Autónoma el 50% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; el Impuesto sobre el Patrimonio; el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; los Tributos sobre el Juego; el 50 % del Impuesto sobre el Valor Añadido; el 58% del Impuesto sobre la Cerveza; el 58% del Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas; el 58% del Impuesto sobre Productos Intermedios; el 58% del Impuesto sobre Alcohol y Bebidas Derivadas; el 58% del Impuesto sobre Hidrocarburos; el 58% del Impuesto sobre las Labores del Tabaco; el Impuesto sobre la Electricidad; el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT) y el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH).

El artículo 2, en primer lugar, determina el alcance y condiciones de la cesión a esta Comunidad Autónoma, por remisión al régimen general establecido en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

En segundo lugar, este precepto establece la asunción, por parte de la Comunidad, de la competencia para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas en los términos establecidos en el segundo párrafo de la letra c) del artículo 59.1 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre.

Además, el precepto atribuye las competencias normativas en materia de tributos estatales cedidos, en el marco de lo dispuesto en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

Al igual que realizaba la antigua ley de cesión a la Comunidad, el presente texto incluye en el apartado 3 del artículo 2 determinadas competencias normativas y de inspección en materia de IVMDH e IEDMT.

La disposición transitoria primera regula el régimen transitorio de cesión efectiva del IVMDH y del IEDMT en relación con la gestión de estos impuestos. Con la inclusión de la disposición transitoria segunda, se regula también el régimen transitorio de la competencia para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas interpuestas contra los actos dictados por órganos autonómicos en relación con los tributos cedidos. Por último la disposición



121072

transitoria tercera clarifica el régimen aplicable a los tipos y escalas de gravamen para el año 2010.

Listado de normas derogadas

La entrada en vigor de la Ley, que tendrá lugar el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, si bien surtirá efectos desde el 1 de enero de 2009, implicará la derogación de la Ley 29/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, en tanto que ésta es la Ley que fue dictada para hacer efectivo el sistema de financiación recogido en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía; Ley que queda derogada con la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, en los términos señalados en la misma.

Impactos presupuestario y por razón de género

Como se desprende de los antecedentes anteriores, esta norma no tiene impacto presupuestario, ni por razón de género.



**MEMORIA ABREVIADA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO de la Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.**

Justificación de la memoria abreviada. Base jurídica y rango normativo del proyecto

El proceso de negociación entre el Estado y las Comunidades Autónomas para la reforma del modelo de financiación, culminó con el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, en su reunión de 15 de julio de 2009, que adoptó, a propuesta del Gobierno de España, el Acuerdo 6/2009, de reforma del Sistema de Financiación de las CC.AA. de régimen común y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía, cuya puesta en práctica exigía llevar a cabo una serie de reformas legales.

La aprobación de este nuevo modelo precisaba inicialmente de la adecuación de determinados preceptos de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), así como la inclusión en dicha norma de determinados aspectos del sistema que requerían rango de ley orgánica. A tal efecto, tuvo lugar la aprobación de la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la LOFCA.

La plasmación normativa del modelo adoptado en el Acuerdo 6/2009 de 15 de julio se produjo con la promulgación de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, derogando la hasta ahora vigente Ley 21/2001, de 27 de diciembre, para aquellas Comunidades que hubieran aceptado el nuevo sistema de financiación.

Para hacer efectiva en cada Comunidad Autónoma la aplicación del nuevo sistema de financiación recogido en la Ley 22/2009 de 18 de diciembre, se exige como requisito *sine qua non* que la Comunidad Autónoma acepte el sistema en Comisión Mixta, tal y como se desprende de la disposición adicional cuarta, disposición transitoria segunda y tercera, y disposición derogatoria de dicha Ley.

La aceptación del sistema de financiación autonómica por la Comunidad Autónoma de La Rioja tuvo lugar en la sesión plenaria de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja celebrada a tal efecto el 21 de diciembre de 2009. Esta Comisión adoptó el *Acuerdo de aceptación del nuevo Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, fijación del valor inicial del Fondo de Suficiencia Global, modificación del régimen de cesión y fijación del alcance y condiciones de la cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja*; y como Anexo al mismo se incluyó el proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, cuyo texto, acordado con la Comunidad Autónoma, se informa en la presente memoria.



1121073  
Este Acuerdo de aceptación del nuevo Sistema de Financiación y de modificación del régimen de cesión y fijación del alcance y condiciones de la cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma, implica la aceptación tanto de los aspectos financieros como de los aspectos tributarios derivados del nuevo modelo. Dentro de este Acuerdo además, se procedió a la fijación del valor inicial del Fondo de Suficiencia Global, dando cumplimiento al apartado tres del artículo decimotercero de la nueva redacción de la LOFCA.

La necesidad de la aprobación del proyecto de Ley como requisito previo a la aplicabilidad de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, viene establecida en el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de La Rioja.

Así, el artículo 10.2 de la LOFCA señala que la cesión de tributos a las Comunidades Autónomas se entenderá efectuada cuando haya tenido lugar en virtud de precepto expreso del Estatuto correspondiente, sin perjuicio de que el alcance y condiciones de la misma, así como en su caso las competencias normativas comprendidas en esta cesión (art. 10.3 LOFCA), se establezcan en una Ley específica. Por tanto, para que pueda ser efectiva la cesión de tributos prevista en la Ley 22/2009, y en consecuencia, para la plena efectividad del propio sistema de financiación, se hace necesario adecuar el contenido del apartado uno de la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de La Rioja al nuevo régimen de cesión de tributos. En el apartado dos de este mismo precepto se faculta para que, por acuerdo del Gobierno del Estado con el de la Comunidad pueda modificarse el contenido de esta disposición, que será tramitada como Proyecto de Ley por el primero. También se señala en el apartado tres que el alcance y condiciones de dicha cesión se establecerán por Acuerdo de Comisión Mixta y que dicho Acuerdo deberá ser tramitado por el Gobierno como Proyecto de Ley.

#### Oportunidad de la norma

En definitiva, la tramitación y aprobación del proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, es necesaria y oportuna, para en cumplimiento del artículo 10.2 de la LOFCA y de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de La Rioja, hacer efectiva la aplicabilidad del nuevo sistema de financiación autonómica en la Comunidad Autónoma de La Rioja y determinar el alcance y condiciones de la cesión que se deriva del mismo.

Es por ello que el proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, no produce impactos de carácter económico ni impactos por razón de género. Esto significa, principalmente, que las consecuencias jurídicas y económicas, especialmente sobre la competencia, que se deriven para los agentes afectados, la incidencia desde el punto de vista presupuestario, de impacto de género, y en el orden constitucional de distribución de competencias, referidas a este anteproyecto son inexistentes, por cuanto se limita a cumplir con la formalidad necesaria para la aplicación de un sistema de financiación, ya en vigor, cuyos impactos normativos de todo



orden se produjeron con la aprobación de la mencionada Ley 22/2009, de 18 de diciembre. Esto justifica el carácter abreviado de la Memoria de esta Ley.

Descripción del contenido y tramitación de la propuesta normativa

El proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, consta de dos artículos, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.

El artículo 1 modifica el contenido del apartado uno de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de La Rioja con el objeto de especificar que se ceden a esta Comunidad Autónoma el 50% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; el Impuesto sobre el Patrimonio; el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; los Tributos sobre el Juego; el 50 % del Impuesto sobre el Valor Añadido; el 58% del Impuesto sobre la Cerveza; el 58% del Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas; el 58% del Impuesto sobre Productos Intermedios; el 58% del Impuesto sobre Alcohol y Bebidas Derivadas; el 58% del Impuesto sobre Hidrocarburos; el 58% del Impuesto sobre las Labores del Tabaco; el Impuesto sobre la Electricidad; el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT) y el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH).

El artículo 2, en primer lugar, determina el alcance y condiciones de la cesión a esta Comunidad Autónoma, por remisión al régimen general establecido en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

En segundo lugar, este precepto establece la asunción, por parte de la Comunidad, de la competencia para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas en los términos establecidos en el primer párrafo de la letra c) del artículo 59.1 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre.

Además, el precepto atribuye las competencias normativas en materia de tributos estatales cedidos, en el marco de lo dispuesto en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

Al igual que realizaba la antigua ley de cesión a la Comunidad, el presente texto incluye en el apartado 3 del artículo 2 determinadas competencias normativas y de inspección en materia de IVMDH e IEDMT.

La disposición transitoria primera regula el régimen transitorio de cesión efectiva del IVMDH y del IEDMT en relación con la gestión de estos impuestos. Con la inclusión de la disposición transitoria segunda, se regula también el régimen transitorio de la competencia para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas interpuestas contra los actos dictados por órganos autonómicos en relación con los tributos cedidos. Por último la disposición transitoria tercera clarifica el régimen aplicable a los tipos y escalas de gravamen para el año 2010.



Listado de normas derogadas

La entrada en vigor de la Ley, que tendrá lugar el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, si bien surtirá efectos desde el 1 de enero de 2009, implicará la derogación de la Ley 22/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, en tanto que esta es la Ley que fue dictada para hacer efectivo el sistema de financiación recogido en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía; Ley que queda derogada con la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, en los términos señalados en la misma.

Impactos presupuestario y por razón de género

Como se desprende de los antecedentes anteriores, esta norma no tiene impacto presupuestario, ni por razón de género.



MEMORIA ABREVIADA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO de la Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad de Madrid y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.

Justificación de la memoria abreviada. Base jurídica y rango normativo del proyecto

El proceso de negociación entre el Estado y las Comunidades Autónomas para la reforma del modelo de financiación, culminó con el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, en su reunión de 15 de julio de 2009, que adoptó, a propuesta del Gobierno de España, el Acuerdo 6/2009, de reforma del Sistema de Financiación de las CC.AA. de régimen común y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía, cuya puesta en práctica exigía llevar a cabo una serie de reformas legales.

La aprobación de este nuevo modelo precisaba inicialmente de la adecuación de determinados preceptos de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), así como la inclusión en dicha norma de determinados aspectos del sistema que requerían rango de ley orgánica. A tal efecto, tuvo lugar la aprobación de la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la LOFCA.

La plasmación normativa del modelo adoptado en el Acuerdo 6/2009 de 15 de julio se produjo con la promulgación de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, derogando la hasta ahora vigente Ley 21/2001, de 27 de diciembre, para aquellas Comunidades que hubieran aceptado el nuevo sistema de financiación.

Para hacer efectiva en cada Comunidad Autónoma la aplicación del nuevo sistema de financiación recogido en la Ley 22/2009 de 18 de diciembre, se exige como requisito *sine qua non* que la Comunidad Autónoma acepte el sistema en Comisión Mixta, tal y como se desprende de la disposición adicional cuarta, disposición transitoria segunda y tercera, y disposición derogatoria de dicha Ley.

La aceptación del sistema de financiación autonómica por la Comunidad de Madrid tuvo lugar en la sesión plenaria de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad de Madrid celebrada a tal efecto el 21 de diciembre de 2009. Esta Comisión adoptó el Acuerdo de aceptación del nuevo Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, fijación del valor inicial del Fondo de Suficiencia Global, modificación del régimen de cesión y fijación del alcance y condiciones de la cesión de tributos del Estado a la Comunidad de Madrid; y como Anexo al mismo se incluyó el proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad de Madrid y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, cuyo texto, acordado con la Comunidad Autónoma, se informa en la presente memoria.

Este Acuerdo de aceptación del nuevo Sistema de Financiación y de modificación del régimen de cesión y fijación del alcance y condiciones de



cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma, implica la aceptación tanto de los aspectos financieros como de los aspectos tributarios derivadas del nuevo modelo. Dentro de este Acuerdo además, se procedió a la fijación del valor inicial del Fondo de Suficiencia Global, dando cumplimiento al apartado tres del artículo decimotercero de la nueva redacción de la LOFCA.

La necesidad de la aprobación del proyecto de Ley como requisito previo a la aplicabilidad de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, viene establecida en el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y en disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.

Así, el artículo 10.2 de la LOFCA señala que la cesión de tributos a las Comunidades Autónomas se entenderá efectuada cuando haya tenido lugar en virtud de precepto expreso del Estatuto correspondiente, sin perjuicio de que el alcance y condiciones de la misma, así como en su caso las competencias normativas comprendidas en esta cesión (art. 10.3 LOFCA), se establezcan en una Ley específica. Por tanto, para que pueda ser efectiva la cesión de tributos prevista en la Ley 22/2009, y en consecuencia, para la plena efectividad del propio sistema de financiación, se hace necesario adecuar el contenido del apartado 1 de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid al nuevo régimen de cesión de tributos. En el apartado 2 de este mismo precepto se faculta para que, por acuerdo del Gobierno del Estado con el de la Comunidad Autónoma, pueda modificarse el contenido de esta disposición, que será tramitada como Proyecto de Ley por el primero. También se señala en el apartado 3 que el alcance y condiciones de dicha cesión se establecerán por Acuerdo de Comisión Mixta.

#### Oportunidad de la norma

En definitiva, la tramitación y aprobación del proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad de Madrid y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, es necesaria y oportuna, para en cumplimiento del artículo 10.2 de la LOFCA y de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, hacer efectiva la aplicabilidad del nuevo sistema de financiación autonómica en la Comunidad de Madrid y determinar el alcance y condiciones de la cesión que se deriva del mismo.

Es por ello que el proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad de Madrid y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, no produce impactos de carácter económico ni impactos por razón de género. Esto significa, principalmente, que las consecuencias jurídicas y económicas, especialmente sobre la competencia, que se deriven para los agentes afectados, la incidencia desde el punto de vista presupuestario, de impacto de género, y en el orden constitucional de distribución de competencias, referidas a este anteproyecto son inexistentes, por cuanto se limita a cumplir con la formalidad necesaria para la aplicación de un sistema de financiación, ya en vigor, cuyos impactos normativos de todo orden se produjeron con la aprobación de la mencionada Ley 22/2009, de 18 de diciembre. Esto justifica el carácter abreviado de la Memoria de esta Ley.





Descripción del contenido y tramitación de la propuesta normativa

El proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad de Madrid y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, consta de dos artículos, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.

El artículo 1 modifica el contenido del apartado 1 de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid con el objeto de especificar que se ceden a esta Comunidad Autónoma el 50% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; el Impuesto sobre el Patrimonio; el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; los Tributos sobre el Juego; el 50 % del Impuesto sobre el Valor Añadido; el 58% del Impuesto sobre la Cerveza; el 58% del Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas; el 58% del Impuesto sobre Productos Intermedios; el 58% del Impuesto sobre Alcohol y Bebidas Derivadas; el 58% del Impuesto sobre Hidrocarburos; el 58% del Impuesto sobre las Labores del Tabaco; el Impuesto sobre la Electricidad; el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT) y el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH).

El artículo 2, en primer lugar, determina el alcance y condiciones de la cesión a esta Comunidad Autónoma, por remisión al régimen general establecido en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

En segundo lugar, este precepto establece la asunción, por parte de la Comunidad, de la competencia para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas en los términos establecidos en el primer párrafo de la letra c) del artículo 59.1 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre.

Además, el precepto atribuye las competencias normativas en materia de tributos estatales cedidos, en el marco de lo dispuesto en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

Al igual que realizaba la antigua ley de cesión a la Comunidad, el presente texto incluye en el apartado 3 del artículo 2 determinadas competencias normativas y de inspección en materia de IVMDH e IEDMT.

La disposición transitoria primera regula el régimen transitorio de cesión efectiva del IVMDH y del IEDMT en relación con la gestión de estos impuestos. Con la inclusión de la disposición transitoria segunda, se regula también el régimen transitorio de la competencia para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas interpuestas contra los actos dictados por órganos autonómicos en relación con los tributos cedidos. Por último la disposición transitoria tercera clarifica el régimen aplicable a los tipos y escalas de gravamen para el año 2010.



Listado de normas derogadas

La entrada en vigor de la Ley, que tendrá lugar el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, si bien surtirá efectos desde el 1 de enero de 2009, implicará la derogación de la Ley 30/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad de Madrid y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, en tanto que ésta es la Ley que fue dictada para hacer efectivo el sistema de financiación recogido en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía; Ley que queda derogada con la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, en los términos señalados en la misma.

Impactos presupuestario y por razón de género

Como se desprende de los antecedentes anteriores, esta norma no tiene impacto presupuestario, ni por razón de género.



MEMORIA ABREVIADA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO de la Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.

Justificación de la memoria abreviada. Base jurídica y rango normativo del proyecto

El proceso de negociación entre el Estado y las Comunidades Autónomas para la reforma del modelo de financiación, culminó con el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, en su reunión de 15 de julio de 2009, que adoptó, a propuesta del Gobierno de España, el Acuerdo 6/2009, de reforma del Sistema de Financiación de las CC.AA. de régimen común y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía, cuya puesta en práctica exigía llevar a cabo una serie de reformas legales.

La aprobación de este nuevo modelo precisaba inicialmente de la adecuación de determinados preceptos de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) así como la inclusión en dicha norma de determinados aspectos del sistema que requerían rango de ley orgánica. A tal efecto, tuvo lugar la aprobación de la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la LOFCA.

La plasmación normativa del modelo adoptado en el Acuerdo 6/2009 de 15 de julio se produjo con la promulgación de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, derogando la hasta ahora vigente Ley 21/2001, de 27 de diciembre, para aquellas Comunidades que hubieran aceptado el nuevo sistema de financiación.

Para hacer efectiva en cada Comunidad Autónoma la aplicación del nuevo sistema de financiación recogido en la Ley 22/2009 de 18 de diciembre, se exige como requisito *sine qua non* que la Comunidad Autónoma acepte el sistema en Comisión Mixta, tal y como se desprende de la disposición adicional cuarta, disposición transitoria segunda y tercera, y disposición derogatoria de dicha Ley.

La aceptación del sistema de financiación autonómica por la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias tuvo lugar en la sesión plenaria de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma del Principado de Asturias celebrada a tal efecto el 21 de diciembre de 2009. Esta Comisión adoptó el Acuerdo de aceptación del nuevo Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, fijación del valor inicial del Fondo de Suficiencia Global, modificación del régimen de cesión y fijación del alcance y condiciones de la cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias; y como Anexo al mismo se incluyó el proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, cuyo texto acordado con la Comunidad Autónoma, se informa en la presente memoria.



C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
Q  
R  
S  
T  
U  
V  
W  
X  
Y  
Z

Este Acuerdo de aceptación del nuevo Sistema de Financiación y de modificación del régimen de cesión y fijación del alcance y condiciones de la cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma, implica la aceptación tanto de los aspectos financieros como de los aspectos tributarios derivados del nuevo modelo. Dentro de este Acuerdo además, se procedió a la fijación del valor inicial del Fondo de Suficiencia Global, dando cumplimiento al apartado tres del artículo decimotercero de la nueva redacción de la LOFCA.

La necesidad de la aprobación del proyecto de Ley como requisito previo a la aplicabilidad de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, viene establecida en el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y en la disposición adicional de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de reforma del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias.

Así, el artículo 10.2 de la LOFCA señala que la cesión de tributos a las Comunidades Autónomas se entenderá efectuada cuando haya tenido lugar en virtud de precepto expreso del Estatuto correspondiente, sin perjuicio de que el alcance y condiciones de la misma, así como en su caso las competencias normativas comprendidas en esta cesión (art. 10.3 LOFCA), se establezcan en una Ley específica. Por tanto, para que pueda ser efectiva la cesión de tributos prevista en la Ley 22/2009, y en consecuencia, para la plena efectividad del propio sistema de financiación, se hace necesario adecuar el contenido del apartado 1 de la disposición adicional de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de reforma del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias al nuevo régimen de cesión de tributos. En el apartado 2 de este mismo precepto se faculta para que, por acuerdo del Gobierno del Estado con el de la Comunidad Autónoma, pueda modificarse el contenido de esta disposición, que será tramitada como Proyecto de Ley por el primero. También se señala en el apartado 3 que el alcance y condiciones de dicha cesión se establecerán por Acuerdo de Comisión Mixta y que dicho Acuerdo deberá ser tramitado por el Gobierno como Proyecto de Ley.

#### Oportunidad de la norma

En definitiva, la tramitación y aprobación del proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, es necesaria y oportuna, para en cumplimiento del artículo 10.2 de la LOFCA y de la disposición adicional del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, hacer efectiva la aplicabilidad del nuevo sistema de financiación autonómica en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y determinar el alcance y condiciones de la cesión que se deriva del mismo.

Es por ello que el proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, no produce impactos de carácter económico ni impactos por razón de género. Esto significa, principalmente, que las consecuencias jurídicas y económicas, especialmente sobre la competencia, que se deriven para los agentes afectados, la incidencia desde el punto de vista presupuestario, de impacto de género, y en el orden constitucional de distribución de competencias, referidas a este anteproyecto son inexistentes, por cuanto se limita a cumplir con la formalidad necesaria para la aplicación de



un sistema de financiación, ya en vigor, cuyos impactos normativos de todo orden se produjeron con la aprobación de la mencionada Ley 22/2009, de 18 de diciembre. Esto justifica el carácter abreviado de la Memoria de esta Ley.

#### Descripción del contenido y tramitación de la propuesta normativa

El proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, consta de dos artículos, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.

El artículo 1 modifica el contenido del apartado 1 de la disposición adicional con el objeto de especificar que se ceden a esta Comunidad Autónoma el 50% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; el Impuesto sobre el Patrimonio; el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; los Tributos sobre el Juego; el 50 % del Impuesto sobre el Valor Añadido; el 58% del Impuesto sobre la Cerveza; el 58% del Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas; el 58% del Impuesto sobre Productos Intermedios; el 58% del Impuesto sobre Alcohol y Bebidas Derivadas; el 58% del Impuesto sobre Hidrocarburos; el 58% del Impuesto sobre las Labores del Tabaco; el Impuesto sobre la Electricidad; el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT) y el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH).

El artículo 2, en primer lugar, determina el alcance y condiciones de la cesión a esta Comunidad Autónoma, por remisión al régimen general establecido en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

En segundo lugar, este precepto establece la asunción, por parte de la Comunidad, de la competencia para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas en los términos establecidos en el segundo párrafo de la letra c) del artículo 59.1 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre.

Además, el precepto atribuye las competencias normativas en materia de tributos estatales cedidos, en el marco de lo dispuesto en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

Al igual que realizaba la antigua ley de cesión a la Comunidad, el presente texto incluye en el apartado 3 del artículo 2 determinadas competencias normativas y de inspección en materia de IVMDH e IEDMT.

La disposición transitoria primera regula el régimen transitorio de cesión efectiva del IVMDH y del IEDMT en relación con la gestión de estos impuestos. Con la inclusión de la disposición transitoria segunda, se regula también el régimen transitorio de la competencia para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas interpuestas contra los actos dictados por órganos autonómicos en relación con los tributos cedidos. Por último la disposición



721075

transitoria tercera clarifica el régimen aplicable a los tipos y escalas de gravamen para el año 2010.

Listado de normas derogadas

La entrada en vigor de la Ley, que tendrá lugar el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, si bien surtirá efectos desde el 1 de enero de 2009, implicará la derogación de la Ley 20/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, en tanto que esta es la Ley que fue dictada para hacer efectivo el sistema de financiación recogido en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía; Ley que queda derogada con la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, en los términos señalados en la misma.

Impactos presupuestario y por razón de género

Como se desprende de los antecedentes anteriores, esta norma no tiene impacto presupuestario, ni por razón de género.



MEMORIA ABREVIADA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO de la Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.

Justificación de la memoria abreviada. Base jurídica y rango normativo del proyecto

El proceso de negociación entre el Estado y las Comunidades Autónomas para la reforma del modelo de financiación, culminó con el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, en su reunión de 16 de julio de 2009, que adoptó, a propuesta del Gobierno de España, el Acuerdo 6/2009, de reforma del Sistema de Financiación de las CC.AA. de régimen común y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía, cuya puesta en práctica exigía llevar a cabo una serie de reformas legales.

La aprobación de este nuevo modelo precisaba inicialmente de la adecuación de determinados preceptos de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), así como la inclusión en dicha norma de determinados aspectos del sistema que requerían rango de ley orgánica. A tal efecto, tuvo lugar la aprobación de la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la LOFCA.

La plasmación normativa del modelo adoptado en el Acuerdo 6/2009 de 16 de julio se produjo con la promulgación de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, derogando la hasta ahora vigente Ley 21/2001, de 27 de diciembre, para aquellas Comunidades que hubieran aceptado el nuevo sistema de financiación.

Para hacer efectiva en cada Comunidad Autónoma la aplicación del nuevo sistema de financiación recogido en la Ley 22/2009 de 18 de diciembre, se exige como requisito *sine qua non* que la Comunidad Autónoma acepte el sistema en Comisión Mixta, tal y como se desprende de la disposición adicional cuarta, disposición transitoria segunda y tercera, y disposición derogatoria de dicha Ley.

La aceptación del sistema de financiación autonómica por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tuvo lugar en la sesión plenaria de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia celebrada a tal efecto el 21 de diciembre de 2009. Esta Comisión adoptó el Acuerdo de aceptación del nuevo Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, fijación del valor inicial del Fondo de Suficiencia Global, modificación del régimen de cesión y fijación del alcance y condiciones de la cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; y como Anexo al mismo se incluyó el proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, cuyo texto, acordado con la Comunidad Autónoma, se informa en la presente memoria.



12.1075

Este Acuerdo de aceptación del nuevo Sistema de Financiación y de modificación del régimen de cesión y fijación del alcance y condiciones de la cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma, implica la aceptación tanto de los aspectos financieros como de los aspectos tributarios derivados del nuevo modelo. Dentro de este Acuerdo además, se procedió a la fijación del valor inicial del Fondo de Suficiencia Global, dando cumplimiento al apartado tres del artículo decimotercero de la nueva redacción de la LOFCA.

La necesidad de la aprobación del proyecto de Ley como requisito previo a la aplicabilidad de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, viene establecida en el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia.

Así, el artículo 10.2 de la LOFCA señala que la cesión de tributos a las Comunidades Autónomas se entenderá afectuada cuando haya tenido lugar en virtud de precepto expreso del Estatuto correspondiente, sin perjuicio de que el alcance y condiciones de la misma, así como en su caso las competencias normativas comprendidas en esta cesión (art. 10.3 LOFCA), se establezcan en una Ley específica. Por tanto, para que pueda ser efectiva la cesión de tributos prevista en la Ley 22/2009, y en consecuencia, para la plena efectividad del propio sistema de financiación, se hace necesario adecuar el contenido del apartado uno de la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia al nuevo régimen de cesión de tributos. En el apartado cuatro de este mismo precepto se faculta para que, por acuerdo del Gobierno del Estado con el de la Comunidad Autónoma, pueda modificarse el contenido de esta disposición, que será tramitada como Proyecto de Ley por el primero. También se señala en el apartado dos que el alcance y condiciones de dicha cesión se establecerán por Acuerdo de Comisión Mixta y que dicho Acuerdo deberá ser tramitado por el Gobierno como Proyecto de Ley.

#### Oportunidad de la norma

En definitiva, la tramitación y aprobación del proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, es necesaria y oportuna, para en cumplimiento del artículo 10.2 de la LOFCA y de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, hacer efectiva la aplicabilidad del nuevo sistema de financiación autonómica en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y determinar el alcance y condiciones de la cesión que se deriva del mismo.

Es por ello que el proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, no produce impactos de carácter económico ni impactos por razón de género. Esto significa, principalmente, que las consecuencias jurídicas y económicas, especialmente sobre la competencia, que se deriven para los agentes afectados, la incidencia desde el punto de vista presupuestario, de impacto de género, y en el orden constitucional de distribución de competencias, referidas a este anteproyecto son inexistentes, por cuanto se limita a cumplir con la formalidad necesaria para la aplicación de





un sistema de financiación, ya en vigor, cuyos impactos normativos de todo orden se produjeron con la aprobación de la mencionada Ley 22/2009, de 18 de diciembre. Esto justifica el carácter abreviado de la Memoria de esta Ley.

#### Descripción del contenido y tramitación de la propuesta normativa

El proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, consta de dos artículos, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.

El artículo 1 modifica el contenido del apartado uno de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia con el objeto de especificar que se ceden a esta Comunidad Autónoma el 50% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; el Impuesto sobre el Patrimonio; el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; los Tributos sobre el Juego; el 50 % del Impuesto sobre el Valor Añadido; el 58% del Impuesto sobre la Cerveza; el 58% del Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas; el 58% del Impuesto sobre Productos Intermedios; el 58% del Impuesto sobre Alcohol y Bebidas Derivadas; el 58% del Impuesto sobre Hidrocarburos; el 58% del Impuesto sobre las Labores del Tabaco; el Impuesto sobre la Electricidad; el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT) y el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH).

El artículo 2, en primer lugar, determina el alcance y condiciones de la cesión a esta Comunidad Autónoma, por remisión al régimen general establecido en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

En segundo lugar, este precepto establece la asunción, por parte de la Comunidad, de la competencia para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas en los términos establecidos en el primer párrafo de la letra c) del artículo 59.1 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre.

Además, el precepto atribuye las competencias normativas en materia de tributos estatales cedidos, en el marco de lo dispuesto en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

Al igual que realizaba la antigua ley de cesión a la Comunidad, el presente texto incluye en el apartado 3 del artículo 2 determinadas competencias normativas y de inspección en materia de IVMDH e IEDMT.

La disposición transitoria primera regula el régimen transitorio de cesión efectiva del IVMDH y del IEDMT en relación con la gestión de estos impuestos. Con la inclusión de la disposición transitoria segunda, se regula también el régimen transitorio de la competencia para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas interpuestas contra los actos dictados por órganos autonómicos en relación con los tributos cedidos. Por último la disposición



121076

transitoria tercera clarifica el régimen aplicable a los tipos y escalas de gravamen para el año 2010.

Listado de normas derogadas

La entrada en vigor de la Ley, que tendrá lugar el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, si bien surtirá efectos desde el 1 de enero de 2009, implicará la derogación de la Ley 23/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, en tanto que ésta es la Ley que fue dictada para hacer efectivo el sistema de financiación recogido en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía; Ley que queda derogada con la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, en los términos señalados en la misma.

Impactos presupuestario y por razón de género

Como se desprende de los antecedentes anteriores, esta norma no tiene impacto presupuestario, ni por razón de género.



121077

**MEMORIA ABREVIADA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO de la Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunitat Valenciana y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.**

Justificación de la memoria abreviada. Base jurídica y rango normativo del proyecto

El proceso de negociación entre el Estado y las Comunidades Autónomas para la reforma del modelo de financiación, culminó con el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, en su reunión de 15 de julio de 2009, que adoptó, a propuesta del Gobierno de España, el Acuerdo 6/2009, de reforma del Sistema de Financiación de las CC.AA. de régimen común y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía, cuya puesta en práctica exigía llevar a cabo una serie de reformas legales.

La aprobación de este nuevo modelo precisaba inicialmente de la adecuación de determinados preceptos de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), así como la inclusión en dicha norma de determinados aspectos del sistema que requerían rango de ley orgánica. A tal efecto, tuvo lugar la aprobación de la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la LOFCA.

La plasmación normativa del modelo adoptado en el Acuerdo 6/2009 de 15 de julio se produjo con la promulgación de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, derogando la hasta ahora vigente Ley 21/2001, de 27 de diciembre, para aquellas Comunidades que hubieran aceptado el nuevo sistema de financiación.

Para hacer efectiva en cada Comunidad Autónoma la aplicación del nuevo sistema de financiación recogido en la Ley 22/2009 de 18 de diciembre, se exige como requisito *sine qua non* que la Comunidad Autónoma acepte el sistema en Comisión Mixta, tal y como se desprende de la disposición adicional cuarta, disposición transitoria segunda y tercera, y disposición derogatoria de dicha Ley.

La aceptación del sistema de financiación autonómica por la Comunitat Valenciana tuvo lugar en la sesión plenaria de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunitat Valenciana celebrada a tal efecto el 22 de diciembre de 2009. Esta Comisión adoptó el *Acuerdo de aceptación del nuevo Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, fijación del valor inicial del Fondo de Suficiencia Global, modificación del régimen de cesión y fijación del alcance y condiciones de la cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Comunitat Valenciana*; y como Anexo al mismo se incluyó el proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunitat Valenciana y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, cuyo texto, acordado con la Comunidad Autónoma, se informa en la presente memoria.



produjeron con la aprobación de la mencionada Ley 22/2009, de 18 de diciembre. Esto justifica el carácter abreviado de la Memoria de esta Ley.

### Descripción del contenido y tramitación de la propuesta normativa

El proyecto de Ley, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunitat Valenciana y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, consta de dos artículos, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.

El artículo 1 modifica el contenido del apartado 1 del artículo 73 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana con el objeto de especificar que se ceden a esta Comunidad Autónoma el 50% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; el Impuesto sobre el Patrimonio; el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; los Tributos sobre el Juego; el 50 % del Impuesto sobre el Valor Añadido; el 58% del Impuesto sobre la Cerveza; el 58% del Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas; el 58% del Impuesto sobre Productos Intermedios; el 58% del Impuesto sobre Alcohol y Bebidas Derivadas; el 58% del Impuesto sobre Hidrocarburos; el 58% del Impuesto sobre las Labores del Tabaco; el Impuesto sobre la Electricidad; el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT) y el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH).

El artículo 2, en primer lugar, determina el alcance y condiciones de la cesión a esta Comunidad Autónoma, por remisión al régimen general establecido en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

En segundo lugar, este precepto establece la asunción, por parte de la Comunidad, de la competencia para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas en los términos establecidos en el primer párrafo de la letra c) del artículo 59.1 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre.

Además, el precepto atribuye las competencias normativas en materia de tributos estatales cedidos, en el marco de lo dispuesto en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

Al igual que realizaba la antigua ley de cesión a la Comunidad, el presente texto incluye en el apartado 3 del artículo 2 determinadas competencias normativas y de inspección en materia de IVMDH e IEDMT.

La disposición transitoria primera regula el régimen transitorio de cesión efectiva del IVMDH y del IEDMT en relación con la gestión de estos impuestos. Con la inclusión de la disposición transitoria segunda, se regula también el régimen transitorio de la competencia para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas interpuestas contra los actos dictados por órganos autonómicos en relación con los tributos cedidos. Por último la disposición transitoria tercera clarifica el régimen aplicable a los tipos y escalas de gravamen para el año 2010.



121067 121077

Listado de normas derogadas

La entrada en vigor de la Ley, que tendrá lugar el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, si bien surtirá efectos desde el 1 de enero de 2009, implicará la derogación de la Ley 24/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunitat Valenciana y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, en tanto que ésta es la Ley que fue dictada para hacer efectivo el sistema de financiación recogido en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía; Ley que queda derogada con la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, en los términos señalados en la misma.

Impactos presupuestario y por razón de género

Como se desprende de los antecedentes anteriores, esta norma no tiene impacto presupuestario, ni por razón de género.





## PROYECTO DE LEY DE ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO DE DIÓXIDO DE CARBONO.

### INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, modificado por la ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, este anteproyecto de Ley no comporta, ni en el fondo ni en la forma, impacto de género alguno.





**PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LAS LEYES 30/2007, DE 30 DE OCTUBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, 31/2007, DE 30 DE OCTUBRE, SOBRE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN LOS SECTORES DEL AGUA, LA ENERGÍA, LOS TRANSPORTES Y LOS SERVICIOS POSTALES Y 29/1998, REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA PARA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA COMUNITARIA DE LAS DOS PRIMERAS.**

### **INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO**

El proyecto a que se refiere este informe se limita a incorporar al texto de las Leyes 30/2007 y 31/2007, ambas de 30 de Octubre, el contenido de la Directiva 2007/66/CE sobre mejora de los procedimientos de recurso en relación con los tipos de contratación a que se refieren las Directivas 2004/18/CE y 2004/17/CE respectivamente y que se incorporaron a nuestro derecho a través de las Leyes mencionadas.

Consiguientemente no se trata de una materia directamente relacionada con cuestiones en las que el género de las personas intervinientes pueda ni deba ser relevante, y, por otra parte, su incorporación al ordenamiento jurídico español es ineludible.

En conclusión puede considerarse que el anteproyecto, caso de aprobarse, aunque no contribuye a disminuir las desigualdades existentes ni a hacer más efectivo el principio de igualdad de oportunidades en el ámbito regulado, evidentemente tampoco a lo contrario.





MINISTERIO  
DE TRABAJO  
E INMIGRACIÓN

LEGISLATURA

IX

12/12/11



121081

**MEMORIA  
DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO**

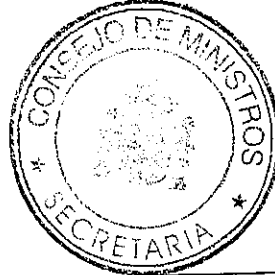
**REAL DECRETO-LEY 10 /2010, DE 16 DE JUNIO, DE MEDIDAS  
URGENTES PARA LA REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO**



121081

**RESUMEN EJECUTIVO**

<b>Ministerio/ Órgano proponente</b>	Trabajo e Inmigración	<b>Fecha</b>	16/06/2010
<b>Título de la norma</b>	Real Decreto-ley de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo		
<b>Tipo de memoria</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Abreviada		
<b>OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA</b>			
<b>Situación que se regula</b>	Reforma del mercado de trabajo		
<b>Objetivos que se persiguen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Incrementar la productividad de la economía española.</li> <li>❖ Reducir la dualidad y la temporalidad del mercado de trabajo.</li> <li>❖ Favorecer la flexibilidad interna negociada en las empresas y fomentar el uso de la reducción de jornada como instrumento de ajuste temporal de empleo</li> <li>❖ Favorecer el empleo de los jóvenes y de las personas desempleadas.</li> <li>❖ Mejorar el funcionamiento de la intermediación laboral y la actuación de las empresas de trabajo temporal</li> </ul>		



<b>Principales alternativas consideradas</b>	<p>No pueden considerarse otras alternativas diferentes de la norma jurídica con rango de real decreto-ley, teniendo en cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Razones de jerarquía normativa: se modifican múltiples preceptos con rango de ley, por lo que la propuesta ha de tener el mismo rango.</li> <li>- Razones de urgencia y necesidad, derivadas de la situación económica y del empleo, así como de la finalización del proceso de concertación social.</li> </ul>	
<b>CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO</b>		
<b>Tipo de norma</b>	Disposición que adopta la forma de real decreto-ley y que incluye tanto disposiciones nuevas como modificativas de otras normas	
<b>Estructura de la norma</b>	La norma se estructura en cuatro Capítulos, agrupados en función de los objetivos perseguidos por la propuesta.	
<b>Informes recabados</b>		
<b>Trámite de audiencia</b>	La propuesta es consecuencia del proceso de diálogo social con organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el ámbito estatal, con las que se ha efectuado trámite de audiencia.	
<b>ANÁLISIS DE IMPACTOS</b>		
<b>ADECUACIÓN AL ORDEN DE COMPETENCIAS</b>	El título competencial prevalente es el 149.1.7ª, aunque ha de citarse también el 149.1.17ª (Seguridad Social)	
<b>IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO</b>	Efectos sobre la economía en general	Positivo. La propuesta ha de servir para dinamizar el mercado de trabajo, apoyar la creación de empleo y fomentar el mantenimiento de los puestos de trabajo.
	En relación con la competencia	Neutro.
	Desde el punto de vista de las cargas administrativas	Neutro.



	<p>Desde el punto de vista de los presupuestos, la norma:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Afecta a los presupuestos AGE</p> <p><input type="checkbox"/> Afecta a los presupuestos de otras Administraciones Territoriales</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Implica un gasto:</p> <p>Cuantificación estimada: <u>Véase</u></p> <p><input type="checkbox"/> Implica un ingreso.</p> <p>Cuantificación estimada:</p>
<b>IMPACTO DE GÉNERO</b>	<p>La norma tiene un impacto de género:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Positivo</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Negativo</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Neutro</b></p>	
<b>OTROS IMPACTOS CONSIDERADOS</b>		





## I. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA

### I.1. MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

1. La crisis financiera y económica de origen internacional que se ha desarrollado desde principios de 2008 ha quebrado la larga senda de crecimiento económico y del empleo que vivió la economía española desde mediados de los noventa y ha tenido como consecuencia más grave una intensa destrucción de empleo y el consecuente aumento del desempleo.

Las cifras a este respecto son esclarecedoras. En los últimos dos años se han perdido en nuestro país más de dos millones de puestos de trabajo y el desempleo ha crecido en casi dos millones y medio de personas, lo que ha duplicado la tasa de paro hasta acercarse al 20%. Un desempleo de esa magnitud constituye el primer problema para los ciudadanos y sus familias y supone un lastre inasumible a medio plazo para el desarrollo económico y para la vertebración social de nuestro país.

Por ello, recuperar la senda de la creación de empleo y reducir el desempleo constituye en estos momentos una exigencia unánime del conjunto de la sociedad y, en consecuencia, debe constituir el objetivo último fundamental de todas las políticas públicas.

Es indudable que la principal y directa causa de la pérdida de empleo durante los últimos dos años ha sido la caída de la actividad productiva, derivada, en un primer momento, del colapso de los cauces habituales de crédito y endeudamiento que sustentaron de forma decisiva el consumo y la inversión en la pasada etapa expansiva. Un fenómeno común a los países de nuestro entorno socioeconómico, y en particular a los integrantes de la eurozona.

Pero es cierto que en España la incidencia de esta contracción productiva sobre el empleo ha sido superior a la sufrida en otros países. Y existe una amplia coincidencia en señalar como responsables de este negativo comportamiento tanto a las diferencias en la estructura productiva del crecimiento económico, como a algunas particularidades estructurales de nuestro mercado laboral, que las reformas abordadas en las últimas décadas no han logrado eliminar o reducir de forma sustancial.

Unas debilidades de nuestro modelo de relaciones laborales que en último término vienen a explicar la elevada sensibilidad del empleo al ciclo económico que se ha venido poniendo de manifiesto en nuestro país, lo que hace que crezca mucho en las fases expansivas pero que se destruya con igual o mayor intensidad en las etapas de crisis, y entre las que se

#### IV. IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO

Para valorar el posible impacto de género del proyecto, se analiza la situación de partida y se identifican los aspectos del proyecto que tienen incidencia desde la perspectiva del género.

##### V.1. SITUACIÓN DE PARTIDA.

Dado que el proyecto normativo pretende incidir de manera profunda en el funcionamiento del mercado de trabajo modificando el comportamiento de los agentes económicos de cara a la contratación de trabajadores, el Gobierno tiene en cuenta la situación de partida de desigualdad existente entre hombres y mujeres que existe en el mercado y en la sociedad y que dificulta con mayor medida el acceso de las mujeres al empleo respecto de los hombres.

Según datos de la encuesta de población activa del primer trimestre de 2010 los datos en cuanto a tasas de actividad, empleo y paro de los trabajadores por sexo y edad son los siguientes:

	Varones	Mujeres
Población de 16 a 64 años	15.571,8	15.277,8
Tasa de actividad (16-64)	81,60	66,43
Tasa de paro (16-64)	20,08	20,28
Tasa de empleo (16-64)	65,21	52,96

Dichos datos reflejan que mientras que las tasas de paro se mantienen parejas entre las trabajadoras y los trabajadores, las tasas de actividad y de empleo difieren aún notablemente entre los sexos, si bien se viene observando, según datos de la Encuesta de Población Activa en el periodo 2002-2009, que la tasa de empleo de las mujeres se ha elevado en todos los grupos de edad (excepto en la población de 16 a 24 años) y de manera más significativa a partir de los 30 años.

##### V.2. VALORACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO

La propuesta contiene diversas normas orientadas a conseguir la igualdad efectiva en el ámbito laboral, entre las que destacan las relativas al diseño de las políticas activas de empleo.



121081

En general, los aspectos del proyecto dirigidos específicamente a aumentar los índices de empleo femenino y, en un sentido más amplio, a fomentar la igualdad efectiva de mujeres y hombres serían los siguientes:

1º. *Inclusión de las mujeres en aquellas medidas que persiguen aumentar el empleo de personas con dificultades especiales de acceso al empleo.* Así se observa en dos aspectos:

- El contrato de fomento de la contratación indefinida (artículo 3) mantiene en su ámbito subjetivo de aplicación a las mujeres en profesiones u oficios en los que estén subrepresentadas, con objeto de aumentar las tasas de empleo femenino en sectores masculinizados.
- Se establece como deber de las agencias de colocación (nuevo artículo 21 bis de la Ley de Empleo) "elaborar y ejecutar planes específicos para la colocación de trabajadores desempleados integrantes de los colectivos mencionados en el artículo 26 (entre ellos las mujeres), que concluyan con la colocación de aquéllos."

2º. *Potenciación de las políticas activas de empleo cuando se dirigen a mujeres.* Las medidas para fomentar el empleo de las personas desempleadas tienen entre sus objetivos prioritarios el empleo femenino. Es de reseñar que no se diseñan medidas específicas para las mujeres, sino que las medidas que se configuran se potencian cuando sus destinatarias son las mujeres desempleadas, las trabajadoras, etc. En esta línea:

- a. Las bonificaciones por la contratación indefinida de jóvenes con problemas de empleabilidad, establecidas con carácter general en 800 euros, se amplían hasta los 1.000 euros cuando el contrato se realice con mujeres.
- b. Las bonificaciones por la contratación indefinida de parados de larga duración mayores de 45 años, establecidas con carácter general en 1.200 euros, se amplían hasta los 1.400 cuando el contrato se realice con mujeres.
- c. Las bonificaciones por la transformación en indefinidos de contratos formativos, de relevo y de sustitución por anticipación de la edad de jubilación, establecidas con carácter general en 500 euros, se amplían hasta los 700 cuando afecten a mujeres.

3º. *Medidas dirigidas a potenciar la igualdad efectiva en el ámbito de la negociación colectiva.* En aquellos casos en que se otorga a los convenios colectivos un papel definidor de medidas que inciden en el acceso al empleo, al empleo cualificado, tales como contratos para la formación, contratos en prácticas, formación y promoción profesional, se recoge una





121081

llamada a la persecución de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres como objetivo que ha de estar especialmente presente. Así ocurre en dos ámbitos:

- En el artículo 11.3 del Estatuto de los Trabajadores, en el que se ha añadido que los convenios colectivos podrán fijar criterios y procedimientos tendentes a conseguir la paridad por razón de género en el número de trabajadores vinculados a la formación o en prácticas en la empresa mediante contratos formativos.
- En el artículo 23.2 del Estatuto de los Trabajadores, en el que se indica que los convenios deberán tener en cuenta el principio de igualdad efectiva por razón de género, pues a la hora de definir los términos del ejercicio del derecho a la formación y promoción en la empresa dichos términos deberán acomodarse a criterios y sistemas que garanticen la ausencia de discriminación directa o indirecta entre trabajadores de uno y otro sexo.

#### 4º. Otras medidas:

- En materia de *empresas de trabajo temporal* la introducción del principio de igualdad en la aplicación de las condiciones de trabajo entre los trabajadores puestos a disposición y los de la empresa usuaria repercute en cuanto a las disposiciones, entre otras, de protección de las mujeres embarazadas y en período de lactancia, así como a la igualdad de trato entre hombres y mujeres y a la aplicación de las mismas disposiciones adoptadas con vistas a combatir las discriminaciones basada en el sexo.
- En materia de absentismo laboral, la disposición final tercera, apartado Dos, introducen las suspensiones del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo y la lactancia y por paternidad entre las ausencias al trabajo que no computan a efectos de la causa de extinción del contrato por causas objetivas prevista en el artículo 52 d) del Estatuto de los Trabajadores.





MINISTERIO  
DE JUSTICIA

121086

LEGISLATURA

IX

SUBSECRETARÍA

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

121086

Madrid, 16 de julio de 2010

# MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, PARA FACILITAR LA APLICACIÓN EN ESPAÑA DE LOS PROCESOS EUROPEOS MONITORIO Y DE ESCASA CUANTÍA

## 1. Oportunidad de la propuesta.

### a. Necesidad y oportunidad de la norma.

El Reglamento (CE) nº 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo y Reglamento (CE) nº 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía, entraron en vigor el 12 de diciembre de 2008 y el 1 de enero de 2009, respectivamente. Desde entonces ambos Reglamentos resultan de aplicación directa en España, tanto en el sentido de que un acreedor residente en nuestro país puede iniciar estos procesos ante los tribunales de otro Estado de la Unión Europea en el que se encuentre su deudor, como la posibilidad de que el acreedor residente en otro Estado de la Unión Europea solicite ante un tribunal español la iniciación de alguno de esos procesos cuando su deudor se encuentre en nuestro país.

La circunstancia de que se trate de disposiciones obligatorias en todos sus elementos y directamente aplicables en los países en la Unión Europea no exime al legislador español de la necesidad de aprobar las normas necesarias que engarzan sus disposiciones con nuestra legislación procesal. Y precisamente la reserva de ley en esta materia justifica también el rango la norma que incorpore las disposiciones señaladas, llamadas a evitar una dispersión de la aplicación de tales Reglamentos por los tribunales.



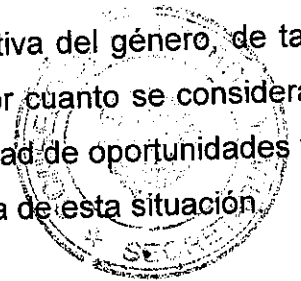


721083

En relación con los ingresos públicos el cobro de la tasa cuando estos procesos se inicien por personas jurídicas sujetas al impuesto de sociedades conllevará unos ingresos que en estos momentos no se pueden cuantificar.

#### 4. Impacto por razón de género.

La futura ley carece de toda relevancia desde la perspectiva del género, de tal forma que podría hablarse a este respecto de "impacto nulo", por cuanto se considera que no existen desigualdades de partida en relación con la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, ni se prevé modificación alguna de esta situación.





MINISTERIO  
DE FOMENTO

LEGISLATURA

IX

121/93

SUBSECRETARÍA

SUBDIRECCIÓN GENERAL  
DE RÉGIMEN POSTAL

121093

LEGISLATURA

IX

121093

# MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO

ANTEPROYECTO DE LEY .../..., DE ...DE ... DE  
2010, DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL, DE  
LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS Y DEL  
MERCADO POSTAL.





121093

## INDICE

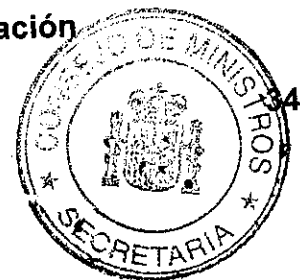
	<u>Página</u>
<b>I.- INTRODUCCIÓN</b>	<b>4</b>
<b>II. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA.</b>	<b>4</b>
1) MOTIVACIÓN	4
2) OBJETIVOS	5
3) ALTERNATIVAS	6
<b>III. CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO</b>	<b>11</b>
1) CONTENIDO	11
2) ANÁLISIS JURÍDICO	16
3) DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN	21
<b>IV. ANÁLISIS DE IMPACTOS</b>	<b>22</b>
1) CONSIDERACIONES GENERALES	22
2) ADECUACIÓN DE LA NORMA AL ORDEN DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS	23
3) IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO	23
a. Impacto económico general	23
. Impacto en los operadores postales	25
. Impacto en los clientes y usuarios	25
. Impacto en la productividad, la innovación y el empleo	26
. Impacto en los precios	26

MINISTERIO  
DE FOMENTO



121093

. Efectos en relación con la economía europea	27
b. Efectos en la competencia en el mercado	27
c. Análisis de las cargas administrativas	28
d. Impacto presupuestario	28
d.1. Impacto en los Presupuestos Generales del Estado	28
. Coste neto	29
. Financiación	30
d.2. Impacto presupuestario en las Comunidades Autónomas o Entidades Locales	33
4) IMPACTO POR RAZÓN DEL GÉNERO	33
5) OTROS IMPACTOS	33
a) En la financiación de la Comisión Nacional del Sector Postal	33
b) En los costes de personal de la Administración General del Estado	34





121093

**MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO****ANTEPROYECTO DE LEY .../..., DE ...DE ... DE 2010, DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL, DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS Y DEL MERCADO POSTAL****I.- INTRODUCCIÓN**

El presente documento se efectúa de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo, que desarrolla las previsiones contenidas en los artículos 22.2, 24.1. a) y 24.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y atendiendo a las pautas orientativas previstas en la Guía metodológica para la elaboración de dicha memoria, aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2009.

**II. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA.****1) MOTIVACIÓN**

Con fecha 27 de febrero de 2008, ha sido publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas la Directiva 2008/6/CE, de 20 de febrero de 2008 (en adelante, Directiva 2008/6/CE), en relación con la plena realización del mercado interior de los servicios postales comunitarios, por la que se modifica la Directiva 97/67/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales en la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio.

La Directiva 2008/6/CE establece en su artículo 2 la necesidad de que los estados miembros, antes del 31 de diciembre de 2010, adopten las medidas legislativas, reglamentarias y administrativas que se consideren precisas para poner en vigor su contenido, así como indica que cuando los estados miembros adopten tales disposiciones, éstas harán referencia a la mencionada Directiva o irán acompañadas de la mencionada referencia en su publicación oficial.

Tal causa, hace necesario que el Estado español proceda a la transposición de la norma comunitaria teniendo en cuenta como horizonte temporal la referida fecha.





121093

ANEXO I FICHA DEL RESUMEN EJECUTIVO

Ministerio/Órgano proponente	MINISTERIO DE FOMENTO	Fecha	
Título de la norma	ANTEPROYECTO DE LEY DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL, DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS Y DEL MERCADO POSTAL		
Tipo de Memoria	Normal <input checked="" type="checkbox"/> Abreviada <input type="checkbox"/>		
OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA			
Situación que se regula	Los servicios postales en España		
Objetivos que se persiguen	<p>1.- Transponer la Directiva 2008/6/CE a través de la plena realización del mercado interior de los servicios postales, sin poner en riesgo ni la prestación ni al prestador del servicio postal universal.</p> <p>2.- Crear un nuevo modelo de sistema postal español que garantice un servicio postal universal de calidad a precios asequibles y que responda a las demandas de ciudadanos y empresas.</p> <p>3.- Adaptar la regulación del sector postal a las nuevas condiciones socio-económicas haciendo posible una competencia regulada y equilibrada</p>		



<b>Principales alternativas consideradas</b>	a) Modificación parcial de la vigente Ley 24/1998, de 13 de julio. b) No hacer nada.
<b>CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO</b>	
<b>Tipo de norma</b>	LEY
<b>Estructura de la Norma</b>	Siete títulos –con 68 artículos–, ocho disposiciones adicionales, una disposición derogatoria única y ocho disposiciones finales
<b>Informes recabados</b>	
<b>Tramite de audiencia</b>	
<b>ANÁLISIS DE IMPACTOS</b>	
<b>ADECUACIÓN AL ORDEN DE COMPETENCIAS</b>	¿Cuál es el título competencial prevalente? Se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de Correos, prevista en el artículo 149,1,21ª de la Constitución


**IMPACTO ECONÓMICO Y  
PRESUPUESTARIO**

Efectos sobre la economía en general.

La nueva Ley supone la transposición de la Directiva y la plena realización del mercado interior de los servicios postales, lo que favorecerá a los usuarios de los servicios postales a través de una oferta más amplia, a precios competitivos y de mayor calidad y, particularmente a través de un servicio postal universal garantizado por el Estado con la calidad y en las condiciones que demanda los ciudadanos y las empresas.

En relación con la competencia

☐ la norma no tiene efectos significativos sobre la competencia.

☒ la norma tiene efectos positivos sobre la competencia.

☐ la norma tiene efectos negativos sobre la competencia.

Desde el punto de vista de las cargas administrativas

☒ supone una reducción de cargas administrativas.

Cuantificación estimada: indeterminada

☐ incorpora nuevas cargas administrativas.

Cuantificación estimada: indeterminada

☐ no afecta a las cargas administrativas.





	<p>Desde el punto de vista de los presupuestos, la norma</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Afecta a los presupuestos de la Administración del Estado.</p> <p><input type="checkbox"/> Afecta a los presupuestos de otras Administraciones Territoriales.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> implica un gasto:</p> <p><input type="checkbox"/> implica un ingreso.</p>
<b>IMPACTO DE GÉNERO</b>	<p>La norma tiene un impacto de género</p>	<p>Negativo <input type="checkbox"/></p> <p>Nulo <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Positivo <input type="checkbox"/></p>
<b>OTROS IMPACTOS CONSIDERADOS</b>	<p>No existen otros impactos</p>	
<b>OTRAS CONSIDERACIONES</b>		



121005

Adicionalmente, la obligación impuesta al operador designado por la disposición adicional cuarta de prestar el servicio de giro, al considerarlo como un servicio complementario a los servicios postales, comportará un coste estimado en 10 millones de euros que el Estado deberá aportar con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

#### **d.2 Impacto presupuestario en las Comunidades Autónomas o Entidades Locales**

La ley no tiene ningún impacto presupuestario en las Comunidades Autónomas ni en las Entidades Locales.

#### **4) IMPACTO POR RAZÓN DEL GÉNERO**

No existen desigualdades de partida en relación a la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, dado que la entrada en vigor del anteproyecto de Ley de los Servicios Postales, se limita a dotar de coherencia la regulación legal en todo lo relacionado con los principios que emanan de la precitada Directiva 2008/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008, por la que se modifica la Directiva 97/67/CE en relación con la plena realización del mercado interior de los servicios postales comunitarios, con lo que se intenta garantizar el correcto funcionamiento del mercado postal, la prestación de un servicio postal universal de calidad, la protección de los usuarios y los trabajadores del sector y la consolidación del proceso liberalizador del mercado postal y, en consecuencia, la valoración del impacto por razón de género es nulo.

#### **5) OTROS IMPACTOS**

##### **a) En la financiación de la Comisión Nacional del Sector Postal**

La disposición final primera, en su punto 3 modifica el artículo 13 de la Ley 23/2007, de 8 de octubre, en lo que se refiere a la Tasa por inscripción en el Registro General de empresas prestadoras de servicios postales. Esta tasa está destinada a la financiación de los gastos que ocasione el funcionamiento de la Comisión Nacional del Sector Postal.



**MEMORIA ABREVIADA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO**

DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE AUTORIZA LA RATIFICACIÓN POR ESPAÑA DEL PROTOCOLO POR EL QUE SE MODIFICA EL PROTOCOLO SOBRE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS, ANEJO AL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA, AL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA Y AL TRATADO CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA, FIRMADO EN BRUSELAS EL 23 DE JUNIO DE 2010.

**I. Justificación de Memoria abreviada**

La modificación del Tratado de Lisboa cuya autorización de ratificación es objeto del presente Proyecto de Ley Orgánica se limita a adaptar temporalmente las previsiones del Tratado en cuanto a composición del Parlamento Europeo a las circunstancias creadas por la tardía entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009, que han alterado en perjuicio de España el equilibrio institucional.

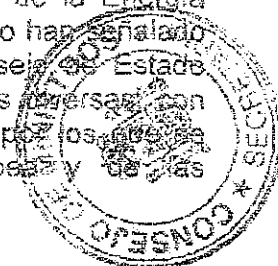
Para lograr este objetivo y a la vista del texto del art. 14.2 TUE, se hacía necesaria una modificación, siquiera temporal, del mismo. Se consideró que la fórmula más adecuada es ésta de la reforma del Protocolo 36 de medidas transitorias. Esta reforma ha requerido el respeto de los procedimientos de reforma de los Tratados, establecidos en el art. 48 TUE.

La reforma no tiene otros impactos.

**II. Base Jurídica y rango del proyecto normativo**

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución, la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de un Tratado en el que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la propia Constitución precisa de la aprobación de una Ley Orgánica.

Este supuesto es también aplicable a la ratificación por España del Protocolo por el que se modifica el Protocolo sobre las disposiciones transitorias, anejo al Tratado de la Unión Europea, al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, firmado en Bruselas el 23 de junio de 2010, tal y como han señalado reiteradamente tanto el Tribunal Constitucional como el Consejo de Estado cuantas veces se les ha consultado en el pasado, por causas diversas, con ocasión de la ratificación por España de Tratados anteriores por los que se enmendaban los textos constitutivos de la Unión Europea y de las



Comunidades Europeas. En este mismo sentido se ha pronunciado, en relación con la ratificación que nos ocupa, el Consejo de Estado en su dictamen del 4 de noviembre de 2010.

### III. Breve descripción del contenido y de la tramitación de la propuesta normativa

La Ley orgánica contendrá un único artículo que autoriza la ratificación.

Aprobada ésta, el Ministerio de Asuntos exteriores y de Cooperación redactará el correspondiente instrumento de ratificación que, una vez firmado por el Rey y Refrendado por el Ministro, será depositado ante el Gobierno de la República Italiana.

### IV. Oportunidad de la norma

Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, España, como principal interesada, instó entre sus socios la necesidad de tomar las medidas legalmente adecuadas para recuperar a la mayor brevedad la composición del Parlamento Europeo políticamente acordada. Esta composición, por otra parte, forma parte de un delicado equilibrio entre los pesos institucionales respectivos de los EE.MM., que ha quedado ahora defectuoso al haber entrado en vigor otros elementos del equilibrio y no éste.

### V. Listado de normas que quedan derogadas

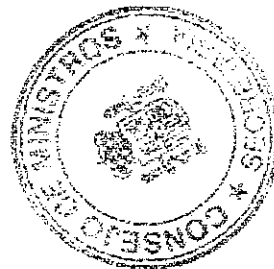
Se modifica el Protocolo 36 del Tratado de Lisboa, de medidas transitorias.

### VI. Impacto presupuestario

No tiene.

### VII. Impacto por razón de género

No tiene.



**INFORMES DE EVALUCION DE IMPACTO DE  
GENERO E INFORMES DE OBSERVACIONES A LOS  
INFORMES DE EVALUCION DE IMPACTO DE  
GENERO ELABORADOS DURANTE LAS VII Y VIII  
LEGISLATURA EN LA COMUNIDAD AUTONOMA  
ANDALUZA**

# **Relación de Proyectos de Ley tramitados durante la VI y VII legislatura en la Comunidad Autónoma Andaluza.**

---

## **Año 2010**

1. Ley 8-10/PL-000007, de reordenación del sector público de Andalucía (procedente del Decreto-ley 6/2010, de 23 de noviembre)
2. Ley 8-10/PL-000006, del Olivar de Andalucía
3. Ley 8-10/PL-000005, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011.
4. Ley 8-10/PL-000004, de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad (procedente del Decreto-Ley 4/2010, de 6 de julio)
5. Ley 8-10/PL-000003, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía
6. Ley 8-10/PL-000002, de medidas tributarias de reactivación económica de la Comunidad Autónoma de Andalucía (procedente del Decreto-Ley 1/2010, de 9 de marzo)
7. Ley 8-10/PL-000001, por la que se modifican diversas Leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el Mercado Interior (procedente del Decreto-Ley 3/2009, de 22 de diciembre)

## **Año 2009**

8. Ley 8-09/PL-000009, reguladora de la participación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
9. Ley 8-09/PL-000008, de Autonomía Local de Andalucía
10. Ley 8-09/PL-000007, para la Dehesa
11. Ley 8-09/PL-000006, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010
12. Ley 8-09/PL-000005, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Andalucía
13. Ley 8-09/PL-000004, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte
14. Ley 8-09/PL-000003, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía
15. Ley 8-09/PL-000002, de concesión de un crédito extraordinario para sufragar las subvenciones a adjudicar a las formaciones políticas por los gastos electorales

## **Relación de Proyectos de Ley tramitados durante la VI y VII legislatura en la Comunidad Autónoma Andaluza.**

---

causados por las Elecciones al Parlamento de Andalucía celebradas el día 9 de marzo de 2008

16. Ley 8-09/PL-000001, por la que se autoriza la transmisión de la titularidad del inmueble denominado Palacio de los Condes de Buenavista, sito en Málaga, c/ San Agustín, nº 8

### **Año 2008**

17. Ley 8-08/PL-000005, por la que se aprueba el Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA) (procedente del Decreto Ley 2/2008, de 9 de diciembre)
18. Ley 8-08/PL-000004, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009
19. Ley 8-08/PL-000003, que regula el acceso de los municipios andaluces al régimen de organización de los municipios de gran población
20. Ley 8-08/PL-000002, reguladora de la mediación familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía
21. Ley 8-08/PL-000001, de medidas tributarias y financieras de impulso a la actividad económica de Andalucía (procedente del Decreto-Ley 1/2008, de 3 de junio)

### **Año 2007**

22. Ley 7-07/PL-000017, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008.
23. Ley 7-07/PL-000016, de designación de Senadores y Senadoras en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
24. Ley 7-07/PL-000015, del Consejo Andaluz de Concertación Local.
25. Ley 7-07/PL-000014, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento.
26. Ley 7-07/PL-000013, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía.
27. Ley 7-07/PL-000012, por la que se modifica la Ley 4/1994, de 12 de abril, de creación de la Universidad Internacional de Andalucía.
28. Ley 7-07/PL-000011, de la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA).

## **Relación de Proyectos de Ley tramitados durante la VIIy VIII legislatura en la Comunidad Autónoma Andaluza.**

---

- 29. Ley 7-07/PL-000010, por la que se crea la Agencia Tributaria de Andalucía y se aprueban medidas fiscales.
- 30. Ley 7-07/PL-000009, de Farmacia de Andalucía.
- 31. Ley 7-07/PL-000008, de Educación de Andalucía.
- 32. Ley 7-07/PL-000007, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.
- 33. Ley 7-07/PL-000006, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía
- 34. Ley 7-07/PL-000005, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
- 35. Ley 7-07/PL-000004, de protección del origen y la calidad de los vinos de Andalucía.
- 36. Ley 7-07/PL-000003, reguladora del consejo genético, de protección de los derechos de las personas que se sometan a análisis genéticos y de los bancos de ADN humano en Andalucía.
- 37. Ley 7-07/PL-000002, de la Administración de la Junta de Andalucía.
- 38. Ley 7-07/PL-000001, de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía.

### **Año 2006**

- 39. Ley 7-06/PL-000017, sobre fiscalidad complementaria del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- 40. Ley 7-06/PL-000016, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007.
- 41. Ley 7-06/PL-000015, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se aprueba el Plan Estadístico de Andalucía 2007-2010.
- 42. Ley 7-06/PL-000014, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
- 43. Ley 7-06/PL-000013, por la que se autoriza la concesión, con carácter extraordinario, de un anticipo reintegrable al municipio de Marbella.
- 44. Ley 7-06/PL-000012, por la que se crea como entidad de derecho público el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
- 45. Ley 7-06/PL-000011, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía
- 46. Ley 7-06/PL-000010, por la que se regula la investigación en reprogramación celular con finalidad exclusivamente terapéutica.
- 47. Ley 7-06/PL-000009, de reconocimiento de la Universidad Privada Fernando III



## **Relación de Proyectos de Ley tramitados durante la VII y VIII legislatura en la Comunidad Autónoma Andaluza.**

---

48. Ley 7-06/PL-000008, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía.
49. Ley 7-06/PL-000007, de servicios ferroviarios de Andalucía.
50. Ley 7-06/PL-000006, sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía.
51. Ley 7-06/PL-000005, de creación del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.
52. Ley 7-06/PL-000004, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
53. Ley 7-06/PL-000003, del estatuto de los andaluces en el mundo.
54. Ley 7-06/PL-000002, de creación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
55. Ley 7-06/PL-000001, de Asociaciones de Andalucía.

### **Año 2005**

1. Ley 7-05/PL-000006, de creación de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir.
2. Ley 7-05/PL-000005, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2006.
3. Ley 7-05/PL-000004, por la que se autoriza la enajenación del bien inmueble conocido.
4. Ley 7-05/PL-000003, de Artesanía de Andalucía.
5. Ley 7-05/PL-000002, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.
6. Ley 7-05/PL-000001, de concesión de un crédito extraordinario para sufragar las subvenciones a adjudicar a las formaciones políticas por los gastos electorales causados por las elecciones al Parlamento de Andalucía celebradas el 14 de marzo de 2004.

### **Año 2004**

1. Ley 7-04/PL-000010, de medidas tributarias, administrativas y financieras.
2. Ley 7-04/PL-000009, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2005.
3. Ley 7-04/PL-000007, del Comité Andaluz para la Sociedad del Conocimiento.

## **Relación de Proyectos de Ley tramitados durante la VI y VIII legislatura en la Comunidad Autónoma Andaluza.**

---

4. Ley 7-04/PL-000006, por la que se regula el régimen de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
5. Ley 7-04/PL-000005, de creación del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía.
6. Ley 7-04/PL-000004, de creación del Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Andalucía.
7. Ley 7-04/PL-000003, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
8. Ley 7-04/PL-000002, de creación del Colegio Profesional de Educadores Sociales de Andalucía.
9. Ley 7-04/PL-000001, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía.

## Cuadro sinóptico de la VII y VIII Legislatura Andaluza

<b>Año</b>	<b>Proyecto normativo presentados en la VII Legislatura</b>	<b>Acompañado de IEIG.</b>	<b>Acompañado de IOEIG Elaborado por IAM.</b>	<b>Facilitado por S. Archivo (Por tanto puede consultarse en el anexo).</b>
<b>2004</b>				
Ley 7-04/PL-000001	PL de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía.	NO	NO	NO
Ley 7-04/PL-000002	PL de creación del Colegio Profesional de Educadores Sociales de Andalucía.	NO	NO	NO
Ley 7-04/PL-000003	PL de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía	NO	NO	NO
Ley 7-04/PL-000004	PL de creación del Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Andalucía.	NO	NO	NO
Ley 7-04/PL-000005	PL de creación del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía.	NO	NO	NO
Ley 7-04/PL-000006	PL por la que se regula el régimen de las Organizaciones Interprofesionales Agrupadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.	NO	NO	NO
Ley 7-04/PL-000007	PL del Comité Andaluz para la Sociedad del Conocimiento.	NO	NO	NO
Ley 7-04/PL-000008	PL de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2005.	NO	NO	NO
Ley 7-04/PL-000009	PL de medidas tributarias, administrativas y financieras.	NO	NO	NO
<b>2005</b>				
Ley 7-05/PL-000001	PL de concesión de un crédito extraordinario para sufragar las subvenciones a adjudicar a las formaciones políticas por los gastos electorales causados por las elecciones al Parlamento de Andalucía celebradas el 14 de marzo de 2004.	NO	NO	NO
Ley 7-05/PL-000002	PL de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.	NO	NO	NO
Ley 7-05/PL-000003	PL de Artesanía de Andalucía.	NO	NO	NO
Ley 7-05/PL-000004	PL por la que se autoriza la enajenación del bien inmueble conocido.	NO	NO	NO
Ley 7-05/PL-000005	PL del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2006.	X	X	X
Ley 7-05/PL-000006	PL de creación de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir.	NO	NO	NO
<b>2006</b>				
Ley 7-06/PL-000001	PL de Asociaciones de Andalucía.	NO	NO	NO
Ley 7-06/PL-000002	PL de creación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.	NO	NO	NO
Ley 7-06/PL-000003	PL del estatuto de los andaluces en el mundo.	NO	NO	NO
Ley 7-06/PL-000004	PL del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.	NO	NO	NO
Ley 7-06/PL-	PL de creación del Instituto Andaluz de	NO	NO	NO

## Cuadro sinóptico de la VII y VIII Legislatura Andaluza

000005	Prevención de Riesgos Laborales.			
Ley 7-06/PL-000006	PL sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía.	NO	NO	NO
Ley 7-06/PL-000007	PL de servicios ferroviarios de Andalucía.	NO	NO	NO
Ley 7-06/PL-000008	PL de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía.	NO	NO	NO
Ley 7-06/PL-000009	PL de reconocimiento de la Universidad Privada Fernando III	NO	NO	NO
Ley 7-06/PL-000010	PL por la que se regula la investigación en reprogramación celular con finalidad exclusivamente terapéutica.	NO	NO	NO
Ley 7-06/PL-000011	PL de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía	NO	NO	NO
Ley 7-06/PL-000012	PL por la que se crea como entidad de derecho público el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.	NO	NO	NO
Ley 7-06/PL-000013	PL por la que se autoriza la concesión, con carácter extraordinario, de un anticipo reintegrable al municipio de Marbella.	NO	NO	NO
Ley 7-06/PL-000014	PL de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.	NO	NO	NO
Ley 7-06/PL-000015	PL por la que se modifica la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se aprueba el Plan Estadístico de Andalucía 2007-2010.	NO	NO	NO
Ley 7-06/PL-000016	PL del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007.	X	X	X
Ley 7-06/PL-000017	PL sobre fiscalidad complementaria del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.	NO	NO	NO
<b>2007</b>				
Ley 7-07/PL-000001	PL de museos y Colecciones Museográficas de Andalucía.	X	X	X
Ley 7-07/PL-000002	PL de la Administración de la Junta de Andalucía.	X	X	X
Ley 7-07/PL-000003	PL reguladora del consejo genético, de protección de los derechos de las personas que se sometan a análisis genéticos y de los bancos de ADN humano en Andalucía.	X	X	X
Ley 7-07/PL-000004	PL de protección del origen y la calidad de los vinos de Andalucía.	X	X	X
Ley 7-07/PL-000005	PL del Patrimonio Histórico de Andalucía.	NO	X	X
Ley 7-07/PL-000006	PL para la promoción de la igualdad de género en Andalucía	X	X	X
Ley 7-07/PL-000007	PL de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.	X	X	X
Ley 7-07/PL-000008	PL de Educación de Andalucía.	X	X	X
Ley 7-07/PL-000009	PL de Farmacia de Andalucía.	X	X	X
Ley 7-07/PL-000010	PL por la que se crea la Agencia Tributaria de Andalucía y se aprueban medidas fiscales.	X	X	X
Ley 7-07/PL-000011	PL de la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada por la Agencia	NO	NO	NO

## Cuadro sinóptico de la VII y VIII Legislatura Andaluza

	Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA).			
Ley 7-07/PL-000012	PL por la que se modifica la Ley 4/1994, de 12 de abril, de creación de la Universidad Internacional de Andalucía.	NO	NO	NO
Ley 7-07/PL-000013	PL de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía.	X	X	X
Ley 7-07/PL-000014	PL Andalucía de la Ciencia y el Conocimiento.	NO	X	X
Ley 7-07/PL-000015	PL del Consejo Andaluz de Concertación Local.	X	X	X
Ley 7-07/PL-000016	PL de designación de Senadores y Senadoras en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía.	X	X	X
Ley 7-07/PL-000017	PL del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008.	X	X	X
<b>2008</b>				
Ley 8-08/PL-000001	PL de medidas tributarias y financieras de impulso a la actividad económica de Andalucía (procedente del Decreto-Ley 1/2008, de 3 de junio)	NO	NO	NO
Ley 8-08/PL-000002	PL reguladora de la mediación familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía	X	X	X
Ley 8-08/PL-000003	PL que regula el acceso de los municipios andaluces al régimen de organización de los municipios de gran población	X	X	X
Ley 8-08/PL-000004	PL del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009	X	X	X
Ley 8-08/PL-000005	PL por la que se aprueba el Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA) (procedente del Decreto Ley 2/2008, de 9 de diciembre)	NO	NO	NO
<b>2009</b>				
Ley 8-09/PL-000001	PL por la que se autoriza la transmisión de la titularidad del inmueble denominado Palacio de los Condes de Buenavista, sito en Málaga, c/ San Agustín, nº 8	NO	NO	NO
Ley 8-09/PL-000002	PL de concesión de un crédito extraordinario para sufragar las subvenciones a ayudas a las formaciones políticas por los gastos electorales causados por las Elecciones al Parlamento de Andalucía celebradas el día 9 de marzo de 2008	NO	NO	NO
Ley 8-09/PL-000003	PL Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía	X	X	X

## Cuadro sinóptico de la VII y VIII Legislatura Andaluza

Ley 8-09/PL-000004	PL de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte	X	NO	X
Ley 8-09/PL-000005	PL de Aguas de la Comunidad Autónoma de Andalucía	X	X	X
Ley 8-09/PL-000006	PL del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010	X	X	X
Ley 8-09/PL-000007	PL para la Dehesa	NO	X	X
Ley 8-09/PL-000008	PL de Autonomía Local de Andalucía	X	X	X
Ley 8-09/PL-000009	PL reguladora de la participación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía	X	X	X
<b>2010</b>				
Ley 8-10/PL-000001	PL por la que se modifican diversas Leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el Mercado Interior (procedente del Decreto-Ley 3/2009, de 22 de diciembre)	NO	NO	NO
Ley 8-10/PL-000002	PL de medidas tributarias de reactivación económica de la Comunidad Autónoma de Andalucía (procedente del Decreto-Ley 1/2010, de 9 de marzo)	NO	NO	NO
Ley 8-10/PL-000003	PL de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía	X	X	X
Ley 8-10/PL-000004	PL de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad (procedente del Decreto-Ley 4/2010, de 6 de julio)	NO	NO	NO
Ley 8-10/PL-000005	PL del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011	X	X	X
Ley 8-10/PL-000006	PL del Olivar de Andalucía	NO	X	X
Ley 8-10/PL-000007	PL de reordenación del sector público de Andalucía (procedente del Decreto-ley 6/2010, de 23 de noviembre)	NO	NO	NO

JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE CULTURA  
Dirección General de Museos087 07  
INFORME  
CONSEJERÍA**INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO EN RELACIÓN  
AL ANTEPROYECTO DE LEY DE MUSEOS.**

El presente informe se emite en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 2 del Decreto 93/2004, de 9 de Marzo, que regula el informe de evaluación de impacto de género de los proyectos de ley y de reglamento que apruebe el Consejo de Gobierno, en relación con lo previsto por el artículo 139.1 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas.

El objetivo de este informe es determinar en que medida la aprobación de la nueva Ley de Museos tiene en cuenta de forma efectiva la igualdad por razón de género. Y en este sentido, desde la Consejería de Cultura se estima que el contenido de la disposición que se está elaborando guarda relación limitada con el principio dirigido a integrar la perspectiva de género en las políticas y programas generales. Y ello porque el objeto de la Ley es establecer las normas para el reconocimiento, creación, organización y gestión de los museos y colecciones museográficas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como para la ordenación, coordinación y prestación eficaz de los servicios del Sistema andaluz de museos y colecciones museográficas, tal y como prescribe su artículo 1.

En esta línea, el anteproyecto de Ley de Museos dispone, por un lado, desde una serie de preceptos en los que se otorga desde una nueva dimensión a los actuales una nueva dimensión al Registro de Museos de Andalucía y al Sistema Andaluz de Museos, (reorientando la acción de tutela y organizativa de la Administración de la Junta de Andalucía mediante el establecimiento de mecanismos e instrumentos de planificación, control, colaboración y participación tendentes a garantizar la prestación de servicios culturales de calidad, su accesibilidad por la colectividad y, al mismo tiempo, velar por la protección, la conservación y disfrute de los bienes culturales integrantes de los museos y colecciones de Andalucía) a otros en los que se despliega un conjunto de disposiciones que tienen una doble objetivo: por

**JUNTA DE ANDALUCÍA****CONSEJERÍA DE CULTURA**

Dirección General de Museos

un lado, mantener la integridad material de nuestro patrimonio cultural para, de este modo, transmitirlo a las generaciones futuras posibilitando su disfrute por las generaciones actuales y, por otro, el anteproyecto intenta lograr una mayor definición e identificación del patrimonio custodiado en los museos y colecciones museográficas de Andalucía.

En este ámbito no cabe hablar de diferencias por razón de género, ya que sus preceptos se dirigen a los poderes públicos y a los museos y colecciones museográficas, ya sean de titularidad pública o privada, afectando indistintamente a hombres y mujeres e imponiendo sus cargas y obligaciones por igual entre unos y otros, por lo que el posible impacto negativo derivado de la aprobación de las medidas que se establecen entre las mujeres y hombres a quienes van dirigidas es nulo.

Por otro lado, en la redacción de sus preceptos se ha tenido en cuenta la instrucción de 16 de Marzo de 2005 de la Comisión General de Viceconsejeros para evitar un uso sexista del lenguaje en las disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 7 de Febrero de 2006.

EL DIRECTOR GENERAL DE MUSEOS



Rdo. Pablo Suárez Martín





Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

08 / 07

**OBSERVACIONES QUE EMITE EL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER  
AL ANTEPROYECTO DE LEY DE MUSEOS, REMITIDO POR LA  
CONSEJERÍA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.**

Dado que el objetivo principal de esta Ley es establecer las normas para el reconocimiento, creación, organización y gestión de los museos y colecciones museográficas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como para la ordenación, coordinación y prestación eficaz de los servicios de Sistema Andaluz de Museos.

Dado que los Museos van más allá de su contenido, y se consideran como parte de las instituciones comunitarias encargadas de desarrollar e impulsar la Cultura, a las que la ciudadanía accede siendo consciente del disfrute de su patrimonio.

Dado que la presente Ley describe las funciones de los museos y colecciones museográficas, que afectan directamente tanto al personal técnico de los mismos, como a la ciudadanía que accede a ellos.

No compartimos la conclusión a la que se llega en el Informe de Evaluación de Impacto de Género emitido por la Consejería de Cultura, de no pertinencia. Pues dada la incidencia directa que el Anteproyecto de Ley tiene sobre los hombres y las mujeres en cuanto al acceso y participación a la vida cultural de nuestra Comunidad, se puede afirmar que el proyecto es:

**Pertinente al género**

☒

**No pertinente**

☐

Con carácter general, ya que el anteproyecto de Ley que nos ocupa regula un conjunto de actuaciones destinadas al desarrollo e impulso de la Cultura,



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

teniendo como público final a mujeres y hombres, se considera fundamental la necesidad de incorporar la perspectiva de género en todo el proceso que se emprende. Así, teniendo en cuenta la normativa de aplicación en relación con la Igualdad de Género, se realizan las siguientes observaciones:

1. El Decreto 93/2004 del 9 de marzo por el que se regula el informe de evaluación de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno (BOJA núm. 50 de 12.03.04), dispone en el Art. 4 que el informe de evaluación del impacto de género deberá describir las diferencias existentes entre mujeres y hombres en el ámbito de actuación de las medidas que pretenden regular en la disposición de que se trate, **incluyendo datos desagregados por sexo**, recogidos en estadísticas oficiales, así como el **análisis del impacto potencial** que la aprobación de dichas medidas producirá entre las mujeres y hombres a quienes van dirigidas.

La obtención de datos desagregados por sexo permite analizar la realidad y valorar si lo previsto en la norma en cuestión, atiende de forma igualitaria a las mujeres y los hombres a quienes afectan las medidas que se pretenden regular.

Así, algunos de los datos a recabar para visualizar la realidad de hombres y mujeres en relación con la materia que se regula pueden ser:

- Museos por tipo y titularidad
- Nº de trabajadores y trabajadoras de los museos por categoría profesional y tipo de museo
- Nº de mujeres y hombres que componen las Comisiones Técnicas creadas hasta el momento
- Nº de mujeres y hombres que componen los órganos o consejos de participación social creados hasta el momento
- Nº de visitas por sexo, franja horaria y tipo de museos



- Nº de participantes en las actividades culturales externas a la propia programación de la institución, por sexo y tipo de actividad

De no contar con esta información, se sugiere inste a las Áreas a las que compete, o cuando proceda, al Instituto de Estadística de Andalucía, para que incluya y analice estos datos para próximas ocasiones, y proceda en cumplimiento del artículo 22, letra e) de la Ley 8/2002 de 17 de diciembre del *Plan Estadístico de Andalucía 2003-2006* (BOJA 154, de 31.12.02).

2. Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 139 de la *Ley por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas para 2004* (BOJA núm.251 de 31 de diciembre), en todos los reglamentos se debe tener en cuenta de forma efectiva el **objetivo de la igualdad por razón de género**, y en el Anteproyecto de Ley que nos ocupa no se incluye como objetivo la igualdad por razón de sexo.

Así, a partir de lo dispuesto, se sugiere la inclusión de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como objetivo y criterio de calidad transversal, atendiendo al impacto positivo que tiene la inclusión de esta dimensión en la disminución de las desigualdades. La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía como entidad con competencia para regular las actuaciones que permitan la ordenación, coordinación y prestación eficaz de los servicios y actuaciones derivadas de las instituciones culturales, debe implicarse directa y activamente en el trabajo hacia la superación de las desigualdades de género que se producen en este ámbito, al que se dirige además este Anteproyecto de Ley.

Las fórmulas propuestas para visibilizar el compromiso con la igualdad en el texto del Anteproyecto de Ley son:



- a. Dejar constancia expresa en la Exposición de Motivos o completar el Artículo 1: Objeto, en las Disposiciones Generales que recoja la igualdad de oportunidades de la forma siguiente:

*La presente Ley tendrá en cuenta de modo transversal el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.*

- b. Incluir la igualdad de oportunidades en cada uno de los siguientes artículos:

- **Exposición de Motivos.** Se sugieren los siguientes cambios:

Punto I, párrafo quinto. Se sugiere la siguiente modificación:

*"Estos cambios socioculturales, que son experimentados por las mujeres y los hombres desde la posibilidad de acceso y control de los recursos que su posición en la sociedad les permite, han agotado el concepto de museo almacén cuyas funciones eran la conservación y catalogación de los fondos, entendiéndose como un instrumento eficaz de comunicación que interrelaciona el conocimiento de tipo informativo asociado a sus contenidos, las ideas y los sentimientos de las personas visitantes, y la creciente profesionalización de los mecanismos de comunicación expositivos y didácticos, que deben adaptarse al objetivo y posibilidades con que mujeres y hombres acceden a los recursos culturales."*

Punto II, párrafo cuarto. Se propone su modificación de la siguiente forma:

*"... El principio de fomento se manifiesta en el reconocimiento de la participación ciudadana a través de entidades o asociaciones sin ánimo de lucro que tengan como objeto la promoción de los museos y el desarrollo de actividades de voluntariado cultural en los mismos,*



*garantizando el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades en cada una de ellas..."*

Punto V, párrafo segundo. Se propone completar este párrafo como sigue:

*"..., atendiendo a las necesidades de mujeres y hombres, y respondiendo a las diferentes circunstancias en las que unas y otros utilizan los servicios culturales."*

Punto V, párrafo tercero. Se propone modificar este párrafo de la siguiente forma:

*"... Asimismo, en los museos y colecciones museográficas integrantes del Sistema Andaluz de Museos colecciones, que han de garantizar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, quedarán exentas de pago las personas..."*

- **Disposiciones generales.** Se proponen los siguientes cambios:

**Artículo 3. Punto nº 1.** Se propone completar este punto de la forma que sigue:

*"... y garantizando el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres."*

**Artículo 4. Punto nº 1.** En este punto, relativo a las funciones de los museos, se propone la inclusión de un nuevo apartado que recoja la necesidad de incorporar de forma transversal en todas ellas el principio de igualdad. Se propone:

*"h) El cumplimiento de estas funciones de garantizar la perspectiva de género, garantizando la adaptación de las actuaciones que afecten a las mujeres y a los hombres (de forma directa o indirecta), a sus necesidades."*

**Artículo 4. Punto n° 3.** Este punto se refiere a las funciones de las colecciones museográficas, por lo que se sugiere la misma estrategia que para el punto inmediatamente anterior.

**Artículo 5.** Se propone completar el párrafo de la siguiente forma:  
"Conforme a lo dispuesto en esta Ley, son deberes generales de los muros y colecciones museográficas, *además del cumplimiento de la normativa existente en materia de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres:*"

**Artículo 7. Punto n° 2.** Se propone la modificación de los siguientes apartados:

Apartado a) Se propone completar este apartado de la siguiente forma:

*"... siempre y cuando estas no perpetúen el rol de género o redunden en la desigualdad entre mujeres y hombres."*

Apartado b) Se propone ampliar este apartado de la forma que sigue:

*"..., promoviendo actuaciones que permitan rescatar las prácticas, saberes y experiencias protagonizadas por las mujeres y que supongan una contribución cultural y social"*

Apartado c) Se sugiere completar este párrafo:

*"..., evidenciando las aportaciones de las mujeres a este sector del conocimiento."*

- **Capítulo 1.** Se proponen los siguientes cambios:

08 / 07

**Artículo 8. Punto nº 2.** Se propone completar los siguientes apartados sobre requisitos mínimos para la creación o el reconocimiento de museos, de la forma en que se sugiere a continuación:

- a) Disponer de un inventario de los bienes culturales o naturales que integran la institución, *desagregando la autoría de los mismos siempre que sea posible, y visibilizando en especial la aportación de las mujeres en cada área de conocimiento que se trate.*
- b) Contar con una estructura y de personal suficiente para atender las funciones propias de la institución, *con una representación equilibrada de mujeres y hombres en todos los niveles de la estructura, siempre que sea posible.*
- c) Contar con un plan de viabilidad en el que conste dotación presupuestaria estable que permita el cumplimiento de sus funciones *que incorporan de forma transversal el principio de igualdad de oportunidades.*
- d) Contar con un inmueble destinado a sede del museo con carácter permanente con instalaciones que garanticen el desarrollo de sus funciones y *el acceso igualitario de las mujeres y los hombres con interés en la visita pública y en la investigación de los fondos.*
- e) Tener un horario de visita pública *que favorezca el acceso igualitario de las mujeres y hombres que usualmente suelen utilizar el servicio cultural.*

**Artículo 8. Punto nº 3.** Este punto se refiere a los requisitos mínimos para el reconocimiento y creación de colecciones museográficas, por lo que se proponen los mismos cambios que en el punto anterior de este mismo artículo.

**Artículo 9.** Se propone la modificación de los siguientes puntos:

**Punto nº 2.** Se propone completar este punto de la siguiente forma:

*"..., garantizando el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todo su desarrollo."*

**Punto nº 4.** Se sugiere completar el punto como sigue:

*"..., y la normativa vigente en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres."*

**Artículo 11. Punto número 2.** Se propone completar el punto:

*"..., y en la normativa existente en materia de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres."*

- **Capítulo II.** Se sugieren las siguientes modificaciones:

**Artículo 14.** Se propone la siguiente modificación:

*"El Registro Andaluz de museos y colecciones museográficas comprenderán los datos relativos a la titularidad reflejando si procede, el sexo de la persona titular, domicilio, denominación, tipología y ámbito temático de la institución y la descripción de los bienes muebles e inmuebles que lo conforman, recogiendo información desagregada por sexo sobre la autoría de los mismos, siempre que ello sea posible y proceda. Además se harán constar los órganos rectores y, en su caso, los órganos asesores de carácter colegiado, especificando su composición por sexo y categoría profesional, sus normas de funcionamiento, y cualesquiera otros datos que se determinen reglamentariamente."*

**Artículo 16.** Se propone completar este artículo de la siguiente forma:

*"..., garantizando el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres."*



08/07

- **Título II.** Se sugiere modificar el:

**Artículo 19.** Se propone el siguiente cambio:

"La Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia de museos, ejercerá las siguientes funciones en relación con los museos y colecciones museográficas, *incorporando el principio de igualdad de género de forma transversal en todas ellas:*"

**Artículo 20. Punto nº 1.** Se sugiere completar el apartado a) de la siguiente forma:

*"... desagregados por sexo."*

Se propone también para el punto nº 1 del Artículo 20, incluir un nuevo apartado que refleje la necesidad de que los museos y colecciones museográficas incorporen en sus obligaciones el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Se sugiere:

*"h) El cumplimiento de estas obligaciones incorporará la perspectiva de género de forma transversal, garantizando actuaciones que se adapten a la realidad de las mujeres y hombres en el ámbito de la cultura."*

**Artículo 20. Punto nº 4.** Se sugiere completar este punto como sigue:

*"..., siendo necesaria la valoración el impacto de género que dichas reformas y adaptaciones para la concesión de las subvenciones o ayudas."*

- **Título III. Capítulo I.** Se sugieren las siguientes modificaciones:

08/07

**Artículo 21. Punto nº 2.** Se propone la modificación del segundo párrafo de la forma que sigue:

"Los museos y colecciones museográficas de Andalucía deberán cumplir la legislación sobre accesibilidad y eliminación de barreras para personas discapacitadas, y *la normativa vigente en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres*, y fomentarán la implantación de programas específicos para el acceso y disfrute *igualitario* de sus servicios culturales de dichas personas."

**Artículo 24.** Se propone la incorporación de un nuevo punto que refleje la necesidad de incorporar el principio de igualdad en todos los procesos. Se propone:

*"5. Del mismo modo, todo lo previsto en los puntos anteriores debe garantizar la incorporación de la perspectiva de género, favoreciendo actuaciones que se adapten a la realidad de las mujeres y hombres en el ámbito de la cultura."*

- **Capítulo II.** Se sugiere la modificación de los siguientes artículos:

**Artículo 26.** Se plantea la modificación de los siguientes puntos:

**Punto nº 1.** Se propone completar el punto de la siguiente forma:

"Los museos de Andalucía deberán contar con un instrumento de planificación que recibirá la denominación de plan museológico y que, con un carácter integrador y global, recogerá las líneas programáticas de la institución y la propuesta de contenidos, *así como su compromiso explícito con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.*"

**Punto nº 3.** Se propone completar el punto de la siguiente forma:

*"..., favoreciendo aquellas que permitan rescatar los saberes y aportaciones culturales protagonizadas por mujeres y que forman parte de la contribución cultural andaluza"*



**Artículo 28.** Se proponen cambios en los siguientes puntos de este artículo:

**Punto nº 1.** Se propone completar el segundo párrafo de este punto:

*"..., dejando explicitado su compromiso con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres tanto en sus objetivos, como en las actividades planteadas en el plan."*

**Punto nº 2.** Se sugiere el siguiente cambio:

*"...en donde, junto con el número de visitantes y la dotación de personal, datos que se aportarán desagregados por sexo, se desarrollarán y evaluará el grado de cumplimiento de las actividades de investigación, conservación, restauración, mantenimiento, difusión y administración del plan anual de actividades correspondientes, acompañada de un informe sobre el impacto de género de las mismas."*

**Punto nº 3.** Se sugiere completar el párrafo haciendo mención explícita a la necesidad de que la Orden de la Consejería competente que incluirá las recomendaciones técnicas para la elaboración del plan anual de actividades y de la memoria de gestión, obligue a la integración de la perspectiva de género desde su diseño hasta la evaluación de su cumplimiento, especificando la necesidad de incorporar un informe de impacto de género que prevea el efecto de las actuaciones que incluye dicho plan, sobre las mujeres y los hombres en el ámbito de la cultura.

- **Capítulo III.** Se propone modificar:

**Artículo 31.** Se sugiere completar los siguientes puntos:

**Punto nº 2.** Se propone la siguiente modificación:



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

"A la dirección le corresponderá ejercer las funciones ejecutivas y gestoras de la institución, velar por el cumplimiento de sus fines y *del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres*, y planificar, organizar, coordinar y supervisar sus actividades, adoptando las medidas oportunas que garanticen el *acceso igualitario de mujeres y hombres a los servicios culturales* y la conservación y protección de los bienes culturales ,...."

**Punto nº 3.** Se propone la siguiente modificación:

"Las funciones de administración, protección, conservación, investigación y difusión, de conformidad con lo que se establezca reglamentariamente, *y cumpliendo con la normativa de igualdad*, comprenderá las siguientes tareas:"

- **Título IV. Capítulo I.** Se propone completar el **punto nº 2 del Artículo 36**, de la siguiente forma:

"..., *al que adjuntará un informe de impacto de género que valore los efectos de la ordenación sobre las mujeres y hombres a los que afecte, sea como profesionales o como personas usuarias de los servicios culturales.*"

- **Capítulo III.** Se propone completar los siguientes puntos del **Artículo 46**:

**Punto nº 3.** Se propone completar el punto de la siguiente forma:

"..., *recogiendo información desagregada sobre la autoría de los mismos, siempre que ello sea posible y proceda.*"

**Punto nº 4.** Se sugiere completar el punto de la forma que sigue:

"..., *especificando el registro de la información desagregada por sexo siempre que sea oportuno, facilitando la elaboración de estadísticas que permitan un análisis de género.*"



3. En todas las comisiones se tiene que tener en cuenta de forma efectiva la **composición paritaria de los órganos** consultivos y de asesoramiento de la Administración de la Junta de Andalucía de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 140 de la *Ley por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas para 2004* (BOJA núm.251 de 31.12.03). El presente Anteproyecto de Ley no recoge el respeto del principio de paridad en la composición de los órganos consultivos y de asesoramiento.

Se proponen las siguientes modificaciones en diferentes puntos del articulado:

- **Artículo 32. Participación social. Punto nº 2.** Se propone completar este punto:

*"... ..., recogiendo la necesidad de los Consejos tiendan al equilibrio de mujeres y hombres en su composición."*

- **Artículo 33. Comisiones técnicas. Punto nº 2.** Se propone completar el punto como sigue:

*"La composición las comisiones técnicas deberá tender a la composición paritaria siempre que sea posible, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 140 de la Ley por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas para 2004. En el caso de no haber mujeres expertas, un experto con conocimientos de género aplicado al ámbito de la cultura."*

4. De acuerdo con la Orden de 24 de noviembre de 1992, conjunta de la Consejería de Gobernación y de la Consejería de Asuntos Sociales, sobre la eliminación del lenguaje sexista en los textos y documentos administrativos (BOJA núm. 126 de 05.12.1992), se hace necesario revisar la redacción asegurando que el **lenguaje utilizado** facilite la visibilización de mujeres y hombres en todos los aspectos tratados.



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

Siguiendo la recomendación de las reglas contempladas en la *Instrucción de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de Viceconsejeros para evitar un uso sexista del lenguaje en las disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía*, se hacen las siguientes observaciones:

- Cuando se mencione a lo largo del texto un nombre empleando el género gramatical masculino como genérico universal deberá sustituirse por la mención expresa también del femenino o se buscará una expresión que incluya a ambos sexos. Por ejemplo:

*Investigadores* → Las personas que se dedican a la investigación, o bien, las personas investigadora. En cualquier caso deberá visualizarse los investigadores y las investigadoras.

*Los ciudadanos* → La ciudadanía, o bien, los ciudadanos o ciudadanas

*Expertos* → Personas expertas, o bien, los expertos y las expertas.

*El interesado* → La persona interesada, o a quien interese; o bien la interesada y el interesado.

*Todos* → Todos y todas

- Cuando se haga uso de términos que no llevan marca de género, es necesario observar los artículos o determinantes que lo acompañan pues estos le atribuyen la marca de género que por sí mismo no poseen:

*Los visitantes* → Los y las visitantes, o bien, las personas visitantes, o bien, quienes visitan

*Los titulares* → La persona titular, o bien, quien posea la titularidad; o Los y las titulares.

*Los mayores de 65 años* → Las personas mayores de 65 años, o bien, los y las mayores de 65 años



5. Conforme a la Orden conjunta de 19 de febrero de 1993 de las Consejerías de la Presidencia y de Asuntos Sociales, por la que se dictan normas para el cumplimiento del principio de no discriminación por razón de sexo en el empleo de imágenes en la **información y divulgación de la acción institucional** de la Junta de Andalucía (ORDEN de 06.03.93), se debería recoger y tener presente dicho objetivo de un modo explícito en:

- **Exposición de motivos. Punto VI.** Se propone completar el segundo párrafo de la siguiente forma:  
*"..., para lo que cumplirá la normativa vigente en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicando el principio de no discriminación por razón de sexo en aquellas actuaciones de difusión que se plantee."*
- **Artículo 4. Punto nº 1. Apartado d) y Punto nº 3, apartado d).** Se propone completar este apartado como sigue:  
*"..., aplicando el principio de no discriminación por razón de sexo en cualquiera de las actuaciones de difusión, promoción y divulgación que emprenda, cumpliendo así la normativa vigente en materia de igualdad de oportunidades."*
- **Artículo 5. Apartado e).** Se propone completar el apartado como sigue:  
*"..., teniendo en cuenta el principio de no discriminación por razón de sexo en las acciones de difusión, en el marco de la normativa en vigor, y velando por que los valores culturales difundidos no perpetúen el rol de género o redunden en las desigualdades entre mujeres y hombres."*
- **Artículo 20. Punto nº 1. Apartado e).** Se propone completar el párrafo de la siguiente forma:



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

*"..., y teniendo en cuenta el principio de no discriminación por razón de sexo en aquellas acciones de difusión que se lleven a cabo."*

- **Artículo 31. Punto nº 3. Apartado e).** Se propone completar este punto de la siguiente forma:

*"..., aplicando el principio de no discriminación por razón de sexo en cada una de ellas."*

Las conclusiones según las observaciones efectuadas en relación con el impacto de género en el Anteproyecto de Ley de Museos, son:

- Que es necesario contar con datos desagregados por sexo que permitan visibilizar la situación de las y los profesionales en este sector, así como las posibilidades de acceso a los servicios culturales de las mujeres y los hombres, permitiendo un desarrollo igualitario de los conocimientos y saberes que estos transmiten.
- Que es fundamental recoger el objetivo de la igualdad por razón de género de forma transversal en todo el articulado afectado por el mismo.
- Que se debe adaptar el uso no sexista del lenguaje en todo el documento.
- Que se debe velar porque las acciones de información y divulgación que se financien estén libres de contenidos sexistas.

Sevilla, 15 de febrero de 2006

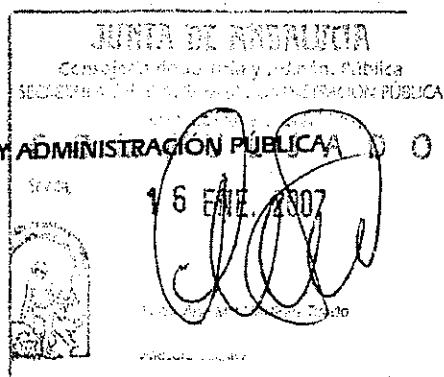


# JUNTA DE ANDALUCÍA

INFORME  
CONSEJERÍA

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
Secretaría General  
para la Administración Pública

09 / 07



## ANTEPROYECTO DE LEY DE LA ADMINISTRACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

### INFORME DE EVALUACIÓN POR RAZÓN DEL GÉNERO

El artículo 139.1 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, dispone que todos los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno deberán tener en cuenta de forma efectiva el objetivo de igualdad por razón del género, a cuyo fin debe emitirse un informe del impacto por razón del género del contenido de las mismas.

El Decreto 93/2004, de 9 de marzo, por el que se regula el informe de evaluación de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno, establece en su artículo 4 el contenido del citado informe, que deberá describir, al menos, las diferencias existentes entre hombres y mujeres en el ámbito de actuación de las medidas que se pretenden regular en la disposición de que se trate, incluyendo los datos desagregados por sexos, recogidos en estadísticas oficiales, así como el análisis del impacto potencial que la aprobación de dichas medidas producirá entre las mujeres y hombres a quienes van dirigidas.

#### **1. Objeto del anteproyecto de ley**

Como se recoge en el artículo 1 del anteproyecto, el objeto de la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía consiste en la regulación de la organización, funcionamiento y régimen jurídico de la Administración de la Junta de Andalucía, así como las especialidades del procedimiento administrativo común que le son propias. Regula también los principios generales de la organización, funcionamiento y régimen jurídico de su Administración institucional y de las demás entidades integradas en el sector público andaluz. Con este objetivo, el anteproyecto de ley desarrolla su contenido a través de 101 artículos, distribuidos en cinco títulos, que pueden sintetizarse en los siguientes términos:

- El Título Preliminar, "Disposiciones Generales", establece el objeto y ámbito de aplicación de la Ley y declara la personalidad jurídica de la Administración Pública de Andalucía.
- En el Título I, "Principios de Organización, Actuación, Atención a la Ciudadanía y Colaboración de la Administración de la Junta de Andalucía", se contienen los principios de la organización y actuación de la Administración de la Junta de Andalucía. Además de los previstos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, son de destacar, entre otros, los siguientes:
  - En la organización de la Administración, los principios de simplificación, racionalización, eficiencia y programación de objetivos, en la organización administrativa.
  - En sus relaciones con los ciudadanos, los principios de buena fe, confianza legítima, transparencia y objetividad en el servicio efectivo de los derechos e intereses de aquellos, procurando la racionalidad, simplificación y la claridad de sus actuaciones y procedimientos, así como la sencillez y proximidad a la ciudadanía, facilitando la participación de ésta en los asuntos públicos.

09 / 07

En sintonía con los objetivos de la modernización administrativa, destacan en este mismo título las normas relativas a la mejora de la calidad de los servicios y al empleo de nuevas tecnologías en la gestión administrativa. Por último, regula las relaciones interadministrativas asentadas en los principios constitucionales de colaboración y lealtad institucional, así como los instrumentos de colaboración con otras Administraciones Públicas, tales como los convenios de colaboración y los consorcios.

- El Título II versa, como su propio nombre indica, sobre "La Organización Administrativa". En él se regula el régimen general de los órganos y unidades administrativas, y se define la estructura central y periférica de la Administración.

Se opta por mantener el régimen departamental ya consolidado, mantenimiento que resulta plenamente compatible con la previsión de nuevas formas de gestión al servicio de una mayor proximidad al ciudadano y la mejor gestión de los servicios. Igualmente destaca la inclusión de la distinción, entre órganos superiores y directivos en la organización de los departamentos, fijando sus respectivas áreas institucionales y funcionales. Asimismo, se pone especial énfasis en la racionalización y economía en la creación de órganos, evitando su duplicidad; principio que igualmente preside la creación de entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía.

- En el Título III, "La Administración Instrumental de la Junta de Andalucía", se definen, en aras de una adecuada racionalización del sector público, las distintas entidades vinculadas o dependientes de la Junta de Andalucía: agencias administrativas, agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz.
- En el Título IV, "Régimen jurídico de los órganos y de la actuación administrativa" se recogen los derechos de los ciudadanos ante la actuación administrativa y se regulan los Registros de la Comunidad Autónoma, destacando el valor de las normas relativas a los Registros telemáticos, y el régimen jurídico de los actos y del procedimiento administrativo, avanzando en aquellos aspectos propios de la organización de la Administración de la Junta de Andalucía.

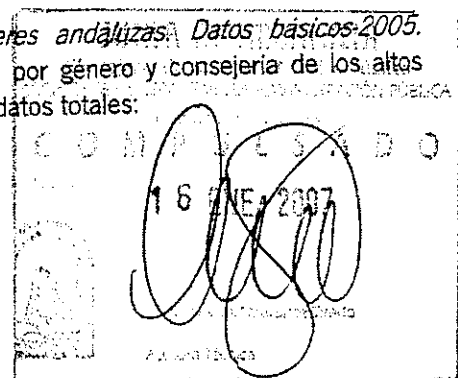
## 2. Contenido del informe

2.1. Atendiendo al contenido del anteproyecto de ley, la pertinencia del género es predicable principalmente de los preceptos que regulan los distintos órganos administrativos, unipersonales (título II) y colegiados (sección 1.ª del capítulo II del título IV), el personal de las entidades instrumentales (capítulo II del título III), e incluso de los que se ocupan de los derechos de los ciudadanos ante la actuación administrativa (capítulo I del título IV), en cuanto afectan a personas entre las que pueden existir diferencias por razón del sexo. Esto no significa, sin embargo, que en todos estos aspectos se requiera una actuación de discriminación positiva para garantizar la igualdad real entre hombres y mujeres.

2.2. Por lo que se refiere al análisis del contexto sobre el que el anteproyecto de ley va a incidir, hay que advertir que sólo en algún sector se dispone de datos desagregados por sexos y recogidos en estadísticas oficiales, sin perjuicio de lo cual se realizan las siguientes observaciones:

- Órganos superiores y directivos de la Administración de la Junta de Andalucía y sus organismos autónomos

El Instituto Andaluz de Estadística en su publicación *Mujeres andaluzas. Datos básicos 2005. Perspectivas de género* ofrece información sobre la diferenciación por género y consejería de los altos cargos de la Junta de Andalucía en el año 2004, con los siguientes datos totales:



	Consejero	Viceconsejero	Secretario General	Secretario Gral. Técnico	Director General	Delegado	Total
Mujeres	8	1	4	7	33	38	91
Hombres	6	13	14	7	45	68	153
Índice de Feminización	133,33	7,69	28,57	100,00	73,33	55,88	59,48

Por su parte, del Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRhUS) también se pueden obtener datos de ocupación, desagregados por sexo, referidos a los titulares de los altos cargos y delegaciones provinciales, incluyendo también a los altos cargos de organismos autónomos.

(a 17 de junio de 2005)

	HOMBRES		MUJERES		AMBOS SEXOS
	n.º	%	n.º	%	
ALTOS CARGOS	115	64'97	62	35'03	177
DELEGADOS PROVINCIALES	59	61'46	37	38'54	96
<b>TOTAL</b>	174	63'74	99	36'26	273

Respecto del personal directivo del resto del sector público andaluz, no se dispone de datos desagregados por sexos y recogidos en estadísticas oficiales.

De los datos referidos se desprende que la distribución de cargos entre hombres y mujeres está en el umbral de la paridad, consecuencia del progresivo aumento de la presencia de las mujeres en altos cargos. En este sentido, el Presidente de la Junta de Andalucía en el encuentro "Las Políticas de Igualdad en los Estatutos de Autonomía", manifestaba que desde 1982 el porcentaje de mujeres en altos cargos se ha multiplicado por cuatro, que tenemos un gobierno con más mujeres que hombres y que el cuarenta por ciento de los altos cargos de nuevo nombramiento en esta legislatura son mujeres.

Atendiendo a la evolución y al estado actual de la participación de las mujeres en este ámbito, no se ha considerado preciso introducir una actuación de discriminación positiva en favor de las mujeres.

#### - Órganos colegiados

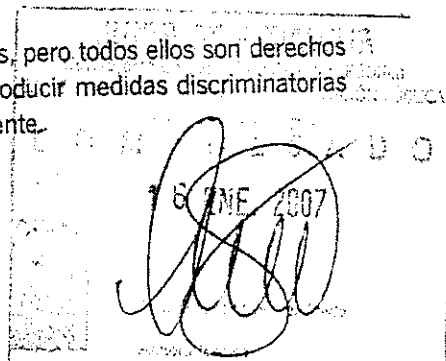
La Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, estableció en su artículo 140 la composición paritaria de los órganos consultivos y de asesoramiento de la Administración de la Junta de Andalucía.

Aunque no se dispone de estadísticas oficiales sobre la composición de los órganos administrativos colegiados, el anteproyecto de Ley de la Administración de la Junta de Andalucía extiende esta misma previsión a todos los órganos colegiados, incorporando en los artículos 74.1.a) y 77.3 la participación paritaria de hombres y mujeres en la composición de los órganos colegiados con carácter general, y no ya sólo en los órganos consultivos.

#### - Derechos de los ciudadanos ante la actuación administrativa

En el capítulo I del título IV del anteproyecto de ley se recogen los derechos de información, de petición, de calidad de los servicios, de presentación de documentos y de acceso a archivos y registros y obtención de copias.

No contamos con datos estadísticos del ejercicio de estos derechos, pero todos ellos son derechos de carácter muy general en los que no parece preciso ni aconsejable introducir medidas discriminatorias positivas porque la igualdad real de trato entre hombres y mujeres es evidente.



09 / 07

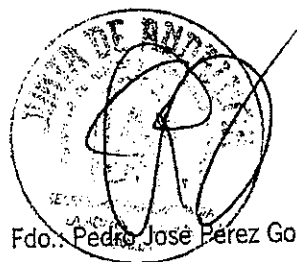
### 3. Conclusión

Por lo expuesto, y de acuerdo con el artículo 139 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, se considera que el anteproyecto de Ley de la Administración de la Junta de Andalucía no promueve consecuencias negativas que favorezcan situaciones de discriminación entre mujeres y hombres. Por el contrario, introduce alguna medida de discriminación positiva en favor de las mujeres, además de utilizar un lenguaje correcto desde la perspectiva de género, bien "neutralizando" el sexo del lenguaje, bien recurriendo a un lenguaje sexoespecífico, pero al mismo tiempo claro e inteligible para todos sus destinatarios.

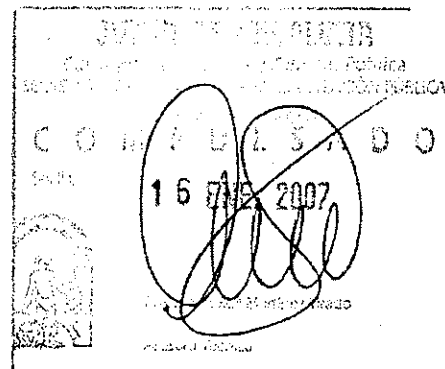
Sevilla, a 28 de junio de 2005

EL SECRETARIO GENERAL

PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



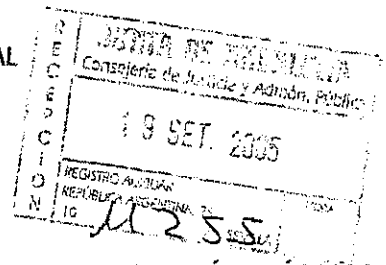
Fdo.: Pedro José Pérez González-Toruño



09 / 07



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

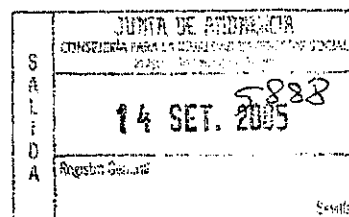


Fecha: 13 de septiembre de 2005

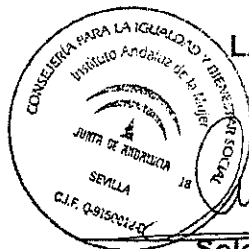
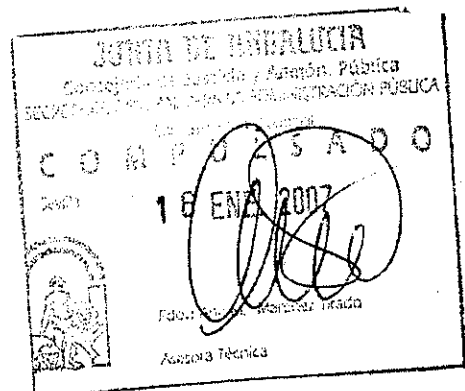
Ref.: Dirección, EM/mm

Asunto: Informe Impacto de Género  
nº 76

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMÓN. PÚBLICA  
Secretaría General para la admón. Pública  
Avda. República Argentina, nº 25, 5ª planta  
41071 - SEVILLA



En relación al "**Anteproyecto de Ley de la Administración de la Junta de Andalucía**", con fecha de registro de entrada en este Instituto el pasado día 26 de julio, adjunto le remito observaciones al Informe de Evaluación de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno.

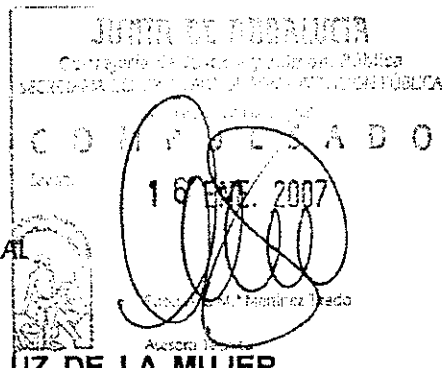


LA DIRECTORA

Soledad Ruiz Segúin



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL



**OBSERVACIONES QUE EMITE EL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER AL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO REMITIDO POR LA CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.**

En primer lugar observar que desde el organismo de igualdad de la Junta de Andalucía no compartimos la totalidad de las conclusiones a las que se llega en el informe presentado sobre la evaluación del impacto de género, pues el anteproyecto de ley es **pertinente al género con carácter general**, ya que la materia que regula tiene importantes repercusiones en las mujeres y los hombres que conforman la organización de la Administración Autonómica, y en la población, hombres y mujeres de Andalucía.

Efectivamente, en coherencia con las políticas de la Comisión Europea sobre la Igualdad de Oportunidades ente mujeres y hombres, y con el desarrollo de diversas actuaciones que desde hace tiempo la Junta de Andalucía realiza para facilitar el enfoque integrado de género en la organización y gestión pública, esta futura ley de organización, actuación y funcionamiento de la Administración Pública Andaluza se constituye en *llave maestra* para impulsar el desarrollo de un marco común de intervención coherente con la principio de igualdad de oportunidades y por tanto, más eficaz, más sostenible y de calidad.

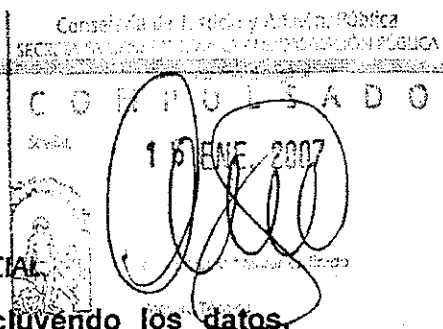
Por todo ello, y teniendo en cuenta la normativa de aplicación en relación con la igualdad de género, se realizan las siguientes observaciones:

1. El Decreto 93/2004 del 9 de marzo (BOJA núm. 50 de 12 de marzo) por el que se regula el informe de evaluación de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno, Art. 4 dispone que el informe de evaluación del impacto de género deberá describir, al menos, las diferencias existentes entre mujeres y hombres en el ámbito de actuación de las medidas que pretenden

09 / 07



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL



regular en la disposición de que se trate, **incluyendo los datos,**  
**desagregados por sexo,** recogidos en estadísticas oficiales, así como  
el análisis del impacto potencial que la aprobación de dichas medidas  
producirá entre las mujeres y hombres a quienes van dirigidas.

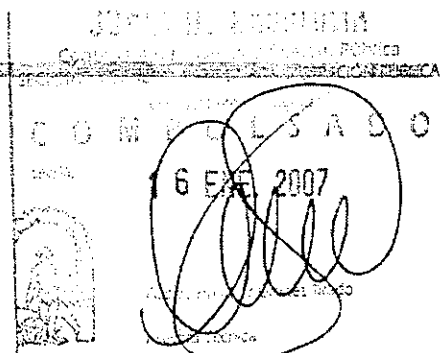
En relación con los datos aportados, la paridad sólo es un hecho en los  
máximos representantes de las Consejerías, sin que esta se halla hecho  
extensiva al resto de los altos cargos de forma generalizada, con  
excepción de las Secretarías Generales y a las Direcciones Generales.  
En ambas tablas, **el total de mujeres en puestos de decisión no  
supera el 37% en un caso (datos extraídos de Mujeres Andaluzas.  
Datos Básicos 2005) y el 36% en otro (Sirhus).** A pesar de los avances  
experimentados en los últimos años con relación a la presencia de  
mujeres en puestos de responsabilidad, es necesario reconocer que  
dicho cambio no se ha producido de forma natural, muy al contrario, son  
las políticas activas de igualdad las que lo han favorecido. Por ello, es  
necesario mantener y desarrollar las estrategias oportunas a fin de  
seguir avanzando en la eliminación de los desequilibrios existentes en la  
posición de mujeres y hombres en los ámbitos de decisión y  
representación.

Ante la falta de datos desagregados en relación con la composición de  
los órganos colegiados y de los órganos de participación ciudadana, se  
sugiere inste al Departamento de Estadística de esa Consejería, o en su  
caso, al Instituto de Estadística de Andalucía, para que los incluya y  
analice para próximas ocasiones, y proceda en cumplimiento del artículo  
22, letra e) de la Ley 8/2002 de 17 de diciembre del Plan Estadístico de  
Andalucía 2003-2006 (BOJA 154, 31.12.02).

09 / 07



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL



2. Por otra parte, en todos los reglamentos se tiene que tener en cuenta de forma efectiva el **objetivo de la igualdad por razón de género**, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 139 de la *Ley por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas para 2004* (BOJA núm.251 de 31 de diciembre) y en el anteproyecto de ley que nos ocupa no se incluye entre los objetivos la igualdad por razón de sexo.

De acuerdo con lo dispuesto, se sugiere la inclusión de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como objetivo y criterio de calidad transversal, dado el impacto positivo que su contemplación puede tener en la disminución de las desigualdades por razón de sexo.

Puede optarse por alguna de las siguientes fórmulas:

- a) Recoger la igualdad de género de forma transversal en los apartados siguientes:

**Exposición de motivos, apartado II, primer párrafo:** Se podría añadir, junto con los principios de eficacia, eficiencia y modernidad, *la igualdad de trato entre mujeres y hombres (Directiva del Consejo 2004/113/CE de 13 de diciembre de 2004).*

**Art. 3.** Se debería hacer *mención expresa a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como un principio que permanece integrado en toda la organización de la Administración de la Junta de Andalucía.*

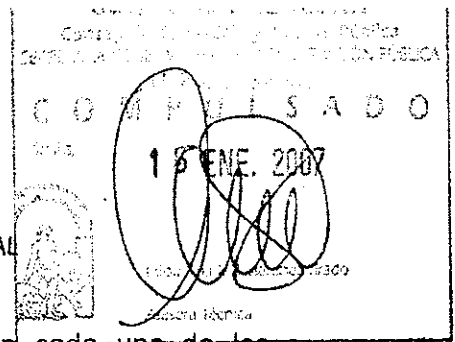
**Título IV, Capítulo I, sección 1ª.** Se podría redactar un nuevo artículo para que además del derecho de los ciudadanos y las ciudadanas de información, petición y calidad de los servicios, quede expreso el *derecho de igualdad de trato e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.*



— 09 / 07



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL



b) Incluir la igualdad de oportunidades además en cada uno de los siguientes artículos:

**Título I, Capítulo II.** Se podría añadir un artículo donde se pusiera de manifiesto que se garantizará el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en el acceso a los servicios y su suministro.

**Título I, Capítulo III.** Se podría crear un nuevo artículo donde se hiciera explícito que *en todos los convenios de colaboración y/o participación que suscriba la Administración de la Junta de Andalucía, bien con el resto de administraciones públicas, bien para participar en conferencias sectoriales u otros organismos de cooperación con la Administración del Estado, se hará explícito el compromiso con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.* Igualmente, sucedería con los estatutos que determinan la finalidad del consorcio a crear por la administración de la Junta de Andalucía.

**Artículo 20, punto 3.** El estudio de los costes de creación y funcionamiento se debería acompañar a su vez de un *informe previo sobre el posible impacto de género que su creación puede suscitar, así como las medidas organizativas, funcionales y económicas que son necesarias contemplar para garantizar un impacto positivo en la igualdad.*

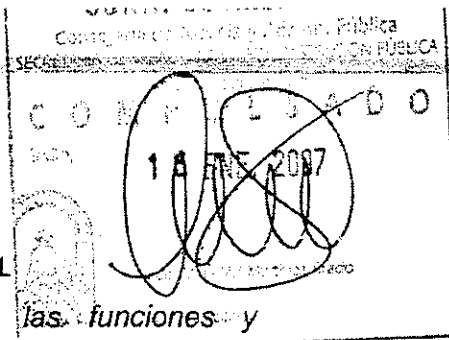
**Artículo 24 (punto 2) , y artículo 37 (punto 1).** Se podría añadir una letra más que ponga de manifiesto, entre las funciones y competencias de quienes ostentan la titularidad de las Consejerías o Delegaciones de Gobierno, *velar por el cumplimiento de los principios de igualdad de trato e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.*

**Artículo 25 (punto 2, letras a ,b ,c ,e ,f ,g , i).** En coherencia con el objetivo de la igualdad por razón de género, se debería añadir un punto

09 / 07



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL



más donde se explicita que el desarrollo de las funciones y competencias asignadas se llevará a cabo incorporando la perspectiva de género.

**Artículo 26, (punto 2, letra b), artículo 27 (punto 1), artículo 28 (punto 2, letras a, b y c), artículo 33.** En todos los artículos mencionados se debería hacer mención expresa a la incorporación de la perspectiva de género en la descripción de las funciones y/o competencias. Así, por ejemplo, en el apartado arriba indicado del artículo 26, se debería modificar su redacción añadiendo lo siguiente: *impulsar la consecución de los objetivos y la ejecución de los proyectos de su organización contemplando la dimensión de género, ...*

**Artículo 30, punto 2.** Igualmente, debería quedar manifiesto que las comisiones interdepartamentales desarrollarán sus funciones teniendo presente la perspectiva de género en todo proceso de planificación, estudio, diseño, ejecución, seguimiento y/o control de objetivos y acciones.

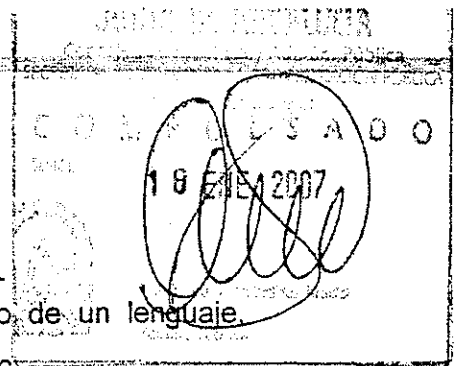
**Artículo 32, punto 1.** La preparación de planes y programas o actuaciones de gran incidencia social deberían estar acompañados de un informe de impacto de género así como, en su caso, de las medidas necesarias afín de garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

**Artículo 34.** Se debería añadir un punto en el que se ponga de manifiesto que la **Agencia Andaluza de Administración Pública** tendrá presente la dimensión de género en todas las actuaciones que le corresponden. Esto implica entre otros, proporcionar y trabajar con datos desagregados por sexo, incorporar indicadores de género que informen de la situación y posición de hombres y mujeres, incorporar las medidas oportunas para garantizar un acceso equitativo de mujeres y hombres a los diferentes procesos de selección, formación y perfeccionamiento del

09 / 07



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL



personal, evitar en la difusión de materiales el uso de un lenguaje  
contenidos e imágenes sexistas y/o androcéntricas, etc.

**Artículo 39.** Al igual que se ha señalado con las competencias y funciones de otras personas titulares, *quienes están al frente de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, deberían garantizar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ejercicio de su jefatura de todo el personal de la Delegación, e introducir la perspectiva de género en la administración y gestión de la misma.*

**Artículo 45.** Añadir: implantarán sistemas homologados de calidad en la producción de bienes y prestación de servicios, *incluidos los relacionados con el respeto al principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y los de naturales medioambiental.*

**Artículo 48.** Se debería añadir un punto más en el que se expresara: *los estatutos deben ser coherentes con el objetivo de la igualdad por razón de género.*

**Artículo 49.** Además de los contenidos señalados, se debería añadir que el plan inicial de actuación debería *garantizar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todo su desarrollo.*

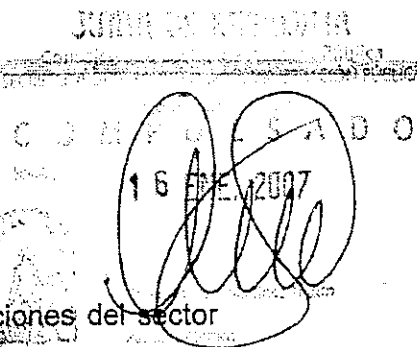
**Artículo 55.** Se podría redactar añadiendo lo siguiente: las Agencias están sometidas a un control de eficacia.....al objeto de comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos, la adecuada utilización de los recursos asignados y *su impacto en la igualdad de oportunidades.*

**Artículo 57, (punto 1), artículo 60 (punto 1), artículo 63 y artículo 64 (punto 2):** Se debería hacer explícito que todas las actividades realizadas por las Agencias Administrativas, las Agencias públicas

09 / 07



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL



empresariales, las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público andaluz han de incorporar la perspectiva de género.

**Artículo 78 (punto 1).** De forma similar a otros artículos anteriormente comentados, se podría sumar a las funciones designadas a la persona titular de la presidencia de los órganos colegiados, *velar por el cumplimiento de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.*

**Disposición adicional única.** Se podría añadir un párrafo donde se expresara: *sin menoscabo de lo anterior, se prestará especial atención al respeto al principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres*

**Disposición transitoria segunda, punto 3.** Igualmente, se podría añadir: *En todo caso, las medidas aplicables se llevarán a cabo respetando el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.*

**Disposición adicional primera.** En coherencia con el objetivo de la igualdad por razón de género, contemplado de forma transversal y explícita a través de todo el presente anteproyecto de ley, será oportuno revisar la ley 5/1983, de 19 de julio a fin de valorar en qué artículos de los mencionados en esta disposición se hace necesario mencionar el objetivo de la igualdad.

3. En todas las comisiones se tiene que tener en cuenta de forma efectiva la **composición paritaria de los órganos** consultivos y de asesoramiento de la Administración de la Junta de Andalucía de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 140 de la *Ley por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas para 2004* (BOJA núm.251 de 31 de diciembre).



Instituto Andaluz de la Mujer

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

09 / 07

JUNTA DE ANDALUCÍA

COMISIÓN DE IGUALDAD

6 ENE 2007

En este sentido felicitamos su contemplación haciendo extensiva la paridad, no solo a los órganos de carácter consultivo sino a todos los órganos colegiados ( artículo 74 y artículo 77).

Por otro lado, siendo conscientes de la importancia que reviste esta futura ley, por cuanto puede aportar a favor de la igualdad de género, entendemos que el compromiso con el logro de la igualdad entre mujeres y hombres puede ir más allá. A pesar de los datos aportados, no es posible afirmar que la paridad es un hecho, puesto que en la mayoría de los casos las mujeres siguen siendo minoritarias y su presencia en los puestos de responsabilidad es muy reciente y frágil, dependiendo la consolidación de una representación equitativa en los órganos de toma de decisiones, del desarrollo y/o mantenimiento de las políticas activas de igualdad.

Analizado el presente anteproyecto de ley, observamos que las personas titulares de las Consejerías son las responsables de proponer las personas candidatas a la titularidad de las Viceconsejerías (art. 25), Secretarías Generales (art. 26), Secretarías Generales Técnicas (art. 27), Direcciones Generales (art. 28), Delegaciones de Gobierno (art. 36) y Delegaciones Provinciales (art. 38). En este sentido, *sugerimos que se haga explícita la recomendación de tener a la paridad en la propuesta o selección final de las personas candidatas a cada titularidad mencionada.*

Igualmente, se puede valorar la composición de los órganos asesores, consultivos y de participación, a saber: Gabinete Jurídico (art.29), y órganos de participación ciudadana (art. 32).

Para poder aplicar de una forma efectiva y real el principio de paridad entre mujeres y hombres, se sugiere recomendar para estos órganos la inclusión de **medidas compensatorias de acción positiva**, que recojan la posibilidad, en el caso de subrepresentación de uno de los sexos en

16 ENE 2007



Instituto Andaluz de la Mujer

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

09 / 07

los puestos de dirección, compensar y corregir esta situación desigual con representantes no fijados por la vinculación con el cargo.

En la misma línea, y en relación con la participación de **personas cualificadas** en los órganos de participación ciudadana, se sugiere la participación paritaria de una mujer y un hombre, y en el caso de no haber mujeres expertas, un experto con conocimientos de género en la materia que sea.

4. Y con carácter general, de acuerdo con la *Orden de 24 de noviembre de 1992, conjunta de la Consejería de Gobernación y de la Consejería de Asuntos Sociales, sobre la eliminación del lenguaje sexista en los textos y documentos administrativos* (BOJA núm. 126 de 05.12.1992), se hace necesario **revisar la redacción** asegurando que el lenguaje utilizado facilite la visibilización tanto de mujeres como de los hombres, en todos los aspectos tratados, lo que facilitará a su vez la comprensión de las situaciones concretas de unas y otros que puedan ser motivo de desigualdades y la posterior actuación a favor de la igualdad entre los géneros.

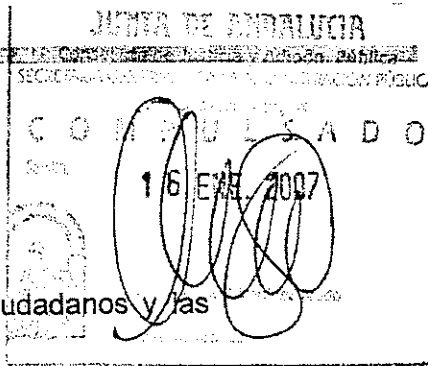
Valoramos positivamente el esfuerzo realizado en la redacción por emplear un lenguaje no sexista. No obstante, hacemos la siguientes indicaciones siguiendo las reglas contempladas en la *Instrucción de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de Viceconsejeros para evitar un uso sexista del lenguaje en las disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía*.

- Cuando se mencione a lo largo del texto un nombre empleando el género gramatical masculino, como genérico universal deberá sustituirse por la mención expresa también del femenino o se buscará una expresión que incluya a ambos sexos. Por ejemplo:

— 09 / 07



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL



Los ciudadanos, al ciudadano → la ciudadanía, los ciudadanos y las ciudadanas

Los administrados → las personas administradas

Los interesados → las personas interesadas, los sujetos interesados, quien está interesado

Derechos de autor → derechos de autoría, derechos de autor o autora

Expertos → personal experto, personas expertas

Técnicos → personal técnico, profesionales técnicos

Viceconsejero, Director, Presidente → persona titular de la viceconsejería, quien ostenta la presidencia, quien está al frente de la dirección

Letrados → letrado y letradas, personal licenciado en derecho, personal abogado

Los usuarios → personas usuarias

Andaluces → población andaluza, personas residentes o nacidas en Andalucía.

Beneficiarios → personas beneficiarias

El destinatario → sujeto destinatario, personas destinatarias.

- Cuando se haga uso de términos que no llevan marca de género, es necesario observar los artículos o determinantes que lo acompañan pues estos si le atribuyen la marca de género que por sí mismo no poseen:

Los titulares, el titular, al titular → la persona titular, los y las titulares, el o la titular

Los miembros → los y las miembros, las personas miembros, los miembros de uno y otro sexo.

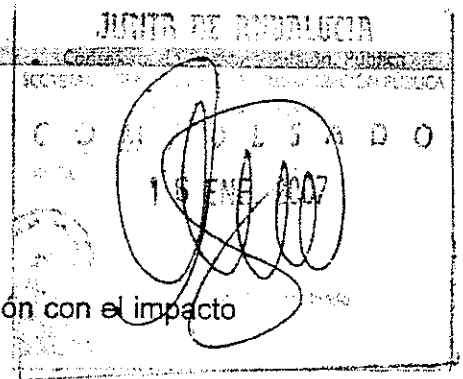
Los representantes → los y las representantes, las personas representantes.

Los vocales → los y las vocales, las personas vocales, la vocalía, miembros titulares de cada vocalía.

09 / 07



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL



**En conclusión** las observaciones a las que se llega en relación con el impacto de género en el **Proyecto de Decreto** son:

- Dado el impacto que tiene en la igualdad, el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres debe estar presente de forma general como principio transversal u objetivo básico de la Administración Andaluza y/o a lo largo de todo el articulado del presente anteproyecto de ley.
- Que las personas que ostentan los cargos de máxima representación, deben velar por el respeto al principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
- Que se debe recomendar la paridad en todos los puestos de representación y dirección de los diferentes órganos.
- Que se debe adaptar a un uso no sexista del lenguaje.

Sevilla, 12 de septiembre de 2005



INFORME

CONSEJERÍA  
JUNTA DE ANDALUCÍACONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA  
Dirección General de Industrias y Promoción Agroalimentaria

10 / 07 624/05-AG

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL CONTENIDO  
DEL ANTEPROYECTO DE LEY DEL ORIGEN Y LA CALIDAD DE LOS VINOS DE  
ANDALUCÍA**

A los efectos previstos en el Decreto 93/2004, de 9 de marzo, por el que se regula el informe de evaluación de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno, se emite el siguiente informe basado en lo siguiente:

**- Pertinencia de género y contenido de la Disposición.**

El Anteproyecto de Ley de la Protección del Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía, tiene por objeto la ordenación en el marco de la normativa aplicable de la protección del origen y la calidad de los vinos de Andalucía, sus indicaciones y designaciones, así como la regulación de la información y promoción de los vinos que pueda llevar a cabo la Junta de Andalucía, realizando además una configuración y regulación de los órganos de gestión, así como el establecimiento de los órganos de control y evaluación de los vinos, estableciéndose asimismo un procedimiento de reconocimiento de un nivel de protección de los vinos de Andalucía y el régimen sancionador regulándose tanto las infracciones como las sanciones en la materia objeto de dicha Ley.

En este sentido, se considera que el presente Anteproyecto de Ley es pertinente al género, por cuanto va a tener incidencia en la vida de las personas, directa o indirectamente consideradas.

**- Impacto por razón de género:**

Para determinar si existe impacto de género, el primer paso será analizar la situación real existente en el ámbito de aplicación de la norma en cuanto a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. De acuerdo con esto, el presente Anteproyecto de Ley se limita tan sólo a la regulación de la protección que se le puede dispensar a un producto agroalimentario como es el vino, tanto desde la punto de vista de su origen como de su calidad, configurándose alrededor del mismo una regulación de todo aquello tendente a dicha protección, sea mediante órganos de gestión, órganos de control, sistema de reconocimiento, etc que del que no se cree se derive un efecto negativo, generador o perturbador de desigualdades o brechas de género.

Por esta razón, las medidas que en el Anteproyecto de Ley se establecen, los son con independencia de que las personas sobre las que van a tener incidencia sean hombres o mujeres; medidas que, por tanto, no deben tener efecto negativo o generador de desigualdades de género, no suponiendo por ello este Anteproyecto de Ley un impacto por razón del género.

29 de marzo de 2006

VºBº El Director General de Industrias y  
Promoción AgroalimentariaEl Jefe del Servicio de Calidad  
y Promoción

Fdo.: Ricardo Dominguez Garcia-Baquero

Fdo.: Antonio Rodríguez Ocaña



10 / 07

Instituto Andalúz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
**INFORME**  
**IAM**

Doc. n.º 10,1

27 ABR 2006

501-22850

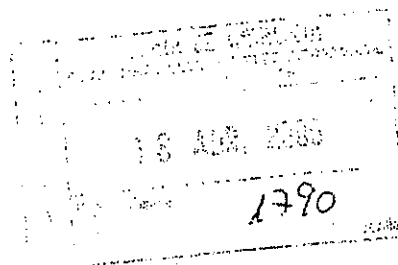
SEP

Fecha: 17 de abril de 2006

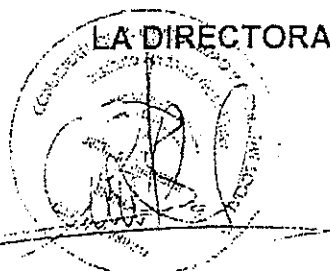
Ref.: Dirección / EM/mm

Asunto: Informe Impacto de Género  
nº 22

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA  
Dirección General de Industrias y Promoción  
C/ Tabladilla, s/n  
41013 - SEVILLA



En relación al anteproyecto de "*Ley de protección del origen y la calidad de los vinos de Andalucía*", con fecha de registro de entrada en este Instituto el pasado día 3 de abril, adjunto le remito observaciones al Informe de Evaluación de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno.



Soledad Ruiz Segúin



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

10 / 07

**OBSERVACIONES QUE EMITE EL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER  
AL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO REMITIDO POR  
LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS Y PROMOCIÓN  
AGROALIMENTARIA DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA,  
SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DEL ORIGEN Y  
CALIDAD DE LOS VINOS DE ANDALUCÍA**

No compartimos la conclusión a la que se llega en el informe presentado sobre la evaluación del impacto de género en el sentido de "no se derive un efecto negativo, generador o perturbador de desigualdades o brechas de género", pues el anteproyecto de ley es con carácter general:

Pertinente al género

☒

No pertinente

☐

Ya que tal como está redactado puede tener un impacto negativo en la igualdad, al estar regulando el control de un recurso económico (tal como se dice claramente en la exposición de motivos "soporte fundamental para la economía") ante el que mujeres y hombres tienen posiciones desiguales, la no introducción de medidas compensatorias implicará una perpetuación o un agravamiento de esas desigualdades.

Por ello, teniendo en cuenta la normativa de aplicación (ver Anexo) en relación con la igualdad de género, y valorando los contenidos del anteproyecto de ley, hacemos las siguientes observaciones:

1. El Decreto 93/2004 del 9 de marzo por el que se regula el informe de evaluación de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno (BOJA núm. 50 de 12.03.04), dispone en el Art. 4 que el informe de evaluación del impacto de género deberá describir las diferencias existentes entre mujeres y hombres en el ámbito de actuación de las medidas que pretenden regular en la disposición de que se trate, incluyendo datos desagregados por

sexo, recogidos en estadísticas oficiales, así como el análisis del impacto potencial que la aprobación de dichas medidas producirá entre las mujeres y hombres a quienes van dirigidas.

En este sentido, y para conocer el punto de partida entre mujeres y hombres y prever el impacto de género, sería necesario aportar información desagregada por sexo de, al menos, los siguientes aspectos:

- o N° de mujeres y n° de hombres que son considerados como operadores en el sector.
- o N° de mujeres y de hombres que componen los órganos de gestión, de control y consejos reguladores, existentes hasta el momento.
- o N° de campañas de promoción que han beneficiado a operadores hombres y a operadoras mujeres.
- o N° de campañas de promoción que han tratado la imagen de las mujeres desde una óptica igualitaria.
- o N° de campañas de promoción que han utilizado la imagen de las mujeres desde una óptica sexista.

El análisis de esa información permitiría identificar las brechas de género existentes e introducir, en función de las mismas, las medidas correctoras que posibilitarían que el anteproyecto de ley tuviese un impacto positivo en la igualdad entre mujeres y hombres. En ausencia de la citada información, sólo es posible, sugerir un conjunto de modificaciones en el texto (enumeradas en el punto siguiente) para que el anteproyecto de ley tenga un impacto positivo en la igualdad.

2. Todos los reglamentos tienen que tener en cuenta de forma efectiva el objetivo de la igualdad por razón de género, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 139 de la *Ley por la que se aprueban Medidas*

*Fiscales y Administrativas para 2004* (BOJA núm.251 de 31 de diciembre) y en el anteproyecto de ley que nos ocupa no se incluye entre los objetivos la igualdad por razón de sexo.

Por ello, pasamos a enumerar las partes de la norma donde debe recogerse el principio la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en cada uno de los artículos del siguiente modo:

- o En el párrafo 13 dela exposición de motivos se puede introducir: "...con otros valores y condicionantes sociales, *entre ellos el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y sanitarios*"
- o Art. 4.1.b, añadir "respetando el principio de igualdad entre mujeres y hombres y prohibiendo expresamente el uso de la imagen de las mujeres como reclamo publicitario"
- o Art. 4.1.e, mencionar expresamente la política de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, tal como se mencionan el resto.
- o Art. 19.1 en los órganos de representación se debería promover la presencia de mujeres.
- o Art. 19.4. el respeto y promoción del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres debería ser un criterio para el reconocimiento y autorización de los órganos de gestión.
- o Art. 22.2.b, se debe incluir el respeto a la imagen de las mujeres como un principio rector de las promoción de los productos.
- o Art.22.2.j, Art. 26.1, Art. 34. 1 y 2, se debe mencionar expresamente que los registros públicos deben recoger la información desagregada por sexo.
- o Art. 26.6. entre las funciones de la persona titular de la Secretaría General, debe incluirse la de velar por el

cumplimiento de la política de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

- o Art. 47. Incluir como infracción grave la utilización de publicidad sexista y la no desagregación de datos por sexo.
- o Art. 48, añadir como infracción muy grave el atentar contra el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

3. En todas las comisiones se tiene que tener en cuenta de forma efectiva la **composición paritaria de los órganos** consultivos y de asesoramiento de la Administración de la Junta de Andalucía de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 140 de la *Ley por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas para 2004* (BOJA núm.251 de 31.12.03). En este sentido se debería tender a la composición paritaria de los órganos de gestión, control y reguladores. Así, por ejemplo:

- o Art. 21.1 el criterio de paridad debería extenderse a la representación de mujeres y de hombres.
- o Art. 25 y 26. se debería modificar en el mismo sentido que el anterior.

4. De acuerdo con la *Orden de 24 de noviembre de 1992, conjunta de la Consejería de Gobernación y de la Consejería de Asuntos Sociales, sobre la eliminación del lenguaje sexista en los textos y documentos administrativos* (BOJA núm. 126 de 05.12.1992), se hace necesario revisar la redacción asegurando que el **lenguaje utilizado** facilite la visibilización de mujeres y hombres en todos los aspectos tratados.

Si bien se hace patente la intención, en algunos casos, de hacer un uso del lenguaje no sexista, a lo largo de todo el documento y, siguiendo la

110 / 07

recomendación de las reglas contempladas en la *Instrucción de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de Viceconsejeros para evitar un uso sexista del lenguaje en las disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía*, existen numerosos ejemplos de uso del masculino como genérico universal, invisibilizando en consecuencia a las mujeres. Por ello, se hacen las siguientes observaciones:

Los consumidores y usuarios → las personas consumidoras o usuarias.  
Operadores → entidades con capacidad para operar, entidades operadoras.  
Los titulares → los y las titulares.  
Los interesados → las personas interesadas.  
Los vocales → las vocalías.  
Los viticultores → las personas viticultoras, el personal viticultor.  
Los solicitantes → las personas solicitantes.  
Los inspectores → la inspección.  
El infractor → la persona infractora  
Los técnicos → el personal técnico

Las conclusiones según las observaciones efectuadas en relación con el impacto de género en el anteproyecto de ley son:

- Para hacer efectivo el logro de la igualdad por razón de género es fundamental disponer de información sobre la realidad de hombres y mujeres en los distintos ámbitos. Por ello, es necesario que la presente ley que se pretende aprobar garantice la provisión de dicha información mediante la generación de registros que contemplen dicha desagregación.
- Que el objetivo de la igualdad debería hacerse manifiesto en el articulado del anteproyecto de ley, a través de las fórmulas que se sugieren en el presente informe

10 / 07

- Que el principio de paridad debe extenderse para equilibrar la presencia de mujeres y hombres y no sólo contemplar los intereses que está presentes en esta actividad económica.
- Que se debe adaptar totalmente a un uso no sexista del lenguaje.

Sevilla, 17 de abril de 2006



ANEXO. NORMATIVA VIGENTE SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES QUE AFECTAN A LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO.

Objetivo Igualdad de Género.....art. 139 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas.

Composición Paritaria de órganos.....art. 140 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas.

Datos desagregados por sexo.....art.22 de la Ley 8/2002, del Plan Estadístico de Andalucía 2003-2006.

Lenguaje administrativo no sexista.....Orden de 24 de noviembre de 1992,conjunta de la Consejería de Gobernación y de la Consejería de Asuntos Sociales, sobre la eliminación del lenguaje sexista, en los textos y documentos administrativos

Información y publicidad no sexista .....Ley 6/2005, de 8 de abril, relativa a la actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía y Orden de 19 febrero 1993, de la Consejería de la Presidencia, relativa a normas para el cumplimiento del principio de no discriminación por razón de sexo en la información y divulgación de la de la Junta de Andalucía

Evaluación del Impacto de género.....Decreto 93/2004, de 9 de marzo por el que se regula el Informe de Evaluación de Impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno.

Prioridad presupuestaria de las políticas de Igualdad.....Ley 18/2005, de 28 de diciembre de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el 2006.

## INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO

**ANTEPROYECTO DE LEY REGULADORA DE LOS ANÁLISIS GENÉTICOS Y BANCOS DE ADN EN ANDALUCÍA.**

El objeto de esta ley es la regulación de los análisis genéticos, así como la regulación de los Bancos de ADN y la creación del Banco de ADN de Andalucía.

En los últimos años, los frutos de la investigación en Genética Humana han supuesto un cambio drástico en nuestra comprensión del desarrollo humano y de la causa de muchas enfermedades de base genética, y sus resultados se están traduciendo en aplicaciones médicas, incluyendo diagnósticos y terapias, e impulsando nuevos conceptos en medicina. La traslación de dichos resultados a la práctica clínica está permitiendo notables avances en las posibilidades diagnósticas y en la prevención de ciertas enfermedades, registrándose un aumento constante del número de enfermedades para las que se dispone de un análisis genético.

El incesante desarrollo de la investigación en Genética Humana está abriendo nuevos espacios de conocimiento sobre la fisiopatología molecular de las enfermedades complejas, así como la posibilidad de su aplicación en la prevención y tratamiento de enfermedades prevalentes, acercándonos a un nuevo paradigma de la medicina: la medicina personalizada.

El desarrollo de las tecnologías de análisis genómico, la citogenética molecular, la bioinformática y el mayor acceso a la información de la ciudadanía, junto al avance del conocimiento derivado de la obtención y desarrollo de mapas genéticos y la identificación de nuevos genes y mecanismos moleculares, están despejando nuevas vías para la planificación, el diseño y el desarrollo de estrategias diagnósticas, preventivas y, en algunos casos, terapéuticas, más eficientes y efectivas en las enfermedades de base genética, especialmente en las denominadas enfermedades raras.

La extraordinaria sensibilidad de la información genética trasciende el ámbito puramente individual, y sus implicaciones éticas y sociales reclaman un marco regulador en el que se establezcan las ineludibles cautelas y garantías singulares en el tratamiento y en la utilización de los análisis genéticos y los datos relacionados con ellos. En este sentido cabe destacar que la realización de análisis genéticos genera datos de carácter personal, que afectan no sólo al individuo objeto del estudio o investigación, sino también a sus familiares y descendientes, por lo que se debe garantizar la correcta utilización y el respeto a la confidencialidad de los mismos.

Es por ello necesario regular los análisis genéticos, tanto desde el punto de vista asistencial como en el ámbito de la investigación, persiguiendo garantizar el cumplimiento de los requisitos éticos y de calidad en la realización de los análisis genéticos en Andalucía, poniendo especial énfasis en el consentimiento informado, la confidencialidad y protección de los datos.

Así mismo se hace necesario establecer criterios de seguridad y validez clínica en la incorporación de análisis genéticos a la cartera de servicios y en la prestación del consejo genético dentro del sistema sanitario público de Andalucía, buscando la máxima calidad y fiabilidad en su realización.

Por otra parte, para estudiar la relación entre los genes y determinadas enfermedades es indispensable tener acceso a muestras de tejidos humanos bien caracterizadas y poder utilizarlas en la investigación y el desarrollo, ya que la investigación en este campo depende del uso e intercambio de muestras de tejido humano y de los datos asociados, este anteproyecto de Ley también regula los Bancos de ADN en la Comunidad Autónoma garantizando unos requisitos de calidad y una gestión ética de los mismos.

#### Conclusiones.

El anteproyecto de Ley que nos ocupa regula una materia que tiene como destinatario final a mujeres y hombres en una doble vertiente, como personas con enfermedades de base genética subsidiarias de recibir atención sanitaria y como beneficiarias finales de los productos de la investigación biomédica.

Con respecto a los análisis genéticos con fines de asistencia sanitaria, dada la amplia variedad de patologías que se benefician de ella, entre las que podemos destacar, anomalías cromosómicas, trastornos monogénicos como la fibrosis quística, cánceres familiares etc, hace que el patrón de distribución por sexos sea homogéneo, por lo que inferimos que el impacto potencial de la aplicación de esta Ley va a beneficiar por igual a mujeres y hombres permitiendo avances en las posibilidades diagnósticas y los tratamientos de dichas enfermedades.


En el articulado de la ley se garantiza la igualdad de acceso efectivo al Consejo Genético y a los análisis genéticos incorporados a la cartera de servicios del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

En cumplimiento de la legislación vigente la Comisión de coordinación del Banco de ADN de Andalucía tendrá en cuenta la perspectiva de género en su composición, descripción de sus funciones, así como en las reglas de funcionamiento.

Así mismo y siguiendo las directrices del Plan Estadístico de Andalucía 2003-2006, los registros que se deriven de la aplicación del presente anteproyecto de ley permitirán obtener información desagregada por sexo.

Sevilla, 7 de marzo de 2006

EL SECRETARIO GENERAL



José Luis Rocha Castilla



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

## OBSERVACIONES QUE EMITE EL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER A LA CONSEJERÍA DE SALUD SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY REGULADORA DE LOS ANÁLISIS GENÉTICOS Y BANCOS DE ADN EN ANDALUCÍA

El anteproyecto de ley que se observa, afecta de manera indudable a la vida de mujeres y de hombres y, por ello, podemos establecer que es:

Pertinente al género

☒

No pertinente

☐

No podemos más que estar de acuerdo con el Informe de Evaluación de Impacto de Género emitido por la Secretaría General de Calidad y Modernización, de la Consejería de Salud, en cuanto a que el *efecto de la Ley será positivo sobre la vida de las mujeres y de los hombres*, dado que en su articulado se garantiza la equidad en el acceso y uso del banco de ADN, así como al tratamiento, aplicando la perspectiva de género y analizando el impacto de género que tenga el uso de los análisis genéticos y el banco, tal como se hace notar a lo largo del texto, como por ejemplo, en el Art 16.5.

Por ello felicitamos al órgano directivo, tanto por el texto normativo como por el informe realizado, realizando para un perfecto ajuste del mismo y de la futura ley con la normativa vigente en el terreno de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, las siguientes *sugerencias*.

1. Reflejar explícitamente la obligación de que el Banco de ADN recoja toda la información que se genere de forma **desagregada por sexo**. Por ejemplo, añadiendo al Art. 25.2 "... así como la información, *desagregada por sexo*, asociada a las mismas" y lo mismo en el punto siguiente del mismo artículo.



Instituto Andaluz de la Mujer

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

11 / 07

173

2. Incluir una mención expresa que obligue a una **composición paritaria** de la *Comisión Autónoma de Ética e Investigación* y resto de comisiones que se creen, según se desprende de la Disposición Adicional Unica.
3. De acuerdo con la *Orden de 24 de noviembre de 1992, conjunta de la Consejería de Gobernación y de la Consejería de Asuntos Sociales, sobre la **eliminación del lenguaje sexista** en los textos y documentos administrativos* (BOJA núm. 126 de 05.12.1992), aún cuando se observa una intención de uso de un lenguaje no sexista, deberán revisarse algunos términos, tales como:
  - *Los profesionales* que debería sustituirse por los y las profesionales
  - *Al Titular* que debería sustituirse por al o a la titular
  - *Del paciente* que debería sustituirse por del o de la paciente

En conclusión se felicita al órgano emisor del anteproyecto de ley por su clara intencionalidad de avanzar hacia la igualdad entre mujeres y hombres, integrando la dimensión de género en el mismo, aunque será necesario:

- Obligar expresamente a desagregar la información que se genere por sexo
- Señalar la necesidad de tener en cuenta la composición paritaria de las comisiones que se creen.
- Revisar algunos términos para adaptar la redacción a un uso no sexista del lenguaje

Sevilla, 3 de abril de 2006



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RECIBO

JUNTA DE ANDALUCÍA  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

13 JUN. 2006 27877

Registro General 6 Hora  
Servicios Generales  
Oficina nº 751 Sevilla

Fecha: 8 de junio de 2006

Asunto: Informe Impacto Genero

Ref.: EMB/ Impacto 06-43

SR. VICECONSEJERO  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD  
Y BIENESTAR SOCIAL  
Avda. de Hytasa s/n Edif.. Junta And.  
41071 SEVILLA

JUNTA DE ANDALUCÍA  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

13 JUN. 2006

4115

Sevilla

127 07

Adjunto le remito Informe de Evaluación de Impacto de Género al "Anteproyecto de Ley de Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía", emitido por este organismo, y conforme a lo establecido en el Decreto 93/2004, de 9 de marzo, por el que se regula el informe de evaluación de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno.

LA DIRECTORA

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER  
JUNTA DE ANDALUCÍA  
SEVILLA  
C.I.F. Q-91000120

A. Soledad Ruiz Seguin



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

11 2 / 07

# **INFORME DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO AL ANTEPROYECTO DE LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN ANDALUCÍA**





## INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO AL ANTEPROYECTO DE LEY PARA LA PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN ANDALUCÍA

La *Ley 18/2003 de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas* establece en su artículo 139, la obligatoriedad de que todos los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno deberán tener en cuenta de forma efectiva el objetivo de la Igualdad por razón de género.

A tal fin, en la tramitación de las citadas disposiciones se emitirá un Informe de Evaluación de Impacto de Género del contenido de las mismas.

El *Decreto 93/2004, de 9 de marzo*, (BOJA nº 50, de 12 de marzo de 2004), regula el mencionado informe estableciendo su contenido mínimo, que es el siguiente:

- Describir las diferencias existentes entre las mujeres y hombres en el ámbito de actuación de las medidas que se pretenden regular, incluyendo los datos desagregados por sexos, recogidos en estadísticas oficiales
- Analizar el impacto potencial que la aprobación de dichas medidas producirá entre las mujeres y los hombres a quienes van dirigidas.

En este contexto normativo, y conforme al artículo 3, del Decreto 93/2004, de 9 de marzo, el Instituto Andaluz de la Mujer emite el siguiente informe de Evaluación de Impacto de Género del anteproyecto de Ley Andaluza para la promoción de la igualdad de género:

### 1.- CONTEXTO NORMATIVO HABILITANTE

La Constitución española, en su artículo 9, apartado 2, designa a los Poderes



Públicos como garantes e impulsores del cumplimiento al Principio de Igualdad por razón de sexo del artículo 14, estableciendo:

*"Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social". (art. 9.2 de la CE)*

Asimismo, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 12 apartado 1, reitera este mandato constitucional, especificando:

*"La Comunidad Autónoma de Andalucía promoverá las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; removerá los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitará la participación de todos los andaluces en la vida política, económica, cultural y social". (art. 12.1 del E.A.)*

Ambos preceptos conforman el marco legal en el que se justifican sobradamente las Políticas de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, y las actuaciones específicas en pro de aquellos grupos que no gozan de una igualdad real.

En Andalucía, el Instituto Andaluz de la Mujer tiene como finalidad, de acuerdo con lo establecido en su ley fundacional la Ley 10/1988, de 29 de diciembre (BOJA núm. 106, de 30 de diciembre), promover las condiciones para que sea real y efectiva la igualdad del hombre y la mujer, fomentando la participación de ésta en la vida social. Y según su desarrollo reglamentario, Decreto 1/1989, modificado por Decreto 20/1997, sus actuaciones responden a tres finalidades:

a) Promover las condiciones para que la igualdad del hombre y la mujer andaluces sea real y efectiva.



- b) Hacer posible la participación y presencia de la mujer en la vida política, económicas, cultural y social.
- c) Superar cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política de la mujer.

Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto Andaluz de la Mujer tiene asignada, entre otras, la función:

*"Elaboración de propuestas de reformas normativas que promuevan la igualdad de la mujer en la sociedad". (Artículo 4º, b, Decreto 1/1989).*

## 2.- ANÁLISIS DE LA REALIDAD

Según las estadísticas desagregadas por sexo que publica el Instituto de Estadística de Andalucía en su Anuario de las Mujeres 2005, con información que facilitan diversos organismos, entre ellos el propio Instituto Andaluz de la Mujer:

### 2.1 Población Andaluza

Prácticamente la población andaluza se distribuye al 50% entre hombres y mujeres. En términos absolutos y según el avance para 2005 habría 70.000 mujeres más que hombres.

AVANCE DE LA POBLACIÓN EMPADRONADA SEGÚN SEXO, ANDALUCÍA 2005					
Provincia	Hombres	Mujeres	Total	IF	% Mu
Almería	314.376	296.661	611.037	0,94	48,6%
Cádiz	586.663	592.110	1.178.773	1,01	50,2%
Córdoba	384.580	399.477	784.057	1,04	50,9%
Granada	421.443	432.976	854.419	1,03	50,7%
Huelva	240.706	242.259	482.965	1,01	50,2%
Jaén	326.722	330.992	657.714	1,01	50,3%
Málaga	715.330	733.730	1.449.060	1,03	50,6%
Sevilla	889.262	921.915	1.811.177	1,04	50,9%
<b>TOTAL</b>	<b>5.372.082</b>	<b>5.454.190</b>	<b>10.826.272</b>	<b>1,01</b>	<b>50,5%</b>

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

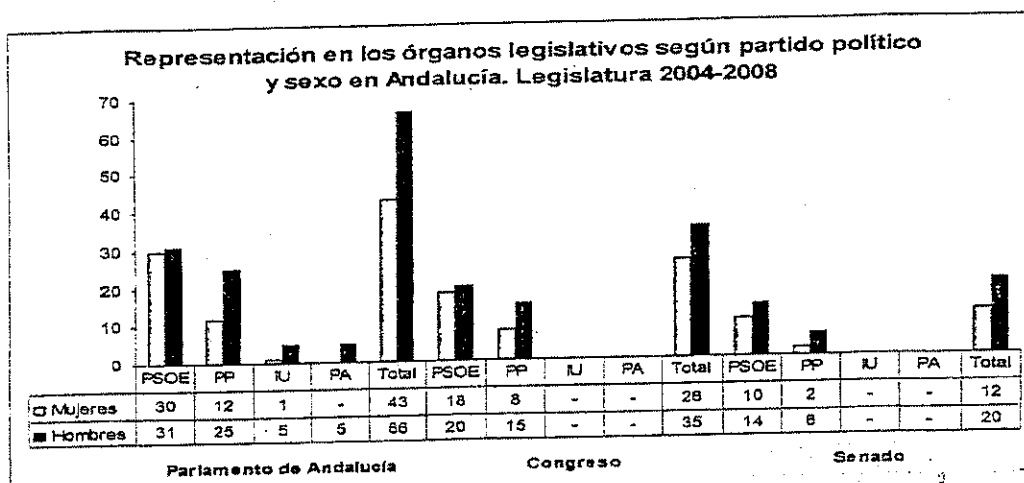
\* IF: Índice de Feminización: nº de mujeres / hombre

## 2.2 Representación de mujeres y hombres en Andalucía

### 1 Representación en los órganos legislativos según partido político y sexo.

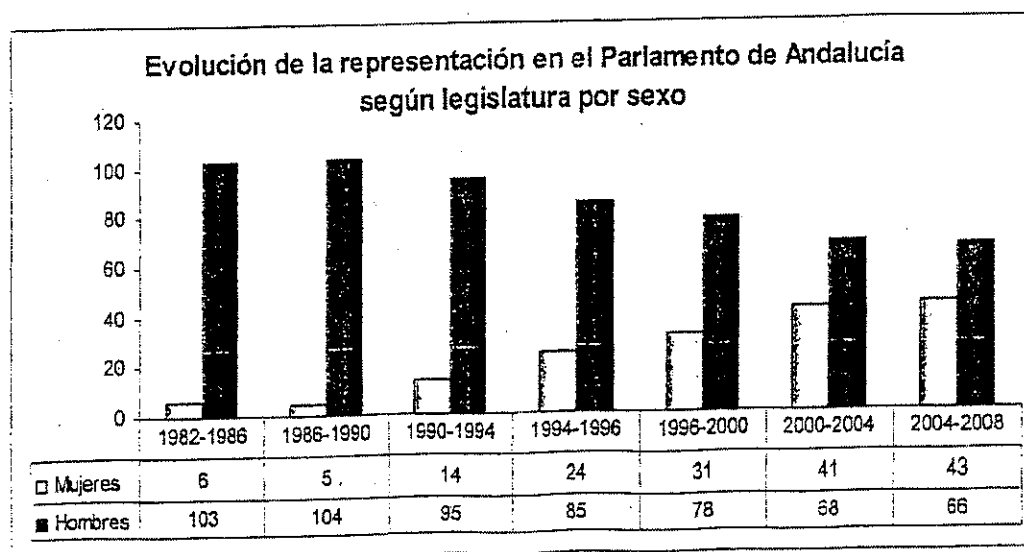
#### Legislatura 2004-2008

Las mujeres suponen el 40% del total de parlamentarios y senadores de Andalucía (81 de 202) Más del 70 % de ésta representación la proporciona el PSOE, quien aporta además el 83% de las mujeres andaluzas en el Senado.



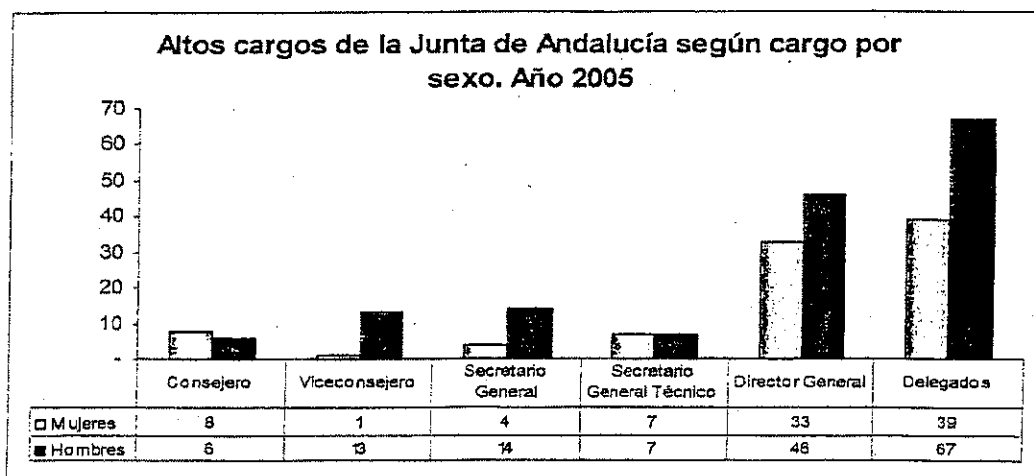
### 2 Evolución de la representación en el Parlamento de Andalucía según legislatura

Las mujeres han pasado en 22 años de representar el 5,5% del Parlamento de Andalucía, hasta el 43% actual.



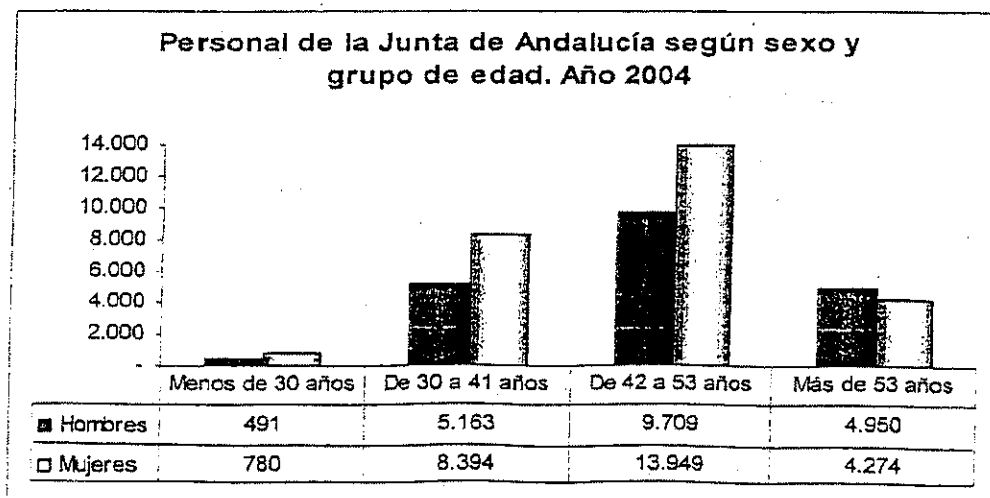
### 3 Altos cargos de la Junta de Andalucía por sexo. Año 2005

Las mujeres son el 38% de los altos cargos de la Junta de Andalucía, el 57% de los Consejeros y el 37% de los Delegados Provinciales. Entre las Viceconsejerías tan solo representan el 7%, que sube al 22% entre los Secretarios Generales, al 42% entre los Directores Generales y al 50% en los Secretarios Generales Técnicos.



### 4 Personal de la Junta de Andalucía según sexo y grupo de edad. Año 2004

El 58% del personal de la Junta de Andalucía son mujeres. Por grupos de edad las mujeres llegan a representar casi las dos terceras partes en los más jóvenes (de menos de 30 hasta 41 años)

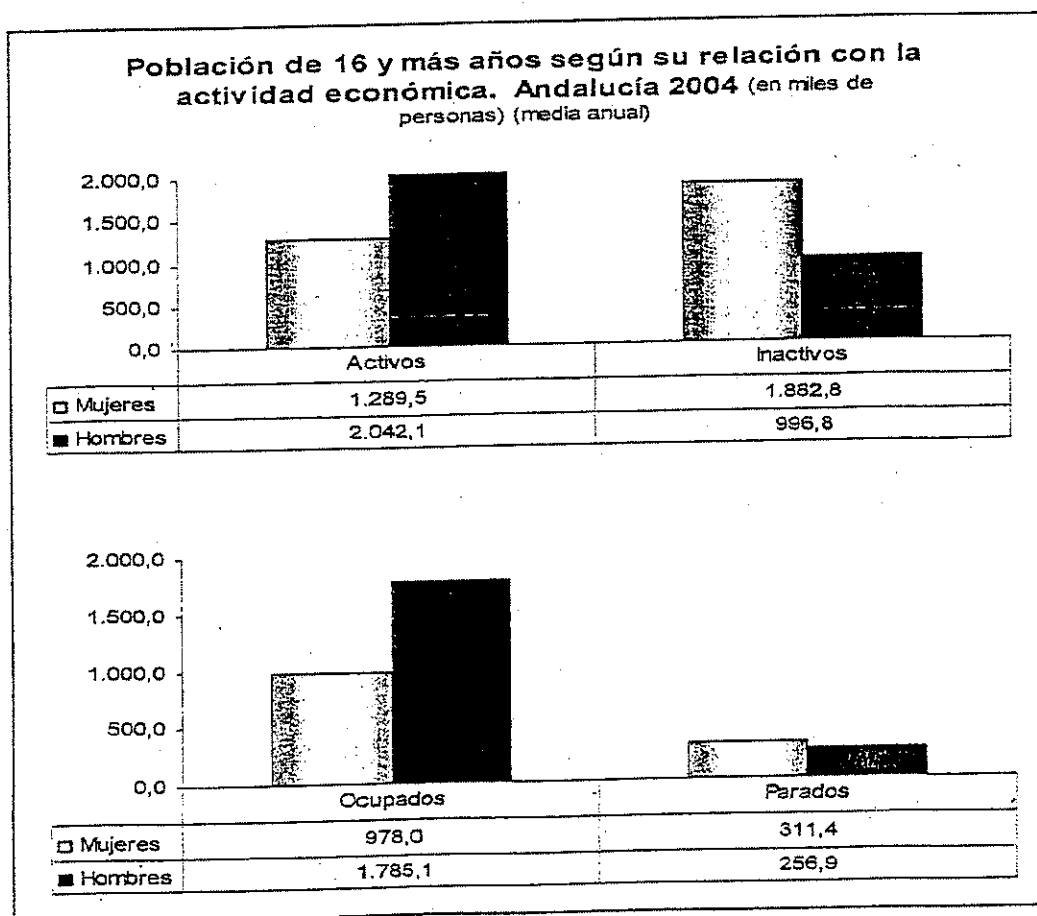


## 2.3 La actividad laboral

### 1 Población de 16 y más años según su relación con la actividad económica por sexo en Andalucía. Año 2004

Aunque las mujeres son el 51% de la población de 16 y más años, esta proporción baja al 39% de los 'activos' y se eleva al 66% de los clasificados como inactivos, es decir 2 de cada 3.

En el grupo de 'activos', donde las mujeres son el 39% de la población total, suponen sin embargo el 55% del total de parados. Una de cada cuatro mujeres de 16 y más años 'activa' en el mercado laboral, está en paro. Entre los hombres, uno de cada ocho.





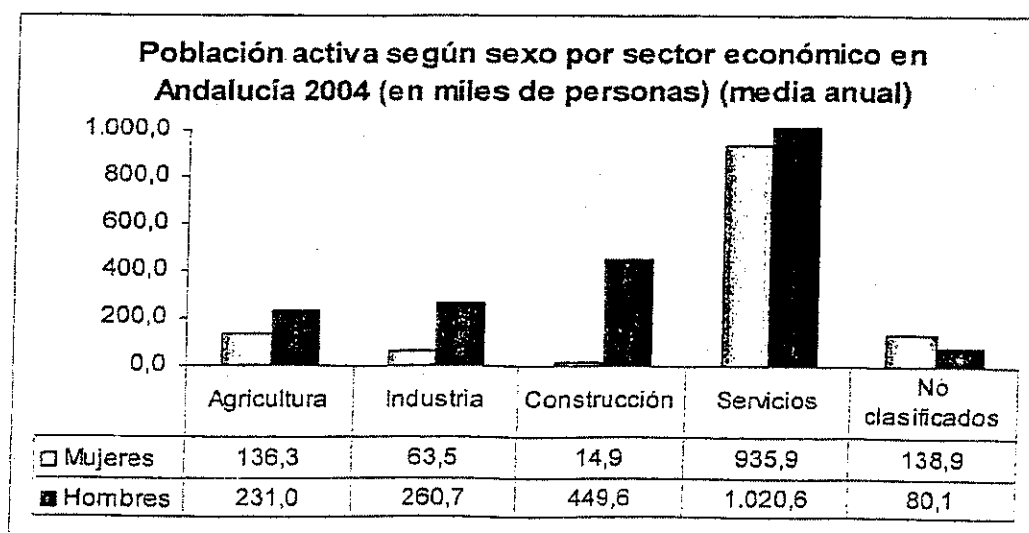
JUNTA DE ANDALUCÍA

Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

112 / 01

## 2 Población activa según sexo por sector económico en Andalucía. Año 2004

La población activa se ha incrementado un 11% desde 1996 hasta 2004 en Andalucía, aunque a este incremento se llega con un 12% entre los hombres y un 11% entre las mujeres. Las mujeres duplican el número de hombres en el grupo de 'inactivos' y los hombres casi duplican el número de mujeres ocupadas. Casi la tercera parte de las mujeres que se encuentran en 'activo', están paradas. Del millón doscientas mil mujeres que se encuentran en este grupo en el 2004, el 73% se encuentran en el sector Servicios que es el que más crece entre las mujeres. En 1996 en este sector se encontraba el 62% de ellas. Un sector peculiar en el crecimiento de la población activa es el Agrario al que se dedican el 12% de las mujeres en activo. Este sector ha decrecido en población activa total un 2% en el periodo de 7 años (1996 a 2003) pero con una distribución muy desigual entre sexos. Es como si los hombres estuvieran abandonando el sector (33.858 menos) y las mujeres entrando en él (27.680 más).

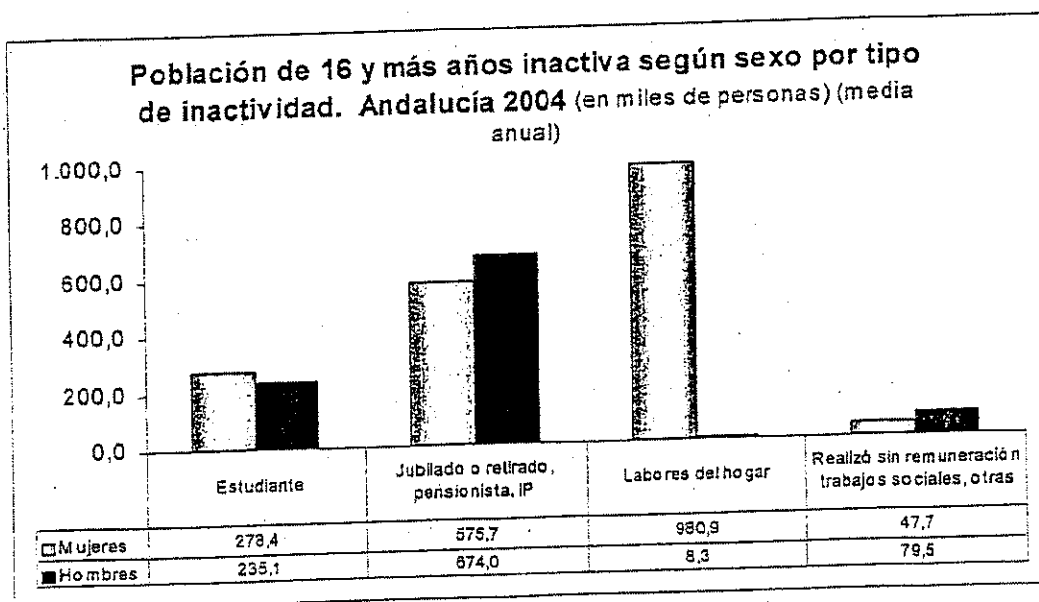


11 27 07

Destaca por último la escasa participación de las mujeres en el sector de la Construcción: un 1,4% del total de mujeres 'activas' se encuentra en él, frente al 21% de los hombres.

### 3 Población de 16 y más años inactiva según sexo por tipo de inactividad en Andalucía. Año 2004

De las 2.879.630 personas en el grupo de 'inactivos' el 65% son mujeres y el 35% hombres. El tipo de inactividad en que se encuentra la mayor parte del total de esta población es en el de Jubilados, Retirados, Pensionistas e IP (44%) seguido muy de cerca por el de Labores de Hogar (35%) aunque en este último grupo el 99%, cerca de un millón, son mujeres. Destaca una diferencia de ocho puntos porcentuales favorable a la mujer en el grupo de Estudiantes.

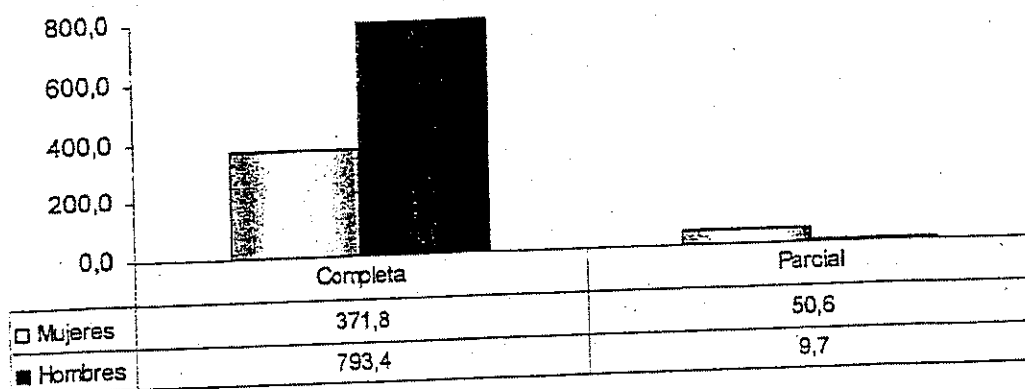


### 4 Población asalariada según sexo y tipo de jornada por tipo de contrato en Andalucía. Año 2004

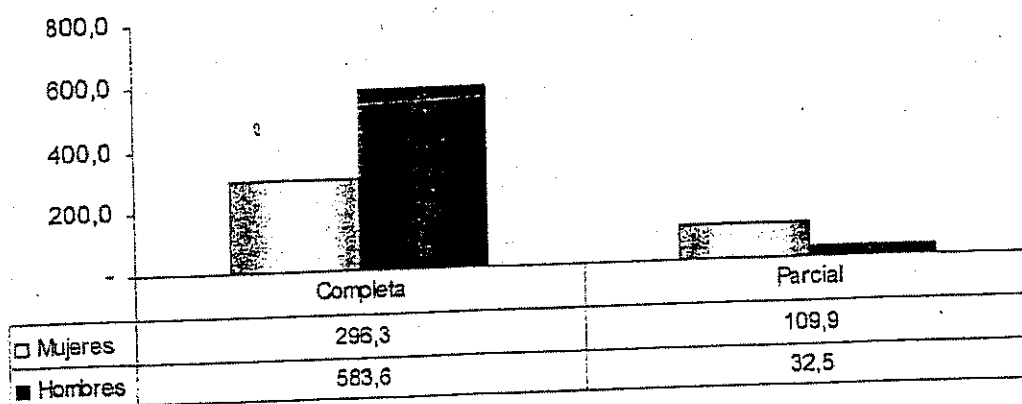


De los casi 2 millones de asalariados que había en Andalucía en 2004, el 70% eran hombres y el 30% mujeres. Más de dos hombres por cada mujer. Esta relación se invierte en los contratos temporales y a tiempo parcial, donde las mujeres son proporcionalmente más.

**Población asalariada con contrato indefinido según sexo y tipo de jornada en Andalucía. Año 2004 (en miles de personas)**  
(media anual)

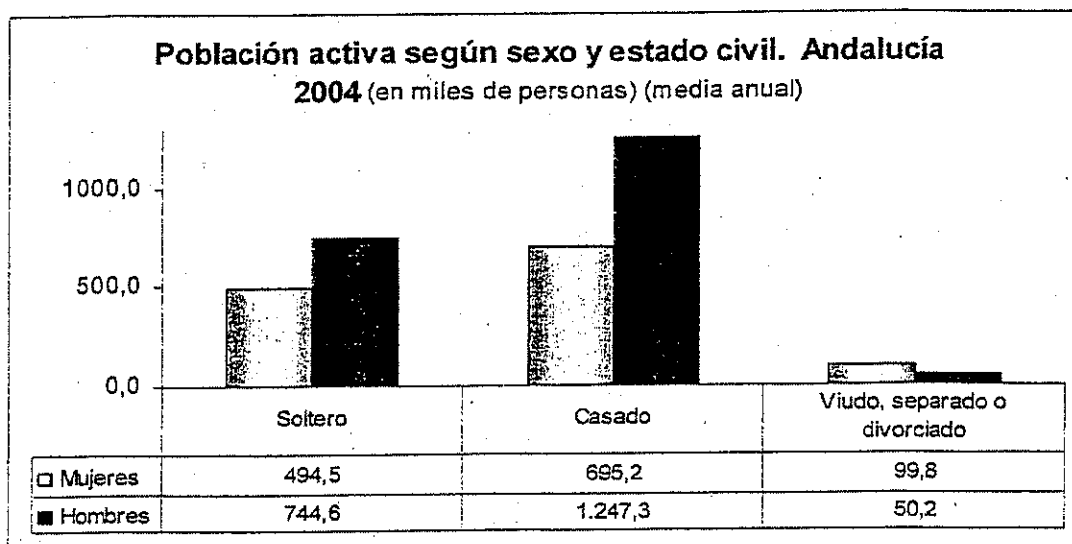


**Población asalariada con contrato temporal según sexo y tipo de jornada en Andalucía. Año 2004 (en miles de personas)**  
(media anual)



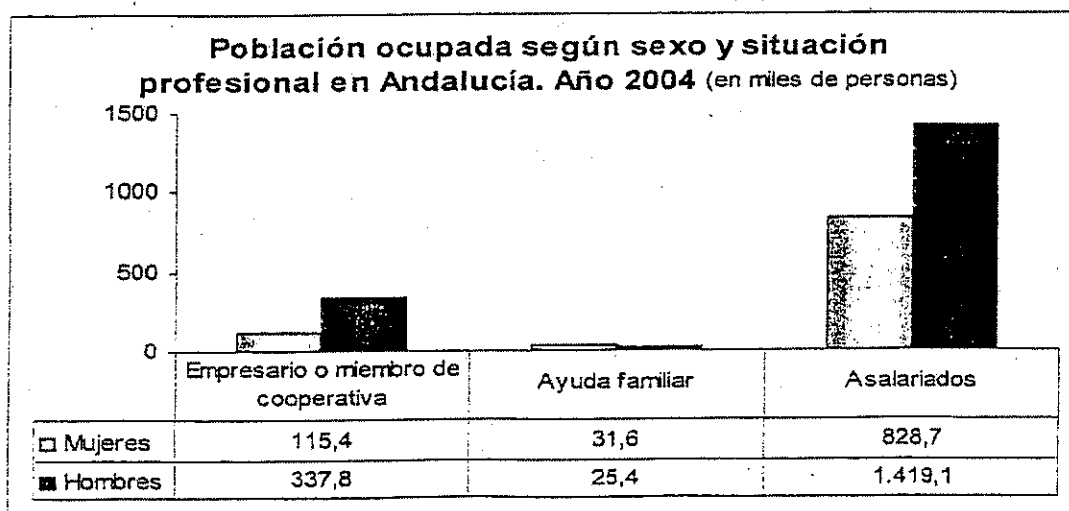
## 5 Población activa según sexo por estado civil en Andalucía. Año 2004

El grupo de casados y casadas es el más numeroso entre la población activa, un 60% del total. El número de viudas triplica al de viudos en activo.



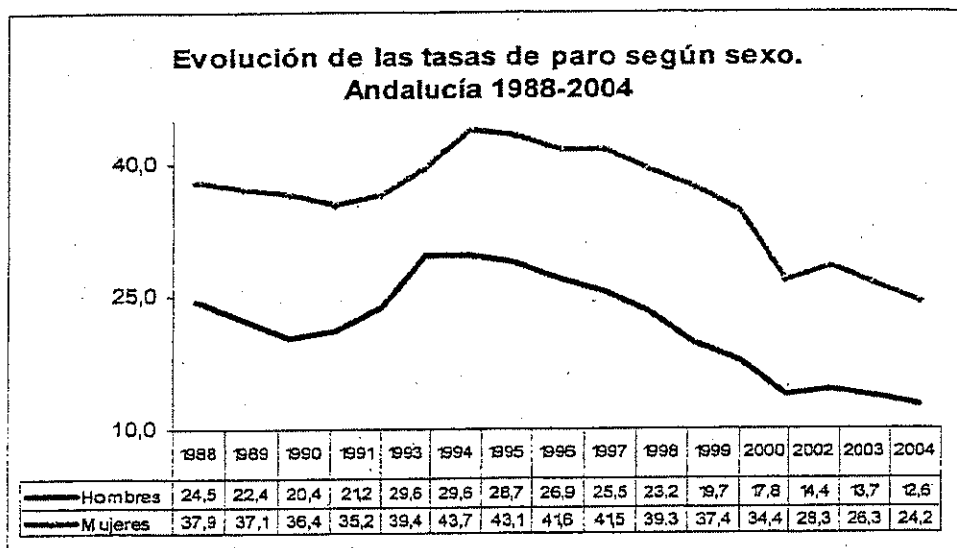
## 6 Población ocupada según sexo por situación profesional en Andalucía. Año 2004

En Andalucía el 35% de la población ocupada son mujeres, porcentaje que baja al 25% en el grupo de empresarios o miembros de cooperativas y llega hasta el 55% en el de Ayuda Familiar.



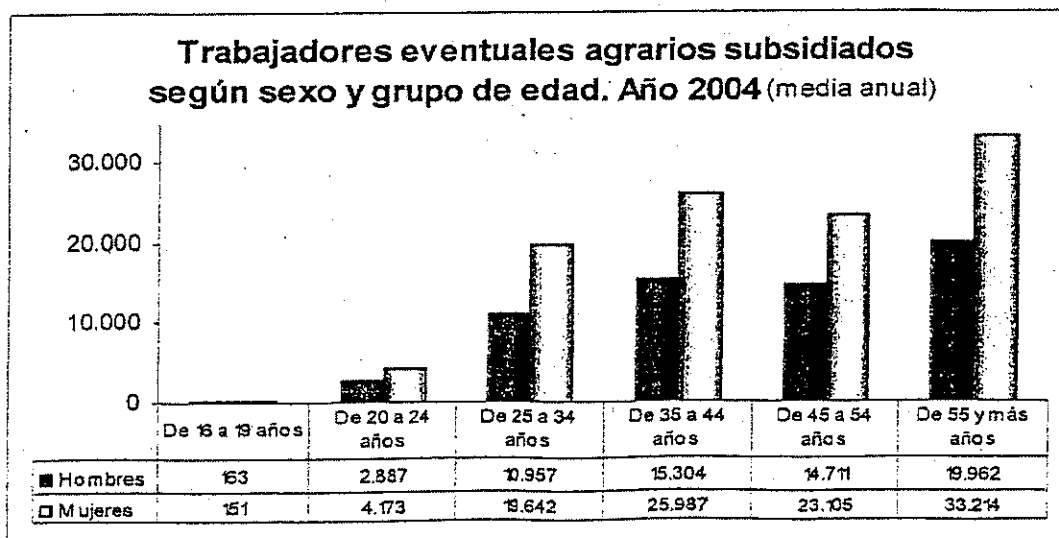
## 7 Evolución de las tasas de paro según sexo en Andalucía. Años 1988-2004

En este tiempo las tasas de paro se han reducido a la mitad en los hombres pero menos de una tercera parte en las de mujeres. En el año 2004 todavía las tasas femeninas duplican las masculinas.



## 8 Trabajadores eventuales agrarios subsidiados según sexo y edad por provincia. Año 2004

Las mujeres son más del 60% del total de trabajadores eventuales subsidiados en Andalucía en el año 2004.



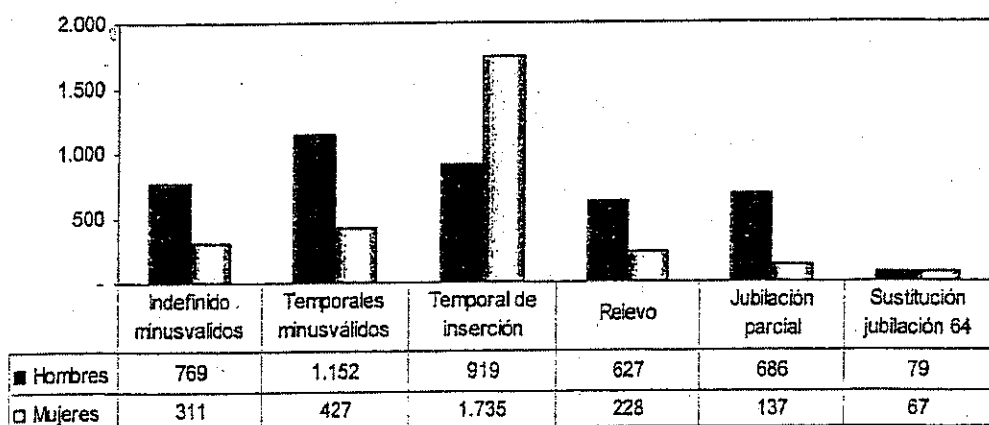
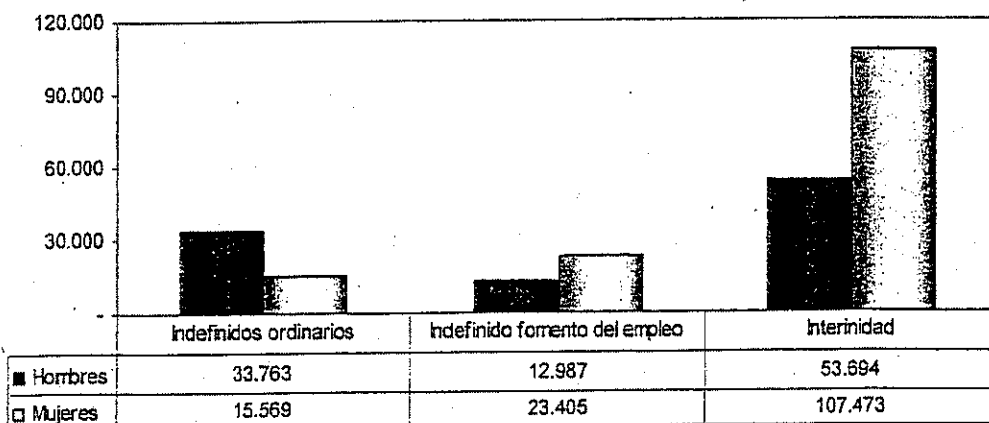
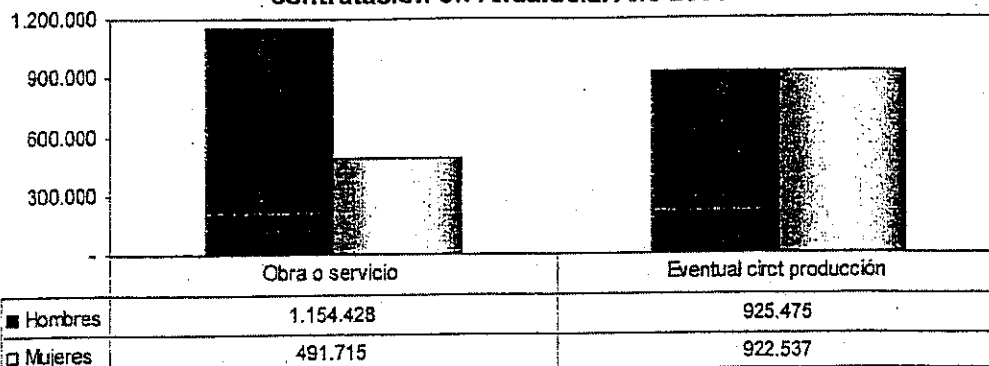


**9 Contratos de trabajo registrados según modalidad de contratación por sexo en Andalucía. Año 2004**

El 90% de los tres millones y medio de contratos de trabajo que se registraron en Andalucía en el año 2004 fueron en las modalidades 'Por Obra o Servicio' y 'Eventual por circunstancia de la producción'. Casi el 60% del total de contratos de trabajo registrados en Andalucía fueron para hombres y el 40% para mujeres. En las modalidades más frecuentes es donde se da esta proporción aunque las mujeres son más del 60% en las modalidades de 'Interinidad', 'Indefinido por fomento del empleo' y 'Temporal de inserción'.

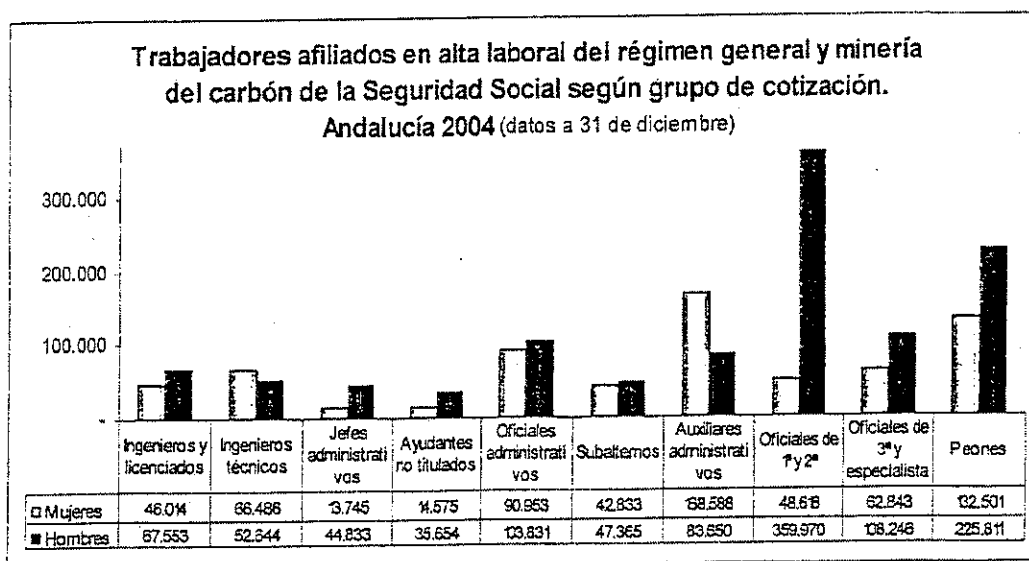


**Contratos de trabajo registrados según modalidad de contratación en Andalucía. Año 2004**



**10 Trabajadores afiliados en alta laboral del régimen general y minería del carbón de la Seguridad Social según grupo de cotización en Andalucía. Año 2004**

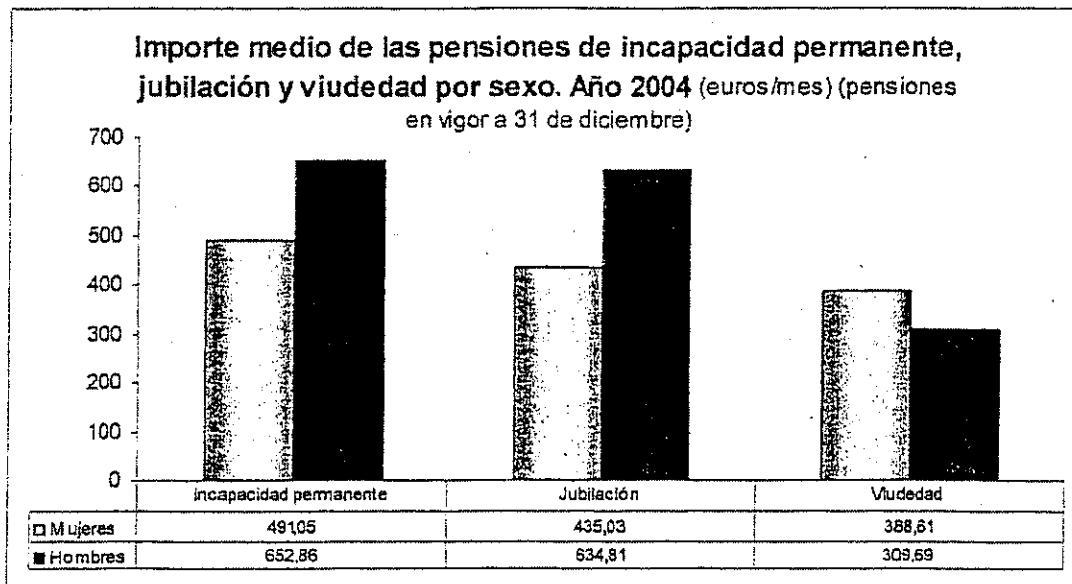
Las mujeres eran el 38% de los trabajadores afiliados en el Régimen General de la Seguridad Social en Andalucía al finalizar el año 2004, porcentaje que se corresponde con su participación en el mercado laboral —el 39% de la población activa— y elevado si se tiene en cuenta que no están incluidos los trabajadores de alta en el Régimen Especial de Empleados de Hogar en el que son mayoría. En los regímenes representados destaca la fuerte masculinización del grupo de cotización de Oficiales de 1ª y 2ª y la feminización del grupo de Auxiliares Administrativos. Un indicador positivo del cambio en la segregación vertical de las mujeres es la casi paridad que se da en el grupo de Ingenieros y Licenciados y la superioridad numérica en el de Ingenieros Técnicos.



# **11 Importe medio de las pensiones de incapacidad permanente, jubilación y viudedad por sexo en Andalucía. Año 2004**

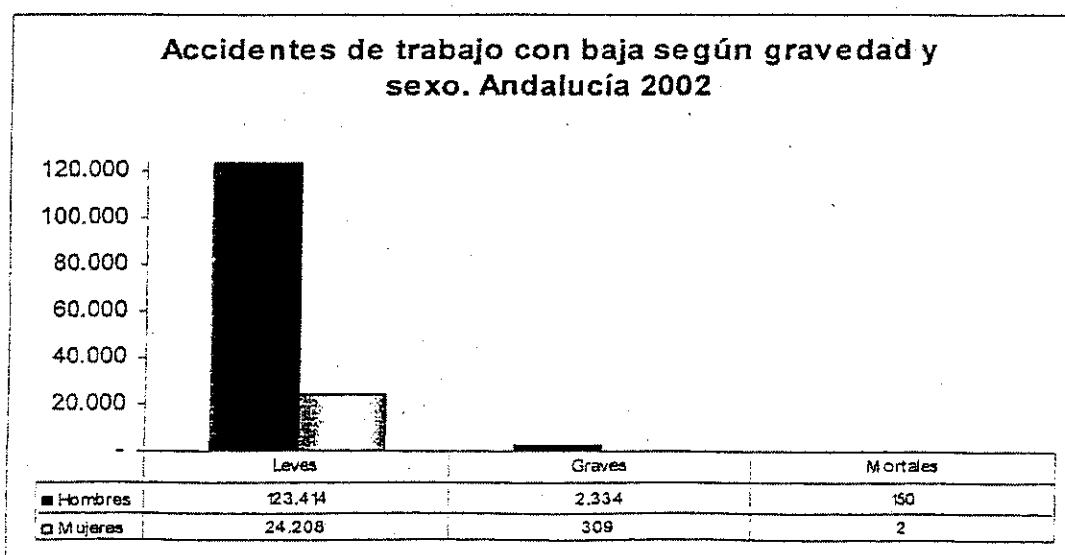
Derivado de la actividad laboral, el importe medio de las pensiones contributivas difiere sustancialmente entre hombres y mujeres, siendo el importe que reciben ellos superior en casi un 50% al que perciben ellas, excepto en las de Viudedad, derivada igualmente de la actividad laboral de los hombres.

12 / 07



## 12 Accidentes en jornada de trabajo con baja según gravedad y sexo en Andalucía. Año 2002

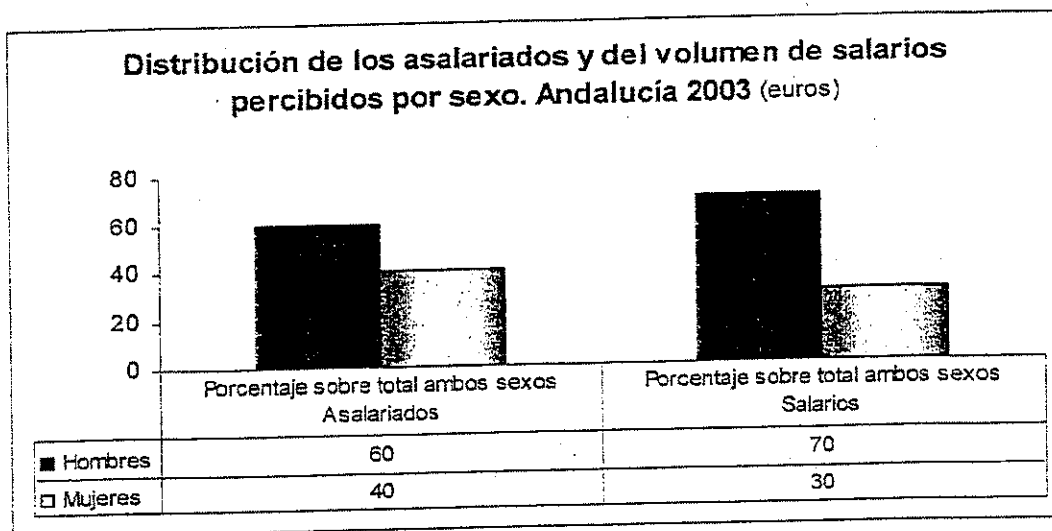
De los más de 150.000 accidentes de trabajo que se produjeron en Andalucía en el año 2002, el 98% fueron Leves, el 1,9% graves y el 0,1% mortales. El 84% del total se produjeron en hombres y el 16% en mujeres. El 99% de los accidentes en las mujeres



fueron leves. En los hombres el 98%. Sólo 2 de las 152 muertes por accidentes de trabajo fueron de mujeres.

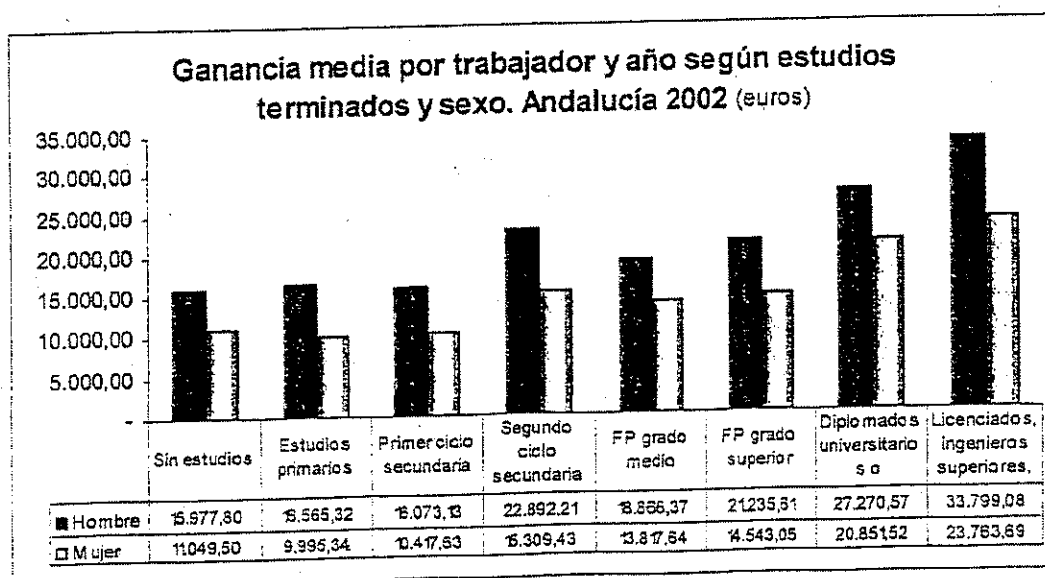
### 13 Distribución de los asalariados y del volumen de salarios percibidos en Andalucía por sexo. Año 2003

Puede verse como las mujeres, que son el 40% de los asalariados, perciben solo el 30% de la masa salarial.



### 14 Ganancia media por trabajador según estudios terminados por sexo en Andalucía. Año 2002

Por término medio las mujeres ganan un 25% menos que los hombres incluso a igual titulación. En la titulación de 'Estudios Primarios' esta diferencia llega al 40%.

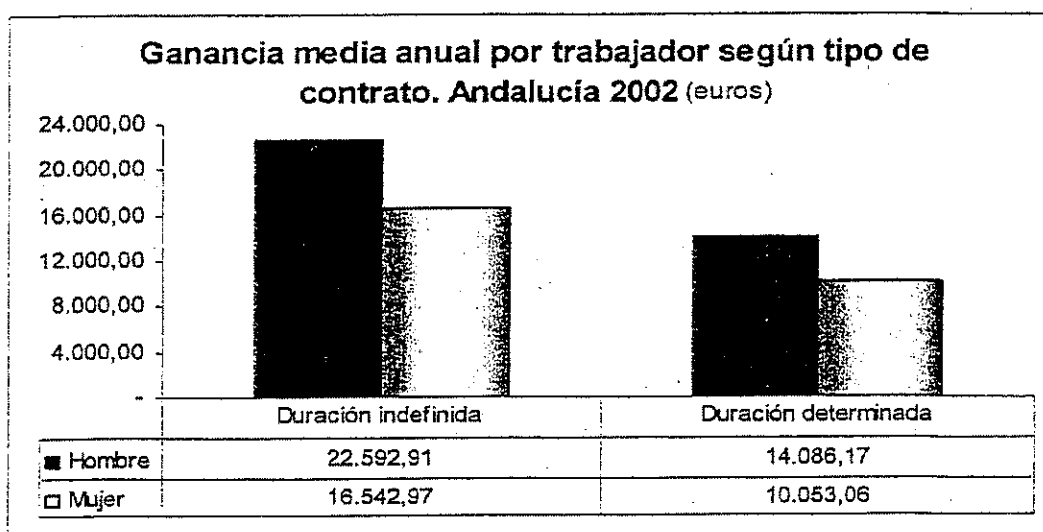




### 15 Ganancia media anual por trabajador según sexo y tipo de contrato en Andalucía.

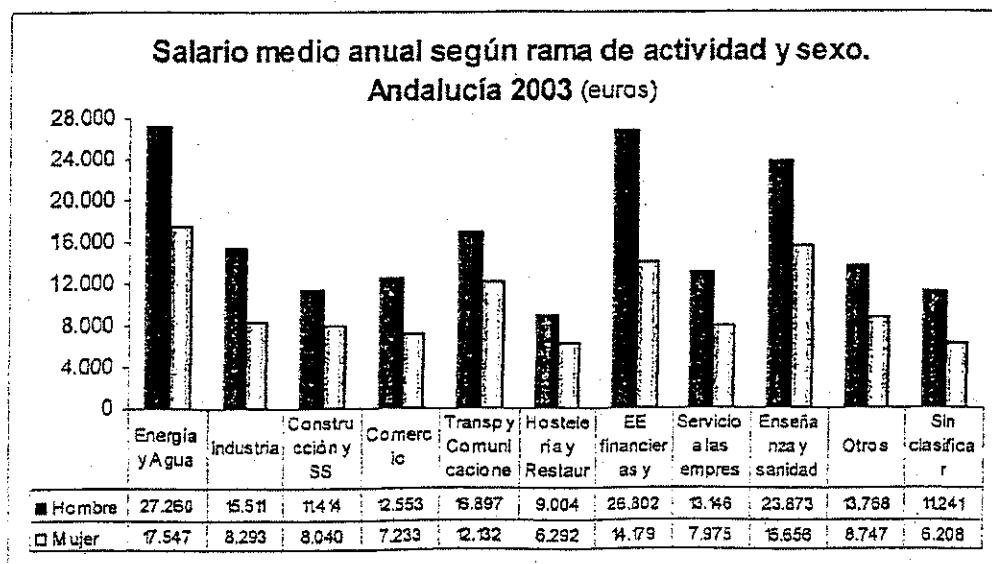
Año 2002

Según el tipo de contrato también los hombres ganan más. Un 27% en los de duración indefinida y un 28% en los de duración determinada.



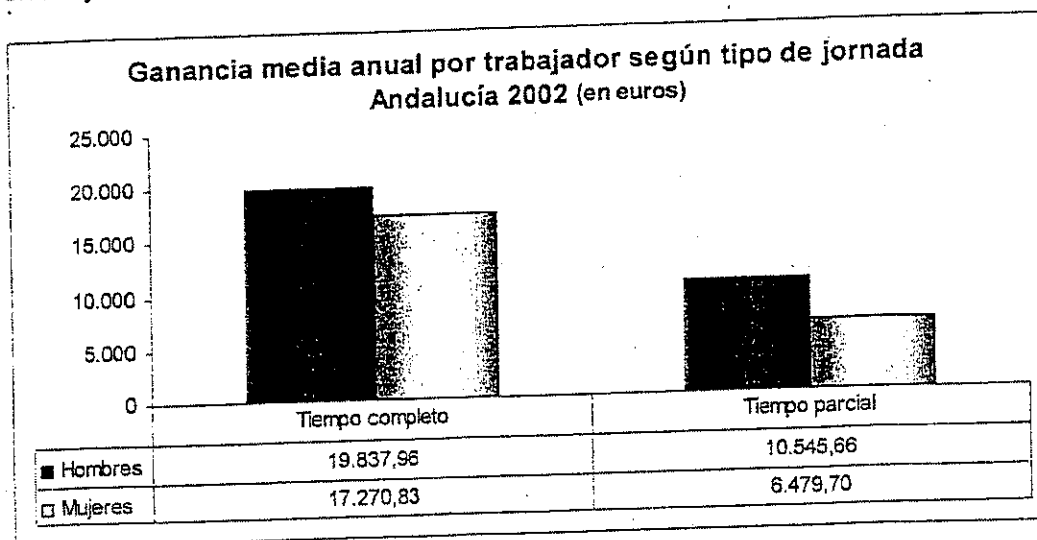
### 16 Salario medio anual según rama de actividad por sexo en Andalucía. Año 2003

Por término medio en el año 2003 las mujeres ganaron un 35% menos que los hombres en todas las ramas de actividad. En las ramas de Industria y Entidades Financieras la diferencia llegó a casi el 50%.



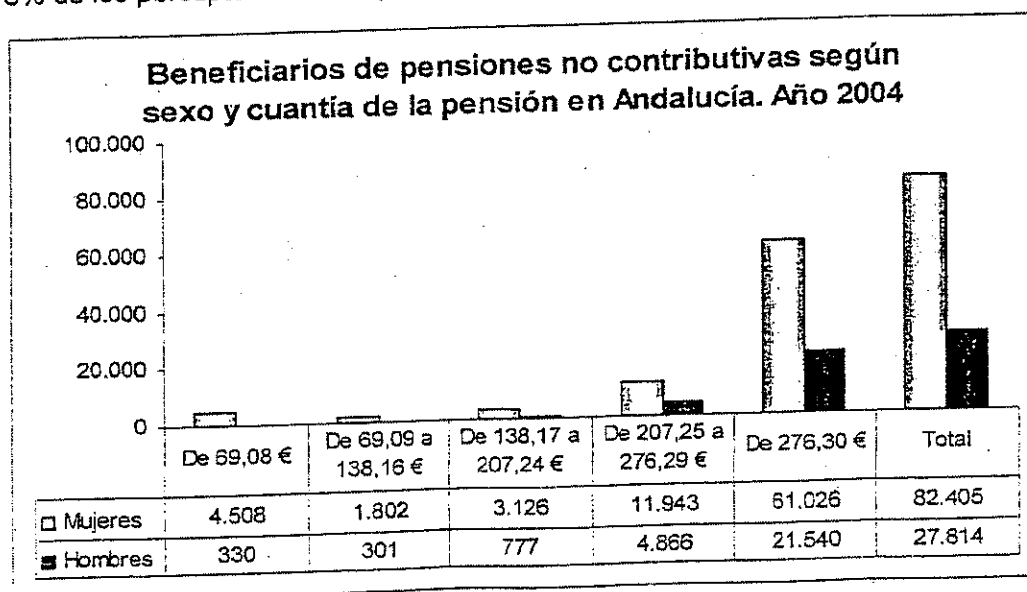
### 17 Ganancia media anual por trabajador según tipo de jornada por sexo en Andalucía. Año 2002

Los hombres ganaron en el año 2002 por término medio un 13% más que las mujeres en las jornadas a tiempo completo y un 39% más en las jornadas a tiempo parcial.



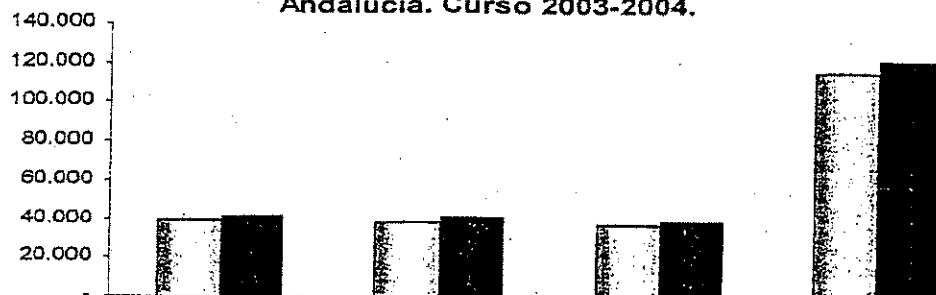
### 18 Beneficiarios de pensiones no contributivas según sexo y cuantía de la pensión. Año 2004

El 75% de los beneficiarios de pensiones no contributivas es mujer. Los hombres son el 6% de los perceptores de las pensiones más bajas.



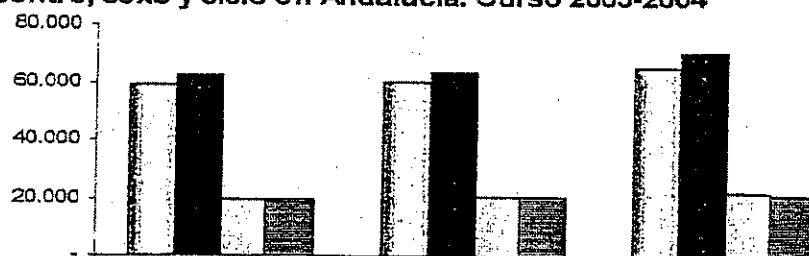
## 2.4 Educación

**Alumnado de educación infantil según sexo y edad en Andalucía. Curso 2003-2004.**



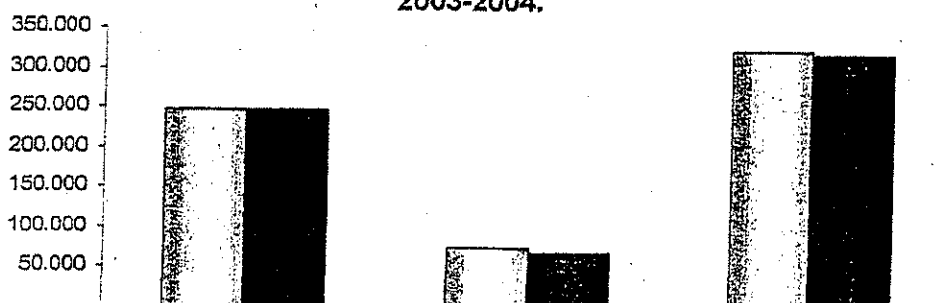
	De 3 o menos años	De 4 años	De 5 años	Total
□ Alumnas	39.274	38.601	38.023	115.898
■ Alumnos	41.636	41.034	39.939	122.609

**Alumnado de educación primaria según titularidad del centro, sexo y ciclo en Andalucía. Curso 2003-2004**



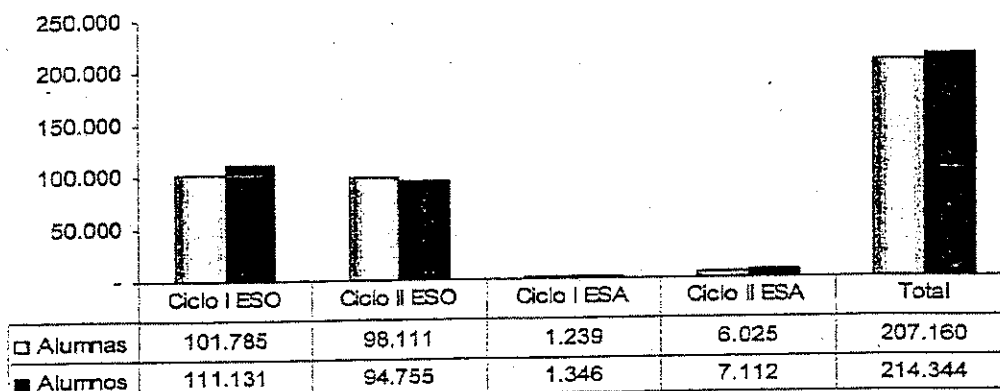
	De 1º ciclo	De 2º ciclo	De 3º ciclo
□ Alumnas centros públicos	59.211	60.789	65.730
■ Alumnos Centros Públicos	62.775	63.583	70.688
□ Alumnas centros privados	19.901	20.749	22.464
■ Alumnos centros privados	19.941	20.937	22.253

**Alumnado de enseñanzas secundarias según titularidad del centro y sexo en Andalucía. Curso 2003-2004.**

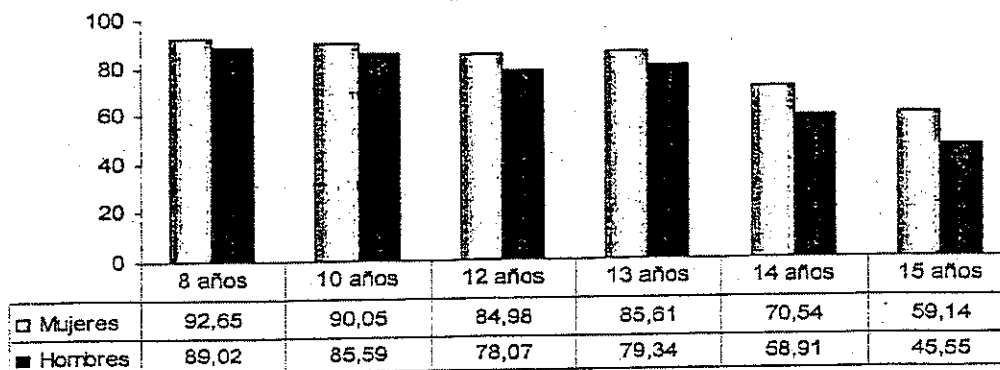


	Centros públicos	Centros privados	Total centros
□ Alumnas	248.128	76.540	324.668
■ Alumnos	249.103	69.702	318.805

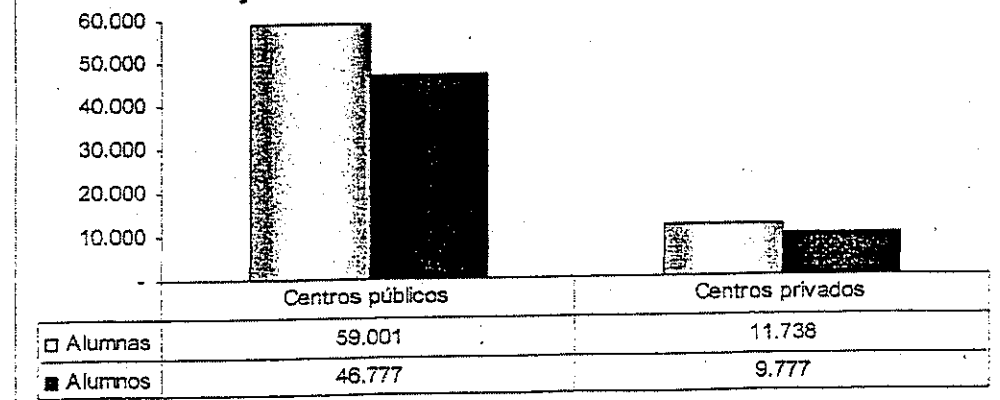
**Alumnado de educación secundaria obligatoria según sexo y ciclo en Andalucía. Curso 2003-2004.**



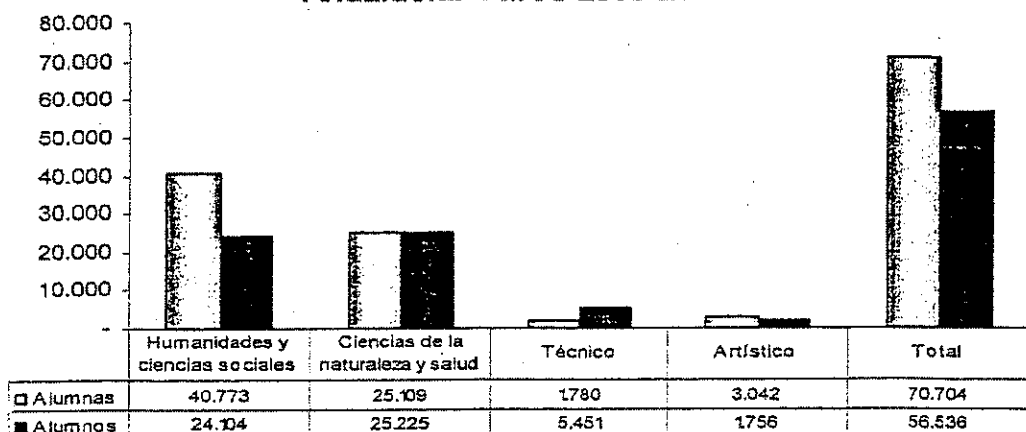
**Tasa de idoneidad en edades de educación obligatoria según sexo en Andalucía. Curso 2003-2004**  
(porcentaje)



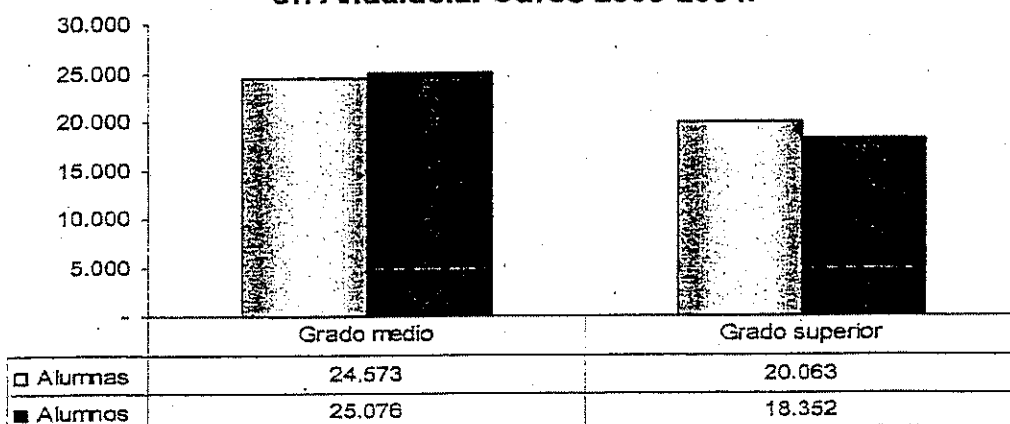
**Alumnado de bachillerato según titularidad del centro y sexo en Andalucía. Curso 2003-2004.**



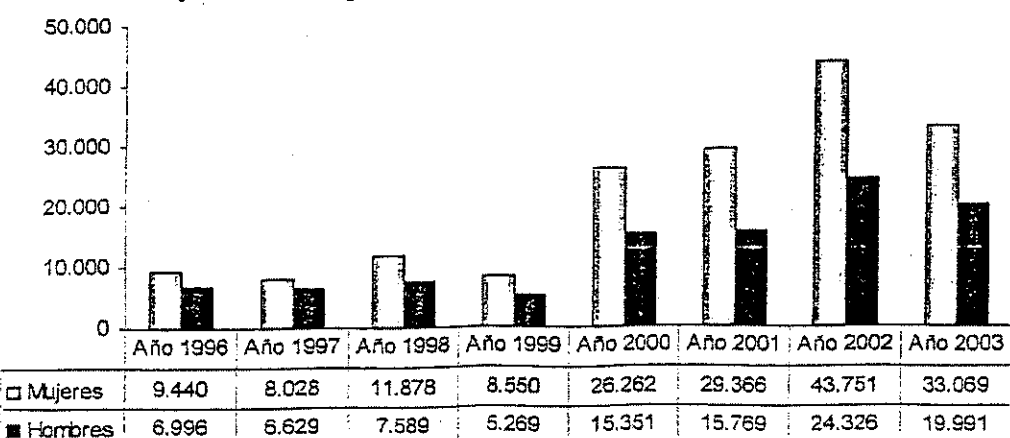
### Alumnado de bachillerato según sexo y rama en Andalucía. Curso 2003-2004.

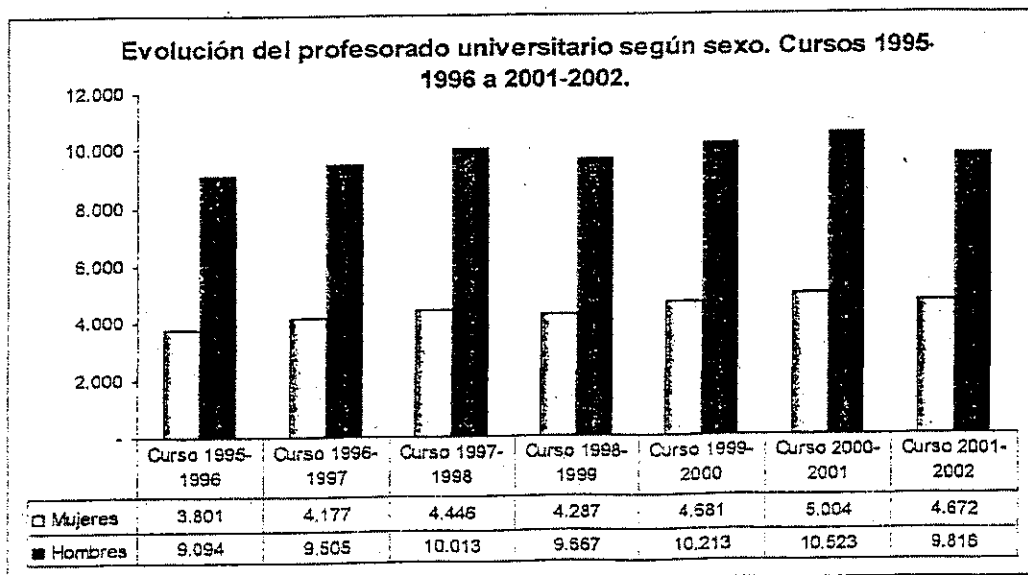
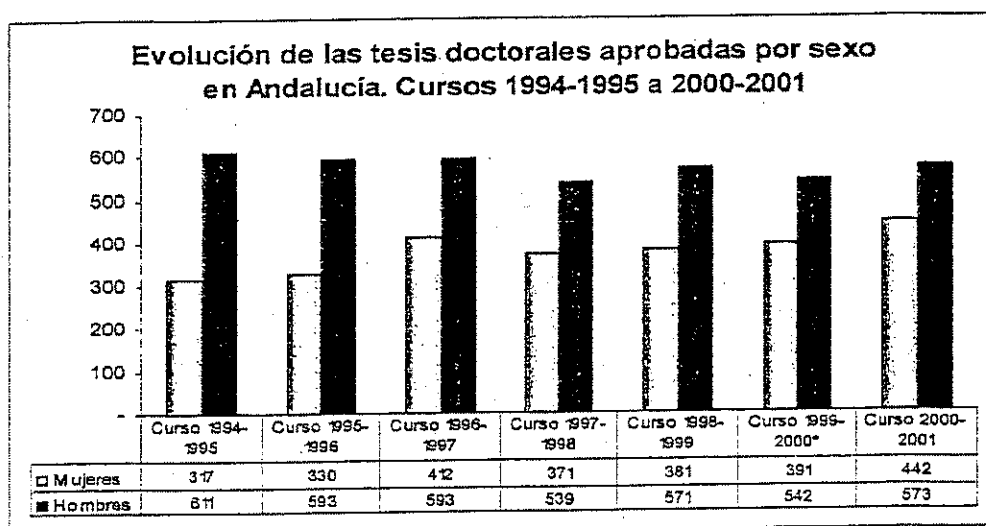
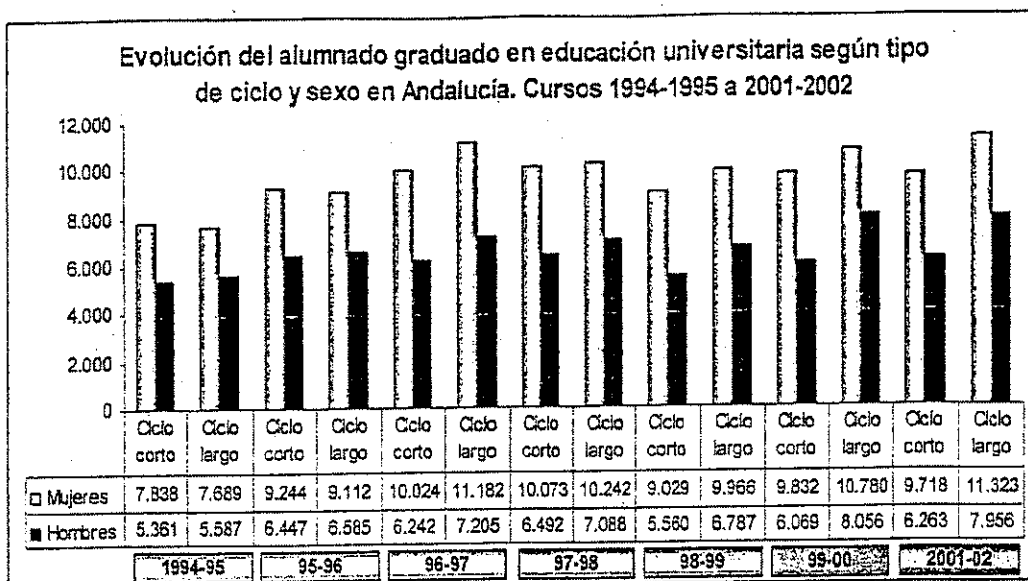


### Alumnado de ciclos formativos según sexo y grado en Andalucía. Curso 2003-2004.

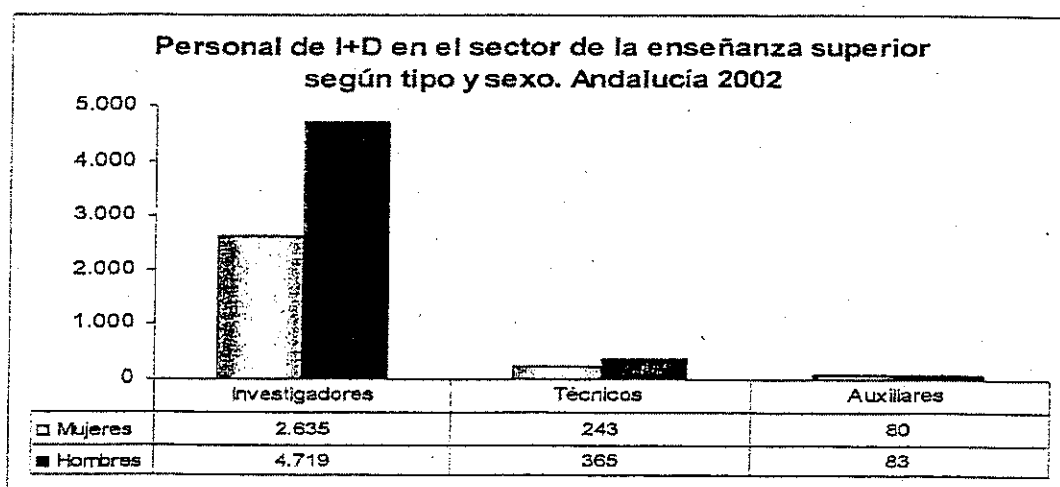


### Evolución del alumnado formado en cursos de formación ocupacional según sexo en Andalucía. Años 1996-2003





Si observamos el número de personas que realiza funciones de Investigación y Desarrollo en las Universidades por sexo.



Todos ellos, datos que han sido recogidos también en el Informe de Impacto de Género de los Presupuestos de la Junta de Andalucía para el 2006.

### 3.- OBJETIVO: IGUALDAD POR RAZÓN DE GÉNERO DE FORMA EFECTIVA

Andalucía, ya desde su Estatuto de Autonomía asumía un fuerte compromiso en relación con el principio de igualdad, ya que, en el Artículo 12, no solo reitera el mandato constitucional, sino que además, incorpora un principio específico relativo a la promoción de la igualdad de la mujer, para la plena incorporación de ésta a la vida social y superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política.



Y de hecho, así ha sido, con propuestas de marcos legales y líneas de actuación que propicien un cumplimiento real del principio de Igualdad a nivel estatal, de forma pionera en nuestro país.

Desde la creación en 1988 por Ley del Parlamento Andaluz 10/1988 de 29 de diciembre, del Instituto Andaluz de la Mujer, Organismo Autónomo hoy dependiente de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, y creado como entidad responsable para promover la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres en Andalucía. Hasta la aprobación y desarrollado de dos Planes de Igualdad de Oportunidades, 1990-1994 y 1995-1998, que recogieron las líneas prioritarias de actuación de estos años, y cuyos logros se han puesto de manifiesto en la progresiva incorporación de las mujeres a la construcción activa de la sociedad andaluza.

El *I Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres* del Instituto Andaluz de la Mujer, contenía un conjunto de 200 actuaciones entre las que destacaban aquellas dirigidas a difundir y adaptar nuestra normativa al principio de igualdad, o la creación de Centros de Información y asesoramiento a las mujeres.

El *II Plan de Igualdad de Oportunidades*. Recogía medidas de acción que iban dirigidas a la sensibilización social; la profundización del conocimiento de la situación de las mujeres: el desarrollo del sistema coeducativo en la enseñanza pública; y la prevención, sensibilización y atención para la erradicación de la violencia de género.

Seguidamente, el Gobierno Andaluz abordó la violencia de género situando en primera línea política, las acciones desarrolladas en los dos Planes contra la violencia hacia las mujeres, el *Plan del Gobierno Andaluz para avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres* (1998-2000) y el *Plan de Acción del Gobierno Andaluz contra la violencia hacia las mujeres*, (2001-2004). Planes que servirán de base a la próxima aprobación de un nuevo marco normativo y





asistencial contra la violencia de género, que recogerá las resoluciones del Grupo de Trabajo creado en esta Cámara al respecto.

Acompañando a estas acciones planificadas, se han ido sucediendo un cúmulo de normas específicas dirigidas a dar cobertura legal al conocimiento y a la atención de las especiales situaciones que las mujeres experimentan, como es el caso de:

- ❖ **Ley 8/2002**, del Plan Estadístico de Andalucía 2003-2006, obliga a la desagregación de datos por sexo en estadísticas oficiales (Artículo 22.)
- ❖ **Ley 18/2003, de 29 de diciembre** de Medidas Fiscales y Administrativas, que establece:
  - Composición paritaria de órganos consultivos y asesoramiento del Gobierno (Art. 140)
  - Informe de Evaluación de Impacto de Género (Art. 139)
  - Comisión de Presupuestos con enfoque de género
- ❖ **Ley 5/2005**, de Reforma de la Ley 1/1983 Electoral de Andalucía, incluyendo listas paritarias
- ❖ **Ley 6/2005, de 8 de abril**, *relativa a la actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía*, que señala: "La actividad publicitaria deberá desarrollarse con respeto a los principios de igualdad, objetividad, veracidad e imparcialidad; defensa de la dignidad de la persona, con especial atención a su desarrollo cultural y social, a la protección de la infancia y de la juventud, a la imagen de la mujer y de no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo o religión". artículo 4.1.
- ❖ **Decreto 216/1999 de 26 de Octubre**, por el que se regula el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, que contempla la asistencia jurídica gratuita a las mujeres víctimas de malos tratos, extendiéndola a los juicios de faltas.

- ❖ **Decreto 93/2004, de 9 de marzo**, por el que se regula el Informe de Evaluación de Impacto de Género.
- ❖ **ORDEN de 24 de noviembre de 1992**, conjunta de la Consejería de Gobernación y de la Consejería de Asuntos Sociales, sobre la eliminación del lenguaje sexista, en los textos y documentos administrativos.
- ❖ **Orden de 19 febrero 1993**, de la Consejería de la Presidencia, relativa a normas para el cumplimiento del principio de no discriminación por razón de sexo en la información y divulgación de la de la Junta de Andalucía
- ❖ **Orden de 31 de Mayo de 1996**, de la Consejería de la Presidencia, se concede el distintivo de Entidad Colaboradora en Igualdad de Oportunidades a las empresas andaluzas que aprueben un plan de acción positiva y acrediten haber iniciado su práctica.
- ❖ **Orden de 24 de junio de 2003**, por el que se aprueba la asignatura optativa de la ESO de 'Cambios sociales y nuevas relaciones de género'

Todo este disperso ordenamiento jurídico, y su relevancia en la actuación de los Poderes Públicos andaluces, están demandando la existencia de un marco legal integrador, que recoja éstas y otras iniciativas, de forma que Andalucía cuente con un paraguas normativo que ampare cualquier reivindicación de Igualdad por razón de sexo, y la denuncia de las discriminaciones que persisten en nuestra sociedad.

#### **4.- IMPACTO DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PROYECTO DE LEY**

Ante la situación real constatada por los datos anteriores, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 apartado 1, del Estatuto Autonómico ".....removerá los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitará la participación de todos



*los andaluces en la vida política, económica, cultural y social". (art. 12.1 del E.A.), la Junta de Andalucía emprende con este proyecto normativo la obligación estatutaria y da paso a un nuevo marco legal amplio e integrador, de todas las actuaciones necesarias para llegar al pleno desarrollo del Principio Constitucional de Igualdad por razón de sexo, que sirva de Garantía para la ciudadanía a la hora de hacer valer sus derechos y como norma para reivindicar su protección ante los Poderes Públicos Andaluces.*

Por todo lo expuesto podemos concluir que, aunque en Andalucía se han venido desarrollando Planes de Acción y Medidas para avanzar en la igualdad de género, es necesario aprobar una ***Ley de promoción de la igualdad de género*** que venga a recoger en un texto todas las acciones para impulsar la igualdad de mujeres y hombres, que sitúe el principio de igualdad y su consecución efectiva como objetivo común de primer orden en la agenda política.

La discriminación de género sigue siendo una realidad que se hace patente en ámbitos como son, el acceso y condiciones de trabajo, el desigual reparto de responsabilidades y tareas familiares, la violencia de género, en la educación, o la participación igualitaria, entre otros. Esto nos lleva a señalar, que las mujeres siguen encontrando limitaciones que obstaculizan el pleno desarrollo en el ámbito público y se oponen a su potenciación económica, educativa y laboral y, de alguna manera, les niega las posibilidades de progresar.

Existe una gran distancia entre el Derecho y la Realidad que viven las mujeres en nuestra sociedad, motivo por el cual es necesario acelerar este proceso de consecución de la igualdad real y efectiva. Un nuevo contrato social, que debe estar basado en crear un modelo de organización que tenga en cuenta las necesidades y condiciones de las mujeres, en definitiva, se tenga en cuenta la perspectiva o la óptica de género-.

Es necesario contar con una iniciativa política, en el marco de nuestra Comunidad Autónoma, que contribuya a acortar el lento proceso histórico de incorporación de

las mujeres a la sociedad, en el pleno ejercicio de sus derechos de ciudadanía en el plano político, social, económico y familiar.

La apuesta por una Ley para la promoción de la igualdad en Andalucía representa, en estos momentos y para el futuro un objetivo común de enorme fuerza y utilidad. Una estrategia para profundizar en la democracia, para construir una sociedad más justa, cohesionada y desarrollada social y económicamente.

Andalucía necesita reforzar la realización práctica del principio de igualdad asumido en su Estatuto de Autonomía para:

- Eliminar la discriminación contra las mujeres,
- afianzar los logros conseguidos,
- remover todos los obstáculos que dificultan la plena igualdad,
- e intensificar el proceso hacia la igualdad de mujeres y hombres.

Entre los objetivos y estrategias del anteproyecto de Ley para la promoción de la igualdad de género se encuentran los siguientes:

- Garantizar el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere a la educación, salud, participación social, al empleo, a la formación, a las condiciones de trabajo...
- Promover las acciones fundamentales para la prevención y atención a la violencia de género ( que será objeto de medidas legales específicas).
- Impulsar la promoción económica, social y cultural de las mujeres, teniendo en cuenta las peculiaridades y necesidades de algunos colectivos de mujeres así como de las mujeres que residen en ámbito rural.

- Propiciar la conciliación de la vida profesional, la familiar y la personal.
- Promocionar la participación política y social de las mujeres.
- Fomentar una utilización no sexista de la imagen de las mujeres en los medios de comunicación.
- Impulsar la colaboración y participación de los poderes públicos en Andalucía en el desarrollo de una política transversal de acción para promover la igualdad de género.
- Promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil.

Se trata de una herramienta legal que no se agote en si misma sino que favorezca el desarrollo de acciones, medidas y garantías para avanzar en la igualdad real, que impregne toda la acción pública en Andalucía.

Estableciendo nuevas medidas, creando instituciones y mecanismos estables de coordinación y colaboración para garantizar que la igualdad de mujeres y hombres sea un objetivo prioritario de los poderes públicos y de la Administración Pública Andaluza.

Con Medidas destinadas a:

- Asegurar una formación **educativa** basada en el principio de igualdad entre mujeres y hombres.
- Favorecer el acceso y la permanencia de la mujer, en condiciones de igualdad, en el **mundo laboral**.

- Posibilitar el desarrollo de acciones en materia de promoción y protección a la **salud y bienestar social** que tenga en cuenta las necesidades de determinados colectivos de mujeres.
- Intensificar la **participación social y política** de las mujeres, así como para favorecer la presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos.
- Coordinar todos los recursos y actuaciones de las **Administraciones Públicas** en materia de igualdad.
- Integrar la perspectiva de género como **eje transversal** de las Políticas Públicas.
- Favorecer el **reparto igualitario de tareas y responsabilidades** familiares y laborales de hombres y mujeres

En este tiempo el objetivo de la Igualdad ha ido evolucionando, la necesidad de vencer las barreras estructurales que sostienen la discriminación por razón de género, ha derivado en concluir que hay que atender a demás de estos contextos específicos, a la integración de la igualdad de oportunidades de forma transversal en todos los ámbitos. De forma que cualquier acción política lleve implícito el objetivo de la Igualdad entre mujeres y hombres.

Se trata de un planteamiento más integral y general de la igualdad de género, como se ha venido poniendo de manifiesto en las últimas Conferencias Mundiales sobre la Mujer, y en el ámbito Europeo, que establecen como estrategia fundamental la Transversalidad y el Empoderamiento de las mujeres. Ambas estrategias se van a erigir en ejes fundamentales en la implementación de las Políticas de Igualdad en Andalucía.

Un enfoque dual que incide en dos líneas de acción conjunta:

- 1.- Integrar la perspectiva de género en todas las áreas y fases de las políticas públicas
- 2.- Implementar medidas de acción positiva en ámbitos específicos que lo demanden.

Este proyecto de Ley Andaluza para la promoción de la igualdad de género, integra un conjunto amplio de medidas a poner en marcha en distintos ámbitos de actuación, dirigidas al logro del objetivo general de promover las condiciones para que la Igualdad sea real y efectiva, y que siguen el esquema siguiente:

## **TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES**

- 1) Objeto.-
- 2) Ámbito de Aplicación.-
- 3) Discriminación directa e indirecta
- 4) Representación equilibrada
- 5) Principios Rectores.-
  - a) Igualdad de trato.
  - b) Transversalidad de género.
  - c) Conciliación vida laboral, familiar y personal
  - d) Igualdad de Oportunidades y Acciones positivas
  - e) Participación Equilibrada
  - f) Colaboración, coordinación y cooperación Institucional
  - g) Lenguaje No Sexista e Imagen Pública

## **TÍTULO II.- POLÍTICAS PUBLICAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO**

### **CAPITULO I – INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO**

- 6) Transversalidad de Género.-



- 7) Evaluación de Impacto de Género.-
- 8) Plan Estratégico para promover la Igualdad.
- 9.-) Presupuestos Públicos con enfoque de género.-
- 10) Lenguaje No sexista e imagen pública.-
- 11) Estadísticas e Investigaciones con perspectiva de género.-

## **CAPITULO II - PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EN LA JUNTA DE ANDALUCIA**

- 12) Representación equilibrada
- 13) Contratación pública

## **TÍTULO III.- MEDIDAS PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE GENERO**

### **CAPITULO I – IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA EDUCACIÓN**

#### **SECCIÓN PRIMERA – ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA**

- 14) Igualdad de derechos en la Educación
- 15) Currículo
- 16) Materiales Curriculares
- 17) Formación del Profesorado
- 18) Consejos Escolares
- 19) Inspección Educativa

#### **SECCIÓN SEGUNDA – ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS**

- 20) Disposición General
- 20) Representación equilibrada
- 22) Formación e Investigación

### **CAPITULO II – IGUALDAD LABORAL**

- 23) Igualdad de oportunidades y Concertación Social





### Subsección Primera – Igualdad en el ámbito laboral

- 24) Mejora de la Empleabilidad
- 25) Promoción empresarial
- 26) Calidad en el empleo
- 27) Negociación Colectiva
- 28) Seguridad y Salud laboral
- 29) Acoso Sexual y Acoso relacionado con el sexo

### Subsección Segunda – Igualdad en la Función Pública Andaluza

- 30) Empleo en el sector público andaluz
- 31) Planes de Igualdad en la Función Pública

### Sección Segunda – Responsabilidad Social y Marca de Excelencia

- 32) Acciones de Responsabilidad Social de las empresas en materia de igualdad
- 33) Marca de Excelencia en Igualdad

## CAPITULO III – CONCILIACIÓN LABORAL – PERSONAL - FAMILIAR

- 34) Derecho a la corresponsabilidad

### Sección Primera – Conciliación de la vida laboral, personal y familiar.

- 35) Organización de espacios y creación de servicios
- 36) Conciliación en las empresas

### Sección Segunda – De la conciliación en la Función Pública

- 37) Los derechos de conciliación en el empleo público
- 38) Permiso de Paternidad y Parentales

## **CAPITULO IV – SALUD Y BIENESTAR SOCIAL**

### **Sección Primera .- Promoción y protección de la salud de las mujeres**

- 39) Salud y género
- 40) Investigaciones
- 41) Programas de salud con perspectiva de género

### **Sección Segunda.- Políticas de promoción y atención a las mujeres**

- 42) Desarrollo Sostenible
- 43) Vivienda
- 44) Nuevas Tecnologías

### **Sección Tercera .- Políticas de Bienestar Social**

- 45) Igualdad en las políticas de bienestar social
- 46) Mujeres Mayores
- 47) Cuidadoras y cuidadores de personas dependientes
- 48) Promoción y protección a la diversidad y a la diferencia
- 49) Inclusión Social
- 50) Mujeres con discapacidad
- 51) Mujeres en el medio rural

## **CAPITULO V – PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA**

- 52) Participación Social
- 53) Fomento de las Asociaciones de Mujeres
- 54) Participación en actividades Sociales, Culturales y Deportivas
- 55) Participación Política

## **CAPITULO VI – IMAGEN DE LAS MUJERES Y MEDIOS COMUNICACIÓN**

- 56) Imagen de las mujeres

#### **TITULO IV - ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS**

- 57) Comisión Interdepartamental para la igualdad de mujeres y hombres.
- 58) Unidad de Igualdad y Género
- 59) Observatorio de la Igualdad de Género
- 60) Consejo Andaluz para la Igualdad
- 61) Instituto Andaluz de la Mujer
- 62) Coordinación de las Administraciones públicas para la igualdad de mujeres y hombres

#### **TITULO V – GARANTÍAS PAR LA IGUALDAD DE GÉNERO**

- 63) Evaluación de la aplicación de la Ley
- 64) Igualdad de trato en el acceso al uso de bienes y servicios y su suministro
- 65) Acción de cesación y rectificación de la Publicidad Ilícita
- 66) Acreditación de la representación equilibrada
- 67) Divulgación de la Ley

#### **5.- CONCLUSIÓN**

El borrador de anteproyecto de Ley de Promoción de la Igualdad de Género es una medida que surtirá un efecto positivo en la consecución del objetivo de la igualdad entre mujeres y hombres. Dado el impacto potencial que se espera produzca en las áreas de actuación que pretende regular.

Conforme a la Evaluación o Análisis del enfoque de género, es necesario que se definan claramente el objetivo que se persigue, y los indicadores que servirán para evaluar el impacto previsto.

Así el artículo 1, del presente borrador establece:

*“Constituye el objeto de esta Ley regular y garantizar las acciones que permitan hacer efectivo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres previsto en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.”*

Una vez explicitado el objeto fundamental del anteproyecto de ley, quedaría fijar los indicadores que permitirán evaluar el impacto positivo de su aprobación y posterior entrada en vigor y desarrollo.

Según los datos analizados en el panorama de realidad en el que se pretende actuar, los **indicadores** propuestos podrían ser:

#### Representación Política

- Representación de mujeres y hombres en Parlamento, por Grupos y Organos Parlamentarios.
- Representación de mujeres y hombres en Órganos de Gobierno Municipales.
- Representación de mujeres y hombres en el Gobierno Autonómico por cargos directivos.

#### Representación en la Administración Autonómica

- Representación de mujeres y hombres en la Administración Autonómica por niveles y categorías laborales.
- Composición desagregada por sexos, de Órganos Colegiados y Consultivos de la Administración.

#### Representación Social

- Datos desagregados por sexo de personas que ostenten titularidad, dirección, gerencia o presidencia de empresas.
- Datos desagregados por sexo de personas que ostenten titularidad, dirección, gerencia o presidencia de entidades sociales representativas.
- Nº de Asociaciones de Mujeres y su participación en órganos de representación

### Educación y Universidades

- Datos desagregados de alumnado en Enseñanza Obligatoria
- Datos desagregados de alumnado en Enseñanza Universitaria
- Datos desagregados de alumnado titulado Universitario por carreras.
- Datos desagregados de profesorado Universitario por categorías y especialidades.
- Datos desagregados del personal investigador universitario, por categorías.

### Empleo

- Datos desagregados por sexos, de Empleo, Desempleo y Actividad en Andalucía, por sectores y temporalidad.
- Datos desagregados de permisos y licencias por motivos de conciliación laboral y familiar.
- Salario medio anual según rama de actividad por sexo en Andalucía.

### Bienestar Social

- Datos desagregados de personas usuarias de los Servicios de Salud.
- Datos desagregados de personas beneficiarias de prestaciones sociales autonómicas.
- Datos desagregados de morbilidad y mortalidad por franja de edad y causas.
- Datos desagregados de ayudas por desempleo.
- Datos desagregados de personas afiliadas y en alta laboral en la Seguridad Social

### Servicios del IAM

- Datos desagregados de las personas usuarias de los Servicios y Programas

En definitiva, no cabe esperar más con la aprobación de este anteproyecto que un impacto positivo en el principio constitucional de igualdad por razón de sexo. Un impacto que beneficiará a hombres y mujeres, y a la sociedad en su conjunto, que verá incrementado su potencial social y ciudadano con la incorporación de las mujeres a todos los ámbitos públicos (universidad, economía, dialogo social, política,.....).

Esta Ley constituirá con su aprobación la cúspide del ordenamiento jurídico en materia de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, en el ámbito autonómico. Un instrumento normativo puesto a disposición de la ciudadanía para hacer valer los derechos y obligaciones de las personas que residen en Andalucía y los Poderes Públicos de la Comunidad Autónoma.

Sevilla, 15 de marzo de 2006

INFORME

CONSEJERÍA

13 / 07

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL ENFOQUE DE DERECHOS DE LA  
INFANCIA DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN  
Y PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO**

De conformidad con el artículo 7 del Decreto 103/2005, de 19 de abril, por el que se regula el Informe de Evaluación del Enfoque de derechos de la infancia en los Proyectos de Ley y Reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno, esta Dirección General de Infancia y Familias emite preceptivo informe cuya finalidad radica en garantizar la legalidad, acierto e incidencia de los Proyectos de Ley y Reglamentos, cuya aprobación corresponda al Consejo de Gobierno, en orden al pleno respeto de los derechos de los niños y niñas, según la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, y su concreción en el resto de la normativa internacional, estatal y autonómica que son aplicables en materia de menores.

En este sentido, tras el estudio<sup>3</sup> del anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Protección contra la Violencia de Género, y dado el objeto que regula, la erradicación de la violencia de género mediante la adopción de medidas de prevención y protección integral a las mujeres en situación de violencia de género o en riesgo de padecerla, incluidas las de detección, atención y recuperación de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, entendemos que tiene repercusión sobre la infancia en tanto que el ámbito de las relaciones familiares es el núcleo básico para el desarrollo de los menores. Y por ello, dado lo establecido en el artículo 6 del Decreto 103/2005, de 19 de abril, en relación con la redacción dada en los artículos 8 y 11 de la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor que regula la prevención de los malos tratos y de la explotación y el derecho a la educación, respectivamente, esta Dirección General considera cumplido dichos requisitos a través de atención integral de las víctimas de violencia de género y la formación del alumnado, detección y prevención de la violencia de género en el ámbito escolar, derecho a la escolarización inmediata en caso de violencia de género, ayudas para material escolar, comedor y acceso preferente de los hijos e hijas en la adjudicación de plazas ofertadas en los Centros de atención socioeducativa para menores de tres años.

**113 / 07**

Por todo lo expuesto, esta Dirección General informa favorablemente en el sentido de que se ha dado al citado proyecto de Decreto un enfoque basado en los derechos de los niños y niñas de Andalucía.

Sevilla, a 28 de noviembre de 2006.

**INFORME  
CONSEJERÍA**

**LA DIRECTORA GENERAL DE  
INFANCIA Y FAMILIAS**

Fdo.: Carmen Belinchón Sánchez.



13 / 07

9313  
26/06/06



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

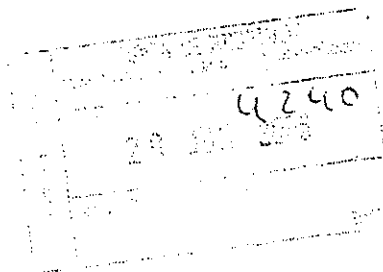
**INFORME**  
**IAM**

Fecha: 14 de junio de 2006

Asunto: Informe Impacto Genero

Ref.: EMB/ Impacto 06-44

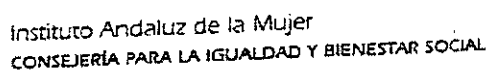
SR. VICECONSEJERO  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD  
Y BIENESTAR SOCIAL  
Avda. de Hytasa s/n Edif.. Junta And.  
41071 SEVILLA



Adjunto le remito Informe de Evaluación de Impacto de Género al "Anteproyecto de Ley de Medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género en Andalucía", emitido por este organismo, y conforme a lo establecido en el Decreto 93/2004, de 9 de marzo, por el que se regula el informe de evaluación de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno., para su incorporación al expediente

LA DIRECTORA

A. Soledad Ruiz Seguin



137 07

INFORME  
IAN

**INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO  
DE GÉNERO  
ANTEPROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE  
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL  
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO**



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

## INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO AL ANTEPROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN

### 1.- CONTEXTO

La violencia de género constituye el principal obstáculo para alcanzar la igualdad real y efectiva que propugnan tanto nuestro ordenamiento jurídico estatal, como autonómico.

Esta vulneración de los derechos fundamentales de la persona, cuenta con un arraigo cultural e histórico basado en las relaciones de poder hombre-mujer, que hacen que su erradicación sea una labor ardua y difícil, pero no por ello imposible de alcanzar.

A pesar de tantos años de lucha y reivindicación de las mujeres por alcanzar una vida digna y libre de violencia, los datos nos reflejan cada día que la violencia de género es una realidad. En nuestra sociedad moderna y democrática aún siguen existiendo conductas agresivas en el ámbito de las relaciones hombre-mujer, continuamos educando en desigualdad a niños y niñas, se permiten discriminaciones en el entorno laboral que son germen de violencia sexual, o se fomenta el sexismo a través de la publicidad, y en los medios de comunicación se reproducen modelos y conductas que no hacen más que perpetuar la violencia de género.

En este contexto, no cabe más que demandar una verdadera política integral contra la violencia de género, que no deje ni un resquicio de permisividad para los agresores, y proteja con absoluta seguridad y eficacia a las mujeres.

En esta legislatura del Gobierno de la Nación, ha tenido lugar la aprobación de la **Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género**. Un marco normativo

Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

necesario para coordinar y aunar los esfuerzos de todas las instituciones y los recursos existentes para atender a quienes padecen o están en riesgo de padecer esta vulneración de los derechos más fundamentales.

Si bien es verdad que en nuestro país se habían establecido reformas legales y normas con relación a la violencia de género, hasta ahora en España no había una normativa de ámbito estatal que, de forma clara y con un abordaje integral, tuviera como finalidad erradicar la violencia contra la mujer.

La violencia de género se enfoca por la Ley de un modo global y multidisciplinar, empezando por el proceso de socialización y educación, es decir, por medidas de prevención. Se garantiza el derecho de acceso a la información y a la asistencia social integrada, a través de servicios de atención permanente, urgente y con especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional. Y se enfoca por primera vez la violencia de género como un problema de Estado, ante el cual todas las instituciones deben reaccionar con todos los recursos a su alcance, realizando las modificaciones legales, jurídicas y procesales necesarias para su más eficaz resolución.

Aspectos todos ellos recogidos en la Ley Orgánica, a través de la adopción de un conjunto de medidas cuya finalidad es la protección integral de las víctimas, tanto desde el punto de vista de la prevención, como desde la asistencia a quienes la sufren.

Con esta ley, el Instituto Andaluz de la Mujer, como Organismo de Igualdad de la Junta de Andalucía, se siente legitimado para abordar un nuevo texto normativo que se constituya como marco de actuación en nuestra Comunidad Autónoma.

Tras su entrada en vigor, corresponde ahora a las Comunidades Autónomas recoger el testigo y articular, desde el marco competencial que nos



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

corresponde, las actuaciones que son necesarias establecer para contribuir a este objetivo.

Un objetivo que Andalucía ha situado en la primera línea de la acción política desde hace años, y buena prueba de ello son la aprobación y desarrollo de dos Planes contra la violencia hacia las mujeres, el **Plan del Gobierno Andaluz para avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres** ( 1998-2000) y el **Plan de Acción del Gobierno Andaluz contra la violencia hacia las mujeres**, (2001-2004).

Han sido treinta y cinco Medidas las que se han implementado a lo largo de los años de desarrollo de estos dos Planes, estructuradas en torno a las áreas de Prevención y Sensibilización; Atención a las víctimas y Coordinación institucional. Medidas implementadas desde un enfoque integral y con espíritu de permanencia, ya que hoy por hoy, forman parte de la red básica de recursos y servicios públicos de atención a la mujer. Y que han permitido a nuestra Autonomía situarse a la vanguardia de la lucha contra esta lacra social durante años.

Así durante estos años se ha desarrollado una importante base legal en el área de la Violencia de Género, como respaldan los reglamentos sobre: *Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía*, sobre la implemmentación de la optativa *Cambios sociales y nuevas relaciones de género en la Educación Secundaria Obligatoria*, o aquél que regula los *Requisitos materiales y funcionales específicos de los Centros de Atención y Acogida a mujeres víctimas de malos tratos*, entre otros.

Sin embargo no es suficiente. La necesidad de una respuesta multidisciplinar a las diferentes situaciones en que se manifiesta la violencia contra la mujer, y ante las diversas necesidades que surgen ante un hecho de este tipo, requieren de la colaboración y coordinación de todas las instituciones y la ciudadanía en general.



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

113 / 07

Nuestro objetivo es contribuir en reducir estos hechos delictivos, desde su origen hasta sus resultados, siendo necesaria una respuesta global que incida en el aspecto educacional, en la recuperación de una vida normalizada para las víctimas y en la coordinación institucional

Por ello, y tras la invitación de la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social en el Parlamento, para que Andalucía contara con un conjunto de medidas estructuradas contra la violencia que fuera fruto del consenso de todos los grupos políticos, se constituyó el **Grupo de Trabajo sobre Violencia de Género**, en el seno de la Cámara Andaluza.

Tras las diversas y múltiples intervenciones de las y los representantes institucionales, de organizaciones y asociaciones sociales y profesionales, se formalizaron un conjunto de propuestas que han servido para complementar y mejorar este texto normativo que dará paso a la que será la futura Ley contra la Violencia de Género en Andalucía.

En definitiva, nos encontramos ante un proyecto ilusionante y necesario, fruto de la experiencia enriquecida con las propuestas de todos los Grupos Parlamentarios y con las aportaciones de los colectivos implicados.

Un proyecto que servirá de instrumento de coordinación de todos los recursos y servicios existentes en nuestra Comunidad. Y que redundará en definitiva, en el interés general de Andalucía y de su gente que no es otro que propiciar una vida libre de violencia a toda su ciudadanía, especialmente a las mujeres.

En esta Ley se abordará la violencia contra las mujeres desde un enfoque multidisciplinar y coordinado de todos los ámbitos, es decir, pondrá el énfasis en la coordinación institucional tratando de que a través de una



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

intervención conjunta de las administraciones públicas se evite el peregrinaje de la víctima y la duplicidad de actuaciones.

También incidirá en las medidas preventivas y sensibilizadoras, como la educación en valores igualitarios y de respeto a las personas, como base para unas relaciones no discriminatorias. Abordaremos el ámbito sanitario como uno de los ejes básicos de detección de las situaciones de violencia hacia las mujeres, y como núcleo de atención y asistencia para su tratamiento.

Así mismo insistiremos en la formación de todas las personas profesionales que desde las distintas áreas y servicios públicos contactan cada día con esta cruda realidad, para que puedan desarrollar sus funciones con el más alto índice de calidad y eficacia posible.

Por otro lado, el proyecto de ley establecerá medidas en el ámbito laboral como entorno próximo a las mujeres que padecen violencia de género y desde el que debemos actuar de forma que puedan recibir todo el apoyo y no sea un elemento más de aislamiento o discriminación para ellas.

Con todo ello, esperamos contribuir a erradicar la violencia de género en Andalucía y paliar así, el déficit democrático que estos hechos suponen para la sociedad.

## **2.- ANÁLISIS DE LA REALIDAD - DATOS ESTADÍSTICOS**

El Decreto 93/2004 del 9 de marzo por el que se regula el informe de evaluación de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno (BOJA núm. 50 de 12.03.04), dispone en el Art. 4 que el informe de evaluación del impacto de género deberá describir las diferencias existentes entre mujeres y hombres en el ámbito de actuación de las medidas que pretenden regular en la disposición de que se trate,



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

incluyendo datos desagregados por sexo, recogidos en estadísticas oficiales, así como el análisis del impacto potencial que la aprobación de dichas medidas producirá entre las mujeres y hombres a quienes van dirigidas.

La obtención de datos desagregados por sexo permite analizar la realidad y valorar si lo previsto en la norma en cuestión atiende de forma igualitaria a las mujeres y los hombres a quienes afectan las medidas que se pretenden regular.

En términos generales, la población potencialmente beneficiaria de las medidas que se pretenden regular en el proyecto de Ley será toda la población residente en Andalucía. Así los datos desagregados son:

<b>MUJERES</b>	<b>3.960.194</b>
<b>HOMBRES</b>	<b>3.889.605</b>

**Fuente: Padrón de habitantes a 1 de enero de 2005. (INE)**

De forma más concreta, y acotando el número de mujeres que realmente son objeto directo de nuestras medidas de atención y que se verán beneficiadas por aquellas actuaciones de coordinación institucional, acudimos al número de denuncias por violencia interpuestas.

Basándonos en datos de elaboración propia del Instituto Andaluz de la Mujer vemos que el número de denuncias de mujeres víctimas de violencia en Andalucía, se ha ido incrementando en los últimos años, a pesar del esfuerzo institucional desarrollado.

□ **DENUNCIAS POR VIOLENCIA CONTRA LA PAREJA O EXPAREJA  
PRESENTADAS EN ANDALUCÍA - ENERO A DICIEMBRE 2005.**

- HOMBRES 11.080





Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

13 / 07

- MUJERES 59.758

Fuente: Ministerio del Interior

□ **VICTIMAS ORDENES DE PROTECCIÓN - 1ª SEMESTRE 2005**

- HOMBRES 259

- MUJERES 3.659

Fuente: Consejo General del Poder Judicial

□ **PERSONAS MUERTAS A MANOS DE SU PAREJA O EXPAREJA EN 2005**

- HOMBRES 8

- MUJERES 63

Fuente: Instituto Andaluz de la Mujer

La diferencia significativa de estos datos en función del sexo, justifican por tanto una actuación específica a favor de las mujeres, ya que son en un 89 % las víctimas de este tipo de delitos. Lo que hace pertinente al género el anteproyecto de Ley que se tramita.

Fruto de relaciones basadas en la desigualdad y la subordinación que las hacen sujeto de agravios, maltratos físicos y psíquicos, humillaciones, discriminaciones laborales, estereotipos sexistas, víctimas de agresiones,.....etc. En definitiva, las mujeres son una población objeto de una necesaria actuación pública que elimine esta situación de desigualdad, y su máxima manifestación, la violencia de género.

Estos datos sitúan a Andalucía según el número de denuncias en un índice de violencia - nº de denuncias por cada mil mujeres - en el 3,45. Y con una

113 / 07



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

tasa de muertes del 15,9, tras otras 8 Comunidades Autónomas, sin contabilizar País Vasco ni Cataluña.

La desagregación de datos por sexos, y los datos estadísticos pormenorizados por grupos de edad, relación con el autor del homicidio, por nacionalidad, etc....se detalla en documento adjunto **ANEXO 1**.

### **3.- MEDIDAS CORRECTORAS REGULADAS EN LA NORMA**

Ante esta realidad, fundada en datos estadísticos, procede articular un conjunto de medidas que aborden la problemática desde su origen hasta sus consecuencias.

En primer lugar, y con la finalidad de acrecentar la sensibilización y el conocimiento de este tipo de violencia se articulan medidas de:

- La creación de una **línea de estudio** par observar la efectividad del derecho de las mujeres a no sufrir violencia de género.
- Realización de **Investigaciones y estudios** relacionados con las causas, características y consecuencias de la violencia de género. Y también sobre la eficacia de los instrumentos jurídicos en vigor para la prevención, sanción y su interpretación.
- Implementación de un **Plan Integral de Sensibilización y Prevención contra la Violencia de Género**

En otro orden de cosas, nuestra Administración Autonómica mantiene competencias en los ámbitos Sanitario, Educativo, de fomento del Empleo y la Atención Social. Por tanto, puede establecer el contexto legal que propicie una actuación decidida que favorezca la prevención, la detección y facilite la normalización de las mujeres víctimas en estas áreas.



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

- Fundamentalmente medidas de actuación preventiva en el **ámbito educativo** a través de la Educación en Igualdad y el fomento de la no violencia en la resolución de conflictos.

Revisando los materiales e instrumentos curriculares de la educación obligatoria para que no se fomente entre el alumnado conductas discriminatorias hacia las mujeres. Y muy especialmente a través de los Medios de Comunicación y la Publicidad como agentes socializadores muy relevantes en la era actual de la Comunicación y las Tecnologías.

De los datos que se incluyen en el I Informe del **Observatorio de la Publicidad no sexista** del IAM, correspondientes al año 2005, se observa un incremento global de las quejas recibidas que supera el 100%, pasando de 49 a 101. Este aumento pone de manifiesto una mayor sensibilización de la población andaluza hacia los contenidos sexistas de los mensajes publicitarios y los estereotipos lanzados desde los medios de comunicación.

A partir de mayo, el incremento fue aún mayor coincidiendo con la puesta en marcha de un servicio interno de alerta sobre la publicidad emitida en los medios andaluces. De las quejas recibidas en el Observatorio, en el período 2004-2005, se han tramitado el 82% de las mismas.

Y con nuevas medidas en este sentido como el fomento en la Comunidad Autónoma de **Acuerdos de autorregulación de los medios de comunicación**.

Durante este último año 2005, se desarrollaron en nuestra Comunidad y coordinados por el IAM 10 nuevos cursos sobre violencia de género y su aplicación tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, dirigidos a diversos colectivos profesionales de la administración.



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

En este sentido el anteproyecto de ley establece la **Formación específica y continuada sobre violencia de género**, fundamentalmente en la Función Pública y en aquellos sectores que son más necesarios por su relación directa con las víctimas o por su papel fundamental en la prevención, como son el ámbito educativo, la Administración de Justicia, o los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

Y precisamente para velar por la **seguridad de las mujeres**, el anteproyecto de Ley recoge algunas medidas dirigidas a salvaguardar la integridad de las víctimas, intensificarán las acciones de coordinación de las policías en la atención a la violencia de género y con la creación de unidades especializadas dentro de la Policía Autonómica.

También en el área del **Bienestar Social**, cumple a nuestro gobierno el facilitar todos los recursos necesarios para atender las necesidades de información, atención y apoyo social a las mujeres víctimas de este tipo de violencia, prestando el apoyo psicosocial y de acogida que requieran.

Respetando siempre los derechos de las mujeres, como son:

- Derecho a la Información
- Derecho a la intimidad y protección de las víctimas
- y asegurando que los registros informáticos necesarios para una labor coordinada y eficaz garantice la intimidad y privacidad de las mujeres

El anteproyecto de Ley fija el marco legal para que la Administración de la Junta de Andalucía desarrolle una atención integral a las mujeres en situación de violencia de género o en riesgo de padecerla de acuerdo con las siguientes características:

1. Especializados y cuya atención se realice desde un enfoque de género.
2. De atención multidisciplinar que comprende:



Información, asesoramiento y seguimiento jurídico

Apoyo social

Atención psicológica

Apoyo a la inserción socio-laboral

Atención a los hijos e hijas que acompañan a las mujeres

### 3. Accesibilidad y proximidad.

Proponiendo acciones directas de:

- **Atención Psicológica.-**
- **Atención y Acogida a víctimas de violencia.-**
- **Atención Jurídica.-**

En el Título IV del anteproyecto se fijan los instrumentos para la **recuperación integral y de reparación del daño**. Se trata de instrumentos para paliar la situación de dependencia económica y real que experimentan las mujeres que padecen o han padecido violencia que les ayude a emprender una vida independiente y normalizada. Es el caso de un trabajo remunerado o una vivienda propia, en su caso, que impida su relación con el agresor. Para ello, y dado que en gran parte la mayoría de estas mujeres no gozan de una formación cualificada, es necesario acudir a los sistemas de formación ocupacional para facilitar la inserción laboral, solicitando también la colaboración del sector empresarial.

**Ayudas Económicas.-** La falta de recursos económicos impiden en muchos casos a las mujeres que sufren una situación de violencia de género, dar el paso de la denuncia a sus agresores e iniciar una vida libre y autónoma.

**Ayudas Escolares.-** incluyendo como factor de valoración la violencia de género en el entorno familiar, en la concesión y establecimiento de las ayudas que se destinen a familias con escasos recursos económicos,



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

especialmente en materia de guardería, materiales escolares, comedor y otros.

**Acceso a las viviendas de promoción pública.**- Se detecta en la población objeto de violencia de género la necesidad de vivienda para emprender una nueva vida normalizada y libre de violencia. Por ello y en el marco de la Política Pública de vivienda,

- se fomentará el acceso a viviendas públicas de este colectivo,
- se facilitará la posibilidad de realizar permutas

En el **Ambito Laboral** son varias las actuaciones proyectadas en la norma, tanto desde la perspectiva de prevención y detección del maltrato en el desarrollo de la actividad laboral, como la implicación de la empresa y las personas trabajadoras en el apoyo a la mujer que puede padecer violencia, con permisos, licencias o movilidad geográfica por este motivo, y el respeto a su intimidad personal.

Varias son las actuaciones en este sentido, desarrolladas por el Instituto Andaluz de la Mujer, dirigidas a mejorar la empleabilidad de las mujeres, al fomento de la actividad empresarial y a las relaciones igualitarias en el contexto laboral de las empresas, contando para ello con los Agentes Sociales.

En el anteproyecto de Ley se recogen varias medidas que responden a este objetivo, y que elevarán a rango de ley, compromisos que vienen siendo asumidos por el gobierno andaluz. Así:



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

- *Planes de formación para el empleo y programas de inserción socio-laboral.*
- *Incentivos a las empresas o entidades que contraten a mujeres afectadas por la violencia de género y a ellas mismas cuando se constituyan en trabajadoras autónomas.*
- *Asesoramiento formación y acompañamiento de sus proyectos empresariales.*
- *Campañas de concienciación y protección a la intimidad personal en el trabajo.*

#### **4.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO**

##### **4.1.- LA IGUALDAD OBJETIVO TRANSVERSAL DE LAS POLÍTICAS**

Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 139 de la Ley por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas para 2004 (BOJA núm.251 de 31 de diciembre), en todos los reglamentos se debe tener en cuenta de forma efectiva el objetivo de la igualdad por razón de género.

Como exponíamos al comienzo del Informe, la violencia de género constituye el principal obstáculo para alcanzar la igualdad real y efectiva para las mujeres. Es la más radical manifestación de la desigualdad entre mujeres y hombres, porque es la subordinación, el sometimiento a unas ideas y valores no propias y el papel secundario al que se ven relegadas, las causas que sirven de base a las conductas violentas que día a día van cimentando este tipo de violencia.



#### 4.2.- PARTICIPACIÓN PARITARIA EN ORGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN

Conforme a lo dispuesto al Art. 140 de la **Ley por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas para 2004** (BOJA núm.251 de 31.12.03), en todas las comisiones se tiene que tener en cuenta de forma efectiva la composición paritaria de los órganos consultivos y de asesoramiento de la Administración de la Junta de Andalucía. El presente Anteproyecto de Ley respetará este principio con la representación equilibrada en la composición de los órganos que se creen, salvo que la designación sea en función del cargo, a quién ostente la titularidad de un órgano específico.

- **Comisión Institucional de Coordinación de las Políticas Autonómicas y Locales sobre Violencia de Género**, con el objeto de coordinar e impulsar las medidas y acciones contra la violencia de género desarrolladas por las distintas Administraciones Públicas en la Comunidad Autónoma.

#### 4.3.- INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN INSTITUCIONAL

Así mismo se tendrán en cuenta en todo lo relativo a campañas de sensibilización y medidas publicitarias que se establecen en el proyecto de Ley lo establecido en la **Orden conjunta de 19 de febrero de 1993 de las Consejerías de la Presidencia y de Asuntos Sociales, por la que se dictan normas para el cumplimiento del principio de no discriminación por razón de sexo en el empleo de imágenes en la información y divulgación de la acción institucional de la Junta de Andalucía** (BOJA de 06.03.93),





#### 4.4.- LENGUAJE NO SEXISTA

Por otro lado, en el texto normativo se ha seguido lo establecido en la **Orden de 24 de noviembre de 1992, conjunta de la Consejería de Gobernación y de la Consejería de Asuntos Sociales, sobre la eliminación del lenguaje sexista en los textos y documentos administrativos** (BOJA núm. 126 de 05.12.1992), revisando la redacción y asegurando que el lenguaje utilizado facilite la visibilización de mujeres y hombres en todos los aspectos tratados. Siguiendo la recomendación de las reglas contempladas en la **Instrucción de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de Viceconsejeros para evitar un uso sexista del lenguaje en las disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía**.

No sólo en los aspectos lingüísticos, si no que además se ha revisado el texto sucintamente para que no se victimice a la mujer más de lo que ya lo es por ser el sujeto de este tipo de violencia, asegurando un lenguaje respetuoso con la intimidad y la dignidad de las personas.

#### 4.5.- ESTADÍSTICAS DESAGREGADAS POR SEXO

Por último, en cumplimiento del artículo 22, letra e) de la **Ley 8/2002 de 17 de diciembre del Plan Estadístico de Andalucía 2003-2006** (BOJA 154, de 31.12.02), se ha contemplado la necesidad de que cualquier fuente de información que maneje las distintas entidades o instituciones en aplicación de esta Ley deberá respetar la desagregación de datos por sexos, en la captura, archivo, tratamiento y difusión de los mismos.



## 5.- CONCLUSIONES

El anteproyecto de Ley de Medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género en Andalucía, se configura como un instrumento legal imprescindible ante la situación real que viven las mujeres en nuestro país, y en concreto en nuestra Comunidad Autónoma.

Su aprobación y publicación va en consonancia con el objetivo de remover los obstáculos que impiden la igualdad real y la no discriminación de las mujeres, porque la violencia de género es la más extrema forma de discriminación que sufren las mujeres, una vulneración de los derechos fundamentales de la persona, como son el atentado contra su dignidad, su integridad y su propia vida.

Sevilla, 6 de junio de 2006

14 / 07

Doc. 11



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

R E C E P T O	JUNTA DE ANDALUCÍA CONSEJERÍA DE CULTURA	
	22 FEB. 2006 924	
	Registro Auxiliar Dirección General de Bienes Culturales	Hora Sevilla

Fecha: 13 de febrero de 2006

Ref.: Dirección / EM/mm

Asunto: Informe Impacto de Género  
nº 6

**CONSEJERÍA DE CULTURA**  
**Dirección General de Bienes Culturales**  
**C/ Levies, nº 27**  
**41071 - SEVILLA**

**INFORME**  
**IAI**

S E V I L L A	JUNTA DE ANDALUCÍA CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	
	17 FEB. 2006 606	
	Registro General	Sevilla

En relación al proyecto de "**Anteproyecto de Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía**", con fecha de registro de entrada en este Instituto el pasado día 1 de febrero, adjunto le remito observaciones al Informe de Evaluación de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno.

**LA DIRECTORA**  
  
Soledad Ruiz Seguin



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

**OBSERVACIONES QUE EMITE EL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER  
SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE  
ANDALUCÍA REMITIDO POR LA CONSEJERÍA DE CULTURA.**

No compartimos la conclusión a la que se llega en el informe presentado sobre evaluación del impacto de género en cuanto a que no supone diferencias entre mujeres y hombres pues resulta ser:

**Pertinente al género**

☒

**No pertinente**

☐

El anteproyecto de ley que nos ocupa regula una materia que, tal y como se expresa en la carta presentada, afecta directamente a los y las titulares de bienes del Patrimonio Histórico Andaluz, y también indirectamente, a las y los distintos profesionales responsables de proyectos de conservación, intervenciones de emergencia, actuaciones arqueológicas y/o planeamiento urbanístico, así como a la población en general.

Por otro lado, los instrumentos, planes sectoriales y planes de ordenación deben contemplar en igual medida, la protección de los bienes declarados patrimonio histórico de Andalucía así como la garantía de que se respeta y/o se beneficia la calidad de vida de mujeres y hombres.

Vistas las alegaciones presentadas, y teniendo en cuenta la normativa de aplicación en relación con la Igualdad de Género, se realizan las siguientes observaciones:

1. El Decreto 93/2004 del 9 de marzo por el que se regula el informe de evaluación de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno (BOJA núm. 50 de 12.03.04), dispone en el Art. 4 que el informe de evaluación del impacto de género



Instituto Andaluz de la Mujer

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

deberá describir las diferencias existentes entre mujeres y hombres en el ámbito de actuación de las medidas que pretenden regular en la disposición de que se trate, **incluyendo datos desagregados por sexo**, recogidos en estadísticas oficiales, así como el **análisis del impacto potencial** que la aprobación de dichas medidas producirá entre las mujeres y hombres a quienes van dirigidas.

La obtención de datos desagregados por sexo permite analizar la realidad y valorar si lo previsto en la norma en cuestión atiende de forma igualitaria a las mujeres y los hombres a quienes afectan las medidas que se pretenden regular.

Así, algunos de los datos a recabar para visualizar la realidad de hombres y mujeres en relación con la materia que se regula son:

- Nº de mujeres y hombres propietarios, titulares de derecho y poseedores de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz.
  - Nº de hombres y mujeres que han dirigido las obras o intervenciones de conservación o restauración, intervenciones de emergencia y actuaciones arqueológicas.
  - Nº de hombres y mujeres afectados por la expropiación forzosa a favor de la conservación y/o protección de bienes declarados del Patrimonio Histórico Andaluz.
  - Nº de hombres y mujeres afectados por el planeamiento urbanístico de protección de los bienes declarados Conjuntos Históricos, Sitios Históricos, Lugares de interés Etnológico y Zonas patrimoniales.
- Condiciones de vida de uno y otro sexo.

De no contar con esta información, se sugiere inste al Departamento de Estadística de esa Consejería, o en su caso, al Instituto de Estadística de Andalucía, para que incluya y analice estos datos para próximas ocasiones, y proceda en cumplimiento del artículo 22, letra e) de la Ley



Instituto Andaluz de la Mujer

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

8/2002 de 17 de diciembre del *Plan Estadístico de Andalucía 2003-2006* (BOJA 154, de 31.12.02).

2. Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 139 de la *Ley por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas para 2004* (BOJA núm.251 de 31 de diciembre), en todos los reglamentos se debe tener en cuenta de forma efectiva el **objetivo de la igualdad por razón de género**, y en el anteproyecto de ley que nos ocupa no se incluye entre los objetivos la igualdad por razón de sexo.

3.

Así, a partir de lo dispuesto, se sugiere la inclusión de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como objetivo y criterio de calidad transversal, atendiendo al impacto positivo que tiene la inclusión de esta dimensión en la disminución de las desigualdades que se producen entre ambos sexos. Las fórmulas posibles son dos:

- a) Añadir un nuevo artículo que recoja la igualdad de oportunidades de la forma siguiente:

*La presente ley tendrá en cuenta de modo transversal el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todo el articulado afectado por el mismo.*

- b) Incluir la igualdad de oportunidades en cada uno de los siguientes artículos:

**Artículo 22. Contenido del Proyecto de conservación.** En coherencia con el principio de Igualdad de Oportunidades y en base a la información que se desprende de los datos desagregados, se podría añadir, entre los contenidos mínimos que deben recoger este tipo de proyectos, *indicadores que permitan valorar el impacto de género en la población, hombres y mujeres, afectados por las obras o intervenciones de conservación.* Así mismo, se debería poner de manifiesto la composición



Instituto Andaluz de la Mujer

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

*de las personas responsables de su ejecución, valorando positivamente la presencia equilibrada de hombres y mujeres en el mismo en todas las categorías profesionales.*

**Artículo 29. Informe de instrumentos de ordenación y planes sectoriales.** Estos documentos, además de identificar los elementos patrimoniales existentes, estableciendo una ordenación compatible con su protección y disfrute, debería contener, sin menoscabo de lo anteriormente mencionado, *un informe de impacto de género donde se ponga de manifiesto que se garantiza la actividad, desenvolvimiento, la calidad de vida y la seguridad de ambos sexos por igual.*

**Artículo 31. Contenido de protección de los planes.** Al igual que en el art. 29, entre los mínimos se debería hacer explícito, *el posible impacto que estos planes puede generar en la vida de hombres y mujeres así como, en su caso, las medidas correctoras para su subsanación.*

**Artículo 40. Delegación de competencias en entornos.** Del mismo modo que para delegar competencias en los Ayuntamientos en materia de Patrimonio Histórico, se precisa suficiente regulación en el planeamiento urbanístico de los entornos de bienes de interés cultural, se podría hacer explícito, *la necesidad de que las corporaciones municipales contemplen la dimensión de género en dicho planeamiento urbanístico en coherencia con el logro de la igualdad real entre ambos sexos.*

**Artículo 48. Declaración de Zona de Servidumbre Arqueológica.** Se podría añadir un punto más donde se ponga de manifiesto que la declaración de Zona de Servidumbre Arqueológica, *además de incluir medidas específicas de protección de sus valores, llevará aparejado un informe de impacto de género así como, en su caso, las medidas correctoras oportunas.*



Instituto Andaluz de la Mujer

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

**Artículo 63. Especial protección.** La declaración de prácticas, saberes y otras experiencias culturales como actividades de interés etnológico, *se deberían hacer siempre y cuando estas no perpetúen el rol de género o redunden en la desigualdad entre hombres y mujeres.* Así mismo, *se debería promover acciones específicas que permitan rescatar las prácticas, saberes y experiencias culturales protagonizada por las mujeres y que supongan una contribución social y cultural.*

*Por otro lado, los estudios e investigaciones que se promuevan deberían llevar integrada la dimensión de género.*

**Artículo 74. Sistema de Bibliotecas y Centros de Documentación y artículo 75 Concepto de Museos.** El registro cultural y de información, así como los recursos bibliotecarios y documentales de las bibliotecas y centros de documentación; junto con el orden y documentación de los bienes culturales o naturales, muebles o inmuebles de los museos, *deben recoger información desagregada por sexo sobre la autoría de los mismos, siempre que ello sea posible y proceda.* Ello, facilitaría la elaboración de estadísticas para su posterior análisis de género.

*En el caso de las bibliotecas y centros de documentación, se podrían articular las medidas necesarias para la adquisición y difusión de recursos bibliotecarios y documentales elaborados por uno y otro sexo, garantizando así la presencia equilibrada de ambos sexos y visibilizando en especial, la aportación de las mujeres en todas las áreas y ámbitos culturales.*

4. En todas las comisiones se tiene que tener en cuenta de forma efectiva la **composición paritaria de los órganos consultivos** y de asesoramiento de la Administración de la Junta de Andalucía de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 140 de la *Ley por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas para 2004* (BOJA núm.251 de 31.12.03).





Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

En este sentido, felicitamos la inclusión de la paridad en el **artículo 101**, sobre los órganos consultivos centrales y periféricos. En cuanto a Comisión técnica Municipal referida en el **artículo 30**, si bien dicha ley no afecta a su composición, *sugerimos, en coherencia con el compromiso con la igualdad por razón de género, hacer explícita la recomendación del principio de composición paritaria en el presente artículo.*

5. De acuerdo con la *Orden de 24 de noviembre de 1992, conjunta de la Consejería de Gobernación y de la Consejería de Asuntos Sociales, sobre la eliminación del lenguaje sexista en los textos y documentos administrativos* (BOJA núm. 126 de 05.12.1992), se hace necesario revisar la redacción asegurando que el **lenguaje** utilizado facilite la visibilización de mujeres y hombres en todos los aspectos tratados.

Siguiendo la recomendación de las reglas contempladas en la *Instrucción de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de Viceconsejeros para evitar un uso sexista del lenguaje en las disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía*, se hacen las siguientes observaciones:

- Cuándo se mencione a lo largo del texto un nombre empleando el género gramatical masculino como universal deberá sustituirse por la mención expresa también del femenino o se buscará una expresión que incluya a ambos sexos. Por ejemplo:

del promotor/ el promotor → entidad, organismo o persona promotora  
funcionarios → personal funcionario, funcionariado, "funcionarios, hombres y mujeres"

los propietarios o poseedores → personas propietarias o poseedoras, quienes tengan la titularidad o posean...

los registradores → personal registrador

los investigadores → las personas investigadoras, quienes investigan,  
las mujeres y hombres investigadores

los destinatarios → las personas destinatarias  
los subastadores → quienes subasten  
técnico → técnico o técnica, persona técnica  
del interesado → persona interesada  
la historia del hombre → historia de la humanidad, historia del ser humano  
los alcaldes → la alcaldía, quienes ostentan la alcaldía, titulares de alcaldía  
los arqueólogos → profesionales de arqueología, las mujeres y hombres arqueólogos  
director → Dirección, titular de la dirección

- Cuando se haga uso de términos que no llevan marca de género, es necesario observar los artículos o determinantes que lo acompañan pues estos le atribuyen la marca de género que por sí mismo no poseen:  
los titulares/ del titular → las y los titulares, la(s) persona(s) titulares  
los agentes → las y los agentes, el personal agente, las mujeres y hombres agentes  
los particulares → las y los particulares  
al responsable → a la persona responsable

6. Conforme a la *Orden conjunta de 19 de febrero de 1993 de las Consejerías de la Presidencia y de Asuntos Sociales, por la que se dictan normas para el cumplimiento del principio de no discriminación por razón de sexo en el empleo de imágenes en la información y divulgación de la acción institucional de la Junta de Andalucía* (ORDEN de 06.03.93), se debería recoger y tener presente dicho objetivo de un modo explícito en el **artículo 6. Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, artículo 51. Actuación Administrativa, artículo 63. Especial Protección, artículo 79. Funciones y artículo 89. Porcentaje para la conservación del presente borrador, pudiendo quedar redactado, por ejemplo, del siguiente modo:**

**Artículo 6. catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.** Se podría añadir un punto más donde se pondrá de manifiesto que *se tendrá en cuenta el cumplimiento del principio de no discriminación por razón de sexo en aquellas campañas de información y divulgación que se lleven a cabo.*

**Artículo 51. Actuación Administrativa.** Igualmente, se podría añadir un punto tras el apartado 1 donde se informará que *en cumplimiento con la orden conjunta de 19 de febrero de 1993, las actividades de difusión respetarán el principio de no discriminación por razón de sexo en el empleo de imágenes.*

**Las conclusiones** según las observaciones efectuadas en relación con el impacto de género en el **Proyecto de Decreto** son:

- Que para valorar el impacto del presente anteproyecto de ley en el logro efectivo de la igualdad de género, es necesario tener en cuenta el rol de género y los desequilibrios que éste genera entre las mujeres y los hombres titulares de bienes declarados Patrimonio Histórico Andaluz así como entre las y los profesionales implicados en la toma de decisiones y ejecución de proyectos de conservación, intervenciones de emergencia, actuaciones arqueológicas y/o planeamiento urbanístico.
- Igualmente, para valorar el impacto de género es necesario contemplar las repercusiones que sobre la vida de hombres y mujeres tienen los planes sectoriales y planes urbanísticos, así como las medidas correctoras que se introducen en estos a fin de conservar y proteger el patrimonio.
- Que se debe introducir el objetivo de la igualdad de género en todo el articulado afectado por el mismo.
- Que se puede recomendar la tendencia a la paridad en las comisiones técnicas municipales.
- Que se debe adaptar a un uso no sexista del lenguaje.

14 / 07

- Que se debe hacer explícito en todas las actuaciones de difusión que en el caso de hacer uso de imágenes, estas respetaran el principio de no discriminación por razón de sexo.

Sevilla, 13 de febrero de 2006



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

DOC 4

D.60

16 / 07

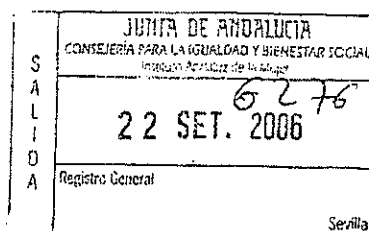
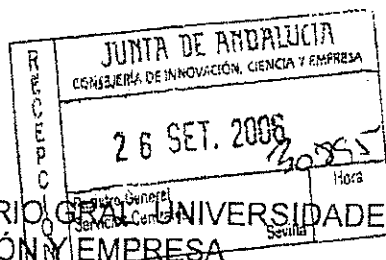
INFORME  
IAM

Fecha: 21 de septiembre de 2006

Asunto: Informe Impacto Genero

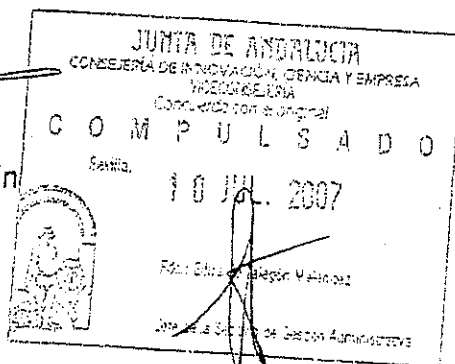
Ref.: EMB/ Impacto 06-64

SECRETARÍA DE UNIVERSIDADES,  
INNOVACIÓN Y EMPRESA  
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN  
C/ Albert Einstein s/n  
41071 SEVILLA



Adjunto le remito Informe de Observaciones al Informe de Evaluación del Impacto de Género recibido el pasado mes de agosto de 2006, del "Anteproyecto de Ley de la Ciencia y la Innovación para la Sociedad del Conocimiento en Andalucía" conforme a lo establecido en el Decreto 93/2004, de 9 de marzo, por el que se regula el informe de evaluación de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno.

LA DIRECTORA  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
Instituto Andaluz de la Mujer  
JUNTA DE ANDALUCÍA  
C.I.F. Q91500120  
A. Soledad Ruiz Seguirín





Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

**OBSERVACIONES QUE EMITE EL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER  
AL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO REMITIDO POR  
LA CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA SOBRE EL  
ANTEPROYECTO DE LEY DE LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN PARA LA  
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.**

Valoramos muy positivamente que se haya contemplado por el órgano gestor promotor de la norma, en el título cuarto, capítulo IV del anteproyecto, la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.

No obstante, la ordenación del Sistema Andaluz de I+D+I para el desarrollo de la Sociedad de Conocimiento es pertinente al género no solamente en lo referido a los recursos humanos, sino también en lo referido a todas las disposiciones generales que se definen en la propia ley; en el conjunto de medidas, actividades, criterios, y recursos que se proponen; y también en la propia regulación de la estructura del Sistema Andaluz del Conocimiento.

De este modo, podemos adivinar como la ley afectará a las personas trabajadoras en los ámbitos de la Ciencia, Tecnología e Innovación, a la población potencial que puede beneficiarse del desarrollo del Sistema Andaluz del Conocimiento (profesionales, empresariado, etc) y a la población, hombres y mujeres objetos y sujetos de estos ámbitos.

Por todo ello, el anteproyecto de Ley que se propone aprobar, se puede afirmar que es, en su globalidad:

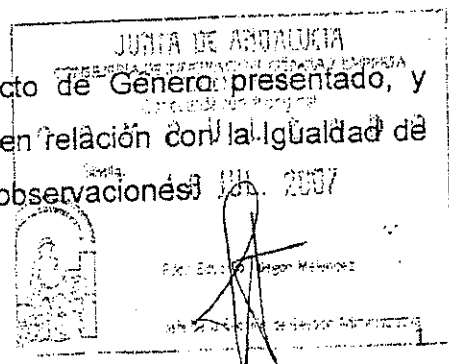
Pertinente al género



No pertinente



Así, visto el Informe de Evaluación de Impacto de Género presentado, y teniendo en cuenta la normativa de aplicación en relación con la Igualdad de Género (ver **Anexo**), se realizan las siguientes observaciones:





Instituto Andaluz de la Mujer

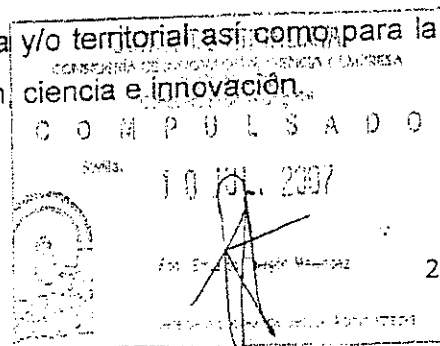
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

1. El Decreto 93/2004 del 9 de marzo por el que se regula el informe de evaluación de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que aprueba el Consejo de Gobierno (BOJA núm. 50 de 12.03.04), dispone en el Art. 4 que el informe de evaluación del impacto de género deberá describir las diferencias existentes entre mujeres y hombres en el ámbito de actuación de las medidas que pretenden regular en la disposición de que se trate, **incluyendo datos desagregados por sexo**, recogidos en estadísticas oficiales, así como el **análisis del impacto potencial** que la aprobación de dichas medidas producirá entre las mujeres y hombres a quienes van dirigidas.

Si bien los datos aportados en el informe hacen una aproximación mínima y acertada a la realidad de las mujeres y hombres que están participando en la actividad científica, estos son insuficientes para valorar el impacto de género que la presente normativa tiene directa e indirectamente en hombres y mujeres.

Así, en relación con la materia que se regula, otros datos a recabar desagregados por sexo serían:

- Nº de mujeres y hombres investigadores y/o científicos, según los agentes de conocimiento identificados. Características por sexo (condiciones laborales, desarrollo profesional, áreas de trabajo, etc...).
- Presencia de hombres y mujeres en los órganos de decisión de las empresas y organismos públicos relacionados con la investigación, la ciencia y la empresa.
- Nº y grado de participación de mujeres y hombres en las redes, plataformas y otras estructuras de participación actual del personal investigador, científico y de innovación.
- Nº de mujeres y hombres que se han beneficiado de ayudas u otros recursos para la movilidad geográfica y/o territorial así como para la formación en materia de investigación y/o territorial así como para la ciencia e innovación.





Instituto Andaluz de la Mujer

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

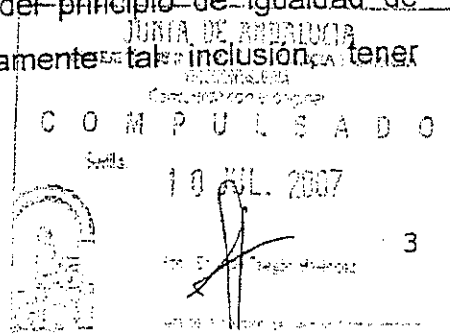
- Nº de hombres y mujeres que están al frente de empresas ligadas a la investigación, la ciencia y la innovación según tipo de empresa y área de trabajo. Condiciones y nivel de responsabilidad de las mujeres y los hombres que conforman la plantilla de estas empresas.
- Iniciativas empresariales que se han beneficiado de algún tipo de ayudas en el ámbito de la investigación, la ciencia y la innovación según sexo y tipo de ayuda.
  - Mujeres y hombres presentes en las actividades y productos de gran difusión relativos a la ciencia y los avances científicos.

La información que pudiera arrojar estos datos, permitiría identificar y analizar mejor y de forma más completa los posibles desequilibrios entre ambos sexos y valorar si lo previsto en toda la norma, atiende de forma igualitaria a las mujeres y los hombres a quienes afecta.

De no contar con esta información, se sugiere inste al Departamento de Estadística de esa Consejería, o en su caso, al Instituto de Estadística de Andalucía, para que incluya y analice estos datos para próximas ocasiones, y proceda en cumplimiento del artículo 22, letra e) de la *Ley 8/2002 de 17 de diciembre del Plan Estadístico de Andalucía 2003-2006* (BOJA 154, de 31.12.02).

2. Por otra parte, en todos los reglamentos se debe tener en cuenta de forma efectiva el **objetivo de la igualdad por razón de género**, según lo dispuesto en el Art. 139 de la *Ley por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas para 2004* (BOJA núm.251 de 31 de diciembre).

En relación con la presente ley, una vez más felicitamos al centro directivo dada la inclusión que ha realizado en el presente decreto en el **título cuarto, capítulo IV, artículo 72 del principio de Igualdad de Oportunidades**. Valorando muy positivamente **tal inclusión**.





16 / 07



Instituto Andaluz de la Mujer

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

presente de forma efectiva el objetivo de la igualdad de género debe conllevar además, las siguientes observaciones:

- a) **Título preliminar: disposiciones generales.** Es necesario *hacer explícito el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el objeto, fines, principios y objetivos sobre los que se sostiene el resto de los aspectos que se regulan en la normativa.* Ello, se debería hacer, bien introduciendo un nuevo artículo o bien, un nuevo apartado en el **artículo 1**, donde se exponga:

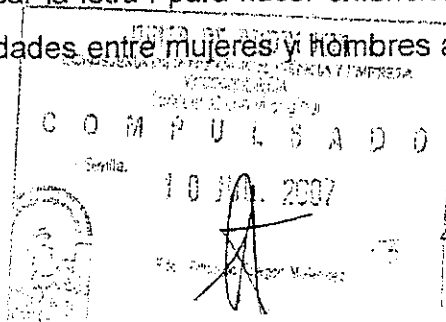
*Se tendrá en cuenta de forma efectiva el objetivo de la igualdad por razón del género en la aplicación y desarrollo de la presente norma, conforme a lo establecido en el artículo 139 de la Ley 18/2003, 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas.*

Además de esto, el objetivo de la igualdad se debe expresar en los **artículos 1, Objeto; 2, Fines; 4, Principios Informadores del Sistema Andaluz del Conocimiento (I+D+I); y 5, Objetivos.**

Así, por ejemplo, en el **artículo 1.1** se puede decir: La presente ley tiene por objeto la regulación de la Ciencia, la Tecnología, y su puesta en valor a través de la Innovación, para promover, *con equidad de género*, la generación, desarrollo y aprovechamiento compartido del conocimiento...

En el **artículo 2** se puede visibilizar añadiendo un tercer apartado que exprese: *Los fines y premisas mencionadas están a travesadas por el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en aras del logro efectivo de la igualdad de género.*

En el **artículo 4**, habría que modificar la letra f para hacer extensivo el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a





Instituto Andaluz de la Mujer  
**CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL**  
 toda la ley: *Principio de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de forma transversal.*

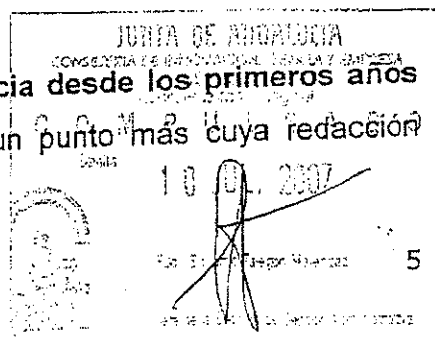
En el **artículo 5**, se puede añadir un nuevo apartado que recoja lo siguiente: *Para garantizar el logro de la igualdad, el cumplimiento de los objetivos anteriormente señalados llevará integrada la perspectiva de género.*

- b) **Título primero: el conocimiento al servicio de la ciudadanía y la sociedad.** Además de la mención a la no discriminación en el **artículo 7.4.a**, los contenidos recogidos en los artículos que están bajo este título son todos pertinentes al género. Por ello, se debe hacer explícito la necesidad de garantizar el logro de la igualdad en cada uno de los aspectos tratados en la normativa. Para ello, se debería ir haciendo explícito, por ejemplo, del siguiente modo:

**Artículo 7. El conocimiento como bien público.** Modificando el apartado 1 como sigue: El conocimiento, como bien público común, está al servicio de la ciudadanía y la sociedad. En consecuencia, la información científica deberá divulgarse con la mayor amplitud para la ciudadanía, *garantizando el acceso igualitario de hombres y mujeres a la misma así como un estilo de difusión no sexista tanto en su forma como en su contenido.*

**Artículo 8. La sensibilización sobre el Sistema Andaluz del Conocimiento (I+D+I).** Añadiendo un apartado más donde se exponga: *Con objeto de garantizar el logro efectivo de la igualdad entre ambos sexos, todas las medidas arriba señaladas, integrarán la perspectiva de género desde su diseño y planificación pasando por la ejecución y evaluación de las mismas.*

**Artículo 9. El interés por la ciencia desde los primeros años de vida.** Igualmente, añadiendo un punto más cuya redacción





Instituto Andaluz de la Mujer

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

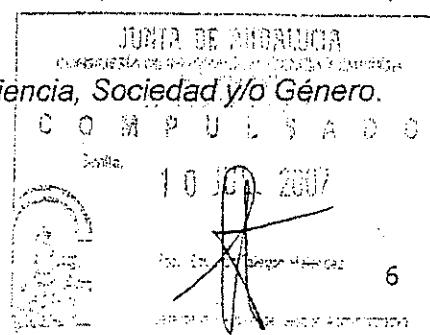
sería similar a la ejemplificada en el artículo anterior (art. 8) o modificando cada una de las medidas del modo siguiente:

- a) Incidir en el medio educativo definiendo programas *coeducativos* de apoyo en materia de formación experimental...
- b) Fomentar una cultura *no androcéntrica* de la ciencia, la tecnología e innovación como fuente de desarrollo, estimulando *en la misma medida* la curiosidad, creatividad y la innovación *de niños y niñas* en la realización de proyectos...
- c) Crear un Red *coeducativa* de Espacios Científicos *para las niñas y niños* menores de edad, que les permita iniciarse en la importancia de la ciencia....

**Artículo 10. La divulgación de las actividades del Sistema Andaluz del Conocimiento (I+D+I).** Añadiendo un cuarto apartado que diga: *Todas la medidas de divulgación previstas llevaran integrada la perspectiva de género, garantizando una difusión libre de sexismo tanto en su estilo como en los contenidos y un acceso igualitario del personal investigador, sea implicado o beneficiario de las actuaciones, así como de otros y otras profesionales y de los hombres y mujeres que conforman la ciudadanía.*

**Artículo 12. El fomento de la confianza de la ciudadanía en la ciencia y la investigación.** Se podría modificar la redacción de las acciones como sigue:

- a) ...y sean responsables frente a sus posibles consecuencias, *tanto para mujeres como para hombres*, así como para la vida en nuestro planeta.
- b) Promover investigaciones sobre las implicaciones sociales y *de género* de la ciencia.
- c) Crear nuevos espacios...sobre *Ciencia, Sociedad y/o Género.*





Instituto Andaluz de la Mujer

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

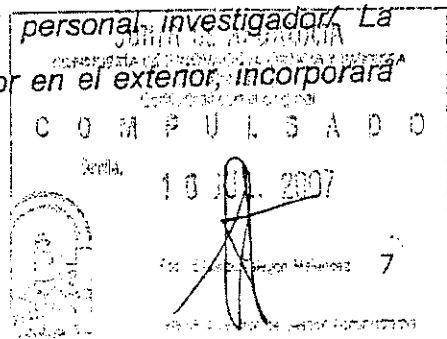
d) ...formación y sensibilización del personal investigador por los asuntos de ámbito social y de género y su vinculación con la sociedad, *las mujeres y los hombres*, a la que sirve y para la que investiga.

c) **Título segundo: el conocimiento al servicio del desarrollo de la economía; hacia la economía del conocimiento. Capítulo I: La investigación y la generación de conocimiento.** Al igual, que el título primero, *todos los artículos correspondientes a este capítulo son pertinentes al género*, por lo que se hace necesario explicitarlo en cada uno de los aspectos contemplados del modo siguiente:

Introduciendo un nuevo artículo tras el **artículo 15** que diga: *El fomento de la investigación científica y la innovación, así como los criterios de ordenación de la investigación en Andalucía, en coherencia con el logro efectivo de la igualdad, llevarán integrada la perspectiva de género.*

Introduciendo otro artículo tras el **artículo 18** que exprese: *En aras del logro efectivo de la igualdad entre mujeres y hombres, se realizarán análisis previos de impacto de género que permitan verificar que las medidas destinadas a fortalecer la producción científica y a promover una mayor generación de conocimiento; la definición de las áreas relevantes en investigación; y la creación de redes e infraestructuras de colaboración accesibles al personal investigador contribuyen a reducir las desigualdades existentes por razón de género.*

Añadiendo un apartado más en los **artículo 19 y 20** que señale: *La promoción de la movilidad del personal investigador. La participación del personal investigador en el exterior, incorporará*





16 / 07

INFORME

IAM

Instituto Andaluz de la Mujer

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

*cuantas medidas compensatorias estime oportunas afín de promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.*

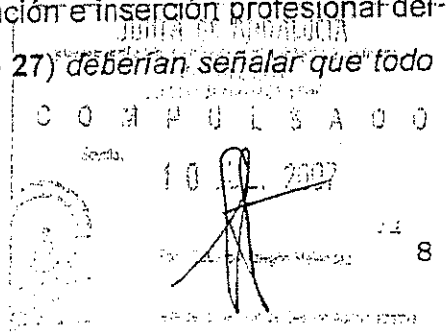
Modificando el apartado primero del **artículo 21**: El Sistema Andaluz del Conocimiento (I+D+I) estará basado en una cultura de proyectos *que integre la dimensión de género*, de modo que....

Añadiendo un nuevo apartado en el **artículo 22** que exponga: *las medidas anteriormente mencionadas llevarán integrada la perspectiva de género.*

d) **Título II, Capítulo II: El aprovechamiento compartido del conocimiento y Capítulo III: La cooperación entre la industria del conocimiento y las empresas andaluzas y los organismos públicos.** Una vez mas, todos los artículos son pertinentes al género y por tanto, en su formulación se debe garantizar que tienen un impacto positivo en la igualdad.

Así, en las medidas que responden a objetivos relacionados con la colaboración, cooperación u otros fines similares mediante la creación de redes, plataformas u otra estructura de comunicación entre personas o entidades (**artículos 23, 26, 29, 30, 31 y 32**), *se debería señalar que llevarán integrada la dimensión de género y garantizarán el acceso y la participación equitativa de hombres y mujeres a la estructura indicada.*

Por otro lado, los objetivos y las acciones destinadas al impulso de nuevas iniciativas o practicas empresariales, al estímulo de la participación empresarial, a la formación emprendedora y la creación y desarrollo de empresas (**artículos 23, 24, 25, y 28**) así como, a la incorporación, estabilización e inserción profesional del personal de investigación (**artículo 27**) *deberían señalar que todo*





Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
*ello se realizará garantizando el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.*

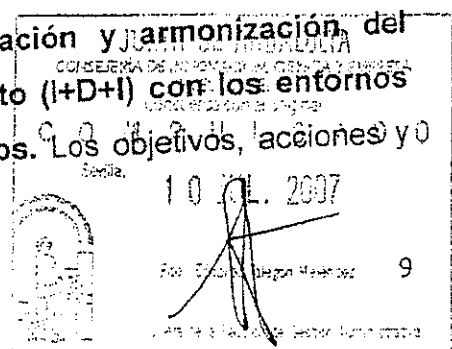
El modo de hacerlo explícito sería similar al ejemplificado en los capítulos anteriores del Título II, es decir, bien añadiendo un apartado o modificando la redacción allí donde es necesario en cada artículo afectado, o bien añadiendo un nuevo artículo en cada capítulo donde se exponga que *todos los objetivos y medidas que en el se recogen están atravesados por el principio de igualdad de oportunidades y la dimensión de género.*

e) **Título II, Capítulo IV: El conocimiento al servicio de la paz y la lucha contra la pobreza.**

**Artículo 33. El conocimiento como vector de lucha contra la pobreza.** En coherencia con el logro de la igualdad, la plataforma a la que se alude en el apartado 1 debería ir dirigida a reducir la pobreza, la exclusión social y la desigualdad por razón de género. Igualmente, las funciones descritas en el apartado 2, deben señalar que van encaminadas a luchar o reducir la desigualdad por razón de género así como a concienciar e involucrar a la ciudadanía y a los diferentes agentes sociales en la reducción de la brecha de género a través del fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico compartido.

**Artículo 34. El conocimiento como factor de fomento de paz.** Modificar la redacción añadiendo al final del párrafo: ...para incidir en las causas y los efectos de los conflictos sobre la base de una cultura de paz e igualdad.

f) **Título III, Capítulo I: La articulación y armonización del Sistema Andaluz del Conocimiento (I+D+I) con los entornos autonómicos, estatales y europeos. Los objetivos, acciones y o**





Instituto Andaluz de la Mujer

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

medidas descritas en los **artículos 35 y 38** (salvo la actividad recogida en el apartado 1.e de este último) son pertinente al género, por tanto, debería explicitarse su contribución al logro de la igualdad. Para ello, se podría añadir al final de la redacción del artículo 35.2: *La planificación, desarrollo y evaluación de estas acciones se llevarán a cabo integrando la dimensión de género y el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres*. De forma similar, se debería añadir una cuarto apartado en el artículo 38 que haga explícito la necesidad de *integrar la perspectiva de género y garantizar el principio de igualdad de oportunidades en las actividades descritas*.

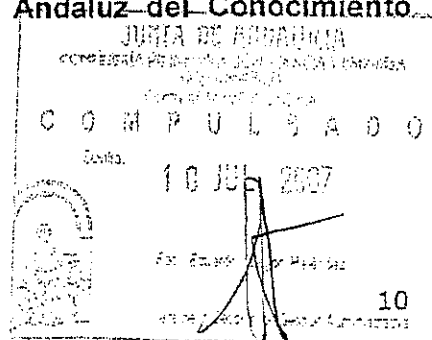
**g) Título III, Capítulo II: La participación de las Corporaciones Locales en el Sistema Andaluz del Conocimiento (I+D+I),**

**Artículo 42.1. Fomento de las Ciudades del Conocimiento.**

Modificar la redacción añadiendo al final del párrafo: *...como soporte y espacio de organización de una ciudadanía innovadora e igualitaria*.

**Artículo 43. Contribuciones de la Junta de Andalucía.** Se debería sumar un nuevo apartado donde se diga: *Relacionado con lo expuesto en los dos apartados anteriores, la Junta de Andalucía impulsará y favorecerá preferentemente, las iniciativas locales que integren la dimensión de género y/o garanticen el principio de igualdad de oportunidades*.

**h) Título IV: La estructura del Sistema Andaluz del Conocimiento (I+D+I), Capítulo 1: La organización de la Junta de Andalucía sobre el Sistema Andaluz del Conocimiento (I+D+I).**



16 / 07



Instituto Andaluz de la Mujer

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

**Artículo 45. La Consejería competente en materia de I+D+I.**

Añadir al final un párrafo que diga: *La Consejería competente velará por el cumplimiento del logro de la igualdad en el desarrollo de las funciones asignadas.*

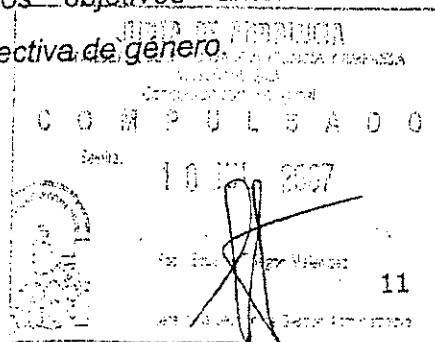
**Artículo 51.1. Fomento del trabajo cooperativo.** Añadir: *El sistema de trabajo cooperativo se potenciará atendiendo al principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.*

**Artículo 52. La adaptación de las empresas públicas al Sistema Andaluz del Conocimiento (I+D+I).** Añadir un cuarto apartado donde se especifique que *la adaptación de la organización de las empresas públicas debe realizarse incluyendo, donde se estime necesario, la igualdad de oportunidades entre ambos sexos y la integración de la dimensión de género.*

i) **Título IV: La estructura del Sistema Andaluz del Conocimiento (I+D+I). Capítulo 2: La planificación de la investigación, desarrollo e innovación en Andalucía.**

**Artículo 53.2. El Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación.** Añadir: *El plan incorporará una perspectiva sistémica y de género que integre a todos los agentes...para generar riqueza a través de la innovación y equidad de género a través de la integración de la dimensión de género de forma transversal.*

**Artículo 54. Objetivos del Plan.** Señalar tras los objetivos específicos que se relacionan que *para garantizar el logro de la igualdad, el cumplimiento de los objetivos anteriormente señalados llevará integrada la perspectiva de género.*





16 / 07



Instituto Andaluz de la Mujer

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

**Artículo 55. 2. Estructura del Plan.** Entre los elementos que debe integrar el Plan se debería añadir un *informe de impacto de género que de cuenta de los avances obtenidos en el logro efectivo de la igualdad en los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la Innovación.*

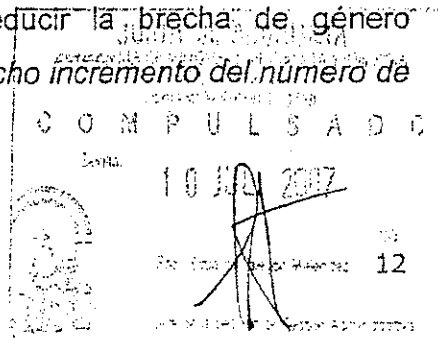
- j) **Título IV: La estructura del Sistema Andaluz del Conocimiento (I+D+I). Capítulo III: La gestión del Sistema Andaluz del Conocimiento (I+D+I).**

**Artículo 58. Los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento.** Añadir un nuevo apartado entre el segundo y el tercero donde se haga explícito *que todos los agentes mencionados, velarán por el logro efectivo de la igualdad de género en el ejercicio de sus competencias.*

**Artículo 68.2 El registro de los agentes del conocimiento.** Se debería poner de manifiesto que en todos los casos *se registrará el número de personas, hombres y mujeres, que conforman el personal de investigación, participan en los espacios tecnológicos y del conocimiento, en las plataformas de aprovechamiento compartido, etc. Con ello se obtiene información desagregada por sexo para la elaboración posterior de estadísticas y análisis de género.*

- k) **Título IV: La estructura del Sistema Andaluz del Conocimiento (I+D+I). Capítulo IV: Las personas de la ciencia, tecnología e innovación.**

**Artículo 71. 2 Reconocimiento social de la función investigadora.** Con objeto de reducir la brecha de género existente, *se debería señalar que dicho incremento del número de*



16 / 07



Instituto Andaluz de la Mujer

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

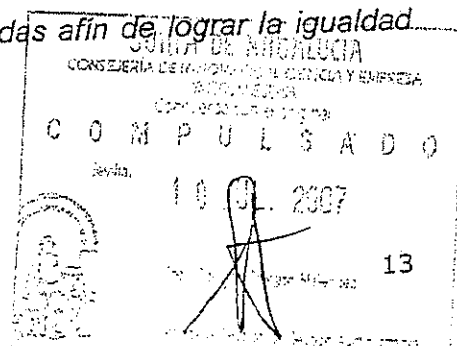
*personas implicará a adopción, en los casos oportunos, de medidas correctoras de acción y/o discriminación positiva.*

**Artículo 72.2 La igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres en la ciencia.** Comentar que la aplicación del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres siempre es *en igualdad de condiciones* por lo que su operatividad no debería en ningún caso menoscabar criterios como la calidad, la competencia o la excelencia investigadora. De ser así, no se cumple el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

**Artículo 73. La juventud en la ciencia.** La promoción de la juventud en una carrera investigadora debería *garantizar la igualdad de oportunidades así como llevar integrada la perspectiva de género*. Ello se hará explícito, como en otros artículos, tras la enumeración de las medidas.

**Artículo 75. Principio de responsabilidad: derechos y deberes del personal investigador.** Garantizar la igualdad de oportunidades es algo más que conciliar la vida familiar y laboral contemplada en la letra c del apartado 1, por lo que se podría añadir un tercer apartado indicando que *el principio de igualdad de oportunidades recorrerá de manera transversal todos los derechos y deberes mencionados a fin de avanzar en el logro efectivo de la igualdad entre mujeres y hombres*.

**Artículo 78. La remuneración.** Dada la brecha salarial existente entre mujeres y hombres, debería hacerse explícito que el *principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres prevalecerá sobre las pautas indicadas afin de lograr la igualdad salarial entre ambos sexos*.





Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
Título IV: La estructura del Sistema Andaluz del  
Conocimiento (I+D+I). Capítulo V: Los recursos al servicio del  
Sistema Andaluz del Conocimiento (I+D+I).

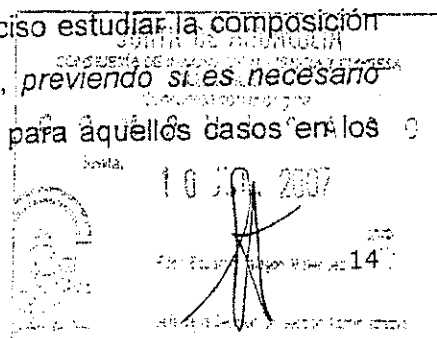
**Artículo 83. Los incentivos y las becas.** Añadir a los principios de publicidad, eficacia, transparencia y control el de la igualdad de oportunidades.

**Artículo 87. LA evaluación del Sistema Andaluz del Conocimiento (I+D+I).** Sumar a los principios indicados en el apartado 2, la evaluación del impacto de género.

3. En todas las comisiones se debe tener en cuenta la **composición paritaria de los órganos** consultivos y de asesoramiento de la Administración de la Junta de Andalucía de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 140 de la Ley por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas para 2004 (BOJA núm.251 de 31.12.03).

Así, nos congratula observar su consideración en los artículos 76.b y 11 de la presente ley. No obstante, como tal, la paridad es una estrategia que permite hacer efectivo el objetivo de la igualdad por razón de género al que nos obliga la norma según el art. 139 mencionado anteriormente. Por ello, recomendamos señalar que se tienda a su cumplimiento en la creación de los *Comités de Ética (artículo 13)*, en la formación de los *Equipos multidisciplinares e interdisciplinares (artículo 15.d)*, en la constitución de los *Consejos Locales del Conocimiento (artículo 41.1)*, en la creación de la plataforma dirigida a reducir la pobreza y la exclusión social (*artículo 33*) y en la *Comisión Interdepartamental de Investigación, Innovación y la Sociedad del Conocimiento (artículo 46)*.

Para respetar el principio de paridad es preciso estudiar la composición global que conforman este tipo de órganos, *previendo si es necesario medidas compensatorias de acción positiva para aquellos casos en los*





Instituto Andaluz de la Mujer

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

que hay una gran número de titulares, pues es un hecho comprobado que las mayoría de las Direcciones Generales de la Junta de Andalucía están ocupadas por hombres.

4. Por otro lado, felicitamos a la Dirección por el esfuerzo realizado en la **redacción no sexista** de la normativa de acuerdo con la Orden de 24 de noviembre de 1992, conjunta de la Consejería de Gobernación y de la Consejería de Asuntos Sociales, sobre la eliminación del lenguaje sexista en los textos y documentos administrativos (BOJA núm. 126 de 05.12.1992).

No obstante, no se ha sido sistemático a lo largo de todo el texto, apareciendo expresiones sexistas y no sexistas en torno a un mismo concepto. Por ello, con la intención de perfeccionar aún más un uso integrador e igualitario del lenguaje y, siguiendo la recomendación de las reglas contempladas en la Instrucción de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de Viceconsejeros para evitar un uso sexista del lenguaje en las disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía, se hacen puntualmente las siguientes recomendaciones:

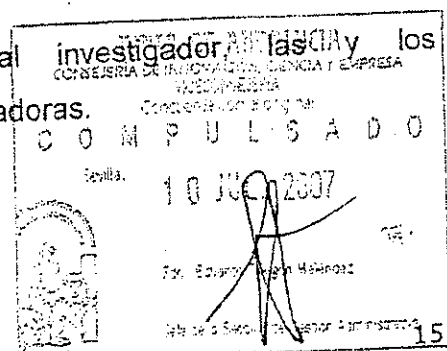
- En todas las ocasiones, cuándo se mencione a lo largo del texto un nombre empleando el género gramatical masculino como universal deberá sustituirse por la mención expresa también del femenino o se buscará una expresión que incluya a ambos sexos. Por ejemplo:

*Comprensión del mundo y del hombre* → comprensión del mundo y del ser humano.

*Ciudadanos* → Ciudadanía, mujeres y hombres ciudadanos, ciudadanos y ciudadanas.

*Los investigadores* → el personal investigadores, las personas investigadoras.

*Profesores* → el profesorado.





Instituto Andaluz de la Mujer  
**CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL**  
*Científicos* → mujeres y hombres de ciencia, personal científico, científicos y científicas.  
*Expertos* → personas expertas.  
*Gestores* → las personas gestoras, personal gestor.  
 Diplomado, licenciado, ingeniero o arquitecto → diplomatura, licenciatura, ingeniería o arquitectura.  
*Mentores* → personas mentoras, mujeres y hombres mentores.  
*Los candidatos* → las personas candidatas.  
*Los hijos* → el cuidado de las criaturas, el cuidado de los hijos e hijas.  
*Evaluadores* → el personal evaluador

- Cuando se haga uso de términos que no llevan marca de género, es necesario observar los artículos o determinantes que lo acompañan pues estos le atribuyen la marca de género que por sí mismo no poseen:

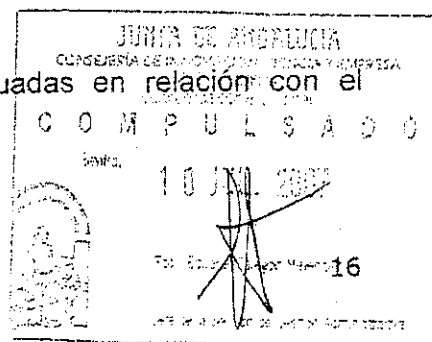
*Los menores* → las niñas y niños menores, las y los menores.

*Los miembros* → quienes sean miembros, los y las miembros, las personas miembros.

*Los jóvenes* → las personas jóvenes, las mujeres y hombres jóvenes

5. Conforme a la *Orden conjunta de 19 de febrero de 1993 de las Consejerías de la Presidencia y de Asuntos Sociales, por la que se dictan normas para el cumplimiento del principio de no discriminación por razón de sexo en el empleo de imágenes en la información y divulgación de la acción institucional de la Junta de Andalucía* (BOJA de 06.03.93), se debería recoger y tener presente dicho objetivo de un modo explícito en los **artículos 7.1, 8 y 10** del presente borrador, pudiendo quedar redactado del siguiente modo: *....se tendrá en cuenta el cumplimiento del principio de no discriminación por razón de sexo en aquellas campañas de información y divulgación que se lleven a cabo.*

Las conclusiones según las observaciones efectuadas en relación con el impacto de género en el Proyecto de Decreto son:



16 / 07



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

- Que para valorar el impacto de este Decreto en el logro efectivo de la igualdad de género, es necesario tener conocer mejor la situación y posición de las mujeres y los hombres en todos los ámbitos, estructuras, entidades pública y privadas que están relacionadas con la investigación, la ciencia y la innovación.
- Dado que la presente Ley es en su globalidad pertinente al género es necesario explicitar en todos y cada uno de los aspectos que aborda que se respetará el principio de igualdad de oportunidades y se integrará la perspectiva de género en aras de contribuir al logro efectivo de la igualdad real entre mujeres y hombres en los ámbitos de la investigación, la ciencia y la innovación.
- Que se debe promover el principio de paridad en aquellos órganos de participación, asesoramiento y/o toma de decisiones con objeto de garantizar un impacto positivo en la igualdad.
- Que todas las acciones de carácter divulgativo y de información deben respetar el principio de no discriminación en el empleo de imágenes.
- Que se debe sistematizar la adaptación de la redacción a un uso no sexista del lenguaje.

Sevilla, 21 de septiembre de 2006

LA DIRECTORA  
Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
JUNTA DE ANDALUCÍA  
SEVILLA  
A. Soledad Ruiz Segúin

JUNTA DE ANDALUCÍA  
CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL Y ECONOMÍA  
Y EMPLEO  
CONSEJO REGULADOR  
COM P U L S A D O  
Sevilla, 10 SET 2007  
Fdo: Eduardo López Melero  
17  
Jefe de la Junta de Regulación



16 / 07

INFOR...  
IAM

Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
**NORMATIVA VIGENTE SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  
ENTRE MUJERES Y HOMBRES QUE AFECTAN A LA ELABORACIÓN DEL  
INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO.**

Objetivo Igualdad de Género.....art. 139 de la Ley  
**18/2003, de 29 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas.**

Composición Paritaria de órganos.....art. 140 de la Ley  
**18/2003, de 29 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas.**

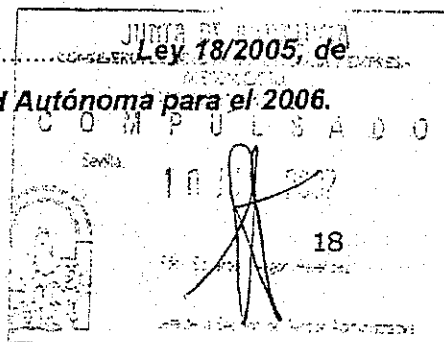
Datos desagregados por sexo.....art.22 de la Ley 8/2002, del  
**Plan Estadístico de Andalucía 2003-2006.**

Lenguaje administrativo no sexista.....Orden de 24 de noviembre  
de 1992, conjunta de la Consejería de Gobernación y de la Consejería de  
Asuntos Sociales, sobre la eliminación del lenguaje sexista, en los textos y  
documentos administrativos

Información y publicidad no sexista .....Ley 6/2005, de 8 de abril,  
relativa a la actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de  
Andalucía y Orden de 19 febrero 1993, de la Consejería de la Presidencia,  
relativa a normas para el cumplimiento del principio de no discriminación  
por razón de sexo en la información y divulgación de la de la Junta de  
Andalucía

Evaluación del Impacto de género.....Decreto 93/2004, de 9  
de marzo por el que se regula el Informe de Evaluación de Impacto de  
género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de  
Gobierno.

Prioridad presupuestaria de las políticas de Igualdad.....**Ley 18/2005, de  
28 de diciembre de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el 2006.**



**INFORME  
CONSEJERÍA**

**INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL  
ANTEPROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA**

El anteproyecto de ley ha tenido en cuenta como uno de sus elementos centrales adoptar las medidas precisas que permitan avanzar en la igualdad de todos los colectivos que, por cualquier razón, puedan sufrir algún tipo de discriminación. En este sentido se dispone entre los principios del sistema educativo andaluz la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos y prácticas del sistema educativo. Así, las actividades de las enseñanzas en general, el desarrollo de la vida de los centros y el currículo tomarán en consideración, como un elemento transversal, la igualdad de los sexos. En particular, la norma recoge de forma expresa que el currículo permitirá apreciar la contribución de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad.

A lo largo del anteproyecto de ley se recogen diferentes medidas que persiguen hacer realidad esta igualdad entre hombres y mujeres en la educación. Entre ellas cabe destacar la previsión de que la composición de los equipos directivos de los centros docentes se realice de forma que permita una presencia equilibrada de hombres y mujeres en los mismos. Asimismo, la elección de los representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa en el Consejo Escolar se regulará de forma que se garantice una representación paritaria de ambos sexos.

Profundizando en la idea recogida en el párrafo anterior, se recoge la participación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos consultivos y de asesoramiento que se crean en el anteproyecto de ley, de acuerdo con lo establecido en el artículo 140 de la ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, y se establecen reglas concretas para su cumplimiento efectivo. Del mismo modo, esta representación equilibrada entre los dos sexos se hace extensiva a los órganos de las asociaciones, federaciones y confederaciones tanto de padres y madres del alumnado como de alumnos y alumnas y a los órganos de selección de personal en los distintos procedimientos que se convoquen para el ingreso en los cuerpos de la función pública docente.



117/07

JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

La Consejera

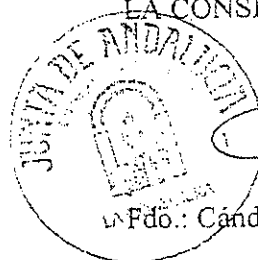
INTERAL

CONSEJERIA

Finalmente en la redacción del anteproyecto de ley se han tenido en cuenta las normas dictadas por la Junta de Andalucía sobre utilización de un lenguaje no sexista, evitando la utilización del masculino como genérico de los dos sexos y sustituyéndolo por palabras que los incluyen a ambos. De esta forma, se ha pretendido evitar un hábito que, en el mejor de los casos, esconde o invisibiliza a las mujeres y, en el peor, las excluye del proceso de representación simbólica que pone en funcionamiento la lengua.

Sevilla, 6 de julio de 2006

LA CONSEJERA,



*[Handwritten signature]*

Fdo.: Cándida Martínez López.

17/ 07

INFORME

IAI



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

JUNTA DE ANDALUCÍA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	
15 SET. 2006	
REGISTRO GENERAL 4 49668	Hora Sevilla

Fecha: 11 de septiembre de 2006

Asunto: Informe Impacto Género

Ref.: EMB/ Impacto 06-59

SECRETARIA GRAL. TÉCNICA  
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
Avda. J.A. Vizarrón s/n  
Edif. Torretriana , Isla Cartuja  
41071 SEVILLA

S A L I D A	JUNTA DE ANDALUCÍA CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
	13 SET. 2006 6097
	Registro General Sevilla

Adjunto le remito Informe de Observaciones al Informe de Evaluación del Impacto de Género recibido el pasado mes de julio de 2006, al "Anteproyecto de Ley de Educación de Andalucía", conforme a lo establecido en el Decreto 93/2004, de 9 de marzo, por el que se regula el informe de evaluación de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno.

LA DIRECTORA

CA. Soledad Ruiz Segúin



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

**OBSERVACIONES QUE EMITE EL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER AL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO REMITIDO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA, QUE REGULA EL SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ Y SU EVALUACIÓN; ASÍ COMO LA CREACIÓN DEL INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES Y LA AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA, Y LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENSO DE ENTIDADES COLABORADORAS DE LA ENSEÑANZA.**

Compartimos la conclusión a la que se llega en el Informe de Evaluación de Impacto de Género presentado, en cuanto a que las medidas que contiene el anteproyecto tienen un importante alcance o repercusión sobre la igualdad de trato y no discriminación por razón de género.

El sistema educativo tiene una labor fundamental en la consecución de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, tanto por el papel de la escuela como agente de socialización de las niñas y niños, como por las implicaciones que los modelos que se aprenden y las elecciones que se realizan en esta etapa de la vida de las personas, tienen sobre sus oportunidades futuras de autonomía y desarrollo profesional y personal.

Asimismo, el sistema educativo constituye un espacio donde desarrollan su actividad profesional un número considerable de mujeres y hombres, bien como personal docente, directivo, técnico, o administrativo y de servicios.

Por último, el sistema educativo constituye un espacio con gran potencial de cara a la sensibilización en el valor de la igualdad de género, aspecto este central para la consecución de una sociedad concienciada contra las desigualdades sociales en general, y la discriminación por razón de sexo en particular.

Por todo ello, si el objetivo de esta ley es establecer las condiciones para que el sistema educativo andaluz haga su aportación al logro de una sociedad más



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

democrática y más justa, el fomento de la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres, constituye un elemento imprescindible. Dicha igualdad debe erigirse en criterio transversal de calidad de la enseñanza, principio rector de toda política educativa y de las relaciones entre las instituciones, la comunidad educativa y la sociedad en general.

Considerando esto, y tal como se pone de manifiesto en el mencionado informe, el anteproyecto de ley resulta ser:

Pertinente al género

☒

No pertinente

☐

En primer lugar, quisiéramos felicitar al órgano emisor del presente anteproyecto de ley, por cuanto consideramos que ésta supone un avance cualitativo en el logro de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, tanto en general como en el ámbito afectado por la normativa que nos ocupa.

En efecto, es notoria la intencionalidad de establecer las condiciones necesarias para hacer de la igualdad de género un principio fundamental de las políticas educativas andaluzas, tal y como queda recogida en el informe de evaluación de impacto de género remitido. Dicha intencionalidad se refleja en diversas materias reguladas por el anteproyecto: la paridad en la composición de los órganos consultivos y de asesoramiento que se crean, la composición equilibrada de los equipos directivos de los centros docentes, la visibilización de las aportaciones de las mujeres en el currículo escolar, el énfasis en el valor de la igualdad entre los sexos como parte fundamental de la educación en valores, la consideración del impacto favorable que diversas iniciativas relativas al programa de apertura de centros (servicios de comedor escolar, aula matinal y actividades extraescolares, entre otras) puede tener de cara a facilitar la articulación de la vida personal y laboral de las mujeres y hombres andaluces, y



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

por último, el esfuerzo realizado en cuanto al uso de un lenguaje no sexista en la redacción del anteproyecto.

No obstante, dada la trascendencia de la normativa que nos ocupa, con objeto de garantizar su contribución efectiva a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y teniendo en cuenta la normativa de aplicación en relación con la igualdad de género (ver Anexo), se realizan las siguientes observaciones:

1. El Decreto 93/2004 del 9 de marzo por el que se regula el informe de evaluación de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno (BOJA núm. 50 de 12 de marzo), en su Art. 4 dispone que el informe de evaluación del impacto de género deberá describir, al menos, las diferencias existentes entre mujeres y hombres en el ámbito de actuación de las medidas que pretenden regular en la disposición de que se trate, **incluyendo los datos, desagregados por sexo**, recogidos en estadísticas oficiales, así como el análisis del impacto potencial que la aprobación de dichas medidas producirá entre las mujeres y hombres a quienes van dirigidas.

El informe de evaluación de impacto de género elaborado por la Consejería de Educación, no incluye datos que permitan visualizar la realidad de los hombres y las mujeres que conforman la comunidad educativa en sentido amplio (profesorado, alumnado, personal de los centros docentes, personas miembro de las asociaciones de madres y padres del alumnado, etc.).

En este sentido, algunos de los datos desagregados por sexo que nos permitirían analizar la situación real existente, y valorar si lo previsto en la ley atiende de forma igualitaria (que no igual) a las mujeres y hombres a quienes van destinadas en último término las medidas que se pretenden regular, podrían ser los siguientes:



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

- Estructura de la población en edad escolar por grupos de edad y sexo
- Población matriculada en los diferentes niveles educativos (enseñanza de régimen general; formación profesional; Educación de personas adultas; enseñanzas artísticas, etc.) por sexo
- Tasas de analfabetismo por sexo
- Tasas de absentismo escolar por sexo y nivel educativo
- Resultados escolares por sexo y nivel educativo
- Tasas de abandono o deserción escolar, por sexo
- Información desagregada por sexo sobre el número de personas empleadas en el sistema educativo, por ocupación, tipo de contrato y categoría laboral.
- Profesorado por sexo, nivel educativo, categoría profesional, y materia de docencia.
- Composición por sexo de las asociaciones del alumnado, de personal docente, de madres y padres del alumnado, asociaciones profesionales del profesorado, y de las entidades que llevan a cabo actividades de voluntariado en el ámbito educativo.
- Composición por sexo de los órganos directivos y de toma de decisión de las asociaciones del alumnado, de personal docente, de madres y padres del alumnado, asociaciones profesionales del profesorado, y de las entidades que llevan a cabo actividades de voluntariado en el ámbito educativo.

Estimamos que es probable que la mayoría de estos datos se encuentran disponibles en las bases de datos estadísticas de la Consejería. De no ser así, se sugiere inste al Departamento de Estadística de la misma, o en su caso, al Instituto de Estadística de Andalucía, para que incluya y analice estos indicadores para próximas ocasiones, y proceda en cumplimiento del artículo 22, letra e) de la *Ley 8/2002 de 17 de diciembre del Plan Estadístico de Andalucía 2003-2006* (BOJA 154, 31.12.02).

Por otro lado, un análisis de género del sistema educativo no debe limitarse únicamente a la descripción *cuantitativa* de la desigual presencia



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

de hombres y mujeres en los diferentes niveles educativos, sino que debe extenderse al análisis crítico de todos aquellos mecanismos que pueden reforzar la discriminación sexual. En este sentido, se sugiere que, además de la información de carácter cuantitativo que se indica en el anterior párrafo, se considere la generación y análisis de información de tipo cualitativo, que de cuenta, entre otros, de los siguientes aspectos:

- Las opiniones y actitudes de madres y padres, así como del personal docente, con relación a la igualdad entre mujeres y hombres, y sus implicaciones en relación con las elecciones vitales y profesionales de sus hijas e hijos o su alumnado.
- El (desigual) reconocimiento social de la docencia, especialmente en el caso de las mujeres docentes en los niveles inferiores (educación infantil y primaria).
- El tipo de conocimientos y saberes que se incluyen en el currículo, el grado en que éste refleja las aportaciones que las mujeres han hecho al saber, y en que excluye o integra temas tradicionalmente más vinculados a la vida de las mujeres.
- El uso del lenguaje (sexista) en el aula.
- La persistencia de sesgos androcéntricos, imágenes y contenidos sexistas o que refuerzan los estereotipos y roles tradicionales de género; en los libros de texto, los materiales didácticos y las lecturas escolares; la presencia o ausencia de imágenes y referentes femeninos (en general, y especialmente, en el campo de la ciencia y el conocimiento).
- Por último, datos y análisis de las pautas de interacción que se dan en el aula, y la forma en que esta influye en la autovaloración, opiniones y actitudes de alumnas y alumnos.

Estos serían algunos de los aspectos que se destacan del análisis del sistema escolar desde la perspectiva de género. Dicho análisis resulta imprescindible de cara a obtener un conocimiento no sesgado de la realidad, que será la base para establecer después las líneas de intervención más adecuadas.



Instituto Andaluz de la Mujer

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

En este sentido, se recomienda al órgano emisor el fomento de la investigación en género y educación, por cuanto esta puede aportar información de gran valor para la definición de la situación y posición de chicos y chicas en el sistema escolar, así como de las mujeres y hombres que conforman la comunidad educativa de Andalucía.

Por otro lado, el anteproyecto que nos ocupa regula o refiere diversos **sistemas de registro** de las personas y entidades que conforman la comunidad educativa (de asociaciones del alumnado, de personal docente, de madres y padres del alumnado, asociaciones profesionales del profesorado, de entidades que llevan a cabo actividades de voluntariado en el ámbito educativo) y sus miembros, así como de solicitud y concesión de las ayudas destinadas a tal fin. En este sentido, y a pesar de que no es directamente objeto de la presente normativa establecer las características de dichos registros y de las bases de datos para su gestión, se recomienda a la entidad emisora que materialice su compromiso con la igualdad de género, expresada en el informe de evaluación de impacto, y garantice la generación de información desagregada por sexo, incluyendo la variable sexo como campo obligatorio de dichos registros. Adicionalmente, la obtención de información relativa a la presencia del principio de igualdad de oportunidades en la misión y los objetivos de las entidades que conforman la comunidad educativa de Andalucía, debe también asegurarse. Para ello, se recomienda añadir, al final de cada uno de los Artículos que hacen referencia a estos censos y registros (**Artículos 10, 15, 28, 37, 166-punto 2**), el párrafo siguiente:

*“Con independencia del procedimiento que se establezca, dicho censo (o registro) debe asegurar la disponibilidad de datos desagregados por sexo sobre la composición de estas asociaciones, las personas titulares de su Junta Directiva u órgano de dirección y representación; asimismo, y para facilitar la recogida de información sobre la inclusión del objetivo de*





Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

*igualdad de género en la organización y actividades de las entidades, se establecerá la obligatoriedad de presentar una memoria en la que se recojan las iniciativas puestas en marcha por la entidad para la promoción de la igualdad de oportunidades entre los sexos, acompañada de un informe de evaluación del impacto de género de todas las actuaciones desarrolladas."*

En el caso del Censo de Entidades Colaboradoras, cuya creación se regula en la Sección Segunda del Capítulo IV, **Artículos 169 y 170**, la recogida de información desagregada por sexo debe también garantizarse, utilizando la misma fórmula que se propone más arriba.

Esto mismo es aplicable a los sistemas electrónicos de recogida y tratamiento de datos o que sirvan de soporte a los censos y registros referidos en el párrafo anterior, que deben garantizar la disponibilidad de datos desagregados por sexo.

Por último, esta recomendación debe hacerse extensiva al diagnóstico de necesidades que se menciona en el **Artículo 20**, así como a los informes de evaluación referidos en el **Artículo 156**, la información demográfica de referencia que se solicita en el **Artículo 157**, y el Informe anual sobre el gasto en la educación a que se refiere el **Artículo 177**.

2. Por otra parte, en todos los reglamentos se tiene que tener en cuenta de forma efectiva el **objetivo de la igualdad por razón de género**, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 139 de la *Ley por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas para 2004* (BOJA núm.251 de 31 de diciembre). Como se ha indicado anteriormente, es patente el compromiso del órgano emisor del anteproyecto de ley con este objetivo, y así se señala en el informe de evaluación de impacto de género remitido. No obstante, y en la línea de explicitar aún más este compromiso, se realizan diversas sugerencias en orden de hacerlo patente a lo largo del articulado. Dichas



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

sugerencias aparecen marcadas en color rojo sobre el propio texto del anteproyecto, para facilitar su lectura.

Asimismo, y además de lo señalado sobre el propio texto, realizamos las siguientes recomendaciones con carácter general:

a. En primer lugar, hacer explícito el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como objetivo transversal de la política educativa andaluza, así como una alusión al papel fundamental que el sistema educativo tiene en el logro de la igualdad real entre los sexos. El mejor lugar para hacerlo es la **Exposición de motivos** del anteproyecto, de la forma siguiente:

- Añadiendo un nuevo párrafo, a continuación del párrafo 6:

*"(...) hacer más accesible la educación superior e impulsar la educación a lo largo de la vida, ofreciendo nuevas competencias y saberes.*

*Afrontar estos retos, pasa necesariamente por asegurar que las políticas educativas se rijan por el objetivo de fomentar la igualdad de oportunidades entre los sexos, a todos los niveles y en todos los ámbitos afectados por las mismas. El cumplimiento del principio de igualdad de género debe constituirse asimismo en un indicador de la calidad del sistema educativo"*

- Añadiendo lo siguiente al párrafo 11:

*"(...) Pretende ser una Ley para todos y todas, con la que se sientan concernidos todos los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía y que sienten las bases para lograr una sociedad más y mejor formada y, en consecuencia, más democrática, más igualitaria, más justa, más tolerante y solidaria. Específicamente, la presente ley tiene como uno de sus presupuestos básicos el reconocimiento del papel fundamental que juega el sistema educativo en la consecución de la igualdad de*



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

*oportunidades entre mujeres y hombres, por su potencial de cara a la transformación de la realidad social en orden a la erradicación de las desigualdades por razón de sexo"*

b. Asimismo, el carácter transversal del principio de igualdad de oportunidades, exige revisar los principios del sistema educativo expuestos en el **Artículo 3**. Esto mismo es aplicable a los Objetivos de la ley, referidos en el **Artículo 4**, que se propone modificar de forma que plasmen el objetivo general de promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Sobre el texto ofrecemos ejemplos concretos.

c. Otra de las formas de asegurar la contribución de todas las entidades que conforman la comunidad educativa al avance en la igualdad real entre los sexos, es la sujeción de las ayudas dirigidas al fomento del asociacionismo o al desarrollo de actividades relacionadas con la enseñanza por parte de entidades de titularidad privada, al cumplimiento de la normativa vigente en materia de igualdad de género. Para que dicho procedimiento quede recogido en el texto del anteproyecto, se sugiere añadir, en el Articulado que hace referencia al establecimiento de sistemas de ayudas económicas para el desarrollo de las actividades de las asociaciones del alumnado, de madres y padres del alumnado, asociaciones profesionales del profesorado, relacionadas con la atención al alumnado con necesidades específicas, las residencias escolares, las escuelas-hogar, las entidades que llevan a cabo actividades de voluntariado en el ámbito educativo, o las empresas u organizaciones empresariales (**Artículos 12, 27, 39, 110, 114, 115, 168, 170, 172**), el siguiente párrafo:

*"(...). Con independencia de los criterios que se establezcan para la concesión de las ayudas, estos deben garantizar la igualdad de oportunidades. Además, se incluirá como criterio de valoración para la concesión de las ayudas el cumplimiento de la normativa vigente en*



Instituto Andaluz de la Mujer

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

*materia de igualdad de género, y se valorará positivamente la adopción de medidas orientadas a la eliminación de las desigualdades por razón de sexo en la organización y las actividades de la entidad (asociación) solicitante"*

3. En todas las comisiones se tiene que tener en cuenta de forma efectiva la **composición paritaria** de los órganos consultivos y de asesoramiento de la Administración de la Junta de Andalucía de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 140 de la *Ley por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas para 2004* (BOJA núm.251 de 31 de diciembre). En este sentido, se felicita a la Consejería de Educación pues, en coherencia con lo dispuesto, ha incorporado, a través de la disposición adicional decimoséptima del anteproyecto de Ley, la paridad en la composición de los órganos consultivos y de asesoramiento que se crean, así como medidas específicas destinadas a garantizar la composición equilibrada de los equipos directivos de los centros docentes.

4. La Orden de 24 de noviembre de 1992, conjunta de la Consejería de Gobernación y de la Consejería de Asuntos Sociales, prescribe la *eliminación del lenguaje sexista en los textos y documentos administrativos* (BOJA núm. 126 de 05.12.1992) y de la Instrucción de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de Viceconsejeros para evitar un uso sexista del lenguaje en las disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía. En el Anteproyecto de Ley que nos ocupa, y tal como se señala en el informe de evaluación del impacto de género remitido, queda patente el esfuerzo realizado por el órgano que lo emite para eliminar de la redacción del mismo el lenguaje sexista, especialmente en lo que concierne al uso de términos inclusivos que sustituyan al empleo (erróneo) del género gramatical masculino como universal. No obstante, se realizan las siguientes sugerencias orientadas subsanar algunos sesgos sexistas encontrados en la redacción:



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

- Aquellos aspirantes→aquellas personas aspirantes o quienes aspiren
- Aquellos solicitantes→aquellas personas solicitantes o quienes soliciten
- Niños→niñas y niños
- Los tutores legales→quienes ostenten la tutoría legal, los y las tutoras legales
- Un representante→un o una representante, la persona representante, quien ostente la representación
- El responsable→el o la responsable
- Los miembros→los y las miembros
- Todos→todas y todos
- El director→el director o la directora, o la dirección
- El Vicedirector→el Vicedirector o la Vicedirectora, o la Vicedirección.
- El Jefe de Estudios→el Jefe o la Jefa de Estudios, o la Jefatura de Estudios
- Otros profesionales→otras personas profesionales, u otros y otras profesionales
- Usuario→usuario o usuaria, o bien, la persona usuaria
- Los jóvenes→los y las jóvenes, los hombres y las mujeres jóvenes, las personas jóvenes, la juventud.

Por último, se considera necesario realizar una observación general con respecto al uso del lenguaje no sexista en las titulaciones y denominaciones profesionales a que se hace referencia en el Anteproyecto, de forma que garanticen la visibilización de los hombres y las mujeres que desempeñan estas profesiones. En este sentido, se hacen las siguientes propuestas de modificación:

- Asesores técnicos→asesoría técnica



Instituto Andaluz de la Mujer

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

- Los funcionarios públicos docentes→los o las funcionarias, o bien, las personas funcionarias, o el funcionariado.
- Título de Graduado en educación secundaria→Graduado o graduada en educación secundaria
- Título de Técnico →Técnica o Técnico
- Orientador profesional→orientador u orientadora profesional
- Cuerpo de Catedráticos→ Cuerpo de Catedráticas y Catedráticos
- Inspectores de educación→Inspectoras o Inspectores de Educación, o bien, la Inspección de Educación
- Cuerpo de Profesores→ Cuerpo de Profesoras y Profesores

5. La Orden conjunta de 19 de febrero de 1993 de las Consejerías de la Presidencia y de Asuntos Sociales, relativa al empleo de imágenes no sexistas en las acciones de información y divulgación institucional, dicta normas para el cumplimiento del principio de no discriminación por razón de sexo en la **información y divulgación de la acción institucional** de la Junta de Andalucía. En el anteproyecto de ley que nos ocupa, se hace mención a diversas acciones divulgativas o de información institucional. Para la realización de las mismas, se insta a la administración pública del sistema educativo a que observe la legislación relativa al empleo de imágenes no sexistas. El principio de no discriminación por razón de sexo en las campañas de información y divulgación que se lleven a cabo, debe ser explicitado en las partes del articulado afectadas por esta normativa, mediante la inclusión del siguiente párrafo a continuación de los **Artículos 24** (punto 2), **31** (punto 5), **145**, **156** y **175**:

*"(...) En dichas campañas, programas o acciones de difusión de información, se observará la legislación vigente relativa al empleo de imágenes no sexistas en las acciones de información y divulgación institucional"*



Instituto Andaluz de la Mujer

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

Esta misma legislación es aplicable a los sistemas de electrónicos de recogida y difusión de información, que deben adaptarse al uso de un lenguaje no sexista.

**En conclusión** las observaciones a las que se llega en relación con el impacto de género en el anteproyecto de ley de Educación de Andalucía son:

- Que se felicita al órgano emisor, por el esfuerzo realizado en orden a hacer de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres un objetivo del sistema educativo andaluz, a través del Anteproyecto de Ley que nos ocupa.
- Que para valorar el impacto de este anteproyecto de ley en relación con el género, es necesario disponer de datos desagregados por sexo, y de estudios e investigaciones sobre el sistema educativo andaluz desde la perspectiva de género. Adicionalmente, y para facilitar la recogida y análisis de información desagregada por sexo, se debe asegurar la inclusión de la variable sexo de forma transversal en los censos y registros a que se hace referencia en la norma.
- Que es fundamental recoger el objetivo de igualdad por razón de género de forma que se haga extensivo y abarque a todo el articulado del anteproyecto de ley.
- Que es necesario materializar el compromiso de la Administración educativa andaluza con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, con estudios e informes que aporten datos e indicadores relativos a su situación, necesidades, resultados, acceso y uso de los recursos, las instalaciones y los servicios educativos; así como que cualquier plan, proyecto de actuación o gestión del sistema educativo, lleve aparejado un informe sobre el impacto diferencial que este tiene/podría tener sobre mujeres y hombres.
- Que la evaluación del sistema educativo andaluz debe contemplar su contribución a la igualdad de género como criterio transversal de evaluación, y elemento fundamental para determinar el grado en que se



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

está cumpliendo con el objetivo de poner las bases para una educación de calidad y ajustada a las necesidades e intereses de la sociedad actual.

- Que se felicita a la Consejería de Educación por contemplar el principio de paridad en la composición de los consejos consultivos y de asesoramiento a que se refiere el Anteproyecto de Ley, y que en lo sucesivo, deberá establecer procedimientos para vigilar su cumplimiento.
- Que se debe revisar la redacción para subsanar los sesgos sexistas que contiene.
- Que en las campañas o acciones de información o divulgación institucional, se debe observar la legislación andaluza relativa al empleo de imágenes no sexistas.

Sevilla, 8 de septiembre de 2006

LA DIRECTORA

A. Soledad Ruiz Seguí





Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

**ANEXO. NORMATIVA VIGENTE SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES QUE AFECTAN A LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO.**

Objetivo Igualdad de Género.....art. 139 de la *Ley 18/2003, de 29 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas.*

Composición Paritaria de órganos.....art. 140 de la *Ley 18/2003, de 29 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas.*

Datos desagregados por sexo.....art.22 de la *Ley 8/2002, del Plan Estadístico de Andalucía 2003-2006.*

Lenguaje administrativo no sexista.....*Orden de 24 de noviembre de 1992, conjunta de la Consejería de Gobernación y de la Consejería de Asuntos Sociales, sobre la eliminación del lenguaje sexista, en los textos y documentos administrativos*

Información y publicidad no sexista .....*Ley 6/2005, de 8 de abril, relativa a la actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía y Orden de 19 febrero 1993, de la Consejería de la Presidencia, relativa a normas para el cumplimiento del principio de no discriminación por razón de sexo en la información y divulgación de la de la Junta de Andalucía*

Evaluación del Impacto de género.....*Decreto 93/2004, de 9 de marzo por el que se regula el Informe de Evaluación de Impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno.*

Prioridad presupuestaria de las políticas de Igualdad.....*Ley 18/2005, de 28 de diciembre de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el 2006.*



19 / 07

**OBSERVACIONES QUE EMITE EL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER  
AL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO REMITIDO POR  
LA CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, AL "PROYECTO DE LEY DE  
DESIGNACIÓN DE SENADORES Y SENADORAS EN REPRESENTACIÓN  
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA".**

El proyecto normativo que nos ocupa, es el *Anteproyecto de Ley de designación de Senadores y Senadoras en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía*. Esta iniciativa legislativa responde al cumplimiento de lo previsto en el Estatuto de Autonomía, en su nueva versión aprobada por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, en la que se han introducido importantes novedades en esta materia, (art.106. 17º).

Así mismo, y como queda reflejado en el Informe de Evaluación de Impacto de género emitido por la Secretaría General Técnica, de la Consejería de la Presidencia, el nuevo Texto Estatutario recoge en su articulado diversos preceptos en el ámbito de la Igualdad de Género, y en concreto, el principio de Representación Equilibrada entre mujeres y hombres en los cargos electos, concretamente en los que corresponda su nombramiento y designación al Parlamento, como también al Consejo de Gobierno, (art. 107 y 135).

En base a ello, el anteproyecto de ley viene a asumir este objetivo dejando establecido en el artículo 4.4 que las propuestas de los Grupos Parlamentarios deberán garantizar la representación equilibrada por sexo, al menos en un 40%.

Visto lo cual, el anteproyecto de Ley que se tramita, y el Informe de Evaluación de Impacto de Género emitido, podemos concluir que el texto normativo resulta ser:

Pertinente al género



No pertinente





Y de su análisis, podemos concluir que éste contribuye de forma eficaz a la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, y al fomento de su participación social y política de forma equilibrada, conforme al artículo 139 de la Ley por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas para 2004 (BOJA núm.251 de 31 de diciembre) que establece que todos los anteproyectos de ley y proyectos de reglamentos deben tener en cuenta de forma efectiva el objetivo de la igualdad por razón de género.

Simplemente señalar al órgano impulsor de la norma, que al igual que en el resto de consideraciones tenidas en cuenta en el Preámbulo, debiera dejar explicitado en el párrafo quinto, la argumentación de que se realiza en base al mandato estatutario del artículo 106, otorgando así solidez normativa a la presencia equilibrada de hombres y mujeres en la designación de Senadoras y Senadores.

Aprovechando así mismo, para felicitarle por el uso no sexista del lenguaje empleado en su redacción, sólo cabe manifestar la oportunidad de que el binomio *Senadores y Senadoras*, sea utilizado indistintamente alternando el orden del masculino y el femenino, y no siempre el masculino en primer lugar, visibilizando así la no prioridad, ni preferencia, de ninguno de los sexos.

Es todo cuanto cabe observar por parte de este organismo, conforme al Decreto 93/2003, de 9 de marzo por el que se regula el informe de evaluación de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno (BOJA núm. 50 de 12.03.04).

Sevilla, 27 de julio de 2007

LA DIRECTORA

A. Soledad Ruiz Segúin

19 / 07

INFORME  
CONSEJERÍA

INFORME SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO  
ANTEPROYECTO DE LEY SOBRE LA DESIGNACIÓN DE SENADORES Y  
SENADORAS EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE  
ANDALUCÍA

Se analiza y evalúa en este informe en qué medida y sentido incidiría el "Anteproyecto de Ley de designación de Senadores y Senadoras en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía" desde una perspectiva de género.

Así mismo, y en cuanto al tenor literal y sentido final del texto de sus preceptos y disposiciones, se analiza si la norma proyectada utiliza un lenguaje no sexista y no discriminatorio de la mujer.

**Situación actual.**

La Constitución Española define al Senado como la Cámara de representación territorial y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69.5, establece la facultad de las Comunidades Autónomas para designar un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea Legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional.

El artículo 106.17º del Estatuto de Autonomía para Andalucía determina que corresponde al Parlamento de Andalucía la designación, en su caso, de los Senadores y Senadoras que correspondan a la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo establecido en la Constitución.

Con la presente Ley se determina que la designación corresponde efectuarla al Parlamento de Andalucía, teniendo en cuenta determinados criterios de



19 / 07

representación proporcional, en cumplimiento de lo recogido por el art. 69.5 de la Constitución, citado.

En la actualidad, los Senadores designados por la Comunidad Autónoma de Andalucía tras las últimas elecciones autonómicas celebradas el 14 de marzo de 2004 son los siguientes:

• *Designación con fecha 12 de mayo de 2004*

- CABALLOS MOJEDA, JOSÉ (GPS)
- CASTILLO JIMÉNEZ, MARÍA CINTA (GPS)
- MARTÍNEZ SÁIZ, MARÍA TEÓFILA (GPP)
- PIZARRO MEDINA, LUIS (GPS)
- QUEVEDO ARIZA, MARÍA EULALIA (GPS)
- RAMÍREZ RODRÍGUEZ, JOAQUÍN LUIS (GPP)
- SOLER MÁRQUEZ, MARTÍN (GPS)
- CAMILLERI HERNÁNDEZ, MARÍA JOSÉ (GPP)  
Baja como Senadora por RENUNCIA DIPUTADA C.A. ANDALUCÍA  
con fecha 17/05/2005. Fue sustituida por JUAN DE DIOS  
MARTÍNEZ SORIANO.

• *Designación con fecha 18 de mayo de 2005*

- MARTÍNEZ SORIANO, JUAN DE DIOS (GPP)  
Sustituyó a MARÍA JOSÉ CAMILLERI HERNÁNDEZ.

En total, de los 8 Senadores que corresponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía, 5 son hombres y 3 mujeres.



19 / 07

INFORME  
CONSEJERÍA**Presencia equilibrada en el texto del Anteproyecto**

En el texto del Anteproyecto plantea que en su conjunta, las propuestas de los grupos parlamentarios deberán garantizar que cada uno de los sexos esté representado en la forma más cercana posible al equilibrio numérico, y, como mínimo, en un cuarenta por ciento.

Este texto supone pues un impacto positivo en razón del género y permite un paso mas en orden a la plena igualdad política entre mujeres y hombres, siguiendo la estela de la reciente modificación, por vía de la Ley de Igualdad, de la Ley Electoral General cuando se impone el cumplimiento de presencia equilibrada entre hombres y mujeres en la configuración de las listas electorales.

Como no podía ser de otra manera, la regulación legal que se pretende debe tener en cuenta el Derecho que establece la nueva regulación estatutaria sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos (artículo 15), especialmente respecto a la presencia equilibrada entre hombres y mujeres en los nombramientos y designaciones que le corresponda efectuar al Parlamento de Andalucía (artículo 107), todo ello continuando con el criterio introducido en la Ley Electoral de Andalucía (artículo 23.1) sobre la alternancia entre hombres y mujeres en las candidaturas electorales, a través de la Ley 5/2005, de 8 de abril, y también en la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en cuanto a que las designaciones de las personas integrantes del Consejo de Gobierno que realice el Presidente o la Presidenta de la Junta de Andalucía, cada sexo estará representado en, al menos, un cuarenta por ciento.

De otro lado, se da cumplimiento igualmente con el Anteproyecto de Ley sobre la designación de Senadores y Senadoras en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a otros diversos mandatos estatutarios no citados con anterioridad, relativos a las políticas de igualdad de género que tienen acomodo en diversos artículos del texto estatutario, como lo son el el 37.1.2ª (que



19 / 07

establece como principio rector de las políticas públicas la lucha contra el sexismo), y el 73 (sobre la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de políticas de género).

Lenguaje no sexista.

El texto respeta plenamente el lenguaje no sexista.

En suma, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 114 del Estatuto de Autonomía, en el artículo 45.1.a, de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Ley 18/2003, de 29 de diciembre por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas y el Decreto 93/2004, de 9 de marzo, por los que se regula el informe de evaluación de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno, el Anteproyecto de Ley sobre la designación de Senadores y Senadoras en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tiene en cuenta de forma efectiva la igualdad de género.

Sevilla, 20 de julio de 2007

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA



Fdo.- Carmen Mejías Severo.

Doc 6  
17

# JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN  
Dirección General de Administración Local

S A L I D A	JUNTA DE ANDALUCÍA CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN
	09 ABR. 2007
	Registro General 7781 Sevilla

INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER  
D<sup>a</sup> Elena Marín  
Alfonso XII, 52  
41001 SEVILLA

INFORME  
CONSEJERÍA

N.R.: Serv. Régimen Jurídico  
003/2007/EDG  
Asunto: Remisión informe impacto de género.

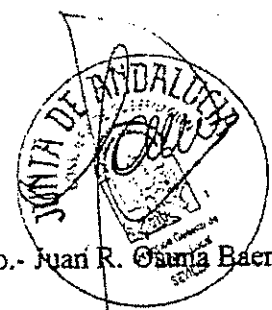
20 / 07

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 93/2004, de 9 de marzo, de la Consejería de la Presidencia, dictado en desarrollo del artículo 139.1 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, se remite informe de evaluación de impacto de género emitido por este Centro Directivo correspondientes al anteproyecto de *Ley del Consejo Andaluz de Concertación Local*.

Junto con el informe, se acompaña copia del proyecto mencionado, así como el Acuerdo de Inicio del procedimiento para la elaboración de la citada Ley.

Sevilla, 30 de marzo de 2007

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION LOCAL



Fdo.- Juan R. García Baena



20 / 07

**INFORME DE EVALUACION DEL IMPACTO DE GENERO QUE EMITE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION LOCAL, RESPECTO AL ANTEPROYECTO DE LEY DEL CONSEJO ANDALUZ DE CONCERTACION LOCAL.**

Servicio de Régimen Jurídico  
RSM

El Artículo 139.1 de la Ley 18/2003 de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, establece la obligatoriedad de incluir en la tramitación de los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno un informe de evaluación del impacto por razón de género, mandato que ha sido desarrollado en el Decreto 93/2004, de 9 de marzo, de la Consejería de la Presidencia.

En este sentido y, teniendo en cuenta que desde este Centro Directivo se han iniciado los trámites respecto a la aprobación de la *Ley del Consejo Andaluz de Concertación Local*, procede afirmar que en el proyecto normativo que nos ocupa, se da cumplimiento al artículo 140 de la citada Ley 18/2003, de 29 de diciembre.

El la presente Ley se tendrá presente el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las relaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y las Corporaciones Locales de Andalucía.

Todo ello, sin perjuicio de mejor criterio fundado en Derecho.

Sevilla, 30 de marzo de 2007  
LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE REGIMEN JCO  
ADMON LOCAL



Fdo.- Rosario de Santiago M.

LA JEFA DEL SERVICIO DE REGIMEN JURIDICO



Fdo.- Concepción García López.

R 282/07

003/2007/EDG

De 33

61

Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

R E C E P C I O N	JUNTA DE ANDALUCÍA CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN	
	- 2 MAYO 2007	
	Registro General 14046	Hora Sevilla

Fecha: 23 de abril de 2007

Ref.: Dirección, EM/pg

Asunto: Informe Impacto de Género  
nº 43

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN  
Dirección General de Administración Local  
Plaza Nueva, 4  
41071-SEVILLA

INFORME


IAI

20 / 07

S A L I D A	JUNTA DE ANDALUCÍA CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN
	3250 24 ABR. 2007

En relación al "Anteproyecto de Ley del Consejo Andaluz de Concertación Local", con fecha de registro de entrada en este Instituto el pasado día 11 de abril, adjunto le remito observaciones que realiza este organismo al Informe de Evaluación de impacto de género emitido, conforme al Decreto 93/2004 de 9 de marzo, por el que se regula el Informe de Evaluación de Impacto de Género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno.

LA DIRECTORA

  
A. Soledad Ruiz Segura

20 / 07



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

**OBSERVACIONES QUE EMITE EL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER  
AL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO REMITIDO LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA CONSEJERÍA  
DE GOBERNACIÓN, SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DEL CONSEJO  
ANDALUZ DE CONCERTACIÓN LOCAL.**

El objeto de dicho Anteproyecto es el fortalecimiento de los cauces de relación entre las Entidades Locales y la Administración Autonómica, a través de la creación de órgano permanente, el Consejo Andaluz de Concertación Local.

El Informe de EIG presentado, afirma que el proyecto normativo que nos ocupa da cumplimiento a la normativa autonómica en materia de igualdad de género, teniendo *"presente el principio de igualdad de oportunidades en las relaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía con las corporaciones locales"*. Entendiendo que lo anterior supone implícitamente el reconocimiento de la pertinencia de género del citado anteproyecto, compartimos dicha afirmación, ya que la normativa en cuestión resulta ser:

Pertinente al género

☒

No pertinente

☐

Con carácter general, el Anteproyecto de Ley que nos ocupa regula la naturaleza, composición y funciones del Consejo Andaluz de Concertación Local, órgano cuyo funcionamiento tendrá una clara incidencia sobre la igualdad entre hombres y mujeres de Andalucía, bien como público destinatario final de sus actuaciones, bien como las personas que serán miembros del mismo.

Así, visto el anteproyecto de ley, el Informe de Evaluación de Impacto de Género emitido, y teniendo en cuenta la normativa de aplicación en relación con la Igualdad de Género (ver Anexo), se realizan las siguientes observaciones:

20 / 07



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

1. El Decreto 93/2004 del 9 de marzo por el que se regula el informe de evaluación de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno (BOJA núm. 50 de 12 de marzo), en su Art. 4 dispone que el informe de evaluación del impacto de género deberá describir, al menos, las diferencias existentes entre mujeres y hombres en el ámbito de actuación de las medidas que pretenden regular en la disposición de que se trate, **incluyendo los datos, desagregados por sexo**, recogidos en estadísticas oficiales, así como el análisis del impacto potencial que la aprobación de dichas medidas producirá entre las mujeres y hombres a quienes van dirigidas.

El informe de evaluación de impacto de género presentado, no aporta datos que nos permita analizar la situación real existente, y valorar si lo previsto en la norma en cuestión, atiende de forma igualitaria (que no igual) a las mujeres y hombres a los que van destinadas las medidas que se pretenden regular. En una primera aproximación, los datos que podrían valorarse para evaluar el impacto de género de la normativa que nos ocupa, guardan relación con la *presencia* de mujeres y hombres, tanto en los espacios de toma de decisión, como en los órganos consultivos destinados a informar dicha toma de decisiones en los ámbitos de competencia de la administración pública. En concreto:

- Titularidad y composición por sexo y cargo de la asociación de municipios y provincias andaluzas.
- Titularidad y composición por sexo y cargo de las instituciones de la Administración Pública Autonómica Andaluza que tendrán representación en el Consejo Andaluz de Concertación Local.

De no contar con estos datos, se sugiere inste al Departamento de Estadística de esa Consejería, o en su caso, al Instituto de Estadística de Andalucía, para que incluya y analice estos indicadores para próximas ocasiones, y proceda en cumplimiento del artículo 22, letra e)



Instituto Andaluz de la Mujer

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

de la Ley 8/2002 de 17 de diciembre del Plan Estadístico de Andalucía  
2003-2006 (BOJA 154, 31.12.02).

Por otro lado, y con objeto de posibilitar futuros análisis, y desarrollar un catálogo de indicadores de género que sean de utilidad para informar las políticas públicas andaluzas con relación al cumplimiento del principio de igualdad entre mujeres y hombres, se recomienda, **una vez puesto en funcionamiento el órgano** que se crea por el presente Anteproyecto, recabar información sobre los siguientes aspectos:

- Propuestas, consultas y tramitaciones elevadas o informadas por el Consejo que tienen como objeto materias relacionadas con la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
- Composición por sexo y cargo de la Comisión Permanente de Estudio del Consejo que se menciona en el Art.9.
- Composición por sexo, cargo y objeto de las Comisiones de Estudio que se mencionan en el Art. 8.

2. Por otra parte, en todos los reglamentos se tiene que tener en cuenta de forma efectiva el **objetivo de la igualdad por razón de género**, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 139 de la *Ley por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas para 2004* (BOJA núm.251 de 31 de diciembre), y en el Anteproyecto de Ley que nos ocupa, no se incluye entre los objetivos la igualdad por razón de sexo.

Con la intención de profundizar en lo afirmado en el informe de evaluación de impacto de género con relación al cumplimiento principio de igualdad de oportunidades en las relaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía con las corporaciones locales, y hacerlo explícito a lo largo de su articulado, pasamos a enumerar las partes de la norma donde podría recogerse dicho principio:

- a) En el **Art. 1. Objeto y Ámbito**, se podría añadir al final del artículo:



Instituto Andaluz de la Mujer

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

"comprendidas en su territorio. Dicho órgano velará por el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de género en su organización y actuaciones"

INFORME

IAM

20 / 07

68

b) En el **Art. 3. Funciones**, se recomienda añadir lo siguiente con objeto de garantizar la consideración transversal del objetivo de igualdad entre las funciones encomendadas al Consejo:

"c) Elevar propuestas (...) de acuerdo con los principios de subsidiaridad, proporcionalidad e igualdad de género, conforme al art. 93 del estatuto de autonomía, y de acuerdo al art.10 y 15 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía"

"d) Elevar propuestas de financiación (...), que incluyan la igualdad de género como criterio, en la realización de obras y a la gestión de servicios (...)"

"e) (...) a disposición de las Administraciones Locales. Entre dichos parámetros estará presente la igualdad de género como criterio de gestión de los recursos públicos"


"h) (...) garanticen la prestación de servicios públicos de calidad, y la atención a las necesidades e intereses de las mujeres y hombres andaluces"

i) (...) respetando en todo caso lo dispuesto en esta Ley y en sus normas de desarrollo., así como la legislación vigente en materia de igualdad de género"

3. En todas las comisiones se tiene que tener en cuenta de forma efectiva la composición paritaria de los órganos consultivos y de asesoramiento de la Administración de la Junta de Andalucía de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 140 de la Ley por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas para 2004 (BOJA núm.251 de 31 de diciembre). En el Anteproyecto de Ley que nos ocupa sólo se incluye el criterio de paridad con relación al ámbito territorial (autonómico-provincial-local) pero no la representación paritaria con relación al género.

20 / 07

59



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

Dado que el Consejo Andaluz de Concertación Local tiene un doble carácter, deliberante y consultivo, se recomienda la inclusión del criterio de paridad, haciendo este principio explícito en el **Art. 5. Composición**, de la siguiente forma:

*"(...) de mayor implantación. Asimismo, se velará por el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 140 de la Ley por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas para 2004 (BOJA núm.251 de 31 de diciembre), con relación a la composición paritaria de los órganos consultivos y de asesoramiento de la Administración de la Junta de Andalucía"*

Analizada la composición que el Anteproyecto prescribe y constatada la **segregación vertical** que se observa entre el personal de la Junta, es probable que el principio de composición paritaria quede finalmente desvirtuado. En este sentido, para poder aplicar de una forma efectiva y real el principio de representación equilibrada, entre mujeres y hombres, se sugiere la inclusión de **medidas compensatorias de acción positiva** que recojan la posibilidad de compensar y corregir esta situación desigual. Algo similar es recomendable con relación a la composición de las comisiones de estudio que se mencionan en el Art.8. Con respecto a estas últimas, se sugiere la participación de personas expertas en género para asesorar el cumplimiento efectivo de la legislación autonómica vigente en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el desarrollo de las funciones asignadas al Consejo y a las citadas comisiones de estudio.

4. Por último, la Orden de 24 de noviembre de 1992, conjunta de la Consejería de Gobernación y de la Consejería de Asuntos Sociales, prescribe la eliminación del lenguaje sexista en los textos y documentos administrativos (BOJA núm. 126 de 05.12.1992) y la Instrucción de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de Viceconsejeros para

20 / 07

Instituto Andaluz de la Mujer

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

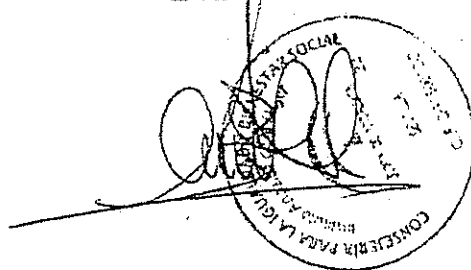
evitar un uso sexista del lenguaje en las disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía.

Apreciando el esfuerzo realizado por el órgano emisor, se realizan las siguientes recomendaciones en orden a asegurar que el lenguaje utilizado facilite la visibilización tanto de las mujeres como de los hombres, en todos los aspectos tratados. Se extraen algunos ejemplos tomados del texto -que guardan relación con la atribución del género gramatical masculino a términos que no llevan marca de género, a través de los artículos o determinantes que lo acompañan- y las alternativas de redacción de acuerdo a un uso realmente inclusivo del lenguaje:

- Todos sus miembros → Todas sus personas miembros/ todas y todos sus miembros.
- Los vocales → las vocalías, las personas vocales.
- Dichos representantes → dichas personas representantes.
- El titular → la persona titular.

Sevilla, 23 de abril de 2007

LA DIRECTORA



Ana S. Ruiz Segúin



20 / 07



Instituto Andaluz de la Mujer

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

# **FORMATIVA VIGENTE SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES QUE AFECTAN A LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO.**

Objetivo Igualdad de Género.....art. 139 de la *Ley 18/2003, de 29 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas.*

Composición Paritaria de órganos.....art. 140 de la *Ley 18/2003, de 29 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas.*

Datos desagregados por sexo.....art.22 de la *Ley 8/2002, del Plan Estadístico de Andalucía 2003-2006.*

Lenguaje administrativo no sexista.....*Orden de 24 de noviembre de 1992, conjunta de la Consejería de Gobernación y de la Consejería de Asuntos Sociales, sobre la eliminación del lenguaje sexista, en los textos y documentos administrativos*

Información y publicidad no sexista .....*Ley 6/2005, de 8 de abril, relativa a la actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía y Orden de 19 febrero 1993, de la Consejería de la Presidencia, relativa a normas para el cumplimiento del principio de no discriminación por razón de sexo en la información y divulgación de la de la Junta de Andalucía*

Evaluación del Impacto de género.....*Decreto 93/2004, de 9 de marzo por el que se regula el Informe de Evaluación de Impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno.*

Prioridad presupuestaria de las políticas de Igualdad..... *Ley 11/2006, de 27 de diciembre de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el 2007.*

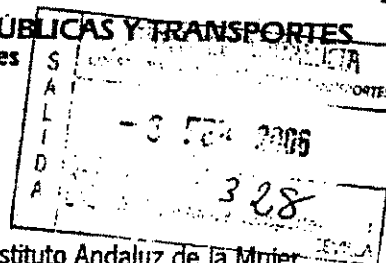
JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES  
Dirección General de Transportes

Sevilla, 3 Febrero 2006

21 / 07

Sr. Directora del Instituto Andaluz de la Mujer  
C/ Alfonso XII, 52  
41002 SEVILLA.-



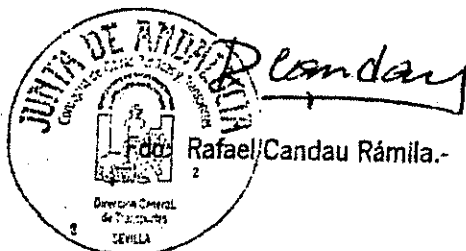
Rfe: ASS/MCP

INFORME  
CONSEJERIA

Asunto: Informe impacto de género. Anteproyecto de Ley de Puertos de Andalucía.-

De conformidad con lo previsto en el Decreto 93/ 2004 de 9 de Marzo, adjunto se remite el informe de evaluación de impacto de género elaborado por esta Dirección General, junto con al Anteproyecto de Ley de Puertos de Andalucía, con el fin de que, en el plazo de diez días, pueda efectuar las observaciones que estime oportunas.

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTES



21 / 07

**ANTEPROYECTO DE LEY DE PUERTOS DE ANDALUCÍA**  
**CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES**

**INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO**

**1.- Justificación normativa.**

**Ley 18/2003, de 29 de diciembre**, por la que se aprueban medidas Fiscales y Administrativas, Artículos 139 y 140.

**Decreto 93/2004, de 9 de marzo**, por el que se regula el informe de evaluación de impacto de género en los proyectos de Ley y Reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno.

**Orden de 24 de noviembre de 2.002**, conjunta de la Consejería de Gobernación y de la Consejería de Asuntos Sociales, sobre la eliminación del lenguaje sexista en los textos y documentos administrativos.

**2.- Informe.**

El Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981 de 30 de diciembre, dispone que nuestra Comunidad Autónoma ostenta competencia exclusiva en materia de puertos que no tengan la calificación legal de interés general del estado, de refugio, deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.

Por su parte los instrumentos normativos propios vigentes con rango de ley para el desarrollo de tales competencias, lo constituyen las Leyes 6/1986, de Tarifas y Cánones, y 8/1988, de Puertos Deportivos, así como otras normas de carácter genérico, de Patrimonio y de Hacienda Pública de Andalucía y la aplicación supletoria del Derecho Estatal.

Dado que el Derecho Estatal resulta de aplicación por la manifiesta insuficiencia de la normativa propia, el Anteproyecto de Ley responde a la necesidad de superar tal déficit, con un tratamiento propio en aspectos no sujetos al carácter básico de la norma estatal regulando materias tales como el régimen jurídico de la Administración portuaria autonómica, planeamiento, medio ambiente, sancionador, además de reformular, adaptándola a los criterios de la doctrina



Constitucional, las materias de gestión de dominio público e ingresos, reguladas en las Leyes 6/1986 y 8/1988.

El presente texto pretende dar respuesta a los retos a los que se enfrenta el sistema portuario andaluz y a las necesidades reales de los usuarios del servicio portuario.

Debe destacarse la codificación de los principios del sistema portuario de Andalucía y, en particular, que la construcción y programación de nuevos puertos se realizará conforme a los principios de protección del dominio público marítimo-terrestre, racionalidad ambiental, equilibrio territorial e integración con el entorno, equilibrio de la oferta portuaria en la línea de la costa y viabilidad económica en el sentido amplio. Al mismo nivel, el anteproyecto garantiza un nivel de protección elevado del medio ambiente consagrando al efecto los principios "vertidos cero", obligatoriedad de las auditorías ambientales en el sistema portuario de Andalucía y de entrega obligatoria de desechos generados por las embarcaciones.

Se regula la estructura y las competencias de la Administración del sistema portuario, clarificando aspectos esenciales de su régimen jurídico, como son su sujeción al Derecho Administrativo y a sus garantías en el ejercicio de funciones públicas y el régimen de su contratación.

En materia de planificación territorial, urbanística y portuaria, una importante novedad es la regulación del Plan del Sistema Portuario de Andalucía, que constituye el instrumento normativo de la política sectorial y deberá contener las bases estratégicas del sistema portuario comprendiendo las previsiones de evolución, objetivos, prioridades, etc.

El anteproyecto apuesta por insertar la planificación sectorial portuaria en el sistema autonómico de planificación y la legislación vigente en materia de ordenación del territorio.

El sistema de planificación previsto en el presente anteproyecto de ley se completa con las figuras del Plan Especial del sistema general portuario y el Plan de Usos de los espacios portuarios.

El anteproyecto de ley adapta la figura del contrato de concesión de obras públicas sin regular por entero esta modalidad contractual, sino únicamente las especificidades que representa cuando su objeto es una obra pública portuaria.

De especial relevancia resulta la previsión sobre la posibilidad de establecer precios máximos para las concesiones de elementos en concesión, otorgando el derecho de tanteo a la Administración, como medio de evitar una indeseable especulación sobre unos bienes escasos.

Asimismo se crea el registro de usos de dominio público como instrumento que coadyuve al control administrativo de las concesiones y cesiones que existen en los puertos andaluces, a la vez que como instrumento de publicidad y transparencia de las mismas.



INFORME  
CONSEJERIA**3.- Conclusiones**

Dados los términos y el alcance del texto de la norma, así como las medidas que contiene, referidas a los aspectos ya expuestos, esta Dirección General entiende que dichas medidas carecen de alcance o repercusión a efectos de igualdad de trato y no discriminación, por razón de género, entre las mujeres y hombres a quienes, de forma indirecta, van dirigidas.

Sevilla, a 3 de febrero de 2006.





Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

352/05-0P

26

**OBSERVACIONES QUE EMITE EL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER AL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO REMITIDO POR LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE PUERTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, QUE MODIFICA Y AMPLIA LA NORMATIVA VIGENTE CON RELACIÓN AL SISTEMA PORTUARIO ANDALUZ, EN SUS ÁMBITOS DEPORTIVOS, COMERCIAL Y PESQUERO, Y REGULA ASPECTOS COMO EL RÉGIMEN JURÍDICO.**

No compartimos la conclusión a la que se llega en el informe de evaluación del impacto de género presentado, en cuanto a que las medidas que contiene el anteproyecto carecen de alcance o repercusión sobre la igualdad de trato y no discriminación por razón de género. Como se pone de manifiesto en el mencionado informe, el objeto del anteproyecto de ley es la regulación del sistema portuario andaluz, con medidas que directa e indirectamente influyen sobre las mujeres y hombres, a quienes en último término va dirigida la normativa. Por ello, consideramos que el anteproyecto de ley de puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía resulta ser:

**Pertinente al género**



**No pertinente**



Con carácter general, ya que el Proyecto de Decreto que nos ocupa regula una materia que tiene como público destinatario final a mujeres y hombres, visto el informe de evaluación de impacto de género presentado, y teniendo en cuenta la normativa de aplicación en relación con la igualdad de género, se realizan las siguientes observaciones:

1. El Decreto 93/2004 del 9 de marzo (BOJA núm. 50 de 12 de marzo) por el que se regula el informe de evaluación de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno, en su Art. 4 dispone que el informe de evaluación del impacto de género

deberá describir, al menos, las diferencias existentes entre mujeres y hombres en el ámbito de actuación de las medidas que pretenden regular en la disposición de que se trate, **incluyendo los datos, desagregados por sexo**, recogidos en estadísticas oficiales, así como el análisis del impacto potencial que la aprobación de dichas medidas producirá entre las mujeres y hombres a quienes van dirigidas.

El informe de evaluación de impacto de género elaborado por la Dirección General de Transportes, no incluye dato alguno que permita visualizar la realidad de hombres y mujeres en relación con la situación, necesidades, acceso y uso de las instalaciones y servicios portuarios, objeto de regulación en el proyecto de ley que nos concierne.

En este sentido, algunos de los datos desagregados por sexo que nos permitirían analizar la situación real existente, y valorar si lo previsto en la ley atiende de forma igualitaria (que no igual) a las mujeres y hombres a quienes van destinadas en último término las medidas que se pretenden regular, podrían ser los siguientes:

- Registro de personas propietarias/consignatarias de embarcaciones usuarias de los servicios e instalaciones portuarias, por sexo.
- Personas vinculadas a la propiedad/uso de medios de transporte terrestre que guarden relación con actividades, servicios o instalaciones portuarias, por sexo.
- Ocupantes del dominio público portuario, por sexo.
- Tiempo que mujeres y hombres permanecen en las instalaciones portuarias.
- Uso que las mujeres y los hombres hacen de las instalaciones y servicios portuarios.
- Nº de personas trabajadoras en las instalaciones portuarias por sexo, ocupación y categoría profesional.

- Nº de personas empleadas en los tres sectores fundamentales de la actividad portuaria (pesquera, náutico-recreativa y de tráfico comercial), por sexo y ocupación
- Titulares de entidades o empresas beneficiarias de las concesiones y autorizaciones de construcción de obras públicas, explotación y uso de instalaciones o prestación servicios portuarios, por sexo
- Titulares de concesión o autorización de ocupación del espacio o de servicios ligados a las instalaciones portuarias.
- Composición por sexo de los órganos directivos y de toma de decisión de las asociaciones profesionales, entidades o empresas relacionadas con los ámbitos de actividad que concierne el anteproyecto de ley: sector portuario, actividades pesquera, náutico recreativa y de tráfico comercial.

De no contar con estos datos, se sugiere inste al Departamento de Estadística de esa Consejería, o en su caso, al Instituto de Estadística de Andalucía, para que incluya y analice estos indicadores para próximas ocasiones, y proceda en cumplimiento del artículo 22, letra e) de la *Ley 8/2002 de 17 de diciembre del Plan Estadístico de Andalucía 2003-2006* (BOJA 154, 31.12.02).

2. Por otra parte, en todos los reglamentos se tiene que tener en cuenta de forma efectiva el **objetivo de la igualdad por razón de género**, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 139 de la *Ley por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas para 2004* (BOJA núm.251 de 31 de diciembre) y en el anteproyecto de ley que nos ocupa no se incluye entre los objetivos la igualdad por razón de sexo.

Tal y como se señala en los antecedentes de la ley, los puertos autonómicos constituyen un sistema conformado por dos elementos: el *espacio físico*, y los *servicios* que se prestan a personas y empresas que tienen allí la base de sus actividades. El informe de evaluación de impacto



de género emitido por la Consejería de Obras Públicas y Transportes señala los principios que deben regir el sistema portuario de Andalucía; en él, se hace especial hincapié en aquellos que guardan relación con la protección medioambiental (protección del dominio público marítimo-terrestre, racionalidad ambiental, equilibrio territorial e integración con el entorno); Sin embargo, está ausente toda referencia al principio de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que se debe tener presente en las dos dimensiones anteriormente señaladas:

- como objetivo y criterio de calidad transversal de los servicios y actividades portuarias;
- como referente para la planificación y ordenación territorial, marco en el que se inserta la planificación sectorial portuaria.

A continuación proponemos algunas formas de materializar el compromiso público con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, haciéndolo patente a lo largo de todo el articulado de la ley:

- a. Que se recoja la igualdad de oportunidades en la **Exposición de motivos, punto I: Antecedentes de la ley**, de la forma siguiente:

"la respuesta a estos problemas debe partir de los principios de desarrollo sostenible, *igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres*, y utilización racional y *equitativa* de los recursos naturales."

- b. La inclusión del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como objetivo transversal, dentro de la **Exposición de motivos, punto II: Objetivos de la ley, párrafo 4º**, de la forma siguiente:

"La regulación del dominio público portuario tiene que partir del hecho de que su finalidad primordial es sustentar un conjunto de actividades y servicios que garanticen el tráfico marítimo y las necesidades de la flota

y las personas usuarias. *Para satisfacción de estas necesidades y la garantía de estos servicios, la presente ley tendrá en cuenta de modo transversal el objetivo de fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.*"

c. Contemplar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres entre los principios trasversales del sistema portuario andaluz; una forma posible de hacerlo es añadir un nuevo punto, al comienzo del **Artículo 2 (Título Preliminar, Capítulo II)**, de la forma que sigue:

*"1. El sistema portuario de Andalucía se regirá por los principios de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso y uso de las infraestructuras y servicios del dominio público portuario. Asimismo, se procurará la integración de la perspectiva de género en la planificación y gestión de las zonas portuarias"*

d. Dada su importancia como instrumento normativo articulador de la política sectorial, el Plan del Sistema Portuario de Andalucía debe contemplar de forma transversal el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; dicho principio puede hacerse explícito en el **Artículo 16. Plan del Sistema Portuario de Andalucía (Título II. Sistema de Planificación, Capítulo I)**, de la forma que sigue:

*"1. (...) con arreglo a los principios de jerarquía y complementariedad, y de las obras portuarias, garantizando en todo momento el respeto al principio de igualdad de género. El Plan del Sistema Portuario de Andalucía tiene por objeto el establecimiento de los criterios para la utilización portuaria adecuada, equitativa y racional de la costa andaluza, y también la atención preferente hacia la conservación del litoral, la gestión correctora del medio ambiente, y la respuesta adecuada a las necesidades de las personas usuarias, mujeres y hombres.*

21 / 07

46

2.Reglamentariamente se regulará el contenido mínimo del Plan del Sistema Portuario de Andalucía, y las normas para su elaboración, aprobación, actualización, modificación, actualización y desarrollo. *Dicha regulación será coherente con la política andaluza en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres*"

e. Asimismo, la planificación territorial y urbanística de los puertos, debe tener en cuenta las diferentes necesidades y usos del espacio público que hacen mujeres y hombres. Por ello, toda planificación en este sentido debe integrar la perspectiva de género. Una forma de explicitarlo en el texto del anteproyecto de ley, puede ser la inclusión del siguiente punto al comienzo del **Artículo 19. Ordenación territorial y urbanística de los puertos**:

*"1. La planificación territorial y urbanística de los puertos deberá realizarse teniendo en cuenta la perspectiva de género, y garantizando en todo momento el respeto al principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, como criterio transversal de ordenación y planificación del espacio público portuario"*

En el mismo sentido, puede modificarse la redacción de los puntos 3 y 4, de esta forma:

"3. Los instrumentos de planeamiento general del municipio (...) contendrán las determinaciones básicas relativas a accesibilidad, conectividad, e *igualdad de género*, en el marco de las competencias urbanísticas (...)

4.El planeamiento urbanístico deberá tener en cuenta las necesidades territoriales planteadas por las infraestructuras portuarias, estableciendo, en su caso, las reservas de suelo necesarias para garantizar la continuidad del correcto desarrollo de las actividades que utilicen tales infraestructuras, y adoptando las medidas de regulación de usos y actividades precisas para asegurar la integración de las zonas portuarias

en el territorio y su adecuación a las necesidades diferenciales de las personas, mujeres y hombres, que usan sus instalaciones o servicios"

f. Algo similar ocurre en el caso de los Planes especiales del sistema general portuario, contemplados en el **Artículo 20**. La administración del espacio y los servicios de cada puerto, serán regulados a través de la formulación de un plan portuario específico. Este debe incluir el principio de igualdad de género como objetivo transversal del plan, en coherencia con lo estipulado por los instrumentos generales de planificación y administración del sistema portuario. Para hacer esto explícito a lo largo del Artículo antes mencionado, se realizan las siguientes sugerencias:

"1. La tramitación y la aprobación se harán de acuerdo con lo que dispone la legislación urbanística. *Cada plan especial deberá contemplar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso y uso de las instalaciones y servicios del puerto, en coherencia con las políticas sectoriales*

(...)

5. El plan especial incluirá, como determinaciones, las medidas y las previsiones necesarias para garantizar el funcionamiento eficaz y *la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el uso de la zona de servicio portuaria, su desarrollo futuro, su conexión con la red de transportes terrestres y la cobertura adecuada de la demanda de servicios portuarios y medioambientales. El plan especial afrontará la ordenación integral de la zona desde la perspectiva de género (...)*

6. Son determinaciones básicas del plan especial:

(...)

(c) Previsión y programación de las obras de ampliación o modificación necesarias para atender el tráfico futuro estimado, *teniendo en cuenta la perspectiva de género.*

d) Ordenación interna de la red de transporte y comunicación viaria y, en su caso, ferroviaria y su conexión con los sistemas generales,

*considerando las diferencias en las necesidades y uso de los medios de transporte por parte de mujeres y hombres .*

(...)

- h) *Medidas para protección del medio ambiente y para garantizar el respeto y la aplicación del principio de igualdad de género.*
- i) *Condiciones de modificación y revisión del Plan especial*

Las recomendaciones realizadas para los Planes Especiales deben hacerse extensivas al Plan de Usos de los Espacios Portuarios, regulados en el **Artículo 28**. En este mismo sentido, resulta especialmente importante recoger en el **punto 1** de este, lo siguiente:

*"(...) así como la justificación de la necesidad o conveniencia de tales usos, según criterios de transparencia, objetivos y no discriminatorios por razón de sexo."*

Se trata en definitiva de considerar las diferencias en el uso que del espacio público hacen mujeres y hombres y no convertirlas en desigualdades en el acceso y utilización del mismo. En este sentido, recomendamos también la inclusión del principio de no discriminación por razón de sexo en el **punto 1 del Artículo 32. Usos y actividades permitidas en el dominio público portuario**, de la forma siguiente:

*"En el dominio público portuario podrán llevarse a cabo actividades, instalaciones y construcciones acordes con los usos portuarios propios de cada puerto, y que no supongan discriminación directa o indirecta por razón de sexo"*

- g. **El Artículo 23. Orden de prioridades para las actuaciones náutico-recreativas**, debería recoger el principio de igualdad de género como criterio transversal para definir dichas prioridades. Esto podría

hacerse añadiendo lo siguiente al comienzo del listado de prioridades que se contemplan en el punto 1:

*"a. Adecuación de las actuaciones a las necesidades y demandas de mujeres y hombres, en coherencia con el objetivo transversal de fomento de la igualdad de género"*

h. Algo similar ocurre con el **Artículo 24. Criterios de diseño**. Es conveniente explicitar en él la necesidad de integrar la perspectiva de género como criterio de determinación de las nuevas actuaciones, añadiendo al comienzo lo siguiente:

"Son criterios determinantes del diseño de las nuevas actuaciones:

*a. Que estas garanticen la igualdad de oportunidades en el acceso y uso de los recursos y servicios de la zona portuaria, así como que se contemple la perspectiva de género en el diseño de las políticas portuarias"*

Por otro lado, y como forma de materializar el compromiso público con la generación de información que permita visualizar la realidad de hombres y mujeres, se recomienda hacer mención explícita de la necesidad de que los estudios e informes que se realicen en este ámbito aporten datos e indicadores relativos a la situación, necesidades, acceso y uso de las instalaciones y servicios portuarios; asimismo, cualquier actuación relacionada con la gestión del sistema portuario debe llevar aparejada un informe sobre el impacto diferencial que esta tiene/podría tener sobre mujeres y hombres. A continuación se ofrecen varios ejemplos en este sentido:

a. En el **Título Preliminar, Capítulo I, Artículo 1, punto 3**, se debería incluir la siguiente frase:

"y el desarrollo de estudios e investigaciones en el sector marítimo-portuario que faciliten el desarrollo tecnológico y la innovación, y

*ofrezcan información desagregada por sexo sobre la situación, necesidades, acceso y uso de las instalaciones y servicios portuarios por parte de mujeres y hombres”.*

b. En el Artículo 18. **Mecanismos de coordinación del Capítulo II. Planificación urbanística y portuaria**, añadir lo siguiente:

*“La aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de ordenación y planificación urbanística que incidan directamente sobre los puertos e instalaciones portuarias y marítimas reguladas en esta Ley, requieren el informe favorable de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en aquellos aspectos que afecten a la actividad portuaria; Dicho informe llevará aparejado un estudio de impacto de género que visibilice cómo influye dicha planificación en las mujeres y hombres a los que afectará.”*

c. En el Artículo 20. **Planes especiales del sistema general portuario, punto 2**, se sugiere añadir lo siguiente:

*“ (...) Asimismo, se solicitará el informe de las Consejerías competentes por razón de la materia, y se acompañará de un estudio informativo de impacto de género que permita prever el efecto de las opciones planteadas en el plan sobre las mujeres y los hombres a los que afecte, así como las medidas correctoras oportunas, si estas fueran necesarias”*

Esto mismo es aplicable al Plan de Usos de los Espacios Portuarios, regulados en el Artículo 28, punto 4.

d. En el Artículo 22. **Proyectos de construcción de nuevos puertos, infraestructuras portuarias, instalaciones portuarias y de la ampliación de puertos existentes (puntos 1 y 2)** se sugiere añadir lo siguiente:

"1. La construcción de un nuevo puerto o de una nueva infraestructura así como la ampliación de los puertos existentes e instalación portuaria exigirá la aprobación del correspondiente proyecto y de los estudios complementarios, *incluido los de impacto de género*, por la Consejería de Obras Públicas y Transportes (...)

2. (...) que se someterá al correspondiente procedimiento de *evaluación de impacto de género* e impacto ambiental, de acuerdo con la legislación aplicable"

**e. En el Artículo 26. Efectos de la aprobación de los proyectos de construcción o ampliación de puertos e instalaciones portuarias,** habría que modificar el punto 1 como se propone a continuación, en coherencia con la normativa que regula la necesidad de generar datos desagregados por sexo:

"(...) A tal efecto, en el proyecto deberá figurar la relación concreta e individualizada y, *en la medida de lo posible, desagregada por sexo*, de los bienes y derechos afectados, con su descripción material, *así como una valoración del impacto que dichos proyectos tendrán sobre las mujeres y hombres afectados*"

Esto mismo es aplicable al **Artículo 27. Ejecución de obras en la zona de servicio de los puertos de Andalucía y en los inmuebles próximos.**

Por último, se recomienda considerar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en los procesos de contratación de obras, suministros, consultoría, asistencia y servicios relacionados con el sistema portuario. En este ámbito, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres puede servir como criterio para la selección de las entidades adjudicatarias, valorando a aquellas empresas o entidades que respeten el principio de igualdad de género en su organización y



actividades; asimismo, la administración pública debe velar por el cumplimiento de este principio por parte de las entidades o empresas adjudicatarias.

A continuación proponemos varios ejemplos de la forma en que podría materializarse esta recomendación en el texto que nos ocupa:

- a. Añadiendo, al final del **Artículo 10. Régimen de la contratación**, el siguiente párrafo:

*"La Agencia del Sistema Portuario velará por el cumplimiento del principio de igualdad de género en los procedimientos de contratación de obras y servicios relacionados con el sistema portuario, así como vigilará su cumplimiento por parte de las empresas o entidades adjudicatarias de contratos públicos"*

- b. Completando la redacción del punto 5 y 6 del **Artículo 22. Proyectos de construcción de nuevos puertos, infraestructuras portuarias, instalaciones portuarias y de la ampliación de puertos existentes** de esta forma:

*"5. Será requisito imprescindible para el otorgamiento de la concesión administrativa de construcción y explotación de un puerto, que ésta resulte adecuada respecto de la legislación urbanística, respetuosa del principio de igualdad de género y compatible con el planeamiento general vigente del término municipal en que se localice el proyecto para el que se solicita la concesión"*

*6. La efectividad de la adjudicación de la concesión quedará condicionada a la culminación del procedimiento que garantice la adecuación y compatibilidad urbanística, así como su ajuste al principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.*

Si transcurridos ocho meses desde el otorgamiento condicionado, persistiera tal situación de incompatibilidad urbanística o se infringiera el principio de igualdad de género, este no se entenderá perfeccionado, considerándose desestimada la solicitud de concesión, y procediendo el archivo del expediente, sin más trámites."

Las sugerencias realizadas en este sentido a los Artículos 10 y 22, son aplicables a los **Artículos 35 a 64**, que regulan más detalladamente las condiciones y procedimientos de otorgamiento de autorizaciones y concesiones relacionadas con el dominio público portuario. En ellos, la concesión o autorización debe estar condicionada a la garantía por parte de las personas, entidades o empresas adjudicatarias, del respeto al principio de igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de género. Asimismo, para la valoración de las solicitudes y la aprobación de los proyectos llevados a cabo en el marco de las concesiones o autorizaciones, la administración pública portuaria, debe considerar en todo momento su impacto sobre las personas, hombres y mujeres, a quienes en último término afectan dichas actuaciones. Para asegurar esto último, es necesario que toda solicitud de concesión o autorización para la explotación o uso de las instalaciones, de prestación de servicios portuarios, o para la construcción y explotación de obras portuarias, se acompañe de un informe de evaluación del impacto de género.

3. En todas las comisiones se tiene que tener en cuenta de forma efectiva la **composición paritaria** de los órganos consultivos y de asesoramiento de la Administración de la Junta de Andalucía de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 140 de la *Ley por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas para 2004* (BOJA núm.251 de 31 de diciembre). En el anteproyecto de ley que nos ocupa, no se contempla la constitución de órganos de este tipo. No obstante, es recomendable considerar el principio de paridad y la conveniencia de establecer medidas de acción positiva, como forma de equilibrar la participación de mujeres y hombres en los

órganos directivos y de toma de decisión. Ello es especialmente importante en la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde se constata una marcada segregación ocupacional vertical entre el personal de la Junta. Como decíamos anteriormente, carecemos de datos concretos sobre la organización de la gestión del sistema portuario, así como de estimaciones sobre la composición pro sexo de sus órganos rectores, pero en la medida en que estos se correspondan con las tendencias generales antes descritas, es previsible que nos encontremos ante órganos de dirección y gestión en los que las mujeres estén infrarrepresentadas. Más aun si consideramos que las actividades directamente implicadas por la presente regulación (pesquera, náutico-deportiva y comercial), son actividades desempeñadas mayoritariamente por varones, y muy marcadas por la división tradicional de roles y espacios sociales.

Algunas sugerencias para hacer explícita esta recomendación en el anteproyecto de ley serían las siguientes modificaciones al **Artículo 14. Régimen del personal y criterios de selección:**

"La selección del personal se realizará de acuerdo con sistemas basados en los principios de igualdad *de oportunidades entre mujeres y hombres*, mérito y capacidad y, con excepción del personal directivo, mediante convocatoria pública.

Su régimen de retribuciones se ajustará al establecido con carácter general para el personal del sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía. *Dicho régimen velará por el cumplimiento del principio de no discriminación retributiva —directa o indirecta— por razón de sexo.*

El personal directivo y de confianza se regirá por su legislación específica y en su nombramiento se tendrán en cuenta los criterios de competencia profesional, *igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres* y experiencia y estarán sujetos al régimen de incompatibilidades de altos cargos de la Administración. *En caso que se observe una patente desigualdad por razón de sexo en la composición*

*de sus órganos rectores, la Agencia del Sistema Portuario contemplará la promoción de medidas compensatorias de acción positiva para la disminución de dicha desigualdad, en coherencia con su compromiso con el principio de paridad"*

Por último, y aunque el presente anteproyecto de ley no contempla la creación de órganos afectados directamente por la normativa relativa a la composición paritaria, dejamos patente la necesidad de que se incluya explícitamente la recomendación del principio de composición paritaria de los órganos consultivos y/ de asesoramiento, en cualquier normativa que emane de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, y que articule su composición.

4. Y con carácter general, de acuerdo con la *Orden de 24 de noviembre de 1992, conjunta de la Consejería de Gobernación y de la Consejería de Asuntos Sociales, sobre la **eliminación del lenguaje sexista** en los textos y documentos administrativos* (BOJA núm. 126 de 05.12.1992) y de la *Instrucción de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de Viceconsejeros para evitar un uso sexista del lenguaje en las disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía*, se hace necesario revisar la redacción asegurando que el lenguaje utilizado facilite la visibilización tanto de las mujeres como de los hombres, en todos los aspectos tratados, lo que facilitará a su vez la comprensión de las situaciones concretas de unas y otros que puedan ser motivo de desigualdades y la posterior actuación a favor de la igualdad entre mujeres y hombres.

A lo largo del texto que nos ocupa, es habitual el uso (incorrecto) del género gramatical masculino como genérico universal. En estos casos, y a efectos de visibilizar a ambos sexos, se debería añadir la mención expresa del género gramatical femenino, o para evitar este

desdoblamiento, buscar una expresión que incluya a ambos sexos. A continuación nos referimos a algunos de los ejemplos más significativos de este uso incorrecto del genérico y proponemos posibles alternativas para subsanarlo:

- *Pasajeros*→ personas pasajeras, pasajeros o pasajeras, el pasaje
- *Usuarios* → personas usuarias, usuarias y usuarios
- *Terceros* →terceras personas o entidades; un tercero→una tercera persona o entidad
- *Los contratantes*→las personas o entidades contratantes, las partes contratantes
- *El promotor*→la persona o entidad promotora, o bien, los promotores y promotoras
- *El empresario*→ el y la empresaria; Los empresarios→El empresariado, o bien, los y las empresarias
- *El director técnico*→La dirección técnica
- *El director-gerente*→La dirección-gerencia
- *El cesionario*→la persona o entidad cesionaria
- *El concesionario*→la persona o entidad concesionaria
- *El interesado*→la interesada y el interesado, o bien, la persona interesada, o bien, a quien interese; Los interesados→los y las interesadas, o bien, las personas o entidades interesadas
- *Los afectados*→ las personas afectadas, o bien, los afectados y las afectadas
- *El autorizado*→la persona o entidad autorizada
- *El peticionario*→la persona o entidad peticionaria
- *Los licitadores*→las personas o entidades licitadoras
- *Socios*→los y las socias, entidades o personas
- *El obligado*→la persona o entidad obligada
- *El autor*→la autora y/o el autor
- *Adjudicatario*→la persona o entidad adjudicataria

- *Trabajadores*→los y las trabajadoras, o bien, las personas trabajadoras
- Cuando se haga referencia a determinadas profesiones, hay que procurar nombrar también el femenino. En los casos que se presentan a continuación la acepción en género gramatical femenino, está reconocida por el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua: Capitán→capitanas y capitanes; Patrón→patrona y patrón; Navieros→navieras y navieros, o bien, personal naviero; Armadores→armadores y armadoras;
- En los dos casos siguientes, y aunque no tenga el reconocimiento del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, es conveniente nombrar también el femenino, con objeto de visibilizar la posibilidad de que estas profesiones se desempeñadas por mujeres: cargadores→cargadores y cargadoras; prácticos→prácticos y prácticas. Hay que dejar aquí constancia que en estos dos casos el desdoblamiento no infringe norma lingüística alguna.
- *Los explotadores*→Los y las explotadoras
- *Los compradores*→Las y los compradores
- *Los inspectores*→los y las inspectoras, o bien, la persona inspectora, la inspección
- *Funcionario*→el o la funcionaria, o bien, la persona funcionaria, el funcionariado.
- *El propietario*→la persona propietaria, o bien, quien ostente la propiedad

Adicionalmente, cuando se haga uso de términos que no llevan marca de género, es necesario observar los artículos o determinantes que lo acompañan pues estos le atribuyen la marca de género que por sí mismo no poseen. A continuación se señalan algunos ejemplos extraídos del

texto en los que se hace esta atribución incorrecta y se proponen alternativas más acordes con un uso no sexista del lenguaje:

- *"a cuantos particulares"* → a particulares, o bien, a cuantas personas particulares
- *Los titulares* → los y las titulares, o bien, la persona o entidad titular, o bien, quien posea la titularidad
- *El ocupante* → la persona ocupante
- *El responsable* → la persona o entidad responsable
- *Los miembros* → los y las miembros
- *Los particulares* → los y las particulares
- *Los viandantes* → los y las viandantes
- *Los accionistas* → los y las accionistas
- *Los contratantes* → las personas o entidades contratantes
- *Los tripulantes* → los y las tripulantes
- *El solicitante* → la persona o entidad solicitante
- *El adquirente* → el y la adquirente, o bien, la persona o entidad adquirente
- *El transmitente* → el y la transmitente, o bien, la persona o entidad transmitente

5. La Orden relativa al **empleo de imágenes no sexistas** en las acciones de información y divulgación institucional, *Orden conjunta de 19 de febrero de 1993, de las Consejerías de la Presidencia y de Asuntos Sociales, dicta normas para el cumplimiento del principio de no discriminación por razón de sexo en la información y divulgación de la acción institucional de la Junta de Andalucía*. En el anteproyecto de ley que nos ocupa, no se hace mención a las acciones divulgativas o de información institucional relacionadas con las instalaciones y servicios portuarios. No obstante, es previsible que, dado el carácter de las actividades implicadas – especialmente todas aquellas relacionadas con el ámbito náutico-deportivo, o en sentido más amplio, el ocio y turismo vinculado al entorno

público portuario- se recurra a acciones divulgativas que publiciten o informen de las posibilidades que en este sentido ofrecen los puertos andaluces. Por ello, es recomendable sugerir aquí que la administración pública del sistema portuario observe la legislación relativa al empleo de imágenes no sexistas en futuras acciones de información y divulgación. El principio de no discriminación por razón de sexo en las campañas de información y divulgación que se lleven a cabo, debe ser también observado por parte de aquellas que emanen de entidades o empresas concesionarias o autorizadas para la explotación del dominio público portuario.

En conclusión las observaciones a las que se llega en relación con el impacto de género en el anteproyecto de ley de puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía son:

- Que para valorar el impacto de este anteproyecto de ley en relación con el género, es necesario disponer de datos desagregados por sexo, relacionados con el acceso y uso de las instalaciones y servicios portuarios, la presencia y posición de hombres y mujeres en los ámbitos de actividad relacionados con los puertos marítimos (pesquera, náutico-recreativa y de tráfico comercial) y la composición por sexo de los órganos de toma de decisión de las asociaciones, entidades o empresas relacionadas con el sector portuario.
- Que es fundamental recoger el objetivo de igualdad por razón de género de forma que abarque a todo el articulado del anteproyecto de ley, contemplándolo en las dos dimensiones fundamentales que conforman el sistema portuario: como objetivo y criterio de calidad transversal de los servicios y actividades portuarias, y como referente para la planificación y ordenación territorial y urbanística del sector portuario.
- Que es necesario materializar el compromiso de la Administración Pública con la generación de información que permita visualizar la realidad de hombres y mujeres, con estudios e informes que aporten



datos e indicadores relativos a su situación, necesidades, acceso y uso de las instalaciones y servicios portuarios; asimismo, es necesario que cualquier proyecto de actuación o gestión del sistema portuario lleve aparejado un informe sobre el impacto diferencial que este tiene/podría tener sobre mujeres y hombres.

- Que es conveniente contemplar el principio de paridad y establecer medidas de acción positiva en la composición de los órganos rectores de la administración pública portuaria, para que la segregación ocupacional vertical que se observa entre el personal de la Junta de Andalucía, no se reproduzca, ni aumenten las desigualdades entre mujeres y hombres en los ámbitos de toma de decisión relacionados con este sector.
- Que todo el texto del anteproyecto de ley debe ser revisado de forma que se adapte a un uso no sexista del lenguaje.
- Que en el caso de que se lleven a cabo campañas de información o divulgación institucional relacionadas con las instalaciones o servicios portuarios, se observe la legislación andaluza relativa al empleo de imágenes no sexistas.

Sevilla, 1 de marzo de 2006

## JUNTA DE ANDALUCÍA

## CONSEJERÍA DE SALUD

Dirección General de Salud Pública y Participación

CONSIDERACIONES AL INFORME A LA LEY DE FARMACIA DE ANDALUCÍA  
DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER.

A las observaciones en el apartado 2. a) y 2 b), párrafo sexto de la página 2 y sexto de la página 4.

Proceden las observaciones que a veces en literal y otras en implícito se contienen en el texto.

A la página 5, párrafo quinto. No procede la primera observación a este párrafo por cuando en ningún caso se puede utilizar el criterio subjetivo ante méritos valorables, según el baremo, y que deben ser acreditados adecuadamente. Procede la segunda observación en cuanto a incorporar la perspectiva de género.

Al artículo 1.1. No procede desde la perspectiva que el ámbito y objetivo general de la ley es aconsejable que se centre en la materia específica que se regula; lógicamente en el respecto al conjunto de normas de igual o superior rango que incidan directamente o indirectamente en lo regulado y sin perjuicio de que, en la introducción y en el conjunto del articulado, se incorporen determinadas previsiones que, sin ser propiamente de lo específico de la ley, sea conveniente proteger e impulsar. Precisamente como hacemos atendiendo, de esta manera, la inmensa mayoría de las observaciones de Instituto Andaluz de la Mujer.

Al artículo 3. No procede desde las consideraciones a la anterior observación.

Al artículo 4. Procede la observación formulada por lo que se incorpora el texto propuesto al final del último párrafo.

Al artículo 7. No procede desde la perspectiva de que son condiciones y requisitos enfocados desde la condición de establecimientos sanitarios.

Al artículo 9. Procede la observación formulada, por lo cual se incorpora el texto propuesto.

Al artículo 16. No procede la observación a los puntos 2 y 4, ya que en las fichas técnicas ya se tienen en cuenta, en su caso, lo indicado. Además, debe tenerse en consideración que no se puede ir a más desde la perspectiva que podríamos afectar a legislación sobre medicamentos, competencia del Estado.

Al artículo 17.2. No procede por cuanto lo propuesto es un requisito ya obligado en el Sistema Español de farmacovigilancia al cual debemos atenernos obligatoriamente.

Al artículo 18. No procede por cuanto ya viene recogida esta obligación en los datos de la receta a través de la consignación del titular de la prestación.

A los artículos 19, 21 y 42. Proceden las observaciones formuladas, por lo que se incorporan los textos propuestos en los artículos y apartados correspondientes.

Al artículo 35. No procede por cuanto ya de por sí se incorpora esa igualdad de oportunidades en el procedimiento.

Al artículo 59.1. Procede la observación al apartado c), en cuanto a la visualización de la información desagregada por sexo según sea posible, por lo que se incorpora al texto. Proceden las observaciones a los apartados d) y m), por lo que se incorporan a los respectivos textos. Al apartado r), no procede la observación por cómo ha de crearse el sistema de información sobre medicamentos que ya de por sí tiene en cuenta lo indicado.

Al artículo 66.1. No procede la observación formulada por cuanto es una definición a efectos de ley, que ya recoge estos objetivos en base a las observaciones de carácter general que nos hace el informante.

Al artículo 68. No procede por ser objeto de legislación sobre medicamentos de competencia Estatal.

Al artículo 69. No procede por innecesario por cuanto ya es obligado en el Sistema Español de Farmacovigilancia.

Al artículo 75. Procede lo relativo a especificar "persona facultativa prescriptora". No proceden el resto de observaciones a este artículo por innecesario por cuanto ya se obliga a lo indicado.

Al artículo 77. No proceden por innecesarias, ya que se prevén en la evaluación sobre medicamentos.

Al artículo 79.3 No procede por innecesario, por cuanto ya es obligado por el Sistema Español de Farmacovigilancia.

Al Artículo 95. No procede la observación formulada, por cuanto se trata de un plan específico previo.

A las observaciones a los artículos 96, 97 y Anexo IV, punto 6 Proceden las observaciones formuladas, que se incorporan al texto según lo indicado.

A las observaciones a los artículos 42, 76.punto 1, y 4, Anexo I, séptima, Anexo III. punto IV. Proceden las observaciones formuladas, que se incorporan al texto según lo indicado.

A las observaciones al punto 4 del informe. Proceden las observaciones formuladas, salvo las que se refieren a la licenciatura en farmacia como grado, que no es obligada; a los adjuntos y sustitutos que puede generar confusión en base a las consideración de colaboradores y en aquellos casos en que la sustitución del "farmacéutico o farmacéutica" por "persona licenciada en farmacia" pudiera generar confusión en cuanto al régimen de responsabilidades en la oficina o servicio de farmacia. Con las salvedades expuestas, se incorporan al texto según lo indicado.

241 01


443

A la observaciones a la Introducción, página 7, tercer párrafo; artículo 73, punto 2; artículo 79, punto nuevo y artículo 92, punto 1. Proceden las observaciones formuladas, que se incorporan al texto según lo indicado.

INFORME  
CONSEJERIA

Sevilla 21 de marzo de 2006

EL JEFE DE SERVICIO DE FARMACIA



Fdo. Ignacio Lobato

REleg: 200/14-2-06

42



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

R E C E P T O	JUNTA DE ANDALUCÍA CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
	10 FEB. 2006
	3713

Fecha: 6 de febrero de 2006

Ref.: Dirección, EM/mm

Su ref.: MJG/LJ/CC/cgt/1901/05

Asunto: Informe Impacto de Género  
nº 5

CONSEJERÍA DE SALUD

Ilma. Sra. Secretaria General Técnica

Avda. de la Innovación, s/n

Edificio Arena

41020 - SEVILLA

190/05

122 / 07


INFORME

IAI

742/05-S

S A L I D A	JUNTA DE ANDALUCÍA CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL REGISTRO GENERAL
	08 FEB. 2006
	Registro General 418 Sevilla

En relación al anteproyecto de "*Ley de Farmacia de Andalucía*", con fecha de registro de entrada en este Instituto el pasado día 26 de enero, adjunto le remito observaciones al Informe de Evaluación de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno.

  
LA DIRECTORA  
Soledad Ruiz Segúin



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

## OBSERVACIONES QUE EMITE EL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER AL ANTEPROYECTO DE LEY DE FARMACIA DE ANDALUCÍA.

Dado que el objetivo principal de este anteproyecto es la ordenación de los servicios y establecimientos farmacéuticos, así como las obligaciones que se derivan de la atención farmacéutica que se presta en los mismos a la ciudadanía, y dada la incidencia que éste tendrá tanto en las usuarias y usuarios de los servicios farmacéuticos como los y las profesionales del sector, se puede afirmar que es:

Pertinente al género

☒

No pertinente

☐

Con carácter general, ya que el Decreto que nos ocupa regula una materia que tiene como público destinatario final a mujeres y hombres, se considera fundamental dejar patente la necesidad de incorporar la perspectiva de género en todo el proceso que se emprende.

Así, teniendo en cuenta la normativa de aplicación en relación con la igualdad de género, se realizan las siguientes observaciones:

1. El Decreto 93/2004 del 9 de marzo por el que se regula el informe de evaluación de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno (BOJA núm. 50 de 12.03.04), dispone en el Art. 4 que el informe de evaluación del impacto de género deberá describir las diferencias existentes entre mujeres y hombres en el ámbito de actuación de las medidas que pretenden regular en la disposición de que se trate, incluyendo datos desagregados por sexo, recogidos en estadísticas



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

oficiales, así como el **análisis del impacto potencial** que la aprobación de dichas medidas producirá entre las mujeres y hombres a quienes van dirigidas.

La obtención de datos desagregados por sexo permite analizar la realidad y valorar si lo previsto en la norma en cuestión, atiende de forma igualitaria a las mujeres y los hombres a quienes afectan las medidas que se pretenden regular.

Así, algunos de los datos a recabar para visualizar la realidad de hombres y mujeres en relación con la materia que se regula pueden ser:

- Nº de establecimientos por sexo de la persona titular y tipo de establecimiento.
- Nº de establecimiento por tipo en función del sexo de la persona titular y de la persona regente o sustituta, si la hubiera.
- Nº de trabajadores y trabajadoras que forman parte del personal auxiliar, por tipo de establecimiento.
- Nº de personas titulares de plazas del Servicio Farmacéutico en centros hospitalarios, penitenciarios, etc., por sexo.

De no contar con esta información, se sugiere inste a las Áreas a las que compete, o en su caso, al Instituto de Estadística de Andalucía, para que incluya y analice estos datos para próximas ocasiones, y proceda en cumplimiento del artículo 22, letra e) de la *Ley 8/2002 de 17 de diciembre del Plan Estadístico de Andalucía 2003-2006* (BOJA 154, de 31.12.02).

2. Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 139 de la *Ley por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas para 2004* (BOJA núm.251 de 31 de diciembre), en todos los reglamentos se debe tener en



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

cuenta de forma efectiva el **objetivo de la igualdad por razón de género**, y en el Anteproyecto de Ley que nos ocupa no se incluye este objetivo.

Así, a partir de lo dispuesto, se sugiere la inclusión de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como objetivo y criterio de calidad transversal, atendiendo al impacto positivo que tiene la inclusión de esta dimensión en la disminución de las desigualdades. La Administración Central de la Junta de Andalucía como entidad con competencia para regular las actuaciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de la salud de la ciudadanía andaluza, debe implicarse directa y activamente en el trabajo hacia la superación de las desigualdades de género que se producen en este ámbito, al que se dirige además el Anteproyecto de Ley que nos ocupa.

Las fórmulas propuestas para visibilizar el compromiso con la igualdad en el texto del Anteproyecto de Ley son las siguientes:

- a. Dejar constancia expresa en la Introducción o añadir un nuevo artículo en el Capítulo relativo a las Disposiciones Generales que recoja la igualdad de oportunidades de la forma siguiente:

*La presente Ley tendrá en cuenta de modo transversal el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.*

- b. Incluir la igualdad de oportunidades en cada uno de los siguientes artículos:

- **Introducción.** Se sugieren los siguientes cambios:





Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

Página nº 2, párrafo sexto. Se sugiere completar este párrafo de la siguiente forma:

*"En este marco, la ordenación farmacéutica no puede ser objeto de un enfoque aislado, sino que ha de quedar integrada en la política sanitaria que se desarrolla en esta comunidad, teniendo en cuenta las características y peculiaridades que pueden influir en el servicio farmacéutico, especialmente las derivadas de la atención a las necesidades y demandas de las mujeres y hombres que se benefician de sus servicios."*

Página 4, párrafo sexto. Se sugiere completar el párrafo de la siguiente forma:

*"..., prestando especial atención a las necesidades de mujeres y hombres, y las diferentes circunstancias en las que unas y otros se relacionan con la salud y la enfermedad."*

Página 5, párrafo quinto. Se sugieren las siguientes modificaciones:

*... y, de otro lado, desde la perspectiva que tiene el objetivo legal de mejora de la atención farmacéutica cuya exigencia requiere conceder especial consideración a la cualificación de los o las profesionales farmacéuticos que accedan a la titularidad de la oficina de farmacia, basándose en la valoración de las competencias profesionales y evitando el uso de criterios subjetivos más allá de las mismas. Además de tener en cuenta, desde una perspectiva social y de género, las situaciones de desempleo, discapacidad y de ejercicio profesional en ámbitos de especial aislamiento o penosidad.*

- Artículo 1. Objetivos y ámbito de aplicación. Punto nº 1. Se sugiere añadir a este punto:



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

*..., así como en el que ofrece la normativa existente en materia de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.*

- **Artículo 3. Competencias.** Se sugiere completar el párrafo de la siguiente forma:  
*... y garantizando el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.*
- **Artículo 4. De los ámbitos de atención farmacéutica.** Se sugiere completar el último párrafo de la siguiente forma:  
*..., adaptada a las necesidades de las mujeres y los hombres que los utilizan.*
- **Artículo 7. De las condiciones y requisitos generales de los establecimientos y servicios farmacéuticos.** Punto nº 1. Se propone la inclusión de un nuevo apartado que explicita el compromiso con el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como la aplicación de la normativa existente en materia de género.
- **Artículo 9. De la colaboración con las autoridades sanitarias.** Se propone completar el artículo de la siguiente forma:  
*... y contemplando la perspectiva de género en su desempeño.*
- **Artículo 16. De los protocolos en la atención farmacéutica.** Se propone la modificación de los siguientes puntos:  
Punto nº 2. Se sugiere la siguiente modificación:  
2. Para la selección de los medicamentos incluidos en el protocolo se tendrán en cuenta criterios de seguridad y eficacia, según fuentes bibliográficas de reconocida solvencia, *así como los efectos que dicho medicamento puede tener en mujeres y en hombres,*



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

*seleccionando aquellos más efectivos y con menos efectos secundarios en cada caso.*

**Punto nº 4.** Se sugiere completar este punto:

*..., teniendo en cuenta las diferencias fisiológicas de mujeres y hombres y especificando los efectos de los medicamentos en unas y otros, así como los síntomas a los que responden en cada caso.*

- **Artículo 17. De la Farmacovigilancia. Punto nº 2.** Se propone la inclusión de un nuevo apartado que refleje la necesidad de registrar y comunicar los efectos adversos de los medicamentos y productos sanitarios, especificando el sexo de la persona que presenta los síntomas.

*d) En las actuaciones a las que se refieren los mencionados apartados deberá tenerse en cuenta el sexo de la persona que presenta los efectos adversos causados por los medicamentos o productos sanitarios.*

- **Artículo 18. De la vigilancia, control y custodia de las recetas dispensadas y otros documentos sanitarios. Punto nº 5.** Se sugiere completar este punto de la siguiente forma:  
*... especificando el sexo de la persona que recibe el servicio.*

- **Artículo 19. De las funciones relacionadas con la prevención de la enfermedad y promoción de la salud.** Se propone la incorporación de un nuevo punto que explicita el compromiso de las y los profesionales de la farmacia de incorporar la perspectiva de género en todas sus actuaciones para la prevención de la enfermedad y promoción de la salud.

*4. El desempeño de estas funciones por parte de cada profesional debe incorporar la perspectiva de género, garantizando actuaciones*

*que se adapten a la realidad de las mujeres y hombres en el ámbito de la salud.*

- **Artículo 21. De los derechos y deberes de los ciudadanos y ciudadanas.** Se sugiere la modificación del apartado b) de la siguiente forma:

b) Disponer de un servicio farmacéutico en condiciones de igualdad con el resto de la población, *capaz de responder a las necesidades de las mujeres y los hombres en materia de salud.*

- **Artículo 35. Principios generales. Punto nº 3.** Se sugiere completar este punto:

*... y principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.*

- **Artículo 42. Del procedimiento de adjudicación de nuevas oficinas de farmacia. Punto nº 1.** Se sugiere completar el párrafo:

*..., que garantizará el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todo su desarrollo.*

- **Artículo 59. De las funciones de los Servicios Farmacéuticos y Depósitos de Medicamentos. Punto nº 1.** Se sugiere la modificación de los siguientes apartados:

**Aparatado c).** Se propone incorporar al párrafo:

*..., que visibilicen la información desagregada por sexo siempre que sea posible, lo que permitirá el planteamiento de medidas adaptadas a las necesidades de mujeres y hombres.*

**Apartado d).** Se propone la incorporación de un nuevo subapartado que garantice que las labores de planificación, coordinación y ejecución de programas y actividades se realicen integrando la perspectiva de género y facilitando información que permita evaluar el impacto de género de dichas actuaciones. Se sugiere lo siguiente::

9º Cada una de las actuaciones mencionadas ha de integrar la perspectiva de género en sus objetivos y desempeño, garantizando el aporte de indicadores de género que faciliten información sobre el impacto que cada actividad tendrá sobre mujeres y hombres.

**Apartado m).** Se sugiere completar el párrafo de la siguiente forma:  
*..., y que deberán contemplar la variable sexo como variable de registro.*

**Apartado r).** Se propone completar este apartado:  
*..., visibilizando la situación de las mujeres y los hombres en cada caso.*

- **Artículo 66. Conceptos básicos. Apartado nº 1.** Se sugiere completar el párrafo:  
*..., adaptada a las necesidades de las mujeres y hombres que los componen.*
- **Artículo 68. Derechos y deberes de los pacientes en relación con los tratamientos farmacológicos. Punto nº 1. Apartado b).** Se propone la siguiente modificación:  
b) Que los medicamentos necesarios para el tratamiento de sus afecciones, se les prescriban bajo las condiciones y circunstancias para las que existen pruebas científicas, constatadas y validadas para cada sexo, de su utilidad y seguridad y, por tanto, conforme a lo establecido en sus respectivas autorizaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo.
- **Artículo 69. Principios generales de actuación profesional en el uso racional de los medicamentos. Punto nº 4.** Se propone añadir:  
*..., especificando el sexo de la persona que muestra la reacción.*

- **Artículo 75. Medidas de control de la prescripción.** Se sugiere modificar los puntos:

**Punto nº 2.** Se plantea la siguiente corrección:

2. Cuando razones de interés sanitario y/o económica así lo aconsejen, el órgano competente en la gestión de la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía mediante resolución, podrá exigir que, simultáneamente a la prescripción de determinados medicamentos, o grupos de medicamentos, se emita un informe justificativo y motivado por parte *de la persona facultativa prescriptora, en el que se especifique el sexo de la persona receptora.*

**Punto nº 3.** Se propone modificar:

3. El órgano competente en la gestión de la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de la Junta de Andalucía, podrá aprobar protocolos de utilización de los medicamentos en el tratamiento de patologías de alto impacto sanitario y/o económico, *especificando la incidencia de cada uno de ellos en las mujeres y los hombres.* Igualmente podrá someter a evaluación previa las propuestas que los médicos hagan de dichos tratamientos, estableciendo, en cada caso, los informes a cumplimentar *que contendrán datos desagregados por sexo,* y el procedimiento a seguir.

- **Artículo 78. Actuaciones de formación e información de la administración.** Se sugiere modificar los puntos:

**Punto nº 1.** Se sugiere modificar este punto:

Dicha formación e información serán objetivas, rigurosas y basadas únicamente en la evidencia científica *que garantice la validación de los productos en mujeres y en hombres,* y datos económicos contrastados.

**Punto nº 2.** Se propone completar el texto:

*... adaptados a la forma en que mujeres y hombres se enfrentan a sus problemas de salud y al consumo de medicamentos y productos sanitarios.*

- **Artículo 79. Ayudas y soportes técnicos para el uso racional de los medicamentos.** Punto nº 3. Se propone la siguiente modificación:  
*... Para mejorar esta seguridad, dicha administración promoverá y facilitará la notificación telemática, al citado centro, de las reacciones adversas a los medicamentos, especificando el sexo de las personas que muestran dichas reacciones adversas, por parte de los profesionales sanitarios que las detecten.*
  
- **Artículo 95. Promoción de la investigación y producción de los medicamentos estratégicos.** Se propone completar este artículo:  
*... garantizando la integración del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres tanto en el diseño del Plan como en la ejecución del mismo.*
  
- **Artículo 96. Observatorio del mercado farmacéutico.** Se propone completar el artículo:  
*... y desarrollará las herramientas precisas para recoger y proporcionar la información desagregada por sexo.*
  
- **Artículo 97. Desarrollo reglamentario.** Se propone la siguiente modificación:  
Reglamentariamente se establecerán las bases reguladoras del antes citado Plan, que deberán recoger el objeto y vigencia, entidades al cual va dirigido, comités de asesoramiento y coordinación, así como demás aspectos que permitan su puesta en funcionamiento, *garantizando en cada fase de su diseño e*

*implantación la integración del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.*

- **Anexo IV. Baremo de méritos. Punto nº 6.** Se propone la corrección siguiente:

*En caso de igualdad de puntuación y atendiendo al principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, tendrá preferencia...*

3. En todas las comisiones se tiene que tener en cuenta de forma efectiva la **composición paritaria de los órganos** consultivos y de asesoramiento de la Administración de la Junta de Andalucía de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 140 de la *Ley por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas para 2004* (BOJA núm.251 de 31.12.03). El presente Anteproyecto de Ley no recoge el respeto del principio de paridad en la composición de los órganos consultivos y de asesoramiento.

Se proponen las siguientes modificaciones en diferentes puntos del articulado:

- **Artículo 42. Del procedimiento de adjudicación de nuevas oficinas de farmacia. Punto nº 6.** Se propone completar este punto:  
*La composición de la Comisión de Baremación deberá tender a la composición paritaria siempre que sea posible, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 140 de la Ley por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas para 2004.*
- **Artículo 76. Comisiones Asesoras de Uso Racional de los Medicamentos.** Se propone la modificación de los puntos:  
**Punto nº 1.** Se sugiere completar este punto de la siguiente forma:



..., buscando el equilibrio entre mujeres y hombres en su composición.

**Punto nº 4.** Se propone incorporar:

4. En cada distrito de atención primaria funcionará una comisión multidisciplinar para el uso racional de los medicamentos, que será la responsable de seleccionar los principios activos que, cumpliendo los criterios generales del artículo 68 y 69, podrán ser adquiridos para ser administrados en sus centros, *y que respetará el principio de composición paritaria siempre que sea posible.* Igualmente, será responsable de evaluar la calidad de la farmacoterapéutica que se aplica en sus centros y emitir propuestas de mejora a los profesionales y, en su caso, de control, a la dirección del distrito. Dicha comisión podrá constituir comisiones delegadas en sus centros de salud para el desarrollo de idénticas funciones en el ámbito de los mismos, *que igualmente tenderán a una composición equilibrada de mujeres y hombres.*

- **Anexo I. Séptima. Comisión de Baremación.** Se sugiere completar este párrafo:

*...y respetando el principio de composición paritaria, siempre que sea posible.*

- **Anexo III. Punto IV. Comisión de Baremación.** Se propone completar el punto:

*..., y tendiendo al equilibrio de mujeres y hombres en su composición.*

- 4. De acuerdo con la Orden de 24 de noviembre de 1992, conjunta de la Consejería de Gobernación y de la Consejería de Asuntos Sociales, sobre la eliminación del lenguaje sexista en los textos y documentos administrativos (BOJA núm. 126 de 05.12.1992), se hace necesario revisar la redacción

asegurando que el lenguaje utilizado facilite la visibilización de mujeres y hombres en todos los aspectos tratados.

El esfuerzo por emplear un lenguaje no sexista queda patente a lo largo de todo el Anteproyecto de Ley analizado. No obstante, esta utilización ha de ser sistemática a lo largo de todo el documento, a ser posible uniformando criterios de expresión. Siguiendo la recomendación de las reglas contempladas en la *Instrucción de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de Viceconsejeros para evitar un uso sexista del lenguaje en las disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía*, se hacen las siguientes observaciones:

- El desdoblamiento es un recurso correcto. En el caso de Anteproyecto de Ley que nos ocupa, se sugiere el empleo de otro recurso, de forma sistemática: la búsqueda de una expresión que incluya a ambos sexos. De esta forma se aligera la lectura del documento. Por ejemplo:

El farmacéutico y la farmacéutica → La persona con la licenciatura de farmacia

El farmacéutico o farmacéutica titular → La persona titular de la farmacia

Los ciudadanos y las ciudadanas → La ciudadanía

El médico o médica prescriptor → El o la profesional de la medicina que prescribe

Sustituto o sustituta → Persona sustituta, o bien, si la redacción lo permite, quien sustituya

Colaborador del titular, regente, regenta, sustituto o sustituta → Persona colaboradora de la que es titular, quien regenta o quien la sustituye

Adjudicatarias o adjudicatarios → Personas adjudicatarias

Director o directora técnico → Dirección técnica

- Cuando se mencione a lo largo del texto un nombre empleando el género gramatical masculino como genérico universal deberá sustituirse por la mención expresa también del femenino o se buscará una expresión que incluya a ambos sexos. Por ejemplo:

El usuario → La persona usuaria, o bien, el usuario y la usuaria

El individuo receptor → La persona receptora

Los beneficiarios → Los beneficiarios y beneficiarias, o bien, personas beneficiarias

Los facultativos → Los facultativos y las facultativas

Técnico → Técnico y técnica, o bien, personal técnico

El adjudicatario → La persona adjudicataria

Los interesados → Las personas interesadas, o bien, los interesados y las interesadas

Discapacitados → Personas con alguna discapacidad

Clínicos → Personal clínico, o bien, clínicos y clínicas

Expertos → Personas expertas, o bien, expertas y expertos

El presunto infractor → La persona que comente presuntamente la infracción

Admitidos y excluidos → Personas admitidas y excluidas

- Cuando se haga uso de términos que no llevan marca de género, es necesario observar los artículos o determinantes que lo acompañan pues estos le atribuyen la marca de género que por sí mismo no poseen:

Los profesionales → Los y las profesionales

Los profesionales sanitarios → Los y las profesionales de la sanidad

Los pacientes → Los y las pacientes

Los solicitantes → Las personas solicitantes

Los solicitantes admitidos y excluidos → Las personas solicitantes admitidas y excluidas

Al titular → A quien es titular, o bien, a la persona titular

5. Conforme a la Orden conjunta de 19 de febrero de 1993 de las Consejerías de la Presidencia y de Asuntos Sociales, por la que se dictan normas para el cumplimiento del principio de no discriminación por razón de sexo en el empleo de imágenes en la **información y divulgación** de la acción institucional de la Junta de Andalucía (ORDEN de 06.03.93), se debería recoger y tener presente dicho objetivo de un modo explícito en:

- **Introducción. Página 7. Párrafo tercer.** Se propone completar el párrafo de la siguiente forma:  
*..., y teniendo en cuenta el principio de no discriminación por razón de sexo en aquellas acciones de formación e información que se lleven a cabo.*
- **Artículo 73. Actuaciones de los distritos de atención primaria y hospitales para garantizar el uso racional de los medicamentos. Punto nº 3.** Se propone completar este punto de la siguiente forma:  
*..., aplicando el principio de no discriminación por razón de sexo en cada una de ellas.*
- **Artículo 77. Sistema de información sobre prestación farmacéutica. Punto nº 2.** Se propone completar este punto:  
*Del mismo modo, este sistema cumplirá la normativa vigente en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicando el principio de no discriminación por razón de sexo en aquellas actuaciones de formación que plantee.*

- **Artículo 79. Ayudas y soportes técnicos para el uso racional de los medicamentos.** Se propone la inclusión de un nuevo punto que explicita el compromiso con la igualdad en cada actuación de información, divulgación y promoción que se emprenda. Puede quedar redactado de la siguiente forma:

*Cualquier actuación de promoción, información y formación dirigida a los profesionales sanitarios tendrá en cuenta el cumplimiento del principio de no discriminación por razón de sexo.*

- **Artículo 92. De la promoción y publicidad de los medicamentos.**

**Punto nº 1.** Se sugiere completar este punto de la siguiente forma:

*..., así como a la normativa vigente en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombre, referida al cumplimiento de no discriminación por razón de sexo en las acciones información y divulgación.*

**Las conclusiones** según las observaciones efectuadas en relación con el impacto de género en el **Anteproyecto de Ley de Farmacia de Andalucía**, son:

- Que es necesario contar con datos desagregados por sexo que permitan visibilizar la situación de las y los profesionales en este sector, así como la incidencia que sus actuaciones tienen en la superación de las desigualdades entre mujeres y hombres en el ámbito de la salud pública.
- Que es fundamental recoger el objetivo de la igualdad por razón de género de forma transversal en todo el articulado afectado por el mismo.
- Que se debe profundizar en la sistematización del uso no sexista del lenguaje en todo el documento, pese a que ha quedado patente el esfuerzo en la redacción del Anteproyecto de Ley que nos ocupa.
- Que se debe velar porque las acciones de información y divulgación que se financien estén libres de contenidos sexistas.

JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA  
Dirección General de Tributos e Inspección TributariaINFORME  
CONSEJERÍAINFORME DE EVALUACION DEL IMPACTO DE GENERO DEL  
ANTEPROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CREA LA AGENCIA  
TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA.

El artículo 43 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dispone en su apartado segundo que el anteproyecto de ley irá acompañado por una memoria justificativa, los estudios e informes sobre la necesidad y oportunidad del mismo, la memoria sobre el impacto de genero de las medidas que se establezcan, así como por una memoria económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar y su forma de financiación.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 93/2004, de 9 de marzo, por el que se regula el informe de evaluación de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno, previsto en el artículo 139.1 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprobaron medidas fiscales y administrativas, con la finalidad de que tal normativa tenga en cuenta de forma efectiva la igualdad por razón de género, se informa:

Que el anteproyecto de Ley adjunto, en cuanto norma de autoorganización al contemplar la creación de la Agencia Tributaria de Andalucía, ente institucional al que se le confía en régimen de descentralización funcional y especial régimen de autonomía las actividades administrativas de aplicación de tributos, el ejercicio de la potestad sancionadora en materia tributaria y de recaudación ejecutiva de los demás ingresos de Derecho público, carece de impacto de género.

Sevilla, 22 de febrero de 2007.

DIRECTORA GENERAL DE TRIBUTOS  
E INSPECCIÓN TRIBUTARIA

Fdo. Isabel Comas Rengifo.

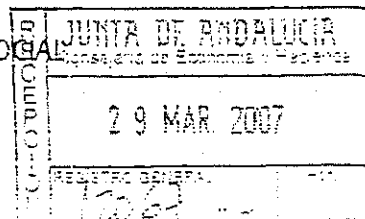


RE 206 F 28-3-07

Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

INFORME

IAI



23 / 07

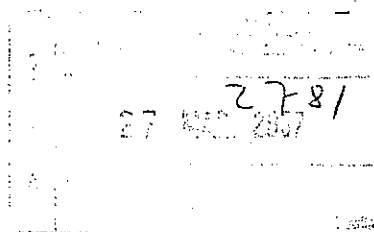
Fecha: 19 de marzo de 2007

Ref.: Dirección. EM/mm

Su Ref.: L-1/2007

Asunto: Informe Impacto de Género  
nº 25

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA  
Secretaría General Técnica  
C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n  
Edif. Torretriana, 6ª planta  
41071 - SEVILLA



En relación al anteproyecto de "*Ley por la que se crea la Agencia Tributaria de Andalucía*", con fecha de registro de entrada en este Instituto el pasado día 7 de marzo, adjunto le remito observaciones al Informe de Evaluación de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno.



Soledad Ruiz Seguin



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

OBSERVACIONES QUE EMITE EL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER AL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE *TRIBUTOS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA* DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CREA LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA.

Si bien podría pensarse que la creación de un "ente institucional" como la **Agencia Tributaria de Andalucía**, no es pertinente al Género por tratarse de una norma de autoorganización con impacto neutro sobre la igualdad de Oportunidades. Sin embargo resulta evidente que tanto su estructura organizativa, como el funcionamiento de la misma, en cuanto a la gestión de recursos humanos, la oferta pública de empleo, los sistemas de acceso, y la relación de puestos de trabajo, tendrá un impacto directo en las personas. Así como algunos aspectos de la Gestión Económico-Financiera de la misma. Y que un análisis de los datos o información obrante sobre el ámbito de actuación que regulará, posibilitaría la evaluación del impacto de género previsto con la aprobación de la norma. Por lo que, concluimos que este anteproyecto es:

Pertinente al género



No pertinente



Visto el anteproyecto de ley y el Informe de Evaluación de Impacto de Género emitido, y teniendo en cuenta la normativa de aplicación en relación con la Igualdad de Género (ver Anexo), se realizan las siguientes observaciones:

1. El *Decreto 93/2004 del 9 de marzo por el que se regula el informe de evaluación de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno* (BOJA núm. 50 de 12 de marzo), en su artículo 4, dispone que el informe de evaluación del impacto de género debiera describir, al menos, las diferencias existentes entre mujeres y hombres en el ámbito de actuación de las medidas que pretenden regular en la disposición de que se trate, **incluyendo los datos desagregados por**





Instituto Andaluz de la Mujer

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

sexo, recogidos en estadísticas oficiales, así como el análisis del impacto potencial que la aprobación de dichas medidas producirá entre las mujeres y hombres a quienes van dirigidas. Se realiza las siguientes propuestas:

- información desagregada por sexo sobre las personas que por su formación y cualificación podrían optar a la provisión de los puestos de trabajo de la Agencia. Funcionariado de Cuerpos más relacionados, y por tanto con más posibilidades de adscripción, como son Administradores Generales y Gestión Administrativa, opción Gestión Financiera.
- información desagregada existente, sobre personas sujetas a tributación de la Comunidad Autónoma.

La información que arrojarían estos datos, permitirá identificar y analizar los posibles desequilibrios entre ambos sexos y valorar si lo previsto en la norma atiende de forma igualitaria a las mujeres y los hombres a quienes afectan las medidas que se pretenden regular.

De no contar con esta información, se sugiere inste al Departamento de Estadística de esa Consejería, o en su caso, al Instituto de Estadística de Andalucía, para que incluya y analice estos datos para próximas ocasiones, y proceda en cumplimiento del artículo 22, letra e) de la *Ley 8/2002 de 17 de diciembre del Plan Estadístico de Andalucía 2003-2006* (BOJA 154, de 31.12.02).

Sobre este aspecto y, dado que estamos ante la creación de una nueva entidad, sería relevante, y además estratégico desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que en la Gestión Económico-Financiera de la Agencia, la **generación de información de carácter cuantitativo Agencia** (gestión, liquidación, recaudación, inspección, sanción) en el desarrollo de sus funciones (Art. 3) se concbiese



Instituto Andaluz de la Mujer

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

de forma desagregada por sexo, inclusive en el caso de personas jurídicas<sup>1</sup> con el fin de disponer en el futuro de información susceptible de ser analizada aplicando la perspectiva de género, tal como se recoge en el Proyecto de Ley de Igualdad que se está tramitando actualmente en el Parlamento de Andalucía.

2. Por otra parte, en todos los reglamentos se tiene que tener en cuenta de forma efectiva el **objetivo de la igualdad por razón de género**, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 139 de la *Ley por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas para 2004* (BOJA núm.251 de 31 de diciembre) y en el Anteproyecto de Ley que nos ocupa no se incluye entre los objetivos la igualdad por razón de sexo.

Tanto en la **Exposición de Motivos** como en el **Capítulo I**, en su apartado Principios de Regulación, se declara que se tendrá en cuenta *la igualdad*, aludiendo con ello a la necesaria Igualdad Social que desde la Administración Andaluza se pretende garantizar en la aplicación de los recursos públicos. Así mismo, sería conviene explicitar que *se garantizará la igualdad entre hombres y mujeres*, por entender que históricamente la igualdad social no ha tenido en cuenta las desigualdades de género, ni la desigual oportunidad de mujeres y hombres en el acceso a los recursos. Podría ser de la siguiente forma:

*Artículo 2.a) Legalidad, justicia, generalidad e igualdad en la aplicación de los tributos, asegurando en todo caso el respeto a los derechos y garantías y la igualdad de oportunidades, de quienes están obligados a tributar.*

Otras partes de la norma donde debiera analizarse la posibilidad de incluir el principio la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres son:

<sup>1</sup> En el caso de las personas jurídicas se considera que la propiedad es masculina si los hombres tiene el 51% de las acciones o de los votos y femenina en el caso contrario.



Instituto Andaluz de la Mujer

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

At. 4. Se debería incluir que el Estatuto por el que se regirá la Agencia contemplará la aplicación transversal del principio de Igualdad de Oportunidades

- Art. 9.f Se podría mencionar explícitamente que las líneas generales de la política de Recursos Humanos de la Agencia contribuirá, sin perjuicio de los principios generales de la Función Pública, al principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. :

Con ello, de forma genérica, se estaría atendiendo a integrar el enfoque de género en:

- la subrepresentación de mujeres en los puestos de trabajo de nivel técnico y máxima responsabilidad en la Función Pública.
- el diseño de las pruebas de acceso a los nuevos Cuerpos, eliminando posibles sesgos de género.
- la composición de las Comisiones de Selección,
- la Formación de perfeccionamiento, que debería incluir materias relacionadas con el análisis de género de la actividad tributaria y del impacto de género de la misma.

3. Conforme al Art. 140 de la Ley 18/2003, por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas para 2004 (BOJA núm.251 de 31 de diciembre), en todas los órganos consultivos y de asesoramiento se debe tener en cuenta de forma efectiva la **composición paritaria de los mismos**, y en el Anteproyecto de Ley que nos ocupa se establecen varios órganos de la Administración de la Junta de Andalucía que deben seguir este precepto, así: Consorcio Paritario con la Administración Estatal, Consejo Rector, Grupos de Trabajo, Comisión de Control, etc.
4. Y por último, y con carácter general, de acuerdo con la Orden de 24 de noviembre de 1992, conjunta de la Consejería de Gobernación y de la Consejería de Asuntos Sociales, sobre la eliminación del lenguaje



Instituto Andaluz de la Mujer

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

sexista en los textos y documentos administrativos (BOJA núm. 126 de 05.12.1992) y conforme a la Instrucción de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de Viceconsejeros para evitar un uso sexista del lenguaje en las disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía, se felicita al órgano emisor del anteproyecto de ley por el esfuerzo y la consecución de un lenguaje claramente inclusivo de mujeres y de hombres utilizado. No obstante pasamos a enumerar algunas posibles modificaciones:

Exposición de Motivos I: *un servicio a los ciudadanos, por servicio a la ciudadanía.*

Exposición de Motivos II: *en la responsabilidad de los gestores, por : en la responsabilidad de quienes gestionen por los resultados de su actuación.*

Artículo 2.a) *en todo caso el respeto a los derechos y garantías de los obligados tributarios. Modificar por: de quienes están obligados a tributar.*

Artículo 2.b) *Servicio a los ciudadanos, por: Servicio a la ciudadanía.*

Artículo 9.e) *Cuatro vocales nombrados, por: Cuatro vocalías nombradas por....*

Artículo 9.3. *...quien ostente la Presidencia nombrará a un funcionario de la Agencia....por: ....nombrará una persona funcionaria de la Agencia*

Artículo 10. 1.....a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda ....por: .....a propuesta de la persona titular de la Consejería de ....

Disposición Adicional Cuarta. 3. ....el afectado al que los responsables de los ficheros de la Agencia denieguen.....podrá poner tal decisión en conocimiento del Director de la Agencia.....;por: ...la persona

23 / 07



Instituto Andaluz de la Mujer

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

...ectada al que los responsables de los ficheros de la Agencia  
denieguen.....podrá poner tal decisión en conocimiento de la  
Dirección de la Agencia.....

Es todo cuanto cabe observar por parte de este organismo, al anteproyecto de  
Ley de la Agencia Tributaria de Andalucía y al Informe de Evaluación de  
Impacto de Género emitido.

Sevilla, 19 de Marzo de 2007

LA DIRECTORA

A. Soledad Ruiz Seguin



Instituto Andaluz de la Mujer

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

**INFORME INFORMATIVA VIGENTE SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES QUE AFECTAN A LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO.**

Objetivo Igualdad de Género..... art. 139 de la *Ley 18/2003, de 29 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas.*

Composición Paritaria de órganos.....art. 140 de la *Ley 18/2003, de 29 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas.*

Datos desagregados por sexo.....art.22 de la *Ley 8/2002, del Plan Estadístico de Andalucía 2003-2006.*

Lenguaje administrativo no sexista.....*Orden de 24 de noviembre de 1992, conjunta de la Consejería de Gobernación y de la Consejería de Asuntos Sociales, sobre la eliminación del lenguaje sexista, en los textos y documentos administrativos*

Información y publicidad no sexista .....*Ley 6/2005, de 8 de abril, relativa a la actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía y Orden de 19 febrero 1993, de la Consejería de la Presidencia, relativa a normas para el cumplimiento del principio de no discriminación por razón de sexo en la información y divulgación de la de la Junta de Andalucía*

Evaluación del Impacto de género.....*Decreto 93/2004, de 9 de marzo por el que se regula el Informe de Evaluación de Impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno.*

Prioridad presupuestaria de las políticas de Igualdad..... *Ley 11/2006, de 27 de diciembre de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el 2007.*

02/08

## **INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO QUE EMITE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL, RESPECTO AL ANTEPROYECTO DE LEY QUE REGULA EL ACCESO DE LOS MUNICIPIOS ANDALUCES AL RÉGIMEN DE ORGANIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE GRAN POBLACIÓN.**

El artículo 139.1 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, establece la obligatoriedad de incluir en la tramitación de los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno, un informe de evaluación del impacto por razón de género, mandato que ha sido desarrollado en el Decreto 93/2004, de 9 de marzo, de la Consejería de la Presidencia.

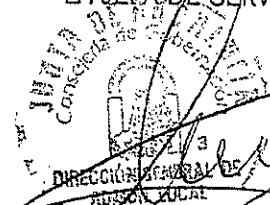

En este sentido, teniendo en cuenta que desde este centro directivo se han iniciado los trámites respecto a la aprobación de una *Ley que regula el acceso a los municipios andaluces al régimen de organización de los municipios de gran población*, procede afirmar que en el proyecto normativo que nos ocupa, se da cumplimiento a lo dispuesto en la citada Ley 18/2003, de 29 de diciembre.

La citada Ley tendrá también presente, el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Todo ello, sin perjuicio de mejor criterio fundado en derecho.

Sevilla, 15 de enero de 2007.

LA JEFA DE SERVICIO DE RÉGIMEN JURÍDICO,

  
  
Concepción García López



**OBSERVACIONES QUE EMITE EL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER AL INFORME DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY QUE REGULA EL ACCESO DE LOS MUNICIPIOS ANDALUCES AL RÉGIMEN DE ORGANIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE GRAN POBLACIÓN.**

Como se desprende del propio anteproyecto de ley que se acompaña, la norma resulta ser:

**Pertinente al género**

☐

**No pertinente**

☒

Ya que se regula el procedimiento para el acceso al régimen de organización de los municipios de gran población, sin entrar a regular aspectos que pudieran incidir o afectar a las mujeres y hombres de los municipios que soliciten el acceso a ese régimen.

Sin embargo, queremos aclarar al órgano directivo que el Informe de Evaluación de Impacto de Género no es un mero trámite, como parecer reflejar el Informe emitido que se acompaña.

El Informe de Evaluación de Impacto de Género trata de realizar un análisis ex – ante sobre la incidencia que la norma tendrá en el principio constitucional y estatutario de “no discriminación por razón de sexo”. Y que como se establece en el Art. 4 del *Decreto 93/2004 del 9 de marzo por el que se regula el informe de evaluación de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno* (BOJA núm. 50 de 12.03.04), deberá describir





102708

INFORME  
IAMInstituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

las diferencias existentes entre mujeres y hombres en el ámbito de actuación de las medidas que pretenden regular en la disposición de que se trate, **incluyendo datos desagregados por sexo**, recogidos en estadísticas oficiales, así como el **análisis del impacto potencial** que la aprobación de dichas medidas producirá entre las mujeres y hombres a quienes van dirigidas.

En todo caso, y reiterando la no pertinencia, aprovechamos la ocasión para realizar algunas observaciones conforme a la normativa en vigor relativa a Igualdad de Género (ver Anexo) que aportarán un carácter más igualitario al texto normativo. A saber:

1.- De acuerdo con la *Orden de 24 de noviembre de 1992, conjunta de la Consejería de Gobernación y de la Consejería de Asuntos Sociales, sobre la eliminación del lenguaje sexista en los textos y documentos administrativos* (BOJA núm. 126 de 05.12.1992), y siguiendo la recomendación de las reglas contempladas en la *Instrucción de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de Viceconsejeros para evitar un uso sexista del lenguaje en las disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía*, sería necesario adaptar el lenguaje del texto a la normativa vigente en cuanto al uso no sexista del lenguaje. Así se propone:

- El alcalde por "la alcaldía" o "el alcalde o alcaldesa" ✓
- Entendemos que "el legislador" queda referido al "órgano legislador", por lo que no se propone su sustitución.

2.- Sería conveniente incorporar la necesidad de que toda la información referida a personas recogida en el **Anexo** del anteproyecto de ley (personal al servicio de la Administración Local, renta por habitante, mercado de trabajo,



02/08

INFORME

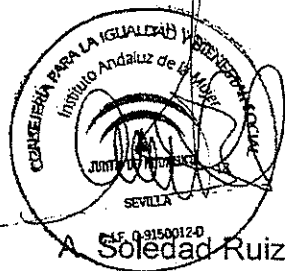
IAM

Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

etc.), se presente desagregada por sexo, lo que permitirá en futuras ocasiones un análisis de género de esta información.

Sevilla, 15 de febrero de 2007

LA DIRECTORA



A Soledad Ruiz Seguin



**ANEXO. NORMATIVA VIGENTE SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES QUE AFECTAN A LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO.**

Objetivo Igualdad de Género.....art. 139 de la *Ley 18/2003, de 29 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas.*

Composición Paritaria de órganos.....art. 140 de la *Ley 18/2003, de 29 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas.*

Datos desagregados por sexo.....art.22 de la *Ley 8/2002, del Plan Estadístico de Andalucía 2003-2006.*

Lenguaje administrativo no sexista.....*Orden de 24 de noviembre de 1992, conjunta de la Consejería de Gobernación y de la Consejería de Asuntos Sociales, sobre la eliminación del lenguaje sexista, en los textos y documentos administrativos*

Información y publicidad no sexista .....*Ley 6/2005, de 8 de abril, relativa a la actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía y Orden de 19 febrero 1993, de la Consejería de la Presidencia, relativa a normas para el cumplimiento del principio de no discriminación por razón de sexo en la información y divulgación de la de la Junta de Andalucía*

Evaluación del Impacto de género.....*Decreto 93/2004, de 9 de marzo por el que se regula el Informe de Evaluación de Impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno.*

Prioridad presupuestaria de las políticas de Igualdad..... *Ley 11/2006, de 27 de diciembre de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el 2007.*

04 / 09

**INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO DEL PROYECTO  
DE LEY DE MEDIACIÓN FAMILIAR EN ANDALUCÍA****1-INTRODUCCIÓN**

El principio de transversalidad definido en la Comunicación " Integrar la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres en el conjunto de las políticas y acciones comunitarias", aprobada por la Comisión Europea en 1996, se perfilaba como una actuación necesaria de los Estados Miembros orientada a integrar la perspectiva de género en todas las políticas y programas generales.

Con el Tratado de Amsterdam se formaliza el objetivo de que todas las actuaciones de la Unión Europea deben dirigirse a eliminar las desigualdades y a promover la igualdad entre hombres y mujeres.

En nuestra Comunidad Autónoma, partiendo del artículo 14 de la Constitución y los artículos 10.1 y 10.2, el compromiso comunitario encuentra su plasmación en la Ley 18/2003 de 29 de diciembre por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas. Concretamente en su artículo 139.1 establece la obligatoriedad de que todos los proyectos de Ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno, deberán tener en cuenta de forma efectiva el objetivo de la igualdad por razón de género y que, a tal fin, en la tramitación de las mencionadas disposiciones, se emitirá un informe de evaluación de impacto por razón de género del contenido de las mismas.

El Decreto 93/2004 de 9 de marzo, regula el mencionado informe y en este contexto normativo y conforme al artículo 3 del mismo, esta Dirección General de Infancia y Familias emite el presente informe.

**2- MEDIDAS QUE REGULA LA LEY Y DIFERENCIA ENTRE HOMBRES Y MUJERES.**

La mediación familiar viene desarrollándose en Andalucía desde el año 2001 a través de la financiación a Entidades del sector privado.

Los datos obtenidos a lo largo de estos cinco años de funcionamiento de los programas de mediación familiar, indican que las actuaciones de mediación familiar e intergeneracional afectan por igual a ambos géneros, sin que existan diferencias significativas en los usuarios del programa por razón de género.



04 / 09


**3- IMPACTO POTENCIAL DE LA APROBACIÓN DE LA LEY ENTRE LOS HOMBRES Y MUJERES A QUIENES VA DIRIGIDA.**

El proyecto de Ley que se está informando no parece que vaya a tener una incidencia directa en materia de igualdad de género, dado que el acceso a la mediación no va a venir motivada ni favorecida por el hecho de ser hombre o mujer.

No obstante, en tanto que la mediación se constituye como un mecanismo de resolución de conflictos originados por muy diversos motivos, es de esperar que este tipo de procedimiento, basado en la igualdad de las partes en conflicto, pueda servir de referente para instaurar en la sociedad andaluza actitudes que eliminen la discriminación entre géneros y posibiliten a corto y medio plazo la consecución de una sociedad igualitaria.

Por último de acuerdo con la Orden de 24 de noviembre de 1992, conjunta de la Consejería de gobernación y la Consejería de Asuntos Sociales, sobre la eliminación del lenguaje sexista en los textos y documentos administrativos y la Instrucción de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de Viceconsejeros, para evitar el uso sexista del lenguaje en las disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía, en la elaboración del presente proyecto normativo se ha empleado un lenguaje exento de connotaciones sexistas.

Sevilla a 16 de marzo de 2007  
LA DIRECTORA GENERAL DE  
INFANCIA Y FAMILIAS



Fdo: Carmen Belinchón Sánchez



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

01575  
12/4/07

INFORME  
IAM

04 / 09

Fecha: 11 de abril de 2007

Asunto: Informe Impacto de Género

Ref: EMB/impacto 39/07

D. José M<sup>a</sup>. Oliver Pozo  
Viceconsejero para la Igualdad y BS  
C<sup>a</sup>. para la Igualdad y BS  
Avda. de Hytasa, 14  
41071 Sevilla

S A L I D A	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL C/Alfonso XII, 52 - 41002 Sevilla
	2967 12 ABR. 2007 Registro General

Adjunto le remito observaciones emitidas por este Organismo al Anteproyecto de la Ley Reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía, conforme a lo regulado en el Decreto 93/2004, de 9 de marzo, por el que se regula el Informe de Evaluación de Impacto de Género en los proyectos de Ley y Reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno.

DIRECTORA  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER  
Ana Soledad Ruiz Seguin



**OBSERVACIONES QUE EMITE EL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER AL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO REMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIAS DE LA CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LA LEY REGULADORA DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.**

El anteproyecto de Ley que nos ocupa regula una materia que tiene como público destinatario final a mujeres y hombres en situación de conflicto familiar, para valorar el impacto de género es imprescindible tener en cuenta las desigualdades estructurales existentes entre hombres y mujeres, uno de cuyos principales espacios de transmisión y reproducción es el familiar, a través de las relaciones de poder que en su seno se establecen.

Por ello, contemplando que se regula un derecho que afecta a la vida diaria de la población en general, y que existen desigualdades en el ámbito de actuación que se pretende regular, el anteproyecto de Ley de Mediación Familiar resulta ser:

**Pertinente al género**

☒

**No pertinente**

☐

Felicitando al órgano directivo por cuidar de una manera especial la problemática específica de la **violencia de género**, máxima expresión de la desigualdad por razón de género, excluyéndola explícitamente del marco de la mediación. En todo caso, atendiendo a las complejas características específicas de esta problemática, y dadas las enormes dificultades para su detección en algunos casos, insistimos en la vital importancia de seguir resaltando este aspecto de la normativa en toda la reglamentación que de ella se derive.



04 / 09

INFOR...E

IAM

Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

Con carácter general, visto el proyecto normativo y el Informe de Evaluación de Impacto de Género presentado, y teniendo en cuenta la normativa de aplicación en relación con la Igualdad de Género (ver Anexo), se realizan las siguientes observaciones:

1. El Decreto 93/2004 del 9 de marzo por el que se regula el informe de evaluación de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno (BOJA núm. 50 de 12 de marzo), en su Art. 4 dispone que el informe de evaluación del impacto de género deberá describir, al menos, las diferencias existentes entre mujeres y hombres en el ámbito de actuación de las medidas que pretenden regular en la disposición de que se trate, **incluyendo los datos, desagregados por sexo**, recogidos en estadísticas oficiales, así como el análisis del impacto potencial que la aprobación de dichas medidas producirá entre las mujeres y hombres a quienes van dirigidas; datos que nos permitirían analizar la situación real existente, y valorar si lo previsto en la norma en cuestión, atiende de forma igualitaria (que no igual) a las mujeres y hombres a los que van destinadas las medidas que se pretenden regular.

Para una adecuada evaluación del impacto de género de este proyecto de Ley son necesarios datos desagregados por sexo, relativos a todos aquellos aspectos que afecten directa o indirectamente a hombres y mujeres en la materia que se regula, por lo que se deberían incluir datos como los siguientes:

- Población andaluza solicitante de este Servicio de Mediación Familiar en el último año, desagregada por sexo y edad.
- Población beneficiaria del Servicio de Mediación Familiar durante el último año, desagregada por sexo y edad.



- Porcentaje de beneficiarios/as del Servicio de forma gratuita durante el último año.
- Tipos de uniones familiares a las que pertenecen.
- Tipos de problemáticas abordadas, según planteamiento de la persona solicitante, desagregados los datos por sexo.
- Solicitantes de terminación anticipada del proceso, desagregando por sexo, durante el último año.
- Nº de hombres y mujeres que incumplieron los acuerdos alcanzados, durante el último año, especificando causas (como las mencionadas de pensiones alimenticias y visitas del progenitor no custodio).
- Nº de procesos de mediación interrumpidos a petición de la persona mediadora, y causas.
- Nº de solicitudes detectadas y desestimadas por situaciones de violencia de género en el último año.
- Nº de profesionales hombres y mujeres dedicados a la mediación familiar durante el último año, por sexo y profesión.
- Nº de profesionales sancionados/as durante el último año, desagregando por sexo y causa.

De no contar con estos datos, se sugiere instar al Departamento de Estadística de esa Consejería, o en su caso, al Instituto de Estadística de Andalucía, para que incluya y analice estos indicadores para próximas ocasiones, y proceda en cumplimiento del artículo 22, letra e) de la *Ley 8/2002 de 17 de diciembre del Plan Estadístico de Andalucía 2003-2006* (BOJA 154, 31.12.02).

Se recomienda igualmente, de cara al futuro, incluir en la regulación del Registro de Mediación, la exigencia de recopilar de forma desagregada por sexo, los siguientes datos:

- Solicitantes para formar parte del Registro de Mediación.
- Personas con inscripción aprobada.
-



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

- Composición por sexo de los equipos de mediación, especificando profesiones.
- Personas inscritas en el Registro, con formación específica en género.

Por último, se insta a explicitar en el Anteproyecto de Ley que nos ocupa que los datos a recoger en las actuaciones formativas o de investigación, recogidas en el Art. 8.3. del mismo, deben estar desagregados por sexo.

2. Por otra parte, en todos los reglamentos se tiene que tener en cuenta de forma efectiva el **objetivo de la igualdad por razón de género**, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 139 de la *Ley por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas para 2004* (BOJA núm.251 de 31 de diciembre).

En el anteproyecto de Ley que nos ocupa no se incluye este objetivo, y ya que la finalidad de la mediación es el establecimiento de acuerdos equitativos, justos, estables y duraderos entre las partes en conflicto en la familia, ámbito directamente mediado por las relaciones de género, se recomienda incluir este objetivo de igualdad de forma explícita en el texto del anteproyecto de Ley, para lo que proponemos los siguientes apartados:

a) TÍTULO II: PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR.

- Art. 5: se recomienda introducir explícitamente el principio de igualdad entre mujeres y hombres, añadiendo un comentario del tipo: *igualmente, todas las acciones de mediación familiar incorporarán como propio el objetivo de igualdad por razón de género en cumplimiento del Art. 139 de la Ley por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas para 2004* (BOJA núm.251 de 31 de diciembre).

- Art. 7: se recomienda incorporar el objetivo de igualdad, pudiendo quedar la redacción del artículo de la siguiente manera: "se respeten los distintos puntos de vista y se garantice la igualdad en las

Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

partes en la negociación...", dando efectivo cumplimiento al objetivo de igualdad por razón de género.

- Art. 8.3: ...debiendo realizarse dichas actuaciones de formación e investigación conforme al objetivo de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, tal y como marca la legislación vigente.

En el mismo sentido, se recomienda la incorporación explícita del objetivo de igualdad en los puntos TÍTULO III, Capítulo 1, Art. 12.3; TÍTULO IV, Cap. 2, Art. 20.f; TÍTULO V, Art. 26.2, Art. 30.3; pudiendo quedar, en función de cada caso, redactado de una manera similar a la siguiente: *en cumplimiento de la normativa vigente en la materia, este artículo garantizará el efectivo cumplimiento del objetivo de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres tal y como se ordena en el Art. 139 de la Ley por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas para 2004 (BOJA núm.251 de 31 de diciembre).*

3. En todas las comisiones se tiene que tener en cuenta de forma efectiva la **composición paritaria de los órganos** consultivos y de asesoramiento de la Administración de la Junta de Andalucía de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 140 de la *Ley por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas para 2004* (BOJA núm.251 de 31 de diciembre).

El Anteproyecto de Ley que nos ocupa, no contempla la creación de órganos de este tipo, tal como se indica en el informe de evaluación del impacto de género presentado, los equipos de mediación no se ven afectados por el artículo 140 de la Ley. Sin embargo observamos que sería recomendable valorar la importancia que adquiere la participación de mujeres y hombres en el ámbito familiar, como una de las dimensiones centrales para la incorporación del principio de igualdad de género en la asunción de responsabilidades, y en el abordaje y resolución de los conflictos familiares, así como en la gestión de los servicios públicos en este ámbito de intervención.

La interposición de estrategias activas en este sentido, constituye una garantía de avance en el logro de la igualdad de oportunidades entre las y los andaluces, por lo que se recomienda buscar una composición equilibrada de hombres y mujeres en los equipos de mediación.

Asimismo, se sugiere la utilidad de la participación, estable o puntual, de **personas expertas** con conocimientos de género y de reconocido prestigio en la materia que regula el Anteproyecto de Ley en dichos equipos, pudiendo quedar establecida esta recomendación en el apartado TÍTULO III, Cap. 1, Art. 13.1.

3. Por último, felicitamos al órgano directivo por el esfuerzo realizado en la **redacción no sexista** de la normativa de acuerdo con la *Orden de 24 de noviembre de 1992, conjunta de la Consejería de Gobernación y de la Consejería de Asuntos Sociales, sobre la eliminación del lenguaje sexista en los textos y documentos administrativos* (BOJA núm. 126 de 05.12.1992) y de la *Instrucción de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de Viceconsejeros para evitar un uso sexista del lenguaje en las disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía*.

Se aprecia una clara intención de que el lenguaje utilizado facilite la visibilización tanto de las mujeres como de los hombres, en todos los aspectos tratados, lo que facilitará a su vez la comprensión de las situaciones concretas de unas y otros que puedan ser motivo de desigualdades y la posterior actuación a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Para seguir avanzando en este esfuerzo, recordamos lo siguiente:

- Cuando se emplee a lo largo del texto el género gramatical masculino, como genérico universal deberá añadirse la mención expresa del género gramatical femenino, o para evitar este desdoblamiento, se buscará una



La interposición de estrategias activas en este sentido, constituye una garantía de avance en el logro de la igualdad de oportunidades entre las y los andaluces, por lo que se recomienda buscar una composición equilibrada de hombres y mujeres en los equipos de mediación.

Asimismo, se sugiere la utilidad de la participación, estable o puntual, de **personas expertas** con conocimientos de género y de reconocido prestigio en la materia que regula el Anteproyecto de Ley en dichos equipos, pudiendo quedar establecida esta recomendación en el apartado TÍTULO III, Cap. 1, Art. 13.1.

3. Por último, felicitamos al órgano directivo por el esfuerzo realizado en la **redacción no sexista** de la normativa de acuerdo con la *Orden de 24 de noviembre de 1992, conjunta de la Consejería de Gobernación y de la Consejería de Asuntos Sociales, sobre la eliminación del lenguaje sexista en los textos y documentos administrativos* (BOJA núm. 126 de 05.12.1992) y de la *Instrucción de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de Viceconsejeros para evitar un uso sexista del lenguaje en las disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía*.


Se aprecia una clara intención de que el lenguaje utilizado facilite la visibilización tanto de las mujeres como de los hombres, en todos los aspectos tratados, lo que facilitará a su vez la comprensión de las situaciones concretas de unas y otros que puedan ser motivo de desigualdades y la posterior actuación a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Para seguir avanzando en este esfuerzo, recordamos lo siguiente:

- Cuando se emplee a lo largo del texto el género gramatical masculino, como genérico universal deberá añadirse la mención expresa del género gramatical femenino, o para evitar este desdoblamiento, se buscará una

expresión que incluya a ambos sexos, vigilando además las concordancias gramaticales. Aunque queda patente el esfuerzo por seguir esta norma en la redacción del texto, es necesaria una revisión con mayor profundidad para subsanar expresiones como, por ejemplo:

- El mediador, los mediadores, al mediador: las personas mediadoras, quienes median, el mediador o mediadora, quien se encarga de la mediación.
  - El niño: la infancia, niños y niñas, la población infantil, los y las menores.
  - El interesado: la persona interesada, el o la interesada.
  - Los abogados: los abogados y abogadas, quien desarrollar la asistencia jurídica.
  - Las personas participantes... están obligados a asistir: están obligadas.
- Cuando se haga uso de términos que no llevan marca de género, es necesario observar los artículos o determinantes que lo acompañan pues estos le atribuyen la marca de género que por sí mismo no poseen:
- Los profesionales, otro profesional, un profesional, al profesional: los y las profesionales; o bien, profesionales; o bien, quienes desarrollan su profesión en este ámbito; otro y otra profesional.

Sevilla, 11 de abril de 2007

LA DIRECTORA  
  
A. Soledad Ruiz Segúin



**ANEXO. NORMATIVA VIGENTE SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES QUE AFECTAN A LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO.**

Objetivo Igualdad de Género.....art. 139 de la *Ley 18/2003, de 29 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas.*

Composición Paritaria de órganos.....art. 140 de la *Ley 18/2003, de 29 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas.*

Datos desagregados por sexo.....art.22 de la *Ley 8/2002, del Plan Estadístico de Andalucía 2003-2006.*

Lenguaje administrativo no sexista.....*Orden de 24 de noviembre de 1992, conjunta de la Consejería de Gobernación y de la Consejería de Asuntos Sociales, sobre la eliminación del lenguaje sexista, en los textos y documentos administrativos*

Información y publicidad no sexista .....*Ley 6/2005, de 8 de abril, relativa a la actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía y Orden de 19 febrero 1993, de la Consejería de la Presidencia, relativa a normas para el cumplimiento del principio de no discriminación por razón de sexo en la información y divulgación de la de la Junta de Andalucía*

Evaluación del Impacto de género.....*Decreto 93/2004, de 9 de marzo por el que se regula el Informe de Evaluación de Impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno.*

Prioridad presupuestaria de las políticas de Igualdad..... *Ley 11/2006, de 27 de diciembre de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el 2007.*

**JUNTA DE ANDALUCÍA****CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO****Dirección General Vivienda y de Arquitectura****MEMORIA SOBRE EL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL BORRADOR DE ANTEPROYECTO DE LEY DE DERECHO A LA VIVIENDA.****INFORME****CONSEJERÍA****I. Introducción.**

El artículo 47 de la Constitución Española recoge el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. El mismo precepto insta a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para convertir este derecho en una realidad.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía en su artículo 56 otorga a la Comunidad Autónoma de Andalucía las competencias exclusivas en materia de vivienda.

En respuesta a dicho mandato constitucional, y haciendo uso de las mencionadas competencias, la Junta de Andalucía está elaborando las normas necesarias para desarrollar este derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna y adecuada a todas las personas físicas con vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Desde la Junta de Andalucía se considera que con la aprobación de la mencionada norma se establece que el derecho a una vivienda digna y adecuada comporta la satisfacción de las necesidades habitacionales de sus titulares y de quienes con ellos convivan, de forma que se posibilite una vida independiente y autónoma, y se favorezca el ejercicio de los derechos fundamentales.

Igualmente, con la aprobación de esta norma se pretende impulsar los instrumentos que las distintas Administraciones Andaluzas han de elaborar para garantizar el ejercicio de este derecho por parte de los ciudadanos. Así, se recoge que el Plan General de Ordenación Urbanística, de acuerdo con la normativa en materia de ordenación del territorio y urbanismo, contendrá las determinaciones de ordenación, gestión y ejecución que sean precisas para cubrir las necesidades de vivienda establecidas en los planes municipales de vivienda.

Para ello, y entre otras, clasificará suelo suficiente con uso residencial para su desarrollo y ejecución a corto y medio plazo; establecerá, en relación a las reservas de terrenos con destino a vivienda protegida, la edificabilidad destinada a tal fin en cada área o sector con uso residencial, desglosando la misma según la tipología, los plazos de inicio y terminación de estas actuaciones, así como cualquier otra determinación que garantice su ejecución, y, en los suelos con ordenación detallada, su localización concreta. Asimismo, establecerá las acciones de rehabilitación que favorezcan la revitalización de los tejidos residenciales y la recuperación del patrimonio construido, así como la eliminación de las situaciones de infravivienda existentes.



Consecuentemente, dado el alcance general de los preceptos anteriormente mencionados y del objeto del borrador de Anteproyecto de Ley, afectando a hombres y mujeres, hay que considerar pertinente la emisión del presente informe, debiéndose tener presente al efecto lo dispuesto en la siguiente normativa:

- Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, artículos 139 y 140.
- Decreto 93/2004, de 9 de marzo, por el que se regula el informe de evaluación de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno.
- Orden de 24 de noviembre de 2002, conjunta de la Consejería de Gobernación y de la Consejería de Asuntos Sociales, sobre la eliminación del lenguaje sexista en los textos y documentos administrativos.

## **II. Datos de la población.**

Según la base de datos del Instituto de Estadística de Andalucía de la Consejería de Economía y Hacienda la población total de Andalucía en el año 2007 asciende a 8.059.461 personas, de las cuales 4.060.218 son mujeres y 3.999.243 son hombres.

Sin perjuicio del análisis que se efectúa en el apartado siguiente, y a los efectos previstos en el artículo 4 del Decreto 93/2004, de 9 de marzo, regulador del contenido del presente informe, hay que advertir que, en la actualidad, no se dispone en materia de vivienda de información desagregada por sexos ni en Internet, ni en las páginas oficiales de organismos públicos como el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto Nacional de Empleo, el Instituto de la Mujer o la Unidad de Igualdad de Género, entre otros. Esta información permitiría describir con mayor rigor el impacto potencial inicial de la norma, en cuanto a las diferencias existentes entre las mujeres y los hombres en el ámbito al que va dirigida.

No obstante, en este contexto, hay que señalar que se está trabajando para actualizar las bases de datos existentes incluyendo en ellas nuevos indicadores que muestren las realidades de las mujeres y los hombres, ya que con los indicadores tradicionales se hace imposible ofrecer este tipo de información de género. Asimismo, se ha previsto que en las nuevas bases de datos en materia de vivienda se recopile información con este nivel de desagregación.

## **III. Análisis del impacto de género potencial en el borrador de Anteproyecto de Ley.**

Con el borrador de Anteproyecto de Ley de Derecho a la Vivienda, se pretende establecer las actuaciones que corresponden a las Administraciones Públicas Andaluzas y a las entidades públicas y privadas que actúan en el ámbito sectorial de la vivienda para favorecer la efectividad del derecho a la vivienda que tienen todas las personas físicas, así como regular los derechos y los deberes de sus titulares.

En relación con la situación de las mujeres y los hombres ante el tema del acceso a la vivienda hay que reconocer que, ciertamente, debido a la persistencia aún de los roles tradicionales, en concreto, al papel del hombre como la persona que realiza el trabajo remunerado, y de la mujer como el ama de casa y la cuidadora de los hijos y de las personas mayores a su cargo, puede influir en el sentido de limitar o condicionar las posibilidades de la mujer para poder acceder a una vivienda por sí sola. Es por ello que con este Anteproyecto de Ley se intentan establecer medidas que eliminen algunos de los obstáculos para el acceso de este colectivo a las viviendas, especialmente en régimen de alquiler.

En este sentido, en el Anteproyecto de Ley se regula que el planeamiento urbanístico promoverá la cohesión social en las ciudades y pueblos de Andalucía, como garantía de una adecuada integración urbana y para la prevención de fenómenos de segregación, exclusión, discriminación o asedio por razones socioeconómicas, demográficas, de género, culturales, religiosas o de cualquiera otro tipo.

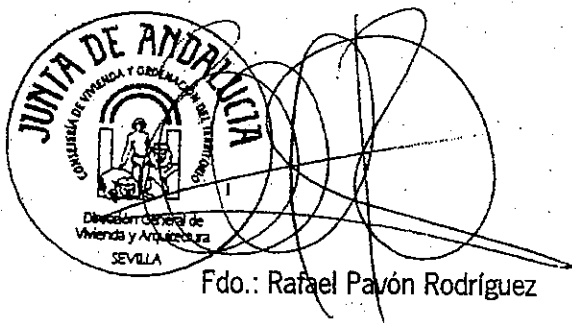
Al objeto de igualar las posibilidades entre hombres y mujeres en el acceso a la vivienda, se establece la obligación de elaborar los Planes Municipales de Vivienda, los cuales tendrán que determinar las necesidades de vivienda de las familias residentes en el municipio, al objeto de concretar las viviendas protegidas que se deben promover. Las necesidades de vivienda se determinarán teniendo en cuenta los datos contenidos en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda.

En definitiva, las actuaciones que se pretenden llevar a cabo contribuirán a disminuir la brecha de género, ya que favorece a distintos grupos con especiales dificultades y que parten de una situación inicial más desfavorable al acceso a una vivienda.

Por todo por lo expuesto, entendemos y es precisamente lo que se pretende, que el Anteproyecto de Ley deberá causar un impacto favorable sobre las mujeres que se encuentren en especiales situaciones de dificultad con relación al acceso a una vivienda en alquiler.

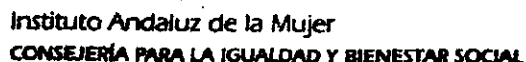
En Sevilla, a 1 de octubre de 2008

El Director General de Arquitectura y Vivienda



Junta de Andalucía  
Consejería de Urbanismo y Ordenación del Territorio  
Director General de  
Vivienda y Arquitectura  
SEVILLA

Fdo.: Rafael Pavón Rodríguez



**IAN**

0 1 / 1 0

S A L I D A	<p><b>JUNTA DE ANDALUCÍA</b>  <b>CONSEJERA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL</b>          Instituto Andalúz de la Mujer</p>
	<p><b>04 DIC. 2008</b></p>
	<p>Registro General</p> <p><i>061/29</i></p> <p>Sevilla</p>

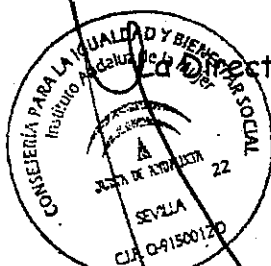
41071 - SEVILLA

REGISTRACION	JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE VIVIENDA Y ORDENACION DEL TERRITORIO	
	12 DIC. 2008	
	Registro General Secretaria General Técnica	6202 3 Hora
	Sevilla	

Sevilla, 3 de diciembre de 2008

**Estimado Director:**

Adjunto le remito observaciones emitidas por este organismo al "Informe de Evaluación de Impacto de Género remitido por esa Dirección General, sobre el Anteproyecto de Ley del Derecho a la Vivienda", conforme al Decreto 93/2004, de 9 de marzo, por el que se regula el Informe de Evaluación de Impacto de Género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno.



~~Soledad Pérez Rodríguez~~





**OBSERVACIONES QUE EMITE EL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER AL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO REMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA, PERTENECIENTE A LA CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DEL DERECHO A LA VIVIENDA**

Visto el *Anteproyecto de Ley por el que se regula el derecho constitucional a una vivienda digna de los y las ciudadanas con vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma de Andalucía*, y el Informe de Evaluación de Impacto de Género emitido por el órgano directivo competente.

Y conforme a lo establecido en el *Decreto 93/2004, de 9 de marzo, que regula el Informe de Evaluación de Impacto de Género en los proyectos de Ley y Reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno*, y a la normativa en vigor en materia de Igualdad de Género (ver Anexo), este organismo realiza las siguientes observaciones con objeto de garantizar un impacto de género positivo tras su aprobación:

**1. LA PERTINENCIA DE GÉNERO**

El Anteproyecto de Ley que nos ocupa regula una materia que tiene incidencia *directa* tanto en la vida de mujeres y hombres como sujetos de pleno derecho, susceptibles de disponer de una vivienda digna que satisfaga sus necesidades habitacionales básicas y las de sus familias, tanto en régimen de propiedad como en régimen de alquiler, posibilitando con ello una vida independiente y autónoma, en ejercicio de sus derechos fundamentales.

Igualmente, esta materia incide sobre hombres y mujeres, en tanto que personas responsables e implicadas en la *gestión* de las políticas públicas relacionadas con la promoción del acceso a una vivienda protegida en propiedad o en alquiler.

Asimismo, dicha norma, afecta tanto directa como indirectamente a los y las profesionales y titulares de empresas encargadas del diseño, construcción, promoción, conservación, mantenimiento y rehabilitación de viviendas, susceptibles de ser contratadas o subvencionadas por las diferentes entidades locales, consorcios u órganos gestores pertinentes, en desarrollo de los correspondientes Planes Autonómicos, Municipales o Supramunicipales, que emanen del Plan General de Ordenación Urbanística que se determine al efecto.

Por todo lo anterior, se puede afirmar que el presente Anteproyecto de Ley resulta ser:

**Pertinente al género**

☒

**No pertinente**

☐

## 2. LA IDENTIFICACIÓN DE DESIGUALDADES

La Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de género en Andalucía (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 2007) en su **Art. 6.2** dispone la **obligatoriedad de presentar un informe de evaluación del impacto de género en todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Consejo de Gobierno**. Y en el apartado 3 del citado artículo, señala que **deberá ir acompañado de indicadores pertinentes al género**, que nos permitan analizar la situación real existente, y valorar si lo previsto en la norma en cuestión, **atiende de forma igualitaria (que no igual) a las mujeres y hombres** a los que van destinadas las medidas que se pretenden regular.

En el caso que nos ocupa, el informe de evaluación de impacto de género presentado advierte que *"en la actualidad no se dispone en materia de vivienda de información desagregada por sexos (...) Esta información permitiría describir con mayor rigor el impacto [...] en cuanto a las diferencias existentes entre las mujeres y los hombres[...]"*. Adicionalmente, se alude a una carencia de información en este sentido en las páginas oficiales de algunos organismos públicos con fines estadísticos.

**Cabe felicitar al órgano competente, por el esfuerzo e interés mostrado por actualizar las bases de datos existentes, incluyendo en ellas nuevos indicadores que muestren las realidades de mujeres y hombres y la previsión de información con dicho nivel de desagregación en futuras bases de datos en materia de vivienda, animándole a continuar en esa misma línea.**

Cabe añadir que con objeto de contribuir a que el órgano emisor subsane las carencias de información y datos que refiere en el Informe, a continuación se incluyen algunos de los datos desagregados por sexo e indicadores de género que pueden servir de punto de análisis que podrá utilizarse de cara a la futura planificación y promoción del ejercicio constitucional del derecho a la vivienda digna de andaluces y andaluzas.

Esta línea de actuación futura --orientada a la recogida y disponibilidad de información relevante desde la perspectiva de género en la materia que se regula-- ha de tener como referencia la obtención de información acerca de la situación y posición de mujeres y hombres en relación a:

- Renta media anual de mujeres y de hombres
- Renta media anual de mujeres y hombres con alguna discapacidad
- Ingresos medios anuales de mujeres y hombres en situación de dependencia
- Renta media anual de personas en situación de monomarentalidad, monoparentalidad, y/o con personas dependientes a su cargo en exclusividad, por sexo.
- Renta media anual de las mujeres víctimas de violencia de género, y de éstas, porcentaje que posee un empleo remunerado
- Número de personas que perciben pensiones contributivas y no contributivas, según sexo, edad y tipología de pensión.
- Número de personas "inactivas" en Andalucía según sexo y tipología de "inactividad"
- Número de personas titulares de viviendas en régimen de propiedad y en régimen de alquiler, por sexo.
- Número de personas que solicitan una vivienda o alojamiento protegido, según sexo y edad.
- Número de subvenciones y ayudas concedidas en materia de vivienda y alquiler en los últimos 5 años, según sexo y titularidad
- Número de personas en alojamiento transitorio que no puedan acceder a una vivienda protegida, según sexo.

La información que arrojen los datos anteriores permitirá identificar y analizar los posibles desequilibrios entre ambos sexos y valorar si lo previsto en el desarrollo de la norma atiende de forma igualitaria a las mujeres y a los hombres a quienes afectan las medidas que se pretenden regular.

### 3. LA TRANSVERSALIDAD Y LAS MEDIDAS CORRECTORAS

3.1. El artículo 5 de la **Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía** (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 2007) prescribe que en todos los reglamentos se tiene que tener en cuenta la **transversalidad de género** tanto en la elaboración como en la ejecución y seguimiento de las disposiciones normativas y en la norma que se analiza, no se menciona esa transversalización.

Así, a partir de lo dispuesto, se sugiere la inclusión del **principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres** como objetivo y criterio de calidad de forma transversal, atendiendo al impacto positivo que tiene la inclusión de esta dimensión en la reducción o eliminación de desigualdades. Además, la Administración de la Junta de Andalucía, en tanto que entidad pública con competencia para la promoción y planificación de la vivienda, debe implicarse directa y activamente en el trabajo hacia la superación de las desigualdades de género en todos los ámbitos, entre los que se encuentra el acceso a una vivienda digna, tal y como establece el **artículo 4. de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía**

Por ello, pasamos a enumerar las partes de la norma donde debe recogerse el **principio la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres** de forma explícita:

- En este mismo sentido, el **Art.2. Derecho a una vivienda digna y adecuada, punto 1)**, podría explicitar *"se favorezca el ejercicio de los derechos fundamentales en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres"*
- En cuanto al **Art. 7. Acceso a una vivienda protegida**, en coherencia con la igualdad de oportunidades, los distintos Planes Autonómicos de Vivienda a los que hace referencia, *"[...]regularán las diferentes modalidades de vivienda[...]en función de los ingresos y necesidades[...] debiendo ser coherentes con las políticas y planes autonómicos para la promoción de la igualdad de género, aplicables al ámbito de la planificación y promoción de la vivienda digna"*

- En lo relativo al **Art. 11, punto 1)**, se desea felicitar al órgano gestor competente, por cuanto considera el objetivo de promover “[...]la *cohesión social* [...] para la *prevención* de fenómenos de segregación, exclusión, discriminación[...] por razones de género[...]”. No obstante, en el punto 2), en orden a garantizar el acceso de hombres y mujeres en igualdad a una vivienda digna y de calidad, se hace necesario articular medidas compensatorias para cubrir tanto las necesidades de habitabilidad de mujeres como de hombres, desde la perspectiva de género, favoreciendo con ello un **impacto positivo en la igualdad**. Asimismo, dentro del mismo **punto 2)**, se recomienda completar con lo siguiente: “en desarrollo de la normativa en materia de ordenación del territorio, urbanismo e **igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres**[...]”.
- Respecto al **Art. 13. Planes Autonómicos, punto 1)**, en el procedimiento de elaboración del correspondiente Plan de Vivienda, se recomienda añadir que **se tendrá en cuenta igualmente de forma efectiva el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en orden a favorecer un impacto positivo en la igualdad**.
- Dentro del **Art. 14. Planes municipales de Vivienda, punto 1)**, en desarrollo de la elaboración y aprobación de los correspondientes Planes Municipales de Vivienda, se recomienda añadir que **se tendrá en cuenta asimismo el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el diseño de dichos Planes, respondiendo de esta forma tanto a las necesidades de hombres como de mujeres respecto al acceso a una vivienda digna y de calidad**.
- En lo referente al **Art. 17. Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda protegida, punto 1)**, se sugiere contemplar que en el desarrollo reglamentario de dicho instrumento básico para la determinación de personas solicitantes de vivienda protegida, **se integrará de forma efectiva el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en orden a provocar un impacto positivo en la igualdad**.

**3.2.** Por otro lado, para lograr de forma efectiva el objetivo de la igualdad por razón de género, de acuerdo con lo dispuesto en el **Art. 6.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía** (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 2007) y en el **art. 6.3**, se afirma que se deberán mencionar los **mecanismos y medidas dirigidas a paliar y neutralizar los posibles impactos negativos**.



or ello, y para asegurar que se cumpla su objetivo último con respecto al beneficio y cohesión social *de toda la población incluida en el ámbito territorial del planeamiento urbanístico de Andalucía*, pasamos a enumerar las partes de la norma donde podría contemplarse los mecanismos o medidas que eliminan los obstáculos de las personas especialmente vulnerables, que parten de una situación inicial más desfavorable, con respecto al acceso a una vivienda digna y de calidad, dando cumplimiento con ello al ejercicio efectivo de los derechos fundamentales y al principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, contribuyendo de esta forma a disminuir la brecha de género existente en este ámbito:

- En el **Art. 3. La calidad de la vivienda, punto 2)**, se podría añadir lo siguiente: "[...] *la ordenación territorial y urbanística deberá orientarse[...] debiendo incorporar la perspectiva de género en su diseño y ordenación, para facilitar la respuesta a las necesidades de habitabilidad de hombres y mujeres de forma igualitaria, así como a las necesidades de equipamientos idóneos y suficientes para la atención y cuidado de menores y personas dependientes a cargo*".
- En relación al **Art. 6. Condiciones de Ejercicio**, en su introducción se recomienda añadir que en el desarrollo reglamentario de las condiciones del ejercicio del derecho al acceso a una vivienda digna, y en el establecimiento de sus requisitos, se integrará de forma efectiva el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en orden a no provocar un impacto negativo en la igualdad, una vez constatado el menor nivel de autonomía económica de las mujeres, fruto del rol de género.
- Respecto al **Art. 10. Ayudas públicas y otras medidas de fomento, dentro del apartado f)** se especificará como posible grupo destinatario de dichas ayudas aquellas personas en situación de monomarentalidad o monoparentalidad, aquellas personas solas con familiares dependientes a cargo, así como aquellas mujeres víctimas de violencia de género y mujeres con discapacidad, tal y como establece la **Ley 13/2007, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género** dentro de su **Art. 48. viviendas protegidas, punto 2) y 4)**

- Dentro del **Art. 13. Planes autonómicos, punto 2), apartado a)**, en el desarrollo del proceso de análisis y evolución del sector de la vivienda en Andalucía, dichos resultados deberán ser desagregados por sexo, con información e indicadores pertinentes al género, que puedan dar cuenta de la evolución e impacto que provoca dicha normativa en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en este ámbito, eliminando o disminuyendo la brecha de género actual.
- En cuanto al **Art. 14. Planes municipales de vivienda, punto 3)**, respecto a la determinación de las necesidades de vivienda en el correspondiente municipio, se aconseja añadir que se tendrá en cuenta el enfoque de género con objeto de atender de forma efectiva e igualitaria tanto a las necesidades específicas e individuales de hombres como de mujeres en relación a los usos, equipamientos y distribución de la superficie útil de dichas viviendas, y no sólo de las necesidades de las familias en global. Incluido en este mismo **Art. 14**, dentro del **punto 4.**, se sugiere completar con lo siguiente: *"[...] estudios, informes y demás documentación, con datos desagregados por sexo allá donde sea procedente y donde se incida sobre hombres y mujeres, dando cuenta de la desigual situación y posición de hombres y mujeres frente al recurso de la vivienda, justificando con ello la intervención intencional hacia la igualdad entre mujeres y hombre, mediante las medidas compensatorias correspondientes"*. Y para terminar, dentro del citado **Art. 14.**, dentro de su **punto 5)**, se recomienda añadir lo siguiente: *"[...] las necesidades de vivienda se determinarán teniendo en cuenta los datos contenidos en el Registro [...], siendo conscientes de incluir el principio de igualdad de oportunidades en este sentido, haciendo un esfuerzo por incluir en dicho Registro las necesidades específicas de las mujeres en igual medida que los hombres, pues como ya se ha mencionado anteriormente, fruto de su rol de género, estarán más alejadas de dichos circuitos o canales de información, por lo que no estarán inscritas en igual medida que los hombres. Para ello, se recomienda desagregar todos los datos por sexo, de forma que se pueda mostrar la brecha de género actual en este Registro Municipal."*

#### 4. LA CONTRATACIÓN PÚBLICA Y LAS SUBVENCIONES

4.1. Por otro lado, siguiendo el art. 12. de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 2007) sobre la **Contratación Pública** deberán establecerse condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres, señalando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la preferencia de las empresas que tengan marca de excelencia o desarrollen medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades. Esto implica que en el Anteproyecto de Ley que nos ocupa se deberá recoger:

- Dentro del **Art. 15. Actuaciones supramunicipales, punto 1)**, así como en el **Art. 20. Financiación, punto 3)**, se sugiere que en los procedimientos de establecimiento de convenios de colaboración pertinentes, se incluirán condiciones especiales de tipo social como el objetivo de hacer efectivo el principio de promoción de la igualdad de género en materia de vivienda, priorizando en los pliegos de prescripciones técnicas a aquellas entidades que hayan incluido acciones positivas o medidas de igualdad en sus políticas de recursos humanos así como aquellas que hayan implantado un plan de igualdad, hayan obtenido o estén en fase de obtener una marca de excelencia en dicha materia, como modelo ejemplificador de la Administración Pública Andaluza, no habiendo sido sancionadas por esta materia.

#### 5. EL LENGUAJE Y LA IMAGEN

5.1. Y con carácter general, de acuerdo con el **art. 9 sobre lenguaje no sexista e imagen pública** de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 2007) y de la Instrucción de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de Viceconsejeros para evitar un uso sexista del lenguaje en las disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía, se hace necesario revisar la redacción del texto normativo regulado, introduciendo algunas observaciones y matizaciones al respecto:

- Cuando se emplee a lo largo del texto, el género gramatical masculino, como genérico universal deberá añadirse la mención expresa del género gramatical femenino, o para evitar este desdoblamiento, se buscará una expresión que incluya a ambos sexos, vigilando además las concordancias gramaticales.

Ejemplos: Se recomienda sustituir:

- Estar inscrito por: "estar inscrito o inscrita"
  - Los posibles beneficiarios por: "los y las posibles beneficiarias"
  - Ayudas al promotor por: "ayudas al promotor o promotora o ayudas a la entidad o persona promotora"
  - Los propietarios por: "los y las propietarias"
  - Los inquilinos por: "los y las inquilinas"
- Cuando se haga uso de términos que no llevan marca de género, es necesario observar los artículos o determinantes que lo acompañan pues estos le atribuyen la marca de género que por sí mismo no poseen:

Ejemplos: Se recomienda sustituir:

- De sus titulares y de quienes con ellos convivan por: "de sus titulares y de quienes con ellos o ellas convivan"
- Los solicitantes por: "los y las solicitantes"

## 6. MEDIDAS EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

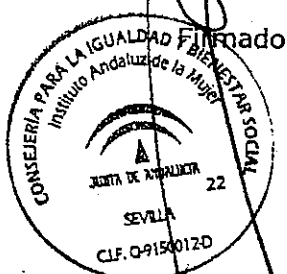
Por otro lado, respecto a la **Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género**, se hacen las siguientes observaciones:

En el **Art. 1. Objeto de la Ley**, dentro del **punto 1)**, se recomienda mencionar igualmente la **Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género**, entre las normas de carácter reglamentario en las que se funda dicho Anteproyecto de ley, en ejercicio del derecho fundamental y constitucional al acceso a una vivienda digna y de calidad, en especial de las personas y grupos especialmente vulnerables cuya situación de partida es discriminatoria respecto al resto de población.

Asimismo, se deberá incluir la mención expresa en el **Art. 4. Contenido de la actuación de las Administraciones Públicas**, respecto a las actuaciones de los poderes públicos lo recogido en el **Artículo 48. Viviendas protegidas**, de la anterior **Ley 13/2007, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género**, respecto a la potestad de dichas Administraciones Públicas en relación al establecimiento de cupos de reserva en aquellas promociones de vivienda protegida que se estimen necesarias, para su cesión o adjudicación en régimen de alquiler o en propiedad a las mujeres que acrediten la situación de violencia de género y necesiten una vivienda, cumpliendo con los requisitos pertinentes, así como la posibilidad de establecer ayudas para el acceso a viviendas protegidas de estas mujeres.

**Es todo cuanto cabe observar al informe de evaluación de impacto y al proyecto de norma tramitado.**

Sevilla a 27 de Noviembre de 2008



Instituto Andaluz de la Mujer

ANEXO. Normativa vigente sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que afectan a la elaboración del informe de impacto de género.

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE núm. 71 de 23 de marzo de 2007)
- Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género en Andalucía (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 2007 )
- Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de género en Andalucía (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 2007)

Transversalidad del principio e igualdad

Art. 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07)

Objetivo de igualdad por razón de género

Art. 6.2 Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07)

Evaluación de impacto de género

Artículo 6 la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07)

Decreto 93/2004, de 9 de marzo por el que se regula el Informe de Evaluación de Impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno.

Datos desagregados por sexo

Ley Plan Estadístico de Andalucía

Estudios y Estadísticas con perspectiva de género

Artículo 10 Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07)

Presencia equilibrada de mujeres y hombres

Artículo 11 Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07)



Instituto Andaluz de la Mujer

JUNTA DE ANDALUCÍA - CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

Contratación y Subvenciones Públicas

Art. 12.y 13

Artículo 9 la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07)

Instrucción de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de Viceconsejeros para evitar un uso sexista del lenguaje en las disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía

Lenguaje administrativo no sexista

Artículo 9 y Artículo 54 Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07)

Imagen pública, Información y publicidad no sexista

02/ 10

**JUNTA DE ANDALUCIA**

**CONSEJERÍA DE SALUD**

Dirección General de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento

INFORME  
CONSEJERÍA

**INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO**

**ANTEPROYECTO DE LEY DE DERECHOS Y GARANTÍAS DE LA DIGNIDAD DE LA PERSONA EN EL PROCESO DE MUERTE.**

22 de julio de 2008

El presente Anteproyecto de Ley tiene como objeto es generar un marco jurídico que garantice el derecho de los ciudadanos a una muerte digna. Se quiere así establecer los criterios y condiciones que permitan garantizar una atención adecuada durante el proceso final de la vida, basada en evitar el sufrimiento, en el respeto a la dignidad y a la libre decisión de cada uno. En resumen, es objeto de dicho Anteproyecto de Ley:

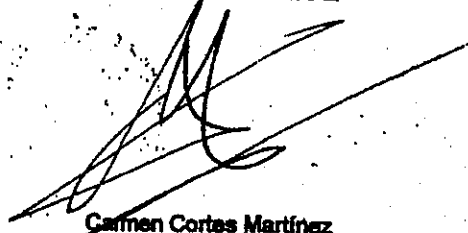
1. Proteger la dignidad de la persona en el proceso de su muerte.
2. Asegurar la autonomía del paciente y el respeto a su voluntad en el proceso de la muerte incluyendo la manifestada de forma anticipada mediante el testamento vital.
3. Regular el ejercicio de los derechos de la persona durante el trance de su muerte, los deberes del personal sanitario que atiende a estos pacientes, así



como las garantías que las instituciones sanitarias estarán obligadas a proporcionar con respecto a ese proceso.

El derecho de los ciudadanos, al que se hace referencia a lo largo del texto, se hace, como no puede ser de otra forma, sin distinción de edad, sexo, raza o condiciones económicas o sociales. Es más, sanciona como infracción muy grave *"aquellas actuaciones que supongan discriminación de las personas en proceso de muerte, por razones ideológicas, morales, de raza, género, religión o circunstancias económicas, personales, sociales o de cualquier otra naturaleza, o por la condición en virtud de la cual éstas accedan a los servicios de las instituciones o centros sanitarios"* (art. 32 del Anteproyecto).

LA DIRECTORA GENERAL



Carmen Cortes Martínez

**INFORME  
CONSEJERÍA****COPIA****02/ 11**

Fecha: 29 de marzo de 2006

Asunto: Anteproyecto Ley Calidad Agroalimentaria y  
Pesquera de Andalucía.**INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER**

Alfonso XII, 52

41002- SEVILLA

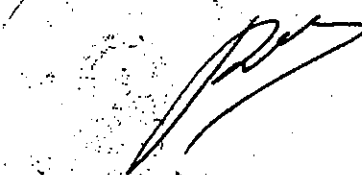
S A L I D A	JUNTA DE ANDALUCIA	
	CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	
	03 ABR. 2006 54011376	
	Registro General: Dir. Gen. de Industrias y Promoción Agroalimentaria 5	

De conformidad con lo establecido en el artículo 139.1 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, y en el Decreto 93/2004, de 9 de mayo, por el que se regula el informe de evaluación de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno, se remite el proyecto de disposición que a continuación se menciona, así como el informe de evaluación del impacto por razón de género correspondiente al contenido del mismo, para que en el plazo de diez días, formule las observaciones que estime oportunas:

- Anteproyecto de Ley de Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía.

En Sevilla, a 30 de marzo de 2006

El Director General



Fdo.: Ricardo Domínguez García-Baquero

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE LA CALIDAD AGROALIMENTARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA.**

A los efectos previstos en el Decreto 93/2004, de 9 de marzo, por el que se regula el informe de evaluación de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno, se emite el siguiente informe basado en lo siguiente:

- **Pertinencia de género y contenido de la Disposición.**

El Anteproyecto de Ley de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía, tiene por objeto la ordenación en el marco de la normativa aplicable de las denominaciones de calidad de los productos agroalimentarios y pesqueros de Andalucía y sus órganos de gestión, así como las marcas de calidad. Además se realiza una regulación de la inspección, control y régimen sancionador en materia de calidad y conformidad agroalimentarias; tiene además por objeto el fomento, la promoción y el control de la calidad de los productos agroalimentarios y pesqueros andaluces y se lleva a cabo la creación y regulación del Instituto Andaluz de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera.

En este sentido, se considera que el presente Anteproyecto de Ley es pertinente al género, por cuanto va a tener incidencia en la vida de las personas, directa o indirectamente consideradas.

- **Impacto por razón de género:**

Para determinar si existe impacto de género, el primer paso será analizar la situación real existente en el ámbito de aplicación de la norma en cuanto a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. De acuerdo con esto, el presente Anteproyecto de Ley se limita a la regulación de las denominaciones de calidad de los productos agroalimentarios y pesqueros de Andalucía; configurándose alrededor una regulación de todo aquello tendente a la protección de dichas denominaciones así como su fomento y promoción y estableciéndose un sistema normativo para garantizar la calidad, el origen en su caso y la conformidad de los productos agroalimentarios y pesqueros a sus normas específicas, por lo que no se cree se derive un efecto negativo, generador o perturbador de desigualdades o brechas de género.

Por esta razón, las medidas que en el Anteproyecto de Ley se establecen, los son con independencia de que las personas sobre las que van a tener incidencia sean hombres o mujeres; medidas que, por tanto, no deben tener efecto negativo o generador de desigualdades de género, no suponiendo por ello este Anteproyecto de Ley un impacto por razón del género.

Sevilla, a 28 de marzo de 2006

Vº Bº Director General de Industrias

El Jefe del servicio de Calidad  
Promoción

JUNTA DE ANDALUCÍA  
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA  
Dirección General de Industrias y Promoción Agroalimentaria  
Fdo. Ricardo Domínguez García-Baquero  
SEVILLA

JUNTA DE ANDALUCÍA  
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA  
Dirección General de Industrias y Promoción Agroalimentaria  
Fdo. Antonio Rodríguez Ocaña  
SEVILLA



04 / 10

## MEMORIA SOBRE IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE AGUAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

La estrategia Marco comunitaria sobre la igualdad entre hombres y mujeres establece entre sus objetivos la incorporación de una perspectiva de género en todas las políticas y en todas las etapas.

La Comisión Europea aprobó en febrero de 1996 la aplicación de programa de acción comunitario a medio plazo para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (1996-2000), en la que se reforzó la estrategia de la "transversalidad", mediante la aprobación de la comunicación "Integrar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el conjunto de las políticas y acciones comunitarias" para el cumplimiento del compromiso de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer. Beijing 1995.

Se estableció la necesidad de implementar en los Estados miembros este principio de Transversalidad de las políticas de igualdad, dirigido a integrar la perspectiva de género en todas las políticas y programas generales, no limitando los esfuerzos de promoción a medidas específicas, actuando de forma horizontal en todas las líneas estratégicas de las políticas nacionales.

El Tratado de Amsterdam entró en vigor el primero de mayo de 1999, formalizándose en el ámbito de la Unión europea el objetivo marcado de que todas las actividades se dirijan a la supresión de las desigualdades y a promover las igualdades de hombres y mujeres.

Para integrar la perspectiva de género en todas las políticas, mediante Ley 30/2003, de 13 de octubre, se modificó la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, introduciendo en el procedimiento de elaboración de leyes y regamentos la necesidad de realizar un informe sobre el impacto por razón del género de las medidas que se establezcan.

Por su parte, la Constitución Española en su artículo 14 establece el imperativo legal de igualdad de trato y no discriminación por razón de sexo. En este mismo sentido se pronuncia el reciente artículo 14 del Estatuto de Autonomía Andalúz aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, en el que se prohíbe toda discriminación en el ejercicio de los derechos, el cumplimiento de los deberes y la prestación de los servicios por razón de sexo. Garantizándose en el artículo 15 la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos y estableciendo el artículo 114 en el procedimiento de elaboración de las leyes de la Comunidad Autónoma, que hay que tener en cuenta el impacto por razón de género de los contenidos de las mismas.

Asimismo, la Ley 9/2000, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, regula el ejercicio de la iniciativa legislativa en el artículo 43, señalando que el anteproyecto de Ley debe ir acompañado, entre otras memorias, de la sobre impacto por razón de género de las medidas que se establezcan. Dicho informe se reguló mediante Decreto 93/2004, de 9 de marzo, estableciendo que la finalidad del mismo es que los proyectos normativos tengan en cuenta de forma efectiva la igualdad por razón de género.



El presente informe, de Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, recoge acciones para garantizar la integración de la perspectiva de género en las políticas públicas: el Informe de evaluación de impacto de género, los presupuestos públicos con enfoque de género, el Plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres, el lenguaje no sexista e imagen pública y las estadísticas e indicadores con perspectiva de género.

El necesario análisis previo de la influencia que la entrada en vigor de la Ley de Aguas de la Comunidad Autónoma de Andalucía pueda significar en las políticas positivas de sensibilización de la sociedad en la información de género, requiere la creación de una nueva perspectiva que incida en la relevancia que toda actuación tiene tanto en el fomento de la igualdad de oportunidades, como en la desaparición de las desigualdades preexistentes. La aplicación de una visión activa de la perspectiva de género potenciará, por tanto, la elaboración de políticas efectivas que promuevan relaciones equitativas entre hombres y mujeres.

El anteproyecto de Ley tiene como objeto:

- Garantizar a la población las necesidades básicas y compatibilizar la buena calidad de los ecosistemas acuáticos y terrestres, con el desarrollo socioeconómico y social de Andalucía.
- Conservar las formas de organización y actuación de la Administración hidráulica, así como la planificación y gestión del ciclo hidrológico del agua.
- Definir las obras hidráulicas y su régimen de ejecución.
- Regular el régimen de abastecimiento, saneamiento y depuración en el ciclo integral del agua de uso urbano, así como de los servicios supramunicipales para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos.
- Establecer el marco para la protección de la calidad del Medio Hídrico.
- Establecer el marco para la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, destinado a reducir las consecuencias negativas para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica, asociadas a las inundaciones.
- Establecer el régimen jurídico de los tributos propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de aguas de su competencia y a la afectación de los ingresos a la ejecución de las infraestructuras del ciclo integral del agua y al funcionamiento de los servicios públicos vinculados al mismo.
- Disponer el régimen sancionador por los incumplimientos de las normas reguladoras de los usos y obligaciones en materia de aguas.

Sobre la base del contenido del Anteproyecto de Ley, se estima que todo el contenido del mismo afectará por igual a hombres y mujeres sin distinción ya que el recurso natural "agua" es indispensable para la vida, en este caso humana, tanto del género masculino como femenino, sin que pueda distinguirse a priori un uso o consumo de mayor incidencia de un género sobre el otro, igualmente ese uso indistinto de género provoca un deterioro o degradación un impacto medio ambiental, que conlleva un coste elevado para todos aquellos afectados por el deterioro (hombres y mujeres y resto de la biodiversidad) en consecuencia, para paliar estos efectos negativos se instrumentan una serie de tributos propios de la Comunidad Autónoma, cuya recaudación queda afectada a la financiación de políticas medioambientales en materia de agua, en especial, las actuaciones de mejora de la calidad sanitaria de los suministros y la gestión del ciclo integral del agua.



Agencia Andaluza del Agua  
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

INFORME

CONSEJERÍA

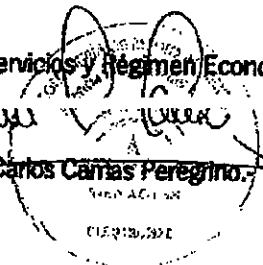
04/10

En consecuencia con todo lo expuesto, se puede concluir que las medidas contenidas en el Anteproyecto de Ley, afectan por igual a ambos géneros, y por lo tanto no son susceptibles de producir situaciones de discriminación entre los mismos.

Sevilla, 2 de marzo de 2009

El Director General de Servicios y Régimen Económico

Fdo.: Juan Carlos Carras Peregrino.



07 MAY 2009 19:28 984544913

DIRECCION IAM

#0137 P.001 /008

04 / 10



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

S A L I D A	JUNTA DE ANDALUCÍA CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL Instituto Andaluz de la Mujer
	07 MAYO 2009
	Agenda General 1478

Asunto: Impacto de género  
Ref: SPR/ art

Agencia Andaluza del Agua  
Ilmo. Sr. Director Gerente  
Avda. de Portugal s/n  
41071 Sevilla

Sevilla, 27 de abril de 2009

Adjunto remito Observaciones que emite el Instituto Andaluz de la Mujer al Informe de Evaluación de Impacto de Género remitido por la Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente sobre el Anteproyecto de ley de Aguas de la Comunidad Autónoma de Andalucía



Soledad Pérez Rodríguez

AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA  
DIRECCION GERENCIAL  
14/5/09  
ENVIAR A: J.M. Huelgas  
PARA:

CONOCIMIENTO
PREPARAR INFORME
PREPARAR CON TESTA
DESPACHAR
TRAMITAR
ARCHIVAR

Dpto. María Corrales nº 6, 41003 Sevilla  
Telf: 95 484 48 10, Fax 95 464 48 11  
corrales.mar@juntadeandalucia.es

04 / 10

## **2. LA IDENTIFICACIÓN DE DESIGUALDADES**

La Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de género en Andalucía (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 2007) en su Art. 6.2 dispone la obligatoriedad de presentar un informe de evaluación del impacto de género en todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Consejo de Gobierno. Y en el apartado 3 del citado artículo, señala que deberá ir acompañado de indicadores pertinentes al género, que nos permitan analizar la situación real existente, y valorar si lo previsto en la norma en cuestión, atiende de forma igualitaria (que no igual) a las mujeres y hombres a los que van destinadas las medidas que se pretenden regular.

Por lo tanto, se deberían aportar datos como:

- Número de mujeres y hombres que participan de forma activa y real en la planificación y gestión del agua, directamente o a través de los órganos y asociaciones reconocidas por la Ley que los agrupan o representan.
- Número de mujeres y hombres en los órganos colegiados de participación administrativa y social de la Agencia Andaluza del Agua.
- Número de mujeres y hombres en los órganos decisorios de participación social de la Agencia Andaluza del Agua.
- Número de mujeres y hombres que integran la Comisión de Autoridades Competentes.
- Número de mujeres y hombres que componen el Consejo Andaluz del Agua.

## **3. LA TRANSVERSALIDAD Y LAS MEDIDAS CORRECTORAS**

3.1. El artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 2007) prescribe que en todos los reglamentos se tiene que tener en cuenta la transversalidad de género tanto en la elaboración como en la ejecución y seguimiento de las disposiciones normativas. Por ello, debería hacerse mención expresa de este principio en:

- La Exposición de motivos señalando que las medidas que se recogen en la presente Ley responden al objeto de incorporar de manera transversal el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.



04 / 10

**OBSERVACIONES QUE EMITE EL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER AL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO REMITIDO POR LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE AGUAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.**

Visto el Anteproyecto de Ley y el Informe de Evaluación de Impacto de Género emitido por el órgano directivo competente, y conforme a lo establecido en el Decreto 93/2004, de 9 de marzo, que regula el Informe de Evaluación de Impacto de Género en los proyectos de Ley y Reglamentos que aprueba el Consejo de Gobierno, y a la normativa en vigor en materia de Igualdad de Género (ver Anexo), este organismo realiza las siguientes observaciones con objeto de garantizar un impacto de género positivo tras su aprobación:

**1. LA PERTINENCIA DE GÉNERO**

El Anteproyecto de Ley que nos ocupa tiene por objeto regular el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma y de las entidades locales andaluzas en materia de agua, con el fin de lograr su protección y uso sostenible, estableciendo, además de aspectos con un marcado carácter instrumental (como es la planificación y gestión del ciclo hidrológico, el régimen de abastecimiento, saneamiento y depuración en el ciclo integral del agua, la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, los ingresos destinados a la ejecución de infraestructuras del ciclo integral del agua y el régimen sancionador por los incumplimientos de las normas reguladoras de los usos y obligaciones en materia del agua), otros que inciden en cuestiones como los derechos y obligaciones de las usuarias y usuarios del agua, las funciones de los órganos de la Agencia Andaluza del Agua o la creación, composición y funciones de la Comisión de Autoridades Competentes, por lo que esta normativa resulta ser:

Pertinente al género



No pertinente



Procediendo pues a analizar el Impacto de Género de la norma en cuestión, teniendo en cuenta la normativa de aplicación en relación con la igualdad de género (ver Anexo), se realizan las siguientes observaciones:

3.4. Por otro lado, para lograr de forma efectiva el objetivo de la igualdad por razón de género, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 6.2 y 6.3. de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 2007), se afirma que se deberán mencionar los mecanismos y medidas dirigidas a paliar y neutralizar los posibles impactos negativos. Por ello, pasamos a enumerar las partes de la norma donde podría recogerse al principio la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como los mecanismos o medidas para neutralizar los potenciales impactos negativos:

- Artículo 16. Los entes supramunicipales del agua. Punto 7. Se propone completar este punto explicitando que se garantizará, en la medida de lo posible, la composición equilibrada por sexo en el órgano de participación que cada ente supramunicipal cree para hacer efectiva la participación de las usuarias y usuarios en la gestión del ciclo integral del agua.
- Artículo 21. Información ambiental y difusión de estadísticas del agua. Punto 2. Se propone completar este punto especificando que los medios técnicos y procedimientos que la Agencia Andaluza del Agua establezca para facilitar el acceso de la ciudadanía a la información relativa al uso, gestión, planificación y protección del medio hídrico se diseñarán teniendo en cuenta las necesidades de mujeres y hombres y sus posibilidades de acceso a los recursos de la información.

#### 4. LA REPRESENTACIÓN EQUILIBRADA

Seguendo el artículo 11 de la citada Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 2007) sobre Representación equilibrada de los órganos directivos y colegiados se deberá garantizar la representación equilibrada de hombres y mujeres en el nombramiento de titulares de órganos directivos de la Administración. Podría incluirse una mención expresa a la representación equilibrada de mujeres y hombres en los siguientes artículos:

- Artículo 13. Órganos de la Agencia Andaluza del Agua, puntos 1 y 4.
- Artículo 17. Creación, composición y funciones, punto 2.
- Artículo 18. Consejo Andaluz del Agua.
- Artículo 19. El Observatorio del Agua, punto 1.

- Artículo 41. Participación y representación de las Comunidades de Usuarios de Masas de Aguas Subterráneas en los órganos de gobierno y gestión de la Agencia Andaluza del Agua.

## **EL LENGUAJE Y LA IMAGEN**

Y con carácter general, de acuerdo con el art. 9 sobre lenguaje no sexista e imagen pública de la *Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía* (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 2007) y de la *Instrucción de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de Vicesecretarios para evitar un uso sexista del lenguaje en las disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía*, se hace necesario revisar la redacción asegurando que el lenguaje utilizado facilite la visibilización tanto de las mujeres como de los hombres, en todos los aspectos tratados, lo que facilitará a su vez la comprensión de las situaciones concretas de unas y otros que puedan ser motivo de desigualdades, y la posterior actuación a favor de la igualdad entre mujeres y hombres.

- A) Cuando se emplee a lo largo del texto, el género gramatical masculino, como genérico universal deberá añadirse la mención expresa del género gramatical femenino, o para evitar este desdoblamiento, se buscará una expresión que incluya a ambos sexos, vigilando además las concordancias gramaticales. Por ejemplo:

Los ciudadanos → Los ciudadanos y ciudadanas, o bien, la ciudadanía.

Todos → Todos y todas.

Usuarios → Usuarios y usuarias, o bien, las personas usuarias (o las entidades usuarias, si procede).

Estar informados → Estar informados e informadas, o bien, obtener información.

Los interesados → Los interesados e interesadas, o bien, las personas (o entidades) interesadas.

El beneficiario → El beneficiario o la beneficiaria, o bien, la persona beneficiaria.

El prestador → El prestador o prestadora, o bien, la persona (o entidad) prestadora.

Técnico → Técnico o técnica, o bien, personal técnico.

Los inspectores → Los inspectores o inspectoras, o bien, personal de inspección.

04 / 10

Los funcionarios → Los funcionarios y funcionarias, o bien, el funcionarioa.  
Empleados → Empleados y empleadas, o bien, las personas empleadas.

- 2).- Cuando se haga uso de términos que no llevan marca de género, es necesario observar los artículos o determinantes que lo acompañan pues estos le atribuyen la marca de género que por sí mismo no poseen:  
Los titulares → Los y las titulares, o bien, las personas titulares.  
Habitantes que pueden verse afectados → Habitantes que pueden verse afectados y afectadas, o bien, población que pueda verse afectada.

Es todo cuanto cabe observar al informe de evaluación de impacto y al proyecto de norma tramitado.

Sevilla a 24 de abril de 2009



**ANEXO. Normativa vigente sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que afectan a la elaboración del Informe de Impacto de género.**

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE núm. 71 de 23 de marzo de 2007)
- Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género en Andalucía (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 2007)
- Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de género en Andalucía (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 2007)

Transversalidad del principio e igualdad	Art. 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07)
Objetivo de igualdad por razón de género	Art. 6.2 Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la igualdad de género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07)
Evaluación de impacto de género	Artículo 6 la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07) Decreto 93/2004, de 9 de marzo por el que se regula el Informe de Evaluación de Impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno.
Datos desagregados por sexo	Ley 11a estadístico de Andalucía Artículo 10 Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07)
Políticas y actuaciones con perspectiva de género	Artículo 11 Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad
Presencia equilibrada de mujeres y hombres	

04 / 10

**Contratación y Subvenciones Públicas**

de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07)

Art. 18 y 19 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía (BOE núm. 276 de 17/11/07)

Art. 12 y 13 Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07)

Art. 101, art. 102 y art. art. 49 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público (BOE n° 261 de miércoles 31 de octubre de 2007)

Artículo 9 la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07)

Instrucción de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de Viceconsejeros para evitar un uso sexista del lenguaje en las disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía

**Lenguaje administrativo no sexista**

Artículo 9 y Artículo 54 Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07)

**Imagen pública, Información y publicidad no sexista**

05 / 10

**INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO QUE EMITE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL, RESPECTO AL ANTEPROYECTO DE LEY DE AUTONOMÍA LOCAL DE ANDALUCÍA**

El artículo 43. 2 de la Ley 6 /2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía establece la obligación de acompañar los anteproyectos de ley que se elaboren, entre otros documentos, de una memoria sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establezcan. Posteriormente, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de promoción de la igualdad de género en Andalucía, ha establecido en su artículo 6.2 que en el proceso de tramitación de todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Consejo de Gobierno debe emitirse un informe de evaluación de impacto de género

Desde este Centro Directivo se han iniciado los trámites para la aprobación de una Ley de Autonomía Local de Andalucía, en el uso de la competencia exclusiva en materia de régimen local que el artículo 60 del Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía y en cumplimiento del mandato estatutario recogido en su artículo 98.

En el anteproyecto que se acompaña se regulan cada una de materias, relaciones o situaciones recogidas en los citados artículos, contemplándolas bajo la luz de una nueva óptica del principio de autonomía local, entendida no ya como mera discrecionalidad administrativa sino como auténtico ámbito de capacidad de ideación, normación y gestión de políticas diferenciadas de los asuntos públicos.

Elemento central y fundamental de la regulación son las competencias de los municipios y provincias, significándose que las competencias locales se clasifican en función del origen, entre competencias propias, transferidas y delegadas, y en función de su alcance, entre exclusivas, compartidas y concurrentes.

Se pone de relieve en el anteproyecto que municipio y provincia constituyen un mismo nivel de gobierno: "la comunidad política local" en el que el primero adopta la posición central y la segunda cumple funciones de aseguramiento de la autonomía municipal, supliendo su eventual déficit de capacidad de gestión y los efectos de las economías de escala, y de articulación de los municipios en las relaciones con los otros niveles de gobierno estatal y autonómico. Por ello, el precepto más extenso del texto es el que detalla las competencias propias de los municipios, conforme resultó de las conversaciones con el resto de las Consejerías.

Será en el ejercicio de estas competencias, manifestación de la autonomía local entendida como la capacidad de "ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos", donde se ponga de manifiesto los efectos indirectos de la Ley que nos ocupa en lo que respecta a la igualdad de mujeres y hombres.

Según la última revisión del padrón municipal a fecha 1 de enero de 2008, publicada en el anuario correspondiente del Instituto de Estadística de Andalucía, existe en la Comunidad Autónoma de Andalucía

un total de 4.130.720 mujeres, lo que supone un 50.3 % de la población andaluza, formada por 8.202.220 personas.

La distribución de mujeres y hombres en las provincias andaluzas es la siguiente:

	Total	Varones	Mujeres
Almería	667635	343716	323919
Cádiz	1220467	608616	611851
Córdoba	798822	392658	406164
Granada	901220	447280	453940
Huelva	507915	252394	255521
Jaén	667438	332568	334870
Málaga	1563261	773012	790249
Sevilla	1875462	921256	954206

INFORME  
CONSEJERÍA

La distribución de mujeres y hombres por tamaño de municipio es la que sigue:

	Ambos sexos	Varones	Mujeres
Total	8202220	4071500	4130720
Capital	2407812	1154440	1253372
M. no capital. Menos de 101 hab.	152	89	63
M. no capital. De 101 a 500 hab.	29573	15235	14338
M. no capital. De 501 a 1.000 hab.	72896	37595	35301
M. no capital. De 1.001 a 2.000 hab.	172614	87895	84719
M. no capital. De 2.001 a 5.000 hab.	655275	331903	323372
M. no capital. De 5.001 a 10.000 hab.	741250	374394	366856
M. no capital. De 10.001 a 20.000 hab.	1036245	521035	515210
M. no capital. De 20.001 a 50.000 hab.	1336273	670358	665915
M. no capital. De 50.001 a 100.000 hab.	1178561	594670	583891
M. no capital. De 100.001 a 500.000 hab.	571569	283886	287683

La distribución de mujeres y hombres por grupos de edad es la siguiente:

	Ambos sexos	Varones	Mujeres
Total	8202220	4071500	4130720
0-4	451515	232428	219087
5-9	431293	222468	208825
10-14	443475	227742	215733
15-19	498117	256954	241163
20-24	555720	284995	270725
25-29	669087	344315	324772
30-34	710190	364909	345281
35-39	683807	348997	334810
40-44	671446	338922	332524
45-49	586505	295167	291338
50-54	487051	243227	243824
55-59	422515	208834	213681
60-64	395053	191839	203214



65-69	311517	146824	164693
70-74	320029	144560	175469
75-79	269663	114733	154930
80-84	172248	65903	106345
85 y más	122989	38683	84306

INFORME  
CONSEJERIA

A todas ellas afectarán las políticas que se lleven a cabo en las siguientes áreas y materias de la competencia local:

- Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística.
- Planificación, programación y gestión de viviendas y participación en la planificación de la vivienda de protección oficial.
- Gestión de los servicios sociales comunitarios.
- Ordenación, gestión, prestación y control de servicios en el ciclo integral del agua de uso urbano.
- Ordenación, gestión y prestación del servicio de alumbrado público.
- Ordenación, gestión y prestación y control de los servicios de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos o municipales, así como la planificación, programación y disciplina de la reducción de la producción de residuos urbanos o municipales.
- Ordenación, gestión y prestación del servicio de limpieza viaria.
- Ordenación, planificación, programación, gestión, disciplina y promoción de los servicios urbanos de transporte público de viajeros que, por cualquier modo de transporte, se lleven a cabo íntegramente dentro de sus respectivos términos municipales.
- Conservación y mantenimiento de las vías públicas urbanas y rurales de titularidad municipal dentro del término municipal.
- Ordenación, gestión, disciplina y promoción en vías urbanas de su titularidad de la movilidad y accesibilidad de personas, vehículos, sean o no a motor, y animales, y del transporte de viajeros y mercancías.
- Protección, conservación y promoción del patrimonio histórico y artístico de su término municipal a través de la elaboración y aprobación de catálogos urbanísticos y de planes con contenido de protección, previo informe vinculante de la Consejería competente en materia de cultura.
- Promoción, defensa y protección del medio ambiente y la salud pública.
- Ordenación de las condiciones de seguridad en las actividades organizadas en espacios públicos y en los lugares de concurrencia pública.
- Ordenación, planificación y gestión de la defensa de usuarios y consumidores.
- Promoción del turismo.
- Planificación y gestión de actividades culturales y promoción de la cultura.
- Promoción del deporte y gestión de equipamientos deportivos de uso público.
- Ordenación, planificación, gestión y control sanitario de cementerios y servicios funerarios.
- Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
- Conservación, mantenimiento y vigilancia de los centros docentes públicos de educación infantil y primaria.
- Ordenación, autorización y control de actividades económicas y empresariales, permanentes u ocasionales.
- La autorización de mercadillos de apertura periódica así como la promoción del acondicionamiento físico de los espacios destinados a su instalación.
- Ordenación, gestión, promoción y disciplina sobre mercados de abastos.

- 05 / 10
- La organización y autorización, en su caso, de eventos o exposiciones menores que, sin tener carácter de feria oficial, estén destinadas a la promoción de productos singulares.
  - Desarrollo económico y social en el marco de la planificación autonómica.
  - Establecer y desarrollar estructuras de participación ciudadana y del acceso a las nuevas tecnologías.
  - La provisión de medios materiales y humanos para el ejercicio de las funciones de los Juzgados de Paz.
  - Ejecución de las políticas de inmigración a través de la acreditación del arraigo para la integración social de inmigrantes, así como la acreditación de la adecuación de la vivienda para el reagrupamiento familiar de inmigrantes

En base a lo expuesto, será en las políticas diferenciadas que se lleven a cabo por los gobiernos locales en las materias mencionadas y como manifestación de la autonomía local, entendida como la capacidad de "ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos", donde se pondrá de manifiesto las actuaciones dirigidas a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, reduciendo y corrigiendo las desigualdades que pudieran existir en estas áreas o sectores.

Por todo ello, se puede concluir afirmando que el presente anteproyecto de ley, aún siendo pertinente al género, al afectar indirectamente a las mujeres andaluzas, que junto con los hombres son destinatarias finales del mismo, no genera impacto por razón de género, sino que constituye un presupuesto habilitador para que los gobiernos locales, que asumen amplias competencias propias, puedan introducir en sus políticas las medidas positivas necesarias para corregir las desigualdades existentes, debiendo regirse por las reglas de paridad en la composición de los órganos consultivos o de asesoramiento que pudieran crear como manifestación de su potestad de autoorganización.

Por último, se considera que en el anteproyecto normativo que nos ocupa no se efectúa un uso sexista del lenguaje, al no recoger expresiones que refuercen actitudes de desigualdad hacia las mujeres.

Sevilla, a 16 de septiembre de 2009

**EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL**



**FDO. Manuel Zafra Víctor**

**INFORME  
CONSEJERÍA**



OBSERVACIONES QUE EMITE EL **INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER** AL  
INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO REMITIDO POR LA  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA CONSEJERÍA DE  
GOBERNACIÓN** SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE AUTONOMÍA LOCAL DE  
ANDALUCÍA

Visto el Anteproyecto de Ley y el Informe de Evaluación de Impacto de Género emitido por el órgano directivo competente.

Y conforme a lo establecido en el **Decreto 93/2004, de 9 de marzo, que regula el Informe de Evaluación de Impacto de Género en los proyectos de Ley y Reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno**, en el artículo 114 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía y en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía en su artículo 6.2., este organismo realiza las siguientes observaciones con objeto de garantizar un impacto de género positivo tras su aprobación:

**1. LA PERTINENCIA DE GÉNERO**

Con carácter general, se está de acuerdo con la conclusión a que se llega en el informe de evaluación de impacto de género remitido respecto a que el Anteproyecto de Ley que nos ocupa, regula una materia que tiene como público destinatario final a mujeres y hombres, por lo que resulta ser:

**Pertinente al género**



**No pertinente**



Asimismo, se quiere felicitar al órgano emisor de la presente normativa por ir más allá de la mera valoración global de la pertinencia de género del texto normativo, y descender al análisis pormenorizado de aquellas áreas y materias de la competencia local que pueden ser consideradas pertinentes al género puesto que afectan de manera directa e indirecta a hombres y mujeres.

No obstante, no se comparte la afirmación recogida en dicho informe acerca de que la norma que nos ocupa "no genera impacto por razón de género", y en orden a



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

visibilizar dicho impacto, y teniendo en cuenta la normativa de aplicación en relación con la igualdad de género (ver Anexo), se realizan las **siguientes** observaciones:

## 2. LA IDENTIFICACIÓN DE DESIGUALDADES

La Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de género en Andalucía (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 2007) en su Art. 6.2 dispone la obligatoriedad de presentar un informe de evaluación del impacto de género en todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Consejo de Gobierno. Y en el apartado 3 del citado artículo, señala que deberá ir acompañado de indicadores pertinentes al género, que nos permitan analizar la situación real existente, y valorar si lo previsto en la norma en cuestión, atiende de forma igualitaria (que no igual) a las mujeres y hombres a los que van destinadas las medidas que se pretenden regular.

El informe de evaluación del impacto de género remitido, aporta datos absolutos sobre la población, desagregada por sexo y provincia, así como por tamaño de municipio y por grupos de edad. Dichos datos pueden servir para cuantificar el número de personas, hombres y mujeres, a los que afecta el Anteproyecto de Ley, pero no aportan información que sea de utilidad para valorar el impacto de género de la misma.

Dado el objeto del Anteproyecto de Ley que nos ocupa, no es tan relevante especificar los datos concretos a aportar como establecer las garantías para que, en caso de que la información relativa a la situación de mujeres y hombres con relación a la gestión de las políticas locales y su regulación sea necesaria, esté disponible. Una manera de garantizar dicha disponibilidad de información en el ámbito local es regular la obligatoriedad de desagregar por sexo la información gestionada en este ámbito competencial y relativa a personas, así como promover la construcción y uso de indicadores de género para informar la planificación, seguimiento y evaluación de los resultados e impacto de dichas políticas sobre la ciudadanía.

Tal obligatoriedad debería quedar fijada en aquellas partes del texto del Anteproyecto, en que se hace mención a competencias municipales en materia de gestión de información, por ejemplo:



05 / 10

Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

INFORME  
IAM

- En el Art.7.20. "Vigilancia y control de la escolaridad obligatoria, y recogida y tratamiento de los datos desagregados por sexo acerca de su cumplimiento, así como el uso de indicadores de género para su verificación"

Esta misma obligatoriedad ha de extenderse a las demás entidades locales que asuman por delegación el ejercicio de competencias propias de la Comunidad Autónoma, que han de proporcionar información útil para la valoración del ejercicio de dichas competencias desde el punto de vista de su contribución a la igualdad entre mujeres y hombres.

Con ello, el presente Anteproyecto de Ley contribuirá a dar cabal cumplimiento tanto del **artículo 10.a** de la citada **Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de género en Andalucía** (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 2007), que obliga a *incluir de forma sistemática la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que se realicen*, como de la **Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía 4/2007, de 4 de abril**, por la que se modifica la **Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística**, y se aprueba el **Plan Estadístico de Andalucía 2007-2010**.

### 3. LA TRANSVERSALIDAD Y LAS MEDIDAS CORRECTORAS

**3.1.** El **artículo 5** de la **Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía** (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 2007) prescribe que *en todos los reglamentos se tiene que tener en cuenta la transversalidad de género tanto en la elaboración como en la ejecución y seguimiento de las disposiciones normativas* y en la norma que se analiza no se muestra, de forma explícita, esa transversalización.

Por ello debería hacerse mención expresa de este principio en:

- En la **Exposición de motivos**, apartado I, cuando se hace mención al marco normativo en cuyo desarrollo se inscribe el Anteproyecto de Ley, especialmente el Estatuto de Autonomía de Andalucía, ha de explicitarse el marco normativo de referencia en materia de igualdad, de la siguiente forma:

"Asimismo, dicho Estatuto establece, en su Art.15, la garantía de la <<igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

*ámbitos>>, como deber de las administraciones públicas. A tal efecto, este Anteproyecto considera como principio transversal de la ordenación local la igualdad entre mujeres y hombres, y el articulado del mismo así lo recoge en las partes en que es pertinente".*

- En el **Art. 4. Principios generales**, se recomienda añadir un nuevo punto en el que se establezca lo siguiente "x. La determinación de las competencias locales se rige por el principio de igualdad entre mujeres y hombres, que deberá hacerse explícito en el desarrollo de dichas competencias y en sus actuaciones de manera transversal"

Por otro lado, para lograr de forma efectiva el objetivo de la igualdad por razón de género, de acuerdo con lo dispuesto en el **Art. 6.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía** y en el **art. 6.3** de la mencionada **Ley 12/2007**, se afirma que se *deberán mencionar los mecanismos y medidas dirigidas a paliar y neutralizar los posibles impactos negativos*, y en el Anteproyecto de Ley que nos ocupa, al no reconocerse el impacto del mismo, no se recogen. Para subsanar este déficit, pasamos a enumerar las partes de la norma donde debería recogerse el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como los mecanismos o medidas para neutralizar los potenciales impactos negativos:

- a) En el punto 3 del **Art. 4. Principios generales**, se debe añadir lo siguiente:  
"La atribución de competencias locales implicará las asignaciones económicas a las entidades locales que sean necesarias para su desempeño, *visibilizando las asignaciones económicas destinadas al desempeño de competencias locales en materia de fomento de la igualdad entre mujeres y hombres*"
- b) En el Art. 7, que determina las **competencias municipales**, ha de añadirse, a todos los puntos, una nueva letra en que se recoja como competencia municipal *"la promoción de la integración del enfoque de la igualdad de género en las políticas que se establezcan en desarrollo de estas competencias, así como de garantía de la igualdad entre mujeres y hombres en la materia que se trate"*
- c) En aquellas competencias municipales relacionadas con el **fomento o regulación de la participación ciudadana** (por ejemplo, las actividades deportivas señaladas en el Art.7.18.a. o las indicadas en el Art.7.27) ha de hacerse una mención explícita a *"la promoción de la participación equilibrada de mujeres y hombres en los ámbitos referidos, así como a la posibilidad de*



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

*establecer medidas de acción positiva en orden al logro de dicha participación equilibrada en actividades en las que las mujeres estén infrarrepresentadas".*

- d) En el **Art. 8. Ejercicio y titularidad de las competencias municipales**, ha de añadirse, al final del mismo, lo siguiente: "(...) Los traspasos competenciales o las diversas formas de gestión indirecta de servicios en ningún caso afectarán a la titularidad de las competencias y a las garantías de los ciudadanos y ciudadanas, *especialmente con relación al acceso y uso de estos servicios garantizando la igualdad de género*".
- e) La **asistencia** técnica prestada por la provincia al municipio ha de contemplar asimismo la integración del enfoque de la igualdad género en las actividades de asistencia que se mencionan en el **Art. 10.1.**, y así debe hacerse explícito en dicho Artículo, añadiendo un nuevo punto al final del mismo en que se establezca: "*Para su prestación, la provincia asegurará la integración de la igualdad género en las actividades de asistencia que se mencionan*". Además, para asegurar la coherencia con lo anterior, se debe contemplar un nuevo ámbito en que la provincia puede prestar asistencia técnica al municipio, que es el siguiente: "*Integración de la igualdad género en la planificación, seguimiento y evaluación de las políticas municipales*". En el mismo sentido, la asistencia económica de la provincia al municipio debe regirse por este principio de actuación, y así debe hacerse explícito en el Art. 11.2., de la siguiente forma: "(...) En todo caso, su procedimiento de elaboración se regirá por los principios *de igualdad de género, transparencia y publicidad* de las distintas actuaciones, informes y alegaciones municipales y provinciales".
- g) Los **procedimientos de planificación** relativos al desarrollo de las competencias municipales o provinciales que se prevén a lo largo del articulado del Anteproyecto de Ley, han de contemplar la necesidad de que todo plan, proyecto o programa elaborado en su desarrollo, vaya acompañado de un informe de evaluación del impacto de género de dicho plan, proyecto o programa. Algo similar ha de establecerse en el caso de los procedimientos de **evaluación** de los "efectos sociales, económicos, ambientales o territoriales" (Art. 11.4.) de dichos planes o programas, que deben contemplar como criterio de evaluación la medida en que éstos han contribuido al avance en la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de las actuaciones objeto de planificación/evaluación. Todo ello es aplicable a las actuaciones de planificación y evaluación de la actuación de las entidades públicas o privadas contratadas que se mencionan en los Artículos del Capítulo I del Título II del Anteproyecto de Ley: dichas entidades han de observar igualmente el



JUNTA DE ANDALUCÍA

Instituto Andaluz de la Mujer

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

principio de transversalidad de género en la planificación y evaluación de sus actividades.

- h) Como forma de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de las entidades locales con relación a la promoción de la igualdad de género y su garantía, ha de añadirse, en el **Art.16.**, lo siguiente: "Por razones de interés general, en caso de grave incumplimiento de las obligaciones que las entidades locales asumen en virtud de las transferencias de competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, *especialmente las relativas al cumplimiento de la normativa vigente en materia de igualdad entre mujeres y hombres*, o cuando se detectara notoria negligencia, ineficacia o gestión deficiente de las competencias transferidas, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (...)".
- i) La igualdad entre mujeres y hombres ha de especificarse como principio informador de los servicios locales de interés general, añadiendo al Art.25.2., lo siguiente: "igualdad entre mujeres y hombres y no discriminación por razón de sexo". Asimismo, este principio ha de informar la gestión de los servicios locales de interés económico general, señalándolo de esta manera en el Art. 41.
- f) La actuación local en materia de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, ha de ser publicitada, para garantizar a la ciudadanía el acceso a la información sobre la actuación municipal en este ámbito. Ello ha de quedar explícito en el Art. 51, añadiendo una nueva letra al punto 1, en que se especifique lo siguiente:
- "f) Actuaciones y servicios orientados a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres"
- g) Las relaciones de coordinación a que se hace referencia en el Capítulo II del Título IV han de estar sustentadas en los principios de colaboración, coordinación y cooperación, para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. Así ha de explicitarse en el Art. 54, añadiendo un nuevo punto en que se establezca:
- "x. La coordinación con la actividad de las entidades locales ha de ser considerada como una estrategia adecuada y necesaria para impulsar, desarrollar y evaluar las acciones y políticas públicas para promover la igualdad de género en Andalucía, tal como dispone el Art. 4.9. de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía".



05 / 10



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

- h) Asimismo, la cooperación territorial a que hace referencia el Capítulo I del Título V, ha de tener como fin, y así ha de señalarse en el Art. 56., mediante un nuevo punto en que se recoja: *"la igualdad entre mujeres y hombres y la respuesta a las necesidades de las mujeres y hombres y su acceso igualitario a los bienes, recursos y servicios"*.
- En el mismo sentido, y en coherencia con lo anterior, se debe añadir al Art. 57., lo siguiente: "1. La cooperación territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía se regirá por los principios generales de autonomía local, descentralización, *igualdad de género*, eficacia, eficiencia, participación, planificación y calidad."
  - Asimismo, los convenios de colaboración, como instrumentos de formalización de la cooperación territorial (Art. 79.3.), deben especificar entre sus fines y objetivos aquellos relacionados con la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, así como acompañar las memorias de ejecución de información relevante acerca de las actuaciones puestas en marcha para su cumplimiento.
- i) La igualdad de género, la respuesta a las necesidades de las mujeres y hombres y su acceso igualitario a los bienes, recursos y servicios, ha de ser también un principio de organización territorial del municipio, y así debe hacerse explícito en el Art. 106 del Anteproyecto de Ley.
- j) El ejercicio de las competencias propias de las Entidades Locales Autónomas, especificadas en el Art.119, ha de realizarse respetando este principio y así puede explicarse en el punto 2 de este Art. de siguiente forma: "2. En el ejercicio de sus competencias propias se tendrán presente, en todo caso, las debidas facultades de coordinación del Municipio, *así como el respeto al principio de igualdad de género en su desarrollo*"

#### 4. LA REPRESENTACIÓN EQUILIBRADA

Siguiendo el **artículo 11** de la citada **Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía** (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 2007) sobre *Representación equilibrada de los órganos directivos y colegiados, se deberá garantizar la representación equilibrada de hombres y mujeres en el nombramiento de titulares de órganos directivos de la Administración*. De forma análoga, los **Art. 18 y 19** de la **Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía** (BOE núm. 276. de 17/11/07), establecen *la garantía de representación equilibrada de hombres y*



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

mujeres tanto en el nombramiento de sus órganos directivos como en la composición de los órganos colegiados, y en el Anteproyecto de Decreto que nos ocupa, a pesar de que en el informe de evaluación de impacto de género remitido reconoce que "deben regirse por las reglas de paridad en la composición de los órganos consultivos o de asesoramiento que pudieran crear como manifestación de su potestad de autoorganización", se deja esta al desarrollo que de dicha potestad hagan las entidades locales, no previendo en el Anteproyecto ninguna medida para garantizar que así se hará.

A tal fin, se recomienda incluir una mención expresa a la representación equilibrada en aquellas partes del Anteproyecto en que se mencionan órganos directivos o de asesoramiento, utilizando la fórmula que se recoge a continuación:

- *"La determinación de la composición de (órgano que se trate), ha de orientarse por lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía sobre Representación equilibrada de los órganos directivos y colegiados, garantizando la representación equilibrada de hombres y mujeres en el nombramiento de titulares de órganos directivos de la Administración, así como por lo establecido mediante los Art. 18 y 19 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, que establece la garantía de representación equilibrada de hombres y mujeres tanto en el nombramiento de sus órganos directivos como en la composición de los órganos colegiados"*

Dicha fórmula ha de ser adaptada e incluida en las siguientes partes de la norma que nos ocupa:

- *Art. 31. con referencia al Consejo Rector de las Agencias públicas administrativas locales.*
- *Art. 32. Consejo de Administración de las Agencias públicas empresariales locales.*
- *Art. 33. Comisión de control de las Agencias especiales locales.*
- *Art. 35. Junta general y Consejo de Administración de las Sociedades mercantiles locales.*
- *Art. 39. Patronato de las fundaciones públicas locales.*



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

- *Art. 40. Empresas mixtas de colaboración pública-privada.*
- *Art. 44. órganos directivos y de gestión de las empresas públicas locales.*
- *Art. 63. órganos colegiados, de gobierno y administración de las mancomunidades.*
- *Art. 77. Órganos de gobierno de los consorcios.*
- *Art.96-98. Comisiones gestoras de la entidades de gobierno y administración provisionales.*
- *Art.113. órganos de gobierno y gestión de las entidades vecinales*
- *Art. 107. Órganos de representación del gobierno municipal en las circunscripciones territoriales desconcentradas.*

## 5. LA CONTRATACIÓN PÚBLICA Y LAS SUBVENCIONES

Por otro lado, de conformidad con el **art. 12.** de la **Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía** (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 2007) sobre la *Contratación Pública*, *deberán establecerse condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres, señalando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la preferencia de las empresas que tengan marca de excelencia o desarrollen medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades.* Así mismo queda dispuesto en los **art. 101.1. y 102.1.**, de la **Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público** (BOE nº 261 de 31/10/07), que a su vez estipula, en su **art. 49.1.c**, que *se deberá mencionar explícitamente que no se podrán realizar contratos con aquellas que hayan sido sancionadas en firme por infracción grave en materia de igualdad de oportunidades.*

Todo lo anterior implica que en el Anteproyecto de Ley que nos ocupa, se deberá recoger, en aquellas partes del articulado en que se mencionan modalidades contractuales de colaboración público-privada. Así, ha de hacerse explícito añadiendo un nuevo punto, con carácter general, al Art.30., en que se especifique lo siguiente:

- *"6. En cumplimiento del Art. 12. de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía podrán establecerse condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres, señalando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la*

05 / 10



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

*preferencia por empresas que tengan marca de excelencia o desarrollen medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades. En cualquier caso, en todas aquellas modalidades contractuales de colaboración público-privada ha de asegurarse que las entidades prestatarias del servicio público dan cumplimiento a lo dispuesto en la legislación en materia de promoción de la igualdad de género en el acceso, uso y prestación del servicio"*

## 6. EL LENGUAJE Y LA IMAGEN

Y con carácter general, de acuerdo con el **art. 4, punto 10** y el **art. 9** sobre *lenguaje no sexista e imagen pública* de la **Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía** (BOJA núm. 247, de 18/12/07), así como de la **Instrucción de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de Viceconsejeros para evitar un uso sexista del lenguaje en las disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía**, se traslada nuestra felicitación al órgano competente por haber utilizado en la redacción del Anteproyecto de Ley que nos ocupa, un lenguaje inclusivo y no sexista. Ello denota sin duda su sensibilización en materia de género. Con objeto de contribuir a eliminar totalmente algunos sesgos sexistas que permanecen en el texto legislativo, realizamos las siguientes recomendaciones en orden a su sustitución:

- los legisladores: quienes legislan, los y las legisladoras.
- todos: todos y todas, todas las personas.
- consumidor: persona consumidora, consumidor y consumidora.
- usuarios: personas usuarias, usuarias y usuarios.
- los miembros: las y los miembros.
- destinatarios: personas o entidades destinatarias.

**6.1.** Se tendrá, además, en cuenta el cumplimiento del principio de *no discriminación por razón de sexo en aquellas campañas de información y divulgación* que se lleven a cabo, en base a los **art. 4.10** y **art. 57** de la **Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía** (BOJA núm. 247, de 18/12/07). Como forma de asegurar el cumplimiento de este principio en las acciones de difusión que se lleven a cabo en desarrollo de las competencias locales en la materia, se sugiere hacerlo explícito en las partes pertinentes de la norma, por ejemplo:

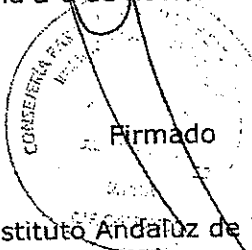


05 / 10

- En el Art.1. 14., letra j) "Los ayuntamientos podrán realizar programas de prevención de riesgos y campañas de información, *que han de ajustarse en todo caso a lo dispuesto en los art. 4.10 y art. 57 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía con relación al cumplimiento del principio de no discriminación por razón de sexo en aquellas campañas de información y divulgación que se lleven a cabo*"
- Adicionalmente, en el punto 2 del Art.51., han de establecerse las condiciones previas para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso a dicha información; ello es aplicable a cualquier actuación municipal en materia de difusión de la información.

**Es todo cuanto cabe observar al informe de evaluación de impacto y al proyecto de norma tramitado.**

Sevilla a 6 de noviembre de 2009



Instituto Andaluz de la Mujer

ANEXO. Normativa vigente sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que afectan a la elaboración del informe de impacto de género.

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE núm. 71 de 23 de marzo de 2007)
- Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género en Andalucía (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 2007)
- Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de género en Andalucía (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 2007)
- Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía (BOE núm. 276 de 17/11/07), Art. 3., puntos p) y q)
- Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, (BOE núm. 68 de 20/03/07), Art. 10, 14 y 15

Transversalidad del principio e igualdad

Art. 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07)

Objetivo de igualdad por razón de género

Art. 6.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07)

Evaluación de impacto de género

Artículo 6 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07)

Art. 114 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía (BOE núm. 68 de 20/03/07)

Decreto 93/2004, de 9 de marzo por el que se regula el Informe de Evaluación de Impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno.

Artículo 45. de la Ley 6/2006, de 24 de octubre del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 215 de 7/11/06), respecto al procedimiento de elaboración de los reglamentos que deberán estar acompañados de una memoria sobre el impacto que por razón de género tendrán las medidas incluidas en los mismos

Datos desagregados por sexo

Plan Estadístico de Andalucía

Estudios y Estadísticas con perspectiva de género

Artículo 10 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de



05 / 10

INFORME  
IAMInstituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

18/12/07)

**Presencia equilibrada de mujeres y hombres**

Artículo 11 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07)

Art. 18 y 19 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía (BOE núm. 276 de 17/11/07)

**Contratación y Subvenciones Públicas**

Art. 12 y 13 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07)

Art. 101, art. 102 y art. 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público (BOE núm. 261 de 31/10/07)

**Lenguaje administrativo no sexista**

Art. 4.10 y art. 9 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07)

Instrucción de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de Viceconsejeros para evitar un uso sexista del lenguaje en las disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía

**Imagen pública, Información y publicidad no sexista**

Artículo 4.10 y Artículo 57 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07)

***Proyecto de Ley de participación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía***

***(Marzo | 2010)***

## **Índice**

	<b>pag.</b>
<b>1. Proyecto de Ley</b>	
1.1. <i>Proyecto de Ley de participación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía</i>	<b>5</b>
1.2. <i>Dictamen del Consejo Consultivo al Anteproyecto de Ley de participación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía</i>	<b>45</b>
1.3. <i>Observaciones del Instituto Andaluz de la Mujer al Anteproyecto de Ley de participación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía</i>	<b>63</b>
1.4. <i>Memoria sobre impacto por razón de género del anteproyecto de la Ley de de participación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía</i>	<b>69</b>
1.4. <i>Memoria sobre impacto por derechos de la infancia del anteproyecto de la Ley de de participación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía</i>	<b>71</b>
<b>2. Bibliografía</b>	<b>73</b>



725/09.EH

INFORME  
CONSEJERÍA

06 / 10

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO DE LA LEY REGULADORA DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.**

El presente informe se emite en virtud de lo establecido en el artículo 43.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificada por la Ley 1/2008, de 27 de noviembre, de medidas tributarias y financieras de impulso a la actividad económica de Andalucía, y de agilización de procedimientos administrativos, y el Decreto 93/2004, de 9 de marzo, por el que se regula el informe de evaluación de impacto de género en los proyectos de Ley y reglamentos que aprueba el Consejo de Gobierno.

~~La Ley que se tramita tiene por objeto regular la participación de las Entidades Locales~~  
en los tributos de la Comunidad Autónoma.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía en su artículo 192.1 establece que una Ley regulará la participación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad Autónoma que se instrumentará a través de un fondo de nivelación municipal, de carácter incondicionado.

En virtud de dicho mandato estatutario se tramita la presente norma cuyo contenido afectará únicamente a las relaciones financieras entre la Administración de la Junta de Andalucía y las Administraciones de las Entidades Locales, esto es, relaciones financieras de multinivel, sin que su aprobación vaya producir impacto alguno sobre la situación de las mujeres y de los hombres, ni se vayan a establecer medidas que puedan suponer discriminación de género, que

INFORME  
CONSEJERÍA

06 / 10

De otro lado, respecto a la utilización de un lenguaje no sexista, la redacción del Anteproyecto de Ley se adecua al Acuerdo de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de Viceconsejeros, por el que se da publicidad a la Instrucción para evitar un uso sexista del lenguaje en las disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía.

En virtud del artículo 5 del Decreto 93/2004, de 9 de marzo, por el que se regula el Informe de evaluación de impacto de género en los proyectos de Ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno, debe solicitarse al Instituto Andaluz de la Mujer que emita observaciones sobre el anteproyecto de Ley.

Sevilla, 6 de octubre de 2009



Fdo. Rosario Gómez García



Instituto Andalúz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

06 / 10

**OBSERVACIONES QUE EMITE EL INSTITUTO ANDALÚZ DE LA MUJER AL  
INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO REMITIDO POR LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y  
HACIENDA SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY REGULADORA DE LA  
PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LOS TRIBUTOS DE LA  
COMUNIDAD AUTÓNOMA**

Conforme a lo establecido en la normativa autonómica vigente, cualquier proyecto de Ley, disposición reglamentaria o Planes que apruebe el Consejo de Gobierno, tendrá en cuenta el impacto de género del contenido de la misma. Así queda estipulado en el *Decreto 93/2004, de 8 de marzo, que regula el Informe de Evaluación de Impacto de Género en los proyectos de Ley y Reglamentos que aprueba el Consejo de Gobierno*, como en el artículo 114 de la *Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía* (BOE núm. 58 de 20/03/07). Del mismo modo, la *Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía* (BOJA 247, de 18 de diciembre de 2007), en su artículo 6.2., señala que en el proceso de tramitación de proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Consejo de Gobierno, deberá emitirse un informe de evaluación de Impacto de género del contenido de las mismas. En este mismo artículo se estipula que todos los proyectos de Ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Consejo de Gobierno incorporarán, de forma efectiva, el objetivo de igualdad por razón de género.

En esta línea, la ya mencionada *Ley 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía* recoge entre sus objetivos básicos (artículo 10), que propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la mujer andaluces, promoviendo la democracia paritaria y la plena incorporación de aquella en la vida social, superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica, política o social, garantizando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y hombres en todos los ámbitos como un derecho fundamental (artículo 15). Así mismo, la *Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía* (BOE núm. 276, de 17/11/07), dentro de su Art. 3., puntos p) y q), establece como uno de sus principios rectores de organización y

06 / 10



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

funcionamiento es la igualdad de oportunidades y de trato de hombres y mujeres, así como la no discriminación.

En base a la normativa en vigor en materia de Igualdad de Género (ver Anexo), y visto el proyecto de Ley y el Informe de Evaluación de Impacto de Género emitido por el órgano directivo competente, este organismo realiza las siguientes observaciones con objeto de garantizar un impacto de género positivo tras su aprobación:

### 1. LA PERTINENCIA DE GÉNERO

Con carácter general, ya que el Proyecto de Decreto que nos ocupa regula una materia que tiene como público destinatario final a mujeres y hombres, y regula el acceso de los municipios a un recurso, resulta ser:

Pertinente al género



No pertinente



### 2. TRANSVERSALIZACIÓN DE LA IGUALDAD

A pesar de lo que se mantiene en el Informe de evaluación de Impacto de género emitido por el centro gestor, es importante tener en cuenta que, aunque se estén regulando las relaciones financieras entre la Administración de la Junta de Andalucía y las Administraciones de las Entidades Locales, los criterios tanto para la participación de los municipios en los tributos de la comunidad autónoma como para decidir la cantidad del de financiación incidirán claramente en la mejora de las condiciones de vida de la población.

### 3. EL LENGUAJE Y LA IMAGEN

Y con carácter general, de acuerdo con el art. 4, punto 10 y el art. 9 sobre lenguaje no sexista e imagen pública de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía (BOJA núm. 247, de 18/12/07), así como la Instrucción de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de Viceconsejeros para evitar un uso sexista del



INSTITUTO Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

06 / 10

**lenguaje en las disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía, tal como se dice en el Informe de evaluación de impacto el lenguaje se adapta a las normas vigentes**

**Es todo cuanto cabe observar al Informe de evaluación de impacto y al proyecto de norma tramitado.**

Sevilla a 28 de octubre de 2009

La Directora



Soledad Pérez Rodríguez

**ANEXO. Normativa vigente sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que afectan a la elaboración del Informe de Impacto de género.**

- Ley Orgánica 2/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE núm. 71 de 23 de marzo de 2007)
- Ley 18/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género en Andalucía (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 2007)
- Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de género en Andalucía (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 2007)
- Art. 3., puntos p) y q) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía (BOE núm. 276 de 17/11/07)
- Art. 10, 14 y 15 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, (BOE núm. 68 de 20/03/07)
- Art. 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07)

Transversalidad del principio e igualdad

Objetivo de igualdad por razón de género

Art. 6.2 Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07).

Artículo 6 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07)

Art. 114 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía (BOE núm. 68 de 20/03/07)

Decreto 93/2004, de 9 de marzo por el que se regula el Informe de Evaluación de Impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que aprueba el Consejo de Gobierno.

Artículo 46. de la Ley 6/2006, de 24 de octubre del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 215 de 7/11/06), respecto al procedimiento de elaboración de los reglamentos que deberán estar acompañados de una memoria sobre el impacto que por razón de género tendrán las medidas incluidas en los mismos

Evaluación de impacto de género

Datos desagregados por sexo

Ley Plan Estadístico de Andalucía

Estudios y Estadísticas con perspectiva de género

Artículo 10 Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07)



<b>Presencia equilibrada de mujeres y hombres</b>	para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07) Art. 18 y 19 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía (BOE núm. 276 de 17/11/07)
<b>Contratación y Subvenciones Públicas</b>	Art. 12 y 13 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07) Art. 101, art. 102 y art. 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público (BOE núm. 261 de 31/10/07)
<b>Lenguaje administrativo no sexista</b>	Artículo art. 4.10 y art. 9 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07) Instrucción de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de Viceconsejeros para evitar un uso sexista del lenguaje en las disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía
<b>Imagen pública, Información y publicidad no sexista</b>	Artículo 4.10 y Artículo 57 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07)



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

528/06-DG

17/09/09

Sci-52673

Fecha: 1 de Octubre de 2007

SECRETARÍA GENERAL DE  
AGRICULTURA Y D. RURAL

Asunto: Informe Impacto Genero

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y P.  
Juan de Lara Nieto s/n Tabladilla  
41071 SEVILLA

Ref.: EMB/ Impacto 75/ 07

INFORME  
IAM

07 / 10

S A L I D A	6903
	04 OCT. 2007
Registro General	
Sevilla	

Adjunto le remito observaciones emitidas por este organismo al anteproyecto de Ley para la Dehesa, conforme a lo regulado en el Decreto 93/2004, de 9 marzo, por el que se regula el Informe de Evaluación de Impacto de Género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno.

LA DIRECTORA

A. Soledad Ruiz Seguin







07 / 10

**OBSERVACIONES QUE EMITE EL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER  
AL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO REMITIDO POR  
LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA, SOBRE EL  
ANTEPROYECTO LEY PARA LA DEHESA.**

El anteproyecto de Ley que nos ocupa regula una materia que tiene como público destinatario a personas, a las mujeres y hombres titulares de dehesas, a su personal trabajador y a la población local vinculada a las mismas, así como a un recurso natural y económico de gran trascendencia para el desarrollo sostenible de nuestra Comunidad. Por tanto estimamos que el proyecto normativo es:

**Pertinente al género**

☒

**No pertinente**

☐

Visto el proyecto, el Informe de Evaluación de Impacto de Género emitido, y teniendo en cuenta la normativa de aplicación en relación con la igualdad de género (ver Anexo) se realizan las siguientes observaciones:

1. El Decreto 93/2004 del 9 de marzo por el que se regula el informe de evaluación de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno (BOJA núm. 50 de 12.03.04), dispone en el Art. 4 que el informe de evaluación del impacto de género deberá describir las diferencias existentes entre mujeres y hombres en el ámbito de actuación de las medidas que se pretenden regular, **incluyendo datos desagregados por sexo**, recogidos en estadísticas oficiales, así como el **análisis del impacto potencial** que la aprobación de dichas medidas producirá entre las mujeres y hombres a quienes van dirigidas.

07 / 10

La obtención de datos desagregados por sexo permite analizar la realidad y valorar si lo previsto en el anteproyecto de ley atiende de forma igualitaria a las mujeres y los hombres afectados directa e indirectamente por la misma.

Así, algunos de los datos a recabar para visualizar la realidad de hombres y mujeres en relación con la materia que se regula son:

- Titulares de Dehesas por sexo.
- Población parada, activa y ocupada según sexo, en el sector de la agricultura y subsector ganadero.
- Población por sexo beneficiaria de subvenciones específicas para titulares de explotaciones de dehesas.
- Composición por sexo de directores y directoras generales de las Consejerías con competencias en agricultura, medioambiente e investigación.
- Composición por sexo de los equipos de investigación existentes en el Instituto Andaluz de Formación Agraria, Pesquera, Agroalimentaria y de la Agricultura Ecológica.
- Población por sexo beneficiaria de la formación ofertada por el Instituto Andaluz de Formación Agraria, Pesquera, Agroalimentaria y de la Agricultura Ecológica durante los tres últimos años.

De no contar con esta información, se sugiere inste al Departamento de Estadística de esa Consejería, o en su caso, al Instituto de Estadística de Andalucía, para que incluya y analice estos datos para próximas ocasiones, y proceda en cumplimiento del artículo 22, letra e) de la *Ley 8/2002 de 17 de diciembre del Plan Estadístico de Andalucía 2003-2006* (BOJA 154, de 31.12.02).

2. Por otra parte, en todos los reglamentos se debe tener en cuenta de forma efectiva el objetivo de la igualdad por razón de género, según

lo dispuesto en el Art. 139 de la *Ley por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas para 2004* (BOJA núm.251 de 31 de diciembre) y en el anteproyecto de ley que nos ocupa no se incluye entre los objetivos la igualdad por razón de sexo. Por ello, pasamos a enumerar las partes de la norma donde podría recogerse de forma explícita el principio la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres :

**Artículo 1. Objeto de la ley.** Es necesario hacer explícito que *la promoción de la gestión y explotación racional y sostenible de las dehesas se llevará a cabo también, de forma equitativa en relación a la igualdad de género.* En este sentido, entendemos que favorecer la mejora y conservación de las dehesas no debe estar reñido con el avance en el objetivo de la igualdad entre mujeres y hombres en este medio.

**Artículo 4. Fines.** Poner de manifiesto que se promoverá e incentivará una gestión con enfoque múltiple e integral y atendiendo al principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Igualmente, se debería mencionar que el fomento del desarrollo sostenible de la población local vinculada a las dehesas, mejorando sus rentas y fijando sus poblaciones, se llevará a cabo con equidad de género. Pudiendo establecer en algunos fines la igualdad como criterio, así por ejemplo:

- *observar el logro de la igualdad entre mujeres y hombres en relación con el diseño de un modelo contractual entre las personas titulares de dehesa y sociedad a través de la administración pública, para el reconocimiento de un modelo de gestión adecuado con el medioambiente.*
- *promocionar todos los servicios y productos que ofrece la actividad de hombres y mujeres en las dehesas.*

- *el fomento en investigación y la transferencia de tecnologías a las dehesas se realizará velando por el principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.*

**Artículo 5.3. Plan Director de las Dehesas de Andalucía.** Es imprescindible que el diagnóstico de la situación actual de la dehesa recoja cuál es la presencia de hombres y mujeres en la misma y cuáles son las posibles brechas existentes entre ambos sexos, con objeto de planificar posibles medidas de cara al logro de la igualdad.

**Artículo 9. 2. Contenido.** Los planes de gestión integral, al igual que el Plan director, deben recoger en su diagnóstico cuál es la realidad en relación con la presencia de hombres y mujeres en la dehesa, su actividad y las posibles brechas de género entre ambos sexos. Para ello, es imprescindible poner de manifiesto la necesidad de incorporar indicadores de género y datos desagregados por sexo.

**Artículo 10 y artículo 13. Aprobación, seguimiento y control.** El seguimiento y control por parte de la Administración, de las actuaciones comprometidas en los planes de gestión integral y de los acuerdos de gestión, debe *incorporar indicadores de género que permitan visualizar el avance y el impacto en la igualdad de los mismos.*

**Artículo 15. Incentivos a la realización de Acuerdos.** Se debería poner de manifiesto que las subvenciones que se arbitren para quienes poseen la titularidad de las explotaciones, incorporarán criterios acordes con el logro de la igualdad de género para su concesión.

**Artículo 17. Funciones.** (Comisión Andaluza para la Dehesa). Se debería añadir un nuevo apartado donde se mencione que todas las funciones asignadas a la Comisión Andaluza de la Dehesa se desarrollaran conforme al principio de igualdad de oportunidades entre

mujeres y hombres, incluyendo la representación equilibrada de mujeres y hombres en su composición.

**Artículo 19. Investigación y Formación sobre la Dehesa.** A partir de los resultados obtenidos, la investigación y la formación en relación con la dehesa se deberá conformar atendiendo al principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

3. En todas las comisiones se debe tener en cuenta la **composición paritaria de los órganos** consultivos y de asesoramiento de la Administración de la Junta de Andalucía de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 140 de la *Ley por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas para 2004* (BOJA núm.251 de 31.12.03).

**Artículo 18. Composición y funcionamiento** (Comisión Andaluza para la Dehesa). En relación con la composición de esta Comisión, es necesario considerar lo siguiente: uno de los desequilibrios por razón de género a superar, es la sobrerrepresentación de hombres en las Direcciones Generales de la Junta de Andalucía, lo que nos lleva a hablar de segregación vertical. Frente a este hecho, y a expensas de lo resultado que arrojen los datos, es muy probable que la subrepresentación de mujeres sea una realidad. Por ello, y en coherencia con el logro de la igualdad, se recomienda articular las medidas necesarias para tender hacia el principio de paridad o representación equilibrada, o al menos incluir en los órganos de asesoramiento o decisión alguna persona experta en género que aporte el enfoque de género necesario para el análisis y la integración del principio de Igualdad en las actuaciones que se desarrollen en este ámbito.

4. De acuerdo con la Orden de 24 de noviembre de 1992, conjunta de la Consejería de Gobernación y de la Consejería de Asuntos Sociales, sobre la eliminación del lenguaje sexista en los textos y documentos administrativos (BOJA núm. 126 de 05.12.1992), se hace necesario revisar la redacción asegurando que el lenguaje utilizado facilite la visibilización de mujeres y hombres en todos los aspectos tratados.

Siguiendo la recomendación de las reglas contempladas en la Instrucción de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de Viceconsejeros para evitar un uso sexista del lenguaje en las disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía, se hacen las siguientes observaciones:

- Cuando se mencione a lo largo del texto un nombre empleando el género gramatical masculino como universal deberá sustituirse por la mención expresa también del femenino o se buscará una expresión que incluya a ambos sexos. Por ejemplo:

El hombre → el ser humano

Trabajadores → personas trabajadoras

Propietarios → personas jurídicas o físicas propietarias

Andaluces → población andaluza

Director → la Dirección, la persona a cargo de la dirección, personas titulares de dirección

- Cuando se haga uso de términos que no llevan marca de género, es necesario observar los artículos o determinantes que lo acompañan pues estos le atribuyen la marca de género que por sí mismo no poseen:

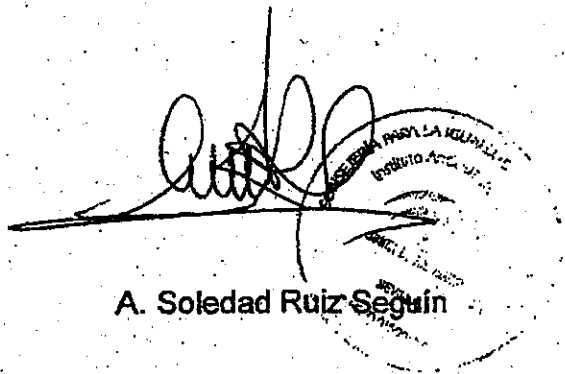


Los titulares → personas titulares, quienes sean titulares.

Es todo cuanto cabe observar al Informe de Evaluación de Impacto de Género  
emitido al anteproyecto de Ley para la Dehesa.

Sevilla, 1 de Octubre de 2007

LA DIRECTORA



A. Soledad Ruiz Segura



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

## **ANEXO. NORMATIVA VIGENTE SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES QUE AFECTAN A LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO.**

Objetivo Igualdad de Género.....art. 139 de la *Ley 18/2003, de 29 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas.*

Composición Paritaria de órganos.....art. 140 de la *Ley 18/2003, de 29 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas.*

Datos desagregados por sexo.....art.22 de la *Ley 8/2002, del Plan Estadístico de Andalucía 2003-2006.*

Lenguaje administrativo no sexista.....*Orden de 24 de noviembre de 1992, conjunta de la Consejería de Gobernación y de la Consejería de Asuntos Sociales, sobre la eliminación del lenguaje sexista, en los textos y documentos administrativos*

Información y publicidad no sexista .....*Ley 6/2005, de 8 de abril, relativa a la actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía y Orden de 19 febrero 1993, de la Consejería de la Presidencia, relativa a normas para el cumplimiento del principio de no discriminación por razón de sexo en la información y divulgación de la de la Junta de Andalucía*

Evaluación del Impacto de género.....*Decreto 93/2004, de 9 de marzo por el que se regula el Informe de Evaluación de Impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno.*

Prioridad presupuestaria de las políticas de Igualdad.....*Ley 18/2005, de 28 de diciembre de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el 2006.*





Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

INFORME

IAI

Fecha: 12 de abril de 2005

Asunto: Informe Impacto Genero

Ref.: EMB/ Impacto 06-24

DIRECTOR GENERAL DE  
INDUSTRIAS Y PROMOCIÓN  
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y P.  
Juan de Lara Nieto, s/n  
41071 SEVILLA

2-5-06 02/ 11

Scp  
MAT

RECEPCION	JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA	
	27 ABR 2006	
	Registro General 6501-24137	Sevilla

S A L I D A	JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	
	18 ABR. 2006	
	Registro General 1789	Sevilla

Adjunto le remito Observaciones que emite este organismo al Informe de Evaluación de Impacto de Género al "Anteproyecto de Ley de Calidad Agroalimentaria y Pesquera", de la Consejería de Agricultura y Pesca, registrado de entrada en este organismo el pasado 4 de abril, conforme a lo establecido en el Decreto 93/2004, de 9 de marzo, por el que se regula el informe de evaluación de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno.

LA DIRECTORA

A. Soledad Ruiz Segúin



Instituto Andaluz de la Mujer  
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

**OBSERVACIONES QUE EMITE EL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER AL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO REMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS Y PROMOCIÓN AGROALIMENTARIA DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE LA CALIDAD AGROALIMENTARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA.**

El objeto de esta legislación es el establecimiento de una normativa que regule las denominaciones de calidad de los productos agroalimentarios y pesqueros, sus órganos de gestión y las marcas de calidad en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Asimismo, se regula un sistema de inspección, control y régimen sancionador en materia de calidad y conformidad agroalimentarias, y se crea el Instituto Andaluz de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera.

Tal y como se reconoce en el citado informe, el Anteproyecto de ley afecta directa e indirectamente a personas, hombres y mujeres, en tanto que productoras, comercializadoras o consumidoras de este tipo de productos. Esta incidencia convierte a la futura norma en:

**Pertinente al género**

☒

**No pertinente**

☐

No obstante, no compartimos la conclusión a la que se llega en el informe presentado en cuanto a que la regulación que nos ocupa no tiene en principio incidencia sobre las desigualdades entre mujeres y hombres. Como se expondrá más adelante, la valoración del impacto de género del Anteproyecto de Ley debe partir de un análisis de la realidad existente, que tome en consideración la forma en que una regulación aparentemente neutra afecta a hombres y mujeres, en virtud de sus desiguales posiciones y situaciones de partida. Más aún, una intervención neutra no garantiza en sí misma la promoción del objetivo de la igualdad de género; antes bien, la omisión de este objetivo, deviene la mayoría de las veces en la reproducción de las

desigualdades existentes, contribuyendo a perpetuarlas. Esta consideración es especialmente importante en un sector como el agroalimentario y pesquero, muy marcado por la división tradicional de roles y espacios sociales. Las actividades de producción, transformación, control y comercialización de productos agroalimentarios y pesqueros, ámbito en el que incide la presente regulación, son desempeñadas mayoritariamente por varones, en tanto que son los principales propietarios de las explotaciones agrícolas, así como de las empresas de control de calidad, producción y comercialización agroalimentarias y pesqueras. En un contexto como el descrito, el objetivo de fomento de la igualdad de oportunidades entre los géneros es especialmente pertinente.

Hecha esta aclaración, y teniendo en cuenta la normativa de aplicación en relación con la igualdad de género, se realizan las siguientes observaciones:

1. El Decreto 93/2004 del 9 de marzo (BOJA núm. 50 de 12 de marzo) por el que se regula el informe de evaluación de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno, en su Art. 4 dispone que el informe de evaluación del impacto de género deberá describir, al menos, las diferencias existentes entre mujeres y hombres en el ámbito de actuación de las medidas que pretenden regular en la disposición de que se trate, **incluyendo los datos, desagregados por sexo**, recogidos en estadísticas oficiales, así como el análisis del impacto potencial que la aprobación de dichas medidas producirá entre las mujeres y hombres a quienes van dirigidas.

Aunque se reconoce la necesidad de "analizar la situación real existente en el ámbito de aplicación de la norma en cuanto a igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres", el informe de evaluación del impacto de género no aporta información alguna que nos permita realizar tal análisis, y valorar si lo previsto en ella atiende de forma igualitaria (que no igual) a las mujeres y hombres a los que, directa o indirectamente, va destinada.

Algunos de los datos desagregados por sexo que nos permitirían analizar el impacto de género del Anteproyecto de ley, podrían ser los siguientes:

- Registro, desagregado por sexo, de personas propietarias de empresas relacionadas con el sector agroalimentario y pesquero (producción, transformación o distribución), de laboratorios de análisis y evaluación de la calidad de los productos agroalimentarios y pesqueros, así como de cualquier entidad definida en la norma como "organismo independiente de control"
- Personas empleadas en los sectores de actividad relacionados con el objeto de la regulación (empresas del sector agroalimentario y pesquero; laboratorios autorizados de control técnico de la calidad y otros organismos de evaluación/inspección de la conformidad de los productos y servicios con las normas de calidad) por sexo, ocupación y categoría profesional.
- Composición por sexo de los órganos directivos y de toma de decisión de los servicios públicos existentes en la Junta de Andalucía en materia de fomento, promoción y control de la calidad agroalimentaria y pesquera.
- Composición por sexo de las asociaciones profesionales, agrupaciones de entidades o de empresas relacionadas con los ámbitos de actividad que concierne el Anteproyecto de ley (organizaciones profesionales agrarias y pesqueras, organizaciones de cooperativas agrarias y pesqueras, etc.), por la importancia que adquieren si consideramos la tendencia a la descentralización de la regulación del mercado agroalimentario y pesquero, a que se alude en la Exposición de Motivos del Anteproyecto.
- Titularidad por sexo de las empresas o entidades que exploten marcas que hayan obtenido denominaciones de calidad (DOP, IGP, ETG, Agricultura Ecológica o Producción Integrada) en la

Comunidad Autónoma, así como registro desagregado por sexo de las personas o entidades (según su titularidad) que hayan solicitado/soliciten reconocimiento de DOP, IGP, ETG, Agricultura Ecológica o Producción Integrada.

De no contar con estos datos, se sugiere inste al Departamento de Estadística de esa Consejería, o en su caso, al Instituto de Estadística de Andalucía, para que incluya y analice estos indicadores para próximas ocasiones, y proceda en cumplimiento del artículo 22, letra e) de la *Ley 8/2002 de 17 de diciembre del Plan Estadístico de Andalucía 2003-2006* (BOJA 154, 31.12.02).

2. Por otra parte, en todos los reglamentos se tiene que tener en cuenta de forma efectiva **el objetivo de la igualdad por razón de género**, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 139 de la *Ley por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas para 2004* (BOJA núm.251 de 31 de diciembre). En el Anteproyecto de ley que nos ocupa, no se incluye entre los objetivos la igualdad por razón de sexo.

A partir de lo dispuesto, y teniendo presente las consideraciones que sobre el ámbito de aplicación de la norma se exponen más arriba, se sugiere la inclusión de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como objetivo y criterio de calidad transversal, atendiendo al impacto positivo que tiene la inclusión de esta dimensión en la disminución de las desigualdades.

Pasamos a enumerar las partes de la norma donde podría recogerse el principio la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, proponiendo las siguientes fórmulas para visibilizar este compromiso en el texto del Anteproyecto de Ley:

- a. Dejar constancia expresa en la Exposición de Motivos y/o completar el Título I, Artículo 1. Objeto, con un nuevo punto que recoja la igualdad de oportunidades de la forma siguiente:

*"Se tendrá en cuenta de forma efectiva el objetivo de la igualdad por razón de género en la aplicación y desarrollo del presente Anteproyecto de ley, conforme a lo establecido en el artículo 139 de la Ley 18/2003, 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas."*

- b. Además, se realizan las siguientes sugerencias con el objetivo de materializar el compromiso con la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de la administración pública andaluza:

En primer lugar, y tal y como se especifica en la Exposición de Motivos del Anteproyecto de ley, este tiene como marco legislativo el Reglamento europeo en la materia. Es pertinente recordar aquí que uno de los ejes estructurales de la política comunitaria es el fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, como objetivo transversal común a toda política pública. Dado que una de las finalidades del presente Anteproyecto de ley es "adaptar a las actuales circunstancias de Andalucía la legislación comunitaria", estas referencias legislativas a la igualdad de género deben ser explicitadas. Para ello, se propone la introducción en el **párrafo núm. 4, hoja 2** de la Exposición de Motivos, de una frase que las recoja. La redacción podría quedar como sigue:

*(...) Resulta conveniente adaptar ... la legislación comunitaria y nacional en la materia. La política estructural de la Unión Europea, en la que se enmarca el presente Anteproyecto de ley, establece que toda regulación comunitaria debe contribuir al objetivo de suprimir la discriminación y promover la igualdad entre hombres y mujeres. Este mismo objetivo debe guiar cualquier iniciativa legislativa en materia de regulación de la*

*calidad agroalimentaria y su promoción en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía ..."*

Asimismo, la referencia a las políticas de igualdad de oportunidades puede ser recogida en el **Artículo 42. Promoción y Fomento de la calidad**, añadiendo la siguiente frase al epígrafe e):

"e) Incardinar la política de promoción de productos en las políticas de *igualdad de género*, desarrollo rural, medioambiental (...)"

En segundo término, se sugiere explicitar el compromiso con la igualdad de género del organismo cuya creación se contempla a través del Anteproyecto: El Instituto Andaluz de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera. Como ente público, este debe garantizar en todo momento el cumplimiento del principio de igualdad entre mujeres y hombres, e instrumentar medidas para corregir posibles desigualdades que por esta razón se detecten en los ámbitos sobre los que tiene competencia. Para dar cabal respuesta a esta responsabilidad, se sugiere la introducción de un nuevo epígrafe en el **Artículo 5. Objetivos del Título II**, que podría quedar redactado como sigue:

*e) La promoción y vigilancia del cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en los procesos relacionados con la calidad agroalimentaria y pesquera.*

En este mismo sentido, se propone la introducción de la siguiente frase en el **Artículo 6. Funciones**:

"2. Concretamente, serán funciones del Instituto Andaluz de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera las que a continuación se detallan y se desarrollarán de acuerdo con criterios de calidad y *respeto al principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, aplicables a las Administraciones Públicas (...)*"

Esto mismo debe hacerse extensivo al resto de órganos regulados por el presente Anteproyecto de ley.

En tercer lugar, el compromiso público con la igualdad de género debe plasmarse en la elaboración de informes o estudios desde la perspectiva de género, que permitan evaluar los efectos diferenciales de las intervenciones sobre mujeres y hombres, de forma que estas respondan de forma igualitaria a sus intereses y necesidades. Aplicándolo al caso del Anteproyecto de ley que nos ocupa, se hacen las siguientes sugerencias:

- Introducción de este requisito entre las funciones del Instituto Andaluz de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera; en concreto, en el Artículo 6. Punto 2, apartados p) y q), debe especificarse:
  - "p) la elaboración y promoción de estudios y trabajos de investigación, desde una óptica de género
  - q) la emisión de informes sobre normas que incidan en su ámbito de actuación. Dichos informes deberán ir acompañados de una evaluación del impacto que sobre hombres y mujeres podrían tener dichas normas.
- Hacer mención explícita a la necesidad de que para el ejercicio de sus funciones de asesoramiento, el Consejo Social del Instituto Andaluz de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera integre la perspectiva de género. Ello se concreta en la obligatoriedad de que, tanto el Plan de Actuación y la Memoria Anual, como cualquier informe emitido por este órgano, se acompañe de un informe de impacto de género que prevea el efecto de sus actuaciones sobre las mujeres y los hombres en su ámbito de competencias.
- Una forma muy conveniente de garantizar el cumplimiento de esta obligatoriedad, es la creación de una Comisión Transversal de Igualdad de Género (adicional a las Comisiones sectoriales a que



se aluden en el Artículo 9. Punto 2, apartado c) que asesore al organismo en la materia.

- Incluir información relativa al impacto de género en el Plan de control plurianual a que se hace referencia en el Artículo 48. Programación de las actuaciones, en su punto 2, de la siguiente forma:
- "2. El plan de control Plurianual, contendrá información relativa a: (...) Esta información deberá ir acompañada de estudios que valoren los efectos que las actuaciones contenidas en el plan pueden tener sobre las desigualdades entre *hombres y mujeres así como, en su caso, las medidas correctoras para su subsanación*"

Por otro lado, se propone la consideración de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como criterio de calidad. Esta podría plasmarse en el fomento de buenas prácticas en materia de calidad a que se hace referencia en el **Artículo 6. Punto 2, apartado s)**, valorando entre estas aquellas que respeten dicho principio de actuación. Introduciendo este criterio, el apartado podría quedar redactado así:

**"s) El fomento de acciones de buenas prácticas en materia de calidad e igualdad de género"**

Otra forma de elevar la igualdad de género a criterio de calidad es la introducción del requisito de cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a la hora de gestionar las ayudas relacionadas con la promoción y el fomento de la calidad – función atribuida al Instituto Andaluz de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera. Por ello, proponemos añadir este criterio al baremo que se establezca para la gestión de dichas ayudas, y hacerlo así explícito en el texto del Anteproyecto, Artículo 6. Punto 2, apartado e) de la forma siguiente:

e) la gestión de las ayudas relacionadas con la promoción y el fomento de la calidad. *Para la concesión de dichas ayudas, se tendrá en cuenta el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre los sexos, por parte de las entidades o empresas solicitantes.*

Lo anterior sirve para la acreditación de sus productos como productos de calidad, en las modalidades especificadas en el presente Anteproyecto. En este ámbito, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres puede servir como criterio -adicional a los requisitos técnicos- de certificación, valorando a aquellas empresas o entidades que respeten el principio de igualdad de género en su organización y actividades; asimismo, la administración pública debe velar por el cumplimiento de este principio por parte de las entidades o empresas concesionarias de la certificación.

Esto mismo es aplicable al reconocimiento de los denominados órganos de gestión, reglamentados en el Capítulo II del presente Anteproyecto. Para asegurarlo, se recomienda añadir la siguiente frase al **Artículo 18. Órganos de Gestión, punto 4:**

*"4. Los órganos de gestión deberán ser reconocidos y autorizados (...). Tal reconocimiento estará condicionado al respeto, por parte de los órganos solicitantes, del principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en su organización y actividades."*

Algo similar debe procurarse en el caso de los organismos independientes de control, laboratorios de control, así como con relación a cualquier otra entidad independiente autorizada por la Administración Pública Andaluza para el ejercicio de funciones de control de calidad y evaluación de la conformidad de los productos.

Por último, la futura ley debe plasmar el compromiso público con la lucha contra la discriminación de género, a través de la visibilización de la

participación de las mujeres en los sectores de actividad afectados por ella. Ello es especialmente relevante en el caso de los sectores agroalimentario y pesquero, ya que, como hemos mencionado, se trata de sectores tradicionalmente masculinos, en los que las mujeres se encuentran infrarrepresentadas. En concreto, este debería materializarse en los formatos para la recogida de datos relativos a las entidades o personas solicitantes de inscripción e inscritas en los registros de denominación. Se trataría de consignar en tales registros el sexo de la persona que ostente la titularidad de las entidades o empresas solicitantes/concesionarias de las denominaciones de calidad. Esto mismo es aplicable al resto de los registros contemplados en el presente anteproyecto, a través de los cuales se debe dar cumplimiento al compromiso público con la generación de información que permita analizar la realidad de hombres y mujeres, e intervenir para corregir posibles desigualdades.

Otra manera de visibilizar y promocionar la participación femenina en los sectores de actividad afectados por la presente ley, es la introducción de este objetivo en el **Artículo 42. Promoción y fomento de la calidad**, añadiendo el siguiente epígrafe:

*e) Promocionar la actividad empresarial femenina y visibilizar su participación en el sector de la producción de bienes agroalimentarios y pesqueros de calidad.*

3. En todas las comisiones se tiene que tener en cuenta de forma efectiva la **composición paritaria de los órganos consultivos** y de asesoramiento de la Administración de la Junta de Andalucía de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 140 de la *Ley por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas para 2004* (BOJA núm.251 de 31 de diciembre).

En el Anteproyecto de ley que nos ocupa, se refieren órganos de asesoramiento, como es el caso del Consejo Social del Instituto Andaluz de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera. No obstante, en el **Artículo 9**, que expone la composición y funciones de este Consejo, no se hace mención alguna al principio de paridad. Recomendamos la inclusión de este en el artículo mencionado, de la forma siguiente:

*"1. (...) cuya composición se determinará reglamentariamente. Dicha composición debe garantizar en cualquier caso el respeto al principio de paridad en la composición de los órganos consultivos y de asesoramiento de la Administración de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 140 de la Ley por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas para 2004 (BOJA núm.251 de 31 de diciembre)."*

Por otro lado, y con carácter general, se recomienda hacer extensivo el principio de paridad a los órganos de gobierno del Instituto Andaluz de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera, teniendo en cuenta la segregación vertical que se observa entre el personal de la Junta. Si a esta constatación general de que la mayoría de las personas que ostentan cargos directivos en la Administración Pública Andaluza son hombres, se le suma el hecho de que se trata de un ámbito competencial (el agrícola y pesquero) en el que las mujeres están fuertemente infrarrepresentadas, es muy probable que en los órganos de gobierno del Instituto que nos ocupa, el principio de igualdad de oportunidades quede finalmente desvirtuado. Para corregir estas tendencias, se recomienda establecer **medidas de acción positiva**, como medio de compensar posibles desequilibrios y corregir situaciones de desigualdad.

Esto mismo es aplicable a los órganos de gestión, cuya estructura y funcionamiento, se regula en el **Capítulo II**. Si bien estas entidades no forman parte de la Administración Pública Andaluza, esta última tiene una responsabilidad en la promoción de las condiciones para que

cumplan con la normativa andaluza en materia de igualdad de oportunidades. Como decíamos, una forma de materializar este compromiso público es incluir el criterio de respeto al principio de igualdad de género en la organización y actividades de los órganos de gestión, como criterio de valoración a la hora de otorgar reconocimiento y autorización a tales órganos. Además de ello, se recomienda la introducción del siguiente párrafo en el **Artículo 18. Órganos de Gestión**:

*"3. Los órganos de gestión se regirán por lo dispuesto en la presente Ley (...) o estatutos particulares en su caso. La normativa básica sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en los ámbitos comunitario, nacional y autonómico, debe ser especialmente observada a la hora de establecer sus reglamentos de funcionamiento interno"*

Se recomienda reforzar esta misma obligatoriedad con relación a su composición, regulada por el **Artículo 19. Estructura y funcionamiento**, de la siguiente forma:

*"1. La estructura y funcionamiento (...) debiendo existir paridad en la representación de los diferentes intereses en presencia, y especialmente, asegurar la representación equitativa de los intereses y necesidades de mujeres y hombres"*

En esta misma línea, el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres debe regir los procesos de selección de personal del Instituto, así como aquellos que regulen la promoción y ascenso. Se sugiere que este principio sea explicitado en el **Artículo 13. Régimen Jurídico del personal**- de la siguiente forma:

*"1. El régimen jurídico (...) en la Administración de la Junta de Andalucía. Dicho régimen garantizará en todo momento el respeto al principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en los procesos de*

*selección de personal, así como en aquellos que regulen la promoción y ascenso"*

4. Por otra parte, y de acuerdo con la *Orden de 24 de noviembre de 1992, conjunta de la Consejería de Gobernación y de la Consejería de Asuntos Sociales, sobre la eliminación del lenguaje sexista en los textos y documentos administrativos* (BOJA núm. 126 de 05.12.1992) y de la *Instrucción de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de Viceconsejeros para evitar un uso sexista del lenguaje en las disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía*, se hace necesario revisar la redacción asegurando que el lenguaje utilizado facilite la visibilización tanto de las mujeres como de los hombres, en todos los aspectos tratados, lo que facilitará a su vez la comprensión de las situaciones concretas de unas y otros que puedan ser motivo de desigualdades y la posterior actuación a favor de la igualdad entre mujeres y hombres.

A lo largo del texto que nos ocupa, se percibe un esfuerzo con relación al uso de un lenguaje no sexista. No obstante, encontramos algunos casos en los que se recurre (erróneamente) al uso del género gramatical masculino como genérico universal. En estos casos, y a efectos de visibilizar a ambos sexos, se debería añadir la mención expresa del género gramatical femenino, o para evitar este desdoblamiento, buscar una expresión que incluya a ambos sexos. A continuación nos referimos a los ejemplos más significativos de este uso incorrecto del genérico y proponemos posibles alternativas para subsanarlo:

*Los consumidores y usuarios* → los consumidores y usuarios, de uno y otro sexo, la población consumidora y usuaria

*Los operadores* → las personas/entidades/empresas operadoras, los y las operadoras, o bien, quienes operan

*Director* → Dirección, titular de la dirección

*Los productores/transformadores*→las personas, entidades o empresas productoras/transformadoras; las y los productores/transformadores

*Los productores/elaboradores*→las personas, entidades o empresas productoras/elaboradoras; las y los productores/elaboradores

*Los interesados* → las personas o entidades interesadas

*Los comercializadores*→las personas o entidades comercializadoras

*Clientes*→clientela

*Los inspectores*→los y las inspectoras, o bien, la inspección

*Funcionarios*→personal funcionario

*Instructor*→ quien instruya, o bien, el o la instructora

*Suministradores*→personas, entidades o empresas suministradoras, quienes suministran

*Receptores*→personas, entidades o empresas receptoras, quienes reciben

*Elaboradores*→personas, entidades o empresas elaboradoras, quienes elaboran

*Proveedores*→las personas, entidades o empresas proveedoras; los y las proveedoras

Adicionalmente, cuando se haga uso de términos que no llevan marca de género, es necesario observar los artículos o determinantes que lo acompañan pues estos le atribuyen la marca de género que por sí mismo no poseen. A continuación se señalan algunos ejemplos extraídos del texto en los que se hace esta atribución incorrecta y se proponen alternativas más acordes con un uso no sexista del lenguaje:

*Los agentes*→quienes actúen como agentes, los y las agentes

*Los profesionales* → las y los profesionales

*Los promotores*→ entidad, organismo o personas promotoras

*Los solicitantes*→las personas o entidades solicitantes, o bien, quienes soliciten

*Los vocales*→los y las vocales, la vocalía

*Un presentante*→quien ostente la representación, o bien, un o una representante

*Los miembros*→los y las miembros

5. Conforme la *Orden conjunta de 19 de febrero de 1993, de las Consejerías de la Presidencia y de Asuntos Sociales, relativa al empleo de imágenes no sexistas en las acciones de información y divulgación institucional*, por la que se dictan normas para el cumplimiento del principio de no discriminación por razón de sexo en la **información y divulgación de la acción institucional** de la Junta de Andalucía, se debería recoger y tener presente dicho objetivo de un modo explícito en el Artículo 42. Promoción y Fomento de la calidad del presente Anteproyecto, pudiendo quedar redactado del siguiente modo:

*"2. La Junta de Andalucía podrá financiar campañas de información y promoción de productos agroalimentarios y pesqueros de calidad (...). Estas campañas deberán cumplir con lo estipulado en la Orden relativa al empleo de imágenes no sexistas en las acciones de información y divulgación institucional (Orden conjunta de 19 de febrero de 1993 de las Consejerías de la Presidencia y de Asuntos Sociales).*

3. Las campañas financiadas con fondos públicos deberán atenerse a los siguientes criterios:

- a) Cumplir con la legislación autonómica en materia de igualdad de género y empleo de imágenes no sexistas.
- b) Informar sobre los productos de calidad"

**En conclusión** las observaciones a las que se llega en relación con el impacto de género en el **Anteproyecto de ley** son:

- Que para valorar el impacto de este Anteproyecto de ley con relación al género, es necesario **desagregar por sexo los datos relativos a personas, especialmente en ámbitos tradicionalmente masculinos**



como el de la producción y comercialización de productos agroalimentarios y pesqueros de calidad, en el que incide la presente regulación. Ello permitiría obtener una visión realista de la situación y posición de mujeres y hombres en el sector, primer paso para una intervención orientada a evitar que se perpetúen o aumenten las desigualdades ya existentes en este ámbito.

- Que es fundamental recoger el objetivo de igualdad por razón de género de forma que abarque a todo el articulado del Anteproyecto de ley, como objetivo y criterio de calidad transversal, y como principio de actuación de los órganos contemplados en el Anteproyecto. Es importante además, que se haga mención expresa a la legislación autonómica y comunitaria en materia de igualdad de género como marco normativo en el que se inscribe la futura ley.
- Que se debe incluir la variable sexo en todas las informaciones y registros generados, con objeto de visibilizar e incentivar la participación de las mujeres en las actividades de producción y comercialización agrícola y pesquera de calidad a que se hace referencia en la presente regulación. Asimismo, es necesario materializar el compromiso de la Administración Pública con la generación de información que permita visualizar la realidad de hombres y mujeres, con estudios e informes que valoren el impacto diferencial que las actuaciones en materia de calidad de los productos agroalimentarios y pesqueros tienen/podrían tener sobre mujeres y hombres.
- Que es necesario contemplar el principio de paridad y establecer medidas de acción positiva en la composición de los órganos consultivos contemplados en el presente Anteproyecto. Además, es conveniente promover el cumplimiento de este principio en el caso de los órganos rectores de la administración pública relacionados con el control de calidad de los productos agroalimentarios y pesqueros, y velar por su cumplimiento por parte de los órganos de gestión a que se refiere el Anteproyecto. Todo ello, tendría un impacto muy positivo de cara a que la segregación ocupacional vertical y horizontal que se observa en

el ámbito de actividad implicado por esta legislación, no se reproduzca, ni aumenten las desigualdades entre mujeres y hombres en los ámbitos de toma de decisión relacionados con el sector.

- Que el texto del Anteproyecto de ley debe ser revisado de forma que se adapte a un uso no sexista del lenguaje.
- Que las campañas de información y promoción de los productos agroalimentarios y pesqueros de calidad financiadas con fondos públicos deben cumplir con la legislación andaluza relativa al empleo de imágenes no sexistas.

Sevilla, 12 de abril de 2006

**ANEXO. NORMATIVA VIGENTE SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES QUE AFECTAN A LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO.**

Objetivo Igualdad de Género.....art. 139 de la *Ley 18/2003, de 29 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas*.

Composición Paritaria de órganos.....art. 140 de la *Ley 18/2003, de 29 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas*.

Datos desagregados por sexo.....art.22 de la *Ley 8/2002, del Plan Estadístico de Andalucía 2003-2006*.

Lenguaje administrativo no sexista.....*Orden de 24 de noviembre de 1992, conjunta de la Consejería de Gobernación y de la Consejería de Asuntos Sociales, sobre la eliminación del lenguaje sexista, en los textos y documentos administrativos*

Información y publicidad no sexista .....*Ley 6/2005, de 8 de abril, relativa a la actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía y Orden de 19 febrero 1993, de la Consejería de la Presidencia, relativa a normas para el cumplimiento del principio de no discriminación por razón de sexo en la información y divulgación de la de la Junta de Andalucía*

Evaluación del Impacto de género.....*Decreto 93/2004, de 9 de marzo por el que se regula el Informe de Evaluación de Impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno*.

Prioridad presupuestaria de las políticas de Igualdad.....*Ley 18/2005, de 28 de diciembre de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el 2006*.



OBSERVACIONES QUE EMITE EL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER AL  
INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO REMITIDO POR LA  
SECRETARÍA GENERAL DEL MEDIO RURAL Y LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA  
DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA SOBRE EL ANTEPROYECTO DE  
LEY DEL OLIVAR DE ANDALUCÍA

Visto el anteproyecto de ley y el Informe de Evaluación de Impacto de Género emitido por el órgano directivo competente.

Y conforme a lo establecido en el **Decreto 93/2004, de 9 de marzo, que regula el Informe de Evaluación de Impacto de Género en los proyectos de Ley y Reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno**, en el artículo 114 de la **Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía** y en la **Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía** en su artículo 6.2., este organismo realiza las siguientes observaciones con objeto de garantizar un impacto de género positivo tras su aprobación:

#### 1. LA PERTINENCIA DE GÉNERO

Tal y como se indica en el informe de evaluación del impacto de género remitido por el órgano gestor, es objeto de este anteproyecto de Ley "crear un marco normativo adecuado para el mantenimiento y mejora del cultivo del olivar en Andalucía, el desarrollo sostenible de sus territorios y el fomento de la calidad y promoción de sus productos". Por tanto, siguiendo con lo dispuesto en el propio informe, se trata de una ley "dirigida principalmente a las personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones e industrias del sector del olivar". Además afectará, más indirectamente, al conjunto de la población andaluza, en tanto que potenciales consumidores y consumidoras de los bienes y productos originados por esta industria. Más aún si tenemos en cuenta que, como se recoge en la propia exposición de motivos del anteproyecto de ley, es obligación de las administraciones públicas garantizar el acceso de la ciudadanía a estos denominados "bienes públicos". Por tanto, estamos ante una norma que tiene como público destinatario final a mujeres y hombres, en una doble vertiente: en tanto que consumidores y consumidoras y en tanto que inmersos e inmersas en la

INFORME  
IAM

Pertinente al género

05 / 11

No pertinente

☒☐

No compartimos la conclusión del informe de que la aprobación del anteproyecto de Ley *"no producirá impacto diferencial alguno entre mujeres y hombres"*. El hecho de implementar medidas iguales, dirigidas sin distinción alguna al conjunto de titulares de las explotaciones e industrias asociadas, no garantiza que el impacto vaya a ser equitativo en mujeres y hombres, es decir, que se vayan a ver beneficiados y beneficiadas de forma equivalente. Para ello, sería necesario partir de las diferencias existentes entre ambos sexos, en particular en lo que a su situación y posición se refiere en este sector agrícola, con el objeto de identificar las desigualdades de género existentes e implementar medidas tendentes a reducir dichas desigualdades, satisfaciendo las necesidades de mujeres y hombres al respecto. Lo cual queda justificado por el mismo marco normativo al que se hace referencia en la exposición de motivos de la norma, aunque no se haga mención explícita de ello. Así, en la misma Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural se explicita la importancia del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el fomento del desarrollo rural sostenible, especificando que "las medidas contenidas en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible deberán respetar el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el medio rural. Asimismo, podrán contemplarse medidas de acción positiva en favor de las mujeres en el medio rural, encaminadas a superar y evitar situaciones de discriminación de hecho por razón de sexo". Más aún si consideramos este anteproyecto como un "elemento importante en la generación de empleo y rentas en las zonas rurales". Igualmente, se hace necesario contemplar y tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 12/2007 para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, especialmente en lo que se refiere a la promoción de la participación de las mujeres en el medio rural (artículo 52). Todo lo cual hace evidente la existencia de situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres en el sector agrario. Situaciones que, de no ser tenidas en cuenta e integradas en la planificación de las medidas contempladas en el anteproyecto de Ley, tenderán a reproducirse tras la aprobación de la misma.

Procediendo, pues, analizar el Impacto de Género de la norma en cuestión, teniendo en cuenta la normativa de aplicación en relación con la igualdad de género (ver Anexo), se realizan las **siguientes observaciones**:

## 2. LA IDENTIFICACIÓN DE DESIGUALDADES

La **Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de género en Andalucía** (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 2007) en su **Art. 6.2** dispone *la obligatoriedad de presentar un informe de evaluación del impacto de género en todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Consejo de Gobierno*. Y en el **apartado 3** del citado artículo, señala que *deberá ir acompañado de indicadores pertinentes al género, que nos permitan analizar la situación real existente, y valorar si lo previsto en la norma en cuestión, atiende de forma igualitaria (que no igual) a las mujeres y hombres a los que van destinadas las medidas que se pretenden regular*.

Tal y como mencionábamos, sería necesario que en el informe de evaluación del impacto de género se aportasen datos referidos a la situación y posición de los hombres y las mujeres a quienes principalmente se dirige la norma, como los que se señalan a continuación:

- Nº de hombres y mujeres titulares de explotaciones agrarias relacionadas con el sector del olivar, indicando además características principales de dichas explotaciones en cuanto a: tamaño, capital de inversión, nº de personal asignado (desagregando los datos por sexo), sector de actividad (producción, comercialización, etc.).
- Nº de hombres y mujeres titulares de explotaciones oliveras calificadas como ecológicas o de producción integrada.
- Nº de hombres y mujeres en el sector de la agricultura y la recolección (de estos productos), operadores y operadoras del sector olvícola y oleícola en Andalucía.
- Nº y tipo de organizaciones representativas del sector: número y porcentaje de mujeres y de hombres que participan en las mismas, en función del cargo ocupado.

- Nº de mujeres y hombres consideradas y considerados "especialistas de reconocido prestigio en los ámbitos relacionados con el olivar" en Andalucía.

De no contar con estos datos, se sugiere inste al Departamento de Estadística de esa Consejería, o en su caso, al Instituto de Estadística de Andalucía, para que incluya y analice estos indicadores para próximas ocasiones, y proceda en cumplimiento tanto del **artículo 10.a** de la ya citada **Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de género en Andalucía** (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 2007), que obliga a *incluir de forma sistemática la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que se realicen*, como de la **Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía 4/2007, de 4 de abril**, por la que se modifica la **Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística**, y se aprueba el **Plan Estadístico de Andalucía 2007-2010**.

### **3. LA TRANSVERSALIDAD Y LAS MEDIDAS CORRECTORAS**

**3.1.** El artículo 5 de la **Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía** (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 2007) prescribe que *en todos los reglamentos se tiene que tener en cuenta la transversalidad de género tanto en la elaboración como en la ejecución y seguimiento de las disposiciones normativas* y en la norma que se analiza no se muestra, de forma explícita, esa transversalización.

Para ello, se sugiere aludir a la transversalidad del principio de igualdad en:

- **Exposición de Motivos.** Cuando dice "La presente Ley tendrá en consideración (...)" Se podría añadir al final del párrafo lo siguiente: *"así mismo, la presente Ley ha tenido en consideración lo dispuesto en la Ley 12/2007 para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, respecto a la integración del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de forma transversa, en la elaboración de la misma"*. Por otra parte, la visibilización del compromiso de fomentar la igualdad debiera quedar patente entre los mismos objetivos de la Ley, a los que también se hace mención en la exposición de motivos. Así, se podría integrar la igualdad de género entre los objetivos mencionados, o añadir un nuevo objetivo (f) de la manera que sigue: *"fomentar la igualdad de género en las actuaciones que se*

*lleven a cabo para propiciar la estabilidad del sector".* Dejando claro que en todas las actuaciones que se lleven a cabo se tendrá en cuenta la perspectiva de género en su planificación, garantizando resultados equivalentes y proporcionales en mujeres y hombres.

3.2. Por otro lado, para lograr de forma efectiva el objetivo de la igualdad por razón de género, de acuerdo con lo dispuesto en el **Art. 6.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía** y en el **art. 6.3 de la mencionada Ley 12/2007**, se afirma que se *deberán mencionar los mecanismos y medidas dirigidas a paliar y neutralizar los posibles impactos negativos*, y en el Anteproyecto de Ley no se recogen. Por ello, pasamos a enumerar las partes de la norma donde debería recogerse el principio la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como los mecanismos o medidas para neutralizar los potenciales impactos negativos:

A) Artículo 3. Fines. Se recomienda la modificación de los siguientes apartados:

- e) Teniendo en cuenta la normativa vigente en materia de igualdad, se sugiere añadir: *"impulsando la participación de las mujeres en los proyectos de investigación y desarrollo y promoviendo la formación en el sector de forma equitativa entre mujeres y hombres"*. Misma observación a contemplar en el artículo 6.2.k. y en el artículo 27, relativo a la investigación, desarrollo, innovación y formación.

- f) Mejorar la tecnología productiva del aceite (...). Añadiendo: *"la implantación de medios tecnológicos se hará en base a criterios de igualdad, garantizando la participación de las mujeres"*. Misma observación a contemplar en el artículo 19, cuando hace referencia a la adaptación para la recolección mecanizada y, más específicamente, en el artículo 28, relativo a las Nuevas Tecnologías y en el artículo 30, sobre la industrialización de los productos del olivar.

- l) Añadir que *"se fomentará igualmente la participación activa de las mujeres en el tejido asociativo y en la creación de cooperativas"*. Misma observación a tener en cuenta en la redacción del artículo 34, sobre Acción Colectiva, y 37. Cooperativismo.



B) Artículo 6. Contenido del Plan Director. Se recomienda la modificación de los siguientes apartados:

- 1. b: tener en cuenta que, *en la caracterización de las explotaciones y territorios, los datos estarán desagregados por sexo en cuanto a la titularidad de las mismas*. Misma observación a contemplar en el artículo 11, respecto a los datos recogidos en el sistema de información de los territorios de olivar.

- 2. *La definición de estrategias de actuación para la mejora del sector del olivar se hará desde la perspectiva de género, garantizando que las actuaciones llevadas a cabo contemplen las necesidades de mujeres y hombres, permitiendo la participación equitativa de ambos sexos en el sector*. Misma observación a recoger en el artículo 20, respecto a las actividades complementarias a promover por la Administración de la Junta de Andalucía y en 39.d y e, cuando se alude al impulso de actividades para informar y educar a los y las habitantes de los territorios olivareros y al impulso de planes de actividades culturales, favoreciendo la *participación equitativa de mujeres y hombres*.

- 2. b. Para mejorar la productividad, tener en cuenta que la igualdad de género debiera contemplarse como un criterio de calidad y de mejora de dicha productividad.

D) Artículo 8 y 9. En ambos casos, tener en cuenta que *los contratos contemplarán igualmente las medidas a implementar para fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, promoviendo la participación activa de las mujeres en el medio rural y en las explotaciones del olivar*.

#### **4. EL IMPACTO DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN O SECTOR**

Las recomendaciones realizadas para garantizar un impacto positivo tras la aprobación del presente anteproyecto quedan justificadas si atendemos a lo dispuesto en la **Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía** (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 2007). Así, en su capítulo V, relativo a las Políticas de promoción y atención a las mujeres, especifica, en el **artículo 52**, medidas dirigidas a la promoción de las **Mujeres en el medio rural**, estableciendo lo siguiente:

*"Los poderes públicos de Andalucía integrarán la perspectiva de género en las actuaciones de desarrollo rural, garantizando que estas intervenciones contemplen las necesidades de las mujeres, permitan su plena participación con equidad en los*

*procesos de desarrollo rural y contribuyan a una igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres"*

Lo que queda recogido en las observaciones realizadas a los artículos 6, 20 y 39.

*Y continua "los poderes públicos de Andalucía desarrollarán acciones dirigidas a eliminar la discriminación de las mujeres del medio rural y favorecer su incorporación al ámbito laboral, a la formación y a las nuevas tecnologías, así como su plena participación en la vida pública. Asimismo, garantizarán el ejercicio del derecho a la titularidad compartida en explotaciones agrarias"*

Lo que queda recogido en las observaciones realizadas en el apartado anterior a los artículos 3, 6, 27, 19, 28 y 30.

Igualmente, en el **artículo 51** de la Ley 12/2007, se alude a la necesidad de fomentar la integración de las **Nuevas Tecnologías** en base a criterios de igualdad. En concreto:

*"Los poderes públicos de Andalucía promoverán las acciones que favorezcan la implantación de las nuevas tecnologías, en base a criterios de igualdad, y promoverán la participación de las mujeres en la construcción de la sociedad de la información y del conocimiento"*

Lo que queda recogido en las observaciones realizadas en el apartado anterior a los artículos 19, 28 y 30.

Finalmente, puesto que uno de los objetivos del anteproyecto es la creación y generación de empleo en este sector, se hace necesario recoger lo dispuesto en el **Artículo 23** de la misma Ley 12/2007, relativo a **Políticas de empleo**. Según el cual:

*"Las Administraciones Públicas de Andalucía, en el marco de sus competencias, impulsarán la transversalidad de género como instrumento para integrar la perspectiva de género en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas de empleo que se desarrollen en el ámbito de la Comunidad Autónoma, incluyéndose, en su caso, las medidas específicas y necesarias."*

La Administración de la Junta de Andalucía garantizará la participación de mujeres en el desarrollo de los programas de políticas activas de empleo, que aseguren la coordinación de los diferentes dispositivos y contemplen las necesidades que

impidan o dificulten el acceso de las mujeres a los mismos, con especial atención a las mujeres que presenten una mayor vulnerabilidad y discriminación"

Lo que en parte quedaría recogido en las observaciones realizadas a los artículos 22, 26 y 32.e.

## **5. LA REPRESENTACIÓN EQUILIBRADA**

Siguiendo el artículo 11 de la citada Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 2007) sobre *Representación equilibrada de los órganos directivos y colegiados*, se deberá garantizar la representación equilibrada de hombres y mujeres en el nombramiento de titulares de órganos directivos de la Administración. De forma análoga, los Art. 18 y 19 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía (BOE núm. 276. de 17/11/07), establecen la garantía de representación equilibrada de hombres y mujeres tanto en el nombramiento de sus órganos directivos como en la composición de los órganos colegiados, y en el anteproyecto de ley que nos ocupa no se incluye la composición paritaria.

Por ello debería incluirse una mención expresa a la representación equilibrada en:

- Artículo 14. Composición (del Consejo Andaluz del Olivar). *La composición del Consejo tenderá a una representación equilibrada de mujeres y hombres.*

## **6. LAS SUBVENCIONES**

El art. 13 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 2007) sobre *ayudas y subvenciones*, obliga a la Administración de la Junta de Andalucía a *incorporar en las bases reguladoras de las subvenciones públicas, la valoración de actuaciones de efectiva consecución de la igualdad de género por parte de las entidades solicitantes*, así como a *no formalizar contratos, ni otorgar subvenciones o prestación de ayudas públicas a aquellas empresas sancionadas o condenadas por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente.*

Esto supone que en el proyecto de ley que nos ocupa se deberá recoger en:

05/ 11

- Art. 15. Ayudas agrarias para el mantenimiento de la renta del olivar. *La Administración de la Junta reequilibrará las ayudas en base a criterios que garanticen la igualdad entre mujeres y hombres. Así, en el baremo de adjudicación de las ayudas se tendrá en cuenta el poder adquisitivo de solicitantes*, lo que permitirá establecer medidas que garanticen un mayor porcentaje de ayudas para quienes tengan un menor poder adquisitivo. *Igualmente, cuando quien solicite la ayuda sea una empresa y no una persona física, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la normativa vigente, priorizando a aquellas que hayan establecido medidas para fomentar la igualdad de género y rechazando aquellas que hayan sido sancionadas o condenadas por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente.*
- Mismas observaciones a tener en cuenta en el artículo 21.1, en relación a la aplicación prioritaria de medidas de apoyo a titulares de explotaciones oliveras calificadas como ecológicas o de producción integrada.

## **7. EL LENGUAJE Y LA IMAGEN**

Y con carácter general, de acuerdo con el art. 4, punto 10 y el art. 9 sobre *lenguaje no sexista e imagen pública* de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía (BOJA núm. 247, de 18/12/07), así como de la Instrucción de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de Viceconsejeros para evitar un uso sexista del lenguaje en las disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía, se hace necesario revisar la redacción asegurando que el lenguaje utilizado facilite la visibilización tanto de las mujeres como de los hombres, en todos los aspectos tratados, lo que facilitará a su vez la comprensión de las situaciones concretas de unas y otros que puedan ser motivo de desigualdades, y la posterior actuación a favor de la igualdad entre mujeres y hombres.

- Cuando se emplee a lo largo del texto, el género gramatical masculino, como genérico universal deberá añadirse la mención expresa del género gramatical femenino, o para evitar este desdoblamiento, se buscará una expresión que incluya a ambos sexos, vigilando además las concordancias gramaticales. Por ejemplo:

- Los olivareros: los olivareros y las olivaderas

- Los agricultores: los agricultores y las agricultoras, personas agricultoras
  - Los interesados: las personas interesadas
  - Los consumidores: las personas consumidoras
  - Productores: quienes produzcan, productores y productoras
  - Operadores: operadores y operadoras
  - Modificar la expresión: "constituido por un máximo de 20 miembros, todos ellos..." por "constituido por un máximo de 20 personas, todas ellas..."
- Cuando se haga uso de términos que no llevan marca de género, es necesario observar los artículos o determinantes que lo acompañan pues estos le atribuyen la marca de género que por sí mismo no poseen. Por ejemplo:
- Los habitantes: los y las habitantes
  - Los agentes: los y las agentes
  - Los particulares: los y las particulares, las personas particulares
  - Los titulares: los y las titulares, las personas titulares

**Es todo cuanto cabe observar al informe de evaluación de impacto y al proyecto de norma tramitado.**

Sevilla a 5 de abril de 2010.

El Instituto Andaluz de la Mujer

La Directora



Soledad Pérez Rodríguez

**ANEXO: Normativa vigente sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que afectan a la elaboración del informe de impacto de género.**

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE núm. 71 de 23 de marzo de 2007)
- Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género en Andalucía (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 2007)
- Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de género en Andalucía (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 2007)
- Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía (BOE núm. 276 de 17/11/07), Art. 3., puntos p) y q)
- Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, (BOE núm. 68 de 20/03/07), Art. 10, 14 y 15

Transversalidad del principio e igualdad

Art. 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07)

Objetivo de igualdad por razón de género

Art. 6.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07)

Evaluación de impacto de género

Artículo 6 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07)

Art. 114 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía (BOE núm. 68 de 20/03/07)

Decreto 93/2004, de 9 de marzo por el que se regula el Informe de Evaluación de Impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno.

Artículo 45. de la Ley 6/2006, de 24 de octubre del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 215 de 7/11/06), respecto al procedimiento de elaboración de los reglamentos que deberán estar acompañados de una memoria sobre el impacto que por razón de género tendrán las medidas incluidas en los mismos

Datos desagregados por sexo

Plan Estadístico de Andalucía

Estudios y Estadísticas con perspectiva de género

Artículo 10 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07)

<b>Presencia equilibrada de mujeres y hombres</b>	<p>Artículo 11 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07)</p> <p>Art. 18 y 19 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía (BOE núm. 276 de 17/11/07)</p>
<b>Contratación y Subvenciones Públicas</b>	<p>Art. 12 y 13 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07)</p> <p>Art. 101, art. 102 y art. 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público (BOE núm. 261 de 31/10/07)</p>
<b>Lenguaje administrativo no sexista</b>	<p>Art. 4.10 y art. 9 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07)</p> <p>Instrucción de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de Viceconsejeros para evitar un uso sexista del lenguaje en las disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía</p>
<b>Imagen pública, Información y publicidad no sexista</b>	<p>Artículo 4.10 y Artículo 57 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07)</p>